

**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA
SAN VICENTE MÁRTIR**



**ADMINISTRACIONES Y OBRAS PÍAS ENTRE EL ANTIGUO
RÉGIMEN Y EL LIBERALISMO**

Tesis doctoral presentada por:

José Segundo Miguel Sánchez

Dirigida por

Profesor Dr. D. Federico Martínez Roda

Profesor Dr. D. Pascual Marzal Rodríguez

2017

ÍNDICE

ABREVIATURAS Y SIGLAS

INTRODUCCIÓN

PARTE PRIMERA.

DE LAS FUNDACIONES, CAUSAS PÍAS, BENEFICIOS Y CAPELLANÍAS.

CAPÍTULO I. GÉNESIS HISTÓRICA. FUNDACIONES Y CAUSAS PÍAS.

1. Origen.
2. Fundaciones en la Grecia Clásica y helenística.
3. Fundaciones privadas y públicas romanas.
 - 3.1. Consideraciones generales.
 - 3.2. Fundaciones privadas: las fundaciones funerarias y benéficas.
 - 3.3. Fundaciones públicas: las fundaciones alimentarias.
4. La beneficencia cristiana y la aparición de las fundaciones pías.
 - 4.1. La caridad como nuevo valor moral.
 - 4.2. El reconocimiento jurídico y patrimonial de la Iglesia.
 - 4.3. Las causas pías en la época postclásica y justiniana.
5. Las causas pías a partir de la Edad Media.

CAPÍTULO II. CONCEPTO DE FUNDACIÓN.

1. Etimología.
2. Conceptualización de la noción de fundación.
3. Concepto canónico.
4. Concepto civil.
5. Clases de fundaciones.
 - 5.1. Vinculaciones de bienes.
 - 5.2.- Fundaciones canónicas y laicales.

CAPÍTULO III. BENEFICIO ECLESIASTICOS.

1. Etimología de la palabra beneficio.
2. Origen de los beneficios eclesiásticos.
 - 2.1. Precedentes romanos.
 - 2.2. Origen del beneficio secular.
3. Concepto de beneficio eclesiástico.
 - 3.1. El beneficio eclesiástico como un *ius percipiendi*.
4. Requisitos esenciales.
5. Clasificación y tipología de los beneficios.

- 5.1. Clases.
 - 5.1.1. Por razón del oficio espiritual.
 - 5.1.2. Por la persona que los provee.
 - 5.1.3. Por la persona a quien se confiere.
 - 5.1.4. Por el diverso modo de su concesión.
 - 5.1.5. Por razón de su perpetuidad.
 - 5.1.6. Por razón de su conformidad o no con las reglas del derecho común.
- 5.2. Tipología benefical.
6. Diferencias con otros institutos.
 - 6.1. Prebendas.
7. El acceso a los beneficios.
8. Modos de conferirse los beneficios.
 - 8.1. Elección.
 - 8.2. Postulación.
 - 8.3. Colación.
 - A) Tiempo requerido para conferir la colación.
 - B) El derecho de devolución.
 - C) Las reservas pontificias.
 - D) De los mandatos de *pro dividendo*, expectativas y prevenciones.
 - 8.4. Institución.
9. Creación de beneficios (*fundatio beneficii*).
 - 9.1. Autoridad a quien corresponde la creación de beneficios.
 - 9.2.- Lugar de creación.
10. Alteración de beneficios.
 - 10.1. Unión.
 - 10.2. Agregación.
 - 10.3. División.
 - 10.4. Supresión.
11. Residencia de los beneficiados.
 - 11.1. Clases de residencia.
 - 11.2. Residencia de los Obispos.
 - 11.3. Residencia de los canónigos.
 - 11.4. Residencia de los párrocos.
12. Pluralidad de beneficios.
13. Las encomiendas.
 - 13.1 Origen.
 - 13.2. Devenir histórico.
 - 13.3. Clases.
14. El derecho de patronato.
 - 14.1 Origen
 - 14.2. Definición.
 - 14.3. Fundamento y desarrollo.
 - 14.4. Clases.
 - 14.4.1. Patronato activo.
 - 14.4.1.1. Patronato eclesiástico.
 - 14.4.1.2. Patronato laical o secular.
 - 14.4.1.3. Patronato mixto.
 - 14.4.1.4. Real o accesorio.
 - 14.4.1.5. Personal o principal.

- 14.4.1.6. Hereditario.
- 14.4.1.7. Familiar.
 - a) Primogenial.
 - b) Lineal.
 - c) Descendental.
 - d) Mixto.
- 14.4.2-Pasivo.
 - 14.4.2.1. Familiar.
 - 14.4.2.2. Patrimonial.
- 14.5. Modos de adquirir el derecho de patronato.
 - A-Fundación, construcción o dotación de la iglesia o beneficio.
 - B-Reedificación o redotación (aumento de dote).
 - C-Privilegio y prescripción.
 - D-Sucesión, donación o permuta.
 - E-Venta.
- 14.6. Quien puede adquirir el derecho de patronato.
- 14.7 Derechos y obligaciones del patrono.
 - A) Derechos.
 - B) Obligaciones.
 - 14.7.1- El derecho de representación.
- 14.8. Institución.
- 14.9. Modos de probar el derecho de patronato.
- 14.10. Modos de perder el derecho de patronato.
- 15. Pérdida de beneficios.
 - 15.1.- Pérdida por voluntad del poseedor.
 - 15.1.1.- Renuncia.
 - 15.1.2.- Permuta.
 - 15.1.3.- Traslación.
 - 15.2.- Pérdida contra la voluntad del poseedor.
 - 15.2.1.- Por destitución o deposición.
 - 15.2.2.- Por degradación.
- 16. El Concordato de 1753 y la reforma benefical.

CAPÍTULO IV. LAS CAPELLANÍAS.

- 1. Etimología de la palabra capellanía.
- 2. Origen.
- 3. Concepto.
- 4. Clases.
 - 4.1. Capellanías colativas o eclesiásticas.
 - A) Capellanías colativo-familiares (de sangre).
 - De patronato activo.
 - De patronato pasivo
 - De patronato activo-pasivo.
 - Extinguidas.
 - Subsistentes.
 - Fijas o residenciales.
 - No residenciales.
 - Simples.

- Curadas.
- B) Capellanías colativas no familiares.
 - De patronato eclesiástico particular.
 - De derecho común eclesiástico.
- 4.2. Capellanías laicales (profanas, merelegas o cumplideras).
- 4.3. Distinción práctica entre capellanías colativas y laicales.
- 4.4. Otras clasificaciones de capellanías (aplicables sólo a las colativas).
 - A) Capillas y capellanías.
 - B) Capellanías seculares y regulares.
 - C) Capellanías compatibles e incompatibles.
 - D) Capellanías perpetuas y temporales o amovibles.
- 5. Evolución histórica.
 - 5.1. Desde su origen hasta el siglo XV.
 - 5.2. Desde el siglo XVI al XVIII.
- 6. Naturaleza jurídica.
 - 6.1. Capellanías laicales: naturaleza jurídica.
 - 6.2. Naturaleza jurídica de las capellanías eclesiásticas.
 - 6.2.1. Las capellanías eclesiásticas: su carácter benefical.
 - 6.2.2. Personalidad jurídica de las capellanías colativas.
- 7. Figuras afines a las capellanías.
 - Legados píos.
 - Memorias, aniversarios de misas y patronatos de legos.
 - Patrimonios clericales.
- 8. Normativa histórica aplicable a las capellanías.
- 9. Capellanías y religiosidad.
 - 9.1. La preocupación por la salvación del alma.
 - 9.2. La vía de salvación del Purgatorio.
 - 9.3. Las capellanías: acto de piedad y devoción.
- 10. Características y funcionamiento de las capellanías.
- 11. Fundación de capellanías en Indias.
- 12. Capellanías en el Reino de Valencia.
 - 12.1.- Catedral de la Asunción de Nuestra Señora de Valencia (*La Seu*).
 - 12.2.- Parroquias y conventos de Valencia
 - 12.3.- Capellanías en las distintas villas y lugares.
 - 12.3.1.- El caso singular de la de la villa de Ayora.
- 13. La función económica de las capellanías.
 - 13.1. Fundaciones piadosas y sistema crediticio: censos y capellanías.
 - 13.2. Repercusiones económicas de las capellanías en los patrimonios familiares.
- 14. Patrimonio y propiedad de los bienes de las capellanías.
 - 14.1. El problema de la propiedad de los bienes dotales.
- 15. Prestigio social y capellanías.
- 16. Nobleza, patronato y mayorazgo.
- 17. Similitudes y diferencias entre mayorazgos y capellanías.
- 18. La sucesión en las capellanías.

PARTE SEGUNDA.

PROPIEDAD, DESAMORTIZACIÓN Y DESVINCULACIÓN. DEL ANTIGUO RÉGIMEN AL LIBERALISMO.

CAPÍTULO V. LA PROPIEDAD EN EL ANTIGUO RÉGIMEN: LA PROPIEDAD ECLESIAÍSTICA.

1. Noción y clasificación de la propiedad en el Antiguo Régimen.
2. La propiedad eclesiástica.
 - 2.1. El derecho de propiedad territorial de la Iglesia.
 - 2.2. Propiedad y patrimonio eclesiástico.
 - 2.3. La amortización eclesiástica.
 - 2.4. Patrimonio y amortización eclesiástica en el Reino de Valencia.
3. La quiebra de la propiedad eclesiástica. Evolución del proceso amortizador durante el siglo XVIII.

CAPÍTULO VI. LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIAÍSTICA.

1. Noción.
2. Clases de desamortización.
 - A) Desamortización legal o jurídica.
 - B) Desamortización ilegal o antijurídica.
3. Causas.
 - 3.1. Causas estructurales.
 - 3.2. Causas económicas (hacendísticas y demanda de tierras).
 - 3.3. Causas políticas, ideológicas y sociales.
4. Etapas.
 - 4.1. La desamortización previa de los bienes de la Compañía de Jesús en 1769.
 - 4.2. La desamortización de Godoy (1798-1807).
 - A) Real Cédula de 23 de mayo 1795.
 - B) Real Cédula de 24 de agosto de 1795.
 - C) Real Decreto de 19 de septiembre de 1798.
 - 4.3. Medidas desamortizadoras del rey José Napoleón I.
 - A) Decreto de 9 de junio de 1809.
 - B) Decreto de 18 de agosto de 1809.
 - 4.4. Las primeras normas desamortizadoras del siglo XIX.
 - A) Decreto de 13 de septiembre de 1813.
 - B) Decreto de 27 de abril de 1814.
 - C) Decreto de 1 de febrero de 1815.
 - 4.5. El Trienio Liberal (1820-1823).
 - A) Decreto de 9 de agosto de 1820.
 - B) Decreto de 1 de octubre de 1820.
 - C) Decreto de 25 de octubre de 1820.
 - D) Decreto de 29 de junio de 1821.
 - E) Decreto de 15 de noviembre de 1822.
 - 4.6. La desamortización de Mendizábal.
 - 4.6.1. Antecedentes
 - 4.6.2. Proceso desamortizador de Mendizábal y Espartero.

- A) Real Decreto de 11 de octubre de 1835.
 - B) Real Decreto de 19 de febrero de 1836.
 - C) Real Decreto de 8 de marzo de 1836.
 - D) Real Decreto de 29 de julio de 1837.
 - E) Ley de 2 de septiembre de 1841. Ley de Espartero.
- 4.7. La desamortización de Pascual Madoz.
- 4.7.1. Ley General Desamortizadora de 1 de mayo de 1855.
5. Consecuencias.

CAPÍTULO VII. EL PROCESO DESVINCULADOR.

- 1. Introducción y precedentes.
- 2. Decadencia y crisis de la vinculación.
 - 2.1. La Constitución de Bayona de 6 de julio de 1808.
 - 2.2. La Constitución de 1812 y las Cortes de Cádiz.
- 3. El fin de la vinculación.
 - 3.1. Ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820.
 - 3.2. Decreto de 19 de junio de 1821.
 - 3.3. Real cédula de 11 de marzo de 1824.
 - 3.4. Real Decreto de 23 de octubre de 1833.
 - 3.5. Ley de 9 de junio de 1835.
 - 3.6. Real Decreto de 30 de agosto de 1836.
 - 3.7. Ley de mayorazgos y vinculaciones de 1841.

CAPÍTULO VIII. LIBERALISMO Y LEGISLACIÓN SOBRE CAPELLANÍAS. LEYES DESAMORTIZADORAS Y DESVINCULADORAS.

- 1. Legislación regalista.
- 2. Legislación liberal sobre capellanías.
 - 2.1. Normativa desvinculadora y desamortizadora.
 - 2.1.1. Leyes desvinculadoras aplicadas a las capellanías.
 - 2.1.1.1. Incidencia de la Ley desvinculadora de 1820 en las capellanías.
 - A) Discusión parlamentaria del Proyecto de Ley.
 - B) Análisis de la Ley.
 - 2.1.1.2. La Ley de 29 de junio de 1821.
 - 2.1.2. Disposiciones desamortizadoras sobre capellanías.
 - 2.2. Legislación específica sobre capellanías colativas.
 - 2.2.1. La Ley de 19 de agosto de 1841 y su decisiva influencia sobre las capellanías colativas.
 - A). Antecedentes y discusión parlamentaria del Proyecto de Ley.
 - B) Análisis de la Ley.
 - C) Conclusiones críticas sobre la Ley.
 - 2.2.2. La Real Orden de 17 de enero de 1847 y posteriores.
 - 2.2.3. El Concordato de 1851.
 - 2.2.4. El Real Decreto de 30 de abril de 1852.
 - 2.2.5. El Real Decreto de 6 de febrero de 1855.
 - 2.2.6. La Ley de 15 de junio de 1856.
 - 2.2.7. El Real Decreto de 28 de noviembre de 1856.
 - 2.2.8. El Convenio Adicional de 1860.

- 2.2.9. El Convenio-Ley de capellanías de 1867.
 - A) Fundamentos del Convenio.
 - B) Capellanías subsistentes y extinguidas.
 - C) La conmutación de rentas de las capellanías.
 - D) Competencias de las jurisdicciones eclesiástica y civil en el Convenio.
 - E) Otras características del Convenio.
 - F) El Convenio y la legislación anterior.
- 2.2.10. Disposiciones posteriores y el Decreto de 12 de agosto de 1871.
 - A) Fundamento y justificación del Decreto
 - B) Cuestiones problemáticas del Decreto.
 - C) Una solución práctica: las ventas a censo.
- 2.3. Alcance y síntesis de la legislación sobre capellanías colativas y laicales.
 - 2.3.1.- Bienes de capellanías no familiares.
 - 2.3.2.- Bienes de capellanías colativo-familiares.
 - 2.3.3.- Bienes de capellanías laicales familiares.

CAPÍTULO IX. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE CAPELLANÍAS.

- 1. Previo.
- 2. Jurisprudencia aplicable a las capellanías.
 - 2.1.- Personalidad jurídica de las capellanías colativas.
 - 2.2.- Naturaleza jurídica de las capellanías colativas.
 - 2.3.- Distinción entre capellanías laicales y colativas.
 - 2.4.- Legislación aplicable a las distintas clases de capellanías.
 - 2.5. Voluntad del fundador.
 - 2.6. Prohibición de disponer.
 - 2.7. Orden de suceder.
 - 2.8. Aplicación de la Ley de 19 de agosto de 1841. Derecho preferente en la sucesión.
 - 2.9. Capellanías extinguidas.
 - 2.10. Capellanías subsistentes.
 - 2.11. Carácter de la ley de 15 de junio de 1856.
 - 2.12. Competencia de los tribunales civiles y eclesiásticos en asuntos de capellanías.
 - 2.13. Plazo ejercicio de los derechos sobre los bienes de capellanías.
 - 2.14. Conmutación de bienes.
 - 2.15. Excepciones a la desamortización.
 - 2.16. Fundación de nuevas capellanías.
 - 2.17. Prescripción.
 - 2.18. Subsistencia de leyes después de la publicación del Convenio-Ley de 1867.

CONCLUSIONES

FUENTES

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS Y SIGLAS

ACV	Archivo Catedralicio de Valencia.
ADC	Anuario de Derecho Civil.
ADV	Archivo Diocesano de Valencia.
AGI	Archivo General de Indias.
AHDE	Anuario de Historia del Derecho Español.
AHG	Archivo Histórico de Gandía.
AHN	Archivo Histórico Nacional.
AHPAC	Archivo Histórico de la Parroquia de la Asunción de Carcagente.
AHPM	Archivo Histórico Provincial de Murcia.
Art.	Artículo.
ARV	Archivo del Reino de Valencia.
Arz.	Arzobispo.
AA.VV.	Autores varios.
Benefic.	Beneficiado.
BJL	Boletín de Jurisprudencia y Legislación.
BNE	Biblioteca Nacional de España.
C.	Casa.
c.	Canon.
ca.	Circa.
Cab.	Caballero.
Cap.	Capítulo.
Capt.	Capitán.

Carp.	Carpeta.
Cf.	Confróntese.
cgo.	Canónigo.
C.I.C.	Corpus Iuris Canonici.
C.J.	Codex Iustinianus.
C.J.C.	Colección de Jurisprudencia Civil.
C.L.E.	Colección Legislativa de España.
C.Th.	Codex Theodosianus.
D.	Digesto.
d.	De.
Disp.	Disputatio.
Ed.	Edición.
F. C.	Fondos Contemporáneos.
Fol(s).	Folio(s).
gubernac.	Gobernación.
Hno.	Hermano.
Inq.	Inquisición.
Ldo.	Licenciado.
manc.	Mancomunado.
my.	Mayor.
Nº/s	Número/s.
Nov.	Novelas.
o.c.	Obra citada.
p.(pp.)	Página(s).

presb.	Presbítero.
quaest.	Quaestio.
RAH	Real Academia de la Historia.
REDC	Revista Española de Derecho Canónico.
RGLJ	Revista General de Legislación y Jurisprudencia
RHD	Revue d'Histoire du Droit.
RIDA	Revue International des Droits de l'Antiquité.
Rub	Rúbrica.
S.	San.
Sacr. Congr. Concil.	Sacra Congregatio Concilii.
Secc.	Sección.
Secret.	Secretario.
s/f.	Sin foliar.
Sig	Signatura.
ss.	Siguientes.
Sto.	Santo.
SDAPV	Servicio Diocesano de Archivos Parroquiales de Valencia.
Tte.	Teniente.
Tít.	Título.
UNAM	Universidad Nacional Autónoma de México.
US	Universidad de Sevilla.
Vol.	Volumen.

INTRODUCCIÓN

EL TEMA. ESTADO DE LA CUESTIÓN.

El objeto de estudio de esta tesis doctoral son las administraciones pías y, en particular, las capellanías y cómo el nuevo Estado Liberal del siglo XIX en España incide negativamente sobre ellas, debido a las transformaciones que realiza en la propiedad civil y religiosa mediante las desvinculaciones y desamortizaciones.

Se analiza, de forma minuciosa, el problema de la propiedad y sus intentos de reforma por el Estado, los planteamientos y las soluciones que da a la cuestión de los beneficios eclesiásticos.

El porqué de este trabajo se debe al vacío existente en la actualidad sobre investigaciones y publicaciones donde se analice la importancia de las capellanías, institución poco conocida hoy en día, a no ser por canonistas y algunos profesionales del Derecho, y su posterior afectación por el Estado decimonónico que pretendió su supresión. Es objeto de este estudio arrojar luz sobre el pasado reciente de estas instituciones y la situación en la que quedaron. Situación que enlaza con la actualidad con conceptos de laicidad del Estado y libertad religiosa.

OBJETIVOS

Con este trabajo lo que se pretende es poner de manifiesto la importancia del sistema benefical de la Iglesia durante el Antiguo Régimen y cómo la revolución liberal pretende aplicar un nuevo concepto de la propiedad donde prima el interés privado como motor de la productividad. Surge un nuevo derecho de propiedad absoluto y particular, incompatible con la propiedad eclesiástica, que no era ni privada ni libre. En consecuencia, las capellanías como forma de propiedad carecerán de sentido en el nuevo esquema jurídico y socio-económico. Las capellanías debían desaparecer de la sociedad, como parte del programa reformador de la Iglesia por los liberales.

La desamortización de las capellanías durante el siglo XIX fue, en realidad, la culminación de un largo camino o proceso hacia la definición de los derechos de propiedad. Este proceso ya se había iniciado durante el siglo XVIII, pero es durante el Estado liberal cuando se perfecciona el derecho de propiedad único, libre y absoluto. Sobre este concepto no tenía ya cabida instituciones como las capellanías y obras pías.

En fin, todo gira, en realidad, sobre el problema de la propiedad, y cómo ofrece el Estado, tras numerosos debates en Cortes, promulgación de leyes, reales decretos, reales órdenes y publicación de sentencias del Tribunal Supremo, una solución, que no será satisfactoria y que se arrastrará, con todas sus deficiencias hasta la actualidad. Todo ello llegará a influir en el Concordato de 1953 y en los acuerdos vigentes con la Santa Sede.

ESTRUCTURA METODOLÓGICA

Se emplea el método histórico mediante la localización y recopilación de las fuentes documentales primarias (jurídicas y legales, doctrinales, magisteriales y documentales), la crítica de esas fuentes, siguiendo con una revisión bibliográfica de investigaciones ya publicadas; y, en último lugar, una síntesis historiográfica, es decir un resumen del estudio bibliográfico y crítico de la cuestión.

Partes y sistemática de la tesis.

La tesis se divide en dos partes claramente diferenciadas pero estrechamente vinculadas, siendo la segunda una consecuencia de lo expuesto en la primera. En el primer bloque se trata el origen o génesis histórica de lo que se considera una fundación y causas pías, para luego analizar el complejo concepto, a lo largo del tiempo, de lo que es una fundación. Una vez fijados los conceptos y el surgimiento de las fundaciones, se examina que es un beneficio eclesiástico, su origen y devenir a lo largo de la historia y la división de los mismos en propios e impropios. A continuación se estudia, en profundidad, el origen, el concepto, la figura jurídica y las distintas clases de capellanías, así como la confusión que ha habido durante muchos años sobre otras figuras afines a las capellanías como los legados píos, patronatos, aniversarios o memorias de misas y patrimonios clericales. Su importancia se encuentra en que constituyeron uno de los pilares básicos donde se asentó la economía de la Iglesia, sirviendo para solucionar los problemas de subsistencia de muchos eclesiásticos gracias a los beneficios económicos que implicaban. Además de servir, desde una óptica espiritual, a la salvación del alma, fueron un importante recurso, desde el punto de vista material y económico, para los que no poseían vínculos o mayorazgos en la adquisición de prestigio, e incluso el ennoblecimiento (tenían un carácter nobiliario y honorable), amén de las ventajas fiscales y jurídicas que aportaban a los que optaban por este sistema de vinculación. La inembargabilidad, la imprescriptibilidad e inalienabilidad de la que disfrutaban estas instituciones garantizaban su continuidad en el patrimonio de las familias.

La segunda parte trata, en primer lugar, sobre la propiedad en el Antiguo Régimen, en especial, la propiedad eclesiástica, su amortización y su decadencia y pérdida, con la subsiguiente aparición en la historia de España de los procesos desamortizadores y desvinculadores que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, que iban unidos y condicionados al tránsito del antiguo sistema social y económico que trajo el siglo de las revoluciones liberales, y que conllevaron un cambio radical en la propiedad y en la sociedad. Se examina la desamortización eclesiástica y el proceso desvinculador como entes separados pero complementarios. Luego, se profundiza sobre la regulación de la legislación estatal que a partir del primer tercio del siglo XIX se dictó sobre las capellanías y otras análogas figuras, causa final de la litigiosidad y controversias que generaron. La constante lucha entre la Iglesia, por conservar sus bienes y el Estado, al pretender éste arrogarse derechos que no le correspondían. La compleja y confusa actividad legislativa y reglamentaria, que muchas veces no guarda el principio de jerarquía normativa, con solapamiento de leyes o normas, poca técnica legislativa, consecuencia, todo ello, de los bandazos políticos tan característicos del siglo XIX. Consecuencia, todo ello, de la necesidad de una producción legislativa compleja y casuística, debido a la complicación y dificultades jurídicas que entrañaban las fundaciones pías. A continuación, se detallan los intentos reformadores del Estado liberal sobre los bienes de la Iglesia y la negación por parte de aquél a que los posea y a regular, sin límite, los beneficios eclesiásticos. Con ello, en vez de resolver la confusión creada, lo que hace es agudizar el problema, tanto más con la desamortización eclesiástica, cuyo fin era, en principio, dar una solución a la precaria situación de la deuda de la Hacienda Pública a través de poner fin a la propiedad eclesiástica, pretendiendo una reforma de una institución, la Iglesia, cuya

organización era perfecta si la comparamos con la civil y estatal. Y así ocurre a partir de 1867 con el nuevo espíritu desamortizador sobre las fundaciones piadosas y, sobre todo, con las capellanías. Para finalizar, se estudia la prolija jurisprudencia del Tribunal supremo en esta materia objeto de la tesis que son las capellanías.

FUENTES DE ESTUDIO

El presente trabajo está construido básicamente sobre fuentes documentales, además de un importante apoyo en las fuentes jurídicas y legales, magisteriales y doctrinales. Respecto a las fuentes documentales se ha realizado una importante labor de consulta e investigación de diversa, compleja y variada documentación obrante en distintos archivos.

La búsqueda e investigación de estas fuentes documentales para la elaboración de la presente tesis ha sido un arduo trabajo no exento de dificultades, en lo que respecto al seguimiento de fundaciones de capellanías en el Reino de Valencia, ya que su evolución a lo largo de los siglos es más complicada de seguir que en otros reinos, como los de la Corona de Castilla (entendida como entidad histórica que comienza con la definitiva unión de los reinos de León y de Castilla en el año 1230), a consecuencia del escaso patrimonio documental que sobre las mismas existe en la actualidad, tanto por el grado de deterioro de algunos documentos, como la pérdida de otros, obstaculizando una investigación exhaustiva y profunda de todos los documentos relacionados con estas fundaciones.

Otro problema añadido es que se han encontrado escasos libros de capellanías, siendo más frecuentes los de beneficios eclesiásticos. Aún así, sería engañoso y se incurriría en un error si se descartasen determinadas fundaciones que, con el nombre de beneficio eclesiástico, aparecen en diverso documentos, pues se ha podido constatar que aunque no se manifiestan expresamente con la denominación de capellanías, lo que realmente sucede es que bajo el calificativo de una “*fundación de un simple beneficio perpetuo*”, suele esconderse la institución de una capellanía colativa. Lo complicado es saber distinguir si se trata de una capellanía o un beneficio con la escasa información que, muchas veces, se aporta o porque no se puede leer bien el documento o pergamino, ya sea por su deterioro o porque le faltan hojas. Ésta es una constante a lo largo de toda la investigación en la Corona de Aragón, concretamente en el Reino de Valencia, lo que no ha ocurrido en Castilla, Andalucía, Navarra y Vizcaya. En consecuencia, la labor ha sido más fecunda en estos otros lugares, donde claramente se encuentran documentadas y diferenciadas las capellanías en libros distintos de los de los beneficios.

Los fondos documentales a los que se ha accedido se pueden dividir en ocho grandes bloques o apartados:

1.- Archivo de la Catedral de Valencia.

En este archivo se han consultado la sección de pergaminos, investigando los documentos datados entre los siglos XIII y XIV. Este fondo documental está formado por los pergaminos que constan en el primer inventario realizado por el canónigo Elías Olmos Canalda y publicados en el Boletín de la Real Academia de la Historia y un segundo inventario, más moderno, denominado “*Sección de pergaminos, segunda*”

serie”, que recoge un total de 275 documentos que no estaban incluidos en el primer inventario realizado.

2.- Archivo Diocesano de Valencia.

Complementa al anterior, ya que en él se encuentra documentación sobre colaciones de beneficios, donde se incluyen las capellanías colativas, en la Sección I, Fondo III, *Colaciones de beneficios*.

3.- Archivos Parroquiales.

La investigación en ellos se ha realizado tanto de forma presencial en distintas parroquias, como mediante la consulta en sala, en el Servicio Diocesano de Archivos Parroquiales (SDAP), sito en el Archivo Diocesano de Valencia. Además, se ha aportado a este trabajo las bases de datos recopiladas en distintas parroquias por el autor que suscribe. Se ha basado la investigación parroquial en la búsqueda y consulta de libros parroquiales de obras pías, beneficios y capellanías, libros de visitas pastorales y libros racionales.

4.- Archivo del Reino de Valencia.

Se han consultado los fondos notariales, mediante la localización y estudio de los registros notariales, en especial, protocolos referentes a últimas voluntades como testamentos y cláusulas testamentarias en las que figuran disposiciones sobre capellanías. También han sido objeto de consulta los fondos denominados *Propiedades Antiguas*, mediante el estudio de varios de sus legajos sobre expedientes de capellanías, el de *Justicias de Valencia*, subfondo Justicia Civil (Manaments i Empars), en el que se encuentran anotados documentos diversos, que al ser avalados por el justicia civil, adquirirían el mismo valor jurídico de autenticidad que los documentos originales, y documentación de tipo eclesiástico en el fondo registrado como *Clero*, en concreto los legajos pertenecientes al convento de la Trinidad.

5.- Archivo Histórico de Gandía.

Se ha accedido a la selección y consulta de más de cincuenta y dos cajas de documentos del extenso Archivo de los Marqueses de Jura Real y a los protocolos del notario José Todo, microfilmación de los originales depositados en el Archivo Histórico Nacional.

6.- Archivo Histórico Nacional: Sección Nobleza y Clero.

Fuente de consulta han sido los archivos nobiliarios de distintas casas y linajes, documentos inagotables de información para los estudiosos de la nobleza. Singularmente, los archivos del ducado de Baena, de Frías y de Osuna (que incluye el ducado de Gandía); condado de Alba de Yeltes, Luque, Priego, Parcent y Toreno; y señorío de Cameros.

Otra fuente de investigación han sido los fondos documentales de la Sección de Clero Regular y Secular, códigos y diversos.

7.- Archivo General de Indias.

Este archivo custodia los fondos generados por las instituciones creadas por la Administración española para el gobierno de los territorios ultramarinos españoles, entre las que destaca la Casa de Contratación. En ella, se encuentra diversa documentación en la institución llamada *Bienes de Difuntos*, cuyos expedientes contienen un conjunto de bienes localizados en Indias, cuyos poseedores, fallecidos en el Nuevo Mundo, carecían de herederos o legatarios. Dicha documentación contiene sumarios o autos en los que se encuentran testamentos de los fallecidos, cuyas disposiciones o cláusulas contienen la fundación de capellanías, que nos aportan luz sobre la institución de estas obras pías. En este caso, se ha profundizado en más de cuarenta y seis testamentos en los que se dispone de la creación o fundación de las mismas.

8.- Biblioteca Nacional de España (hemeroteca digital).

El objetivo, mediante el acceso a la prensa histórica digitalizada, ha sido analizar y comparar el pensamiento político de la prensa del siglo XIX, afecta a las diversas corrientes liberales y conservadoras de la época y su influencia en un asunto de vital importancia y punto de debate en el Parlamento decimonónico, como eran la supresión de las obras pías y, en especial, de las capellanías, objeto de controversia en las sesiones de las Cámaras.

Otras fuentes documentales examinadas han sido: la Colección Salazar y Castro y su índice, sitas en la Real Academia de la Historia. Contiene numerosos registros originales y en copia, con una abundante documentación relacionada con la genealogía, heráldica y nobiliaria y en las fundaciones objeto de esta tesis; y el Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

Respecto a las fuentes jurídicas y legales se ha consultado el *Corpus Iuris Canonici* y el *Corpus Iuris Civilis*, además de otras obras importantes como el *Codex Theodosianus*, las Decretales, El Fuero Juzgo, el Fuero Real, el Fuero Viejo de Castilla, Las Siete Partidas, las Leyes de Estilo, el Ordenamiento de Alcalá, y la Novísima Recopilación. También se ha estudiado la colección de cánones insertos en todos los concilios de la Iglesia de España y los Sacrosantos Concilios Generales y Particulares, siguiendo con el Código Civil de 1843, la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y diversos decretos, reales decretos, cédulas órdenes y reglamentos dictados desde 1808 hasta 1872, hallados principalmente en la Colección Legislativa de España, junto a los diarios de las actas y discusiones de Cortes de diversas legislaturas.

La doctrina reunida para la elaboración de este trabajo ha sido la de los principales y más importantes canonistas y estudiosos del Derecho sobre obras pías, beneficios y capellanías, uniendo al estudio de los autores más conocidos como de León, de Azpilcueta, de Murga, Mostazo y Pérez de Lara, todos aquellos otros expertos juristas que pudiesen aportar, aclarar o complementar a los anteriores como Azor, Barbosa, Berardi, Covarrubias, de Molina, Devoti, Fagnano, García, González, Molina, Reiffenstuel y Schmalzgrueber, entre otros.

Para finalizar, se ha realizado un estudio de las fuentes jurisprudenciales, basado en las resoluciones del Tribunal Supremo sobre las capellanías, las cuales evolucionan desde las primeras sentencias disponibles en 1847 hasta principios del siglo XX, en concreto, hasta 1910.

PARTE PRIMERA

DE LAS FUNDACIONES, CAUSAS PÍAS, BENEFICIOS Y CAPELLANÍAS

CAPÍTULO I

GÉNESIS HISTÓRICA. FUNDACIONES Y CAUSAS PÍAS

1.- ORIGEN.

Según las tesis mantenidas por De Visscher y Paoli¹, las fundaciones surgieron en la Antigüedad como patrimonios dejados fiduciariamente por un fundador para conseguir unos fines que perdurasen en el tiempo y que de otra manera serían imposibles de efectuar por la limitación temporal de la vida humana. Aparecen como un instrumento jurídico que posibilita su realización en el tiempo más allá de la vida del instituidor. En cierto modo constituyen la pauta jurídica para prolongar la propia vida del bienhechor respecto a la obtención de unos fines concretos que él considera importantes y que el Ordenamiento jurídico reconoce que su consecución tiene especial interés general. Históricamente prevaleció su carácter benéfico. Por tanto, los precedentes más remotos de las fundaciones hay que buscarlos en las fundaciones sepulcrales paganas, donde mediante este tipo de instituciones se reservaba el derecho de enterrar a los cadáveres en un sepulcro².

Ha sido una constante fechar los orígenes remotos de las fundaciones en el Derecho romano o, como máximo, en el mundo griego³. Pero según varios autores existen numerosas fuentes basadas en inscripciones epigráficas que corroboran que las fundaciones surgieron, en el ámbito funerario, en el Antiguo Egipto (2700-2200 a. C.), y posteriormente se extendieron a la Grecia del siglo III a. C. y a Roma hacia el siglo I de nuestra era, aunque también hubo fundaciones funerarias e incluso de beneficencia y de derecho de asilo en otros pueblos de la antigüedad como es el caso de Asiria, Babilonia e Hititas⁴.

Hay que resaltar que, con demasiada pretensión, estos autores buscan los antecedentes remotos de las instituciones que ocupan esta tesis en figuras tomadas de la antigüedad, basándose en que las fundaciones funerarias en el Antiguo Egipto ya eran verdaderas fundaciones con personalidad jurídica fruto del mundo del Derecho egipcio⁵.

¹ F. De Visscher-U. E. Paoli, *Fondazione (diritto greco)*, Torino 1968, p. 430.

² A. Bosch Carrera, *Antecedentes históricos de las fundaciones*, en AA. VV., *Tratado de Fundaciones*, Barcelona 2007, vol. 1, p. 2.

³ Véase: A. Saenz de Miera, *Las Fundaciones como instituciones sociales. El Mecenazgo*, p. 63 y ss., en *Presente y futuro de las Fundaciones*, Fundación ONCE, Madrid 1990. L. Linares Andrés, *Las fundaciones. Patrimonio, funcionamiento y actividades*. Valencia 1998, p. 26.

⁴ G. Le Bras, *Les fondations privées du Haut Empire*, Studi Riccobono, III, Palermo 1936, p. 62. D. Cocquerillat, *Les prébendes patrimoniales dans les temples à l'époque de la première dynastie de Babylone*, *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)*, 2, Bruxelles 1955, p. 39 y ss.

⁵ La personalidad jurídica de las fundaciones funerarias del Antiguo Egipto, reconocida por los poderes públicos a través de un documento inscrito en un registro público, lo que le otorgaba reconocimiento legal, es defendida por: F. J. Martín Valentín y F. Lara Peinado, *Sobre la utilización y organización de las Fundaciones Funerarias durante el Imperio Antiguo Egipcio*, en *Gerión* 17, Madrid 1999, pp. 59-77 y J. Pirenne, *La fondation en droit égyptien sous l'Ancien Empire*, *RIDA*, 2, Bruxelles 1955, p. 19 y ss.; *Histoire des Institutions et du droit Privé de l'Ancienne Égypte*, Bruxelles 1934, II, p. 324. Según Martín y Lara, en el Imperio Antiguo egipcio, aparece la concepción jurídica abstracta de la "Fundación Funeraria", llamada en los textos concesión perpetua o concesión tumbal perpetua y sobre la cual los tratadistas opinan que la existencia de estas instituciones suponía el reconocimiento de lo que hoy se

En realidad carecen de importancia para configurar lo que después fue la propiedad amortizada en la Europa Occidental.

Junto al fin primario funerario pronto aparecieron otros fines fundacionales como los religiosos, benéficos o mixtos (funerarios y benéficos), desarrollados a lo largo del tiempo en distintas civilizaciones, aunque las más representativas son Grecia y Roma.

2.- LAS FUNDACIONES EN LA GRECIA CLÁSICA Y HELENÍSTICA.

Las fundaciones surgen en Grecia, al igual que en otros pueblos de la antigüedad, como una verdadera manifestación de su propia religión y cultura. Así, en la época arcaica griega, debido a la arraigada creencia de que el hombre, después de muerto, iba a continuar viviendo bajo tierra, se exigía que se enterrasen con él seres y objetos para que le sirviesen en la tumba de la misma manera que éstos lo habían hecho en vida. De esta forma, los familiares estaban obligados a suministrar ofrendas alimenticias, pues para los griegos sus difuntos eran dioses subterráneos y sus tumbas eran los templos de esas divinidades⁶. Este culto doméstico era un patrimonio sagrado de la familia y fue el fundamento de todos los cultos y sirvió de modelo para que las ciudades confiaran a las familias el homenaje o devoción en honor a una concreta deidad.

Parece ser que alrededor del siglo VI a. C. se establecieron las primeras fundaciones griegas, período que se caracterizó por una importante y profunda evolución en todos los órdenes, tanto en lo político como en lo cultural, social y religioso. En la Grecia clásica hubo fundaciones privadas, tanto funerarias como benéficas, sociales o de servicio benéfico (como actuación de auxilio o socorro al necesitado), pues la sociedad griega, pese a ser de marcado carácter individualista, abordó la necesidad de crear instituciones de caridad al cuidado de pobres y ancianos desamparados, las cuales serían desarrolladas en épocas posteriores.

También se dieron en Grecia numerosas fundaciones puramente religiosas mediante la afectación de bienes al mantenimiento de templos, según destaca De Visscher⁷, a lo que se suma Liermann⁸, al sostener también que las fundaciones más antiguas, datadas entre los siglos VI y V a. C, fueron de tipo religioso, las cuales surgieron en el seno de las ciudades griegas para atender dichas necesidades de apoyo y sustento de los templos destinados al culto de las divinidades y pone como ejemplo la fundación realizada, a finales del siglo V a. C., por un magistrado de Atenas llamado Nikias que destinó en vida fincas y terrenos de su propiedad al templo de Apolo en Delfos (Fócida) con el encargo de implorar a los dioses por el bien del fundador.

denomina en el mundo del derecho “*personalidad jurídica*”, expresión referida a la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones como condición reconocida a favor, no de personas físicas, sino de entidades constituidas a partir de un acto dispositivo de voluntad de una persona física, ya fuese esta el rey, o un particular. De esta forma, los egipcios fueron los creadores de las fundaciones como entidades dotadas de personalidad jurídica independiente y completa y que ya fue concebida por ellos en el tercer milenio antes de Cristo. Resumiendo, en el antiguo Egipto las fundaciones funerarias se formaban sobre un patrimonio constituido por un conjunto de personas, enseres, edificios y tierras que pertenecía al fundador, o respecto del cual el fundador tenía un indiscutible derecho de uso y disfrute.

⁶ E. Bruck, *Les facteurs moteurs de l'origine et du développement des fondations grecques et romaines*, RIDA, 2, Bruxelles 1955, pp. 159-166.

⁷ F. De Visscher, *Les fondations privées en droit romain classique*, RIDA, 2, Bruxelles 1955, p. 200.

⁸ H. Liermann, *Handbuch des Stiftungsrechts*, I, Geschichte des Stiftungsrechts, Tübingen 1963, p. 6.

Asímismo, Laum⁹ cita otra fundación griega del siglo IV a. C. en la que se edificó un templo a favor de la diosa Artemisa, destinando la propiedad y rendimientos de un fundo para los gastos del mantenimiento del citado templo y como ofrenda a la divinidad.

Respecto a otro tipo de fundaciones como son las benéficas, se dividían en públicas y privadas. Las primeras, ejercidas por el Estado, consistían en el socorro a heridos y mutilados de guerra, a los huérfanos de los muertos en campaña y a los inválidos no útiles para el trabajo.

Debido a la gran cantidad de mutilados e inválidos que dejó la Guerra del Peloponeso (desarrollada entre el 431 y 404 a. C.), se organizó un sistema de pensiones y de ayuda a viudas, huérfanos y familiares de los caídos en batalla, como compensación a los damnificados por su servicio al Estado.

También existían una serie de actividades y disposiciones benéficas a favor de los pobres, organizándose cierto tipo de asistencia material que cubriera las necesidades básicas de subsistencia. Incluso las fundaciones funerarias griegas¹⁰ perseguían en alguna medida la realización de fines benéficos, sociales e incluso religiosos. Hubo también el Areópago (tribunal superior penal) que a veces prestaba ayuda a los enfermos y pobres que justificaran sus necesidades. Se organizaron sociedades de socorros mutuos y de prestamistas. Se prestó atención médica a los pobres. Los espectáculos públicos y los juegos eran las principales fuentes de recaudación destinados a la beneficencia, y los alimentos que habían sido ofrecidos como sacrificio a los dioses, eran distribuidos a los necesitados. En épocas de hambruna, como en otros pueblos de la antigüedad, se abrían los graneros a fin de evitar revueltas.

Pero siempre predominó más el carácter político-social sobre el benéfico, pues los ciudadanos en Grecia no socorrían la pobreza, sino como un medio de asegurar la tranquilidad y la paz política.

Respecto a las fundaciones sociales griegas cabe destacar sus elevados fines, a diferencia de las fundaciones romanas, como los culturales, materializados en el mantenimiento de escuelas filosóficas¹¹, o de instrucción pública a niños y jóvenes. Son

⁹ B. Laum, *Stiftungen in der griechischen und römischen Antike*. Ein Beitrag zur antiken Kulturgeschichte, I, Leipzig-Berlin 1914, p. 61.

¹⁰ El origen de estas fundaciones se vincula a la crisis de los clanes familiares gentilicios debido a la progresiva disolución en la polis griega y al deseo de la sociedad de preservar su memoria después de su fallecimiento. También como un medio de prolongar la acción personal del fundador más allá de su muerte en orden a la consecución de fines altruistas en aspectos como la beneficencia, la educación o la religión. Así, el nacimiento de fundaciones funerarias fue a la vez que el de otras fundaciones religiosas, benéficas o morales. F. De Visscher- U. E. Paoli, *Fondazione...*, o.c., pp. 430-431. Véase también: R. Huerta Huerta y C. Huerta Ízar de la Fuente, *Fundaciones: Régimen civil, administrativo y fiscal*, Barcelona 1998, tomo I, p. 64.

¹¹ Merecen especial atención las fundaciones griegas que tenían por objeto las academias o escuelas de filosofía, que se heredaban de maestros a discípulos a través de un sistema de fideicomisos sucesivos, pues dichas academias no podían constituirse en fundación por sí mismas al no tener el derecho de recibir y poseer. De esta forma se conseguía el poder preservar sus fines escolásticos y, a la vez, mantener el culto funerario del fundador. A. Saenz de Miera, *Las Fundaciones como instituciones sociales...*, o.c., p. 63. J. M. Blanch Nogués, *Régimen jurídico de las fundaciones en Derecho romano*, Madrid 2007, p. 113.

diversos los ejemplos citados por Laum y seguidos por De Visscher. Entre ellos destacan la donación de legados en forma de capital para proveer la instrucción pública de los jóvenes libres de la ciudad de Mileto por un ciudadano llamado Eudemio. O la donación del rey Átalo de Pérgamo a la ciudad de Delfos para la educación de los niños de la ciudad¹².

Es preciso dejar claro que no aparece en las fuentes un término jurídico que se refiera a las fundaciones griegas, ni a tenor de dichas fuentes, se puede hablar de personalidad jurídica de las mismas, quedando configuradas las fundaciones privadas griegas como meros patrimonios afectos a un fin según la voluntad del fundador. Su constitución se podía hacer por actos *inter vivos* o *mortis causa*. Los primeros se realizaban con donaciones modales o ventas a un tercero con la obligación de cumplir el encargo del fundador. Respecto a los segundos, mediante legados modales o fideicomisos, ya fuese a ciudades, a *collegia* o a particulares vinculados en vida al fundador¹³. En resumen, el fundador se basaba en la *fiducia* o fideicomiso del municipio o ciudad, colegio o particulares (descendientes del benefactor o libertos) en quienes se depositaba la propiedad y la administración de la fundación, debiendo destinar el patrimonio a los fines propuestos por el fundador.

Sobre las fundaciones cuya ejecución se confiaba a una ciudad, hay que mencionar que ésta emitía un decreto de aceptación en el que reconocía la obligación de efectuar el encargo y, a continuación, se transmitían los bienes afectos al fin fundacional. Lo mismo ocurría si la fundación se establecía mediante testamento. Pero si el encargo era encomendado por el fundador a un colegio o colectividad de particulares se establecían estipulaciones contractuales que fijaban las condiciones de ejecución de la fundación por parte del colegio o asociación.

El propio benefactor aseguraba la fundación mediante cláusulas prohibitorias (que impedían la enajenación, pérdida o malversación del patrimonio fundacional), penales (que castigaban las faltas que pudiesen cometer los fiduciarios en la administración) y disposiciones en las que se ordenaba la transmisión del patrimonio a otro colegio o ciudad si no se llevaba a cabo el fin de la fundación¹⁴.

Para finalizar, a pesar de la influencia recíproca que han tenido las fundaciones griegas y romanas a lo largo de la historia de la antigüedad greco-romana, hay que señalar el decisivo predominio griego en el nacimiento y desarrollo de las fundaciones romanas, aunque no se puede obviar que hubo diferencias entre unas y otras, pues en las fundaciones griegas se dio más el fin funerario (como figuras jurídicas vinculadas al recuerdo o memoria de los difuntos), junto al benéfico, religioso y educacional, frente a las fundaciones alimentarias, dirigidas a niños de familias necesitadas, que fueron exclusivamente romanas¹⁵.

¹² B. Laum, *Stiftungen in der griechischen...*, o.c., II, pp. 27, 38 y 118. F. De Visscher, *Les fondations privées...*, o.c., p. 200.

¹³ J. M. Blanch Nogués, *Régimen jurídico de las fundaciones...*, o.c., pp. 109-110.

¹⁴ B. Laum, *Stiftungen in der griechischen...*, o.c., I, pp. 185 y 196.

¹⁵ G. Le Bras, *Les fondations privées...*, o.c., pp. 61-62.

3.- FUNDACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ROMANAS.

3.1.- Consideraciones generales.

Tampoco en las fuentes clásicas romanas se encuentra un término equivalente a “*fundación*”, pues el Derecho romano no se planteó la figura de la persona jurídica como un centro autónomo de imputación de relaciones jurídicas por la afectación de un patrimonio vinculado a un fin, pues las cuestiones jurídicas planteadas por la creación de fundaciones privadas se resolvían a través de un Derecho romano vulgar nacido de la práctica jurídica y no de conceptos y soluciones de la jurisprudencia clásica¹⁶.

En Roma hubo fundaciones privadas¹⁷ calificadas por la doctrina como “*fundación impropia dependiente*”, “*fundación indirecta*”, “*fundación en sentido amplio*” o “*fundación familiar*”, constituidas para la consecución de fines perpetuos o que excedían de la vida del fundador¹⁸. Dichas fundaciones eran tanto funerarias como benéficas. Las primeras eran constituidas, en general, por plebeyos y libertos, mientras que las segundas lo eran por miembros de la aristocracia y alta burguesía. Su principal finalidad era el deseo imposible de perpetuar la vida humana a través de la afectación de un patrimonio al mantenimiento de la memoria del fundador.

3.2.- Fundaciones privadas: las fundaciones funerarias y benéficas.

La expresión “*fundación funeraria romana*” ha de tomarse en un sentido laxo, pues comprende dos supuestos como son: la constitución *inter vivos* o *mortis causa* de un sepulcro familiar por parte del fundador y también el conjunto de elementos patrimoniales que quedan afectos al cumplimiento de unos fines funerarios por voluntad del causante y a la realización de ritos propios de la religión familiar.

Las fundaciones funerarias romanas fueron, en principio un culto “*post mortem*” hacia el fundador y, en una época posterior un culto más conmemorativo a su memoria. Dichas fundaciones se dirigían al cumplimiento de unos fines funerarios como la conservación y mantenimiento del sepulcro del fundador¹⁹ mediante la afección a

¹⁶ En el Derecho romano la persona jurídica presenta unos caracteres que fácilmente escapan a la comprensión actual, pues no se conoció el concepto de persona jurídica, ya que su concepción individualista del sujeto del derecho, que no se concreta en el individuo sino en el *paterfamilias*, se lo impedía, como también lo dificultaba la necesaria abstracción que conlleva la figura, en contraste con el pragmatismo romano. J. Iglesias Santos, *Derecho romano. Instituciones de Derecho privado*, Barcelona 1985, p. 166. S. Bueno Salinas, *La noción de persona jurídica en el derecho canónico*, Barcelona 1985, p. 17.

¹⁷ Sobre las fundaciones privadas romanas existen numerosas fuentes epigráficas en la época del Principado, desde el ascenso de Octavio Augusto (27 a. C.) a la llegada de Diocleciano. (284 d. C), pero no faltan tampoco fuentes jurídicas como los libros *De legatis et fideicommissis* del Digesto, y literarias, como es el caso del llamado testamento de Trimalción del *Satiricon* de Petronio y la epístola de Plinio a Caninio. G. Le Bras, *Les fondations privées...*, o.c., p. 28.

¹⁸ R. Feenstra, *Le concept de fondation du droit romain classique jusqu'à nos jours: théorie et pratique*, RIDA, nº 3, Bruxelles 1956, p. 250.

¹⁹ Se destinaba un patrimonio para conservar en buen estado el sepulcro y para realizar actos en memoria del fundador tales como colocar flores (*dies rosalia*, *dies violetae*) en la tumba, organizar fiestas y banquetes ante el sepulcro por parte de familiares (*dies parentalia*), amigos o conciudadanos, el levantamiento y conservación de estatuas del fallecido, la organización de espectáculos varios, competiciones atléticas para el pueblo o la realización de actividades en beneficio de terceros o de la colectividad (reparto de alimentos o de dinero entre niños y pobres) el día del natalicio o el del

perpetuidad de un patrimonio, generalmente de naturaleza inmueble. Son el origen de las llamadas fundaciones impropias las cuales se configuran como meros patrimonios separados afectos al cumplimiento de un fin, por lo que no gozaban de subjetivación jurídica.

La doctrina, representada en autores como Le Bras, Bruck, Liermann y De Visscher, justifica el nacimiento y desarrollo de las fundaciones funerarias, tanto griegas como romanas, por la gradual desaparición del modelo familiar tradicional, relegando al olvido los actos de culto de la religión de la familia (*sacra familiaria*) con el homenaje a los antepasados fallecidos y potenciando el deseo de ser recordado después de la muerte a través del carácter conmemorativo de la figura del fundador.

En consecuencia, los ciudadanos romanos realizaron donaciones o legados afectando su patrimonio a fundaciones funerarias, las cuales se constituían con bienes inmuebles o mediante entregas de dinero a *collegia* religiosos o profesionales con la condición de destinar dichas entregas a los fines de la fundación.

El patrimonio fundacional solía estar formado por fincas circundantes al sepulcro (*locus religiosus*), a modo de recintos funerarios, de manera que se configuraban como jardines o huertos (*horti cohaerentes*) con dependencias para su uso por los encargados del cuidado de los mismos y de la tumba. Se constituía mediante un fideicomiso o un legado sobre la propiedad o incluso mediante el usufructo de dichas fincas o jardines a favor de los descendientes agnaticios (fideicomisos de familia) del causante, a los que se les reservaba el *ius sepulchri* y, como se afectaban a perpetuidad, eran inalienables. El problema residía en que dichos inmuebles eran, por lo general, de grandes extensiones con lo que podía haber intención del fundador de defraudar al Fisco e incluso a acreedores, pues dichas fincas quedaban fuera del comercio. Era, por tanto, el nacimiento de un tipo de propiedad sujeta a fideicomiso familiar del conjunto de propiedades inmobiliarias que posteriormente, en la tradición jurídica española, se conocerían como “*manos muertas*”²⁰. Este tipo de fundaciones con huertos y fincas en el recinto del sepulcro se generalizaron a partir del año 100 d. C.

Además del fin principal de estas fundaciones que era, como se ha dicho, el cuidado y mantenimiento de la tumba del causante, con cláusulas dirigidas a impedir el derecho de enterramiento a personas ajenas a la familia, también se disponía y se llevaba a la práctica por los fideicomisarios la realización de diversas actividades benéficas a favor de terceros o de colectividades en memoria, claro está, del fundador, que pretendían mantener vivo el recuerdo del fallecido entre los beneficiarios de dicha fundación.

Al igual que en las fundaciones griegas, el fundador disponía de cláusulas penales en caso de infracción o incumplimiento de los ritos funerarios por parte de los

fallecimiento del fundador, como ocurría en las fundaciones mixtas (funerarias y sociales). Por *Lex Cornelia sumptuaria* se limitó el lujo y el exceso en los funerales y banquetes. J. M. Blanch Nogués, *Régimen jurídico de las fundaciones...*, o.c., pp. 80-81 y 92. P. Fuenteseca Díaz, *Lecciones de historia del Derecho romano*, Madrid 1978, p. 148.

²⁰ A. D’Ors y Pérez-Peix, *Derecho Privado Romano*, Pamplona 1991, § 341, pp. 391-392.

administradores, exigiéndose por el Fisco, la ciudad o el colegio penas pecuniarias en su favor.

Las fundaciones funerarias romanas inician su declive a partir del siglo III y desaparecen en el siglo IV d. C. por el surgimiento y posterior consolidación del cristianismo como religión oficial del Imperio a partir de Teodosio I, lo que propicia el abandono de la religión familiar tradicional romana y el culto pagano, siendo prohibido dicho culto en el año 392 al introducirse la costumbre cristiana de realizar los enterramientos en fundos cerrados (*coementarius*) bajo el cuidado y protección de la Iglesia, por lo que ya no se requieren específicas fundaciones funerarias²¹.

No obstante, las fundaciones funerarias romanas no desaparecen en su totalidad, subsistiendo bajo formas cristianizadas a lo largo del siglo IV, realizándose enterramientos de cristianos en lugares propios de fundaciones funerarias paganas.

Respecto a las fundaciones privadas benéficas romanas hay que decir que es difícil segregarlas de las funerarias, pues éstas incluían, por la finalidad perseguida, como anteriormente se ha citado, la realización de diversos fines benéficos o sociales²².

Aunque las ayudas a los menesterosos y enfermos eran medidas de propaganda con un fin de estabilización social tendentes a evitar revueltas de los menos favorecidos, hubo un cierto grado de concienciación de los romanos ante las necesidades sociales. Los pobres recibían alimentos y vestidos mediante los cuestores y los intendentes o procuradores de alimentos²³, y mediante la generosidad pública se proveía de trigo a precios económicos en los mercados. Todo ello fue consecuencia de la influencia que ejercieron los filósofos griegos del siglo II a.C., los cuales introdujeron entre los romanos la idea de *liberalitas* como espontánea inclinación hacia la generosidad, tanto pública como privada. Algunos autores destacan también el posterior influjo de la escuela estoica griega sobre las clases cultas romanas y que sirvió de punto de partida para la organización de las primeras fundaciones públicas de beneficencia en tiempos del emperador Trajano. Había pues todo un sistema de beneficencia pública sobre la

²¹ Resulta curioso que a pesar de la abolición del culto familiar (dioses manes) y de los ritos y creencias paganas en las fundaciones funerarias a partir de los años 380-390 d. C., han llegado hasta nuestros días y siguen perviviendo, con notable arraigo, costumbres romanas como las de llevar flores a las tumbas de los difuntos en días señalados y la limpieza de los sepulcros. También se conservó, aunque hoy en día haya desaparecido, la práctica familiar de realizar banquetes fúnebres en el día del funeral del difunto y cada año en el aniversario del fallecimiento del mismo. J. M. Blanch Nogués, *Régimen jurídico de las fundaciones...*, o.c., p. 91.

²² Algunos autores han clasificado las fundaciones privadas en tres grandes apartados: A) Fundaciones sacrales: dedicadas al culto de los dioses o divinidades, reyes e incluso héroes y también a los difuntos a través de ceremonias conmemorativas sobre la tumba. B) Fundaciones agoniales: cuyo fin era la recaudación de dinero para realizar diversos espectáculos de gladiadores o de juegos atléticos o para pagar las representaciones teatrales y religiosas en memoria del fundador. C) Fundaciones sociales: asignadas al suministro de alimentos a niños pobres, a la realización de servicios al pueblo (conservación de teatros y bibliotecas, construcción y mantenimiento de baños públicos gratuitos) y a la educación e instrucción de jóvenes. B. Laum, *Stiftungen in der griechischen...*, o.c., I, p. 60 y ss. F. De Visscher- U. E. Paoli, *Fondazione...*, o.c., p. 430.

²³ R. Beneyto Berenguer, *Fundaciones sociales de la Iglesia católica. Conflicto Iglesia-Estado*, Valencia 1996, pp. 27 y 28.

base de la noción de la *benignitas* (generosidad o benevolencia). También hubo asociaciones de beneficencia llamadas *sodalitates*²⁴.

Los fines benéficos de las fundaciones privadas romanas iban dirigidos a colectividades de personas como a los niños de familias pobres, entregas de alimentos o dinero a colectivos de ciudadanos (decuriones municipales, miembros de un *collegium* o al *populus*), el derecho a la utilización gratuita de los baños públicos, la disminución de la cuantía de los tributos a los ciudadanos, la organización de banquetes o incluso la adjudicación de un terreno propiedad del benefactor para enterrar a los que no tenían recursos. También, aunque menos frecuentemente, el facilitar servicios educativos y culturales a los ciudadanos como el mantenimiento de bibliotecas y compra de libros. Estas distribuciones de dinero y comida como trigo, aceite, vino (*mulsum*) y pan (*sportulae*) eran llevadas a cabo por la aristocracia local, patricios y ciudadanos ricos, como manifestación de generosidad (*munificentia*) y por las citadas fundaciones privadas creadas por personajes del orden ecuestre o senatorial ante situaciones de penuria.

Otra forma de política social, fue la entrega gratuita y periódica, o venta a menor precio que en el mercado, de trigo y aceite (*frumentationes*), que se hacían en Roma desde tiempos de la República por el Senado y luego, en época de los Gracos (Tiberio y Cayo) por los comicios, a favor de la plebe (ciudadanos romanos residentes en la capital) y a cargo del erario público²⁵. Después, ya en el Principado, se siguió con dichas distribuciones extraordinarias junto a espectáculos circenses con ocasión de aniversarios o celebraciones diversas y sufragadas por la *res privata* del Príncipe.

El procedimiento para la constitución de las fundaciones benéficas consistió, a igual que en las funerarias, en la realización de donaciones fideicomisarias en vida del fundador o mediante legados modales o fideicomisarios en testamento. El patrimonio fundacional estaba constituido por capitales de dinero o bienes inmuebles que eran entregados a una colectividad duradera, de modo que las rentas de los mismos bienes se destinaban a fines benéficos. En consecuencia, la titularidad y administración fideicomisaria de dicho patrimonio estaba encomendada a asociaciones religiosas o profesionales y a ciudades, que distribuían las rentas de dichos capitales entre los ciudadanos o entre sus asociados. Recordar que con Nerva se otorgó capacidad a las ciudades para recibir legados y que con Adriano se legitimó a los municipios para recibir herencias en virtud de fideicomisos²⁶, lo cual se extendió, en la época de Marco

²⁴ Deriva de *sodalitas*, asociación de tipo religioso, caracterizada por la reunión de sus miembros en un banquete, y de ahí su nombre. J. Iglesias Santos, *Derecho romano...*, o.c., p. 169.

²⁵ La primera ley que recoge esta entrega es la *Lex Sempronia de frumentationes*, que consistía en repartir al pueblo trigo a precios muy reducidos. A partir de esta ley los repartos periódicos de trigo tuvieron una gran importancia, porque con ellos se manejó la voluntad de la plebe, aunque tuvo efectos económicos contraproducentes y nocivos. Mediante la *Lex Iulia de frumentatione*, dictada por Julio César, se redujo el número de beneficiarios en los repartos de trigo. P. Fuenteseca Díaz, *Lecciones de historia del Derecho romano...*, o.c., pp. 145 y 151.

²⁶ Había dos tipos de legados: los legados "*ad ornatum*" para embellecer el foro, teatros o estadios y los legados "*ad honores*" para repartirlos entre los necesitados, como niños, pobres y ancianos ("*Civitativis legari potest etiam quod ad honorem ornatumque civitatis pertinet: ad ornatum puta quod ad instruendum forum, theatrum, stadium legatum iuerit. Ad honorem puta quod ad munus edendum venationemve ludos scenicos, ludos circenses relictum fuerit aut quod ad divisionem singulorum civium vel epulum relictum fuerit*". Digesto 30,122,pr.,Paulo., libro 3 regula.). Dichos legados estaban sujetos a la limitación impuesta por la *Lex Falcidia* del año 65, en virtud de la cual el conjunto de legados

Aurelio, a los *collegia*. Estas fundaciones privadas estaban sujetas al control público, en orden al cumplimiento de las disposiciones de naturaleza fiduciaria, realizado por magistrados municipales (*curatores kalendarii*), de la administración imperial (*curatores rei publicae*), gobernadores provinciales e incluso pro el Senado de Roma o el propio emperador, lo que hacía posible la realización permanente de la voluntad del fundador²⁷. El mismo Cicerón, en *De officiis*, II, 16 (*Corpus Inscriptionum Latinarum*) confirma la existencia de legados para fines benéficos.

“Liberales autem qui suis facultatibus aut captos a praedonibus redimunt... aut in filiarum collocacione adiuvant...”

También el Digesto (30, 117, pr., Marcianus) confirma los legados en favor de la *civitas* con la finalidad de emplearlos en obras de interés social.

“Si quid relictum sit civitatibus, omne valet, sive in distributionem relinquatur, sive in opus, sive in alimenta vel in eruditionem puerorum, sive quid aliud.”

A diferencia de las fundaciones funerarias, en las benéficas, al ser fundaciones en vida podían ser controladas por el fundador, por lo que no se establecían cláusulas penales en caso de incumplimiento del negocio fundacional, sino que a través de una especie de aparente *stipulatio* entre benefactor y la ciudad o colegio aceptante se asumía la obligación de cumplir el encargo fundacional. En otros casos se incluía una condición en la que se establecía que el patrimonio sería transmitido a otra ciudad o colegio en caso de incumplimiento de los fines de la fundación.

También hubo en Roma fundaciones benéficas destinadas a dar sustento a niños de familias pobres. Son las conocidas fundaciones alimentarias privadas. La más antigua data de los tiempos de Calígula o Nerón, hacia el siglo I, en la que un senador llamado Helvius Basila dejó un importante legado para la compra y reparto de trigo entre los niños de la ciudad de Atina²⁸. Dichas fundaciones alcanzan su máximo esplendor en todas las provincias del Imperio hacia el siglo II y comienzan su declive un siglo más tarde, desapareciendo en el siglo IV, aunque en época tardía algunas de estas fundaciones alimentarias adoptaron la apariencia de obras de beneficencia cristianas, al ser constituidas por fieles de la incipiente Iglesia.

dispuestos por un testador no podía exceder de las tres cuartas partes del total de la herencia. Su objeto fue limitar la absoluta libertad del testador para disponer de todo su patrimonio mediante legados. Trató de coartar esa libertad de disposición en interés de los propios testadores, pues era frecuente que el heredero, excesivamente gravado con legados, no aceptara la herencia y provocara la apertura de la sucesión *ab intestato*, siempre rechazada por los romanos. J. M. Blanch Nogués, *Régimen jurídico de las fundaciones...*, o.c., p. 102. P. Marzal Rodríguez, *El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva Planta*, Valencia 1998, p. 228.

²⁷ Entidades permanentes de base asociativa a las que la jurisprudencia romana ya las clasificaba como *corpora* o *universitates*, es decir como entes con un significado propio y diferenciado de los miembros que lo integran y a los que el Derecho romano, aún sin conocer el concepto de persona jurídica, les reconocía funciones propias de tal. R. Orestano, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Torino 1968, p. 131.

²⁸ Ejemplo de fundación alimentaria privada es la realizada en época de Adriano por Plinio el joven al gravar a perpetuidad un fundo de su propiedad con una renta que destinó a la manutención de niños *ingenui* (nacidos libres) de la ciudad de *Comum* (Como). J. Santa Cruz Teijeiro, *Las fundaciones alimentarias y una carta de Plinio el joven*, Madrid 1950, pp. 139 y ss.

Las fundaciones privadas benéficas y las mixtas (funerarias y benéficas) declinan a partir del siglo III llegando casi a desaparecer hacia los siglos IV y V debido al empobrecimiento general de la sociedad romana a consecuencia de guerras civiles e invasiones de diversos pueblos y a la vigorosa aparición de la caridad privada de la Iglesia a través de las *piae causae*, que serán reconocidas como de interés público, a la vez que protegidas por el Imperio romano.

3.3.- Fundaciones públicas: las fundaciones alimentarias.

Siguiendo el ejemplo de las fundaciones privadas benéficas surgieron las instituciones o fundaciones alimentarias públicas (*Alimenta*). Su origen se remonta a la intervención de los príncipes romanos para atender las necesidades de niños de familias humildes. La concepción y configuración de las mismas, como forma de intervención pública para fines asistenciales, se debe a Nerva, pero Trajano fue su organizador e impulsor al poner en marcha el ambicioso plan alimentario. Se trataba de una fórmula idónea que permitía la consecución de fines públicos y sociales (de beneficencia pública)²⁹. Estas instituciones se mantuvieron casi invariables hasta el siglo III y fueron uno de los programas de protección pública más ambiciosos del mundo romano.

Consistían en un ingente programa dirigido por la Cancillería Imperial en el que se entregaban capitales prestados por el Fisco a propietarios de fincas rústicas y con los intereses del préstamo que se generaban se atendía a las necesidades de manutención de niños y niñas de familias necesitadas. Las fincas de los propietarios que aceptaban dicho programa quedaban vinculadas a proporcionar, sin límite de tiempo, unas rentas cuyo destino era el fin social descrito anteriormente.

La finalidad de entrega de dichos capitales a los propietarios agrícolas era para garantizar por los mismos una renta anual perpetua cuyo fin era el programa de alimentos públicos, además de otros fines políticos y cuya administración era realizada por las ciudades.

En un principio se aplicó a los niños desfavorecidos de la ciudad de Roma, al extender el programa de entregas de dinero y trigo que se hacían con frecuencia a los ciudadanos romanos más humildes y, posteriormente se extendió dicho programa a toda la península italiana.

Un magistrado (*quaestor alimentorum*) era el encargado de distribuir los ingresos entre los niños comprendidos en el censo de necesitados. Dichas cantidades daban para una dieta diaria bastante sencilla a base de pan y aceite, por lo que cabe deducir que, más que un sustento o manutención de niños a cargo de las fundaciones alimentarias, era una medida de ayuda a favor de familias pobres.

Según la opinión de la doctrina las fundaciones alimentarias públicas fueron, si no verdaderas fundaciones, el precedente histórico de las mismas por el destino de su patrimonio, sujetos de forma indefinida, a un fin benéfico determinado por la voluntad del fundador (*Fiscum Principis*). Estaríamos ante una forma de fundación impropia o dependiente.

²⁹ A. D'Ors y Pérez-Peix, *Derecho Privado Romano...*, o.c., p. 392. P. Bonfante, *Instituciones de derecho romano*, Madrid 1959, p. 69.

Bien es cierto que, según diversos autores, dichas fundaciones, aparte de su fin principal de carácter asistencial o benéfico, tenían también otras finalidades políticas o económicas, como la necesidad de aumentar demográficamente la población rural para tareas agrícolas y para atender las necesidades militares que originaba el mantenimiento de la unidad y defensa del Imperio, proveyendo de soldados a las legiones romanas. Otros rechazan dichas afirmaciones, aunque sí es cierto que al fin social y benéfico se unieron otros motivos. De todas maneras fue un complemento importante respecto de las *frumentationes* públicas a pesar del elevado coste económico que supusieron.

Dichas fundaciones desaparecen durante la profunda crisis política y militar que tuvo lugar desde mediados del siglo III, unida a una crisis económica, con una grave inflación monetaria, dándose por extinguidas en el año 315 cuando Constantino promulga una *lex* con el título “*De alimentis, Quae inopes parentes*” (Código Teodosiano 11,27,1)³⁰ en la que establece un nuevo sistema de asistencia pública a base de subvenciones para familias pobres obligado por la desaparición definitiva de las citadas fundaciones³¹. A partir de entonces las tareas de beneficencia pública y asistencia social serán asumidas por la Iglesia, con el auge del cristianismo, mediante el establecimiento de las causas pías.

4.- LA BENEFICIENCIA CRISTIANA Y LA APARICIÓN DE LAS FUNDACIONES PÍAS.

4.1.- La caridad como nuevo valor moral³².

³⁰ “I. Imp. Constantinus A. ad Ablaium. Aereis tabulis, vel Cerussatis, aut Linteis mappis, scripta per omnes Ciuitates Italie proponatur Lex, quae parentum manus -a parricidio arceat, votumque vertat in melius: Officiumque Tuum haec cura perstringat, Ut si quis parens adferat subolem, quam pro paupertate educare non possit nec in alimentis, nec in veste inperienda tardetur, cum Educatio nascentis infantiae moras ferre non possit : Ad quam rem, & fiscum nostrum, & rem Privatam indiscreta iussimus praebere obsequia”. Codex Theodosianus, Edición de G. Weidmanni, Lipsiae 1740, tomo IV.

³¹ Constantino establece un mandato para proveer de manutención, vestido y dinero a los niños carentes de recursos, previa petición de sus padres (que era una obligación en caso de situación familiar precaria), para evitar prácticas como el abandono, la venta o incluso el infanticidio de sus hijos recién nacidos ante situaciones graves de penuria económica y social durante la crisis que azotó varias regiones del Imperio, manifestada, principalmente, en una terrible y generalizada hambruna. J. M. Blanch Nogués, *Régimen jurídico de las fundaciones...*, o.c., pp. 165-166.

³² La caridad cristiana, como nuevo mandamiento, aparece como valor moral flamante en el sentido jurídico de la *aequitas* cristiana que supera a la *iustitia* clásica romana de dar a cada uno lo suyo, llevando hacia una visión de la *iustitia* impregnada de valores cristianos como son la *humanitas* (sentimiento de bondad y benevolencia) entendida en el sentido de *pietas* o *caritas* (amor, afecto, ternura), es decir, de misericordia hacia el prójimo. J. M. Blanch Nogués, *Régimen jurídico de las fundaciones...*, o.c., p. 175. J. J. Rubio Rodríguez, *Las fundaciones benéfico-religiosas en el Derecho común y español (Estudio histórico-jurídico)*, Córdoba 1985, p. 23. A este respecto M. Gesteira señala que la más importante contribución del cristianismo antiguo, en el ámbito del sufrimiento humano, consistió en su absoluta dedicación caritativa a los enfermos, pobres y desvalidos y en el cuidado de éstos a ejemplo de su Señor. Los enfermos dejaron de ser pobres desgraciados cuya presencia había que evitar, o pecadores que llevaban en su carne los estigmas de su pecado, castigados por la mano de Dios (o de los hados), para convertirse en compañeros y hermanos en el camino, arduo y difícil de la vida. M. Gesteira Garza, *Christus Medicus. Jesús ante el problema del mal*; en Revista Española de Teología, Madrid 1991, vol LI, 2-3, p. 254. La caridad como fundamento del deber moral de amar al prójimo como a nosotros mismos debe entenderse que es una virtud (amor o amistad con Dios) que no debe prodigarse por obligación, porque los actos caritativos no pueden ser objeto de precepto. Su objeto material es Dios y el prójimo.

Desde la primera comunidad de Jerusalén, hasta nuestra época, la Iglesia ha tejido una espléndida guirnalda de amor hacia todos los débiles, hacia todos los pobres, especialmente hacia los enfermos. Ha sido y es consciente de que su misión incluye, por mandato de su fundador Cristo, la preocupación de la diaconía por los que sufren³³.

Con el nacimiento de la religión cristiana y las enseñanzas de Jesús cambia de forma radical la relación con los pobres. Se exige, conforme al espíritu del cristianismo, que la profesión externa de la fe esté vivificada por la caridad. La simple creencia es por sí sola inútil si no va acompañada de las buenas obras³⁴.

En el Nuevo Testamento la norma suprema y el precepto de mayor rango del Evangelio es la caridad. Este mandamiento como sentimiento que impulsa a ayudar a los demás, pasa a ser la principal misión de todo cristiano y se erige en signo distintivo de los seguidores de Jesús. Aparece como un sentimiento de desinteresada benevolencia para con los demás, que tiene su fundamento en el deber moral de amar al prójimo procurando su beneficio (San Mateo, 22, 39; San Juan 14, 21).

Esta caridad, verdadera muestra del amor cristiano, practicada de forma universal y heroica por las primeras comunidades de fieles, se manifestó en la asistencia y cuidado de los pobres y necesitados mediante la entrega de bienes en los ágapes o reuniones. El pobre no es un mero representante de Cristo sino que es Cristo mismo (*ipse Christus*). Ya en los Hechos de los Apóstoles, en la institución de los diáconos (servidores), como personas especialmente dedicadas a las atenciones y cuidados hacia los más necesitados, se constata la distribución y suministro cotidiano de limosnas. El mandamiento (del amor) de Jesús significó el comienzo de una actitud espiritual que se concretaba en el ejercicio de obras de misericordia como gestos de fraternidad entre los hombres. Las comunidades atendían a los huérfanos y a las viudas, acogían a los peregrinos y asistían a los presos, a pobres y enfermos³⁵. Estaban organizadas bajo una triple finalidad: evangelizar, celebrar la Eucaristía y la atención a los necesitados. Este deber caritativo de la Iglesia para con los pobres arranca de su misma esencia y la identifica como *Ecclesia Pauperum*.

Esta línea de pensamiento cuyo principio y motor es la caridad es defendida en los primeros siglos por Tertuliano (Quinto Septimio) y por San Justino Mártir. Esta solicitud cristiana hacia los enfermos y pobres llegó hasta causar admiración entre los paganos. Maravillosa fue la actuación de los cristianos en la peste de Corinto en el año 250. El mismo Juliano el Apóstata (331-363) incitaba a los sacerdotes paganos a tener el celo de los "*impíos galileos*". Paladio, historiador de los monjes del desierto egipcio, mencionaba cómo los anacoretas y cenobitas compartían sus bienes con los pobres y enfermos.

Esa caridad, ejercida por los cristianos y por la propia Iglesia, para con el prójimo y los necesitados, aparecerá en una doble vertiente, espiritual y temporal, formando una realidad compleja, con una dimensión divina y humana a la vez.

³³ M. Bautista, *¿Qué es la Pastoral de la Salud?*, Buenos Aires 1996, p. 15.

³⁴ P. Benito Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico*, Madrid 1866, tomo I, cap. I, § 123, p. 115.

³⁵ J. Traserra Cunillera, *Las fundaciones pías autónomas*, Barcelona 1985, p. 13.

Por tanto, la caridad cristiana como ayuda mediante la beneficencia eclesiástica ha constituido durante siglos la columna vertebral de la asistencia pública en las sociedades europeas. Puesto en práctica el amor (caridad) por la Iglesia en cuanto a comunidad, éste necesita también una organización, como presupuesto para un servicio comunitario ordenado, lo que derivará con el origen del patrimonio eclesiástico y la aparición de las fundaciones pías.

4.2.- El reconocimiento jurídico y patrimonial de la Iglesia.

La evolución histórica de las fundaciones y causas pías está íntimamente ligada con el origen y evolución del patrimonio de la Iglesia. Cuando, reconocida su personalidad jurídica, comenzó a recoger en su seno un patrimonio, principalmente inmueble, le imprimió un carácter de utilidad pública y social que quedará grabado en la historia con las expresiones de la más elevada sobrenaturalidad, trascendiendo a su propia misión como institución.

Dicho patrimonio, en principio comunidad de bienes, nace de una misma comunión espiritual, basada en una misma fe, produciendo la espontánea unión de los bienes temporales.

Durante los primeros siglos de su existencia la Iglesia, marcada por una situación de persecución e ilegalidad permanente, no poseía bienes y se nutría de las aportaciones voluntarias de los fieles cristianos, mediante oblaciones³⁶ y colectas, las cuales fueron el origen del patrimonio de la Iglesia. Al principio se distribuían entre los pobres pero más tarde pasan a formar un cuerpo patrimonial, con lo que a finales del siglo II aparece como propietaria de bienes inmuebles, sobre todo oratorios y cementerios. Pero como las iglesias no estaban reconocidas de forma oficial por el Estado, dichos bienes estuvieron, en un principio, bajo la titularidad de sus miembros, como propiedades de los *collegia* o asociaciones para obras asistenciales o funerarias.

En esta primera época la caridad de la primitiva Iglesia se desarrolla mediante una eficiente organización y gestión de los bienes. El “*episcopos*”, como cabeza de la Iglesia y autoridad máxima, se encarga de la alta dirección del patrimonio y los presbíteros y diáconos³⁷ de la administración económica y del cuidado de los pobres, así como la distribución de las ofrendas.

³⁶ . Según San Justino (100-165) los domingos se hacían colectas para los pobres y enfermos. Éstas eran realizadas por fieles en el momento en que participaban en la Misa, presentando sobre el altar sus ofrendas en dinero (*stipes*) o en especie (pan, vino, aceite, cera, etc.) en el instante del ofertorio. J. J. Rubio Rodríguez, *Las fundaciones benéfico-religiosas...*, o.c., p. 63.

³⁷ Llamados “ministros de las mesas” al ser los encargados de distribuir entre los pobres las ofrendas para su sustento y alimento. M. Ros de Medrano, *Historia y origen de las rentas de la Iglesia de España desde su fundación*, Madrid 1828, p. 2.

La gestión de la beneficencia es realizada por el obispo³⁸. Es el encargado de recibir y distribuir las limosnas y ofrendas. También era el custodio del fondo común (“*caja de la comunidad*” o “*caja diocesana*”) disponible para atender las necesidades de los pobres y de las iglesias. Dicho término se utiliza en los primeros siglos del cristianismo como “asamblea” y hacia el año 200 tiene un doble significado: de asamblea de fieles cristianos y también el significado fundacional de “*edificio*” donde se reúne dicha asamblea. Posteriormente, con el Concilio de Calcedonia (451), para evitar cualquier sospecha sobre los obispos en la distribución de las ofrendas y limosnas, se crearon los ecónomos, los cuales se encargaron, bajo la dirección de los obispos, de administrarlas y distribuirlas.

A partir del siglo IV, en el año 313, con el Edicto de Milán, se ordena por Constantino³⁹ devolver los bienes confiscados a la Iglesia por el dalmata Diocleciano y por Maximiano, y se le da la potestad de poseer y disponer libremente de bienes y propiedades. En consecuencia, reconocida la libertad de la misma, se produce un notable incremento de su patrimonio y un importante desarrollo de las instituciones de piedad y caridad cristiana. Se favorece, mediante las donaciones, la creación de instituciones especializadas como hospitales, asilos, casas para pobres y hospicios⁴⁰.

Aunque cabe citar que, con anterioridad al Edicto de Milán, ya se realizaban donaciones y legados para fines benéficos y funerarios dentro del ámbito de las incipientes comunidades cristianas (iglesias locales), configuradas externamente como asociaciones de cristianos (*corpora*, *collegia*, *concilia*), tácitamente toleradas por el poder público romano y que actuaban como copropietarias fiduciarias de los bienes de la comunidad, aunque eran consideradas como *collegia illicita*. Dichas iglesias locales estaban regidas por ancianos (presbíteros) auxiliados por diáconos a los que correspondía la misión de realizar obras de caridad, como se ha dicho anteriormente.

³⁸ Gracias a él ya los diáconos aparece, por primera vez en el mundo, una organización caritativa totalmente desinteresada al servicio de los pobres y enfermos. Ejemplo brillante es San Lorenzo (225-258) que antes de administrar el bautismo a los catecúmenos les preguntaba por su atención a los enfermos, pobres y desvalidos, condición indispensable para aceptarlos en el seno de la comunidad. San Cipriano (+248) consideraba las acciones cristianas como “*las obras de nuestra justicia y de nuestra misericordia*”.

³⁹ Constantino no sólo reconoce oficialmente a la religión cristiana, concediendo la libertad de culto a los cristianos y a todos los demás la libertad de profesar la religión que prefieran, sino que otorga a la Iglesia una situación de privilegio e impulsa una “*cristianización*” general. Permitió a la Iglesia adquirir herencias y legados por testamento, en virtud de su constitución del año 321 (Código Teodosiano 16,2,4=Código de Justiniano 1,2,1: “*Imp. Constantinus A. ad populum. Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere, non sint cassa iudicia. nihil est quod magis hominibus debetur, quam ut supremae voluntatis, post quam iam aliud velle non possunt, liber sit stilus et licitum quod iterum non redit arbitrium.*”), lo que supuso, además, el reconocimiento implícito de una personificación de la propia Iglesia como centro de imputación de derechos y de obligaciones y el impulso definitivo para la fundación de iglesias y establecimientos cristianos de beneficencia, tanto por parte del poder público como de los ciudadanos de clases elevadas. J. M. Blanch Nogués, *Régimen jurídico de las fundaciones...*, o.c., pp. 195-197.

⁴⁰ Con el emperador Constantino se favorecen las donaciones gracias al cristianismo que las fomentaba con fines religiosos preferentemente, pues desde antiguo existió una tendencia a reprimir todo tipo de donaciones, que quedaron limitadas desde la *Lex Cincia* de la época republicana. P. Fuenteseca Díaz, *Lecciones de historia del Derecho romano...*, o.c., p. 182.

Con la publicación, en el 380, del edicto de Tesalónica “*Cunctos populus*” (C. Th. 16,1,2)⁴¹ el emperador Teodosio I reconoce como religión oficial del Imperio al cristianismo y asume la obligación de preservarlo y propagarlo, configurándose como elemento básico integrador de la unidad política y social del nuevo Imperio Romano Cristiano.

En cualquier caso, el cristianismo, desde su reconocimiento oficial, vino a fomentar numerosas fundaciones benéficas públicas y privadas, así como donaciones caritativas y disposiciones *mortis causa*, debido a la obligación cristiana de llevar a la práctica la limosna en favor de los pobres y necesitados⁴², siguiendo las exhortaciones de los Padres de la Iglesia, seguidas ampliamente, de forma consuetudinaria, por las comunidades cristianas de la sociedad romana⁴³. Su pensamiento, en línea con un ascetismo monacal, exhortaba a todos a la renuncia de sus bienes y a dejarlo todo abrazando la nueva fe cristiana. De esta forma, San Basilio (329-379) y San Gregorio Nacianceno (329-389) exhortaban a dar la mitad de los bienes para la salvación del alma. San Juan Crisóstomo (347-407), en sus notorias exhortaciones a favor de la caridad, proponía que los ricos debían dejar a Jesucristo una cuota de su patrimonio entre un cuarto a un tercio, e incluso, la mitad. San Jerónimo (342-420) recomendaba también la renuncia a toda riqueza y que dejasen una parte de su patrimonio para Cristo. También San Agustín (354-430) y San Ambrosio (340-397) propugnan dar una cuota de los bienes a favor de los pobres, de la Iglesia y de Cristo.

⁴¹ “*Cunctos populos, quos Clementiae Nostrae regit temperamentum, in tali volumus Religione, versari, quam Divinum Petrum Apostolum tradidisse Romanis, religio usque nunc ab ipso insinuata declarat: Quamque Pontificem Damasum sequi claret, & Petrum Alexandriae Episcopum, virum Apostolicae sanctitatis: Ut, secundum Apostolicam disciplinam, Evangelicamque doctrinam Patris et filii et Spiritus Sancti unam Deitatem sub parili Maestate et sub pia Trinitate credamus. Hanc legem sequentes, Christianorum Catholicorum, nomen iubemus amplecti: Reliquos vero dementes vaesanosque iudicantes, haeretici dogmatis infamiam sustinere: nec conciliabula eorum Ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos*”.

⁴² Es la llamada limosna expiatoria en favor del alma. Este valor meritorio de la limosna, de tal manera que la que se da al necesitado la recibe el mismo Cristo y sirve de provecho para el alma que será recompensada por sus buenas obras, se recoge en la *Didaché* (denominación o forma corta de “*La enseñanza del Señor por medio de los doce Apóstoles a los gentiles*” también conocida como “*Doctrina de los doce Apóstoles*” o “*Enseñanza del Señor transmitida a las naciones por los Doce Apóstoles*” escrita en el siglo I) y en la *Didascalia* (constitución eclesiástica del siglo III cuyo nombre completo es “*Doctrina católica de los Doce Apóstoles y de los santos discípulos de nuestro Salvador*”, llamada “*Didascalia Apostolorum Syriaca*”).

⁴³ J. J. Rubio Rodríguez, *Las fundaciones benéfico-religiosas...*, o.c., p. 25 y ss. J. L. Murga Gener, *Donaciones y testamentos “in bonum animae” en Derecho Romano tardío*, Pamplona 1968, pp. 35 y ss. *El testamento a favor de Jesucristo y de los Santos en el Derecho Romano Postclásico y justiniano*, Madrid 1965, p. 357; *Testamentos y donaciones “in bonum animae” y la llamada teoría de la personalidad jurídica*, Milán 1968, pp. 15 y ss; *Los negocios “pietatis causa” en las constituciones imperiales postclásicas*, Madrid 1967.

Ha de tenerse en cuenta que en la Patrística de los siglos IV y V, las donaciones y disposiciones *mortis causa* caritativas o benéficas hacia la Iglesia y los pobres no se veían como meros actos de liberalidad sino como un auténtico deber (*debitum*) que asumía todo cristiano como un acto de devolución de la riqueza que pertenecía desde el origen a Dios, lo que comprometía al cristiano, sobre todo si poseía un patrimonio de cierta consideración, a donar o legar una cuota del mismo a la Iglesia o a los pobres para su asistencia y cuidado. J. M^a Blanch Nougues, *La responsabilidad de los administradores de las piae causa en el Derecho romano justiniano*, RIDA, 49, Bruxelles 2002, p. 134. *Régimen jurídico de las fundaciones...*, o.c., p. 192.

Así, las obligaciones morales, basadas en la caridad religiosa de todo cristiano, aunque no se exija su cumplimiento por una norma, vincularon en la práctica más que cualquier obligación jurídica impuesta por el poder público.

También los emperadores dieron muestra con su ejemplo de verdaderas virtudes cristianas fundando ellos mismos numerosos establecimientos y realizando donaciones de dinero o tierras de su *res privata* (tesoro privado), muchas veces necesarias para la supervivencia de dichas instituciones de caridad a lo largo del tiempo. Es más, en una constitución de Valentiniano I y Valente (“...negotiatiores qui ad domum nostram pertinent (...); ...adiuvare pauperes et in necessitatibus positos...” C. Th. 13,1,5) se recuerda el sacro deber de las clases altas romanas de realizar actos benéficos y ayudar a los necesitados⁴⁴.

Pero también hubo emperadores romanos como Arcadio (377-408) y su hermano Honorio (384-423), hijos de Teodosio, que aunque fueron celosos defensores del Cristianismo, declarándolo religión del Estado en 408, pusieron algunas restricciones a la libertad de testar a favor de las iglesias⁴⁵.

Es evidente que la legislación romana amparó y potenció el patrimonio de la Iglesia, pero sólo en el caso de que dicho patrimonio estuviese destinado al cumplimiento de fines religiosos y benéficos, conforme a los principios de la religión cristiana basados en los preceptos evangélicos de caridad y pobreza, a la vez que se condenó el enriquecimiento personal de clérigos y obispos. También, en el conjunto de la legislación de los emperadores, hubo medidas tendentes a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados.

Todo ello unido a las recomendaciones de los primeros Padres de la Iglesia, tanto los latinos San Agustín de Hipona, San Ambrosio de Milán y San Gregorio Magno, como los griegos San Atanasio el Grande, San Juan Crisóstomo o San Basilio de Cesarea entre otros, y a la estructuración del patrimonio eclesiástico en torno a unos fines determinados explica el meteórico incremento de las propiedades de la Iglesia y la rápida creación de fundaciones benéficas cristianas, tanto de origen público como privado, pues, desde sus inicios, la Iglesia fomentó las fundaciones como parte esencial de su misión.

⁴⁴ Son ejemplos de estas muestras de caridad la donación de fincas del patrimonio privado del emperador Valente para la fundación por el obispo Basilio (el Magno) de un gran hospital para pobres y peregrinos en Cesarea de Filipo (Capadocia). Las emperatrices Eudocia, esposa de Teodosio II, y Aelia Pulqueria, hermana del citado emperador, destinaron sus propios bienes para crear albergues para pobres, asilos para ancianos, hospederías para forasteros y reparación de iglesias y monasterios en Constantinopla y Jerusalén. Anteriormente fue la madre del emperador Constantino, Santa Elena, quien erigió los primeros hospitales bajo el signo del cristianismo. También la aristocracia romana, convertida a la nueva religión contribuyó piadosamente a la fundación de instituciones benéficas. Así una dama de la alta sociedad romana, Fabiola, más tarde Santa Fabiola, de la ilustre familia de los Flavios, dedicó ingentes esfuerzos y sumas de dinero a la ayuda de los pobres y al cuidado de enfermos, fundando el primer hospital cristiano de Occidente en la ciudad de Roma, en el siglo IV, mediante la aportación de un edificio de su propiedad. También personas ilustres pertenecientes al orden senatorial contribuyeron a ayudar a los pobres, como es el caso del senador Pammachius que también fundó un hospital en la ciudad de Ostia. B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, II, Milano 1952, p. 174. J. L. Murga Gener, *Donaciones y testamentos “in bonum animae”...*, o.c., p. 41.

⁴⁵ J. Sempere y Guarinos, *Historia de las rentas eclesiásticas*, Madrid 1822, p. 22.

4.3.- Las causas pías en la época postclásica y justiniana.

Las *piae causae* surgen y se desarrollan durante la confusión política e ideológica del Imperio Romano, durante los siglos II a V, a consecuencia del ocaso de las tradiciones religiosas y culturales y el definitivo afianzamiento de la religión cristiana. Pocos términos de las fuentes del Derecho común han encontrado tanta importancia y divulgación en los jurisconsultos de todas las épocas como el de las causas pías.

En una primera etapa surgen fundaciones benéficas en la parte oriental del Imperio y después en Occidente. De esta forma, durante el reinado de Constantino se fundan establecimientos cristianos de caridad para el cuidado de pobres y enfermos en Antioquía.

En el siglo III San Lorenzo funda un xenodoquio en Roma. En el Concilio de Nicea del año 325 se ordena a cada obispo establecer en su diócesis un albergue o casa de acogida para pobres, enfermos, forasteros y peregrinos. En Oriente, San Efrén (306-373), en 350, funda un hospital en Edesa para apestados. El obispo Eustacio de Sebaste (365), construye el primer hospital de peregrinos del que se tiene conocimiento, acogiendo en él a enfermos y leprosos. Basilio el Grande, obispo de Cesarea (Capadocia) y gran legislador del monacato oriental, crea grandes colonias para pobres y enfermos, y erige en el 369, bajo la advocación de San Lázaro, su famoso hospital llamado “*Tocofeso o Basileo*”, una casa para el cuidado de los extranjeros y para el tratamiento médico de los enfermos sin recursos. Lo mismo hace su hermana Macrina y en Constantinopla su patriarca Juan Crisóstomo al llevar a la práctica sus propias homilías sobre el deber de la caridad, precepto fundamental de todo cristiano, fundando un hospital en el 390. En el año 400 ya había siete establecimientos de beneficencia en Constantinopla entre hospitales⁴⁶ para enfermos e inválidos, orfanatos, asilos para ancianos y albergues para peregrinos y forasteros. En Roma se fundan, a principios del siglo V, varios hospitales regentados por discípulos espirituales de San Jerónimo como el de Santa Paula (347-404) y su hija Eustaquia.

Cuando Justiniano I el Grande accede al trono de Bizancio en el año 527 la parte occidental del Imperio romano tenía un aspecto más germánico que propiamente latino y más cerca de la religión arriana que de la cristiana ortodoxa. El emperador era visto por sus súbditos como la cabeza de la Iglesia, defensor de la Fe y sacerdote-rey. Era, pues, no sólo el supremo legislador en el ordenamiento civil, sino también en el religioso.

El emperador basó su gobierno en la “*humanitas*” y en la “*utilitas communis*”, que sustituye al concepto autoritario de “*utilitas publica*” por una noción más humana como era el interés colectivo o común de todos, preocupaciones que serán una constante a lo largo de su vida⁴⁷.

⁴⁶ El origen de los hospitales como establecimientos dedicados a curar enfermos de cualquier condición social tiene su origen, hacia los siglos IV y V, en Oriente gracias a la acción caritativa de diversos fundadores apoyada por la ideología cristiana y la protección del poder público.

⁴⁷ R. Huerta Huerta y C. Huerta Ízar de la Fuente, *Fundaciones...*, o.c., p. 74. Confróntese con R. Feenstra, *Le concept de fondation du droit romain classique...*, o.c., pp. 245-263.

Con Justiniano las obras y establecimientos piadosos reciben el nombre de causas pías, situándolas como el origen de las fundaciones actuales, al establecer su régimen jurídico definitivo otorgándoles capacidad jurídica y de obrar, pues anteriormente, incluso el tardío *Codex Theodosianus* del año 438 no reguló dicha materia⁴⁸.

Bajo la doble influencia del profundo y arraigado sentimiento cristiano y la presión del clero de la Iglesia ortodoxa, aparece en el derecho justiniano una abundante legislación tendente a favorecer cuantos legados, fideicomisos, donaciones y herencias fueran realizadas con fines piadosos.

El término “*piae causae*” aparece, en consecuencia, en las fuentes como una expresión ambigua, carente de rigor técnico y acuñada en el siglo VI por Justiniano, o al menos, muy generalizada en el lenguaje de la Cancillería Imperial, para designar dogmáticamente a las fundaciones cristianas de beneficencia. Dicha terminología aparece únicamente en constituciones del Código justiniano y en sus Novelas:

C.J. 1,2,19 (“*Illud, quod ex veteribus legibus licet obscure positum a quibusdam attemptabatur, ut donationes super piis causis factae...*”)

C.J. 1,3,45,1a (“*Si quid vero semel dare in pias causas iussi sunt...*”); C.J. 8,53,34,1a (“*Exceptis donationibus tam imperialibus quam bis, quae in causas piissimas procedunt...*”)

Nov. 131,6 (*Pro temporalibus... sacrosanctis ecclesiis et aliis universis venerabilibus locis solam quadragintam annorum praescriptionem opón praecipimus, hoc ipso Servando et in exactione legatorum et hereditatum, quae ad pias causas relictas sunt.*”)

Nov. 131,11,3,4; (“*...et locorum episcopos omnes res cunctis, sicuti dictum est, piis causis distributa...*”)

Nov. 131,13,pr (“*In captivorum vero redemptionem, et egentium pabula, et alias pias causas, aut pro utilitate propriae ecclesiae, ex his expendere licentiam habeant.*”).

La expresión no es unívoca ya que con ella Justiniano aludía tanto al fundamento del negocio jurídico de liberalidad, es decir, al motivo o propósito pío como también el destinatario de la donación o legado, es decir, al propio establecimiento de beneficencia⁴⁹.

Dicho término, que recorre las fuentes tardías del derecho romano, se usa a propósito de negocios jurídicos como donaciones, legados y testamentos. Su significado es el de toda obra de piedad o de caridad, así como también todo patrimonio autónomo que una persona (fundador) destina a un fin religioso o caritativo; es decir, son

⁴⁸ S. Bueno Salinas, *La noción de persona jurídica...*, o.c., p. 17.

⁴⁹ J. M^a Blanch Nougues, *La responsabilidad de los administradores de las piae causa...*, o.c., p. 129.

instituciones constituidas por bienes o masas patrimoniales que los fundadores destinan para obras de misericordia y de culto⁵⁰.

Las causas pías o *piae causae* son el instituto más original, característico de la legislación romano cristiana, que crea un sistema jurídico adecuado para garantizar la actuación de las instituciones piadosas. La influencia de la religión cristiana es clara, presentándose las causas pías como instituciones eclesiásticas, tanto por el fin como por el régimen jurídico. Dicha denominación fue acuñada por los justinianeos, al igual que la de *venerabiles domus* y engloba al conjunto de establecimientos de caridad y beneficencia de inspiración cristiana que florecieron por todo el Imperio romano⁵¹.

Su origen, según diversos autores, se encuentra en el mundo greco-romano clásico con la fundación de hospitales y centros asistenciales a cargo de particulares propietarios de los mismos.

Estas *piae causae* cristianas comprendían masas patrimoniales en forma de edificios, dependencias, instalaciones, bienes muebles y capitales los cuales podían ser destinados a la creación de hospitales (*nosocomia*), orfelinatos (*orphanotrophia*), hospederías para forasteros sin recursos (*xenodochia*), asilos de ancianos (*gerontocomia*), albergues para mendigos y pobres sin hogar (*ptochotrophia*), casas para recién nacidos o niños de corta edad abandonados (*brephotrophia*), edificios de asistencia a parturientas, leproserías, o también otras instituciones de beneficencia indicadas en las fuentes con el término genérico de *consortia*.

En el Derecho Justiniano también las disposiciones testamentarias⁵², a favor del culto o de la beneficencia, fueron consideradas como hechas por motivos de piedad, es decir como *piae causae*. Justiniano reguló el régimen jurídico definitivo de este tipo de testamentos y donaciones a favor de Jesucristo en C.J. 1,2,25(26)⁵³ y en Nov. 131,9⁵⁴.

A partir de ese reconocimiento de la capacidad de suceder a título de heredero, las *piae causae* van alcanzando un progresivo reconocimiento de su capacidad jurídica y de obrar como centros independientes y autónomos de beneficencia cristiana.

⁵⁰ J. J. Rubio Rodríguez, *Concepto de causa pía en los juristas clásicos españoles (estudio histórico-jurídico)*, en *Ius Canonicum*, vol. XXV, Pamplona 1985, p. 146.

⁵¹ *Ibidem*, p. 154.

⁵² Ya hay antecedentes con el emperador Constantino, que estableció en una constitución (C. Th. 16,2,4: "*Habeat unusquisque licentiam, sanctissimo Catholicae venerabilique concilio, decens, bonorum quod optauit relinquere. Non ede sint cassa iudicia. Nihil est quod magis hominibus debetur, quam ut supernae voluntatis, postquam aliud iam velle non possunt, liber sit stilus, & licens quod iterum non redit arbitrium.*") la libertad de forma en la redacción de los testamentos donde la voluntad del testador era favorecer a la Iglesia. En el año 339, en época de Constancio, se publicó otra constitución, contenida en C.J. 6,23,15 ("*Quoniam indignum est ob inanem observationem irritas fieri tabulas et iudicia mortuorum, placuit ademptis his, quorum imaginarius usus est, institutioni heredis verborum non esse necessariam observantiam, utrum imperativis et directis verbis fiat an inflexa.*"), en la que se reconoce, de forma general, la libertad de forma en la redacción de las cláusulas de los testamentos con tal de que conste expresamente la voluntad del testador. J. L. Murga Gener, *Los negocios "pietatis causa"*..., o.c., p. 268 y ss. *Donaciones y testamentos "in bonum animae"*..., o.c., pp. 206 y ss.

⁵³ "*Quoniam in multis testamentis invenimus tales institutiones, quibus vel ex asse quis dominum nostrum Christum heredem scripsit nulla aede sacra adiecta...*"

⁵⁴ "*Si quis in nomine magnis dei et salvatoris nostri Iesu Christi hereditatem aut legatum reliquerit, iubemus, ecclesiam loci, in quo testator domicilium habuerit, accipere, quod dimissum est.*"

La importancia que adquieren, especialmente en Oriente, es tal que determina que los emperadores del siglo V publicaran legislaciones que regulaban las causas pías, como la constitución de León I (C.J. 1,2,14)⁵⁵, en la que se dispone que los bienes dejados a la Iglesia por piadosos testadores o donantes habrán de conservarse intactos y no se podrán enajenar ni por el obispo ni por el ecónomo. También establece una serie de privilegios para los establecimientos de beneficencia (C.J. 1,3,34)⁵⁶ dándoles base jurídica y equiparándolas con las restantes organizaciones eclesiásticas. En otra constitución (C.J. 1,3,32)⁵⁷ hace un reconocimiento jurídico implícito de la capacidad jurídica de dichas fundaciones. Mediante una constitución de Anastasio (C.J. 1,2,17,1)⁵⁸ se concibe a estas instituciones como propietarias de los bienes que poseen, pudiendo disponer de éstos si son muebles, es decir, que ya se les reconoce subjetividad jurídica⁵⁹.

La materia sobre las causas pías aparece regulada sistemáticamente en el Código de Justiniano, Libro I, título III, con la rúbrica “*De episcopis et clericis et orphanotrophis et brephotrophis et xenodochis et asceteriis et monachis*”.

Con el tiempo, el término se va objetivando y se llamaron así los fines e incluso las mismas instituciones de beneficencia. Más tarde, el fin de la disposición con el patrimonio objeto de la fundación, fue considerado de forma totalmente independiente. De esta forma se fue construyendo el concepto de fundación en su sentido actual a partir de un fin benéfico o de caridad⁶⁰.

⁵⁵ “*Iubemus nulli posthac archiepiscopo in hac urbe regia sacrosanctae ecclesiae praesidenti, nulli oeconomio, cui res ecclesiastica gubernanda mandatur, esse facultatem fundos vel praedia urbana seu rústica...*”

⁵⁶ “*Omnia privilegia, quae a retro principibus aut a nostra serenitate vel iudiciariis dispositionibus aut liberalitatibus pro singulis quibuscumque temporibus vel consuetudine sive circa ius metatorum sive in aliis quibuslibet rebus praestita sunt orphanotrophio sive asceteriis vel ecclesiis aut ptochiis seu xenodochiis aut monasteriis...*”

⁵⁷ “*Omnes, qui ubicumque sunt vel posthac fuerint orthodoxae fidei sacerdotis et clerici, cuiuscumque gradus sunt, monachi quoque in causis civilibus ex nullius penitus maioris minorisve sententia iudicis ad extranea iudicia pertrahantur aut provinciam vel locum aut regionem quam habitant exire cogantur. Nullus eorum ecclesias vel monasteria propria, quae religionis intuitu habitant, relinquere miserabili necessitate iubeatur, sed apud suos iudices ordinarios, hoc est provinciarum rectores, locis quibus degunt et ecclesiarum ministeriis obsecundant, omnium, contra se agentium suscipiant actiones, ut his saltem horis atque temporibus, quibus religiosos viros a turbulenta observatione praetorii vacare contigerit cumque eos ad tempus petitorum intentio calumniosa laxaverit, ad sua se monasteria et venerabiles ecclesias conferentes sapienti animo, precatione sollicita faciliusque de proximo sacrosanctis altaribus obsecudent in suis laribus et domiciliis constituti*”.

⁵⁸ “*Sancimus omnem rerum immobilium vel civilium annonarum quae religiosis domibus competunt vel competent alienationem cessare, quocumque modo fiat vel adgrediatur vel excogitari possit, nisi forte propter aliquam necessitatem utilitatemque...*”

⁵⁹ J. L. Murga Gener, *Donaciones y testamentos “in bonum animae”...*, o.c., p. 214; *Los negocios “pietatis causa”...*, o.c., p. 319.

⁶⁰ En los textos justinianeos las causas pías aparecen con el término *domus* como en una constitución de Zenon (C.J. 1,3,34,(35): “*Domus etiam aliasque res superius nominatas ad curam memorati viri pertinentes...*”) o en otra de Justiniano (C.J. 1,2,22,pr.: “*in parte autem ecclesiastica vel aliarum domuum, quae piis consortiis deputatae sunt*”); o acompañado de adjetivos como *venerabilis domus* (C.J. 1,2,17,2: “*Nec poterit magister census aut defensor recusare ad venerabilem domum se conferre...*”; 1,3,48 (49),7: “*Sin autem in personam certam vel in certam venerabilem domum respexit...*”; 1,3,57: “*...qui anteriore sacra constitutione nostra continentur, id, quod perpetuo venerabilibus domibus quas regunt relictum est...*”; Nov. 69,4,1: “*...aut aliis reverendissimis domibus*”; 120,1,pr: “*...aut alterius venerabilis domus in hac regia civitate sive...*”; 131,10: “*...aut alterius reverendae domus in novísima*

Desde un punto de vista jurídico, dentro de las *piae causae*, nos encontramos, por tanto, ante patrimonios afectados al cumplimiento de fines en virtud de la voluntad de un fundador (por ejemplo, edificios destinados a hospital o albergue para pobres) que presentan una vocación de perpetuidad que trasciende con mucho la vida del donante o testador. Y también se comprenden dentro del ámbito de las obras de beneficencia aquellos capitales destinados a atender finalidades benéficas como pueden ser el subsidio económico a pobres y necesitados en general (manutención y auxilio a colectividades) o para la liberación de ciudadanos romanos hechos prisioneros y reducidos a la esclavitud por ejércitos extranjeros o por bandas armadas (*redemptio captivorum vel pauperum*).

Desde un punto de vista de nomenclatura o del lenguaje, hay que diferenciar las llamadas *venerabiles domus* (casas venerables), dentro de las cuales aparecen, como se ha comentado, establecimientos dedicados a la beneficencia pública como asilos, orfelinatos y hospitales; y, por otro lado, los patrimonios legados por benefactores particulares y administrados por obispos, constituidos como fundaciones impropias o dependientes destinadas al sustento de los pobres y al rescate de prisioneros y esclavos.

En el conjunto de las *venerabiles domus* se distinguen las independientes (*venerabiles domus* autónomas), fundadas por benefactores particulares, incluyendo a los emperadores, y administradas autónomamente por los rectores de las mismas y las públicas (*venerabiles domus* dependientes), fundadas o erigidas por la Iglesia y administradas como casas o establecimientos subordinados, pero autónomas y administradas por ecónomos. Tanto unas como otras gozaron, en época de Justiniano, de autonomía jurídica y patrimonial.

La terminología, a lo largo del tiempo, no es constante, pues además de causa pía (*piae causae*), aparecen términos como administración pía, obra pía, carga piadosa e institución piadosa, para referirse al mismo sentido o significado, es decir, a obras benéficas, de caridad o de religión.

Con la legislación del Bajo Imperio se reguló la estructura, administración y las condiciones de las *piae causae*. Se fueron personificando progresivamente sobre una

voluntate fieri disposuerit..."; 131,12,2: "*Si autem annale legatum cuilibet venerabili domui relinquatur*"; 131,13: "*et omnibus aliis rectoribus venerabilium domorum valere*"; 131,15: "*...aut venerabilibus domibus omnia privilegia*"; otro término es el de *locus: sacer locus* (Nov. 111,1: "*ab ecclesiis ceterisque sacris locis...*"); *pius locus* (C.J. 1,3,46,9: "*et qui quandoque praeerunt piis locis, licentiam habeant persequendi et exigendi ipsa...*"; 1,3,57: "*...et omnis utilitas omnimodo ad pium pertineat locum*), *religiosus locus* (Nov. 111,pr.: "*aliisque religiosis locis constitutione nostra nuper indultum*"). También está el término de *collegium* (Nov. 7,2,1: "*...et collegiis percipere licere...*"; 7,6,pr.: "*...aut aliorum venerabilium collegiorum...*"); *sacrum collegium* (Nov. 7, praef.: "*...et totius sacra collegii rebus...*"), Y, por último, *corpus* (Nov.59,6: "*...ex diversis corporibus felicissimae huius urbis...*"). J. M^a Blanch Nogués, *La responsabilidad de los administradores de las piae causa...*, o.c., p. 130; D'Ors sostiene que el derecho justiniano ya conoció las fundaciones como adscripciones de un patrimonio a un fin, actuando en la vida jurídica a través de representantes. A. D'Ors y Pérez-Peix, *Elementos de Derecho privado...*, o.c., p. 243. Por tanto, es justo señalar al derecho justiniano como el que logra dar cuerpo a la institución fundacional, en el sentido de que se constituye ya como entidades con capacidad para ser sujeto de relaciones en el tráfico jurídico, distinto de la de sus representantes. M. del M. del M. Martín García, *Las fundaciones religiosas en el Derecho español. Especial referencia al Derecho autonómico*, Almería 1995, p. 22.

base patrimonial, más concretamente, topográfica, sobre el propio edificio del establecimiento configurándose claramente como centros autónomos de beneficencia dotados de capacidad jurídico-patrimonial plena y, en muchos casos, de una administración propia independiente⁶¹. El régimen aplicable a las mismas aparecerá como un *ius singulare* por razón del interés público de la labor que desempeñan. Se recoge en C.J. 1,2,13⁶² el citado régimen de privilegio a favor de las iglesias, de establecimientos de caridad y *venerabilis domus*. Dicho derecho único o singular se configura con el tiempo en un régimen específico de derecho público con dos notas muy características como son el carácter inalienable (*extra commercium*, Novelas 7 y 120) de los bienes de las *piae causae*, afectados al fin social o benéfico respectivo, y la especialidad de las normas que lo integran. En consecuencia, no es exagerado concluir que se estaría ante bienes cuasi públicos, es decir, de propiedad privada pero afectos a un servicio público, lo cual era muy importante políticamente, pues el Estado romano se encontraba en una profunda crisis económica y social, viniendo a asumir la propia Iglesia una importante tarea social ante la situación general de pobreza, inabordable por la Cancillería Imperial o las ciudades⁶³.

También a las donaciones, legados y fideicomisos, tanto *inter vivos* como *mortis causa*, de patrimonios a favor de los pobres y para la redención de cautivos o prisioneros, fueron notablemente favorecidas y beneficiadas por diversas constituciones imperiales, sobre todo de Justiniano, así como para garantizar el cumplimiento efectivo de las mismas. Por ejemplo, Justiniano en C.J. 1,3,48,7⁶⁴ estableció la no aplicación de la Ley Falcidia respecto a los legados a favor de los pobres, exclusión que luego se reafirmó para todas las *piae causae* en general recogida en Nov. 131,12 pr.⁶⁵ Se reconoció que “personas inciertas” formadas por colectividades o agrupaciones de pobres y cautivos pudiesen ser destinatarias de legados y donaciones pías. Respecto a la

⁶¹ El Derecho justinianeo otorgaba verdadera capacidad jurídica y autonomía a estos centros de beneficencia pública de inspiración cristiana: así, tenían capacidad suficiente para recibir donaciones (C.J. 1,2,19; C.J. 1,2,22; C.J. 8,53 (54),34); aceptar herencias, legados y fideicomisos (C.J. 1,2,23; C.J. 1,3,45 (46),pr.-1-3-9; C.J. 1,3,48,3-7; C.J. 1,3,55 [57]); para adquirir frutos y acciones (C.J. 1,3,45 (46),4) y podían ser parte en un litigio (C.J. 1,2,23,4; Nov. 7,5) y en un contrato (Nov. 111,1). Además en C.J. 1,3,55(57),4 se habla de los derechos que la institución puede hacer valer contra sus propios administradores y contra sus herederos. Sobre los patrimonios a favor de los pobres y cautivos, el obispo, como persona designada por el benefactor, es propietario de la fundación y no mero administrador de un patrimonio. J. L. Murga Gener, *La continuidad “post mortem” de la fundación cristiana y la teoría de la personalidad jurídica colectiva*, AHDE, 38, Madrid 1968, p. 542.

⁶² “*Generali lege sancimus, sive vidua sive diaconissa vel virgo deo dicata vel sanctimonialis mulier, sive quocumque alio nomine religiosi honoris vel dignitatis femina nuncupatur, testamento vel codicillo suo, quod tamen alia omni iuris ratione munitum sit, ecclesiae vel martyrio vel clerico vel monacho vel pauperibus aliquid vel ex integro vel ex parte in quacumque re vel specie credidit seu crediderit relinquendum, id modis omnibus ratum firmiterque consistat, sive hoc institutione sive substitutione seu legato aut fideicommisso per universitatem seu speciali, sive scripta sive non scripta voluntate fuerit derelictum: omni in posterum in huiusmodi negotiis ambiguitate submota.*”

⁶³ J. L. Murga Gener, *La continuidad “post mortem”*..., o.c., p. 481. J. M. Blanch Nogués, *Régimen jurídico de las fundaciones*..., o.c., pp. 198-200.

⁶⁴ “*Haec tamen omnia locum habere sancimus, quando non certi xenonis vel certi ptochii vel certae ecclesiae nominatio a testatore subsecuta est, sed incertus est eius sensus. sin autem in personam certam vel in certam venerabilem domum respexit, ei tantummodo hereditatem vel legatum competere sancimus, nulla Falcidia nec in hac parte intercedente.*”

⁶⁵ “*Si autem heres quae ad pias causas relicta sunt non impleverit, dicens relictam sibi substantiam non sufficere a dista, praecipimus omni Falcidia vacante quicquid invenitur in tali substantia proficere provisione sanctissimi locorum episcopi ad causas quibus relictum est.*”

posibilidad de otorgar testamentos, herencias o legados a favor de dichas colectividades parece ser que fueron actividades bastante frecuentes y abundantes por tratarse de causas benéficas tradicionales y que contaron con el favor de la predicación cristiana y, como se ha citado, el apoyo de la legislación imperial. Anteriormente, el Derecho romano republicano y clásico no admitía dicha posibilidad, pues se consideraban como personas inciertas integradas en colectividades difusas no reconocidas en la ley.

A partir del término *piae causae* se construyó por los canonistas el concepto de fundación como persona jurídica, por lo que es claro que dicho concepto tiene su raíz en el Derecho canónico.

Una parte notable de la doctrina romanística, representada por Arangio Ruiz, Biondi, Bonfante y Perozzi⁶⁶, defiende y afirma que las fundaciones son una aportación propia del cristianismo, como una derivación del precepto de la caridad, *caritas*, que impulsó la creación de multitud de instituciones benéficas y de culto, como hospitales, orfanatorios, asilos, iglesias y monasterios, pues dichos establecimientos o patrimonios fueron o bien creados y organizados por la propia Iglesia Católica como institución, o bien por las respectivas iglesias locales o monasterios, o también por donaciones o disposiciones *mortis causa* de los emperadores y de particulares, que asimismo constituyeron de este modo fundaciones de marcado interés social de inspiración cristiana y administradas o tuteladas por la Iglesia.

Antes, para conseguir el resultado de destinar unos bienes a una finalidad permanente a cumplir por generaciones ulteriores, los romanos se servían de medios indirectos como atribuir, mediante legados o donaciones, bienes a una colectividad duradera por su naturaleza, sometiéndola a la carga de destinar las rentas a las finalidades queridas por el disponente: frecuentemente el culto de sus antepasados⁶⁷. Pero con la legislación canónica, todos estos institutos aparecen ya bajo la forma de personas morales.

De esta forma culmina la evolución de las estructuras del patrimonio en las diversas entidades jurídicas, orientadas a la realización de fines concretos de culto o de caridad espiritual, e incluso temporal. Estas fundaciones benéficas, con la idea de unos bienes adscritos a un fin, desconocida para el Derecho romano, nacen al ser erigidas como verdaderos sujetos de derecho dichos patrimonios. Son las llamadas *fundaciones ecclesiasticae* o *causa piae*, es decir, sujetos surgidos de actos de disposición, calificados por un fin *ad pias causas*⁶⁸.

Estas causas pías o *venerabiles domus* prestaban un servicio de indudable interés público dentro del marco de la pobreza general derivada de las injusticias sociales y de las sucesivas crisis políticas, sociales y militares de la época postclásica y bizantina, pues fueron la respuesta a una nueva moralidad emergente en virtud de la cual numerosos cristianos realizaban generosas donaciones y legados para la fundación

⁶⁶ V. Arangio Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1937, p. 74. B. Biondi, *Diritto romano cristiano...*, o.c., p. 57. P. Bonfante, *Istituciones de Derecho Romano*, o.c., p. 65. S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*, Firenze 1906, volumen I, p. 360.

⁶⁷ J. L. Lacruz Berdejo, F. de A. Sancho Rebullida, J. Delgado Echeverría y F. Rivero Hernández, *Elementos de Derecho Civil*, I, vol. II, Barcelona 1983, p. 225.

⁶⁸ J. J. Rubio Rodríguez, *Concepto de causa pía en los juristas clásicos españoles...*, o.c., p. 150.

de dichas instituciones y para hacer posible su continuidad y mejora en el cumplimiento de sus fines. Como se ha visto gozaron también del apoyo de los emperadores cristianos a través de sus aportaciones económicas y por el establecimiento de un derecho único privilegiado en favor de los mismos, dado el indudable interés, no sólo social, sino también político, de su actividad.

No es, pues, nada singular que la imparable y progresiva personificación de dichos establecimientos naciese bajo la protección y el amparo de la también emergente concepción institucional de la Iglesia y que obedeciera al deseo de los emperadores de fortalecer la propia identidad e independencia de estas fundaciones al separarlos jurídica y patrimonialmente, por un lado, de sus propios fundadores y de sus herederos y, por otro, diferenciándolos del patrimonio de sus respectivos administradores.

Como reflexión final destacar que el régimen jurídico establecido por Justiniano parte del propósito de buscar un equilibrio, a veces delicado, entre el deseo de proteger la voluntad del fundador en cuanto a los fines y administración de las *piae causae* y el, a veces necesario, control del obispo y de la autoridad imperial sobre dichas fundaciones, dado su interés público y religioso. Por todo ello se reforzó su posición jurídica en atención a sus fines, concibiéndolas como instituciones personificadas y autónomas (independientes de sus fundadores y administradores) en el mundo del Derecho. Este fue el propósito de los emperadores cristianos y de Justiniano.

Dicho equilibrio se perderá después de la muerte de dicho emperador romano, quebrándose en los siglos venideros el fundamento institucional de dichas fundaciones que serán convertidas en meros patrimonios fiduciarios (fundaciones impropias) en manos de los herederos del fundador.

5.- LAS CAUSAS PÍAS A PARTIR DE LA EDAD MEDIA.

La caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 no supuso el fin de las causas pías cristianas en la Europa Occidental, sino que, al contrario, desde el afianzamiento y consolidación de los primeros reinos romano-germánicos hasta Carlomagno, se propició y alentó la fundación de numerosos hospitales, conventos y establecimientos de caridad y beneficencia.

En el siglo VI se fundan hospitales eclesiásticos regidos por el Derecho romano justiniano. En la parte oriental del Imperio, algunos albergues caritativos evolucionan hacia instituciones que incluían cuidados médicos. Así nacen los hospitales llamados *xenones* de los siglos V y VI. El más famoso fue el *Sampson Xenon* de Constantinopla, que era atendido por médicos de prestigio, con salas especializadas de cirugía e incluso, de enfermedades oculares.

El primer concilio de Orleáns, de 10 de julio del año 511, prescribió a los obispos reservar 1/4 de las rentas para sustentar a pobres, peregrinos y enfermos⁶⁹. Y amenazó con cesar a los obispos negligentes. Hincmar, arzobispo de Reims, en el siglo IX, recuerda a los obispos de la región que son gerentes y no propietarios de los bienes eclesiásticos, especialmente de la parte destinada a los pobres y enfermos. Llegó a

⁶⁹ Cánones 14 y 16. C. Richard, *Los sacrosantos concilios generales y particulares*, Madrid 1793, p. 280.

llamar asesinos de los pobres a los obispos descuidados en sus deberes de asistencia y caridad y pidió a su clero que recibiese pobres diariamente a su mesa, como posteriormente llegaría a hacer Luis IX de Francia. También San Cesáreo, obispo de Arlés, preocupado por los desvalidos y enfermos fundó un hospital en el año 512 junto a su catedral.

La orden de San Benito de Nursia (480-547), instituida en el siglo VI, tuvo a su cargo el cuidado de los enfermos. Fundó el monasterio de Montecasino en el año 529 que en principio atendía a monjes enfermos para luego acoger a los peregrinos y viajeros e incluso a leprosos. Practicaban lo mandado por su fundador, que exigía ser hospitalarios con todos los necesitados. De ahí proviene la palabra hospital⁷⁰.

El sínodo de Orleáns del año 549 establece en sus disposiciones la total prohibición de alterar el fin fundacional y de enajenar el patrimonio en la creación de un hospital y albergue para pobres y peregrinos (*xenodochia*) en Lyon. Dispuso, además, que se asumiera una actitud caritativa hacia los leprosos, ordenando a los obispos que los protegiesen y les diesen comida y vestido.

La regulación de las *piae causae* ya se encuentra en las epístolas del Papa Gregorio, el Grande, de finales del siglo VI y cuyo contenido será recogido en el “Decreto” de Graciano. También en un formulario relativo a la realización de negocios jurídicos elaborado por el monje franciscano Marculfo, a finales del siglo VII, donde se recoge la fórmula para la realización del negocio fundacional de un *xenodochio*⁷¹.

Entre las centurias V y VIII fueron construidos numerosos hospitales que en su mayoría constituían estaciones de atención sanitaria en las rutas y caminos que conducían a Roma.

Entre los siglos VIII y IX la religiosidad asistencial está muy relacionada con los monasterios e iglesias locales, que recibían numerosas mandas destinadas a los *pauperes Christi*. En los primeros siglos medievales los establecimientos de caridad están adscritos o unidos a una iglesia, monasterio o convento, por lo que resurgen dichas las instituciones de beneficencia mediante la creación de casas de peregrinos en los monasterios y de hospitales anejos a las catedrales, aunque también podían ser independientes y gozar de individualidad propia y, por consiguiente, de plena capacidad de obrar⁷². Estos establecimientos tenían las siguientes características:

-Acogían a pobres, enfermos, peregrinos y ancianos.

-Su fin primario no era la asistencia médica sino la ayuda espiritual y la práctica de obras de misericordia.

⁷⁰ Los hospitales eran lugares religiosos y el cuidado de los enfermos que en ellos se realizaba era un culto a Dios (Véase. Mateo, 25,40). Tanta es la importancia de estas instituciones que el obispo Ladrio, en el siglo VII dio a su hospital el nombre de “*Hotel Dieu*”.

⁷¹ J. M. Blanch Nogués, *Régimen jurídico de las fundaciones...*, o.c., p. 265, citando a H. Siems, *Von den piae causae zu den Xenodochien*, en R. Helmholz-R. Zimmermann (eds.), *Itinera Fiducia: Trust and Treuhand in historical perspective*, Berlin 1998, p. 63.

⁷² El tema de la beneficencia es tratado en los concilios altomedievales, tanto por el *Concilium Germaniae* del año 742, presidido por San Bonifacio (680-754), como por el Concilio de Aquisgrán entre el 816-817. R. Beneyto Berenguer, *Fundaciones sociales de la Iglesia católica...*, o.c., p. 35.

-Eran atendidos por clérigos.

En la Alta Edad Media, a partir del siglo XI, al institucionalizarse paulatinamente el sistema parroquial y los diezmos, hay un verdadero auge y perfeccionamiento de las instituciones asistenciales, benéficas y establecimientos de caridad, que ya son sujetos diferenciados y autónomos y que atiende a los pobres de solemnidad: los *matriculati*.

El fundador, que afecta un patrimonio a un servicio duradero o perpetuo que él determina en ayuda de los necesitados, ya no es propietario de esa masa de bienes, sino que pasan a tener ese derecho dichos establecimientos y también los pobres, enfermos y leprosos como verdaderos beneficiados y propietarios, los cuales han sido instituidos por el fundador⁷³.

Hay que precisar que en la Europa Altomedieval no tenía sentido la subsistencia de grandes casas u hospitales de beneficencia de la época romana postclásica, que pervivieron en el Imperio de Bizancio, las cuales estaban dirigidas a atender las necesidades de la pobreza de las urbes y cuyas dimensiones y compleja organización propiciaron la progresiva personificación jurídica del edificio como ente abstracto de tipo fundacional. Por el contrario, ante una sociedad rural, feudal y militarizada, en la que sólo existían castillos y aldeas dispersas a lo largo el territorio europeo y, como mucho, pequeñas ciudades, la beneficencia cristiana se dispersó en dicho ámbito rural, siendo ejercida por numerosos conventos fundados a lo largo de toda Europa⁷⁴.

Aparte de las fundaciones de beneficencia existieron fundaciones pías a favor del alma del pío disponente, cuya finalidad era piadosa, destinando bienes para el culto o para obras de caridad. Se realizaban a través de testamentos, legados y donaciones. Eran de dos tipos: la entrega, pura y simple, de bienes a una iglesia, sin pedir nada a cambio y la entrega que estaba condicionada a la celebración de misas por el alma del fundador. Según algunos autores, respecto a esta materia han querido ver que dichas fundaciones a favor del alma del benefactor proceden de arraigadas concepciones germánicas precristianas según las cuales los caballeros debían ser enterrados con sus bienes que acompañarían al alma del fallecido. Dichos bienes pasaban a formar parte del muerto y comprenderían objetos de uso personal, traje, alimentos, armas, dinero, etc. Así, con la recepción de las enseñanzas cristianas que exhortaban a los fieles a dejar una herencia a favor de Cristo o de los pobres, se suaviza la concepción germánica mediante la disposición de una parte del patrimonio del causante o fundador para las causas pías a favor del alma⁷⁵.

⁷³Cuando se creaba un hospital u otro centro de beneficencia o caridad se solía fundar un convento al que se le encomendaba la tarea de atender al fin benéfico de la fundación. Por tanto, el establecimiento de beneficencia ya no se concebía como un patrimonio de un fundador adscrito a un fin, sino como una dependencia o una parte del convento. Muchas fundaciones pasaron, con el tiempo, a ser entendidas como corporaciones de religiosos o de frailes o de los mismos beneficiarios de la institución como sujetos titulares. Estas donaciones se conocían como *pauperibus*. Dichos pobres se organizaban corporativamente y nombraban una comisión para administrar el instituto. H. Liermann, *Handbuch des Stiftungsrechts...*, o.c., p. 61. R. Beneyto Berenguer, *Fundaciones sociales de la Iglesia católica...*, o.c., p. 34. F. Ferrara, *Teoría de las personas jurídicas*, Madrid 1929 (reed. Granada 2006), p. 59.

⁷⁴J. M^a Blanch Nougues, *Régimen jurídico de las fundaciones...*, o.c., p. 271.

⁷⁵H. Liermann, *Handbuch des Stiftungsrechts...*, o.c., p. 104 y ss. J. J. Rubio Rodríguez, *Las fundaciones benéfico-religiosas...*, o.c., p. 68.

Otra forma de practicar la caridad fue la creación de cofradías y confraternidades medievales⁷⁶. Su naturaleza y finalidades eran muy diversas: la salvación del alma, el bien espiritual de los asociados y los medios para conseguirlo, que consistían, en su mayoría, en la oración, en las buenas obras de piedad con carácter benéfico y asistencial y en el mantenimiento de instituciones hospitalarias. Su proliferación y desarrollo social va unido al mismo fenómeno de emergencia de las ciudades a partir del siglo XI.

Con las expediciones a Oriente y la primera cruzada en 1097 se fundan hospitales y entidades con fines caritativos y de ayuda a los desamparados. Se tiene constancia de que en 1053 ya había un hospital que curaba y acogía a los peregrinos en Jerusalén.

Como consecuencia de las cruzadas se crean las Órdenes Militares con vocación de ayuda a los débiles y peregrinos en Tierra Santa. En 1103 surge la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, encargada de la custodia y defensa del Santo Sepulcro, y que se dedicó al rescate de cautivos. En 1113 se funda la Orden de los Hospitalarios de San Juan, conocida posteriormente como Orden de San Juan de Jerusalén, que ejercía la caridad acogiendo enfermos en hospitales donde tenían una plantilla permanente de médicos y cirujanos. En 1118 se funda la Orden del Temple (*milites Christi*) en defensa y ayuda de los peregrinos. Hacia 1119 se instituyó por los caballeros cruzados la Orden de San Lázaro, cuya misión era la defensa y cuidado de peregrinos y leprosos mediante la creación de leproserías y en 1190 la Orden Teutónica. A la vez se crean hermandades hospitalarias y diversas órdenes mendicantes, como la de los Carmelitas en 1083, Trinitarios en 1198 y Franciscanos en 1209.

En el siglo XII se funda uno de los más importantes hospitales bizantinos, el *Pantokrator Xenon*, erigido como fundación imperial privada por Juan II, dentro del complejo de un monasterio con el mismo nombre (*Pantokrator*), el cual disponía de 50 camas y tenía también un asilo para ancianos.

Bajo la concepción institucional de la Iglesia como entidad fundada por Dios e integrada por el conjunto de fieles cristianos (entendido como Cuerpo Místico de Jesucristo), el Derecho canónico elabora el concepto de fundación autónoma, el cual se fue imponiendo en el seno de la doctrina canonista, a lo largo de la Baja Edad Media, a los hospitales y establecimientos cristianos de beneficencia que se irán configurando como personas jurídicas al ser sujetos de derecho. La concepción de una masa patrimonial independiente como titular de derechos fue establecida por los canonistas. Tanto éstos como Graciano aceptan que la fundación tiene capacidad de actuar, es titular de un patrimonio y tiene, a la vez, otros derechos.

Se llega, de esta forma, a un estadio jurídico similar al que alcanzaron siglos atrás las causas pías de Derecho romano justiniano, a la luz de la recepción del *ius commune* romano y canónico en Europa. Por eso, según Ferrara, el sujeto fue la unidad indivisible

⁷⁶ Es preciso distinguir, para no crear confusión, las cofradías con fines piadosos y caritativos de las de oficios o gremios. Estas últimas se diferenciaban de las primeras en que eran de índole profana y tenían como objetivo la defensa corporativa de sus asociados, aunque mantuvieron un trasfondo religioso o cristiano. F. Fernández Conde, *La religiosidad medieval en España. Plena Edad Media (siglos XI-XIII)*, Oviedo 2000, p. 315. Ver también a G. Meersseman, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, Roma 1977, tomo I, pp. 6 y ss.

de la fundación, el ente institucional ordenado por la voluntad del fundador, efectuándose la fundación no ya de la forma oblicua de una disposición modal sino de un modo directo es ya un acto de soberanía, de creación⁷⁷.

En las Decretales de Gregorio IX y en las Clementinas del papa Clemente V ya se denomina *domus religiosa* (casa religiosa) al conjunto de bienes destinados a fines de religión con autonomía propia. También reciben el nombre de *loca religiosa* (lugares religiosos) y de *hospitalia*, nombre común que comprende diversas instituciones benéficas o de misericordia. En cambio, las fundaciones constituidas por civiles recibieron el nombre de *domus pia*, *loca pia laicalia* o simplemente *loca pia*, si habían sido erigidas sin autorización ni intervención de la autoridad eclesiástica. En dichos textos las causas pías aparecen con la terminología citada, diferenciándose de las llamadas *locus sacer* que son los templos dedicados al culto⁷⁸.

Dadas las facilidades existentes, desde entonces, a lo largo de la Baja Edad Media y también en la Edad Moderna se fundan un gran número de establecimientos de carácter religioso (beneficios), de instrucción (seminarios), de beneficencia (hospitales, asilos, instituciones para pobres, albergues para peregrinos, leproserías...). Además, numerosas iglesias establecen fundaciones de caridad, como la “*almoina*”, que atendían a los menesterosos mediante la colecta de los pobres “*vergonzantes*”⁷⁹.

⁷⁷ F. Ferrara, *Teoría de las personas jurídicas...*, o.c., p. 64.

⁷⁸ “*Episcopo subsunt omnia loca pia et ad eius sollicitudinem debent ordinari ad usum destinatum*”. “*Super eo, quod quaesitum est, utrum hospitales domus possit in seculares habitum commutari*”. “*Locus religiosus debet reformari de religiosis duntaxat, non de secularibus, nisi in defectum religiosorum*”. “*Similiter qui voluerit religiosam domum de novo fundare, regulam et institutionem accipiat de approbatis*”. *Corpus Iuris Canonici*, Coloniae Munatianae 1757, Decretales, Tít. XXXVI, *De religiosis domibus*, Cap. III, IV; V y IX, fols. 487-490; “*nec de novo domum vel aliquem locum acquirant, nec domus seu loca, quae habent, alienare valeant sine sedis eiusdem licentia speciali*”. In Sexto, III, Tít. XVII, Cap. Un., 1, fol. 117; “*Quia contingit interdum, quod xenodochiorum, leprosariorum, eleemosynariorum, seu hospitalium rectores, locorum ipsorum cura postposita...*” “*Ut, etiamsi pia loca preadicta exemptionis privilegio munitu consistant...*” “*Praecipis, hospitalia in beneficium non concendi*”. “*Declarat constitutionem non extendi ad hospitalia religiosorum et militarium ordinum*”. Clementinas, III, Tít. XI, Cap. II, fols. 234-235. J. Traserra Cunillera, *Las fundaciones pías autónomas...*, o.c., p. 15. J. J. Rubio Rodríguez, *Concepto de causa pía en los juristas clásicos españoles...*, o.c., p. 149. R. Beneyto Berenguer, *Fundaciones sociales de la Iglesia católica...*, o.c., p. 36. “*Domus religiosa in genere est, quae ad cultum divinum et pietatis, vel etiam misericordiae opera exercenda est deputata. Uti sunt monasteria, collegia, ceteraeque domus regularium; item xenodochia, in quibus peregrini, nosocomia, in quibus aegroti; orphanotrophia, in quibus orphanii recipiuntur, et substantatur, etc; nam haec omnia, si auctoritate episcopi erecta sint, domus religiosae sunt, et vocantur*”. “*Domus pia iterum specificè, quae ad pietatis et misericordiae opera sine episcopi, vel alterius similis praelati ecclesiastici auctoritate constructae, vel deputatae sunt: tales sunt oratoria, capellaeque domesticae, hospitalia, et quaecumque alia loca, quae ad huiusmodi opera destinata sunt, non tamen interveniente aliqua consecratione, benedictione, vel deputatione per ecclesiasticam auctoritatem facta*”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum Universum*, Romae 1844, III, pars III, título XXXVI, 1, 2, 3, fol. 217.

⁷⁹ La Almoina o Pía Almoina era una institución o fundación piadosa que, en su realidad histórica, tenía una doble función: primordialmente era una fuente complementaria de ingresos para los cabildos catedralicios de las ciudades y, secundariamente, un organismo asistencial especializado en la ayuda a los más pobres, principalmente mediante la distribución de alimentos. Su creación se basa en un conjunto de fundaciones pías de iniciativa particular. Una de las más antiguas fue la fundada en la ciudad de Gerona en 1228 por el canónigo Arnau de Escala con los diezmos de diversas parroquias. Otra destacada fue la de Valencia, en el año de 1303, por el obispo Ramón Despont y llegó a tener hasta diez capellanes encargados de asistir a los pobres. P. Fatjó Gómez, *La beneficencia eclesiástica en la Barcelona del siglo XVII: la Pía Almoina*, 1655-1669, Tesina de Licenciatura, Pedralbes, Revista de Història Moderna,

El término causa pía ya había sido utilizado por los glosadores civilistas en sus obras, como Bártolo de Sassoferrato, Pedro Baldo de Ubaldis. Éste último en *Comentaría in primun, secundum et tertium Codicis lib.*, Augusta Taurinorum 1576, capítulo “*De sacrosanctis ecclesiis*”, nº 1, 7 y 9, fol. 11:

“Secundo quaero, utrum quem relinquitur pio collegio, vel ad pias causas, an de iure civili requiratur solemnitas, quae requiritur in aliis relictis”. “Omne relictum pro anima dicitur relictum ad pias causas.”

También lo utiliza Andrés Alciato, en su obra *Opera Omnia*, Basileae 1582, tomo III, comentario al capítulo 1,2,1 del Código de Justiniano, fols. 20-21:

“...dum pro salute animae relinquatur, hec enim pia causa est alioqui si alicui diviti quisquam ob dei amores se legare dixerit, pia causa non est”. “Ipse etiam defendi posse arbitror, ut favore piae causae sustineatur, si quis legaverit”.

Dicho término aparece por vez primera en el *Corpus Iuris Canonici*, en una rúbrica de San Raimundo de Peñafort. El texto se encuentra inserto en el Decreto de Graciano (Secunda Pars, causa X, quaestio II, c. II), y está tomado de una constitución imperial de León y Antonio (*Corpus Iuris Civilis*, Libro I, II, 14):

“Hoc ius porrectum est ad omnem venerabilem locum, omneque collegium, quod actio pia constituit, ut nec res eorum pignorentur”

La importancia radica en que fue la ocasión para que los glosadores estudiaran el concepto de causa pía. Así, la antigua doctrina canónica, por obra de los glosadores medievales, utiliza la definición y se estudia en toda su amplitud el concepto. Lentamente los glosadores van matizando el término. Ejemplo de ello es una glosa de Bártolo, Baldo al D. 31,1,17 “*De legatis et fideicommissis, secundo*” en la que se encuentra la primera definición de causa pía:

“Id legatum esse pium quod legatur ad animae salutem”.

Por tanto, los legados o testamentos para pías causas son sinónimos de testamentos y legados para la salvación del alma.

Será a partir del Concilio de Trento cuando se precise jurídicamente el concepto debido a los grandes tratadistas del Derecho canónico como Benedicto XVI (Próspero Lambertini), Fagnano, Tiraquel, Barbosa, Juan de Lugo, Azpilcueta (Doctor Navarro) y Molina, entre otros.

Todos ellos tratan la materia cuando comentan el libro I del Código de Justiniano, títulos II, “*De Sacrosanctis Ecclesiis et de rebus et privilegiis earum*” y III, “*De Episcopis et Clericis*”. A la vez elaboran, siguiendo el orden de las Decretales, una doctrina jurídica sobre las causas pías, consecuencia del estudio que realizan sobre las mismas y, en concreto, del libro III, títulos XXVI, “*De Testamentis et ultimis*

Universitat de Barcelona, Barcelona 1984, p. 355. Véase también a C. Guilleré, *Girona medieval. L'etapa d'apogeu 1285-1380*, en *Quaderns d' Història de Girona*, Girona 1991.

voluntatibus”, y XXXVI, “*De religiosis domibus ut episcopo sint subiectae*”, respectivamente, ya citados.

La Iglesia, desde sus orígenes, tuvo plena conciencia de su poder legislativo y judicial sobre las causas pías instituidas por piadosos donantes, tanto en la determinación de la capacidad para disponer a favor de dichas causas como en cuanto a la forma y ejecución. Ya desde los concilios de Orleans y Lyon y las Decretales de Inocencio y Alejandro III se constata la autoridad de la Iglesia, donde reivindica su independencia y la exclusividad de su jurisdicción. Se reconoce el derecho de los obispos a visitar y vigilar dichas instituciones benéficas. También correspondía a la Iglesia el enjuiciamiento de los problemas relativos a los testamentos, pues habían adquirido un cierto carácter de acto religioso y, además en ellos se contenían legados piadosos⁸⁰.

Con el auge de las ciudades y de la burguesía, se crearon numerosas fundaciones pías, con una espectacular multiplicación de centros de caridad o beneficencia, tanto de tipo eclesiástico como civil⁸¹. En muchos países europeos, junto a las fundaciones eclesiásticas, de órdenes sacerdotales o las fundaciones privadas sometidas a vigilancia del obispo, se constituyen hospitales y centros de beneficencia de carácter laico, tanto municipales como privados, con sujeción al control de la autoridad municipal y en detrimento de las instituciones eclesiásticas.

La burguesía, laica y mística a la vez, animada del más intenso fervor religioso pese a sus continuos enfrentamientos con las autoridades eclesiásticas, manifiesta su piedad mediante numerosas fundaciones benéficas y el surgimiento de numerosas cofradías caritativas dedicadas al mantenimiento de hospitales para pobres y peregrinos o a la realización de obras de caridad tales como la distribución periódica de limosnas o alimentos a los pobres en días señalados, como se ha citado anteriormente. Su piedad se evidencia con una ingenuidad, una sinceridad y audacia que la llevan más allá de los límites de la estricta ortodoxia⁸².

El florecimiento de estas instituciones se basa en un factor de índole psicosocial: la necesidad de unirse o asociarse ante la carencia de una protección eficaz y la debilidad de los medios privados ante los desfavorecidos. También fueron determinantes una serie de causas socioeconómicas, en las que la vida urbana en franco desarrollo por el auge del comercio y los artesanos, atraía a una población campesina

⁸⁰ Desde la época justiniana es frecuente la institución de heredero a favor de Jesucristo, de la Iglesia o de los pobres. Es el llamado testamento *ad pias causas*, donde el patrimonio del causante es destinado a alguna causa pía. En sus orígenes tuvo problemas de aceptación, pues iba en contra de la teoría romana de la *certa voluntas*, que exigía el nombramiento de un heredero cierto y determinado. Este tipo de testamentos poseían un menor rigor formal, pues se atendía únicamente a la voluntad del causante, ya que las formalidades contenidas en ellos no eran *ad solemnitatem*, sino *ad probationem*. P. Marzal Rodríguez, *El derecho de sucesiones en la Valencia foral...*, o.c., pp. 142-143. R. Beneyto Berenguer, *Fundaciones sociales de la Iglesia católica...*, o.c., p. 36 y ss. J. J. Rubio Rodríguez, *Las formalidades en los negocios “pietatis causa” en la legislación civil y canónica*, en *Ius Canonicum*, vol. XXIX, Pamplona 1989, p. 351.

⁸¹ Una institución benéfica, fundada por Pedro el Ceremonioso en 1337, y dependiente del “*Consell*” de la ciudad de Valencia fue el cargo del “*Pare d’orfens*”, ejercido por un “*hombre honrado*”, padre y juez, elegido por el Justicia, cuya misión era atender y educar a los huérfanos pobres que mendicaban por las calles. Los fondos para su mantenimiento procedían de obras pías.

⁸² H. Pirenne, *Las ciudades de la Edad Media*, Madrid 1984, p. 151.

que trataba de asentarse en las ciudades, ocasionando la aparición de grupos desarraigados que cayeron en la marginación y en la pobreza más extrema. Ante esta población que demanda ayuda y atenciones especiales las cofradías piadosas intentan su alivio⁸³.

La tipología de estas cofradías de laicos fue muy variada según los fines que perseguían y los medios que empleaban. Entre todas ellas destacaron las hospitalarias por su número y por su demostrada eficiencia en la asistencia a los desvalidos, pobres, enfermos y desheredados.

Los canonistas, como Barbosa (*Iuris Ecclesiastici Universi*, Lugduni 1718, libro II, capítulo XI, 19, fol. 82: “*Hospitale non religiosum est illud, quod ad limitum cuiusque personae sine episcopi auctoritate fuit erectum..., sed non erit locus religiosus.*”), Van Espen (*Ius Ecclesiasticum Universum*, Matriti 1778, parte 2ª, título XXXVII, capítulos 1 y 2, números, 7 y 9, fol. 297: “*Haec vero habentur pro locis religiosis*”. “*At cum dubitatur, an hospitale sit publicum, aut privatum, cum appareat, an Episcopi auctoritate sit constitutum.*”) y Berardi (*Comentaría in ius ecclesiasticum universum*, Taurini 1766, tomo I, disertatio IV, capítulo VII, fol. 180), distinguen, a partir del siglo XIII, dos categorías de hospitales que incluían los modelos de fundación que se daban en la práctica: los *loci religiosi* o *loci publici*, que necesitaban para su existencia legal de la expresa autorización episcopal y que se configuraban como verdaderos establecimientos cristianos de beneficencia, con una serie de privilegios como el derecho de celebrar misas, perpetuidad del patrimonio afecto e inmunidades religiosos; y, por otro lado, el *hospitale privatum* u *hospitale simplex*, fundado por particulares⁸⁴, que no requería autorización eclesiástica, ni se consideraba un lugar religioso y no estaba afecto de modo permanente al fin para el que había sido fundado sino que se reconocía el derecho del fundador o de sus sucesores de devolver el establecimiento al uso mundano. No obstante el obispo, como defensor del patrimonio de los pobres, conservaba un cierto control sobre estas últimas instituciones pudiendo exigir el cumplimiento del encargo hecho por el fundador ante posibles negligencias de sus sucesores.

A lo largo de la Edad Media y Moderna se fundan hospitales y establecimientos benéficos a lo largo del Camino de Santiago en Francia, Portugal, Navarra, Castilla, León, Asturias y Galicia, donde surgen numerosas congregaciones de laicos dedicadas al mantenimiento de dichos hospitales para pobres y peregrinos. Ejemplo de todo esto son los regulares agustinos y su especial vinculación con los pobres, además de la *hospitalitas* (atención hospitalaria al peregrino), como formas destacadas de practicar la caridad apostólica. Esta orden creó un verdadero rosario de monasterios de canónicas agustinianas a lo largo de las rutas principales y secundarias del citado Camino de Santiago⁸⁵.

⁸³ F. Fernández Conde, *La religiosidad medieval...*, o.c., pp. 316-317.

⁸⁴ Una institución famosa a favor de los enfermos abandonados fue el “*Hospital de los Santos Inocentes*” (*Spital dels Folls*) de Valencia, fundado con las aportaciones de los laicos en respuesta a la petición de ayuda del padre Juan Gilabert Jofré hacia los dementes abandonados en su famoso sermón de 24 de febrero de 1409 en la catedral de la ciudad. El Papa Benedicto XIII, en fecha 26 de febrero de 1410, autorizó su fundación y, posteriormente, en 1414 se creó la cofradía para ayudar a mantenerlo y realizar obras de misericordia.

⁸⁵ F. Fernández Conde, *La religiosidad medieval...*, o.c., p. 287.

A partir del siglo XVI se alzan algunas voces a favor de una cierta racionalización de los recursos caritativos mediante la intervención de las Administraciones públicas, tesis amparada en el racionalismo e individualismo, pilares del renacimiento imperante en aquella época, donde la función asistencial a los pobres se debe atribuir al Estado. Esta tendencia revisionista tiene su génesis en el humanismo que propugna una caridad desde los poderes públicos⁸⁶. En su contra surge una corriente que se erige en ferviente defensora de la caridad tradicional cristiana y en contra de toda ordenación de la beneficencia fuera del control de la Iglesia.

Estas divergencias llegan hasta el Concilio de Trento donde se refuerzan los derechos de los obispos sobre las fundaciones de caridad y el derecho de visita a hospitales (entendiendo por tales todas las instituciones de caridad) y colegios fundados por laicos, por razón de las obras de beneficencia que en ellos se realizan, todo ello se reafirma en la validez de la Clementina *Quia contingit, de Religiosis domibus*⁸⁷.

Pero las disposiciones tridentinas no lograron detener la progresiva independencia de las fundaciones laicales respecto de la autoridad eclesiástica, favorecidas, además, por el apoyo de los monarcas. Algunos de ellos se opusieron a dichas disposiciones secularizando la caridad y absorbiendo con los bienes de los establecimientos eclesiásticos la vida misma de los hospitales libres⁸⁸.

Conforme se avanza en la Edad Moderna la tendencia de los fundadores a acogerse al derecho regio se acentúa, situándose fuera del Derecho canónico, evitando la jurisdicción eclesiástica para, principalmente, gozar de exenciones tributarias previstas por el poder real, además de eludir el control de la Iglesia y asegurar la independencia de la fundación respecto a los bienes eclesiásticos. También las ideas renacentistas que propugnaban la liberalidad en forma de mecenazgos culturales y artísticos, ajenos a las finalidades eclesiásticas, dieron fuerza y vitalidad a los establecimientos e instituciones laicas sometidas al protectorado real⁸⁹.

En consecuencia, muchas fundaciones de la Iglesia pasaron a ser administradas por laicos e incluso dejaron de ser fundaciones canónicas para adquirir el carácter de

⁸⁶ Erasmo de Rotterdam (1466-1536) se impuso la obligación de liberar a la Iglesia de la parálisis a que la condenaban la rigidez del pensamiento y las instituciones de la Edad Media, ya que él creía que el Renacimiento era una manera de pensar fundamentalmente nueva. La tradición y las ideas de la Edad Media no tenían ya lugar en el mundo, y él, "*cruzado de la rectitud*", debía ser el encargado de cambiar el estado de cosas. Otros humanistas como Tomás Moro (1478-1535) y Juan Luís Vives (1492-1540) siguieron esta tendencia de atribuir la función benéfica y asistencial a los necesitados exclusivamente al Estado y al poder municipal, negándola a la Iglesia.

⁸⁷ *Corpus Iuris Canonici...*, o.c., *Clementinas*, libro III, Tít. XI, Cap. II, fol. 234.

⁸⁸ A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico General y Español*, II, Granada 1913, título I, sección 2ª, capítulo I, p. 309.

⁸⁹ Esta propensión por un sistema asistencial y de caridad secularizado donde el clero ocupa un lugar secundario, mientras que el control queda en dominio público o laico aparece en la obra de Cristóbal Pérez de Herrera, *Discurso del amparo de los legítimos pobres y reclusión de los fingidos*, Madrid 1598, pp. 32 y ss., en la que se propugna que las instituciones de caridad fuesen administradas, no sólo por eclesiásticos, sino también por laicos. M. del M. Martín García, *Las fundaciones religiosas...*, o.c., p. 25, citando a R. de Lorenzo García, *El nuevo derecho de las fundaciones*, Madrid 1993, p. 43; y a J. Yuste Grijalba y J. del Campo Arbulo, *Apuntes históricos sobre fundaciones en España*, en *Situación*, Madrid 1989, p. 47.

laicales o civiles⁹⁰. Después de diez siglos de control y vigilancia de las fundaciones por la autoridad eclesiástica, las construcciones teóricas y prácticas a las que se había llegado de la mano del Derecho Canónico serán pasadas por el tamiz de la secularización.

Al eliminar el carácter religioso de esta función social de caridad y beneficencia, la personalidad de la fundación se va desconectando de su naturaleza y finalidad religiosa, para en lo sucesivo, bastará con la adscripción de un patrimonio y la voluntad de alcanzar un fin para aparecer la fundación como realidad independiente y sujeto de derechos.

De todas formas, la historiografía, sobre todo, la hispana sigue considerando a la Iglesia como el eje central de la asistencia a los pobres en la época moderna. No hay que olvidar, por ejemplo, que la atenuación de los efectos de las periódicas crisis de subsistencia en la España urbana del siglo XVII es obra, principalmente, de la Iglesia, y, en especial, en los núcleos urbanos con sede episcopal. Incluso se puede decir más: muchos historiadores llegan a identificar prácticamente beneficencia y asistencia social con Iglesia católica y caridad.

En la misma línea, W. J. Callahan, en su obra *Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874*, San Sebastián 1989, p. 54, atribuye a la caridad eclesiástica el mantenimiento de la paz social en la España del siglo XVIII, sosteniendo, además, que su hundimiento a fines de la centuria es uno de los elementos principales que explicarían el auge de la conflictividad social en las primeras décadas del siglo XIX.

Con el ascenso del absolutismo se critican las fundaciones, en especial las de la Iglesia, debido a la situación en que se hallaban los bienes fundacionales, vinculados y amortizados, lo que causaba un grave perjuicio económico y social y se preconizaba un cambio en el régimen de propiedad.

Citar, pues más adelante se desarrollará en profundidad, que durante los siglos XVII y XVIII se intensifica la lucha contra las llamadas “*manos muertas*”, lo que conlleva graves consecuencias para la vida de las fundaciones. Buen número de economistas y arbitristas expusieron hasta la saciedad los perjuicios que conllevaba el régimen de propiedad vinculada vigente.

A partir de entonces comenzará un ataque contra las fundaciones que desembocará en un proceso desamortizador en el que muchas instituciones pías desaparecerán⁹¹, pues un incorrecto y rígido entendimiento de la inalienabilidad primitiva de la propiedad eclesiástica influirá en el problema de las citadas “*manos muertas*”. Dicho ataque será la expresión de las corrientes imperantes en las doctrinas económicas y en la filosofía jurídica. En el orden político se propugnará la eliminación de todo ente u organismo intermedio entre el individuo y el Estado como premisa para poder lograr la espontánea expresión de la voluntad popular.

⁹⁰ J. Traserra Cunillera, *Las fundaciones pías autónomas...*, o.c., pp. 15-16. R. Beneyto Berenguer, *Fundaciones sociales de la Iglesia católica...*, o.c., pp. 42-45.

⁹¹ R. Beneyto Berenguer, *Fundaciones sociales de la Iglesia católica...*, o.c., pp. 46-47.

Con las corrientes de la Ilustración, apoyadas en causas económicas, en la legislación restrictiva y el intervencionismo regio, las fundaciones caen en el descrédito y hasta en la condena, surgiendo numerosas voces que propugnan su desaparición, originando un cambio radical en el régimen de propiedad y, por ende, en el futuro de las fundaciones, todo ello amparado en razones de orden moral y de justicia. A finales del siglo XVIII era ya del todo claro que la acentuada tendencia estática de la propiedad no podía contener por más tiempo, al menos de una forma adecuada, las nuevas realidades.

CAPÍTULO II

CONCEPTO DE FUNDACIÓN

Se hace previamente necesario advertir de la dificultad que entraña la delimitación de la noción de fundación al ser una institución o figura jurídica que ha ido evolucionando a través de diversas etapas históricas, propiciando, en sentido amplio, una amalgama de figuras que no han ayudado a determinar con precisión dicho concepto. A pesar de ello, la fundación, como figura jurídica, cuenta con una larga tradición en nuestro derecho como institución que ha servido de cauce a una innumerable lista de liberalidades a lo largo del tiempo.

1.- ETIMOLOGÍA.

Etimológicamente el vocablo “*fundación*” es de origen latino y deriva del latín *fundatio-onis*, que a su vez proviene del verbo latino *fundare* con origen en: “*fundos dare*”. Significa “*fundar*”, construir, en el sentido de poner las bases, los cimientos o los fundamentos, y que procede a su vez de *fundus*. Es el destino que da una persona a unos bienes para un fin concreto⁹².

El término “*fundación*” nace en la Edad Media debido a la creación de monasterios y establecimientos de caridad. La palabra “*fundare*” se recoge por primera vez en varios documentos medievales para indicar la constitución de un patrimonio distinto junto al acto material de construir un edificio⁹³.

2.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LA NOCIÓN DE FUNDACIÓN.

Partiendo de la interpretación que hacen los glosadores del concepto de *universitas* y la utilización por los canonistas medievales como Sinibaldo de Fieschi (papa Inocencio IV) de la idea de *persona ficta* y la elaboración de una teoría referente a la fundación, hay un largo recorrido hasta llegar a Savigny, el cual en su obra “*Sistema del derecho romano actual*” (Madrid 1879, tomo II, pp. 61-62), distinguió, por vez primera, entre corporaciones (*corporationem*) y asociaciones de base personal y fundaciones (*stiftungen*) de base patrimonial, por lo que ha de resaltarse que el gran recorrido histórico de las fundaciones ha ocasionado la proliferación de conceptos sobre las mismas, tanto en la doctrina como en la Jurisprudencia. Estas conceptualizaciones se realizan de un modo descriptivo y partiendo de la existencia y desarrollo de la fundación en sí, encontrándose entre las más clásicas las siguientes definiciones de fundación:

A) *Universitas rerum*, es decir, como institución originada por un negocio fundacional en el que es determinante la voluntad constitutiva del fundador. Así lo

⁹² R. Beneyto Berenguer, *Fundaciones sociales de la Iglesia católica...*, o.c., p. 73. F. Rico Pérez, *Las fundaciones en la Constitución española*, Madrid 1982, p. 53. También destaca también el origen latino del término y se puede concluir que su traducción en los idiomas derivados del latín es la que sigue: *fundación* (español), *fondation* (francés), *fondazione* (italiano), *fundação* (portugués). Incluso en inglés el término equivalente es de raíz latina: *foundation*.

⁹³ R. Feenstra, *L'histoire des fondations. À propos de quelques études récentes*, Revue d'Histoire du Droit (RHD) 24, La Haye 1956, p. 440.

mantiene Puchta⁹⁴, discípulo de Savigny, al distinguirlas de las *universitas personarum* que las configura como asociaciones de personas. Anteriormente, ya los canonistas habían perfilando la idea de personalidad aplicada a este conjunto de bienes destinados a un fin que es la *universitas rerum*.

B) Persona jurídica consistente en un patrimonio destinado establemente a un fin de interés general.

Pero estos conceptos de fundación adolecen de una visión canónica del término y sólo se centran en la definición civil, por lo que es necesario hacer una primera distinción para poder delimitar la fundación con rigor y precisión.

3.- CONCEPTO CANÓNICO.

El ejercicio de la caridad organizada ha sido siempre una tarea de la Iglesia. En este sentido, el origen del concepto de fundación es eminentemente benéfico y se encuentra en una voluntad piadosa en virtud de la cual una persona dispone libremente de sus bienes y los destina a obras de piedad o caridad⁹⁵. El fin de toda fundación canónica es la consecución de determinadas finalidades piadosas, es decir, de todas aquellas obras y fines propios de la misión de la Iglesia, como el apostolado y la caridad. En consecuencia, un patrimonio destinado a fines piadosos se denomina causa pía. No basta, por tanto, una finalidad basada exclusivamente en la filantropía o en razones humanitarias. Se requiere una explícita referencia religiosa, es decir, que tiene que ser congruente con los fines propios de la Iglesia. Por tanto, es el Derecho canónico el que construye la teoría jurídica de la fundación (*piae causae, corpus mysticum*) y los canonistas medievales teorizan sobre ella.

Según los juristas clásicos causa pía es toda obra realizada principalmente para gloria de Dios, por amor al prójimo y el bien del alma⁹⁶. Sobre esta definición se citan las más completas como la de Agustín Barbosa, *IurisEcclesiasticiUniversi*, Libro III, Cap. XXVII, 2, fol. 409:

“Item decitur legatum ad pias causas quidquid in ultima voluntate intuitu Dei relinquitur”.

Con gran brillantez y mejor definición se encuentra la de Francisco Mostazo, *De causis piis in genere, et in specie*, Lugduni 1733, libro I, 6, fol. 2:

“Causa pia est, quando aliquid conceditur intuitu Dei ad cultum divinum, vel alia opera misericordiae ob animae bonum”.

En esta anterior definición de causa pía resaltan tres motivaciones fundamentales que la conforman: el culto divino o la gloria de Dios, que es una obra de caridad o misericordia y que redundará en bien del alma.

⁹⁴ G. Puchta, *Cursus der Institutionem*, Leipzig 1854, volumen II, pp. 8 y ss.

⁹⁵ J. Traserra Cunillera, *Las fundaciones pías autónomas...*, o.c., p. 9.

⁹⁶ J. J. Rubio Rodríguez, *Concepto de causa pía en los juristas clásicos españoles*, o.c., p. 154.

También formulan una definición los canonistas españoles como Martín de Azpilcueta (Doctor Navarro, 1491-1586), Luis Molina (1536-1600) y Juan de Lugo, hispalensis, (1583-1660). El primero entiende por causa pía toda obra que se hace principalmente por causa del culto divino o por misericordia:

“Opera pia quae fiunt principaliter ob cultum divinum, vel misericordiam..., opera pietatis dicuntur omnia, quae propter cultum Dei potissimum” (Apologia libri de redditibus ecclesiasticis, Antuerpiae 1574, quaestio I, XXIX, fol. 31).

Para Molina, en su célebre tratado *De iustitia et iure*, Moguntiae 1602, tomo II, tractatus II, disputatio 134, fol. 501, es toda obra realizada principalmente para admirar a Dios y con un fin sobrenatural para merecer la gracia y la gloria:

“Denique quicquid praecipue fit Dei, finisque supernaturalis intuitu, ad gratiam, vel gloriam coram Deo promerendam, dicitur res seu causa pia.”

Juan de Lugo exige como algo esencial para el concepto de causa pía que la obra se realice por Dios como fin sobrenatural:

“Causae piae nomine... vel quicquid praecipue fit Dei intuitu et finis supernaturalis” (*De iustitia et iure*, Lugduni 1652, volumen II, disputatio XXII, sectio IX, nº 265, fol. 58)

Es evidente que el concepto de fundación tiene su raíz en el Derecho canónico, fuente histórica principal en la materia que parte del principio de ser la voluntad del fundador la ley suprema de dicho instituto, que debe ser respetada. Además, arbitra medidas para garantizar su cumplimiento, con una amplia intervención de la autoridad eclesiástica y considera la fundación como sujeto autónomo, capaz y responsable⁹⁷.

4.- CONCEPTO CIVIL.

El concepto de fundación, admitido de forma generaliza entre los juristas, es el de una persona jurídica⁹⁸ que nace cuando se destinan bienes (patrimonio) al cumplimiento de una finalidad concreta, por actos *inter vivos* o *mortis causa*, de un modo permanente (carácter de perpetuidad) y estable y a la que la ley reconoce como sujeto de derecho.

En el Antiguo Régimen las fundaciones se caracterizan por ser masas de bienes, configuradas como patrimonios separados, con afectación permanente a una finalidad concreta, de naturaleza familiar, religiosa o benéfica. Por tanto, en nuestro Derecho tradicional la fundación nace por y para la familia, para potenciarla (mayorazgos) o para beneficio del alma del fundador y su familia (fundación piadosa u obra pía).

⁹⁷ J. L. Lacruz Berdejo, *Elementos de Derecho Civil*, Volumen II, Barcelona 1983, p. 225.

⁹⁸ Junto a la necesidad que tiene la norma jurídica de salvaguardar los fundamentales intereses del hombre, confiriéndole la titularidad de ciertos derechos, se presenta también la imperiosa tarea de dar “forma jurídica” a organizaciones humanas que imprimen al patrimonio un sentido social, a la vez que aseguran su estabilidad y su continuidad. Tales son las personas jurídicas: agrupaciones de hombres – asociaciones– y ordenaciones de bienes –fundaciones– a las que la ley reconoce, en la esfera patrimonial, la cualidad de sujetos de derecho. J. Iglesias Santos, *Derecho romano...*, o.c., p. 165.

En la actualidad la fundación se define como un patrimonio organizado y afecto a una finalidad de interés general. El análisis de esta definición pone de relieve que la fundación, tal y como se entiende en el momento presente, no difiere en el aspecto esencial de la fundación como se ha configurado históricamente⁹⁹.

Es decir, la fundación está constituida por una masa de bienes vinculados por el fundador o fundadores a un fin de interés general. La fundación nace, por tanto, de un acto de disposición de bienes que realiza el fundador, quien los vincula a un fin por él determinado y establece las reglas por las que han de administrarse al objeto de que sirvan para cumplir los fines deseados de manera permanente o, al menos, duradera.

Es pues la fundación una aportación de bienes con un cierto carácter de estabilidad y permanencia para que pueda alcanzar la finalidad que persigue. Semejante aportación es relativamente parecida a las vinculaciones nobiliarias y mayorazgos, lo que nos lleva a calificar la fundación como vinculación de bienes al servicio de un interés¹⁰⁰.

Del precedente concepto resultan tres notas características de la fundación a mediados del siglo XIX, que son más bien los pilares donde descansa:

- Masa de bienes o dotación patrimonial.
- Fin socialmente útil.
- Organización.

De esta manera, al contrario que la fundación canónica, el ordenamiento civil decimonónico (y la legislación desvinculadora) exige que las fundaciones tengan una finalidad de interés general y no reconocen las de interés particular o familiar, aunque tengan características altruistas. Esta es la lucha entre dos postulados de gran trascendencia durante todo el siglo XIX: la oposición entre interés público e interés privado, entre interés general e interés particular. Del estricto interés personal o familiar de un conjunto de bienes a un fin común, social.

En realidad, la doctrina y la legislación parten de un concepto unánime de fundación como un patrimonio afecto a una finalidad, siendo estos tres elementos, patrimonio, afección y finalidad características esenciales de las fundaciones en todas las épocas. Fundar es, en realidad, afectar un patrimonio a una finalidad. Claro está que este concepto puede no coincidir con el actual de fundación, que incluye las dos notas de más importancia citadas con anterioridad: la finalidad de interés público o general y la organización. Sin embargo, hay quien vincula estas notas a las tres características básicas de la fundación. La nota organización no es más que una consecuencia de estas tres notas básicas. La afección de un patrimonio a una finalidad necesita obviamente una organización¹⁰¹. La organización da unidad a la fundación, pero no parece ser una

⁹⁹ A. Bosch Carrera, *Antecedentes históricos de las fundaciones...*, o.c., p. 1.

¹⁰⁰ C. Maluquer de Motes y Bernet, *La fundación como persona jurídica en la codificación civil: de vinculación a persona (estudio de un proceso)*, Barcelona 1988, p. 5.

¹⁰¹ A. Bosch Carrera, *Antecedentes históricos de las fundaciones...*, o.c., p. 1. J. García-Andrade Gómez, *Algunas acotaciones al concepto formal de fundación*, en *Revista de Administración Pública*, nº 155, mayo-agosto 2001, pp. 107-145.

nota esencial pero sí una consecuencia fundamental. Respecto al fin de interés general no es propio del concepto de fundación, pues históricamente en nuestro Derecho han existido fundaciones afectas a una finalidad de interés particular o privado.

Pero la piedra angular, el elemento impulsor, la razón de ser y la esencia de las fundaciones y, por ende, de su concepto delimitador, es la voluntad de quien, con ánimo de liberalidad, deja todos o parte de sus bienes para intentar alcanzar con ellos un fin altruista que beneficie a una colectividad indeterminada de personas¹⁰². Esta manifestación de voluntad (cláusula fundacional) es el origen de la creación de la fundación como persona jurídica.

De todos modos hay que reconocer que los principios básicos de la ordenación jurídica de las fundaciones son obra del Derecho Canónico, que son los siguientes¹⁰³:

- a) La voluntad del fundador debe ser respetada al ser la ley suprema de la fundación o *suprema lex foundationis* (se observa ya en las Decretales de Gregorio IX, en el libro III, título XXVI, “*De testamentis et ultimis voluntatibus*”).
- b) Diferenciación entre los sujetos jurídicos corporativos y la fundación como masa patrimonial.
- c) La fijación de medidas para garantizar la voluntad del fundador.
- d) Intervención de la autoridad eclesiástica en la creación y supresión de fundaciones.
- e) La elaboración de la idea de fundación autónoma, es decir, como persona jurídica independiente de la persona del fundador (Decretales, libro III, título XXXVI, “*De religiosis domibus ut episcopo sint subiectae*”).

5.- CLASES DE FUNDACIONES.

En nuestro derecho histórico existen multitud de figuras que pueden englobarse dentro del concepto de patrimonio o conjunto de bienes afectos a una determinada finalidad. Es lo que se llama una fundación. Dentro de este amplio concepto es necesario hacer una primera distinción entre fundaciones civiles (laicas) y fundaciones religiosas.

Una primera clasificación de fundaciones civiles y eclesiásticas en el Antiguo Régimen son las vinculaciones de bienes con prohibición de disponer siguiendo una primera tipología como patrimonio vinculado.

5.1.- Vinculaciones de bienes.

-Fundaciones civiles.

A) Vinculaciones de bienes de interés privado (Fundaciones familiares).

¹⁰² J. L. Piñar Mañas y A. Real Pérez, *Derecho de fundaciones y voluntad del fundador...*, o.c., p. 29.

¹⁰³ U. Valero Agúndez, *La Fundación como forma de empresa*, Valladolid 1969, pp. 78-79.

- Mayorazgos. Supone una vinculación o afectación a una finalidad que impide que unos bienes salgan de una familia y sean indisponibles.
- Fideicomisos familiares. Afectación de un patrimonio a una finalidad generalmente de tipo familiar y particular.

-Fundaciones religiosas.

B) Vinculaciones de bienes de interés común (para fines benéficos o religiosos).

- Fundaciones benéficas.

-Obras Pías (Fundaciones Pías o piadosas)¹⁰⁴. Fines benéficos. Tienen un matiz caritativo religioso-cristiano, en cuanto implican actividades destinadas al socorro de necesidades ajenas, es decir, son actividades benéficas, de “*pietas*”. Son una fundación en interés ajeno, muchas veces público o incluso general. Se caracterizan por ser fundaciones autónomas o patrimonios especiales con gestión independiente. Son los hospitales, orfanatos, asilos, etc.

- Fundaciones de culto.

-Capellanías. Fines religiosos. Tienen un sentido espiritual y suponen la afectación de un bien o patrimonio. Su finalidad es velar por el aspecto espiritual de la persona del fundador mediante realización de un determinado número de misas por el alma del fundador.

- Patronatos. Vinculaciones perpetuas. Son derechos espirituales, personales y honoríficos otorgados a determinadas personas por haber realizado beneficios u obras caritativas a la Iglesia. Carecen de contenido económico.

- Otros tipos de vinculaciones de carácter benéfico o religioso.

¹⁰⁴ A igual que las otras vinculaciones religiosas su origen y regulación legal es distinta de las vinculaciones privadas. En el caso de las obras pías sus beneficios no se destinan a determinadas personas y no crean ni contribuyen a situaciones de privilegio y desigualdad, sino que se destinan a ayudar física y espiritualmente a los desfavorecidos. Los bienes de la obra pía no están vinculados al modo de un mayorazgo, pues a diferencia de éste último están destinados a servir a un fin de duración indefinida y sin término previsible, por lo que no quedan afectos por la prohibición de disponer sino que sólo se limita la facilidad de disponer. F de Castro y Bravo. *Sobre la pretendida validez de las fundaciones familiares*, en Anuario de Derecho Civil (ADC), Vol. 6, nº 3, Madrid 1953, p. 638.

Otra clasificación: por razón del objeto, según los canonistas, una fundación puede ser eclesiástica (canónica), secular o mixta. Es decir, las fundaciones pueden crearse al amparo de la Iglesia católica y en el ámbito de la sociedad civil.

5.2.- Fundaciones canónicas y laicales.

A) Fundaciones canónicas o eclesiásticas (*domus religiosa*).

Cuando las fundaciones se crean al amparo de la Iglesia católica y están sujetas al derecho canónico. Son las obras pías de carácter eclesiástico.

B) Fundaciones civiles (laicales).

Las creadas al amparo de la sociedad civil. Están sujetas a la ley civil. Son las causas u obras pías de carácter laical.

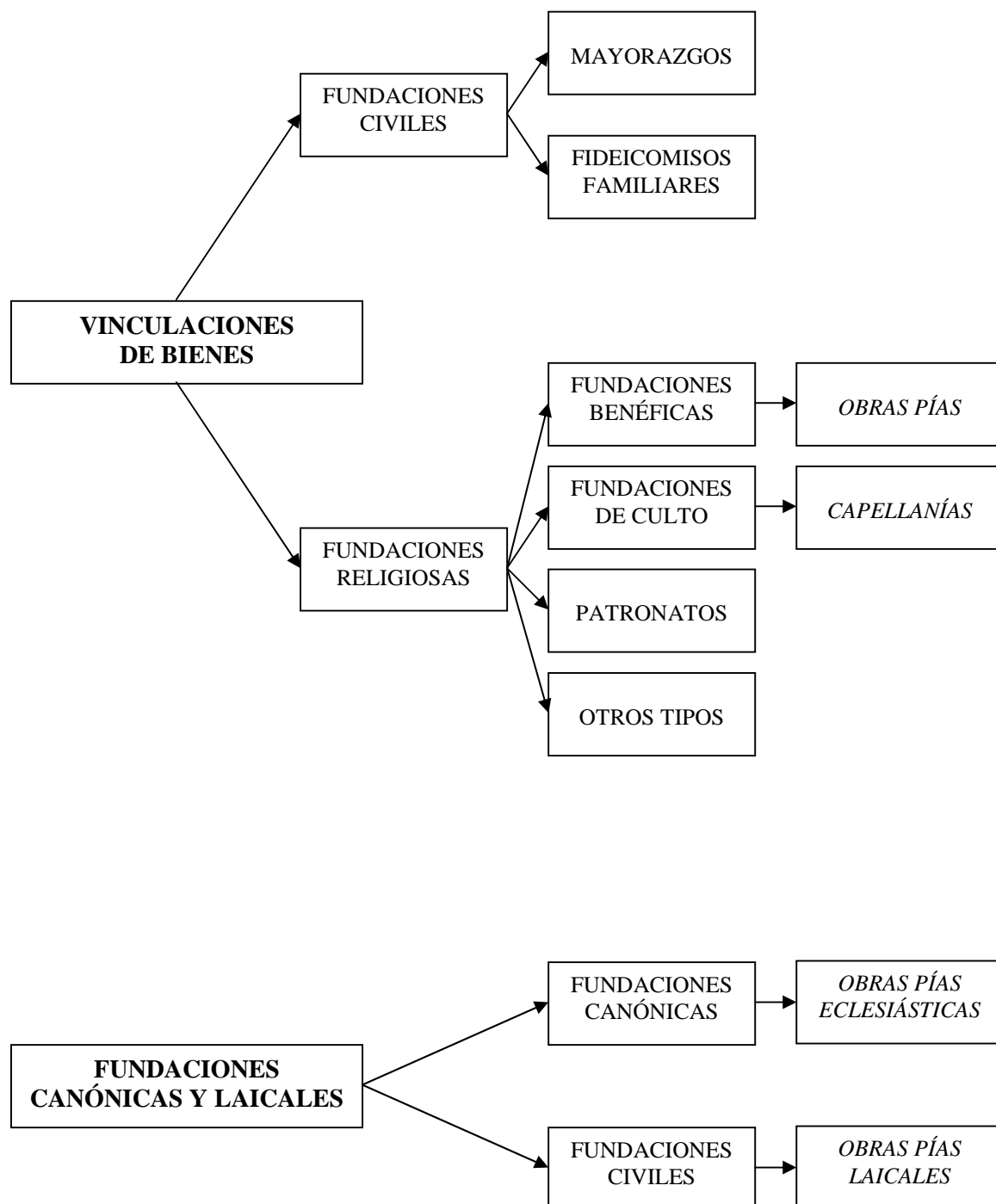
En ambos casos hay siempre una voluntad pía y una finalidad religiosa o caritativa.

La fundación eclesiástica es, de hecho, un contrato "*do ut facias*", donde una persona se compromete a algo pactado previamente con otra. Más específicamente entendemos que se trata de "*fundación*" cuando un patrimonio, que puede estar constituido tanto por bienes muebles como inmuebles, es cedido a una autoridad eclesiástica determinada para su sustentación, posible gracias a los intereses recibidos, y el cumplimiento de las cargas impuestas como contrapartida, de las que él es el responsable.

Las fundaciones pías, consideradas como una variante de las fundaciones, responden a una intención similar, aunque suelen estar enfocadas, más específicamente, al cumplimiento de tareas más bien caritativas.

Cuando estos bienes o patrimonio quedan vinculados de forma estable a fines piadosos, se originan obras o institutos con propia identidad o permanencia: hospitales, orfanatos, seminarios, etc.

Cuadro 1. Clases de fundaciones.



CAPÍTULO III

BENEFICIOS ECLESIAÍSTICOS

El concepto de beneficio tiene en la historia de la Iglesia y de su Derecho una importancia de primer orden. Su estudio nos llevará a comprender mejor el origen y evolución de las capellanías.

1.- ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA BENEFICIO.

La voz beneficio procede de las palabras latinas *bene* y *facere*, es decir, “hacer bien”.

La ley 1ª, título XVI de la Partida I¹⁰⁵ dice “*beneficio tanto quiere dezir como bien fecho*”, que se refiere a obrar bien respecto de un tercero. Esta genérica acepción hace referencia a la utilidad, provecho, merced, favor, gracia y remuneración realizada por alguien hacia otra persona.

2.- ORIGEN DE LOS BENEFICIOS ECLESIAÍSTICOS.

Los beneficios, como oficios o cargos propiamente dichos, *propter officium*, son tan antiguos como la Iglesia¹⁰⁶, puesto que desde los primeros tiempos, desde las ordenaciones apostólicas, los clérigos adscritos al servicio de aquella, tuvieron que cumplir con determinadas funciones, percibiendo lo preciso para su sostenimiento. Lo principal era el oficio y lo accesorio y secundario el alimento que la Iglesia les proporcionaba. Pero dicha denominación no se usó en los primeros siglos de la Iglesia en el sentido que hoy tiene. Como dice Sarpi “*es tan antiguo el origen de los beneficios, que no hay memoria de su institución*”¹⁰⁷.

La Iglesia poseyó bienes por derecho propio desde su mismo origen. Jesucristo, su fundador, tuvo su erario o caja común, que los Evangelios llaman *loculos*, para atender las necesidades de los Apóstoles, los discípulos y los pobres. Todos los cristianos vendían sus bienes y las ganancias iban a ese depósito común para proveer las necesidades de todos. Lo mismo ocurría con las oblaciones de los fieles.

Durante los primeros tiempos, debido a las persecuciones romanas, se poseyó, principalmente, bienes muebles, pues podían ocultarse, transportarse y distribuirse con facilidad. Con el Edicto de Milán y la conversión de Constantino se devolvieron las propiedades a la Iglesia y se reconoció públicamente su derecho de adquirir bienes. Se

¹⁰⁵ *Las Siete Partidas del sabio Rey D. Alfonso el IX, con las variaciones de más interés y con la glosa del licenciado Gregorio López*, edición en castellano por I. Sanponts y Barba, R. Martí de Eixalá y J. Ferrer y Subirana, Madrid 1843.

¹⁰⁶ Según Manjón, los beneficios datan de la fecha en que fueron organizados los cargos eclesiásticos, esto es, desde los Apóstoles, que al recorrer las ciudades anunciando el Evangelio, nombraban en ellas obispos y otros ministros para asegurar y continuar su propagación. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 46. J. M. Campos y Pulido *Las capellanías colativas en España*, Madrid 1910, p. 13.

¹⁰⁷ P. Sarpi, *Tratado de los beneficios eclesiásticos*, Madrid 1823, p. 105.

hicieron grandes donaciones por reyes y emperadores e incluso obispos, pues era considerado como un deber contribuir al culto y a los pobres. Es claro que en dichos comienzos del cristianismo hubo de existir el llamado Acervo Común, formado con todos los bienes poseídos y adquiridos por la Iglesia, que era administrado por el obispo y después por los ecónomos. De él percibían sus ministros lo que necesitaban para su supervivencia¹⁰⁸. El patrimonio de la Iglesia se administraba de forma centralizada y los predicadores recibían de ella su sustento para poder trabajar difundiendo la doctrina cristiana, pues toda la propiedad de la Iglesia era colectiva y no existía la propiedad clerical particular. Los clérigos eran sólo administradores y dispensadores de los bienes depositados bajo su gobierno.

En el siglo IV, con la aparición del patrimonio de la Iglesia, surgen los primeros esbozos de lo que posteriormente serían los beneficios. El patrimonio unitario de la Iglesia se fue dividiendo y fraccionando en patrimonios independientes a consecuencia del auge y expansión del cristianismo. Surgen las iglesias rurales, el monacato, etc.

Cuando se extinguió la vida en común del clero, hacia el siglo VI, aumentados ya considerablemente los bienes de la Iglesia, cada patrimonio independiente se fue repartiendo entre los distintos fines que antes se atendían en común (obras de caridad, culto y sustento del clero) y se dividieron en cuatro partes (tres en la España goda: obispo, clero y fábrica de la Iglesia), distribuyéndose entre el Obispo (*mensa episcopalia*), el clero (*mensa capitularis*), los pobres y el culto (*fabrica ecclesia*)¹⁰⁹. Esta cuatripartición pervivirá hasta los siglos VIII-IX, reflejada en los concilios de París (614) y de Worms (890), lo que demuestra que dicha división, como fórmula jurídica, se adaptó perfectamente a la función que le era propia, es decir, mantener los bienes eclesiásticos dentro de los límites de los fines del patrimonio.

Cuando ya no fue suficiente esta división, se acudió a otros procedimientos, con lo que se hizo, de forma gradual, la división de los bienes eclesiásticos, asignando a cada título o ministerio determinados predios y rentas fijas que ya no volvían al erario en común, sino que pasaban al sucesor en el oficio. Esta porción de bienes que se concedió primero a los beneméritos y, por último, se asignó a cada ministerio se empezó a conocer como beneficio¹¹⁰, para significar los derechos y los cargos de los clérigos. Los clérigos, hasta entonces administradores, se sintieron propietarios de las rentas asignadas a su sustento, incluido el excedente sobre la mera subsistencia. La idea de la Iglesia primitiva de repartir según las necesidades quedó olvidada.

Esta sustancial transformación de la estructura patrimonial de una Iglesia ya descentralizada dará lugar al sistema benefical a partir del siglo VII, en el que cada clérigo administraba los bienes que le servían para subsistir, llegándose incluso a exigirse tener una asignación de los mismos bienes para poder ordenarse. Este nombre con su aplicación se extendió y quedó confirmado con motivo de las iglesias que los

¹⁰⁸ J. Donoso, *Instituciones de Derecho Canónico*, París 1852, Tomo III, p. 132 y ss.

¹⁰⁹ Epístola del año 494 del Papa Gelasio (*Gelasius Papa, I, Constituta*, in Migne, PL, LIX, pp. 137-138). R. Badenes y Gasset, *Las fundaciones de Derecho privado (doctrina y textos legales)*, Barcelona 1977, p. 29.

¹¹⁰ La voz “beneficio” ya se encuentra en el *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano, Lipsiae 1839, Ed. A. Richter, Parte II, causa I, Quaestio III, cánones 1, 2 y 3, fols. 351-352, y, aunque se atribuye a San Gregorio Magno, es indudable que su uso se hizo cada vez más frecuente en la Iglesia entre en tiempo que medió desde su pontificado, del 590 al 604, hasta la celebración del Concilio de Frankfurt en 794.

particulares erigían en sus fundos, dotándolas con rentas destinadas al uso de los clérigos que las servían. En consecuencia, había desaparecido la idea primigenia de que el sacerdote debía ser sustentado por la propia Iglesia¹¹¹.

A partir de entonces aparece lenta y gradual la noción de beneficio bajo la influencia de varios factores históricos, de los cuales destacan dos: el primero es la quiebra de la unidad patrimonial que se produce, ya por la necesaria concesión de patrimonios a las iglesias alejadas de la ciudad episcopal, ya porque el patrimonio se divide en partes según las finalidades a las que sirve; la parte destinada a los clérigos se fracciona así en pequeños patrimonios que se entregan (en usufructo al clérigo que desempeña un oficio). El otro factor es el régimen feudal. Son bastantes las iglesias que en la Edad Media funcionan bajo el régimen de señorío eclesiástico o laico (Iglesia propia); en ellas, por contrato feudal o por práctica aceptada, el clérigo recibe bienes en usufructo, de los cuales se sustenta, como estipendio por la carga del oficio que ejerce.

Según Devoti, la palabra beneficio significaba entre los latinos cierto predio, perteneciente al fisco, dado por los emperadores romanos a los capitanes y soldados beneméritos, para atender con ellos a sus gastos personales, continuando el servicio a sus expensas. Esa costumbre de distribuir a los clérigos beneméritos ciertos bienes para que se alimentasen con sus productos y los disfrutasen durante su vida fue el origen de la institución benefical.¹¹²

Donoso, siguiendo a Devoti y a Cavallario, dice que el nombre beneficio significa en su origen el predio fiscal que los emperadores romanos solían dar a los soldados beneméritos que se habían distinguido en la defensa del Estado, por su adhesión y servicios, para proporcionarles en su retiro y ancianidad una subsistencia digna. Al principio eran vitalicios, pero después se hicieron hereditarios, y se adjudicaron a ciertas y determinadas familias.

Todo ello nos lleva a considerar que, aunque el origen de los beneficios suele situarse en los comienzos del feudalismo, concretamente en la época carolingia, hay que tener en cuenta una posible influencia del Derecho romano en materia benefical.

Así pues no debemos desdeñar unos más que probables antecedentes romanos cuya valoración es la que sigue:

2.1.- Precedentes romanos.

Los historiadores medievales coinciden con los romanistas al señalar que el término *beneficium* procede del lenguaje jurídico imperial y cuya significación originaria es la de favor o beneficio.

¹¹¹ J. Pro Ruiz, *Las capellanías: familia, iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen*, en *Hispania Sacra* 84, Madrid 1989, pp. 592-593. J. Escriche Martín, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, París 1851, p. 359.

¹¹² "*Praedia haec etiam ecclesia tribuere coepit clericis de ea bene meritis, ut iis fruerentur, dum ipsis vita supeditante, eaque praedia beneficia, beneficiati autem dicti sunt clerici, qui eadem obtinuerant.*" J. Devoti, *Institutionum Canoniarum*, Gandae-Parisiis 1852, Libro IV, Tomo I, fol. 671.

Los términos jurídicos romanos *beneficium*, *stipendium* y *precarius* nos remiten a reminiscencias romanas en materia benefical, aunque hay que advertir que hay una carencia de significado unívoco del término *beneficium*, pues se utiliza para indicar actos de la autoridad pública (el emperador) a favor de personas o de la provincia, usándose para simples actos administrativos o para actos de naturaleza normativa¹¹³.

Con Justiniano se utiliza el nombre para denominar las ventajas que disfrutaban los que se encuentran en una situación jurídica determinada obtenida mediante una resolución expresa. Así, encontramos el *beneficium inventarii* como la facultad que posee todo heredero, previa petición, de responder de las deudas hereditarias dentro de los límites de la herencia; el *beneficium separationis*, que es el derecho que tienen los acreedores del difunto de pedir que se les pague con caudal hereditario antes de que se integre en el patrimonio del heredero

Otra figura jurídica es el *precarius*, en el que existe un vínculo obligatorio entre quien detenta la cosa y su dueño. Aquí, el precarista, que ha obtenido la cosa del poseedor, con facultad de gozarla, tiene la obligación de restituirla cuando le sea requerida. Esta posesión en precario era la forma que revestían las concesiones de *ager publicus* hechas por los patricios a sus clientes.

Por último, la tercera figura jurídica romana es el *stipendium*, vocablo que designaba de la contribución que se imponía al enemigo vencido y que servía para cubrir los gastos de la guerra. Durante la paz, el enemigo tenía que pagar el salario (*stipendium*) de los soldados romanos. Con el tiempo indicó las tasas de la tierra pagadas por los provincianos.

Pero es en relación a los veteranos de las legiones romanas cuando se pone de manifiesto las tres figuras jurídicas señaladas y su entrecruzamiento.

Así pues consta que a dichos soldados romanos veteranos se les concedían determinados beneficios económicos, especialmente exenciones tributarias. Dichas concesiones comprendían también tierras a modo de estipendio o pago por sus servicios, y que eran dadas en precario, pues pertenecían al emperador¹¹⁴.

Siguiendo el ejemplo de los romanos, la Iglesia comenzó a distribuir predios en estipendio, a través de un cauce jurídico cuyos antecedentes romanos son muy notorios,

¹¹³ V. de Reina, *El sistema benefical*, Pamplona 1965, p.103.

¹¹⁴ Dichas concesiones de tierras a los soldados se encuentran en el Código Teodosiano, libro VII, título 15 “*De terris limitaneis*” donde se conceden a los veteranos tierras limítrofes con fines claramente estratégicos. También hay un edicto de los emperadores Honorio y Teodosio en el que se prohíbe que cualquier persona que no sea un *milites* entre en posesión de las tierras. Asimismo, en el título 20 “*De veteranis*” se hace referencia a los distintos privilegios que se concedían a los soldados veteranos: en él se contiene un edicto de Constantino donde se consigna que los veteranos recibirán tierras vacantes, y que las podrán poseer a perpetuidad exentas de tasas; también dispone el título referenciado de una serie de beneficios imperiales aplicables a dichos soldados. Por último, aparece una decisión de Valentiniano y Valente en la que se declara que los veteranos que entren en posesión de las tierras lo harán sin contraprestación alguna a sus antiguos propietarios ni pagarán ninguna cantidad en concepto de arrendamiento. *Codex Theodosianus*, ed: Weidmanni, Lipsiae 1737 .V. de Reina, *El sistema benefical*, o.c., pp.109-110.

a título precario, por razón de caridad o recompensa¹¹⁵, de poca extensión a los clérigos beneméritos para que se alimentasen con sus producciones y sirvieran de sustento para su manutención, llamando beneficios a dichos predios y a los clérigos que los obtenían, beneficiados. Al principio fueron concesiones escasas y extraordinarias, que se otorgaban por breve tiempo, transcurrido el cual, o fallecido el usufructuario, volvían los predios a la Iglesia¹¹⁶. Ya el papa San Símaco (440-514) había pedido a los señores en Francia que se cediese por cierto tiempo el goce de bienes raíces de la Iglesia a los eclesiásticos o religiosos.

Según Berardi, en *Comentaria in ius ecclesiasticum universum* (Taurini 1766, tomo II, capítulo 1, disertación 1ª, fol. 4), ya en el siglo VIII según consta de los Concilios de Francfort de 794, y de Maçon de 813 existieron en la forma actual:

“Non tamen dissiteor, saeculo Ecclesiae octavo, iam in usu fuiste beneficii nomen, plures enim iamdiu adnotaverunt, illud legi in Concilio Francofordiensi 794, item in Concilio Moguntino anni 813”.

Esta opinión también es seguida por Francisco Gómez de Salazar y Andrés Manjón¹¹⁷, pero no será hasta el siglo XII cuando adquieran su verdadera naturaleza. Comenta Barbosa que la palabra beneficio ya se emplea en un canon, el 42, del Concilio de Maguncia del año 813¹¹⁸:

¹¹⁵ “Et licet superfluum sit de re nota et antiquis canonibus prohibita iterato aliquid definire, tamen quo facilius cupiditas aut improbitas reprimatur, id statuimus quod omnes iubent, ut civitatenses sive diocesani presbyteri vel clerici, salvo iure ecclesiae, rem ecclesiae sicut permiserint episcopi teneant, vendere aut donare penitus non praesumant: quod si fecerint, et facta venditio non valebit, et de facultatibus, si quas habent proprias, indemnem ecclesiam reddant et communione priventur”. “Si episcopus humanitatis intuitu mancipiola vineolas vel terras clericis aut monachis vel quibuslibet praestiterit excolendas vel pro tempore tenendas, etiam si longa transisse annorum apatia comprobentur, nullum ecclesiae praeiudicium paliatur, nec seculari lege praescriptio quae ecclesiae aliquid impediatur opponatur”. Concilios de Ágata (506) y de Orleáns I (511), cánones 22 y 19, respectivamente. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones de la Iglesia española*, Madrid 1849, tomo I, Cap. 30 y 31, pp. 407 y 435. “Possessiones ecclesiae derelictas nulli sit alienandi licentia”. *Corpus Iuris Canonici*, Parte II, Decreto de Graciano..., o.c., c. LXI, causa XVI, quaest. I, fol. 671.

¹¹⁶ Concilio de Toledo II: “Pero después de su fallecimiento restitúyase el derecho a la santa Iglesia, según las constituciones de los primitivos cánones, y no lo deje al testamentario ni a ninguno de los herederos por derecho de sucesión, a no ser a aquel a quien lo concediere el obispo por los servicios prestados a la Iglesia”. “Admodum raras fuiste has concesiones; neque lege ordinaria, sed tantum ex singulari aliqua necessitate, aut ob singulari personae alicuius merita factas. Ut res Ecclesiae iure beneficiario clericis concessae, tantum ad eorum vitam censerentur datae; ipsasque possiderent non iure tituli, sed tantum iure personali; ut ita post mortem totaliter ad Episcopi dispositionem reverterentur”. Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., Pars II, Titulus XVIII, Caput I, IX, fol. 4. “Praedia haec etiam ecclesia tribuere coepit clericis de ea bene meritis, ut iis fruerentur, dum ipsis vita supeditaret, eaque praedia beneficia, beneficiati autem dicti sunt clerici, qui eadem obtinuerant. Rarae initio erant huiusmodi concessionem atque ut plurimum, breve temporis intervallum comprehendebant, que finito, vel mortuo clerico, cui data fuerant, praedia ad ecclesiam revertebantur”. J. Devoti, *Institutionum Canoniarum...*, o.c., Tomus IV, Liber II, Titulus XIV, § 1, fol. 671. D. Cavallario, *Institutiones del Derecho Canónico*, Madrid 1850, Tomo II, pp. 94-95. J. Donoso, *Institutiones de Derecho Canónico...*, o.c., Tomo III, p. 157.

¹¹⁷ F. Gómez-Salazar, *Institutiones de Derecho Canónico*, León 1891, tomo III, p. 416. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., Libro I, p. 45.

¹¹⁸ A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., libro III, capítulo IV, 5, fol. 124.

“Primus autem locus et nullus alius antiquior reperitur, in quo ponatur vox haec, beneficium ecclesiasticum, in hac, quam utimur significatione, est Concil. Moguntiaeum, quod celebratum est anno post Christum Nahum 813”.

De lo expuesto, se deduce la originaria conexión entre el régimen feudal y el beneficio eclesiástico. Así, a los que recibían tierras o derechos en feudo se les denominó, respecto a la persona del concedente, “*beneficiario*”, en el sentido de donatario o cesionario.

Como el origen de los beneficios eclesiásticos va unido al feudalismo, hay que introducir la modalidad de beneficio secular frente al eclesiástico.

2.2.- Origen del beneficio secular.

Desde antes del comienzo de la dinastía carolingia, ya en época visigoda, el rey vinculaba a través del vasallaje a personas a las que confiaba altos cargos y el mando de territorios, gratificando los favores o servicios que le hacían con cesiones temporales de tierras.

En este marco de relaciones feudo-vasalláticas, donde la obligación primordial del señor es hacer bien a los vasallos¹¹⁹, se ha constatado como en Europa los reyes, entregaban a sus vasallos tierras en plena propiedad como contraprestación de servicios prestados (*ob devotionem servitii sui*). Junto con esas donaciones transmisoras de la propiedad, fue más frecuente la concesión de tierras en “*favor o beneficio*”, con derecho al disfrute del predio a cambio de determinados servicios. La entrega era en tenencia temporal o vitalicia. De esta forma se denominó beneficio a dicha donación de territorios o predios que los reyes hacían a los nobles y éstos a los plebeyos, para premiar acciones de valor en las guerras o recompensar servicios especiales realizados por los segundos, dando lugar a la propiedad llamada “*beneficiaria*”¹²⁰, que fue producto también de la necesidad que sintieron los pequeños propietarios alodiales (que trabajaban sus tierras dentro de la demarcación de un señorío jurisdiccional), durante la Edad Media, de ceder el dominio directo de sus terrenos a favor de otros más poderosos que les protegiesen y defendiesen en su dominio útil, a cambio de ese cesión de la nuda propiedad, del vasallaje, y otras prestaciones, principalmente de carácter militar. Igualmente se llamó beneficio al mismo predio o territorio donado en la forma indicada. Todas estas concesiones beneficiarias mediante el disfrute de tierras, estaban siempre sometidas a la revocabilidad, pues revertían al monarca una vez cumplido el período correspondiente. En este sentido el beneficio fue un modo de posesión territorial.

A partir del siglo XII dichas concesiones se las conoció como “*prestimonio*” y también como “*honor*”. Las mismas eran reflejo de las cesiones *causa stipendii* y del

¹¹⁹ Las Partidas contemplan tanto el compromiso ético del señor con los vasallos, como otras obligaciones concretas. Señalan así que, para “*fazerles bien*”, aquél les debe amar, honrar, guardar y evitarles cualquier daño y deshonor (*Las Siete Partidas*, Partida IV, Título XXV, Ley 6ª), pero indican también que es propio de los vasallos el recibir “*cavallería o tierra o dineros*” (Partida IV, Título XXV, Ley 1ª).

¹²⁰ F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho Civil*, tomo III, p. 46. L. García de Valdeavellano, *El feudalismo hispánico y otros estudios de historia medieval*, Barcelona 1981, p. 106.

precarium romano clásico caracterizadas por su revocabilidad y no eran objeto de transmisión hereditaria¹²¹.

Con el tiempo el derecho del señor a disponer de la tierra concedida en beneficio fue disminuyendo y a partir del siglo IX los beneficios se hicieron hereditarios por el deseo del vasallo de conservarlo para sí y para sus hijos.

Por influencia francesa, los beneficios propiamente dichos o prestimonios fueron calificados a veces de feudos. Pero dicha denominación debe reservarse para los que se convirtieron en hereditarios, pues el feudo se componía de dos instituciones distintas pero complementarias: vasallaje y beneficio.

También el obispo cedía en estipendio sus dominios, beneficiando con ellas a las tierras, que de este modo eran cultivadas, y a los labradores pobres.

Pero hay una clara diferencia, a pesar de su mismo origen y vinculación entre el beneficio eclesiástico y el secular. En el primero, las iglesias tuvieron otras fuentes patrimoniales que constituían un todo sobre el que descansaban los derechos de los obispos, mientras que en el beneficio secular se basaba en las cesiones estipendiarias.

De esta forma, el beneficio eclesiástico desborda su originario sentido técnico, al incluir no sólo las tierras cedidas en precario sino también aquellas otras que fueron adquiriendo las iglesias, producto de las donaciones de los fieles, como diezmos, oblaciones y primicias.

Por consiguiente, en sus orígenes, la institución benefical no agotaba todo el contenido de la sustentación del clero, por lo que beneficio y sustentación no eran términos equivalentes, aunque sí subordinados, en el sentido de que el primero era sólo un cauce del segundo. El concepto de beneficio no era pues sinónimo de manutención del clero sino que estaba unido al cumplimiento de los verdaderos fines de la propiedad eclesiástica. Resumiendo, la finalidad de las cesiones estipendiarias del principio no fue alimentar a los clérigos sin más, sino proporcionar medios estables para que se pudiese llevar a cabo el ministerio pastoral: la construcción y reparación de iglesias y basílicas, sufragar los gastos de culto y la atención a las necesidades de los pobres¹²².

Pero ocurrió que cada vez había más estabilidad en la constitución de patrimonio en las distintas iglesias, lo que aseguraba la descentralización del patrimonio eclesiástico iniciada hacía tiempo. En consecuencia, para poder asentar el concepto definitivo de beneficio eclesiástico, será necesario el debilitamiento del poder y derechos jurisdiccionales del obispo, el *ius episcopale*¹²³, sobre el patrimonio de la

¹²¹ La denominación “*prestimonio*” viene de *prestimonium* y ésta a su vez de *prestamum* con la adición del sufijo *monium*. La voz *prestimonium* llegó a convertirse en sinónima de *beneficium*, aplicándose a toda clase de cesiones de tierras en tenencia temporal o vitalicia, no quedando nunca limitada a designar el beneficio en el sentido feudal del término. L. García de Valdeavellano, *El feudalismo hispánico...*, o.c., p. 107.

¹²² V. de Reina, *El sistema benefical*, o.c., pp.144 y ss.

¹²³ El contenido de dicho *ius episcopale* era el que sigue: *ordinario et potestas* sobre las iglesias, potestad de consagrarlas, institución del clérigo que ha de servir las y percepción de un censo. A. García Gallo, *El Concilio de Coyanza. Contribución al estudio del Derecho Canónico español en la Alta Edad Media*, en Anuario de Historia del Derecho Español, XX, Madrid 1950, p. 563.

diócesis. Dicho momento ocurre en un período de tiempo anterior al Concilio de Coyanza, de 1055, donde los derechos patrimoniales del obispo casi desaparecen, quedando muy reducida la vinculación económica entre el clero rural y los obispos y dominado por la apropiación de iglesias.

El tema de la apropiación de iglesias se conoce terminológicamente como “*iglesias propias*”, las cuales fueron determinantes al crear fisuras en el contenido del *ius episcopale*.

El fenómeno histórico de las citadas iglesias propias surge hacia el siglo VII y llega hasta los siglos XI-XII, en un momento de clara inexistencia del *ius episcopale* y ejercerá una gran influencia sobre el beneficio eclesiástico. En un panorama de vida rural, donde predominaban los grandes fundos privados, sus dueños, laicos, edifican y dotan iglesias (incluso monasterios) a las que de alguna forma consideran como propias, pretendiendo así sustraerlas de la jurisdicción y vigilancia episcopal¹²⁴. Su denominación se basa en que toda iglesia que era construida (fundada) en suelo propio pertenecía al dueño del terreno, es decir, retenía la propiedad no sólo de las tierras sino también de la iglesia, pues según los principios jurídicos romanos los edificios eran cosas accesorias del suelo, considerado como principal. Cuando se transmitía la propiedad donde la iglesia estaba situada, se transfería también ésta con aquélla. La vigencia de este principio de la vinculación de la iglesia al suelo determinará en dichos siglos su régimen jurídico. El propietario del suelo lo es también de la iglesia fundada y edificada en el mismo y, en consecuencia, habla de *ecclesia mea propria*.

Dicho sistema representa el máximo exponente de la feudalización de la propiedad eclesiástica y como era incompatible con la verdadera naturaleza de las iglesias hubo una reacción para restablecer el *ius episcopale* y la dependencia de aquéllas al obispo. Se consiguió la renuncia progresiva de los fundadores laicos a dichas propiedades y la desaparición de sus prerrogativas como la de nombrar al clérigo. Los antiguos derechos de los propietarios se orientaron hacia el esquema del patronato.

Entre las cesiones estipendiarias de tierras y las entregas de iglesias en beneficio, la sustentación de los clérigos estuvo presidida por los esquemas del beneficio secular, visto anteriormente. Ello fue posible a la proliferación de las iglesias propias, aplicando características claramente feudales al tema que nos ocupa. Es en esta época, siglos IX a XI, cuando se empieza a aplicar el término *beneficium* a la entrega de iglesias con sus rentas para la manutención del clérigo que había de servirlos. En estas ocasiones todavía se alude a iglesias concedidas en beneficio, no por el obispo, que sólo era el propietario de su diócesis a igual que el abad y los clérigos eran los dueños del convento, sino por los diferentes señores y amos de las villas y de las iglesias situadas dentro de ellas. Es decir, el *beneficium* a que se alude es el secular¹²⁵.

En los concilios carolingios se emplea el término *beneficium* para referirse a la entrega secular de iglesias. En los cánones de los concilios de Frankfurt (794), Arles,

¹²⁴ M. Rodríguez Gil, *Consideraciones sobre una antigua polémica: las iglesias propias*, en Cuadernos de Historia del Derecho, 6, Madrid 1999, pp. 247-272.

¹²⁵ V. de Reina, *El sistema benefical*, o.c., pp.180 a 182.

Maguncia, Reims y Tours¹²⁶ (los cuatro en el año 813) se hace referencia al beneficio secular, imponiendo obligaciones a los que detentan en beneficio iglesias o bienes eclesiásticos.

En tal sentido, dichas iglesias propias aunque no fueron el germen del beneficio eclesiástico, al constituir en sí mismas un modelo de beneficio secular, influyeron y extendieron la fijación del beneficio eclesiástico. Como manifestación más típica de ese régimen surgió en derecho canónico la idea del beneficio eclesiástico con carácter eminentemente constitucional, es decir, con naturaleza distintiva, con su propia esencia y cualidades.

De todo lo expuesto cabe deducir la incuestionable influencia que el beneficio secular ejerció en el afianzamiento del eclesiástico. De esta forma quedó fijado el concepto de beneficio eclesiástico, lo que supuso la definitiva de la desmembración del patrimonio en cada diócesis.

En resumen, la aparición del beneficio eclesiástico, después de la desaparición de las iglesias propias, es consecuencia directa de la constitución en cada iglesia de un patrimonio autónomo y estable, la entrega de las iglesias a un clérigo encargado de servir las y que se sustenta con sus rentas, la vinculación entre el obispo y el clérigo que es designado por el primero y la obligación de este último de cumplir los fines de los bienes beneficiales, es decir, de entregar un censo, atender con los réditos de la iglesia a las necesidades de la fábrica y el culto y el deber de atender a los pobres con una parte de las rentas¹²⁷.

3.- CONCEPTO DE BENEFICIO ECLESIASTICO.

Antes de proceder a estudiar las capellanías es necesario definir lo que es un beneficio eclesiástico, pues éste comprende, entre otros, a las capellanías. El Derecho Canónico lo define como un oficio eclesiástico al que están unidos, de forma indisoluble, cierto número de bienes, con las notas de perpetuidad e institución por la autoridad eclesiástica. Su noción tradicional viene caracterizada como un *ius percipiendi*.

En una de las obras de San Vicente Ferrer (1350-1419) al comentar qué son los beneficiados, define lo que es un beneficio eclesiástico: “*ius percipiendi fructus ex bonis Ecclesiae*”¹²⁸. Juan de Selva, en su obra *Tractatus de beneficio*, 1520, Parte I, 1-9, fols. 2-3, lo define como “*benevola actio tribuens gaudium capientibus*”, concepto que no se refiere a un beneficio eclesiástico, sino al secular, refiriéndose a los feudos, propio del *Ius commune*. Más adelante ya concreta, abandonando el concepto genérico, entrando en el eclesiástico: “*beneficium ut dicatur ecclesiasticum debet habere aliquid*

¹²⁶ P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios*, Madrid 1772, (Traducción de F. Pérez Pastor), tomos I (pp. 85, 354 y 423) y II (pp. 7 y 146). C. L. Richard, *Los sacrosantos concilios generales y particulares*, Madrid 1793, tomo III, fols. 261, 283, 287 y 290.

¹²⁷ El servicio de una iglesia se concibe como una carga para el clérigo, por la que ha de ser compensado con un *stipendium*, o de otra manera, la entrega de una iglesia a un clérigo supone un beneficio para éste, por lo que, a cambio, debe prestar un servicio. V. de Reina, *El sistema benefical...*, o.c., pp. 188-189, citando a García Gallo.

¹²⁸ V. Ferrer Miguel, *Suma moral para examen de curas y confesores*, Parte II, Valencia 1779, tratado XV, cap. III, 319, p. 232.

spiritualitatis annerum vel cui annectitur unde propter divinum officium datur ecclesiasticum beneficium". Y por fin se atreve a dar un concepto más elaborado: "*quod beneficium ecclesiasticum est benevola actio proveniens ex proventibus ecclesiasticis et Deo dedicatis per habentem potestatem et auctoritatem gaudium tribuens capienti*".

Además, explica que la definición que da el cardenal hostiense¹²⁹ de beneficio no conviene al decir que proviene de la Iglesia (no de Dios) pues, lo contradice Selva diciendo que también las pensiones eclesiásticas provienen de la Iglesia y no son beneficios, por lo que concluye que no es acertado el concepto por este motivo y por que no explica de los beneficios provienen de la voluntad divina.

Jerónimo González, en *Commentatio ad regulam octavam Cancellariae*, Lugduni 1738, Glosa V, 7, 8, 9, 10 y 11, fols. 98-99, habla de varios requisitos para definir un beneficio eclesiástico:

"Quorum primum est, quod sit fundatum Episcopi auctoritate et interveniente. Secundum requisitum est, quod habeas quid spiritualis et annexum, nam propter divinum officium datur beneficium. Tertium requisitum est, quod sit conferendum clerico et non laico. Quartum, quod conferri non possit, nisi ab ecclesiastica persona, episcopo, vel praelato, non vero a laico. Quintum, quod sit perpetuum et hoc est, quod non conferatur ad certum tempus, sed perpetuo, et ad vitam eius cui consertur, hoc enim proprium beneficiorum est".

En *Institutionum moralium*, de J. Azor (Coloniae Agrippinae 1608, Tomus II, Libro III, cap. I, fol. 382), el autor expone de forma más breve y ajustada lo que considera un beneficio eclesiástico:

"Est ius percipiendi fructus annos ex bonis Ecclesiae coitáis in perpetuum clerico ob sacrum et ecclesiasticum ministerium."

La doctrina de posteriores canonistas, de León, de Murga, Berardi, Reiffenstuel y otros, concretan de forma más precisa el beneficio eclesiástico, aunque prevalecen las definiciones de Lesio, Barbosa y Devoti¹³⁰.

¹²⁹ "*Ius percipiendi proventus in ecclesia, competens percipiendi, tamquam uni ex collegio...*". H. de Segusio, cardinalis hostiensis, *Summa Aurea*, III, I, fol. 872.

¹³⁰ La definición más tradicional es la que sigue: "*Beneficium est ius percipiendi fructus ex bonis Deo dedicatis, clerico propter divinum officium competens*". N. García, *Tractatus de Beneficiis*, Moguntiae 1614, prima pars, cap. II, 2, fol. 2; Igual: A. de León, *De officio capellani*, Neapoli 1635, quaestio secunda, sectio prima, 1, fol. 20. También: P. Corrado, *Praxis beneficiariae*, Coloniae Agrippinae 1697, Libro V, I, cap. I, fol. 1.

Definición afín es la de P. de Murga, *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis*, Lugduni 1684, quaestio prima, fol. 1. Otras definiciones son las siguientes:

"Ecclesiasticum beneficium est ius perpetuum recipiendi redditus ex bonis ecclesia, ratione spiritualis officii ecclesiastica auctoritate constitutum". P. Laymann. *Theologiae Moralis*, Venetiis 1730, Liber IV, tractatus II, cap. I, 1, fol. 16.

"Beneficium ecclesiasticum, est ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis Ecclesiasticis, propter aliquod officium spirituales, personae Ecclesiasticae auctoritate Ecclesiae constitutum". A. Reiffenstuel, *Theologia Moralis*, Venetiis 1724, Tractatus XI, distinctio I, quaestio I, 3, fol. 269; *Ius Canonicum Universum*, Ingolstadii 1745, Tomo III, título V, I, 6, fol. 92.

Leonardo Lesio, en *De Iustitia et iure*, Parisiis 1610, libro II, cap. XXXIV, I, fol. 419, lo define como:

“Beneficium ecclesiasticum esse ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis propter aliquod officium spirituale, auctoritate Ecclesiae constitutum”.

La definición de Andreae Vallensis es casi idéntica a la anterior de Lesio: *“ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis Ecclesiasticis Deo dicatis propter aliquod officium spirituale, auctoritate Ecclesiae constitutum”*¹³¹. Dicho autor remite al cardenal hostiense, en su obra citada *“Summa Aurea”*.

Otro canonista, Ludovico Engel, introduce matices en la definición de beneficio, al concretar que su concesión y colación es realizada por persona eclesiástica: *“Beneficium Ecclesiasticum sit ius perpetuum ad percipiendos redditus Ecclesiasticos ratione spiritualis officii Ecclesiastica auctoritate institutum, conferi personae Ecclesiae ab Ecclesiastica collatum”*¹³²

Agustín Barbosa dice en su obra *Iuris ecclesiastici Universi*, libro III, *“De rebus ecclesiasticis*, capítulo IV, *“De beneficiis ecclesiasticis in genere”*, fol. 124, define el beneficio eclesiástico como:

“Ius perpetuum, quo ad ipsum accipientem, spiritualibus annexum, ad percipiendos redditus ecclesiasticos, ratione spiritualis officii, ecclesiastica auctoritate constitutum”.

Zeger Bernardo Van Espen en *Ius Ecclesiasticum Universum*, en la parte 2ª, título XVIII, capítulo 1, número 13, fol. 4, con ligeras variaciones sobre las definiciones de los autores anteriores, fija el concepto, como:

“Ius perpetuum percipiendorum fructuum quorumcunque ex bonis ecclesiasticis, seu Deo dicatis, propter officium spirituale auctoritate Ecclesiae constitutum”.

“Beneficium ecclesiasticum, est ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis Ecclesiae, ratione spiritualis officii auctoritate ecclesiastica constitutum”. P. Leuren, *Forum beneficiale*, Coloniae Agrippinae 1704, pars primae, sectio prima, cap. primum, I, fol. 1.

“Est ius perpetuum percipiendi redditus ex bonis ecclesiasticis propter aliquod servitium spirituale, auctoritate ecclesiae constitutum”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum*, Romae 1844, tomo III, parte 1ª, título V, I, 2, fol. 119.

“Beneficium ecclesiasticum, de quo hic est sermo, est ius perpetuum percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis ratione spiritualis officii personae ecclesiasticae auctoritate Ecclesiae constitutum”. F. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca canonica, jurídica, moralis, theologica*, Montrouge 1858, tomo I, art. 1, 6, fol. 1083.

“Beneficium est militia quaedam ecclesiastica cuius onere suscepto clericus certis ecclesiasticis officiis adstringatur, cujus iure quasito ecclesiastica stipendia mereat”. C. Berardi, *Commentaria in ius ecclesiasticum universum...*, o.c., Tomo II, dissertatio 1, capítulo I, fol. 4.

“Ius percipiendi fructus ex bonis ecclesiasticis, quod ecclesiastica auctoritate institutum ab eadem Clerico propter spirituale officium ad vitam tribuitur”. C. Ferrari, *Summa Institutionum Canoniarum*, Roma 1869, tomo II, libro XV, 471, fol. 175.

¹³¹ A. Vallensis, *De beneficiis, Libri IV*, Mechliniae 1646, I, 1, fol. 2.

¹³² L. Engel, *Collegium universi iuris canonici*, Venetiis 1723, título IV, I, 1, fol 197.

Por su parte Juan Devoti en *Institutionum canonicarum*, libro IV, tomo I, título XIV, I, fol. 586, lo define como un derecho perpetuo de percibir los frutos de los bienes eclesiásticos por razón de los servicios u oficios, instituido por la autoridad eclesiástica:

“Beneficium est perpetuum ius percipiendi fructus de bonis ecclesiasticis, officii causa ecclesiastica auctoritate institutum”

En todos los autores citados se define el beneficio como un derecho de percibir (*ius percipiendi*) debido a que aquel derecho original de los clérigos a ser alimentados del patrimonio eclesiástico, concretando más tarde en la facultad que poseen los citados clérigos de utilizar las fuentes patrimoniales de los distintos títulos en que ejercen su ministerio, para convertirse, con el transcurso del tiempo, en un estricto derecho del que no todos gozan por igual.

En un amplio período de evolución los términos se han invertido y ahora, al derecho a ser alimentado del patrimonio precede la concesión benéfica con intervención del obispo. Sólo así, mediante esta concesión patrimonial previa, el clérigo podrá gozar del *ius percipiendi*.

De esta forma se ha pasado de la definición primitiva y tradicional hecha por Jerónimo González, Azor, de León y por García, a la de Lesio, Engel y Barbosa, que recoge posteriormente Schmalzgrueber, en la que se habla de forma más abstracta de un *ius ad percipiendos redditus ecclesiasticos*, lo que va unido al ministerio, al oficio o desempeño de las funciones sagradas.

Esta concepción se confirma en autores como Justo Donoso¹³³ y Domenico Cavallario al definir, el primero, el beneficio eclesiástico como un “*derecho perpetuo, instituido por autoridad de la Iglesia, que compete al clérigo, por razón de un oficio espiritual, para percibir, en nombre propio, cierta parte de los frutos de los bienes eclesiásticos*”.

De la misma manera Cavallario define el beneficio eclesiástico como “*la facultad de percibir los productos de los bienes, que están perpetuamente asignados a cada título, y a cada uno de los ministros, cuyo derecho se estableció por autoridad de la Iglesia, y fue concedido a los clérigos, por razón de su oficio para su manutención*”¹³⁴.

Los autores españoles de la Edad Contemporánea también definen el beneficio eclesiástico desde una postura menos histórica y más abstracta. Así Franco y Ortiz y Bravo y Tudela conciben el beneficio eclesiástico como un “*título perpetuo en virtud del cual se desempeña un cargo en la Iglesia y al que va unido el derecho percibir una decorosa sustentación*”. Bravo y Tudela añade al derecho de percibir “*al que lo sirve y, a título del mismo su decorosa sustentación*”¹³⁵. También en la misma línea las

¹³³ J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., tomo III, cap. 20, art. 1, p. 158.

¹³⁴ D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., tomo II, cap. XXXVIII, I, p. 94.

¹³⁵ J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación comentada sobre capellanías colativas de sangre y fundaciones análogas*, Madrid 1868, VIII, p. 74. A. Bravo y Tudela, *El derecho vigente sobre capellanías colativas de sangre, beneficios y legados píos, patronatos laicales y fundaciones de la propia índole*, Madrid 1879, p. 60.

definiciones de Golmayo, Gómez-Salazar, Morales y Alonso y Manjón¹³⁶. En todos ellos prevalece, como se ha dicho, el título o la concesión previa por la autoridad eclesiástica, posición que durará hasta la llegada de un Código.

Con esta concepción, en la que se intentan armonizar elementos diversos y heterogéneos como el derecho a ser alimentado del patrimonio, intervención del obispo, control por la Iglesia, etc, considerada como intento de construcción jurídica es bastante eficaz.

Estas definiciones anteriores reflejan un claro predominio del elemento subjetivo del beneficio, el título o derecho a la sustentación, sobre el objetivo, sobre su carácter dogmático y espiritual, el oficio, adquiriendo un sentido exclusivamente patrimonial y económico y obviando tanto el *officium* como la utilidad común a través del patrimonio eclesiástico, verdaderas razones de ser del beneficio.

Entre canonistas y teólogos hubo siempre cierta controversia respecto al concepto de beneficio eclesiástico. Los teólogos entendían al beneficio por el oficio, pues lo importante no era la percepción de las rentas necesarias para el titular sino el desempeño del oficio sagrado; los canonistas, al contrario, definían el beneficio como el derecho a la renta por el desempeño del oficio, es decir, que para ellos era primordial la potestad en el disfrute de unas rentas y accesorio el derecho a desempeñar el cargo eclesiástico. Golmayo zanja esta cuestión al considerar que no es relevante la primacía de un término sobre otro, pues ambos son esenciales e inseparables, pero le parece más ajustada a la realidad la acepción de los teólogos, al considerar, en el orden de tiempo, primero el oficio¹³⁷.

3.1.- El beneficio eclesiástico como un *ius percipiendi*.

La doctrina pronto consideró al beneficio como un *ius percipiendi*, así interpretan el título “*De praebendis et dignitatibus*” de las Decretales en el sentido de que la prebenda, llamada “*beneficia*” es un “*derecho de percibir*”. Más adelante, en el título “*De institutionibus*” entienden por beneficio un *ius* a sustentarse del patrimonio eclesiástico.

Lo cierto es que en la misma definición canonista del beneficio eclesiástico se produce una modificación en su existencia cotidiana que consiste en dar más importancia no tanto en el oficio eclesiástico, que queda reducido a un mero elemento

¹³⁶ “Se definirá, pues, el beneficio, el derecho de percibir una renta eclesiástica aneja a un oficio espiritual o ministerio perpetuo, creado por la Iglesia”. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico*, Madrid 1866, tomo II, cap. XV, §.162, p.151.

“Un oficio espiritual y perpetuo creado por la Iglesia para utilidad común y renta propia”. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 45.

“El derecho perpetuo a percibir las rentas de los bienes eclesiásticos por algún servicio espiritual constituido por la autoridad eclesiástica”. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., tomo III, p. 174.

“Cierta género de milicia eclesiástica, con que se obliga uno a desempeñar el sagrado ministerio inherente a ella, y con cuyo título se constituye acreedor a que participe los estipendios de la Iglesia”. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho Canónico*, Madrid 1895, Tomo I, p. 505.

¹³⁷ P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XV, §.162, p.151. A. García Herreros, *Órdenes y beneficios en Palencia*, en *Espacio, tiempo y forma. Serie V, Historia contemporánea*, 14, Madrid 2001, p. 151.

justificativo del beneficio, sino, como se ha visto, en el derecho de percibir una renta fija e inalterable en el tiempo.

Esta identificación entre beneficio y sustentación, y el hecho de que sólo mediante la concesión de un beneficio adquiriese el clérigo el preciso *ius percipiendi*, tuvo una posterior confirmación en el Concilio de Trento, el cual consagró dicha asimilación.

La doctrina posterior a Trento insistió en seguir definiendo o llamando al beneficio eclesiástico “*ius percipiendi*”. Dicha postura permanecerá durante mucho tiempo, pues incluso la misma sociedad eclesiástica ha considerado a los beneficios como entidades con un fuerte componente patrimonial y económico.

4.- REQUISITOS ESENCIALES.

Según los canonistas (Engel, Barbosa, García, Devoti, Schmalzgrueber, Reiffenstuel) tres son las cualidades que constituyen la naturaleza del beneficio: conferirse por razón de un oficio sagrado, debe ser perpetuo e instituido por autoridad eclesiástica. Con posterioridad se añadieron dos requisitos más, a saber: la utilidad común y la asignación o renta. Así lo considera Franco y Ortiz, Gómez-Salazar y Bravo y Tudela¹³⁸, al hablar de las cinco condiciones o requisitos son necesarios para que haya un beneficio eclesiástico:

1. Oficio espiritual.
2. Carácter de perpetuidad.
3. Que sea erigido por la autoridad eclesiástica.
4. Utilidad común.
5. Asignación o renta.

El oficio espiritual es la condición más importante o fundamental. Puede existir pluralidad de oficios. Es antiguo el axioma canónico, “*beneficium propter officium*”, es decir, el beneficio se da por el oficio. Así lo dispone el *Corpus Iuris Canonici*, In Sexto, I, Tít. III, *De rescriptis*, Cap. XV, fol. 8:

“*Et officium plerumque, propter quod beneficium Ecclesiasticum datur*”

El oficio espiritual o eclesiástico es un cargo permanente y público, en virtud del cual, ejerce el clérigo, en nombre propio, ciertas funciones eclesiásticas, ya sean de su jurisdicción, sobre el culto divino o sobre la celebración pública de los oficios¹³⁹.

¹³⁸ F. Gómez-Salazar, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., p. 174. J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...* o.c., VIII, pp. 74 y ss.

¹³⁹ “*Sequitur, rationem spiritualis officii, quia omne beneficium datur propter officium*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi*, o.c., 14, fol. 125. “*Dicitur etiam ius spirituale aut spirituali annexum et quia beneficium datur propter officium*”. N. García, *Tractatus de Beneficiis...*, o.c., cap. II, 7, fol. 3. “*Denique beneficium propter spirituale officium institutum est*”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., libro IV, tomo I, VI, fol. 588. “*Unde nec ullum Beneficium sine officio esse potest*”. Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., 17, fol. 4. “*Et hoc est omnino spirituale, non tamen est beneficium*,

La perpetuidad es la condición natural o cualidad esencial del beneficio, respecto al cargo u oficio, por ser permanente, al haberlo creado la Iglesia para tiempo indefinido, como consecuencia de una necesidad duradera y permanente; respecto al beneficiado, porque ha de ser por toda su vida el beneficio y no puede ser removido sin justa causa, si se le ha conferido en propiedad, ni tampoco puede abdicar por su sola voluntad.

Dícese que el beneficio es un derecho perpetuo porque es anexo perpetuamente al respectivo oficio, y sólo muerto el beneficiado se transfiere al sucesor, quedando asegurada la permanencia del beneficio. No puede haber beneficio sin dicho carácter de perpetuidad¹⁴⁰.

La utilidad común es consecuencia de todo oficio espiritual y público, el cual debe redundar en manifiesta utilidad de la Iglesia o de los fieles, el aumento del culto divino y el sostenimiento de los ejercicios de piedad y religión.

La renta es la condición formal del beneficio y consecuencia del axioma bíblico: *“Divini iuris est, ut qui servit Altari, de Altari vivat”*, es decir que *“Quien sirve al Altar tiene derecho a vivir de él”*, o mejor, *“Quien sirve un oficio tiene derecho a vivir de él”*. Por tanto, tiene el beneficiado derecho a percibir los frutos de los bienes eclesiásticos asignados a su cargo, ya consistan en fincas, censos, rentas, estipendios, emolumentos de estola y pie de altar¹⁴¹.

La aprobación eclesiástica también es condición indispensable porque los oficios públicos se crean y varían por los jerarcas legítimos y la espiritualización de los bienes asignados exige una aceptación canónica en forma de decreto. Ningún beneficio puede

sed fundamentum et causa beneficii ecclesiastici; nam propter officium datur beneficium”. A. Reiffenstuel, *Theologia Moralis...*, o.c., 4, fol. 269.

¹⁴⁰ *“Sanctorum canonum statutis consona sanctione decernimus, ut sine titulo facta ordinatio irrita habeatur, et in qua ecclesia quilibet titulatus est, in ea perpetuo perseveret”*. *Corpus Iuris Canonici*, Parte I, Decreto de Graciano..., o.c., distinctio LXX, c. 2, fol. 221. *“Presbyteri, qui ad curam populi per Monachos in eorum Ecclesiis praesentantur episcopis, et instituuntur ab ipsis: (cum debeant esse perpetui c) consuetudine vel statuto quovis contrario non obstante, ab eisdem nequeunt Ecclesiis (nisi per episcopos et ex causa rationabili) amoveri”*. *Decretales*, In Sexto, III, Tít. XVIII, *De capellis monachorum*, Cap. único, fol. 117. *“Dixi, perpetuum, quia beneficium ecclesiasticum non datur ad tempus, sed in titulum perpetuum”*. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi*, o.c., 11, fol. 125. *“Vel quando beneficii in dubio praesumi debeat perpetuum”*. A. de León, *De officio capellani...*, o.c., quaestio tertia, sectio tertia, 46, fol. 61. *“Perpetuum inquam, hoc est donec beneficiarius vitae usura fruitur, beneficium esse debet; quia per hoc certo in ecclesia obeundo muneri addicitur, quod cum perpetuum sit, perpetuum quoque jus ad redditus esse debet”*. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., libro IV, tomo I, IV, fol. 587. *“Dicitur in definitione, ius perpetuum; hoc est ad vitam beneficiati: quae perpetuitas ex ipsa Apostolica Doctrina et pristina patrum disciplina originem ducit”*. Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., 18, fol. 4. *“Additur in data definitione, ius perpetuum: quia de natura Beneficii Ecclesiastici est, ut institutum perpetuo duret, et non conferatur ad certum duntaxat tempus, sed regulariter ad totam vitam beneficiarii”*. A. Reiffenstuel, *Theologia Moralis...*, o.c., 5, fol. 270.

¹⁴¹ *“De his, quae altario deferuntur, medietatem sibi vendicet episcopus”*. *Corpus Iuris Canonici*, Parte II, Decreto de Graciano..., o.c., causa X, quaestio I, c. 8, fol. 525. *“Distributiones quotidianae solum praesentibus, qui intersunt divinis, dari debent, consuetudine non obstante”*. *Decretales...*, o.c., In Sexto, III, Tít. III, *De clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda*, Cap. único, fol. 83. *“Quia ius percipiendi redditus, in quo ratio beneficii consistit”*. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., libro 3, titulo V, I, 3, fol. 119.

ser erigido a menos que intervenga la aprobación del Romano Pontífice o del Obispo¹⁴². La falta de esta premisa anula la condición del beneficio, convirtiendo lo fundado en una institución piadosa, pero nunca en beneficio. En definitiva no se podía crear ningún bien espiritual ni lugar sagrado sin la preceptiva autoridad eclesiástica.

Morales y Alonso¹⁴³ califica los requisitos de todo beneficio eclesiástico en esenciales, naturales y accidentales. Son esenciales aquellas cualidades sin las cuales no puede existir el beneficio; naturales, las que atendida su naturaleza ordinaria, intervienen en él, pero que pueden ser alteradas por la voluntad de los fundadores; accidentales son aquellas circunstancias que dependen en todo de la voluntad de los fundadores.

De esta forma, son requisitos esenciales: la intervención de la autoridad eclesiástica, el cargo u oficio sagrado y la dotación necesaria. De todos ellos el más importante es el de la necesaria intervención y aprobación de la legítima autoridad eclesiástica, pues sin ella no puede erigirse el beneficio. La importancia de estos requisitos es reconocida por la mayoría de los autores, entre los que destaca Berardi.

Las condiciones naturales son: perpetuidad, indivisibilidad y singularidad. Berardi nos dice que la perpetuidad es por dos motivos o razones: porque el beneficio erigido subsiste para siempre y porque el clérigo que lo ha obtenido no puede ni cederlo ni ser removido del mismo sin justa causa. Son indivisos porque no se admiten dos personas en el mismo título del beneficio. Son singulares porque cada clérigo debe contentarse con un beneficio¹⁴⁴.

Respecto a los requisitos accidentales, al depender de la voluntad del fundador, no puede fijarse su número. Dichas condiciones del fundador, si son posibles y honestas, deben observarse estrictamente; las imposibles o torpes se tienen por no puestas.

5.- CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS BENEFICIOS.

5.1.- Clases.

Existen numerosos tipos de beneficios eclesiásticos dependiendo de los diversos criterios de clasificación. La doctrina y la generalidad de los autores los divide en regulares y seculares, pero hay que tener en cuenta la multiplicidad de los mismos por lo

¹⁴² “*Abbates absque episcopi consilio in parochialibus ecclesiis presbyteros non ordinent*”. *Corpus Iuris Canonici*, Parte II, Decreto de Graciano..., o.c., causa XVI, quaestio II, c. 6, fol. 676. “*Quia beneficium ecclesiasticum debet Episcopi auctoritate fundari*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi*, o.c., 15, fol. 125. “*Dicitur tamen in definitione beneficii, auctoritate ecclesia constitutum. Si quidem beneficia ecclesiastica, non nisi interveniente legitima auctoritate ecclesiae*”. A. Reiffenstuel, *Ius Canonicum Universum*..., o.c., 14, fol. 93; *Theologia Moralis*..., o.c., 7, fol. 270. “*Ut sit beneficium, atque pro beneficio ecclesiastico reputetur, requiritur, ut sit ius perpetuum auctoritate ecclesiae, seu episcopi, aut Pontificis constitutum*”. Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum*..., o.c., 20, fol. 4. “*Primum est, nullum esse, aut dici ecclesiasticum beneficium posse, nisi erectum auctoritate ecclesiae proponatur*”. C. Berardi, *Commentaria in ius*..., o.c., dissertatio 3, fol. 80. “*Praeterea ecclesiastica auctoritate, videlecit summi Pontificis, aut episcopi, opus est, ut beneficium constituatur*”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum*..., o.c., XIV, V, fol. 587.

¹⁴³ J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho*..., o.c., p. 509.

¹⁴⁴ C. Berardi, *Instituciones de Derecho eclesiástico*, traducción de J. del Camino, Madrid 1791, Segunda Parte, Libro IV, Tít. X, II, p. 314.

que se hace imprescindible realizar una serie de subdivisiones que permita encuadrar con más exactitud cada uno de los distintos beneficios.

Una primera clasificación los divide de la siguiente forma:

5.1.1.- Por razón del oficio espiritual.

A) Mayores y menores¹⁴⁵.

-Mayores o consistoriales (por concederlos el Romano Pontífice en consistorio).

Según García, en su citada obra citada (*Tractatus de Beneficiis...*, o.c., cap. VI, 2, fol. 75) enumera los beneficios mayores: “*Maiores sunt Papatus, Episcopatus, seu Archiepiscopatus, et Abbatia*”

La relación la amplía Reiffenstuel (*Ius Canonicum Universum...*, o.c., II, 20, fol. 95): “*Sunt Papatus, Cardinalatus, Patriarchatus, Archiepiscopatus, et Episcopatus, et Abbatiam*”

Por tanto, son los unidos a los principales cargos de la Iglesia (jerarquía), con jurisdicción sagrada (externa) y cura de almas¹⁴⁶: el Pontificado (primera dignidad y primer beneficio en la Iglesia), cardenalato, patriarcado, primado, metropolitano, arzobispado, obispado, episcopado y abadía con jurisdicción casi episcopal.

-Menores. Los que obtiene el monje o clérigo que sirve a la Iglesia constituido en un orden inferior al de obispado, y a los cuales van unidas rentas propias y estables. (“*Minora sunt, quibus clericus in inferiore ordine sub episcopo constitutus ecclesiae deserviens potitur*” C. Berardi, *Commentaria in ius...*, o.c., dissertatio 2, fol. 35). Son todos los demás: la dignidad, el personado¹⁴⁷, el canonicato y la parroquia. Se dividen en:

¹⁴⁵ “*Maiores ecclesiae beneficiis...*”. *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro III, Tít. V, *De praebendis et dignitatibus*, Cap. VIII, fol. 373. “*Et primo dividitur beneficium in maiora et minora*”. N. García, *Tractatus de Beneficiis...*, o.c., cap. VI, 2, fol. 75. “*Beneficium ecclesiasticum est multiplex, varieque dividitur, et primo quidem ratione diversae excellentiae ipsorum, beneficia alia dicuntur maiora, alia minora*”. A. Reiffenstuel, *Ius Canonicum Universum...*, o.c., II, 20, fol. 95; *Theologia Moralis...*, o.c., 8, fol. 269. “*Summa specierum, in quas beneficia tribuuntur, paucis perstringi commode potest. El primo quidem alia maiora, alia minora vocantur*”. C. Berardi, *Commentaria in ius...*, o.c., dissertatio 2, fol. 35. “*Rursus alia beneficia sunt, quae maiora, alia quae minora appellantur*”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., fol. 589. “*Beneficia dividuntur in maiora et minora*”. C. Ferrari, *Summa Institutionum Canonicarum...*, o.c., 473, fol. 176. .F. Gómez-Salazar, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., pp. 178-180. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., pp. 507-509. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., art. 1, p 161. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico General...*, o.c., p. 47. L. Arrazola y García, *Enciclopedia española de Derecho y Administración o nuevo teatro universal de la legislación de España e Indias*, Madrid 1853, p. 219. L. Montón y Ocampo, *Enciclopedia Jurídica Española*, Barcelona 1910, p. 477.

¹⁴⁶ La cura de almas es la obligación que tiene el párroco de administrar y explicar la Doctrina Cristiana a los feligreses, según el *Diccionario de autoridades*, Madrid, 1976, tomo I, p. 705.

¹⁴⁷ Deriva de la palabra “*personas*” que era, en el antiguo idioma francés, a unos presbíteros vicarios que servían a las iglesias adjudicadas a los monjes y canónicos, mediante una renta moderada, reservándose éstos el título y la mayor parte de los productos. El personado era, por tanto, un beneficio cuyo cuidado se encomendaba a los vicarios, diferenciándose de los demás beneficios en que se confería a dos beneficiados, uno de los cuales tenía el título y disfrutaba de la mayor parte de las rentas o productos, y el

•Dobles: Los que tienen aneja jurisdicción o cura de almas¹⁴⁸. Son las dignidades, oficios, personados y curatos¹⁴⁹.

-Curados¹⁵⁰: los que tienen jurisdicción en el fuero interno y cura de almas.

••Cura de almas propia: en cuanto al foro interno. Potestad de administrar los Sacramentos y anunciar la divina palabra a cierta porción de fieles. Son los parroquiales.

••Cura de almas impropia: en cuanto al foro externo. Se ejerce lo que es de jurisdicción espiritual.

-No curados: los que no llevan cura de almas aunque tengan jurisdicción.

•Simples o sencillos: Los que no tienen jurisdicción ni cura de almas¹⁵¹, ni dignidad, personado u oficio, cuya obligación se reduce al rezo del oficio divino en el coro o privadamente, con cargo de servir el altar o sin él. Son las capellanías y los canonicatos de iglesias colegiales y catedrales. Pueden ser:

-Meres simples (*mere simplicia*): No tienen más cargo que algunas oraciones.

-Servideros (*servitoria*): Imponen a su obtentor un servicio, como decir misa, cantar en el coro, u otros.

otro con la denominación de “*persona*” o vicario, desempeñaba el oficio a cambio de una pequeña renta. En las decretales de los Pontífices equivale algunas veces a dignidad. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., p. 100. “*Personatus, seu beneficium personale dicitur etiam illud quod instituitur ex redditibus certis et stabilibus auctoritate episcopi in favores alicuius personae, quae sola, vel alii duo, aut tres iuxta voluntatem fundantis, obtineant illud, et postmodum cesset beneficium, et illi redditus in alia opera pia convertantur iuxta mentem ipsius*”. F. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca canonica...*, o.c., art. 1, 27, fol. 1085.

¹⁴⁸ “*Primo alia sunt curata, alia simplicia: curata... quae habent curam animarum*”. T. Cerola, *Praxis episcopalis*, Coloniae Agripinae 1680, pars prima, verbum beneficia, fol. 45. “*Duplex beneficium dicitur, quod specialem aliquam qualitatem sc. Praeeminentiam, administrationem, iurisdictionem, vel curam animarum adiunctam habet*”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte 1ª, título V, II, 31, fol. 134. “*Duplicia sunt, quibus vel iurisdicchio, vel cura animarum inest*”. C. Berardi, *Commentaria in ius...*, o.c., dissertatio 2, fol. 35.

¹⁴⁹ G. Phillips, *Compendium iuris ecclesiastici*, Manz 1875, libro II, cap. V, p. 72.

¹⁵⁰ “*Beneficia curata dicuntur, quae animarum curam annexam habent*”. Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., Cap. IV, 1, fol. 10.

¹⁵¹ “*Simplex est, quod nullam iurisdictionem, curam animarum, vel administrationem, aut specialem praeminentiam sibi annexam habet, sed ad solam assistentiam in choro, vel altaris servitium obligat. Tales sunt: 1. canonicatus. 4. capellaniae collativae*”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte 1ª, título V, II, 30, fol. 134. “*Beneficia, quae non habent ullam curam animarum, vocantur beneficia simplicia*”. Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., Cap. IV, 8, fol. 11. “*Simplicia e contrario sunt et iurisdictione et cura animarum destituta*”. C. Berardi, *Commentaria in ius...*, o.c., dissertatio 2, fol. 35.

-Sacerdotales: Exigen en el que lo tiene el sacerdocio.

-Residenciales¹⁵²: exigen residencia, asiduidad y asistencia diaria o levantamiento de cargas en determinada iglesia, altar o lugar. Son las parroquias, dignidades, canonjías y capellanías.

-No residenciales: no exigen residencia.

B) Colegiados y no colegiados.

-Colegiados: los que forman corporación o colegio y están unidos a ella.

-No colegiados: los que no forman colegio.

5.1.2.- Por la persona que los provee.

A) Reservados y no reservados.

-Reservados o exentos: los oficios cuya colación pertenece al Romano Pontífice y, por tanto, carece de potestad para conferirlos el ordinario del lugar.

-No reservados: los oficios cuya colación corresponde a prelados inferiores o al ordinario.

5.1.3.- Por la persona a quien se confiere.

A) Seculares y Regulares¹⁵³. Es la primera y más general división, según muchos autores, y que puede ser considerada como el género que comprende las distintas especies.

¹⁵² S. Vecchiotti, *Institutiones canonicae*, 1876, libro III, cap. II, p. 13.

¹⁵³ “*Impetranti beneficium, providetur de beneficio per seculares clericos...*”. *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, In Sexto, III, Tít. IV, *De praebendis et dignitatibus*, Cap. V, fol. 85. “*Saecularia sunt, quae clerici saecularibus conferri, et assignari debent, qualia censenda sunt omnia, nisi contrarium probetur. Regularia sunt, quae per regulares, seu religiosos regi debent*”. N. García, *Tractatus de Beneficiis...*, o.c., cap. VI, 11-13, fol. 76. “*Saecularia sunt, quae saecularibus; regularia, quae regularibus conferri consueverunt*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., 34, fol. 126. “*Postremo dividitur beneficium in regulare et saeculare. Regulare, quod a monachis, aut regularibus tantum acquiri potest. Saeculare, quod a saecularibus clericis, id est monastico voto, aut regula non obstrictis*”. P. de Murga, *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis...*, o.c., quaestio secunda, I, 2, fol. 12. “*Regularia, quae solis regularibus competunt. Saecularia, quae sunt addicta, seu debita saecularibus clericis; id est, illis, qui nullam regulam ex ordinibus ab ecclesia approbatis sunt professi, sed in saeculo existentes serviunt Deo sub statu clericali*”. A. Reiffenstuel, *Theologia Moralis...*, o.c., XI, distinctio I, quaestio I, 9, fol. 270; *Ius Canonicum Universum...*, o.c., V, I, 22, fol. 95. “*Regularia beneficia communiter hodie vocantur, quae religiosis addicta sunt, aut per regulares regi debent. Beneficium saeculare dicitur, quod clericis saecularibus est addictum: seculares autem clerici dicuntur, qui nullam professi sunt regulam, sed in saeculo Deo serviunt*”. Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., Cap. III, 2 y 8, fol. 7. “*Beneficia regularia sunt quae ex sui fundatione, seu in consuetudine legitime praescripta, competunt solis regularibus. Beneficia saecularia e contra sunt illa quae ex sui fundatione, seu ex consuetudine legitime praescripta, competunt solis clericis saecularibus*”. F. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca...*, o.c., I, art. 1, 16-17, fol. 1085. “*Septimo, alia sunt regularia, alia saecularia, prout vel regularibus, vel*

Según Azor (*Institutionum moralium*, o.c., II, Libro III, cap. I, *quarto quaeritur*, fol. 384) los beneficios se dividen en:

“Beneficia primo dividi in regularia et secularia. Regularia beneficia dicuntur, quae conferri nequeunt, nisi clericis religionis solemni voto, et regula monachali adstrictis: saecularia vero, quae conferuntur in clericos omni religiosorum voto, et regula solutos, et liberos”.

Schmalzgrueber (*Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte 1ª, título V, II, 13, fol. 126) completa la división hecha por Azor y, a la vez hace una lista de los beneficios regulares, los define de la siguiente manera:

“Dividitur beneficium in saeculare, et regulare. Saeculare est, quod clericis saecularibus, h. e. nullam alicuius ordinis religiosi regulam professis conferri debet, ac solet. Regulare, quod conferendum tantum est religiosis, et per hos administrandum, ut sunt abatia, prioratos, canonicatus regularis, et aliquando parochiae”

-Seculares: son los que poseen los clérigos no ligados con votos en cualquier orden religiosa. Son el Sumo Pontificado, el cardenalato, el patriarcado, el arzobispado, el obispado, canonjías, curatos, vicarías perpetuas, las capellanías y generalmente todos los beneficios con título perpetuo que sólo poseen los clérigos seculares.

-Regulares: los que sólo pueden poseer los monjes o clérigos sometidos a regla o disciplina monástica (religiosos profesos). Son el título de una abadía y los oficios claustrales que tienen renta aneja, como el de prior conventual, camarero, limosnero, hospitalero, cillerero (encargado de las provisiones y alimentos), mayordomo, sacristán u otros semejantes.

Existe una subdivisión en los beneficios regulares y cuyo origen es común a las órdenes religiosas de ambos sexos:

- Masculinos. Los beneficios concedidos sólo al sexo masculino.
- Femeninos. Los beneficios concedidos al sexo femenino.

B) Patrimoniales y no patrimoniales (vigentes hasta 1851)¹⁵⁴.

saecularibus ecclesiis adhaerent, nisi malis dicere, prout vel regularibus, vel saecularibus clericis, vel etiam monachis conceduntur”. C. Berardi, *Commentaria in ius ecclesiasticum...*, o.c., dissertatio 2, fol. 36. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XXXVIII, XII, p. 101. *“Saecularia sunt, quae non nisi saecularibus clericis, regularia, quae tantum regularibus tribuuntur, unde eorum nomen tractum est. Beneficia regularibus addicta demonstrantur vel fundatione, cuius nimirum lege cautum est, ut ea regularia haberi debeant; vel incorporatione, cum monasteriis adnexa sunt”*. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., XIV, X, fol. 589. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 20, art. 1, p. 159. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XV, §.167, p. 154. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 508.

¹⁵⁴ Los beneficios patrimoniales se encuentran en la Ley 1ª, tít. XXI, libro 1º de la *Novísima Recopilación de las Leyes de España*, Madrid 1805, fol. 157. Fueron derogados por el artículo 26 del Concordato de 16 de marzo de 1851.

Según Reiffenstuel (*Theologia Moralis...*, o.c., XI, distinctio I, quaestio I, 12, fol. 270), los beneficios también se dividen en patrimoniales y no patrimoniales:

“Beneficia ulterius dividuntur in patrimonialia et non patrimonialia. Patrimonialia dicuntur sed quia iuxta fundatoris institutionem non possunt conferri, nisi clericis es tali patria, loco, vel parochia oriundis. Beneficia non patrimonialia vicissim sunt, quae cuilibet digno, undecunque oriundo, conferri valent”

-Patrimoniales: los que se confieren, con privilegio de exclusiva, a los naturales de una diócesis, provincia o pueblo.

-No patrimoniales (de libre concurso): Los que no tienen la limitación anterior y pueden ser concedidos a cualquier clérigo digno.

C) Compatibles o concordantes e incompatibles o discordantes.

Esta división ya es conocida desde los tiempos de Gregorio IX, que por medio de rescripto fijó los beneficios que obligaban asiduidad a sus poseedores, y que fue consecuencia de la anterior división que se había hecho entre beneficios residenciales y no residenciales.

Siguiendo a Schmalzgrueber (*Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte 1ª, título V, IV, 84, fol. 160):

“Communis beneficiorum divisio est, qua alia dicuntur incompatibilia, alia compatibilia. Compatibilia dicuntur illa, quae vel nullam, vel non impossibilem residentiam exigunt, ideoque simul obtinere, et retinere possunt. Incompatibilia appellantur, quae vel iure naturali, vel iure communi ecclesiastico, vel ex consuetudine, statuto, aut fundatione continuam residentiam personalem exigunt”

-Compatibles: Los que pueden obtenerse con simultaneidad, es decir, los que pueden hallarse juntos en un solo beneficiado, a causa de no exigir exclusivamente cada uno todo su servicio y trabajo.

-Incompatibles o discordantes: Los que no puede poseer a un tiempo una misma persona, pues cada uno exige exclusivamente un servidor. La incompatibilidad puede ser:

- Primo genere (de primer género). Los que se oponen entre sí en una misma persona, de tal modo que si se obtiene el segundo, en el acto queda vacante el primero.

- Secundo genere (de segundo género). Los que a pesar de no poderse obtener lícitamente por una misma persona, no se oponen entre sí, de tal modo que una vez obtenido el segundo vaca por el mismo hecho el primero.

- Sub eodem vel diverso tecto (bajo un mismo o distinto techo): son incompatibles dos beneficios en una misma iglesia o lugar o en distintas. Dos capellanías, por ejemplo.

- Uniformes o diformes.

- Uniformes: Se llaman así los que son de una misma clase o especie, es decir, que tienen igual título y oficio. Por ejemplo, dos canonjías.

- Diformes: Los que no son de una misma clase o distinto título y oficio. Ejemplo: una canonjía y una capellanía.

- En título y en encomienda.

- En título: Indica la propiedad y son aquellos que se conceden en título de forma perpetua.

- En encomienda: Los concedidos de forma temporal o provisional.

- Célibe: si se contrae matrimonio después de haber obtenido un beneficio, se pierde.

5.1.4.- Por el diverso modo de su concesión.

A) Electivos, electivos-confirmativos, colativos y de patronato o mixtos¹⁵⁵.

- Electivos: los oficios que se adquieren por elección canónica hecha según las reglas del Derecho. Ejemplo de ellos son el Pontificado, el patriarcado y las preposituras de las iglesias colegiadas.

- Electivos-confirmativos: después de la elección es necesaria la confirmación de del superior.

- Colativos o libres: los que se adquieren por libre voluntad del prelado eclesiástico u otro colador, sin necesidad de elección o representación.

¹⁵⁵ “Dividitur beneficium in collativum, seu liberum, electivum, et patronatum, seu mixtum. Collativum dicitur, quod a praelato ecclesiastico, vel alio collatore libere. Electivum, quod per suffragia capitularium, accedente postea praelati, seu superioris ecclesiastici confirmatione, vel admissione obtinetur. Patronatum demum, seu mixtum illud beneficium dicitur, quod per praevidiam patronorum praesentationem, et subsequentem episcopi, vel alterius praelati ecclesiastici institutionem obtinetur”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte 1ª, título V, II, 38, fol. 137. “Denique sunt beneficia collativa, quorum collatio ad eos pertinent, quibus conferendi ius est; electiva, quae per electionem; patronata, quae ad patroni praesentationem conceduntur”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., XIV, XI, fol. 589. A. Andrés, *Diccionario de Derecho Canónico*, (traducción de Isidro de la Pastora), Madrid 1847, p. 152. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 20, art. 1, p. 160. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 48. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., p. 180.

-Monóculos: cuando el obispo los confiere por sí solo.

-No monóculos: cuando la provisión es simultánea del obispo y del cabildo.

-De patronato o mixtos: los beneficios que se obtienen por previa presentación del patrono y subsiguiente institución del obispo u otro prelado eclesiástico.

5.1.5.- Por razón de su perpetuidad.

A) Titulares o perpetuos y manuales¹⁵⁶, temporales, en econmato o revocables *ad nutum*.

-Titulares (perpetuos): Dados en título perpetuo, de manera que sus poseedores no pueden ser privados de ellos sin causa expresa en el Derecho.

-Manuales (temporales, en econmato o revocables o amovibles *ad nutum*): se confieren en título revocable, de forma que pueden quitarse a voluntad del que los confiere.

5.1.6.- Por razón de su conformidad o no con las reglas del derecho común.

A) Propios e impropios¹⁵⁷.

-Propios: los que conservan su naturaleza genuina, según la disciplina general sobre los beneficios. Están sujetos a las reglas canónicas.

-Impropios: los que se separan de la norma general. Son los cargos eclesiásticos que no tienen la naturaleza y cualidades de los beneficios, aunque se asimilan a ellos. Son los que no están sujetos a las reglas canónicas.

A partir de la clasificación anterior se pueden definir los beneficios impropios como instituciones piadosas que imitan a los beneficios pero sin reunir todas sus condiciones.

Su nombre les viene de su semejanza con los beneficios propios, pero son posteriores a éstos. Se fundan en la libertad individual cristiana, bajo una forma especial de piedad y caridad, por lo que su origen se debe a fundaciones particulares¹⁵⁸.

¹⁵⁶ “Dividitur, beneficium in manuale, et non manuale. Manuale est, quod confertur quidem in titulum, sed revocabiler, ita, ut ad conferentis libitum auferri, vel a patrono revocari possit. Non manuale, seu, ut alii vocant, simpliciter titolare vero illud dicitur, quod confertur in titulum perpetuum, ita, ut semel legitime collatum beneficiato, nisi ex iusta, et iure expressa causa, auferri nequeat”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte 1ª, título V, II, 34, fol. 135.

¹⁵⁷ A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., pp. 64-65. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., pp. 305-307. J. M. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas...*, o.c., I, pp. 19-20.

¹⁵⁸ J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación comentada...*, o.c., IX, p. 99.

Este tipo de beneficios ofrecen una gran variedad, pues son de varias clases, aunque, según Berardi unos son más impropios que otros, según se conformen más o menos con las reglas ordinarias que rigen los beneficios eclesiásticos¹⁵⁹.

- Fundaciones piadosas:

- Legados píos: bienes asignados por el testador para una obra de piedad o beneficencia.

- Capellanías. Fundaciones perpetuas hechas con la obligación aneja de celebrar cierto número de misas u otras cargas espirituales.

- Pensiones eclesiásticas concedidas a un clérigo para que sirvan de título de ordenación.

- Prestimonios (préstamos, sextas o novenas): ciertas porciones que se conceden mediante causa temporal por causa de estudios, pobreza o milicia.

- De beneficio: sólo se conceden a personas oriundas de cierto lugar o parroquia.

- Beneficios manuales: el derecho temporal a percibir ciertos bienes por el servicio o cumplimiento de una carga espiritual. Se hallan *in alterius manu*, es decir, su poseedor puede ser privado de ellos a voluntad del que los concede.

- Patrimonios clericales: asignaciones canónicas de medios económicos propios, seguros y bastantes para la decorosa sustentación de un clérigo.

- Coadjutorías de beneficio: el derecho y la obligación de suplir las cargas de otro.

5.2.- Tipología benefical.

La importancia del beneficio eclesiástico en la Iglesia del Antiguo Régimen es de tal magnitud que a excepción de los religiosos y algunos clérigos, la mayoría de los clérigos seculares son titulares de algún beneficio. Del obispo hasta el capellán, pasando por un variopinto conjunto de prebendas, curatos o beneficios simples, todos tienen un vínculo en común: el beneficio.

Es difícil precisar el número total de beneficios existentes hacia el siglo XVIII, máxime si son menores, pero una primera aproximación da las siguientes cifras¹⁶⁰:

¹⁵⁹ “Beneficia dicuntur impropia, quae generaliter, et undecumque non habent beneficiorum omnium naturam, qualitates, proprietatesque universas, sed eius indoli sunt, qualem singulare iure ex sui institutione, vel ex fundationem tabulis acceperunt”. C. Berardi, *Comentaria in ius...*, o.c., tomo II, Apéndice, *De beneficiis impropriis*, fol. 364.

Los beneficios mayores o consistoriales existentes en España, en el siglo XVII son 8 arzobispados (Burgos, Granada, Santiago, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia y Zaragoza), 46 obispados y 2 obispados exentos. A mediados del siglo XVIII son 8 arzobispados y 47 obispados, a lo que hay que añadir la primera dignidad de algunas colegiatas y el abad de ciertos monasterios, lo que suma un total de 55 diócesis.

Las prebendas capitulares (porción de los bienes de una iglesia catedral o colegial asignada a un eclesiástico) constituidas por dignidades, canonjías y raciones (prebendas completas) de 55 catedrales y 106 colegiatas suman a mediados del siglo un total de 4.024 beneficios, repartidos en 842 dignidades, 2.184 canonjías y 1.178 raciones, a lo que habría que sumar los más de 4.000 beneficios simples y capellanías fundados en las mismas.

Más difícil es dar siquiera una cifra aproximada de los beneficios menores. Varios autores hablan de unos 20.000, aunque otros estudiosos establecen la cantidad de 40.000 basándose en que si sólo en quince diócesis, de las 55 que había en España, la cifra de beneficios ya se acerca a los 21.000, la cifra total en todas las diócesis llegaría a la citada. De este conjunto, la mayoría son mere simples y servideros, sin jurisdicción ni cura de almas y sólo una cuarta parte son beneficios curados.

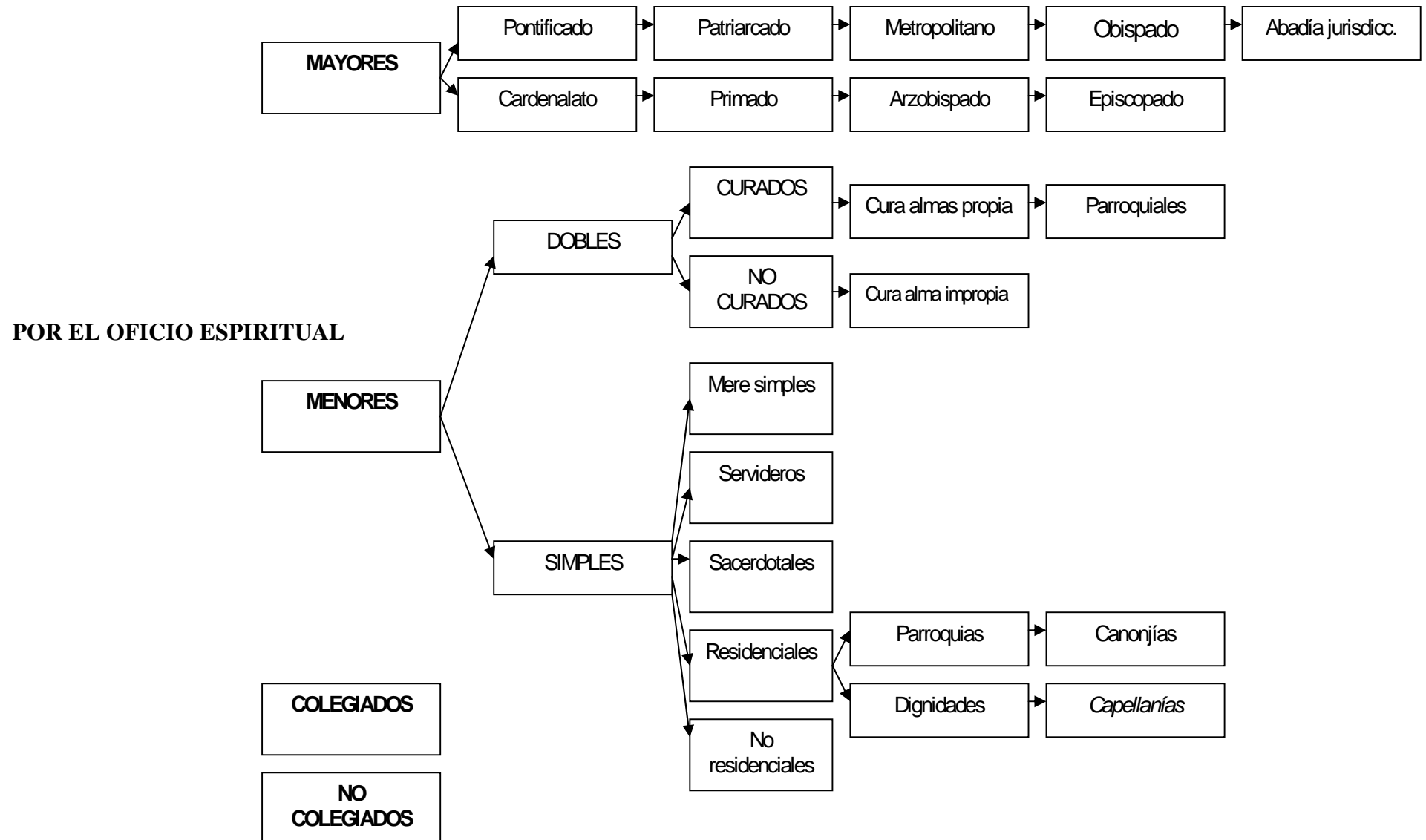
Cuadro 2. Tipos y número de beneficios en las distintas diócesis¹⁶¹.

DIÓCESIS	BENEFICIOS CURADOS	BENEFICIOS SIMPLES	B. SIMPLES SIN CARGA	TOTAL
Ávila	388	643	68	1.099
Burgos	35	4.400	—	4.435
Canarias	40	52	—	92
Calahorra	26	4.346	—	4.372
Cuenca	354	210	184	784
León	891	481	30	1.402
Osma	303	84	233	620
Palencia	25	1.185	131	1.341
Santiago	1.134	122	—	1.256
Segovia	378	124	142	644
Sevilla	13	381	219	613
Toledo	803	450	435	1.688
Valencia	280	1.052	—	1.332
Valladolid	25	384	—	409
Zaragoza	372	488	—	925
TOTAL	5.027	14.402	1.507	20.936

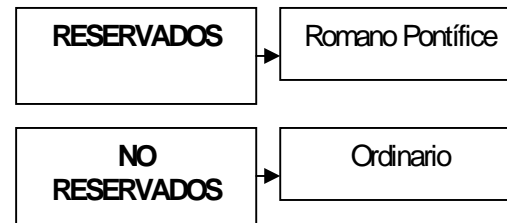
¹⁶⁰ M. Barrio Gozalo, *El sistema benefical en la España del siglo XVIII. Pervivencias y cambios*, Cuadernos dieciochescos, 2. Salamanca 2001, p. 82.

¹⁶¹ Archivo Secreto Vaticano (ASV), Congregación Concilio. Relaciones *ad limina* enviadas por los obispos de las diócesis a Roma. Ibidem, p. 84.

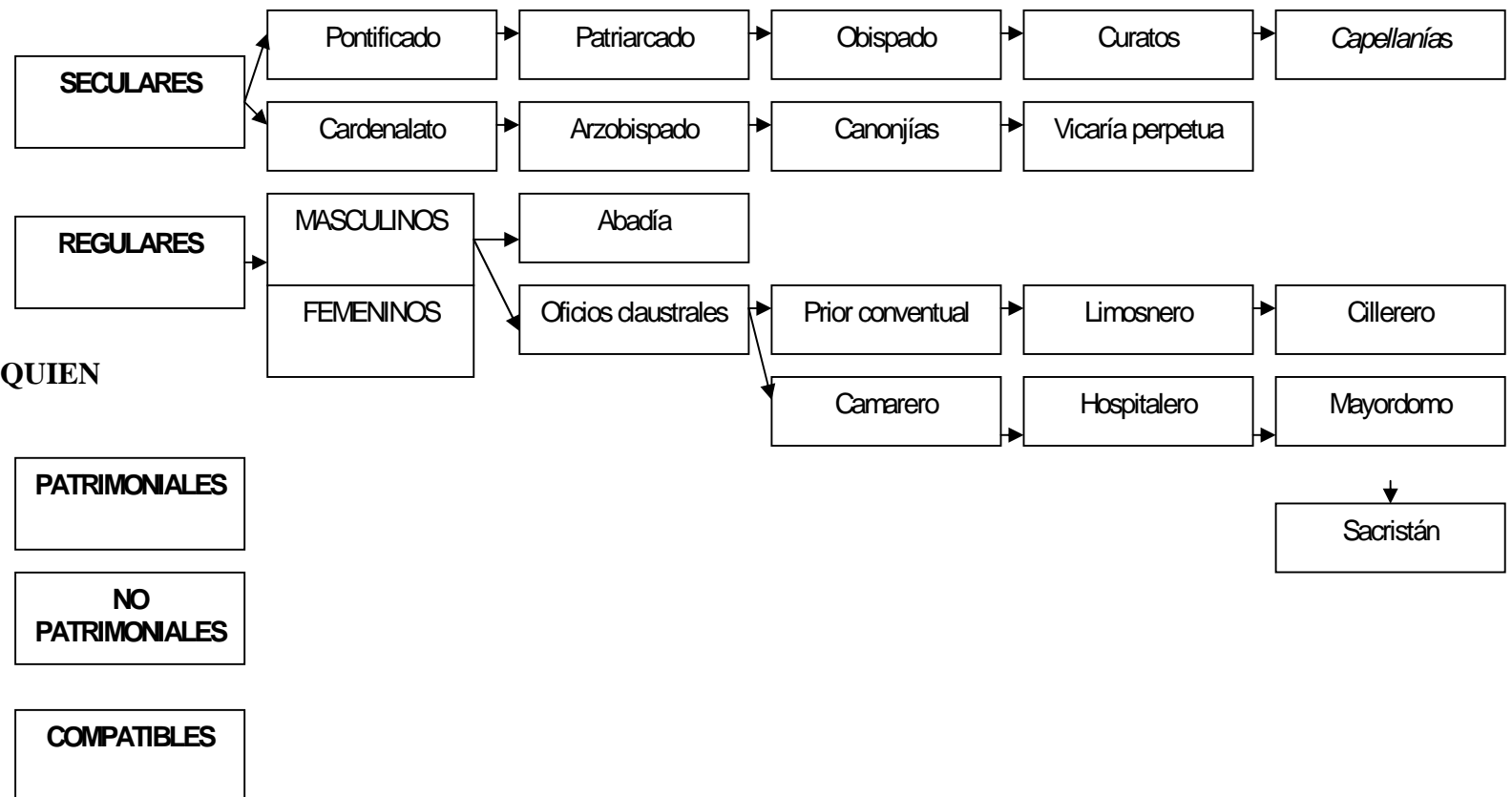
Cuadro 3. Clases de beneficios.

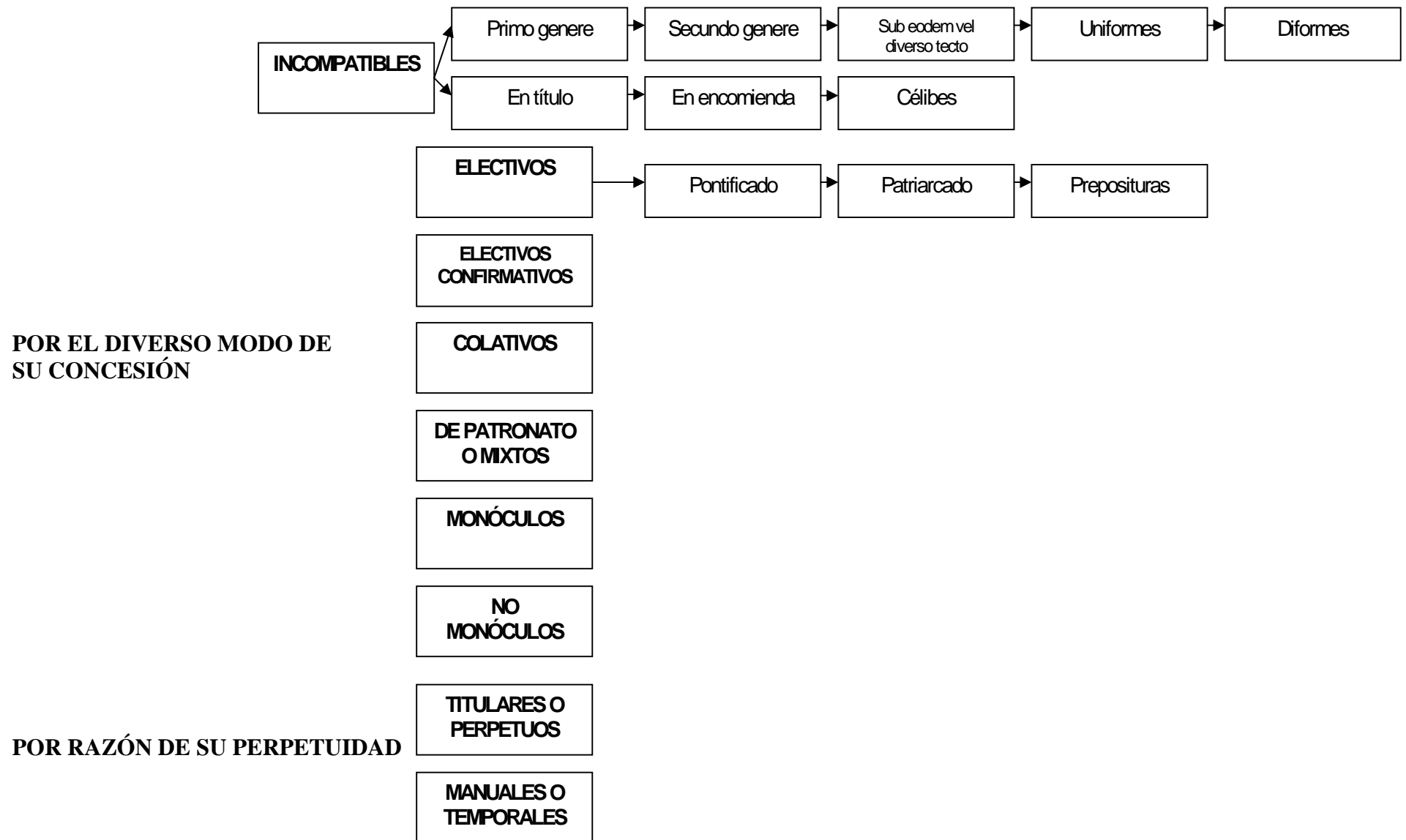


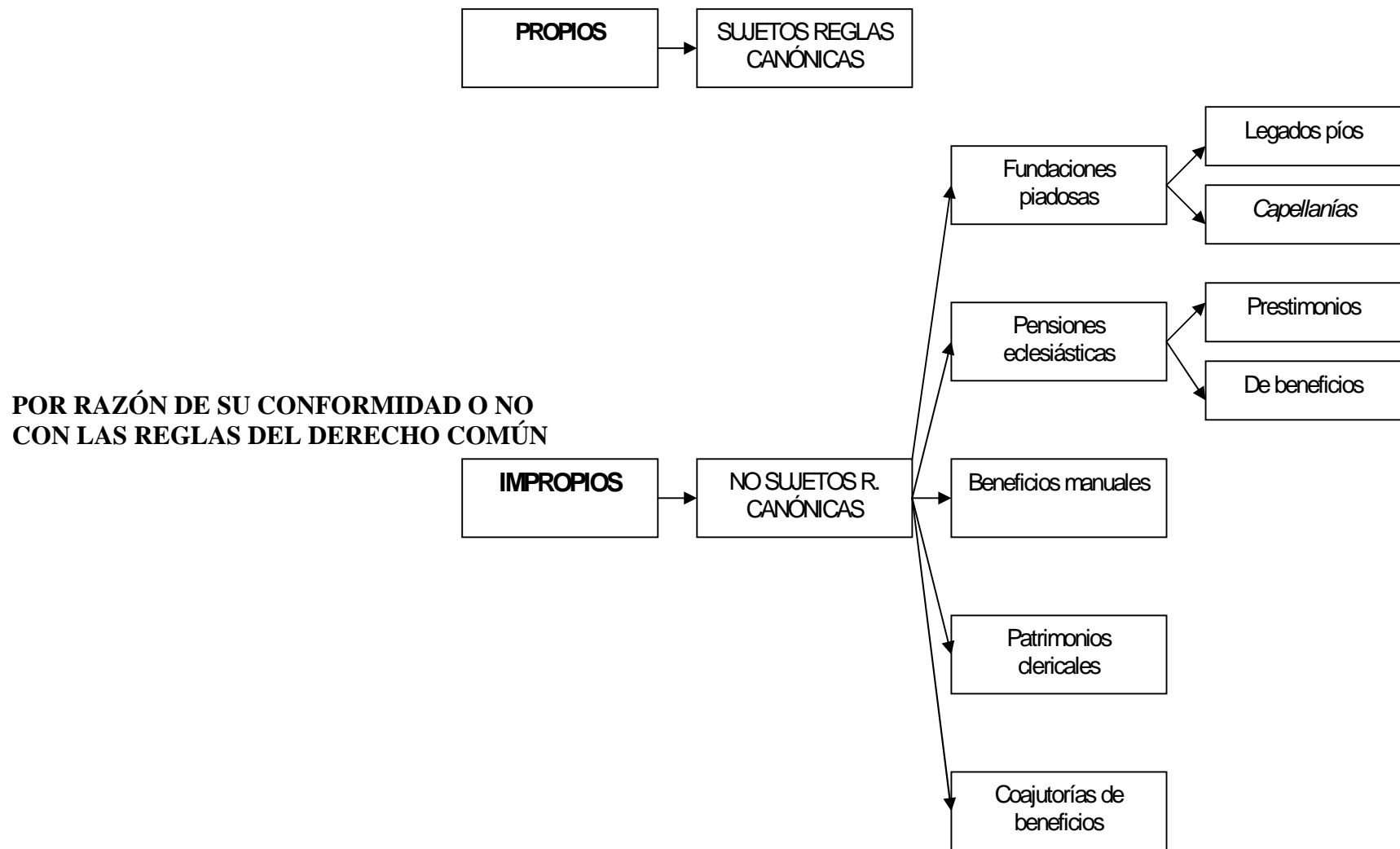
**POR LA PERSONA QUE
LOS PROVEE**



**POR LA PERSONA A QUIEN
SE CONFIERE**







6.- DIFERENCIAS CON OTROS INSTITUTOS.

6.1.- Prebendas.

Se suelen confundir las palabras prebenda y beneficio, pues a los canónigos se les ha llamado prebendados. Prebenda, en la Edad Media, era la distribución de víveres que se hacía a los soldados, pasando dicha denominación a los monjes y luego a la porción de renta de los bienes de la Iglesia que tuvieron los clérigos después de la desaparición del Acervo Común.

Así lo expresa Schmalzgrueber, en el título V, I, folio 118 de *Ius Ecclesiasticum universum*, parte 1ª:

“praebenda a praebeo dicitur, quia praebet ministris, et officialibus ecclesiae alimoniam suam. Illa est, quae sive clerico, sive laico ex redditibus ecclesiasticis datur pro labore.”

La diferencia es bien manifiesta. La prebenda es un derecho que tiene un clérigo o un lego de percibir ciertas rentas, frutos o emolumentos en una iglesia catedral o colegial, por razón de los oficios o beneficios eclesiásticos, mientras que el beneficio tiene un significado más amplio, pues comprende, además de los frutos o rentas, el título espiritual o ministerio eclesiástico, independiente de la renta temporal. La prebenda puede existir con completa independencia del beneficio pero no al contrario. En resumen, la prebenda es la dotación económica del beneficio¹⁶².

La palabra prebenda no se emplea más que en muy contados casos por el Derecho canónico, que las incluye dentro de los tratados de beneficios.

7.- EL ACCESO A LOS BENEFICIOS.

Es regla general del derecho canónico que los beneficios eclesiásticos se confieran solamente a personas hábiles para su desempeño.

Si hubiera de atenderse al origen primario del oficio, en razón del cual se da el beneficio, beneficio, fácilmente podrían medirse los grados de idoneidad o habilidad, teniendo en cuenta requisitos internos y externos que se exigían desde la primitiva Iglesia. Pero con el tiempo mudó la disciplina sobre asuntos benéficos, por lo que la idoneidad para la ocupación y provisión de los beneficios se restringió a cualidades externas.

¹⁶² “*Proprie beneficium a praebenda distinguitur. Haec enim tantum comprehendit fructus, redditus et emolumenta, quae clericis certo obveniunt, ecclesiasticorum officiorum et beneficiorum causa. Hinc eam saepe etiam beneficii dotem appellamus, sive consistat in praediis rusticis, aut urbanis, sive in pascuis, silvis, aut similibus, sive in illis juribus, quae fructuum vicem obtinent, et rebus immobilibus aequantur, uti sunt census et reliqua generis ejusdem. At vero beneficii nomen latius patet; quoniam non ea tantum, quae praebenda, comprehendit, sed etiam ecclesiasticum officium et magistratum.*” J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., XIV, III, fol. 586. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XXXVIII, I, pp. 95-96. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 175. L. Montón y Ocampo, *Enciclopedia Jurídica...*, o.c., pp. 476-477.

En consecuencia, el acceso a la carrera beneficiaria estaba sometido a rígidas reglas que los canonistas enumeran con gran precisión. Los requisitos de los candidatos eran distintos según el tipo de beneficio eclesiástico al que se aspiraba.

Según los sagrados cánones se exige que los promovidos sean idóneos, es decir, que estén adornados de la ciencia y de la necesaria honestidad de costumbres, además de prudentes y dignos, según el *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Clementinas*, Libro I, Tít. VI, *De aetate et qualitate, et ordine praeficiendorum*, Cap. I, fol. 201:

“Cum ecclesiae, quibus praeficiuntur personae minus idoneae scientia, moribus vel aetate, gravia propter hoc [ut docet experientia] nonnunquam perferant in spiritualibus et temporalibus detrimenta”.

Según el Derecho, se exige:

a) La edad competente, b) La probidad de costumbres, c) La ciencia, d) El estado clerical, e) El orden sagrado, f) Que no esté incurso en excomunión u otra irregularidad o censura eclesiástica, g) Nacimiento legítimo y h) El celibato¹⁶³.

a) Sólo los varones son capaces de obtener beneficios. Supuesta esta cualidad, la principal es la de la edad. Antes del siglo XI no se hablaba de edad para obtener beneficios, sino de la edad necesaria para ordenarse. Después de separarse la ordenación de la colación de beneficios y como se confería incluso a niños, fue preciso establecer reglas, lo que hizo el Concilio de Letrán de 1179, con Alejandro III, mandando que no se confiriesen a niños menores de 7 años, confirmado posteriormente con Gregorio IX (*Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro III, Tít. V, *De praebendis et dignitatibus*, Cap. XXXV, o.c. fol. 384):

“Pueri, alias beneficiati non sunt idonei ad beneficia consequenda”

Con Paulo III se exigió la edad de 14 años para prebendas en iglesias catedrales, 10 años en colegiatas y 7 para capellanías y beneficios simples.

¹⁶³ *“Quae condiciones requirantur in particulari, ut quis senseatur idoneus ad beneficium. Respondeo, posse numerari decem. Prima. Legitimus torus. Secunda, clericatus vel ordo. Tertia, aetas conveniens. Quarta, caelibatus. Quinta, non esse irretitum censura vel irregularitate. Sexta, morum probitas. Septima, scientia debita. Octava, habilitas ex parte corporis. Nona, intentio status ecclesiastici. Decima, ut non habeat aliud beneficium incompatible”.* L. Lesio, *De Iustitia et iure*, o.c., libro II, cap. XXXIV, XVII, fol. 430. *“Quod clerici esse debeant digni et idonei, ac nullo impedimento canonico detenti, ii quibus beneficia ecclesiastica conferri possint, aut institui. Qualitates: clericatus, diuturnitas in fide, sexus virilitas, rationis usus, aptitudo ad exercendum ea, quae per beneficiarium praestanda sunt, legitimitas, legitima aetas, aetatis maturitas, scientia litterarum, quod non sit uxoratus, quod bigamus non sit”.* P. de Murga, *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis...*, o.c., quaestio tertia, XI, 514, fol. 379. *“Ut quis sit dignus sive idoneus ad beneficium ecclesiasticum, plures requiruntur conditiones; videlicet torus legitimus, clericatus, aetas conveniens, caelibatus, absentia censurae atque irregularitatis, probitas morum, scientia debita, habilitas corporis, intentio status ecclesiastici, carentia alterius beneficii incompatible”.* A. Reiffenstuel, *Theologia Moralis...*, o.c., XI, distinctio I, quaestio IV, 53, fol. 274. *“Quibus beneficia ecclesiastica conferri possint: sic natus et legitimo matrimonio, conveniens aetas, clericatus, competens litterarum scientia, decens vitae honestas, et morum probitas”.* F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte 1ª, título V, III, 61, fol. 148. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 20, art. 3, pp. 165-168.

Para los beneficios simples sin cura de almas se exigía la edad competente, requiriéndose el haber cumplido los 14 años, por lo menos, pues así lo dispone el *Concilium Tridentinum, Decretum de Reformatione*, sesión 23, cap. 6 (I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento*, Madrid 1785, fol. 368), al decir:

“Aetas XIV annorum ad beneficium ecclesiasticum requiritur: quis privilegio forit gaudere debeat. Nullus prima tonsura initiatus, aut etiam in minoribus ordinibus constitutus, ante decimum quartum annum beneficium possit obtinere.”

El que aspiraba a un beneficio capitular (dignidades, personados y canonicatos sin cura de almas) debía tener 22 años, a un beneficio curado 25 y estar ordenado de presbítero, según el Concilio de Trento, Decreto sobre la Reforma, o.c., fols. 441-442, en la sesión 24, cap. 12):

“Quales esse debeant promovendi ad dignitates, et canonicatus cathedralium ecclesiarum. Nemo igitur deinceps ad dignitates quascumque, quibus animarum cura subest, promoveatur, nisi qui saltem XXV suae aetatis annum attigerit.”

“Ad caeteras autem dignitates, vel personatus, quibus animarum cura nulla subest, clerici alioquin idonei, et XXII annis non minores, asciscantur.”

En la misma sesión, el concilio no habla expresamente de la edad requerida para los beneficios parroquiales, pero se refiere a la decretal *Cum in cunctis* (*Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro I, Tít. VI, *De electione et electi potestate*, Cap. VII, § 2, fol. 39), en la cual se exigen 25 años principados:

“nisi qui iam vigesimum quintum annum aetatis attigerit...”

La edad establecida para un obispado u otro beneficio consistorial o mayor era de 30 años cumplidos, según el citado tercer Concilio de Letrán, constitución *Cum in cunctis*, según el *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro I, Tít. VI, *De electione et electi potestate*, Cap. VII, fol. 38:

“Electio ad episcopatum fieri debet de digno scientia, moribus, aetate, quod habeas tricesimum annum completum: praesenti decreto statuimus, ut nullus in episcopum eligatur, nisi qui iam tricesimum annum aetatis exegerit”

El concilio tridentino, en su sesión 7, cap. 1, *De reformatione*, fols. 118-120 de la o.c., sin confirmar expresamente la anterior disposición del romano Pontífice Alejandro III, se contentó con decir que ninguno será elevado al episcopado sin tener una edad madura.

“Ad cathedralium ecclesiarum regimen nullus, nisi ex legitimo matrimonio natus, et aetate matura, gravitate morum literarumque scientia, iuxta constitutionem Alexandri III, quae incipit: cum in cunctis, in concilio Lateranensi promulgatam, praeditus assumatur”

Pero estas disposiciones no se aplicaban con rigidez, pues mediante dispensa se concedían beneficios, sobre todo, sin cura de almas y simples a sujetos con edades inferiores a las prescritas por los cánones.

b) La probidad de costumbres comprende la sincera intención de ser clérigo, pues el que, sin ese propósito, acepta el beneficio con el solo fin de asegurarse la supervivencia a través de unas rentas mientras cursa estudios o hasta que consigue un matrimonio ventajoso es reo de pecado mortal:

*“Qui accipit beneficium eo tantum animo ut eius fructibus alatur donec studia absolverit, vel opulentam uxorem invenerit, cum animo tunc deferendi, peccat mortifere, nec potest istud beneficium retinere”*¹⁶⁴.

c) Es necesario que los que sean promovidos a los beneficios eclesiásticos tengan la aptitud necesaria mediante el saber y la ciencia necesaria para desempeñar las funciones que les correspondan y cumplir con los oficios y deberes propios de los mismos, pues la falta de ciencia es una de las irregularidades que impiden recibir las órdenes y, en consecuencia, un beneficio.

Los curatos deben conferirse a los que estén dotados de mayores conocimientos en las Escrituras y sagrados cánones, a igual que las dignidades de iglesias catedrales y colegiadas, que deberán conferirse a personas esclarecidas por su ciencia y con grados académicos en teología y derecho canónico¹⁶⁵.

Este es el deseo del concilio tridentino, que se plasma en la sesión 22, cap. 2, *de Reformatione*, o.c., fols. 333-334, al ordenar qué ciencia deben tener los que sean promovidos a las iglesias catedrales:

“Quicumque posthac ad ecclesias catedrales erit assumendus...Scientia vero praeter haec eiusmodi polleat, ut muneris sibi iniungendi necessitate possit satisfacere. Ideoque antea in universitate studiorum magister, sive doctor, aut licenciatus in sacra teología, vel iure canonico, merito sit promotus”.

Y sigue, en la sesión 24, cap. 12, *de Reformatione*, o.c., fols. 441 y 443-444:

“Nemo igitur deinceps ad dignitates quascumque, quibus animarum cura subest, promoveatur... doctrina ad suum munus exequendum necessaria”.

“Dignitates omnes, et saltem dimidia pars canonicatum, in cathedralibus ecclesiis, et collegiatis insignibus conferantur tantum magistris, vel doctoribus, aut etiam licenciatis in theologia, vel iure canonico”.

¹⁶⁴ L. Lesio, *De Iustitia et iure...*, o.c., II, cap. XXXIV, dubit. XXVI, n° 132, fol. 441. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 20, art. 3, p. 165.

¹⁶⁵ “*Tertio archidiaconi, qui oculi dicitur episcopi, debent esse in omnibus ecclesiis, ubi fieri poterit, magistri, seu doctores, aut licenciati in teologia, vel iure canonico*”. N. García, *Tractatus de Beneficiis...*, o.c., tomo II, parte 7, cap. VII, 36, fol. 44, siguiendo lo prescrito por el concilio tridentino. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XLVI, IV, p. 152. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XXI, §.238, p. 232.

Pero tampoco los exigentes requisitos culturales eran respetados, sobre todo en los beneficios que no tienen cura de almas. La principal razón que se esgrimía es que si esa carencia no era obstáculo para acceder a las órdenes, tampoco lo era para obtener beneficios.

d) El estado clerical. El beneficio lleva anejo un oficio espiritual, del cual son incapaces los legos, *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro III, Tít. VII, *De institutionibus*, Cap. II, fol. 388:

“Laici in canonicus non possunt institui”

El promovendo debe haber recibido cierto orden y el sacerdocio o, al menos, la primera tonsura, *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro I, Tít. XIV, *De aetate et qualitate et ordine praeficiendorum*, Cap. XI, fols. 101-102:

“Eum existere sacerdotem, per primam tonsuram, iuxta formam ecclesiae datam, a talibus clericalis ordo confertur”

Sin este requisito es inhábil para todo beneficio eclesiástico¹⁶⁶, ya que ni aún basta tonsurarse después de obtener el beneficio sino hay dispensa del Romano Pontífice, según *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro I, Tít. XXXVI, *De transactionibus*, Cap. VI, fol. 169:

“Si beneficium, quod per transactionem habetur, impetratur ut vacans, ab eo, qui fuit transactionis mediator, non valet impetratio”

e) El orden sagrado. Siendo el beneficio eclesiástico una consecuencia del oficio espiritual o ministerio sagrado, es claro que los legos, que son incapaces de ejercer éste no puedan tampoco considerarse hábiles para obtener aquel. Por tanto, se requiere en el que ha de ser provisto en un beneficio el carácter de orden, bastando para el beneficio simple con la primera tonsura.

En consecuencia, cuantos obtienen un beneficio eclesiástico deben recibir dicho estado dentro del año transcurrido después de la colación, según prescribe el *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, In Sexto, I, Tít. VI, *De Electione et electi potestate*, cap. XIV, fol. 18:

“Et intra annum a sibi commissi regiminis tempore numerandum, se faciat ad sacerdotium promoveri. Quod si intra idem tempus promotus non fuerit, ecclesiam sibi commissam, nullam etiam praemissam monitione, sit praesentis constitutionis auctoritate privatus”

Esta anterior disposición se refiere sólo a los beneficios parroquiales y no abarca ni las dignidades, ni los demás beneficios en general, pues para ser privado de éstos se necesita la monición o amonestación previa y señalar un plazo prudencial al arbitrio del ordinario del lugar.

¹⁶⁶ D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XLVI, III, p. 151. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 20, art. 3, p. 166. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XXI, §.237, p. 230.

El Concilio Pictaviense de 1078 ya exigió en los arciprestes, abades, deanes y prepósitos el orden del presbiterado y en los arcedianos el del diaconado.

Para el canonicato se requiere el orden sacro, para el arcedianato se exige el diaconado y para los beneficios que tienen anexa la cura de almas, así como para el gobierno de una iglesia parroquial, se requiere el presbiteriano (*Concilium Tridentinum* sesión 24, cap. 12, *de Reformatione*, o.c., fol. 443):

“Neminem etiam deinceps ad dignitatem, canonicatum, aut pottionem recipiant, nisi qui eo ordine sacro aut sit initiatus, quem illa dignitas, prae-benda, aut portio requirit.”

f) Que no esté incurso en excomunión u otra irregularidad o censura eclesiástica, pues la elección sería nula. También se excluye de los beneficios a los infieles, herejes y cismáticos.

g) Nacimiento legítimo. Aunque el obispo puede conceder a los que no son de legítimo matrimonio permiso para recibir las órdenes menores y los beneficios simples, con tal de que no sean hijos ilegítimos de clérigos. Respecto a beneficios curados se necesita la licencia del obispo y del Sumo Pontífice. En la práctica, abundaron las excepciones mediante dispensa, como así lo demuestra el *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, In Sexto, I, Tít. XI, *De filiis presbyterorum*, cap. I, fol. 41:

“Cum illegitime natis dispensant episcopi in minoribus ordinibus, et beneficio sine curo, dummodo sit tale, in quo alias dispensare possint: in aliis dispensario Papa requiritur.”

h) El celibato. No pueden obtener beneficios los clérigos casados, pues toda concesión a persona unida en matrimonio es inválida, sino es que, con consentimiento de la mujer, haga voto de castidad perpetua y no sea bígamo: *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro III, Tít. III, *De clericis coniugatis*, Cap. II, fol. 366.

“Coniugatus ad administrationem, ad ordinem ecclesiasticum, vel beneficiorum non promovetur, nisi castitatem promittet, non sit bigamus”.

8.- MODOS DE CONFERIRSE LOS BENEFICIOS.

Cierto es que es un derecho propio de toda sociedad el de designar las personas que constituyan su gobierno, dirección y administración. La Iglesia, como sociedad cristiana, tiene también este derecho consignado por su fundador al instituir la jerarquía de orden y jurisdicción. La disciplina sobre adquisición de cargos eclesiásticos también afectó a la forma de proveer o conferir los beneficios.

Según Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. XIII, 1, fol. 224, hay muchos modos o formas de adquirir un beneficio canónico:

“Multis namque modis beneficia canonice acquiruntur, veluti per collationem..., institutionem..., electionem, postulationem.”

Pero hay cuatro modos principales para conferir los beneficios eclesiásticos: por elección, postulación, colación e institución. Las dos primeras formas se usan generalmente para la provisión de beneficios mayores.

8.1.- Elección¹⁶⁷.

Con este nombre se significa todo llamamiento o designación de un clérigo para ser promovido a una dignidad eclesiástica. Azor (*Institutionum moralium*, o.c., II, Libro VI, cap. XIV, *secundo quaeritur*, fol. 1052) lo define como:

“Electio esse idoneae personae ad ecclesiam suo praeposito viduatam, iuris forma servato, rite et legitime factam optionem.”

Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., Título XXI, Cap. III, 1, fol. 38. define la elección como

“Quatenus aliqua persona ad certam ecclesiae functionem, aut dignitatem e pluribus eligitur.”

Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., Libro I, V, I, fols. 259 y 260, nos dice que la elección es:

“Idoneae personae ad ecclesiasticum magistratum, aut dignitatem vacantem canonice facta vocatio. Ea proprie pertinet ad majores ecclesiae dignitates, ad summum Pontificem, ad episcopos, ad praelatos sive saeculares, sive regulares, qui aliis praeficiuntur.”

Aquí, especialmente, se entiende por elección la vocación canónica de una persona idónea para un beneficio eclesiástico vacante, la cual debe hacerse por los que tienen derecho de elegir, reunidos en comunidad, cuerpo o cabildo y debe ser confirmada por la autoridad competente.

Se llama elección canónica la que se celebra con arreglo a las prescripciones de los sagrados cánones. Se requiere que haya beneficio vacante y, por parte de los electores, que todos sean citados y que pertenezcan al cuerpo del capítulo:

*“Per electionem providetur ecclesiae cathedrali, vel collegiatae, seu conventuali: et tunc electio a collegio vel congregatione.”*¹⁶⁸

Anteriormente al siglo XII había una gran confusión a causa de las variaciones acaecidas en el estado de los beneficios y en el modo de proveerlos. La Iglesia, reunida

¹⁶⁷. “Singulos itaque nunc acquirendi beneficia modos perturramus: primus est modus electionis: electio enim est ad praelaturas, vel ad beneficia vacantia ab his”. P. Rebuffo, *Praxis beneficiorum*, Romae 1595, tit. *De electione*, 1, fol. 19. “Qui sit electio? Late pro vocatione personae idoneae ad beneficium ecclesiasticum quaecumque, facta canonice per suffragia, et superioris legitimi confirmationem”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum*, Romae 1844, tomo I, parte 1ª, título VI, I, fols. 304-305. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 20, art. 4, p. 169. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 221.

¹⁶⁸ P. Rebuffo, *Praxis beneficiorum*, o.c., tit. *De electione*, 2, fol. 19.

en Letrán, en 1215, puso freno a todo ello mediante un canon, que dispone que la elección, según el capítulo “*Quia propter*” de las Decretales, se puede hacer de tres formas distintas: por inspiración o cuasi inspiración, por compromiso y por escrutinio¹⁶⁹.

La primera es cuando todos los que tienen el derecho de sufragio convienen, sin acuerdo previo, unánimemente, en la elección de una persona, como inspirados por Dios. Este modo de elección es la señal menos equívoca de una vocación canónica y la más recomendable en la elección de sujetos para las dignidades eclesiásticas, pero suele suceder muy pocas veces, pues la menor discusión o la más insignificante contradicción impide que la elección se tenga hecha por inspiración.

Schmalzgrueber y Devoti, en sus obras ya citadas, al fol. 339 y al 272, respectivamente, describen muy bien esta forma de proveer los beneficios eclesiásticos:

“De primo electionis (per inspirationem divinam) modo nihil hic disputandum occurrit, quae quasi a Deo esse censetur, quando nullo praecedente tractatu de certa persona eligenda, electores in loco congregati unanimiter omnes simul in unum absque contradictione, vel haesitatione statim consentiunt, et conclamant.”

“Denique per quasi inspirationem electio absolvitur, cum electores omnes quasi divino spiritu afflati in eum repente feruntur, de quo antea vix cogitaverant.”

Por compromiso, cuando todo el capítulo o cuerpo de electores transfiere o cede su derecho a un elector o varios, para que ellos procedan en exclusiva a la elección, los cuales deben expresar su consentimiento, de forma que si uno se opone, no puede llevarse a cabo este modo de elección. Los compromisarios están obligados, de forma estricta, a cumplir la forma y condiciones del mandato; de manera que si las infringen, la elección es nula:

“Alter modus eligendi est per compromissum, quando a capitulo, nemine dissentiente, uni vel pluribus, etiam extra gremium capituli existentibus clericis, electio committitur” (Devoti, o.c., fol. 272).

Por escrutinio, cuando se nombran tres escrutadores del número de los electores, los cuales recogen secretamente los votos de cada uno y lo publican, teniéndose por elegido el que haya reunido a su favor la mayor parte de los sufragios de los electores, es decir, la mitad más uno.

“Fit scrutinium electis tribus scrutatoribus, quorum est colligere suffragia singulorum, quae certa, et vacua conditione, atque ambiguitate esse debent..., ut vel ipsi vel iis praesentibus, tabellio in scriptum redigat suffragia singulorum,

¹⁶⁹ “*Per aliquam de tribus formis hic contentis, scilicet scrutinii, compromissi et inspirationis, procedi debet ad electionem in ecclesiis cathedralibus*”. *Corpus Iuris Canonici*, o.c., Decretales, Libro I, Tít. VI, *De electione et electi potestate*, Cap. XLII, fol. 65. “*Triplex forma electionis proponitur a Concilio Lateranensi sub Inocencio III, per compromissum, per inspirationem quasi divinam et per scrutinium*”. Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., Título XXI, Cap. IV, I, fol. 40. “*Tribus autem modis, alio praetera nullo, electio perficitur, per scrutinium, compromissum et quasi inspirationem*”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., Libro I, V, I, XVIII, fol. 271.

eaque mox publicent, hoc est patefaciant, ut electus censeatur, in quem maior et sanior pars capituli consensit” (Devoti, o.c., fol. 271).

Celebrada la elección se pide el consentimiento del electo, que debe presentarlo en el término de un mes, sino queda privado de su derecho. En el plazo de tres meses debe pedir la confirmación al superior¹⁷⁰.

8.2.- Postulación¹⁷¹.

Es subsidiaria de la elección. Tiene lugar cuando el que ha de ser elegido para el beneficio eclesiástico está ligado con algún impedimento canónico que obsta a la elección.

Su definición es la siguiente: la postulación es la petición que hacen los electores al superior jerárquico eclesiástico, de aquel que, por un impedimento canónico, no puede ser elegido, para que tenga a bien admitirlo por gracia, dispensándole el impedimento. Es la llamada postulación simple. La solemne es la petición al Romano Pontífice para que, mediante dispensa, eleve al episcopado a alguien que no puede elegirse mediante las disposiciones canónicas¹⁷².

La principal diferencia de la postulación con la elección es que en la primera se hace en persona que por algún defecto o impedimento no es elegible y en la segunda se hace en persona hábil para la dignidad. En la postulación se necesita dispensa, por ejemplo, en los casos de nacido de matrimonio ilegítimo, si no se tiene la edad requerida, el defecto de orden sacro u otro impedimento semejante.

La postulación no confiere ningún derecho al postulado, en razón del impedimento que le obsta, mientras que la elección canónicamente celebrada y aceptada por el electo, confiere a éste un verdadero derecho y no puede ser invalidada, mientras que la postulación puede ser revocada.

La elección requiere, como se ha visto, mayoría absoluta de votos de los electores, mientras que la postulación necesita las dos terceras partes de los votantes, y si no se alcanza dicha mayoría la postulación no tiene efecto.

¹⁷⁰ “*Eligentes, quam cito commode possunt, electionem electo praesentent. Electus intra mensem consentiat: alias privatus est iure quasito, nisi conditio personae ipsum excuset. Post consensum confirmationem petat intra tres menses, alias electio viribus vacuetur*”. *Corpus Iuris Canonici, o.c., Decretales*, In Sexto, I, Tít. VI, *De Electione et electi potestate*, cap. VI, fol. 15.

¹⁷¹ “*Postulatio, est supplex quaedam a collegio canonicorum facta apud superiorem petitio, qua petitur ut aliquis certae ecclesiae vacanti praeficiatur, qui propter impedimentum canonicum, quod non est animi, vel corporis vitium; elegi iure non potest*”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., II, Libro VI, cap. XVII, *secundo quaeritur*, fol. 1075. “*Cum aliquis eligendus est, qui canonico impedimento laborat, ita ut eius electio rata firma haberi non possit, rogare oportet eum, cui ius est dandae veniae, ut vitium illud et impedimentum removeat*”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., Libro I, V, II, fols. 274-275. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., tomo III, Cap. 22, art. 6, pp. 183 y ss.

¹⁷² “*Postulatio simplex fieri debet ab eo superiore, cui postulatus immediate subest. Solemniter, postulationem instituendam ad ipsum pontificem*”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., tomo I, parte 1ª, título V, III, fol. 297.

8.3.- Colación¹⁷³.

Lo que se denomina colación es un concepto amplio, según expone Jerónimo González, *Commentatio ad regulam octavam Cancellariae...*, glosa 16, 9, fol. 309, basándose en *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Clementinas*, Libro III, Tít. III, *De concessione praebendae et ecclesiae non vacantis*, Cap. Unic., fol. 222, que dice:

“Quin etiam beneficium, quod acceptare poterat, petendo sibi per suum executorem conferri, aut recipiendo sibi praesenti collatum: ipsum ex hoc acceptare, et collationem taliter sibi factam valere censemus.”

González formula así dicho concepto, construido de muchas maneras:

“Sciendum quoque est, quod hoc nomen collatio, est latum et comprehendit in se praesentationem, electionem, et confirmationem, et institutionem..., ut ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur”.

Es la concesión del beneficio vacante, hecha libre y canónicamente por el que tiene legítima autoridad. Su diferencia con la elección y la postulación en que el que elige no da, sino que pide que se dé el beneficio u oficio, pero el que confiere da por sí mismo. La concesión por uno se llama colación y la hecha por muchos es la elección.

La colación, desde antiguo, tuvo diferentes nombres: incardinación, asignación y adscripción. Pero a partir de los siglos XI-XII se introdujo la voz “colación” por conferirse el beneficio por un acto especial separado de la ordenación.

Hasta el siglo XI no requería de ninguna formalidad, correspondiendo al obispo, pues nadie excepto él podía conferir beneficios, pues sólo el obispo tenía la facultad de ordenar, y en la ordenación iba unida la colación¹⁷⁴. Pero a partir de esa fecha se empezó a conferir los beneficios por un acto especial, diferenciándose por actos distintos la ordenación y la colación del beneficio. Así, la ordenación corresponde al orden

¹⁷³ “Ex quo sit, ut beneficia in iure, triplicis generis reperiantur: alia collativa, hoc est, nullo iure patronatos affecta, idcirco haec cum clericis dantur”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Tomus II, Libro VI, cap. XXV, fol. 1112. “Beneficia regularia sunt duplicia, quaedam collativa, quaedam electiva: collativa dicuntur quae instar saecularium conferuntur auctoritate superioris”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., 72, fol. 30. “Beneficia est collatio, quod sit assignatio, seu concessio beneficii vacantis facta ab habente potestatem, ab ordinario”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., tomo III, parte 1ª, título V, III, fol. 139. “Collatio est modus alius, quo ecclesiasticos magistratus et beneficia adipiscimur. Definitur, beneficii vacantis ab habente potestatem libere facta concessio”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., Libro I, V, III, fol. 276. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XIX, §.209, pp. 197 y ss. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 22, art. 7, pp. 185 y ss. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 581

¹⁷⁴ “Omnes basilicas ad cum pertinent episcopum, in cuius territorio positas sunt”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano, o.c., parte 2, c. X, causa XVI, quaest. VII, fol. 691. “Episcopus in ecclesiis diocesis suae debet esse contentus iuribus episcopatibus: quae sint iura episcopalia, declarat. Ut in ecclesiis seu capellis tuae diocesis, ad monasterium ipsum spectantibus, habeas canonicam obedientiam, institutionem..., quae ab episcopo sunt recipienda, collationem, synodum...” *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro I, Tít. XXXI, *De officio iudicis ordinarii*, Cap. XVI, fol. 156.

La Iglesia de España fue de las primeras que mandaron que la colación de los beneficios fuese propia de los obispos. Así lo expresa el IV Concilio de Toledo, de 633, presidido por S. Isidoro de Sevilla. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XLI, II, p. 114.

episcopal, que adquiere el obispo por la consagración, mientras que la colación corresponde a la potestad de jurisdicción, que adquiere por la confirmación. De esta forma se introdujeron las ordenaciones sin título. Como la potestad de orden sólo puede ejercerse por el obispo, la colación de órdenes fue siempre de su exclusiva, pero como la potestad jurisdiccional puede adquirirse por otras personas en virtud de delegación, costumbre, prescripción y privilegio, se consideró que la colación del beneficio no era privativa del obispo¹⁷⁵.

Desde entonces los cabildos de algunas catedrales e iglesias colegiadas adquirieron la facultad de colar beneficios, pretendiendo con ello ampliar sus prerrogativas y tener mayor participación en la provisión de prebendas sin contar con el obispo.

La colación se divide en libre y necesaria. La primera es la que se hace *ex necessitate iuris*, en cuanto la motiva la presentación, nominación o mandato del superior, sin que el ordinario pueda dejar de conferir el beneficio al nombrado. La libre o voluntaria es la que emana de la voluntad del prelado en virtud de un derecho propio.

Para evitar fraudes en las colaciones, el Concilio de Valladolid¹⁷⁶ prescribió las siguientes solemnidades:

- Que la colación se confiera en el capítulo o en presencia de un escribano público.
- En su defecto, en presencia de testigos fidedignos, o teniendo a la vista la carta del mismo prelado.

La disciplina que estaba vigente en España respecto a la colación de beneficios era la consignada en el Concordato de 1851.

A) Tiempo requerido para conferir la colación.

Conociendo los padres del Concilio Lateranense III¹⁷⁷ los perjuicios que se estaban causando a las iglesias por las largas vacantes benéficas, decidieron fijar un plazo de tiempo para la provisión de las prebendas eclesiásticas y de cualesquiera otros oficios, lo que se recoge en el *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro I, Tít. VI, *De electione, et electi potestate*, Cap XLI, fol. 65.

“Ne pro defecto pastoris gregem dominicum lupus rapax invadat, aut in facultatibus suis ecclesia viduata grave dispendium patiatur; volentes in hoc etiam occurrere periculis animarum, et ecclesiarum indemnitatibus providere:

¹⁷⁵ “Collator est omnium beneficiorum suae dioceseos episcopus. Huc leges, consuetudines, foundationes, per quas certa beneficia vel ab episcopo cum capituli consensu, vel coniunctim cum eo, vel alternatim, vel a solo capitulo conferuntur”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., Libro I, V, III, fol. 277. J. Escriche, *Diccionario razonado de legislación...*, I, o.c., tomo II, p. 317. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XIX, §.212, p. 199. L. Arrazola y García, *Enciclopedia española de Derecho...*, o.c., p. 265.

¹⁷⁶ J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones de la Iglesia española*, Madrid 1851, Parte segunda, tomo III, Concilio de Valladolid de 1322, Cap. 10, p. 488.

¹⁷⁷ A. Andrés, *Diccionario de Derecho Canónico...*, o.c., pp. 232-233. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo I, p. 383.

statuimus, ut ultra tres menses cathedralis vel regularis ecclesia praelato non vacet”.

De esta forma, las dignidades de los cabildos, los curatos y todos los beneficios menores deben conferirse en el término de seis meses. Los obispados y las dignidades mayores regulares en tres meses¹⁷⁸. El tiempo empieza a correr desde el día en que se sabe la vacante, es decir, desde que llega la noticia al colador. No se ha de computar el tiempo que haya corrido por impedimento de hecho o de derecho. Concluido el tiempo, el colador queda destituido de todo derecho:

Corpus Iuris Canonici, o.c., Decretales, Libro III, Tít. VIII, De concessione praebendae, et ecclesiae non vacantis, Cap V, fol. 391:

“Semestre autem tempus non a tempore vacationis praebendarum, sed notitiae ipsius potius volumus computari”.

B) El derecho de devolución¹⁷⁹.

El origen del derecho de devolución se remonta al siglo XII, según la opinión de los canonistas, pues aunque se encuentra en disposiciones conciliares anteriores, el colador no podía ser privado del derecho de conferir. Este derecho fue establecido en el III Concilio de Letrán y desarrollado por Inocencio III y Clemente V.

La omisión de las formalidades canónicas en la provisión del beneficio o transcurrido el tiempo dentro del cual debe hacerse la colación del mismo, si no ha habido justa causa que lo impida, privan al colador inferior de su derecho de conferir, pues la negligencia de éste no puede perjudicar los intereses de la Iglesia, por lo que la

¹⁷⁸ “Cum vero praebendas ecclesiasticas, seu qualibet officia in aliqua ecclesia vacare contigerit, non diu maneant in suspenso, sed intra sex menses personis, quae digne administrare valeant, conferantur”. *Corpus Iuris Canonici, o.c., Decretales..., o.c., Libro III, Tít. VIII, De concessione praebendae, et ecclesiae non vacantis, Cap II, fol. 389* “Mayores vero dignitates, ut episcopales et aliae, dent intra tres menses tribui. Aliae vero dignitates inferiores, et qualibet beneficia regulariter debent concedi intra sex menses, sive per electionem, sive per collationem”. P. Rebuffo, *Praxis beneficiorum, o.c., tit. De devolutionibus, 4, fol. 156.* “De beneficiis vacantibus providere debent iis, ad quos provisio spectat infra sex menses”. N. García, *Tractatus de Beneficiis..., o.c., tomo II, decima pars, Cap. 2, 1, fol. 169.* “Regulariter debent conferri beneficia infra sex menses”. P. de Murga, *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis..., o.c., quaestio tertia, VII, 383, fol. 345.* “Iuxta hoc decretum beneficiis vacantibus providere debet intra sex menses: dique sive per collationem, sive per electionem providendum sit. [...] Episcopatibus enim et maioribus dignitatibus regularibus provideri debere intra tres menses statuit Concilium Lateranense sub Innocentio III”. Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum..., o.c., Título XXI, Cap. V, I y II, fol. 42.* P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico..., o.c., XIX, §.215, p. 203.*

¹⁷⁹ “De devolutione, hoc est, de iure beneficia conferendi, quod tanquam caducum ad superiores devolvitur”. J. Azor, *Institutionum moralium, o.c., Libro VI, Cap. XXVII, fol. 1129.* “Si ii ad quos spectat, non provident de beneficiis vacantibus infra tempus praefixum, ad superiores gradatim sit devolutio”. N. García, *Tractatus de Beneficiis..., o.c., tomo II, decima pars, Cap. 3, 1, fol. 173.* “Deinde iure devolutionis beneficia ecclesiastica conferuntur a Papa, quando propter negligentiam conferendi, vel moram eligendi ad inferioribus ecclesiae praelatis commissan, talis potestas conferendi ab inferioribus devolvitur ad Summum Pontificem..., vel ad proximum superiorem”. A. Reiffenstuel, *Theologia Moralis..., o.c., XI, distinctio I, quaestio III, 33, fol. 272.* D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico..., o.c., II, Cap. XLI, VII, p. 117.* J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho..., o.c., p. 589.*

provisión pasa al inmediato superior, el cual la realiza por derecho de devolución. Se entiende por inmediato superior aquel que lo es por razón de la diócesis donde se halla el beneficio, no el que lo es respecto de aquel que debió conferirlo. Por tanto, la negligencia de los cabildos e inferiores la suple el obispo, la de éste el metropolitano, y la del metropolitano, el Pontífice. La del Romano Pontífice no la suple nadie, pues no reconoce superior en lo espiritual.

Azor (*Institutionum moralium*, o.c., Libro VI, cap. XXVII, primo quaeritur, fol. 1129), define la devolución como:

“Quandocumque beneficio intra certum temporis spatium iure praescriptum non conceditur, et propterea ad alium translatus est ius illud conferendi, dicitur per devolutionem pertinere ad eum, ad quem translatus est”.

La devolución es, en realidad, una provisión extraordinaria, que corresponde al superior por exceso o negligencia del inferior. El fundamento general de este derecho está en la necesidad que toda sociedad tiene, y en este caso la Iglesia, de que haya una autoridad superior que corrija los excesos o supla los defectos del inferior, a la que se le devuelva el derecho a conferir.

A toda colación o provisión del superior por negligencia del inferior, es aplicable la regla de que la devolución procede con las cualidades y a favor de las personas que había en la primera colación, es decir, que el superior, al suplir la negligencia del inferior, pasa a ejercer el derecho de éste, por lo que debe cumplir las mismas reglas¹⁸⁰.

La devolución por abuso o exceso (cuando el superior inmediato confiere antes de transcurrir el término que le da derecho devolutivo) tiene lugar cuando el colador es suspendido o hay nulidad en la colación, o ésta siendo libre se ha hecho en una persona indigna o incapaz.

El III Concilio de Letrán, estableció el derecho de devolución para la provisión de beneficios por negligencia de los coladores y fijó en seis meses el término para llevarla a efecto.

“Sic tamen, ut tempus suspensionis in sex mensibus nullatenus computetur: Cum illa Lateranensis Concilii constitutio contra negligentes tantum fuerit promulgata; et tunc si voluerit, non tamen valuerit archiepiscopus in conferendis praebendis uti propria potestate.

Tempus etiam, quo ad sedem apostolicam accessit, et apud illam permansit, vel recessit ab illa: intra sex menses nullatenus computetur”.

¹⁸⁰ Así lo dispone un canon del Concilio de Viena, de 1311-1312, del Papa Clemente V. *“Si praelati regulares non conferunt intra sex menses prioratus, administrationes, et ecclesias vacantes, quae non sunt de mensa, sed solent speciales rectores habere: dioecesani auctoritate sua vel apostolica, si sint exempta, conferunt illi personis, quibus per praelatos fuerant conferenda”.* *Corpus Iuris Canonici*, o.c., Clementinas, Libro I, Tít. V, *De supplenda negligentia praelatorum*, Cap. Único, fol. 200. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo II, p. 224. L. Arrazola y García, *Enciclopedia española de Derecho...*, o.c., p. 291.

Corpus Iuris Canonici, o.c., *Decretales*, Libro III, Tít. VIII, *De concessione praebendae, et ecclesiae non vacantis*, Cap V, fol. 391.

La devolución por negligencia en la provisión de las prelacías electivas para iglesias catedrales y regulares se reguló posteriormente en el Concilio IV Lateranense, por el que se dispuso que ninguno de ellos estuviese vacante más de tres meses: *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro I, Tít. VI, *De electione, et electi potestate*, Cap XLI, fol. 64.

“Si illi, ad quos spectat electio, negligunt eligere praelati cathedralis vel regularis ecclesiae intra tres menses, proximo superior ecclesiam ordinabit: quod si intra tres alios menses non fecerit, canonice punietur”.

C) Las reservas pontificias¹⁸¹.

Son los decretos o mandatos por los cuales el Romano Pontífice se apropia de la colación o se reserva el nombramiento y colación de ciertos beneficios, cuando lleguen a vacar, y que corresponden a Obispos u otros coladores inferiores, con la prohibición a los electores o coladores de proceder a la elección o colación de estos beneficios bajo pena de nulidad.

Las reservas pueden ser generales y particulares. Las generales comprenden todos los beneficios de una clase. Las particulares sólo comprenden algún beneficio determinado. A esta clase pertenecen las reservas mentales, introducidas por Julio II (1503-1513), que son aquéllas por las cuales el Papa se apropia de antemano la colación de un beneficio para conferirlo, en su día, a una persona cuyo nombre se ignora y que tiene reservado *in mente*.

Las reservas pueden clasificarse por razón del tiempo, de la dignidad de las personas y por razón de la dignidad de los beneficios. Otra es la que las clasifica según la norma donde están contenidas: reservas contenidas en el cuerpo del Derecho, las contenidas en las Extravagantes y reglas de la Cancelaria¹⁸² y las contenidas en las Constituciones posteriores.

En el cuerpo del Derecho está la reserva sancionada por Clemente IV (1265-1268) de los beneficios vacantes por muerte acaecida en la curia romana, reserva que amplió Bonifacio VIII (1294-1303) a los beneficios obtenidos por los legados y nuncios apostólicos si fallecían en Roma o en un punto confinante con la curia romana; y

¹⁸¹ “*Licet ecclesiarum, personatum, dignitatum, aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum plenaria dispositio ad Romanum noscatur Pontificem pertinere, ita quod non solum ipsa, cum vacat, potest de iure conferre, verum ecclesiarum, personatum, dignitatum, et beneficiorum apud sedem apostolicam vacantium, specialius caeteris antique consuetudo Romanis Pontificibus reservavit*”. *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, In Sexto, I, Tít. IV *De praebendis et dignitatibus*, Cap. II, fol. 84. “*Sed summus etiam Pontifex, cuius potestas fertur in omnes dioeceses, omnium beneficia conferre potest; et ideo sibi merito quorundam collationes reservavit*”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., Libro I, V, III, 30, fol. 280. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XX, §.222, p. 209.

¹⁸² Son decisiones y resoluciones de la Cancillería romana, de ahí la palabra “Cancelaria” dictadas por cada Pontífice para que rijan durante su vida. Dichas disposiciones son renovadas y confirmadas por cada nuevo Papa. Su objeto es la disposición de los beneficios, la forma de su provisión y el procedimiento de los juicios eclesiásticos. A. Andrés, *Diccionario de Derecho Canónico...*, o.c., tomo IV, p. 238.

también a los beneficios de los curiales (*Corpus Iuris Canonici, o.c., Decretales, In Sexto, III, Tít. IV, De praebendis et dignitatibus, cap. XXXIV, fol. 95*).

“Beneficia morientium etiam in loco vicino curia Romanae per duas diaetas legales, vel sede ipsa vacante, ibi causam, domicilium vel originem non habentium, vel etiam habentium, sed curialium, et ibi causa Romanae curia morantium, vel translata curia eam sequentium, et in itinere decedentium, vel in loco, unde recessit curia, in quo remanserant infirmi: conferri nequeunt per alium, quam per Papam”.

Respecto a las contenidas en las Extravagantes, Juan XXII (1316-1334), añadió a la colación pontificia todos los beneficios mayores o menores que vacasen en ella, así como los de los cardenales, legados y ministros de la curia, cualquiera que fuese el lugar donde falleciesen (*Corpus Iuris Canonici, o.c., Extravagantes Communis, I, Tít. III, De electione, cap. IV, Ex debito, fol. 313*).

“Cum beneficia apud Sed. Apost. vacantia sint soli Papae reservata, ostendit, quae et quorum apud sedem vacare dicantur eandem. Et primo loquitur de reservationibus, secundo de pensionibus”.

Más tarde, Benedicto XII (1334-1342), después de confirmar todas las anteriores, reservó a la Santa Sede los beneficios que vacasen por promoción a obispado o traslación a otro, o muerte de alguien de la curia (*Corpus Iuris Canonici, o.c., Extravagantes Communis, III, Tít. II, De praebendis et dignitatibus, cap. XIII, Ad regimen, fol. 347*).

“Dispositioni apostolicae reservantur beneficia curialium, et aliorum ad curiam accedentium, vel ab ea recedentium, si moriantur in locis ultra duas diaetas legales ab ipsa curia non distantibus”.

También las reglas de la Cancelaria comprenden varias reservas, renovando de las Extravagantes la mencionada *ad regimen*, reservándose, en la primera regla, además, los beneficios en cuya colación no se haya observado lo mandado por el Concilio de Trento. Las siguientes reglas siguen ampliando las reservas del Sumo Pontífice a dignidades mayores en iglesias catedrales, obispados, colegiatas, dejando únicamente a los obispos la colación de beneficios menores no reservados.

Es evidente que la extensión de las reservas, continuamente ampliadas, pone en quiebra el procedimiento electivo de provisión de los beneficios, pero las ventajas espirituales son innegables, como también las materiales, porque permitía hacer presente la autoridad pontificia en toda la Cristiandad y suponía considerables ingresos derivados no sólo de las cantidades satisfechas por la designación, sino por el cobro de las rentas durante las vacantes de los cargos bajo reserva.

El sistema también ofrecía importantes ventajas de carácter político, ya que a través de los nombramientos, el Pontificado cuenta con una jerarquía eclesiástica favorable a sus disposiciones.

En las complicadas circunstancias políticas de la época, era de suma importancia disponer de un clero favorable disperso por todo el orbe cristiano. También las monarquías estaban interesadas en el proceso de centralización pontificio. Para los poderes temporales, era más fácil negociar un nombramiento de un beneficio con el Pontífice que tener complejas discusiones con cabildos o abadías.

D) De los mandatos de pro dividendo, expectativas y prevenciones.

A partir del siglo XII los romanos Pontífices extendieron su jurisdicción en materia benefical por todo el Occidente. Ello tuvo lugar por medio de los mandatos, reservas y prevenciones. El primero que concedió mandatos fue Adriano IV (1154-1159), y a partir de ahí continuaron sus sucesores.

Los mandatos eran rescriptos apostólicos concedidos para la colación de beneficios, donde el romano Pontífice mandaba al colador que confiriese un beneficio al clérigo que en él se expresaba. En origen eran letras de recomendación al Obispo a favor de un determinado clérigo para que se le otorgase un beneficio, pero como los obispos los rehusaban con frecuencia, pasaron a ser obligatorios. Eran de dos clases: para los beneficios que ya estaban vacantes o para los que primero vacasen, que en este caso se llamaban “gracias expectativas”¹⁸³. Las expectativas eran letras apostólicas que contenían un beneficio a favor de un sujeto.

Las prevenciones eran unos derechos que tenía el romano Pontífice para conferir beneficios en concurrencia con los Ordinarios, de manera que era preferida la colación que se hubiese hecho primero. Así, el Papa se anticipaba al colador ordinario, nombrando antes que él los beneficios¹⁸⁴.

El Concilio de Trento mantuvo las reservas pero suprimió, en el capítulo 19 de la sesión 24, *de Reformatione*, los mandatos, las expectativas y las reservas mentales:

“Decernit sancta Synodus, mandata de providendo, et gratias, quae Expectativa dicuntur, nemini amplius, etiam collegiis, universitatibus, senatibus, et aliis singularibus personis..., nec hactenus concessis cuiquam uti licere. Sed nec reservationes mentales, nec aliae quacumque gratiae ad vacatura, nec indulta ad alienas ecclesias, vel monasteria alicui, etiam ex sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, concedantur; et hactenus concessa, abrogata esse censeantur.”

¹⁸³ D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XLII, II, p. 120. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XX, §.219, p. 207.

¹⁸⁴ Ibidem, p. 214. “*Ubi de prioritare beneficii pluribus collati non constant, primo possessio, deinde major praerogativa praesertur*”. *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, In Sexto, III, Tít. IV, De praebendis et dignitatibus, cap. XXXI, fol. 93. A. Andrés, *Diccionario de Derecho Canónico...*, o.c., tomo IV, p. 199.

8.4.- Institución¹⁸⁵.

F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., tomo III, parte 1ª, título VII, I, 2, fol. 304, define lo que es la institución:

“Quod sit concessio ecclesiae, vel beneficii vacantis, autoritate legitima episcopi, vel alterius ordinarii facta, ad praesentationem, vel nominationem patroni.”

Es la concesión del beneficio por el colador, obligado a hacerlo en determinada persona presentada por el patrono (persona que funda o dota una iglesia). Aquí, en este modo de provisión, concurren dos elementos distintos: la presentación y la institución propiamente dicha. La primera corresponde al patrono, al que le toca designar o nombrar la persona; la segunda pertenece al obispo, y por ella se confiere el beneficio eclesiástico al clérigo presentado por dicho patrono, y sin ella no se puede obtener el beneficio.

Corpus Iuris Canonici, o.c., *Decretales*, In Sexto, III, Tít. VI, *De institutionibus*, cap. I, fol. 99:

“Capitulum sede vacante, dicet beneficia ad episcopi collationem spectantia conferro non possit, tamen ad illa praesentatos instituere potest”.

J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., Libro I, V, IV, 47, fol. 291:

“Institutio, quae definitur beneficii concessio facta ad praesentationem eius, qui habet ius patronatus. Quare duo hic necessaria sunt, ut quis beneficium obtineat, institutio et praesentatio. Haec patronum pertinet, cuius est designare et offerre clericum; illa ad episcopum, cuius est designato clerico beneficium tribuere, modo nihil obstat, cuius causa repellendus videatur”.

Se diferencia de la colación en que ésta es una concesión espontánea de un beneficio hecha libremente por el Ordinario diocesano y la institución es una concesión necesaria hecha en virtud de la presentación de un patrono. Se dice necesaria porque el colador no puede rechazar al presentado por el patrono, con tal de que no sea indigno.

9.- CREACIÓN DE BENEFICIOS (*fundatio beneficii*).

A la idea de beneficio va unida necesariamente la de un cargo u oficio eclesiástico que el beneficiado tiene que desempeñar. Por tanto, los beneficios deben ser tantos cuantos sean necesarios para el mejor servicio de la Iglesia.

¹⁸⁵ “Beneficium ecclesiasticum non potest licite sine institutione canonica obtineri”. *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, In Sexto, V, Tít. XII, *De regulis juris*, I, fol. 186. “Concessionem ecclesiae, seu beneficii auctoritate legitima episcopi, vel alterius ordinarii factam, non simpliciter cuius clerico, sed ei qui est a patrono nominatus, et oblatas”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro VI, Cap. XXII, fol. 1100. “Videndum est igitur de ipsa institutione, quae nihil est aliud, quam canonica ordinatio facta per episcopum in beneficio vacante, de clerico per patronum legitime praesentato”. M. Loterio, *De re beneficiaria*, Lugduni 1637, liber II, quaestio XIII, 18, fol. 65. J. Donoso, *Institutiones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 20, art. 8, p. 190. J. Escriche, *Diccionario razonado de legislación...*, I, o.c., tomo III, p. 305.

Como el único objeto de los beneficios es el ejercicio de la autoridad eclesiástica, es evidente que sólo la Iglesia puede instituirlos. Para ello hay que distinguir varias clases de oficios eclesiásticos. Hay una primera clase, cuyo número es invariable, o por lo menos tiene carácter de permanencia, en el que se encuentran los de las iglesias catedrales y colegiadas; una segunda clase, que está más sujeta a las vicisitudes de los tiempos y de las circunstancias, como las demás iglesias de una diócesis (parroquias), y una tercera clase de beneficios, de naturaleza especial, que más adelante se estudian, conocidos con el nombre de capellanías, cuya creación depende de la voluntad de los fundadores y cuyo número no está sujeto a las disposiciones del derecho común. El objeto de creación de los primeros es el culto público y constituir el cuerpo o senado del Obispo, cuyas dos cosas son permanentes; el de los segundos está sujeto al aumento y disminución de los fieles, sufriendo alteraciones con relativa frecuencia; y el tercero es independiente de las necesidades espirituales de los fieles¹⁸⁶.

La creación canónica de un beneficio eclesiástico se llama erección. Se exige una mesa o altar que sirva de título y centro, un ministerio u oficio que exprese las atribuciones y deberes impuestos por la ley o fundación y la aprobación de la autoridad eclesiástica¹⁸⁷.

9.1.- Autoridad a quien corresponde la creación de beneficios.

En los primeros siglos el florecimiento de los concilios provinciales, llevó a los mismos, entre otras atribuciones, a la creación de obispados. Ya en el siglo VIII se empieza a centralizar en el Romano Pontífice tal facultad y concluye por absorberla, incluso la referente a otros beneficios. Por tanto, corresponde al Papa la creación de beneficios mayores o consistoriales, cabildos catedrales y colegiales, lo que se recoge en el *Corpus Iuris Canonici*, Parte I, Decreto de Graciano..., o.c., distinctio 22, canon 1, fol. 65:

“Omnes sive patriarchii cuiuslibet apices, sive metropoleon primatus, aut episcopatum cathedras, vel ecclesiarum cuiuslibet ordinis dignitates instituit Romana ecclesia.”

La de los beneficios inferiores, las parroquias, pertenece al Obispo, por derecho ordinario, según el capítulo III, título XLVIII, *De ecclesiis aedificandis, vel reparandis*, del libro III de las Decretales.

9.2.- Lugar de creación.

Como se necesitan dos cosas para crear un beneficio (necesidad o utilidad de la Iglesia para atender a los fieles y renta para el sustento del beneficiado), se requiere que la creación sea en un lugar conveniente, de forma que no se perjudique a otras iglesias o beneficios. Por tanto, las catedrales no se deben erigir en pueblos pequeños para que la dignidad episcopal no se envilezca, mientras que las parroquias se crearán por todas las

¹⁸⁶ P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XVI, §.176, p. 164.

¹⁸⁷ “*Certum est, non esse beneficium nisi quod sit erectum ecclesiastica auctoritate*”. C. Berardi, *Commentaria in ius ecclesiasticum universum...*, o.c., Tomo II, dissertatio 3, capítulo I, fol. 108. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 49.

poblaciones donde no las haya. Par los demás beneficios se adoptará el lugar que esté más en relación con el motivo de piedad, necesidad o utilidad que les dé origen¹⁸⁸.

10.- ALTERACIÓN DE BENEFICIOS.

Por regla general deben conservarse intactos los beneficios, pues es un principio universal de la Iglesia que no se haga mutación alguna en los beneficios, una vez erigidos canónicamente. En cuatro clases podemos dividir las alteraciones benéficiales en su totalidad.

10.1.- Unión (*unio*).

La unión de beneficios, según definición de Rebufo (*Praxis beneficiorum*, o.c., tit. *De unionibus beneficiorum*, 1, fol. 179), que siguen la gran mayoría de los canonistas, es la anexión o agregación de beneficios menores o iglesias realizadas por el obispo u otro superior:

“Unio est beneficiorum seu ecclesiarum ab episcopo, vel ab alio superiore facta annexio.”

Por tanto, una definición más actual es la que sigue: la reunión de dos o más beneficios o iglesias en una, hecha con justa causa por la legítima autoridad y en la forma debida. El fundamento ha de ser la necesidad o utilidad de la iglesia apreciada por ella misma, con presencia de circunstancias religiosas, históricas, morales y económicas.

La unión puede ser real (perpetua) o personal (temporal). La primera tiene por objeto el bien público o utilidad de la Iglesia. La segunda era para favorecer a una misma persona con dos beneficios, eludiendo la ley que dispone que no se puede poseer dos beneficios distintos. El concilio de Trento condenó este tipo de unión de beneficios, al ser, en realidad una pluralidad de beneficios, en el capítulo 4 de la sesión 7, de *Reformatione*:

“Plurium beneficiorum retentor contra canones, iis privatur: quicumque de caetero plura curata, aut alias incompatibilia beneficia ecclesiastica, sive per viam unionis ad vitam... contra formam sacrorum canonum..., ipso iure, etiam praesentis canonis vigore, privatus existat.”

¹⁸⁸ “*Episcopi non in castellis aut modicis civitatibus debent constitui, sed presbyteri per castella et modicas civitates atque villas debent ab episcopis ordinari et poni, singuli tamen per singulos titulos suos*”. “*Illud sane, quod ad sacerdotalem pertinet dignitatem, inter omnia volumus canonum statuta servari, ut non in quibuslibet locis, neque quibuslibet castellis, et ubi ante non fuerunt, episcopi consecrentur, quum, ubi minores sunt plebes minoresque conventus, presbyterorum cura sufficiat*”. *Corpus Iuris Canonici*, Parte I, Decreto de Graciano..., o.c., distinctio 80, cánones 3 y 4, fol. 240; “*Praecipimus, ut iuxta sacrorum canonum statuta, ubi multitudo excrevit fidelium, ex vigore apostolicae sedis debeas ordinare episcopos, pia tamen contemplatione, ut non vilescat dignitas episcopatus*”. Parte II, c. 53, causa 16, quaest. 1, fol. 667. “*Non consecratur ecclesia, quae pro quaestu cupiditatis aedificatur*”. Parte III, Decreto de Graciano..., o.c., *De consecratione*, distinctio 1, canon 10, fol. 1132. “*Episcopis dignitas non debet tribui, nisi locis insignibus et populosis*”. *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro V, Tít. XXXIII, *De privilegiis, et excessibus privilegiatorum*, Cap V, fol. 691. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 20, art. 2, p. 162. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., pp. 49-50.

La unión se puede hacer de tres modos: por confusión (*per confusionem*), por sujeción (*per subjectionem o accesionem*) y por equiparación (*aeque pricipaliter*)¹⁸⁹.

Por confusión (llamada también unión extintiva o traslativa) es cuando de dos beneficios se hace uno solo. Por sujeción: cuando una iglesia se sujeta a otra y depende de ella. La iglesia anexa (llamada filial) asume la naturaleza, costumbres y privilegios de la principal (matriz). Aquí cada iglesia conserva su territorio y demarcación, pero están regidas por un solo párroco, generalmente el de la iglesia principal. Por equiparación: cuando ambas conservan sus títulos y prerrogativas, sin depender una de la otra, pero gobernadas por un solo ministro. Ocurre en las iglesias catedrales. Un ejemplo de unión por confusión se encuentra en el *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro III, Tít. X, *Ne sede vacante aliquid innovetur*, Cap I, fol. 699, y de la unión por equiparación en el Decreto de Graciano, o.c., parte 2, c. 4, causa XVI, quaest. 1, cánones 48 y 49, fols. 665 y 666:

“Non tenet alienatio rei Ecclesiasticae absque approbatione Capituli”.

“Duos episcopatus in unum redigere apostolica potest auctoritas”.

“Duos episcopatus in unum redigere apostolica valet auctoritas”.

Las uniones de beneficios son odiosas por contener cierta especie de enajenación o alteración de su primitiva naturaleza y han de restringirse con arreglo al Derecho

¹⁸⁹ “*Primus modus est: cum ita coniungitur ecclesiae, ut in unum quasi corpus minime confundantur, et coalescant, sed ut una fit superior et principalis, altera vero inferior et subiecta, et propterea ad alteram accedens et ipsi adhaereos: ex tunc in inferiore vicarius, qui munus et officium obeat, constitui solet. Alter modus est: cum duae ecclesiae in unum veluti corpus coalescunt, ita ut una ecclesia, unum beneficium et unum ministerium, non duo esse, vel dici queant. Tertius modus est, cum neutra ecclesia alteri subiicitur, nec ambae in unum veluti corpus coguntur, sed suum titulum, et honoris gradum retinent: ac propterea idem minister utrique praeficitur*”. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro VI, cap. XXVIII, quaeritur 2, fol. 1136. “*Primo modo fit unio, ut ex duobus beneficiis, seu ecclesiis unum fiat. Secundo modo fit unio, ut una ecclesia subiiciatur, seu unum beneficium alteri accessoriae. Tertio fit unio duorum beneficiorum seu ecclesiasticum inuicem aeque principaliter*”. N. García, *Tractatus de Beneficiis*, Madriti 1613, tomo II, pars 12, cap. II, 7, fol. 293. “*Primus modus unionis est, si ex duabus beneficiis fiat unum. Alter modus est, si unum beneficium alteri uniatur tanquam accessorium principali. Tertius modus unionis est si duo beneficia, puta, duae ecclesiae, ita sub eodem rectore uniantur, ut tamen propriam naturam, qualitates et privilegia sua retineant*”. P. Laymann. *Theologiae Moralis*, o.c., Liber IV, tractatus II, cap. IX, 1 y 2, fols. 30-31. “*Potestque haec ecclesiarum, et beneficiorum unio fieri tribus omnino modis. I. Quidem, si ex duobus beneficiis fiat unum. Secundus modus est, quando una ecclesia, vel beneficium subiicitur alteri tanquam superiori, eidemque unitur velut accessorium principali. Tertius unionis modus est, si duo beneficia, videlicet duae ecclesiae cathedrales, vel parochiales aeque principaliter uniantur, ita, ut ambae propriam naturam, qualitates, et privilegia sua retineant...*” F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte 1ª, título V, V, 152, 153 y 156, fols. 186-188. “*Haec autem conjunctio tribus modis fieri solet: confusione, cum duae pluresve ecclesiae, aut beneficia ita coagmentantur, ut ex pluribus una ecclesia, aut unum beneficium fiat; subiectione, cum unum beneficium alteri subijcitur, ita ut ei quasi fundus accedat, et ejus privilegia, consuetudines, naturam assumat; denique alia est unio, quae dicitur aeque principalis, cum neutrum beneficium alteri subijcitur, neque duo beneficia in unum quasi corpus coalescunt, sed utraque integra manent, suumque retinent gradum ac titulum, sed ab uno eodemque ministro reguntur*”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., Libro II, XIV, II, 18, fols. 679-680. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XLVII, II, p. 155. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XVI, §.177, p. 165. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p 52.

común, por lo que sólo deben concederse por causa grande y necesaria. Una serie de condiciones deben darse para que se realice la unión: causa legítima, concurrir la autoridad competente, observar las formalidades debidas y que la naturaleza de los beneficios sea tal que no se prohíba su unión.

-Causa legítima.

La unión debe realizarse si concurren causas legítimas: que haya un motivo de verdadera necesidad o evidente utilidad notoria para la Iglesia. Dichas causas son, entre otras, la disminución del número de fieles, que la iglesia que ha de unirse haya sido robada o destruida, que sean iglesias sin recursos para mantener a los presbíteros o necesiten rentas para mantener el culto divino¹⁹⁰.

-Autoridad competente.

Cualquiera que sea el modo de unión de beneficios se deberá hacer por la autoridad legítima eclesiástica. En este caso, es el Obispo de la diócesis, pues los prelados inferiores, aunque tengan jurisdicción ordinaria, no la tienen para este efecto¹⁹¹.

-Formalidades requeridas.

Según el Concilio Tridentino¹⁹², consisten en la necesidad de una información jurídica acerca de la comodidad o perjuicio que debe resultar de la unión, con citación y voz de todos los interesados (los feligreses).

-No prohibición de la unión.

¹⁹⁰ Que la unión sólo debe concederse en virtud de causa grande y necesaria y de evidente utilidad para la Iglesia se encuentra en la respuesta del Papa Honorio III al obispo de Vesperey, donde le dice que puede unir las capillas a las prebendas de su iglesia catedral, con tal que así lo exija una necesidad o utilidad evidente: "*Si evidens necessitas vel utilitas exogat*". "*Propter paupertatem Praebendarum Ecclesiae cathedralis possunt eis annecti capellae, reservata ipsarum presbyteris congrua portione*". *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro III, Tít. V, *De praebendis et dignitatibus*, Cap XXXIII, fol. 383. "*Quod unio beneficiorum, ut valeat, manifesta ecclesiae utilitas, necessitasque requiritur...*" N. García, *Tractatus de Beneficiis*, o.c., tomo II, pars 12, cap. II, 113, fol. 299. "*Ut autem valide procedat unio, prae caeteris duo sunt pro eius formalitate observanda: intrinsecum unum, quod versatur in iustitia causae, nimirum evidentis necessitatis, aut utilitatis*". M. Loterio, *De re beneficiaria*, o.c., liber I, quaestio XXVIII, 142, fol. 151. Arrazola y García, *Enciclopedia española de Derecho...*, o.c., p. 243.

¹⁹¹ "*Praelatus inferior citra episcopum, non potest suam ecclesiam, vel sibi subjectam alteri unire sine episcopi consensu, etiam metropolitani auctoritate interveniente*". *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro V, Tít. XXXI, *De excessibus praelatorum et subditorum*, Cap VIII, fol. 683. "*Beneficia quoque suae dioecesis non exempta unire potest episcopus, quamvis eorum collatio ob episcopi negligentiam devoluta esset ad Papam, quod alio iure devolvatur, alio autem uniatur*". A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 16, 31, fol. 297. D. Cavallario, *Institutiones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XLVII, II, p. 156. J. Donoso, *Institutiones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 20, art. 2, p. 163.

¹⁹² "*Uniones perpetuae a quadraginta annis citra factae, examinari ab Ordinariis..., illae vero, quae a dicto tempore citra concessae, nondum in toto, vel in parte sortitae sunt effectum, et quae deinceps ad cuiusvis instantiam fient, nisi eas ex legitimis, aut alias rationabilibus causis coram loci Ordinario, vocatis quorum interest...*". *Concilium Tridentinum*, sesión 7, cap. 6, de Reformatione. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., p. 123. "*Nec etiam plebs debet vocari..., quod audiretur, tamen si causam rationabilem allegaret, ne fieret unio*". N. García, *Tractatus de Beneficiis...*, o.c., tomo II, duodecima pars, Cap. 2, 220, fol. 307.

Otra condición o requisito es que las leyes eclesiásticas no prohíban la unión, pues no todos los beneficios pueden unirse indistintamente. Está prohibida la de beneficios de una diócesis con los de otra diferente y la de beneficios curados con los simples y la de aquellos que puedan producir la acumulación de beneficios¹⁹³.

10.2.- Agregación (*aggregatio*).

Es la incorporación de un beneficio a corporaciones eclesiásticas. Su ejemplo se encuentra en la incorporación de parroquias a la mesa episcopal o capitular, a monasterios, cabildos o dignidades. El desempeño del cargo espiritual lo desempeña un vicario. La agregación se confunde muchas veces con la unión. La diferencia principal radica en que sólo por unión se reúnen los oficios hasta en su parte espiritual¹⁹⁴.

10.3.- División (*divisio*).

Es la alteración opuesta a la unión o agregación, consistiendo en crear un nuevo beneficio, desmembrando parte del territorio y de la renta del antiguo. Hecha la división habrá dos parroquias o beneficios en lugar de uno, según F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum*..., o.c., tomo III, parte I, título V, 204, fol. 209:

“Divisio, seu sectio beneficii tunc fieri dicitur, quando ex uno beneficio fiunt duo, vel plura beneficia, ex una parochia duae parochiae...”

La división, en general, está prohibida, pues todo beneficio eclesiástico se confiere sin disminución, porque altera el orden establecido y contraría el principio *“ut ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur”*, del libro III de las Decretales, título XII, capítulo único¹⁹⁵.

Las causas para dividir beneficios se fundamentan cuando sus cargas y obligaciones no pueden desempeñarse por uno solo, como son el aumento del número de fieles, considerable distancia a la parroquia o dificultad para acceder a ella, como así lo dispone el *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro III, Tít. XLVIII, *De ecclesiis edificandis vel reparandis*, Cap. III, fol. 529:

“Propter nimiam distantiam ecclesiae, potest nova ecclesia in ipsius parochia aedificari, et certu portio de antiqua sibi deputari.”

¹⁹³ *“Beneficia unius dioecesis nulla de causa uniantur beneficiis alterius”*. *Concilium Tridentinum*, sesión 14, cap. 9, de *Reformatione*. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico*..., o.c., p. 245. *“Ecclesiae parochiales monasteriis quibuscumque, aut abbatibus, seu dignitatibus, sive praebendis ecclesiae cathedralis vel collegiatae, sive aliis beneficiis simplicibus... non uniantur”*. Ibidem, sesión 24, cap. 13, de *Reformatione*, p. 448.

¹⁹⁴ F. Walter, *Manual de Derecho eclesiástico universal*, libro V, cap. III, part. 214, p. 348.

¹⁹⁵ *“Una ecclesia duobus sacerdotibus dividi non potest”*. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano, o.c., parte 2, c. 4, causa 21, quaest. 2, fol. 736. *“Praebendae et dignitates non debent dividi, nec etiam permutari”*. *“Pro uniut praebendae integratione, alia dividi non debet”*. Ibidem, *Decretales*, Libro III, Tít. V, *De praebendis et dignitatibus*, Cap VIII y XXXVI, fols. 373 y 384. *“Divisio haec generatim est vetita”*. J. Devoti, *Institutionum canonicarum*..., o.c., Libro II, XIV, II, 22, fol. 682. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico*..., o.c., XVI, §.186, p. 173.

También el *Concilium Tridentinum*, sesión 21, cap. 4, *de Reformatione*:

“In iis vero, in quibus ob locorum distantiam, sive difficultatem, parochiani, sine magno incommodo ad percipienda Sacramenta, et divina officia audienda accedere non possunt; novas parochias..., constituere possint.”

Sobre división de beneficios, anteriormente ya lo había establecido el Concilio de Toledo XVI, canon 5, en 693. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo II, p. 136.

Se requiere que haya renta bastante para dotar a los nuevos beneficiados. La división se hará por la autoridad competente y requiere las mismas formalidades o solemnidades que para la unión. Corresponde, en consecuencia, a los obispos realizar la división de los beneficios habiendo justa causa. La de los beneficios mayores está reservada al Romano Pontífice.

10.4.- Supresión (*suppressio*).

Define Reiffenstuel (*Ius Canoniarum Universum...*, o.c., III, XII, 32, fol. 301) la supresión de la siguiente forma: *“suppressio est totalis extinctio beneficii.”*, es decir es la extinción total de un beneficio existente.

Puede verificarse de dos maneras: la primera, es el caso en el que la dotación no se une a la de otro, sino que se dedica a objeto diferente; la segunda, es cuando, al suprimir el beneficio, la dotación se une a otro.

Como la supresión de beneficios disminuye el culto divino, debe haber causa para ello, como escasez de feligreses o penuria de rentas hasta el punto que sea imposible el sostenimiento del beneficiado.

11.- RESIDENCIA DE LOS BENEFICIADOS.

La ordenación de un clérigo llevaba consigo ciertas obligaciones, pues a ella iba anejo un cargo público eclesiástico. El ordenado se adscribía a una iglesia para ejercer en ella su ministerio y no se concebía un clérigo sin oficio, ni oficio que pudiera desempeñar en varios lugares de la diócesis. El ordenado necesitaba un título de ordenación y una vez adscrito a una concreta iglesia, no podía irse a otra sin cartas del obispo (dimisorias), rompiendo así el vínculo que le unía a ella¹⁹⁶.

La obligación de todo eclesiástico era la fijeza de su adscripción y su inamovilidad de una iglesia o parroquia, es decir, la permanencia continuada y laboriosa en un lugar determinado para el cumplimiento de su ministerio y el servicio perpetuo a la iglesia¹⁹⁷.

¹⁹⁶. “Inter omnes convenit, Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos, Abbates, Priores, Praepositos, Parochos, et caeteros, quibus est animarum cura iure commissa, in suis ecclesiis commorari et praesentes esse debere”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro VII, cap. III, fol. 1190. “Omnia beneficia simplicia, de iure residentiam requirunt”. N. García, *Tractatus de Beneficiis*, o.c., primi tomi, pars 3, cap. II, 1, fol. 140. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XVIII, §.189, p. 179.

¹⁹⁷ La residencia es tan antigua como la división territorial de la Iglesia. De aquí viene el llamar, en general, “*cardenales*” (*a cardine*) a todos los clérigos por la inamovilidad y fijeza de su adscripción, pues

La residencia, según Layman, es “*asiduitas commorationis in loco beneficii, causa servitii Ecclesiastici personaliter praestandi*” (*Theologiae Moralis*, Liber IV, tractatus II, cap. VI, 1, fol. 25).

Schmalzgrueber la define de la siguiente manera en su obra *Ius ecclesiasticum universum*, parte 1ª, título IV, I, I, fol. 64:

“*est mansio, seu commoratio asidua in ecclesia, seu loco beneficii, causa servitii ecclesiastici personaliter praestandi*”

Vistas las anteriores definiciones, es claro que esa permanencia continuada del beneficiado en el lugar del beneficio, para poder desempeñar los cargos que se le ha impuesto, es lo que formalmente se llama residencia. Ésta es una cualidad indispensable de todos los beneficios.

Antiguamente todos los clérigos estaban obligados por una ley a residir en sus iglesias con el fin de atender a su ministerio. Es la llamada “*ley de la residencia*”. De esta forma, los cánones, desde los más antiguos concilios como los de Nicea en 325 y Antioquía de 341, obligan a la residencia a todos los pastores de almas, tanto a obispos como a párrocos¹⁹⁸. Está mandado que el que sirve al altar viva junto al altar al cual sirve, y con más razón en relación a los beneficiados que tienen cura de almas.

Así lo expresa Reiffenstuel al parafrasear el Cap. XV, Tít. III, In Sexto del *Corpus Iuris Canonici*: “*beneficium datur propter officium; nec est conferendum, nisi residere valenti*” (*Ius Canonicum Universum...*, o.c., IV, I, 5, fol. 49).

La residencia ha de ser personal, local, continua y laboriosa (“*Hinc residentia..., ut sit laboriosa, non otiosa. Atque idcirco omnes, et singuli beneficiati, spectato iure communi, tenentur ad residentiam personalem*”. P. Fagnano, *Commentaria in tertium librum Decretalium*, o.c., *Ex parte*, 15, fol. 42; A. Reiffenstuel, *Ius Canonicarum Universum...*, o.c., IV, I, 5, fol. 49). Se permite la ausencia si concurren justas causas. Unas son generales a todos los beneficiados, como enfermedad o peligro de muerte y otras, particulares del beneficio, como las ausencias por utilidad de la Iglesia o para estudio de ciencias eclesiásticas.

11.1.- Clases de residencia.

estaban fijos e inmóviles como el quicio de una puerta (*cardinalis*: referente al quicio, que proviene de *cardo* –inis, quicio de una puerta).

¹⁹⁸ “*Excommunicentur clerici, qui relictæ suæ ecclesiæ ad eam redire noluerint*”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano, o.c., parte 2, c. 23, causa VII, quaest. I, fol. 493. “*Si quis presbyter, vel diaconus, vel quilibet clericus, deserta sua ecclesiæ, ad aliam transeundum esse crediderit, et ibi paulatim tentet, quo migravit, perpetuo manere, ulterius ministrare non debet, praesertim si ab episcopo suo ad revertendum fuerit exhortatus*”. Ibidem, c. 24, fol. 494. “*Uni plures dignitates vel ecclesiæ conferri non debent, et ecclesiæ est conferenda illi, qui residere et regnare valet per se ipsum: alias perdit ecclesiæ, et donans conferendi potestate privatur*”. *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro III, Tít. IV, *De clericis non residentibus*, Cap. III, fol. 368. “*De lege et necessitate residendi egere concilia, non ut eam sancirent, sed ut longe sanctissimam, antiquissimam et indubitatissimam inculcarent*”. L. Thomassino, *Vetus et nova ecclesiæ disciplina*, Venetiis 1730, Parte II, Libro III, Cap. 30, fol. 615.

Ya en los siglos XIII y XIV los canonistas clásicos como Enrique de Segusio, Cardenal Ostiense (*Commentaria in quinque Decretalium libros*, Venetiis 1581) y Juan Andrés (*In quinque Decretalium libros novella commentaria*, Venetiis 1581) distinguen tres clases de residencia: la precisa, la causativa y la momentánea o discontinua. La primera es aquella que se requiere bajo pena de privación del título del beneficio. La segunda, es la que se exige bajo pena de pérdida de los frutos del beneficio. Y la tercera es la que no es continua, y que se puede cumplir de un intervalo de tiempo a otro. Lo recoge Jerónimo González en su obra *Commentatio ad regulam octavam Cancellariae...*, o.c., Glosa XV, 21, fol. 284:

“Residentia est triplex, continua, discontinua et causativa. Quod quandoque requiritur continua residentia praecisa, sub privatione tituli; quandoque requiritur residentia non continua, sed in certis temporibus; et quandoque requiritur residentia continua, non tamen simpliciter, sed causative, et solum respectu privationis fructuum, ita quod liceo non residendo privatur fructibus, titulo tamen privari non possit.”

También Loterio (*De re beneficiaria, Liber postumus*, Romae 1635, tertii libri, quaestio XXVII, 32, fol. 188) y Leuren (*Forum beneficiale*, o.c., pars primae, sectio tertia, cap. primum, I, quaestio 364, fol. 129) clasifican la residencia en precisa y causativa:

“Alia vero necessaria, et haec est duplex, videlicet praecisa, et causativa. Praecisa dicitur, quando est inseparabilis a titulo beneficii, ita ut non possit retineri beneficium ab eo, qui non residet. Causativa vero, quae est ita a titulo distincta, ut possit quis eum habere, absque eo quod resideat (cum etiam praecisa residentia respectu suae causae, possit esse continua et discontinua).”

“Quotuplex sit hac residentia? El haec dividitur in praecisam, et causativam; praecisa dicitur, quando residentia est inseparabilis a titulo beneficii, ita ut non possit retineri beneficium ab eo, qui no residet. Causativa est, quae a titulo separabilis est, ita ut illum quis habere et retinere possit absque eo, quod resideat, quamvis ex causa cogi possit ad residendum. Neque tamen etiam residentia causativa sola discontinuitatem admittit, sed et praecisa quandoque licite discontinuari ad tempus potest.

Reiffenstuel, Schmalzgrueber y, posteriormente, Riegger¹⁹⁹) clasifican la residencia de dos maneras: verdadera y fingida. La primera además de la presencia real en el lugar, comprende el desempeño de las sagradas funciones correspondientes a la naturaleza del beneficio; y la fingida es la que no requieren presencia real, pero produce

¹⁹⁹ “Sive residentia formaliter considerata est duplex; vera videlicet, et ficta. Si quidem residentia vera dicitur illa, qua beneficiarius vere ac realiter praesens est in loco beneficii, huiusque onera seu officia per semetipsum exercet. Residentia ficta censetur illa, quae ex iuris dispositione est inducta: dum videlicet beneficiarius ex legitima causa absens, habetur ex quadam iuris fictione pro praesenti, saltem ad lucrandos fructus grossos”. A. Reiffenstuel, *Ius Canoniarum Universum...*, o.c., IV, I, 7, fol. 49. “Residentia duplex est, vera, et ficta. Vera est, quando beneficiarius vere, et realiter praesens est in loco beneficii, et per seipsum, seu personaliter exercet officium, seu ministerium spirituale, propter quod datur beneficium. Ficta dicitur, quando absens a loco beneficii fictione iuris habetur pro praesente, saltem in ordine ad lucrandos fructus grossos”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., tomo III, parte 1ª, título IV, I, 6, fol. 66. P. J. Riegger, *Institutiones de jurisprudencia eclesiástica*, traducción de Joaquín Lumbreras, tomo IV, Madrid 1841, p. 42.

el efecto de que el ausente por justa causa sea tenido como presente para el fin de percibir los frutos del beneficio. Posteriormente Morales y Alonso²⁰⁰ realiza otra clasificación de los distintos tipos de residencia y así la ordena en:

-Material.

La del beneficiado que estando en el lugar de su beneficio, no presta el servicio correspondiente. Sólo sirve para el fuero externo.

-Formal.

Si el beneficiado con voluntad desempeña el cargo por sí. Es la verdadera residencia. Es la llamada residencia verdadera (*vera*) de los canonistas clásicos.

-Moral.

Cuando el beneficiado quiere estar en el lugar del beneficio y no lo está.

-Fingida.

Se considera al beneficiado presente, aunque de hecho no lo está por alguna justa causa. También se la conoce como residencia *ficta*.

11.2.- Residencia de los obispos.

La necesidad de residencia de los obispos es a todas luces manifiesta y notoria, a los cuales les está encomendado el cuidado de todos los fieles de la diócesis. La Iglesia dispone con rigor sus obligaciones de inamovilidad y permanencia²⁰¹. De esta forma, durante los ocho primeros siglos se siguió fielmente el cumplimiento de la ley de la residencia. Pero a partir de la Edad Media hubo frecuentes abusos, debido a la relajación de la disciplina eclesiástica, ausentándose para ir a la corte de los reyes, asistir a expediciones militares, a los consejos, viajes a Roma, etc²⁰².

El Concilio de Trento estableció que la residencia de los obispos era de derecho divino, por lo que estaban obligados a la residencia. Se estableció que se podían ausentar si había justa causa, es decir, cuando lo exigiese la caridad cristiana, la necesidad urgente, la obediencia debida y la evidente utilidad de la Iglesia o del

²⁰⁰ J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., pp. 553-554.

²⁰¹ Ya desde muy antiguo la Iglesia prohibió la ausencia de Obispos. Así consta en el canon 8 del Concilio de Sárdica de 347. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones de la Iglesia española*, Madrid 1849, tomo I, p. 67. "*Episcopo non licet sine licentia Papae transire ad alium episcopatum, ipsum acceptando, alias privatur habito et ambita*". *Corpus Iuris Canonici*, o.c., *Decretales*, Libro III, Tít. IV, *De clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda*, Cap I., fol. 367.

²⁰² "*Absque metropolitani consilio vel provincialium episcoporum ad imperatorem episcopi non pergant*". *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano, o.c., parte 2, c. 27, causa XXIII, quaest. VIII, fol. 832. En vista del abuso que se observaba de que los obispos, además de los abades y otros clérigos seguían a la corte para estar al lado de los reyes y así obtener favores personales, se mandó por las Cortes de Valladolid, en 8 de agosto de 1295, que saliesen de la corte hacia sus respectivas iglesias, excepto los capellanes reales. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XXXIX, VI, p. 105.

Estado²⁰³. También estableció penas contra los obispos no residentes en el capítulo 1 de la sesión 6, del decreto sobre la Reforma.

De esta manera, posesionado un obispo de su diócesis, deberá hacerlo, si reside en España dentro de los cuatro primeros meses a su promoción y no podrá ausentarse más de un trimestre al año sin pedir licencia, según el Concilio de Trento.

11.3.- Residencia de los canónigos.

Tienen también obligación de residencia y de cumplir el cargo personalmente y no por sustitutos. Se les permite ausentarse para servir al obispo, también si no son más de dos o para dedicarse al estudio de las ciencias sagradas²⁰⁴. A igual que los obispos se les concede tres meses de licencia para poder ausentarse sin permiso del superior.

11.4.- Residencia de los párrocos.

Deben cumplir respecto de sus feligreses iguales deberes que los obispos. No pueden ausentarse sin causa conocida y aprobada por el ordinario. Podrán ausentarse sin permiso durante dos meses por causa que no sea grave. La Congregación del Concilio Tridentino expone cuales son los casos para poder excusar la residencia.

Sobre las penas a aplicar a los no residentes, se contemplan varias que van desde la privación de parte de la renta, la privación del beneficio, la suspensión, la censura y la excomunión. A los canónigos que falten de sus iglesias más de tres meses, se les privará en el primer año de la mitad de sus rentas, y en el segundo de todas ellas²⁰⁵.

²⁰³ “*Declarat sacrosancta Synodus, omnes Patriarchalibus, Primatialibus, Metropolitanis, ac Cathedralibus ecclesiis quibuscumque, quocumque nomine, et titulo praefectos, etiam si sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales sint; obligari ad personalem in sua ecclesia, vel dioecesi residentiam, ubi iniuncto sibi officio defungi teneantur, neque abesse posse, nisi ex causis, et modis infrascriptis. Nam cum Christiana caritas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiae, vel Reipubl. utilitas aliquos nonnumquam abesse postulent, et exigant*”. Concilium Tridentinum, sesión 23, cap. 1, de Reformatione. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo II, p. 195. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., p. 358.

²⁰⁴ “*Qui est in servicio episcopi, percipit fructus beneficii tanquam residens, praeter distributiones quotidianas*”. “*Privilegiatur ut absens in Studio fructus praebendae recipiat. Existens in villa vel castello, ubi nullum est, vel minus competens studium, privilegio non utitur*”. “*Duo canonici absentes cum episcopo, seu in eius servitio fructus praebendarum suarum percipiunt in absentia constitutione ecclesia contraria non obstante*”. *Corpus Iuris Canonici*, o.c., Decretales, Libro III, Tít. IV, De clericis non residentibus, Cap. VII, XII y XV, fols. 369 a 371. “*Igitur iuxta disciplinam iuris communis, canonicos ad personalem residentiam astringi dubitari nequit*”. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., Título XX, Cap. IX, fol. 39. “*Canonici in servitio episcopi occupati a residentia excusantur*”. “*Absentia studiorum causa a residentia excusatur*”. Ibidem, Cap. X, fol. 39.

²⁰⁵ “*Si nescitur, ubi sit clericus, tribus publicis edictis citabitur in ecclesia sua: si intra sex menses non revertatur, privabitur ecclesia sua*”. *Corpus Iuris Canonici*, o.c., Decretales, Libro III, Tít. IV, De clericis non residentibus, Cap. XI, fol. 370. “*Quod si, per edictum citati, etiam non personaliter, contumaces fuerint; liberum esse vult ordinariis, per censuras ecclesiasticas, et sequestrationem, et subtractionem fructuum, aliaque iuris remedia, etiam usque ad privationem (beneficii), compellere*”. Concilium Tridentinum, sesión 23, cap. 1, de Reformatione. “*Alioquin primo anno privetur unusquisque dimidia parte fructuum, quos ratione etiam praebendae, ac residentiae fecit suos. Quod si iterum eadem fuerit usus negligentia, privetur omnibus fructibus, quos eodem anno lucratus fuerit*”. Ibidem, sesión 24, cap. 12, de Reformatione. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., pp. 363 y 444. También la Novísima Recopilación, en su título XV, libro I, regula la residencia de los clérigos en sus iglesias y recoge varias disposiciones sobre los beneficios y la residencia de los mismos. *Novísima Recopilación...*,

12.- PLURALIDAD DE BENEFICIOS.

Los canonistas entienden por pluralidad de beneficios la posesión, a la vez, de dos o más por una misma persona: “*in qua beneficium in diversis et dissitis Ecclesiis praestat*” (Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., Título XX, Cap. I, V, fol. 23).

En la antigua disciplina de la Iglesia la colación de beneficios no estaba separada de la ordenación. A cada clérigo u ordenado se le daba una determinada iglesia que llevaba aneja la obligación de residencia con el desempeño de un oficio eclesiástico, y el derecho de percibir la renta señalada al cargo, por lo que era imposible la pluralidad de beneficios, pues no se podía adscribir a dos iglesias, desempeñar dos oficios y percibir dos rentas.

Pero con la separación del orden de la colación, y sobre todo la creación del verdadero beneficio, pronto hubo abusos en esta materia, acumulándose beneficios. Para evitarlos, en lo sucesivo, el Concilio de Calcedonia del año 451 y más tarde el II de Nicea, de 787, prohibieron la pluralidad de beneficios²⁰⁶. Así, la adscripción ligaba al clérigo a la iglesia y sin permiso del Obispo no podía irse, ni ser recibido en otra parte, bajo la imposición de penas severas como la excomunión y la privación del ejercicio del oficio. Gregorio I, en el año 596, mandó que cada uno de los oficios se encargase únicamente a una sola persona. Así las leyes eclesiásticas prohibieron a los clérigos su adscripción a dos o más iglesias, lo que se recoge en el *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano, prima pars, distinctio LXXXIX, canon I, fol. 265:

“*Uni personae duo non committantur officia.*”

También el art. 1º del canon II, distinctio LXX, fol. 221:

“*Omnino autem in duabus aliquem titulari non liceat, sed unusquisque, in qua titularatus est, in ea tantum canonicus habeatur. Liceo enim episcopi dispositione unus diversis praeesse possit ecclesiis, canonicus tamen praebendarius, nisi unius ecclesiae, in qua conscriptus est, esse non debet.*”

o.c., fols. 111 y ss. Por Decreto de las Cortes de 28 de junio de 1822 se declaró que la nación española no reconocería ningún beneficio eclesiástico sin la obligación de residencia, que debía ser personal.

²⁰⁶ Antes de estos concilios, el de Antioquía del año 341 (canon 3), ya advertía de los abusos y prohibía que, desamparada una iglesia por clérigo, diácono o presbítero se pasase a otra (canon 24, causa VII, quaest. I). El Aurelianense V (Orleáns) de 549, prohibía, en su canon 14, la obtención de dos beneficios, a igual que el de Narbona (589), en su canon 10. Las prohibiciones posteriores se encuentran en los cánones 10 y 20 del Concilio de Calcedonia y en el 15 del Concilio de Nicea II; “*In duabus ecclesiis clericus conscribi nullo modo debet*”. “*Clericum in duarum ecclesiis civitatum eodem tempore conscribi non oportet*”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XXI, quaest. I, cánones I y II, fol. 734. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo I, pp. 68, 455 y 479; 146 y 466. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones...*, o.c., p. 170. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XVIII, §.202, p. 190. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XL, I, p. 106.

En España también se dieron varias disposiciones relativas a esta materia²⁰⁷. Pero durante esta época se permitió la pluralidad de beneficios por justas causas como la escasez de eclesiásticos para servir los oficios o la pobreza de las mismas iglesias. Con ello se apoyaban en la evidente utilidad o urgente necesidad que se exigía también en la unión o división de beneficios²⁰⁸.

A partir del siglo IX, los legos se apoderan de las iglesias, quedando en una precaria situación al no tener lo suficiente para atender al sostenimiento de los ministros del culto, por lo que se les autorizó para el desempeño de varios oficios eclesiásticos, siempre que fuesen compatibles, acumulándose dos o más beneficios en una misma persona.

Pero de esta forma se rompía la unidad de la doctrina en cuanto a que un beneficio no debía conferirse a dos sujetos y que a cada beneficiado se le confiriese un solo beneficio, señalando la Iglesia los múltiples inconvenientes de la pluralidad de beneficios²⁰⁹:

1- Que llevando cada beneficio un oficio o cargo que desempeñar, un sujeto no puede atender cumplidamente dos beneficios.

2- Que si los beneficios están en distintas localidades se está contraviniendo la ley de la residencia.

3- Que la acumulación de beneficios excita la codicia al acumular dos rentas.

4- Que la pluralidad de beneficios va en perjuicio del culto divino y demás obligaciones del sacerdocio al no poderse atender adecuadamente.

5- Que se disminuye el número de ministros.

Para evitar los abusos se dictaron cánones en los concilios de Aquisgrán, en 799, y de París de 849. Pero relajada la disciplina eclesiástica se concedieron en los siglos IX y

²⁰⁷ Concilio I de Toledo (400), canon 12, Concilio II de Toledo (527), canon 2, Concilio Valentino (546), cánones 5 y 6, Concilio de Sevilla o Hispalense II (619), canon 3 y Concilio XIII de Toledo (683), canon 11. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo II, pp. 89, 102, 104, 131 y 218.

²⁰⁸ Se consideró como justa excepción el caso de escasez de eclesiásticos para servir las iglesias rurales. Así lo dispone el canon 15 del Concilio de Nicea II. La tolerancia en la acumulación de beneficios se encuentra en los cánones 19 del Concilio de Mérida (666) y en el 5 del Concilio de Toledo XVI (693): "*Sed et hoc necessario instituendum deligimus, ut plures ecclesiae uni nequaquam committantur presbytero, quia solus per totas ecclesias nec officium valet persolvere, nec populis sacerdotali iure occurrere, sed nec rebus earum necessariam curam impendere*". *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa X, quaestio III, canon III, fol. 533.

²⁰⁹ "*Praetextu consuetudinis etiam iurate, vel quantocunque tempore observatae, non potest quis nisi unicum personatum, dignitatem, vel aliud perpetuum officium, simul cum canonica, et praebenda in aliqua ecclesia absque dispensatione sedis Apostolicae obtinere, vel iam obtenta tenere: et contra praeseuntum, irritum est omnino*". *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., In Sexto, I, Tít. IV, *De consuetudine*, Cap. I, fol. 8; "*Papa hic primo ambitionem et importunitatem quorundam religiosorum et secularium super obtinendis pluribus beneficiis, dispensative, qui insufficientes quandoque erant pro uno, in diversis locis, regnis et aliis locis distantibus recitans, apponit plures ex hoc contingentes inconvenientis*". "*Habentibus ipsa (plura beneficia) paratur vagandi materia, divinus cultus minuitur, hospitalitas in ipsis beneficiis debita non servatur*". *Ibidem, Extravagantes Comunes*, Libro III, Tít II, *De praebendis et dignitatibus*, Cap. IV, fols. 336-337.

siguientes muchos beneficios a cada clérigo, en términos que en el siglo XII había muchos eclesiásticos que ignoraban a cuantas iglesias pertenecían. Pasada la confusión del siglo X, se intentó restituir la disciplina. Por esta razón, el Concilio III de Letrán, del año 1179, convocado por el Papa Alejandro III, prohibió, en el canon 3, la pluralidad de beneficios, pero fue ineficaz, pues quien tenía dos beneficios los conservaba, ya que sólo podía quitárselo la autoridad eclesiástica, cosa que no ocurría. Ante la poca utilidad que reportó a la Iglesia, Inocencio III, en el Concilio IV de Letrán, de 1215, corrigió lo anterior, mandando que quien obtuviese un segundo beneficio se le quedaba vacante el primero, además de prohibir la posesión a un mismo tiempo de muchas prebendas²¹⁰.

Pero los cánones de los Concilios de Letrán no pudieron acabar con la acumulación de beneficios. Mediante artificios se eludieron las disposiciones de los anteriores sínodos, invocando que en las Decretales se reconocía una clase de beneficios que no exigían residencia, por lo que se distinguió entre beneficios residenciales y no residenciales, compatibles e incompatibles (de primero y segundo género), uniformes (*sub eodem et sub diverso tecto*) y diformes, titulares y en encomienda, con lo que se siguió con la acumulación de rentas. A todo ello se le sumó el excesivo número de dispensas pontificias sobre la materia²¹¹.

El Concilio II Lugdunense (de París, en 1216), XIV general, concedió facultades a los Ordinarios para revisar las dispensas y proveer los beneficios, así como no dar curso a las obtenidas contra derecho.²¹²

Aun así se siguió, en la práctica, con la pluralidad de beneficios. A ello también contribuyeron las fingidas encomiendas, que se concedieron muchas veces a favor de los beneficiados, para que pudiesen retener un beneficio por esta vía y otro por razón de título²¹³.

El mismo Santo Tomás de Aquino (1225-1274) condenó la pluralidad de beneficios (prebendas) al decir que la multitud de beneficios concedidos a uno solo no es de las acciones indiferentes, sino que encierra en sí una malicia intrínseca y que

²¹⁰ “*Uni plures dignitates vel ecclesiae conferri non debent, et ecclesia est conferenda illi, qui residere et regnare valeat per se ipsum: alias perdit ecclesiam, et donans conferendi potestate privatur*”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. IV, *De clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda*, Cap. III, fol. 368; “*Si electus ad secundam ecclesiam, noluerit dimittere primam, eligentes possunt resilire, et electum non acceptare*”. Ibidem, Tít. V, *De praebendis et dignitatibus*, Cap. XIV, fol. 375; “*Habens personatum, vel beneficium curatum, si secundo tale receperit, vacat primum: quod si retinere contenderit, etiam secundo privabitur*”. Ibidem, Cap. XXVIII, fol. 381.

²¹¹ “*Privatur beneficio clericus non residens, si monitus non redeat, nec iustam excusationem alleget*”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. IV, *De clericis non residentibus in ecclesia vel praebenda*, Cap. XVII, fol. 1024. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XVIII, §.202, pp. 193-194. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 523.

²¹² “*Statuit Papa, quod habentes plures dignitates, vel alia beneficia curam animarum habentia, per ordinarios compellantur ostendere, intra tempus competens superioris arbitrio statuendum, dispensationes*.” *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., In Sexto, I, Tít. XVI, *De officio ordinarii*, Cap. III, fol. 50.

²¹³ El canon 27 del Concilio Salmuriense de 1253, prohibió dar en encomienda las parroquias y monasterios a legos. F. Mariátegui, *Reseña histórica de los principales concordatos celebrados con Roma*, Lima 1856, p. 82. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XL, V, p. 110.

poseerlos sin dispensa es pecado mortal (Thomae Aquinatis, *Opera*, Venetiis 1786, Tomo 17, Quodlibet IX, quaest. VII, art. 15, fols. 408-409):

“Utrum habere plures praebendas sine cura animarum, absque dispensatione, sit peccatum mortale.”

“De numero talium non est habere plures praebendas, alias in nullo casu dispensationem recipere posset, quod nullus dicit.”

A la misma conclusión llega el Dr. Navarro (*Opera Omnia*, Venetiis 1602, tomo II, *De incompatibilitate beneficiorum*, 14, 15, fol. 687), al decir que:

“Pluralitas non sit mala, cum etiam ex illa eliciatur huiusmodi malitia... Pluralitas beneficiorum et si mala, et deformitatem absolute praesiferat, ex circumstantia tamen bona reddi potest”

Cuando se convocó el Concilio de Trento los beneficios eran muchos, por lo que rápidamente se intentó atajar el problema y poner remedio a estos abusos. Se dictaron varias disposiciones sobre la pluralidad de beneficios, publicando cuatro decretos. En la sesión VII se contienen tres decretos, que son:

1º. Se prohibió retener más de una iglesia en título o encomienda ni bajo otro nombre.

2º. Igual prohibición respecto de los beneficios curados o que sean incompatibles.

3º. Se renueva la constitución *Ordinarii* del Papa Gregorio X, publicada en el Concilio general II de Lyon, obligando a los que posean varios beneficios eclesiásticos curados a mostrar sus dispensas o se procederá contra ellos.

En la sesión XXIV se acordó otro decreto:

4º Que en adelante no se conceda más que un solo beneficio eclesiástico a cada persona, y si éste no basta para la decente sustentación se le podrá conferir otro simple, siempre que ambos no exijan residencia personal²¹⁴.

Parece ser que las disposiciones de este santo sínodo hicieron mella en el problema y contribuyeron a disminuirlo, aunque no a solucinarlo. Con ello, muchos se apresuraron a devolver sus múltiples beneficios y algunos fueron tan desinteresados que apenas retuvieron lo suficiente para atender a su sustentación.

²¹⁴ *Concilium Tridentinum*, sesión 7, cap. 2: “Tenentes plures cathedrales ecclesias iubentur omnes, excepta una, dimittere certo modo, et tempore”; ibidem, cap. 4: “Plurium beneficiorum redentor contra canones, iis privatur”; “Plura beneficia curata obtinentes, ordinario suas dispensationes exhibeant...”, ibidem, cap. 5; “Plura beneficia uni conferre, eaque retinere quandonam liceat”; Ibidem, sesión 24, cap. 17, *de Reformatione*. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo II, pp. 165 y 198. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia de España y de América*, Madrid 1859, tomo IV, pp. 96, 98, 100 y 373. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., pp. 93, 95, 96 y 429. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XVIII, §.207, pp. 195-196.

Pero pronto se idearon dos argucias para evitar los preceptos del concilio. La primera, fue suponer que el primer beneficio no era suficiente para la decente manutención del clérigo. La segunda, consideraron como beneficios simples y, por tanto, compatibles y que no requieren residencia, todos los que no son curados. Dichos abusos continuaron hasta bien entrado el siglo XVIII²¹⁵.

13.- LAS ENCOMIENDAS.

Es la provisión hecha a un clérigo secular de un beneficio regular, sin exigirle la profesión religiosa o con dispensa de la regularidad; es decir, el encargo dado a un clérigo determinado para que levante las cargas anejas a un beneficio y con derecho a las rentas o frutos del mismo. La palabra encomienda es sinónimo de depósito. Proviene de la palabra *commenda* que a su vez viene del verbo *commendare*, que significa dar en custodia, encargar, pedir a otro que tome a su cuidado una cosa. En realidad, es una disciplina bastante antigua de la Iglesia.

“Commendare vero proprie significat deponere sive custodiae alicuius committere. Unde Ecclesiam alicui commendare, est Ecclesiam alicui custodiendi committere. Quapropter Ecclesiam habere in commendam, idem sonat, quod habere Ecclesiam suae custodiae commissam sive depositam.” (Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., Título XXXI, Cap. VII, I, fol. 215.

13.1.- Origen.

El Concilio Regiense del año 439, en su canon 6, fue el que dio motivo al origen de las encomiendas, al disponer que cuando falleciese un obispo, el de la iglesia inmediata se encargara del cuidado de la del difunto²¹⁶.

Pero parece ser que la principal causa del origen de las encomiendas fue la pobreza de las iglesias y su escasez de bienes y recursos. La que no podía mantener, por sí misma, un presbítero, quedaba al cuidado del ministro de la iglesia vecina, es decir, quedaban agregadas a otras al no tener suficiente aporte económico. Su duración era temporal, mientras subsistía la pobreza de una determinada iglesia o la causa por la que se había dado²¹⁷.

²¹⁵ D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XL, V, p. 111. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 527.

²¹⁶ Concilio Regiense, de la ciudad de Riez, en la Provenza francesa. También el Concilio de Valencia, en 546, canon 2, decretó lo mismo, y en su canon 4 llama “comendador” al obispo vecino a quien se encargaba el cuidado de la iglesia viuda; igual el Concilio II de Orleáns, aurelianense de 533, en sus cánones 5 y 6. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones...*, o.c., tomo I, p. 371. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo II, p. 217; tomo I, p. 479.

²¹⁷ De ello hace mención el Concilio de Mérida (666), en su canon 19, donde se dispuso que un mismo presbítero tuviera varias iglesias a su cargo, y se encargara de ofrecer el sacrificio a Dios todos los domingos, debido a la situación de pobreza de las iglesias rurales. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo I, p. 435. “*Initio commenda erat custodia, aut administratio vacantis ecclesiae, quae tamdiu obtinebat, quamdiu ea careret episcopo, a quo regeretur. Simili modo commendabantur parochiae et monasteria; atque hae commendae ad tempus erant, quoniam certo tempore cessabat causa, propter quam institutae fuerant*”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., libro II, tit XIV, sección 3ª, §.23, fol. 683. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XLII, I, p. 130.

Así lo recoge Tomasino en su obra *Vetus et nova ecclesiae...*, o.c., parte II, libro III, cap.X, fol.549:

“Palam est uni ecclesiae charitati, utilitari publicae et necessitati datas fuisse istiusmodi Commendas, quae nullo certo sine concludebantur, dum eversa iaceret ecclesia, et adviveret episcopus.”

13.2.- Devenir histórico.

Antiguamente dar en encomienda una iglesia era entregar la que estaba vacante para que la gobernase mientras tanto un clérigo idóneo, el cual percibía de las rentas de la iglesia los alimentos necesarios. Cuando se nombraba al ministro propietario, dejaba de desempeñar el cargo.

Señala Azor en su obra *Institutionum moralium*, o.c., Libro VI, cap. XXXI, fol. 1152, que desde los tiempos de San Gregorio Magno se comenzó a introducir la práctica de encomendar la administración de obispados, abadías y monasterios, tanto en lo temporal como en lo espiritual, durante dilatados períodos, a obispos que habían sido privados de sus sillas. Se les negaba a los clérigos al no poder, al mismo tiempo, desempeñar las funciones eclesiásticas y cumplir con la disciplina monástica:

“Commendare rem esse antiquam, commendare ecclesiam alicui ad tempus regendam etenim Gregorius I, ita commendavit Panormitanam ecclesiam, item ecclesiam Neapolitanam, ecclesiam terracinensem...”

Instituidas las encomiendas, se introdujo una regla del derecho canónico según la cual un solo clérigo podía retener dos iglesias, una por título o derecho propio y otra por encomienda, que propusieron León IV y Gregorio IV, en el Concilio de Agde (agathense) de 506, en el canon 22:

“Qui plures ecclesias retinet, unam quidem titulata, aliam sub commendatione retinere debet” (*Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XXI, quaestio I, canon III, fol. 734).

Bajo este concepto las encomiendas eran útiles para la Iglesia y no estaban en contraposición con los cánones pero la situación cambió y se convirtieron en un grave perjuicio. Los obispos comenzaron a conferir a una sola persona varios beneficios incompatibles, bajo el pretexto de encomienda. De esta forma se dieron encomiendas perpetuas de otras iglesias a quien poseía un beneficio con título, suponiendo con ello que no se vulneraban los sagrados cánones.

Apunta Devoti que, más tarde, hacia el siglo IX, se hizo frecuente el abuso de encomendar o entregar los monasterios a los legos y a jefes militares que defendían los territorios de los bárbaros, de manera que hasta llevaban el título de abades. Posteriormente, Carlomagno consideró como un deber devolver las abadías a los clérigos, sustrayéndolas de los legos. El VI Concilio de París del año 829 pidió al

emperador Luís el Benigno (Ludovico Pío) que, puesto que no podía impedirse que los seculares tuviesen encomiendas, se les obligase a obedecer a los obispos y abades²¹⁸.

En el Concilio de Maguncia del 847 se deliberó largamente sobre la forma de poner fin a los abusos. Se mandó que los abades comendatarios nombraran prebostes instruidos en las reglas monásticas para gobernar a los clérigos, asistir a los sínodos y cuidar de su grey.

También el Concilio de Coyanza e incluso los reyes procuraron corregir estos abusos y procuraron evitar que las encomiendas de los beneficios y monasterios se diesen a legos²¹⁹. Posteriormente, en 1253, el sínodo Salmuriense (Saumur) prohibió que los curatos se encomendasen a los que obtenían otra parroquia o beneficio. En el de León (Francia), en 1274, con Gregorio X, se abolió las encomiendas de los curatos y únicamente se permitió que se encomendase por un tiempo de seis meses y con utilidad de la Iglesia²²⁰. Después de este sínodo dejaron los obispos de dar curatos en encomienda perpetua, pero con Clemente V se volvió a dar facilidades en la obtención de encomiendas de beneficios. Pero viendo los males que se habían causado a la Iglesia de las concesiones hechas por sus predecesores y por él mismo, y viendo disminuir la disciplina clerical, las rentas de las iglesias, despreciarse el culto y negarse a los pobres lo que les correspondía, derogó todas las que había hecho²²¹.

Mediante decreto del Concilio de Viena (1311-1312), XV Concilio General convocado para la extinción de la Orden de los Templarios, presidido por Clemente V, se estableció que los legos que poseían iglesias, bajo el título de encomienda, las restituyeran. Lo mismo se mandó en el Concilio de Palencia (*Palentinum*) de 1388, en su canon 4.

En 18 de mayo de 1353 Inocencio VI publicó una constitución en la que revocaba todas las encomiendas y análogas concesiones de todas las prelacías, dignidades y

²¹⁸ “*Verum lapsu temporum laici ecclesiastica bona invadere coeperunt, potissimum vero principes ea militibus commendabant, ut opes ad gerendum bellum haberent*”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., Libro II, XIV, III, 25, fol. 410. “*Charlemagne se fit un devoir, de retirer les abbayes d’entre les mains de laïcs, pour les donner à des clercs*”. L. Thomassin, *Ancienne et nouvelle discipline de l’Eglise*, Paris 1717, Parte II, cap. XXI, 2, fol. 405. “*L’Empereur Louis le Debonnaire, ajoute cet évêque, arrête le cours de ces usurpations sacrileges*”. Ibidem, fol. 410.

²¹⁹ El Concilio de Coyanza, de 1050, celebrado en las diócesis de Oviedo, en su capítulo III establece que todas las iglesias y clérigos estén bajo la dependencia del obispo y que los legos no tengan potestad alguna sobre dichas iglesias o monasterios. Anteriormente, el concilio de Burges, de 1031, prohibió que los legos disfrutaran o retuvieran los fondos de las iglesias, por causa de las cuales ejercían imperio sobre los mismos clérigos. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones...*, o.c., tomo III, p. 97. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo I, pp. 137 y 292.

²²⁰ Canon 28 del Concilio de Saumur, en Francia. El sínodo de León fue el XIV concilio general; “*Parochialis ecclesia non commendetur, nisi constitutio in aetate legitima et sacerdotio: et tali, non nisi una, et illa tunc demum, cum necessitas vel utilitas exigit. Talis autem commenda ultra sex menses non duret. Quod contra praedicta factum fuerit, est irritum ipso iure*”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., In Sexto, I, Tít. VI, *De electione et electi potestate*, Cap. XV, fol. 18. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo II, p. 408.

²²¹ “*Provisiones sub titulo commendae factae de Ecclesiis Patriarchalibus, Archiepiscopalibus, Episcopalibus, et monasteriis ad petitionem regum vel quorumcumque magnatum, revocat*”. *Corpus Iuris Canonici, Extravagantes Comunes...*, o.c., Libro III, Tít. II, *De praebendis et dignitatibus*, Cap. II, fol. 335.

beneficios seculares y regulares. Pero esta prescripción no fue obedecida, a igual que muchas otras de los Romanos Pontífices.

También los reyes de Castilla, como Alfonso XI, en 1386, Juan I, en 1390, y Enrique III, en 1411, quisieron evitar que los legos poseyeran las encomiendas de los obispos y monasterios, declarando nulas tales concesiones²²².

El Concilio de Trento trató el problema de las encomiendas y estableció que las que vacaran se confiriesen en lo sucesivo a regulares de reconocida virtud y santidad. En cuanto a los monasterios cabezas de orden que estuviesen en encomienda deberán entrar en religión o de lo contrario renunciar, pues de otro modo se tendrán estas encomiendas como vacantes de pleno derecho²²³. De esta forma el sínodo acabó con las encomiendas de los monasterios.

13.3.- Clases.

Según García, Barbosa y Layman, entre otros canonistas, las encomiendas pueden clasificarse en temporales o perpetuas: “*Commenda est duplex, altera temporalis, altera perpetua*” (N. García, *Tractatus de Beneficiis*, o.c., primi tomi, pars 4, cap. IV, fol. 240; A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 9, 1, fol. 160). “*Duplicem esse commendam, perpetuam et temporalem*” (P. Laymann, *Theologiae Moralis*, o.c., Liber IV, tractatus II, cap. V, 7, fol. 24).

-Temporales.

“*Temporales Commenda dicitur fieri quando beneficium alicui datar al tempos in custodiam, et administrationem, ad utilitatem Ecclesiae*” (A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 9, 2, fol. 160).

Es cuando se confía un beneficio vacante a una persona que cuida de todo lo que de ella depende. Es, por tanto, una especie de depósito. La puede conceder el obispo o cualquier otro que tenga jurisdicción cuasi episcopal, porque no dan al comendatario ningún derecho sobre las rentas del beneficio. Tienen por objeto la utilidad de la Iglesia.

El tiempo para dar este tipo de encomiendas era de seis meses para las iglesias con cura de almas. Dicha costumbre fue derogada por el Concilio de Trento, que dispuso

²²² “Ninguno, salvo el Rey, pueda tener Encomiendas en los Abadengos y Monasterios de estos Reynos”. Ley 2ª, Tít. 17, Libro I, *Novísima Recopilación*, fol. 122. “Los legos no tengan Encomiendas de lugares de Obispos y Abadengos, ni de Monasterios, Iglesias y Santuarios”. Ibidem, Ley 3ª, fol. 123.

²²³ “*Plura beneficia curata obtinentes, ordinario suas dispensationes exhibeant, qui de vicario ecclesiis provideat, congrua portione fructuum assignata*”. Concilium Tridentinum, sesión 7, cap. 5, *De reformatione*; “*Quae vero in posterum vacabunt non nisi regularibus spectatae virtutis, et sanctitatis conferantur. Quo ad ea vero monasteria, quae capita sunt..., teneantur illi, qui in praesenti ea in commendam obtinent, nisi sit eis de regulari successore provisum, infra sex menses religionem illorum ordinum propriam solemniter profiteri, aut iis cedere: alias commendae praedictae ipso iure vacare censeantur*”. Ibidem, sesión 25, *De regularibus et monialibus*, cap. 21. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., pp. 122 y 486. “*Cum autem inter commendata monasteria reperirentur quoque quaedam monasteria quae essent capita et primates ordinum, voluit Synodus, ut non tantum cum in posterum per cessum vel decessum commendatariorum haec vacare contingeret, regulares personae iis praeficerentur; sed insuper voluit Synodus*”. Z. B. Van Espen, *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., Título XXXI, Cap. VII, *Addimenta ad Num.* 36, fol. 220.

que sin fijar plazo determinado, se establecieran vicarios en estas iglesias hasta que se proveyesen en propiedad²²⁴. No son estas encomiendas las que censuraron los concilios, pues por su utilidad no son susceptibles de abusos.

-Perpetuas.

“Perpetua Commenda conceditur in favorem personae cum facultate disponendi de beneficio, sicut verus beneficiarius” (A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 9, 22, fol. 161).

Son las que dan al comendatario el derecho de gozar del beneficio como verdadero beneficiado y de las que se ha abusado. Sólo el Papa puede conferir los beneficios en encomienda perpetua.

Es un verdadero título canónico, según González (*“Quoniam commenda perpetua beneficii, est titulus canonicus”*. *Commentatio ad regulam octavam Cancellariae...*, o.c., Glosa V, 2, fol. 140), e irrevocable de tal modo, que no se puede conferir a otro el beneficio mientras dure la encomienda. Suelen darse a los que carecen de las cualidades para obtener un beneficio, como sucede con los beneficios monásticos respecto de los clérigos seculares.

Las encomiendas de beneficios están prohibidas por las leyes generales de la Iglesia y sólo el Santo Padre puede concederlas, cuando a su juicio exista justa causa. Dichas encomiendas suelen concederse *in perpetuum* y sirven de título para recibir las órdenes, como si se tratasen de verdaderos beneficios, cuya naturaleza revisten, pues los clérigos comendatarios gozan de las mismas prerrogativas y derechos que los beneficiados²²⁵.

14.- EL DERECHO DE PATRONATO.

14.1.- Origen.

Desde la más remota antigüedad aparecen vestigios del patronato. Proviene de la palabra patrono, que procede del Derecho romano, según el cual recibían este nombre a los que manumitían o libertaban sus esclavos. El que antes era *dominus* del esclavo pasaba a ser *patronus*. Esta significación ya se usa en el Derecho Canónico (*Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XII, quaestio II, canon 61, fol. 606: *“De libertis ecclesiae, qui ab eius patrocinio descendunt”*). De esta forma, se creaba una relación de dependencia entre el liberto respecto del patrono llamada derecho de patronato, donde el liberto tenía que respetar al patrono como padre y prestarle sus servicios y el patrono era su tutor. Ambos tenían la recíproca obligación de

²²⁴ *“Ecclesia parochiali vacante deputandus ab Episcopo Vicarius, donec illi provideatur de Rectore. Nominati ad parochiales ecclesias, qua forma, et a quibus examinari debeant”*. Concilium Tridentinum, sesión 24, cap. 18, *De reformatione*. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., p. 432.

²²⁵ *“Iustis de causis commendae dantur ab Rom. Pontífice. Quoniam et hae in perpetuum dantur et titulum praestant ad ordines suscipiendos, et clerici commendatarii iisdem ferme praerogativis ac juribus, quibus beneficiarii”*. J. Devoti, *Institutionum canoniarum...*, o.c., Libro II, XIV, III, 28, fol. 686.

prestarse alimentos en caso de necesidad. Esta relación creaba unos derechos al patrono y se transmitía a los descendientes del mismo²²⁶.

En la Edad Media también recibieron este nombre los señores feudales que defendían y protegían, mediante pacto, al patrocinado, el cual les debía obediencia y fidelidad.

14.2.- Definición.

El derecho de patronato es un conjunto de prerrogativas honoríficas útiles y onerosas que corresponden a la persona (patrono o fundador) que, con permiso del obispo, ha fundado, construido o dotado alguna iglesia o erigido en ella un beneficio eclesiástico²²⁷.

El Cardenal Ostiense, H. de Segusio, en su obra *Aurea Summa*, Coloniae 1612, libro III, cap. XXXVIII, 1, fol. 1024 dice que “*ius patronatus est potestas repraesentandi instituendum ad beneficium ecclesiasticum simplex et vacans.*”

La misma definición utilizan los canonistas Azor (*Institutionum moralium*, o.c., Libro VI, cap. XIX, fol. 1079) y Lesio (*De Iustitia et iure...*, o.c., II, cap. XXXIV, dubit. IV, nº 17, fol. 421). Otros autores, como Layman (*Theologiae Moralis*, o.c., Liber IV, tractatus II, cap. XIII, I, fol. 38), definen el derecho de patronato de una forma un poco más elaborada como es la siguiente: “*ius nominandi, seu praesentandi aliquem instituendum ad beneficium ecclesiasticum vacans*” o también, según Rebufo (*Praxis beneficiorum*, o.c., tit. *Tertia pars signaturae*, 2, fol. 107): “*ius honorificum, onerosum, et utile competens ei qui ecclesiam construxit, dotavit vel fundavit, vele i qui ab eo causam habuit*”²²⁸.

Cavallario lo conceptúa como una facultad concedida por los cánones, según la cual el patrono, al hallarse vacante un beneficio o curato, presenta para cubrirlo un ministro idóneo, a fin de que sea instituido por el obispo o por otro colador y disfrutando de ciertos derechos²²⁹.

Por tanto el patronato es un derecho de carácter personal y honorífico. Es, según Devoti, la facultad de presentar un clérigo para alguna iglesia o beneficio vacante, a fin de que se le dé la institución canónica. Se llama patrono al que tenía el derecho de

²²⁶ “*Patronus qui in casu egestatis potest a suo liberto alimenta consequi*”. M. Loterio, *De re beneficiaria...*, o.c., liber II, quaestio III, 7, fol. 7. J. Iglesias, *Derecho romano...*, o.c., pp. 137-138.

²²⁷ P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XIV, §.248, p. 243. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., XXXVI, p. 653.

²²⁸ Otras definiciones, casi idénticas son: “*Ius honorificum, onerosum et utile, alicui competens in Ecclesia, eo quod de Ordinarii consensu eam construxerit, fundaverit, vel dotaverit, aut id a suis antecessoribus factum fuerit*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 12, 2, fol. 194. “*Ius honorificum, onerosum et utile, competens alicui in Ecclesia, pro eo, quod de Diocesani consensu ipsam construxit, dotavit, vel fundavit ipse, vel is, a quo causa habet*”. P. de Murga, *Tractatus de beneficiis...*, o.c., quaestio tertia, I, 1, fol. 242.

²²⁹ D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XLV, I, p. 137.

patronato, pues debe patrocinar una iglesia o es dueño y señor de aquellas cosas con las que se edifica una iglesia²³⁰.

El principal derecho del patrono es el de presentación, que consiste en proponer al obispo un sujeto idóneo para que le confiera un beneficio vacante. El acto de dar la colación²³¹ por el obispo al presentado se llama institución.

El derecho de patronato es un derecho espiritual, del cual no son incapaces los legos, entendido este derecho como los que corresponden a la generalidad de los fieles, como el de sepultura y percepción de sacramentos. Puede existir sin el de representación.

14.3.- Fundamento y desarrollo.

Berardi y también Riegger consideran que la naturaleza del derecho de patronato ha suscitado entre los canonistas diversas controversias, al considerarlo unos como un derecho espiritual del cual son incapaces los legos sin un privilegio especial de la Iglesia, otros como cuasi espiritual que pueden ejercer todos los cristianos y otros, en fin, como puramente temporal:

“Ius patronatus tanquam ius spirituale censeretur, ad quod laici non alias admitti possint, quam si singulare privilegium demonstraretur, propterea quod laici dicantur iurium spiritualium incapaces”. C. Berardi, *Commentaria in ius ecclesiasticum...*, o.c., dissertatio 4, cap. I, fol. 115; P. Riegger, *Institutiones de jurisprudentia eclesiastica...*, o.c., parte II, libro III, 721, pp. 86-87.

Pero lo cierto es que el derecho de patronato no puede considerarse como una consecuencia del derecho de propiedad, pues no puede ostentarse dicho título sobre cosas espirituales. El patrono no tenía ningún derecho, ni el hecho de la fundación acarrearía ninguna obligación respecto de la iglesia donde se realizaba. Únicamente se trata de una obra meritoria que la Iglesia reconoce. Pero se creyó oportuno que la misma mostrase su gratitud de alguna manera para con sus bienhechores. Esta gracia, especial concesión o recompensa de la Iglesia, en reconocimiento a quien la ayuda y protege, es el verdadero fundamento de este derecho.

Durante mucho tiempo se desconoció en la Iglesia esta prerrogativa, pero con el tiempo se fue admitiendo y se concedieron, mediante disposiciones particulares, pequeñas distinciones a los patronos que consistían en recitar sus nombres en las preces

²³⁰ *“Ius Patronatus (est) ius presentandi clerici ab obtinendum vacans beneficium. Ideoque ut iuris illius definitio ea omnia iura complectatur, quae patrono competunt, sic generaliter definiendum illud videtur ius quod fundatori alicuius ecclesiae in ea competit”.* F. de Roye, *De iure patronatus, libro tertio Decretalium*, Andegavi 1667, cap. I, fols. 1-2. *“Est autem ius patronatus ius praesentandi clericum instituendum ad ecclesiam, vel beneficium vacans”.* J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., V, XLVIII, fol. 292.

²³¹ La colación por el obispo puede ser libre o menos libre. La primera ocurre en los beneficios de colación ordinaria. La menos libre tiene lugar en los beneficios de derecho de patronato, porque está obligado a hacer la colación en el presentado por el patrono. En consecuencia, hay autores que sostienen que el derecho de patronato compone a las iglesias y beneficios en una especie de servidumbre, al disminuir la libertad del obispo, tesis que rechaza Berardi en su disertación 4ª, del título I del tomo II, fol. 115. P. Golmayo, *Institutiones del Derecho Canónico...*, o.c., XIV, §.248, p. 244.

públicas e inscribirlos en las dípticas de las iglesias que habían fundado. Así aparece en Nov 123,18²³²:

“Si quis oratorii domum fabricaverit, et voluerit in ea clericos ordinare aut ipse, aut eius heredes, si expensas ipsis clericis ministrant, et dignos denominant, denominatos ordinari.”

El primer precedente del derecho de patronato se encuentra en el Concilio Arausicano de 441, donde se otorga a los obispos de las Galias la prerrogativa de que si alguno de ellos fundaba una iglesia en diócesis ajena, tuviese la facultad de presentar o elegir a los clérigos que habían de servirla²³³. Esta misma disposición se dio después por el Papa Nicolás I.

Esta prerrogativa era bastante limitada pues las fundaciones hechas por legos no obtuvieron este privilegio, ya que los obispos ordenaban respecto a este punto lo que creían más conveniente²³⁴. Pero en Oriente no transcurrió mucho tiempo sin que obtuviesen ciertas concesiones empezando por la administración de los bienes y finalizando en el derecho a presentar persona digna para el oficio de la fundación, cuya disciplina ya se había introducido en el siglo VI y posteriormente por el concilio de Toledo²³⁵ en su canon 2. Este derecho de presentar, que al principio se limitaba al fundador,²³⁶ pues era una prerrogativa personal, pasó a ser hereditario²³⁷.

²³² “*Hinc nomina et elogia fundatorum in ecclesiis recitata sacrisque diptychis inscripta fuisse constant; hinc eorum nomina ecclesiis imposita; hinc datum ius designandi et offerendi clericum, qui beneficium adipiscatur*”. J. Devoti, *Institutionum canoniarum...*, o.c., libro I, tit V, sección 4ª, XLIX, fol. 292. F. Walter, *Manual de Derecho eclesiástico universal...*, o.c., libro V, cap. IV, p. 370. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., XXXVI, p. 654.

²³³ Canon 10 del citado concilio celebrado en Orange. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones...*, o.c., tomo I, p. 378. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo I, p. 477. “*Episcopus, qui in alterius dioecesi ecclesiam aedificat, eius consecrationem sibi vindicare non valet*”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XVI, quaestio V, C. I, fol. 676.

²³⁴ “*In ecclesia, quam quis aedificat, nihil sibi prae caeteris vendicat*”. Ibidem, causa XVI, quaestio VII, C. XXVI. “*Eodem*”. Ibidem, C. XXVII, fol. 695; “*Basilicarum conditores in rebus ecclesiarum nullam potestatem se habere cognoscant*”. Ibidem, causa X, quaestio I, C. VI, fol. 525. Concilio de Orleáns IV, del año 541, canon 33. Concilio IV de Toledo en 633. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomos I y II, pp. 479 y 112.

²³⁵ Concilio IX de Toledo del año 655. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo II, p. 123. “*Fundatores ecclesiarum ordinandos in eis episcopo offerant*”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XVI, quaestio VII, C. XXXII, fol. 696.

²³⁶ “*Gelasius quendam Ruffinum monachum iubet sacerdotem fieri, et in quadam basilica ordinari*”. Ibidem, causa XVI, quaestio I, C. XXXI, fol. 659. “*Ille debet abbas institui, quem sua congregatio et possessionis dominus ordinari poposcerit*”. Ibidem, causa XVIII, quaestio II, C. IV, fol. 713. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XLV, II, p. 137.

²³⁷ F. Walter, *Manual de Derecho eclesiástico universal...*, o.c., libro V, cap. IV p. 371. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 263.

14.4- Clases²³⁸.

Durante varios siglos no hubo más que un derecho de patronato, sin diferencia alguna entre, como se apreciará más adelante, eclesiástico y laical, ni en los cánones ni en las novelas de Justiniano. Pero poco a poco, no por los cánones sino por costumbre se introdujo la anterior y primera distinción.

Posteriormente, a lo largo de todas las épocas los canonistas han tratado el tema de los patronatos y su clasificación. Azor, Lesio, Layman y de León dividen en dos el patronato: eclesiástico y laico

“Quotuplex sit Ius patronatus? Respondeo, duplex, unum clericorum, laicorum alterum”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro VI, cap. XIX, 3, fol. 1080.

“Aliud enim est ius patronatus ecclesiastici, aliud laici”. L. Lesio, *De Iustitia et iure...*, o.c., II, cap. XXXIV, dubit. III, nº 18, fol. 421.

“Duplex est ius patronatus: ecclesiasticum et laicum”. P. Layman, *Theologiae Moralis*, o.c., Liber IV, tractatus II, cap. XIII, 4, fol. 38.

“Distinxit Iuspatronatus in ecclesiasticum et laicale”. A. de León, *De officio capellani*, o.c., quaestio quarta, 1, fol. 100.

Otros autores representados por Barbosa y de Murga lo dividen en tres clases: eclesiástico, laical y mixto:

“Ius patronatus est triplex; ecclesiasticum scilicet, laicale et mixtum”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 12, 3, fol. 194.

“Iuspatronatus dividitur in laicale, ecclesiasticum et mixtum ex utroque”. P. de Murga, *Tractatus de beneficiis...*, o.c., quaestio tertia, I, fol. 242.

Aunque la principal división del derecho de patronato es la de eclesiástico, laical y mixto, canonistas posteriores como Leuren, Schmalzgrueber, Reiffenstuel, Berardi, Devoti, Aguirre y Golmayo lo clasifican o dividen desde otra óptica. Así, el patronato puede ser activo y pasivo. El activo se subdivide en eclesiástico, laical o secular, mixto, real o accesorio, personal o principal, hereditario, familiar, gentilicio, primogenial, lineal y descendental. El pasivo en patrimonial.

14.4.1- Patronato activo.

²³⁸ D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XLV, VII y VIII, pp. 140-141. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 20, art. 8, pp. 190-192. J. Aguirre, *Curso de disciplina eclesiástica general y particular de España*, Madrid 1857, tomo III, pp. 131-133. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XIV, §.251 a 254, pp. 246-248. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., pp. 264-265. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., pp. 659-661. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 59. B. Gutiérrez Fernández, *Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho Civil español*, Madrid 1868, tomo II, pp. 310-311. F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho...*, o.c., tomo VI, pp. 1530-1531.

Consiste en el derecho que tiene el patrono de presentar a un clérigo para que se le instituya o nombre en una iglesia, oficio o beneficio eclesiástico vacante y, en general, en el disfrute de ciertos derechos honoríficos y útiles.

“Ius patronatus activum vocatur, quando Patronus potest praesentare ad beneficium” A. Reiffenstuel, *Theologia Moralis*, o.c., 21, fol. 284.

14.4.1.1- Patronato eclesiástico.

Si corresponde o compete a persona eclesiástica individual o jurídica por razón de dignidad, beneficio, iglesia, u oficio eclesiástico, es decir, es el fundado con bienes eclesiásticos.

“Illud autem est ius patronatus ecclesiasticum, quod, licet originem habuerit ex patrimonio layci, fuerit tamen vel ab initio, vel postea fundacione, testamento, donatione, aut alio quo vis titulo in ecclesiam translatum, aut in capitulum, seu collegium ecclesiasticum canonicarum regularium, aut saecularium, vel in aliquam personam ecclesiasticam ratione ecclesiae, dignitatis, aut beneficii et tandem, quos competit ecclesiae, vel ratione ecclesiae”. N. García, *Tractatus de Beneficiis*, o.c., primi tomī, pars 5, cap. I, 553, fol. 331.

“Iure patronatus ecclesiastico, videlicet, quando ex bonis ecclesiae beneficium fundatur, seu dotatur, aut laico dotatur ecclesiae, aut ratione ecclesiae competit et alicui”. Jerónimo González, *Commentatio ad regulam octavam Cancellariae...*, o.c., Glosa XVIII, 4, fol. 312.

“Ius patronatus Ecclesiasticum est, quod collegio ecclesiastico, aut personae ecclesiasticae ratione ecclesiae, aut dignitatis, seu beneficii ecclesiastici, quod habet, competit”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, I, 6, fol. 244.

De esta forma, se consideran de derecho eclesiástico los patronatos que competen: al obispo o abad por razón del dominio temporal perteneciente a una iglesia o monasterio; a los legos de ambos sexos con hábitos religiosos; a los maestros y caballeros de las órdenes militares; a los presidentes y ecónomos de las iglesias; a los rectores de hospitales erigidos con autoridad del obispo y a las hermandades de legos anejas a una iglesia²³⁹.

²³⁹ *“Ius patronatus sit ecclesiasticum quod si aliquis episcopus ex largitate fidelium obtinens comitatum, vel ducatum, in quo exercet iura temporalia, ut dominus temporalis”*. N. García, *Tractatus de Beneficiis*, o.c., primi tomī, pars 5, cap. I, 555, fol. 331. *“Ius patronatus spectans ad laicos religiose viventes, et portantes habitum religiosum, est ecclesiasticum, et sic ius patronatus spectans ad illas de tertio ordine, et etiam spectans ad magistros seu milites ordinum militarium, etiam coniugatos, est ecclesiasticum”*. Ibidem, 556, fol. 331. *“Quod hanc administrationem, habentur pro personis ecclesiasticis ..., quae de iure habent curam fabricae et administrationis bonorum ecclesiae et sic ratione officii, et uti tales administradores, possunt conveniri coram iudice ecclesiastico..., ius patronatus dicitur ecclesiasticum”*. Ibidem, 599, fol. 341. *“Et idem mihi verius videtur in iure patronatus spectante ad hospitalarios, id est, administradores hospitalium, etiam laicos, quando hospitale fundatum est, seu approbatum auctoritate episcopi, (ius patronatus dicitur ecclesiasticum)”*. Ibidem, 600, fol. 341. *“Quando confraternitates sunt affixae alicui ecclesiae, tunc earum ius patronatus esse ecclesiasticum..., tamen quatenus faciunt collegia, quae ecclesiis ad haerent, bene dicuntur patroni ecclesiastici”*. Ibidem, 605, fol. 342.

14.4.1.2- Patronato laical o secular.

El que compete a legos o eclesiásticos por título de fundación u otro, es decir por razón del patrimonio, pues con él dotó o fundó una iglesia o beneficio o porque ha sucedido a los fundadores.

Ius patronatus laici dicitur, quod competit alicui, quia ex bonis patrimonialibus, seu saecularibus Ecclesiam fundavit, vel construxit, vel dotavit, aut beneficium aliquod erexit, aut quia ab aliquo forum causam habuit. L. Lesio, *De Iustitia et iure...*, o.c., II, cap. XXXIV, dubit. III, nº 19, fol. 421.

Aunque la definición mejor y más ajustada a lo descrito es la que sigue: “*Laicale, seu saeculare ius patronatus est, quod universitati, aut collegio non sacro, vel personae privatae, sive laico, sive clerico, non ratione ecclesiae, vel ecclesiastici beneficii, sed ratione propii patrimonio competit, vel quia ex hoc ecclesiam, aut beneficium fundavit, construxit, dotavit, aut quia ejusmodi fundatoribus successit*”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, I, 8, fol. 245).

Para saber o conocer la naturaleza de un patronato, es decir, si es eclesiástico o laical habrá que fijarse en la clase de bienes o título de donde procede. La persona del fundador no puede servir de regla, porque puede ser eclesiástica y fundar un patronato laical con sus bienes familiares o, por el contrario, ser un lego y fundar un patronato eclesiástico con bienes eclesiásticos, poseídos en encomienda o por otro título²⁴⁰.

Si hay duda de si el patronato es eclesiástico o laical, se presume siempre eclesiástico, pues es lo que menos se opone al derecho común y a la libertad de la Iglesia²⁴¹.

14.4.1.3- Patronato mixto.

Si compete por ambos títulos, es decir, por razón de la iglesia y del patrimonio, en cuanto se compone de bienes eclesiásticos y laicales. Tiene lugar cuando compete simultáneamente al clérigo, por razón de la iglesia o beneficio y al lego por razón de la dotación o fundación y también cuando compete a una misma persona por los dos títulos.

“Mixtum vero iuspatronatus illud dicitur, quod pertinet partim ad Ecclesiasticum et partim ad laicum”. Jerónimo González, *Commentatio ad*

²⁴⁰ “*Hinc ut sciatur an ius patronatus, quod alicui competit, sit ecclesiasticum, vel saeculare, non persona, cui competit sed titulus, ex quo, et ratione cuius id competit, considerari debet; nam ut vidimus, ecclesiasticum competere etiam laicis potest, si competat ratione ecclesiae, vel alterius loci pii, et religiosi: et contra competere clericis potest etiam ius patronatus laicale, si id competat ratione patrimonii*”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, I, 8, fol. 245. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XIV, §.251, p. 246.

²⁴¹ “*Donatio iuris patronatus laici facta loco ecclesiastico, etiam sine consensu episcopi, tenet: non tamen praeiudicat iuri episcopi*”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., In Sexto, Libro III, Tít. XIX, *De iure patronatus*, cap. único, fol. 118.

regulam octavam Cancellariae, o.c., Glosa XV, 18, 8, fol. 312. Misma definición: A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 12, 17, fol. 195.

14.4.1.4- Real o accesorio.

Según Roye, *De iure patronatus...*, o.c., fol. 24:

“Reale vocant quod glebae, seu rei, fundo, possessione, castro a fundatore adscriptum est”.

Reiffenstuel amplía la definición anterior:

“Reale dicitur, quod cohaeret certo loco, utputa castro, praedio, monasterio, ac huiusmodi: et hoc transit ad quemcunque talis loci possessorem”. (*Theologia Moralis*, o.c., Tractatus XI, distinctio III, quaestio II, 22, fol. 284).

El patronato es real cuando va unido a una cosa, título o derecho real (predio o fundo). Pasa siempre al que es poseedor de la cosa, por lo que el patronato se considera accesorio. El que tiene la cosa como propietario o poseedor tiene también el derecho de presentar para el beneficio.

El patronato eclesiástico siempre es real, pues va unido a una dignidad u oficio eclesiástico. Este derecho de patronato real tiene, al parecer, su origen de la costumbre que tenían los nobles en construir oratorios y capillas en sus casas de campo para comodidad de sus familias, ya que éstas, al haber sido edificadas en beneficio de estas familias, pertenecían a ellas, según expone Z. B. Van Espen, en su obra *Ius Ecclesiasticum Universum...*, o.c., Título XXV, Cap. II, XIII, fol. 93:

“Ius patronatus hoc originem habuisse apparet ex oratoriis et sacellis, quae iam pridem viri nobiles circa suos fundos, aut in suis domibus exstruebant. Cum enim domus, seu castra ipsorum, vel etiam villae fundis ipsorum adiacentes procul ab ipsa ecclesia parochiali distarent, pro commoditate familiae haec oratoria, vel sacella exstruebant.”

14.4.1.5- Personal o principal.

Cuando compete a una persona, esto es, al patrono, sus herederos o descendientes, independientemente de una cosa temporal o de toda clase de cosas o derechos. En caso de duda, de si el patronato es eclesiástico o personal, se presume siempre personal. Si no se prueba lo contrario el patronato laical es siempre personal.

“Ius patronatus personale est, quod cohaeret personae fundatoris, vel eius haeredis, ubicunque locorum existat”. A. Reiffenstuel, *Theologia Moralis*, o.c., Tractatus XI, distinctio III, quaestio II, 22, fol. 284.

14.4.1.6- Hereditario.

El que pasa a toda clase de herederos o sucesores por voluntad del poseedor, aunque sean personas extrañas, según Barbosa, en su obra, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 12, 20, fol. 196:

“Quod transit ad quoscunque haeredes, etiam extraneos.”, citando a D. Covarrubias: *“ius patronatus ex propria natura ad haeredes etiam extraneos transfire, et haereditarium esse”*. *Operum*, Genevae 1734, tomo II, libro II, cap. 18, 6, fol. 247.

14.4.1.7- Familiar.

Pasa sólo a los parientes o familia del fundador o de la persona designada por él. Se llama familia la que descende del fundador (*“Ius patronatus familiare, dicitur illud, quod competit et relictum est tantum illis de tali familia, vel in quo vocantur solum illi, qui sunt de genere testatoris”*. A. Barbosa, o.c., fol. 196). Los parientes colaterales también forman parte de la familia y si son llamados al patronato, entonces se llama gentilicio.

Siguiendo a Berardi (*“Sed et quaedam aliae species sunt iurispatronatus, quae cum modo memoratis quandam analogiam habent. Huiusmodi est patronatus primogenialis..., linealis..., descendentalis..., denique est patronatus mixtus”*), el patronato familiar, según las personas llamadas, se divide o clasifica en:

a) Primogenial.

Cuando es llamado únicamente el primogénito de cierta familia o agnación (*“Qui competit tantum primogenitis de certa familia, vel agnatione”*. *Commentaria in ius ecclesiasticum...*, o.c., dissertatio 4, cap. II, fol. 121).

b) Lineal.

Cuando se llama una línea de la familia, y concluida o extinguida pasa a otra (*“huiusmodi est patronatus linealis, qui primum ad certam lineam familiae, vel agnationis defertur, qua demum deficiente ad aliam lineam devolvitur”*).

c) Descendental.

Si sólo se transmite a los descendientes del fundador, estén en la familia o hayan salido de ella (*“huiusmodi est patronatus descendentalis, ad quem vocantur descendentes a fundatore, sive sint in familia, sive extra familiam”*).

d) Mixto.

Se refiere a los que reúnen las dos cualidades de ser herederos e individuos de la familia (*“huiusmodi denique est patronatus mixtus, ad quem vocantur qui sunt de familia, aut de gente, aut de descendantibus fundatoris”*).

El fundador o cualquier patrono pueden convertir el patronato hereditario en familiar o gentilicio, pues redundan en beneficio de la Iglesia, pero no puede conmutarlo en hereditario si es familiar o gentilicio.

14.4.2-Pasivo.

El concedido por el fundador a ciertas personas, en virtud del cual ellas solas son llamadas a la obtención de un beneficio, es decir es el derecho de ser presentado. Así lo dispone Barbosa en su obra antes citada: “*Passivum est, per quod certi de tali familia sunt praesentandi*”. Aunque tiene una mejor definición Berardi al decir que “*competit certis personis, aut certo personarum generi, consistens in iure eisdem a fundatore concesso*”. Puede ser familiar o patrimonial.

14.4.2.1- Familiar.

Es cuando tiene derecho a ser nombrado el que pertenece a una familia, ya sea en línea recta o transversal, según lo dispuesto por el fundador.

14.4.2.2- Patrimonial.

Cuando tienen derecho a ser nombrados los naturales de una diócesis o localidad para los beneficios, con exclusión de los extraños.

14.5- Modos de adquirir el derecho de patronato.

Los diferentes modos de adquirir el derecho de patronato han nacido de los primitivos cánones que concedían derechos a los fundadores y de las Decretales de Gregorio IX, donde se consignaron como justos otros títulos para la adquisición de este derecho de patronato. Según Cerola (*Praxis episcopalis...o.c.*, pars prima, verbum ius patronatus, fols. 246-247) hay diez modos:

“Acquiritur (ius patronatus) decem modis. Primo, aedificatione sola. Secundo, dotatione. Tertio, fundatione. Cuarto, successione. Quinto, donatione. Sexto, permutatione. Septimo, venditione. Octavo, consuetudine, sine praescriptione. Nono, privilegio. Decimo, readificatione”.

De esta manera, se puede hacer una clasificación entre modos originarios, modos derivativos y modos extraordinarios. A la primera clase pertenecen la fundación, construcción, dotación, reedificación; a la segunda, el privilegio y la prescripción; y a la tercera clase la sucesión y el contrato (donación, permuta y venta).

A-Fundación, construcción o dotación de la iglesia o beneficio²⁴².

²⁴² “*In ecclesia, quam quis aedificat, nihil sibi prae caeteris vendicet*”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XVI, quaestio VII, C. XXVI, fol. 695. La ley 1ª, título XV, *Del derecho de patronado*, de la Partida 1ª refiere los mismos títulos para adquirir el derecho de patronato: “*E este derecho gana ome por tres cosas. La una, por el suelo que da a la Eglesia, en que la fazen. La segunda, porque la fazen. La tercera, por heredamiento que le da, a que dizen Dote*”. I. Sanpots, R. Martí de Eixalá y J. Ferrer, *Las Siete Partidas...* o.c., pp. 389 y ss. “*Quot modis aliquis acquirat iuspatronatus? Respondeo tribus modis; primo ex eo quod aliquis ecclesiam fundavit. Secundo modo, quia ecclesiam aedificavit. Tertio, quia ecclesia dotavit*”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro VI,

Si es la fundación de un beneficio, basta el acto del fundador de destinar los bienes que sean necesarios para el sostenimiento de un clérigo que ha de desempeñar cierto oficio en la iglesia. Por tanto, la fundación, en sentido estricto, consiste en ceder un fundo o suelo para la construcción de una iglesia:

“Fundatores ecclesiarum ordinandos in eis episcopo offerant”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XVI, quaestio VII, C. XXXII, fol. 696.

Si es la fundación de iglesia hacen falta tres requisitos indispensables: la donación de un fundo (*fundatio in specie*) donde pueda erigirse el templo, la construcción del mismo (*extructio*) y la dotación (*dotatio*) para el sostenimiento del culto y sus ministros. Así lo expone la glosa, basada en el ya citado canon XXVI “*Piae mentis*”, causa XVI, quastio VII del *Corpus Iuris Canonici*:

“Patronum faciunt dos, aedificatio, fundus”.

Lo que significa que el derecho de patronato se gana por la dotación, por el edificio de la Iglesia o por el terreno que se conceda para ella: “*Hacen patrono la dote, la edificación y el fundo*”.

De esta forma, advierte el Concilio de Trento que nadie puede obtener el derecho de patronato si no cumple estos requisitos de fundar, construir o dotar una iglesia, beneficio o capellanía:

“Nemo, etiam cuiusvis dignitatis ecclesiasticae, vel saecularis, quacumque ratione, nisi ecclesiam, beneficium, aut capellam de novo fundaverit, et construxerit; seu iam erectam, quae tamen sine sufficiente dote fuerit, de suis propriis, et patrimonialibus bonis competenter dotaverit; ius patronatus impetrare, aut obtinere possit, aut debeat”. (*Concilium Tridentinum*, sesión 14, cap. 12, *De reformatione*. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., p. 222).

La donación o fundación consiste en ceder o dar suelo para la construcción de una iglesia. La construcción se refiere a quien a sus expensas edifica una iglesia o se construye. La dotación consiste en asignar una renta anual, suficiente para el culto y los ministros de una iglesia ya construida o que se va a construir²⁴³.

cap. XIX, 4, fol. 1081. “*Fere autem omnes interpp. agnoscunt tres constituendi, et adquirendi iuris patronatus modos, aedificationem, dotationem et fundationem*”. F. de Roye, *De iure patronatus...*, o.c., cap. XIII, fol. 43. “*Non solum autem ex constructione Ecclesiae ius patronatus acquiritur, sed tribus de causis potest acquiri. Prima est Ecclesiae alicuius fundatio. Secunda est etiam sola constructio. Tertia est dotis, sive certi redditus assignatio Ecclesiae facta*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 12, 28, 50, fols. 196 y 198. “*Tres esse potissimum causas et modos, quibus primitus acquiritur Iuspatronatus, videlicet, fundatio, aedificatio et dotatio ecclesiae*”. A. Reiffenstuel, *Ius Canonikum Universum...*, o.c., XXXVIII, I, 4, fol. 898.

²⁴³ “*Porro fundasse ecclesiam ad propositum proprie dicitur ille, qui fundum, seu solum, sive terrae spatium dedit, in quo aedificata fuit ecclesia. Aedificasse ecclesiam dicitur, qui eam cum consensu ordinarii propriis sumptibus construxit. Dotare ecclesiam dicitur, qui ei sine dote fundatae et constructae congruam dotem, id est, sufficientes assignat, et tribuit redditus, seu annuos census pro ministris*

B-Reedificación o redotación (aumento de dote).

Consecuencia de los modos originarios de adquirir el derecho de patronato, son la reedificación y la redotación, considerados justos títulos a igual que los primeros.

“Sub constructione, seu fundatione, comprehendit etiam readificationem ex qua cum ecclesia est penitus destructa, seu dituta. ita ut nova consecratione indigeat, acquiritur ius patronatus...” (N. García, *Tractatus de Beneficiis*, o.c., primi tomi, pars 5, cap. IX, 51, fol. 509).

“Sub aedificatione comprehenditur etiam readificatio ecclesiae penitus destructae, in quo casu primus aedificans amittit, et readificans acquirit ius patronatus” (A. Reiffenstuel, *Ius Canonicum Universum...*, o.c., XXXVIII, I, 8, fol. 899).

Se requiere pactarlo expresamente con la autoridad eclesiástica, en este caso el obispo (*“sed requiritur primo auctoritas episcopi”*. Cerola *Praxis episcopalis...* o.c., fol. 247), que valorará si debe dar la licencia o dejar que las cosas sigan como están. No toda reparación ni cualquier redotación son causa suficiente para adquirir este derecho. La reedificación o el aumento de dote debe ser tal que sin ella no pueda subsistir el templo o el beneficio (que haya sido destruido, por ejemplo), o que para hacerla falten los medios ordinarios establecidos y que la nueva dotación sea bastante para sostener la iglesia o beneficio, que de otra manera no podrían subsistir. Debe ser, según el Concilio Tridentino, por evidente necesidad de la citada iglesia o del beneficio²⁴⁴.

Como el derecho no decía a cuanto debía ascender el aumento de la dote, se daba lugar a privilegios y abusos, pues se consideraba bastante una pequeña cantidad, pero en 1522, con Adriano VI en su constitución *“Accepto”* se exigió que dicho aumento fuese al menos la mitad de la dote.

C-Privilegio y prescripción.

Frente a los modos originarios de adquirir el derecho de patronato se encuentran los extraordinarios, a saber, el privilegio y la prescripción.

El patronato también se adquiere por privilegio del Romano Pontífice²⁴⁵, única autoridad que puede concederlo, siempre que sea por necesidad o utilidad de la iglesia.

ecclesiae, pro paramentis, pro luminaribus, alisque necessariis”. A. Reiffenstuel, *Ius Canonicum Universum...*, o.c., XXXVIII, I, 6, 7 y 9, fols. 898-899.

²⁴⁴ *“Ob maxime evidentem ecclesiae, vel beneficii, seu dignitatis necessitatem legitime constitutos esse”*. Concilium Tridentinum, sesión 25, cap. 9, *De reformatione*. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., p. 542. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XIV, §.256, pp. 250-251. J. Aguirre, *Curso de disciplina eclesiástica...*, o.c., tomo III, título I, secc. 3ª, §.III, p. 137.

²⁴⁵ *“Primo prohibet submissionem ecclesiarum, suorum immobilium bonorum vel iurium fieri laicis absque consensu capituli et licencia Papae”*. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., In Sexto, III, Tít. IX, *De rebus ecclesiae non alienandis*, cap. II, fol. 106. *“Et quidem Privilegio, si summus Pontifex alicui de ecclesia bene merito, vel ob aliam causam illud concedit, et si ecclesiam nec fundarit, nec aedificarit, nec dotarit. Ratio est, quia Papa ex plenitudine potestatis de cunctis beneficiis habet plenarium*

Es un modo extraordinario de adquirir el patronato y tiene su origen en el derecho de Decretales.

Antes del siglo XV era concedido el derecho de patronato por privilegio también por los obispos, pero debido a los abusos en esta materia, a partir del Concilio de Trento²⁴⁶ se quitaron todos los privilegios, excepto a emperadores, reyes y príncipes.

Para adquirir el derecho de patronato por prescripción se requiere que sea inmemorial, que medien muchas presentaciones aceptadas y que deba probarse este derecho por medio de título²⁴⁷. Se adquiere en contra del patrono por la posesión durante cuarenta años y, en contra de la iglesia libre por la posesión inmemorial.²⁴⁸

Desde que el derecho de patronato se hizo transmisible a los herederos empezó a considerarse como los demás derechos hereditarios y, por consiguiente, quedó sujeto a prescripción²⁴⁹.

D-Sucesión, donación o permuta.

Según los comentaristas entre los modos derivativos de adquirir el derecho de patronato se encuentran la sucesión, la donación y la permuta, además de la venta. Azor lo contempla en su obra ya citada al decir:

“Quot modis Iuspatronatus in alterum transferri? Respondet, quator modis: donatione, permutatione, venditione et testamento, sive iure haereditariae successionis.”

La sucesión no se conoció en los primeros tiempos, pues era una gracia personal, por lo que la Iglesia no había dado ninguna regla acerca de la transmisión del derecho de patronato. Posteriormente, a partir del siglo VI, se hizo perpetuo este derecho, pasando a los sucesores del fundador.

potestatem. Episcopi vero Iuspatronatus concedere non possunt”. A. Reiffenstuel, *Ius Canonicum Universum...*, o.c., XXXVIII, I, 12, fol. 900.

²⁴⁶ *“Seu facultates, et privilegia concessa, tam in vim patronatus, quam alio quocumque iure nominandi, eligendi, praesentandi ad ea, cum vacant, exceptis patronatibus..., quae ad imperatorem, et reges, seu regna possidentes, aliosque sublimes, ac supremos principes, iura imperii in dominiis suis habentes, pertinent”*. Concilium Tridentinum, sesión 25, cap. 9, *De reformatione*. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., pp. 538-539.

²⁴⁷ *“ut titulus iuris patronatus sit..., ex multiplicatis praesentationibus per antiquissimum temporis cursum, qui hominum memoriam excedat, aliasve secundum iuris dispositionem. In iis vero personis, seu communitatibus, vel universitatibus, in quibus id ius plerumque ex usurpatione potius quaesitum praesumi solet, plenito, et exactior probatio ad docendum verum titulum requiratur”*. Ibidem, sesión 25, cap. 9, *De reformatione*. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., pp. 537 y 538.

²⁴⁸ *“Sufficit electo ad obtinendum, docere eligentem fuisse in quasi possessione tempore electionis, licet non probet, quod proprietas iuris eligendi ad illum pertineret”*. Corpus Iuris Canonici, Decretales..., o.c., Libro I, Tít. VI, *De electione et electi potestate*, cap. XXIV, fol. 51. *“In praescriptionibus sufficit bona fides, ubi ius commune, vel praesemptio non est contra praescribentem, alias debet allegari titulus, et probari: nisi sit praescriptio, cuius contrarii non extat memoria”*. Ibidem, In Sexto, II, Tít. XIII, *De praescriptionibus*, cap. I, fols. 70-71.

²⁴⁹ D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., III, cap. XLV, IV, p. 139.

Mediante la sucesión se transmite el derecho a los herederos testamentarios o legítimos de los fundadores si es patronato laical personal. Este derecho no puede dividirse porque es incorporal, simple e indivisible en cuanto a su esencia:

“Si propter discordiam patronorum ecclesia caret administratore, cessatur in ecclesia a divinis, tolluntur reliquiae, et ostia clauduntur, si aliter sine scandalo ecclesia providere non potest”. Corpus Iuris Canonici, Decretales..., o.c., Libro III, Tít. XXXVIII, De iure patronatus, cap. I, fol. 492.

También la Ley 12, Título XV, Partida 1ª dice: *“Que el derecho del Patronadgo non se puede partir”*. I. Sanponts, R. Martí de Eixalá y J. Ferrer, *Las Siete Partidas...* o.c., p. 604.

Una vez hecha la división de la herencia, el patronato corresponde al que adquiere el dominio de la cosa al que va anejo (caso de patronato laical real). Si es eclesiástico pasa al sucesor en la dignidad, oficio o cargo eclesiástico.

La donación consiste en que el patrono puede donar su derecho libremente a una iglesia o lugar religioso. El patrono, si es lego y no eclesiástico, debe tener el consentimiento del obispo²⁵⁰ para donarlo a otro lego, pues es un acto que no es indiferente para la iglesia el tener un patrono u otro. Si es a la iglesia puede hacerse sin el preceptivo consentimiento, al redundar en su beneficio²⁵¹. Si es patronato eclesiástico debe hacerse con las solemnidades que marca el Derecho para la enajenación de las cosas eclesiásticas.

Acerca de la permuta²⁵² ha de tenerse presente que el derecho de patronato (personal) puede permutarse, pero debe hacerse con otro semejante y con consentimiento del obispo²⁵³. El patronato real anejo a un edificio, finca o predio puede permutarse con estos y también con otro patronato, aunque sus derechos provengan de diversas causas, en cuyos dos casos no es necesaria la licencia del obispo.

E-Venta.

²⁵⁰ *“Si laicus clerico vel religioso loco concedit ecclesiam sine consensu episcopi, non obstante tali concessione, quae non valet, ad ipsam ecclesiam, cum vacaverit, poterit praesentare, et eam alteri ecclesia de consensu episcopi poterit concedere”*. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. XXXVIII, De iure patronatus, cap. VIII, fol. 494. *“Donatio iuris patronatus laici facta loco ecclesiastico, etiam sine consensu episcopi, tenet: non tamen praeiudicat iuri episcopi”*. Ibidem, In Sexto, III, Tít. XIX, De iure patronatus, cap. único, fol. 118.

²⁵¹ *“Si episcopus in ecclesia, quam de consensus capituli pio loco concessit, percipiebat certos proventus, illos donasse videtur: alioquin omnes proventus praeter cathedriticum, cedunt pio loco. Et si episcopus concessit de consensu patroni, intelligitur patronus donasse ius patronatus”*. Ibidem, libro III, Tít. XXIV, De donationibus, cap. VII, fol. 426.

²⁵² *“Archidiaconus, archipresbyter, praepositus, vel decanus, nec officia, nec beneficia ecclesiastica sine consensu episcopi tribuat”*. *Corpus Iuris Canonici, Decreto de Graciano...*, o.c., secunda pars, causa XVI, quaestio VII, C. XI, fol. 691

²⁵³ *“Ecclesiae iure proprietatis possunt ad invicem permutari: et possessiones earum etiam permutari possunt, et pro minus valentibus pretium suppleri”*. Ibidem, libro III, Tít. XIX, De rerum permutatione, cap. VI, fol. 416. *“Quod etiam dictum volo de permutatione, quae similiter cum privato homine absoluta opus habet episcopi auctoritate”*. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., libro I, tít V, sección 4ª, §.55, fol. 298.

El derecho de patronato como cosa espiritual no puede venderse²⁵⁴, pero se transfiere por la venta de los bienes, fincas o propiedades a que está unido, a los cuales sigue siempre el patronato, pues su enajenación de forma totalmente independiente es nula, sin que pueda revalidarse ni aún consintiéndolo el obispo.

Tampoco es válida la venta de los bienes anejos al patronato siempre que hayan aumentado de valor por consideración a éste.

14. 6- Quien puede adquirir el derecho de patronato.

El derecho de patronato como espiritual o unido a cosas espirituales tiene su fundamento en la comunión cristiana, a la vez que concede al patrono el cargo de tutor y defensor de la Iglesia.

Siguiendo estas reglas, puede adquirirse indistintamente por toda clase de personas, menos por infieles, judíos y herejes. También los excomulgados con excomunión mayor (privación activa y pasiva de los sacramentos), si además son contumaces:

“Damnati de haeresi, per secularem iudicem puniuntur, et bona laicorum haereticorum confiscantur, et clericorum bona applicantur ecclesiis, ubi beneficiati erant”. Corpus Iuris Canonici, Decretales..., o.c., Libro V, Tít. VII, De iure patronatus, cap. VI, fol. 642.

Son capaces los legos, aunque sean ilegítimos o espurios porque el derecho no los excluye. También los pupilos y menores al ser capaces de obtener legados y herencias, a las que va anejo dicho derecho, y las mujeres, pues las leyes eclesiásticas conceden capacidad para adquirir este derecho a todos los cristianos sin distinción de sexo²⁵⁵.

14.7- Derechos y obligaciones del patrono.

A) Derechos.

Según Schmalzgrueber (*Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, III, 93, fol. 281) los derechos del patrono son cuatro:

²⁵⁴ “Comparans vel emens ius patronatus, eo spoliare debet. Vel sic: qui emit ius patronatus, ut possit praesentare filium vel nepotem seu quem vult, eo privari debet”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. XXXVIII, De iure patronatus, cap. VI, fol. 493. “Ius patronatus per se vendi non potest”. Ibidem, cap. XVI, fol. 496.

²⁵⁵ “Qui omni Christiano debetur...”, *Corpus Iuris Canonici, Decreto de Graciano...*, o.c., secunda pars, causa XVI, quaest. VII, C. XXVI, fol. 695. “Qui Christianis omnibus in commune debetur”. Ibidem, C. XVII. “Quicumque fidelium devotione propria de facultatibus suis ecclesiae aliquid contulerint, si forte ipsi aut filii eorum redacti fuerint ad inopiam, ab eadem ecclesia suffragium vitae pro temporis usu percipiant”. Ibidem, C. XXX. “Quibus ius patronatus competere possit? Non tantum masculo, sed etiam feminae, cap. ult. de concess. praebend. Non tantum puberi, sed etiam impuberi; non tantum legitime nato, sed etiam illegitimo, arg. c. Piae mentis, et c. Frigentius, 26, quaest. 7, in quibus habetur, omni Christiano ius patronatus competere posse”. P. Layman, *Theologiae Moralis*, o.c., Liber IV, tractatus II, cap. XIII, 18, fol. 41. “Ius patronatus capaces sunt omnes, qui iure non prohibentur”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, III, 65, fol. 269. “Eiusdem capaces sunt laici”. Ibidem, 72. “Etiam illegitimi, et spurii”. Ibidem, 73. “Item pupilli, et minores”. Ibidem, 74.

“Patronorum iura, et effectus iuris patronatos maxime sunt quator, honor, onus, utilitas, praesentatio: et hinc ius istud dicitur ius honorificum, onerosum et utile; haec iura duobus versiculis comprehendit:

*Patrono debetur honos, onus utilitasque;
Praesentet, praesit, defendat, alatur egenus.”*

Por tanto, el principal y más importante derecho del patrono es la facultad de presentar. Además, siguiendo al citado canonista, tiene otros derechos, a saber:

-Honoríficos (*honor*): son el asiento preferente en el coro o presbiterio, precedencia, honor de agua bendita, incienso y sepultura y luto en la iglesia donde fallece²⁵⁶. También tiene el derecho de poner el nombre en su iglesia o pintar y esculpir sus armas en las paredes, ocupar un lugar más digno en las procesiones, que su nombre se cite en las preces públicas. El uso de estas prerrogativas debe determinarse según las tablas de fundación o por la costumbre.

-Útiles (*utilitas*): como la pensión que se haya reservado en la fundación y alimentos en caso de llegar a la indigencia²⁵⁷. Para ello es necesario que la iglesia, de la cual se piden alimentos, tenga bienes superfluos, que el patrono pruebe que ha fundado, construido o dotado él o sus antecesores dicha iglesia, que no tiene parientes que le puedan ayudar y debe probar su necesidad o indigencia.

-Onerosos (obligaciones, *onus*): defensa y cuidado de la iglesia de la que es patrono, impidiendo que se la oprima y que sus bienes se enajenen o se usen en usos extraños a la voluntad del fundador. Proteger y velar a favor de la iglesia y de sus bienes, denunciando al obispo las faltas de administración que observe²⁵⁸.

Pero el patrono laico, como tal defensor de la iglesia, no tiene jurisdicción alguna en la misma ni en sus bienes, ni pedir cuentas al beneficiado. Esta facultad sí la tiene el patrono eclesiástico²⁵⁹.

²⁵⁶ “*Ratione patronatus debetur ipsi prae aliis laicis dignior sedes in ecclesia, et honoratior locus in processionibus, suscipienda pace, et thurificatione, oblatione palmarum, candelarum, etc.*” F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, III, 94, fol. 281. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., III, cap. XLV, XVIII, pp. 148-149. F. Walter, *Manual de Derecho eclesiástico universal...*, o.c., libro V, cap. IV pp. 374 y 375.

²⁵⁷ “*Fundatores ecclesiarum, si inopes coeperint esse, ab iisdem alimenta accipiant*”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XVI, quaest. VII, C. XXX, fol. 696. “*Patrono debetur processionis, honor et alimentatur ab ecclesia, si verigat ad inopiam*”. Ibidem, *Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. XXXVIII, *De iure patronatus*, cap. XXV, fol. 498.

²⁵⁸ “*Heredes eius, qui ecclesiam construxit, et ipsi pro ea solitudinem agere debet*”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XVI, quaest. VII, C. XXXI, fol. 696; “*Nihil de iure suae dioecesis episcopi praesumant auferre*”. Ibidem, quaestio I, C. LX, fol. 670. “*Onus hoc est cura, et defensio ecclesiae, qua providere debet, ne a potentioribus opprimatur, et ne dos, vel ejus bona male alienentur, dilapidentur, et in alios, quam a fundatore destinati sint, usus convertatur*.” F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, III, 99, fol. 283.

²⁵⁹ “*Abbatibus absque episcopi consilio in parochialibus ecclesiis presbyteros non ordinent*”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XVI, quaest. II, C. VI, fol. 676.

B) Obligaciones.

Están en referencia al culto y a sus ministros. Tiene la obligación, además, de reparar la iglesia cuando sea necesario y, en caso de destrucción, reedificarla.

Si se trata de un beneficio, debe aumentar la dotación si sus rentas no son suficientes para la congrua sustentación del beneficiado y evitar que la dotación y sus bienes sean mal enajenados o que se conviertan en usos distintos de los destinados por el fundador.

El Concilio de Trento, en el capítulo 3 de la sesión 24, del decreto sobre la Reforma, prescribe a los patronos lo siguiente:

“Patroni vero in iis, quae ad Sacramentorum administrationem spectant, nullatenus se praesumant ingerere; neque visitationi ornamentorum ecclesiae, aut bonorum stabilium, seu fabricarum proventibus immisceant; nisi quatenus id eis ex institutione, ac fundatione competat.”

14.7.1- El derecho de representación.

Los derechos debidos a los patronos son muchos y variados, pero el más distinguido o principal de todos ellos es el de representación, que se define como el nombramiento que hace el patrono de un sujeto para el beneficio vacante²⁶⁰.

Según García *“est quaedam exhibitio personae per Patronum Episcopo, vel alteri, ad quem institutio pertinet, legitime facta.”* (N. García, *Tractatus de Beneficiis*, o.c., primi tomi, pars 4, cap. I, 15, fol. 220). Posteriormente Schmalzgrueber lo define como:

“Praesentatio est exhibitio personae idoneae ad ecclesiam, vel beneficium vacans episcopo, vel alteri, ad quem institutio pertinet, legitime facta.” (F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, III, 112, fol. 288).

Los patronos no tuvieron siempre este derecho y después de adquirirlo no lo ejercitaron todos de igual manera²⁶¹, pues sólo gozaban, en la primitiva disciplina, de la facultad de ofrecer al obispo el que por la ordenación había de ser adscrito a la iglesia particular; pero separada la colación de órdenes de la de beneficios, los fundadores y sus sucesores adquirieron el derecho de presentar el clérigo que había de ser instituido en la iglesia o beneficio vacante.

²⁶⁰ *“Si ecclesia collegiata habet praesentationem, praesentabit praelatus de consensu capituli, vel maioris partis, nisi de consuetudine, vel privilegio competat soli praelato”.* *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. X, *De his, quae fiunt a praelato sine consensu capituli*, cap. VI, fol. 401. P. Golmayo, *Institutiones del Derecho Canónico...*, o.c., XIV, §.262, p. 255. Siguiendo a Vecchiotti (*Institutiones canonicae...*, o.c., libro III, cap. III, párrafo 34), Gómez-Salazar lo define como: *“el nombramiento o designación hecha al obispo, o a quien pertenezca la institución, de una persona idónea para el beneficio o iglesia vacante”.*

²⁶¹ *“Non semper eadem, et constans fuit disciplina, qua patronis certa iura ex sacrorum canonum indulgentia concessa fuerunt”.* C. Berardi, *Commentaria in ius ecclesiasticum...*, o.c., dissertatio 4, cap. VII, fol. 155.

-Requisitos:

El patrono debe presentar una persona digna e idónea, con las cualidades necesarias según la naturaleza del beneficio y las reglas de la fundación, por lo que no pueden presentarse los ilegítimos, neófitos, esclavos, irregulares, legos y excomulgados:

“Debet esse persona institutionis capax et digna, omnibus qualitatibus in beneficiato, spectata tam natura beneficii, quam mente fundatoris requisitis instructa, prout convenit inter omnes. Et hinc praesentari nequeunt illegitimus, neophytus, servus, excommunicatus, irregularis.” F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, IV, 167 y 168, fols. 310 y 311.

Respecto al tiempo dentro del cual el patrono debe hacer la presentación, antiguamente no se fijaba plazo alguno, pero como había problemas debido a que se daba lugar a largas vacantes, Alejandro III señaló seis meses en el patronato eclesiástico²⁶² y el III Concilio de Letrán, el de cuatro meses, en el lego²⁶³. El término corre desde que se tuvo conocimiento de la vacante y si transcurre sin hacer uso de su derecho el obispo confiere libremente el beneficio, en el eclesiástico, y el ordinario en el lego²⁶⁴.

El patrono eclesiástico puede presentar simultáneamente una o varias personas para el beneficio vacante, pero una vez hecha la presentación no puede variarla, ni presentar más personas²⁶⁵. Por tanto, si ha nombrado personas indignas pierde por esa vez el derecho de presentar.

²⁶² “*Si quaestio iuris patronatus intra sex menses non terminatur a tempore vacationis, libere potest episcopus sine praesentatione ibidem instituere rectorem. Sed intellige de patronis ecclesiasticis: nam in laicis sufficiunt quatuor menses*”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. XXXVIII, *De iure patronatus*, cap. XXII, fol. 497; “*Laicus quadrimestre tempos habet ad praesentandum: ecclesia vero semestre, liceo a laico acquisiverit ius patronatus*”. Ibidem, In Sexto, III, Tít. XIX, *De iure patronatus*, cap. único, fol. 118.

²⁶³ “*Si quaestio iuris patronatus inter patronos non definitur intra quatuor menses, episcopus ordinabit ecclesiam sine praeiudicio eorundem*”. Ibidem, *Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. XXXVIII, *De iure patronatus*, cap. XXVII, fol. 498. “*Intra quod temporis spatium clericum patronus nominare cogatur? Respondeo, si patronatus est laicorum, patronum intra quatuor menses nominare debere. Si vero patronatus sit ecclesiasticus, patrono prescriptum est ad nominandum sex mensium intervallum*”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro VI, cap. XXI, 11, fol. 1094 “*Quod patronus ecclesiasticus habeat sex menses ad praesentandum. Laicus vero tantum quatuor menses*”. A. Reiffenstuel, *Ius Canonicum Universum...*, o.c., XXXVIII, III, 54, fol. 908.

²⁶⁴ “*Si patroni in praesentando discordant, praefertur praesentatus a maiori parte, si est idoneus: et si hoc sine scandalo fieri non potest, vel patroni intra tempos debitum non praesentant, episcopus ordinabit ecclesiam*”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. XXXVIII, *De iure patronatus*, cap. III, fol. 492.

²⁶⁵ “*Si patronus laicus successive praesentat duos, et secundus instituitur ab episcopo, valet institutio. Patronus non potest clerico vel alteri ecclesiae conferre ecclesiasticum patronatum, vel alteri donare*”. Ibidem, cap. V, fol. 493. “*In pluribus successive praesentatis a patrono laico, episcopo datur gratificatio: sed in praesentatis a persona ecclesiastica, potior est primo praesentatus*”. Ibidem, cap. XXIV, fol. 498. “*Si laicus patronus duos successive praesentet, valet institutio de secundo, non obstante appellatione prius facta per primum: episcopus tamen, qui malitiose primum repulit, eidem in competenti beneficio providere compellitur*”. Ibidem, cap. XXIX, fol. 500.

El patrono lego puede presentar también una o varias personas y si son indignas puede hacer otra presentación dentro de los cuatro meses que tiene de plazo. En el caso del patronato mixto, el patrono lego no puede hacer repetidas presentaciones dentro de los citados cuatro meses.

La razón de estas diferencias se encuentra en que antiguamente la presentación por legos era considerada como una especie de recomendación, mientras que la presentación por patrono eclesiástico daba un cierto derecho al beneficio, a manera de las elecciones hechas por cabildos catedrales y colegiales. Por ello la consecuencia de esta doctrina es la ya comentada de que el patrono eclesiástico pierde el derecho de presentar pero el lego puede presentar varias veces dentro del término señalado.

El transcurso de los citados plazos no inhabilita a los patronos para hacer la presentación en los casos de ignorancia de la vacante²⁶⁶, ausencia legítima del patrono, impedimento de hecho o de derecho, admisión de la presentación fuera de término o por pleito pendiente entre patronos si se ponen de acuerdo para hacer la presentación.

Hecha la presentación, el ordinario del lugar, es decir, el obispo, tiene la obligación de nombrar al más digno de los presentados por el patrono, pero si se ha hecho por muchos patronos, preferirá al que tenga mayor número de votos.

14.8- Institución.

Según Riegger²⁶⁷, la palabra “*institución*” tiene, en Derecho canónico, dos sentidos, uno lato y otro estricto. En el primero, comprende todos los modos legítimos de adquirir las dignidades y beneficios eclesiásticos. En sentido estricto y propio se llama institución la concesión u otorgamiento de un beneficio hecho por la autoridad eclesiástica competente, el obispo, en el presentado por el patrono:

“Concessionem ecclesiae, seu beneficii auctoritate legitima episcopi, vel alterius ordinarii factam, non simpliciter cuius clerico, sed ei qui est a patrono nominatus et oblatus”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro VI, cap. XXII, 1, fol. 1100.

También Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte I, título VII, I, 1, fol. 305:

“Concessio ecclesiae, vel beneficii vacantis, auctoritate legitima episcopi, vel alterius ordinarii facta, ad praesentationem, vel nominationem patroni”.

De lo anterior se deduce que para conseguir un beneficio se necesitan dos cosas: la presentación y la institución. La primera pertenece al patrono y la segunda, como se ha dicho, al obispo²⁶⁸. La institución es preceptiva y obligatoria, pues sin ella no se puede

²⁶⁶ “*Semestre ad eligendum seu conferendum a iure praefixum non currit legitime impedito, nec incipit currere, nisi a die notitiae vacationis*”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. VIII, *De concessione praebendae et ecclesiae non vacantis*, cap. V, fol. 390.

²⁶⁷ P. Riegger, *Institutiones de jurisprudencia eclesiástica...*, o.c., libro III, título VII, 149, fol. 91.

²⁶⁸ “*Quare duo hic necessaria sunt, ut quis beneficium obtineat, institutio et praesentatio. Haec ad patronum pertinet, cuius est designare et offerre clericum; illa ad episcopum, cuius est designato clerico*

obtener el beneficio. De esta forma, si el beneficio se concede sin el nombramiento o presentación del patrono, la institución es nula, pues el nombrado adquiere el derecho por la citada presentación, según el C. XXII, causa XVI, quaestio VII del *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., fol. 694:

“Laici non sunt constituendi oeconomi, sed ex proprio clero eligendi”.

Antes de proceder a la institución se hará el examen del presentado por el ordinario para ver si tiene las cualidades que exige el derecho y las especiales de la fundación, a no ser que se trate de presentados por universidades o colegios de estudios generales²⁶⁹. Si es indigno el patrono lego puede volver a presentar pero el eclesiástico pierde su derecho por esa vez, como ya se ha manifestado. Del juicio del colador que rechaza por indigno al presentado por el patrono se puede apelar al inmediato superior²⁷⁰.

La institución constituye a las iglesias en una especie de servidumbre, pues se disminuye la libertad del obispo, ya que está obligado a instituir al presentado por el patrono si es idóneo.

14.9- Modos de probar el derecho de patronato.

Debido a los excesivos privilegios en cuya virtud se concedía el derecho de patronato, durante los siglos XV y XVI, además del ingente número de particulares y corporaciones que lo adquirieron que se hizo indispensable una rígida regulación y reforma de los abusos cometidos. Dicha reglamentación llegó con el Concilio de Trento²⁷¹, que restableció la libertad a las iglesias que injustamente la habían perdido, respetando, a la vez, los legítimos derechos de los patronos.

Los particulares pueden probar el derecho de patronato por alguno de los siguientes medios²⁷²:

beneficium tribuere, modo nihil obstat, cuius causa repellendus videatur”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum*..., o.c., libro I, tit V, sección 4ª, §.47, fol. 291.

²⁶⁹ “A quocumque praesentati non instituantur sine praevio examine ordinarii, et approbatione, certis exceptis”. *Concilium Tridentinum*, sesión 7, cap. 13, *De reformatione*. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico*..., o.c., pp. 129-130. “*Institutioni regulariter praemittendum est examen instituendi*”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum*..., o.c., parte I, título VII, II, 46, fol. 325:

²⁷⁰ “*Dat aliud remedium praesentato, si episcopus differat eum instituere, sine causa legitima, ut appellet a gravamine sibi illito*”. N. García, *Tractatus de Beneficiis*, Madrid 1613, tomo II, decima pars, cap. IV, 9, fol. 177.

²⁷¹ “*Quomodo probandum iuspatronatus, et cui deferendum, patronis quid non liceat. Accesiones beneficiorum liberorum ad ecclesias iurispatronatus vetitae: patronatus non legitime quaesiti revocando sunt*”. *Concilium Tridentinum*, sesión 25, cap. 9, *De reformatione*. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico*..., o.c., pp. 537 y ss.

²⁷² “*Possunt id probare (ius patronatus) novel maxime modis. 1. Per instrumentum authenticum: quale est non solum instrumentum publicum, sed aliud quaecunque, modo scripturae authenticae mereatur nomen. 2. Ex multiplicatis, et sine interruptione continuatis praesentationibus per antiquissimum temporis cursum, qui hominum memoriam excedat. 3. Praescriptione quadragenaria. 4. Per famam, si cum a concurrant alia adminicula, praesertim longissima quadraginta, vel annorum possessio, etiam unico actu inducta. 5. Ex pluribus litteris, quibus ordinarius fatetur ius praesentandi competere alicui. 6. Ex libris visitationum, si iis asseratur beneficium visitatum patronatui subiectum esse. 7. Ex sententia, qua ius patronatus patrono contro eum, qui pro ecclesiae libertate egit, adiudicatum est, si illa in rem iudicatam. 8. Ex monumentis antiquis, ut praeter alia sunt insignia familiae, arae, columnae, parieti*

- Documentos públicos.
- Múltiples presentaciones sin interrupción.
- Prescripción de cuarenta años.
- Fama pública, que considere que la iglesia o beneficio ha sido siempre de patronato.
- Letras del ordinario donde se reconozca este derecho.
- Libros de visita, donde conste que la iglesia visitada está sujeta al derecho de patronato.
- Sentencia judicial.
- Monumentos antiguos, como inscripciones en piedra o bronce, armas o escudos de las familias, las insignias colocadas en el altar, columna o pared de la iglesia o capilla donde está erigido el beneficio.

Respecto a las comunidades, corporaciones, universidades y magnates, de los cuales puede sospecharse de usucapión, se requiere²⁷³:

- Documento público y solemne.
- Presentaciones repetidas sin interrupción por tiempo inmemorial o presentaciones llevadas a cabo por un tiempo no menor de cincuenta años atrás y con escrituras auténticas.

Una vez probado el derecho de patronato con arreglo a lo que prescribe el Derecho Tridentino por todo particular o corporación, queda exonerado de volverlo a probar en lo sucesivo.

14.10- Modos de perder el derecho de patronato.

Aunque el derecho de patronato es perpetuo por su propia naturaleza, puede perderse por varias causas, como son: por voluntad del fundador, por algún hecho u

ecclesiae, vel capellae, in qua erectum est beneficium, affixa". F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, VII, 234 a 237, fols. 334-335. P. Rieger, *Instituciones de jurisprudencia eclesiástica...*, o.c., 755-756-757, pp. 100-101. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 272. J. Aguirre, *Curso de disciplina eclesiástica...*, o.c., pp. 143-144.

²⁷³ "Etenim exigit Concilium praesentationes continuatas per quinquaginta annos". J. González, *Commentatio ad regulam octavam Cancellariae...*, o.c., Glosa XVIII, 73, fol. 317. "Hinc est, ut quatenus dictum concilium disponit, quod doceatur de istis continuatis praesentationibus quinquaginta annorum per authenticas scripturas". Ibidem, 79, fol. 317. "Ut probentur praesentationes continuatae ab immemoriali tempore; putat probatam hoc ipso, si per scripturas authenticas probata fuerit praesentationum a 50 annis continuatio". F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, VII, 239, fols. 336-337. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 671.

omisión del patrono, y por la naturaleza de las cosas (otras causas) como la variación de iglesia o beneficio, supresión del oficio o corporación y la extinción de la familia que lo disfrutaba²⁷⁴.

-Por voluntad del fundador.

Cuando éste ha impuesto a sus sucesores alguna condición o ha mandado hacer alguna cosa que ha de cumplirse necesariamente bajo pena de perder el derecho de patronato. La falta de cumplimiento de dicha voluntad es la principal causa por la que el patrono puede perder su derecho. Si el mandato no ha sido bajo esa pena, el patrono conservará su derecho²⁷⁵.

-Por algún hecho u omisión del patrono.

Puede perderse el derecho de patronato por la prescripción. También si comete algún delito mediante muerte o mutilación del rector u otro clérigo de la iglesia²⁷⁶; venta o traslación simoniaca del derecho de patronato²⁷⁷; percepción ilícita de los frutos del beneficio o usurpación temeraria de los bienes del mismo²⁷⁸; herejía, apostasía y cisma o crimen de lesa majestad²⁷⁹ que lleve aneja la confiscación de los bienes a que va unido accesoriamente el derecho de patronato.

²⁷⁴ "Amittitur autem iuspatronatus pluribus modis, sive causis. Primo enim, destructa ecclesia, vel capella". A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 12, 254, fol. 218. "Quamquam suapte natura iuspatronatus perpetuum sit, sicuti sunt perpetuae servitutes omnes, nihil tamen prohibet, quominus certae esse possint caussae, ex quibus illud amittatur. Ex tribus summis capitibus eae pendent. Primum, ex voluntate fundatoris, deinde ex facto patroni, denique ex natura rei, in qua patronatus consistit". C. Berardi, *Commentaria in ius ecclesiasticum...*, o.c., dissertatio 4, cap. VIII, fol. 176. J. Aguirre, *Curso de disciplina eclesiástica...*, o.c., p. 154.

²⁷⁵ "Amittitur: ex voluntate fundatoris, quoties fundator ab iis, qui in patronato succedunt, peragendum quidquam voluerit adiecta poena caduci, et successor in patronato fundatoris voluntatem minime impleverit". C. Berardi, *Commentaria in ius ecclesiasticum...*, o.c., dissertatio 4, cap. VIII, fol. 176. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XXII, §.270, p. 262. J. Aguirre, *Curso de disciplina eclesiástica...*, o.c., p. 143.

²⁷⁶ "Patroni, advocati, vel vicedomini vendicantes sibi in ecclesiis plus, quam iura permittant, per censuram ecclesiasticam compescuntur: et si occidum praelatum, vel clericum ecclesiae per se, vel per alios, perdunt, quod habent ab ecclesia". *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro V, Tít. XXXVII, De poenis, cap. XII, fol. 714. "Si patronus rectorem, vel alium clericum ipsius ecclesiae occiderit, aut mutilaverit, eo iurepatronatus ipso iure privatur". A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 12, 254, fol. 219.

²⁷⁷ "Comparans vel emens ius patronatus, eo spoliari debet. Vel sic: Qui emit ius patronatus, ut possit praesentare filium vel nepotem seu quem vult, eo privari debet". *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. XXXVIII, De iure patronatus, cap. VI, fol. 493. "Venditio, aut translatio iuris patronatus simoniaca alios". F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, VII, 262, fol. 344.

²⁷⁸ "Patroni autem beneficiorum, cuiuscumque ordinis..., in perceptione fructuum, proventuum, obventionum quorumcumque beneficiorum...". *Concilium Tridentinum*, sesión 25, cap. 9, De reformatione. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., pp. 539-540. "3. Perceptio illicita fructuum beneficiorum, aut bonorum istius temeraria usurpatio". F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, VII, 262, fol. 344.

²⁷⁹ "Bona haereticorum ipso iure sunt confiscata: quod probatur triplici argumento legali. Sed apprehensio bonorum fieri non debet per dominum secularem, nisi prius pronunciatum fuerit super crimine per iudicem ecclesiasticum, qui hoc possit". *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., in Sexto, Libro V, Tít. II, De haereticis, cap. XIX, fol. 142. "Si patronus fiat haereticus, quia bonis omnibus spoliatur, et iuspatronatus amittit". A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 12, 254, fol. 219.

-Por otras causas.

Se pierde también el derecho de patronato por cesión voluntaria hecha al obispo o iglesia²⁸⁰, pues es libre el patrono de renunciar a este beneficio; por la variación de iglesia o beneficio debido a la unión de la anterior a otra iglesia o monasterio si lo consiente el patrono sin hacer reserva del derecho de patronato²⁸¹; por el no uso si se dejó de presentar durante más de cuarenta años para la iglesia vacante.

Supresión del oficio o beneficio, destrucción total de la iglesia o pérdida de su dote y el patrono se niega a reedificarla o redotarla, permitiendo la supresión:

“4. Destructione ecclesiae totali, aut interitu dotis; nam his ius patronatus ita amittitur, ut non recuperetur, nisi a patrono reaedificetur, aut de novo dotetur”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, VII, 261, fol. 343.

Extinción de la familia que era exclusivamente llamada por la fundación a ejercer este derecho:

“5. Extincta omni familia fundatoris, quando ius patronatus pro illa tantum fuit reservatum”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, VII, 261, fol. 343.

Supresión del derecho por el Sumo Pontífice:

“6. Suppressione, vel ablatione papae”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, VII, 261, fol. 343.

Perdido el derecho de patronato por el poseedor en cualquiera de los casos anteriores, unas veces pasa al sucesor en la dignidad si es eclesiástico o a quien corresponda si es familiar o gentilicio. Si el patronato es hereditario y lo pierde el poseedor, la iglesia adquiere la libertad, pues el heredero ya no puede adquirir lo que ya

.“4. Haeresis; 5. Crimen laesae maiestatis, vel aliud enorme, inducens confiscationem bonorum, quibus ius patronatus accessorie annexum est”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, VII, 262, fol. 344.

²⁸⁰ “Donatio iuris patronatus laici fusta loco ecclesiastico, etiam sine consensu episcopi, tenet: non tamen praeiudicat iuri episcopi”. Ibidem, Libro III, Tít. XIX, *De iure patronatus*, cap. único, fol. 118. “Quot modis amittatur ius patronatus sine delicto patroni? 1. Voluntaria eius cessione facta episcopo, vel ecclesia, ita, ut haec libera evadat”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, VII, 260, fol. 343.

²⁸¹ “Si episcopus in ecclesia, quam de consensu capituli pio loco concessit, percipiebat certos proventus, illos donasse videtur: alioquin omnes proventus praeter cathedraticum, cedunt pio loco. Et si episcopus concessit de consensu patroni, intelligitur patronus donasse ius patronatus”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. XXIV, *De donationibus*, cap. VII, fol. 426. “2. Unione ecclesiae, vel beneficii patronati cum alia ecclesia, beneficio, vel monasterio, si haec facta sit permittente, aut patiente patrono, sine reservatione iuris patronatus. 3. Non usu, si patronus, cessante legitimo impedimento, longissimo, aut etiam longo tempore nullum rectorem ad ecclesiam vacantem praesentavit, et interea saltem duabus vicibus rector sine praesentatione est institutus”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte IV, título XXXVIII, VII, 261, fol. 343.

no tenía el testador. Lo mismo ocurre con el patronato personal que acaba con la muerte del patrono²⁸².

15.- PÉRDIDA DE BENEFICIOS.

Adquiridos los beneficios eclesiásticos, va unidos a ellos la inmovilidad, consecuencia necesaria del carácter de la ordenación que adscribiendo los clérigos a una iglesia les impide volver a la condición de legos. De ahí que los beneficios se consideran perpetuos por su naturaleza, como se ha comentado anteriormente, ya sea en relación al beneficiado o en sí mismos considerados, de modo que ni los que los obtienen puedan ser privados de ellos ni separarse voluntariamente de las iglesias a las que han sido adscritos.

Aquí no ha habido alteración ninguna en la doctrina de la Iglesia, la cual reitera que el beneficio es perpetuo y el beneficiado no lo puede abandonar libremente, pero como esta perpetuidad puede estar, en ocasiones, en contradicción con el mejor servicio o utilidad de la Iglesia, se reconoce la renuncia a los beneficios. De esta forma, pueden perderse por varias causas o modos²⁸³.

15.1.- Pérdida por voluntad del poseedor.

15.1.1.- Renuncia.

También llamada resignación²⁸⁴. Es la dimisión libre (no arrancada por la fuerza, miedo o con fraude) y espontánea del beneficio hecho por el beneficiado, mediante justas causas y ante el superior legítimo, el obispo, que la acepta²⁸⁵.

En los doce primeros siglos jamás se habló de la renuncia de los beneficios, debido a que, como se ha dicho, la adscripción de todo clérigo era perpetua, como la

²⁸² “Quinto, perditur per defectum, aut extinctionem lineae, et successorum in cognatione institutorum: amisso autem, vel extincto iurepatronatus, ecclesia, sive capella, aut beneficium libertatem consequitur, ita ut ab ordinario libere conferatur. Translato vero hoc iure in alium, non est ius parochiale, quod in ecclesia habet episcopus, ullatenus minuendum”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 12, 254, fol. 219. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 683.

²⁸³ “Beneficium duobus modis amitti, ipso iure vel sententiam”. P. Rebuffo, *Praxis beneficiorum*, o.c., tit. De modis amittendi beneficia, 2, fol. 310. “Duobus autem modis beneficia, et potestatem iurisdictionis amittimus, voluntate nostra, hoc est per renunciationem, translationem, permutationem, atque extra voluntatem nostram, ac poenae causa, scilicet per depositionem, aut degradationem”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., libro I, tit VIII, I, fol. 269. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XXIII, §.273, p. 266.

²⁸⁴ Cuando la renuncia se hace *in favorem* toma el nombre de resignación, según el estilo de la Curia Romana.

²⁸⁵ “Beneficiatus sine licentia praelati sui, beneficio renunciare non potest”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro I, Tit. IX, De renunciatione, Cap. IV, fol. 80. “Resignatio est iuris sui libera dimissio seu cessio iuris sui ad differentiam alieni”. P. Rebuffo, *Praxis beneficiorum*, o.c., tit. De resignationibus, fol. 315. “Vacat beneficium per liberam renuntiationem, quae definitur: Spontanea proprii beneficii dimissio facta coram legitimo superiore id acceptante”. P. Layman, *Theologiae Moralis*, o.c., Liber IV, tractatus II, cap. XVII, 1, fol. 49. “Renunciatio est spontanea iuris proprii dimissio, vel melius definitur, ut sit legitima beneficii dimissio a superiore admissa”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 15, 2, fol. 264. “Quod sit spontanea, et libera dimissio beneficii proprii, ex iusta causa facta coram legitimo superiore eam acceptante”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., tomo I, parte I, título IX, I, 1, fol. 391.

ordenación, lo cual no impedía al obispo adscribir a una determinada iglesia, si se consideraba que el clérigo era más útil en ella que en la primera. Con la novedad introducida después de Graciano de conferir los beneficios por acto distinto de la ordenación, se hizo preciso reformar la legislación canónica. Desde entonces, a partir de Alejandro III, y recogido en las Decretales, ya aparecen cánones sobre la renuncia de beneficios. Anteriormente no se encuentran rescriptos de pontífices que traten este tema.

Las justas causas para renunciar, concretadas por Inocencio III, y recogidas en el *Corpus Iuris Canonici*, Decretales, Libro I, Título IX, *De renuntiatione*, cap. IX y X, fol. 82, son: en caso de peligro de muerte, debilidad de cuerpo (ancianidad o enfermedad), falta de ciencia, conciencia de un grave crimen (simonía, homicidio), malicia de la plebe, evitar un grave escándalo y la irregularidad

“Papa concedit licentiam cedendi episcopo, qui sine mortis periculo in ecclesia sua morari non potest.”

“Ponit sex causae, ex quibus episcopi possunt petere, et Papa consuevit concedere cedendi licentiam, quae sex causae his versibus comprehendendi possunt:

*Debilis, ignarus, male conscius, irregularis,
Quem mala plebs odit, dans scandala, cedere possit.”*

La renuncia puede ser tácita o expresa. Tácita es la que se hace por un hecho sin ninguna declaración verbal, como aceptar y tomar posesión de un segundo beneficio incompatible²⁸⁶, contraer matrimonio²⁸⁷ o cambio de religión. Expresa es la que se hace por palabras que manifiestan claramente la voluntad de renunciar. Esta última puede ser pura y simple o bajo condición (condicional o *in favorem*), según F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., tomo I, parte I, título IX, I, 2, fols. 391 y 392:

“Quid sit renuntiatio tacita? Est, quae non verbis, sed facto, beneficii cessionem vel ex natura sua, vel ex interpretatione iuris annexam habere, inducitur”.

“Quid sit renuntiatio expressa? Est illa, qua beneficii dimittendi voluntas verbis, vel scripto iuxta formam a iure praescriptam, legitime declaratur. Et est duplex, una pura, seu simplex et absoluta, altera conditionalis”.

Se renuncia pura o simplemente cuando se hace sin ningún pacto, condición o modo, de manera que la renuncia no contenga ninguna clase de reserva. Es la admitida por los sagrados cánones²⁸⁸.

²⁸⁶ *“Habens personatum, vel beneficium curatum, si secundo tale receperit, vacat primum: quod si retinere contenderit, etiam secundo privabitur”.* *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Título V, *De praebendis et dignitatibus*, Cap. XXVIII, fol. 381.

²⁸⁷ *“Matrimonium contractum per clericum existentem in sacris, non tenet: secus in minoribus, sed tunc cogitur dimittere beneficium”.* Ibidem, Libro III, Título III, *De clericis coniugatis*, Cap. I, fol. 366.

²⁸⁸ *“Pure et simpliciter fieri dicitur, quando fit in manibus superioris, sine ulla pactione, conditione, vel modo, ita ut iste (nempe superior) beneficium illud, tanquam vacans, statim conferre valeat, cui voluerit”.* F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., tomo I, parte I, título IX, I, 3, fol. 392.

La renuncia condicional es cuando el renunciante, al abdicar de su derecho, se reserva alguna clase de intervención en la nueva colación de su beneficio, como es el caso de quedarse con alguna pensión del beneficio o la facultad de recuperar el beneficio en ciertos casos o la resignación a favor de un tercero (*in favorem alicuius*)²⁸⁹.

15.1.2.- *Permuta*.

Es la renuncia que hacen dos beneficiados con la condición de que se confiera al uno el beneficio del otro. Según Rebuffo, en su obra, *Praxis beneficiorum*, o.c., tit. *De permutatione*, 2, fol. 351, la permuta es:

“Permutatio est certae rei ad alteram facta mutua praestatio”.

Otro autor posterior como Barbosa (*Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., cap. 15, 5, fol. 286) elabora otra definición:

“Permutatio est reciproca quadam resignatio ad invicem inter permutantes facta”.

Aunque una definición más elaborada es la de Azor al definirla respecto a los beneficios y no de forma general (*Institutionum moralium*, o.c., Libro VII, cap. XXIX, 1, fol. 1350):

“Unde beneficii permutatio est, qua duo vicissim sua beneficia dimittunt, ut unus beneficium alterius obtineat”.

Esta clase de pactos que eran las permutas fueron desconocidos hasta el siglo XII, y se prohibieron posteriormente en las Decretales²⁹⁰, por ser indecoroso que los beneficiados pactasen y pusiesen los beneficios en comercio. Posteriormente, fueron reconocidos para los obispos y se les dio valor legal²⁹¹. Pero como no estaba prohibido al obispo trasladar a los beneficiados mutuamente a las iglesias donde fuesen más útiles, se admitió que pudiesen darse beneficios entre ellos, permutándolos.

Se necesita licencia del ordinario, es decir, del obispo, pues si se hace la permuta de forma privada es nula y ambos beneficiados pierden sus respectivos beneficios. En

²⁸⁹ “*Conditionalis est, quae fit sub certa conditione, pacto, et modo. Et haec rursus quatuor modis fieri potest, 1. in favorem certae personae, et non alias, nec alio modo, ut cum quis beneficio sese abdicat, hac clausula, seu conditione adiecta, ut illud beneficium conferatur. 2. Cum reservatione fructuum, vel pensionis constitutae in beneficio resignato, vel persona, cui sit resignatio. 3. Reservato regressu, ingressu, vel accessu. 4. Denique conditionalis renuntiatio fit ex causa permutationis*”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., tomo I, parte I, título IX, I, 3, fols. 392-393. “*Beneficio renunciamus aut pure, ac sine ulla reservatione, aut sub conditione, hoc est cum nobis, aut aliis certam ex beneficio pensionem quovis anno servamus*”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., libro I, tit VIII, sección 1ª, §.9, fol. 270. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XXIII, §.272, p. 265. F. Walter, *Manual de Derecho eclesiástico universal...*, o.c., libro V, cap. V p. 386.

²⁹⁰ “*Praebendae et dignitates non debent dividi, nec etiam permutari*”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít V, *De praebendis et dignitatibus*, Cap. VIII, fol. 373.

²⁹¹ “*Non obstantibus expectationibus beneficiorum permutatio fieri potest*”. Ibidem, In Sexto, III, Tít X, *De rerum permutatione*, Cap. Único, fol. 107; “*Collatio de beneficiis causa permutationis vacantibus facta aliis, quam permutantibus, non tenet*”. *Clementinas*, Libro III, Tít. V, Cap. Único, fol. 223.

las Decretales no se habla de las justas causas de necesidad o utilidad en las que se ha de fundar, pero se aplican las que Inocencio III consignó para las renunciaciones:

“Praebendae pacto praecedente permutari non possunt: episcopus tamen potest de loco ad locum permutare personas” (*Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro III, Tít XIX, *De rerum permutatione*, Cap. V, fol. 415).

Se prohíben las permutas forzosas, porque equivaldrían a una destitución sin formación de causa. Las demás se consienten y se hacen con los mismos requisitos que la renuncia, debiendo haber alguna analogía entre los beneficios que se permutan. No puede haberla si uno de los beneficios es litigioso²⁹²:

“Ad litigiosum beneficium lite pendente permutari queat? Respondeo, minime quod si fiat permutatio, nihil valet, quoniam res litigiosa, quamdiu lis pendet, nequit alienari, nec pignori dari.” (J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro VII, cap. XXIX, 5, fol. 1352):

15.1.3.- Traslación.

Es la traslación otra forma de perder un beneficio por la propia voluntad del interesado. Se define como la mutación de un beneficiado de un cargo a otro, en virtud de lo cual queda vacante el primero, y se encarga del segundo como titular, es decir, es el tránsito de un beneficio a otro. Citando a Schmalzgrueber (*Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., tomo I, parte II, título VII, I, fol. 378) se distinguen dos conceptos diferenciados sobre la traslación, uno concreto y específico y otro más genérico. El primero se refiere a los obispos:

“Tertia via perveniendi ad praelaturas est translatio. Dupliciter potest accipi. 1. Specifice, cum episcopus transfertur ab uno episcopatu ad alium. 2. Generice, quando praelatus, vel alius quicumque beneficiarius a praelatura, vel beneficio, quod habet, transfertur ad aliam praelaturam, vel beneficium.”

En los tres primeros siglos de la Iglesia no se comprendían ni había ningún canon que las prohibiese, pues todo obispo no podía abandonar su diócesis al estar ligado a ella, pero a partir del siglo IV fueron tan frecuentes las traslaciones que el Concilio de Nicea²⁹³ mandó que no podía pasar de una ciudad a otra ni el obispo, ni el presbítero, ni el diácono, pues la traslación sería declarada nula y el trasladado volvería a su Iglesia.

²⁹² “Beneficia litigiosa; quia res litigiosa, quamdiu lis pendet, nequit alienari, et pignori dari, et proprie non est sua ac propria”. F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., parte II, título XIX, III, 48, fol. 259. D. Cavallario, *Institutiones del Derecho Canónico...*, o.c., II, cap. XLVIII, III, p. 163.

²⁹³ “Propter multas perturbationes et frequentes tumultus seditionum quae fieri solent, placuit omnimodo abscidi istam consuetudinem quae contra regulam est, si ubi tamen fit, id est ne de civitate ad civitatem transeat vel episcopus vel presbyter vel diaconus. Si quis vero post haec statuta sancti huius concilii tale aliquid audere tentaverit, infrigetur omni genere huiusmodi conatus, et restituatur propriae ecclesiae in qua ordinatus est”. Canon 15 del concilio. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones...*, o.c., tomo I, p. 17. “Episcopus vel quilibet clericus relicta sua ecclesia non debet ad aliam transire”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa VII, quaestio I, C. XIX, fol. 493.

El Concilio de Sárdica²⁹⁴ fue más contundente y privó a los transgresores de la comunión laical, rigor que fue mitigado en las Decretales.

La traslación de obispos corresponde al romano Pontífice y la de los beneficiados inferiores al superior competente. Debe hacerse de una iglesia o beneficio menor a otro mayor, pues se prohíbe el descenso en las dignidades eclesiásticas, al menos que haya una especial necesidad²⁹⁵. Además, debe mediar justa causa conocida y aprobada por el superior.

15.2.- Pérdida contra la voluntad del poseedor.

Contra la voluntad del poseedor se pierden los beneficios mediante las circunstancias que requiere el Derecho canónico. La pérdida, en virtud de pena eclesiástica, puede ser por deposición o degradación debido a causa grave y notoria. Estas dos son penas vindicativas, es decir, que tienen por objeto la vindicta del delincuente, frente a las penas medicinales, cuyo objeto es la enmienda del sujeto.

15.2.1.- Por destitución o deposición.

La palabra deposición significa en griego “*destrucción*” y se define como la privación o separación de oficio y beneficio de forma perpetua²⁹⁶. Es un castigo medio entre la suspensión y la degradación. Se tiene que imponer por sentencia judicial.

Para Layman, la deposición es (*Theologia Moralis*, Bambergae, 1677, Liber I, tractatus V, cap. V, fol. 146):

“ecclesiastica poena, per quam persona ecclesiastica ob enorme crimen removetur ab ordine, iurisdictione, vel beneficio, in perpetuum, et sine spe remissionis”

Según Barbosa (*De officio et potestate episcopi*, o.c., allegatio CX, 1, fol. 483), la deposición es la remoción perpetua del orden o del ministerio del altar:

²⁹⁴ “Non minus mala consuetudo quam perniciosa corruptela funditus eradicanda est, ne qui liceat episcopo de civitate sua ad aliam civitatem transire. Si ergo omnibus placet ut huiusmodi pernicies austerius vindicetur, nec laicam communionem habeat qui talis est”. Canon 1 del citado concilio, celebrado en 347. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo II, p. 78. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones...*, o.c., tomo I, p. 63.

²⁹⁵ “Electos in episcopos et confirmatos, transferre potest solus Papa”. *Corpus Iuris Canonici*, *Decretales...*, o.c., Libro I, Tít VII, *De translatione episcopi*, Cap. II, fol. 74. “Episcopi non nisi Summi Pontificis auctoritatem ad aliam sedem transfeuntur... et si Pontifex episcopum ad maiorem ecclesiam transferri permisserit, ad parem, aut ad minorem transire non possit”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., libro I, tít VIII, sección 2ª, §.14, fol. 274. J. Donoso, *Institutiones de derecho canónico...*, o.c., tomo III Cap. 20, art. 11, pp. 207-208.

²⁹⁶ “...qui indigne accessit, ab altari removebitur, et illi, qui donum sancti Spiritus vendere conati sunt, coram Deo iam condemnati, ecclesiastica dignitate carebunt”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., prima pars, distinctio XXIV, C. V, fol. 77. “Si episcopus, presbyter, aut diaconus capitale crimen commiserit, aut chartam falsaverit, aut falsum testimonium dixerit, ab officii honore depositus in monasterium retrudatur, et ibi quamdiu vixerit laicam tantummodo communionem accipiat”. Ibidem, distinctio L, C. VII, fol. 156. “Ecce quum honoris periculum exadant, ut cetera sacramenta sacerdotaliter administrare permittantur, ab hoc solo non modo pro haeresi vel pro qualibet maiori culpa, sed etiam pro negligentia remonentur”. Ibidem, secunda pars, causa I, quaestio I, C. XLIII, fol. 321.

“Depositio est quam perpetua remotio ab ordinibus, vel altaris ministerio”.

La deposición ha sido única a lo largo del tiempo, que se denominaba degradación²⁹⁷, pues ya en el Concilio de Cartago IV del año 398 aparece dicha palabra en los cánones LVI y LVII, cuando se pena a los clérigos adúladores y traidores y a los maldicientes. En la disciplina actual de la Iglesia hay dos tipos: la verbal o simple, que se llama estrictamente deposición y otra solemne (real, según Devoti), conocida con el nombre de degradación. La deposición simple es la que priva al clérigo de su oficio y beneficio por la sola sentencia judicial sin añadir ninguna forma solemne. Aquí, el depuesto conserva los privilegios clericales (canon y fuero) y se le despide para que haga penitencia, pero puede ser degradado si fuera necesario²⁹⁸.

La diferencia entre deposición y degradación surgió cuando los clérigos se eximieron completamente de la jurisdicción de los magistrados, aun respecto de los delitos civiles. En tal estado de cosas, no se podía contener a los clérigos en su deber y disciplina sólo con penas eclesiásticas, por lo que se hizo preciso entregarlos al brazo secolar para recibir un merecido castigo. Fue necesario hacer este discernimiento entre deposición simple y solemne para que los clérigos, depuestos y privados del fuero eclesiástico pudiesen ser entregados a los jueces²⁹⁹. Esta distinción se introdujo en tiempos de Lucio III y se aprobó por Celestino III, a finales del siglo XII³⁰⁰.

²⁹⁷ “*Clericus, qui adulationibus et proditionibus vacare deprehenditur, ab officio degradetur*”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., prima pars, distinctio XLVI, C. III, fol. 146. “*Clericus maledicus (maxime) in sacerdotibus cogatur ad postulandam veniam. Si noluerit, degradetur, nec unquam ad officium absque satisfactione revocetur*”. Ibidem, C. V, fol. 146.

²⁹⁸ “*Prior, scilicet verbalis (depositio), fieri solet quando oretenus sententia contra clericum profertur, per quam privatur ordinibus, vel altaris ministerio, a quibus removetur, ita ut officium clericale exercere nequeat, quae proprie et simpliciter depositio appellatur*”. A. Barbosa, *De officio et potestate episcopi*, o.c., allegatio CX, 2, fol. 484. “*Simplex depositio clericum perpetuo quidem arcet, aut ab exercitio ordinum susceptorum, aut ab officio, usuque ecclesiasticae iurisdictionis, aut a beneficio; aut denique ab ordinis exercitio simul, et officio, et beneficio, sed non ei fori, et canonis privilegium adimit, ideoque ipse, ut antea, subest ecclesiastico imperio, non laico subiicitur*”. J. Devoti, *Institutionum canonicarum...*, o.c., libro I, tít VIII, sección 4ª, §.20, fol. 280. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., III, cap. XXXIX, I, p. 468.

²⁹⁹ En la disciplina antigua de la Iglesia se deponía también a los clérigos antes de que por delitos civiles fuesen castigados por los jueces (“*Illud palam est, si reum esse putaverit eum, qui convenitur, provinciae praeses, et poena iudicaverit dignum, prius hunc apoliari a deo amabili episcopo sacerdotali dignitate, et ita sub legum fieri manu*”. C. J., Nov. 83, §.2). Pero esta deposición no tenía por objeto el que pasasen a la potestad civil, sino el poder separarlos del ministerio del altar. En esa época los magistrados tenían jurisdicción sobre clérigos reos de delitos comunes, pero los obispos no los entregaban a los jueces, pues tales entregas eran contrarias a la mansedumbre eclesiástica. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., III, cap. XXXIX, I, p. 469.

³⁰⁰ La Decretal del Papa Lucio III (1181-1185) es la primera en la que consta que un clérigo depuesto quede abandonado a la autoridad secular para que le imponga su castigo “*Haereticus male sentiens, vel male docens de sacramentis ecclesiae, excommunicatus est, et convictus, nisi se correxerit, et errores abiuraverit: si clericus est, degradetur, et curiae seculari tradatur: per quam etiam laicus puniatur*”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro V, Tít. VII, *De haereticis*, Cap. IX, fols. 636-637. En la nueva disciplina la palabra “*degradación*” se usa por primera vez en otra Decretal de Inocencio III (1198-1216), donde ya se manda que los clérigos deben ser entregados a la potestad secular para que los castigue según sus leyes: “*Qui per se, vel per alios literas Papae falsant, excommunicati sunt cum suis fautoribus, et clerici officiis et beneficiis privati sunt, et degradandi et tradendi curiae seculari per quam laicus legitime puniatur*”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro V, Tít. XX, *De crimine falsi*, Cap. VII, fol. 671. En la de Lucio III se dice que se dejen al arbitrio de la jurisdicción laica, no que sean entregados (Otras Decretales relativas al mismo asunto son la de Urbano III (1185-1187) y la de de

Según los cánones antiguos los obispos eran depuestos en el sínodo provincial y los presbíteros y clérigos por el obispo respectivo en presencia de su presbiterio o senado³⁰¹. Pero a los Padres Africanos del Concilio de Cartago les pareció poco el solo dictamen de un obispo para un asunto tan importante, por lo que se estableció que para deponer a un diácono se hiciese por tres obispos, a un presbítero por seis y a un obispo por doce (*Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XV, quaestio VII, C. III, fol. 649):

“Si quis tumidus vel contumeliosus exstiterit in maiorem natu, vel aliquam causam habuerit, a tribus vivinis episcopis, si diaconus est, qui arguitur, si presbyter, a sex, si episcopus, a duodecim consacerdotibus audiat.”

15.2.2.- Por degradación.

Es la deposición solemne mediante la privación de los grados y órdenes eclesiásticas. Consiste en una ceremonia en la que el obispo, después de la deposición, se priva públicamente al clérigo de las vestiduras sagradas e insignias de su orden hasta dejarlo reducido a la clase de los legos. Los privilegios clericales (orden y beneficio) se pierden por entero y al juez secular al degradado al juez secular para ser castigado. Dicho acto fue establecido por Bonifacio VIII (1294-1303)³⁰².

Su origen se encuentra en el paganismo romano, pues las vestales condenadas a muerte no eran entregadas al ejecutor de la sentencia, sin que antes las hubiesen despojado los pontífices de las vestiduras propias de su instituto.

Pero las antiguas formalidades de precisar un número determinado de obispos para degradar a un eclesiástico promovido a las órdenes religiosas eran difíciles de cumplir, y como, además, esta circunstancia producía dilaciones y contiendas por el escaso número de obispos o la resistencia de algunos de ellos que exigían la comunicación del proceso para instruirse de la verdad del delito, se ordenó por el Concilio de Trento que bastase uno sólo para la ejecución de semejante ceremonia, o en su defecto, el vicario general³⁰³.

Celestino III (1191-1198) *“Clericos... nec poenam infligi facias corporalem, per quam periculum mortis possint incurrere, sed eis a suis ordinibus degradatis”*. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro V, Tít. XX, *De crimine falsi*, Cap. III, fol. 669. *“Clericus depositus, incorrigibilis excommunicandus est, et successive anathematizandus: et si sic non refipuerit, per iudicem secularem comprimendus est”*. Ibidem, Libro II, Tít I, *De iudiciis*, Cap. X, fol. 193.

³⁰¹ *“Si quis episcopus a synodo fuerit depositus, vel presbyter, vel diaconus a proprio episcopo condemnatus, et praesumpserit sacerdotii seu sacri ministerio quidpiam, non ei amplius liceat neque in alia synodo spem restitutionis habere neque assertionis alicuius locum”*. Canon 4 del Concilio de Antioquia del año 341. *“Si quis episcopus criminaliter accusatus ab omnibus qui sunt intra provinciam episcopis exceperit unam consonamque sententiam, ab aliis ulterius iudicari non poterit”*. Ibidem, canon 15. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones...*, o.c., tomo I pp. 79 y 85.

³⁰² *“Docet haec Decretalis, quibus assistantibus fieri debeat degradatio, de quibus vestibus, ornamentis, libris et instrumentis in degradatione fiat expoliatio, et quibus verbis utatur ipse degradans”*. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., In Sexto, V, Tít. V, *De poenis*, Cap. II, fol. 155.

³⁰³ *“Episcopo per se, seu illius vicarium in spiritualibus generalem contra clericum...”*. *Concilium Tridentinum*, sesión 13, cap. 4, *De reformatione*. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., p. 18.1 P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XII, §.128, pp. 440-441.

La degradación sólo puede levantarse por el Papa. Se impone por grandes crímenes, en los cuales el clérigo se hace indigno del ministerio sagrado, como la herejía y apostasía contumaces, homicidio, solicitud *ad turpia* en confesión, por oír y celebrar misa sin orden sacerdotal, falsificación de letras apostólicas, el robo sacrílego de la eucaristía y otros³⁰⁴.

A los eclesiásticos degradados o depuestos, según las reglas de las Decretales, se les imprimía con una letra para que se les distinguiese de los demás, como señal de infamia. Los obispos llevaban así hasta el extremo su severidad frente a los clérigos que cometían delitos graves³⁰⁵.

16.- El Concordato de 1753 y la reforma benefical.

El Concordato de 11 de enero de 1753³⁰⁶ es, sobre todo, un concordato benefical, por el que se derogan las reservas pontificias en España, haciéndose a la Monarquía católica concesiones no igualadas hasta entonces. Con él se pretende regular la provisión de beneficios eclesiásticos y marca el punto culminante del regalismo español y, al mismo tiempo, el medio por el que se conjuró la ruptura de la monarquía española con Roma, al pretender una supremacía del Estado sobre la Iglesia³⁰⁷.

Los veintitrés artículos de que consta pretendían solucionar los problemas planteados entre las regalías y las reservas. Por esta razón, el concordato sólo versó sobre las materias beneficales, y dejó de lado todo lo demás, como las dispensas matrimoniales, las peticiones de particulares y los patronatos laicales³⁰⁸. De ellos destaca el artículo 14, donde el Papa Benedicto XIV subroga a Fernando VI el derecho, que, por razón de las reservas tenía la Santa Sede, de conferir los beneficios en los reinos de España.

³⁰⁴ D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., III, cap. XXXIX, IX, p. 472. P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XII, §.131, p. 443.

³⁰⁵ Era un castigo civil, por el cual, según la *lex Remmia de calumniatoribus*, de 91 a.C., se marcaba con fuego a los calumniadores en la frente con la letra K (*"kalumnia"*), y también a esclavos delincuentes y a los fugitivos a fin de conocerlos en el futuro. Constantino el Grande derogó dicha ley y estableció que no se manchase el rostro humano con ninguna señal o marca, pues Dios crió al hombre a su imagen y semejanza, pero los pontífices siguieron con tal severa práctica. *"In signum maleficii characterem aliquem imprimi facias, quo inter alios cognoscantur"*. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., Libro V, Tít. XX, *De crimine falsi*, Cap. III, fol. 668. D. Cavallario, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., III, cap. XXXIX, VII, p. 471.

³⁰⁶ En dicha fecha de 11 de enero de 1753, el cardenal Valenti, Secretario de Estado de Su Santidad, como plenipotenciario del Papa Benedicto XIV, y don Manuel Ventura Figueroa, auditor de la Rota Romana, por Aragón, como plenipotenciario de su Majestad don Fernando VI, Rey de España, firmaban en el pontificio palacio del Quirinal un concordato, cuya génesis, iniciada realmente en 1735, había durado casi veinte años, y que, en verdad, podrá considerarse como el único concordato español del siglo XVIII. En efecto, el concordato firmado en El Escorial el 17 de junio de 1717 no llegó a ser ratificado por Felipe V, y no alcanzó, por consiguiente, su plenitud jurídica. Por otra parte, aunque España llegó a concertar, en 1737, otro concordato con la Santa Sede, la cuestión más importante –la del pretendido *"patronato universal"* de la Corona española sobre los beneficios eclesiásticos– quedó sin resolver. I. Martín Martínez, *En el segundo centenario del Concordato español de 1753*, III, dentro de R.E.D.C., VIII, n° 24, Madrid 1953, p. 745.

³⁰⁷ G. Hierrezuelo Conde, *La autofinanciación de la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas en la libertad e igualdad religiosa*, Tesis doctoral, Universidad de Málaga 1999, pp. 27-28.

³⁰⁸ R. Olaechea, *Concordato de 1753*, en Q. Aldea Vaquero, T. Marín Martínez y J. Vives Gateell, *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*, Madrid 1972, Tomo I, p. 580.

De esta manera, el concordato de 1753 fue, además de un concordato benefitial, en el que se derogaban las reservas en España, una verdadera revolución económica en el sistema financiero de la Curia Romana, al sufrir un golpe de muerte las reservas apostólicas en la Iglesia³⁰⁹.

A partir de dicho concordato la reforma benefitial se presenta como un objetivo fundamental de la política eclesiástica. Difícil es poder evaluar los cargos eclesiásticos que fueron transferidos a la monarquía, llegándose a encontrar con la libre provisión de 50.000 beneficios eclesiásticos, de los cuales más de 20.000 eran beneficios simples o capellanías, a veces con pocas rentas. Otros 12.000 eran canonicatos o prebendas bien dotados³¹⁰.

Por medio del Concordato la monarquía de los Borbones pasó a poder tener un mayor grado de control sobre la institución eclesiástica dentro de sus territorios. Con ese importante instrumento, la Ilustración, en un ámbito general, por lo que se refiere a la política eclesiástica, y el regalismo, a un nivel más particular, tuvieron puestas sus más firmes bases para avanzar en las nuevas ideas de origen francés de cara a la Iglesia, desechando los muchos favores que habían hecho los Austrias a esa institución y olvidándose, en definitiva, de aquella política favorecedora de las “*manos muertas*” y también de la promoción de beneficios que no tenían muy claras sus funciones, imponiendo cargas no necesarias ni a las parroquias ni a la sociedad³¹¹.

De ahí en adelante, asistiremos a una sucesión de intentos, con diferente fortuna, de poner aún más a la Iglesia bajo la dependencia de la monarquía, pues a partir del concordato de 1753 la reforma benefitial se presenta como un objetivo fundamental de la política eclesiástica.

Esta reforma se puso ya en práctica en 5 de julio de 1758, con una circular de la Cámara de Castilla, donde se pidió a los obispos relación de los beneficios insuficientemente dotados de sus diócesis, es decir, incongruos y su parecer sobre la unión o supresión de los mismos para formar uno congruo³¹². Posteriormente, mediante otra circular de 12 de julio de 1769, se pretendió la racionalización del sistema benefitial, devolviendo el sentido originario a los beneficios eclesiásticos, de forma que sus eclesiásticos tengan obligación de residencia, potenciando así los beneficios curados³¹³.

Las diócesis tomaron, en consecuencia, varias medidas, aunque no de muy buena gana, como la reducción y agregación de beneficios, transformación de curatos nuliales

³⁰⁹ R. Sánchez de LaMadrid, *El Concordato español de 1753 según los documentos originales de su negociación*, Jerez de la Frontera 1937, p. 140.

³¹⁰ T. Egido, *El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII*, en *Historia de la Iglesia en España*, Madrid 1979, vol. IV, p. 183.

³¹¹ A. Prada Santamaría, *Los planes beneficiales en los templos parroquiales del Alto Valle del Urola*, Hispania Nova, revista de historia contemporánea, nº 2, Madrid 2001-2002.

³¹² Del latín *congruus*, y éste de *congrua*: renta que debe tener aquel que se ha de ordenar *in sacris*, es decir, cierta retribución que se pagaba a un cura o vicario para su decente manutención. A. Andrés, *Diccionario de Derecho Canónico...*, o.c., p. 333.

³¹³ M. Barrio Gozalo, *El sistema benefitial...*, o.c., pp. 104-105.

y amovibles en perpetuas y colativas, erección de nuevos curatos y reducción de los incongruos.

El objetivo prioritario era el aumento del número de curatos, asegurando a sus titulares el sustento necesario para atender las obligaciones y poder ayudar a los feligreses en momentos de necesidad. Se establecieron dotaciones para cada puesto, uniformes dentro de la diócesis, o diferentes cuando las necesidades locales así lo exigían. En la mayoría se produjo un aumento del número de curatos al tiempo que descendía el de capellanes y simples beneficiados³¹⁴.

Todo ello enfrentó a ciertos prelados y cabildos con la Cámara de Castilla que preferían que los curatos siguiesen siendo amovibles con el fin de destituir a los curas ineptos y que no cumpliesen con sus obligaciones. Así, muchas diócesis tuvieron que presentar, una y otra vez, planes de reforma benefical que eran sistemáticamente rechazados por la Cámara, intransigente respecto a la citada erección de los curatos y vicarías amovibles en perpetuas y colativas, pues la promoción de los responsables de la cura de almas era un fin o meta primordial de la reforma.

En 1783, en un balance de la reforma benefical, se puso de manifiesto la extremada lentitud con que se estaba realizando, siendo los resultados muy desiguales. Tanto en la Corona de Aragón como en la de Castilla, a pesar del interés de la administración, la reforma se desarrolló de forma incompleta, tanto por la falta de interés de algunos obispos como por la oposición de los cabildos catedralicios, unido a las dificultades surgidas en la reducción de los beneficios patrimoniales.

Aun así, los resultados fueron positivos, pues en vísperas de la Guerra de la Independencia, hacia 1807-1808, el panorama benefical había cambiado de forma sustancial en la mayoría de las diócesis españolas. Se redujo el número de beneficios y los que subsistieron quedaron suficientemente dotados, con imposición a sus titulares de la obligación de residencia y ayuda al párroco en las tareas pastorales³¹⁵.

En resumen, los reformadores intentaron formar un clero que accediese al cargo teniendo como objetivo el servir a la Iglesia y a los fieles. Se trató de unir el oficio y el beneficio, es decir que todas las personas que tuvieran un beneficio eclesiástico desempeñaran unas funciones y no que aspirasen solamente a su obtención por el disfrute de unas rentas. Respecto a la dotación de los cargos; se consiguió que todos tuvieran los suficientes recursos económicos para evitar que como complemento a sus ingresos se dedicaran a tareas ajenas a su función pastoral. El clero secular que había antes de la reforma era muy diferente al que surgió después; el clero reformado era titular de su empleo, con unos ingresos que le permitían vivir dignamente y dedicarse por entero a las tareas pastorales³¹⁶.

³¹⁴ A. García Herreros, *Reforma benefical en Palencia a fines del Antiguo Régimen*, en Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia moderna, 5, UNED, Madrid 1992, p. 298.

³¹⁵ M. Barrio Gozalo, *El sistema benefical...*, o.c., p. 106.

³¹⁶ A. García Herreros, *Reforma benefical en Palencia...*, o.c., p. 307.

CAPÍTULO IV

LAS CAPELLANÍAS

Las capellanías es un tema que, hoy en día, apenas es recogido en los manuales de Derecho eclesiástico, pues como mucho, aparece una sucinta referencia a las mismas. Parece ser que es debido a que no es una materia que esté de actualidad. Esta institución, poco conocida en los tiempos presentes, si no es por la labor de algunos canonistas y estudiosos del Derecho, tuvo una gran importancia en el pasado, brillando con gran esplendor entre los siglos XVI y XVIII.

1.- ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA CAPELLANÍA.

Siendo la etimología una razón para determinar el significado de las palabras, en el caso de la palabra “*capellanía*” es tan incierta como complejo su significado.

En consecuencia, la voz “*capellanía*” parece que no tiene una etimología auténtica y determinada, pues no hay unanimidad entre los autores sobre el origen de la palabra, aunque es claro que deriva del sustantivo “*capilla*”³¹⁷, que a su vez deriva del verbo latino “*capio*” y el sustantivo griego “*laos*”, porque contiene al pueblo cuando asiste a oficios divinos³¹⁸.

Pérez de Lara hace derivar la palabra de “*capella*” y “*annus*” por la obligación que llevan consigo de celebrar anualmente en determinada capilla cierto número de misas³¹⁹.

Otros autores dicen que deriva de “*capra*” y “*pellis*”, capella (cabra o cabrilla) porque se cubrían con piel de cabra los techos de los pequeños oratorios campestres³²⁰ o que era el envoltorio o tienda que los reyes de Francia sacaban de los campamentos militares y en el cual tenían por costumbre escuchar los actos religiosos³²¹ y, finalmente, otros la hacen derivar de la palabra francesa “*chapelle*”, capa pequeña (diminutivo de chape, capa), y que se refiere a la media capa “*capella*” de San Martín de Tours³²². Se cuenta que en el invierno de 337, encontrándose Martín en Amiens, cerca de la puerta

³¹⁷ J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 21.

³¹⁸ “*Quae sit etymologia nominis capella? Non est eadem apud omnes; id deducunt a verbo capio, quod populum ad divina confluentem capiat.*” F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., Parte III, Tít. XXXVII, 1, fol. 233.

³¹⁹ “*Capellania ita nuncupata a capella et anno, ex quo in capella annuatim celebratur per capellanus, sic vocatus sacerdos...*” A. Pérez de Lara, *De anniversariis et capellaniis*, Matriti 1622, libro II, cap. I, 1, fol. 111.

³²⁰ “*Dici Capellas, quia antiquitus pellibus caprarum cooperiebantur earum tecta, quia frequentius anniversarium missarum relinquitur celebrandum in aliqua Capella*”. Ibidem, fol. 112.

³²¹ “*Capella est Francicum nomen, quod significat tegumen, quod veluti tentorium sibi Reges Francorum extruebant in castris militaribus, in quibus Sacrum audire soliti erant*”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro III, cap. VIII, fol. 410.

³²² “*Et dicta est Capella, ut quidam aiunt, a cappa B. Martini, quam reges Franciae ad bella portabant, et sub quodam tentorio servabatur quod inde Capella, et inde Capellani custodes illius dicebantur*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi*, o.c., Libro II, cap. VIII, 19, fol. 63. “*Capella Regum Galliae dicta a Cappa, seu Capsa beati Martini, quae ibi asservabatur*”. L. Thomassino, *Vetus et nova ecclesiae disciplina*, Venetiis 1730, liber secundus, cap. CIX, I, fol. 538.

de la ciudad, vio a un mendigo que tiritaba de frío y que imploraba ayuda a todos los que pasaban por allí. Entonces, movido por la misericordia, se desprendió de su capa, partiéndola en dos pedazos y le puso la mitad sobre sus hombros para que entrase en calor, pues no llevaba nada en ese momento. La otra mitad de la capa la conservó ya que pertenecía al ejército romano al que servía. Esa misma noche tuvo un sueño en el que el mendigo era Jesucristo vestido con la media capa para agradecerle su gesto. Esta visión fue determinante para su conversión al cristianismo, siendo posteriormente bautizado.

2.- ORIGEN.

Sobre el germen de las capellanías es muy ilustrativo lo que al respecto escribió Thomassino, por lo que se adjuntan los textos del citado autor, no sólo en latín sino también en francés, pues ambos se complementan.

Históricamente se desconoce el origen de la institución de las capellanías, pues sólo se sabe, como anteriormente se ha comentado, que viene de capilla (capella), pero esta palabra de baja latinidad, ni la usó Gregorio de Tours, ni los escritores que le precedieron (*“Porro nec Gregorius Turonensis, nec scriptores ulli eo antiquiores, vel Capellae, vel Capellanorum uiquam meminere”*). Marculfo, monje francés que vivió en el siglo VII, fue el primero que dio el nombre de “capella” a la reliquia de la media capa del santo Martín, la cual se conservaba en el palacio de los reyes francos y sobre la cual se prestaba juramento solemne en los pleitos y causas importantes. Esta capa la llevaban los reyes a todas partes pues les aseguraba la victoria en las batallas:

“Capellae primus nomen indidit Marculphus Capsae, seu Thecae sacrae beati Martini, quae in Palatio Regio servabatur, et ad quam praestabantur sacramenta, ubi sacramento iudicia terminabantur: In Palatio nostro super Capellam domni Martini, ubi reliqua Sacramenta percurrant debeant conjurare. Galliae Reges testatur in more habuisse, ut in bellicis expeditionibus suis Cappa, id est Capsa Reliquiarum beati Martini praeferretur: Quendam in Capellam suma assumpsit, quo nomine Reges Francorum propter Cappam sancti Martini, quam secum ad sui tuitionem et hostium oppressionem iugiter ad bella portabant, sancta sua appellare solebant”. Vetus et nova ecclesiae... o.c., cap. CIX, I, fol. 538.

Como se conservaba en el oratorio del monarca, al mismo se le dio el nombre de capilla:

“Nos rois de la premiere race avoient comme cet Empereur um oratoire dans leur palais. Dans cet oratoire, on conservoit en une chasse les reliques de Saint Martin. Les fermens se prêtoient sur cette chasse, qu’on appelloit Capella: In Palatio nostro super Capellam Sancti Martini, ubi reliqua Sacramenta percurrant debeant conjurare, comme portent les formules de Marculphe. Quand les rois alloient en campagne, ils saisoient porter cette chasse avec eux; c’est d’elle que l’oratoire de nos rois a été appelé Chapelle, nom qui a passé depuis aux oratoires des particuliers, et à ceux des Eglises”. L. Thomassin, Ancienne et nouvelle..., o.c., Parte I, cap. XX, 1, fols. 180-181.

Esta denominación de “*capilla*” pasó a los oratorios de los particulares, a las iglesias e incluso a las parroquias, iglesias colegiales, monasterios y más concretamente para designar un lugar consagrado a Dios en el interior o exterior de una iglesia³²³.

En tiempos de Carlomagno se aplicó la palabra capilla a los ornamentos, libros y vasos de oro y de plata de su santa capilla: “*Capella, id est ecclesiasticum ministerium.*”³²⁴

Otra versión, más acorde con la naturaleza de las capellanías, y que fue debida al espíritu religioso de los primeros siglos, sitúa su origen en los huecos o nichos que se abrían en la fábrica de las iglesias para poder ver las sepulturas de los santos³²⁵, las cuales estaban cerca o pegadas a los muros de las iglesias. Más tarde se hicieron más grandes dichos huecos y se convirtieron en arcos. Con el tiempo se agregó el terreno de las sepulturas a los templos, elevándose altares en su honor y en los que se hizo frecuente celebrar misas. Tal es el origen de las capillas de donde se derivan las instituciones piadosas conocidas como capellanías, por lo que su nacimiento es posterior a la institución de los beneficios.

3.- CONCEPTO.

En esta materia tan complicada, a veces, debido a la confusión de los términos y voces usadas, interesa fundamentalmente precisar las ideas y conceptos, pues sobre las capellanías hay multitud de definiciones y a la hora de buscar la más acertada tampoco sirve la etimología de la palabra, pues, al ser más bien dudosa, poco puede aportar.

Rebuffo (*Praxis beneficiorum*, o.c., tit. *Saeculare beneficium quotuplex*, 14, fol. 6) sostiene que una capellanía es un altar existente en una iglesia:

“*Si vero altare sit in aliqua ecclesia, tunc dicitur capellania.*”

Aquí aparece ya la diferencia entre capilla y capellanía. La primera, se refiere a una iglesia u oratorio erigida y dotada por derecho de patronato, por lo que pertenecía a

³²³ “*Capellae apellatione venire Parochialem Ecclesiam; quandoque tamen nomine capellae intelligitur ecclesia collegiata; quandoque domus religiosa seu monasterium; frequentius autem capellae nomine intelligimus vel sacellum, id es locum Deo consecratum intus vel extra ecclesiam. Frequenter etiam Capellarum nomen usurpamus pro oratoriis seu privatis, seu publicis*”. P. Fagnano, *Commentaria in tertium librum Decretalium*, o.c., *De Praebendis et dignitatibus*, cap. *Exposuisti*, 3, fol. 145.

³²⁴ A. Andrés, *Diccionario de Derecho Canónico...*, o.c., Tomo I, p. 229.

³²⁵ Ello se debe a que durante las persecuciones de la Iglesia por los emperadores romanos era costumbre dar sepultura a los restos o cenizas de los mártires en lugares apartados, donde los fieles pudiesen con cierta libertad y seguridad tributarles su devoción y respeto. Posteriormente, la Iglesia comenzó a edificar templos, procurando levantarlos lo más cerca posible del lugar donde se encontraban enterrados los mártires y santos. En otros casos, si no se podía construir en las proximidades de estos, se trasladaban sus restos a las inmediaciones de las iglesias. De esta forma, se podía más fácilmente honrar su memoria y servir de ejemplo a todos los creyentes. Los cristianos acudían a estos lugares, antes, después e incluso de los oficios, con lo que involuntariamente se distraía la atención de los asistentes con la consiguiente suspensión de las preces públicas. Para evitarlo se recurrió a la apertura de estos huecos o nichos para poder ver las citadas sepulturas. J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., pp. 108-109.

la dote del fundador. La segunda, cuando la capellanía era fundada en el altar de un templo que no era propiedad de la fundación³²⁶.

La anterior definición del jurisconsulto y canonista Rebuffo es una de las más antiguas, pero no es suficiente, pues para que la capellanía pueda recibir tal nombre es preciso que tenga alguna carga de misas.

Cerola realiza una definición un poco más elaborada, pero también insuficiente, al afirmar que una capellanía es una carga de celebrar misas en un altar determinado:

“Capellaniae sunt illae quae habent aliquod onus celebrando Missam in aliquo altari.” (T. Cerola, *Praxis episcopalis...*, o.c., verbum beneficia, fol. 45).

Otros antiguos canonistas las definen como una carga de celebrar anualmente misas en una capilla o altar determinado³²⁷. Este concepto sigue siendo bastante oscuro y poco exacto, pues no distingue claramente las capellanías de otras figuras afines, lo que puede llevar a dudas y confusiones.

Hay autores que las conceptualizan como un beneficio anejo a un altar o capilla³²⁸ o un simple beneficio fundado en una capilla³²⁹, definiciones hechas en un sentido muy general. No obstante, dada la distinción que hacían los canonistas entre beneficios propios o impropios, puede aplicarse esta definición a las diversas clases en que se dividen las capellanías, sin diferenciar unas de otras.

³²⁶ “*Hodie ex communi usu loquendi apud nostros Capella pro loco in Ecclesia accipitur cum Altari ab aliquo erecta, vel dotata, in qua iuspatronatus obtineat*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., Libro II, cap. VIII, 18, fol. 63. “*Huiusmodi autem Capellaniae aliquando habent de per se Oratorium, seu Ecclesiam, aut Aedes sacram cum plebe, vel sine illa separatam, et tunc magis proprie dicuntur Capellae, aliquando Altare tantum in aliqua Aede sacra, seu templo ab aliis Altaribus divisum, et tunc minus appellantur Capellaniae*”. Ibidem, Libro III, cap. V, 25, fol. 135.

³²⁷ “*Capellania est onus celebrandi annuatim missa in Capella, seu altari*”. A. Pérez de Lara, *De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro II, cap. I, 1, fol. 112. “*Capellania, est onus celebrandi annuatim missam in capella, vel altari*”. A. de Leone, *De officio capellani...*, o.c., quaestio tertia, sectio secunda, 19, fol. 51. “*Capellania vero habet onus plures missas celebrandi singulis annis*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi*, o.c., Libro III, cap. V, 1, fol. 133. “*Capellania est onus celebrandi unicam, aut plures Missas annuatim in Capella, Ecclesia, seu Altari*”. F. Mostazo, *De causis piis in genere...*, o.c., Libro III, Cap. I, 1, fol. 174. “*Capellanía es una carga, y obligación de celebrar anualmente una, o muchas Misas en la Capilla, Iglesia o altar*”. J. Febrero Bermúdez, *Librería de escribanos e instrucción jurídica teórico práctica de Principiantes*, Madrid 1797, Tomo III, cap. VIII, fol. 76. También civilistas como B. Gutiérrez Fernández, *Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho civil español*, o.c., cap. II, secc. II, art. 13, p. 315. F. García Goyena y J. Aguirre, *Febrero o librería de jueces, abogados o escribanos*, Madrid 1844, Tomo II, Tít. XXV, p. 182.

³²⁸ “*Capellania vero definitur, quod sit onus celebrandi annuatim certas missas in capella, vel altaris*”. F. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca...*, o.c., II, 3, fol. 89. A. Andrés, *Diccionario de Derecho Canónico...*, o.c., Tomo I, p. 229.

³²⁹ “*Cappellania, sive cappella sit beneficium simplex? Una est omnium opinio, esse beneficium simplex*”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro III, cap. VIII, fol. 411. “*Capellania hoc est, de Beneficio simplici fundato in Capella*”. A. Reiffenstuel, *Ius canonicum universum...*, o.c., III, 2, nº 71, fol. 104.

Otra definición es la de Berardi³³⁰ que fija su concepto como una “*obligación de celebrar el sacrificio de la misa, o prestar cierto ministerio eclesiástico en capilla o altar determinado*”. Definición que se queda corta, a igual que las de otros canonistas como Rebuffo, Cerola, Pérez de Lara, de León, Barbosa, Mostazo, Reiffenstuel y otros.

Los autores más modernos la definen como una fundación hecha por una persona, a la que añaden la definición de los canonistas tradicionales al decir que conlleva la carga u obligación de celebrar anualmente cierto número de misas en cierta iglesia, capilla o altar³³¹. Otros añaden que se trata de fundaciones con el derecho de percibir ciertos frutos³³².

La característica común a todas las definiciones hasta ahora citadas es que siguen siendo muy generales y, por tanto, poco ilustrativas del verdadero concepto y esencia de las capellanías.

José María Franco y Ortiz y Antonio Bravo y Tudela se salen de las definiciones tradicionales al decir que Capellanía es una “*institución piadosa unida a la misma (capilla), fundación que le es aneja, y que tiene por objeto la perpetuidad y solemnidad del culto, tributado a Dios por medio de los Santos*”. Pero posteriormente aplican la definición tradicional como beneficio impropio pero de forma más amplia³³³.

Con más precisión se ha definido esta figura canónica como “*la fundación perpetua hecha con la obligación aneja de cierto número de misas u otras cargas espirituales en iglesia determinada, que debe cumplir el obtentor en la forma y lugar prescritos por el instituyente*”³³⁴.

³³⁰ “*Capellaniae ita dictae, quod ut plurimum significant obligationem vel celebrando Missae sacrificium, vel certa ministeria praestandi statis diebus in certa Cappella, sive Altaris*”. C. Berardi, *Commentaria in ius...*, o.c., Appendix, fol. 369.

³³¹ J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., libro IV, cap. I, art. 9, p. 272. “*Son la obligación de celebrar misas u otros ministerios eclesiásticos en determinados días, señalados por el fundador, y en una capilla o altar designado por éste a su voluntad*”. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., cap. XXX, p. 531, citando a Ramón de Beas y Dutary. “*Las fundaciones establecidas sobre ciertos bienes con la carga u obligación de celebrar anualmente cierto número de misas en una iglesia, capilla o altar determinados*”. F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho Civil...*, o.c., tomo VI, p. 1535. M. Martínez Alcubilla, *Diccionario de la Administración española, peninsular y ultramarina*, Madrid 1868, tomo III, p. 3. J. Escriche, *Diccionario razonado de legislación...*, o.c., tomo II, p. 183. Como fundaciones vinculadas: D. Calderón y Sanabria, *Examen analítico-legal de los bienes vinculados*, Cádiz 1847, tomo I, cap. I, p. 3. F. Benítez de Lugo, *Apuntes sobre capellanías*, Madrid 1907, pp.4-5.

³³² “*Son fundaciones a las que se destinan bienes dotales*”, cuya esencia es llevar en sí la carga espiritual de celebrar o hacer celebrar cierto número de misas, sujetándolas a la voluntad del fundador, con la recompensa de percibir los frutos de los bienes que se sujetaban a las mismas”. L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas*, Madrid 1896, pp. 13-14. “*El derecho a percibir ciertos frutos con la obligación de levantar o cumplir determinadas cargas espirituales*”. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 307. Misma definición, F. Gómez-Salazar y V. de la Fuente, *Tratado teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos*, Madrid 1868, Tomo IV, Título IV, Cap. I, p. 337. Igual, A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 65.

³³³ “*Capellanía es, pues, un beneficio excepcional, impropio, de fundación particular en iglesia, capilla o altar, que obliga a su poseedor a celebrar o mandar celebrar una o más misas, auxiliar al párroco en sus funciones, servir en altar, o recitar horas canónicas u otras obligaciones, según la tabla de fundación; con derecho a los emolumentos señalados por el fundador y al goce de los bienes que constituyen la fundación*”. J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., p. 111.

³³⁴ M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías y pías memorias*, Vitoria 1903, cap. I, p. 9.

Sobre la materia, autores posteriores remiten a la definición de Mariano Álvarez y Gómez como la más apropiada y aceptada por la mayoría, quizá por el acierto que supone el señalar de forma clara que la voluntad del fundador es el elemento determinante y configurador de la capellanía, y aunque introduce algunos matices sin importancia, éstos no alteran la calidad del concepto³³⁵.

Todo ello lleva a la conclusión que existen dos definiciones de capellanía, una general y otra específica. La primera, es derecho a percibir ciertos frutos con la obligación de levantar o cumplir determinadas cargas. La segunda: es una fundación perpetua hecha con la obligación aneja de cierto número de misas u otras cargas espirituales en iglesia determinada, que debe cumplir el obtentor en la forma y lugares prescritos por el instituyente.

Otras aproximaciones al concepto de capellanía las encontramos en las elaboradas por los autores y estudiosos actuales, como la de Gonzalo Herreros Moya³³⁶ que la define desde un punto de vista más económico: *“Legado de bienes metálicos o inmuebles vinculados que el fundador instituye para mantener con su productividad el pago a uno o varios clérigos, quienes debían cumplir de forma perpetua las mandas religiosas establecidas en la fundación”*. O la que da Miguélez Domínguez: *“una masa de bienes que están afectos a un fin religioso, tanto si el fin consiste solamente en una carga real que grava bienes profanos, como si los bienes con su carga se hallan espiritualizados”*³³⁷.

La difusión de las capellanías desde España a los territorios de ultramar bajo el dominio de la Monarquía Hispánica, tanto a Las Indias como posteriormente a Filipinas, constituyendo una costumbre muy arraigada, ha llevado a que sean estudiadas también por diversos autores de América Central y del Sur como José María Ots o Abelardo Levaggi. El primero las define como *“una fundación en la que se imponía la celebración de cierto número de misas anuales en determinada capilla, iglesia o altar, afectando para su sostenimiento las rentas de los bienes que se especificaban”*. Por su parte Levaggi mantiene que una capellanía es una *“fundación instituida generalmente a perpetuidad, por vía testamentaria o acto entre vivos, en virtud de la cual el fundador afectaba un bien inmueble o una suma de dinero situada sobre un bien inmueble, para costear con su renta la celebración de misas u otros actos píos y beneficiar a*

³³⁵ *“Fundación perpetua hecha con la obligación aneja de cierto número de misas u otras cargas espirituales en iglesia determinada, que debe cumplir el obtentor en la forma y lugar prescritos por el instituyente percibiendo por su propio derecho las rentas que constituyen su dotación”*. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., pp. 20-21. M. González Ruíz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 477. V. Covián, *Capellanías*, en *Enciclopedia Jurídica Española...*, o.c., p. 8. Castán las define como *“fundaciones establecidas sobre ciertos bienes, con la carga u obligación de celebrar o hacer celebrar anualmente cierto número de misas o realizar otras funciones o actos religiosos equivalentes”*. J. Castán Tobeñas, *Derecho Civil español, común y foral*, Madrid 1978, tomo sexto (derecho de sucesiones), volumen tercero, p. 368.

³³⁶ G. Herreros Moya, *Así en la tierra como en el cielo. Aproximación al estudio de las capellanías en la Edad Moderna: entre la trascendencia y la política familiar. El caso de Córdoba*, en *Historia y Genealogía*, nº 2, Universidad de Córdoba, Córdoba 2012, pp. 111-142.

³³⁷ L. Miguélez Domínguez, *Situación actual del problema de las capellanías en España*, REDC, volumen 5, nº 13, Salamanca 1950, p. 311.

determinadas personas o instituciones; a título de patrimonio si estas personas aspiraban al sacerdocio, o el título de patronos o capellanes.”³³⁸

A la vista de todas las definiciones, siguiendo a Juan Pro Ruiz, se puede concluir que una capellanía es una fundación perpetua por la cual una persona separaba de su patrimonio ciertos bienes, mediante acto *inter vivos* o *mortis causa* (testamento), formando con ellos un vínculo que se destinaba a la manutención de un clérigo, el cual quedaba obligado a celebrar un determinado número de misas por el alma del fundador o de su familia o a cumplir otras cargas espirituales o actos de culto³³⁹.

Por tanto, las capellanías son:

-Fundaciones: es decir, una masa de bienes segregados de los demás de la familia o en poder de la Iglesia si de una eclesiástica, destinados por voluntad del fundador a los fines de la capellanía.

-Perpetuas: por su propio concepto de fundación requieren cierta duración en el tiempo, como cosa estable. Además, como beneficio requiere la característica de perpetuidad.

-Con la obligación de celebrar un determinado número de misas (por el alma del fundador o de su familia) u otras cargas espirituales o actos de culto.

-Que debe cumplir el obtentor, ya sea él mismo u otra persona, según las reglas de la fundación y las normas del derecho común.

-En la forma y lugares prescritos por el instituyente, pues tanto las cargas u obligaciones como el modo de cumplirlas dependen por entero del fundador, el cual puede poner todas las cláusulas y condiciones que estime oportunas, con tal de que sean honestas, señalando en la fundación la iglesia donde se han de cumplir las cargas, y a veces incluso el mismo altar o capilla.

Se diferencian de los beneficios en los siguientes puntos³⁴⁰:

1.- Son una fundación estrictamente privada, con un objeto más o menos piadoso. Es decir, tiene por oficio un cargo de utilidad privada o particular y no es un cargo de la Iglesia. En consecuencia, la capellanía no es instituida por la Iglesia, sino aprobada por ella.

2.- Se debe atender a las reglas de la fundación (*tabulae fundationi*), en primer lugar, y en su defecto, a las generales del derecho.

³³⁸ J. M. Ots Capdequí, *Manual de historia del derecho español en las Indias y del derecho propiamente indiano*, Buenos Aires 1945, p. 125. A. Levaggi, *Las capellanías en Argentina. Estudio histórico-jurídico*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires 1992, p. 24.

³³⁹ J. Pro Ruiz, *Las capellanías: familia, iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen*, en *Hispania Sacra*, 41, Madrid 1989, p. 585.

³⁴⁰ A. Bravo y Tudela, *El derecho vigente sobre capellanías colativas...*, o.c., pp. 88-89.

3.- Se conceden a legos siempre que no se prevea que obtenga la fundación un sacerdote. El beneficio eclesiástico ha de concederse siempre a un clérigo, como mínimo tonsurado, mientras que la capellanía no, pudiendo cumplirse, si es compatible, por clérigo delegado.

4.- No se exige siempre la intervención y autoridad del ordinario para su erección y colación, como es el caso de las capellanías laicales y siempre que el fundador o sucesor conserve el derecho de patronato.

5.- El beneficio se enumera entre los derechos eclesiásticos, y el título de la capellanía permanece en el fundador lego o eclesiástico. El título del primero permanece en la Iglesia, mientras que en la capellanía se conserva por el fundador o sucesores legítimos.

En resumen, las capellanías, según los canonistas, se diferencian fundamentalmente de los beneficios al no estar sujetas a las reglas canónicas establecidas en la materia.

4.- CLASES.

La Iglesia nunca ha impedido a los fundadores de algunos oficios, e incluso les ha dado su consentimiento, para poder separarse del derecho común y fijar reglas especiales respecto a su naturaleza y carácter propio. En consecuencia, dada la gran libertad y total autonomía de la voluntad de la que disponía el fundador a la hora de instituir una capellanía, concedida por las disposiciones canónicas,³⁴¹ se encuentran o se establecen diversidad de categorías, pero entre todas las posibles clasificaciones hay una fundamental, que las divide en dos grandes grupos, no sólo por sus características y notas peculiares sino por su misma naturaleza, según opina Badenes Gasset³⁴² y que han seguido y siguen la mayoría de los autores e incluso la doctrina. Esta variedad puede resumirse en la división de las capellanías en dos especies: colativas o eclesiásticas y capellanías laicales, aunque hay algún autor en la actualidad que divide las capellanías colativas en colativas de sangre y colativas laicales, todo ello en función de la dotación³⁴³.

4.1.- Capellanías colativas o eclesiásticas³⁴⁴.

³⁴¹ “Non debet episcopus aliquid a monasterio exigere praeter conditiones, quae dedicationis tempore constituta sunt”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XVIII, quaestio II, C. XXX, fol. 721.

³⁴² R. Badenes Gasset, *Las fundaciones de Derecho privado...*, o.c., p. 262.

³⁴³ V. Suárez Grimón, *Propiedad y clero: las capellanías en Gran Canaria en el siglo XVII*, en Almogaren, revista del Centro Teológico de las Palmas, nº 13, Las Palmas de Gran Canaria 1994, p. 125.

³⁴⁴ “Caeterum capellaniae perpetuae nulli dubium est quin fint beneficia ecclesiastica, quando fint institutae, et erectae auctoritate apostolica, vel ordinaria, ut fint spirituales, et beneficia ecclesiastica quae dicuntur capellaniae collativae”. N. García, *Tractatus de Beneficiis...*, o.c., prima pars, cap. II, 95, fol. 12. “Aliae denique Capellaniae in perpetuum auctoritate Apostolica, vel ordinaria erectae, et in titulos creatae, sunt Ecclesiasticae, et dicuntur Capellaniae collativae”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., Libro III, cap. V, 20, fol. 135. “Collativa, seu ecclesiastica dicitur illa quae est fundata, cum Episcopi, vel alterius superioris ordinarii ecclesiastici auctoritate”. A. de Leone, *De officio capellani...*, o.c., quaestio tertia, sectio secunda, 20, fols. 51-52. “Ecclesiasticae sunt, quae fiunt Papae, vel episcopi auctoritate interveniente, sunt enim collativae, et proprie beneficia ecclesiastica”. F. Mostazo, *De causis piis in genere...*, o.c., Libro III, Cap. I, 1, fol. 174. “Proprie ecclesiasticae dicuntur,

Esta primera distinción ya la recoge San Vicente Ferrer al decir que “*son verdaderos beneficiados, obligados a rezar sub gravi, los que tienen capellanía colativa*”³⁴⁵. Éstas son erigidas por la autoridad eclesiástica (el ordinario del lugar) y tienen carácter benefical, es decir, son verdaderos beneficios, al tener la característica de perpetuidad, que era lo más común, debido a la concreta finalidad con que se fundaban o creaban.

En consecuencia, sus bienes pasan a ser espiritualizados, es decir, a formar parte del patrimonio de la Iglesia (eclesiásticos), quedando bajo su autoridad, como así dispone Pérez de Lara, en su obra *De anniversariis et capellaniis*, libro II, cap. I, 19, fol. 111:

“Postquam bona destinata pro Capellania sunt facta patrimonium Ecclesiae, debent esse potestate episcopi et conditio contraria reiicitur secundum communem sententiam”.

Pueden ser título de ordenación, siendo disfrutadas por clérigos, normalmente presbíteros y la colación e institución canónica compete al diocesano, sin cuyo requisito no se adquiere la posesión. Aunque a veces podían obtenerlas los tonsurados que contasen con catorce o más años:

“La capellania perpetua instituyda por autoridad del Ordinario, es beneficio eclesiástico, y al que se viure de hazer colación della ha de aver entrado en catorze años de edad. La capellania mandada por el fundador a clérigo, se puede dar al ordenado de corona, salvo quando manda que no se dé ni provea, sino al que atualmente fuere clérigo presbítero” (A. Gómez Bayo, *Praxis ecclesiastica et saecularis*, Lugduni 1729, parte I, libro v, cap. IV, fol. 34).

Así se dispone en el Sacr. Congr. Concil. de 15 de junio de 1589 y que recoge F. L. Ferraris en su obra *Prompta bibliotheca...*, o.c., II, 20, fol. 97:

“Capellania, in cuius erectione fundador sic disposuit: Instituat capellanes, qui missas celebret, non est sacerdotales, et conferri potest clerico quatuordecim annorum.”

quoties erigantur ecclesiasticorum antistitum consensu”. C. Berardi, *Comentaria in ius...*, o.c., Appendix, fol. 372. “*Capellaniae collativae sunt illae, quae ita sunt institutae, ut conferantur in titulum..., quam capellaniam debet haeres cum episcopo auctoritate erigere, et fundare*”. F. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca...*, o.c., II, 4, fol. 95. J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., p. 114. A. Andrés, *Diccionario de Derecho Canónico...*, o.c., Tomo I, p. 230. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 22. L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas...*, o.c., pp. 13-14. M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., cap. I, p. 9. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., libro IV, cap. I, art. 9, pp. 272-273. F. Gómez-Salazar y V. de la Fuente, *Tratado teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos*, Madrid 1868, Tomo IV, Título IV, Cap. I, pp. 337-338. F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho Civil...*, o.c., tomo VI, pp. 1536-1537. F. Benítez de Lugo, *Apuntes sobre capellanías...*, o.c., p. 5.

³⁴⁵ V. Ferrer Miguel, *Suma moral para examen de curas...*, o.c., cap. III, 319, p. 232.

También lo recoge el cardenal de Luca (J. B. de Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, Lugduni 1697, Libro XII, I. De beneficiis ecclesiasticis in genere, Discursus XCV, 6, fol. 190):

“Ex dispositione autem Sac. Conc. Trid. sess. 23. de reformat. Cap. 6. id correctum est, atque omnis aetas ante annum 14 illegitima est beneficia assequenda”.

En estas capellanías ha de existir la dote aneja al oficio, la cual ha de estar en poder de la Iglesia, pero una capellanía que tenga todos los requisitos indicados, menos la erección canónica en beneficio, será eclesiástica, pero no colativa. Aun interviniendo la aprobación de la Iglesia en las fundaciones particulares, para que sean capellanías colativas es necesario que su fin sea la ordenación de un capellán, como título perpetuo para ello. En consecuencia, no lo son las fundaciones de particulares que, aunque aprobadas por la Iglesia, tienen otro fin canónico distinto a la ordenación de un capellán, como es el caso de un hospital, una casa de misericordia o la dotación de una parroquia, cuyas fundaciones son de particulares por su origen, eclesiásticas por su fin y condición, pero no son capellanías colativas. En contraprestación a la menor libertad que tenían respecto a las laicales, éstas proporcionaban una mayor seguridad a los fundadores, ya que se beneficiaban del favorable régimen jurídico de los bienes de la Iglesia.

Se subdividen en:

Colativas simples o de libre presentación: son las que reuniendo los requisitos de las eclesiásticas pueden conferirse por el obispo libremente en persona idónea³⁴⁶.

Electivo-colativas: si la colación proveída por el ordinario se hace al individuo o persona adecuada presentada por el patrono³⁴⁷.

Según las variadas formas que revisten las hay con los nombres de colativo-familiares y no familiares, pudiendo ser las primeras de patronato activo, de patronato pasivo, extinguidas o subsistentes, residenciales y no residenciales, simples y curadas, según las cláusulas establecidas en la fundación y los medios empleados para que fueren cumplidas las voluntades de los institutores.

A) Capellanías colativo-familiares (de sangre).

Son aquellas en cuya fundación se llama a ejercer el patronato activo o a gozar del pasivo a pariente del fundador o a individuo de familia determinada³⁴⁸. Una característica de las mismas es que el sustento del capellán procede de una renta anual generada por unos determinados bienes. Por tanto, la renta podía variar en función del rendimiento de dichos bienes. También se las conoce como capellanías de parentesco. Las hay de varias clases.

³⁴⁶ Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 532. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 27.

³⁴⁷ F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 308.

³⁴⁸ M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., p. 10.

— De patronato activo³⁴⁹.

El derecho del patrono de presentar o nombrar capellán.

-Familiar o gentilicia. El patrono dispone que los nombrados capellanes sean miembros de su familia.

-No familiar. Los nombrados por el fundador son de otra determinada familia.

-Eclesiástico. Cuando el patronato corresponde a la iglesia o a un clérigo o sacerdote por la dignidad u oficio que ejerza.

— De patronato pasivo³⁵⁰.

El derecho a ser nombrado para cierta capellanía.

-Familiar³⁵¹. El derecho a ser nombrado capellán un pariente de la familia del fundador o patrono, en la forma prevenida en las cláusulas de la fundación, siguiendo el orden establecido en los llamamientos hechos por el fundador. Caso de extinción de las líneas llamadas, el fundador podía disponer que se llamase a una persona de su mismo pueblo³⁵² o alguien bautizado en la misma pila bautismal donde él lo había sido, lo que se conoce, en este caso, como capellanes pilongos.

-No familiar. Cuando extinguidas las líneas llamadas, pasa a disfrutarla alguien extraño a los llamamientos previstos. Se llama de *iure devoluto* (de derecho devuelto), lo que significa que, ante la pérdida de un nombramiento por el patrono, retorna al ordinario el derecho originario de designar al capellán. La devolución puede ser *perpetua*: cuando ya no hay parientes llamados por el fundador por extinción de las líneas. *Temporal*: cuando en caso de vacante no se persona a solicitarla en tiempo ninguno de los llamados de la familia, o el patrono deja transcurrir el señalado en la fundación para hacer la presentación, o si ha tenido lugar en contra de las condiciones expresadas en la fundación o requeridas por derecho³⁵³.

Una capellanía colativa de patronato pasivo puede ser también³⁵⁴:

³⁴⁹ Ibidem, p. 10. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 308. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 65. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 532. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 28.

³⁵⁰ M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., p. 10. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 309. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 28.

³⁵¹ Ibidem, p. 308. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 532.

³⁵² “*Possunt tamen fundatores beneficiorum, et capellaniarum in limine foundationis eorum, de consensu ordinariorum, conditionem apponere, ut solum consanguinei sui, aut filii patrimoniales, vel naturales loci, aut tandem certum genus personarum, illa et non alii obtinere valeant*”. P. de Murga, *Tractatus de beneficiis ecclesiasticis...*, o.c., quaestio tertia, sectio 14, 864, fol. 474.

³⁵³ J. M. Vázquez García-Peñuela, Las capellanías colativo-familiares (régimen legal vigente), Pamplona 1992, cap. I, p. 31. V. Covián, *Capellanías*, en *Enciclopedia Jurídica Española...*, o.c., p. 11.

³⁵⁴ D. Calderón y Sanabria, *Examen analítico-legal de los bienes vinculados...* o.c., pp. 37, 214 y 288.

-Ministerial.

Llamada también ministerial de sangre, en la que los fundadores llaman para capellanes a sus parientes y en su defecto, a curas o capellanes virtuosos, hábiles, más antiguos o idóneos en ciencia y que quieran proveerla. Necesita colación al ser eclesiástica. Recibe su denominación del ministerio para cuya dotación ha sido fundada. Se adjudica a capellanes mientras tanto ejercen su ministerio. Se diferencia de la capellanía puramente ministerial o laical ministerial en que requieren la necesaria colación por la autoridad eclesiástica.

-Sacerdotal.

La capellanía en cuya fundación se dispone que se elija capellán que sea sacerdote, lo que requiere necesariamente que el presentado sea en el acto sacerdote. La razón es clara, pues es una condición del fundador en la que exige una cualidad.

Así lo asevera Mostazo, siguiendo a autores anteriores como Azor, García y Fagnano³⁵⁵, al decir:

“Capellaniae aliquae Sacerdotales non sunt, quae nec requirunt Sacerdotium, nec aliquem Ordinem Sacrum. Nempe esse Sacerdotalem quoties onus imponitur Capellaniae, ut Capellanus Missas celebret, dicitur Sacerdotales.”
(F. Mostazo, *De causis piis in genere...*, o.c., Libro III, Cap. V, 1, y 5, fol. 200).

-De cuenta.

Estas capellanías son aquellas en cuyas fundaciones está dispuesto que todo su producto o renta líquida deba invertirse en misas, de la que una parte es para el capellán.

— De patronato activo-pasivo.

Si existe el derecho a los dos actos: de presentar o nombrar capellán o a ser nombrado para cierta capellanía.

Dentro de las capellanías colativo-familiares o de sangre, se establece una distinción o clasificación bastante reciente, pues data de mediados del siglo XIX:

— Extinguidas³⁵⁶.

³⁵⁵ “Aliquando in ipsa Beneficii fundatione, vel dotatione, verba poni, quibus expressim, aut implicite falem indicatur, eum, qui in Ecclesia, Capellaniave instituitur, oportere esse prebyterum tempore quo ei Beneficium confertur, et tunc non satis est, si intra annum prebyter siat”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro VI, cap. VIII, fol. 1011. “Capellania sit sacerdotalis ex eo solo, quod habeat on celebrandi anexum, ut quia fundator disposuit, quod capellanus celebret, seu debeat celebrare tot missas, ut est ordinarium”. N. García, *Tractatus de Beneficiis...*, o.c., cap. I, § I, 75, fol. 8. “Et similiter ex eo quod Capella sit Sacerdotalis, regulariter non licet inferre ut Capellanus teneatur celebrare per se ipsum, quia stant simul ut Capellanus debeat esse Sacerdos”. P. Fagnano, *Commentaria in secundam partem primi libri Decretalium*, Romae 1661, *De Aetate et Qualitate*, cap. Ut Abbates, 61, fol. 223.

³⁵⁶ M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., p. 10. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 29.

Las adjudicadas por los tribunales civiles y cuyos bienes fueron reclamados antes de la publicación del R. D. de 28 de noviembre de 1856. A partir del Convenio-Ley de 24 de junio de 1867, que consideró extinguidas las capellanías cuyos bienes hubieran sido reclamados judicialmente por las familias de los fundadores con anterioridad al 28 de noviembre de 1856.

— Subsistentes³⁵⁷.

Aquellas cuyos bienes no hubiesen sido reclamados en la citada fecha y no hubiera recaído solicitud de adjudicación. Éstas se subdividen en:

-Congruas.

Cuando con las rentas de su dote el capellán recibe el dinero suficiente para vivir conforme exige su condición. Esa cantidad, que se fijaba en cada diócesis y era anual, se llamaba congrua de ordenación, porque, en principio, nadie podía ser ordenado si no la tenía asegurada por un título legítimo.

Una definición clásica de congrua, según F. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca...*, o.c., II, 7, fol. 400 (*Sacrae Rotae Romanae decisionum*, parte 4, tomo I, dec. 595), es la que sigue:

“Unde generaliter loquendo taxanda est Congrua, quae sit sufficiens ad commodam et honestam sustentationem personae, habita ratione de loco, fructum quantitate et onerum, qualitate personae.”

-Incongruas.

Si la renta no llega a una cierta cantidad (2.000 reales, según el artículo 12 del Convenio-Ley de 1867. Hay que puntualizar que es claro que la cuantía de la congrua ha variado a lo largo del tiempo. En el siglo XVII era de unos 880 reales y a finales del XVIII, de 1.500 reales). El carácter incongruo de un beneficio facultaba al Ordinario para suprimirlo o fusionarlo con otro/s de esa misma condición. La Bula *Apostolici Ministerii*, de 13 de mayo de 1723, dada para España por Benedicto XIII, mandó que los obispos procediesen a la supresión de beneficios y capellanías cuya renta anual no llegaba a la tercera parte de la congrua³⁵⁸. La existencia de multitud de capellanías con rentas mínimas ya había preocupado con anterioridad a la autoridad civil,

³⁵⁷ Ibidem, p. 29.

³⁵⁸ “8. Y por cuanto tenemos entendido que en los referidos reinos de España hay diferentes beneficios y capellanías de patronato eclesiástico o laical, sin renta alguna cierta, o tan tenue, que no llega a la mitad ni a la tercera parte de la congrua necesaria para que puedan los clérigos ascender a los sagrados órdenes; deseando ocurrir a los daños no leves que de lo dicho se originan, establecemos y mandamos, que los obispos supriman luego al punto los beneficios y capellanías que no tienen renta alguna cierta. Y por lo que mira a otros beneficios y capellanías, cuya renta anual no llega ni aun a la tercera parte de la congrua, determinamos, que a ninguno en adelante se le confiera la primera tonsura con motivo de adquirir derecho alguno de dichos beneficios y capellanías”. J. Tejada y Ramiro, *Colección completa de concordatos españoles*, Madrid 1862, p. 86.

que instó en Real Cédula de Carlos II, de 13 de agosto de 1691, a la eclesiástica, a que fusionase las capellanías incongruas:

“Por quanto la mayor causa de la relaxacion del Estado eclesiástico secular, y crecido número de Eclesiásticos nace de la multitud de Capellanías que hay en estos Reynos, cuyas rentas por la calamidad de los tiempos se han extenuado de modo, que los mas que se han ordenado a título de ellas no pueden vivir con la decencia correspondiente a su estado, y de que nace se mezclen a tratos y exercicios ménos decorosos; para atajar estos inconvenientes, el Consejo es de parecer, con el que me he conformado, me sirva interponer con S. S., para que expida Breve a todos los Obispos, a fin de que en sus diócesis puedan unir las Capellanías, así de ordinaria colación como de Patronato, hasta que se componga de dos ó mas Capellanías cógrua competente”. Novísima Recopilación, Lib I, Tít, XVI, Ley I.

— Fijas o residenciales³⁵⁹.

Según Cerola, en *Praxis episcopalis...*, o.c., verbum beneficia, fol. 46).las capellanías requieren residencia si tienen la carga de celebrar determinadas misas y de contribuir a la cura de almas en Iglesia:

“Si capellania habet onus celebrando certas missas et coadiuvandi in cura animarum in Ecclesie plebanatus, dicitur requirere residentiam.”

La misma tesis sostiene Pérez de Lara (*De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro II, cap. VII, 7, fol. 148) al decir que una capellanía que sólo tenga la carga de celebrar misas no es residencial:

“At si solum Capellania habeat onus celebrandi Missas, non dicentur requirere residentiam personalem: nam beneficium non dicitur residentiale propter onus celebrandi Missam.”

También apunta el célebre jurisconsulto Mostazo, en su obra *De causis piis in genere...*, o.c., Libro III, Cap. XI, 1, fol. 242, que las capellanías requieren residencia:

“De iure communi loquendo omnia Beneficia, quantumvis simplicia, residentiam requirunt. De generali tamen consuetudine illud est receptum, ut minime Beneficia simplicia residentiam habeant; unde etiam Capellaniae, quae simplices sunt, in eadem consuetudine comprehenduntur.”

Las capellanías que requieren residencia, además de colativas, pueden ser también laicales. Dicho requisito se exige cuando por la fundación hay obligación de residencia impuesta al capellán en el punto donde las capellanías se han fundado y en cuyo altar se deben cumplir las cargas espirituales³⁶⁰. Pero no está obligado si tiene dispensa del

³⁵⁹ F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 309. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 29.

³⁶⁰ “Conditionem residendi apponi posse per fundatorem Capellaniae nemo est qui dubitet”. A. Pérez de Lara, *De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro II, cap. VIII, 1, fol. 150.

Ordinario o si la renta de la capellanía es tenue, es decir, que no alcanza en forma suficiente para su sustento³⁶¹. Si no se dan estas circunstancias y el capellán incumple el deber de residencia puede ser removido de la capellanía³⁶².

— No residenciales.

Al contrario que las anteriores, cuando no hay obligación de residir al no ser necesario el cumplimiento de las cargas espirituales como la cura de almas, o si así lo disponen las reglas de la fundación y se exime de dicha carga u obligación:

“Ut nisi fundador expresse residentiam Capellani praecipiat, ad illam non teneatur” (F. Mostazo, *De causis piis in genere...*, o.c., Libro III, Cap. XI, 1, fol. 242).

— Simples.

Cuando imponen al capellán la celebración personal de misas y recitación de las horas canónicas. Mostazo (*De causis piis in genere...*, o.c., Libro III, Cap. I, 3, fol. 174) hace una división de las capellanías en *“sine plebe”* y *“cum plebe”*. Las primeras son las capellanías simples:

“Capellania habet aliquas divisiones: quaedam igitur sunt sine plebe, aliae vero Capellaniae cum plebe. Sine Plebe nihil aliud oneris habent, nisi celebrandi Missas et Officium Divinum recitandi, absque aliqua animarum cura.”

— Curadas.

Las instituidas para ayudar a los párrocos en el ejercicio de sus funciones o que por cualquier concepto incumbe al capellán la cura de almas de un pueblo o parroquia³⁶³. En la práctica, en muchas ocasiones los capellanes actuaban como coadjutores (sacerdote que ayuda al párroco) del párroco y participaban junto a éste en los actos de culto más solemnes y en las procesiones³⁶⁴. Mostazo las llama capellanías *“cum plebe”* en contraposición a las anteriores:

“Secus vero si cum plebe, huic enim Capellano incumbit earum cura, ut accidit quando Ecclesia cum plebe conceditur Monasterio.”

Anteriormente, Cerola ya dice que plebanía es una iglesia curada: *“Plebania est Ecclesia curata”* (*Praxis episcopalis...*, o.c., fol. 46). Viene de la palabra latina *“plebanus”* (nombre que en algunas partes se da al cura párroco), y ésta de *“plebs”* que significa *“pueblo”*, por lo que una iglesia con almas (plebs, plebania, plebanata) es curada.

³⁶¹ “Salvo si es tenue y no congrua para el sustento del capellán, conforme a su calidad, y allí dispensa el Obispo en la residencia, y aun en quanto al numero de Missas, si ay justa causa”. A. Gómez Bayo, *Praxis eclesiastica et saecularis...*, o.c., Parte I, libro V, cap. IV, fol. 34.

³⁶² “Ergo et conditio residendi potest poni Capellano et non adimplens Capellania privabitur”. A. Pérez de Lara, *De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro II, cap. VIII, 18, fol. 151.

³⁶³ V. Covián, *Capellanías*, en *Enciclopedia Jurídica Española...*, o.c., p. 11.

³⁶⁴ F. Ruiz de Velasco y Martínez, *Método práctico para los párrocos en la reclamación de memorias-anniversarios y reivindicación de bienes de capellanías*, Madrid 1905, pp. 197 y 198.

B) Capellanías colativas no familiares o de libre elección³⁶⁵.

Muy pocos autores, representados por Suárez Grimón, las llaman capellanías colativas laicales, aunque la denominación de colativas no familiares es la más indicada y la que utiliza la gran mayoría de los autores. Son aquellas en cuya fundación no se llamó a ejercer el patronato activo ni a gozar del pasivo a parientes del fundador ni a familias determinadas, pero que teniendo el carácter de verdaderos beneficios eclesiásticos, aunque impropios, podían servir de título de ordenación o de congrua sustentación a los agraciados. Se llaman también gentilicias y, a diferencia de las colativas, el patrono siempre es lego, teniendo facultad para nombrar. A diferencia de las capellanías de sangre, las colativas no familiares reunían la característica de que la renta no variaba en el tiempo.

— De patronato eclesiástico particular.

Aquellas cuyo patronato va siempre unido o incorporado a una iglesia, dignidad u oficio eclesiástico. Su provisión se realiza por el respectivo patrono.

— De derecho común eclesiástico.

Las que para su provisión o adquisición no están sujetas a patronato alguno particular y son proveídas libremente por el diocesano, es decir, son las que carecen de patronato.

4.2.- Capellanías laicales³⁶⁶.

Es el segundo gran grupo en que se dividen las capellanías. También reciben el nombre de profanas, merelegas, cumplideras y mercenarias. Se llaman *cumplideras* y *mercenarias* porque cuando el llamado a disfrutar de la capellanía no era un presbítero y no podía, por tanto, celebrar las misas en que consistía la carga espiritual de la

³⁶⁵ M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., p. 10.

³⁶⁶ “*De iure enim tales Capellaniae cum onere celebrari faciendi certas Missas simpliciter constitutae de bonis temporalibus et sine auctoritate Episcoporum, censetur laycales et temporales*”. M. Loterio, *De re beneficiaria*, o.c., Libro I, quaestio V, 59, fol. 25. “*Et huiusmodi Capellaniarum sic privata auctoritate institutarum bona laicalia reputantur*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., Libro III, cap. V, 6, fol. 133. “*Et si ratione talis Capellaniae interveniat pactum absque auctoritate Superioris, puta papae, istud non erit simonicum: si quidem Capellania illa esset duntaxat quid laicale*”. Reiffenstuel, *Ius canonicum universum...*, o.c., V, 3, n° 72, fol. 104. “*Laicae Cappellanie dicuntur, in quibus ex voluntate fundatoris ita omnia disposita sunt, ut nulla erectione, eove minus in institutione Cappellanorum Episcopales requiratur auctoritas, etiamsi caverit fundador, ut ecclesiasticae personae Cappellania tradatur*”. C. Berardi, *Commentaria in ius...*, o.c., Appendix, fol. 372. A. de Pitillas y Ruesga, *Tratado de medias annatas...*, o.c., fol. 115. J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., p. 114. A. Andrés, *Diccionario de Derecho Canónico...*, o.c., Tomo I, pp. 229-230. L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas...*, o.c., pp. 13-14. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 308. F. Gómez-Salazar y V. de la Fuente, *Tratado teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos*, Madrid 1868, Tomo IV, Título IV, Cap. I, p. 338. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 532. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 65. F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho Civil...*, o.c., tomo VI, p. 1536. M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías y pías memorias*, Vitoria 1903, cap. I, p. 10. Wernz-Vidal, *Ius Canonicum*, Romae 1935, IV, volumen II, *De rebus*, n° 767, p. 236.

capellanía, debía hacer que se *cumpliera* dicha carga por una tercera persona que sólo tenía derecho a percibir el estipendio o *merced* correspondiente³⁶⁷, *merelegas* o *laicales* porque las poseen los legos de cualquier clase, con la sola obligación de mandar cumplir la carga eclesiástica y *profanas* porque los bienes en que están fundadas continúan considerándose como temporales³⁶⁸.

-En su fundación no interviene la autoridad eclesiástica³⁶⁹, lo que se establecía con la cláusula “*non se intromittat Episcopus*”³⁷⁰, por lo que de ordinario se declaran exentas de su jurisdicción en la misma fundación, aunque el instituidor hubiere ordenado que el poseedor fuese un eclesiástico.

-Los bienes segregados del patrimonio del fundador para dotar la capellanía no son espiritualizados, siguen en su condición de bienes seculares o profanos³⁷¹. No existe derecho de erección dado por el ordinario, sino simple aceptación. No sirven de título de ordenación³⁷² y aunque están fuera de la jurisdicción del obispo éste tiene la facultad de inspeccionar y hacer cumplir las cargas eclesiásticas que sobre ellos graviten.

Este tipo de capellanías no eran beneficios eclesiásticos y a ellas podían ser llamados a disfrutar de sus bienes personas no ordenadas *in sacris*, e incluso niños y mujeres, con tal de que las cargas espirituales se levanten siempre por clérigos idóneos. Se suelen llamar, de forma equivocada, memorias de misas, legados píos y patronatos de legos³⁷³.

En realidad son ciertas vinculaciones hechas a modo de mayorazgos con la carga o gravamen, impuesto a los poseedores, de celebrar o mandar celebrar en una iglesia o capilla determinada las misas que el instituyente señale. Son bienes de dominio particular o privado gravados con las cargas eclesiásticas dispuestas por los instituyentes³⁷⁴.

³⁶⁷ “*Capellaniae mercenariae sunt illae, quae ita instituuntur, ut non conferantur sacerdoti in titulum, sed eligatur ad implendum munus impositum a testatore; hac ratione capellania dicitur mercenaria, cum missae celebrentur recepta mercede sine titulo, et tunc bona relictas pro hoc onere remanent in sua temporalitate*”. F. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca...*, o.c., II, 2, fol. 95. J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., p. 113.

³⁶⁸ J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., libro IV, cap. I, art. 9, p. 272.

³⁶⁹ “*Est alia divisio Capellaniarum; quaedam enim dicuntur profanae, seu laicales, aliae vero Ecclesiasticae. Profanae, seu laicales dicuntur, quae fundatur absque auctoritate Papae, seu Episcopi; cum ista qualitas requiratur ad illas faciendas Ecclesiasticas*”. F. Mostazo, *De causis piis in genere...*, o.c., Libro III, Cap. I, 7, fol. 174.

³⁷⁰ “*Unde apparet in huiusmodi capellaniis valere ordinationem fundatoris seu testatoris, quod ordinarius non se intromittat in earum provisione, sed ad solos patronos spectet ut in informatione, seu discursu posito*”. N. García, *Tractatus de Beneficiis...*, o.c., cap. II, 105, fol. 13.

³⁷¹ “*Et dicetur illa Capellania saecularis, et profana, ex quo non est spiritualizata, et eius bona erecta in spiritualibus*”. A. Pérez de Lara, *De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro II, cap. I, 34, fol. 115. “*Non collativa seu prophana, vel secularis est illa, quae per auctoritatem Ordinarii non est spiritualizata*”. A. de Leone, *De officio capellani...*, o.c., quaestio tertia, sectio secunda, 20, fol. 52.

³⁷² “*In his capellaniis laicalibus non requiritur aetas certa, nisi aliud petatur a fundatore, et possunt dari foeminis, nec capellanus tenetur ad recitationem, nec ad titulum illarum potest quis ordinari*”. F. Mostazo, *De causis piis in genere...*, o.c., Libro III, Cap. II, 43, fol. 185.

³⁷³ F. Benítez de Lugo, *Apuntes sobre capellanías...*, o.c., p. 5.

³⁷⁴ M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., pp. 10 y 40.

Respecto a los demás asuntos y controversias, si no media prohibición expresa del fundador, referentes por ejemplo al derecho de los llamados a la obtención de la capellanía y enajenación de bienes, corresponde el conocimiento a la jurisdicción civil y a las leyes civiles antes que a lo ordenado por las leyes eclesiásticas.

Son alienables, al no convertirse sus bienes en eclesiásticos (son inalienables las eclesiásticas), por lo que entraban en el comercio y podían poseerse, venderse y enajenarse por los legos y a los legos. Esta característica hizo de las capellanías laicales una figura muy socorrida cuando las leyes civiles prohibieron los vínculos. En resumen, daban mayor libertad de imposición y manejo.

Franco y Ortiz³⁷⁵ realiza una subdivisión en las capellanías laicales de patronato pasivo, las cuales las clasifica en:

-Capellanía laical clerical.

Si el patronato pasivo recae sobre clérigo. Puede presentarse a ella quien ya sea sacerdote o se ordene como presbítero en el término de un año.

-Capellanía laical sacerdotal.

Cuando debe obtenerla un sacerdote. En este caso, puede presentarse para ella el que teniendo actualmente este orden, reúna, además, una serie de circunstancias especiales determinadas en la fundación o en el hecho de ser sacerdote y ayudar al párroco y decir por sí las misas.

-Capellanía laical ministerial.

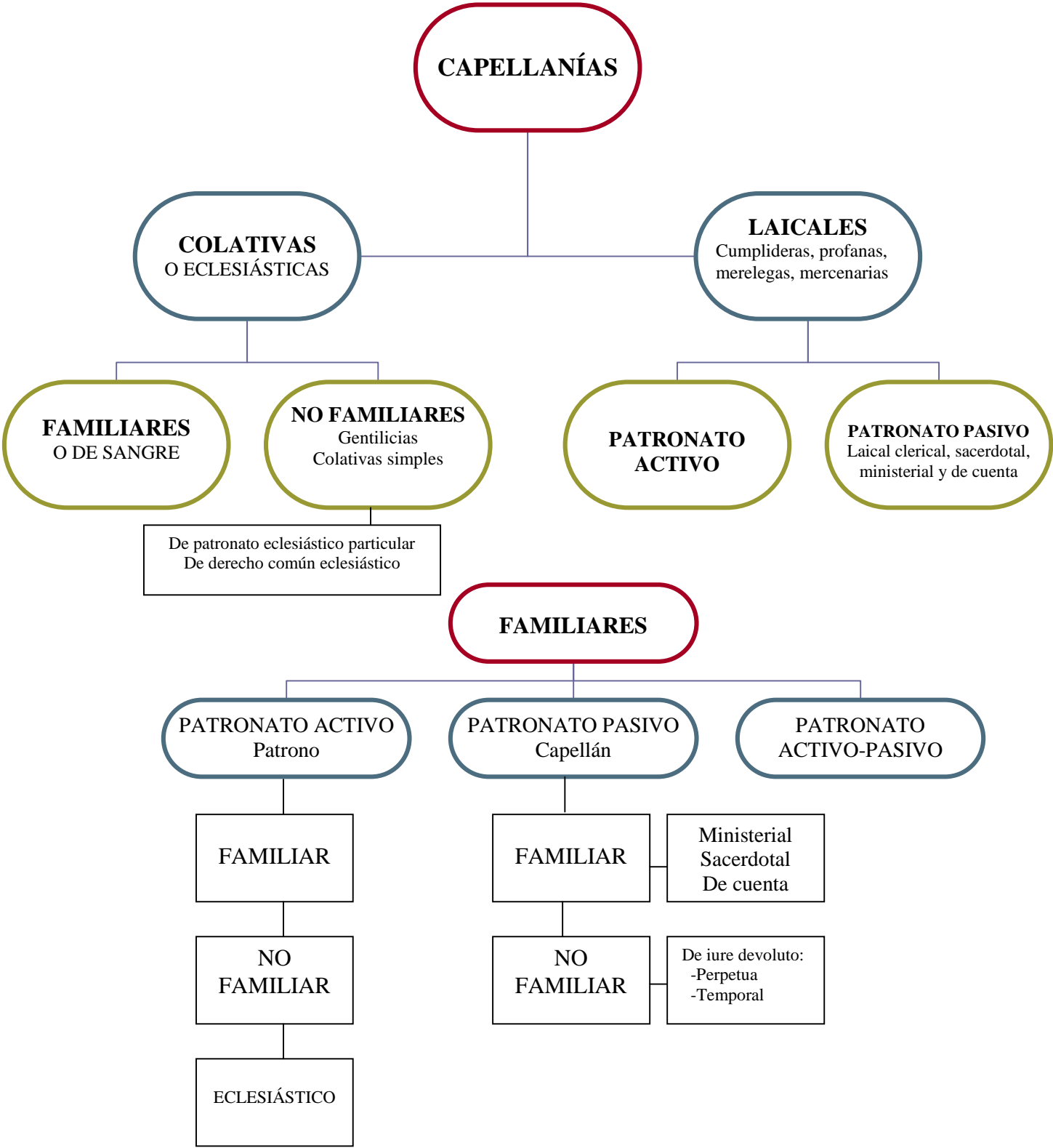
Son las que se fundan para que las posean párrocos, capellanes, tenientes vicarios, penitenciarios, dignidades, canónigos, etc. No necesita colación por no ser eclesiástica, siendo gubernativa su provisión aunque se haga por el obispo.

-Capellanía laical de cuenta.

La renta se divide en dos partes: una se deposita en colecturía general del Obispado o de la iglesia en que esté la fundación, donde se distribuye en misas en sufragio del fundador y, la otra, redunda en provecho del capellán o cumplidor.

³⁷⁵ J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., pp. 114-115. Véase también L. Arrazola y García, *Enciclopedia española de Derecho...*, o.c., p. 521.

Cuadro 4. Clasificación de las capellanías.



4.3.-. Distinción práctica entre capellanías colativas y laicales.

Existen varias reglas y criterios que facilitan el conocer, en la práctica, si una capellanía es colativa o meramente laical. Es de suma importancia el diferenciarlas claramente, dada la distinción tan radical que entre ellas se hallan, pues existen muy diversas las normas y disposiciones de la autoridad, tanto eclesiástica como civil, aplicables a unas y a otras, ya que de ello se derivaban importantes consecuencias económicas, sobre todo, a partir del siglo XIX.

Se debe atender, en primer lugar, a la voluntad del fundador. Si éste ha sometido o no a la aprobación de la autoridad eclesiástica, la nueva pieza fundada, y como consecuencia de ello, ha tenido o no lugar su erección e institución canónica y la subsiguiente espiritualización de sus bienes, haciéndose los diferentes nombramientos de los obtentores o capellanes mediante la colación por el Ordinario en la forma requerida por el derecho. Estudiados estos particulares con el detenimiento que su interés e importancia requiere, si concurriese y se observase, por lo tanto, que en la capellanía había existido la erección, y la continuada colación canónica no interrumpida, de los distintos capellanes, en tal caso puede concluirse que es colativa y en el caso contrario deberá calificarse como laical³⁷⁶.

En resumen, una capellanía es eclesiástica si es erigida por decreto canónico, con licencia y consentimiento del Ordinario y para cuya posesión se requiere colación e institución canónica³⁷⁷ y también cuando así se ordena expresamente por el fundador, no dejando lugar a ninguna duda ni interpretación sobre su voluntad, como es el caso de Pascual Ibiza Martínez, el cual funda una capellanía en Siete Aguas (Valencia), en 5 de febrero de 1797 con las siguientes palabras:

“Creo, instituyo y fundo en la parroquial iglesia de la villa de Siete Aguas una capellanía eclesiástica, perpetua, colativa, residencial, en el modo y forma siguientes...”

(ARV. Propiedades Antiguas. Legajo 66, nº 13, fol 37r).

Pero puede ocurrir que estos requisitos no se conociesen por no existir el decreto de erección, o porque el fundador no expresa claramente su voluntad de que sea colativa; entonces, habría que deducir su naturaleza de las diversas cláusulas puestas en el documento de fundación. Así, si dicho documento declara establecerse la capellanía para que en ella se sirva a Dios, dicha capellanía, aunque no conste de la erección, se presume colativa; del mismo modo si el fundador declara instituir una capellanía con carga perpetua de misas y con la obligación de inscribirla en los libros de la Iglesia, poniendo los bienes con que la dota bajo la custodia y vigilancia de la autoridad

³⁷⁶ “*Quotiescumque cappellania erecta et dotata est auctoritate episcopi, est verum beneficium*”. P. Leuren, *Forum beneficiale*, o.c., cap. tertium, quaestio 86, I, fol. 28. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 310. M. González Ruíz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 486.

³⁷⁷ “*Dissert etiam a beneficio cappellania in eo, quod ad erigendum beneficium intervenire debeat ecclesiastici praelati auctoritas, et quotiescumque beneficium valet, debeat auctoritate ecclesiastici praelati conferri*”. C. Berardi, *Commentaria in ius...*, o.c., Appendix, fol. 370. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 66.

eclesiástica, ante la duda, también se ha de tener por colativa³⁷⁸. Por el contrario, es laical aquella capellanía, en cuya fundación se prohíbe a la autoridad eclesiástica inmiscuirse en el nombramiento de capellán³⁷⁹, e igualmente si se concede al patrono el derecho de removerlo a su placer y sin intervención del Ordinario. Estas y otras cláusulas semejantes nos darán a conocer la intención del fundador acerca de la naturaleza de la capellanía por él fundada³⁸⁰.

Mas puede ocurrir, y de hecho ocurre en multitud de ocasiones, que no se tenga el documento auténtico de la fundación, o que, a causa de cualquier incidente, hubiese desaparecido el documento original; en este caso la serie no interrumpida de colaciones canónicas hechas a diferentes capellanes por un espacio de tiempo de cuarenta años es motivo bastante, según entienden los canonistas, para considerarla colativa³⁸¹ y laical en el caso de que por igual tiempo se haya provisto por los patronos sin intervención del Obispo, pero siempre que el fundador reservase a cierta persona, familia o corporación la facultad de designar quién hubiese de ser nombrado para su goce y obtención, siempre que estuviese adornado de especiales requisitos, que él determinase o de las generales del derecho, concurriendo las indicadas circunstancias, la capellanía será igualmente colativa, pues su canónica institución o erección y la colación es el principio determinante y diferencial. Por consiguiente, así como estas solemnidades deben concurrir en toda capellanía colativa, así también, cuando en una capellanía se dan dichas solemnidades, con todo derecho podemos deducir, que es colativa, con tanta más razón, cuanto que nada impide, que una capellanía que quizá en su comienzo debió ser tenida por laical, en el transcurso del tiempo, por dicha colación canónica, se convierta en verdadero beneficio eclesiástico³⁸².

³⁷⁸ “*In dubio capella fundata ad serviendum in ea Deo, licet non appareat de approbatione episcopi, praesumitur beneficium ecclesiasticum*”. P. Leuren, *Forum beneficiale*, o.c., cap. tertium, quaestio 87, fol. 28. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 25.

³⁷⁹ “*Capellaniam fundans, an possit adiicere conditionem, nec ordinarius se intromittat, alias revocetur fundatio, et resolvitur quod non quando est beneficium ecclesiasticum*”. J. González, *Commentatio ad regulam octavam Cancellariae...*, o.c., Glosa V, 42, fol. 100. “*Nam si aliqua capellania erigeretur, seu fundaretur sine auctoritate episcopi, vel alterius superioris ecclesiastici, nullo modo ea foret beneficium ecclesiasticum*”. A. Reiffenstuel, *Ius canonicum universum...*, o.c., V, 3, nº 72, fol. 104.

³⁸⁰ M. González Ruíz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 486.

³⁸¹ “*Impetranti beneficium seculare, providetur de beneficio per seculares clericos usque praescriptionem legitimam possesso*”. *Corpus Iuris Canonici, Decretales...*, o.c., In Sexto, III, Tít. IV, *De praebendis et dignitatibus*, Cap. V, fol. 85; “*In praescriptionibus sufficit bona fides, ubi ius commune vel praesumptio non est contra praescribentem, alias debet allegari titulus, et probari: nisi fit praescriptio, cuius contrarii non extat memoria*”. Ibidem, II, Tít. XIII, *De praescriptionibus*, Cap. I, fols. 70-71. “*Si tamen per tempus 40 annorum, ter, quaterq; etiam bis, episcopus huiusmodi missarum memoriam, ut capellaniam conferat oblato, et praesentato per patronum, erit in posterum capellania collativa*”. A. Pérez de Lara, *De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro II, cap. I, 50, fol. 116. “*Capellania censetur in dubio beneficium, si appareat de una collatione, vel institutione ordinarii effectum fortita: si vero apparet de illius initio, noluisse scilicet fundatorem eam facere collativam, ut beneficium spatio 40 annorum*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi*, o.c., Libro III, cap. V, 12, fol. 134. “*Requireus tempus immemorabile ad huiusmodi praescriptiones loqui de casu, in quo ius commune est contrarium, non autem sola lex privata fundatoris*”. P. Leuren, *Forum beneficiale*, o.c., cap. tertium, quaestio 91, fol. 29. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 25.

³⁸² A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 66. M. González Ruíz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 487.

Pero si el fundador se expresó con palabras ambiguas, de manera que es difícil conocer la naturaleza de la capellanía y faltando los documentos que aclaren esta duda, entonces deberá ser considerada como eclesiástica³⁸³.

Otras reglas que deben tenerse en cuenta son las que se refieren a la persona o entidad a quien se conceden y que son las siguientes, según Berardi:

-Si una capellanía se concede por el fundador a una Iglesia, a su rector o a una corporación de clérigos regulares o seculares, será considerada eclesiástica³⁸⁴.

-Es capellanía laical la que se concede por el fundador a una corporación de legos³⁸⁵.

-La capellanía que se concede a un hospital será eclesiástica o laical según sea la naturaleza de aquél³⁸⁶.

4.4.- Otras clasificaciones de capellanías (aplicables sólo a las colativas).

Además de la esencial distinción entre capellanías colativas y laicales, hay otras clasificaciones según distintos criterios, pero, no por ello carentes de importancia. Estas ordenaciones tienen su paralelo en las divisiones que se realizaban en relación a los beneficios.

A) Capellanías seculares y regulares.

Según se hubiese dispuesto en las tablas de fundación que el capellán perteneciera al clero regular (el que vive bajo una regla o instituto religioso) o secular (clero que no vive en convento ni pertenece a orden religiosa). Caso de duda se atendía a si la capellanía estaba fundada en la iglesia de una orden religiosa, pues podían fundarse capellanías seculares monasterios o conventos³⁸⁷.

³⁸³ “*Capellania in dubio praesumitur fundata cum episcopi approbatione*”. A. Pérez de Lara, *De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro II, cap. I, 59, fol. 116. “*Capellania in dubio praesumuntur beneficia ecclesiastica*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., Libro III, cap. V, 1, fol. 133. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 310.

³⁸⁴ “*Noverint conditores basilicarum, in rebus, quas eisdem ecclesiis conferunt, nullam se potestatem habere, sed iuxta canonum instituta sicut ecclesiam, ita et dotem eius ad ordinationem episcopi pertinere*”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa X, quaestio I, C. VI, fol. 525. “*Donatio iuris patronatus laici facta loco ecclesiastico, iam sine consensu episcopi, tenet: non tamen praeiudicat iuri episcopi*”. Ibidem, *Decretales...*, o.c., In Sexto, III, Tít. XIX, *De iure patronatus*, Cap. único, fol. 118. “*Idem erit (ecclesiastica), si ecclesiae, si rectori ecclesiae, si collegio clericorum seu saecularium. Seu regularium, concessa capellania fuerit a fundatore*”. C. Berardi, *Commentaria in ius...*, o.c., Appendix, fol. 372.

³⁸⁵ “*Locus auctoritate episcopi ad usum hospitalitatis deputatus, est religiosus, et ad mundanus usus redire non debet*”. *Corpus Iuris Canonici*, *Decretales...*, o.c., Libro III, Tít. XXXVI, *De religiosis domibus, ut episcopo sint subiectae*, Cap. IV, fol. 487. “*Quemadmodum et laica capellania erit, si laicorum sodalitis concedatur*”. C. Berardi, *Commentaria in ius...*, o.c., Appendix, fol. 372.

³⁸⁶ “*Quod si concessa fuerit hospitali, distinguere oportebit inter ecclesiasticum, et laicum hospitale: si laicum, laica intelligetur, si ecclesiastica, ecclesiastica*”. Ibidem, fol. 372.

³⁸⁷ “*Capellania fundata in ecclesia regulari, an censetur in dubio regularis, an vero saecularis ostenditur*”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., Libro III, cap. V, 14, fol. 134. “*Aliae enim capellaniae sunt regulares, aliae vero saeculares. Regulares dicuntur, quae per ipsos administrantur, sive ex fundatione, vel legitima praescriptione. Saeculares, quae per saeculares. In dubio vero, quando*

B) Capellanías compatibles e incompatibles.

Incompatible: cuando el fundador dispone que quien gozase de la capellanía no pudiera disfrutar de ninguna otra ni de ningún beneficio más.

Compatible: cuando se podían disfrutar dos o más capellanías, con dispensa del Obispo.

C) Capellanías perpetuas y temporales o amovibles.

No hace referencia a la duración temporal de una capellanía, pues dado el fin por el que se instituían era indefinida. Las capellanías tenían, por su naturaleza benefical, la nota de perpetuidad.

••Perpetuas: carácter con el que el capellán gozaba la capellanía.

“Denique adest alia differentia capellaniarum, nempe quaedam perpetuae sunt, que si alicui rite conferantur, perpetuo eas retinet, nec ab eo possunt amoveri”. F. Mostazo, *De causis piis in genere...*, o.c., Libro III, Cap. I, 8, fol. 174.

••Temporal o amovible: si el fundador disponía que el capellán pudiera ser removido de su cargo por el patrono (*ad nutum patronis*)

“Capellaniis amovilibus, quae ecclesiastica beneficia non sunt, potest fieri revocatio sine causa”. A. Barbosa, *Iuris Ecclesiastici Universi...*, o.c., Libro III, cap. V, 16, fol. 135.

“Patronus capellania etiam collativae ita fundata ut fit ad nutum amovibilis, potest ad nutum et liberam voluntatem absque causa amovere capellanum”. N. García, *Tractatus de Beneficiis...*, o.c., cap. II, 85, fol. 11.

5.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

La historia de las capellanías y, por ende, de las administraciones pías, como fundaciones particulares, está unida a la de las vinculaciones y la mayor parte de las disposiciones legales españolas que prescribieron las reglas que debían seguirse en su creación, desarrollo y supresión, hablan indistintamente de mayorazgos, patronatos, legados píos y capellanías³⁸⁸.

5.1.- Desde su origen hasta el siglo XV.

En realidad no es fácil determinar la época en que comenzaron a ser conocidas en España las capellanías familiares y otras fundaciones piadosas de la misma índole, en la acepción que hoy tienen.

capellania fundata est in ecclesia alicuius ordinis, regularis censetur, cum ibidem administratio pertineat ad regulares: quod quidem limitandum, nisi per saeculares administratur, quia cessaret praesumptio”. F. Mostazo, *De causis piis in genere...*, o.c., Libro III, Cap. I, 6, fols. 174-175.

³⁸⁸ L. Arrazola y García, *Enciclopedia española de Derecho...*, o.c., p. 508.

Enlazadas, como se ha dicho, íntimamente con las vinculaciones en general, las reglas, que regían su constitución y naturaleza, se hallan esparcidas en distintas y variopintas disposiciones, que tratan, más o menos incidentalmente, de mayorazgos, patronatos y legados píos³⁸⁹.

Desde los primeros siglos del cristianismo se consagraron a Dios bienes inmuebles, extendiendo escrituras de donación que se presentaban sobre el altar junto a las demás ofrendas. La iglesia, fue excitando el ánimo de los fieles para que contribuyesen con liberalidades para obras de culto y caridad, ofreciendo a cambio prerrogativas, tanto materiales como espirituales, a sus benefactores, llegando a reconocer el derecho de patronato, anteriormente citado.

Los orígenes del derecho de patronato están sumidos en la confusión e incluso en la controversia y directamente se vinculan con las iglesias propias, llamadas también iglesias de fundación privada. A lo largo de la Edad Media existieron iglesias y capillas en las que surgió la figura del patrono lego, el cual nombraba y mantenía con sus bienes el sacerdote que había de atenderlas, además de pagar los gastos de culto. Así, se puede deducir que mientras que las iglesias propias fueron un producto o elaboración de la Alta Edad Media, las capellanías lo son de la Baja Edad Media.

Sin embargo, el origen de las capellanías parece que estuvo ligado a estas iglesias de fundación privada, de las que parece ser que eran una derivación, pues las misas que el capellán dice por el alma del fundador de una capellanía tienen similitud de las misas que se decían en las capillas funerarias por los difuntos allí enterrados³⁹⁰.

Es claro que todas las naciones católicas se han mostrado generosas y espléndidas para enriquecer las iglesias y capillas, estableciendo en ellas fundaciones piadosas, que en España eran habituales, incluso antes del siglo IX, pues ya Fray Prudencio de Sandoval en su Crónica de Alfonso VII dice, que antes del citado siglo era frecuente que los reyes y señores fundasen en los lugares de su propiedad Iglesias o capillas, dotándolas de uno o más clérigos. Tenían lugar en los llamados *términos* y *pagos* desiertos, es decir, solares de propiedad de aquéllos que eran cedidos gratuitamente a clérigos, que eran denominados capellanes, los cuales percibían una parte de los frutos que se recogían en el término como recompensa por administrar los sacramentos a sus moradores³⁹¹.

Por ello, es claro que las capellanías son instituciones propias de la cristiandad occidental, donde su nacimiento, auge y expansión responden a una época determinada y a un contexto social concreto, fuera de los cuales no tendrían sentido y que desempeñaron un importante papel en la sociedad del Antiguo Régimen.

³⁸⁹ J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., p. 115.

³⁹⁰ J. Pro Ruiz, *Las capellanías: familia, iglesia y propiedad...*, o.c., p. 587.

³⁹¹ “Fue muy usado en estos Reynos, que los Reyes y señores fundauan, y poblauan terminos y pagos desiertos, que eran solares propios suyos. Ponian en ellos, para que los labrasen y cultiuassen, tantos labradores, segun era el termino... Edificauanles su Yglesia, y dauanles un clerigo, dos, o mas, segun era la poblacion. Y señalauan a estos clerigos capellanes (que destas Yglesias, que llamauan Capilla, les vino tal nombre) una parte de los frutos que en este termino se cogian”. P. de Sandoval, *Chronica del inclito emperador de España D. Alonso VII*, Madrid 1600, cap. LXVI, fol. 182.

Mas ya antes de que se les aplicase el nombre de capellanías encontramos muchas fundaciones a las que se las llamaba simplemente legados píos o mandas, pero que en realidad eran verdaderas capellanías, aunque meramente laicales, pues las eclesiásticas, en sentido estricto, no se desarrollaron hasta que en el siglo XII, una vez perfeccionados los beneficios (enunciados por Gregorio IX en el libro III, Título IV, “*De clericis non residentibus*” de las Decretales), las corporaciones y los particulares quisieron imitarlos con la erección de capellanías durante los siglos XIII y XIV, que tenían por objeto llenar, en ciertos casos, diversas necesidades espirituales de los fieles, y perpetuar la memoria de los instituyentes, favorecer a los individuos de sus familias que se inclinasen al estado eclesiástico, proveyéndolos al efecto de título de ordenación, y asegurar la celebración de misas y sufragios en beneficio de sus almas. Encontramos, pues, los primeros orígenes de las capellanías en los legados píos³⁹².

En España la piedad de los monarcas y del pueblo multiplicó en gran manera las donaciones y legados a favor de las iglesias y monasterios³⁹³. En los archivos eclesiásticos abundan las pruebas de la generosidad de reyes y particulares, que otorgan, en documentos públicos, bienes, mandas o legados, en cumplimiento de promesas o para devociones que aseguren la salvación de su alma. Ejemplo de todo ello se encuentra en el Fuero Juzgo, donde se reconocen dichas mandas y legados en favor de

³⁹² Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 531. M. González Ruiz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 488.

³⁹³ En el año 917 el conde Wifredo II hizo una donación testamentaria de la tercera parte del monedaje que tenía en la ciudad de Vich, por medio de sus albaceas, al monasterio de Santa María: “*Per dominum Regis, donec per ipsos (obispo y canónigos) aut per legatos ad Regem pergant et praeceptum exinde fideliter requirant atque recipiant*”. P. de Bofarull y Mascaró, *Los condes de Barcelona vindicados y cronología y genealogía de los reyes de España*, Barcelona 1836, Tomo I, fol. 13. El conde Garci Álvarez de Barnuevo y su mujer hicieron una donación, fechada en el año 926, de las villas de Logroño y Asa a favor del monasterio de San Millán: “*Sub nomine Christi Redemptoris nostri Patris et Filii, et ex ambobus procedentis Spiritus Sancti: Ego omnium quidem infimus, et tamen voluntate Dei, Garcias Alvarez de Barnuevo, Comes, una cum legali coniuge mea Domna Tharasia de Arellano, Comitissa, superni amoris accensi, ac peccatorum nostrorum perterriti, etc. Offerimus ad honores praedicti Patroni Aemiliani (...) duas Villas Lucronio, ac Assa, cum omnibus hominibus, terris, vineis, hortis (...) cum omnibus movilibus, et immovilibus, quidquid ad has Villas pertinet*”. F. Mosquera de Barnuevo, *La Numantina*, Sevilla 1612, fol 174v. En 992 el rey Veremundo (Bermudo) II donó en su testamento varias villas y herencias a la iglesia de San Salvador de Oviedo: “*Testamentum Veremundi Regis, et Geloirae Reginae. In nomine Domini nostri (...) Ego Veremundus Rex, cum Coniuge mea Geloira Regina, facimus hanc cartham testamenti Ecclesiae Sancti Salvatoris Sedis Ovetensis. Deinde pro nobis, et pro ipsis predecessores nostris damus, et concedimus, quae in nostro regno sunt de facultatibus nostris, Monasteria scilicet, Ecclesias, Villas, haereditates, familias (...) concedimus Villas nominatas, id est, Villam Leordam, Castaneram, Villam scuram, Aqueram, Zeudres, Mamiuritas, Almulfi, Cobas, Perores, Roboreto, Fleton..., vel omnes alias Villas, quantae sunt infra hos terminos de Petra Sanguinenta usque in Boresamo*”. M. Risco, *España sagrada*, Madrid 1793, tomo XXXVIII, apéndice V, fols. 278-280. En 1110, don Pedro Froilaz, conde de Galicia, junto con su esposa, la condesa doña Mayor Guntruda Rodríguez, donan, al monasterio de San Juan de Caaveiro y su abad, Tedón, “*pro remedieum animarum nostrarum et parentum nostrorum*”, la tercera parte de la villa de Doroña. AHN. Cód. 1439B, fols. 75 y 75 v. En 1128 el rey Alfonso VII concede mediante carta de donación a la iglesia de Burgos la iglesia de Sasamon y otras villas y monasterios: “*Unde ego Rex Adefonsus Hispaniae Imperator una cum coniuge mea Regina Domna Berengaria, meorum antecessorum consuetudinem non irrationabiliter sequutus, facio Cartam Donationis pro anima patris et matris meae, et in meorum: remissione peccatorum, Deo et Sanctae Mariae Burgensis Ecclesiae (...) scilicet Ecclesiam S. Mariae de Sesamon, cum terris, vineis cultis et incultis, et cum omnibus quae ad eam pertinent, et Ecclesiam S. Leocadiae dei Valle de Egumia, cum terris, cum arboribus fructuosis et infructuosis, molinos, defessis, pascuis...*” E. Flórez, *España sagrada*, Madrid 1771, tomo XXVI, apéndice XVI, fols. 472-474.

las iglesias y para sufragios por las almas de los difuntos³⁹⁴, y se estimula e impulsa al pueblo a tales donaciones:

*“Si nos somos tenudos de gualardonar á los que nos sierven, ¿quanto mas devemos dar las cosas terrenales por redemiento de nuestras almas, é guardar las que son dadas?”*³⁹⁵

Los dos hechos indicados, es decir, la gran cantidad de donaciones, mandas y legados hechas por los reyes y por los fieles a las iglesias, para sufragios por sus almas y otros fines píos, y al principio sentado en Fuero Juzgo sobre la obligación de todo cristiano de dejar bienes *“para redemiento de nuestras almas”*, son indicios más que suficientes para conjeturar el incremento y pujanza que con el tiempo habían de tomar en España tal especie de fundaciones.

Durante el siglo XIII, las capellanías siguieron aumentando y desarrollándose simultáneamente con los beneficios³⁹⁶, ya entonces completamente definidos tal y como aparecen en la actualidad. Claro ejemplo de ello es el nombramiento, en 17 de mayo de 1246, por frey Lope Martínez, comendador mayor de Alcañiz, de la Orden de Calatrava, de la capellanía de Peñarrubia a favor de R. Vidal, con todas sus rentas, con la condición de que tome el hábito de dicha Orden (RAH. Índice de la Colección Salazar y Castro, I-40, nº 36904). También la fundación y donación, en 15 de diciembre de 1249, de dos capellanías por Constanza de Moncada a fray Ferrer, maestre de la Orden Trinitaria, en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, en Serós (Lérida)³⁹⁷. O el Estatuto del cabildo de Ávila, de 7 de octubre de 1256, donde ya se regulan las capellanías³⁹⁸. También la carta del prior de Roncesvalles en la que establece en 25 de abril de 1280, una capellanía perpetua en su iglesia por el alma de Juan Garceiz, abad de Montaragón (AHN, Clero, Huesca, carpeta 652, nº 5):

“Sepan quantos esta present carta vieren e oyeren que nós Garci, por la gracia de Dios prior del hospital de Ronçasvalles, e todo el convento d'aqueill mismo lugar por nós e por todos nuestros sucessores establecemos des hoy pora todos tiempos una capellania perpetua en la nuestra eglesia del dito hospital, sobre la nuestra casa de Imarcoain e sobre todos los sus bienes, por la ánima del muit hondrado varón e savio don Joán Garcéiz, por la gracia de Dios abat de

³⁹⁴ “Onde mandamos que si el padre ó la madre, el avuelo ó el avuela quisier meiorar á alguno de los fijos ó de los nietos de su buena, non les pueden dar mas de la tercia parte de sus cosas de meioría (...) E si aquel que a fijos ó nietos, si quisiere dar á la iglesia ó á otros lugares, de su buena puede dar la quinta parte de lo que ovier sin aquella tercia”. Fuero Juzgo, Libro IV, V, I, fols. 76-77.

³⁹⁵ Ibidem, Libro V, I, I, fol. 79.

³⁹⁶ En noviembre de 1299, Fray Fernando, religioso franciscano, luego obispo de Burgos, compró una casa y hacienda que donó al cabildo para la fundación de una capellanía. E. Flórez, *España sagrada*, o.c., tomo XXVI, fol. 337.

³⁹⁷ ARV. Clero, Trinidad, legajo 320, caja 853, nº 11.

³⁹⁸ “Establecemos que las capellanías sean dadas cada año otro día de Sant Migaél, e denlas los que vinieren a cabildo, fueras las perpetuales, que se deven dar otro día de Circuncisión, e a tales 44 capellanes las den que non canten otras missas por la villa, e sirvan las fuessas, e ellos mismos las canten e non por otros personeros si non fuere por enfermedad o por negocio que aya de ir a otra parte; si non peche I 45 ochava, e si aluén oviere a ir espídase al deán, e al cabildo; e los capellanes que fueren del coro vengán a las horas, si non pechen II dineros cada vez”. AHN, Clero, Ávila, pergaminos, carpeta 20, nº 8.

Montaragón, e por las ánimas de todos sus defuntos; e esto facemos por muita amor, e mercé e ayuda que eill á feito a nós e a la caridat de los pobres del nuestro hospital.”

Otros ejemplos son el de Bonamic Zavila, noble murciano, escribano real y racionero, que en 1275 funda dos capellanías con los bienes y heredamientos recibidos en Murcia y manda que dos clérigos canten misa por su alma en la capilla de S. Idelfonso (M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, *Iglesia y sociedad feudal: el cabildo de la catedral de Murcia en la Baja Edad Media*, Universidad de Murcia, Murcia 1994, p. 82). O el del obispo de Osmá, D. Juan Álvarez, que fundó, mediante testamento otorgado en Valladolid, dos capellanías en 12 de septiembre de 1296, en el monasterio de Santo Toribio de Liébana (J. Loperraez Corvalán, *Colección diplomática citada en la descripción histórica del Obispado de Osmá*, tomo tercero, Madrid 1788, p. 240).

Incluso los reyes establecían capellanías y presentaban a los capellanes, como demuestra el documento fechado en 1291 en el que el rey Alonso III presenta a un sacerdote para una capellanía que había sido fundada en 10 de septiembre de 1251 por la reina doña Violante, esposa de Jaime I, en Santa María del Pueyo, Barbastro (P. Saínz de Baranda, *España sagrada*, Madrid 1868, apéndice XXXII, p. 261):

“Ffratri Ademario Oscensi episcopo. Cum nos contulerimus ffratri Petro de sancta Maria de Podio Barbastri capellaniam ecclesiae Sancte Marie de Podio Barbastri quod excellentissima domina Yolant inclite recordationis regina Aragonum avia nostra statuit in dicta ecclesia cujus collatio ad nos spectat pro servitio cuius capellanie assignantur ducenti solidi jaccenses super tributo judeorum Barbastri. Ideo vos dictum Petrum per presentes duximus presentandum ut ipsum admitatis ad beneficium antedictum et eidem responderi faciatis de CC solidis antedictis perpetuo faciente servitium dicte capellanie ut est fieri consuetum. Data Turolii IX calendas Junii”.

Según otros autores la capellanía había sido fundada por el rey Jaime I con 200 sueldos jaqueses de renta anual, como así consta en el texto anterior, en memoria de su esposa Violante³⁹⁹.

A estas fundaciones, muchas de las cuales se asemejaban completamente a los beneficios, no se les quería dar este nombre, porque, por ser de fundación particular y con cargas y oficios completamente según la potestad del fundador parecía que no debía confundírseles con los beneficios, que eran instituidos por la propia Iglesia para fines de utilidad común y no puramente particular, y con oficios y cargas ya determinados por el Derecho canónico⁴⁰⁰.

También en el código Alfonsino se dio facultades para poder vincular a favor de la Iglesia y monasterios, haciendo los bienes inalienables y eximiéndolos de tributos y cargas reales, lo que contribuyó al aumento de las capellanías⁴⁰¹.

³⁹⁹ R. de Huesca, *Teatro histórico de las iglesias del Reino de Aragón*, Zaragoza 1807, tomo IX, pp. 339-340.

⁴⁰⁰ M. González Ruiz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 490.

⁴⁰¹ “E otrosi de las heredades que dan los Reyes, e los otros omes a las Eglesias, quando las fazen, de nuevo, o quando las consagran, non deuen. por ellas pechar, nin por las que les dan por sus sepulturas.

A mayor abundamiento, cabe resaltar que los bienes de muchas capellanías permanecían en poder del fundador o de sus herederos, los cuales se comprometían a no emplear el fruto de los mismos más que en los fines piadosos señalados por el promotor o fundador. Así se explican varias leyes del siglo XIII en las que, al mismo tiempo que se prohibía a los que poseían bienes de realengo que los diesen o vendiesen a la Iglesia, se les permitía, sin embargo, “*darlos o dexarlos por sus almas*”⁴⁰². Dichos bienes, como de dominio particular y directo del rey, no debían pasar al dominio de la Iglesia y de los nobles, sustrayéndose así del dominio de su legítimo dueño, sin que el rey diese su licencia especial para ello⁴⁰³, lo que no impedía que los poseedores de dichos bienes los dejasen a sus herederos (así seguían bajo el dominio del rey), pero con la obligación de emplear sus frutos o rentas en favor de su alma y en sufragio de sus difuntos.

A igual que en los siglos anteriores, se sigue dando gran importancia a los legados y mandas dejados en favor de las almas para aniversarios, memorias de misas y capellanías, estableciéndose en las Partidas que:

Cuando algún individuo “*faze(n) donacion otrosi a su finamiento, por Aniversario, o por Missas cantar*”, “*tenudos son de lo cumplir (...) los que lo suyo heredassen o aquellos en cuyas manos dexassen sus testamentos, para los cumplir*”, y si no lo hicieren “*deuenles descomulgar por ende, e echarlos de la iglesia, como a omes que non guardan lealtad a aquellos que se fiaron en ellos, dexando fecho de us almas en sus manos: nin otrosi non guardan su derecho a Santa Iglesia, que son tenudos de guardar*”⁴⁰⁴.

También era ley de las Partidas que ningún ejecutor de testamento podía solicitar en juicio los bienes dejados en él para mandas o legados; esto sólo podía hacerlo aquel a quien fuese hecha tal manda y sólo podía exigirlo contra aquel que poseyese los bienes que, según dicho legado, le pertencían. Para los legados píos se hace una excepción: pueden pedirlos los mismos ejecutores del testamento en juicio, y esto contra cualquiera de los herederos⁴⁰⁵. Finalmente, se establece otra excepción en las Partidas favorable a los legados píos:

“*Sacar pueden los herederos de las mandas la quarta parte legitima, a que llaman en latin, Falcidia, assi como de suso mostramos. Empero mandas y a de*

Esso mismo es de las Iglesias, que son fechas, e fincaron desamparadas, ca las heredades que les diessen, para mantenerlas, que non deuen por ellas pechar. E otrosi de los donadios que los Emperadores, e los Reyes dieron a las Iglesias, non deuen por ellas pechar los Clerigos ninguna cosa, fueras ende aquello que estos Señores touieron para si señaladamente”. Las Siete Partidas, Partida I, Título VI, Ley 55ª.

⁴⁰² Leyes del estilo, ley CCXXXI.

⁴⁰³ “*Que ningund eredamiento del Rey, que non corra a los Fijosdalgo, nin a Monasterio ninguno, nin lo dellos al Rey, e si algund labrador de Fijosdalgo venier sò el Rey a morar puede entrarle aquella eredat suo Señor fasta año e dia; adelante el primer devisero de la Viella entrarla a, si quisier, para si, si dantes non la ovier entrado el Hijodalgo, cuio es el labrador*”. Fuero Viejo de Castilla, Libro I, Título I, II.

⁴⁰⁴ Las Siete Partidas, Partida I, Título XIX, Leyes 6ª y 7ª.

⁴⁰⁵ “*Quatro cosas son señaladamente, en que pueden los testamentarios demandar en juyzio, e fuera de juyzio, los bienes del muerto, para cumplir su testamento, maguer non quieran los herederos del fazedor del. E el uno es, quando la manda es para obras de piedad o de misericordia. Mas cada uno de aquellos a quien es mandado algo en el testamento, puede por si demandar a aquel que touiere los bienes del finado, la parte que le fue mandada en el testamento*”. Las Siete Partidas, Partida VI, Título X, Ley 4ª.

*tal natura, de que la non podrian sacar e son estas; assi como de las cosas, que dexe el fazedor del testamento a Esglesia, o a otro lugar religioso, o a hospital, o a pobres, o a quitar los captiuos, o en alguna otra manera que fuesse obra de piedad. Ca, de tales mandas... non deue el heredero retener ninguna cosa para si por razon de falcidia, ante deuen ser dadas cumplidamente, assi como el testador las mando*⁴⁰⁶.

Ya en el siglo XIV aparece la primera ley civil en España, el Ordenamiento de Alcalá, en la que expresamente se habla de capellanías, mandando que sean conservadas y que ninguno, so pena de muerte, sea osado de ser contra los bienes y tesoros que se dieron a las capellanías (sacristanías) para que se honrasen los cuerpos de los fundadores en el lugar en que se enterraron. En esta ley se ve claramente la finalidad de las capellanías, que en su mayor parte estaban destinadas a honrar con actos de culto las capillas en las que se enterraban los fundadores, y al mismo tiempo recabar sufragios para sus almas⁴⁰⁷.

“Establescemos, è mandamos que todos los Thesoros..., que sean dados a los Monasterios por limosna, ò por onrra de los Reys è Reynas, è de los Infantes, è por todos los Ricos omes, que tomaron sepulturas, è enterramientos en los Monasterios, è dieron thesoros a las Sacristanias (Capellanías) porque se onrrasen los sus Cuerpos dò se enterraron, que esto que sea guardado..., que ninguno non sea osado de ser contra aquel ornamento, nin tirar ninguna cosa dello; è el que lo ficiere que lo maten por ello” (Ordenamiento de Alcalá, Título XXXII, Ley LIII).

En el Reino de Valencia ya se localizan fundaciones de capellanías hacia la mitad del siglo XIII, en concreto en el año 1250, siendo esta fecha la de la más antigua que se ha podido encontrar en la investigación realizada para la presente tesis, fecha histórica, ya que según fray Francisco Diago, en su obra *Anales del Reyno de Valencia*, se celebraron cortes con el fin de fijar los límites del Reino⁴⁰⁸.

En 1314 y 1318, las Constituciones dictadas por el Obispo de Lérida, Guillermo Arañón, regulan de forma expresa y clara varias cuestiones sobre constitución de capellanías (J. Villanueva, *Viaje literario a las iglesias de España*, Madrid 1851, tomo XVII, apéndices I y III, pp. 227-229 y 231):

“Constitutiones Domini Patris Guillermi Aranyonis bonae memoriae Episcopi Illerdensis, an. MCCCXIV.

Quod nulla capellania constituatur de cetero, nisi centum quinquaginta solidi censuales assignentur eidem.”

⁴⁰⁶ Ibidem, Partida VI, Título XI, Ley 4ª.

⁴⁰⁷ M. González Ruiz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 491.

⁴⁰⁸ Pergamino fechado en 10 de febrero de 1250, en el que el Obispo Arnaldo y el Cabildo venden al maestro Domingo, chantre, los frutos de una porción para que se establezca una capellanía perpetua. ACV, pergamino nº 200. Cf. E. Olmos Canalda, *Inventario de los documentos escritos en pergamino del Archivo de la Catedral de Valencia*, en Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid 1933 (tomo 103) a 1936 (tomo 109). F. Diago, *Anales del Reyno de Valencia*, Valencia 1613, libro I, capítulo I, fol. 2v.

“Constitutiones eiusdem Domini Patris Guillermi Aranyonis bonae memoriae Episcopi Illerdensis, in sínodo in sua cathedrali ecclesia celebrato, an. MCCCXVIII.

Quod capellae non concedantur nisi capellaniae perpetuae constituentur, et tunc absque prejudicio parochialis ecclesiae.”

También las Constituciones del Obispo y Cabildo de Valencia, de fecha 27 de marzo de 1315, regulan los donativos que hay que realizar cada año a la sacristía de la Seo por instituir capellanías en la catedral, a razón de cinco sueldos que se emplearán en “cirios, vino y hostias”⁴⁰⁹.

Ejemplos de fundación de capellanías hay muchos y diversos, como la escritura del Señor de Vizcaya, don Juan Núñez de Lara y su mujer, doña María Díaz de Haro, en la que fundan unas capellanías en la catedral de Burgos en el año 1346 (E. Flórez, *España sagrada*, o.c., tomo XXVI, apéndice XVIII, fols. 478-480):

“Sepan quantos esta carta vieron, como yo, D. Juan Nuñez, Señor de Vizcaya y Doña Maria, su muger, otorgamos, y concedemos que por servicio de Dios y de Santa Maria, é por salvación de nuestras almas, (...) ordenamos tres Capellantias perpetuas, que valen cada una veinte florines de oro de Florencia de renta en cada año (...) asignamos é facemos donacion entre vivos, como mejor é mas cumplidamente lo debemos facer para ahora y para siempre jamas, é para renta é mantenimiento de las dichas Capellantias, é de los Capellanes que las cantaren de aquí en adelante, las heredades que nos compramos en Verzosa é en Fuente Bureva. (...) E esta dicha donacion facemos á la Iglesia Catedral de Santa Maria de Burgos, é a vos Don Garcia Obispo sobredicho, é á todos vuestros sucesores... de aquí adelante, é facemos esta donacion en tal manera, que todas las rentas é derechos de estas heredades que sean para los Capellanes á quien vos é los nuestros, dieredes las dichas Capellantias canonice et perpetue: é los dichos Capellanes sean tenidos de cantar, é canten de cada dia por sí mismos, siendo sanos, é non habiendo otro trabajo legítimo, las dichas Capellanías en la dicha Iglesia Catedral de Santa María de Burgos, en la Capilla de Santa Marina, la qual Capilla vos el dicho Obispo fecistes ahora de nuevo qué las canten en esta manera.

En vida de Nos, los sobredichos D. Juan, y Doña Maria, Misa de la Trinidad. E después de la vida de alguno de nos, que el uno de los Capellanes que sea tenido de decir Misa de Réquiem, é las otras dos de Trinidad. E después de vida de nos ambos; que sean tenudos todos tres los Capellanes decir Misas cada uno de ellos de Réquiem por nuestras almas, é que fagan residencia en la Ciudad de Burgos.”

También en el testamento del rey Juan I de Castilla, fechado en 21 de julio de 1385, se ordena la fundación de varias capellanías (G. González Dávila, *Historia de la vida y hechos del rey don Henrique Tercero de Castilla*, Madrid 1638, fol. 60):

⁴⁰⁹ ACV, pergamino nº 453.

“Otro sí, ordenamos por nuestra anima siete Capellanías perpetuas; y dexamos para todas en la cabeça del pecho de los Judíos de Toledo diez mil y quinientos maravedís, en tal manera que aya cada Capellán mil y quinientos maravedís.

Ordenamos y mandamos que con estos mil y quinientos maravedís recurran al Capellán mayor que por tiempo fuere en la dicha Capilla. E que este Capellán haga cantar las dichas siete Capellanías; si hubiere Frailes de Missa que las puedan cantar, sin otros embargos de otras Capellanías en el Monasterio de Santa María de la Sisle.”

5.2.- Desde el siglo XVI al XVIII.

Este período se caracteriza por el apogeo y decadencia al mismo tiempo; de apogeo, por el gran número de capellanías que se sumaron a las ya existentes, siendo una práctica muy difundida en España y que se hizo extensible, como ya se ha citado, a las colonias de América; y de decadencia, por los múltiples abusos a que dio lugar un número tan elevado de fundaciones de capellanías, que a su vez dieron también lugar a represalias por parte de los reyes y legisladores, que no siempre se mantuvieron en su justo límite, sino que se aprovecharon de la ocasión que se les presentaba para, al mismo tiempo que corregir los abusos introducidos, sacar el mayor provecho económico posible para su propio tesoro, con perjuicio de los altos fines de aquellas fundaciones y evidente injusticia en contra de la propia Iglesia.

En el afán de la erección de fundaciones entraba mucho la vanidad. Gran cantidad de capellanías se fundaban de forma innecesaria y por mero lujo, de modo, que la caridad en las mismas no era verdadera ni bien entendida. A modo de ejemplo, basta citar la capellanía fundada en 1537 por Francisco de Palacios, bisabuelo materno de Catalina de Palacios Salazar, esposa de Miguel de Cervantes Saavedra. O la fundada por Pedro Calderón de la Barca, en escritura de testamento de 1679, disponiendo que fuese colativa.

Esta proverbial costumbre de fundar capellanías llegaba a tal punto que las Cortes de Madrid de 1593 se quejaron, a Felipe II de que algunos obispos obligaban a los ordenandos a que convirtieran su patrimonio en capellanías eclesiásticas, de lo que resultaba que aquellos bienes eran sustraídos a la familia, y a la muerte del clérigo quedaban en la Iglesia. Felipe II prohibió aquel abuso y mandó que se tomaran informes, cuya redacción se encuentra en la Ley 1ª, Título XII, Libro I de la *Novísima Recopilación*.⁴¹⁰

La ingente proliferación de capellanías y beneficios simples, especialmente en España, llegó hasta tal punto que se ha calculado que, hacia el siglo XVII, había en nuestras iglesias, sin ánimo de exageración, una desorbitada cifra de más de doscientas

⁴¹⁰ “Por quanto los Procuradores de Córtes se nos han quejado, que en algunos obispados de estos Reynos se acostumbra, que yéndose á ordenar algunos, que no tienen Beneficios ni Capellanías, á título de patrimonio, corno es permitido por el santo Concilio de Trento, les compelen los Ordinarios á hacer Capellanías de su patrimonio, para ordenarles á título de las tales Capellanías y no del patrimonio, de que resulta quedarse eclesiásticos los bienes, y libres de pecho: mandamos, se despachen cédulas nuestras á todos los Prelados de estos Reynos, refiriendo en ellas la dicha queja, que aunque no se cree de sus personas que hayan hecho semejante fuerza á los clérigos, envien relacion de lo que ha pasado y pasa, y entretanto no les compelan á fundar las dichas Capellanías”.

mil⁴¹¹, muchas de ellas fundadas por hidalgos, verdadera nobleza de sangre, cuyo número había crecido sustancialmente en los siglos XVII y XVIII, llegando a 722.000 en 1768, según el censo de Floridablanca.

Por lo que respecta a las capellanías laicales, fundadas a manera de mayorazgos, también aumentó desproporcionadamente su número en este tiempo, principalmente en los siglos XVII y XVIII, por causas y motivos no muy edificantes o ejemplares. El número excesivo de mayorazgos que se habían erigido en Castilla había venido a desacreditar la nobleza española. Teníase por villanía el trabajar y la holgazanería se erigió en nobleza.

Esta conducta aparece reflejada en el testimonio de fray Ángel Manrique, en su obra *Socorro que el Estado eclesiástico de España, parece podría hacer el Rey ..., en el aprieto de hacienda, en que hoy se halla...*, Salamanca 1624, fol. 48:

“En segundo lugar pongo las Capellanías, que han crecido su proporcion más que los Conventos. Porque Conventos como cuentan más los pueden hazer pocos; y las capellanías que se dotan con menos, no (h)ay hombre que muera sin hijos (con ser tantos) que en hallandose con dos maravedis, no dexe en su testamento una memoria”.

Los juros y los censos⁴¹² habían llegado a ser un medio de vivir sin trabajar, pues se oía decir a los hidalgos, cuando fundaban un mayorazgo o daban a censo sus bienes: “*Mi hijo no tendrá que estudiar ni trabajar para comer*”; y el hijo, ignorante y holgazán, disipaba en pocos años el caudal o era víctima de los censatarios. Cuando se prohibió la fundación de pequeños vínculos, vista la torcida interpretación de las leyes de Toro y la inutilidad de sus disposiciones, la vanidad se disfrazó de hipocresía. Ya que no se fundaban mayorazgos, se fundaban, capellanías familiares y por este medio se consiguió que los hijos no tuvieran que estudiar ni que trabajar. Cuántas combinaciones de mayorazgos abortaron las leyes y disposiciones reales, otras tantas se ingirieron en el Derecho canónico; contra el espíritu de la Iglesia y de sus cánones. Un patrono, por lo común de la familia misma, confería la capellanía a un niño tonsurado cuando más y que apenas sabía latín. Muchas veces no sólo no se necesitaba la presentación y colación por el Ordinario, sino que, incluso positivamente, se excluía cualquier intervención de la autoridad eclesiástica en estas fundaciones⁴¹³.

⁴¹¹ “*Pero si se mira al inmenso número de capellanías que había en nuestras iglesias, no parecerá exagerado calcularlo en más de doscientos mil*”. V. de la Fuente, *Historia eclesiástica de España*, Barcelona 1855, tomo III, pp. 240-241.

⁴¹² Los juros son cierta especie de consignación o pensión perpetua. Los censos son contratos por los que se sujeta un inmueble al pago de una pensión o rédito anual, como interés de una cantidad recibida en dinero y reconocimiento de un dominio no transmitido con el inmueble. J. Escriche, *Diccionario razonado de legislación...*, o.c., tomo III, p. 832 y tomo II, p. 254. En realidad, los censos fueron una de las más importantes formas de crédito en el Antiguo Régimen, en los que se realizaba un préstamo de una determinada cantidad de dinero en metálico con garantía hipotecaria sobre unos bienes. El prestamista adquiría el derecho a percibir unos intereses, que correspondían al 5% del principal del censo, hasta que en 1750 se redujeron al 3%; este acusado descenso determinará posteriormente su desaparición. A. García Sanz, *El Censal*, en Revista de la Sociedad Castellonense de Cultura, nº XXXII, Castellón 1961, pp. 281-305.

⁴¹³ M. González Ruíz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 494. V. de la Fuente, *Historia eclesiástica de España*, o.c., p. 241.

Pero no todas las capellanías que en esas épocas se fundaban adolecían de estos defectos, ya que las creadas por prelados o personas constituidas en dignidad eclesiástica generalmente obligaban a residencia, órdenes mayores, coro y cargas cumplidas personalmente y se sujetaban, aun cuando quedaba la presentación al patrono, a la colación del Ordinario; en una palabra, procuraban asimilarlas en todo a los beneficios según el espíritu de los cánones. Pero también estas capellanías llegaron a ser gravosas cuando fueron en excesivo número; y se fueron, desacreditando según que sus rentas fueron decayendo o acaparándolas los que ya tenían otros beneficios pingües y mayores⁴¹⁴.

Esta multiplicación de capellanías, cuyo objeto era sólo asegurar el patrimonio a muchos jóvenes de familias acomodadas, dio como resultado un desmesurado aumento del número de clérigos. Y, no obstante, no por esto quedaron, bien atendidas todas las fundaciones y cumplidas las últimas voluntades, pues además de que gran parte de los clérigos descuidaban, el cumplimiento de las cargas, atentos sólo a percibir la renta del beneficio, como ya se quejaba el Concilio provincial de Valencia de 1565⁴¹⁵ y el de Toledo de 1582⁴¹⁶, al mandar severamente que las misas de las fundaciones y últimas voluntades se cumpliesen a más tardar dentro del año para el que estaban designadas, sucedía también que muchos clérigos no se preocupaban de ascender al presbiterado, pues les bastaba ser simples tonsurados para obtener las capellanías y demás beneficios, por lo que difícilmente se encontraban sacerdotes que pudiesen celebrar las misas fundadas⁴¹⁷.

A todo lo anterior hay que tener en cuenta que a consecuencia de las alteraciones sufridas por la moneda en tiempo de Felipe III, de las guerras y de la nefasta administración de Felipe IV, ocurrió que muchos beneficios eclesiásticos y capellanías quedasen tan débiles, que no alcanzaban a cubrir ni siquiera las congruas sinodales más reducidas. De esta forma, muchos clérigos se vieron obligados a trabajar en menesteres ajenos a su estado. El único remedio que se puso fue la unión de beneficios incongruos por Carlos II en 1677, hasta que vinieron a quedar con la suficiente congrua⁴¹⁸.

⁴¹⁴ Ibidem, pp. 242-243.

⁴¹⁵ “*Ne piaie testantium voluntates depereant, neque ipsorum animae debitis suffragiis, fraudulentur; praecipit Synodus, Missarum celebrationem, et alia pia opera, quae testamentis mandantur, saltem intra annum unum post testamenti publicationem impleri*”. Concilio provincial de Valencia, sesión IV, cap. XI. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones...*, o.c., tomo V, p. 301.

⁴¹⁶ “*Pias testantium voluntates negligere iniquum est; officium autem est non charitatis modo, sed etiam iustitiae legibus debitum, Preces, et Sacra a fidelibus defunctis relictis peragi praescriptis temporibus, atque persolvi*”. Concilio de Toledo, sesión II, decreto X. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones...*, o.c., tomo V, p. 458.

⁴¹⁷ Imitación de este hecho es la petición que sigue, presentada por el procurador de la Iglesia de Sigüenza en el anteriormente citado Concilio toledano: “*Suplico a V.S., ilustrísima mande proveer se ordenen dérigos presbíteros para que haya copia de ministros y se cumplan las voluntades de los testadores, a cuya falta hay algunos curados vacos, y muchas capellanías y muchas misas que decir, y no hay quien las diga, y así no se cumplen las voluntades de los testadores*”. Concilio de Toledo, congregación 84. J. Tejada y Ramiro, *Colección de cánones...*, o.c., tomo V, p. 428.

⁴¹⁸ Se procedió a tal reducción debido, según alegó el rey, “*por la relajación del estado eclesiástico secular, y crecido número de eclesiásticos nace (a consecuencia) de la multitud de capellanías que hay en estos Reynos, cuyas rentas, por la calamidad de los tiempos se han extenuado, de modo, que los mas que se han ordenado a titulo de ellas no pueden vivir con la decencia correspondiente a su estado, yde que nace se mezclen a tratos y ejercicios menos decorosos*”. *Novísima Recopilación*, Tomo I, Libro I, Título XVI, Ley I. M. González Ruiz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 496.

En consecuencia, se ordenó a los Obispos que en sus diócesis pudieran unir las capellanías, tanto de ordinaria colación como de patronato, hasta que se compusiese de dos o más capellanías congruas competentes; dicha congrua debía quedar al arbitrio de los Ordinarios, los cuales señalarían, en sus respectivas diócesis la que les pareciese suficiente, así para la sustentación como para poder vivir los eclesiásticos de forma honesta y decente, pues, según la variedad de las provincias del reino, no podía ser igual la congrua en todas partes. Por último, se ordenó la extinción completa de otras muchas capellanías por haber faltado enteramente las fincas sobre las que se fundaron.

La ejecución de esta ley quedaba pendiente del consentimiento del Papa, el cual sólo accedió bajo las insistentes y repetidas instancias de Carlos II, expidiendo el Romano Pontífice Inocencio XIII la Bula “*Apostolici Ministerii*” en 13 de mayo de 1723, accediendo a las peticiones del rey y mandando, además, que las capellanías y beneficios simples que quedaran, incongruos no pudiesen servir más como título de ordenación. Y para que los derechos de los patronos quedasen ilesos, se acordó que sería lícito a los patronos, tanto eclesiásticos como seglares, hacer nombramientos de dichos beneficios y capellanías, no como de verdaderos beneficios, que exigen, al menos, primera tonsura, sino como de legados píos, y que los nombrados pudieran poseerlos como tales legados, con la obligación de cumplir todas las cargas impuestas por los fundadores⁴¹⁹.

Dado el primer paso en la supresión de capellanías, aunque hay que reconocer que era justo, pues se hizo de acuerdo con la Santa Sede, y necesario, además, por el incalculable número de capellanías que existían, unas sin bienes, otras sin rentas fijas y otras, finalmente, totalmente insuficientes para la honesta sustentación del beneficiado, quedaba ya el camino abierto para nuevas y ulteriores injerencias del poder temporal en dicha materia. Y, efectivamente, pocos años después de la Bula “*Apostolici Ministerii*”, el rey de España quiso dar un nuevo paso por medio de la imposición de tributos y otros impuestos a toda clase de bienes eclesiásticos, incluso a los de fundaciones pías y beneficios. Es cierto que también al principio se hizo con el acuerdo de la Santa Sede, que por mantener la paz y concordia cedió muchas veces de sus derechos; mas no tardó el tiempo en que, sin que precediera acuerdo alguno con Roma, se cargó a los bienes de la Iglesia de varios y no pequeños tributos.

Ya desde muy antiguo la legislación española reconocía a la Iglesia un derecho de exención de tributos, y así en multitud de lugares quedaba expresada, ya de forma explícita o implícita, en las Partidas: “*E porque la iglesia es casa de Dios...ca non deue ser apremiada de ningun pecho nin otro embargo*”⁴²⁰. Y en este mismo sentido encontramos disposiciones de Juan II, de los Reyes Católicos⁴²¹, de Felipe II⁴²² y otros

⁴¹⁹ J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., pp. 31-32.

⁴²⁰ *Las Siete Partidas*, Partida I, Título XI, Ley 1ª.

⁴²¹ “*Porque nuestra intencion es, que á los Clérigos é Iglesias de nuestros Reynos les sean guardadas las franquezas que por Derecho les competen, tambien en lo tocante á las alcabalas; mandamos, que los nuestros arrendadores, y otras qualesquier personas que por Nos hobieren de recaudar nuestras alcabalas, no las pidan ni demanden de las ventas que hicieren de sus bienes qualesquier Iglesias y Monesterios, Perlados y Clérigos de estos Reynos, ni de los trueques, por lo que á ellos toca y puede tocar*”. *Novísima Recopilación*, Tomo I, Libro I, Título IX, Leyes VIII y IX.

⁴²² “*Que ninguno se pueda excusar ni excuse de pechar ni contribuir en ningunos servicios ni monedas, ni en otro pecho alguno Real ni concejal, de qualquier calidad que sea, ni en alcabalas, por ser allegado*

reyes como Carlos II⁴²³ y Fernando VI⁴²⁴. El mismo Felipe II, al mandar que no se obligase a los ordenandos a fundar beneficios y capellanías y ordenarse a título de éstas, intentaba como fin principal, no precisamente el que no aumentase el número de los ya existentes, sino impedir que los bienes se espiritualizasen.

El primer rey que acudió a la Santa Sede para pedir que los bienes eclesiásticos quedasen de una manera estable, y como los bienes de legos, sometidos a los tributos e impuestos ordinarios, fue Felipe V. El Sumo Pontífice accedió sólo en parte a dichas pretensiones reales, ordenando en el Concordato firmado en 26 de septiembre de 1737 que todos los bienes que se adquiriesen por cualquier título (es decir, por herencia, donación, compra, etc.) cualquiera iglesia, lugar pío o comunidad eclesiástica, y por esto cayesen en mano-muerta, quedasen sujetos a perpetuidad a todos los impuestos y tributos regios que los legos pagan, a excepción de los bienes que fuesen de primera fundación⁴²⁵.

Se interpretó por bienes de primera fundación todos aquellos que servían para establecer una nueva fundación, bien fuese beneficio, capellanía o simple fundación pía; mas poco a poco se fue restringiendo el sentido de la frase, hasta que en 1793 Carlos IV declaró que por bienes de primera fundación, debían entenderse los de una iglesia, comunidad o congregación eclesiástica, capilla, ermita o lugar pío erigidos con autoridad del Ordinario, así como beneficios o capellanías colativas, pero los de las memorias de misas, aniversarios, festividades, advocaciones o limosnas que los fieles fundasen, aunque se consumiesen en la carga piadosa con que adquirieran estos bienes las manos muertas⁴²⁶.

ni familiar, ni excusado de ninguna Iglesia ni Monasterio". Ibidem, Tomo III, Libro VI. Título XVIII, Ley XVI.

⁴²³ "Porque hay muchos que en fraude del Estado temporal se ordenan á título de patrimonio, cuyos bienes eclesiasticados quedan libres de las cargas á que estaban sujetos, y lo hacen solo con ánimo de defraudar los derechos Reales; á que ocurrió el santo Concilio, mandando, que los patrimonios, á cuyo título se admitiese á Ordenes mayores, no pudiesen enagenarse, ni mudar ls naturaleza de temporales sin licencia del Obispo". Ibidem, Tomo I, Libro I, Título XII, Ley II.

⁴²⁴ "Por excusarse de las Reales contribuciones, muchos individuos sujetos á ellas ceden, donan ó traspan fraudulentamente sus posesiones y rentas, frutos y ganados en hijos, ó parientes eclesiásticos, y ordenados de Menores, con Beneficios y Capellanías, en contravencion de lo dispuesto por leyes Reales, causando notable perjuicio, así á mi Real Hacienda como á los demas contribuyentes, á quienes se acrece lo que habian de pagar aquellos". Ibidem, Tomo V, Libro X, Título VII, Ley V.

⁴²⁵ "Ha pedido á S. S. el Rey Católico, se sirva ordenar, que todos los bienes que los Eclesiásticos han adquirido desde el principio de su reynado, ó que en adelante adquiriesen con qualquiera título, esten sujetos á aquellas mismas cargas á que lo estan los bienes de los legos. Por tanto, habiendo considerado S. S. la cantidad y qualidad de dichas cargas, y la imposibilidad de soportarlas á que los legos se reducirían, si por órden á los bienes futuros no se tomase alguna providencia; no pudiendo convenir en gravar á todos los Eclesiásticos, como se suplica, condescenderá solamente en que todos aquellos bienes que por qualquier título adquiriesen cualquiera Iglesia, Lugar pio, ó Comunidad eclesiástica, y por esto cayeren en Mano-muerta, queden perpetuamente sujetos, desde el día en que se firmare la presente concordia, á todos los impuestos y tributos Régios que los legos pagan, á excepcion de los bienes de primera fundacion". Ibidem, Tomo I, Libro I, título V, Ley XIV.

⁴²⁶ "Los bienes de primera fundacion reservados en el art. 8. del Concordato de 1737 deberán entenderse los de una Iglesia, Comunidad ó Congregacion eclesiástica, capilla, ermita y lugar pio que se erige con autoridad del Ordinario, Beneficio ó Capellanía colativa; pero no los de las memorias de misas, aniversarios, festividades, advocaciones ó limosnas que los fieles fundaren, aunque todo su valor llegue á consumirse en la carga piadosa con que adquieren estos bienes las Manos-muertas". Ibidem, Tomo I, Libro I, Título V, Ley XVI.

Un nuevo avance en este punto, sin contar ya con la Santa Sede, dio el mismo Carlos IV en 1795, imponiendo la carga de un 15 % de su valor a los bienes adquiridos por manos-muertas. La razón para tal proceder fue el tan manido perjuicio grave que padecía la nación en la cesación del comercio de los bienes que pasan a la Iglesia, pretexto éste creado a fines del siglo XVIII, sin que antes se le hubiese ocurrido a ninguno de los monarcas y legisladores de que gozó nuestro país, y que fue el motivo y razón que sirvió de apoyo para llevar a cabo la desamortización general de bienes eclesiásticos y laicales⁴²⁷.

Al mismo tiempo que se imponían impuestos y gravámenes a los bienes de capellanías, lo cual dificultaba su fundación, se intentaba de una manera directa el anular la facultad de erigir capellanías y demás fundaciones, prohibiendo a la Iglesia la adquisición de bienes raíces, pues eran éstos los que constituían la base y la dote de tales fundaciones, con lo que, en consecuencia, se limitó el derecho de fundar nuevas capellanías.

En esta nueva restricción se utilizó la táctica de proceder de una forma lenta pero progresiva. Los legisladores, para poder apoyarse en leyes y documentos anteriores, comenzaron por remover y sacar del olvido leyes de monarcas anteriores en las que, según ellos, se prohibía a la Iglesia el adquirir y poseer tales bienes. El rey Carlos, II, en 1677, es el primero en hacerlo, aunque no resolvió nada, pues, como él mismo reconocía, era muy fácil al intentar resolver este asunto violar la libertad o inmunidad eclesiástica, suspendiendo el tratar de esta materia, dejándola reservada para tiempo en que pueda promoverse con mayores esperanzas de conseguir efecto.

Casi un siglo después, el rey Carlos III⁴²⁸ prohibió terminantemente la adquisición de bienes raíces a la Iglesia, de suerte que no se podrían fundar en adelante nuevas capellanías, colativas ni beneficios eclesiásticos, sin que precediese una especial licencia del monarca, la cual sólo se concedería por “causas urgentísimas de necesidad y de piedad” vistas por el Consejo de la Cámara, y con un “considerable y notorio beneficio a la causa pública”, añadiendo que en tal caso dichos bienes, aunque pasasen a ser bienes de primera fundación, quedarían sometidos a todos los impuestos y tributos que pagasen los legos⁴²⁹. Estas disposiciones fueron posteriormente confirmadas por

⁴²⁷ “He resuelto que se imponga y exija un 15 por ciento de todos los bienes raíces y derechos reales que adquieran en adelante las manos muertas en todos los reinos de Castilla y León y demás dominios en que no se halle establecida la ley de amortización por cualquier título oneroso o lucrativo, por testamento o cualquiera última voluntad o acto entre vivos, debiendo esta imposición considerarse como un corto resarcimiento de la pérdida de los reales derechos en las ventas o permutas que dejan de hacerse por tales adquisiciones y como una pequeña recompensa del perjuicio que padece el público en la cesación del comercio de los bienes que pasan en este destino...; y los bienes con que se funden capellanías eclesiásticas o laicales, perpetuas o amovibles a voluntad, y las cargas o pensiones sobre determinados bienes de legos, todos quedarán sujetos a esta contribución, pues por todos se exduyen del comercio temporal o perpetuamente los bienes o parte de ellos o de su valor”. Ibidem, Tomo I, Libro I, Título I, Ley XVIII.

⁴²⁸ “He resuelto, que por ningun caso se admitan instancias de Manos-muertas para la adquisicion de bienes , aunque vengan aunque vengan vestidas de la mayor piedad y necesidad; y que el Consejo de Hacienda, siempre que vea este género de concesiones, ó se le pida informe sobre ellas, antes de darles cumplimiento ni informar, represente todas las órdenes dadas en contrario contrario, y los intolerables daños que se siguen á la causa pública, de que á título de una piedad mal entendida se vaya acabando el patrimonio de legos”. Novísima Recopilación, Tomo I, Libro I, Título V, Ley XVII.

⁴²⁹ “y que quando intervengan justos motivos para apoyar su concesion, han de quedar gravados los bienes con las cargas Reales y vecinales, y con todas las demas contribuciones que paguen las haciendas

Carlos IV, quien, estableció ya la ley definitiva y sin excepciones de que la Iglesia no podría adquirir bienes raíces o inmuebles⁴³⁰.

Con todas estas disposiciones anteriores queda bien claro lo menguada y casi anulada que quedó la facultad de los particulares de fundar nuevas capellanías, en especial las colativas. El siguiente paso serán las leyes desamortizadoras. Este es el estado en que quedaron las capellanías al comenzar el siglo XIX.

6.- NATURALEZA JURÍDICA.

Examinadas las distintas clases de capellanías, se está en disposición de abordar su naturaleza jurídica. Para ello se debe acudir otra vez a la división entre eclesiásticas o laicales, pues cada una de ellas se encuentra regulada por ordenamientos distintos⁴³¹.

Sin embargo, suele adjudicarse a todas las capellanías la misma naturaleza jurídica, encontrando con relativa frecuencia la aseveración de que las capellanías son todas vinculaciones de bienes. Es un error en el que incurren muchos autores, e incluso civilistas en sus obras o manuales⁴³², aunque en realidad, las capellanías que son vinculaciones de bienes son las laicales, que incluso se comparan a los mayorazgos, pero no las eclesiásticas o colativas, que son beneficios eclesiásticos. Tal distinción es de suma importancia, pues, como se expondrá más adelante, sobre los bienes de las capellanías recayeron drásticas medidas desvinculadoras y desamortizadoras, con consecuencias y efectos muy distintos. Por todo ello, se analiza, de forma pormenorizada, la naturaleza jurídica de las capellanías laicales y eclesiásticas.

6.1.- Capellanías laicales: naturaleza jurídica.

De todo lo expuesto anteriormente se desprende que las capellanías laicales son “verdaderos vínculos a que va unido el gravamen de celebrar una o más misas en iglesia, capilla o altar determinado”⁴³³. Sin embargo, la vinculación es una categoría jurídica que admite diversos tipos y figuras pero la más representativa es el mayorazgo, cuya característica esencial consistía en la prohibición de enajenar y gravar los bienes,

de los legos. (...) Quando hecho el debido examen hallare la Cámara causas urgentísimas de necesidad y de piedad, que envuelvan en sí considerable y notorio beneficio á la causa pública, que por otro medio no se espera lograr, podrá proponer alguna gracia, procurando siempre la posible moderacion en la Cantidad”. Ibidem, Tomo I, Libro I, Título V, Ley XIX.

⁴³⁰ “He tenido á bien resolver, declarar y mandar lo siguiente: Que conforme á los fueros del Reyno de Valencia no puedan las Manos-muertas adquirir en él bienes algunos raíces ó inmuebles”. Ibidem, Tomo I, Libro I, Título V, Ley XX.

⁴³¹ Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 537.

⁴³² F. Benítez de Lugo, *Apuntes sobre capellanías...*, o.c., p. 4. J. Montero y Daza, *Manual práctico de excepciones de bienes de capellanías y sus incidencias*, Madrid 1893, p. 3. B. Gutiérrez Fernández, *Códigos o estudios fundamentales...*, o.c., Tomo II, Cap. II, Secc. II, § V, art. 13, p. 315. F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho Civil...*, o.c., Tomo III, p. 68 y Tomo VI, p. 1535. J. Castán Tobeñas, *Derecho Civil español...*, o.c., tomo VI (derecho de sucesiones), vol. tercero, p. 352: “Se dividen las vinculaciones en civiles y eclesiásticas, según su objeto sea secular o canónico. A la primera especie corresponden los antiguos mayorazgos. A la segunda, las capellanías y los patronatos”.

⁴³³ J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., p. 113. “En propiedad no son otra cosa que cierta especie de vinculaciones o mayorazgos con la carga impuesta a los poseedores de celebrar o mandar celebrar cierto numero de misas en las iglesias, capillas o altares designados por los fundadores”. J. Donoso, *Instituciones de derecho canónico...*, o.c., Tomo IV, cap. 1, art. 9, p. 272.

pasando de un poseedor a otro dentro de una misma familia conforme a un orden preestablecido por el fundador del mayorazgo.

La coincidencia de las capellanías laicales con los mayorazgos es evidente y los dos comparten características básicas como son un orden sucesorio que ha sido establecido por el fundador entre los miembros de la familia y la imposibilidad de disponer por el poseedor de los bienes de la dote. Ello conllevó que, como en la práctica los efectos esenciales derivados de los dos tipos de vinculaciones eran equivalentes, cuando se prohibió la creación de mayorazgos se procedió a fundar capellanías laicales para que los bienes quedasen vinculados como si fuese un mayorazgo. Por este motivo, no es algo sorprendente que cuando se dictaron normas para suprimir los mayorazgos, las capellanías laicales siguieron la misma suerte⁴³⁴.

6.2.- Naturaleza jurídica de las capellanías eclesiásticas.

No es una nota característica ni esencial de las capellanías eclesiásticas la presencia de un orden sucesorio predeterminado como ocurre en las laicales, pues en las capellanías colativas no se da dicho orden sucesorio. Tampoco lo es la prohibición de enajenar los bienes dotales, pues aunque existía para el capellán, no lo era para la autoridad eclesiástica, que podía enajenarlos previa su desespiritualización, a igual que los demás bienes eclesiásticos⁴³⁵. De todo lo cual se deduce que no son vinculaciones de bienes, siendo la mayor diferencia con las laicales.

Otra distinción es el fin de cada una de ellas. Las capellanías laicales persiguen que los miembros de una familia gocen sus bienes, al ser indisponibles, de forma perpetua y exclusiva. En las capellanías colativas el fin es de naturaleza espiritual o simplemente piadosa, también de duración indefinida y se benefician otras personas además del que se lucraba con los sufragios.

6.2.1.- Las capellanías eclesiásticas: su carácter benefical.

Son verdaderos beneficios eclesiásticos⁴³⁶, debiéndose observar en ellas, por consiguiente, las leyes sobre erección, innovación, provisión, obligaciones y demás extremos, distinguiéndose sólo en el nombre respecto a los beneficios simples, por ser un título eclesiástico originado y erigidos por la autoridad religiosa⁴³⁷, no necesariamente el obispo y tener la característica de perpetuidad:

⁴³⁴ J. M. Vázquez García-Peñuela, *Las capellanías colativo-familiares...*, o.c., cap. I, pp. 55-56.

⁴³⁵ “*Non licet habere proprium iis, qui suis renunciant et communiter vivere spondent*”. *Corpus Iuris Canonici*, Decreto de Graciano..., o.c., secunda pars, causa XII, quaestio I, c. XI, fol. 583.

⁴³⁶ “*Capellaniam colativam esse beneficium ecclesiasticum*”. A. de Leone, *De officio capellani...*, o.c., quaestio tertia, sectio quarta, 57, fol. 65. “*Capellania est colativa quae est verum beneficium ecclesiasticum*”. J. de Lugo (hispalensis), *De iustitia et iure*, o.c., fol. 107. “*Pues siendo, como son, dichas Capellanías Colativas Beneficios Eclesiásticos*”. A. de Pitillas y Ruesga, *Tratado de medias annatas, de los beneficios, préstamos y capellanías*, Alcalá 1698, p. 85. “*Lo qual no se verifica en las Capellanías Colativas, porque como estas son propriamente Beneficios Eclesiásticos, de ellas sin controversia alguna se debe pagar la media Annata*”. Ibidem, p. 118. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., fol. 23.

⁴³⁷ “*Et altaria non sunt beneficia, si ab episcopo non sunt approbata*”. P. Rebuffo, *Praxis beneficiorum* o.c., 15, fol. 6. “*Quando vero Capella sine ulla Episcopi auctoritate constituitur, beneficium non est*”. J. Azor, *Institutionum moralium*, o.c., Libro III, cap. VIII, fol. 410. “*Capellania, altiare, oratorium, vel administratio, si sunt erecta praevia auctoritate ordinaria, dicuntur beneficia Ecclesiastica*”. J.

“Loquendo nunc de Capellania (hoc est, de beneficio simplici fundato in Capella, seu Ecclesia quapiam cum auctoritate, atque consensu episcopi) si haec fuerit perpetua, et concessa in titulum venit nomine beneficii proprie dicti”, (A. Reiffenstuel, *Ius canonicum universum...*, o.c., V, 3, nº 71, fol. 104).

En toda constitución de una capellanía hay dos momentos, uno fundacional, de naturaleza privada, que proviene de la autonomía de la voluntad del fundador, el cual puede configurar la capellanía a su entera satisfacción y, otro autorizativo y erectivo, de naturaleza pública, en el que la autoridad eclesiástica aprueba las cláusulas de la fundación y erige la capellanía, con lo que sus bienes son espiritualizados pasando a ser eclesiásticos. El primer momento responde a la naturaleza de causa pía y el segundo a su naturaleza de beneficio eclesiástico⁴³⁸.

Sabido es que las capellanías son causas u obras pías⁴³⁹, si se atiende a su génesis o a la razón de ser de su aparición en el tráfico jurídico, pues dicho concepto de causa pía es lo suficientemente amplio al acoger toda clase de actos y negocios⁴⁴⁰. En consecuencia, una capellanía es un negocio fundacional si consideramos las obras pías como fundaciones, ya que parte de la doctrina⁴⁴¹ considera que las capellanías son fundaciones de carácter privado, al sujetarse bienes particulares a fines religiosos, con alguna carga de misas.

Pero con la intervención de la autoridad eclesiástica sobre la capellanía se da un fenómeno de “*eclesiastización*” de dicho negocio fundacional, con lo que predomina su carácter de verdadero beneficio sobre el de causa pía, es decir, que si la capellanía, en su comienzo es relevante la voluntad privada, una vez erigida, lo fundamental será su naturaleza benefical y pública. Y esto se evidencia, por ejemplo, en que la autoridad eclesiástica puede dispensar al capellán de alguna de las cualidades queridas por el

González, *Commentatio ad regulam octavam Cancellariae*, o.c., Glosa V, 68, fol. 102. “*Capellania erecta et fundata auctoritate Sum. Pontificis, vel Ordinarii verè beneficium ecclesiasticum*”. A. de Leone, *De officio capellani...*, o.c., quaestio tertia, sectio quinta, 63, fol. 68.

⁴³⁸ C. Aguilera Soler, *Fundaciones, capellanías y causas pías en el patrimonio de la Iglesia*, en Asociación Española de Canonistas, separata de Instituciones Canónicas y Reordenación Jurídica, III Jornadas de Derecho Canónico, Salamanca 1979, p. 12. J. M. Vázquez García-Peñuela, *Las capellanías colativo-familiares...*, o.c., cap. I, pp. 59-60.

⁴³⁹ Dichas denominaciones suelen considerarse como sinónimas, que en su acepción más aceptada y genérica se refieren a las fundaciones inspiradas en motivos caritativos o religiosos.

⁴⁴⁰ Una exhaustiva enumeración de lo que son causas u obras pías es la que sigue: “*en Derecho obras pías, demás de las susodichas [las aplicadas a “ los conventos más necesitados o a los hospitales, y cofradías, donde se hace hospitalidad y caridad a pobres vergonzantes”], se llaman lo que se aplica para el fraile o monja, no por amistad, o consanguinidad, u otro respeto temporal, a viuda y miserables personas, y para el ánima, y para el amigo, o pariente pobre, y para redención de cautivos, y para alimentos, y para hacer alguna imagen, y para estudiar, y para conseguir libertad, y para reparos de muros, y para otros edificios públicos, y para la guarda de la ciudad, y para cualquier cosa en utilidad pública, y para alguna capilla, o memoria eclesiástica, y para que la ramera se recoja, y para pagar deudas de pobres*”. J. Castillo de Bobadilla, *Política de corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y de guerra*, Barcelona 1616, Tomo II, Libro V, Cap. VIII, 7, fol. 798.

⁴⁴¹ “*Se da el nombre de capellanía a la fundación perpetua hecha con la obligación aneja de cierto número de misas...*”. M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., cap. I, p. 9. “*Son una fundación puramente privada, con un objeto más o menos piadoso*”. J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., p. 109. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 20.

fundador. Esta prevalencia del interés público sobre las prerrogativas o derechos privados se manifiesta también en la facultad que tiene el Ordinario de proceder a la provisión de una capellanía colativa de patronato activo si el patrono no presenta en plazo un candidato⁴⁴², lo que la asimila a los demás beneficios con derecho de patronato anejo.

Seis requisitos esenciales debe reunir una capellanía para que pueda elevarse a la categoría de beneficio, según los autores de Derecho canónico (Jerónimo González, *Commentatio ad regulam octavam Cancellariae*, o.c., Glosa V, 7, 8, 9, 10, 11 y 14, fols. 98-99; Reiffenstuel, *Ius Canonicum Universum complectens*, volumen III, Parisiis 1866, libro III Decretales, V; I, 17, fol. 466; F. Schmalzgrueber, *Ius Ecclesiasticum universum...*, o.c., libro 3, título V, I, 3, 4, 5 y 6, fols. 119-121):

Primum: quod beneficium ecclesiasticum episcopi auctoritate sit erectum.
(Que el beneficio eclesiástico sea erigido por la autoridad del obispo).

Secundum: quod habeas aliquit spiritualitatis annexum, iuxta quod datur propter divinum officium.
(Que tenga unido algo espiritual, igualmente se concede por el oficio divino).

Tertium: quod conferatur a persona ecclesiastica, non vero a laico; nam laici non possunt conferre beneficia ecclesiastica, sed ea conferunt soli ecclesiae praelati.
(Que se confiera a persona eclesiástica, pero no verdaderamente a laico, pues un laico no puede conceder un beneficio eclesiástico, sino que éste sólo es conferido por prelado de iglesia).

Quartum: quod conferatur clerico, non laico.
(Que se conferido a clérigo, no a laico).

Quintum: quod sit perpetuum.
(Que sea perpetuo).

Sextum: quod sibi non possit retineri, sed necessario conferendum alteri.
(Que de sí no pueda ser retenido, sino que es necesario que sea conferido a otro).

Pero la naturaleza beneficiar de las capellanías colativas es clara si se atiende a su origen histórico y no sólo no lo han puesto en duda la doctrina de los canonistas que se han ocupado de ellas, sino que se han reafirmado sobre tal cuestión, como Nicolás García (*Tractatus de Beneficiis...*, o.c., cap. II, 95, fol. 12) que concluye, en una proposición ajena de toda duda, al decir que las capellanías “*nulli dubium est quin sint*

⁴⁴² “*Fundans capellaniam cum episcopi consensu potest disponere, quod patronus habeas ad praesentandum plusquam quadrimestre et semestre. Si patronatus fit ecclesiae parochialis non potest fundator prorogare terminum iuris ad praesentandum, et quis terminus detur a iure. Episcopus potest transacto termino iuris, praesentationem admittere*”. A. Pérez de Lara, *De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro II, cap. IX, 30, 32, 33, fol. 158.

beneficia Ecclesiastica”, habiendo referencias de autores anteriores y de otros posteriores que corroboran y apoyan sus afirmaciones⁴⁴³.

Las dudas surgen cuando cuando se tiene que encuadrar las capellanías dentro de los beneficios, pues suelen clasificarlas como propios o impropios. En realidad no es fácil definir lo que es un beneficio impropio, pues resulta ser un concepto negativo al definirlo como aquel beneficio que no es propio⁴⁴⁴. Dentro de este tipo de beneficios se incluían figuras muy distintas entre sí como los patrimonios clericales, las pensiones eclesiásticas y los beneficios manuales, entre otros, estando más o menos distantes de los propios⁴⁴⁵.

Varios autores incluyen las capellanías colativas entre los beneficios impropios⁴⁴⁶ siguiendo a Berardi, citado por todos ellos, y que en su obra *Commentaria in Ius Ecclesiasticum Universum*, tiene un apéndice dedicado a los beneficios impropios, donde cita entre dichos beneficios a las capellanías, exponiendo en qué convienen y en qué difieren de los beneficios⁴⁴⁷. Pero a la hora de exponer las diferencias con los beneficios lo que hace es fijarse en las capellanías laicales, pues comenta que pueden conferirse a laicos y que no es necesario que sean erigidas por la autoridad

⁴⁴³ “*Altaria fundata in ecclesia, si cum auctoritate episcopi constructa sunt, simplicia vocantur beneficia. Alia sunt altaria cum capellania, et capellania vocant. Et altaria non sunt beneficia, si ab episcopo non sunt approbata*”. P. Rebuffo, *Praxis beneficiorum*, o.c., tit. *Seculare beneficium quotuplex*, 15, fol. 6. “*Capellaniae, ut aliquibus altaribus missae celebrentur, veniunt appellatione beneficii*”. T. Cerola, *Praxis episcopalis...*, o.c., verbum *beneficia*, fol. 50. “*Aut testator, seu alter disponens relinquit bona, ut ex eorum redditibus fiat anniversarium capellaniae cum episcopi auctoritate, et eo casu cum sit beneficium ecclesiasticum*”. A. Pérez de Lara, *De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro II, cap. I, 16, fol. 113. “*Alie vero sunt cappellaniae, quae episcopi auctoritate institutae, spirituales, et colativae sunt; ideoque proprie dicta beneficia ecclesiastica, quamvis ad nutum episcopi, vel patroni auferri possint*”. P. Laymann. *Theologiae Moralis*, o.c., Liber IV, tractatus II, cap. IV, 6, fol. 21. “*quod in huiusmodi capellaniis ex piis privatis dispositionibus originem habentes proceditur cum terminis piorum legatorum, quorum iure magis, quam beneficiorum recensentur*”. J. B. de Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae...*, o.c., Discursus LXI, 6, fol. 113. “*Loquendo nunc de Capellania si haec fuerit perpetua, et concessa in titulum, venit nomine beneficii proprie dicti*”. A. Reiffenstuel, *Ius canonicum universum...*, o.c., III, 5, § III, n° 71, fol. 104. “*Capellania erecta et dotata est auctoritate episcopi, est verum beneficium*”. P. Leuren, *Forum beneficiale*, o.c., pars primae, sectio prima, cap. tertium, I, 86, fol. 28. “*Capellaniae dicuntur (...) ecclesiasticae sunt, quae fiunt Papae, vel episcopi auctoritate interviniente, sunt enim collativae, et proprie beneficia ecclesiastica*”. F. Mostazo, *De causis piis in genere...*, o.c., Libro III, Cap. I, 7, fol. 174. “*Si enim episcopi auctoritas, et assensus in erectione deficeret, non dicerentur beneficia ecclesiastica proprie dicta*”. F. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca...*, o.c., II, 5, fol. 95. M. González Ruiz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 478.

⁴⁴⁴ “*Se consideran como beneficios impropios, los que no reúnen todos los requisitos necesarios que el derecho exige para que revistan tal carácter*”. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 19. “*Los cargos eclesiásticos que no tienen la naturaleza y cualidades de los beneficios, aunque se asimilan a ellos*”. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 305.

⁴⁴⁵ “*Estos beneficios ofrecen suma variedad, y son de tantas clases, cuantas son las formas que pueden modificar la simple naturaleza de los beneficios; así que unos son más impropios que otros, según que se conforman más o menos con las reglas ordinarias de los beneficios*”. F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., pp. 305-306.

⁴⁴⁶ M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., cap. I, p. 10. J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., p. 109. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 19. J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., cap. XXX, p. 532. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 65.

⁴⁴⁷ “*Ut ex metodo dicam, in primis observandum erit, qua ratione Cappellania, aut conveniat cum beneficiis, aut a beneficiis distinguatur*”. C. Berardi, *Comentaria in ius...*, o.c., Appendix, fol. 369.

eclesiástica⁴⁴⁸. Pero cuando se refiere a las capellanías eclesiásticas reconoce que se les aplican, en lo fundamental, las mismas normas que a los beneficios⁴⁴⁹.

Pero lo relevante no es la calificación de las capellanías como beneficios impropios, sino el hecho de que son verdaderos beneficios. En realidad, la cuestión de propiedad o impropiedad, aceptado lo anterior, es una cuestión meramente terminológica⁴⁵⁰, pues tanto Gómez-Salazar como Manjón coinciden en que “*sólo en el nombre se distinguen de los beneficios simples*”⁴⁵¹.

6.2.2.- Personalidad jurídica de las capellanías colativas.

Se ha dudado de la personalidad jurídica de las capellanías colativas al ser una institución, causa u obra pía. Pero la citada subjetividad jurídica de las capellanías colativas se puede deducir de forma más clara y transparente si se atiende a que sus bienes, como se ha comentado, son eclesiásticos por estar espiritualizados⁴⁵². De ello se desprende su naturaleza de beneficios, quedando despejada dicha duda al tener bienes dotados, que son reunidos por un acto de fundación y se invoca la intervención de la autoridad eclesiástica en su erección para que dichas capellanías comiencen a existir⁴⁵³.

7. FIGURAS AFINES A LAS CAPELLANÍAS.

En materia de capellanías existen confusiones con otras figuras parecidas y con finalidades que se asemejan mucho entre sí. Ya lo expresaba Pérez de Lara al decir que “*imperiti namque saepe confundut nomina et terminos*”⁴⁵⁴. Pero donde más confusión ha habido a lo largo del tiempo ha sido en relación con las capellanías laicales y menos con las colativas, al tener éstas más definidas sus características y estar reguladas por el Derecho canónico.

— Legados píos.

Guardan semejanza con las capellanías laicales. No es exacto, por tanto, identificar las capellanías laicales como patronatos de legos, legados píos y memorias de misas.

⁴⁴⁸ “*E converso a beneficio Cappellania differt primum in eo, quod beneficium ecclesiasticum clerico semper concedatur, at Cappellania non semper clericum exigit possessorem, sed et quandoque laico conferatur*”. (...) “*Differt etiam a beneficio cappellania in eo, quod ad erigendum beneficium intervenire debeat ecclesiastici Praelati auctoritas, et quotiescumque beneficium vacet, debeat auctoritate ecclesiastici Praelati conferri, non privata auctoritate alicujus cap: at in Cappellania non requiritur aut in erigendo, aut in conferendo auctoritas ecclesiastici Praelati*.” Ibidem, fols. 369 y 370.

⁴⁴⁹ “*In Cappellaniis ecclesiasticis ea fere omnia vigent, quae in beneficiis obtinent, nimirum sive quod spectat bonorum alienationem, sive quod spectat praesentationes, institutiones, earundem tempora, ac devolutiones* (...) Uno verbo: *eatenus tantum huius generis Capellaniae a beneficiis ecclesiasticis distare videntur, quatenus aut fundator expresse distare constituerit*”. Ibidem, fol. 372.

⁴⁵⁰ J. M. Vázquez García-Peñuela, *Las capellanías colativo-familiares...*, o.c., cap. I, pp. 65-66.

⁴⁵¹ F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 308. A. Manjón y Manjón, *Derecho Eclesiástico...*, o.c., p. 65.

⁴⁵² J. Morales y Alonso, *Instituciones de Derecho...*, o.c., p. 532.

⁴⁵³ V. de Reina, *El sistema benefical*, o.c., p. 220.

⁴⁵⁴ A. Pérez de Lara, *De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro II, cap. I, 32, fol. 115.

Legado pío es una noción genérica que significa cualquier conjunto de bienes destinados, mediante un acto *mortis causa*, a un fin piadoso o benéfico⁴⁵⁵. El fin es, por lo tanto, el que especifica al legado pío, como acto de donar y como cosa, o sea en cuanto al objeto ; como acto, es la donación ; como objeto, es la cosa donada, y como ésta puede ser de muchas clases, de ahí que incluso los mismos legados píos sean también de muchas clases, según el objeto de la donación ; así, por un legado pío se pueden dejar bienes para un beneficio, para una capellanía, para una fundación pía y para otros muchos, fines religiosos.

“En el nombre de Dios: Manuel Duran, cerero vecino de Barcelona, hijo (...) Lega al Ilmo. Sr. Obispo de Barcelona una libra por derecho de superioridad. Lega a la Rnda. Comunidad de la Parroquia de Santa María del mar de Barcelona... libras con la obligación de que le celebren perpetuamente” (F. Falguera y Puiguriquer, *Formulario de notarías*, Barcelona 1836, p. 173).

Por eso, ni todos los legados píos son capellanías laicales, porque los puede haber de otros tipos, ni todas las capellanías laicales son legados píos porque no todas se crean a la muerte del fundador, sino que se las puede fundar también por un acto *inter vivos*⁴⁵⁶. De ahí que el legado pío es un término mucho más amplio que el de capellanía, pues

⁴⁵⁵ Hay gran profusión de legados píos en los siglos XVII y XVIII. Sirva de ejemplo el de Ignacio Julián y Descallar, barón de Benimuslem, de fecha 23 de julio, que destina parte de sus bienes para dotar huérfanas y contribuir a la Iglesia: “(...) y en la renta sobrante la repartan los expresados administradores en dos partes iguales y den la una de ellas a la Real Casa Hospicio de Nuestra Señora de la Misericordia, y la otra parte la dividan por mitad en esta forma, la una en dotar doncellas huérfanas naturales de los lugares de Benimuslem, Mulata, Forna, Benidoleig, Godella y Rocafort, con designación de cincuenta libras, moneda corriente, a a cada una para ayuda de tomar estado espiritual o carnal. Y la otra mitad de esta renta se invierta en ornamentos de casullas, albas y demás adherentes para celebración del Santísimo Sacrificio de la Misa, en las Iglesias de los antedichos mis lugares”. ARV, Protocolos del notario José Fabra, 1782, signatura 5627, fols. 343v-349v. Otros legados se hacen a conventos, hospitales y cofradías, como el de doña Antonia Pasqual de Bonanza y Villarrasa, de 4 de mayo de 1759, en el que declara dejar “la cantidad de cinco libras de moneda, para ayuda y subvención en sus necesidades a los Lugares Píos del Hospital Real y General, Real Casa de Nuestra Señora de la Misericordia, Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer de Valencia, Casa Santa de Jerusalén y Redención de Cautivos cristianos”. O el de Gabriel Cuevas, de 17 de junio de 1759, que “asigna la cantidad de ciento veinte libras, moneda corriente, a la Cofradía de Nuestra Señora de Gracia y a la de San Judas Tadeo en el convento de San Agustín y a la Iglesia parroquial de Santos Juanes la cantidad de tres libras”. Doña Luisa Boil de Arenós, en 25 de septiembre de 1759, manda y lega “a la parroquial de San Bartolomé de esta ciudad (Valencia) la cantidad de treinta libras, al Convento de religiosas de la Purísima Concepción cien libras y a la Real Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados y Santos Mártires e Inocentes y a su Santa imagen la cantidad de cien libras y dos sortijas de oro con siete diamantes”. ARV, Protocolos del notario José Fabra, 1759, signatura 5604, fols. 29v-30v, 136v-137r y 236v-245v; Doña Josefa Catalá y Ferrer, viuda de don Pedro Llançol de Romaní y Cavanilles, en 26 de junio de 1767, manda y lega “cien libras de moneda corriente de este Reino al Hospital Real y General de Valencia, trescientas libras al convento de religiosos de S. Francisco de Asís y doscientas libras al convento de religiosos calzados de Santa Bárbara en la baronía de Beniparell”. ARV, Protocolos del notario José Carnicer, 1767, signatura 5225, fols. 47r-54r. También el conde de Cirat y de Villafranqueza, junto a su mujer, asigna en testamento de “mil quinientas libras moneda corriente al Hospital General para los pobres y convalecientes, al Colegio de Niños de S. Vicente, Casa de Misericordia y Casa y Hospital de Nuestra Señora de la Misericordia”. ARV, Protocolos del notario José Vicent, 1765, signatura 8128, fols. 107r-109r.

⁴⁵⁶ Esta doctrina se confirma por los canonistas antiguos, los cuales clasificaron las capellanías en tres grupos: las fundadas por última voluntad, las fundadas durante la vida, pero que no surtirán efecto sino después de la muerte del fundador y las fundadas y efectuadas en vida del fundador. González Ruíz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 485.

abarca a estas y otras muchas fundaciones, siempre que deban su origen a una disposición testamentaria.

— *Memorias, aniversarios de misas y patronatos de legos.*

A diferencia de las misas testamentarias, que se celebraban después del fallecimiento del causante, mediante legados *pro anima*, las memorias y aniversarios de misas se celebraban con una periodicidad anual, por lo que también eran conocidas como misas perpetuas.

En realidad, las memorias y aniversarios de misas son dos tipos concretos de legados píos, a los que, en ocasiones, también se les denomina, impropia-mente, capellanías laicales⁴⁵⁷. Consisten en una carga impuesta sobre los bienes relictos (bienes donados o entregados a la Iglesia) para que sea cumplida por los herederos. La Iglesia quedaba deudora de una serie de misas a favor del alma del donante, en determinadas fechas o aniversarios. Cuando esas misas o actos de culto se conmemoran todos los años, en un día determinado, para celebrar el aniversario de la muerte del fundador, son los llamados aniversarios de misas⁴⁵⁸. Si sólo manda la celebración de cierto número de misas al año, son las memorias de misas⁴⁵⁹.

⁴⁵⁷ M. Martínez Alcubilla, *Diccionario de la Administración española...*, o.c., Tomo III, p. 4.

⁴⁵⁸ Diversos nobles valencianos disponen en sus testamentos la fundación de misas de aniversario, designando para ello designan propiedades cuyas rentas deberán mantener dichas celebraciones. Doña Luisa Boil de Arenós, en su testamento de 25 de septiembre de 1759, toma, señala y asigna “*mil libras de buena moneda para bien y sufragio de mi alma*”. ARV, Protocolos del notario José Fabra, 1759, signatura 5604, fols. 236v-245v. D. Andrés Alonso de Angulo Ramírez de Arellano y su mujer doña María Ferrer Proxita, marqueses de Angulo, en su testamento de 8 de enero, fundan dos aniversarios de misas, “*uno por cada uno de nosotros, que se han de celebrar en la referida Iglesia del Sacro Convento de Nuestra Señora de Montesa perpetuamente y en los sucesivos días de nuestros fallecimientos, con limosna cada uno de cinco libras*”. ARV, Protocolos del notario José Fabra, 1782, signatura 5627, fols. 13v-23v.

⁴⁵⁹ González Ruíz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 484. Ante el acendrado sentimiento religioso hay quienes mandan celebrar gran número de misas como la condesa viuda de Sallent, en 20 de febrero de 1739, dispone la celebración de mil seiscientas misas: “*Quinientas a la celebración de misas rezadas por mi alma, de cuatro sueldos cada una, seiscientas misas al convento de S. Francisco, quinientas al convento de religiosos de la Trinidad*”. ARV, Protocolos del notario Timoteo Giberto, 1739, signatura 5904, fols. 48r-53r. Los marqueses de Angulo disponen “*que en el día de Almas se digan las misas que se pudieren en la capilla de Nuestra Señora de Gracia, del antedicho convento, por sufragio de nuestras almas*”. ARV, Protocolos del notario José Fabra, 1782, signatura 5627, fols. 13v-23v. El barón de Benimuslem señala “*de mis bienes para bien y sufragio de mi alma, las de los míos y demás fieles difuntos, la cantidad de dos mil libras, moneda corriente de este Reino*”. Ibidem, fols. 343v-349v. O doña Elvira de Toledo que manda en su testamento de 15 de febrero de 1472, “*se digan misas hasta cumplir 500 misas e que antes sean de más, que no de menos*”. RAH. Colección Salazar y Castro, signatura 9/291 (fols. 202-206). Hay quien cree que no es suficiente encomendar la celebración de decenas de misas, como es el caso del testamento de doña Inés de Ayala, señora de Casarrubios del Monte (Toledo), de 21 de abril de 1430, que, además de mandar que “*de las 1000 misas que hago mención, que las digan en esta manera los frailes de S. Pedro Mártir 300 misas, e otras 300 misas los frailes de S. Agustín e las 200 misas los frailes de S. Francisco, e las otras 200 misas que las digan los frailes de la Santísima Trinidad*” pide que “*se digan cada día para siempre jamás una misa de réquiem en el monasterio de Santa Clara, además de “que se canten dos capellanías de réquiem, la una rezada e la otra cantada, para siempre jamás*”. RAH. Colección Salazar y Castro, signatura 9/285 (fols. 239-240). En el testamento de María de Gamboa, de 14 de mayo de 1642, se manda “*que se digan por su ánima dos mil misas rezadas*”. AHG. Archivo de los marqueses de Jura Real, signaturas DI 19/14. Y aunque los testadores, como se ha podido apreciar, solicitan la celebración de cuantas misas puedan remunerar, no faltan quienes demandan la celebración de un alto número de ellas para, de esta forma, representar por

“Notorio sea á todos, como yo F. vecino que soy en tal parte digo: Que por quanto yo pretendo hacer ó tengo hecha una Capilla para mi entierro en tal Iglesia ó Convento, y quiero dotar en ella tantas Misas rezadas en cada un año, para siempre jamas, para servir á Dios nuestro Señor, y que las Almas del Purgatorio reciban sufragio, cuyo fin me ha movido (...) por la limosna de las dichas tantas Misas rezadas que ha de decir (el Capellán) en tales Festividades...” (P. Melgarejo, *Compendio de contratos públicos, autos de particiones, ejecutivos y de residencias*, Madrid 1791, fols. 158-159).

“Por quanto yo tengo en la Iglesia de tal Ciudad una Capilla, y en e la tengo sepultura, y me pertenece por tal titulo, es mi voluntad, que para que alli se haga bien por mi anima, y de mis padres, abuelos y descendientes, se digan perpetuamente tantas Misas en cada año...” (J. de la Ripia, *Práctica de testamentos y modos de suceder*, Madrid 1718, fol. 135).

La contabilización de las memorias y aniversarios de misas se hacia en los libros de aniversarios de las parroquias y se gestionaban mediante las mesas de aniversarios de cada parroquia, que reunían a sus servidores y beneficiados repartiéndose misas y limosnas por ellas mediante dicho mecanismo. Cuando el número de misas o las cantidades eran lo suficientemente importantes existía la alternativa de realizar la fundación de una capellanía que permitía el nombramiento de un capellán titular encargado de la celebración de las misas.

La diferencia con las capellanías laicales no estriba en el número de misas anuales sino en la manera en que la carga espiritual quedaba asegurada: en las capellanías la dote o los bienes sobre los que estaba sustentada la fundación se segregaban o separaban de la herencia, es decir, del patrimonio del fundador, quedando vinculados a la capellanía; en los aniversarios y memorias no hay vinculación, sino gravamen, ya que eran los herederos quienes quedaban obligados personalmente al cumplimiento, es decir, a hacer que se cumpliese, de la carga espiritual, que gravaba toda la herencia o una parte de ella y que seguía a los bienes relictos cuando éstos se transmitían, o mejor dicho, con la herencia del fallecido se pagaban las misas. De esta diferencia fundamental se derivaban tres consecuencias⁴⁶⁰:

1) La capellanía se extingue con la pérdida de la cosa de donde sale la renta, los aniversarios y memorias de misas no se extinguen mientras exista la herencia.

2) Los bienes de la capellanía laical no pueden enajenarse sin intervención de la autoridad eclesiástica.

3) Los herederos del fundador de una capellanía segregarán de la herencia los bienes destinados a aquélla antes de la partición; en los aniversarios o memorias de misas no hay necesidad de ello.

última vez su elevado rango y dignidad, como Juan Francisco Pacheco Duque de Estrada, marqués de Villatoya, que en su testamento de 16 de marzo de 1696, manda cuatro mil misas por su alma. Las mismas manda Esteban de Cervantes, del Consejo de S.M., en testamento de 6 de noviembre de 1651. AHG. Archivo de los marqueses de Jura Real, signaturas DI 19/05 y 47/11.

⁴⁶⁰ González Ruíz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 484.

Se denomina patronato de legos a la prerrogativa de un laico para designar al clérigo de debe cumplir la carga espiritual, como eran los supuestos en los que eran laicos (legos) los que disfrutaban de una capellanía laical (merelega), por lo que en algunos casos sí se puede aplicar a las capellanías laicales dicha denominación. El patronato de legos es, por tanto, un derecho de patronato de naturaleza civil, no canónica.

— *Patrimonios clericales.*

Son conjuntos de bienes que, a falta de otro, constituían título de ordenación de un clérigo que, por eso, se ordenaba “a título de patrimonio”. Debían ser perpetuos, ciertos, pacíficamente poseídos y consistir en bienes inmuebles y fructíferos⁴⁶¹. Se solían encuadrar entre los beneficios impropios⁴⁶².

Cabe la posibilidad de confusión con las capellanías laicales, porque, en ocasiones, los bienes de esta clase servían para constituir el patrimonio clerical. Pero en este caso el capellán no se ordenaba a título de capellanía o beneficio, sino de patrimonio.

8.- NORMATIVA HISTÓRICA APLICABLE A LAS CAPELLANÍAS.

No existe acuerdo en la doctrina sobre en el que surgen las normas reguladoras de este tipo de fundaciones. Hay autores⁴⁶³ que sitúan el origen de estas instituciones en el siglo XIV con la Ley LIII, en su título XXXII del Ordenamiento de Alcalá, citada anteriormente, donde por primera vez se habla de las capellanías desde el punto de vista del derecho civil. Opinión compartida por varios autores como González Ruíz⁴⁶⁴ y otros que afirman que las capellanías eran ya abundantes en la Baja Edad Media y estaban legisladas en el citado Ordenamiento de Alcalá. Sin embargo, Aranda Mendíaz⁴⁶⁵, señala en su trabajo sobre los testamentos de la población de Gran Canaria que las capellanías ya se encuentran reguladas en la colección de Decretos de Gregorio IX de 1234, ya que en dicho Cuerpo Jurídico Canónico, en su Título V *De Praebendis et Dignitatibus*, Capítulo XXIII, del Libro III, se dice:

“Tuis a quaestionibus respondemus, quod clericos in minoribus ordinibus constitutos, de patrimonialibus bonis habentes, unde possint congrue sustentari, et si nondum fuerint beneficium Ecclesiasticum assenti, (dummodo aliud canonicum non obsistat) ad superiores poteris ordines promoveri”. (Corpus Iuris Canonici, Decretales..., o.c., Libro III, Tít. Título V De Praebendis et Dignitatibus, cap. XXIII, fol. 379).

⁴⁶¹ “Debet autem patrimonium esse perpetuum, certum, pacifice possessum, in bonis immobilibus consistens, et fructiferum”. C. Berardi, *Commentaria in ius...*, o.c., Appendix, fol. 367.

⁴⁶² F. Gómez-Salazar, *Instituciones de Derecho Canónico...*, o.c., p. 306.

⁴⁶³ M. Barrio Gozalo, *El Clero en la España moderna*, Córdoba 2010, p. 92. *Estudio socio-económico de la Iglesia de Segovia en el siglo XVIII*, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Segovia 1982, p. 488.

⁴⁶⁴ González Ruíz, *Las capellanías españolas...*, o.c., p. 491.

⁴⁶⁵ M. Aranda Mendíaz, *El hombre del siglo XVIII en Gran Canaria. El testamento como fuente de investigación histórico-jurídica*, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, Las Palmas de Gran Canaria 1993, p. 166.

También en el Capítulo II del mismo título se afirma (Ibidem, fol. 372):

“Non liceat e ulli Episcopo ordinare Clericos, et eis nullas alimonias praestare: sed duorum alterum eligat, vel non faciat Clericos, vel si fecerit, det illis, unde vivere possint”.

Posteriormente, el Concilio de Trento no regula de forma expresa las capellanías, notándose una falta de ordenación normativa de dichas fundaciones a excepción de la sesión XXV dedicada al Purgatorio y el Decreto sobre la Reforma, donde se facultaba a los Obispos a decretar las oportunas providencias ante el excesivo número de misas a celebrar en algunas iglesias, pues dicho exceso de servicios religiosos podía provocar que no se les diese exacto cumplimiento en los días señalados por los fundadores⁴⁶⁶. Pero donde sí se sujetan a reglas de forma clara y precisa es en los sínodos diocesanos, los cuales, en atención al citado concilio, eran convocados en cada diócesis para reunir a todo el clero.

Una última fuente normativa sobre las capellanías se encuentra en las visitas pastorales que realizaban los prelados, pues de ellas emanaban los mandatos de visitas, entre los que se encuentran algunos dedicados específicamente a las capellanías.

9. CAPELLANÍAS Y RELIGIOSIDAD.

Sentada la base de que las capellanías eran obras pías instauradas en la Iglesia Católica, pues sus antecedentes se encuentran en las mandas y legados que los patronos laicos hacían en favor de alguna iglesia, para sufragios de los difuntos, es necesario abordarlas desde una perspectiva religiosa.

9.1.- La preocupación por la salvación del alma.

En el contexto del profundo carácter religioso de la sociedad teocrática medieval que gira en torno a la fe, en una densa atmósfera de acendrado y temeroso respeto a la omnipotencia divina, era necesario mendigar humildemente el perdón de Dios⁴⁶⁷.

Para el cristiano la vida en la tierra era un constante sufrimiento y un peregrinar en busca de la auténtica vida en compañía de Dios por toda la eternidad. Esa vida eterna y perpetua era la única que importaba y, para conseguirla, valía la pena realizar toda clase de esfuerzos y penitencias.

⁴⁶⁶ “Mas cuiden los Obispos que los sufragios de los fieles, es a saber, los sacrificios de las misas, las oraciones, las limosnas, y otras obras de piedad, que se acostumbran a hacer por otros fieles difuntos, se executen piadosa y devotamente según lo establecido por la Iglesia; y que se satisfaga con diligencia y exactitud quanto se debe hacer por los difuntos, según exijan las fundaciones de los testadores...”

“Ocurre muchas veces en algunas iglesias o ser tantas las misas que tienen obligación de celebrar por varios legados de difuntos, que no se les puede dar cumplimiento en cada uno de los días que determinaron los testadores..., por cuya causa quedan sin efecto las piadosas intenciones de los testadores, y se da ocasión de que graven sus conciencias las personas a quines toca el cumplimiento. Y deseando el santo Concilio que se cumplan [...] da facultad a los Obispos para que en su sínodo diocesano puedan determinar, según su conciencia [...] quanto les pareciere mas conveniente al honor y culto de Dios, y a la utilidad de las iglesias.” Concilium Tridentinum, sesión 25. Decreto sobre el Purgatorio y Decreto sobre la Reforma, capítulo IV. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., pp. 473-474 y 526-527.

⁴⁶⁷ J. Rubio Rodríguez, *Las fundaciones benéfico-religiosas...*, o.c., pp. 56-57.

Ante este temor que todo lo espera o teme del cielo, y donde la gloria y el infierno constituían la máxima esperanza o angustia, hacia el siglo XII se extiende por Europa la creencia de que aquellas personas que no se merecían el infierno, debido a que sus pecados eran veniales, pero que tampoco eran lo suficientemente virtuosas para acceder a la santidad en el cielo, tenían que purgar o purificar sus culpas cometidas durante toda su vida en un lugar intermedio entre esos dos sitios, con lo que de esta manera se podría salvar el alma.

Esta corriente o creencia se basaba en la interpretación de la Biblia, donde en el texto del Libro Segundo de los Macabeos se da por supuesto que existe una purificación después de la muerte⁴⁶⁸.

9.2.- La vía de salvación del Purgatorio.

Este lugar intermedio entre la gloria y el infierno se llamó Purgatorio⁴⁶⁹. Se pensaba que la estancia en dicho sitio era transitoria y que en algún momento, después de que las almas hubieran pagado sus culpas, serían redimidas por Dios, para gozar de la vida eterna en el paraíso.

En el Concilio de Lyon II de 1274⁴⁷⁰ se definió la doctrina sobre el Purgatorio. Posteriormente, en los concilios de Ferrara, en 1438 y de Florencia⁴⁷¹, en 1439, se

⁴⁶⁸ La doctrina de la Iglesia sobre el Purgatorio encuentra su fundamento en la Biblia. Así, en el capítulo 12, versículos 43 a 46 del Libro Segundo de los Macabeos se dice: *“Haciendo entonces (Judas Macabeo) una colecta soldado por soldado, reunió hasta dos mil dracmas de plata, que envió a Jerusalén a fin de que allí ofreciesen un sacrificio por el pecado... Mas, creyendo firmemente que está reservada una gran recompensa a los que mueren piadosamente, idea santa y piadosa, por eso ofreció el sacrificio propiciatorio: para fuesen libres de sus culpas”*. Se refiere a que fuesen perdonados de sus pecados. También en un pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 32: *“Al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra”*. Se encuentran más referencias en Lucas 12, 58-59 y I Corintios 3, 12-15 y 15, 29. La Santa Biblia, traducida bajo la dirección de E. Martín Nieto (Ediciones Paulinas), Madrid 1973, pp. 627, 1162, 1336 y 1346. Además de la Biblia hay otras referencias al Purgatorio en los Padres de la Iglesia como San Justino, *Diálogo con Trifón*, 105; Tertuliano, *De Anima*, 58; San Cipriano de Cartago (¿200?-258), *Epist.* 55, 20; San Agustín de Hipona (354-430), *De Civ. Dei*, XXI, 13, *Enchir.* 69; San Cesáreo de Arlés (470-543), en *Sermo.* 179 y San Gregorio Magno (540-604), en *Dial.* IV, 39, entre otros.

⁴⁶⁹ Del latín *“purgatio”*, limpieza, purificación, y éste de *“purgo”*, limpiar, purgar. El Purgatorio es *“el lugar o mas bien estado en que las almas de los justos, salidas de este mundo sin haber satisfecho suficientemente a la justicia divina por sus culpas, acaban de expiarlas antes de ser admitidas a gozar de la bienaventuranza eterna”*. Abate Bergier, *Diccionario de Teología*, traducción de A. Monescillo, Madrid 1846, tomo III, p. 827. El Catecismo de la Iglesia Católica (Ed: Librería Editrice Vaticana, Roma 2007), en su numeral 1030, se refiere al Purgatorio en los siguientes términos: *“Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren una purificación después de su muerte a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo”*.

⁴⁷⁰ Constitución sobre la procesión del Espíritu Santo (382). *“Y si verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas después de la muerte con penas purgatorias o catarterias, como nos lo ha explicado Fray Juan; y para alivio de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de las misas, las oraciones y limosnas, y otros oficios de piedad, que, según las instituciones de la Iglesia, unos fieles acostumbran hacer en favor de otros. Mas aquellas almas que, después de recibido el sacro bautismo, no incurrieron en mancha alguna de pecado, y también aquellas que después de contraída, se han purgado, o mientras permanecían en sus cuerpos o después de*

consolidó la realidad concreta del mismo, ratificándose dicha doctrina en el Concilio de Trento, que declaró como dogma de fe su existencia⁴⁷² como lugar de expiación de los pecados.

Así pues, los cristianos asumieron que después de morir debían pasar al Purgatorio, al creer que la persona era pecadora por definición, por lo que el acceso directo al cielo le estaba vedado. Un claro ejemplo es la escritura de fundación de una capellanía por Francisco Duque de Estrada Idiáquez, en 27 de noviembre de 1673, donde el interesado expresa de forma clara su fervor religioso y veneración por las almas que se encuentran en el Purgatorio (AHG. Archivo de los marqueses de Jura Real, signatura DI 06/03, fol 1r):

“En el nombre de Dios todo Poderoso y de su bendita Madre, la Virgen Maria (...) sepan los que vieren este instrumento, como yo Francisco Duque de Estrada Diaguez (...) como por quanto yo (h)e tenido y tengo mucha devocion con las vendittas Animas del Purgatorio (...) que mi voluntad es... cada un año en misas por las vendittas Animas del Purgatorio...”

Pese a ser el Purgatorio la esperanza de todo cristiano para poder salvar su alma, existía un profundo temor hacia dicho lugar, pues se pensaba que era un sitio parecido al infierno en el que las almas eran sometidas a penalidades, tanto físicas como mentales. Además, estaba la angustia que causaba desconocer el tiempo que debían permanecer allí, pensándose que podían ser miles de años, antes de ser redimidas.

La Iglesia sostenía, además, que, una vez que se ingresaba en el Purgatorio, las almas ya no podían intentar mejorar su situación ni influir para acelerar su salvación. La única ayuda posible era la de los fieles cristianos, familiares y amigos de los fallecidos, los cuales podían pedir la compasión de Dios mediante obras de caridad, sufragios, obras pías e indulgencias para acortar la estancia en el Purgatorio de sus seres queridos⁴⁷³.

desnudarse de ellos, como arriba se ha dicho, son recibidas inmediatamente en el cielo”. H. J. Dezingen, *Enchiridion Symbolorum*, Wirceburgi 1854, p. 168.

⁴⁷¹ Dicho concilio fue la continuación del celebrado en Ferrara y en él se convino “*en que las almas de los verdaderos penitentes difuntos en la caridad de Dios, antes de haber hecho dignos frutos de penitencia, se purifican después de su muerte con las penas del Purgatorio*”. P. A. Alletz, *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo I, p. 352. Decreto para los griegos (587 y 588), H. J. Dezingen, *Enchiridion...*, o.c., p. 199.

⁴⁷² “*Habiendo la iglesia Católica instruida por el Espíritu Santo, según la doctrina de la sagrada Escritura y de la antigua tradición de los Padres, enseñado en los sagrados concilios, y últimamente en este general de Trento, que hay Purgatorio; y que las almas detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles, y en especial con el aceptable sacrificio de la misa; manda el santo Concilio a los Obispos que cuiden con suma diligencia que la sana doctrina del Purgatorio recibida de los santos Padres, y sagrados concilios se enseñe y predique en todas partes, y se crea y conserve por los fieles cristianos*”. *Concilium Tridentinum*, sesión 25. Decreto sobre el Purgatorio. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., pp. 472-474. Véase también: J. Le Goff, *El nacimiento del Purgatorio*, Madrid 1983, p. 15.

⁴⁷³ G. von Wobeser, *La contribución de las capellanías de misas a la salvación de las almas en la época novohispana*, Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México 2004, p. 7.

9.3.- Las capellanías: acto de piedad y devoción.

El siglo XIV fue una época de cambios en la estructura del mensaje de la predicación de la Iglesia. Se pasa a dar más importancia al hecho mismo de la muerte, más que de la vida, para asegurar la salvación inmediata⁴⁷⁴. Baste recordar el éxito que tuvo la literatura del bien morir, los manuales del *ars moriendi*. El citado siglo, en principio, sólo pretendió el llamado “arte de morir”, recordando que la muerte tenía que llegar irremediabilmente. Del reduccionismo de enseñar sólo a morir, se pasa, en los siglos posteriores y sobre todo con El Barroco a enseñar a vivir para morir⁴⁷⁵, abordando la muerte como el fin de un ciclo para el que el cristiano debía prepararse desde su nacimiento.

De esta manera, el “buen morir” incluyó el testamento como documento de naturaleza jurídico-religiosa capaz de reparar las faltas del finado mediante diversas cláusulas como las mandas pías, las capellanías, las donaciones, etc. Los testamentos son documentos virtuales para cualquier estudio socioeconómico, religioso o cultural, son una fuente verídica y excepcional para estudiar las actitudes ante la muerte, pues se hacen descripciones de cómo fueron esas vidas y cómo se planteaban un hecho tan vital como la muerte, tanto desde el punto de vista personal, como el familiar, social o religioso. Así, a través de estos documentos se ofrece una variada e ingente información sobre el mundo social, profesional, económico y espiritual del testador, siendo éste último el que más interesa en este caso. En consecuencia, se puede dividir un testamento en dos partes diferenciadas: la primera, que contiene una serie de cláusulas espirituales o declaratorias; y la segunda, que comprende cláusulas decisorias o patrimoniales.

En las cláusulas espirituales se encuentran, por este orden:

-El preámbulo o encabezamiento, fórmula que da autenticidad y garantía al testamento ante notario que inserta una pauta de invocación cristiana, debido a que el testador solía ser creyente. Hay de diversas formas, unos más completos que otros: “*En el nombre de la Santísima Trinidad...*”, (testamento de Juan Ramírez de Arellano, de 29 de octubre de 1385, Soria). “*En el nombre de Dios, Todopoderoso, Amén...*”, (testamento de María de Córdoba, de 15 de junio de 1592, Zuheros, Córdoba). “*En el nombre de Dios, Amén...*”, (testamento de María Fernández Benítez, en 7 de junio de 1555, Luque, Córdoba). En algún caso se omite dicho preámbulo como ocurre en el testamento de Juan Venegas, de 30 de octubre de 1537, en Córdoba, aunque no es lo habitual: “*Sepan cuantos vieren esta carta de testamento como yo...*”

-La confesión o profesión de fe, que consiste en la aceptación del misterio de la Santísima Trinidad y los artículos de fe: “*(...) creyendo como bien y fielmente creemos en el misterio de la Santísima Trinidad...*”, (testamento de Ana de Barros, de 20 de noviembre de 1600, Segovia). “*(...) e creyendo firmemente en la Santa y verdadera Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas e un solo Dios verdadero vivo...*”, (testamento de Inés de Ayala, de 21 de abril de 1430, Toledo). “*Confieso que creo en el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo...*”, (testamento de Diego Jiménez, en 10 de abril de 1634, Arnedo).

⁴⁷⁴ J. Pro Ruíz, *Las capellanías: familia, iglesia y propiedad...*, o.c., p. 587.

⁴⁷⁵ J. L. Sánchez Lora, *Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca*, Fundación Universitaria Española, Madrid 1988, p. 433.

-La invocación de intercesores ante Dios, sobre todo a la Virgen y en menor medida a los santos, e incluso a todos a la vez: *“Tomo por mis abogados a la Virgen Santa María y a Santa Ana a quienes pongo por intercesoras...”*, (testamento de Ana de Barros). *“(...) y tomando como tomamos por nuestra intercesora y abogada a la siempre Virgen María madre de Dios para que con el Santo Ángel de la Guarda y demás santos de la corte celestial intercedan por nosotros a Dios mi Señor...”*, (testamento de Gonzalo de Velasco, de 28 de febrero de 1703, Valladolid). *“Pido a la Virgen María, madre de Dios y madre de misericordia, y a los bienaventurados San Miguel, San Pedro, San Pablo y Santiago, San Martín y San Francisco, y a todos los Santos que con su intercesión me alcancen...”*, (testamento de Francisco Blanco de Salcedo, de 26 de abril de 1581, Palencia).

Es casi imposible encontrar un testamento, sobre todo en los siglos XVI y XVII, que no comience con una invocación a Dios (encabezamiento), ya que están impregnados de profundas convicciones religiosas, en los que la característica más llamativa es la transitoriedad de la vida terrenal, su desprecio y su escaso valor frente al mismo acto de la muerte, la necesidad de conseguir la salvación del alma y la posterior vida eterna, todo ello conforme a la doctrina eclesiástica imperante en estos tiempos que evidenciaba un providencialismo divino y un intenso carácter tanático-religioso de la sociedad en la Edad Moderna. Valga como ejemplo el testamento de doña Inés Girón, viuda de don Francisco Enríquez, de 29 de diciembre de 1493 (RAH. Colección Salazar y Castro. Signatura: 9/289, fol. 263r), donde se aprecian claramente los tres primeros apartados de las cláusulas espirituales:

“En el nombre del muy alto y muy poderoso Dios Padre, Hijo y Spiritu Santo(...) Porque decreto y mandamiento de Nuestro Señor Dios es que todo hombre vivo muera. Y porque según aquesto no (h)ay-cosa mas cierta que la muerte, ni mas dudosa que la hora della, y conviene a todo hombre mortal dar a cada uno lo suio, conviene a saber, el anima a Dios Nuestro Señor, que la fizo, y crió y redimió, y el cuerpo a la tierra donde fue formado, ordenando y disponiendo de su anima y conciencia, porque su anima sea guiada a carrera de salvación. Por ende, quiero que sepan quantos esta carta de testamento vieren, como yo (...), creyendo como creo firmemente en la Santísima Trinidad, asi como todo fiel christiano debe tener y creer, y temiendome de la muerte, que es natural, de la qual persona alguna no se puede escusar. (...) Por ende conozco, y otorgo que fago, y ordeno este mi testamento, en el qual fago manda de mi y de mis bienes por mi anima, ahonor de dios Mio y de la bien aventurada Virgen gloriosa, sin mancilla ninguna (...) en que primeramente mando y encomiendo mi anima a Dios Mio Señor, que la fizo, y crio y redimio, que por la su Santa misericordia e inmensa piedad la quiere perdonar, u la mande llevar a su Santa gloria y Paraíso”.

-Fundaciones y donaciones sujetas o vinculadas a la espiritualidad y fervor religioso. Cabe mencionar que respecto a éstas hay autores que las incluyen en las llamadas cláusulas decisorias, pero lo cierto es que conllevan un marcado halo de firmes creencias e inmaterialidad. Aquí se encuentran las mandas y obras pías (dotación para huérfanas, donaciones, limosnas y legados a iglesias, conventos, congregaciones

religiosas, cofradías, aunque lo que más interesa en esta investigación se refiere a la institución de capellanías).

En las cláusulas decisorias, habitualmente iniciadas con el adverbio “primeramente” se ordena:

-El tipo de sepultura y lugar de enterramiento: “*Primeramente, encomiendo mi alma a Dios (...) y que mi cuerpo sea enterrado en el convento de Otando, en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe...*”, testamento de Juan González Mayoral, de 12 de julio de 1641, Otando). “*(...) y que se sepulte el mi cuerpo dentro de la Iglesia Colegial de Santa María de Talavera, en la capilla de San Juan, delante del altar...*”, (testamento de Marta de Orellana, de 8 de abril de 1454, Talavera). “*El meu cos este sia lliurat a Ecclesiastica sepultura en la Colegial Iglesia de la present ciutat de Gandia, en el vas dels confreres de Nostra Senyora del Roser*”, (testamento de Luis Sanz, en 3 de abril de 1701, Gandía. AHN. Sección nobleza. Archivo de los duques de Osuna. Protocolos del notario José Todo, 1701. Legajo 1247).

-El tipo de mortaja: una sábana, hábitos monásticos o de alguna orden militar, práctica esta última muy común entre los siglos XVI y XVII: “*(...) Y mando que me entierren con el hábito de San Francisco...*”, (testamento de Marta de Orellana). “*Item, mando que vaya amortajado en el manto capitular de mi Orden, según se acostumbre, como todos los demás caballeros*”, (testamento de Alonso de Arellano y Meneses, del Hábito de Santiago, de 15 de junio de 1713, Talavera).

-Disposiciones genéricas: honras fúnebres y sufragios a favor del alma. Aquí se comprenden el cortejo fúnebre o acompañamiento en procesión, misa de requiem, misas por el alma, mandas pías forzosas. “*Y mando que el día de mi entierro se digan nueve misas de requiem cantadas, y los nueve días siguientes se me digan nueve misas rezadas (...) y que estas misas me sean ofrendadas de pan y vino y cera.*”, (testamento de Inés Girón). “*Mando acompañen mi cuerpo en mi entierro cura y sacristán de la Iglesia colegial de Santa María, el deán y cabildo de ella, el cabildo, señores curas y beneficiados de esta villa y todas las comunidades de religiosos. Mando se digan por mi alma mil misas rezadas con limosna de dos reales. Mando mandas piadosas y a los Santos Lugares en su derecho acostumbrado*”, (testamento de Alonso de Arellano).

-Reparto de los bienes: entre los familiares y sucesores. Además se suele legar ciertos bienes a personas unidas por lazos afectivos, sentimentales o de servicios al testador. “*E mando que se den a Ruy Sánchez de Arellano, arcediano de Cella, mi hermano, cuatro mil maravedís...*”, (testamento de Juan Ramírez de Arellano). “*Item, mando a Juan Velázquez, criado, cincuenta ducados...*”, (testamento de Esteban de Cervantes). “*Otrosí mando, que Beatriz y Francisca, mis esclavas, queden libres por el buen servicio que me han hecho*”, (testamento de Francisca Álvarez).

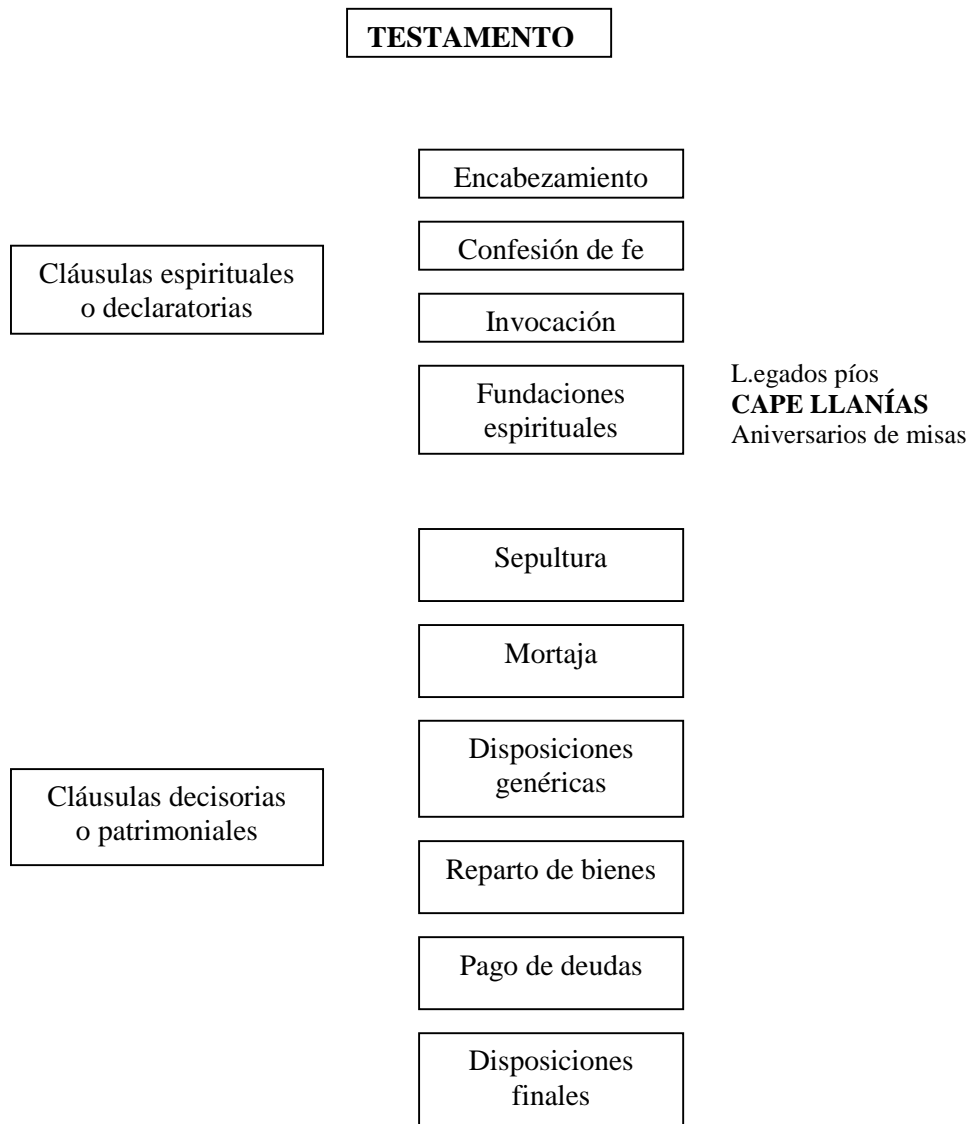
-Pago de deudas: a veces tiene un carácter prioritario, siendo una forma de descargo de conciencia ante la proximidad de rendir cuentas ante Dios. “*Item, declaro que por cuanto he tenido algunos tratos y puede ser que deba algunas cosas (...) para seguridad y descargo de mi conciencia, se paguen por mis albaceas sesenta pesos...*”, (testamento de Rodrigo Alonso Cabañas). “*Item, mando se paguen las deudas que pareciere deber...*”, (testamento de María de Córdoba). “*Item vull que tots deutes, e*

injuries sien pagats e satisfets a aquells e a aquelles empero persona o persones que es mostrara”, (testamento de en l de 1701, Gandía. AHN. Sección nobleza. Archivo de los duques de Osuna. Protocolos del notario José Todo, 17. Legajo 1247).

-Designación de albaceas: se encomienda el cumplimiento de la voluntad a alguien de confianza. Suelen ser herederos, familiares y, en su defecto, personas de cierto rango social y con fuertes vínculos de amistad. *“Y para cumplir lo que yo aquí mando en este mi testamento y cada una cosa, y parte de ello, fago, deyo y ordeno por mis testamentarios y albaceas a Fernando Alonso, canónigo y bachiller, y Francisco de Meneses, mi hijo...”*, (testamento de Marta de Orellana). *“Item, elegim marmessors d’aquest nostre ultim testament al vicari temporal de la Colegial Iglesia de Gandia i al Dr. Félix Marco, doctor em Dret, nostre fill”* (testamento de Jaume Alarcó e Guisabet Herrero, en 24 de septiembre de 1694, Gandía. AHN. Sección nobleza. Archivo de los duques de Osuna. Protocolos del notario José Todo, 1694. Legajo 1247).

-Disposiciones finales: suelen ser una fórmula notarial, en la que se dice que es el último testamento y la última voluntad. Se revoca cualquier otro testamento o codicilo anterior. Finaliza con la expresión del lugar y fecha. *“Item, por este mi testamento e disposición e declaración e postrimera voluntad, anulo e revoco todos y cualesquiera testamentos e disposiciones e postrimera voluntad que yo haya dispuesto e ordenado (...) E quiero, e mando y es mi voluntad que solamente valga e haga efecto este mi testamento que agora fago. En la villa de Béjar del Castañar, a veinte y un días del mes de julio, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil cuatrocientos ochenta y seis años”*, (testamento de Álvaro de Zúñiga). *“E revoco e anulo e doy por ningunos y de ningun valor ni frutos todos cualesquiera testamentos, mandas e codicilos que antes de este haya hecho y otorgado, que quiero que no valgan ni hagan fe en juicio ni fuera de él, salvo este que ahora hago y otorgo, que es mi testamento e postrimera voluntad, el cual quiero que valga por tal (...) En la villa de Zuheros, sábado, cuatro días del mes de noviembre, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil e quinientos y ochenta e un año”*, (testamento de Ana deCórdoba).

Cuadro 5. Partes de un testamento.



En este tipo de religiosidad las fundaciones de capellanías surgen en esta sociedad inmersa en la constante preocupación por la muerte y la desazón por la salvación del alma, desarrollándose al calor de estas desmedidas ideas y de la creencia en el Purgatorio. Con el tiempo llegan a ser como una “*compra*” de la gloria eterna. Como se ha podido apreciar, su propósito inicial era religioso, pues a través de la celebración de misas se buscaba acortar la estancia del alma del fundador de la capellanía o de su familia en el Purgatorio y su pronto ingreso en el reino de Dios.

“Item ordeno y mando, quiero y es mi voluntad, a honra de Dios nuestro Señor y por bien de mi Anima, y de todos mis difuntos, instituir (...) una capellania perpetua en la Iglesia mayor de esta dicha villa de Zuheros (...) y porque esta tan santa obra haya lugar, y sea después de mis dias continuada y vaya adelante (...) se digan dos misas cada semana, la una viernes y la otra domingo. Una misa cantada el dia y visperas de la Santísima Trinidad, que sea muy solemne, y asimismo misa y vispera del día de la Encarnación del hijo de Dios y la fiesta

de la gloriosa Santa Ana, mi Señora y la fiesta del glorioso Santo Andrés, las cuales sean en los dichos días señalados cantadas y muy solemnes, y una misa rezada el día de Santa Marta..."

(Testamento de Ana de Córdoba y de los Ríos en 4 de noviembre de 1581. AHN. Sección Nobleza: Archivo de los condes de Luque, signatura C.21,D.82, fol. 2r)

La predicación del clero había conseguido crear la costumbre y hasta la obligación de dejar bienes a favor del alma de los difuntos a lo largo de toda la Edad Media, y no había sido en balde. La materialización de esas donaciones por el alma se hacía en donaciones a la Iglesia o a sus instituciones pasando a ser las capellanías el colofón de una vida éticamente despreocupada que solucionaba el problema de la salvación.

La preparación para "*el bien morir*" era una de las principales preocupaciones de los cristianos, ya que creían que de ello dependía su vida futura, en el más allá. Fundar capellanías ayudaba a encaminar al alma hacia su salvación o, en términos de la época, la ponía en "*carrera de salvación*", por ello un último acto de arrepentimiento, confesándose, recibiendo los sacramentos y destinando parte de los bienes para fines piadosos podían ayudar a tener un más allá dichoso.

Según se deduce de los testamentos de los siglos XVI y XVII⁴⁷⁶, parece que la mayoría de las personas de aquella época asumían que después de la muerte debían pasar un tiempo indeterminado en el Purgatorio, para limpiar los pecados cometidos durante su vida, que no habían sido redimidos. Sólo después de este periodo de purificación sus almas podrían pasar al cielo y lograrían su salvación eterna. Casi todos los testadores aluden en sus últimas voluntades a este lugar y expresan miedo de permanecer por mucho tiempo en él.⁴⁷⁷

Entre los sufragios que podían ayudar a las almas del Purgatorio destacaba la celebración de la misa⁴⁷⁸, que era el principal acto litúrgico de la Iglesia Católica, y a la que se atribuían poderes excepcionales. Todo ello debido a que el Concilio de Trento trató, entre varios temas, el de la doctrina de la misa, a la cual se le reconoció no sólo como acción de gracias, sino como "*verdadero y singular sacrificio*" instituido por el

⁴⁷⁶ Los tiempos barrocos, con su religiosidad teatral y formalista, fueron tiempos favorables para la proliferación de estas fundaciones. Perfectamente encajados en el universo mental y el contexto cultural de sus contemporáneos ofrecían tanto un mecanismo de redención *post mortem* como una posibilidad de perdurar en la memoria de los vivos.

⁴⁷⁷ En todos los contratos de fundación de capellanías y en muchos testamentos se hace alusión al Purgatorio y al deseo de salvar las almas para lograr la vida eterna junto a Dios. J. Le Goff, *La bolsa y la vida. Economía y religión en la Edad Media*, Barcelona 1987, p. 107 y ss. Este es el caso de María de Cunchillos y Santángel que erige y funda dos capellanías en las parroquias de San Gil y de San Pablo en Zaragoza, en 19 de julio de 1568, donde se hace mención que "*considerando las gravísimas penas del Purgatorio y el deseo con que aguardan de ser ayudados con oraciones y sacrificios, las ánimas, de que suyo ya no pueden merescer para si, nosotros María Cunchillos de Santángel (...) instituimos, fundamos, ordenamos y dotamos, para luego de presente y para in perpetuum dos capellanias...*" AHN. Sección Nobleza: Archivo de los duques de Parcent, signatura, C.121,D.4, fol. 2r.

⁴⁷⁸ "*Y en remisio de mes culpes, y pecats (...) vull sien dites per la mia anima tantes misses resades, quantes celebrarre porran...*" AHN. Sección Nobleza: Fondo Osuna. Protocolos del notario José Todo, 1692. Legajo 1247.

"*Item prenh de mons bens per anima mia y en remició de mes culpes y pecats sinquanta lliures moneda reals de Valencia (...) sien dites tantes misses resades quantes dir y celebrar se puguen per anima mia*". Ibidem, 1685. Legajo 1134.

mismo Jesús. Se afirmó también que esta ofrenda “ no sólo se ofrece con justa razón por los *pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades de los fieles que viven; sino también según la tradición de los Apóstoles, por los que han muerto en Cristo, sin estar plenamente purgados.*”⁴⁷⁹; los padres conciliares declararon que este sacrificio se renovaba diariamente en la liturgia de la Eucaristía, considerando la Iglesia que los méritos y gracias que se desprendían de la misa, así como de otros sufragios, se sustentaban en el vínculo de amor que unía a todos sus miembros y a los difuntos que hubieran muerto en estado de gracia. Para los católicos, a partir de Trento, el mensaje de la Iglesia parecía claro: si se quería lograr la salvación, cuantas más misas se celebrasen, mejor.

Dada la esperanza en esta capacidad redentora de las misas, las personas trataban de garantizar que se rezara por sus almas; de ahí la popularidad que gozaron las de difuntos y de ánimas. Las personas más modestas y de escasos recursos procuraban pertenecer a alguna cofradía, con el fin de que los cofrades rezaran colectivamente por su alma, a la hora de su muerte y después de ella, o recurrían a las “*misas de tablas*”⁴⁸⁰. Quienes tenían más posibilidades económicas procuraban contar con misas en forma individual: disponían una serie de misas durante sus funerales y fundaban capellanías. Las investigaciones realizadas confirman que, a partir del concilio tridentino, se generalizaron las fundaciones de capellanías, al basarse su sentido religioso en tres principios reconocidos como verdades de fe y difundidos por la Iglesia: la importancia de las buenas obras para alcanzar la salvación, la existencia del Purgatorio y el poder redentor de la misa.

Como la capellanía era una institución que no se agotaba con la muerte del primer capellán, sino se transmitía a lo largo de muchas generaciones, los fundadores tenían garantizadas las misas por sus almas a perpetuidad, salvo en los casos en que se perdían los bienes o medios económicos que la sustentaban. Además, consistía también en realizar una obra piadosa, por lo que se cumplían los citados principios difundidos por toda la cristiandad católica.

Era frecuente que los fundadores de capellanías hicieran extensivos los rezos a algunos familiares cercanos, tanto vivos como muertos. En otros casos los sufragios se extendían a todas las almas del Purgatorio.

Este es el caso de la capellanía fundada por Elvira de los Ríos, mujer de don Juan de Córdoba, señor de la villa de Zuheros, en dicha villa en 5 de septiembre de 1533, en la que hace extensivas las misas, no sólo a su alma, sino también a su marido, a otros

⁴⁷⁹ *Concilium Tridentinum*, Doctrina sobre el sacrificio de la Misa, sesión 22, cap. 4, o.c., fols. 291-291.

⁴⁸⁰ Se llamaban así porque en las parroquias existía una tabla o tablilla donde los curas anotaban las misas que debían rezar al cabo del año. Dado que la capellanía era gravosa para el fundador porque implicaba la creación de un patronato, de una capilla y la compra de ornamentos, retablos, etcétera, la dotación sencillamente de unas misas de tabla era una buena solución. Efectivamente, para muchas personas de capital más o menos modesto existía esta opción que les permitía dejar una memoria anual, casi siempre pequeña, a cambio de una pequeña cantidad de dinero. Para pagarlas bastaba con crear un pequeño censo sobre alguna de las propiedades legadas a sus descendientes, con frecuencia sus propias “*casas de morada*” que eran sus únicos bienes raíces. E. Mira Caballos, *Capellanías, cofradías, fundaciones y obras pías en Montijo a principios del siglo XIX*, Ars et sapientia, Revista de la asociación de amigos de la Real Academia de Extremadura de las letras y las artes, nº 22, Cáceres 2007, p. 158.

familiares y como colofón, a todas las almas del Purgatorio (AHN. Sección Nobleza: Archivo de los condes de Luque, signaturas C.83,D.2, fol.19r):

“Item ha de decir misas en mi capilla (...) por D. Juan y por Leonor Alonso y por las Animas del Purgatorio (...) y quiero que estas misas y en las demas se digan sobre mi sepultura un responso por mi é por mis difuntos”.

En resumen, mediante las capellanías se fomentó el culto a los santos, a la Virgen y a Jesucristo, según las devociones de cada uno de los fundadores, por lo que es innegable su contribución al culto religioso, además de reportar otros beneficios. Pero también proyectaron hacia el más allá la desigualdad existente en la sociedad terrenal. Una vez formada la idea del Purgatorio y la posibilidad de redimir las penas mediante indulgencias y sufragios de misas, apareció la posibilidad de remunerar con riquezas de este mundo la salvación del alma después de la muerte, pues quien poseía bienes suficientes para erigir una capellanía, se aseguraba un paso rápido por el Purgatorio, mientras que la mayoría de los pecadores sufriría los dolores de un largo castigo. La imagen del más allá había acabado por configurarse *como repetición del mundo de los vivos, destruyendo el mito de la igualdad de los fieles ante Dios*⁴⁸¹.

Pero no hay que dejarse seducir o engañar, pues la idea de la igualdad ante la muerte fue un antiguo tópico, muy divulgado en la Edad Media, y presente, también en Job y en Boecio. Con todas sus miserias, sus ansiedades, su indefensión ante la muerte, el hombre eleva los ojos al cielo sin levantar sus pies bien sentados en la tierra. Gracias a estas fundaciones y a sus sufragios los muertos se acercaban a la salvación y muchos vivos sobrevivían día tras día ofreciendo su fuerza de trabajo espiritual a cambio de un modesto salario en limosnas⁴⁸².

10.- CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAPELLANÍAS.

Además de la definición de capellanía, citada anteriormente, por la doctrina, es necesario describirla de una forma más práctica para entender cómo funcionaba. Ya se ha mencionado que, según Pro Ruíz, y es bueno recordarlo, que una capellanía era una fundación perpetua en la que una persona segregaba de su patrimonio ciertos bienes, ya fuese en vida o mediante testamento, formando con ellos un fondo destinado a la congrua sustentación de un clérigo, que se obligaba a celebrar un número de misas anuales por el alma del fundador o de su familia en determinada capilla, iglesia o altar u otros rituales sagrados, afectando para su sostenimiento las rentas de los bienes que se especificaban, estableciendo en ciertas personas un derecho de patronato sobre dicha institución. Es decir, que la fundación de una capellanía implicaba no sólo una parte espiritual sino también material.

El funcionamiento era del siguiente modo: una persona, a quien se llamaba fundador, donaba unos bienes para el sostenimiento de un capellán y éste quedaba obligado a decir cierto número de misas en la memoria del primero y de todos los de su intención. La cantidad donada se invertía y el capellán recibía la renta que producía la

⁴⁸¹ J. Pro Ruíz, *Las capellanías: familia, iglesia y propiedad...*, o.c., p. 592.

⁴⁸² J. Troyano Chicharro, *La religiosidad popular, la estructura y mentalidad de la Iglesia de Bedmar durante la segunda mitad del siglo XVIII*, Sumuntán: anuario de estudios sobre Sierra Mágina, nº 15, Jaén 2001, p. 216.

inversión⁴⁸³. En realidad, era un contrato en el que una parte llamada “fundador”, donaba, “*inter vivos aut mortis causa*”, a la Iglesia determinados bienes y derechos, y ésta quedaba obligada a realizar determinadas prestaciones.

La donación de los bienes podía realizarse de dos maneras, directamente o bien estableciendo una condición suspensiva, siendo la más frecuente la muerte del propio fundador, aunque en determinados casos se establecía como condición suspensiva la muerte de otra persona, usufructuaria vitalicia de los bienes donados. La disposición de los bienes exigía que el fundador tuviese el poder de disposición sobre los bienes dotacionales, lo que se refiere tanto a la titularidad de los derechos cedidos como a cumplir los requisitos de capacidad establecidos para la transmisión de bienes (como son la mayoría de edad, sano juicio, etc), y los mismos límites establecidos en general para las donaciones. Por tanto, la donación no podía hacerse en una cuantía que dejase en una situación precaria al propio donante y tampoco que infligiese perjuicio a los legitimarios, lo que limitaba de forma patente la posibilidad de establecer fundaciones a aquellos que tenían herederos forzosos⁴⁸⁴.

Esta situación podía llevar a un escaso número de fundadores entre personas con hijos, ya que para darse era necesario o bien el acuerdo de los legitimarios o bien hacerse con cargo a la parte de los bienes de libre disposición del fundador, lo que exigía un patrimonio, sino considerable, sí de cierta importancia donde cupieran los bienes donados. Ambos requisitos, la concurrencia de los legitimarios expresando su conformidad y la expresión clara de que los bienes de la capellanía “*caben en el tercio y en el quinto de mis bienes*” o que “*declaro y juro en solemne forma que no necesito los bienes de la dotación, y que me quedan los suficientes para mantenerme con decencia según mi calidad*” o que “*los bienes son míos propios y libres de toda carga o hipoteca alguna*”, se suelen dar en este tipo de casos.

Como el testamento de Ana de Barros, viuda del capitán don Juan Alonso de Barros, otorgado en Segovia, en 2 de octubre de 1598, que ante la fundación de una capellanía en la iglesia de san Martín de dicha ciudad, de forma expresa y clara dice (AHG. Archivo de los marqueses de Jura Real, signatura DI 19/09):

“tengo facultad de disponer por lex a mi albedrío y así mismo del quinto de mis bienes...”

O la otra fórmula que utiliza Ana de Córdoba en la fundación de una capellanía en la iglesia de la villa de Zuheros (Córdoba), mediante testamento de fecha 4 de noviembre de 1581 ((AHN. Sección Nobleza: Archivo de los condes de Luque, signatura C.83,D.2, fol. 54r-55v):

“declarando como declaro que los bienes que aquí para este particular de esta memoria son míos propios y libres de toda carga ni hipoteca alguna y que desde ahora los junto a la dicha mi capellanía...”

⁴⁸³ Para el funcionamiento económico de las capellanías véase Gisela von Wobeser, *El crédito eclesiástico en la Nueva España del siglo XVIII*, Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Nacional Autónoma de México, México 1994, capítulo 3, p. 57.

⁴⁸⁴ J. Arroyo Vozmediano, *Capellanías de la vicaría de Viana*, en Cuadernos del Marqués de S. Adrián: Revista de Humanidades, nº extra 1, UNED, Madrid 2008, p. 46.

La Iglesia en el proceso de erección de la capellanía solía ser muy rigurosa, como previene el derecho canónico, a fin de proteger los derechos de terceros y salvaguardar la pacífica posesión de los bienes en la institución realizada. Lo que recoge Golmayo en sus *Instituciones del Derecho Canónico*, o.c. tomo primero, capítulo XXX, §.378, pp. 383-384:

“El espíritu de los cánones en cuanto al título de ordenación ha sido siempre que los clérigos tuviesen la renta necesaria perpetuamente para su congrua sustentación, a fin de evitar en ellos la mendicidad, o que se dedicasen a oficios indecorosos. El patrimonio, por consiguiente, ha de tener, conforme a esta doctrina, las cualidades siguientes: (...) 5.^a y última, no ha de haber en su erección perjuicio de tercero, lo cual sucedería si el padre, por ejemplo, desatendiese a sus hijos privándoles de su legítima para formar a uno de ellos el título de ordenación.”

Las capellanías estaban diseñadas para ser perpetuas, en virtud de que la fundación no se agotaba con el primer capellán que la poseía, puesto que a su muerte o renuncia se traspasaba a otra persona y así sucesivamente. Desde el punto de vista económico, esta continuidad era posible porque las capellanías se financiaban con los réditos y no con el capital. Así, hubo algunas que se mantuvieron a lo largo de muchas décadas y aun de siglos.⁴⁸⁵

La fundación se realizaba mediante un convenio escrito llamado “*escritura de fundación*”, firmado ante un notario o escribano público. Del estudio de dichas escrituras se desprende que tres personas intervenían en la creación de toda capellanía: el fundador, el patrono y el capellán. En este documento se definían los términos y pormenores de la capellanía: tipo de capellanía (colativa o laical), los medios económicos aportados, las obligaciones del capellán y los bienes sobre los que se imponía la fundación y que se espiritualizaban (cuando ésta no se fundaba mediante dinero en efectivo), así como las personas en quienes debían recaer los cargos de capellán y patrono.

Un evidente ejemplo de modelo de fundación de capellanía colativa ante un escribano público es el formulado por Pedro Melgarejo en su *Compendio de contratos públicos*, o.c., fols. 163 y 164:

“En nombre de Dios nuestro Señor y de la Virgen Santa María nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, en el instante primero de su Ser. Amén. Sépase, como yo F. vecino de tal parte, digo: Que ha muchos días que tengo voluntad de instituir una Capellanía de Misas, que se digan en tal Iglesia, para que Dios nuestro Señor sea servido en el aumento del Culto Divino, y mi Alma, y las que están en el Purgatorio reciban sufragios, por cuyo medio gozarán de la Gloria eterna; y ejerciendo esta voluntad, otorgo por esta carta, que en la forma que mejor haya lugar de derecho, instituyo, doto y fundo la dicha Capellanía con los cargos y obligaciones siguientes:

⁴⁸⁵ G. von Wobeser, *La contribución de las capellanías de misas a la salvación de las almas...*, o.c., p. 3.

1. *Primeramente señalo por bienes de esta dotación y fundación...*
2. *Item, que los dichos bienes se han de labrar y reparar de todo lo necesario a costa de los Capellanes, de suerte, que vayan en aumento y no en disminución (...); y no porque haya el dicho gasto, se minore el número de Misas de esta dotación.*
3. *Item, que los dichos bienes estén siempre permanentes, y no se puedan vender, trocar ni cambiar, ni en manera alguna enagenar, aunque para ello se trayga licencia de Juez competente, porque desde luego lo prohíbo, y quiero sean inalienables.*
4. *Que el Capellán que fuere de la dicha Capellanía, y los que le sucedieren, cada uno en su tiempo, tengan obligación de pagar los derechos del Subsidio y Excusado, que le tocaren (...) demás de ello digan en cada un año, para siempre jamás en la dicha tal Iglesia tantas Misas rezadas, en tales festividades o en el discurso de cada año; y por la limosna de ellas le señalo tanta cantidad de maravedís, y lo que sobrare del usufructo de los dichos bienes haya para que mas bien pueda sustentarse.*
5. *Y nombro por patronos a F. y a F. después de ellos al hijo o nieto, y descendiente mayor de cada uno, a quien doy facultad para que en las vacantes nombren Capellán, que sea el pariente más cercano de mi linaje, prefiriendo los que fueren sacerdotes pobres, o estuvieren más próximos a serlo, y los más virtuosos, estando en un grado algunos y no habiendo parientes, al clérigo natural más pobre, de suerte, que vaya de unos en otros: y nombro por primero Capellán a F. persona capaz y suficiente, para que en fin de mis días (o desde luego) goce de la dicha Capellanía, y después de él a F. o al que los dichos Patronos nombraren, siendo conforme a mi llamamiento, y con que los dichos Capellanes sean Católicos Cristianos, que no hayan cometido crimen laesae Majestatis, ni hayan sido reconciliados ni penitenciados por el Santo oficio de la Inquisición, ni tengan ninguna raza de Judíos, Mulatos, ni otra Secta, y con que en los nombramientos no haya simonía ni especie de ella: pues por el mismo caso los excluyo, y quiero, que aunque esté hecha colación de esta Capellanía, quando se verifique cualquier cosa de lo referido, sean multados, y pase al siguiente en grado; y en caso de que falten parientes y clérigos pobres naturales, coge esta Capellanía tal Convento; cumpliendo con las cargas de ella: y desde luego me desapodero, desisto y aparto del derecho de tenuta y posesión, propiedad y otra cualquiera que me pertenezca a los bienes de esta institución, y lo cedo, renuncio y traspaso en dichos Capellanes, cada uno en su tiempo, para que usen de ellos, y gocen de sus frutos y aprovechamientos; y en la forma que puedo, los crio e convierto en beneficio eclesiástico, y de temporales en espirituales; y declaro, que sin ellos tengo bastante congrua de sustentación, conforme a la calidad de mi persona. Y pido y suplico a los señores Provisores de esta Diócesis, hayan por presentado al dicho F. y a los demás que le sucedieren, y hagan en cada uno a su tiempo Colación Canónica Institución de esta Capellanía, solamente con nombramiento mío y de los Patronos, después que yo fallezca, guardando la forma de esta Institución, que apruebe y confirme e interponga a ella su autoridad y decreto judicial; y que la*

apruebe o no, quiero que se guarde y cumpla en todo e por todo, y la habré por firme en todo tiempo, a que obligo mi persona y bienes, habidos y por haber: y doy poder a las Justicias e Jueces que de esta causa puedan conocer conforme a Derecho &c.

Otra forma de instituir una capellanía era mediante testamento, como es el caso del modelo recogido por Juan de la Ripia en su famosa obra sobre *Práctica de testamentos y modos de suceder*, o.c., fols. 114 y 117-121:

“In Dei nomine, amén. Sepan quantos vieren esta carta de testamento, como yo Fulano, vezino, y natural de tal parte, hijo legítimo de Fulano, y de fulana su legítima muger, natural de tal Ciudad, estando enfermo, y en mi buen juicio, y entendimiento, que Dios nuestro Señor fue servido de darme, creyendo, como fielmente creo en el alto, y Sacro Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres Personas distintas, un solo Dios verdadero, y todo lo demás, que tiene, cree, y confiessa la Santa Madre Iglesia Católica Romana, en cuya Fe, y creencia he vivido, y profeso vivir, y morir, conociendo, que la muerte es natural, y que ninguno puede escusarse de ella, y que después de aver recibido los Santos Sacramentos, el mejor medio es hazer testamento, y disposición de las cosas tocantes al descargo de mi conciencia: por lo qual lo hago a honor, y reverencia de Dios nuestro Señor, y de lasiempre Virgen Madre de nuestro Señor JesuChristo, concebida sin pecado original desde el primer instante de su ser natural, quien sea mi Abogada, en la forma siguiente.

(...)

Fundo, erijo, y levanto una Capellanía, que se sirva perpetuamente en tal Iglesia, y Altar, donde se han de decir las Missas, y no en otra parte; y para bienes, y dote Della, desde luego señalo tales possessiones, las quales no se han de poder vender, ni en otra forma enagenar en ningún tiempo: y nombro por Capellán primero desta Capellanía a F. mi sobrino: y después dèl, sean Capellanes los hijos y descendientes legítimos de F. mi hijo, prefiriéndose los que fueren descendientes de los hijos varones del dicho mi hijo, a los que descendieren de las hijas dèl; y entre ellos se prefieran las líneas de los hijos mayores del dicho mi hijo, a los que descendieren de los menores hijos; y en la forma declarada, y no en otra se prefieran, aviendo dos, u más en igual grado, el que fuere de más edad, sin atender a virtud, letras, grados, ni órdenes, ni otras razones.

Y a falta de la descendencia del dicho mi hijo, sean Capellanes los hijos, y descendientes legítimos de F. mi hijo, en la forma, con las representaciones, y como va declarado en las líneas, y descendencia del dicho mi hijo primeramente llamados: y a falta de descendientes de dicho mi hijo, cuya línea es en segundo grado llamada, suceda la línea de F. mi hijo, en la misma forma, que las líneas del primero, y segundo llamamiento, y con las representaciones, y atencencias declaradas en la primer línea, cuyas calidades, y disposición sigue en todo, y por todo la segunda, y ésta.

Y respecto de que no aviendo en la primer línea persona que pueda obtener esta Capellanía, deben, y han de suceder los de la segunda línea: y no aviendo en la segunda, han de suceder los de la tercera todas las vezes que se ofrezca, con las representaciones, y en la forma que va declarado; no por esto ha de ser visto perder su derecho los de la primera, y segunda línea, porque ha de bolver a ellos la sucesión, y llamamientos de esta Capellanía por su orden, como ya expressado, todas las vezes que suceda el caso de passar de una línea a otra, por falta de persona, que pueda ser Capellán: y a falta de la sucesión legítima de los dichos mis tres hijos, u de no aver en sus descendientes quien pueda ser Capellán, lo sean los parientes míos, y de la dicha mi muger, más cercanos; con advertencia, que aunque aya salido el nombramiento, y sucesión de esta Capellanía de la descendencia de los dichos mis tres hijos una, o más vezes, por falta de no aver persona de ellas, que sea Capellán, ha de bolver a ellas, todas las vezes que suceda, y aya quien lo pueda ser; y en la sucesión de los parientes míos, y de la dicha mi muger, se ha de entender, y es mi voluntad, que ande esta Capellanía alternativamente un Capellán de mis parientes, que ha de ser el primero, llegado el caso, y otro de los de mi muger, y estos sean los más cercanos a nosotros, sin atender a las líneas de varones y hembras, ni mayorías, y sin hazer distinción en ellas: y si sucediere aver dos, o más en igual grado, y cercanía de parentesco con nosotros, entonces se prefiera el que fuere de más edad, sin otra atendencia, ni atención; y porque de edad de veinte y seis años han de tener, y les pongo obligación a todos quantos Capellanes fueren desta, que no sean descendientes de los dichos mis tres hijos, a estar ordenados de Missa, es mi voluntad, que en los parientes míos, y de mi muger, llegado el caso de aver dos, o más en un grado, no les obste, ni embarace a los de más edad el ser de más de veinte y seis años, y no estar ordenados de Missa, ni de otra ninguna orden; con tal, que después de quatro años, contados desde el día en que se les haga la colación de est Capellanía, se ayan ordenado de Missa, porque no lo cumpliendo, ha de passar al siguiente en grado: y los Capellanes, que no fueren descendientes de mis hijos, o parientes míos, y de mi muger, precisamente han de ser Sacerdotes al tiempo de ser presentados, y no de otra forma; y entre mis parientes, y de mi muger, ha de aver igualdad de nombramientos, tantos Capellanes de un linage, como del otro; y porque no aviendo persona, que pueda ser Capellán en el uno, lo ha de ser del otro, es mi voluntad, que si de un linage huviere avido dos, o más Capellanes consecutiva o interpolamente, sean del otro otros tantos consecutivamente, si los huviere, o interpoladamente hasta igualarse en número de Capellanes: y a falta de parientes míos, y de mi muger, sean Capellanes los que al Patrono, que por aquel tiempo fuere, nombrare, con tal, que sean Sacerdotes, y no de otra forma: y los descendientes varones, de los dichos mis tres hijos, han de suceder en esta Capellanía luego que nazcan; y en el ínterin que tienen edad para recibir la colación de ella, ha de ser a cargo del Patrón el cobrar la renta de los bienes desta Capellanía, y hazer decir las Missas de su encargo en la dicha Iglesia, y Altar (y no en otra parte) por cualquier Sacerdote, y darles la limosna acostumbra, y hazer los pagos de subsidio escusado, derechos de visita, y otros que se deban y lo que sobrare de la renta desta Capellanía, después de dada la limosna de Missas, y hechos los demás gastos, se ha de entregar para alimentos del menor, que tuviere derecho de suceder en esta Capellanía; el qual, en teniendo edad, se ha de ordenar, y recibir la colación: y passado el

tiempo en que esto se pueda hazer, no se aviendo ordenado, y pedido la colación, siendo primero requerido, y citado para ello, passe al siguiente en grado, y cumplan los descendientes de mis tres hijos con hazer decir las Missas: y los demás Capellanes, que no fueren mis parientes, u de mi muger, cumplan con hazerlas decir hasta tener veinte y seis años, u quatro años después, en el caso que va declarado, y después las han de decir ellos, y no otros: y los que no fueren mis descendientes, o parientes míos, u de mi muger, estos no pueden cumplir, sino es diciéndolas ellos por sus personas; y a todos los Capellanes, que fueren desta Capellanía, les pongo obligación de decir, o hazer decir en la forma que es declarado, una Missa cada semana perpetuamente en la Iglesia, y altar señalado, y en fin de cada año una Missa cantada con Diácono, y Subdiácono, todas por mi ánima, y de mis padres, abuelos y personas a quien puedo tener algún cargo, y los Capellanes perciban la renta de esta Capellanía, y cumplan sus obligaciones: y lo mismo hagan sus Patronos, durante la menor edad de los descendientes de mis hijos, que deban, según sus grados, suceder.

Y nombro por Patrono desta Capellanía a F. mi hijo, y a sus descendientes legítimos, varones y hembras, prefiriendo el mayor al menor, y el varón a la hembra, aunque sea de más edad: y los que fueren descendientes de varones, por su orden, y mayoría, a los descendientes de hembras: y a falta de la sucesión de mi hijo, suceda en este Patronato otro hijo mío, y sus hijos, y descendientes legítimos, varones, y hembras, en la misma forma que va declarado en el primer nombramiento de Patrono.

Y a falta de la sucesión de mis dos hijos, suceda en este Patronato F. otro mi hijo, y sus hijos, y descendientes legítimos, varones, y hembras, en la misma conformidad que el primero, y segundo nombramiento de Patronos: y a falta de la descendencia de mis tres hijos, sea Patrono, o el Prior, que es, o fuere de la dicha Iglesia, y los que le sucedieren perpetuamente; y no obste a los Capellanes, descendientes de mis tres hijos, el que concurra en ellos el Patronato desta Capellanía, o que siendo Patrono suceda en la Capellanía como Capellán respecto que no sucedan por su nombramiento, sino es por el mío; y bastará que ellos declaren, que suceden por esta razón, y conste se les pueda, y deba hazer colación desta Capellanía, tocándoles por el parentesco, y en la forma que aquí va dispuesto: y suplico al Señor Arçobispo, o su Vicario, que después de mis días ayan por fundada esta Capellanía, con las condiciones, y declaraciones, llamamientos, y nombramientos aquí expressados; y que todo se cumpla, y execute, sin alterarlo en cosa alguna, porque de innovar en cosa de las aquí dispuestas, desde luego sea ninguna esta fundación, como si no se hubiera hecho, y debaxo de esta condición, y no en otra forma, queden los dichos bienes por de Capellanía, donde no queden libres, y sin gravamen a mis herederos: y aprobándose en todo, y por todo esta fundación, se siente en los libros de visita para la cuenta que de su cumplimiento se debe tener, y se haga en los Capellanes las colaciones, con las obligaciones, y en la forma que va declarado.”

En realidad, tan extensos y farragosos formularios no eran seguidos al pie de la letra, pudiéndose encontrar instituciones de capellanías muy escuetas, aunque sí que se seguían unas determinadas reglas o patrones, presentes en todas las fundaciones, ya

fuesen mediante testamento o en escritura pública ante notario. Es el caso del testamento de Alonso Fernández de Vargas, señor de Burguillos y señor de la Higuera [de Vargas] (Badajoz), otorgado el 10 de agosto de 1390, por el que funda mayorazgo de los lugares de Burguillos [del Cerro] (Badajoz) y de Higuera [de Vargas] (Badajoz), a favor de su hijo Gonzalo Pérez de Vargas, y funda dos capellanías en la Capilla de la Iglesia de San Juan en Burguillos [del Cerro], en Badajoz mediante unas escuetas palabras, sin seguir ningún formulario al uso, si es que había alguno entonces (AHN. Sección Nobleza: Archivo de los duques de Osuna, signatura C.339,D.11-16, fol. 2r):

“En el nombre de Dios todo poderoso é de la Virgen Santa Maria, su madre, nuestra abogada. Sepan quantos esta carta de testamento é postrimera voluntad vieren, como yo Alonso Fernandez de Vargas (...) é mando dos misas cada dia dentro de la dicha capilla, é para esto mando que sean puestos dos capellanes que las digan...”

También el de Juan Sánchez de Ayala (AHPM, Fondo de Santa Clara, pergamino nº 46) vasallo del rey y regidor de Murcia, que después de las invocaciones pertinentes, en su testamento de 19 de septiembre de 1429, expresa:

“Et otros y por serviçio de Dios e descargo de mi anima, quiero e mando e establezco una capellania en la dicha orden de Santa Clara, en el altar sobredicho, e que sea la vocación de la dicha capellania de señora Santa Clara (...)”

Podía ocurrir, y era frecuente, como se ha comprobado anteriormente en los formularios de institución de capellanías, que el derecho de designación del capellán tuviese algunos límites si en las disposiciones de la fundación se ordenaba que los capellanes debían de reunir determinados requisitos o cualidades personales, como por ejemplo, preferir a nobles frente a plebeyos o exigencia de limpieza de sangre, como así manifiesta Pérez de Lara, *De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro II, cap. IV, 2, fol. 126:

“Ex quo infero licitam esse conditionem, quod Capellanes presentandus, seu eligendus sit ex nobili genere, vel purus a macula Iudaei et Mauri, vel aliis similibus”.

O como aparece en la fundación de una capellanía por Ana de Córdoba y de los Ríos, mediante testamento de 1581, en la villa de Zuheros perteneciente a la provincia de Córdoba, (AHN. Archivo de los condes de Luque, C.83,D.2, fol. 55r):

“Que aquel que hubiere de ser capellán sea clérigo Presbítero, que por su persona pueda decir las misas, que sea natural de Zuheros; que no sea de linaje de confesos, moriscos ni gitanos, y sí limpio, cristiano viejo, virtuoso, de buenas costumbres, vida y fama, y confesor expuesto por el ordinario (...)”

A las anteriores cualidades había que añadir las prohibiciones reguladas en las leyes que expresaban de forma precisa que no podían ser ordenados a título de las referidas capellanías (se entiende colativas) quienes tenían un impedimento legal y canónico hasta la remoción del mismo, como eran los que siguen: el no nacido de

legítimo matrimonio, el bígamo, ya esté viudo o viva su primera mujer, el homicida voluntario, el siervo, el que hizo penitencia pública, el que estando gravemente enfermo se bautizó por temor de la muerte, el bautizado dos veces con cierta ciencia, los extraños e ignotos (a no ser que tengan dimisorias o testimoniales de sus prelados), el hermafrodita, el que por razón de mayordomía o administración de rentas del rey o consejo está obligado a dar cuentas, la mujer y el menor de siete años⁴⁸⁶.

También se establecían las fechas y el lugar en donde debían decirse las misas y, en algunos casos, se imponía la obligación de fomentar el culto de un santo, la advocación a la Virgen o a Cristo. Se decidía si la capellanía debía ser eclesiástica o laical y, finalmente, se determinaban la forma de sucesión de capellanes y patronos, después de la muerte o renuncia de las personas que ocupaban estos cargos⁴⁸⁷:

“Primeramente, que el sacerdote que yo nombrare (h)á de decir tres missas cada semana de las del año, con obligación de decirlas en todos los domingos y fiestas del año, y ademas de las tres missas de cada semana (h)á de decir una en el dia cinco de noviembre, de cada año por el Anima de doña Beatriz Maria Duque de Estrada y Salazar, mi señora y muger, y otra en el dia del Seráfico Padre San Francisco, y otra en el dia de Santa Teresa de Jesus, y otra el dia del angel de la Guarda, y otra en la octava de los santos Martires de esta otra villa de Talavera, San Vicente y sus hermanas, mis Abogados, de cada año en esta villa, en la Iglesia Parrochial de(l) Señor San Pedro (...). Item declaro que mi ánimo es no hacer, como no hago capellania expiritualizada colativa (...). Y nombro para que diga (las) otras missas por todo el tiempo que fuere mi voluntad a el Licenciado Don Bernardino de Contononte y Estrada(...). Y después de mi fallecimiento nombro por patron a Juan Francisco Duque de Estrada y Salazar, Bravo de Lagunas, Rojas y Aiala, marqués-conde de Lanzarote, mi hijo unico, para que pueda nombrar del sacerdote que fuere su voluntad (...). Llamo y nombro por Patrono a su hijo mayor y así en adelante sus hijos y descendientes legitimos ...”

(Escritura de fundación de una capellanía por Francisco Duque de Estrada Idiáquez, en 27 de noviembre de 1673. AHG. Archivo de los marqueses de Jura Real, signatura DI 06/03, fols. 1v-4v):

Los derechos y las obligaciones de las partes quedaban establecidos en la escritura de fundación. El fundador debía aportar los medios económicos para la fundación y

⁴⁸⁶ Las Siete Partidas, Partida I, Título VI. Ley 12ª: *Quales omes non pueden rescebir Orden de Clerecia. Los que non son legitimos. Ley 14ª. cualquier que aya fecho homicidio de voluntad en algunas de las maneras sobredichas, non puede rescebir Ordenes. Ley 18ª: Que los siervos non pueden rescebir Orden de Clerecia. Ley 19ª: Publicamente auiendo alguno fecho penitencia, non puede rescebir Ordenes sagradas. Ley 20ª: Ordenes non puede rescebir, el que seyendo sano, e de edad, non se quisiessen baptizar, e después, quando enfermasse, recibiesse Baptismo por miedo de muerte. Otrosi el que fuere baptizado, o crismado, o recibiere a sabiendas una Orden dos vezes. Ley 21ª: Estraño o non conocido, seyendo alguno de aquellos que se viniesen ordenar, non le deue el Obispo dar Ordenes. Ley 23ª: Teniendo alguno officio porque deua dar cuenta al Rey, o a algun Rico-ome, o a Concejo, o a tales logares, de que touiesse algo, assi como Mayordomia o otra cosa que le semejasse, defiende Sancta Eglezia, que non se pudiesse ordenar. Ley 26ª: Muger ninguna non puede rescebir orden de Clerecia. Ley 27ª: Años contados puso el derecho de Sancta Eglezia a los que han de ser Clerigos, para poder rescebir Ordenes de Clerecia, ca si los non ouiessem, non las podrian rescebir: onde si alguno fue dado desde niño a Clerecia; desde ouiere siete años...*

⁴⁸⁷ G. von Wobeser, *La contribución de las capellanías de misas a la salvación de las almas...*, o.c., p. 7.

sostenimiento del capellán y, en recompensa, obtenía el beneficio espiritual de las misas que el capellán celebraría en favor de su alma y la de las demás personas que él designara.

El capellán, a cambio de recibir el superávit, que se obtenía por diferencia entre lo que producían o rentaban los bienes adscritos a la capellanía y el coste de mantenimiento de la institución, debía cumplir con una serie de obligaciones: oficiar el número de misas previstas, en los días y los lugares señalados, residir en el lugar señalado en la escritura de fundación y asistir y servir en las misas mayores, procesiones y demás funciones que estuviesen estipuladas. Generalmente existía cierta proporción entre el monto de la capellanía y el número de las misas a las que estaba obligado el clérigo.

Si los capellanes tenían algún impedimento para cumplir sus obligaciones, podían solicitar al obispo de la diócesis correspondiente una reducción del número de misas, un cambio de lugar para decir las misas o la autorización para nombrar a un interino o un sustituto, a fin de que dijera las misas en su nombre. Sin embargo, estas peticiones sólo eran concedidas cuando había causas debidamente justificadas. Para prevenir tal situación se solía dejar constancia en la escritura de fundación de la capellanía que ante la imposibilidad de oficiar un número excesivo de misas por un sacerdote debido a que ya tenía otras cargas, el patrono evitase el nombramiento del mismo o si ya había sido nombrado, éste debía renunciar a la capellanía, como ocurre en la ya citada escritura de fundación de una capellanía por Francisco Duque de Estrada (AHG. Archivo de los marqueses de Jura Real, signatura DI 06/03, fol. 7r):

“Item, que los Patronos que yo nombrare pongan todo cuidado y diligencia en nombrar sacerdote desocupado de cargas de Capellanias y misas de obligacion de calidad, que no han de poder nombrar sacerdote que tenga carga de mas de cien misas porque en teniendo ciento y una misas de obligacion desde luego doy por ninguno el nombramiento que en el hiciere otros Patronos.

Item, que si el sacerdote que nombraren otros Patronos (h)uviese mas de cien misas de obligación de Capellanias , le encargo no admita el cumplimiento de estas misas y sufragios, en que le encargo la conciencia con pena de la nulidad del otro nombramiento, restituir todo lo que perciviere...”

Podía ocurrir que el capellán electo fuese un menor no ordenado, en cuyo caso su tutor se encargaba de mandar decir las misas a otra persona pagándole según la limosna acostumbrada y utilizando el superávit en el mantenimiento y estudios del capellán.

Cada fundación contaba, asimismo, con un patrono, que vigilaba el buen desarrollo material y espiritual de la capellanía, y que tenía la obligación de velar por el cumplimiento de las cláusulas de la fundación, proponer el nombramiento de capellán, recibir certificación del cumplimiento de las misas y conceder licencia al clérigo que se ausentase por tiempo superior a un mes. En determinados casos, cuando faltaba el

capellán, podía mandar decir las misas y quedarse con el superávit. Además, debía estar presente cuando el Obispo o persona delegada por él visitase la capellanía⁴⁸⁸.

⁴⁸⁸ C. Castro Pérez, M. Calvo Cruz y S. Granado Suárez, *Las capellanías en los siglos XVII-XVIII a través del estudio de su escritura de fundación*, Anuario de Historia de la Iglesia, volumen XVI, Pamplona 2007, p. 340.

**Cuadro 6. Partes intervinientes en una capellanía.
Obligaciones y beneficios⁴⁸⁹.**

Fundador	
Obligaciones	Beneficio
Aportar medios económicos (capital de la fundación)	Espiritual
Definir las características de la capellanía	Material
Decretar el proceso de sucesión ante vacante	(Vincular patrimonios)
Patrono	
Obligaciones	Beneficio
Velar por el cumplimiento de las cláusulas de fundación	Prestigio social
Comprobar la celebración de misas	Poder
Proponer nuevo capellán	
Asistir a la visita de la capellanía	
Capellán	
Obligaciones	Beneficio
Cumplir las cargas espirituales	Económico
Personal residencia	
Asistir y servir en las funciones estipuladas	

⁴⁸⁹ Ibidem, p. 341.

El fundador plasmaba la voluntad unívoca de instituir una capellanía mediante el instrumento de fundación. El margen de libertad que estaba en disposición de ejercer era muy amplio⁴⁹⁰. La fundación de una capellanía podía hacerse en vida o disponerse mediante una cláusula testamentaria.⁴⁹¹ En el primer caso, el fundador llevaba a cabo los trámites de la fundación y, casi siempre, él mismo se constituía en el primer patrón. En el segundo, los albaceas eran quienes realizaban la fundación y el patronato recaía en alguno de los descendientes del fundador, en un clérigo o en una institución religiosa, según la voluntad del susodicho fundador.

Tanto las escrituras inter vivos como los testamentos no presentaban grandes variaciones respecto a la forma, sin llegar al frío y rígido formalismo que se encuentra en la documentación notarial durante el siglo XIX. Fue mucho más frecuente que las fundaciones se realizaran a través de la primera vía (en vida) que mediante la segunda (cláusula en testamento) en las colonias españolas de América, según cita Von Wobeser⁴⁹². Pero sobre lo anterior hay que precisar que, aunque cierto es que hubo muchas fundaciones erigidas en vida, el dato aportado por esta investigadora de capellanías en el virreinato de Nueva España hay que aceptarlo con cautela, pues el estudio de sesenta fundaciones de capellanías, a través de testamentos y escrituras públicas en Indias entre los siglos XVI y XVIII, tanto en dicho virreinato como en los de Perú y Nueva Granada (creado en el siglo XVIII) revela claramente que la gran mayoría se realizaron mediante última disposición o testamento del fundador, lo entra en contraposición respecto a sus afirmaciones⁴⁹³. Respecto a las islas Filipinas, según datos recogidos por Mesquida Oliver, de cuarenta y siete capellanías analizadas, treinta y una son fundadas mediante testamento, lo que refuerza lo anteriormente expuesto⁴⁹⁴.

Tras el estudio y análisis de ciento siete capellanías en distintas fechas y lugares, cabe indicar que en España, a diferencia de Hispanoamérica (Nueva España), tanto en Castilla como en Aragón y Navarra, predominaban de forma determinante los testamentos (y a veces codicilos) como una de las más características formas de establecer estas fundaciones. También en algún caso aparecen fundaciones instituidas ante notario apostólico. Véase el siguiente cuadro.

⁴⁹⁰ Las reglas establecidas en la fundación de una capellanía, como beneficio impropio, superaban con creces el marco limitativo de las generales del derecho. Véase: J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., pp. 109-110.

⁴⁹¹ Era frecuente que las capellanías se fundaran en el lecho de la muerte, cuando las personas, arrepentidas de sus pecados y ante el temor al infierno, trataban de garantizar su salvación. J. Le Goff, *La bolsa y la vida...*, o.c., p. 111. G. von Wobeser, *La función social y económica de las capellanías de misas en la Nueva España del siglo XVIII*, en Revista de Estudios de Historia Novohispana, vol. 16, Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Nacional Autónoma de México, Méjico 1996, p. 124.

⁴⁹² “Así, de 1.737 casos analizados, 1,447 (el 84%) fueron hechas en vida y sólo 290 (el 17%) mediante testamento”. Ibidem, p. 124. Así ocurre, por ejemplo, con la escritura de fundación de capellanías perpetuas realizada por Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, arzobispo y virrey de Méjico, en 11 de marzo de 1743. AHN: Diversos, 28,N.8. Véase también G. von Wobeser, *La contribución de las capellanías de misas a la salvación de las almas...* o.c., p. 5.

⁴⁹³ AGI. Casa de la Contratación de las Indias, 284,N.1 (1606); 566,N.3 (1686); 580,N.3 (1719); 583,N.4 (1733); 951,N.5 (1621) y 5662,N.1 (1768), entre otros. Véase el cuadro nº 7.

⁴⁹⁴ J. Mesquida Oliver, *La población de Manila y las capellanías de misas de los españoles: Libro de Registros, 1642-1672*, Revista de Indias, Madrid 2010, volumen LXX, nº 249, p. 477.

Cuadro 7. Formas utilizadas para fundar capellanías⁴⁹⁵.

FUNDADOR	FECHA	INSTRUMENTO DE FUNDACIÓN	LUGAR
SIGLO XIII			
Constanza de Moncada	15-12-1249	Escritura pública	Serós. L
Doña Violante, reina	10-09-1251	Escritura pública	Barbastro. HU
García de Torquemada	1257	Escritura pública	Tórtolas. CU
Infante don Manuel	1261	Testamento	Murcia
Gutierre Armendiz	1267	Testamento	Toledo
Juan Álvarez, obispo	12-09-1296	Testamento	Valladolid
SIGLO XIV			
Juan G ^a II de Villamayor	1302	Testamento	
Juan Núñez de Lara	08-10-1346	Escritura pública	Burgos
Pascual de Teresa	21-02-1351	Testamento	Rubielos. TE
Miguel Jiménez de Alagón	30-01-1369	Escritura pública	Huesca
García Ximénez Ponz	31-05-1377	Testamento	Tarazona. Z
Elvira Sánchez	06-12-1380	Testamento	Rubielos. TE
Juan I de Castilla	21-03-1385	Testamento	Toledo
Pedro González de Mendoza	02-05-1385	Testamento	Toledo
Juan Ramírez de Arellano	29-10-1385	Testamento	Soria
Alonso Fdez. de Vargas	10-08-1390	Testamento	Burguillos. SE
SIGLO XV			
María Álvarez Nieto	30-03-1416	Testamento	Ledesma. SA
Pedro Díaz de Quesada	20-01-1421	Testamento	Baeza. J

⁴⁹⁵ AHN. Sección Nobleza: Archivo de los condes de Luque, signaturas C.21,D.62; C.83,D.2; C.117,D.12; C.146,D.6; C.454,D.115; C.455,D.2-3 y C.456,D.26-27,41,43-46. Archivo de los condes de Priego, signaturas C.4,D.67-68; C.6,D.29 y C.9,D.2. Archivo de los duques de Frías, signaturas C.236,D.5-6; C.238,D.14 y C.268,D.1-5. Archivo de los duques de Parcent, signaturas; C.23,D.4; C.41,D.5; C.81,D.9; C.90,D.6,15; C.92,D.2; C.93,D.2 y C.157,D.14. Archivo de los señores de Cameros, signatura C.1,D.3. Archivo de los duques de Osuna, signaturas C.73,D.1-8; C.192,D.49; C.339,D.11-16; C.141,D.9, D.64-65; C.3519,D.154 y C.541,D.80-81 (ducado de Gandía). Archivo de los condes de Alba de Yeltes, signatura C.10,D.26-27. Archivo de los condes de Toreno, C.4,D.53. Archivo de los duques de Baena, C.141,D.1-59. AHN. Clero Secular Regular, Carp.620, N.3 y 667,N.15. AHG. Archivo de los marqueses de Jura Real, signaturas DI 006/03, 019/05, 08, 09, 11 y 13, 047/02 y 050/23. ARV. Protocolos de los notarios Vicente Ignacio de Attucha, 1792, signatura 4867, fols. 40r-45v; Carlos Borja, 1701, signatura 4496, s/f; Jacques Furió, 1799, signatura 6278, fols. 222v-235v y Timoteo Ferriz, 1799, signatura 5711, fols. 156v-158v; Propiedades Antiguas, legajos 17, 35 y 66. Justicia Civil, Manaments i Empars, 1606, Libro 3, mano 28, fols. 32r-49v y 1612, Libro 4, mano 38, fols. 12r-34v. ARV. Clero, Trinidad, legajo 320, caja 853, nº 11. RAH. Colección Salazar y Castro, signaturas 9/285 (fols.151-156 y 239-240), 9/289 (fols. 263-265) y 9/291 (fols. 176-185 y 188-192). RAH. Índice de la Colección Salazar y Castro, M-8 (nº 47017); D-10 (nº 20122), M-131 (nº 58004). US. Biblioteca. Fondo Antiguo, legajo 609-07. G. González Dávila, *Historia de la vida y hechos del rey don Henrique Tercero de Castilla*, o.c., fol. 60. J. Loperraez Corvalán, *Colección diplomática...*, o.c., p. 240 y 242. P. Sañz de Baranda, *España sagrada*, o.c., p. 261. M. Rodríguez Llopis e I. García Díaz, *Iglesia y sociedad feudal...*, o.c., p. 89. M. Ortiz Nozal y F. Gordaliza Aparicio, *Los Colmenares-Hurtado de Mendoza a través de una capellanía palentina*, Publicaciones de la Institución Tello de Meneses, nº 77, Palencia 2006, p. 201. L. de Salazar y Castro, *Historia genealógica de la Casa de Lara*, Madrid 1696, tomo I, fol. 465.

Diego García de Chaves	21-06-1423	Escritura pública	Ciudad Rodrigo.SA
Inés Gutiérrez de Haro	20-09-1426	Testamento	Sevilla
Juan Sánchez de Ayala	14-09-1429	Testamento	Murcia
Inés de Ayala	21-04-1430	Testamento	Toledo
Marta de Orellana	08-04-1454	Testamento	Talavera. TO
María Álvarez de Coca	10-02-1455	Testamento	Toro. ZA
Constanza de Rojas	01-05-1481	Testamento	Écija. SE
Álvaro de López de Zúñiga	21-07-1486	Testamento	Béjar. SA
Pedro Ponce de León	30-04-1490	Testamento	Zafra. BA
Inés Girón	29-12-1493	Testamento	Córdoba
Sancho Sánchez de Toledo	11-09-1494	Testamento	Segovia
Teresa de Haro	30-05-1496	Escritura pública	Toledo
Juan de Borja,duque Gandía	1493	Escritura pública	Gandía.V
SIGLO XVI			
Francisca Álvarez	13-08-1503	Testamento	Granada
Fernan Gómez de Solís	07-11-1507	Testamento	Salvatierra. ÁLAVA
Pedro Garcés de Marcilla	28-01-1522	Testamento	Molina Aragón.GU
Domingo Ginés	14-03-1523	Testamento	Zaragoza
Juan de Rojas Guzmán	16-07-1523	Testamento	Écija.SE
Juan de Villanueva	10-03-1531	Escritura pública	Jaca. HU
Gonzalo de Cañete	26-10-1531	Testamento	Córdoba
Beatriz de Sousa	1533	Testamento	S. Martín Vald.M
Pedro Esquinas	31-05-1535	Testamento	Valladolid
Juan Venegas	30-10-1537	Testamento	Córdoba
María Venegas de Córdoba	05-10-1538	Testamento	Luque.
Eufrosia de Padilla	28-08-1544	Codicilo	Úbeda. J
García de Villarreal,cgo	04-05-1552	Escritura notario ap	Pareja. GU
Elvira de los Ríos	05-09-1553	Testamento	Zuheros. CO
María Fdez. Benítez	07-06-1555	Testamento	Luque.CO
Mª Fdez. Córdoba Venegas	08-07-1556	Testamento	Córdoba
Íñigo López de Mendoza	01-09-1561	Escritura pública	Guadalajara.
Pedro Mtz. De Ruesta, cgo	15-10-1565	Testamento	Albarracín. TE
Alonso Osorio	14-11-1568	Testamento	Salamanca
Fco. Méndez de Arellano	24-01-1570	Testamento	Talavera.TO
Ana Zapata	08-09-1574	Testamento	Granada
F. Blanco de Salcedo, arzob.	25-04-1581	Testamento	Capillas.P
Juana Carrillo de Albornoz	17-08-1581	Testamento	Madrid
Ana de Córdoba	04-11-1581	Testamento	Zuheros.CO
Elvira de los Ríos	09-04-1590	Testamento	Zuheros.CO
María de Montoya	31-05-1590	Testamento	Brihuega.GU
María de Córdoba	15-06-1592	Testamento	Zuheros.CO
Diego de Anzures	10-07-1592	Testamento	Brihuega. GU
Miguel Barco	29-10-1597	Testamento	Madrid
SIGLO XVII			
Ana de Barros	20-11-1600	Testamento	Segovia
Vicente Romeu	21-03-1604	Escritura pública	Torrente.V
Juan de Barros	27-02-1604	Testamento	Segovia

Elvira Ana de Córdoba	10-08-1605	Escritura pública	Córdoba
Juan Mancebón de Leca	13-01-1606	Testamento	Orihuela
Mateo de Moradillo	10-06-1606	Testamento	Alcalá Henares.M
Martín Alonso Montemayor	17-11-1606	Testamento	Luque. CO
Diego de Covarrubias	10-10-1606	Testamento	Valencia
Ana de Barros	27-02-1609	Codicilo	Segovia
María Téllez-Girón	27-02-1608	Testamento	Madrid
Pedro de Colmenares	16-06-1611	Testamento	Herrera d Pisuer.VA
Juan Fdez. de Velasco	15-03-1613	Testamento	Madrid
Luis Blanco de Salcedo	06-07-1613	Testamento	Meneses.P
Catalina Carrillo de Guzmán	12-12-1613	Testamento	Talavera.TO
F. Blanco de Salcedo, cgo.	05-08-1616	Testamento	Valladolid
Catalina de Saavedra	15-01-1618	Testamento	Córdoba
María de Contreras	23-02-1619	Testamento	Granada
Fernán López Galíndez	08-08-1620	Testamento	Sevilla
Fca. Fdez. de Córdoba	07-01-1623	Codicilo	Granada
Tomás Pasquier de Eguarás	14-11-1627	Testamento	Madrid
Diego Jiménez	10-04-1634	Testamento	Arnedo.LO
María Hurtado	06-10-1636	Testamento	Alcalá Henares.M
Magdalena de Eguarás	20-04-1645	Testamento	Tudela.NA
Francisca de Lisón	20-12-1645	Testamento	Granada
Francisco de las Cuevas	08-06-1649	Testamento	Sevilla
Dionisia de Eguarás	06-02-1651	Testamento	Tudela.NA
Pedro de Caspe	20-08-1651	Testamento	Valencia
Esteban de Cervantes	06-11-1651	Testamento	Madrid
Melchor de Borja y Velasco	24-09-1655	Testamento	Madrid
José Domingo de Prado	03-09-1662	Testamento	Granada
Bernardo de Mena	26-12-1665	Testamento	Ablitas.NA
Fco. Duque de Estrada	27-11-1673	Escritura pública	Talavera.TO
María Francisca Eraso	01-06-1687	Testamento	Écija.SE
Ana M ^a de Córdoba Zayas	12-03-1695	Testamento	Madrid
SIGLO XVIII			
Vicente Mompó	18-05-1701	Escritura pública	Ollería. V
Pedro Dávalos Maza	06-08-1701	Testamento	Valencia
Gonzalo de Velasco	28-02-1703	Testamento	Valladolid
Alonso de Arellano	15-06-1713	Testamento	Talavera.TO
Mateo de León y Arellano	18-11-1713	Testamento	Ávila
Antonio Pardo	17-11-1734	Testamento	La Coruña
Juan Comeche	05-07-1737	Escritura pública	Valencia
Domingo Gil de Castro	28-11-1759	Testamento	Sta. Marina de Sela.PO
Vicenta Antonia Frígola	05-02-1792	Testamento	Valencia
Antonia Martínez Pedrón	31-07-1796	Testamento	Requena. V
Josefa Ponce Fdez. de Arcas	05-06-1797	Testamento	Requena. V
Pascual Ibiza Martínez	05-06-1797	Testamento	Turís. V
Vte. Ruiz de Lihory	07-08-1799	Escritura pública	Valencia
Luis Matoses Muñoz	24-10-1799	Testamento	Valencia

Cuadro 8. Formas utilizadas para fundar capellanías en y desde Indias.⁴⁹⁶

FUNDADOR	FECHA	INSTRUMENTO FUNDACIÓN	LUGAR
SIGLO XVI			
Francisco Martín	1541	Testamento	Zamora
Diego de Sevilla	10-06-1558	Testamento	Córdoba
Juan García y Ahumada	24-11-1562	Testamento	Montilla. CO
Martín de Barrientos	13-09-1563	Testamento	Bembibre. LE
Martín Peña	21-01-1564	Testamento	Aracena. H
Antón Recio	20-06-1571	Testamento	Cumbres Mayores. H
Juan Pérez de Peñalosa	1578	Testamento	Jaén
Cristóbal Rguez de la Serna	29-05-1579	Testamento	Mérida. BA
Pedro Ortíz de Elgueta	20-11-1579	Testamento	Acebuchal. BA
Melchor Ramírez	29-05-1581	Testamento	Puebla deMontalbán. TO
Pedro Díaz de Rojas	01-03-1583	Testamento	Andujar. J
Antonio Pérez Carneiro	20-04-1586	Testamento	Sines. PORTUGAL
Hernando de Palma	28-11-1586	Testamento manc.	Sevilla
Ana de Palma	28-11-1586	Testamento manc.	Sevilla
Fco. Díaz de Carvajal. SE	16-12-1586	Testamento	Los Reyes. PERÚ
Andrés Martín del Canto	1590	Testamento	Alcalá
Andrés López d Mirandaola	26-09-1590	Testamento	Segura. GUIPÚZCOA
Luis de Quesada	22-01-1592	Testamento	Baeza. J
Pascual Fernández	13-05-1592	Testamento	Lónguida. NA
Rodrigo de Herro	07-07-1597	Testamento	Cascante. NA
Martín López de Salcedo	27-12-1599	Testamento	Constantina. SE
SIGLO XVII			
Alonso Álvarez de Armenta	20-01-1600	Testamento	Sevilla
Fco. Del Peso Cañas	19-12-1600	Testamento	Burgos
Martín de Salazar	14-01-1603	Testamento	Sevilla
Fco. Muñoz de Monforte	03-02-1607	Testamento	Puebla Río Gordo. MA
Juan Román Sedeño	06-04-1610	Testamento manc.	Ronda. MA
Ana de Inzaurraga	06-04-1610	Testamento manc.	Ronda. MA
Martín López de Elorza	25-08-1611	Testamento	Oñate. GUIPÚZCOA
Fco. Fernández Regodón	09-03-1612	Testamento	Trujillo.CC
Juan de Landeta	09-12-1612	Testamento	Azpeitia. GUIPÚZCO
Benito Cid. OR	1613	Testamento	Quito. PERÚ
Giner de Pineda	18-11-1613	Testamento	Rota. CA
Pedro Rodriguez Pinto	25-04-1615	Testamento	Villabrágima. VA

⁴⁹⁶ AGI, Contratación, 215,N.1,R.11; 234,N.2,R.9 y 10; 246,N.2,R.1; 254,N.1,R.1; 274B,N.1,R.14; 284,N.1,R.2; 312A,N.12; 314B,N.10; 323A,N.1,R.2; 328,N.1,R.4; 338,N.1,R.3; 349A,N.2,R.16; 363A,N.6; 364,N.2482,N.1,R.1; 365,N.1,R.8; 368,N.7,R.1; 375A,N.4; 418,N.3,R.1; 425B,N.1,R.7 y N.2,R.3; 437,N.3,R.2; 451A,N.1,R.3; 462B,N.14; 469A,N.1; 474B,N.3,R.2; 485,N.4,R.12; 527,N.1,R.4; 535,N.1,R.8; 536,N.1,R.2; 538,N.7; 561A,N.1; 566,N.3; 569,N.2,R.6; 574,N.20,R.3; 580,N.3; 583,N.4; 920,N.34; 922B,N.23; 929A,N.11; 930,N.26; 931,N.2 y N.3; 944B,N.3,R.20; 951,N.5; 973,N.3,R.5; 5575; 5583,N.51; y 5602,N.1,R.1; AHN, Diversos, 28,N.8; 5662,N.1. AHN, Sección Nobleza: Archivo de los duques de Baena, C.102,D.2. A. F., García-Abasolo González, *Inversiones indianas en Córdoba. Capellanías y patronatos como entidades financieras*, en: Andalucía y América en el siglo XVI. Actas de las II Jornadas de Andalucía y América, volumen I, Huelva 1983, pp. 435-436.

Gonzalo Vázquez	12-03-1616	Testamento	Jerez d losCaballeros.BA
Fernando de Carvajal	11-06-1617	Testamento	Las Brozas. CC
Gaspar Álvarez	22-02-1619	Testamento	Torija. GU
Alonso de Jerez	10-05-1619	Testamento	Medina Sidonia. CA
Fco. Martín de Rivera	26-07-1621	Testamento	Huévar. SE
Pedro Suárez Cornejo	10-12-1621	Testamento	Garrobillas. CC
Gabriel de las Muñecas	16-11-1630	Testamento	Castro Urdiales. S
Miguel de Heredia	06-02-1631	Testamento	Adamuz. CO
Lope Vélez de Céspedes. H	12-03-1631	Testamento	Acari. PERÚ
Juan Gómez Escudero	12-06-1632	Testamento	Puebla Sancho Pérez.BA
Diego de Cárdenas	31-12-1636	Testamento	Colmenar de Oreja. M
Sebastián Ruiz Enebro. VA	27-09-1637	Testamento	Méjico
Juan González Mayoral	12-07-1641	Testamento	Almoharín. CC
Alonso Cabezas de Herrera	11-03-1642	Testamento	Don Benito. BA
Fco. Vitoria de Palacios	14-08-1647	Testamento	Castrojeriz. BU
Diego Ojalvo	06-04-1656	Testamento	Cáceres
Pedro Ordóñez	07-07-1663	Testamento	Alcaraz. AB
Rodrigo Alonso CabañasBA	01-09-1668	Testamento	Nueva Valencia VENEZ
Antonio López de Zuloeta	03-08-1679	Testamento	Mondragón. GUIP
Juan de Anguciana	16-09-1681	Testamento	Brihuega. GU
Rafael de San Martín	12-07-1686	Testamento	A voluntad en España.
SIGLO XVIII			
Andrés Roldán Ponzán	28-09-1701	Testamento	Tarazona. Z
Sebastián Prieto Vélez	17-09-1711	Testamento	Cos. SANTANDER
Manuel Rodríguez Díaz	16-11-1716	Testamento	Sevilla
Fco. De Villanueva Velasco	17-08-1733	Testamento	Zurita d Pagajanes.BU
Juan de Vizarrón. CA	11-03-1743	Escritura pública	Méjico
Ignacio Recalde	19-11-1768	Testamento	Elgueta. GUIPÚZCOA

Ejemplos de los dos distintos casos de fundación de una capellanía son los que siguen:

“En el nombre de Dios Nuestro Señor y de la Santísima e Inmaculada Virgen María, su Madre y Señora (...) Sépase por esta pública escritura de testamento, última y final voluntad, como Yo, doña Vicenta Antonia Frígola y Pasqual de la Verónica, baronesa de Benidoleig y dueña del Lugar de Benitandús, viuda del doctor Joaquín de Scales y Villarasa, Juliá, Ribot y Funes, barón que fue de Benimuslem y el Puchol (...) que se lleve a cabo la fundación de la capellanía del Lugar de Benitandús (...)”

(ARV. Testamento de la baronesa de Benidoleig, de 5 de febrero de 1792, Protocolos del notario Vicente Ignacio de Attucha, 1792, signatura 4867, fols. 40r-45v).

“En el monasterio de S. Agustín de la Villa de Mansilla de las Mulas, diócesis de León, a 25 de marzo de 1572, ante Juan Méndez, escribano del número (...) pareció el Ilustre Sr. D. Fernando de Acuña, señor de la Villa de Villafame, y dijo que él tenía devoción de hacer y dotar una Capilla y Capellanía en el otro monasterio (...)”

(Archivo de los señores de Matadeón. Colección Salazar y Castro, 20642, signatura: 9/289, fols. 369r y 370r de la RAH).

“Sepan todos como yo, Vicente Mompó, hijo de Juan, ciudadano, habitante de la presente villa de la Ollería (...) para alabanza y gloria del Gran Dios y de Nuestro Señor Jesucristo y de la Inmaculada Siempre Virgen María, su madre (...), por esta presente y pública escritura que en todos tiempos aquí y en todas partes, firme y perpetuamente ha de valer y que no ha de violarse y revocarse en cosa alguna, instituyo, fundo y erijo un simple, perpetuo y eclesiástico beneficio en la Insigne Parroquia de Santa María, de la dicha y presente villa (...)”

(ARV. Escritura de fundación y dotación de un beneficio simple o capellanía en la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena de la Ollería, ante el notario Pedro Soler, en 18 de mayo de 1701. Propiedades Antiguas. Legajo 17, fols. 11r-21r).

Se ha podido apreciar que respecto a la estructura de la escritura de fundación⁴⁹⁷, comienza con el nombre de su creador y la razón que origina su institución. Si se trata de una capellanía eclesiástica o colativa, una de las razones de su establecimiento era la imposibilidad del párroco para atender todas sus obligaciones espirituales debido a la gran cantidad de misas cantadas y rezadas, entierros, velatorios, etc, con lo que se pide autorización para instituir la capellanía con las misas rezadas, las cuales se anotaban en una “*Memoria de Misas*” y poder ordenar a otra persona para que se ocupe de la fundación. La constitución de una capellanía no eclesiástica normalmente se realizaba para perpetuar la memoria del fundador y de su familia mediante un número de misas oficiadas anualmente además de, en otros casos, asegurar el futuro de diversos familiares que aspiraban a seguir la carrera eclesiástica.

⁴⁹⁷ C. Castro Pérez, M. Calvo Cruz y S. Granado Suárez, *Las capellanías en los siglos XVII-XVIII...*, o.c., p. 342.

A la escritura se adjuntaba la relación de Memorias de Misas que constituían las cargas espirituales impuestas sobre la capellanía. La estructura de dicha memoria era la siguiente: en el margen izquierdo del folio se anotaba el número de misas, el nombre de quien había impuesto dichas misas, el lugar donde se celebraban, el importe de la limosna y el número de folio correspondiente en el libro de relaciones de capellanías, donde se detallaban tanto las capellanías como las misas. En el margen derecho se anotaba el importe de las rentas que correspondían a esa anotación.

La Memoria de Misas finalizaba con la suma de los totales de las misas y rentas y con el otorgamiento del fundador de los bienes afectos al cumplimiento de las cargas espirituales, por lo que, en consecuencia, dichos bienes eran retirados de la circulación.

Una vez formalizada la institución por el fundador, que es, en realidad, una mera declaración de voluntad unilateral o de parte, debe ser aceptada y reconocida por la Iglesia para surtir plenos efectos, el proceso queda sometido al derecho canónico. El primer momento lo constituye la erección de la capellanía. La misma se tiene que instruir en un expediente que contenga declaraciones testificales, cuantía y detalle de los bienes, cargos propuestos, constituciones o reglas de la capellanía y solicitud dirigida al obispo para que erija la capellanía, realizada por el fundador o sus albaceas.

La mencionada solicitud suele constar en la misma escritura de fundación de la capellanía, al final de la misma, como ilustra el caso de la establecida por Vicente Mompó, al folio 20v:

“Y suplico al Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo de Valencia o a su Ilustre Vicario General, el que se digne a admitir la presente institución. Signado. Testigos.”

Terminado el proceso, se pasa a emitir el decreto de adjudicación, erección, aprobación y confirmación de la fundación, como ilustra el Decreto de erección de la capellanía anterior al mismo folio 20v, redactado a continuación de la escritura de fundación, ratificando de forma rapidísima, en un solo día, dicha fundación:

“Nos Don Martín López de Vergara, doctor en ambos Derechos, abogado de los Reales Consejos y de las causas del Santo Oficio de la Inquisición y por el Ilustrísimo Sr. D. Fray Antonio Folch de Cardona, por la Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Valencia, del Consejo de Su Majestad, estando en la presente ciudad y Diócesis de Valencia, Oficial y Vicario General, en la primera escritura de institución del arriba dicho beneficio nuevamente erigido y en todas las cosas contenidas en el mismo, interponemos nuestra autoridad e igualmente el Decreto judicial para robustez y firmeza de las mismas cosas. Dado en el Palacio Arzobispal de Valencia, a diez y nueve de mayo del año de la Natividad del Señor de mil setecientos y uno. Firmado. Doctor Martín López de Vergara, Vicario General.”

Posteriormente, se adjuntaba a la escritura de fundación la presentación del capellán ante el provisor para hacer la colación y canónica institución, mediante la emisión de un decreto por parte del obispo erigiendo la capellanía como colativa y haciendo colación, canónica institución e imposición del bonete al primer capellán de la

misma. Estos trámites son realizados en nombre del obispo por el oficial provisor y vicario general. Por tanto, se trata de la constitución de un beneficio eclesiástico simple no curado, a todos los efectos. El nombramiento del capellán hace tomar en consideración de las rentas del patrimonio como renta eclesiástica, en tanto que fruto de bienes espirituales. El mismo podrá “colacionar” dicha renta, para alcanzar la congrua que le permita, por ejemplo, ordenarse presbítero y, a su vez, optar a beneficios que exijan tal grado.

“Nos Don Martín de Vergara, presbítero, doctor en ambos Derechos (...) A nuestro amado en Cristo, Félix Mompó, clérigo de la diócesis de Valencia, salud en el Señor. La honestidad de vida y costumbres y otros loables méritos de probidad y virtudes, con que el altísimo adornó la persona nos conducen, con razón, a que seamos liberales en hacerle gracia; por lo que el simple beneficio nuevamente instituido y fundado en la parroquial Iglesia de la villa de la Ollería, diócesis de Valencia, en el altar y capilla del Santo Crucifijo y bajo la advocación y honor de San Vicente Ferrer, por Vicente Mompó (...) según consta por la fundación recibida por Pedro Soler, notario de dicha villa, en diez y ocho de mayo de mil setecientos y uno, decretado por el Muy Reverendísimo Señor Vicario General el diez y nueve de los corrientes, se halla al presente vacante de su primera erección o fundación. (...) a que si el enunciado Félix Mompó, clérigo, que ha sido examinado y hallado hábil e idóneo para obtenerlo, y como benemérito, conferimos y también asignamos el referido beneficio, y lo proveemos de él, e instituimos en el mismo, con todos los derechos y pertenencias en su general; y en su virtud, hallado el presente, lo investimos en el mencionado beneficio por medio de la imposición del bonete en tu cabeza, hecha por Nos, con el proveído de que el referido beneficio haga residencia personal, cumpliendo con el oficio y servicio a él debido, según se debe hacer. Y su fundación exige y requiere que seas siempre bueno, obediente y fiel a dicho Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Arzobispo (...) y lo mantengas y defiendas intacto, en fuerza de la obediencia manual que nos has prestado y juramento corporal hecho ante Nos (...). Dado en el Palacio Arzobispal de Valencia a veinte y un días de mayo de mil setecientos y uno.”

Ortiz de Salcedo, con ligeras variaciones, ya lo recoge con anterioridad en un modelo de formulario en latín, en el que se realiza la colación de la capellanía y que es el que sigue a continuación⁴⁹⁸:

“Nos N. &. Dilecto nobis in Christo N. &c. salutem in Domino sempiternam, vitae ac morum, &c. Cum itaque sicut accipimus, perpetua Cappellania Ecclesiae de N. fundata per quondam N. cuius collatio post Patroni praesentationem, ad Nos pertinet, quam quondam N. illius ultimis possessor, dum vixit, obtinebat per ipsius N. obitum (qui nuper diem suum clausit extremum) vacaverit, & vacet ad praesens. Nos tibi praemissorum meritorum tuorum intuitu specialem gratiam facere volentes, Cappellaniam praedictam sic ut praemittitur vacantem, ad quam per eius modernum patronum coram nobis nominatus, & praesens existis cum omnibus iuribus, & pertinentiis suis tibi

⁴⁹⁸ F. Ortiz de Salcedo, *Curia eclesiástica*, Madrid 1733, fols. 82-83.

authoritate nostra ordinária conferimur per praesentes. Quo circa, &c. In quorum fidem”.

Para finalizar todo el proceso de fundación de la capellanía se realizaba el acto de toma de posesión física de los bienes a cargo del vicario o, en su caso, del alguacil de la iglesia en cuya jurisdicción estaban situados. Dicho ceremonial, similar al que recoge Ortíz de Salcedo en sus formularios⁴⁹⁹, se refleja con exactitud en la descripción que se hace por el notario en la ya anteriormente mencionada capellanía de Vicente Mompó, al folio 46r:

“Día veinte y cinco de mayo de mil setecientos y uno. En el nombre de Dios, así sea. Sepan todos, como en el año de la Natividad del Señor de mil setecientos y uno, día titulado veinte y cinco del mes de mayo, entre las siete y ocho horas de la mañana, a presencia de mí, Pedro Soler, notario, y de los testigos infraescritos, llamados y rogados especialmente para esto, constituido Gregorio Riera, presbítero, doctor en Sagrada Teología, vicario temporal de la Iglesia Parroquial de la presente villa de la Ollería, como executor y comisario elegido por Félix Mompó, clérigo beneficiado en la dicha Iglesia parroquial del beneficio allí fundado, en la capilla de Santo Crucifijo, bajo la invocación de San Vicente Ferrer, en virtud y ejecución de unas letras expedidas a instancia de dicho Félix Mompó por Don Martín López, presbítero, doctor en ambos Derechos (...), y por el Ilustrísimo y Reverendísimo Sr. D. Fray Antonio Folch de Cardona (...), en el día veinte y uno de los corrientes, mes y año, por cuanto se dio colación del arriba mencionado beneficio eclesiástico al referido Félix Mompó, clérigo, el antedicho D. Gregorio Riera, presbítero, llevó la mano derecha por dicha parroquial Iglesia al dicho Félix Mompó hasta el altar del Santo Crucifijo de la misma iglesia, y al punto, lo abrió y cerró; después le entregó el libro misal, en el que el dicho Félix Mompó leyó la oración de San Vicente Ferrer y recibió también un cáliz y patena de plata en señal de verdadera, real, actual y corporal posesión, la cual recibía del dicho beneficio eclesiástico (...) de que se le dio colación sin contradecirlo ni perturbarlo ninguno.

Y ante dicho Félix Mompó requirió el que yo, dicho notario, le hiciese todas y cada una de las cosas antedichas en escritura pública para tener memoria en lo venidero, y para todos los efectos que le fuesen más hábiles y necesarios (...)

⁴⁹⁹ *“In nomine Domini. Amen. En tal parte, tal día, mes y año, ante mí el presente Notario, y testigos infrescritos, pareció N. y requirió con las letras de esta otra parte, de título, y colación del Reverendísimo señor N. Obispo de tal parte, a N. Cura, o Teniente de tal Iglesia, que en virtud de ellas le dé posesión real, actual, corporal, vel quasi, de tal Capellanía en las dichas letras contenida, sita en la dicha Iglesia, y de sus frutos y rentas. Y el dicho Cura, (h)aviendo visto las dichas letras, las obedeció y aceptó, y en su cumplimiento le dio... la dicha posesión real, actual, corporal, vel quasi, de la dicha Capellanía, y de sus frutos y rentas, tomándole por la mano, y metiéndole en la dicha Iglesia, y le llevó al Altar mayor, (h)aviendo tomado agua bendita, a hacer oración al Santísimo Sacramento y le metió en la capilla, y llevó al altar donde está sita la dicha Capellanía, y tocó una campanilla, y rezó tal oración. Todos los cuales dichos actos hizo en señal de la dicha possession, quieta y pacíficamente, sin contradicción de persona alguna, y lo pidió por testimonio y lo firmó de su nombre, juntamente con el dicho cura, siendo testigos, &c.”.* F. Ortiz de Salcedo, *Curia eclesiástica*, o.c., fols. 260 y 261.

A partir de dicho momento, en la parroquia donde se encontraba la capellanía se debían conservar los instrumentos fundacionales y un registro de bienes y de cumplimiento de cargas. Periódicamente, cada tres años, las capellanías eran visitadas conjuntamente con sus parroquias, como es el caso de la visita general realizada el 3 de mayo de 1630 por D. Francisco Pérez Roy, canónigo y visitador de los partidos de Alcalá, Guadalajara y Brihuega, a la capellanía fundada mediante disposición testamentaria por Frey Diego de Anzures y Guevara, del Hábito de San Juan, en 10 de octubre de 1592, en el convento San Idelfonso de las Religiosas Jerónimas de dicha villa⁵⁰⁰. La visita consistía en una inspección general a que se sometían, de forma periódica, las distintas parroquias, cabildos y otros establecimientos eclesiásticos, y era consecuencia de las medidas tomadas en el Concilio de Trento. También en la organización civil de la monarquía estaba previsto un régimen de visitas parecido. Por lo tanto, fácilmente se puede convenir que la fundación de capellanías ofrecía un régimen más que atractivo a los fundadores por la posibilidad de perpetuar sus patrimonios⁵⁰¹.

11.- FUNDACIÓN DE CAPELLANÍAS EN INDIAS.

A través de los legajos que se conservan en el Archivo General de Indias (AGI), concretamente en Casa de la Contratación, se ha analizado una rica y variada documentación recogida en la institución llamada *Bienes de Difuntos*, un organismo de tutela regia puesta en funcionamiento por los Reyes Católicos, cuyos expedientes contienen un conjunto de bienes localizados en Indias, cuyos poseedores, fallecidos allende los mares, carecían de herederos o legatarios naturales en aquellas tierras. En consecuencia, se planteaba la indeterminación del responsable o responsables de la tutela de los bienes en cuestión hasta la sucesión de los mismos por los legítimos herederos, ya que encontrar la muerte en Indias, lejos de la patria y de los herederos que habrían de recibir el usufructo de una vida, planteó a la monarquía la necesidad de confeccionar un sistema que garantizase la correcta llegada a su destino de dichos bienes de difuntos, como dio en llamarse en el derecho indiano. Dicha institución velaba por la preservación del patrimonio y bienes de los fallecidos debido a la indefensión en que se encontraban y que se exponían a fraudes y abusos. La regulación de todo este proceso de tutela y transmisión de estos bienes comenzó en 1504 y duró hasta 1680, recogido en la legislación de la llamada Recopilación de las leyes de Indias.

El interés que suscitan los expedientes generados por estos autos de bienes de difuntos radica en su abundante diversidad documental, compuesta por multitud de documentos variados, entre testamentos, legados, inventarios y tasación de bienes, almonedas, resoluciones de cuentas, partidas de bautismo, fe de registros, cartas de diligencias, pedimientos, probanzas, autos de adjudicación y cartas de pago; una diversidad que deriva de los numerosos trámites y gestiones que debían efectuarse tanto en los Juzgados de Indias como en la propia Casa de la Contratación, hasta que los herederos recibían la herencia que les había sido legada, una vez localizados tras la apertura del testamento (o expediente ab intestato), y una vez reducidos los bienes en numerario (mediante inventario y tasación) por medio de pública almoneda. Con el efectivo resultante se pagaban las deudas del difunto (gastos de entierro y del proceso) y el remanente era enviado a la Península (al Arca de Tres Llaves de la Contaduría

⁵⁰⁰ AHG, Archivo de los marqueses de Jura Real, signatura DI 47/01.

⁵⁰¹ J. Arroyo Vozmediano, *Capellanías de la vicaría de Viana...*, o.c., p. 50.

Principal de la Casa de Contratación, responsable de la custodia). Mediante carta de diligencia se localizaba a los herederos y beneficiarios, los cuales debían demostrarlo mediante documentos, y se les entregaba la cantidad correspondiente. Caso de no aparecer herederos, o no se probaba su vinculación con el finado, o se rechazaba el caudal hereditario, tras un tiempo prudencial los bienes eran declarados vacantes y pasaban al Erario Real⁵⁰².

En este caso, tras el estudio de más de cuarenta y cinco expedientes cuidadosamente seleccionados, la investigación se ha centrado en los testamentos cuyas disposiciones o cláusulas contienen la fundación de capellanías, complemento muy interesante de los documentos de bienes de difuntos. Las conclusiones extraídas son las siguientes:

Según diversos autores iberoamericanos (G. von Wobeser, P. Martínez López-Cano, A. Levaggi) la fundación de capellanías fue una práctica frecuente y muy difundida en Indias, aunque hay una excepción respecto a las islas Filipinas, donde esta institución fue en número y frecuencia algo escasa al encontrar pocas fundaciones, posiblemente debido a dificultades demográficas (enfermedades, alzamiento de los chinos, ataques de holandeses), económicas (competencia de artesanos y labradores chinos, limitación del comercio), orográficas (terremotos, incendios) y ambientales (clima tropical). Así, según Mesquida Oliver⁵⁰³, la primera capellanía que se instituyó desde Filipinas fue en 1583 por el capitán Hernando Ramírez Plata, doce años después de la fundación de Manila por el Adelantado Miguel López de Legazpi, a pesar de diversas expediciones de pobladores entre 1572 y 1578. La fundación más antigua en dichas islas que consta en el Archivo General de Indias está recogida en una cláusula del testamento de Andrés López de Mirandaola, en 26 de septiembre de 1590. Desde esa fecha hasta el siglo XVIII aparecen pocas capellanías, casi todas fundadas en el siglo XVII.

Lo cierto es que hay que diferenciar la institución de estas fundaciones más allá de la Península y el caso, evidente y numeroso, de quienes emigrados a las posesiones americanas para hacer “carrera de Indias”, mediante testamento, en su mayoría, fundaban capellanías en la metrópoli, concretamente en sus lugares de origen.

Así, se aprecia que todos los testamentos redactados, el 100 % de los analizados, por españoles en Indias en los que se instituyen capellanías se deben a quienes fallecen en el Nuevo Mundo sin herederos conocidos en estas lejanas tierras.

Hay que hacer notar que desde 1492 hasta 1540, analizados más de doscientos documentos sobre autos de bienes de difuntos en Indias, no hay constancia de que se realizaran fundaciones de capellanías por los que fueron al Nuevo Mundo, ya fuese a

⁵⁰² F. Gutiérrez Alviz, *Los bienes de difuntos en el derecho indiano*, Anales Universidad Hispalense, año IV, nº 3, Sevilla 1942, p. 7. M. del M. Barrientos Márquez, *La fortuna y muerte. Andaluces en América en la primera mitad del siglo XVIII*, Universidad de Cádiz, Cádiz 2003, pp. 17-18 y 29-30. D. Ortega Sánchez, *Fuentes documentales del Archivo General de Indias para la historia de la mujer extremeña en la América colonial: los autos de Bienes de Difuntos*, en *El futuro del pasado* (revista electrónica de Historia), nº 2, Salamanca 2011, p. 470. V. Fernández Bulete, *Hombres de Cádiz en Indias (1699-1702) a través de los bienes de difuntos*, Anales de la Universidad de Cádiz, Cádiz 1988-89, pp. 153-154.

⁵⁰³ J. Mesquida Oliver, *La población de Manila y las capellanías de misas de los españoles...*, o.c., p. 469.

través de testamento o escrituras públicas. La fundación más antigua que se ha podido encontrar es del año 1541 y, evidentemente, efectuada mediante testamento.

En general, los causantes, en una proporción del 95,24 % en el siglo XVI, de un 87,87 % en el XVII y de un 80 % en el XVIII, aun siendo residentes en las Indias Occidentales, fundan capellanías en la Península, en la mayoría de casos en sus lugares de origen, con la asignación de patronos y capellanes a miembros de sus familias, con el fin de beneficiarlos, disfrutando de la institución, haciéndolos partícipes del patrimonio o buena fortuna económica y, a la vez, para asegurarse el fiel y correcto cumplimiento de la postrera voluntad del testador. Se tiende a una disminución de la fundación de capellanías en la Península y a un aumento en Indias. Por lugares, se puede apreciar que hay un grupo mayoritario de testadores andaluces en el siglo XVI, en concreto 11 de 21 testamentos, lo que representa el 52 % de los mismos. Le siguen los castellanos con cuatro testamentos, lo que refleja un 19 %. A continuación, los navarros y extremeños con dos testamentos cada uno, con un 9,52 %. En el siglo XVII siguen predominando los andaluces, con un 30,30 %, (10 de 33 testamentos) aunque su número ha disminuido sensiblemente, seguidos por los castellanos, con un 27,27 % (9 testamentos), los extremeños, con un 24 % (8 testamentos) y los guipuzcoanos con un 12 % (4 testamentos). Ya en el siglo XVIII, aunque la muestra es pequeña, pues la fundación de capellanías está en declive, siguen predominando los testadores andaluces con un 33,33 % (2 testamentos de 6), empatados con los castellanos, seguidos de los aragoneses y guipuzcoanos con un 16,66 % (1 testamento cada uno).

Gráfico 1.

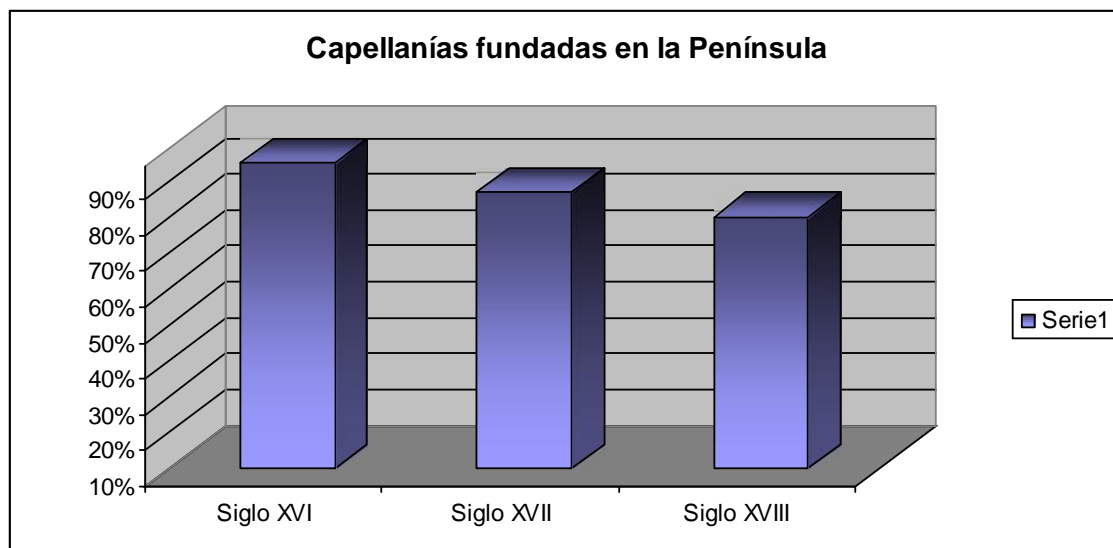
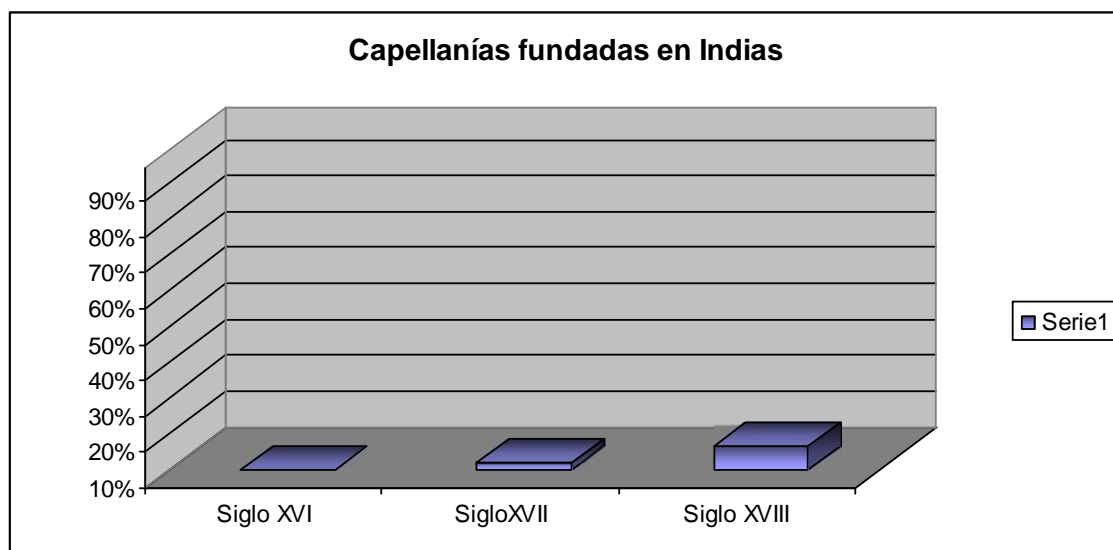


Gráfico 2.



En algunos testamentos, se instituyen capellanías sólo en los lugares de residencia y vecindad, lejos de la Península, lo que supone un 4,76 % del total analizado en el siglo XVI, un 12 % en el XVII y un 16,6 % en el XVIII, lo que significa un sensible aumento con el paso del tiempo, posiblemente porque los testadores ya se habían establecido tanto física como sentimentalmente, creando lazos de arraigo (mujer, hijos, nietos) y la perpetuación de sus linajes en dichos lugares, cosa que al principio, en el siglo XVI no ocurría⁵⁰⁴. En otros, algo más numerosos, se erigen dichas capellanías tanto en la metrópoli como en Indias. En consecuencia, como ya se ha podido apreciar, alternan dichas fundaciones entre la metrópoli, las Indias, o en los dos lugares a la vez, siendo una gran mayoría las erigidas en España y una en Portugal.

Sobre los fundadores, de los cuales se sabe su cargo u oficio, en el siglo XVI, hay que reseñar que la mayoría son personas de familias nobles o con cargos relevantes, con un 54,54 % (6 de 11 testamentos), por lo que se deduce la gran importancia de los mismos en la institución de capellanías. Siguen en número los eclesiásticos con un 45 % (5 de 11), lo que supone una representación inferior a los anteriores, pero aún así de cierta importancia. En el siglo XVII, los primeros son un 80 % (16 de 20) y los eclesiásticos un 20 % (4 de 20). Y ya en el XVIII, se encuentran en un 83,3 % (5 de 6) y en un 16,6 % (1 de 6), respectivamente.

Otra conclusión que se desprende de los expedientes estudiados es que la generalidad de los viajeros a Indias que hacían testamento y fundaban capellanías eran solteros, sin vínculos matrimoniales ni descendientes directos, por lo que los herederos

⁵⁰⁴ Autores como M. García Hernández (*Las capellanías de misas en la Nueva España*, en *La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación*, Serie historia Novohispana, n° 83, UNAM, México 2010, p. 285.) distinguen tres etapas en la fundación de capellanías: una primera, entre 1531-1620, otra entre 1621-1679 y la tercera a partir de 1680, en la que se experimenta un espectacular incremento de las fundaciones. Según la autora, los estudios realizados muestran que durante casi todo el siglo XVI se erigieron pocas capellanías, siendo lenta su difusión e incluso aislada. A partir de finales del citado siglo XVI empieza una época de expansión hasta finales del XVIII, lo que refuerza lo manifestado en el texto.

y legatarios de los bienes y patrimonio del fallecido eran los padres, hermanos, primos, sobrinos e, incluso, hijos naturales, vecinos y amigos íntimos. Además, una parte de dichos bienes se destinaban a monasterios, conventos e iglesias si el fin era la erección de una capellanía. Otros herederos, en menor medida, eran los pobres, doncellas huérfanas, algunas cofradías y ciudades. Es el caso de Francisco Martín de Rivera, familiar del Santo Oficio, que dejó mandas testamentarias para fundar dos capellanías en la iglesia de Huévar (Sevilla), limosnas para la reedificación de la iglesia de Cartagena de Indias, para los pobres, cofradías y una dotación para casar doncellas huérfanas. También el testamento de Francisco Fernández Regodón, clérigo presbítero, que nombra heredera a la ciudad de Trujillo (Cáceres) y una obra pía para casar doncellas, además de fundar tres capellanías en la iglesia de Trujillo.

De la investigación realizada se ha observado que la mayoría de difuntos en Indias eran sujetos sin recursos (marineros, aventureros, criados, soldados y otros oficios mecánicos similares) en busca de una vida mejor, los cuales fallecían, en muchas de las ocasiones, sin bienes suficientes para poder fundar una capellanía, ya fuese en la Península o en el Nuevo Mundo, y a veces debido a circunstancias sobrevenidas, tanto naturales (naufragios, caída de rayos, enfermedades) o por obra del hombre, como por ejemplo asesinados por los indígenas, morían sin poder realizar testamento.

Cuadro 9. Lugares donde fallecen los fundadores, títulos, cargos u oficios desempeñados y herederos.

FUNDADOR	TÍTULO, CARGO, OFICIO	HEREDEROS	LUGAR
SIGLO XVI			
Francisco Martín			Perú (no especifica)
Diego de Sevilla			No consta. Indias
Juan García y Ahumada		Madre	Perú (no especifica)
Martín de Barrientos	Escribano de n°	Hno. Parientes	Potosí. Bolivia
Martín Peña		Padres.Arzobisp	San Martín. Méjico
Juan Pérez de Peñalosa	Clérigo	El alma	Guatemala
Antón Recio			La Habana. Cuba
Cristóbal Rguez de la Serna	Cab.Venticuatro	Iglesia	Potosí. Bolivia
Pedro Ortíz de Elgueta		Esposa e hijos	San Jorge. Honduras
Melchor Ramírez		Hermanos	A bordo, desde Perú
Pedro Díaz de Rojas		Hijos	Huamanga. Perú
Antonio Pérez Carneiro	Maestre de Nao	Hermano	A bordo, en el mar.
Hernando de Palma		Esposa. Iglesia	Lima. Perú
Ana de Palma		Marido. Iglesia	Lima. Perú
Fco. Díaz de Carvajal	Cura	Hermanas	Cuzco. Perú
Andrés Martín del Canto	Cura. Vicario	Hermanos	Sto. Domingo Parita. Méjico
Andrés López d Mirandaola	Oficial real	Hermana	Yluna Ylun. Filipinas
Luis de Quesada	Sr.C. d Quesada	Hermano.Sobrino	Cuzco. Perú
Pascual Fernández	Presbítero	Hermanos	Nombre de Dios. Panamá
Rodrigo de Herro	Ldo. Canónigo	Hijos. Hermanos	Urubamba. Perú
Martín López de Salcedo	Tte. Alcalde my	Hermanos	Yurirapundaro. Méjico
SIGLO XVII			
Alonso Álvarez de Armenta		Hijo	Cartagena Indias. Colombia
Fco. del Peso Cañas		Hno. Iglesia	Sevilla
Martín de Salazar		Iglesia	Cartagena Indias. Colombia
Fco. Muñoz de Monforte	Corregidor	Sobrino	Ciudad de Méjico
Juan Román Sedeño		Sobrino	Zaragoza. Colombia
Ana de Inzaurraga		Sobrino	Zaragoza. Colombia
Martín López de Elorza	Hidalgo	Esposa e hijos	Charcas. Bolivia
Fco. Fernández Regodón	Clérigo presb.	Iglesia. Ciudad	Potosí. Bolivia
Juan de Landeta	Sr. C. d Landeta	Hermana. Primo	Sevilla
Benito Cid		Hermanos	Quito. Perú
Giner de Pineda	Alférez	Vecinos	Manila. Islas Filipinas
Pedro Rodríguez Pinto	Licenciado	Sobrino	Los Ángeles. Méjico
Gonzalo Vázquez	Cap. Sto. Oficio	Iglesia. Pobres	Cartagena Indias. Colombia
Fernando de Carvajal	Hábito Santiago	Esposa	Santiago. Chile
Gaspar Álvarez	Secret.gobernac	Hermanos	Manila. Filipinas
Alonso de Jerez	Licenciado	Sobrinos	Ciudad de Méjico
Fco. Martín de Rivera	Familiar Inq.	Hermano.Pobres	Cartagena Indias. Colombia
Pedro Suárez Cornejo		Monasterio	Potosí. Bolivia

Gabriel de las Muñecas	Capitán	Madre	Veracruz. Méjico
Miguel de Heredia	Cura benefic.	Iglesia	Zaragoza. Colombia
Lope Vélez de Céspedes		Hijo	Acari. Perú
Juan Gómez Escudero		Esposa. Hermana	Lima. Perú
Diego de Cárdenas	Consejo Indias	SobrinoConvento	Méjico
Sebastián Ruiz Enebro	Capitán	Alma.Convento	Méjico
Juan González Mayoral		Padre	S. Luis de Otavalo. Ecuador
Alonso Cabezas de Herrera		Esposa	Potosí. Perú
Fco. Vitoria de Palacios		Iglesia.Convento	Conchucos. Perú
Diego Ojalvo	Ldo.Presbítero		
Pedro Ordóñez	Clérigo presb.	Hermanas	Natá. Panamá
Rodrigo Alonso Cabañas	Capitán	Hermanas.Iglesia	Nueva Valencia. Venezuela
Antonio López de Zuloeta	Capitán	Iglesia	Quito. Ecuador
Juan de Anguciana		Iglesia	No especifica: Indias
Rafael de San Martín	Hijo de capitán	Vecinos	A bordo, en el mar
SIGLO XVIII			
Andrés Roldán Ponzán	Capitán	Padres	Zacatecas. Méjico
Sebastián Prieto Vélez	Capitán	Hermanos	Ciudad de Méjico
Manuel Rodríguez Díaz	Contador	Convento	
Fco. De Villanueva Velasco	Capt. Regidor	Hno. Sobrino	Potosí. Bolivia
Juan de Vizarrón	Arz. Virrey	Iglesia	Ciudad de Méjico
Ignacio Recalde	Corregidor	Esposa	Cartagena Indias. Colombia

12.- CAPELLANÍAS EN EL REINO DE VALENCIA

Hubo muchas fundaciones de capellanías en Valencia, la mayoría de las mismas instituidas por la nobleza valenciana –*cavallers, generosos, richs-hòmens, barons, homes de paratge*-, aunque también abundan las instituidas por el estamento eclesiástico, principalmente obispos, dignidades, canónigos, vicarios, rectores de iglesias y, en menor medida, clérigos, además de personajes importantes como ricos burgueses y *ciutadans*. A las familias de los fundadores correspondía el derecho de patronato, si bien el cabildo catedralicio tenía la prerrogativa de conferir la colación de un cierto número de fundaciones. La mayoría de las capellanías, a igual que otros beneficios, se fundaban mediante testamento. Muchas eran dotadas de censos perpetuos, como la misma muerte, y con ellos se aseguraban el mantenimiento de la capellanía, es decir, del capellán y dotar al altar de todo lo necesario.

Se han encontrado fundaciones de capellanías en la mayoría del territorio, aunque en mayor medida aparecen en la catedral de Valencia, dedicada a María, Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción⁵⁰⁵, pero no eran desconocidas en las distintas parroquias que se erigían sobre antiguas mezquitas a tenor de la conquista

⁵⁰⁵ La devoción a la Virgen María en todo el territorio peninsular es una antigua y arraigada tradición desde los siglos medievales. Su protagonismo está presente en cualquier rincón donde haya un lugar sagrado. En el Reino de Valencia, desde la reconquista, se le dedicaron muchas iglesias: la catedral de Valencia, importantes colegiadas e iglesias como las de Gandía, Játiva, Alcira, Alfafar, Cárcer, Alboraya, y muchas otras. También los principales monasterios se fundaron bajo su nombre, como los de Santa María del Puig, el de la Valldigna, el de la Murta, etc.

del Reino. La huella más antigua sobre estas instituciones se encuentra en un pergamino de la Catedral de Valencia, fechado en 10 de febrero de 1250, mencionado anteriormente.

12.1.- Catedral de la Asunción de Nuestra Señora de Valencia (*La Seu*).

La Seo valenciana era una de las iglesias preferidas por los valencianos para la fundación de beneficios eclesiásticos y capellanías. Su importancia era tal que hacia 1610 había 212 fundaciones y dos siglos después, en el siglo XVIII, el número se había elevado hasta las 231, según las visitas “ad limina” que realizaban los obispos para informar al Santo Padre del estado de su respectiva diócesis y las visitas generales⁵⁰⁶.

Venta de los frutos de una porción para la capellanía perpetua fundada por el maestro Domingo, chantre de la catedral, en IV idus de febrero de 1250 (10 de febrero) (ACV, pergamino nº 1320).

Capellanía de San Pablo. Fundada por Bernat de Canet, arcediano y canónigo, en su último testamento el 15 de junio de 1297, ante el notario Guillem Vernet. El 5 de enero de 1345, fue concedido a Estebe Roig, vacante tras la renuncia de su antecesor⁵⁰⁷.

Capellanía fundada por Juan Escorna en altar de San Lucas, en testamento de 10 de febrero de 1291, ante el notario Pere Martí. Se concede por el obispo a Guerau Doménech, beneficiado, en 1 de agosto de 1369⁵⁰⁸.

Institución de dos capellanías por el obispo Ramón Despont en 18 de marzo de 1305 (ACV, pergamino nº 392).

Constitución de dos capellanías en el altar de Todos los Santos, en 24 de mayo de 1307 (ACV, pergamino nº 797).

Capellanía por Ramón de Botcenich, beneficiado de la catedral, instituida en 28 de mayo de 1310, bajo la invocación de San Gregorio, con la creación de una capilla y que es acogida bajo la protección del obispo de Valencia, Ramón Despont⁵⁰⁹. En 6 de marzo de 1330, es capellán Ramón de Ferreres, presbítero (ACV, pergamino nº 1898).

Capellanía fundada por Bernat dez Clapers (Desclapés), en testamento de 18 de septiembre de 1311, en la capilla de San Bartolomé, ante el notario de Valencia Pere Ferrer (ACV, signatura 1556).

Capellanía de la Espina de la Corona del Señor, fundada por el Cabildo de Valencia con los bienes de Arnaldo de Riusech en 1320. En 14 de junio del mismo año,

⁵⁰⁶ F. J., Palao Gil, *Patrimonio eclesiástico y amortización...*, o.c., pp. 66-67. M^a. M. Cárcel Ortí, *Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas*, Valencia 1989, vol. II, p. 719. Cf. J. Sanchis Sivera, *La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística*, Valencia 1909, pp. 487 y ss.

⁵⁰⁷ ACV, pergamino nº 5570. ADV, Secc. I, Fondo III, carpeta 134/1, fol. 38v.

⁵⁰⁸ ADV, Secc. I, Fondo III, caja 134/1, fol. 12r. *Liber licentiarum*, obispo Jaime de Aragón, fol. 17; cf. M. Cárcel Ortí, *Un formulari i un registre del bisbe de València Jaume d'Aragó (segle XIV)*, Valencia 2011.

⁵⁰⁹ ADV, Secc. I, Fondo III, caja 134/1, fol. 5v. ACV, pergamino nº 077, 2ª serie. Cf. Mateu Rodrigo Lizondo, *Catàleg del pergamins de l'Arxiu de la Catedral de València*, 2ª sèrie, Valencia 2012, p. 28.

Gonzalo de Eiximen, señor de Arenós, pone en posesión de un censo a berenguer March, sacristán de la Catedral, en término de Beniferri por el alma de la capellanía de Riusech (ACV, pergamino nº 1431)

Institución de una capellanía en la Almonia por Guillermo Davia, en 6 de abril de 1331 (ACV, pergamino nº 464).

Capellanía fundada por Octavià de Malferit, en su testamento de 13 de mayo de 1336, ante el notario Bernat Costa⁵¹⁰.

Capellanía fundada por Guillem de Riumedella, mediante testamento de 28 de septiembre de 1338, ante el notario Pere Fraella⁵¹¹.

Capellanía fundada por Ponç Garriga, en su testamento de 8 de enero de 1350, ante el notario Domingo Molner⁵¹².

Capellanía fundada por Bernardo de Cantarelles, presbítero, en 20 de febrero de 1358⁵¹³. Dotación: 400 sueldos y unas casas en la parroquia del Salvador (ACV, pergaminos nº 590 y 5670).

Capellanía instituida por Guillem de Pertusa, cavaller, mediante testamento de XIII kalendas de abril de 1356 (22 de marzo) (ACV, Libro de cláusulas testamentarias, fol. 102).

Capellanía del Real. Pedro Satorre, poseedor en 24 de enero de 1361 (ACV, pergamino nº 520).

Capellanía de San Martín. Se realiza una permuta en 29 de julio de 1367 (ACV, pergamino nº 678).

Capellanía de Santa Catalina. Sin datos.

Capellanía de San Juan. Guillermo de Carcasona confiesa tener un huerto com censo de dicha capellanía que instituyó Juan (ACV, pergamino nº 3060).

Capellanía de San Lucas. Establecimiento a censo de un pedazo de tierra por Pedro Gerardo, capellán de la citada capellanía (ACV, pergamino nº 1394).

Capellanía de Santa Tecla. Jaime Gizbert, rector de San Salvador, toma posesión de la capellanía como procurador de Martí de Mur, clérigo de Valencia, por muerte de Montal Obrer, capellán y beneficiado de la misma (*Formularius litterarum*, obispo Jaime de Aragón, fol. 65r-66r)⁵¹⁴.

⁵¹⁰ ARV. Protocolos de Bernat Costa, 1336, signatura 2801.

⁵¹¹ ARV. Protocolos de Pere Fraella, 1338, signatura 2807.

⁵¹² ARV. Protocolos de Domingo Molner, 1350, signatura 4317.

⁵¹³ ACV, pergamino nº 590.

⁵¹⁴ M. Cárcel Ortí, *Un formulari i un registre...*, o.c., p. 35.

Seis Capellanías fundadas por Diego de Covarrubias y Leiva en 1610 en la capilla de San Sebastián. Testó ante el notario Gaspar Palavicino en 10 de octubre de 1606, fol. 539. Dotación de las capellanías: 24.000 ducados⁵¹⁵.

Capellanía fundada por Pedro Dávalos Maza y Rocamora, caballero de la Sagrada Religión de San Juan de Jerusalén, conde de la Granja, señor de la Alberca de las Torres, mediante testamento de 6 de agosto de 1701, ante el notario de Valencia Carlos Borja, senior, (Sig. 4496).

12.2.- Parroquias y conventos de Valencia

Las que siguen son siete de las once primeras parroquias fundadas en Valencia en el siglo XIII, al terminar la conquista del Reino por Jaime I, dotadas económicamente, cumpliendo el voto que hizo en la cortes de Monzón de 1236.

Parroquia de San Andrés.

Capellanía de Santa Ana. Dotación de unas casas en 15 de mayo de 1360 (ACV, pergamino nº 8186).

Fundación de dos capellanías por Vicente Ruiz de Lihory y Ladrón de Pallás, barón de Alcalalí, en 7 de agosto de 1799, mediante dotación de 342 libras, ante el notario de Valencia Antonio Jacques Furió (Sig. 6278).

Parroquia de Santa Catalina.

Capellanía de Español de Cervató. Venta de tierras tributarias de dicha capellanía en 26 de marzo de 1330 (ACV, pergamino nº 1759).

Fundación de una capellanía por Pedro Segarra, ante el notario Guillem de Vilardell, el 15 de julio de 1339⁵¹⁶.

Capellanía de Gregorio Lucio, en 20 de julio de 1367 (ACV, pergamino, nº 5195).

Parroquia de San Martín.

Capellanía instituida por Arnau Mascarós y elisenda su mujer en 1356 (ACV, pergamino nº 272, 2ª serie).

Parroquia de San Nicolás.

Dotación de tierras anidas a la Capellanía de San Jaime en 6 de noviembre de 1355 (ACV, pergamino nº 2068).

⁵¹⁵ ACV, *Libro de cláusulas testamentarias*, vol. 82, fol. 172.

⁵¹⁶ ACV, pergamino nº 026, 2ª serie.

Parroquia de San Pedro (extinguida).

Establecimiento de un censo a un huerto en Alfafar para una capellanía, en 1 de enero de 1319 (ACV, pergamino 9908).

Parroquia de San Salvador.

Capellanía fundada por Guillem Maimó, en testamento de 28 de agosto de 1325, ante el notario Aparici Lappart⁵¹⁷.

Capellanía de Santa Tecla. En 23 de noviembre de 1377 toma posesión Jaume Gizbert, procurador de Martí de Mur, beneficiado (*Liber licentiarum*, obispo Jaime de Aragón, form. nº 53).

Capellanía instituida por Juan Bautista Comeche, doctor en medicina, en 5 de julio de 1737, bajo la invocación al Santísimo Cristo y a San Jorge, mediante escritura de fundación ante el notario de Valencia, Francisco Valor y Sequer. Dotación: 2250 libras (ARV, Propiedades Antiguas, legajo 17).

Parroquia de Santo Tomás.

Capellanía fundada en 29 de diciembre de 1278, siendo su instituidor Pedro de Prats (ACV, pergamino nº 4109).

Saurina, mujer que fue de Arnaldo, reconoce ser deudora de la capellanía que funda en el altar de Santa Ana, en 9 de enero de 1314 (ACV, pergamino nº 2954).

Capellanía fundada bajo la invocación de San Dionisio por Luis Matoses Muñoz, colegial boticario, en 24 de octubre de 1799, ante el notario de Valencia Timoteo Ferriz (Sig. 5711). Renta: 100 libras.

Además hay otras iglesias y conventos donde se instituyeron capellanías:

Iglesia de San Vicente.

Capellanía fundada por Juana Aparici Ispana en 1327. Arnaldo de Buades, presbítero es su capellán en 8 de diciembre de 1328 (ACV, pergaminos 1746 y 6618).

Capellanía fundada por Maimón Arboreda y su mujer Antonia confiesan deber ciertas cantidades al beneficiado de su capellanía, en 20 de abril de 1327 (ACV, pergamino nº 6620).

Iglesia de San Juan del Hospital.

Capellanía en la capilla de Santa María Magdalena, fundada por Arnau de Romaní. Su nieto, Roderic Llançcol de Romaní, instituye en la misma tres aniversarios en 1336 (ARV, protocolos de Domingo Molner, 1350, signatura 4317).

⁵¹⁷ ARV. Protocolos de Aparici Lappart, 1325, signatura 2855.

Capellanía en la capilla de Santa Bárbara, instituida por Guillamona Bonet, en 1377.

Capellanía bajo la advocación de Santa Bárbara, fundada por doña Constanza de Grecia, hija de Federico II Hohenstaufen, Emperador de Alemania y viuda de Juan III, Emperador de Nicea (Bitinia, Asia Menor), en agradecimiento a su milagrosa curación de la lepra por mediación de Santa Bárbara. El milagro acaeció en Valencia alrededor de 1270-1280, donde se hallaba la emperatriz acogida por el rey Jaime I el Conquistador. Fomentó el culto a la santa.

Convento de Santa Isabel (de la Puridad).

Domingo de Alquécer es patrón de la capellanía instituida por Elvira Sanxes de Vergua, viuda de Martín Roís de Foces, en 7 de mayo de 1314 (ACV, pergamino nº 67, 2ª serie).

Monasterio de San Vicente (de la Roqueta) y Hospital.

Capellanía fundada por Arnaldo Puig Monzón hacia 1300 (ACV, pergamino nº 1610).

También se han podido localizar diversas fundaciones de capellanías en diferentes villas y lugares del Reino, aunque en algunas no se han encontrado suficientes datos:

12.3.- Capellanías en las distintas villas y lugares.

Alicante (Santa María).

En 1330 aparece una de las cláusulas del testamento de Berenguer de Puigmoltó ante el notario Lorena Fritos, por la que dispone que se edifique en dicha iglesia una capilla detrás del altar de Santa María, entre este y el de San Pedro, con altar y advocación a San Blas, estableciendo en ella una capellanía perpetua, dotada anualmente con 400 sueldos reales de Valencia para su mantenimiento y el del clérigo que la sirva. De los 400 sueldos, docientos diez serán del censo que tiene con Ramón Sanxovart por unas casas y alfondega que tiene en Alicante. También setenta sueldos de los asignados son de un obrador que tienen esas casas. Otros cincuenta sueldos más procederán de un censo que tiene de Berenguer de Vilanova por herencias y por un aljibe de agua que tiene en la huerta de Alicante, y el resto hasta 400 sueldos será completado por los albaceas (*Libro Antiguo de Beneficios de la parroquial Iglesia de Santa María*. Instituto Juan Gil Albert, Alicante 1997. Edición y estudios preliminares de Eduardo Camarero Casas).

Almusafes (San Bartolomé Apóstol).

Capellanía instituida mediante testamento de 24 de junio de 1303, por Ramón Escorna I, señor del valle y castillo de Olocau y señor de Almusafes y de la Torre Racef, en la iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol, bajo la invocación del santo. En 4 de noviembre del mismo año Pedro Sala, cura de Cárcer y beneficiado que fue de

la misma capellanía, dona un trozo de huerto y unas casas en Almusafes (ACV, pergamino nº3108). Patrono. El abad de la Valldigna. Dotación: 3 libras., 4 sueldos con ludismo y fadiga; 14 libras y la 9ª de frutos parte de varias heredades que rentan 17 libras, 4 sueldos⁵¹⁸.

Alcira (Santa Catalina Virgen y Mártir).

Capellanía fundada en la parroquia de Santa Catalina por Ximén Sánchez de Oradre, señor de Benifaraig.

Alcoy (Santa María).

Capellanía instituida por Domingo Torregrosa, bajo la advocación de San Jorge en la iglesia de Santa María, en 1317⁵¹⁹.

Benimeli (San Andrés Apóstol).

Capellanía fundada en la Iglesia parroquial de San Andrés Apóstol por Severiano Villafranqueza, conde de Villalonga y señor de Benimeli, en 1775 bajo la advocación de San Andrés Apóstol y San José. Dotación de la capellanía: 100 libras para el capellán y 10 libras para la luminaria (lámpara del Santísimo Sacramento). Fue poseedor de la capellanía Dámaso Doménech Ferrer desde el 22 de diciembre de 1767 hasta el 27 de abril de 1812.

Benitandús-Alcudia de Veo (Virgen de los Desamparados).

Capellanía instituida en 5 de febrero de 1792 por Vicenta Antonia Frígola, baronesa de Benidoleig, mediante testamento ante el notario de Valencia Vicente Ignacio de Attucha (Sig. 4867). Dotación: 200 libras anuales.

Cocentaina (Santa María).

Fundación de 2 capellanías “*simples, perpetuas y eclesiásticas*” en el Convento de Nuestra Señora del Milagro, bajo la invocación del mismo nombre. Fundadora: Francisca de Aragón y Sandoval, duquesa de Santisteban, ante notario apostólico de Valencia Andrés Mulet, en 15 de mayo de 1693. Renta 191 libras, 18 sueldos, 6 dineros. Obligación: 1 misa diaria por el alma de la fundadora (Libros de Visitas Pastorales de 1726, fol. 65r; de 1742, fol. 112v y de 1780, fol. 83v)

Denia Nuestra Señora de la Asunción).

Capellanía de la Purísima Sangre de Cristo en la Ermita de San Roque, instituida en 19 de diciembre de 1689 por Juan Bas, patrono y sobrino de Magdalena Gregori y de

⁵¹⁸ ACV, pergamino nº 3108. SDAPV, Archivo Parroquial de Almusafes, *Visita Pastoral de 30 de enero de 1649, fol. 8, Visita Pastoral de 6 de noviembre de 1733, fol. 2; libro Memorias de Almusafes, 1290-1814, ca. 1733, p. 1 y ss.*

⁵¹⁹ C. Ferragud Domingo, *El naixement d'una vila rural valenciana: Cocentaina, 1245-1304*, Valencia 2003, p. 87.

Catena, la cual testó en 22 de septiembre de 1652, ante el notario Luis Gavilá, con obligación de celebrar 30 misas cada año (Libro de Visita Pastoral de 1669, fol. 86r-91v).

Capellanía de San Roque y San Vicente Ferrer, fundada por el doctor Roque Mulet en cumplimiento de la disposición testamentaria en 1670 realizada por Vicente Mulet, en la Ermita de San Roque, bajo la invocación de San Roque y San Vicente Ferrer. Dotación (renta): 100 libras de un censo sobre la baronía de Planes que paga el duque de Maqueda. Obligación de celebrar 100 misas el capellán poseedor (Libros de Visitas Pastorales de 1687, fol. 165r; 1699, fol. 82r y de 1725, fol. 172r).

Capellanía de San Juan Evangelista y San Pedro Apóstol. Se tiene referencia de dicha fundación en 1676, pero luego ya no aparece en 1699 (Libro de Visita Pastoral de 1676).

Gandía (Asunción de Nuestra Señora).

Fundación de 8 capellanías en el Convento de Santa Clara por Juan de Borja, II duque de Gandía, hacia 1493 (AHN, Sección Nobleza, Osuna (ducado de Gandía, C.541,D.80-81 y 90).

Játiva (Santa María).

Institución de la capellanía del Sancti Spiritus mediante testamento de María Núñez, mujer de Eiximen Sabater, en 6 de junio de 1282 (ACV, pergamino nº 2389).

Capellanía de Bernat Esteve. Bertomeu de Valls, en 6 de febrero de 1408, se le concede una licencia para aumentar la dotación de la misma (ADV. Sección I. Fondo III. *Colaciones de beneficios*. Caja 137/2, fol. 12 rv).

Capellanía de San Vicente Ferrer y San Antonio Abad, en el altar de las Almas, por Antonio Menor, presbítero (Libro de Visitas Pastorales de 1654, fol. 189r y de 1745, fol. 316v).

Capellanía de Nuestra Señora del Patriarca y San José y de las almas del Purgatorio, por José Micó, cirujano (Libro de Visitas Pastorales de 1654, fol. 169r y de 1745, fol 320r).

Capellanía de San Vicente Ferrer fundada por Pedro Belloch y Borja, en su testamento de 15 de octubre de 1614, e instituida por sus administradores y albaceas. En 12 de octubre de 1615 (Libro de Visitas Pastorales de 1745, fol. 323r-326v)

Capellanía de San José en el Monte Calvario, por Josefa Roca en cumplimiento del testamento de Bartolomé Micó ante notario Gaspar Juan Micó en 20 de noviembre de 1664 e instituida en 2 de mayo de 1677 (Libro de Visitas Pastorales de 1745, fol. 321r).

Meliana.

Capellanía instituida en 1 de junio de 1399 por Jaume Escrivá, cavaller, en la iglesia parroquial (ADV, Secc. I, Fondo III, caja 134/1, fol. 271r).

Ollería (Santa María Magdalena).

Capellanía fundada por Vicente Mompó, en 18 de mayo de 1701, en la capilla del Santo Crucifijo, bajo la invocación de San Vicente Ferrer, ante Pedro Soler, notario. Dotación: 1100 libras.

Orihuela (Del Salvador y Santa María).

Capellanía fundada por Juan Mancebón de Leca, presbítero en 13 de enero de 1606, en la catedral (Justicia Civil, Manaments i Empars, 1606, Libro 3, mano 28, fols. 32r-49v).

Puig, El (Santa María).

En 27 de abril de 1372, respecto a la cinco capellanías instituidas por Margarita de Lloria, condesa de Terranova en el monasterio de Santa María del Puig, vacantes hace tiempo, por lo que el derecho de patronato ha vuelto al obispo de Valencia, se otorga la colación de una de ellas por Bernat Candell, prior de l'Olm y vicario general, a Mateo Noguera, presbítero, beneficiado de la iglesia de lugar de Luchente y que los beneficiados del monasterio le den posesión (*Liber licentiarum*, obispo Jaime de Aragón, doc. 191, fol. 167v).

En 28 de julio de 1372 se otorga la colación de otra capellanía de las fundadas por Margarita de Lloria, a Berenguer Cebrián, presbítero (*Liber licentiarum*, obispo Jaime de Aragón, doc. 157, fol. 156rv).

Requena (Del Salvador).

Fundación de una capellanía por Antonia Martínez Pedrón, en testamento de 31 de julio de 1796.

Capellanía fundada por Josefa Ponce Fernández de Arcas, el 5 de junio de 1797, ante José Díaz Flos, en la iglesia parroquial de San Salvador, con una dotación de 89.839 reales (ARV, Propiedades Antiguas, legajo 66).

Siete Aguas (San Juan Bautista).

Capellanía fundada por Pascual Ibiza Martínez, en su testamento de 5 de junio de 1797 (ARV, Propiedades Antiguas, legajo 66).

Torrente (Asunción de Nuestra Señora).

Dos capellanías instituidas en 21 de marzo de 1604, por Vicente Romeu, labrador, mediante poderes otorgados y en cumplimiento del acuerdo del consell general de la

villa, ante el notario de Valencia Felipe Ayerve. Dotación: 25 libras anuales para cada capellanía⁵²⁰.

Turís (Natividad de Nuestra Señora).

Capellanía fundada por Gregorio Bono. Sin más datos.

Vall d'Ebo (San Miguel).

Capellanía de Jesús, María y José, instituida por José Grau en testamento de 7 de octubre de 1742 ante el notario Tomás Domingo Llopis, en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Dotación: censo capital de 200 libras (Archivo parroquial de Vall d'Ebo, *Libro de los papeles concernientes a la fundación de la capellanía o patrimonio que fundó José Frau, mayor, baxo la invocación de Jesús, María y Josef [aprobada por el Ordinario en 25 de Setiem. de 1801] en este Valle de Ebo*, fol. 93-94).

Villar del Arzobispo (Nuestra Señora de la Paz).

Capellanía de Ntra. Sra. de la Paz, en la capilla de Nuestra Señora del Rosario por el doctor José Gavarda, clérigo, ante el notario apostólico de Valencia Felipe Amorós, en 3 de septiembre de 1714. Tiene de renta 102 libras con la obligación de celebrar anualmente 52 misas. Poseedor: el mismo fundador (Libro de Visitas Pastorales de 1726, fol. 59v-68v y de 1731, fol 15v).

12.3.1.- El caso singular de la villa de Ayora.

Respecto a la villa de Ayora se ha podido realizar una exhaustiva labor de investigación, cuyo fruto ha sido el de dieciocho capellanías fundadas en los siglos XVI- XVIII, a las que se les ha hecho un seguimiento hasta el siglo XIX, concretamente hasta el año 1833. El espacio geográfico escogido ha sido la antigua villa de realengo de Ayora, posteriormente feudo de honor y, con su venta, en 1491, perteneció a la jurisdicción señorial y fue baronía. El grado de deterioro de algunos documentos y la pérdida de otros impide una investigación exhaustiva de todos los libros relacionados con estas fundaciones⁵²¹. Cabe resaltar que la fundación de nada menos que quince capellanías en un periodo de unos cien años reafirma la importancia que tuvo la villa de Ayora, pues su población de unos 1390 habitantes (348 fuegos), hacia 1510, no era excesivamente alta si la comparamos con otras villas y señoríos de la época más importantes, pero con menor número de fundaciones y, en algunos casos ninguna, como Oliva, con 2840 habitantes (710 fuegos), Segorbe, con 2484 (621 fuegos), Elche, con 2400 (600 fuegos), Gandía, con 1892 (473 fuegos) y Albaida-El Palomar, con 1784 (446 fuegos)⁵²².

⁵²⁰ A. Besó Ros, *Una parroquia de la diócesis Valentina: la Asunción de Nuestra Señora de Torrent (siglos XIII-XX)*, Valencia 1994.

⁵²¹ Lo deseable hubiese sido poder acceder e investigar los libros racionales de 1539, 1560, 1561, 1562 y 1566, entre otros, que nos habrían aportado información más detallada de las fundaciones.

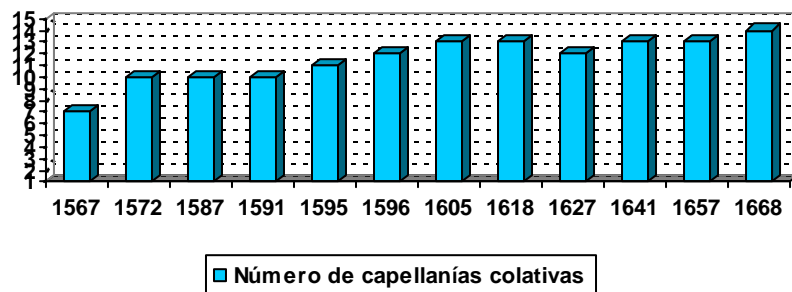
⁵²² ARV, Real Cancillería, 514 Ter, ff. 313r-328v.

De la documentación analizada se desprende que hay varios períodos en la fundación de las capellanías en la iglesia parroquial. Una primera fase, que comprende entre los años 1567-1668, pues no se conservan libros de fechas anteriores, nos indica que se trata de un periodo de expansión de dichas fundaciones, en concreto, de las colativas, con una cierta continuidad en el número hasta alcanzar el pico máximo en 1668. Respecto a las capellanías laicales no consta ninguna fundación.

Tabla 1. Número de capellanías en cada año (1567-1668).

1567	1572	1587	1591	1595	1596	1605	1618	1627	1641	1657	1668
7	10	10	10	11	12	13	13	12	13	13	14

Gráfico 3.

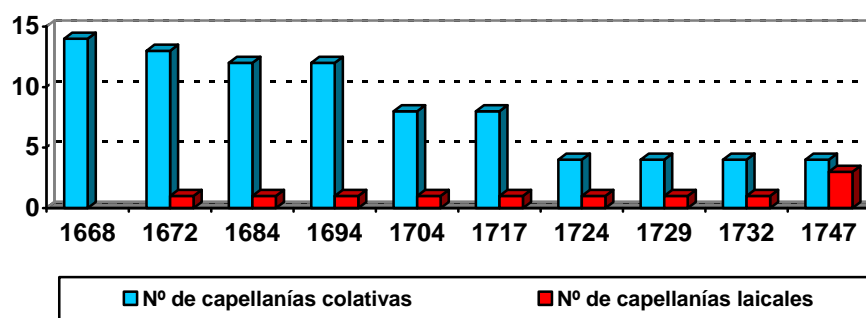


Una segunda fase, entre 1668 y 1747, de decadencia, en la que van desapareciendo paulatinamente las fundaciones colativas, en este caso, debido a que la renta para mantenerlas se acababa o no era suficiente para mantener el número de misas. Paradójicamente, se fundan hasta tres capellanías laicales.

Tabla 2. Número de capellanías colativas y laicales en cada año (1668-1747).

1668	1672	1684	1694	1704	1717	1724	1729	1732	1747
14	13	12	12	8	8	4	4	4	4
	1	1	1	1	1	1	1	1	3

Gráfico 4.



Y, finalmente, una tercera y última fase, entre 1748 y 1833, en la que desaparecen por completo dichas fundaciones colativas, siendo sustituidas por memorias de misas, al haberse agotado sus rentas, excepto la capellanía de Serafina Rovira en la que está documentado que, a partir de la visita pastoral de 1816, al parecer, se consigue aumentar la exigua dote que había quedado seguir pagando la renta de las misas, por lo que deja de ser una memoria de misas y pasa a ser otra vez una verdadera fundación eclesiástica. A pesar de la reducción de las capellanías colativas, subsisten las capellanías laicales.

Tabla 3. Número de capellanías colativas y laicales en cada año (1748-1833).*

1748	1753	1758	1760	1766	1816	1826	1833
0 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)	0 (4)	1 (3)	1 (3)	1 (3)
3	3	3	3	3	3	3	3

*Reducidas a memorias de misas.

Gráfico 5.

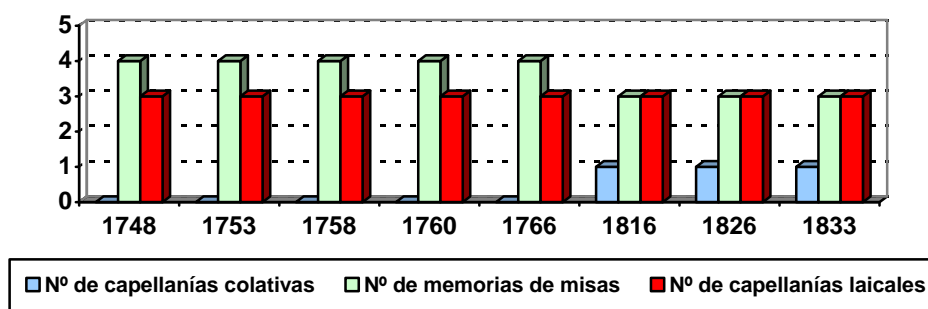
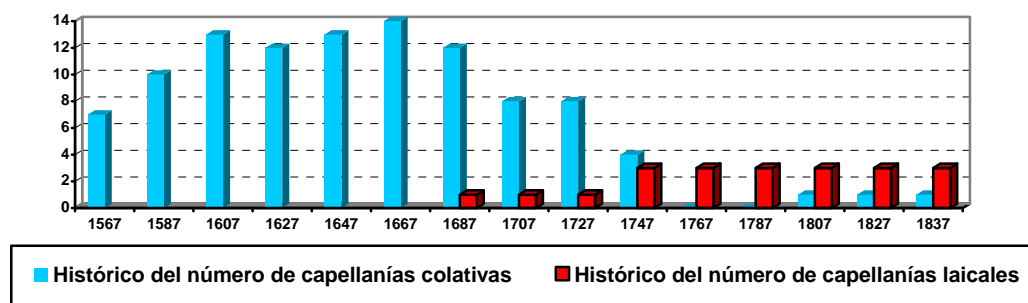


Gráfico 6.



Fundadores.

En las capellanías objeto de este estudio se ha encontrado que la mayoría de los fundadores pertenecen a la nobleza o a familias ilustres que monopolizan el gobierno de la villa. También hay miembros de la sociedad bien situados (notarios), del estamento eclesiásticos (vicarios, presbíteros, clérigos) y hacendados. Respecto al sexo aparecen varias mujeres, llegando a ser las fundadoras de hasta cinco capellanías de un total de quince. En 1567 aparecen como instituidores personajes de relevancia social como el pavorde Miguel Molsos, destacada figura de la villa, vicario general de la Diócesis de Valencia, Miguel de Arcos, Martín Pérez de Varaso (Barraso), Na Jordana, esposa de

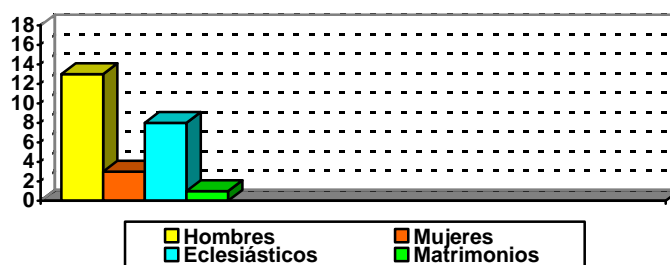
Domingo de Liria, notario. En 1572-1595 sobresale Bárbara Catalán, hija de Pedro el Royo, fundador de una capellanía, cuyo albacea es Jorge de Marcilla y de Próxima, caballero y gobernador del valle de Cofrentes. Ya en 1667 continúa el linaje de los Royo con Francisca, que ordenó la celebración de misas por su alma y que estaba casada con Bernardo Ruiz de Asín, caballero.

Más adelante, en 1611, figuran instituidores como Bartolomé Rovira, notario, o Serafina Rovira, esposa del doncel⁵²³ Luis Gonzálvez, pertenecientes al linaje Rovira, cuyos antecesores en 1572 tenían los cargos de capellán en la familia, como mosén Jaime Rovira, su sobrino Bernad Rovira, además del oficio de escribano, como otro Jaime Rovira, posterior al capellán.

Del total de 18 capellanías, respecto al estamento eclesiástico, está presente en las fundadas por mosén Miguel de Arcos, Sebastián de la Xara, doctor en Teología y rector de Castalla (Alicante), Miguel Molsos, personaje ilustre de Ayora, vicario general de la Diócesis de Valencia y deán de la Colegiata de Orihuela (posteriormente reemplazado por su pariente Berenguer Molsos), el presbítero Honorato Colomby y mosén Pedro Negrel, su sobrino, y Gabriel Hernández, presbítero y doctor en Teología. En conclusión, más de un 40% de los fundadores pertenecen a dicho estamento eclesiástico, lo que muestra la importancia y el peso de los religiosos en este tipo de obras pías. Es lógico, ya que destinar su patrimonio a la fundación de una capellanía es asegurar el futuro de sus parientes, a la vez que éstos serán celosos guardianes de las instituciones creadas.

En lo referente a la distribución por sexos entre los fundadores, encontramos un claro predominio de los varones sobre las mujeres. De un total de 18 capellanías, quince de ellas han sido instituidas por hombres y sólo tres por mujeres, lo que significa un 83,33 % de fundadores masculinos frente a un 16,66% de mujeres. Se nota un predominio del género masculino frente a la menor cuantía de fundaciones por mujeres, debido a una mayor subordinación al varón, propio de esas épocas. Respecto del total, ocho capellanías son fundadas por eclesiásticos y diez por laicos, y entre éstas, sólo una por matrimonios (testamento mancomunado)

Gráfico 7. Distribución de los fundadores.



Además, se han localizado cinco instrumentos de fundación en su totalidad (testamentos) y se tiene constancia de otros dos, con datos parciales, aunque no arrojan mucha luz de las circunstancias que concurren en los instituyentes.

⁵²³ Joven de familia noble que aún no ha sido armado caballero.

Mosén Francisco Royo testó en 18 de diciembre de 1575, ante el notario Martín González, y dispuso la fundación de un patronato de misas cada viernes durante todo el año. Su hermano Pedro y su mujer Úrsula González ordenaron la fundación de una capellanía colativa mediante testamento que otorgaron ante Tomás Bonifante, notario, en 28 de septiembre de 1578, con carga de misas cotidiana. La capellanía fue instituida por José Esteban, obispo de Orihuela en 1595.

Hay que resaltar que en el caso de la fundación de una capellanía por un matrimonio como el anterior de Pedro Royo y su mujer, Úrsula González, si se presumen bienes gananciales, es el propio matrimonio quien aparece como fundador, mediante testamento mancomunado, única excepción que se permitía respecto a la individualidad de los testamentos. En el caso de bienes privativos o de solteros la cláusula testamentaria de institución es individual y, posteriormente, para dar cumplimiento a lo anterior, el cónyuge supérstite o los albaceas materializan dicha fundación.

En el caso concreto de Bárbara Catalán, mediante testamento de fecha 22 de abril de 1595, ante Jaime Rovira, notario de la villa de Ayora, establece unas cláusulas testamentarias en las que pide ser enterrada en la capellanía que fundó su padre, Pedro el Royo y dispone que se oficien cada semana tres misas de réquiem por su alma y de todos los fieles difuntos, además de las misas que dejó señaladas su padre y su tío, mosén Francisco, en la fundación, y que sean oficiadas por el capellán que fue nombrado por los patronos de la capellanía. Para pagar dichas misas ordena que se cojan de sus bienes “la cantidad que sea menester” y sean cargadas a censo. También ordena que se oficie una misa cantada, perpetuamente, “el día de la Resurrección de Nuestro Señor Dios Jesucristo” y se haga una procesión en el convento de frailes de Santo Domingo de la presente villa de Ayora y se pague por ello con 30 libras moneda valenciana y se diga la misa con música de menestres.

El doctor Sebastián de la Xara, testó el 30 de abril de 1587 en Castilla, ante el notario Gaspar Rico, instituyendo una capellanía eclesiástica en la iglesia parroquial de Ayora.

El presbítero mosén Gabriel Hernández, mediante su testamento ante Nicolás Perales, de 22 de febrero de 1644, dispuso la fundación de una capellanía laical, con la obligación de celebrar 100 misas, además de celebrar en el día y fiesta del Arcángel S. Gabriel una festividad perpetuamente y se cojan de sus bienes lo necesario y esta festividad se celebre por su alma y por la de sus difuntos.

Serafina Rovira expresó su voluntad de fundar una “capellanía, beneficio perpetuo, simple, eclesiástico” mediante testamento que dictó en 24 de junio de 1654 ante Lorenzo Martí, notario de Ayora. Dicha capellanía la instituye en “el Altar Mayor de la iglesia parroquial de la villa de Ayora, a gloria de Dios, Nuestro Señor Omnipotente y de la festividad de la institución del Santísimo Sacramento, con obligación de hacer decir o decir el jueves de cada una semana por todo el discurso del año, *in perpetuum*, una misa rezada”, bajo la invocación del Santísimo Sacramento por su alma y demás difuntos. Dota dicha capellanía con una casa en la calle S. Francisco de la villa de Ayora, con su huerto, 3 hilos de agua y once tahúllas y media de tierra (siete

y media de viñas y cuatro de tierra campa)⁵²⁴. Además, expresó su voluntad de que se celebrasen 1000 misas por su alma, 500 en el Altar Mayor, 300 en los demás altares y las 200 restantes en el convento de Santo Domingo.

Honorato Colomby instituyó dos capellanías laicales, según sus últimas voluntades, datadas en 6 de septiembre de 1733, ante el notario Juan Francisco Recio. La primera bajo la invocación de S. Joaquín, con la obligación de celebrar todas las fiestas del año y domingos una misa, además de celebrar misa el día de S. Honorato, obispo, el 16 de enero y el día de Sta. María Magdalena. También ordenó que se tuviese encendida la lámpara del altar todo el año, además de oficiarse una misa en el Altar Mayor en todas las fiestas del año. La segunda fundación la dedicó al Patriarca S. José, con la obligación de celebrar una misa todos los días de fiesta en la ermita del Santo y, con la agregación de bienes que hizo a dicha capellanía su sobrino, mosen Pedro Negrel, además la celebración de la fiesta al Santo, con sermón en su ermita el tercer día de Pascua de Resurrección. Y también la víspera, vísperas solemnes y festividad de S. José en la parroquial en su día y el último día de Pascua, misa cantada con sermón.

Cuadro 10. Número de capellanías, fundadores y poseedores en 1567.

Nº	FUNDADOR-PATRÓN	POSEEDOR
1	Bernat Martínez	Mosén Francisco Royo
2	Na Jordana	Mosén Melchor Catalán
3	Miguel de Palacios y de Guillén Miguel y sus padres	Mosén Pedro Gener
4	Mosén Miguel de Arcos	Mosén Joan de Fuentes, mayor
5	De los Anayas	Mosén Miguel de Olivares
6	Miguel Molsos	Mosén Jaime Rovira, vicario
7	Martín Pérez de Varaso	Mosén Bernad Rovira

En el libro Racional de 1572 se encuentran anotadas tres fundaciones más, que añadidas a las siete primigenias hacen un total de diez: la de Antoni de Lluch, la de La Estebana (mujer de Bartolomé Esteban) y la de Miguel de Palacios. Nótese que la capellanía de Miguel de Palacios y Guillén Miguel se ha desdoblado en dos fundaciones distintas. Adviértase también que el capellán designado para officiar las misas de la capellanía de Miguel Molsos es Jaime Rovira, vicario, que procede de una familia ilustre en la villa, y es hermano de Francisca Rovira, casada con el caballero Bernardo Ruiz de Asín. También aparece como capellán Bernad Rovira, sobrino de Jaime, que sigue la carrera eclesiástica como su tío.

Cuadro 11. Número de capellanías, fundadores y poseedores en 1572.

Nº	FUNDADOR-PATRÓN	POSEEDOR
1	Bernat Martínez	Mosén Francisco Royo
2	Na Jordana	Mosén Melchor Catalán
3	Miguel de Palacios	Mosén Pedro Gener
4	Mosén Miguel de Arcos	Mosén Joan de Fuentes, mayor
5	Guillén Miguel	Mosén Pedro Gener
6	De los Anayas. Domingo Anaya	Mosén Domingo Anaya
7	Miguel Molsos	Mosén Jaime Rovira, vicario

⁵²⁴ Una tahúlla: 11 áreas y 18 centiáreas. Es decir, 1.118 m².

8	Martín Pérez de Varaso	Mosén Bernad Rovira
9	Antoni de Lluc	Mosén Pedro Gener
10	Estevana	Mosén Miguel Juan Gaçón

Entre 15791 y 1595 se fundan dos capellanías, añadiéndose a las diez anteriores, según los libros racionales de 1596 y la visita pastoral de 1595: son la de Na Guillamona Py, mujer de Guillermo Py y la de los Royos, instituida por Pedro Royo, su hermano Francisco y la mujer del primero Úrsula González. Como se aprecia las capellanías servían para todos los miembros de la familia del fundador, donde eran enterrados, como es el caso de Bárbara Catalán, hija de Pedro, que pide ser sepultada en la capilla de su padre.

Nótese que la capellanía instituida por Miguel Molsos, aparece con el nombre de Berenguer Molsos, y a partir de 1596 se llamará con este último nombre, desapareciendo de los libros el de Miguel. Por la importancia de tener una capellanía a su nombre, desplazando a un personaje muy ilustre, debió ser un familiar directo de este último, aunque no se ha podido constatar el parentesco.

Cuadro 12. Número de capellanías, fundadores y poseedores en 1596.

Nº	FUNDADOR-PATRÓN	POSEEDOR
1	Bernat Martínez	Mosén Miguel Galiano
2	Na Jordana	Mosén Miguel Teruel
3	Miguel de Palacios	Mosén Vicente Nadal
4	Mosén Miguel de Arcos	Mosén Pedro Ruiz
5	Guillén Miguel	Mosén Pedro Pérez
6	De los Anayas. Domingo Anaya	Mosén Miguel Navarro
7	Berenguer (Miguel) Molsos	Mosén Bernad Rovira
8	Martín Pérez de Varaso	Mosén Francisco Nieves
9	Antoni de Lluc	Mosén Bonifacio Ortín
10	Estevana	Mosén Miguel J. Pérez Gaçón
11	Na Guillamona	Mosén Mateo Sánchez
12	Pedro Royo, mosén Royo y Bárbara Catalán	No consta

En el libro racional de 1605 consta inscrita una nueva capellanía, que añadida a las doce anteriores, suman trece en total. Se trata de la fundada por mosén Sebastián de la Xara, que anteriormente ya tenía aniversarios de misas en la parroquia. Es capellán de la misma su sobrino Vicente Sadorní. Todas las capellanías ya aparecen bajo la advocación a la Virgen, a Cristo o se fomenta el culto a un santo.

Cuadro 13. Número de capellanías, fundadores, advocación y poseedores en 1605.

Nº	FUNDADOR-PATRÓN	POSEEDOR	ADVOCACIÓN- INVOCACIÓN
1	Bernat Martínez	M. Miguel Galiano	San Juan Bautista
2	Na Jordana	M. Miguel de Pina	Bautista San Juan
3	Miguel de Palacios	M. Sanchos	San Blas
4	Mosén Miguel de Arcos	M. Pedro Ruiz Deza	Nuestra Señora

5	Guillén Miguel	M. Pedro Pérez Buitrón	No consta
6	De los Anayas. Domingo Anaya	M. Miguel Navarro	Santiago
7	Berenguer (Miguel) Molsos	M. Bartolomé Rovira	San Juan y San Martín
8	Martín Pérez de Varaso	M. Francisco Nieves	Nuestra Señora y S. Martín
9	Antoni de Lluc	M. Bonifacio Ortín	Ntra. Sra. De la Esperanza
10	Estevana	M. Miguel J. Pérez Gaçón	No consta
11	Na Guillamona	M. Mateo Sánchez	Santiago
12	Pedro Royo, m. Royo y B. Catalán	Vacante	No consta
13	Mosén Sebastián de la Xara	M. Vicente Sadorní	Espíritu Santo

En el año de 1611 consta fundada una nueva capellanía por Bartolomé Rovira, notario, que pertenece a una de las familias importantes de la villa de Ayora. Hay que recordar que dicho linaje acapara el estamento eclesiástico, con varios clérigos y capellanes que se van sucediendo a lo largo de los años, disfrutando de beneficios y capellanías, y también profesiones liberales como los de escribano, además de estar emparentados con egregios miembros de la nobleza local y familias de renombre como la de los Royo. Otro dato es que cambia el fundador-patrón de la capellanía de Antoni de Lluc, siendo sustituido por Margarita Rovira, su mujer. La capellanía de Estebana ha quedado suprimida en 1607 y ahora es una memoria de misas perpetuas, oficiadas por mosén Miguel Juan Pérez Gazón.

Cuadro 14. Número de capellanías, fundadores, advocación y poseedores en 1611.

Nº	FUNDADOR-PATRÓN	POSEEDOR	ADVOCACIÓN-INVOCACIÓN
1	Bernat Martínez	M. Miguel Galiano	San Juan Bautista
2	Na Jordana	Ldo. Miguel de Pina	San Juan Evangelista
3	Miguel de Palacios	M. Ambrosio Muñoz	San Blas
4	Mosén Miguel de Arcos	M. Pedro Ruiz Deza	Nuestra Señora
5	Guillén Miguel	M. Pedro Pérez Buitrón	No consta
6	De los Anayas. Domingo Anaya	M. Miguel Navarro	Santiago Apóstol
7	Berenguer Molsos, pastor	Jaime Mirón	San Juan y San Martín
8	Martín Pérez de Varaso	M. Francisco Nieves	Nuestra Señora y S. Martín
9	Margarita Rovira (A. de Lluc)	M. Pedro Pablo Boix	Ntra. Sra. De la Esperanza
10	Estevana	Suprimida	
11	Na Guillamona	M. Fco. Catalán de Pina	Santiago
12	Pedro Royo, m. Royo y B. Catalán	Vacante	No consta
13	Mosén Sebastián de la Xara	M. Pedro Ibáñez de la Xara	Espíritu Santo
14	Bartolomé Rovira	M. Juan Ibáñez de Rovira	Todos los Santos

La última capellanía eclesiástica que se funda, y de la que se tiene constancia a partir de 1667 por estar anotada en el libro racional de ese mismo año, en la iglesia parroquial de Ayora, es la de Serafina Rovira, otra mujer ilustre de la familia, que con ella ya tienen dos capellanías. El poder y prestigio del linaje Rovira ha ido en aumento desde el siglo anterior. Margarita Rovira, mujer de Antoni de Lluc, aparece con el apellido Bolinches. En la capellanía de Guillén Miguel figura como patrono el duque del Infantado.

Respecto a las capellanías laicales, la primera de la que se tiene documentación es la fundada por Gabriel Hernández en 1644, pero no aparece documentada hasta la visita pastoral de 1667.

Cuadro 15. Número de capellanías, fundadores, advocación y poseedores en 1667.

Nº	FUNDADOR-PATRÓN	POSEEDOR	ADVOCACIÓN-INVOCACIÓN
1	Bernat Martínez	M. Juan de Fuentes	San Juan Bautista
2	Na Jordana	M. Martín Catalán	San Juan Evangelista
3	Miguel de Palacios	Bautista Lanzá	San Blas
4	Mosén Miguel de Arcos	Francisco Portilla, clérigo	Nuestra Señora
5	Guillén Miguel	M. Juan Navarro	No consta
6	De los Anayas. Domingo Anaya	Licenciado Pascual Liñán	San Jacobo
7	Berenguer Molsos, pastor	M. Esteban Juan de Rosas	San Juan y San Martín
8	Martín Pérez de Varaso	M. Jerónimo de la Hoz	Nuestra Señora y S. Martín
9	Margarita Bolinches (A. de Lluc)	M. Mateo Martínez	Ntra. Sra. De la Esperanza
10	Estevana	Suprimida	
11	Na Guillamona	M. Jaime Gil	San Jacobo Apóstol
12	Pedro Royo, m. Royo y B. Catalán	M. Juan Navarro	No consta
13	Mosén Sebastián de la Xara	M. Martín Catalán	Espíritu Santo
14	Bartolomé Rovira	Blas Valero	Todos los Santos
15	Serafina Rovira	M. Andrés Serrano	Santísimo Sacramento
16	Gabriel Hernández	M. Jaime Sánchez	Arcángel S. Gabriel

Por lo que se refiere a las dos siguientes capellanías laicales no se dispone su fundación hasta 1733, por Honorato Colomby y que serán mejoradas con la agregación de más bienes dotales realizada por su sobrino mosén Pedro Negrel Longis, en su testamento de 26 de julio de 1755, ante Tomás Estruch, escribano de Valencia, lugar donde aquél tenía la residencia.

Cuadro 16. Número de capellanías, fundadores, advocación y poseedores en 1738.

Nº	FUNDADOR-PATRÓN	POSEEDOR	ADVOCACIÓN-INVOCACIÓN
1	Bernat Martínez	El clero	San Juan Bautista
2	Na Jordana	El clero	San Juan Evangelista
3	Miguel de Palacios	No hay. Sin renta	San Blas
4	Mosén Miguel de Arcos	El clero	Ntra. Sra. De la Asunción
5	Guillén Miguel	Vicente Sánchez. Memoria misa	No consta
6	De los Anayas. D. Anaya	Andrés Catalán. Memoria misas	San Jacobo
7	Berenguer Molsos, pastor	No hay. Sin renta	San Juan y San Martín
8	Martín Pérez de Varaso	Suprimida	Ntra. Señora y S. Martín
9	M. Bolinches (A. de Lluc)	No hay. Sin renta	Ntra. Sra. Esperanza
10	Estevana	Suprimida	No consta
11	Na Guillamona Py	El clero	San Jacobo Apóstol
12	Pedro, Fco. Royo. B. Catalán	Marcos Alonso. Memoria m.	No consta

13	Mosén Sebastián de la Xara	No hay. Sin renta	Espíritu Santo
14	Bartolomé Rovira	Suprimida	Todos los Santos
15	Serafina Rovira	Fco. Teruel. Memoria misas	Santísimo Sacramento
16	Gabriel Hernández	Vicario foráneo	Arcángel S. Gabriel
17	Honorato Colomby	Pedro Negrel	S. Joaquín
18	Honorato Colomby	Pedro Negrel	S. José

Patronos.

La capellanía fundada por Guillén Miguel designa como patrono al duque del Infantado, que ya aparece documentado en 1640 (libro racional). La de “Los Royos”, tiene a Juan Catalá Royo y Bartolomé Royo, hermanos del fundador. La de Estevana, mujer de Bartolomé Esteban tiene a Magdalena Benavente. La fundación de Serafina Rovira, mediante su testamento de 1654, designa patrón de la capellanía que ella instituye al vicario de la villa de Ayora. Mosén Gabriel Hernández nombra al clérigo Jaime Sánchez y Honorato Colomby instituye como patrón a su sobrino Pedro Negrel Longis.

En los demás casos en los que no se designa de forma expresa el patronazgo de la capellanía, se entiende que el primer patrón es el propio fundador o, en su defecto, los albaceas. Los siguientes a suceder como patronos suelen ser familiares directos consanguíneos del instituidor, con preferencia de los varones a las mujeres. Así ocurre con María, hermana de Miguel de Palacios y también con la fundación de Bartolomé Rovira bajo el patronazgo del linaje Rovira.

Cuadro 17. Número de capellanías, fundadores y patronos.

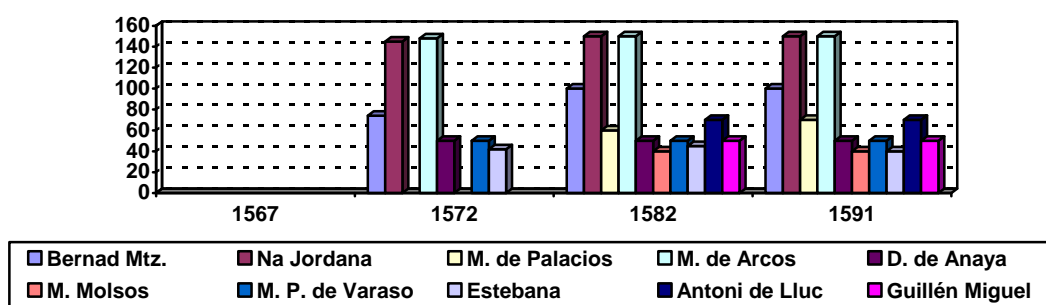
Nº	FUNDADOR	PATRÓN	ADVOCACIÓN- INVOCACIÓN
1	Bernat Martínez		San Juan Bautista
2	Na Jordana		San Juan Evangelista
3	Miguel de Palacios	María de Palacios	San Blas
4	Mosén Miguel de Arcos		Ntra. Sra. de la Asunción
5	Guillén Miguel	Duque del Infantado	No consta
6	De los Anayas. Domingo Anaya	Linaje Anaya	San Jacobo
7	Berenguer Molsos, pastor	Berenguer Molsos	San Juan y San Martín
8	Martín Pérez de Varaso		Nuestra Señora y S. Martín
9	Margarita Bolinches (A. de Lluc)		Ntra. Sra. de la Esperanza
10	Estevana	Magdalena Benavente	No consta
11	Na Guillamona Py		San Jacobo Apóstol
12	Pedro Royo, m. Royo y B. Catalán	Juan C. y Bartolomé Royo	No consta
13	Mosén Sebastián de la Xara		Espíritu Santo
14	Bartolomé Rovira	Linaje Rovira	Todos los Santos
15	Serafina Rovira	Vicario de Ayora	Santísimo Sacramento
16	Gabriel Hernández	M. Jaime Sánchez/Vicario	Arcángel S. Gabriel

17	Honorato Colomby	Pedro Negrel	S. Joaquín
18	Honorato Colomby	Pedro Negrel	S. José

Cuadro 18. Número de misas a oficiar por cada capellanía: 1567-1591.

FUNDADOR	1567	1572	1582	1591
Bernad Martínez	No consta	74	100	100
Na Jordana	No consta	145	150	150
Miguel de Palacios	No consta		60	70
Miguel de Arcos	No consta	148	150	150
Domingo de Anaya	No consta	50	50	50
Miguel Molsos	No consta		40	40
Martín Pérez de Varaso	No consta	50	50	50
Estebana	No consta	42	45	40
Antoni de Lluc	No consta		70	70
Guillén Miguel	No consta		50	50

Gráfico 8.



En el caso de las capellanías de la villa de Ayora, ante la ingente cantidad de misas a oficiar entre los capellanes designados y las quejas expresadas, se fueron reduciendo dichas misas a lo largo de los años. Pero el motivo principal era la disminución de la renta que recibían por el mantenimiento de las misas a que estaban obligados, ya que la reducción por otras causas debía tener una justificación de peso. La primera reducción sucedía en la Visita Pastoral de 1591, en la que se ordenaba reducir en 5 misas la capellanía de Estebana, aunque habían aumentado en 3 misas el año precedente. Posteriormente, en 1597 se redujeron drásticamente, por decisión de D. José Estevan, obispo de Orihuela, las misas de la capellanía de Miguel de Arcos, pasando de 150 a 48. Las misas por Miguel Molsos también se redujeron en la visita de precedente de 40 a 12.

Cuadro 19. Número de misas a oficiar por cada capellanía: 1605-1665.

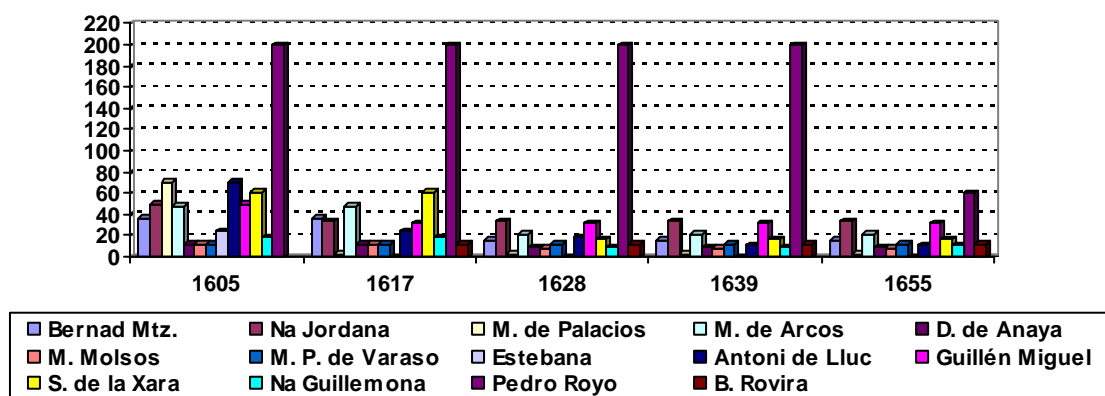
FUNDADOR	1605	1617	1628	1639	1655
Bernad Martínez	36	36	16	16	16
Na Jordana	50	34	34	34	34
Miguel de Palacios	70	2	2	2	2
Miguel de Arcos	48	48	21	21	21
Domingo de Anaya	12	12	9	9	9

Miguel Molsos	12	12	8	8	8
Martín Pérez de Varaso	12	12	12	12	12
Estebana	24	0	0	0	0
Antoni de Lluc (M. Rovira)	70	24	18	11	11
Guillén Miguel	50	32	32	32	32
Sebastián de la Xará	61	61	17	17	17
Na Guillemona	18	18	9	9	11
Pedro, Fco. Royo, Bárbara Cat.	200	200	200	200	60
Bartolomé Rovira		12	12	12	12

En la Visita Pastoral de 1617 se ordenó, por indicación del Visitador General, otra reducción del número de misas a celebrar por las siguientes capellanías: la de Miguel de Palacios de 70 a 2 misas, debido a su corta renta de 15 sueldos y, en consecuencia, el capellán no podía acudir a su obligación; la de Na Jordana se reduce de 50 a 34 misas; la de Estebana, que queda reducida a memoria de misas; la de Antonio de Lluc, que pasa de 70 a 24 y la de Guillén Miguel que queda en 32 misas.

En la capellanía de Sebastián de la Xara hubo reducción de 61 a 17 misas en la visita de 1625, ante la súplica de su capellán poseedor Pedro Ibáñez, debido a que su Majestad había reducido los censos de dicha capellanía sobre particulares. También se acuerda que, para 1618 las misas a oficiar en la capellanía de Bernad Martínez se reduzcan de 36 a 16 y las de Miguel Molsos de 12 a 8 misas. Las de Antoni de Lluc (Margarita Rovira) pasan de 18 a 11 en 1639. Pero la mayor reducción, realizada en febrero de 1640, fue la de las misas de la fundación de Pedro Royo, que pasaron de 200 a 60.

Gráfico 9. Número de misas por capellanías entre 1605-1655.



Cuadro 20. Número de misas a oficiar por cada capellanía: 1664-1694.

FUNDADOR	1664	1672	1684	1694
Bernad Martínez	16	11	11	11
Na Jordana	19	19	13	13
Miguel de Palacios	2	2	2	2

Miguel de Arcos	10	10	10	10
Domingo de Anaya	9	9	9	9
Miguel Molsos	8	8	8	8
Martín Pérez de Varaso	12	12	0	0
Estebana	0	0	0	0
Antoni de Lluc	11	11	11	11
Guillén Miguel	20	20	20	20
Sebastián de la Xara	17	17	17	12
Na Guillemona	9	9	9	9
Pedro Royo, Fco. Royo y Bárbara Cat.	60	40	40	40
Bartolomé Rovira		12	12	12
Serafina Rovira			51	51
Gabriel Hernández		100	100	100

En las sucesivas Visitas Pastorales de 1664, 1672 y 1684, siguió la reducción del número de misas a celebrar en cada capellanía, como se puede apreciar en la tabla 13, una vez analizada la renta disponible de cada una de ellas. Sin embargo, las que poseían suficiente renta para pagar las misas, seguían con las establecidas por el instituyente en su testamento o instrumento de fundación, como es el caso de la capellanía de Gabriel Hernández, la cual mantuvo las celebraciones hasta bien entrado el siglo XIX.

Gráfico 10. Número de misas por capellanías entre 1664-1694.

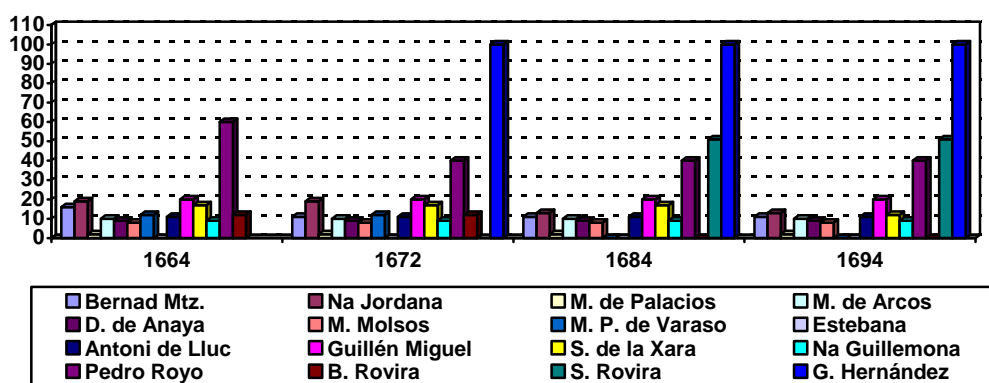
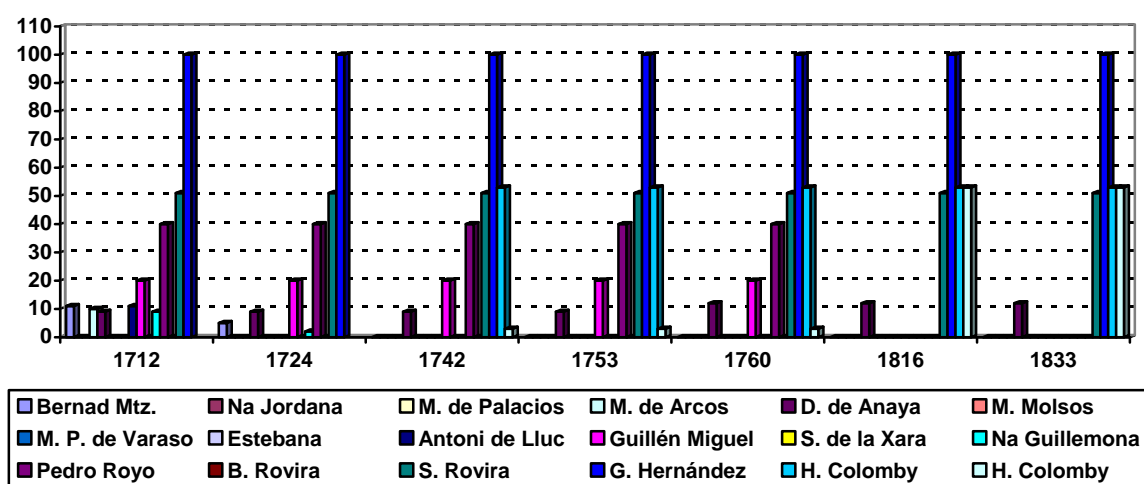


Tabla 4. Número de misas a oficiar por cada capellanía: 1712-1833.

FUNDADOR	1712	1724	1742	1753	1760	1816	1833
Bernad Martínez	11	5	0	0	0	0	0
Na Jordana	0	0	0	0	0	0	0

Miguel de Palacios	0	0	0	0	0	0	0
Miguel de Arcos	10	0	0	0	0	0	0
Domingo de Anaya	9	9	9	9	12	12	12
Miguel Molsos	0	0	0	0	0	0	0
Martín Pérez de Varaso	0	0	0	0	0	0	0
Estebana	0	0	0	0	0	0	0
Antoni de Lluc	11	0	0	0	0	0	0
Guillén Miguel	20	20	20	20	20	20	20
Sebastián de la Xara	0	0	0	0	0	0	0
Na Guillemona	9	2	0	0	0	0	0
Pedro, F. Royo, Bárb. Ca.	40	40	40	40	40	40	40
Bartolomé Rovira	0	0	0	0	0	0	0
Serafina Rovira	51	51	51	51	51	51	51
Gabriel Hernández	100	100	100	100	100	100	100
Honorato Colomby			53	53	53	53	53
Honorato Colomby			3	3	3	53	53

Gráfico 11. Número de misas por capellanía entre 1712 y 1833.



Capellanes.

Se ha realizado un estudio de este material humano, obteniendo datos de más de 100 capellanes elaborados de los libros de las visitas pastorales y libros racionales de la iglesia parroquial de Ayora, aunque hay periodos de tiempo en los que no hay información o, como mucho es parcial.

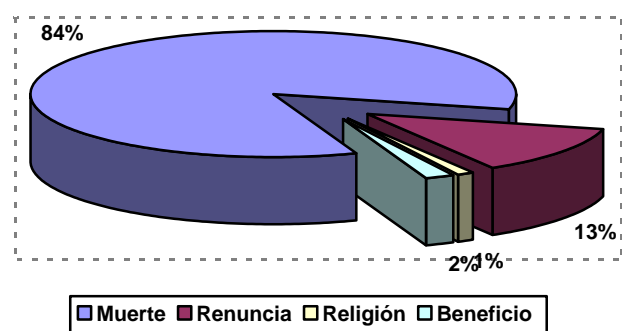
De la investigación realizada se desprende que la mayoría de los capellanes poseedores de las capellanías, sólo en contadas ocasiones abandonaban la capellanía, ya que a cambio de unas misas, recibían una renta que solía ser muy superior a la mayoría de los demás miembros del estamento eclesiástico y, cómo no, respecto a los seglares. Además les servía de proyección personal y patrimonial.

La principal causa de cese en la fundación era la muerte, lo que induce a pensar que estaban interesados en disfrutar y mantener la posesión de la capellanía Otro motivo, aunque menor, era la entrada en religión. En este trabajo, sólo se ha encontrado

un caso⁵²⁵, pues pasar de capellán (clero secular) a una orden monástica (clero regular) suponía la pérdida de importantes intereses familiares y patrimoniales. Hay que recordar que los fundadores y los patronos no querían que los patrimonios y dotes de la capellanía fuesen diluidos a causa del característico voto de pobreza del clero regular. En el caso de que ocurriese esta dejación de la capellanía, se hacía cargo un familiar. Un segundo motivo, bastante frecuente junto con el de la muerte, era la renuncia, casi siempre debido a que la capellanía se había quedado sin renta o la misma era muy corta, con lo que no se podía sustentar con la congrua al capellán, quedando vacante la institución o pasando las misas al clero. Otro motivo, era la entrada a beneficiado, es decir, que el capellán había conseguido un beneficio, lo que suponía el cese y la renovación de la capellanía, normalmente porque era incompatible la posesión de las dos fundaciones. Un caso residual e infrecuente, que aquí no se ha dado, era el matrimonio del poseedor, por lo que en consecuencia abandonaba la capellanía.

En el siguiente gráfico se puede apreciar las cuatro causas de cese en las capellanías estudiadas. Por muerte son 81 casos del total de 102, lo que representa el 81%; por beneficio 2, que es el 2%; por renuncia 12, que significa un 13%; y por entrada en religión 1 caso, que es sólo de un 1%.

Gráfico 12. Causas de cese de los poseedores de las capellanías.



Si se analiza el tiempo que permaneció cada capellán en su fundación y el tiempo que disfrutaron de las rentas de las mismas, en los 102 casos analizados, la mayoría estuvo una media de 8-10 años y algunos incluso 20 años o más. No es un periodo excesivamente largo pero hay que tener en cuenta la menor esperanza de vida en esas épocas. Para ilustrar mejor la variación de capellanes que había se ha confeccionado una tabla que abarca los siglos estudiados, es decir entre 1567 y 1833.

Cuadro 21. Variación de los capellanes poseedores de capellanías a lo largo de los siglos XVI-XVIII (Si no se indica es que es el mismo anterior).

Capellanías	1567	1572	1582	1591	1596	1605	1607
Bernad Martínez	Francisco Royo		Miguel Galiano			Diego Galiano	Miguel Galiano
Na Jordana	Melchor				Miguel	Miguel	

⁵²⁵ Se trata de Jerónimo de la Hoz, poseedor de la capellanía de San Juan y San Martín, fundada por Martín Pérez de Varaso, recogido en el libro de Visitas Pastorales de 1625. Debido a su ingreso en religión los patronos de dicha fundación presentaron a Francisco Jordá, clérigo de Valencia.

	Catalán				Teruel	de Pina	
Miguel de Palacios	Pedro Gener		Andrés Gener		Vicente Nadal	Sanchiz	
Miguel de Arcos	Joan de Fuentes		Pedro García		Pedro RuizDeza		
Domingo de Anaya	M. de Olivares	Domingo Anaya	Miguel Navarro				
Miguel Molsos	Jaime Rovira	Jaime Rovira	Bernad Rovira			Bartolo Rovira	
Martín P. de Varaso	Bernad Rovira	Bernad Rovira	Juan Bta. Font		Fco. Nieves		
Estebana	Francisco Royo	Miguel J. Gaçón					Sin misas
Antoni de Lluç	Melchor Catalán	Pedro Gener	Bonifacio Ortín				
Guillén Miguel	Pedro Gener		Alarcón		Pedro Pérez B.		
Sebastián de la Xara	-----	-----	-----	----- ---	-----	Vicente Sadorní	
Na Guillemona	-----	-----	-----	----- ---	Mateo Sánchez		Joan Catalán
Pedro, Fco. Royo.	-----	-----	-----	----- ---	-----	Vacante	Vacante
Bartolomé Rovira	-----	-----	-----	----- ---	-----	-----	-----

Capellanías	1608	1611	1618	1623	1632	1640	1649
Bernad Martínez					Bernardo Ruiz	Juan Ibáñez	
Na Jordana			Alonso B. d Pina			J. Catalán n Xara	J. Martín Catalán
Miguel de Palacios	Pedro Sadorní		Ambrosio Muñoz			Vacante	Vacante
Miguel de Arcos							Gaspar Ortín
Domingo de Anaya			Fco. Salazar		Juan Alegre		
Miguel Molsos	Bernad Rovira	Jaime Mirón	Pedro Marcilla		Juan B. Agramun		
Martín P. de Varaso					Jerónimo dela Hoz		
Estebada							
A.de Lluç. M. Rovira			Pedro P. Boix				Mateo Mtz.
Guillén						Diego	

Miguel						Pérez B.	
Sebastián de la Xara			P Ibáñez Xara				
Na Guillemona		Martín Galiana	M. Mtz dCastillo				
Pedro, Fco. Royo.	Vacante				Martín Pastor		
Bartolomé Rovira			J. Ibáñez d Rovira	Antonio Galán	Vacante	Vacante	Blas Valero

Capellanías	1656	1669	1684	1694	1704	1724	1734
Bernad Martínez		Juan de Fuentes				Vacante Suspendi	
Na Jordana			Baltasar Sánchez	Vacante	Suprimid	Suprimid El clero	
Miguel de Palacios	Sebastián Hurtado	Juan B. Lanzá	José Martí	Bautista Lanzá	Vacante. Suprimid	Suprimid El clero	
Miguel de Arcos		Fco. Portilla					
Domingo de Anaya		Pascual Liñán	Fco. Martí			Andrés Catalán	
Miguel Molsos		Juan de Rosas			Vacante. Suprimid	Suprimid El clero	
Martín P. de Varaso							
Estebana							
A.de Lluc. M. Rovira			Antonio Martí			Suspendi	
Guillén Miguel	Pedro Cidones	Juan Navarro			Fco. Rovira	Vicente Sánchez	
Sebastián de la Xara	Galcerán Ibáñez	Martín Catalán			Vacante. Suprimid	Suprimid El clero	
Na Guillemona	Juan Ortíz	Jaime Gil	Gaspar Ríco			El clero	
Pedro, Fco. Royo.	Juan Molina	Juan Navarro			Tomás Alonso	Marcos Alonso	
Bartolomé Rovira							
Serafina Rovira	-----	Andrés Serrano	Fco. Rovira				Fco. Teruel
Gabriel Hernández	-----	Fco. Rovira			Juan de Fuentes	Vte. Sánchez	

Capellanías	1742	1753	1760	1766	1816	1826	1833
Bernad Martínez							

Na Jordana							
Miguel de Palacios							
Miguel de Arcos							
Domingo de Anaya				El clero			
Miguel Molsos							
Martín P. de Varaso							
Estebana							
A.de Lluç. M. Rovira							
Guillén Miguel	Jerónimo Carbonell				Juan Ródenas		
Sebastián de la Xara							
Na Guillemona							
Pedro, Fco. Royo.	Vte. Sánchez	Marcos Alonso					
Bartolomé Rovira							
Serafina Rovira					José Ávila	Jaime García	
Gabriel Hernández			Fco. Martínez				Miguel d Campo
Honorato Colomby	-----	Pedro Negrel		Fco. Carbonell		Fco. Pont	
Honorato Colomby		Pedro Negrel		Joaquín Martínez	Fco. Sánchez		

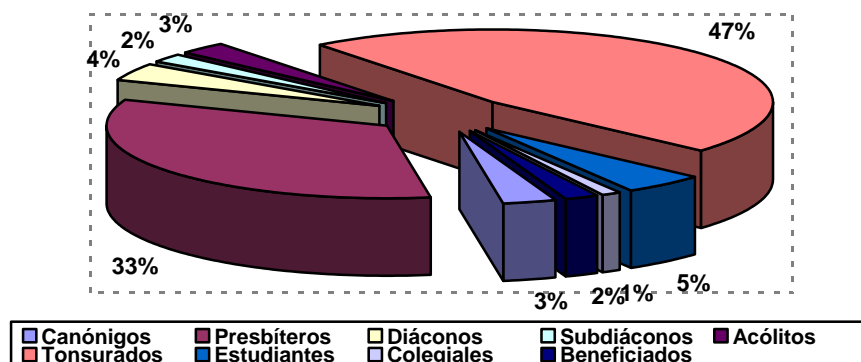
En este exhaustivo estudio de los capellanes había distintas categorías en la carrera eclesiástica, divididas en dos grandes grupos: órdenes menores, que son tonsurado u ordenado de menores y acólito) y órdenes mayores, formada por subdiáconos, diáconos y presbíteros o canónigos. También había estudiantes, beneficiados y colegiales. De los 102 capellanes recopilados se desprende el siguiente gráfico respecto a las categorías:

Tabla 5. Categorías y número de capellanes de las fundaciones.

CATEGORÍA	NÚMERO
Canónigos	3
Presbíteros (vicarios, curas)	34
Diáconos	4
Subdiáconos	2
Acólitos	3

Tonsurados o clérigos de menores	48
Estudiantes	5
Colegiales	1
Beneficiados	2

Gráfico 13.



Como se puede apreciar en el gráfico anterior la mayor representación está constituida por los grados inferiores o de escala de entrada a la carrera eclesiástica, que son estudiante, tonsurado o clérigo de menores y acólito, que suponen el 55% del total. Se ha diferenciado a los canónigos, para ver su representación, aunque son presbíteros y también a los beneficiados, que no necesariamente deben ser presbíteros. Respecto a los pertenecientes a las órdenes mayores representan el 45% restante.

Dotación de las capellanías.

Cuadro 22. Bienes adscritos a las fundaciones de las capellanías de Ayora.

Capellanías	Dotación de la capellanía 1649 1655
Bernad Martínez	8 libras, 12 sueldos
Na Jordana	10 libras, 15 sueldos, 6 dineros
Miguel de Palacios	10 sueldos
Miguel de Arcos	4 libras en diferentes censos
Domingo de Anaya	5 libras, 6 sueldos y 3 dineros
Miguel Molsos	2 libras, 14 sueldos y 4 dineros en varios censos
Martín P. de Varaso	No se halla
Estebana	4 tahúllas de tierra campá
A.deLluc. M. Rovira	5 libras y media en censos
Guillén Miguel	Seis hilos de agua en la villa de Ayora y 16 sueldos en tres censos
Sebastián de la Xara	20 libras, 466 sueldos en censos en Picasent 83 sueldos y 4 dineros en Castalla
Na Guillemona	2 libras, 15 sueldos, 4 dineros
Pedro, Fco. Royo.	Censo de 100 libras y pensión de 100 sueldos. Otro censo de 100 libras, oro de 86 libras, 16 sueldos, otro de 180 libras, otro de 50, de 60 y otro de 30.
Bartolomé Rovira	

Serafina Rovira	El producto de 1 casa y huerto calle Acequia de S. Fco. y 11 tahúllas de huerta en el llano
Gabriel Hernández	400 libras.
Honorato Colomby Capellanía de S. Joaquín	17 tahúllas de huerta, 2 balsones y 3 hilos de agua. 1 casa c/ de la marquesa. 3 tahúllas huerta y 2 hilos de agua. 2 tahúllas huerta y 1 hilo agua. 2 censos de 26 y 30. Otros 2 de 30 cada uno. 3 hilos agua. Un bancal 8 tahúllas huerta
Honorato Colomby Capellanía de S. José	El producto de la heredad de S. Benito. 1 censo de 65 l. Otro de 15, de 110, 30, .20, 12, 18 y otro de 10. 5 tahúllas viña y 5 de huerta. Un corral de ganado. 3 horas de agua

Como se puede apreciar, la fundación de una capellanía exigía una no despreciable inversión, tanto en bienes raíces como en metálico, para poder soportar los gastos del capellán y la misas a celebrar. Como estas fundaciones tenían el carácter de perpetuas, el capital o los bienes patrimoniales invertidos permanecían constantes, al menos teóricamente, y de los frutos y rentas provenientes, en su mayoría de censos y préstamos, se sostenía la capellanía y el capellán. El problema surgía cuando el capital o patrimonio invertido no generaba la suficiente renta, con lo que al final la capellanía consumía todo el remanente y se suprimía por no tener ingresos. Es lo que ocurrió con la mayoría de las fundaciones estudiadas, las cuales hacia el siglo XVIII no poseían ninguna renta o era tan pequeña que se convirtieron en memorias de misas, que sólo exigía 4 sueldos por oficio, que realizaba el clero el general y ya no había un determinado capellán poseedor de la institución.

13.- LA FUNCIÓN ECONÓMICA DE LAS CAPELLANÍAS.

En virtud de que la mayor parte de las manifestaciones piadosas tenían un sustrato económico y de que, por otro lado, cada fiel contabilizaba las indulgencias obtenidas, algunos historiadores han acuñado el término de “*economía espiritual*” y plantean que las actividades en favor del alma constituían una inversión para obtener una ventajosa o mejor posición en el más allá.

Las capellanías, al margen de su carácter religioso, tuvieron una importante función económica pues surgen a finales del medioevo como un ingenioso mecanismo financiero para lograr acortar la estancia de las ánimas de sus fundadores en el Purgatorio. Consistían en la imposición de un capital en instrumentos financieros o bienes raíces. Dicho patrimonio se invertía o arrendaba, constituyéndose los réditos en una renta del capellán quien, a cambio, se comprometía a celebrar una serie de misas en favor del alma del fundador. El capital inicial quedaba sujeto al cuidado de un patrono, nombrado, al igual que los capellanes, según las detalladas reglas establecidas en el instrumento de fundación y que normalmente eran familiares o descendientes del fundador⁵²⁶.

⁵²⁶ J. Arroyo Vozmediano, *Iglesia, poder municipal y fundación de capellanías en Calahorra (1600-1710)*, en Revista de Historia Moderna, nº 26, Anales de la Universidad de Alicante, Alicante 2008, pp. 200-201.

Cuadro 22. Bienes adscritos a las fundaciones de capellanías. Siglos XV y XVI.

FUNDADOR	AÑO	DOTACIÓN DE LA CAPELLANÍA
Inés Gutiérrez de Haro.(Los Molares Sevilla)	1426	Varias casas en Sevilla. Renta: 10 mrs cada una.
Inés de Ayala. (Casarrubios del Monte-Toledo)	1430	Heredades y fincas de Junquillos (Toledo). Un juro de heredad. Derechos de portazgo* en Toledo.
María Álvarez de Coca. (Toro-Zamora)	1455	Heredad en Matilla. Viña en Toro dada a censo. Renta: 50 mrs.
Beatriz de Sousa. (Luque-Córdoba)	1533	Cortijo, tierras y heredamientos de Alama. Renta: 80 fanegas de pan terciado**. Olivares del Cerro. Renta: 5.000 mrs
Juan Venegas. (Córdoba)	1537	Unas casas mesón con siete boticas. Renta: 4.000 mrs y 8 perdices. Unas casas horno de pan de cocer. Renta: 13 mrs/día. Dos pares de casas más. Renta: 9 ducados de oro y 10 gallinas.
María Fernández Benítez. (Luque-Córdoba)	1555	Una huerta en Marbella. Renta: 6.000 mrs. Una aranzada*** de viña en la Nava el Cobo. Otra aranzada de viña, zumacar**** y olivos. Treinta y una fanegas de trigo y cebada. Un olivar con 50 olivos. Otro olivar con 16 olivos.
Elvira de los Ríos y de Córdoba. (Zuheros-Córdoba)	1590	Tierras en Rambla y Santaella con la 3ª y 6ª parte del Cortijo de la Cabezuela. Huerta en la villa de Cabra. Renta: 12 ducados y 1.000 nueces. Pedazo de tierra en el pozo del Espino. Tres viñas y cierta cantidad de olivos. 700 ducados de un censo. 85.000 mrs de 6 censos.

*Derechos que se pagan por pasar por un determinado sitio.

**Renta de la tierra que se paga en granos, siendo las dos terceras partes de trigo y la otra de cebada. Cada fanega equivale a 64 áreas y 400 miliáreas.

*** Medida agraria equivalente a 367 deciáreas en Córdoba, 475 en Sevilla y 447 en Castilla.

**** Terreno plantado de zumaque, arbusto utilizado como cortiente.

Cuadro 23. Bienes adscritos a las fundaciones de capellanías. Siglos XVII y XVIII.

FUNDADOR	AÑO	DOTACIÓN DE LA CAPELLANÍA
Fco. Blanco de Salcedo. (Valladolid)	1616	Varios censos. Varios majuelos. Casa en Meneses. Renta: 26.997 mrs.
Mª de Contreras. (Granada)	1618	Un censo. Renta: 40 ducados. Una finca (tordo) de venta de vino en Motril. Renta: 40 ducados.

Francisca de Lisón. (Granada)	1645	Capital: 1.000 ducados. Varios bienes raíces en Algarinejo. Renta: 100 ducados. Censo. Renta: 450 ducados. Censo. Renta: 450 ducados.
José Domingo de Prado y Lisón. (Granada)	1662	Varios censos en Algarinejo. Renta: 500 ducados de principal.
Francisco Duque de Estrada. (Talavera)	1673	Un juro en Talavera. Renta: 69.699 mrs.
Alonso Arellano. (Talavera)	1713	Varias casas en Talavera. Una heredad de moreras junto al río Tajo. Heredad de Tejadillo. 20.000 reales. Otros 6.000 reales.
Juan Comeche. (Valencia)	1737	Treinta y seis hanegadas en Carlet: Renta: 1.159 libras. Tierras en Ruzafa. Renta: 126 libras. Tierras en Carlet. Renta: 300 libras. Otras fincas. Renta: 413 libras.
Vicente Antonia Frígola (Valencia)	1792	Tierras en Benitandús. Parte de la renta: 200 libras. Compra de fincas por valor de otras 200 libras. Otras 20 libras anuales.

Un ducado: 11 reales. 375 maravedís.

Un real: 34 maravedís.

Una libra: 20 sueldos. 240 dineros.

Así pues, esta institución es una clara muestra de la aplicación del sistema benefical establecido por la Iglesia desde la Edad Media, consistente en el principio de que a todo oficio eclesiástico corresponde un beneficio, es decir, unos ingresos o rentas respaldados por una exacción como los diezmos y primicias⁵²⁷ o por los frutos anuales de unos bienes raíces o censos⁵²⁸.

El auge de estas fundaciones está relacionado con la doble finalidad que tenían, una espiritual o religiosa y otra material: contribuir a la salvación de las almas de los fundadores después de su muerte y generar una renta, a partir de la cual se mantenía un capellán de forma vitalicia.

El hecho de que mediante ellas se generaba un fondo que producía una renta resultó muy atractivo para la sociedad de la época. Así, se generalizó la fundación de capellanías como una vía de dotar o suministrar pensiones a otros miembros de la familia (hijos, sobrinos, nietos, ahijados e incluso hijastros), es decir, de proporcionarles un medio de vida. Para el clero era la forma de garantizar la subsistencia de muchos de sus miembros y fomentar la vocación sacerdotal; en el ámbito de la economía las

⁵²⁷ Diezmo: porción de frutos debida a la Iglesia. Primicia: lo que los fieles tomaban de los primeros frutos de sus campos para ofrecer a Dios en la persona de sus ministros. A. Andrés, *Diccionario de Derecho Canónico...*, o.c., Tomos I y II, pp. 189 y 201.

⁵²⁸ P. Antón Solé, *La Iglesia gaditana en el siglo XVIII*, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, Cádiz 1994, p. 103.

capellanías eran generadoras de capital que se distribuía en la sociedad mediante préstamos con intereses muy reducidos y fueron un mecanismo financiero auxiliar de reconocida importancia.

Muchos eclesiásticos pudieron ordenarse y resolver su subsistencia gracias a que disfrutaban una o varias capellanías, fundadas por sus padres, tíos, abuelos, primos o algún otro antepasado⁵²⁹. En el Concilio de Trento se estableció el requisito de que para ordenarse, los sacerdotes tenían que demostrar que contaban con ingresos suficientes para mantenerse.⁵³⁰

Los sacerdotes que fundaban capellanías para sí mismos solían adjudicarse pocas misas mientras ellos disfrutaran de la capellanía y aumentar el número de misas para sus sucesores. Los más beneficiados mediante capellanías eran los descendientes de los fundadores, pero como no siempre había personas idóneas para ocupar el cargo de capellán entre los miembros de una familia, también resultaban favorecidos otros aspirantes. Con el fin de aumentar sus rentas, hubo muchos sacerdotes que concentraron varias capellanías en sus propias manos.

Fue común, asimismo, que los sacerdotes de órdenes menores o los estudiantes de teología fundaran capellanías para sí mismos, con el fin de ordenarse a su título y contar con una renta segura para vivir. En estos casos, las diferentes figuras de fundador, patrono y capellán recaían en la misma persona; es decir, los capellanes decían las misas por sus propias almas.

También se empleó la fundación de capellanías no sólo para dotar de medios a los familiares que eran sacerdotes, sino también para beneficiar a niños o jóvenes que estaban en vías de serlo. Se trataba de fomentar la ordenación de eclesiásticos. Éste es el caso de la fundación de la capellanía por Ana de Córdoba en 1581, al folio 55r, ya citada anteriormente, en la que se nombra capellán a un niño que además, es sobrino de la causante:

“Nombro por primer capellán a Andrés de Córdoba, hijo de Cristóbal Sánchez Guijarro y de Isabel López, su mujer, vecinos de aquesta villa, de edad de trece años, quien habrá de reunir todas las cualidades prescritas para que se le hiciera la colación (...)”

Así, las capellanías se convirtieron en el mecanismo por excelencia para costear la educación, e inclusive el mantenimiento, de los hijos, sobrinos o demás allegados varones del entorno familiar o incluso externos al mismo, que optaban o estudiaban el oficio o carrera eclesiástica.

⁵²⁹ Es el caso de la fundación y dotación de bienes de una capellanía, en 31 de enero de 1583, por María Caballón, a favor de su sobrino, Diego Caballón, para que pudiese ordenarse sacerdote. RAH. Índice de la Colección Salazar y Castro, legajo 21, carpeta 5, nº 2 (nº 76237 del inventario). O la fundada por Francisca de Lisón y Contreras, a favor del licenciado Juan Ruiz, su primo, para que se pueda ordenar. AHN. Archivo de los condes de Luque, C.83,D.2, fol. 38r. También la capellanía fundada por el boticario Luis Matoses Muñoz, mediante testamento de 24 de octubre de 1799, en Valencia, a favor de su hijo Carlos, estudiante en la parroquia de Santo Tomás Apóstol de la mencionada ciudad. ARV. Protocolos del notario Timoteo Ferriz, 1799, signatura 5711, fols. 156v-158v.

⁵³⁰ *Concilium Tridentinum*, sesión 21, cap. 2, *De reformatione*. I. López de Ayala, *El sacrosanto y ecuménico...*, o.c., p. 272.

Con el fin de disfrutar la capellanía por el mayor tiempo posible, se impuso la costumbre de nombrar capellanes incluso a niños pequeños, llegando a ser nombrados incluso con siete u ocho años de edad. Tanto es así, que los niños o jóvenes recibían el nombramiento de capellanes titulares y podían disfrutar de la fundación hasta el momento en que se ordenaban sacerdotes o tomaban otro estado. Para cumplir con las obligaciones religiosas, se nombraba a un capellán interino o simplemente se mandaba decir las misas con algún sacerdote⁵³¹. Para hacer constar que las misas efectivamente se hubieran mandado officiar, se exigía que los capellanes titulares o sus tutores solicitaran recibos de los sacerdotes que las habían rezado. Si los niños o jóvenes beneficiados con estas capellanías se ordenaban sacerdotes, se les instituía canónicamente como capellanes y, a partir de ese momento, asumían personalmente la obligación de decir las misas.

Pero si no tenían vocación religiosa y optaban por otra profesión, se casaban o llegaban a cumplir treinta años sin haberse ordenado, debían renunciar a la capellanía de la que habían disfrutado. De todo lo anterior se deduce que estas fundaciones fueron altamente beneficiosas porque mediante ellas muchos niños y jóvenes pudieron estudiar y alcanzar la profesión eclesiástica o alguna otra de su preferencia. Aunque no disfrutaban la renta completa, porque debían pagar las misas, con frecuencia el superávit que recibían era considerable. Si se tiene en cuenta, además, que con frecuencia las capellanías eran asignadas a los niños cuando aún eran pequeños y que las disfrutaban hasta su madurez, resulta que constituían una aportación significativa al presupuesto de las familias. Tal parece que estos beneficios fueron una de las razones principales para fundar capellanías, en virtud de que era muy alto el porcentaje de las fundaciones en las que se nombró como primer capellán a personas que no estaban ordenadas⁵³².

De esta forma, las capellanías sirvieron para solucionar los problemas de subsistencia de muchos eclesiásticos al relevarles de todo tipo de trabajo económicamente productivo, gracias a los beneficios económicos que implicaban⁵³³. Así lo expresaba P. Melgarejo en su *Compendio de contratos públicos...*, o.c., fol. 163, al decir sobre las capellanías que:

“Estos contratos son una última voluntad, o donación, que sirve de patrimonio a los Eclesiásticos, para que (como personas que han de tener todo su ejercicio en el servicio de Dios sin que les ocupen ni diviertan las cosas temporales) tenga de qué poder sustentarse, beneficiando al tiempo mismo con los sufragios las ánimas del Purgatorio”.

En consecuencia, había muchos pretendientes eclesiásticos a las distintas capellanías existentes, los cuales llegaban a pedir por escrito a los que ejercían el patronato de dichas fundaciones, cuando quedaban vacantes o en previsión de que en un

⁵³¹ Esta práctica permitió que el capellán titular delegara sus funciones en un capellán interino, que en ocasiones recibía el total de la renta de la capellanía y a veces sólo obtenía lo correspondiente al importe de las misas que tenía que decir y el superávit era para el capellán titular. G. von Wobeser, *La contribución de las capellanías de misas a la salvación de las almas...*, o.c., pp. 12-13.

⁵³² Ibidem, p. 13.

⁵³³ C. Castro Pérez, M. Calvo Cruz y S. Granado Suárez, *Las capellanías en los siglos XVII-XVIII...*, o.c., p. 337.

futuro lo fuesen, que les favoreciesen con la adjudicación de alguna de ellas, como el siguiente caso, en el que se pide una capellanía al duque de Osuna en enero de 1713 (AHN. Archivo de los duques de Osuna, C.42, D.8-19, fol. 15r):

“Fr. Juan de S. Antonio, del Orden de S. Basilio, (...) con la piadosa obligación de socorrer a unas pobres señoras huérfanas, parientes mías, de todo humano auxilio desamparadas; cuia charitativa asistencia no puedo ejercer con los caudales de mi Prov^a sin detrimento grave de mi conciencia, por lo que suplico a V.E. que usando de su incomparable famosa piedad, se sirva de favorecerme con una de las capnias de sus Rs. Guardias...”

Dichos pretendientes, que eran de todos los rincones de España, apelaban siempre a la misericordia del patrono de la capellanía y ponían de manifiesto que tenían cortas rentas o que debían ayudar a subsistir a padres, hermanos o parientes. Véase otra petición al duque de Osuna (C.42, D.8-19, fol. 16r):

“Don Antonio Hordóñez y Heredia, quien (h)a estudiado en la Universidad de Osuna Philosophía y Teología, y en ella graduado, (...) hallándose con el desconsuelo y desamparo de la muerte de su Padre, y (h)aver quedado con corta renta eclesiástica para la manutención de su Madre, hermanos y demás familia, estando vacantes dos capellanías del Sepulcro (...) espera de Vuestra Excelencia le honre con su nombramiento.”

Como consecuencia, el empleo de las capellanías para fines ajenos a su función esencial muchas veces ocasionó el descuido de las obligaciones religiosas, pues se llegó a omitir la celebración de las misas o éstas se llegaron a oficiar en lugares o en días diferentes a los indicados por el fundador. Es más, estos beneficios arrastraron a los clérigos a un “*arribismo*” indigno que generalmente estaba en conflicto con su carácter sacerdotal y servía para alimentar las críticas de escritores seculares y eclesiásticos.

13.1.- Fundaciones piadosas y sistema crediticio: censos y capellanías.

En el campo estrictamente financiero las capellanías tuvieron también una destacada posición al constituirse en una importante fuente de préstamo. Su actividad crediticia fue en aumento desde el siglo XVI llegando a su máximo apogeo en los siglos XVII y XVIII.

Este carácter financiero surgió de la necesidad en que se vieron los patronos, por la expresa voluntad de sus parientes difuntos, de invertir las dotes para cumplir las mandas testamentarias. Como el buen funcionamiento de una capellanía dependía de la seguridad de la inversión y al no haber muchas opciones, se recurrió a un sistema, el de los censos, para realizar estas inversiones, en concreto al censo consignativo redimible o censo “*al quitar*”, que, en esencia era una forma de crédito hipotecario a un cierto interés⁵³⁴.

De esta forma, las capellanías se convirtieron en una categoría especial de agentes financieros a los que se les conoce como “*censualistas*”. Los patronos contrataban los

⁵³⁴ A. García-Abasolo González, *Inversiones indianas en Córdoba. Capellanías y patronatos...* o.c., pp. 430-431.

censos a favor de la institución que representaban y por la labor de administración, una de cuyas funciones era la de suscribir los censos, percibían una asignación anual; asimismo, asumirían la responsabilidad de los saldos negativos cuando los había en las cuentas del cargo y descargo de la institución.

Un censo no es otra cosa que un contrato de préstamo hipotecario a interés, y como tal, en él figuran el prestamista (capellanía u obra pía), el prestatario o beneficiario del crédito, el aval presentado como hipoteca y un canon (cantidad anual) que ese prestatario o censatario se compromete a pagar, repartida de ordinario en dos fechas señaladas cada año, junio y diciembre (San Juan y Navidad). Dicho canon se regulaba mediante unos tipos de interés fijos⁵³⁵.

Cuadro 24 Distintos censos de la capellanía fundada en 1570 por el canónigo Francisco Méndez de Arellano.

PRESTAMISTA	CAPITAL INICIAL	AVAL	PRINCIPAL
Capellanía de Fco. Méndez de Arellano.	15 ducados y 502 mrs.	Las casas mesón de la Herradura en Talavera.	1.500 mrs.
		Unas casas en Talavera.	10.200 reales.
		Hacienda de Lucillos.	400 reales.
		Una hacienda.	3.464 reales.
		Hacienda de Los Aceitunos.	1.650 reales.

Por otra parte, como este tipo de préstamos reunía condiciones bastante favorables para los censatarios, los contratos eran mantenidos durante un largo período de tiempo.

Como las capellanías dependían de la inversión de sus fondos para su sustento y permanencia, el capital estaba permanentemente invertido, por lo que si un censo se redimía, se volvía a imponer. Con el paso del tiempo, la reinversión de los principales fue adquiriendo mayor importancia y, gran parte de lo que se prestaba procedía de la redención de censos impuestos en épocas anteriores⁵³⁶.

La mayoría de las inversiones venía determinada por el tipo de procedimiento con el que se había realizado la dotación. En el siglo XVI predominó la cesión de inmuebles, el efectivo, el traspaso de un título de censo o la imposición de un censo sobre una finca del fundador.

⁵³⁵ Dichos tipos eran, durante la segunda mitad del siglo XVI, de catorce mil el millar, es decir, el 7,14 % y entrado el siglo XVII, el 5%. Ibidem, p. 447.

⁵³⁶ P. Martínez López-Cano, *La génesis del crédito colonial*, Ciudad de México, siglo XVI, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Méjico 2001, p. 234.

Si la dotación se realizaba en efectivo, éste se tenía que invertir para generar una renta, siendo la opción más utilizada la de prestar la cantidad mediante la figura del censo consignativo redimible. Si la dotación se realizaba sobre inmuebles se buscaban diversas fórmulas para poder obtener la renta que íban desde el arrendamiento, la venta de la finca o inmueble o su entrega mediante censo redimible o enfiteúutico⁵³⁷.

La dotación también se podía hacer imponiendo un censo sobre un inmueble del fundador, gravando una parte o su totalidad, pero conservando su propiedad o, se podía retener el principal en depósito u otorgar a una obligación de pago a favor de la fundación, con el compromiso de pagar intereses iguales a los de los censos.

Aunque el denominador común de las estrategias de inversión de las capellanías era el conseguir una renta, no siempre se optó por el censo consignativo, recurriendo, como se ha citado anteriormente, al arrendamiento o censo enfiteúutico de inmuebles.

Resumiendo, en los siglos XVI y XVII las capellanías y otras obras pías sentaron las bases de su riqueza al tener importantes fuentes de ingresos regulares y realizando préstamos, así como reinvertiendo el capital de dichas donaciones, con lo que se generaron nuevas rentas y posibilitaron el financiamiento de los mercaderes, campesinos y comerciantes, contribuyendo a mejorar la economía de la época, al ser importantes fuentes de capital, ayudaron en compra de propiedades, en la mejora de algunas unidades productivas o en la financiación de negocios.

13.2.- Repercusiones económicas de las capellanías en los patrimonios familiares.

En principio, la fundación de una capellanía llevaba en sí un beneficio para la familia del testador, pero no siempre era así, pues fueron varias las implicaciones económicas negativas de la erección de capellanías que afectaron, no sólo al fundador, sino también a sus herederos, ya que, salvo en el caso de personas de holgada situación financiera, la creación de capellanías significó una merma considerable del patrimonio familiar.

En ocasiones, se tenían que vender los bienes de una persona para poder fundar la capellanía que había dispuesto en su testamento. En otras circunstancias, los propios hijos trataban de anular las fundaciones, porque no podían asumir las obligaciones económicas que implicaban, como en el caso de inmuebles o fincas, las cuales no estaba en condiciones de soportar el gravamen, porque tenía otras deudas previas⁵³⁸.

Problemas económicos serios se derivaron del hecho de que, en la mayoría de los casos, las fundaciones no se hacían mediante dinero en efectivo, ni mediante la aportación de algún otro tipo de capital, sino mediante crédito, aceptando el fundador una deuda por la cantidad correspondiente a la suma de la capellanía.

⁵³⁷ El censo enfiteúutico es el derecho que se tiene de exigir a otro cierto cánón o pensión anual en razón de haberle transferido para siempre o para largo tiempo el dominio útil de alguna cosa raíz. J. Escriche, *Diccionario razonado de legislación...*, o.c., tomo II, p. 258. P. Martínez López-Cano, *La génesis del crédito colonial...*, o.c., pp. 234-235.

⁵³⁸ G. von Wobeser, *La contribución de las capellanías de misas a la salvación de las almas...*, o.c., p. 18.

Las deudas se contraían mediante un censo consignativo o un depósito irregular y, según el caso, quedaban garantizadas mediante el propio censo (que se imponía sobre una o varias propiedades del fundador) o, si se trataba de depósitos irregulares, mediante fiadores o por medio de una hipoteca (impuesta sobre los bienes del creador de la capellanía)⁵³⁹. Es decir, el fundador, y después sus herederos, tenían que pagar anualmente la renta al capellán, garantizando el cumplimiento de este compromiso mediante sus bienes o los de sus fiadores, llegando a ser, dichas obligaciones, una pesada carga⁵⁴⁰.

Existía la posibilidad de redimir los principales, pero muchas familias no podían, o no les era conveniente pagar las sumas necesarias para tal efecto, de manera que dejaban impuestos los gravámenes por periodos muy largos. No fue hasta el último tercio del siglo XVIII cuando muchos deudores pudieron redimir sus capitales. Como resultado, las deudas por la fundación de capellanías fueron en aumento, sumándose a otras que ya tenían las familias.

La consecuencia de todo ello fue que la carga económica de las capellanías, en muchas ocasiones, se arrastró a lo largo de varias generaciones. Debido a que las deudas obligaban al pago de réditos anuales que alcanzaban el cinco por ciento sobre el principal, muchas familias tenían que destinar un alto porcentaje de sus ingresos a su pago. Cuando las deudas gravitaban sobre empresas o propiedades rurales, tales como haciendas, trapiches, molinos, y comercios, el pago de las rentas significaba una constante fuga de capital, con efectos negativos sobre la producción.

En virtud de esta problemática, el retraso y la suspensión del pago de los réditos fueron fenómenos habituales. Como los capellanes resultaban directamente afectados por esta situación, solían invertir una parte de su tiempo en “perseguir” a los deudores para cobrar sus rentas. Cuando no podían pagar se presentaban los concursos de acreedores y los remates, perdiéndose las propiedades y el patrimonio familiar. Aun cuando la fundación de capellanías no constituyó la única causa de este fenómeno, sí contribuyó de manera importante al mismo, porque el fervor religioso y el afán de proporcionar a los hijos y descendientes de rentas vitalicias impulsaron a las personas a dotar cantidades que eran excesivas en relación con su situación económica⁵⁴¹.

No sólo los capellanes resultaron afectados sino también los fundadores ya que las intenciones religiosas que perseguían al fundar las misas se frustraban cuando la base económica resultaba afectada. Si se reducía el capital disminuían proporcionalmente las misas que se debían rezar y si el capital se perdía éstas se dejaban de celebrar por completo. En consecuencia las almas perdían el apoyo que, según las creencias de la época, era fundamental para lograr su salvación, a través de su salida del Purgatorio y su ingreso en el Cielo.

Pero esta práctica siguió al verse estimulada por el hecho de que era posible recurrir al crédito sin necesidad de tener el dinero para pagar al contado. Algunos

⁵³⁹ G. von Wobeser, *El crédito eclesiástico...*, o.c., cap. 3, pp. 57 y ss.

⁵⁴⁰ Generalmente se pagaba el 5% del capital. G. von Wobeser, *La función social y económica de las capellanías...*, o.c., p. 132.

⁵⁴¹ Ibidem, p. 133.

matrimonios, en previsión de estos problemas pospusieron la fundación de capellanías hasta después del fallecimiento de ambos cónyuges.

14.- PATRIMONIO Y PROPIEDAD DE LOS BIENES DE LAS CAPELLANÍAS.

Si bien en un principio las capellanías perseguían la reducción del tiempo de estancia en el Purgatorio, como motivación exclusivamente religiosa, también es cierto que algunas familias pudientes recurrieron a ellas como una estrategia que les permitía, por ejemplo, el encubrimiento de mayorazgos de segundogenitura, según sostienen varios autores, como Pro Ruiz o el mismo Clavero Salvador. Se trataba de atender las líneas excluidas al vínculo o mayorazgo mediante un tipo de fundaciones anexas que otorgaban facultad al poseedor del mayorazgo para poder elegir libremente dentro de la familia al beneficiario de las mismas mediante los llamados patronatos que se incluían en las fundaciones del mayorazgo principal. Así, siguiendo a Clavero, el poseedor del mayorazgo será el patrón que ha de nombrar o presentar el miembro de la familia que haya de usufructar la capellanía o que haya de recibir la dote estipulada para la fundación. Se creaba un patrimonio vinculado, lo que aseguraba el porvenir de los no llamados al mayorazgo⁵⁴². Además, dado el celibato en los miembros de la familia para poder acceder a la fundación, se evitaba a la vez la proliferación de líneas legítimas⁵⁴³.

En consecuencia, el patronato puede aparecer y aparece, en ocasiones, como un anexo del mayorazgo, en el que se incluyen los bienes de su dotación. Pero también puede ocurrir que la capellanía sea la figura principal y el mayorazgo sea accesorio y sirva para nombrar el patrón. Así lo recoge Pérez de Lara, en su obra *De anniversariis et capellaniis...*, o.c., libro I, cap. IV, 4, fol. 13, al decir que el régimen de mayorazgo no es necesario, pero sí conveniente para las fundaciones de capellanías:

“Res affecta onere anniversarii debent servari indivisibiles...”

Visto que las capellanías podían ser o laicales o colativas, había una diferencia importante respecto al patrimonio de las mismas. Las laicales daban una mayor libertad en su constitución y administración. Las colativas o eclesiásticas se caracterizaban por que la titularidad de los bienes pasaba a ser propiedad de la Iglesia, si bien sujetos a la dotación estipulada, y dependían del ordinario del lugar y además se sometían a un procedimiento estrictamente reglado en cuanto a su constitución, provisión, funcionamiento, eventual reinversión de capitales y a visitas periódicas por parte de la autoridad eclesiástica. En contraprestación a la menor libertad, éstas proporcionaban

⁵⁴² J. Pro Ruiz, *Las capellanías: familia, iglesia y propiedad...*, o.c., p. 588. B. Clavero Salvador, *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836*, Madrid 1989, pp. 172-173.

⁵⁴³ Ejemplo de lo anterior es el del testamento, de 10 de agosto de 1390, de Alonso Fernández de Vargas, señor de Burguillos y de La Figuera (Sevilla), en el que se manda la fundación de una capellanía, en la iglesia de S. Juan de dicha villa, junto a la fundación de un mayorazgo donde es llamado el hijo mayor, Gonzalo, y que además es nombrado patrón de dicha capellanía para que elija al capellán y que sus sucesores en el mayorazgo, sean también los patronos que nombren a los capellanes dentro de la familia. AHN. Sección Nobleza: Archivo de los duques de Osuna, C.339,D.11-16. También María Enríquez de Acuña, en escritura de 11 de febrero de 1584 en Valladolid, funda un mayorazgo a favor de su hermano y una capellanía, cuyos patronos serán los sucesores en el mayorazgo. AHG. Archivo de los marqueses de Jura Real, signatura DI 30/20. O el caso de Ana de Barros, viuda del capitán Juan Alonso de Barros, que en su testamento de 27 de febrero de 1609 en Segovia, funda un mayorazgo en su hijo Juan y lo nombra patrón de una capellanía. AHG. Archivo de los marqueses de Jura Real, signatura DI 19/09.

una mayor seguridad a los fundadores y se beneficiaban del favorable régimen jurídico de los bienes de la Iglesia. Como rasgo fundamental de la institución, las capellanías colativas establecen lo que podemos definir como un beneficio eclesiásticos impropio (ya que están constituidos sobre un patrimonio privado⁵⁴⁴) y simple (no llevan aneja cura de almas) a título del cual es posible tomar las órdenes sagradas⁵⁴⁵.

Conviene insistir en que una capellanía (laical) era, sobre todo, una vinculación de bienes para el sustento de un clérigo de la familia del fundador, pero con una especial característica que era el ser una forma sacralizada de la propiedad vinculada⁵⁴⁶. La capellanía recibía la sanción religiosa para de este modo apropiarse de los recursos o bienes productivos lo que la diferenciaba de cualquier otro tipo de propiedad vinculada. En esta sanción sacralizada había una gradación, pues se protegía de forma más intensa la propiedad cuanto mayor era la intervención eclesiástica. Por tanto, la protección era mayor para las capellanías eclesiásticas que para otras figuras como las memorias de misas o los patronatos de legos.

Desde un punto de vista meramente patrimonial, resulta evidente el pensar en las ventajas fiscales y de régimen jurídico que la fundación de capellanías aporta a los patrimonios familiares que optan por este sistema de vinculación. De una parte la nula fiscalidad de unos bienes que, *de iure*, pasan a ser propiedad de la iglesia, presentan ventajas de rentabilidad respecto a la transmisión directa de los bienes patrimoniales a los herederos de una forma sucesiva. La inembargabilidad, la imprescriptibilidad y la inalienabilidad de la que disfrutaban estos bienes garantizan además la continuidad del goce de los bienes durante generaciones⁵⁴⁷, pues los bienes de las capellanías formaban un todo indivisible contra cualquier acto de enajenación por parte de sus poseedores. Además, el documento fundacional consolidaba y aseguraba la propiedad de los bienes que incluía, terminando con la inseguridad de una posesión que muchas veces era consuetudinaria.

Por otra parte, también era importante adjudicarse el derecho a apoderarse del excedente producido por los bienes de las capellanías como eran los réditos en los censos, la renta en las tierras arrendadas y el producto obtenido en las tierras cultivadas.

Por tanto, las capellanías fueron un elemento decisivo de las preocupaciones patrimoniales de los jefes de las distintas casas nobiliarias, pues las familias intentaban asegurarse rentas perpetuas diversificando las procedencias en evitación de posibles quiebras. En esta estrategia tenían protagonismo las capellanías, una de las colocaciones más interesantes para los segundones, con enconadas rivalidades y luchas para conseguirlas.

14.1.- El problema de la propiedad de los bienes dotales.

Este tema fue un verdadero “*quebradero de cabeza*” para la doctrina, que trató de eludir la citada cuestión de la propiedad de los bienes de las capellanías, pues a la

⁵⁴⁴ Para ordenaciones a título de patrimonio véase, por ejemplo, P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., tomo I, XXXI, §.378, pp. 382 y ss.

⁵⁴⁵ J. Arroyo Vozmediano, *Iglesia, poder municipal y fundación de capellanías...*, o.c., p. 201.

⁵⁴⁶ J. Pro Ruíz, *Las capellanías: familia, iglesia y propiedad...*, o.c., p. 594.

⁵⁴⁷ J. Arroyo Vozmediano, *Iglesia, poder municipal y fundación de capellanías...*, o.c., p. 202.

dificultad de analizar la propiedad vinculada se añadía la complejidad adicional de que se trataba de beneficios eclesiásticos. El problema derivaba en la dificultad de poder designar un propietario de dichos bienes.

Es claro que el fundador, por el mismo acto de la fundación, dejaba de ser propietario de los bienes sobre los que se había erigido la capellanía. En los documentos fundacionales el fundador renuncia al “*derecho de tenuta, y posesión, propiedad y otro cualquiera que me pertenezca a los bienes de esta institución*”⁵⁴⁸

Respecto a los patronos, tampoco eran propietarios de los bienes. Aunque en las capellanías laicales la administración de los bienes corresponde a los patronos activos, no quiere decir que fuesen propietarios sino que sólo eran los poseedores de un patrimonio que gestionaban en nombre de otro y por cuenta ajena.

En tercer lugar quedan los capellanes o cumplidores que, aunque gozaban de las rentas que originaban dichos bienes, tampoco gozaban de la propiedad de los mismos, lo cual es evidente respecto a las capellanías laicales, pero incluso en el caso de las colativos hay que resaltar que eran verdaderos beneficios, aplicándoseles, en consecuencia, la doctrina sobre la propiedad del derecho eclesiástico, esto es, el beneficiado nunca se ha considerado formalmente como propietario de los bienes de su beneficio⁵⁴⁹.

Ante todo esto surgieron varias corrientes doctrinales que intentaron dar respuesta al problema de las relaciones de propiedad en el patrimonio de la Iglesia. Una primera corriente atribuía la propiedad de todos los bienes eclesiásticos a Dios⁵⁵⁰. Otra, afirmaba que el propietario de todo el patrimonio de la Iglesia era el Papa⁵⁵¹. Una tercera corriente apoyada por Inocencio IV, defendía que la única propietaria del patrimonio eclesiástico era la Iglesia universal como persona jurídica. Una cuarta y última corriente y que consiguió imperar sostenía que la propiedad correspondía a cada iglesia y beneficio en particular⁵⁵².

Así es que hay que considerar que los bienes de las capellanías eran propiedad de las mismas como personas morales en torno a las cuales se movía un conjunto estructurado de honores, derechos y preeminencias que constituían la vida de estas fundaciones, aunque los canonistas siguieron reconociendo al Papa como supremo

⁵⁴⁸ Aunque el modelo es para fundar una capellanía eclesiástica sirve dicha fórmula para otros supuestos. P. Melgarejo, *Compendio de contratos públicos...*, o.c., fol. 165.

⁵⁴⁹ J. Pro Ruíz, *Las capellanías: familia, iglesia y propiedad...*, o.c., p. 595.

⁵⁵⁰ Uno de los máximos exponentes de esta corriente es M. de Azpilcueta (doctor Navarro), en su obra *Apologia libri de redditibus ecclesiasticis*, Antuerpiae 1574, III, fol. 3: “*Iesu Christo, rerumque ecclesiasticum vero domino*”. También P. Fagnani, *Comentaria in tertium librum Decretalium*, o.c., *Nec clerici, vel Monachi*, Cap. VII, 32, fol. 667: “*Dominium rerum ecclesiasticarum, proprie loquendo non est apud aliquam Ecclesiam particularem, sed apud Christum.*”

⁵⁵¹ “*Es el Summo Pontífice Romano dueño absoluto de los Eclesiásticos Beneficios*”. A. de Pitillas y Ruesga, *Tratado de medias annatas...*, o.c., fols. 44-45.

⁵⁵² “*Alia sunt bona, quae pertinent ad Ecclesias, vel hospitalia, aut alia pia loca, sive mobilia sint, sive immobilia, et sive immobilium fructus annexi sint beneficio, ad beneficiatumque aut beneficiatos proinde pertineant;*” L de Molina, *De iustitia et iure*, Venetiis 1614, tractatus II, disp. 142, fol. 535 y ss. “*Nec persona aliqua singulares habet dominium, sed sola comunitas.*” M. González Téllez, *Commentaria perpetua in singulos textus quinque Librorum Decretalium Gregorii IX*, Lugduni 1715, III, Titulus XIII, cap. II, 2 (*nota substantiam*), fol. 232.

administrador y dispensador de todos los beneficios. Pero la posesión de los bienes de las capellanías eclesiásticas correspondía a los capellanes y en las laicales a los patronos.

15.- PRESTIGIO SOCIAL Y CAPELLANÍAS.

Otro aspecto relevante es que las capellanías fueron elementos de *status* y se usaron como un medio para dar prestigio a las familias y asegurar el nivel económico de sus descendientes, de manera similar a lo que sucedía con los mayorazgos. Fue, por tanto, una práctica habitual entre familias nobles y élites urbanas con posibilidades económicas durante el Antiguo Régimen. La muerte era la última exhibición de la vanidad y poder de la clase nobiliaria y los grupos privilegiados, a pesar de los exorbitantes costes que representaba la salvación del alma y el mantenimiento del rango y la dignidad disfrutados en vida⁵⁵³.

Es evidente que para fundar una capellanía, memoria de misas o aniversario se necesitaba cierta disponibilidad económica en dinero, tierras o inmuebles. La institución de una fundación piadosa perpetua implicaba una manifestación pública de riqueza, piedad y generosidad por parte del fundador, una forma de reafirmación de su categoría en una sociedad donde la ocultación de la pobreza por parte de los miembros de los estamentos sociales privilegiados constituía un factor constante y presente en todos sus comportamientos, tanto más en los religiosos. No todos los que disponían de suficiencia económica accedían a promover los mismos tipos de fundación. Desde las memorias de una o dos misas anuales a las gravosas capellanías colativas de cientos de misas había lugar para muchos⁵⁵⁴.

Por esta razón, la mayoría de los fundadores estableció como requisito que los aspirantes a ocupar las capellanías tuvieran algún vínculo consanguíneo con ellos. Las reglas de sucesión se derivaron de los mayorazgos: se privilegiaba a los descendientes directos sobre los colaterales y se daba preferencia a los hijos mayores sobre los menores y a la línea masculina sobre la femenina.

De hecho existió un paralelismo entre las capellanías y los mayorazgos, ya que ambos se utilizaron como vía para proporcionar una renta para los hijos o allegados. Inclusive era frecuente que los que fundaban mayorazgos para los primogénitos instituían capellanías para los segundos y terceros hijos.

También, además de la nobleza, los grupos privilegiados estaban interesados en ganar capacidad de influencia en las instituciones de la época, que, con relativa frecuencia, interferían en sus intereses y que además constituían un formidable resorte de poder en su contexto temporal, lo que se conseguía mediante la fundación de capellanías que, además de la rentabilidad económica de las mismas, era muy interesante el acceder a posiciones de privilegio en los órganos de decisión de la Iglesia. La explotación de sus bienes raíces, la intervención en sus operaciones financieras, el arrendamiento de rentas y frutos, las operaciones de préstamo a sus fábricas, ofrecían

⁵⁵³ G. von Wobeser, *La contribución de las capellanías de misas a la salvación de las almas...*, o.c., p. 16.

⁵⁵⁴ J. Caro Baroja, *Las formas complejas de la vida religiosa (siglos XVI y XVII)*, Madrid 1985, pp. 471-472.

buenas oportunidades de obtener beneficios y una razonable seguridad en el buen fin de las operaciones⁵⁵⁵.

Se da por establecido, por tanto, el atractivo que pudo despertar en dichos grupos la accesión a los puestos relevantes en los cabildos y mesas capitulares. En principio, los cargos en la Iglesia no estuvieron nunca en venta, pero era posible la presentación laical a determinados beneficios, como en determinados señoríos jurisdiccionales, el derecho de presentación de los reyes a los beneficios mayores o mediante la constitución de los llamados beneficios laicos, con reserva del derecho de presentación a los fundadores o a sus descendientes. La forma más sencilla de obtener dicho derecho de presentación y con él ingreso de los familiares no destinados al matrimonio, es mediante la constitución de capellanías perpetuas colativas, ya que éstas se convierten en un verdadero beneficio eclesiástico con la conversión de su capital en bienes espirituales y la colación por el ordinario del lugar⁵⁵⁶. La reserva del patronazgo de los mismos permitía la preservación de la gestión de los bienes raíces por familiares y el derecho de presentación garantizaba la elección de los capellanes. Una familia que fundaba una capellanía podía obtener beneficios de la misma, como conseguir una capilla familiar, lograr sepultura en la iglesia, tener sitio reservado en los conventos por si las hijas querían ingresar como monjas y ocupar un lugar preeminente en una iglesia durante la misa, entre otros⁵⁵⁷.

En conclusión; la erección de este tipo de instituciones respondía a los intereses materiales de grupos concretos de la sociedad del Antiguo Régimen, puesto que no sólo era una forma de atender a los miembros de las ramas secundarias de las familias a través del sistema benefical: propiedades excluidas de impuestos en sus inicios y con un servicio litúrgico muy poco gravoso (misas por el alma de su fundador principalmente) sino que además era un instrumento de nobleza que servía para perpetuarla, demostrarla o intentar acceder a ella los hidalgos de una villa como un medio de consolidar su consideración social entre sus paisanos (ocio y gasto ostensible), sin que por ello cumplieran ningún servicio ante los fieles de la localidad -pues al igual que sus patronos y familias a los que se encontraban indefectiblemente unidos por lazos económicos, los segundos y religiosos⁵⁵⁸.

En fin, erigir una capellanía fue señal de prestigio y de nivel social, a la vez que un medio de ostentación, en especial en el lugar del nacimiento del fundador, lugar donde estaban adscritas la mayoría de estas instituciones. Del fundador se conservaba el recuerdo por "*su generosidad*" y los herederos y familiares se beneficiaban -también- de tales reconocimientos, adquiriendo preeminencia social que dio reconocimiento a los fundadores y a sus descendientes, factor importante en una sociedad estrictamente jerarquizada, siempre preocupada por la posición que ocupaban dentro de ella los individuos. Una reminiscencia de esta función ha perdurado hasta el día de hoy, pues todavía se intentan forzar los árboles genealógicos para hacerse descendiente de un noble o hidalgo, creador de una capellanía, de un arcediano, de un obispo o de un ministro.

⁵⁵⁵ J. Arroyo Vozmediano, *Iglesia, poder municipal y fundación de capellanías...*, o.c., p. 203.

⁵⁵⁶ Ibidem, p. 205.

⁵⁵⁷ G. von Wobeser, *La función social y económica de las capellanías...*, o.c., p. 134.

⁵⁵⁸ J. Troyano Chicharro, *La religiosidad popular...*, o.c., p. 213.

16.- NOBLEZA, PATRONATO Y MAYORAZGO.

En la peculiar sociedad del Antiguo Régimen los grupos o estamentos situados en una posición de privilegio estaban excluidos de los trabajos productivos, a los cuales se les reservaba ciertas tareas consideradas de honor, como la guerra, la caza, la justicia, etc.

En esta sociedad estamental existían medios para ascender en la escala social. El mayor afán del pueblo llano era convertirse en noble y el empeño del hidalgo era entrar en la nobleza titulada. Los honores militares y la carrera eclesiástica eran dos medios para conseguir la promoción social, pero incluso para alcanzar cargos en la Iglesia era necesario haber poseído previamente otros beneficios para entrar a formar parte del estamento nobiliario era el enriquecimiento (tras muchas de las “*probanzas de nobleza*” del siglo XVIII se encontraba, de hecho, una compra de las mismas).

Al lado de las fundaciones cristianas de beneficencia dotadas de un indudable interés público surgieron en la Baja Edad Media vinculaciones patrimoniales llamadas también fundaciones familiares. Era el supuesto en el que un fundador disponía que todo o parte de su patrimonio familiar quedase vinculado a su familia, configurándose como inalienable de generación en generación con el objeto de mantener unido el patrimonio familiar, generalmente de carácter inmobiliario y rural, así como, en su caso, preservar un ámbito de poder e influencia de la familia para el futuro. Era muy frecuente que las familias nobles y acomodadas no procediesen, de generación en generación, a liquidar los patrimonios y que el heredero y los legitimarios llegasen a acuerdos⁵⁵⁹.

La fundación de mayorazgos perseguía este fin, como hacia idéntico lugar se encaminaban también las capellanías y obras pías. La razón: tales instituciones: convertían a sus beneficiarios en rentistas, a la vez que protegía a los sucesores contra una posible prodigalidad o una mala gestión de un determinado miembro del citado estamento, al impedir la venta de los bienes familiares. De esta manera, se podía asegurar el futuro de los descendientes de una familia, los cuales podían seguir con el privilegio de poder vivir sin tener que trabajar.

⁵⁵⁹ A. Morey Tous, *Noblesa i desvinculació a Mallorca al segle XVIII i XIX*, Universitat Illes Balears i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1999, p. 354.

Mediante la propiedad vinculada, cuyo máximo exponente fue el mayorazgo⁵⁶⁰, se concentraba todo el patrimonio familiar en manos del primogénito, con exclusión de los demás hijos de la herencia paterna, tanto legítimos como ilegítimos. También se recurrió a otros mecanismos para mantener a los hijos en el “*goce del privilegio del ocio ostensible*”, según relata Pro Ruíz⁵⁶¹, creándose, como ya se ha mencionado, mayorazgos de segundogenitura, situar a los segundones en el Ejército o en Indias, o, incluso, facilitarles el ingreso en la carrera eclesiástica. Como todo el patrimonio nobiliario, según se ha citado, era heredado por los primogénitos, a los hijos pequeños se les pagaba en metálico las legítimas y las dotes, lo que pone al descubierto la importancia de unas prácticas concretas de herencia indivisa y sistema de heredero único, lo que explica la pervivencia en el tiempo de los patrimonios de la nobleza⁵⁶².

El mayorazgo era una vinculación civil y perpetua en la que se sucedía por el orden de la fundación, o en su defecto por el establecido en la Ley 1ª, Título XV, Partida II para la sucesión a la corona y en la Ley V (Ley XL de Toro) y IX, Título XVII, Libro X de la Novísima Recopilación. Cuando las fundaciones de los mayorazgos se acomodaban al orden establecido por las normas de la Ley de Partidas, se llamaban regulares⁵⁶³ y en los demás casos irregulares⁵⁶⁴, dependiendo la sucesión de éstos de la libre voluntad del fundador.

El proceso genético de la institución del mayorazgo se inicia en el reinado de Enrique II y los de Enrique IV e Isabel I. En un principio sólo el rey podía autorizar la creación de un mayorazgo, pero en 1505, bajo el reinado de Doña Juana I, las Cortes de

⁵⁶⁰ Una definición clásica del mayorazgo es la que sigue: “*Ius succedendi in bonis, ea lege relictis, ut in familia integra perpetuo conserventur, proximoque cuique primogenito ordine succesivo deferantur*”. L. de Molina, *De primogeniorum Hispanorum origine, ac natura*, Lyon 1749, Libro I, cap. I, nº 22, fol. 5. Otras definiciones: “*Vinculación civil y perpetua en que se sucede por el orden de su fundación, o en su defecto por el que establece la ley para la sucesión de la Corona*”. M. Danvila, *El libro de la Propiedad*, Valencia 1857, p. 54. “*Vinculación civil perpetua, por virtud de la cual, se realiza la sucesión en la posesión y disfrute de los bienes, según las reglas especiales de la voluntad del testador o fundador del mayorazgo*”. F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho Civil...*, o.c., tomo VI, p. 1511. Los autores actuales definen el mayorazgo como “*aquella forma del modo de propiedad vinculada cuyo régimen concreto somete a las condiciones de la propiedad territorial feudal al colonato por medio de la prohibición de enfiteusis, a la burguesía gracias a la vinculación estricta y general, y a la corona mediante la inconfiscabilidad incluso en los delitos exceptuados, imponiendo, al mismo tiempo, en beneficio de las líneas principales de la clase feudal, un proceso de acrecentamiento y acumulación patrimonial*”. B. Clavero Salvador, *Mayorazgo. Propiedad feudal...* o.c., p. 278. También como “*un acto de disposición de bienes mediante el cual el cabeza del mismo determina unir un conjunto de bienes y los reserva a sus descendientes en un orden preestablecido de sucesión determinando su imposibilidad de enajenarlos por cualquiera de los sucesivos poseedores y sin que se puedan ejecutar por deudas*”. M. Peset Reig, *Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra*, Madrid 1982, p. 23. Para una mayor información sobre el tema y sobre la peculiaridad de los mayorazgos en el Reino de Valencia: P. Marzal Rodríguez, *Una visión jurídica de los mayorazgos valencianos entre la época foral y la Nueva Planta*, AHDE, Madrid 1996, tomo LXVI, pp. 229 a 364.

⁵⁶¹ J. Pro Ruíz, *Las capellanías: familia, iglesia y propiedad...*, o.c., p. 588.

⁵⁶² A. Morey Tous, *Noblesia i desvinculació a Mallorca...*, o.c., pp. 357-359.

⁵⁶³ “*Regularis maioratus est, quando voluntas seu dispositio institutoris in nihilo se opponit regulis, seu normis datis ad succedendum in nostro Hispaniarum Regno*.” H. de Rojas, *Tractatus posthumus de incompatibilitate Regnorum, ac Maioratum*, Lugduni 1659, Parte I, Cap. VI, 21, fol. 59.

⁵⁶⁴ “*Maioratus irregularis e contrario est ille, in cuius fundatione institutor debita a regulis iure consuetudinario introductis in successione Regni et eis in totum vel pro parte se opponit*.” H. de Rojas, *Tractatus posthumus...*, o.c., Parte I, Cap. VI, 22, fol. 59. Véase también a J. M. de Rojas y Almansa, *Tractatus unicus de incompatibilitate et repugnantia possidendi plures maioratus*, Matriti 1755.

Castilla promulgaron las llamadas Leyes de Toro, que regularon el régimen del mayorazgo y acordaron que cualquiera, noble o plebeyo, podría fundar uno, procediendo al vinculamiento de la tierra.

Los mayorazgos se fundaban principalmente en testamento, y a veces por contrato y se probaban con la escritura de su fundación, y con la de la licencia del rey en los posteriores a la Real Cédula de 14 de mayo de 1789, por testigos deponiendo del tenor de dichas escrituras; también se probaban por la posesión inmemorial de bienes con carácter de vinculados.

Pero el recurso más eficaz fue la fundación de capellanías, pues la vinculación del patrimonio indisoluble que permitían era un recurso útil para los que no poseían mayorazgos, ya que mediante estas instituciones se adquirían unas rentas fijas que facilitaban el camino hacia el ennoblecimiento, habilitando medios de atención de las líneas no llamadas al mayorazgo.

Así, la pequeña nobleza, representada por los hidalgos, eran con frecuencia los principales poseedores de las capellanías de carácter patrimonial, pues anejas a ellas había un interés material que se traducía en asegurar una renta para el futuro.

El derecho de patronato, como conjunto de prerrogativas honoríficas, se conservaba dentro de la línea principal de la familia, es decir, que dentro de la fundación de un mayorazgo, considerada dicha fundación como principal, se instituían capellanías. Cada vez que vacaba la capellanía, el primogénito o poseedor del mayorazgo (el patrón) la otorgaba a un pariente, que usufructuaba dicho beneficio eclesiástico, con lo que se reforzaba la unión de la familia en torno a dicha fundación, cuya cabeza era siempre el titular del mayorazgo. Era, pues un anexo del mayorazgo. Pero también podía ocurrir lo contrario: la capellanía podía aparecer como figura principal y el mayorazgo como un modo de determinación del patrón o administrador de los bienes de aquélla, con lo que se establecía para estos bienes el régimen patrimonial vinculado, característico del mayorazgo⁵⁶⁵. Los dos casos son claramente recíprocos, pues la única diferencia no es la denominación institucional elegida por el fundador, sino la importancia que adquieren las rentas (necesarias para poder mantener al capellán o la manda concreta) entre la totalidad de las mismas de los bienes de la dotación.

Otro de los pilares de la nobleza, además del ocio ostentoso, era el gasto desmesurado, como forma pública de afirmación del rango. Todo ello no tiene otro objetivo que el inmediato reconocimiento de la propia honra, subordinado al acatamiento de un estricto código moral del que depende la aceptación de los privilegios de los que se goza, código que le exige ser generoso y solidario con los miembros de su linaje⁵⁶⁶, dadivoso y desprendido con los amigos, paternal con los criados y vasallos y

⁵⁶⁵ “Patronatus ab aliquibus factus, gaudet privilegiis, et legibus maioratum”. M. Peláez de Mieres, *Tractatus Maioratum et Meliorationum Hispaniae in quatuor partes digestus*, Granatae 1575, prime part, praefatio, 7, tomo I, fol. 1. Pérez de Lara expone que el régimen de mayorazgo no es necesario, pero sí conveniente para las fundaciones: “*Quod huiusmodi res affectae onere anniversarii debent servari indivisibiles*”. A. Pérez de Lara, *De anniversariis, et capellaniis*, Ostii Moguntionorum 1610, Tomo II, libro I, cap. IV, 4, fol. 33.

⁵⁶⁶ Una obligación de la nobleza era ayudar a satisfacer las necesidades de los legitimarios desheredados en los patrimonios vinculados, a quienes la doctrina mayorazguista reconocía el derecho de alimentos. Así, el sustento de hermanos se convirtió en una exigencia moral y en un deber, pues la pobreza de los

misericordioso con los pobres y necesitados. Por tanto, un gran señor practicaba la caridad, realizaba costosas fiestas, poseía muchos criados y servidores, atendía las necesidades de las iglesias y capillas de su devoción, además de poseer mansiones y tierras.

Elemento indispensable de la dignidad que exigía el rango fue, además, el patrocinio religioso mediante la fundación de ermitas, conventos, monasterios, colegiatas, capillas, capellanías, memorias de misas, aniversarios, hospitales, iglesias parroquiales, curatos, y obras pías, que demostraban la riqueza, el lustre y el poder de un noble a la vez que su piedad, desprendimiento y caridad. En realidad, durante el Antiguo Régimen ninguna familia de la nobleza que se preciara desechó la oportunidad de ejercer su patronato sobre una o más de las entidades religiosas citadas, las cuales fueron objeto de la actividad patrocinadora que desplegaron las familias de la aristocracia y de los poderosos locales, llegando a conformar en ocasiones espesas y nutridas redes de patronato que casi siempre se incorporaban en las fundaciones de mayorazgos.

El concepto de patrono o patrón indica defensa, protección y amparo, aunque también significa poder y superioridad, ideas que entroncan con las categorías nobiliaria y señorial. El patronazgo fue una de las más destacadas cualidades de la nobleza, al destilar supremacía, preeminencia, distinción, magnanimidad, paternalismo, y hasta piedad. Todos ellos atributos o cualidades que se pretendieron característicos y propios de la nobleza. Es claro que en una sociedad tan empapada e impregnada de religiosidad y referencias sagradas, además, el patronazgo y la protección se orientaron de una forma predominante hacia el mundo eclesiástico y religioso⁵⁶⁷.

El carácter nobiliario de los patronatos y capellanías se muestra de forma clara y evidente en la fundación de capellanías en diversos ejemplos, tanto en Castilla como en Aragón, Valencia e incluso en las colonias de América. Así ocurre, por ejemplo, en la diócesis de Calahorra, donde se muestra la íntima conexión entre nobleza de sangre y derecho de patronato⁵⁶⁸. También los ricos hacendados de Nueva España deseaban reafirmar su preeminencia socioeconómica, pero como era muy difícil conseguir un título de nobleza, lo hicieron con la fundación de capellanías⁵⁶⁹.

Durante los siglos XVII y XVIII hubo fundaciones de capellanías en Castilla por labradores enriquecidos, imitando de esta forma a la clase nobiliaria e intentando equipararse a la misma con el patronato sobre estas fundaciones, lo que venía a ser un

miembros de la familia o linaje revierte en perjuicio del buen nombre de la casa y lesiona la dignidad y la honra. J. A. Catalá Sanz, *Rentas y patrimonios de la nobleza valenciana en el siglo XVIII*, Madrid 1995, p. 266.

⁵⁶⁷ A. Atienza López, *La apropiación de patronatos conventuales por nobles y oligarcas en la España Moderna*, en *Revista de Investigaciones Históricas*, nº 28, Valladolid 2008, pp. 79-80.

⁵⁶⁸ Son relevantes las fundaciones de capellanías por regidores, justicias, oficiales, caballeros y otras personalidades de la oligarquía municipal que ostentaban el poder político y económico de la villa, junto a nobles de sangre, como la erección de una capellanía por Juan Martínez de Yangüas o Francisco Díaz de Esparza, ambos regidores de Calahorra. J. Arroyo Vozmediano, *Iglesia, poder municipal y fundación de capellanías...*, o.c., pp. 210 y 211.

⁵⁶⁹ Son claros ejemplos los del bachiller Pedro Ignacio Gómez Corballar que funda una capellanía para su ahijado o la del hacendado Gabriel Díaz Ugarte, que hace lo propio en Yucatán (Méjico). G. von Wobeser, *La contribución de las capellanías de misas a la salvación de las almas...*, o.c., p. 6. *La función social y económica de las capellanías...*, o.c., p. 127.

cierto título de honorabilidad, lo que confirmaba de forma pública el *status* económico que habían alcanzado.

Consecuentemente, el derecho de patronato activo era un instrumento de nobleza, ya que servía para adquirirla, perpetuarla y demostrarla de forma pública y notoria. Esta idea se encuentra latente en todos los documentos que se generan en las capellanías. Ejemplo de lo anterior es un modelo de fundación de capellanía colativa donde se exigía que quienes gozaran de ella “*no hayan ejercido, ni ejerzan oficios viles de hecho, ni de derecho...*”⁵⁷⁰ equiparando las mismas con la nobleza no titulada o hidalguía.

Para concluir hay que volver a incidir en que las capellanías eran unas instituciones fundamentales en el funcionamiento de las familias aristocráticas y nobles. Eran una constelación de fundaciones menores que estaban alrededor de un mayorazgo, asegurando la solidaridad y perpetuidad del linaje, proyectándolo hacia un futuro seguro y asegurado.

17.- SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE MAYORAZGOS Y CAPELLANÍAS.

Las capellanías tenían muchas semejanzas con los mayorazgos, pero también se diferenciaban, pues aunque podían, como se ha dicho, considerarse como vinculaciones o mayorazgos de menor entidad, es claro que no eran lo mismo. Sánchez Román clasifica en tres especies las formas vinculares: el mayorazgo, la capellanía y el patronato⁵⁷¹.

Las principales similitudes con los mayorazgos se encuentran en que las capellanías, tanto las laicales como las colativas, podían ser erigidas por contrato o por testamento u otra última voluntad y que sus bienes eran inembargables, indivisibles e imprescriptibles:

3. Item, que los dichos bienes estén siempre permanentes, y no se puedan vender, trocar ni cambiar, ni en manera alguna enagenar, aunque para ello se trayga licencia de Juez competente, porque desde luego lo prohíbo, y quiero sean inalienables.

(P. Melgarejo, *Compendio de contratos públicos*, o.c., fol. 164).

“Los expresados bienes jamás de han de poder vender, trocar, donar, enajenar, ni tampoco separar, dividir, acensuar, hipotecar, ni gravar total, ni parcialmente (...) y quiero, y mando que esten siempre unidos, incorporados y libres de todo gravamen y responsabilidad, como actualmente lo estan, y que sean inenagenables, indivisibles e imprescriptibles...”

(J. Febrero, *Febrero adicionado o librería de escribanos*, tomo III, parte I, capítulo XI, § final, Madrid 1817, p. 95).

Estos formularios se aprecian mejor con un ilustrativo ejemplo de la vida real, como es el caso de la fundación de la capellanía, ya citada con anterioridad, de

⁵⁷⁰ J. Febrero Bermúdez, *Librería de escribanos...* o.c., p. 126.

⁵⁷¹ F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho Civil...*, o.c., tomo VI, p. 1511.

Francisco Duque de Estrada Idiáquez (AHG. Archivo de los marqueses de Jura Real, signatura DI 06/03, fol. 3v):

“Yttem, que la propiedad (...) que en ningun tiempo se pueda vender, trocar, hipotecar, enajenar o cuasi enajenar en manera alguna ni convertir en otro efecto por mi ni por otro alguno de otros Patronos...”

Tanto en la fundación del mayorazgo como de la capellanía se insertaban unas cláusulas en la que se expresaban que se fundaban *“perpetuamente”* *“para siempre jamás”*, que aparecían de forma expresa en los llamamientos y en las fórmulas retóricas utilizadas, establecidas para asegurar la permanencia indefinida de estas fundaciones. Ejemplo de ello es la institución de una capellanía por el prelado Pedro de Peñaranda en 1332:

“facemos e ordenamos e establecemos una capellania para siempre jamas que sea cantada en la iglesia o lugar do nos acordaremos e por bien tuvieremos.”

(I. García Díaz. Documentos del siglo XIV. Pergamino nº 83. Archivo de la Catedral de Murcia, Murcia 1989, p. 38).

O la fundación de dos capellanías en las parroquias de San Gil y San Pablo de Zaragoza por Ana y María de Cunchillos Santángel, viudas, respectivamente del magnífico Berenguer Español, infanzón, y de Miguel de Villanueva, ciudadano, en 1568:

“Ynstituimos, fundamos, ordenamos y dotamos para luego de presente y para in perpetuum dos capellanias...”

(AHN. Sección Nobleza: Archivo de los duques de Parcent, C.121, D.4, fol. 2r).

“Yo Juan Venegas instituyo una capellanía perpetua en el monasterio de Nuestra Señora Santa María Mayor de las Dueñas (...) perpetuamente para siempre jamás...”

(AHN. Sección Nobleza: Archivo de los condes de Luque, signatura C.21, D.62, fol. 1r).

Otra semejanza con los mayorazgos se encontraba en la cláusula en la que el fundador reconocía que donaba de forma irrevocable los bienes para la dotación de la capellanía y renunciaba a su derecho y a cualquier acción sobre la fundación instituida:

“Aplico a dicha Capellanía los bienes mencionados, y de ellos la hago donacion pura, perfecta e irrevocable en sanidad con todas las firmezas que legalmente se requieren: desisto, quito y aparto a todos los que a ellos puedan pretender derecho, de las acciones reales, personales, útiles, mixtas, directas y ejecutivas, y las cedo, renuncio y traspaso íntegramente en la nominada Capellanía para siempre.”

(J. Febrero, *Febrero adicionado...*, o. c. pp. 98 y 103-104).

Pero a diferencia de las capellanías colativas, en las laicales el parecido con el mayorazgo era mucho mayor, ya que los bienes dotales permanecían en posesión del patrono, con la única obligación de entregar sus rentas al capellán o sacerdote. Por

tanto, la dotación prácticamente escapaba a todo control de la Iglesia. Es más, dicha condición se manifestaba de forma expresa mediante una cláusula de la escritura o testamento en la que se fundaba la capellanía laical, donde se decía que no se entrometiese la autoridad eclesiástica debido a que se trataba de un patronato de legos, como es el caso de la capellanía fundada por Alonso Osorio, comendador de la villa de Esclavín, de la Orden de Caballería de Alcántara (AHN. Archivo de los condes de Luque, C.83,D.2-13):

“Que en la memoria ni en parte alguna del testamento no se entrometiera a proveerla, darla, ni visitarla Su Santidad, ni ningún cardenal, obispo, ni arzobispo, ni persona eclesiástica, sino fuere el Patrón que nombraba que porque su intención era que fuera patronato de legos.”

La sucesión en este tipo de capellanías se regía por las mismas reglas que en los mayorazgos: se llamaba a la sucesión al hijo o descendientes legítimos, prefiriendo el mayor al menor, el varón a la hembra, y la hembra de mejor grado y línea al varón más remoto, aplicando las Leyes VIII y IX, del Título XVII, del Libro X de la Novísima Recopilación⁵⁷² y la doctrina representada por de Rojas⁵⁷³, en su obra ya citada, *Tractatus posthumus de incompatibilitate Regnorum ac Maioratum*. Sirva el siguiente ejemplo de J. Febrero en su obra *Febrero adicionado...*, o.c., p. 90 y ss.

“Nombro por Patronos a Pedro y Juan, mis sobrinos, hijos de Antonio y Diego mis hermanos, y a sus hijos y descendientes legítimos, prefiriendo el mayor al menor, el varón a la hembra, y la hembra de mejor grado y línea al varón que lo tenga mas remoto.”

Respecto a las eclesiásticas el parecido era mucho menor, puesto que los inmuebles, tierras y demás bienes pasaban a considerarse espiritualizados, es decir, que pasaban a formar parte del patrimonio de la Iglesia. Pero aquí aparece un interés práctico que facilitaba la fundación de estas instituciones: que los bienes de la Iglesia estaban, por principio, excluidos del pago de impuestos, y aunque a lo largo del tiempo fueron gravándose con diversas cargas, siempre tributaron menos que los bienes de los laicos. Así, y éste es el parecido mayor con la institución del mayorazgo, el fundador de una capellanía colativa creaba un vínculo para las ramas (líneas) secundarias de su

⁵⁷² Ley VIII: “Las hembras de mejor línea y grado sucedan en los mayorazgos con preferencia a los varones más remotos”. Ley IX: “...como declaramos y mandamos, que en la sucesión de los mayorazgos, vínculos, patronazgos y aniversarios que de aquí adelante se hicieren, así por ascendientes como por transversales o extraños, se guarde lo dispuesto en las dichas leyes de Partida (Ley 2,título 15, Partida 2) y Toro (Ley 40), y se suceda por representacion de los descendientes en todos los casos, tiempos, líneas y personas, en que los ascendientes hayan muerto ántes de suceder en los tales mayorazgos, aunque la muerte haya sido ántes de la institución de ellos, sino es que el fundador hubiese dispuesto lo contrario”.

⁵⁷³ “*Quid iuris, quaendo in institutione Anniversarii perpetui, vel patronatu, vocatus fuerit, ad successionem per hoc nomen appellatium, unius, iuncto ei nomine alio colectivo, verbi gratia, Suceda uno de mis hijos, ò uno de mis parientes, ò uno de mi linaje; an ex hoc sit sufficiens coniectura ad inducendam successionem per viam Maioratus, maxime si institutio alia omnino coniectura careat?*” H. de Rojas, *Tractatus posthumus posthumus...*, o.c., Parte I, Cap.VII, 34 y ss, fol. 94.

linaje⁵⁷⁴, elevando a la vez el valor de los bienes dotales, la de reducirles la carga fiscal⁵⁷⁵.

La principal diferencia es que las capellanías (colativas) eran beneficios eclesiásticos que respondían a un nuevo tipo de organización del patrimonio de la Iglesia, como fue el sistema benefical y, además eran fundaciones con un fuerte carácter religioso. Al contrario que las laicales que son verdaderos vínculos y pueden equipararse, sin ninguna duda, a los mayorazgos.

18.- LA SUCESIÓN EN LAS CAPELLANÍAS.

La ley que gobernaba la vida de la capellanía era la escritura de fundación. En ella, las cláusulas sucesorias eran las que determinaban la herencia del patronato activo (el derecho a proponer o nombrar capellán) y la herencia del patronato pasivo (el derecho a ser nombrado capellán). En estas cláusulas se determinaba el orden en que se iban sucediendo los poseedores de la capellanía⁵⁷⁶. En defectos de estas normas se recurría a las normas de derecho sucesorio contenidas en la legislación de la corona⁵⁷⁷.

Es interesante observar que las reglas de sucesión de las capellanías eran similares a las de los mayorazgos, pues en la mayoría de las ocasiones se primaba a los descendientes directos, y entre éstos tenían preferencia los hijos mayores sobre los menores y los descendientes de los hijos sobre los descendientes de las hijas.

En las capellanías eclesiásticas lo normal era que el fundador determinase el orden de suceder, tanto para el patronato como para la sucesión de la capellanía. Respecto al patronato, solía nombrarse un primer heredero concreto (generalmente un hijo del fundador) y se establecía el orden en que sucedían los demás descendientes. Cada patrono elegía un capellán siguiendo las normas establecidas por el fundador.

“Primeramente: el dicho Vicente Mompó, hijo de Juan, ciudadano, fundador de dicho beneficio haya de permanecer viviendo con el derecho de patronato, con facultad de presentar el propio beneficio a su libre voluntad y muerto Vicente Mompó, fundador, suceda en el derecho de patronato María Peris, consorte de dicho Vicente Mompó, y muerta, sucedan Vicente Mompó, hijo mayor de Vicente Mompó, fundador, y muriendo éste, Félix Mompó, también hijo del fundador, y

⁵⁷⁴ Las capellanías y los patronatos aparecen como un anexo del mayorazgo. El papel de estas instituciones con vínculos para líneas secundarias del linaje aparece en: B. Clavero Salvador, *Mayorazgo. Propiedad feudal...* o.c., pp. 172-175.

⁵⁷⁵ J. Pro Ruíz, *Las capellanías: familia, iglesia y propiedad...*, o.c., p. 589.

⁵⁷⁶ Ibidem, p. 598.

⁵⁷⁷ En la llamada sucesión irregular, se contienen las reglas establecidas por el fundador en orden a la sucesión, tanto en los mayorazgos como en los títulos nobiliarios, así como en las capellanías, que se regulan por la carta de concesión del título (caso de las mercedes nobiliarias), por la voluntad del fundador del vínculo (mayorazgos) y por la escritura de fundación (capellanías). Cuando no hay normas particulares y, en consecuencia, no se sigue el orden tradicionalmente determinado en estas materias, la sucesión se denomina regular, que es la determinada en el orden de suceder en la corona, fijada en Las Partidas (Partida II, Título XV, Ley 11ª). “...el Mayorazgo es una vinculación civil y perpetua, en el que se sucede por el orden de la fundación, o en su defecto por el que establece la ley de Partida para la sucesión de la corona”. B. Gutiérrez Fernández, *Códigos o estudios fundamentales...*, o.c., Tomo II, Cap. II, Secc. II, § V, art. 5º, p. 208. P. Marzal Rodríguez, *Una visión jurídica de los mayorazgos valencianos...*, o.c., pp. 244-246.

muriendo éste, José Mompó, también hijo del fundador, y muriendo éste, Antonio Mompó, también hijo.”

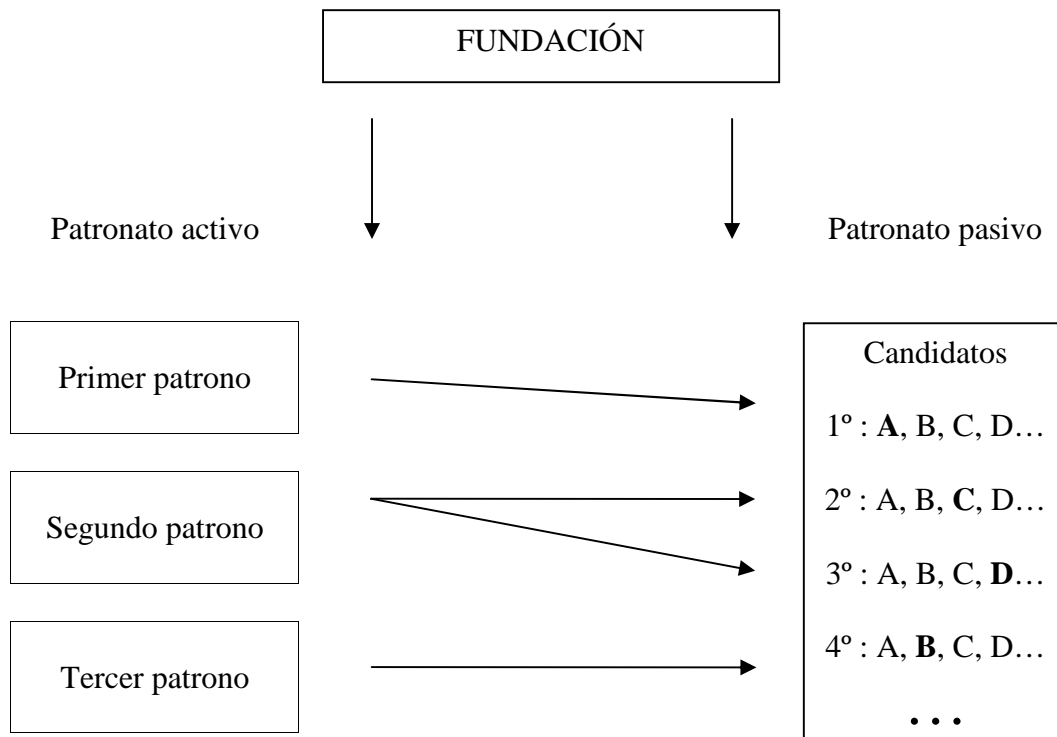
(ARV. Escritura de fundación y dotación de un beneficio simple... Propiedades Antiguas. Legajo 17, fol 11r-21r).

En unos casos (A), el fundador manifestaba en las disposiciones sucesorias que se eligiese capellán por los patronos entre los clérigos descendientes de su propio linaje, estableciendo sólo la preferencia de los más cercanos o próximos respecto a los más lejanos, de los más pobres sobre los más ricos, de los más honorables y virtuosos sobre los menos, etc.

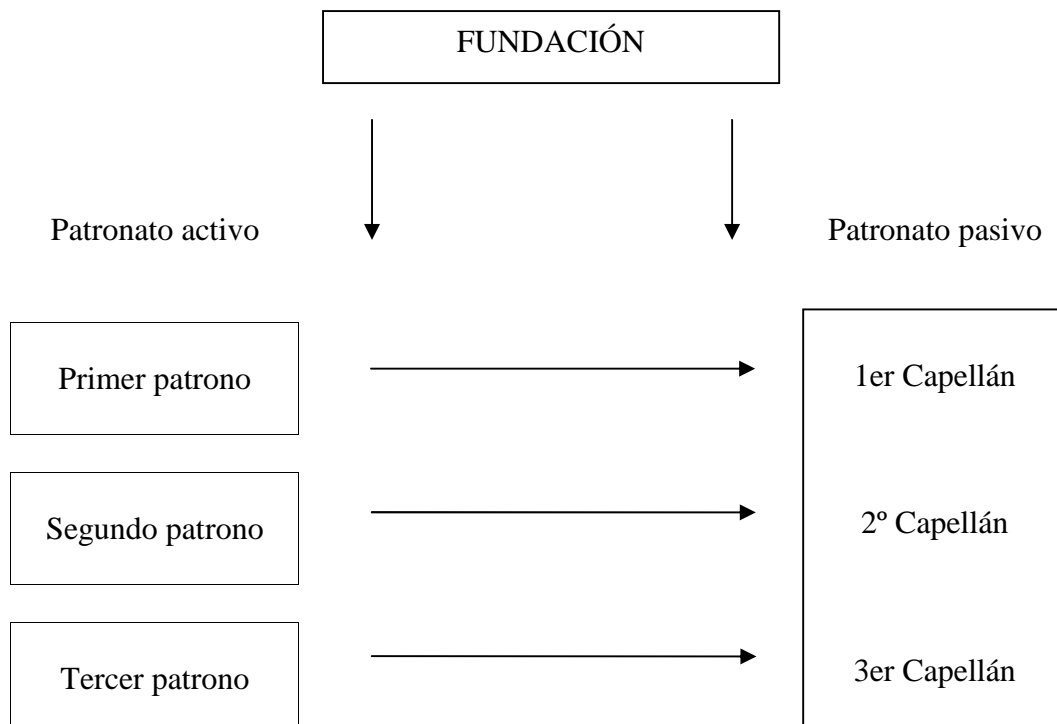
En otras ocasiones (caso B), el fundador establecía con todo detalle el orden en que se sucederían los capellanes, de forma que el patrono estaba obligado a nombrar a aquel que, según la escritura de fundación, era acreedor al nombramiento en cada momento. Este modelo sucesorio se esquematiza en los siguientes gráficos del cuadro 7.

Cuadro 25. Nombramiento de patronos y capellanes.

Caso A



Caso B



Veánse dos ilustrativos ejemplos:

Caso A.

Es el de la capellanía de María de Contreras, mujer de Mateo de Lisón y Viedma (Veinticuatro de Granada), fundada en la parroquia del Sagrario de Granada, mediante testamento de 23 de febrero de 1619, en la que previene que los capellanes sean parientes de su padre, Alonso de Contreras y de su mujer, alternando cada vez los del linaje de uno con el otro (AHN. Sección Nobleza: Archivo de los condes de Luque, signatura C.83,D.2, fol. 49r-49v):

Cuadro 26. Parentesco en la Capellanía de María de Contreras.

Patronos	Capellanes beneficiarios	Orden	Parentesco
Alonso de Contreras	Linaje de A. de Contreras: Cristóbal Pérez	1	Sobrino de Alonso de Contreras
Mariana de Lisón y Contreras, hija	Linaje mujer de Alonso	2	Hnos, primos, sobrinos mujer de Alonso de C.
Sucesores Mariana de Lisón	Linaje de A. de Contreras	3	Hnos, primos, sobrinos de Alonso de Contreras
Sucesores Mariana de Lisón	Linaje mujer de Alonso	4	Hnos, primos, sobrinos mujer de Alonso de C.

Lo mismo acontece con una cláusula del testamento de 7 de junio de 1555, de María Fernández Benítez, en la que funda una capellanía, dejando como patrono a su marido Egas Venegas, caballero (Veinticuatro de Córdoba, regidor por el estado noble), y en la que expresamente dice que los patronos (su marido y sucesores) elijan *clérigo de su linaje* (de la fundadora), lo nombren y sea hábil y de buena vida (AHN. Sección Nobleza: Archivo de los condes de Luque, signatura C.83,D.2, fol. 46r-47v):

Cuadro 27. Parentesco en la Capellanía de María Fernández Benítez.

Patronos	Capellanes beneficiarios	Orden	Parentesco
Egas Venegas	Hernán Gómez Benítez	1	Sobrino
Juan Venegas, hijo	Luis de Hermosilla	2	Segundo sobrino
Sucesores Juan V.	Bartolomé López de León	3	Tercer sobrino
Sucesores patronato	Alfonso Calvo de León	4	Séptimo sobrino
Sucesores patronato	Pedro Calvo	5	Octavo sobrino
Sucesores patronato	Bernardo Ortiz Osorio	6	Noveno sobrino

Caso B.

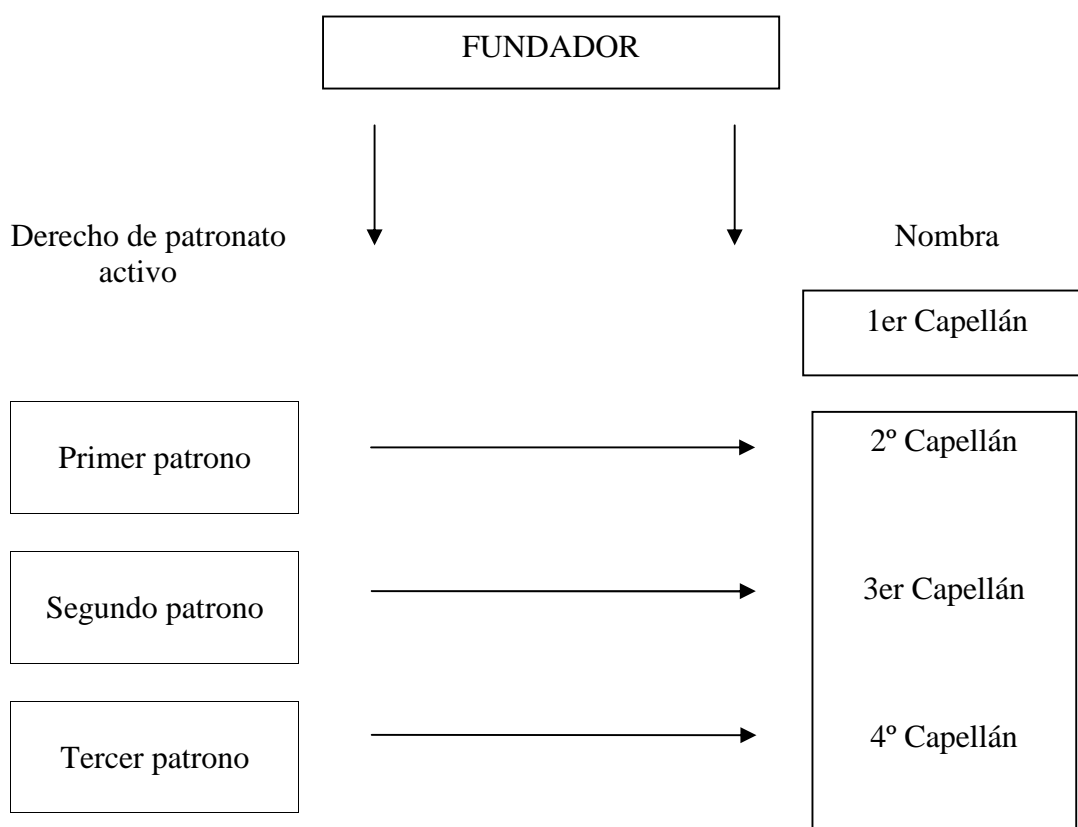
El siguiente ejemplo responde a dicho caso, donde se aprecia que la fundadora Ana de Córdoba y de los Ríos, en su testamento de 4 de noviembre de 1581, dado en Zuheros (Córdoba), instituye una capellanía y establece de forma detallada y concreta el y orden de sucesión de los distintos capellanes, obligando a los patronos de la fundación a nombrar a los citados capellanes (AHN. Sección Nobleza: Archivo de los condes de Luque, signatura C.83,D.2, fol. 54r-55v):

Cuadro 28. Parentesco en la Capellanía de Ana de Córdoba.

Patronos	Capellanes beneficiarios	Orden	Parentesco
Egas Venegas	Andrés de Córdoba	1	Sobrino
Juan Venegas, hijo	Cristóbal Sanchez de Alcalá	2	Segundo sobrino
Sucesores Juan V.	Luis Clemente	3	Ahijado de la fundadora
Sucesores patronato	Nietos de Miguel Sánchez de Alcalá	4	Séptimo sobrino
Sucesores patronato	Biznietos de Miguel Sánchez de Alcalá	5	Octavo sobrino
Sucesores patronato	Bernardo Ortiz Osorio	6	Noveno sobrino

Sin embargo, en las capellanías laicales, era menos frecuente que el fundador designase al capellán. En este tipo de instituciones, lo verdaderamente importante era la sucesión de los distintos patronos, los cuales podían elegir capellán con bastante libertad (no de forma absoluta, pues solía haber algunos criterios para el nombramiento). El fundador, lo más que podía hacer era nombrar en la escritura al primer capellán, dejando libertad a los patronos para que buscasen sucesor.

Cuadro 29. Nombramiento de patronos y capellanes en capellanías laicales.



Con un ejemplo práctico tomado de la fundación de una capellanía por María Álvarez de Coca, en 10 de febrero de 1455, viuda del caballero Diego García de Ulloa, en la ciudad de Toro (Zamora), donde la fundadora nombra al primer capellán y a los sucesivos patronos, los cuales eligen por su propia y libérrima voluntad a los posteriores capellanes, se apreciará más gráficamente (AHN. Sección Nobleza: Archivo de los condes de Luque, signatura C.83,D.2, fol. 5r-10r):

Cuadro 30. Capellanía de María Álvarez de Coca.

FUNDADOR		PRIMER CAPELLÁN
María Álvarez de Coca	Nombra a	Fernando García
PRIMER PATRONO		SEGUNDO CAPELLÁN
Alfonso de Ulloa (hijo)	Nombra a	Diego Rguez. De Párraga
SEGUNDO PATRONO		TERCER CAPELLÁN
Diego de Ulloa (nieto)	Nombra a	Baltasar Herrera
TERCER PATRONO		CUARTO CAPELLÁN
Alonso de Ulloa (bisnieto)	Nombra a	Cristóbal Gamarra Ulloa

Pero, tanto en las capellanías colativas como en las laicales, las líneas sucesorias podían agotarse (las de patronato activo y, si las había, las de patronato pasivo), lo cual podía prevenirse en las escrituras de fundación, haciendo constar que el derecho de sucesión pasase a distintas ramas o líneas del linaje del fundador (generalmente a las líneas colaterales por vía cognaticia o de hembras). Pero si se llegara a agotarse el linaje no quedando ningún descendiente del fundador de la capellanía, solía preverse que el derecho de patronato pasase a una iglesia, hospital o lugar pío, o al juez mayor del lugar.

En el caso concreto de las capellanías colativas podía extinguirse la línea de sucesión en el derecho a ser capellán pero seguía la línea del derecho de patronato, por lo que en este supuesto los patronos recibían instrucciones para conferir la capellanía a clérigos no emparentados con la familia, ya fuese con carácter perpetuo o interino hasta que hubiese clérigos idóneos del linaje⁵⁷⁸.

En defecto de norma expresa del fundador⁵⁷⁹, la sucesión se regía por las leyes castellanas. Tanto para las capellanías laicales como para el derecho de patronato regían las normas sobre vinculaciones y mayorazgos.

En el patronato activo hereditario había una particularidad, y es que se sucedía por estirpe, a diferencia del patronato activo familiar, donde se sucedía por personas o cabezas. Esta sucesión por estirpe significaba que todos los herederos de un mismo

⁵⁷⁸ J. Pro Ruíz, *Las capellanías: familia, iglesia y propiedad...*, o.c., p. 599.

⁵⁷⁹ “La voluntad del fundador, arreglada a las prescripciones de Derecho es la ley que determina la clase y la naturaleza de las vinculaciones y fija el orden de suceder en las mismas”. F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho Civil...*, o.c., tomo VI, p. 1538 (cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1865).

patrono se contaban como uno solo y todos tenían una sola voz y voto, mientras que en la sucesión por cabezas había un voto por cada persona⁵⁸⁰.

En las capellanías eclesiásticas la sucesión era un poco más complicada en lo que se refiere al derecho de patronato pasivo. Aquí no se aplicaban las reglas de los mayorazgos, sino que se atendía a los grados del parentesco y su proximidad con el fundador, predominando la línea y el grado más cercanos, así como la edad de los pretendientes, siempre que no hubiese alguna cláusula de la fundación en contra. Además, a diferencia de los mayorazgos donde se llamaba a la sucesión de forma inmediata cuando quedaban vacantes, en las capellanías se llamaba a todos los parientes para poder elegir y nominar por los patronos.

Uno de los requisitos para obtener una capellanía era el de ser consanguíneo del fundador, siendo llamados al patronato pasivo los miembros de su estirpe o linaje.

Para dotar la capellanía se detraían bienes de un patrimonio, siendo deducidos de la parte de la herencia de los sucesores del fundador. Los autores no se ponían de acuerdo sobre la parte de la herencia que debía sustraerse, si de la legítima o de las mejoras. Si se considera como gasto funerario, se cargaría la dotación de la capellanía sobre el tercio de mejora, en aplicación de la ley XXX de Toro⁵⁸¹. Pero hay quienes consideraban que el derecho de patronato sobre la capellanía conllevaba un honor, por lo que debía imputarse a la parte de la herencia correspondiente al heredero a quien se le otorgaba el patronato y si, además, el patronato se vinculaba al ocupante y poseedor de un mayorazgo, los bienes de la capellanía deberían entenderse detraídos de la masa común hereditaria, antes de separar las mejoras, por lo que no podrían restarse a éstas⁵⁸².

⁵⁸⁰ “La sucesión del patronato hereditario se hace *in stirpes*, y no *in capita*”. J. Febrero Bermúdez, *Librería de escribanos...*, o.c., p. 74. J. Escriche, *Diccionario razonado de legislación...*, o.c., tomo IV, pp. 498-499.

⁵⁸¹ Los sufragios por el alma del fundador son equiparables a funerales y misas que encarga en su testamento. La citada Ley XXX de Toro dispone que “*los gastos del funeral se saquen del quinto de los bienes del difunto y no del cuerpo de ellos*”. *Novísima Recopilación*, Tomo V, Libro X, Título XX, Ley IX.

⁵⁸² J. Febrero Bermúdez, *Librería de escribanos...* o.c., tomo II, p. 203.

PARTE SEGUNDA

PROPIEDAD, DESAMORTIZACIÓN Y DESVINCULACIÓN. DEL ANTIGUO RÉGIMEN AL LIBERALISMO

CAPÍTULO V

LA PROPIEDAD EN EL ANTIGUO RÉGIMEN: LA PROPIEDAD ECLESIAÍSTICA

1.- NOCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD EN EL ANTIGUO RÉGIMEN.

El Antiguo Régimen se define por el predominio de unas determinadas relaciones sociales (propiedad vinculada, libertad de arrendamientos de la tierra, pluralidad de estatutos jurídicos) a las que corresponde un régimen autoritario que tiene en la monarquía absoluta su institución más significativa y se caracteriza por la coexistencia, no exenta de fricciones, de una dualidad de instituciones, Estado e Iglesia, que se pretenden soberanas y actúan como tales⁵⁸³.

Dentro de este régimen, definir el concepto de propiedad es harto complicado por su imprecisión terminológica, su carácter confuso y vago. Confusión que se acrecienta en algunos lugares o regiones, donde parece que la propiedad territorial se concibe como un agregado de distintos derechos parciales concurrentes.

Si se toma como indicador del derecho de propiedad la capacidad de excluir de su uso a quienes no son propietarios, aparecen tres formas básicas de la misma: la individual, la colectiva (instituciones eclesiásticas) y la nominal, perteneciente a la corona (bienes baldíos y mostrencos, o sin dueño).

Otra clasificación de la propiedad es la que distingue entre propiedad privada y propiedad pública y/o municipal. Bajo la primera se encuentran la llamada propiedad vinculada y de manos muertas, pertenecientes a la nobleza y el clero y la propiedad burguesa, fruto del impacto de los capitales urbanos sobre la tierra. A estos tres tipos de propiedad se sumaba una cuarta, la constituida por la propiedad campesina, que representaba una proporción imposible de establecer pero en todo caso inferior a la suma de las otras tres, que variaba según las diferentes regiones. Si se hace abstracción de los bienes rústicos que formaban parte del patrimonio real en sentido estricto, las tierras restantes eran de atribución colectiva, las cuales estaban formadas por bienes municipales de los pueblos, pudiéndose establecer a su vez una distinción entre bienes comunales y bienes de propios en función de que su aprovechamiento fuera colectivo o individual⁵⁸⁴.

Es un dato comúnmente aceptado que en torno al 80% de la tierra se hallaba en la España del Antiguo Régimen bajo control privado, aun en los casos, como ocurría con los bienes rústicos de la Iglesia, en que el propietario fuera un colectivo, correspondiendo la parte restante, el otro 20 ó 30%, a la propiedad pública municipal. Así, la propiedad de la tierra presentaba una estructura profundamente desequilibrada,

⁵⁸³ M. Artola Gallego, *Antiguo Régimen y revolución liberal*, Barcelona 1979, p. 121.

⁵⁸⁴ A. Marcos Martín, *Estructuras de la propiedad en la Época Moderna: evolución y variantes peninsulares*, en AA.VV., *Historia de la propiedad en España, siglos XV-XX*, Salamanca 1998, pp. 115-116.

pues una parte importante del suelo se concentraba en unas pocas manos privilegiadas, pero también en una realidad no menos evidente y decisiva, cual es la de que la propiedad así monopolizada fuese una propiedad amortizada e inalienable, y, por tanto, apartada del mercado y a resguardo de la penetración del capital usurario. Dicho carácter de propiedad amortizada tenían los bienes patrimoniales de la Iglesia, a los que se suele reservar precisamente el calificativo, aplicándose el de vinculada a la propiedad en manos de la nobleza. Las dos formas, propiedad amortizada y propiedad vinculada remitían a la misma idea de sujeción de la tierra y de los derechos de propiedad a determinadas instituciones o familias.

Pero la vinculación de la propiedad no implica poner fuera del mercado la utilización de las tierras afectadas por este privilegio. La norma común es la cesión temporal de la tierra a cambio del pago de una renta. Esta situación, característica del Antiguo Régimen, configura una organización en la que la acumulación de capital resulta imposible. Desde el momento en que la mayor parte del territorio se encuentra vinculado o amortizado, las posibilidades de que se ofrezcan tierras en venta son cada vez menores y sus precios más altos, muy superiores a la capitalización de las ganancias que de ellas puedan obtenerse. En estas condiciones, los incentivos para convertir las rentas y ganancias en capital en forma de tierra resultan insuficientes y, dado que las actividades mercantiles no ejercen el suficiente atractivo, no queda a los beneficiarios de aquéllas más posibilidad que el consumo suntuario. La Iglesia derrochará en la construcción de edificios, desproporcionados con las necesidades del culto dado por el volumen de la población local. La nobleza, consumirá sus enormes rentas en la retribución de servicios⁵⁸⁵.

No obstante, a lo largo del Antiguo Régimen se va simplificando la nómina de derechos parciales que integran el concepto de propiedad y en el siglo XVIII ya sólo se contemplan dos dominios: el directo sobre la tierra, que da derecho a percibir una renta, y el útil que se confiere al trabajador de la tierra (enfiteusis).

2.- LA PROPIEDAD ECLESIASTICA.

También es confuso el término propiedad eclesiástica, pues frecuentemente incluye tanto los bienes de las instituciones eclesiásticas como de los eclesiásticos a título particular, los de las instituciones piadosas (hospitales, hospicios, montes de piedad, casas de misericordia, etc.), cuyas rentas se aplican en su casi totalidad en beneficio de los laicos, y los de las Órdenes Militares que en el reinado de los Reyes Católicos fueron incorporados perpetuamente a la Corona⁵⁸⁶.

Durante el Antiguo Régimen la Iglesia española se constituye en uno de los grandes propietarios del país, hasta el punto que algunos autores opinan que la mitad de las rentas del mismo estaban en sus manos; en cambio, otros, más próximos a la realidad, rebajan esta proporción al 15%, lo que no deja de ser un volumen importante, si se tiene en cuenta que el estamento eclesiástico suponía poco más del 1,5% de la población del país.

⁵⁸⁵ M. Artola Gallego, *Antiguo Régimen y revolución liberal*, o.c., pp. 101-102.

⁵⁸⁶ M. Barrio Gozalo, *La propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen*, en AA.VV., *Historia de la propiedad en España*, o.c., p. 19.

2.1- El derecho de propiedad territorial de la Iglesia.

El derecho de propiedad es inherente a la naturaleza humana, pues tener la propiedad sobre un bien inmueble es un medio para poder satisfacer, de forma directa o indirecta, las necesidades de la vida. En toda sociedad la propiedad se adquiere y se transmite. La propiedad lo mismo se concibe en un individuo que en muchos, de forma individualizada o de forma colectiva. Bajo este supuesto, la Iglesia no sólo tiene capacidad para adquirir bienes raíces, sino que la propiedad territorial es el medio más seguro de contar con bienes materiales de subsistencia a la vez que confiere independencia ante todo poder ajeno o extraño⁵⁸⁷.

Es por ello que la Iglesia tiene un indisputable derecho de adquirir, que le compete por su propia constitución y naturaleza y que no proviene ni dimana de ningún poder civil. Ya desde su mismo origen la Iglesia tuvo ese derecho, presentándose la propiedad eclesiástica como algo diferenciado de la propiedad particular, con unas características propias y singulares⁵⁸⁸. Así se reconoce desde antiguo cuando el emperador Constantino y sus sucesores reconocieron y protegieron a la Iglesia y, por ende, toda adjudicación de bienes muebles e inmuebles, legados y donaciones que ya poseía desde sus orígenes.

2.2.- Propiedad y patrimonio eclesiástico.

El gran patrimonio rústico que la Iglesia detenta a finales del Antiguo Régimen era consecuencia de las donaciones de los reyes, nobles, miembros del clero y pueblo en general. El origen principal de las posesiones eclesiásticas tiene su origen en la Reconquista, pues los monarcas hicieron generosas donaciones de tierras y jurisdicciones a la Iglesia en reconocimiento a su apoyo en la cruzada. Finalizada dicha empresa militar la Iglesia continuó acumulando propiedades a través de las donaciones de los devotos y, a lo largo de los siglos, los monasterios y conventos, los obispos y cabildos, las parroquias y demás instituciones piadosas siguieron allegando cada vez más tierras, que obtenían por donación o por compra. Los fieles se desprendían fácilmente de sus bienes a favor de la Iglesia, bien por motivos religiosos o materiales, para dotar y fundar conventos, capellanías, patronatos, aniversarios y obras pías⁵⁸⁹.

Estas propiedades, una vez en poder de la Iglesia, se regían por leyes particulares que las situaban en una situación privilegiada, al quedar vinculadas indefinidamente a la institución eclesiástica. La legislación civil las protegía, disponiendo que “*todas las cosas que son o fueren dadas a las Iglesias por los Reyes o por otros fieles cristianos, de cosas que deben ser dadas derechamente, sean siempre guardadas y firmadas en poder de la Iglesia*”⁵⁹⁰, y estableciendo “*que no se tomen ni ocupen, ni se impida su*

⁵⁸⁷ P. Golmayo, *Instituciones del Derecho Canónico...*, o.c., XI, §.126, p. 116.

⁵⁸⁸ J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., pp. 21-28.

⁵⁸⁹ Estas donaciones a iglesias y comunidades religiosas de villas, heredades y concesiones de privilegios, se sumaban a las fundaciones de monasterios, que quedaban dotados ricamente a partir del siglo IX. En las colecciones de fueros municipales se citan numerosos casos. V. M. Barrio Gozalo, *La propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen...*, o.c., pp. 25 y 26. Cf.: T. Muñoz y Romero, *Colección de Fueros Municipales y cartas pueblas de los Reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra*, Madrid 1847, tomo I, pp. 19 y ss.

⁵⁹⁰ *Novísima Recopilación*, Tomo I, Libro I, Título V, Ley I.

arrendamiento”⁵⁹¹. Empero, la legislación eclesiástica era más rígida que la civil ya que prohibía la enajenación de todos sus bienes, a no ser por causa grave.

Esta prohibición de enajenar los bienes eclesiásticos, salvo casos excepcionales, se inicia con las disposiciones de los emperadores cristianos⁵⁹² renovadas en el Fuero Juzgo, de donde toma la legislación de los distintos reinos medievales, que tienen como formulación básica las disposiciones contenidas en las Partidas y el Fuero Real (ley 2, tít. 5, lib 1), que inspiran las contenidas en la Nueva Recopilación (ley 2, tít 5, libro I)⁵⁹³. Dicha prohibición se fundaba en la creencia de que las propiedades de la Iglesia se encontraban bajo especial protección de los monarcas, quienes durante los siglos medievales no sólo donaron grandes extensiones de tierra a monasterios, iglesias y cabildos, sino que habrían concedido además a esas mismas instituciones la amortización de los bienes que adquirieran en el futuro, privilegio que seguía estando vigente en la época moderna. Las disposiciones canónicas, las reglas y constituciones de muchos establecimientos y órdenes religiosas (amén de lo estipulado privadamente por los fundadores de memorias, capellanías, obras pías, etc.) reforzaban asimismo la amortización progresiva de la propiedad al prohibir expresamente la venta tanto de los bienes ya poseídos como de los que en adelante entrasen en su poder⁵⁹⁴, sin olvidar que la función que debían cumplir tales bienes los *espiritualizaba*, es decir, los sujetaba perpetuamente al fin espiritual que, real o supuestamente, tenían asignado, prácticas todas ellas que encontraban las mejores condiciones para afirmarse en una mentalidad

⁵⁹¹ Ibidem, Ley V.

⁵⁹² La Iglesia estimó desde un principio del mayor interés la conservación de los bienes que formaban su patrimonio y estableció, en consecuencia, la prohibición de enajenarlos. En el siglo IV ya se dictaron disposiciones terminantes sobre este punto, como se puede apreciar en el canon 39, causa 17, cuestión 4ª del Decreto de Graciano que recoge un canon formulado en el Concilio V de Cartago. En el siglo V el emperador León publicó su célebre constitución en la que se establecía dicha prohibición de enajenar para las iglesias de Constantinopla. Anastasio las extendió a todas las iglesias del Patriarcado y Justiniano mandó que fuese ley general en todo el Imperio. Ya en la época moderna varias constituciones apostólicas, decretos y disposiciones regulan la materia. Así, el Romano Pontífice Paulo II publicó, el 1 demarzo de 1468, la celebre constitución *Ambitosae*, en la que se renuevan las antiguas prescripciones sobre la materia, especificándolas, ampliando el campo vedado de las enajenaciones eclesiásticas y lanzando severas penas contra los trasgresores. Posteriormente, el Concilio de Trento no introdujo modificación alguna en materia de enajenación. Los papas postridentinos mantuvieron con mano firme el rigor de la constitución de Paulo II, pero en muchas partes iba perdiendo eficacia por los indultos pontificios concedidos. Urbano III puso freno al desorden y reafirmó la disciplina establecida por la constitución *Ambitosae*, a través del decreto de la Congregación del Concilio de 7 de septiembre de 1624, mediante el cual quedaron derogados todos los privilegios apostólicos concedidos a los regulares para enajenar los bienes eclesiásticos inmobiliarios y al mismo tiempo se declaraba que en lo sucesivo no se podrían enajenar los bienes eclesiásticos sin licencia expresa de la Congregación del Concilio. Esta legislación siguió vigente hasta la segunda mitad del siglo XIX, en que Pío IX publicó la constitución *Apostolicae Sedis* (1869), declarando la plena vigencia de la constitución de Paulo II e introduciendo algunas oportunas modificaciones. Véase J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., p. 68. M. Barrio Gozalo, *La propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen...*, o.c., p. 26.

⁵⁹³ M. Artola Gallego, *Antiguo Régimen y revolución liberal*, o.c., p. 101.

⁵⁹⁴ Entre las primeras condiciones impuestas por cualquier fundador de una capellanía o fundación piadosa figuraba siempre la de que los bienes dejados por dotación de la misma “*estén siempre permanentes y no se puedan vender, trocar, ni cambiar, ni en manera alguna enagenar, aunque para ello se trayga licencia de Juez competente, porque desde luego lo prohibo y quiero sean inalienables; y si de hecho se hiciere, no valga ni pase señorío alguno a ninguna de las personas que los recibieren, comprados o permutados...*”. P. Melgarejo, *Compendio de contratos públicos...*, o.c., p. 164.

social fuertemente sacralizada que hacía primar las finalidades últimas (la salvación eterna) sobre cualesquiera otras más terrenales⁵⁹⁵.

Los eclesiásticos utilizan dos formas de explotación en sus propiedades: el cultivo directo y la cesión del dominio útil a segundas personas. El cultivo directo de una parte de sus fincas era la práctica común entre algunos monasterios, conventos y entre los titulares de algún beneficio o capellanía. Sin embargo, la mayor parte de la tierra se cedía mediante diferentes tipos de contratos agrarios: una cesión a largo plazo o perpetua como el foro (cesión del dominio útil de la tierra por tres generaciones a cambio del pago de un canon o pensión) o la enfiteusis (enajenación del dominio útil de una finca a cambio de un canon anual); una cesión a corto plazo, de cuatro a diez años de duración, el arriendo; y por último, la aparcería (contrato entre el dueño de la tierra y el que la cultiva, con retribución del arriendo mediante frutos) de duración variable.

A comienzos del siglo XVI el patrimonio de la mayor parte del clero secular (mesas episcopal y capitular, dotación de beneficios simples) y de las fundaciones monásticas más antiguas ya estaba formado. Pero, en lo sucesivo y hasta el XVII continuó aumentando la propiedad eclesiástica con la fundación y dotación de innumerables monasterios y conventos, capellanías, cofradías, obras pías y legados piadosos de todo tipo⁵⁹⁶.

Aunque resulta más que difícil cifrar las posesiones rústicas de la Iglesia, las cifras de la época sostienen que el clero poseía la sexta parte (16,7 %) de las tierras de España.

Hasta la elaboración del Catastro de Ensenada (Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, 1702-1781), no se dispone de datos cuantitativos referentes a la distribución de la propiedad de la tierra en Castilla. Realizado a mediados del siglo XVIII, sólo concierne a las provincias (22) de la Corona de Castilla, sin que se tenga nada similar para la de Aragón y Navarra, aunque la situación no debió diferir mucho respecto a Castilla⁵⁹⁷.

La documentación catastral describe los bienes del clero, distinguiendo entre las propiedades de la Iglesia como institución (eclesiástico benefical) y las que posee el clero a título particular (eclesiástico patrimonial).

En las provincias de la Corona de Castilla la Iglesia era propietaria del 14,7% de la superficie catastrada. La mayor parte de este patrimonio (12,3%) correspondía al eclesiástico benefical, pues el de los eclesiásticos a título particular representaba un porcentaje mínimo (2,4%).

No obstante, con los datos parciales que se conocen, se puede afirmar que en Aragón y Cataluña su extensión era similar o ligeramente superior a la de Castilla; en

⁵⁹⁵ A. Marcos Martín, *Estructuras de la propiedad en la Época Moderna...*, o.c., pp. 117-118.

⁵⁹⁶ No siempre las donaciones a la Iglesia tenían un motivo exclusivamente piadoso, sino que se imbricaban en los mecanismos de reproducción social de las clases dominantes. Así ocurría, por ejemplo, en la constitución de beneficios eclesiásticos que luego eran ocupados por miembros de la familia destinados a la carrera eclesiástica. M. Ardit Lucas, *Els homes i la terra del País Valencià (segles XVI-XVIII)*, Barcelona 1992, Volum I, p. 127.

⁵⁹⁷ M. Barrio Gozalo, *La propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen*, en AA. VV., *Historia de la propiedad en España*, o.c., pp. 27, 28 y 33.

cambio, en Valencia y Mallorca los mecanismos antiamortizadores mantuvieron controlada la expansión de la propiedad eclesiástica durante los siglos XVI y XVII. En Mallorca la propiedad rústica de la Iglesia parece que no superaba el 1% de la superficie, aunque en Valencia se desencadenó en el siglo XVIII un importante proceso de adquisiciones y amortizaciones⁵⁹⁸.

Pero a pesar de conservar la Iglesia tan ingente patrimonio la realidad era bien distinta, pues los eclesiásticos carecían de toda posibilidad para invertir en mejoras de la explotación, por cuanto no conservaban la explotación misma de las tierras, por lo que se vieron en la necesidad de arrendar la totalidad de sus tierras para percibir rentas, lo que constituía una formulación primaria de la organización social del Antiguo Régimen⁵⁹⁹.

2.3- La amortización eclesiástica.

Amortizar es vincular bienes inmuebles y propiedades en “*manos muertas*”, es decir en los poseedores de fincas en quienes se perpetúa el dominio. En derecho canónico se aplica a las corporaciones y comunidades eclesiásticas cuyos bienes no pueden enajenarse, por lo que al hallarse prohibida la venta, se dice que la propiedad está amortizada (se la sustrae a la vida del comercio y de la circulación. Se “*amortigua*” o muere para el comercio). Estas manos donde se encuentran los bienes se llaman muertas al quedar estancados en su poder y al morir en sus manos al no poder, como se ha dicho, circular libremente dichos bienes⁶⁰⁰. Desde antiguo, la amortización de bienes requería un permiso real⁶⁰¹ debido a que dichos bienes salían, en cierto modo, del comercio y dejaban de producir los derechos a que estaban sometidos y que pertenecían al rey. Este derecho de la corona para autorizar la amortización exigía un pago cuando los bienes que pertenecían al rey (realengo) pasaban a poder de iglesias, monasterios o personas eclesiásticas.

La amortización de la propiedad era una característica básica de la tierra durante el Antiguo Régimen y se dividía en tres clases: la general, la particular y la mixta. La general era la que concedía el rey a una diócesis o a todo el clero mediante la exigencia

⁵⁹⁸ Ibidem, p. 33.

⁵⁹⁹ M. Artola Gallego, *Antiguo Régimen y revolución liberal*, o.c., pp. 94 y 98.

⁶⁰⁰ A. Andrés, *Diccionario de Derecho Canónico...*, o.c., Tomo II, p. 283. M. González Ruíz, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España durante el siglo XIX*, en *Revista española de Derecho canónico*, volumen I, Alcalá 1946, p. 384. Véase también: F. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca...*, o.c., I, fol. 479-482; J. Escriche, *Diccionario razonado de legislación...*, o.c., tomo I, pp. 510-511.

⁶⁰¹ Ya en Concilio III de Toledo en 589 se dispuso en el canon 15 que “*si el siervo del Fisco hiciere y dotare alguna Iglesia, procure el Obispo ratificarlo con la autoridad del Rey*”. *Diccionario portátil de los concilios...*, o.c., tomo II, p. 107. El mismo Concilio no permitió a los obispos erigir en sus respectivas diócesis más que un solo monasterio, convirtiendo en él alguna de las iglesias parroquiales y dotándolo de las rentas eclesiásticas, de modo que siendo entonces en tan corto número los monasterios y estando dotados en esta forma, no podían ser gravosos a los seculares, y sólo en defecto de parientes dentro del séptimo grado tenían derecho de heredar abintestato a sus monjes, así como las iglesias heredaban en igual caso a sus clérigos: “*Clerici, vel monachi, seu sanctimoniales, qui usque ad septimum gradum non reliquerint haeredes, et sic moriuntur, ut nihil de suis facultatibus ordinent, ecclesia sibi, cui servierunt, eorum substantium vindicavit*.” Fuero Juzgo, ley XII, título II, libro IV. La máxima de que las iglesias y monasterios no pudiesen aspirar a la propiedad territorial, se conservó en los tiempos posteriores y fue adoptada, sucesivamente, en los fueros municipales, e incluso en leyes generales, no sólo con el fin de evitar el menoscabo de los derechos reales, sino también para evitar la acumulación de bienes en manos muertas. J. Escriche, *Diccionario razonado de legislación...*, o.c., tomo I, pp. 515.

de una suma de dinero. La particular era la que se otorgaba a una iglesia o comunidad mediante una carta con título de adquisición donde se especificaban los bienes y la mixta era la que concedía el rey a una comunidad o iglesia bajo cualquier título.

La Iglesia había estado en posesión constante, pero nada pacífica, de todos sus bienes a lo largo de los siglos, pues la continuidad de esta situación llevó a que se pidiese por el estado llano que no aumentasen las propiedades eclesiásticas para poner freno al fenómeno amortizador.

Ya en los fueros municipales se hace alusión a los bienes de la Iglesia y se dispone en varios de ellos que no se vendan ni enajenen bienes a favor de iglesia alguna. Es decir, que a medida que iba creciendo la autonomía municipal de las comunidades locales o concejos, los reyes en los distintos fueros que se conceden reconocen que para el mejor gobierno de sus reinos es conveniente que no continúe acrecentándose la posesión de bienes raíces de la Iglesia⁶⁰². Los fueros se convierten, de este modo, en las primeras leyes sobre amortización donde se limita el poder de disposición y posesión de la Iglesia. Ya las antiguas cortes de Castilla recogían estas incansables peticiones, las cuales aumentaron a partir del siglo XIII. En las cortes de Jerez en 1268, de Haro en 1288 y Valladolid en 1289, eran constantes las peticiones de que se separasen los bienes de realengo de los de abadengo⁶⁰³. D. Sancho IV, a petición de las Cortes de 1293, prohibió la venta de bienes a la Iglesia. Pese a ello, con las Partidas cambia dicha reglamentación amortizadora, consignándose una doctrina distinta, donde se recoge que cada uno puede dar de lo suyo a la Iglesia, con lo que se pone freno a las limitaciones impuestas anteriormente⁶⁰⁴.

En contraposición, las peticiones para limitar los bienes eclesiásticos continuaron en el transcurso de los reinados de Alfonso XI y Pedro I, dándose la paradoja, como en

⁶⁰² De esta forma, la mayoría de fueros municipales como el de Baeza, dado por Alfonso VII, se dispone que no se vendan más bienes a la Iglesia. Igual ocurre en los fueros de Sepúlveda (1078), Cuenca (1190), Teruel (1177) y Soria (1256). Alfonso VIII, en 1202, también prohíbe para el reino de Toledo vender heredades a Orden alguna. En Valencia, Jaime I en una pragmática de 1226 prohíbe también que se enajenen bienes raíces de seglares, sin real permiso, a las iglesias o personas eclesiásticas. T. Muñoz y Romero, *Colección de Fueros Municipales...*, o.c., pp. 109-110. Luis G. de Valdeavellano, *Historia de España*, segunda parte, Madrid 1955, p. 488.

También se dieron leyes generales para que nadie pudiese dar ni dejar bienes raíces a las iglesias bajo pena de perderlos, sancionadas solemnemente para el reino de Castilla en las Cortes de Nájera, celebradas por Alfonso VII en el año de 1138, y para el de León en las de Benavente, celebradas por Alonso IX en el año 1202. Esta ley se contiene en el Fuero Viejo de Castilla, Ley II, Título I, Libro I: “Este es Fuero de Castiella, que fue puesto en las Cortes de Nájera: *“Que ningund eredamiento del Rey, que non corra a los Fijosdalgo, nin a monasterio ninguno...”*”

La ley de las Cortes de Benavente se recoge en la Ley CCXXXI de las Leyes del Estilo, la cual dice “*Otrosi, desde que fué ordenado en las cortes que fueron fechas en Castilla en Najera et... en tierra de Leon en Benavente... que realengo non pase a abadengo*”.

⁶⁰³ Real Academia de la Historia, *Cortes de los Antiguos Reinos de León y de Castilla*, Madrid 1861, tomo I, p. 138. Bienes de abadengo: los que pertenecen al señorío, territorio o jurisdicción de un abad. Bienes de realengo: los bienes raíces que pertenecen al rey, sujetos a pechos y contribuciones. Cuando se dice que se separen los bienes de realengo de los de abadengo se refiere a que se separe el dominio de los primeros, sujetos a pechos o impuestos de los segundos que son de manos muertas. J. Escriche, *Diccionario razonado de legislación...*, o.c., Tomos I y IV, pp. 8-9 y 797.

⁶⁰⁴ *Las Siete Partidas*, Partida I, Título VI, ley 55, Título XIV, ley 1ª.

épocas anteriores, de que los mismos reyes que prohibían a los pecheros⁶⁰⁵ que entregasen sus bienes a la Iglesia, continuaban cediendo territorios a la misma. Incluso los representantes de los municipios, que se quejaban de las extensas posesiones eclesiásticas, como fieles cedían a la religión parte de lo que poseían. Sin embargo, la inobservancia de las disposiciones contenidas en las Cortes era de lo más normal por lo que a amortización se refiere.

Frente a una realidad tan rotunda de poco servían las protestas que periódicamente se alzaban en las citadas reuniones de Cortes, que continuaron durante los reinados de Enrique II, Juan I y Enrique III, contra la excesiva concentración de propiedades en las manos muertas o las disposiciones antiamortizadoras vigentes en ciertos fueros locales y en el derecho compilado de algunos reinos no castellanos como el valenciano. Con Juan II, en 1452, se sigue reconociendo la facultad de la Iglesia de adquirir bienes inmuebles pero a cambio se introduce una ley amortizadora en la que dispone que se dará al estado el quinto de los bienes raíces que se transmitiesen por cualquier título a la Iglesia⁶⁰⁶. En Valencia y Cataluña se establecieron disposiciones análogas pero no influyeron en la libertad de adquirir de la Iglesia.

En la práctica, la amortización de bienes eclesiásticos no hizo sino progresar a lo largo de los siglos XVI al XVIII, como lo demuestran las leyes dictadas por los Reyes Católicos en las Ordenanzas Reales de Castilla⁶⁰⁷. En consecuencia, la divergencia de opiniones sobre el poder y prerrogativas de la Iglesia se hizo sentir y llegaron a enfrentarse debido a la citada amortización eclesiástica que según algunos contribuía a la decadencia general de la nación por la disminución de las rentas y de la población.

Carlos I consiguió, en 1523, del Papa Adriano VI vincular a perpetuidad la administración de los maestrazgos de las Órdenes Militares, procediendo a la secularización y enajenación de villas, heredamientos y lugares de la Orden de Santiago y de la de Calatrava, gracias a las bulas concedidas por Clemente VII, Paulo III y Paulo IV en 1529, 1536 y 1555, respectivamente. Estas ventas continuarán durante el reinado de Felipe II, apoyándose en las bulas mencionadas y en otras nuevas logradas de Pío IV y Pío V en 1559 y 1570.

Felipe II en 1574 quedó autorizado para disponer de villas y lugares por Bula del Papa Gregorio XII por valor de 40.000 ducados, aunque las ventas realizadas contribuyeron poco a la mejora de las finanzas regias. Siguió el rey con tributos que gravaban a la Iglesia como el “*impuesto del excusado*” y el “*impuesto de millones*”⁶⁰⁸, excusándose ante el Romano Pontífice de que necesitaba grandes recursos para

⁶⁰⁵ En la Edad Media se denominaba pechero al que pagaba los pechos o pechas al rey o al señor territorial, es decir, el obligado a pagar o contribuir con tributos o impuestos por razón de los bienes o haciendas. Deriva del latín *pectum*. J. Escribe, *Diccionario razonado de legislación...*, o.c., tomo IV, p. 523.

⁶⁰⁶ *Novísima Recopilación*, Tomo I, Libro I, Título V, Ley XII.

⁶⁰⁷ *Ibidem*, Ley I, II y V.

⁶⁰⁸ El impuesto del excusado fue la gracia o concesión obtenida del Papa San Pío V para que el diezmo de la Iglesia “*se excuse*” y se entregue al rey. El impuesto de millones era el tributo que los reinos pagaban al rey sobre el consumo de las seis especies: vino, vinagre, aceite, carne, jabon y velas de sebo, el cual se renovaba de seis en seis años. J. Escribe, *Diccionario razonado de legislación...*, o.c., tomos II y IV, p. 929 y 124, respectivamente.

acometer empresas en pro de la cristiandad. Visto el balance de las enajenaciones, Felipe II, en su testamento, mandó reparar parte del entuerto, ordenando retornar al abadengo lo despojado a lo largo de su reinado. Pero los hechos demostraron que el impacto y el daño ocasionado por estas apropiaciones resultaban irreversibles. Así, un Breve de Clemente VIII en 1604 dispuso, entre otras cosas, que los lugares incorporados a la Corona se devolviesen a sus anteriores dueños.

Felipe III siguió la política de exigir nuevos servicios y gravar con impuestos a la Iglesia. Obtuvo de Clemente VIII algunos Breves que le supusieron nuevas contribuciones para atender las necesidades del Estado. Su sucesor, Felipe IV impuso más cargas como las “*mesadas eclesiásticas*”, es decir, la contribución de un mes de renta en todas las prebendas eclesiásticas que se proveyesen en la monarquía, gracias a la concesión hecha por Urbano VIII en 1625 y que eran renovadas decenalmente.

Sin embargo, a pesar del freno impuesto a la amortización eclesiástica mediante la fiscalidad y la necesidad de autorización real, ésta siguió produciéndose, por lo que, hacia la segunda mitad del setecientos arreciarán las quejas contra la excesiva acumulación de bienes raíces en manos de la Iglesia. Sin embargo, y quitando los intentos fallidos por promulgar una ley de amortización que limitara dicho proceso de cara al futuro, nadie propuso abiertamente la desamortización de los bienes del clero⁶⁰⁹, aun cuando el conflicto social de mayor entidad y duración, en la España del siglo XVIII, es el que implica a propietarios y labradores arrendatarios. La mayoría de las tierras eran arrendadas por los conventos, monasterios, iglesias, capellanías y mayorazgos.

2.4- Patrimonio y amortización eclesiástica en el Reino de Valencia.

La Iglesia, poderosa y omnipresente en el Antiguo Régimen, rivalizaba en riquezas y señorío con la nobleza y hasta con la corona. En el Reino de Valencia, a igual que en otros, poseyó vastos patrimonios, como grandes extensiones de tierras de cultivo, la mayoría de regadío y un buen número de casas situadas no sólo en la ciudad de Valencia, sino también en distintas villas y lugares del Reino. Las rentas que generaban tales posesiones posibilitaron, entre otras cosas, el mantenimiento del numeroso estamento eclesiástico y la reforma y mejora de los templos.

El clero valenciano, como dinámico y acostumbrado inversor actuaba económicamente con decisión en la principal fuente de riqueza de la época que residía en la propiedad inmueble, tanto rústica como urbana. Hacia ella se encauzó y dirigió las ingentes sumas de dinero que se obtenían de los distintos servicios religiosos que se prestaban: beneficios, capellanías, aniversarios, memorias de misas, doblas, misas conventuales, misas testamentarias, horas canónicas, misas perpetuas, etc.

Así, las instituciones religiosas valencianas consiguieron el dominio de un enorme patrimonio, el cual, por su enorme tamaño y riqueza, despertaría los celos del poder temporal, limitándolo e interviniéndolo, pasando a apropiarse de todas estas posesiones con la desamortización eclesiástica que culminó en el siglo XIX.

⁶⁰⁹ A. Marcos Martín, *Estructuras de la propiedad en la Época Moderna...*, o.c., p. 121.

La Iglesia valenciana y, por extensión la Iglesia en su generalidad, contraponía su poder y riquezas al estamento nobiliario y hasta la misma Corona. Los monarcas, en su proceso de afianzamiento y consolidación, debían y tenían que neutralizar la acumulación de riquezas y bienes en manos muertas, todo ello debido a que perdían poder por los privilegios y exenciones que disfrutaban el clero y sus instituciones.

Ya las normas forales valencianas regularon las riquezas de la Iglesia y el problema que planteaba la amortización eclesiástica. El rey Jaume I se dio cuenta de que la adquisición de propiedades inmuebles por parte de la incipiente Iglesia valenciana iba a suponer una merma para sus derechos y regalías y un menoscabo para sus propios estados. La primera medida apreció en los *Furs*, (“el primero y más primitivo fondo legal antiamortizador”, en palabras del profesor Javier Palao) en la rúbrica XIX del libro IV, *De rebus non alienandis*, con el el título “*Quals coses no deuen esser alienades*”⁶¹⁰, incluyó varios fueros restrictivos de la capacidad de adquirir bienes por parte de la Iglesia o institución religiosa, a fin de que los bienes inmuebles que pasasen a iglesias o instituciones eclesiales deberían ser vendidos en el perentorio plazo de un mes (*Fur* V). Tampoco podía testarse ni transmitirse *ab intestato* ningún bien al clero (*Fur* VI). Más tarde, viéndose que se dificultaba la fundación de capellanías y beneficios eclesiásticos, entre otras fundaciones pías, se permitió que cualquier testador pudiera instituir tales fundaciones sobre sus bienes raíces pero que se mantuviesen con su carga. También se prohibió a los clérigos la prohibición de enajenar inmuebles a favor de instituciones eclesiásticas (*Fur* VII). Tampoco la nobleza (*cavallers i ciutadans*) podía enajenar bienes a favor del clero (*Fur* VIII). Pero, a cambio, mediante privilegio, al final de este mismo *Fur*, el rey podía dotar a la Iglesia con bienes suficientes para su sustento, y el de sus obras, pero sin perder el control sobre el crecimiento de la propiedad en mano muerta. De esta manera, la licencia real para amortizar fue clave para contener el aumento del patrimonio eclesiástico: había nacido la regalía de amortización, es decir, el traspaso de la propiedad, tanto a personas como a instituciones eclesiásticas, debía tener el consentimiento del soberano⁶¹¹.

Ejemplos de licencia real para amortizar se encuentran, entre otros, en dos pergaminos de la Catedral de Valencia: el primero es un decreto de amortización, en el que se autoriza a amortizar ciertos bienes a Arnaldo Puig Monzón a favor de la capellanía que ha instituido en el Hospital del Monasterio de San Vicente. El segundo, es un privilegio real sobre dicha capellanía, en el que se dice que no está obligado a contribuir en peitas laicales por los censos de su capellanía. Los dos están fechados en 23 de noviembre de 1300 (ACV, pergaminos nº 2435 y 1610, respectivamente).

A pesar de estas rigurosas normas, el cabildo de la Seu de Valencia, pasados unos pocos años, concretamente en 1265, obtuvo un privilegio denominado “Dispensa de Nobles” que le autorizaba a comprar libremente, o retener, vía de legado, herencia o

⁶¹⁰ *Fori Regni Valentiae*, ed. de Lambert Palmar, Valencia 1482, fol CX.

⁶¹¹ Ibidem. F. J. Palao Gil, *La legislación foral valenciana en materia de amortización eclesiástica: estudio normativo*, en Anuario de Historia del Derecho Español, nº 63-64, Madrid 1993-1994, pp. 789-793. Ibidem, *Patrimonio eclesiástico y amortización en Valencia: la Catedral y la Parroquia de Sant Joan del Mercat* (s. XVIII), Valencia 1993, pp. 14-15.

donación, cualquier clase de bienes pertenecientes a *cavallers*, sin necesidad de licencia real⁶¹².

En la reforma de los *Furs* de 1271, se atenuaba la prohibición, ampliándose el plazo para vender a un año, debiendo aplicarse el producto de la venta a un fin piadoso. Además, se prohibía la transmisión del dominio pleno a toda institución eclesiástica. Formalmente, se permitió instituir o legar a la Iglesia capellanías, aniversarios y otras obras pías sobre inmuebles en sufragio de las almas de los testadores, sin transmitir el citado dominio⁶¹³.

Pero todas estas prohibiciones fueron incumplidas sistemáticamente y fueros posteriores (Cortes de 1329)⁶¹⁴ castigaron con la confiscación las compras y adquisiciones del clero. En igual sentido, Pedro IV⁶¹⁵, en las Cortes de 1342 prohibió la enajenación de bienes de realengo donados a la Iglesia y no vendidos por ésta en el plazo de un año, serían confiscados por la Corona. La disposición se reiteró en provisión publicada en 1351, multando a los notarios que confeccionasen documentos de últimas voluntades contra las prescripciones forales. Se obligó a la confiscación de bienes de realengo que hubiese obtenido de forma ilegítima la Iglesia, en calidad de capellanías y aniversarios, privándolas del precio que se obtuviese por su venta.

A partir de entonces, el privilegio era indispensable para cualquier iglesia que quisiera amortizar un bien inmueble, convirtiéndose en el principio rector de las disposiciones en materia de amortización para sucesivos siglos. Este sistema de amortización, fijado en normas forales, fue muy tolerante con el clero secular. Desde la conquista del Reino, hubo muchas concesiones, por la utilidad y ayuda que ofrecían al rey los clérigos y capellanes. El culmen de libertad amortizadora se alcanzará en las postreras cortes del siglo XVI⁶¹⁶.

A finales del siglo XIV aparece una institución cuya misión fue vigilar el cumplimiento de las disposiciones forales sobre la adquisición de bienes raíces por la Iglesia: el Juzgado de Amortización, que se encargó de realizar visitas o inspecciones para evitar que el clero amortizase libremente, e imponer sanciones. Estas visitas de amortización eran para comprobar que las propiedades retenidas por manos muertas respetaban los límites impuestos por el monarca. Al final, se convirtieron en un mero recuento o enumeración de beneficios, capellanías y otras fundaciones.

En las cortes de Orihuela de 1484-1488, del rey Fernando II (Fernando el Católico), la fuerza del estamento eclesiástico consiguió varios logros, entre ellos: que quedasen excluidos de las leyes sobre amortización aquellos legados instituidos por un testador para el sostenimiento de capellanías y aniversarios. El argumento fue que al ser meras aportaciones pecuniarias, quedaban fuera de dichas leyes.

⁶¹² *Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentiae: cum historia cristionissimi Regis Jacobi ...*, Valencia 1515.

⁶¹³ M. V. Febrer Romaguera, *Dominio y explotación territorial en la Valencia foral*, Valencia 2000, p. 127.

⁶¹⁴ *Furs e Ordinacions fetes per los gloriosos reys de Aragò als regnicols del regne de València. Furs e ordinacions del rey N'Amfòs I*. Cortes de 1329, Rúb. XXVII, fol. 213.

⁶¹⁵ Ibidem. *Furs e Ordinacions del rey en Pere lo Segon*. Cortes de 1342, fol. 257.

⁶¹⁶ F. J. Palao Gil, *La legislación foral valenciana...*, o.c., p. 805.

Con el rey Carlos I (Cortes de Monzón de 1533) se promulgó la libertad de los capellanes para disponer de todos sus bienes en última voluntad. Con Felipe II se admitió el traspaso de bienes de un religioso a otro. También hubo un indulto general de los bienes amortizados que otorgó el rey a petición del brazo eclesiástico. Con nuevos indultos y privilegios que obtuvo el clero a principios del siglo XVII, acabaron con los principios rectores de las normas forales en materia de amortización, aceptando el hecho de la propiedad amortizada⁶¹⁷.

Respecto al Juzgado de Amortización, después de diversos altibajos, resurgió con fuerza tras la reformas de 1672, adoptando una estructura descentralizada. Pero la abolición de los *Furs de València* en 1707 y la introducción del derecho castellano, supusieron el final del sistema. Desde entonces, el Juzgado se limitó a subsistir, cuya máxima finalidad fue recaudar para la Hacienda de la monarquía española, ya que la Iglesia era un poder económico de gran magnitud en el Antiguo Régimen y la corona intentaba detraer rentas de la misma.

Con la llegada de los ilustrados ya no se busca obtener fondos de la Iglesia, sino que hay un problema capital. El clero acumula bienes muy por encima de sus necesidades y en perjuicio de los legos y de la riqueza general de la nación.

La visita de amortización de 1787 del Juzgado de Amortización de Valencia, ya no es tan benigna e indulgente como en siglos anteriores. Se rechazaron peticiones de indulto y de privilegios, y se hizo realidad lo que más temía el clero: el decomiso de bienes amortizados. Gran número de propiedades se trasladaron a la Hacienda y, es curioso, cómo los favorecidos por esta ocupación patrimonial y posterior embargo fueron los mismos postores que en la desamortización de Godoy. Algunos bienes de la iglesia valenciana fueron subastados y otros muchos se perdieron para siempre. Con las reformas de 1805-1806, el Juzgado de Amortización cae en el olvido. Más adelante, con el nuevo estado liberal queda totalmente apartado, vacío de contenido y sin soporte legislativo ni económico, extinguiéndose a mediados del siglo XIX⁶¹⁸.

3.- LA QUIEBRA DE LA PROPIEDAD ECLESIAÍSTICA. EVOLUCIÓN DEL PROCESO AMORTIZADOR DURANTE EL SIGLO XVIII.

En el siglo XVIII no sólo se critica la propiedad eclesiástica, sino que comienza a ponerse en entredicho, pues los ilustrados proclaman el retorno al modelo de una Iglesia pobre en bienes materiales. En esta ilusión de despojo de los bienes eclesiásticos alternan motivos espirituales de auténtica reforma, con los económicos y sociales de lucha contra la desigualdad y los privilegios, así como el deseo de incluir la riqueza inmueble de la Iglesia en el tráfico fiscalizado, sin olvidar los intereses políticos de devolver al monarca la regalía del control de transferencia sobre algo que le pertenecía por los derechos inherentes a su soberanía.

El debate iniciado en el siglo XVI, se agudiza en la segunda mitad del XVIII y primeras décadas del XIX. De una parte están los que critican la amortización

⁶¹⁷ Ibidem, pp. 810-814.

⁶¹⁸ F. J. Palao Gil, *Consideraciones sobre la propiedad amortizada en la Valencia del siglo XVIII: Real Hacienda y Juzgado de Amortización*, en Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història (Universitat de València), nº. 44, Valencia 1994, pp. 115-118.

eclesiástica y demandan algún tipo de intervención por parte del Estado, bien para poner freno a su progresivo aumento, como hacen los arbitristas (pensadores políticos y económicos) e ilustrados, bien para incautarse del patrimonio eclesiástico y ponerlo en venta, como defienden los liberales. Se oponen a los anteriores los reaccionarios o ultramontanos, que realizan una defensa apasionada del Antiguo Régimen y buscan sus argumentos en la Biblia, la doctrina de la Iglesia o la tradición eclesiástica⁶¹⁹.

Para los ilustrados es necesario buscar remedios ante los males económicos, donde la amortización eclesiástica aparece como la principal causante de la despoblación, del empobrecimiento del Estado y del atraso y decadencia de la agricultura y comercio. Se publicaron diversas obras que contenían las opiniones sobre el problema. Destaca el Informe de Melchor de Macanaz de 1713 y el *“Informe sobre el expediente de la Ley Agraria”*, escrito en 1784 y publicado en 1795 por Gaspar Melchor de Jovellanos, donde se analizaban todos los males que afectaban a la agricultura con el abandono general del campo en gran medida por la amortización de la propiedad que limitaba la circulación de las tierras, pues la política de los ilustrados tuvo como objetivo explícito el incremento de la producción agrícola, sector decisivo en el Antiguo Régimen.

Durante el reinado de Felipe V se admitió, mediante el Concordato de 1737⁶²⁰, que los bienes que adquiriese una iglesia, lugar pío o comunidad eclesiástica y que por ello cayesen en mano muerta, quedasen perpetuamente sujetos a impuestos y tributos, por lo que los eclesiásticos dejaron de disfrutar de la exención de cargas por razón de sus bienes. Pero dicho concordato tampoco tuvo una aplicación práctica.

Fernando VI firmará en 1753 otro Concordato según el cual se adjudicarán a la Corona los bienes muebles e inmuebles que los obispos dejasen a su muerte, así como los productos de las sillas vacantes.

En 1765 Pedro Rodríguez Campomanes publica el *“Tratado de la regalía de Amortización”*, donde la intención era demostrar el uso constante que los soberanos habían tenido siempre para limitar o impedir las adquisiciones de bienes raíces por la

⁶¹⁹ Entre los ilustrados destacan Pedro Rodríguez de Campomanes (1723-1802) y Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) que, aunque afirma que la amortización eclesiástica es contraria a la economía civil y defiende que las propiedades de la Iglesia deben volver a manos del pueblo, opina que debe ser la misma Iglesia la que realice la transferencia bajo la forma de foro o censo enfiteútico. Entre los escritores de carácter liberal y decididos partidarios de la desamortización de los bienes eclesiásticos se sitúan Manuel Ros de Medrano (1756-1821), Juan Sempere y Guarinos (1754-1830), el presbítero valenciano Antonio Bernabeu Salinas (1761-1825), Francisco. Martínez Marina (1754-1833) y José Canga Argüelles (1770-1842). Entre los ultramontanos se encuentran Manuel José Anguita Téllez, conocido como Rafael de Vélez (1777-1850), Francisco Alvarado (1756-1814) y Pedro Iguanzo Rivero (1764-1836). M. Barrio Gozalo, *La propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen*, en AA.VV., *Historia de la propiedad en España*, o.c., p. 20-22.

⁶²⁰ El Concordato de 1737 con la Santa Sede, siendo Romano Pontífice Clemente XII, dispone en su artículo 8º que *“ha pedido a Su Santidad el Rey Católico, se sirva ordenar, que todos los bienes que los eclesiásticos han adquirido desde el principio de su reinado, o que en adelante adquirieren con cualquier título, estén sujetos a aquellas mismas cargas a que lo están los bienes de legos. Por tanto, habiendo considerado Su Santidad la cantidad y cualidad de dichas cargas..., condescenderá solamente en que todos aquellos bienes, que por cualquier título adquirieren cualesquiera iglesia, lugar pío, o comunidad eclesiástica, y por esto cayesen en manos muertas, queden perpetuamente sujetos desde el día en que se firmare la presente concordia a todos los impuestos y tributos regios que los legos pagan...”* V. de la Fuente, *Historia eclesiástica de España*, o.c., tomo II, Apéndice nº 9, pp. 566-567. Véase también *Novísima Recopilación*, Tomo I, Libro I, Título V, Ley XIV.

Iglesia, comunidades y otras “manos muertas”, es decir, defender la facultad de amortizar como una regalía del monarca, a quien por lo mismo correspondía el derecho de amortización, especie de tributo o contribución que a modo de compensación se le debía por la concesión de dicha gracia.

De acuerdo con las ideas doctrinales y las circunstancias económicas de la época, la situación de los bienes amortizados fue cambiando y durante el reinado de Carlos III se dictaron numerosas disposiciones que afectaron de lleno a la Iglesia y a su patrimonio.

El hecho es que la crítica a la amortización eclesiástica y a la propiedad vinculada estaba ligada a la llamada cuestión agraria, es decir, a la relación entre propiedad vinculada y estado de la producción agraria. Sin embargo, la política acometida no pasó de reformar problemas técnicos concretos, ignorando el hecho de la existencia de un tipo de relaciones de producción (Antiguo Régimen) que eran el verdadero problema.

En realidad, ni la propiedad vinculada, ni la circulación de la propiedad pueden ser contrastadas, de forma inmediata, con la productividad agraria porque las mismas no constituyen un régimen productivo, sino una relación social de producción, una relación jurídica que comprende una determinada relación económica material⁶²¹.

Y es que al margen de su mayor o menor efectividad, dos cuestiones destacan de las pretendidas medidas antiamortizadoras de los ilustrados: la primera, que ninguna de ellas dejó de contar con la aceptación de Roma, a pesar de la existencia de poder suficiente en el rey para limitar las adquisiciones de bienes raíces por parte de la Iglesia y de la vigencia en el derecho de determinados territorios (en Valencia, sólo parcialmente modificado en este punto por el decreto de Nueva Planta) de los suficientes mecanismos legales antiamortizadores; y la segunda, que el objetivo último de tales medidas no era social ni económico, sino fundamentalmente político y fiscal. En suma, lo que verdaderamente interesaba al gobierno era hacer frente al pago de los intereses y capitales de una deuda pública que no había cesado de crecer y que se multiplicaría vertiginosamente en los últimos años de la centuria con motivo de las guerras contra Francia e Inglaterra, lo cual significaba la supeditación, como ya había ocurrido en ocasiones anteriores, de los intereses de la economía del país a los de la Hacienda Pública⁶²².

⁶²¹ B. Clavero Salvador, *Mayorazgo. Propiedad feudal...* o.c., p. 325.

⁶²² A. Marcos Martín, *Estructuras de la propiedad en la Época Moderna...*, o.c., p. 154.

CAPÍTULO VI

LA DESAMORTIZACIÓN ECLESIAÍSTICA

Pocos acontecimientos de la historia de la España decimonónica han pasado menos desapercibidos, para aquéllos que las vivieron y para las generaciones futuras, que las sucesivas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y propiedades comunales concejiles, que tuvieron lugar a lo largo del Siglo de las Revoluciones. El paso del Antiguo al Nuevo Régimen se fraguó sobre las cenizas de la sociedad estamental y gracias a la abolición de las añejas y caducas instituciones de origen feudal que pervivían todavía muchas centurias después de haberse creado, lastrando el desarrollo de una nueva sociedad emergente. Sin embargo, no podemos caer en el tópico manido y vulgar de que el proceso desamortizador es exclusivo del período objeto de la máxima atención por parte de historiadores, eruditos y estudiosos contemporáneos⁶²³. En realidad fue todo un proceso y no un suceso repentino, sino una larga serie de acontecimientos, unidos entre sí, por unos mismos intereses y dirigidos por unas leyes o textos legales que fueron variando pero que eran afines y complementarios en lo fundamental.

1.- NOCIÓN.

El vocablo “desamortización” proviene del francés “amortizer”, que según Ferraris en su obra equivale a “*inmobiliū bonorum in dominium manus mortuae translatio, quae bona semel acquisita, in commercio, mutationibus et aliis oneribus praediorum eximuntur, nec adventicia feudorum commoda producunt, v.g. laudimii, relevii, etc.*”

(F. L. Ferraris, *Prompta bibliotheca...*, o.c., I, 1, 1, fols. 479-481).

Desamortizar es lo opuesto y contrario a amortizar. Cuando una propiedad (inmueble) está sujeta a la prohibición o imposibilidad de enajenación o venta se dice que está amortizada y, en consecuencia, no se encuentra en el tráfico jurídico, es decir, no circula. La desamortización es el conjunto de disposiciones o leyes tomadas por el poder político con objeto de liberar la propiedad acumulada en las manos muertas restituyéndolas al tráfico jurídico⁶²⁴, es decir que puede decirse que es el paso los bienes de producción al libre comercio. Consistió en poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar (vender, hipotecar o ceder) en poder de dichas manos muertas.

Tomás y Valiente llama desamortización al largo e intermitente proceso a través del cual gran cantidad de fincas rústicas y urbanas (junto a otros bienes de menor importancia) pertenecientes hasta el fin del siglo XVIII a manos muertas paraeclesiásticas, eclesiásticas o municipales fueron convertidas en bienes nacionales y vendidos después en pública subasta al mejor postor. Y sigue diciendo que sólo la

⁶²³ A. Mejía Godeo, *La desamortización en el siglo XIX. Calzada de Calatrava*. Ciudad Real 2001, p. 11.

⁶²⁴ M. Moreno Antón, *La enajenación de bienes eclesiásticos en el ordenamiento jurídico español*, Salamanca 1987, p. 66. “Desamortización es una transformación de la propiedad inmueble por virtud de la que sale la misma del poder de los poseedores en cuyas manos se había estancado o perpetuado el dominio, por hallarse privados de la facultad de enajenar, para convertirse en libre o de libre disposición”. L. Montón y Ocampo, *Enciclopedia Jurídica Española...*, o. c., tomo IV, p. 398.

desamortización implicó, de forma simultánea y necesaria, la transformación y la transferencia de la propiedad. Fue un cambio del régimen jurídico y de la titularidad, es decir, un cambio de la propiedad amortizada y dividida a la propiedad libre y plena y el paso de titularidad de la Iglesia u otra “mano muerta” al titular individual. Todo ello fue necesario para que se realizase la revolución burguesa⁶²⁵.

2.- CLASES DE DESAMORTIZACIÓN⁶²⁶.

Se distinguen dos tipos o clases por razón de la cualidad de conformidad a la ley: la jurídica o legal frente a la antijurídica o ilegal.

A) Desamortización legal o jurídica.

Es la transformación de la propiedad estancada y fija en propiedad libre y circulante mediante un pacto o convenio entre el Estado y los propietarios de los bienes. A diferencia de la desamortización ilegal en ésta no hay apropiación del poder público, pues éste se somete o se ajusta al imperio de la ley.

B) Desamortización ilegal o antijurídica.

Consiste en el despojo que hace el Estado al apropiarse por la fuerza de bienes y derechos de las corporaciones para ponerlos en circulación mediante la venta a particulares y obteniendo provecho propio. En realidad esta clase de amortización ha sido la más practicada, considerándose como un ingreso o recurso extraordinario para el Estado.

3.- CAUSAS.

3.1.- Causas estructurales.

Los profundos y continuados cambios estructurales, aunque lentos y de larga duración en el tiempo, son decisivos en la desamortización. El cambio producido en la estructura de la propiedad mediante el proceso de transformación del régimen jurídico de la tierra que llevó al cambio de titularidad del régimen de propiedad, es una causa decisiva a tener en cuenta⁶²⁷. Los apuros fiscales y financieros de la monarquía borbónica eran, en realidad, de origen estructural aunque se hubiesen agravado por circunstancias coyunturales.

3.2.- Causas económicas (hacendísticas y demanda de tierras).

Las deficiencias del sistema impositivo, la deuda pública que se venía arrastrando y la caótica y angustiosa situación hacendística de fines del setecientos llevaron al Estado a una difícil situación que motivó la decisión de propiciar la venta de propiedades amortizadas. La desamortización aparece así, como una medida extraordinaria con la que recaudar fondos para reforzar el crédito público y mantener

⁶²⁵ F. Tomás y Valiente, *Obras completas*, Madrid 1997, volumen II, p. 1344; volumen IV, p. 3222.

⁶²⁶ M. González Ruiz, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España...*, o.c., pp. 384-385.

⁶²⁷ G. Rueda Hernanz, *La desamortización de Mendizábal y Espartero en España*, Madrid 1986, pp. 12-13.

estable el nivel de ingresos de la Real Hacienda en momentos en que las guerras habían incrementado el nivel de gasto hasta el riesgo de la bancarrota del Estado. Aunque, en última instancia, era el desajuste entre el sistema fiscal y la realidad económico-social la verdadera causa del problema⁶²⁸.

Un aumento de los precios agrícolas como consecuencia de la presión demográfica elevó el precio de la tierra y la subsiguiente demanda de tierras. La acumulación de capital propiciada por el alza de la renta de la tierra conlleva a una constante presión de la demanda sobre una oferta de tierras cada vez más limitada. A precios altos, menores rendimientos del capital invertido. El problema radicaba en que frente a una demanda creciente, se hallaba una oferta de tierras artificialmente limitada por las trabas legales impuestas por la vinculación. Desamortización y desvinculación era la respuesta a estas necesidades⁶²⁹.

3.3.- Causas políticas, ideológicas y sociales.

Las ideas desamortizadoras también tuvieron su apoyo en el naciente liberalismo y en las propuestas de los ilustrados que critican la amortización eclesiástica al ser contraria a la economía civil y defienden que las propiedades de la Iglesia deben volver a manos del pueblo.

Entre los motivos políticos se encontraba el deseo de crear una masa de propietarios adeptos a las incipientes instituciones liberales. El clero, como estamento dominante en el Antiguo Régimen, era visto como un enemigo para estos avances y para el nuevo régimen. La Iglesia no sabe adaptarse porque se considera columna del absolutismo y es además un estamento improductivo y atentatorio del incremento de la población en España⁶³⁰. Este móvil político será decisivo a partir de 1820. a ello hay que añadir el pronunciado anticlericalismo de algunos dirigentes de la causa liberal.

Hubo, en fin, ciertos grupos y clases sociales empeñados en llevar a cabo la desamortización porque favorecía sus intereses. Un afán inversor de amplios sectores con problemas de colocación de beneficios y rentas ante una crisis comercial que cuestionaba otro tipo de inversiones e invitaba a la búsqueda de valores sólidos y seguros: la tierra. La burguesía (comerciantes, artesanos enriquecidos, etc.) conseguirá que los bienes de la iglesia pasen a propiedad privada e individual⁶³¹.

4.- ETAPAS.

Como se ha podido apreciar, la costumbre de vender bienes eclesiásticos no era algo nuevo para el Estado. Ya desde el siglo XVI hubo venta de bienes de la Iglesia, aumentando su intensidad a comienzos del siglo XVIII, con Carlos IV. El proceso, con algunas interrupciones, durará hasta principios del siglo XX. Las Cortes de Cádiz y José

⁶²⁸ J. Azagra Ros, *La desamortización de Godoy en Valencia (1799-1807)*, Valencia 1986, pp. 17-18. M. Peset Reig, *Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra*, Madrid 1982, p. 76.

⁶²⁹ J. Azagra Ros, *La desamortización de Godoy...*, o.c., p. 20.

⁶³⁰ G. Rueda Hernanz, *La desamortización de Mendizábal...*, o.c., pp. 18-19.

⁶³¹ M. Peset Reig, *Dos ensayos sobre la historia de la propiedad...*, o.c., p. 77. J. Azagra Ros, *La desamortización de Godoy...*, o.c., pp. 21-22.

Bonaparte tuvieron poca incidencia en este proceso que se reactivará con fuerza con el Trienio Liberal y seguirá con fuerza con Mendizábal, Espartero y Madoz.

4.1.- La desamortización previa de los bienes de la Compañía de Jesús en 1769.

Al extrañamiento (expulsión) de los jesuitas en 1767 y la incautación y nacionalización de sus bienes, que tuvo lugar por la Pragmática Sanción de 2 de abril de ese año, con la consiguiente organización de la administración de estos bienes con las Temporalidades de los Regulares Expulsos, le siguió una legislación desamortizadora con la expedición de la Real Cédula de 27 de marzo de 1769 de creación de juntas provinciales y municipales y en la que los colegios y lugares de culto continuaron regidos por otras entidades, pero los demás bienes fueron vendidos previa tasación de los mismos⁶³². Es de notar que la Compañía de Jesús poseía un ingente patrimonio que, además, reunía calidad y, sobre todo, su especial y estratégica situación al estar próximo a las ciudades y pueblos. Todo ello hizo que fuese un “sabroso bocado” para especuladores, hombres de negocios y hacendados, vendiéndose muchas y casas y tierras, aunque hubo fincas, tanto rústicas como urbanas que no salieron a la venta hasta la posterior desamortización de Godoy e, incluso, hasta la de Madoz.

4.2.- La desamortización de Godoy (1798-1807).

La llamada desamortización de Godoy fue una parte más del conflicto entre el capital y la propiedad feudal, con intentos de liberalización del mercado territorial. Había necesidad de buscar rentas de procedencia distinta a las originadas en los préstamos a particulares, conocidos en Valencia como “censales”, práctica habitual de la nobleza y el estado eclesiástico. La introducción de las leyes castellanas sobre vinculación, más restrictivas que las valencianas y el recorte impuesto por Fernando VI al interés de los censales, conllevó que las rentas y capitales se invirtiesen en adquirir tierras para luego poder arrendarlas. En Valencia, la concentración de la propiedad y el aumento de la propiedad amortizada fue mayor que en otros lugares, como en Castilla, y llegó a ser el mayor obstáculo para la reproducción del capital. Desamortización y desvinculación fue la respuesta a la necesidad de buscar valores sólidos donde invertir: la tierra⁶³³.

La desamortización de los bienes de los jesuitas siguió en los años posteriores, a la que se añadió otra de más profundidad e importancia conocida como la primera desamortización o desamortización “*de Godoy*”, con un cambio radical de orientación política como consecuencia de la política internacional española de la época, con cuatro desastrosas guerras (contra Francia, Portugal e Inglaterra) y la crisis de la Hacienda con el desorbitado crecimiento de la Deuda Pública. En consecuencia, se llegaron a dictar varias disposiciones legales como las que siguen.

⁶³² G. Rueda Hernanz, *El proceso de la desamortización de bienes de origen eclesiástico (1769-1964) en España. Cuantificación y consecuencias socioeconómicas*, en AA. VV, *De la Iglesia al Estado. La desamortización de bienes eclesiásticos en Francia, España y América Latina*, Monografías de historia rural, Zaragoza 2009, p. 180.

⁶³³ J. Azagra Ros, *La desamortización...*, o.c., pp. 21-22. M. Peset Reig, *Dos ensayos...*, p. 216.

A) Real Cédula de 23 de mayo 1795.

Con esta disposición comienza a ponerse en práctica el plan desamortizador de Godoy para aliviar los problemas del Estado y liquidar parte de la Deuda Pública. Dicha norma manda obedecer un breve pontificio dado por Pío VII en 7 de enero de ese año de 1795, donde se autoriza a Carlos IV a que cobre las rentas y frutos de las dignidades, canonjías y otros cualesquiera beneficios eclesiásticos, con la condición de que se apliquen al fondo de amortización de los vales reales⁶³⁴.

A partir de esta norma el Estado comienza a poner en relación la deuda contraída con la masa de bienes que ostenta la Iglesia con el fin de obtener liquidez procedente de este ingente patrimonio y poder hacer frente a la devolución de los títulos de la deuda, a la vez que se saca ganancia o provecho con la percepción de unas rentas eclesiásticas.

B) Real Cédula de 24 de agosto de 1795.

Su finalidad es la misma que la anterior cédula. Se crea un impuesto de un 15% sobre el valor de los bienes raíces y derechos reales que adquiera en adelante cualquier mano muerta, impuesto que pagará la comunidad o mano muerta, prueba del escaso eco que hasta la fecha habían tenido otras medidas similares promulgadas con anterioridad y demostración, no menos elocuente, de que en esas circunstancias resultaba más rentable para la Hacienda regia gravar una adquisición que prohibirla.

La clara intención del Estado con estas dos medidas anteriores es recaudar dinero de los grandes patrimonios existentes en todo el territorio nacional y que están en poder de las manos muertas. Se trata de crear dos impuestos, uno sobre la Iglesia y otro sobre las haciendas municipales, pues se observó que era más rentable para el Estado y la Hacienda real gravar una adquisición que prohibirla (aspiración esta última de Campomanes).

Como se puede comprobar Godoy sigue, en sus relaciones con la Iglesia, la diplomática táctica de la que ya hablaba y propuso Floridablanca en su famosa Instrucción reservada⁶³⁵ de 8 de julio de 1787, en la que literalmente dice que hay que aplicar los “*medios dulces y pacíficos de conseguir el fin*”; cautela característica de su mandato con aquélla.

C) Real Orden de 19 de septiembre de 1798⁶³⁶.

⁶³⁴ Los vales reales eran papel moneda (títulos) que, autorizados por el Gobierno, representaban ciertas cantidades de dinero, con un tanto por ciento a favor de sus tenedores, generalmente el cuatro. M. González Ruiz, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España...*, o.c., p. 391. F. Tomás y Valiente, *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona 1977, p. 40.

⁶³⁵ A. Muriel, *Gobierno del señor Rey Don Carlos III o Instrucción reservada para dirección de la Junta de Estado*, Madrid 1839, XI, p. 124. M. Friería Álvarez, *La desamortización de la propiedad de la tierra en el tránsito del Antiguo Régimen al Liberalismo (la desamortización de Carlos IV)*, Gijón 2007, p. 27.

⁶³⁶ “*he resuelto, después de un maduro examen , se enagenen todos los bienes raices pertenecientes á Hospitales, Hospicios, Casas de misericordia, de reclusion, y de expósitos , Cofradías, Memorias, Obras pias y Patronatos de legos; poniéndose los productos de estas ventas, así como los capitales de censos que se redimiesen pertenecientes á estos establecimientos y fundaciones, en mi Real Caxa de amortizacion baxo el interes anual de tres por ciento, y con especial hipoteca de los arbitrios ya destinados, y que sucesivamente se destinaren al pago de las deudas de mi Corona , y con la general de todas las Rentas de ella.*” *Novísima Recopilación*, Tomo I, Libro I, Título V, Ley XXII.

Otro avance en el espinoso camino de la Deuda Pública y los bienes desamortizables se dio en septiembre de 1798 con tres reales órdenes, que constituyen un paso fundamental en el tránsito entre el Antiguo Régimen y el Liberalismo. La de mayor impacto en la transformación no sólo de la titularidad de la propiedad de la tierra, sino también de su régimen jurídico, fue la última de ellas, de 25 de dicho mes y año, insertaba este decreto en el que Carlos IV autorizaba la enajenación de bienes raíces de manos muertas (hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos)⁶³⁷.

En esta desamortización se superpusieron varios tipos de bienes como son: a) las obras pías y otras fundaciones (casas de misericordia, hospitales y hospicios), las cuales no formaban parte del patrimonio eclesiástico; b) las memorias de misas y patronatos de de legos también llamados capellanías laicales o mercenarias; d) cofradías; d) bienes propiamente eclesiásticos, formados por un lado, con bienes de cabildos, parroquias, santuarios y conventos y, por otro, con capellanías colativas o eclesiásticas. En cuanto a éstas últimas, como escapaban a la autoridad de la Corona y no podía enajenarlas se invitó a los prelados eclesiásticos a vender sus bienes:

“y que se invite á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, y demas Prelados eclesiásticos seculares y Regulares á que, baxo de igual libertad que en los Patronatos de sangre Obras pias laicales, promuevan espontáneamente, por un efecto de su zelo por el bien del Estado, la enagenacion de los bienes correspondientes á Capellanías colativas ú otras fundaciones eclesiásticas”

La primera de las tres etapas desamortizadoras que se suceden a lo largo del siglo XIX se inicia con la centuria, por cuanto las disposiciones reglamentarias que completan el anterior decreto se fueron promulgando a lo largo de 1799, como la Instrucción, de 30 de enero del citado año, que deberían observar los Intendentes y Justicias del Reino para ejecutar las enajenaciones de los bienes a las que se refería la Real Orden de 25 de septiembre de 1798. La enajenación de bienes eclesiásticos alcanzó cifras superiores a los 100 millones de reales en Madrid, Sevilla y Cádiz, que reunidas aportaron el 25% del total de las ventas⁶³⁸. El motivo no fue otro más que el de conseguir fondos con que atender el pago de la deuda gravada por los vales reales. Se enajenaron capellanías en todo el territorio nacional, algunas de las cuales tardaron en ser subastadas debido a las numerosas reclamaciones, llegando los postores a retirar las pujas por la dilatación en el tiempo de los procedimientos, algunos de los cuales duraron varios años.

Pero la idea madurada por Godoy de ingresar en la Caja de Amortización de la deuda pública (creada el 26 de febrero de 1798) todas las rentas anteriores para constituir un fondo que alcanzase a extinguir los vales reales, en realidad, no tuvo ninguna eficacia, porque dichos fondos se destinaron a otro fin completamente distinto, es decir, a los cuantiosos gastos ocasionados por las guerras, por lo que se buscaron nuevos bienes para ser vendidos y poder reducir dicha deuda.

⁶³⁷ F. de Cárdenas Espejo, *Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España*, Madrid 1873, II, p. 524. M. Frieria Álvarez, *La desamortización de la propiedad de la tierra en el tránsito del Antiguo Régimen al Liberalismo (La desamortización de Carlos IV)*, Gijón 2007, p. 27.

⁶³⁸ M. Artola Gallego, *Antiguo Régimen y revolución liberal...*, o.c., p. 150.

En 1804, ante las dificultades del erario público, se extendió la venta de obras pías a las colonias. Por Breve pontificio de 14 de junio de 1805, Pío VII autorizó la venta de bienes eclesiásticos. Al año siguiente, con fecha 12 de diciembre de 1806, el Romano Pontífice concedió al rey la facultad de enajenar la séptima parte (el séptimo eclesiástico) de los predios pertenecientes a las iglesias, monasterios, conventos, comunidades, fundaciones y otras personas eclesiásticas, incluyendo los bienes patrimoniales de las Órdenes Militares, es decir, sobre todos los bienes del clero regular y secular, , aunque esta medida no se pudo llevar a cabo por las dificultades que implicaba determinar el patrimonio del que había que segregar el séptimo a enajenar. En 1808 Fernando VII suspendió dicha venta.

4.3.- Medidas desamortizadoras del rey José Napoleón I⁶³⁹.

La invasión napoleónica supuso una continua progresión de la desamortización y exclaustración de conventos y monasterios con las consiguientes depredaciones sobre sus mayores riquezas. En conjunto, todas las medidas desamortizadoras del gobierno de José I afectaron a los bienes de la ya disuelta Compañía de Jesús, a los bienes de las distintas comunidades religiosas, a los bienes escogidos para formar el séptimo eclesiástico y los pertenecientes a fundaciones eclesiásticas, hospicios y hospitales. Mediante Real Cédula de 18 de agosto de 1808 se dictaron normas para proceder a la enajenación y venta en pública subasta de fincas de obras pías y capellanías⁶⁴⁰.

A) Decreto de 9 de junio de 1809.

Se dictan normas para llevar a cabo la venta de los bienes nacionales en pública subasta para la liquidación y pago de la deuda heredada (conventos y monasterios arruinados o exclaustrados):

“Don José Napoleón, por la gracia de Dios y por la constitución del Estado, Rey de las Españas y de las Indias.

Debiendo uniformarse las medidas que hemos adoptado para la liquidación y pago de la deuda pública con el método con que se han de vender los bienes destinados a extinguirla; vista la exposición de nuestro Ministro de Hacienda, y oído el Consejo de Estado, hemos decretado y decretamos lo que sigue:

⁶³⁹ *Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I desde el año de 1808, Madrid 1810, tomo I, pp. 203, 299, 303 y 349; tomo III, pp. 142 y 144. J. M. Antequera, La desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y relaciones, Madrid 1885, cap. X, p. 163 y ss. F. Tomás y Valiente, El marco político de la desamortización..., o.c., pp. 63-64.*

⁶⁴⁰ *“El Sr. D. Zacarías Josef de Garrido alcalde y juez ordinario de la ciudad de Vitoria como comisionado regio en ella y su jurisdicción para la enagenacion de fincas de obras pías y capellanías, tiene mandado sacar a remate los días 25 y 26 del presente mes por la escribanía de D. Andres Lorenzo de Lezana, escribano de ayuntamiento, dos casas : la una en la primera vecindad de la calle de la Correría de dicha ciudad, en que habita D. Manuel Serrano, perteneciente á las obras pías que administra el ilustre cabildo de beneficiados de ella, por la cantidad de 16940 rs. de las veinte y dos rentas al contado, y de 25410 rs. de las treinta y tres rentas al fiado por plazo de veinte años, entregando de presente la vigésima parte, y otorgando por las restantes diez y nueve obligaciones hipotecarias; todo con puntual arreglo á la real cédula de 18 de agosto de 1808; y la otra en la primera vecindad de la calle de la Herrería, en que habita Julian de Laguna, perteneciente á la capellanía que goza D. Pío de Guinea, residente en la villa deDeva, por la cantidad de 16940 rs. de las veinte y dos rentas al contado, y de 25410 de las treinta y tres rentas al fiado”. Gaceta de Madrid nº 47, de 16 de febrero de 1809.*

1º. Se procederá con la mayor actividad a la venta de los bienes nacionales destinados a la extinción de la deuda pública.”

B) Decreto de 18 de agosto de 1809.

El gobierno de José Bonaparte decidió la extinción de todas las órdenes religiosas (regulares, monacales, mendicantes y clericales) existentes en España y se incautaron todos sus bienes que quedaron aplicados a la Nación.

“1º. Todas las Órdenes Regulares, Monacales, Mendicantes y Clericales existentes en los dominios de España quedan suprimidas; y los individuos de ellas, en el término de quince días, contados desde el de la publicación del presente Decreto, deberán salir de sus conventos y claustros, y vestir hábitos clericales seculares.”

Entre 1809 y 1811 se suprimieron varios tributos que percibían muchos monasterios y se dispuso que se destinasen al Estado los diezmos así como los tributos del excusado, novenos, tercias reales, novales y exentos⁶⁴¹.

Los objetivos de la operación desamortizadora realizada por José Bonaparte en España fueron, en esencia, dos: enjugar la deuda pública o, por lo menos, consolidarla y dar seguidores a los acreedores del Estado; además de recompensar a los perjudicados, indemnizándoles de los perjuicios, para conseguir su apoyo a la nueva situación. Pero la realidad fue otra. Nacida a imitación de la francesa, no pudo superar las dificultades planteadas por la guerra y terminó en una farsa sin sentido. La mayoría de los conventos y monasterios fueron clausurados y sus propiedades repartidas entre los ministros y fieles servidores del rey intruso sin que llegaran siquiera a subastarse⁶⁴².

4.4.- Las primeras normas desamortizadoras del siglo XIX.

La revolución liberal triunfa en España en 1808 ante la ausencia de los monarcas, como consecuencia del enfrentamiento entre Fernando y Carlos IV. Con las tropas del general Murat en Madrid, Napoleón llamó a padre e hijo a Bayona (Francia) y les forzó a abdicar en su hermano José. Dichas abdicaciones y la insurrección contra José I significaron una situación de vacío de poder que desencadenó la quiebra de la monarquía del Antiguo Régimen en España. Para hacer frente al invasor, se constituyeron Juntas Provinciales, que asumieron la soberanía en nombre del rey ausente. En septiembre de 1808, las Juntas Provinciales se coordinaron y se constituyó la Junta Central Suprema. Pese a que gran parte de los miembros de estas juntas eran conservadores y partidarios del Antiguo Régimen, la situación bélica provocó la asunción de medidas revolucionarias como la convocatoria de Cortes. Las sesiones

⁶⁴¹ Ya se ha comentado que el excusado era un impuesto que se detraía del diezmo que correspondía a la Iglesia y se entregaba al rey. El diezmo es el tributo que se da a la Iglesia y que consiste en la décima parte de cualquier cosa. Novales son las tierras que se ponen de nuevo en cultivo y que durante cierto número de años están libres de impuestos. Tercias: son los dos novenos que se deducen para el estado de todos los diezmos eclesiásticos. J. Escriche, *Diccionario razonado de legislación...*, o.c., Tomos II y IV, pp. 695, 929 y 298, 1073.

⁶⁴² J. Mercader Riba, *La desamortización en la España de José Bonaparte*, en *Hispania*, revista española de historia, Madrid 1972, XXXII, pp. 587-616.

comenzaron en septiembre de 1810, aprobándose la constitución en 19 de marzo de 1812.

A) Decreto de 13 de septiembre de 1813.

En Cádiz se abordó pronto la desamortización. Prueba de ello fue el decreto de 4 de enero de 1813 fue el primer atisbo de desamortización civil, aunque no fructificó. Posteriormente, esta norma parte de la “*Memoria sobre el crédito público*” de José Canga Argüelles⁶⁴³, ministro de Hacienda interino, firmada en 6 de marzo de 1811 que vino a reforzar la conexión entre amortización y liquidación de la deuda pública. Este decreto, que preveía que los bienes confiscados o por confiscar a los jesuitas, a las Órdenes Militares, a los conventos y monasterios suprimidos pasaban a ser bienes nacionales y deberían ser vendidos en pública subasta, apenas pudo aplicarse debido al retorno de Fernando VII y el restablecimiento del absolutismo. Pero su importancia es grande, pues junto a la “*Memoria*” de Canga Argüelles contiene los principios y engranajes jurídicos de la posterior legislación desamortizadora y de una profunda modificación del sistema fiscal.

Sus principales artículos disponen lo siguiente:

“Art. XVII. Las Cortes asignarán desde luego como hipoteca especial para el pago de la Deuda nacional sin interés, y para la extinción de los capitales que le gozan:

1º Los bienes confiscados y confiscables a traidores...

2º Los de temporalidades de los ex jesuitas.

3º Los de la Orden de San Juan de Jerusalén.

4º Los predios rústicos y urbanos de los maestrazgos y encomiendas vacantes y que vacaren en las cuatro Órdenes militares.

5º Los que pertenecían a los conventos y monasterios arruinados, y que queden suprimidos por la reforma que se haga de los regulares en uso del Breve de Su Santidad de 10 de septiembre de 1802, entendiéndose éste y los tres anteriores artículos sin perjuicio de las cargas y gravámenes de justicia a que dichos bienes estén sujetos

Art. XVIII. La Junta nacional del crédito público hará a su tiempo la venta de estos bienes nacionales...”

(Colección de decretos y órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias, tomo IV, Madrid 1820, pp. 258-259).

⁶⁴³ Dicha memoria incide en que interesa a la Nación un sólido sistema de hacienda y que se consolide el crédito nacional y se extinga la deuda. Manifiesta que las causas que influyen en la ruina del crédito público se encuentran en la falta de cumplimiento de los contratos por parte del Gobierno, la falta de reconocimiento y pago de las deudas antiguas y las rebajas hechas en los capitales de la deuda sin el consentimiento de los acreedores, entre otras. A continuación expone la excesiva deuda pública que arrastra la Nación. Para finalizar comenta el sistema para extinguir la deuda y satisfacer sus réditos, incidiendo en la necesidad de desamortizar los bienes raíces del clero secular y regular para extinguir la deuda “*poniendo en movimiento útil una masa de propiedades que muertas en poder de las corporaciones eclesiásticas, influyen en el atraso de la agricultura y disminuyen la riqueza*”, haciendo especial hincapié en la venta de conventos, obras pías, memorias, capellanías y aniversarios. J. Canga Argüelles, *Memoria sobre el crédito público*, Madrid 1820, pp. 2, 12, 13, 14, 43, 75, 114 y 117.

Con todo ello,

B) Decreto de 27 de abril de 1814.

Declara que las capellanías de sangre no están comprendidas en el Decreto de 10 de diciembre de 1810, en el que se prohibió la provisión de prebendas y beneficios eclesiásticos.

“Las Cortes (...) han tenido a bien declarar: que las capellanías de sangre que tienen sus llamamientos de legítima sucesión por sus fundadores no son propiamente beneficios eclesiásticos, aunque sean colativas, y que, por lo mismo que siguen la naturaleza de las vinculaciones profanas, no deben ser comprendidas en el expresado decreto de 1º de diciembre de 1810”.

(Colección de decretos y órdenes que han expedido las Cortes ordinarias, tomo V, Madrid 1820, pp. 196-197).

C) Decreto de 1 de febrero de 1815.

En esta norma se suspende la provisión de los beneficios simples que se hallen vacantes o que vacaren.

“He venido en mandar que por ahora y hasta nueva orden mía se suspenda la provisión de todos los beneficios simples, préstamos enteros y medios pontificales, y toda otra pieza eclesiástica, de cualquiera denominación que sea, que por costumbre, por tolerancia o por otro título no se hubiese recibido por sus anteriores poseedores, y se hallen vacantes o vacaren a mi Real presentación, o a la de los ordinarios, u otros presenteros eclesiásticos”.

(Colección de reales cédulas, decretos y órdenes de S.M. el Señor Don Fernando VII, tomo III, Barcelona 1815, p. 70).

La Iglesia como institución intentó por todos los medios a su alcance obstaculizar la obra del primer liberalismo pero, mostró al mismo tiempo por su debilidad interna su incapacidad para imponer sus propias miras políticas. En los últimos años de las Cortes, sobre todo a partir de 1813, el clero se constituyó en un bloque adversario al poder temporal. Los eclesiásticos se sentían amenazados en gran manera por los excesos de la libertad y por las mismas reformas introducidas (incipiente desamortización, reforma de las órdenes regulares, abolición de la Inquisición, expulsión de los jesuitas, etc.). La Iglesia española se sentía víctima no sólo del régimen napoleónico anterior sino también del régimen liberal instaurado en Cádiz⁶⁴⁴.

Posteriormente, con la reposición del régimen de Fernando VII en la primavera de 1814, hubo una verdadera explosión de júbilo y euforia del pueblo y del clero. Con el retorno de “*el Deseado*” se restablece la Inquisición, se devuelven las propiedades incautadas al clero regular y regresa la Compañía de Jesús, aunque la monarquía fue desentendiéndose de prestar la colaboración que esperaba de ella la Iglesia. El rey nada

⁶⁴⁴ E. La Parra, *Oposición constante y sistemática: la Iglesia católica y el poder civil en el inicio de la Revolución liberal en España*, en “El primer liberalismo. España y Europa, una perspectiva comparada”, Biblioteca Valenciana, Valencia 2003, pp. 142. 153 y 154. M. Revuelta, *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX*, Madrid 1973, p. 3.

cumple y aumenta el malestar general hasta que desembocará en la sublevación del general Riego, la aceptación de Fernando VII de la Constitución de Cádiz y la formación del primer gobierno liberal.

De este periodo es la Real Cédula de 10 de marzo de 1817, en la que se previene que, haciendo referencia a la Real Orden de 19 de septiembre de 1798, en la que se ordenaba la enajenación de los bienes de las capellanías, *“los compradores de bienes de patronatos, aniversarios, capellanías, &c., enajenados antes de la guerra de la independencia, que no satisficieron el precio de estos antes de la invasión de los ejércitos franceses, y que después pagaron al gobierno intruso, deben satisfacerlos segunda vez al gobierno legítimo.”*

4.5.- El Trienio Liberal (1820-1823)⁶⁴⁵.

La desamortización durante el Trienio Constitucional o Liberal puso en práctica la legislación de las Cortes de Cádiz que en su día no se pudo desarrollar, restableciendo lo acordado en 1813. La revolución, cuyo elemento social más significativo consistió en la liberalización de la propiedad de la tierra, alcanzó en estos años sus primeras y efímeras realizaciones. Pero la corta duración de este período y los hechos que siguieron lo caracterizan como una desamortización inconclusa, ya que quienes compraron tierras y bienes tuvieron que devolverlos en 1823, aunque pudieron recuperarlos en 1835.

La política religiosa del Trienio, si por una parte permitió al Estado disponer de buena parte del patrimonio eclesiástico, fue a cambio de asumir una carga financiera de importancia como consecuencia de las pensiones que el gobierno se comprometió a pagar a los secularizados, las cuales ni siquiera debieron pagarse con la conveniente puntualidad, ocasionando problemas de subsistencia e incluso miseria a exclaustrados y monjas⁶⁴⁶.

Desamortización, reforma de las rentas y secularización son los aspectos capitales de la obra reformista de las Cortes frente a la Iglesia que después se materializa en el Trienio, lo que supuso dejarla con un volumen de ingresos inferior al 50% de los que venía disfrutando, un importante sacrificio que no aceptará de ningún modo.

A) Decreto de 9 de agosto de 1820.

Las Cortes, mediante la promulgación de este decreto, dispusieron la inmediata venta en subasta de todos los bienes afectos a la amortización de la deuda pública. En realidad, lo que se intentaba con este decreto era el restablecimiento del de 13 de septiembre de 1813. Estos bienes nacionales podían ser pagados con los vales reales al precio de su valor nominal, aunque en las subastas se vendieron muchas veces por precios muy inferiores a su valor real (hasta un 15% de su valor) debido al bajo valor real de los títulos de la deuda.

⁶⁴⁵ F. Tomás y Valiente, *El marco político de la desamortización...*, o.c., pp. 66-72. M. González Ruiz, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España...*, o.c., p. 393. V. Palacio Atard, *La España del siglo XIX (1808-1898)*, Madrid 1978, p. 122-124.

⁶⁴⁶ M. Artola Gallego, *Antiguo Régimen y revolución liberal...*, o.c., pp. 233 y 237. F. de Cárdenas Espejo, *Ensayo sobre la historia de la propiedad...*, o.c., p. 529 y ss.

“I^o La Junta nacional del Crédito público procederá inmediatamente a la venta en subasta, conforme a la leyes, de todos los bienes que le están designados por los decretos y reglamentos de 1813, 1815 y 1818, e incluyendo los de la extinguida Inquisición...,empezando por los que ofrezcan más fácil y pronta salida”.

(Colección de los decretos y órdenes generales de la primera legislatura de las Cortes ordinarias de 1820 y 1821. Tomo VI. Madrid 1821, fol. 33 y ss).

B) Decreto de 1 de octubre de 1820.

Fue la medida legislativa de mayor transcendencia al suprimirse los monasterios de órdenes monacales, conventos de las Órdenes Militares, Hospitalarios y otras instituciones eclesiásticas. Todos los bienes de estas instituciones se consideraban nacionales y estaban sujetos a inmediata desamortización (véase el artículo 23 de este decreto), objetivo prioritario de esta reforma del clero regular. Con esta norma la desamortización eclesiástica alcanza su plenitud, pues ya no se trata de parciales y tímidas medidas, sino que se emprende con firmeza y rotundidad.

“Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades prescritas por la Constitución, han decretado lo siguiente:

I^o. Se suprimen todos los monasterios de las Órdenes monacales; los de canónigos regulares de San Benito, de la Congregación Claustral Tarraconense y Cesaraugustana, los de San Agustín y los Premostratenses; los conventos y colegios de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa; los de San Juan de Jerusalén, los de San Juan de Dios y de Betlemitas, y todos los demás de hospitalarios de cualquier clase.

23. Todos los bienes muebles e inmuebles de los monasterios, conventos y colegios que se suprimen ahora, o que se supriman en lo sucesivo en virtud de los artículos 16, 17, 19 y 20, quedan aplicados al Crédito público; pero sujetos como hasta aquí a las cargas de justicia que tengan, así civiles como eclesiásticas.”

(Colección de los decretos y órdenes generales..., o.c., fols. 155-158).

C) Decreto de 25 de octubre de 1820.

Fernando VII sanciona dicha norma sobre supresión de monacales y secularización de regulares, lo que produjo una honda conmoción en el clero. Con ella se incorporan al Estado los bienes pertenecientes a las instituciones suprimidas por el decreto de 1 de octubre de ese año (conventos y monasterios, suprimiéndose todos sin excepción y reduciendo los conventos a uno por orden y localidad siempre que contasen con un mínimo de doce profesos), enajenando parte del patrimonio de la Iglesia y suprimiendo el derecho de imponer cargas tributarias sobre los ciudadanos. Los bienes de los conventos y monasterios suprimidos quedan nacionalizados y aplicados al Crédito Público para ser vendidos en pública subasta y redimir la deuda pública existente en el país.

Tras la aprobación y publicación de dos decretos de 6 y 8 de noviembre, de medidas sobre contribuciones del clero, se dictó una instrucción para el repartimiento y cobranza del subsidio extraordinario de quince millones de reales de vellón con que

había de auxiliar el clero secular y regular al Erario público, donde se manifestaba en su artículo 3º que contribuirían al pago “*los frutos que perciben las iglesias catedrales, colegiadas y parroquiales seculares o regulares; los de todos los beneficios con cura o sin ella y los de capellanías y préstamos*”. Dicha instrucción apareció publicada en el *Diario de Madrid*, nº 140, de 30 de mayo de 1821, en su primera hoja, pp. 1103 y ss (BNE. Hemeroteca Digital).

Por un decreto de 9 de noviembre de los corrientes se extendió la expropiación, ante “*el agobio de la deuda*” según la prensa, a otros bienes eclesiásticos como los de las capellanías no familiares vacantes y las que vacaran en lo sucesivo, además de los de ermitas, memorias, cofradías o fundaciones no espiritualizadas ni que formasen parte de la congrua de algún eclesiástico, aplicándose dichos bienes al Crédito Público para la extinción de la deuda pública. Posteriormente, en 7 de abril de 1821 se suspendió la provisión de todos los beneficios y capellanías que no llevaran aneja la cura de almas, aunque fueran familiares⁶⁴⁷.

D) Decreto de 29 de junio de 1821.

Con anterioridad, en abril se discutió en las Cortes un informe de la Comisión Eclesiástica sobre la suspensión interina de órdenes mayores y erección de capellanías. Dicho informe constaba de dos artículos: el primero, proponía la suspensión de la provisión de capellanías que no tuviesen aneja la cura de almas; el segundo, manifestaba que no se admitiesen ni proveyesen capellanías de sangre. Todo ello basándose “*en el excesivo número que había de eclesiásticos inútiles*”⁶⁴⁸.

Mediante este decreto de 29 de junio se redujo el diezmo eclesiástico a la mitad, recibiendo el resto el Estado. Se consideró, equivocadamente, que con ello había suficiente para cubrir los gastos de la Iglesia, tanto de culto como de clero. Otra vez aparecía la conexión entre las imperiosas e inevitables necesidades fiscales y las medidas económico-eclesiásticas.

“Iº. Todos los diezmos y primicias se reducirán a la mitad de las cuotas que ahora se pagan o deben pagarse, y se percibirán del mismo modo y de las mismas especies que hasta aquí se han percibido”.

(Colección de los decretos y órdenes generales..., o.c., Tomo VII, fol. 245 y ss).

Con fecha 7 de julio se publicó un decreto relativo al Crédito público para que tuviese efecto el anterior decreto de 9 de noviembre de 1820. En su artículo 3º ordenaba la extinción de todos los capitales y réditos procedentes de la amortización eclesiástica, exceptuándose los de las capellanías laicales y colativas de llamamiento y patronato pasivo de familias, una vez muertos los actuales poseedores, deberán volver en clase de bienes seculares y libres a las familias respectivas (*El Universal*, nº 200, de 19 de julio de 1821. *Nuevo diario de Madrid*, nº 266, del mismo día. BNE. Hemeroteca Digital).

⁶⁴⁷ F. de Cárdenas Espejo, *Ensayo sobre la historia de la propiedad...*, o.c., II, p. 530. *Colección de los Decretos y Órdenes Generales expedidos por las Cortes Ordinarias de los años 1820-1821*, tomo VII, Madrid 1821, fol. 31. *Diario de Madrid*, nº 33, de 2 de febrero de 1821, p. 226, (BNE. Hemeroteca Digital).

⁶⁴⁸ *El Universal*, nº 94, de 4 de abril de 1821, pp. 470-471. Suplemento de *Miscelánea de Comercio, Política y Literatura*, nº 401, de la misma fecha, (BNE. Hemeroteca Digital).

Mediante un decreto de las Cortes de 27 de julio aclaratorio de la orden de 31 de marzo, sobre prohibición de erección y provisión de nuevos oficios y capellanías, se manifestó que, ante las continuas protestas, el objeto de la mentada orden fue únicamente evitar que se ordenasen nuevamente a título de capellanías y beneficios para que no se aumentase el número de clérigos con perjuicio del estado y de la misma Iglesia (*El Universal*, nº 222, de 10 de agosto de 1821. BNE. Hemeroteca Digital).

E) Decreto de 15 de noviembre de 1822.

En 6 de abril, ante la petición de la Junta Nacional que el Crédito público cobrase las rentas de las capellanías de sangre, las Cortes debatieron y finalmente aprobaron que, según el contexto de los decretos de 9 de noviembre de 1820 y 29 de junio de 1821, el Crédito público no puede cobrar las rentas procedentes de las citadas capellanías, porque éstas son de propiedad particular, y lo único que debe recaudar son los productos de dichas capellanías, en las épocas respectivas anteriores a los expresados decretos (*El Universal*, nº 97 y *El Espectador*, nº 358, ambos de 7 de abril de 1822. BNE. Hemeroteca Digital).

El contenido del decreto de 25 de octubre de 1820 se endurece todavía más con esta nueva disposición al suprimirse todos los conventos situados en pueblos de menos de 450 vecinos, lo que llegó a afectar a las dos terceras partes de los conventos que todavía existían, o mejor, subsistían, y a todos los monasterios exceptuados en 1820. Afortunadamente, esta medida, próximo el fin del Trienio Liberal, no será totalmente puesta en práctica.

“Art. 1º Se suprimen desde luego todos los conventos y monasterios que estén en despoblado y en pueblos que no pasen de 450 vecinos, quedando a cargo del gobierno distribuir los religiosos de los conventos suprimidos en los que se conservan, y aplicar sus caudales al crédito público según está mandado por decretos anteriores de las Cortes; pero sujetos como hasta aquí a las cargas de justicia que tengan así civiles como eclesiásticas.”

(Colección de los decretos y órdenes generales..., o.c., Tomo X, fol. 31).

Una de las consecuencias de la operación desamortizadora del Trienio menos conocida fue que serviría a Álvarez Mendizábal y sus colaboradores como punto de referencia y ensayo general del proceso desamortizador del siglo XIX. En fin, la desamortización de este periodo de tres escasos años fue eminentemente eclesiástica al incidir sobre ella las políticas revolucionarias anticlericales de los liberales.

4.6.- La desamortización de Mendizábal⁶⁴⁹.

⁶⁴⁹ F. Simón Segura, *La desamortización española en el siglo XIX*, Madrid 1973, p. 80 y ss. G. Rueda Hernanz, *La desamortización de Mendizábal...*, o.c., pp. 21-24; *El proceso de la desamortización de bienes...*, o.c., pp. 190-193. F. Tomás y Valiente, *El marco político de la desamortización...*, o.c., pp. 75-76 y 97. M. González Ruiz, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España...*, o.c., p. 395 y ss. V. Palacio Atard, *La España del siglo XIX (1808-1898)*, Madrid 1978, p. 208. J. M. Antequera, *La desamortización eclesiástica...*, o.c., pp. 198 y 199. M. Peset Reig, *Dos ensayos sobre la historia de la propiedad...*, o.c., pp. 83 y 84.

4.6.1.- Antecedentes.

De las Cortes del período 1834-35 se conoce la existencia de una proposición sobre extinción de capellanías y memorias de misas, presentada el 25 de octubre de 1834 y aprobada en sesión del día 28⁶⁵⁰ (según recogían los periódicos como *El Eco del Comercio*, nº 179, del domingo 26 del citado mes de octubre y *La Revista Española*, nº 375, de fecha 29 de octubre, en sus páginas 935 y 936. BNE. Hemeroteca Digital), pero que no llegó a aplicarse, que decía:

“Los Procuradores del reino que suscriben, penetrados de los males que la amortización civil y eclesiástica ha ocasionado y ocasiona a la nación, no pueden menos de llamar la atención del Estamento sobre esta importante materia. Nosotros creeríamos hacer una injuria a la sabiduría del Estamento si intentásemos demostrarle cuán perjudicial es a la riqueza pública, cuán contraria a su aumento y desarrollo una institución que menoscaba la propiedad y pone obstáculos insuperables a la circulación de tantos bienes raíces (...). Las capellanías, así colativas como laicales, memorias de misas y legados píos, aumentan considerablemente aquellos males, al paso que son en gran parte el origen de la ignorancia del clero secular, relativamente a aquellos individuos que tienen derecho a dichas fundaciones. Así es no pudieron llevarse a efecto por la invasión francesa. Las últimas Cortes en el año de 1823 con mejor acuerdo, y respetando como debían las particulares circunstancias de las referidas fundaciones, decretaron que por muerte de los poseedores volviesen a las familias, en concepto de bienes libres. Por todas estas razones tenemos el honor de proponer al Estamento se sirva elevar a S. M. para su aprobación la petición siguiente:

Que se extingan las capellanías colativas, laicales, memorias de misas y legados píos de cualquier clase y condición que sean; las vacantes desde el momento; las poseídas desde el fallecimiento de su poseedor; que por su muerte los bienes de las de sangre pasen a sus herederos legítimos dentro del cuarto grado civil, si los hubiere, en la condición de fincas libres, y que no habiendo tales parientes, como asimismo en todas las fundaciones expresadas que no son de sangre, recaigan sus bienes en el crédito público para la amortización de la deuda del Estado.”

⁶⁵⁰ Fue aprobada por 55 votos contra 35 tras un acalorado debate. En dicha sesión el Sr. Calderón Collantes apoyó la necesidad de hacer esta reforma diciendo “que ya desde el reinado del Sr. D. Carlos III habían empezado a declamar contra esta especie de amortización: que las capellanías colativas eran origen de un sinnúmero de males en la sociedad, y en general de la corrupción de las personas que gozan de ellas; y en cuanto a las capellanías laicales era bien sabido que los que las poseen viven en el ocio y haraganería sin ser útiles para nada”. El Sr. Ochoa apuntó que “en ninguna parte se cumplía con la voluntad de los fundadores, pues los que manejaban los caudales eran los que se los comían dando muy poca parte a las ánimas del purgatorio”. Siguió haciendo algunas reflexiones sobre los perjuicios que causaban estas capellanías y el desdoro que la mayor parte de los capellanes de los pueblos causaba al clero español. El Sr. Martínez de la Rosa aludió que la discusión presentaba una nueva prueba de lo que otras veces había manifestado: “que no se puede adoptar una medida general y absoluta sin exponerse a tropezar con graves inconvenientes en su ejecución”. *Diario de las sesiones de Cortes. Estamento de procuradores*. Tomo I, Madrid 1867, pp. 595-603. *El Eco del Comercio*, nº182, de 29 de octubre de 1834. BNE. Hemeroteca Digital.

(*Diario de las sesiones de Cortes. Estamento de Procuradores*. Tomo I, Madrid 1867, p. 596).

El proceso desamortizador sigue con un Decreto de 24 de marzo de 1834, al que acompaña un Real Decreto de 4 de julio de 1835. En la primera norma, estrechamente vinculada a la guerra carlista, se dispuso la supresión de monasterios y conventos de los que se hubiesen fugado alguno de sus individuos para pasarse a los rebeldes y la venta de sus bienes. En el segundo se suprime la Compañía de Jesús y sus bienes y rentas se dedicarán a la extinción de la deuda pública. Complemento de las anteriores fue la ley de 9 de mayo de 1835 sobre adquisiciones a nombre del Estado.

Posteriormente, con el Real Decreto de 25 de julio de 1835 se suprimen los conventos que tuviesen menos de doce individuos profesos, aplicando sus bienes a la extinción de la deuda:

1.º Los monasterios y conventos de religiosos que no tengan 12 individuos profesos, de los cuales las dos terceras partes a lo menos sean de coro, quedan desde luego suprimidos; y lo mismo se verificará en lo sucesivo respecto de aquellos cuyo número venga a reducirse con el tiempo a menos del establecido.

7.º Los bienes, rentas y efectos de cualquier clase que posean los monasterios y conventos que deban quedar suprimidos, se aplican desde luego a la extinción de la deuda pública o pago de sus réditos; pero con sujeción a las cargas de justicia que tengan, así civiles como eclesiásticas. Se exceptúan con todo de esta aplicación los archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres que puedan ser útiles a los institutos de ciencias y artes, así como también los monasterios y conventos, sus iglesias, ornamentos y vasos sagrados, de los que me reservo disponer, oídos los ordinarios eclesiásticos y prelados generales de las órdenes en lo que sea necesario o conveniente.

(*Decretos de la reina nuestra señora doña Isabel II*, tomo vigésimo, Madrid 1836, p. 335 y ss).

4.6.2.- Proceso desamortizador de Mendizábal y Espartero.

Durante el gobierno progresista de Mendizábal, entre septiembre de 1835 a mayo de 1836, y el bienio de 1836 a 1837, la revolución se instaló en el poder y se lanzó a fondo, sin ningún temor y de forma abierta, a su obra destructora, siendo la principal medida la desamortización de los bienes eclesiásticos, a través de cuatro reales decretos: el de octubre de 1835, de supresión de las órdenes religiosas; el de febrero de 1836, primera ley desamortizadora de los bienes del clero regular que nacionaliza sus bienes; el de marzo de 1836, y el de julio de 1837, segunda ley desamortizadora.

Con la regencia del general Baldomero Fernández Espartero Álvarez de Toro (1840-1843) se retomó otra vez la desamortización de los bienes eclesiásticos, centrada en los bienes del clero secular, con la famosa ley de 2 de septiembre de 1841, que estuvo condicionada al mantenimiento en el poder del partido progresista, pues con la vuelta de los moderados se suspendieron las ventas de bienes del clero secular y se devolvieron las fincas no enajenadas. Estos tres años fueron como una oleada o segunda fase que completaba la primera de los años 1834-1837, pero con una diferencia notable,

que se llevaba a cabo de forma más molesta, perturbadora y ofensiva para la Iglesia. En este periodo, la mayoría de las fincas desamortizadas y, posteriormente, subastadas, fueron las del clero secular, concretamente, de fundaciones de capellanías, beneficios, y obras pías, dueñas de diversos patrimonios acumulados por donación de particulares, que supusieron hasta el 68% de estas instituciones.

A) Real Decreto de 11 de octubre de 1835.

Esta norma restablece la vigencia del decreto de 1 de octubre de 1820, ampliando el número de instituciones religiosas suprimidas, y lo concuerda con el Real Decreto de 25 de julio de 1835, adjudicando los patrimonios de los conventos suprimidos a la amortización de la deuda. En este decreto se suprimen todas las órdenes religiosas, pues, según la exposición de motivos, se consideraba excesivo y desproporcionado a los medios actuales de la nación el número de casas monásticas que quedan:

“Aunque por mi Real decreto de 25 de julio de este año apliqué el remedio que me pareció exigían entonces mas de pronto los graves males que causaba a la Religión y al Estado la subsistencia de tantos monasterios y conventos faltos del número canónico de individuos que se necesita para la observancia de la disciplina religiosa (...), considerando cuán desproporcionado es a los medios actuales de la Nación el número de casas monásticas que queda, cuán inútiles o innecesarias son la mayor parte de ellas para la asistencia espiritual de los fieles, cuán grande el perjuicio que al Reino se le sigue de la amortización de las fincas que poseen, y cuánta la conveniencia pública de poner estas en circulación para aumentar los recursos del Estado, y abrir nuevas fuentes de riqueza.”

(Ibidem, pp. 457-458).

B) Real Decreto de 19 de febrero de 1836.

Todas las medidas anteriores experimentaron un proceso continuado de radicalización y sistematización con este decreto (y posteriores) de Mendizábal. Se trataba de un texto que no había sido elaborado por las Cortes, sino personalmente por el mismo Juan Álvarez Mendizábal, quien, como instrumento propio, lo defendió en la exposición de motivos primigenia dirigida a la reina gobernadora, en la que enumera tres objetivos: financiero (amortizar la deuda), político (crear propietarios afectos al régimen liberal) y social (que también sean propietarios los ciudadanos honrados y laboriosos)⁶⁵¹. En consecuencia, se declaran en venta todos los bienes de las instituciones y corporaciones religiosas suprimidas, justificando dicha medida, como en casos anteriores, por la necesidad de amortizar la desbocada deuda pública. Esta norma tuvo una Instrucción complementaria de 1 de marzo de 1836.

“Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la Deuda pública consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la Nación (...) he venido en decretar lo siguiente: Artículo Iº. Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquier clase, que hubiesen pertenecido a las Comunidades y Corporaciones

⁶⁵¹ N. Ferrer y Jou, *Reales decretos y órdenes de S. M.*, Madrid 1837, pp. 33-55.

religiosas extinguidas, y los demás que hayan sido adjudicados a la Nación por cualquier título o motivo, y también todos los que en adelante lo fueren desde el acto de su adjudicación.”

(Ibidem, tomo vigésimo primero, Madrid 1837, p. 77).

C) Real Decreto de 8 de marzo de 1836.

Con esta norma se asestaba un duro y terrible golpe a la Iglesia, en grado tal que tendrían que transcurrir bastantes años hasta que, no ya la propia Iglesia, sino la Nación, pudiera restablecerse de sus perniciosos efectos y consecuencias.

Este Decreto, junto a su Reglamento del 24 del mismo mes y año, regula y amplía el Real Decreto de 11 de octubre de 1835 al suprimir todos los conventos y monasterios de religiosos y religiosas, con algunas excepciones. Todos los patrimonios son traspasados a la Hacienda pública para ser subastados:

“Considerando que la supresión de las casas de los Institutos Regulares es una necesidad reclamada por razones de alta conveniencia para el Estado, y para los individuos que han formado o forman las Comunidades de los Monasterios y Conventos: que en la mejora de la suerte de los acreedores a la Nación se libra el bienestar de inmenso número de familias, y en mucha parte el fomento de la riqueza pública: que la cuantía de la Deuda exige medios grandes y eficaces que es forzoso buscar sin gravámen de los pueblos (...)

Artículo Iº. Quedan suprimidos todos los Monasterios, Conventos, Colegios, Congregaciones y demás casas de Comunidad o de Instituto religioso de varones, incluidas las de Clérigos regulares, y las de las Cuatro Órdenes militares y San Juan de Jerusalén, existentes en la Península, Islas Adyacentes y posesiones de España en África.

Art. 20. Todos los bienes raíces, muebles y semovientes, rentas, derechos y acciones de todas las Casas de comunidad de ambos sexos, así suprimidas como subsistentes, se aplicarán a la Real Caja de Amortización para la extinción de la Deuda pública (...)

(Ibidem, pp. 120-123).

De esta forma, se crearon Juntas en las capitales de las diócesis para reducir el número de conventos de monjas al mínimo indispensable, se prohibió la admisión de novicios en los que todavía subsistían, la vida en común a los exclaustrados, el uso público del hábito religioso, etc.

Tampoco las capellanías colativas escapan a esta norma al contemplarse expresamente en el apartado 4ª del artículo 36:

“Se aplican al pago de las pensiones señaladas a los regulares de ambos sexos los fondos siguientes:

4º. Las rentas de las capellanías colativas vacantes, y que vacaren en adelante. Se exceptúan las que sean de sangre o patronato pasivo de familia”.

D) Real Decreto de 29 de julio de 1837.

Con esta norma ya no aparece la desamortización como una operación vinculada primordialmente con la extinción de la deuda, sino más bien con la reforma tributaria y con el problema de la dotación o pago para el mantenimiento de los gastos del culto y clero. Se da una nueva redacción al anterior real decreto de 8 de marzo, siendo la modificación más señalada que se suprimieron los diezmos y se declaró como bienes nacionales sujetos a enajenación todas las propiedades del clero secular, estableciendo una sólo excepción respecto a capellanías y otras fundaciones de patronato de sangre pasivo debido a que eran considerados bienes de particulares y no de la Iglesia, como ya recogía el Real Decreto de 18 de noviembre de 1799 de Carlos IV⁶⁵². Esta enajenación fue suspendida por la Ley de 16 de julio de 1840 y no será una realidad hasta la posterior Ley de Espartero de 1841.

“Las Cortes, en uso de sus facultades, han decretado lo siguiente:

Art. 1º. Se suprimen la contribución de diezmos y primicias, y todas las prestaciones emanadas de los mismos.

Art. 2º. Todas las propiedades del clero secular en cualesquiera clases de predios, derechos y acciones que consistan, de cualquier origen y nombre que sean, y con cualquiera aplicación o destino con que hayan sido donadas, compradas o adquiridas, se adjudican a la nación, convirtiéndose en bienes nacionales.

Art. 3º. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los bienes pertenecientes a prebendas, capellanías, beneficios y demás fundaciones de patronato pasivo de sangre.”

(Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes..., o.c., Tomo XXIII, Madrid 1846, p. 100).

E)- Ley de 2 de septiembre de 1841 (Ley de enajenaciones de bienes del clero secular). Ley de Espartero.

Recoge las disposiciones del anterior real decreto de Mendizábal de 29 de julio de 1837. Se impone de nuevo la desamortización de bienes del clero secular y salen, por fin, a subasta, pues las riquezas del mismo no se pueden comparar, ni de lejos, con las del regular. En el artículo sexto se exceptúan de la enajenación los mismos bienes que ya nombraba el citado decreto de 1837, pero con un añadido: incluye las fundaciones de patronato de sangre activo. En realidad, la vigencia de esta ley fue escasa, ya que sólo estuvo en vigor durante tres años.

Artículo 1º. Todas las propiedades del clero secular en cualesquiera clases de predios, derechos y acciones que consistan, de cualquier origen y nombre que sean, y con cualquiera aplicación o destino con que hayan sido donadas, compradas o adquiridas, son bienes nacionales.

Art. 6º. Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos anteriores:

Primero. Los bienes pertenecientes a prebendas, capellanías, beneficios y demás fundaciones de patronato de sangre activo o pasivo.”

(Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes..., o.c., Tomo XXVII, Madrid 1842, pp. 614-615).

⁶⁵² “Que todo Patronato, que corresponda por razón de sangre, es laical, aunque recaiga en Eclesiástico, y la venta de las fincas toca á la jurisdicción Real ordinaria con exclusion de la eclesiástica”. *Novísima Recopilación*, Tomo I, Libro I, Título V, Ley XXIII.

Esta ley que proclama el principio de la desamortización eclesiástica declaró bienes nacionales y enajenables las propiedades de la Iglesia. El ya citado artículo 6º hace una excepción de la venta a los bienes de las fundaciones de patronato de sangre activo o pasivo; también excluye el precepto a las capellanías laicales o mercenarias, pero no a los de capellanías colativas no familiares, los cuales son incluidos en la desamortización ordenada por el Gobierno. El Real Decreto de 11 de marzo de 1843 aclaró las dudas que habían surgido sobre el tan citado artículo 6º de la ley de 1841, confirmando que se hallan comprendidas en la excepción todos los beneficios, prebendas, capellanías o fundaciones de patronato familiar activo o pasivo y las laicales, pero no se hallaban exceptuados los bienes de las capellanías de libre presentación y las llamadas “*de iure devoluto*”, por extinción de las familias a que pertenecieron. Es decir, que los bienes de las capellanías de patronato particular eclesiástico o de derecho común eclesiástico fueron incluidos en la desamortización:

“Convencido de la necesidad de fijar el verdadero sentido de las varias excepciones que comprende el art. 6º de la ley de 2 de septiembre de 1841, resolviendo por este medio las dudas suscitadas sobre su verdadera ampliación (...) he venido en decretar lo siguiente:

Art. 2º No se entienden comprendidos en la expresada excepción del párrafo 1º del art. 6º de la ley, los bienes de beneficios patrimoniales o fundaciones de patronato activo o pasivo de uno o más pueblos, o de la generalidad de sus naturales, ni tampoco los de capellanías de libre presentación y de las llamadas de iure devoluto, por extinción absoluta de las familias a que pertenecieron ambos patronatos...”

(Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes..., o.c., Tomo XXX, Madrid 1843, p. 118).

Los bienes rústicos enajenados al clero en este periodo desamortizador Mendizábal-Espartero, fueron el 100% de la superficie desamortizada en Logroño, el 95% en Valladolid, el 90% en Zaragoza, el 89% en Santander, el 81% en Cuenca, el 60% en Zamora y una cifra sensiblemente menor en Cáceres⁶⁵³.

Entre las consecuencias más importantes de esta desamortización hay que destacar la concentración de la propiedad en manos de unos pocos, la expulsión de los colonos de las tierras o cuanto menos la subida de los arrendamientos anuales, y finalmente el escaso rendimiento de la operación debido a las bajas tasaciones, a la falta de competitividad entre los compradores y a la admisión de la deuda pública por su valor nominal⁶⁵⁴.

La Ley de Espartero y las anteriores sobre bienes nacionales procedentes del clero estuvieron vigentes hasta el Real Decreto de 8 de agosto de 1844 que declaró suspendidas las ventas de los bienes del clero secular y las rentas derivadas de estos bienes se aplicaron al mantenimiento del culto y clero. El 3 de abril de 1845 se decretó

⁶⁵³ J. García Pérez, *Las desamortizaciones eclesiástica y civil en la provincia de Cáceres*, Cáceres 1994, p. 207.

⁶⁵⁴ J. Brines Blasco, *Reforma agraria y desamortización en la España del siglo XIX*, Estudios, Revista de Historia Moderna, nº 7, Valencia 1978, p. 145.

que los bienes del clero secular que no habían sido enajenados fuesen devueltos a sus antiguos propietarios.

“En atención a las razones que me ha expuesto el Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, he venido en decretar lo siguiente:

Artículo 1º. Se suspende la venta de los bienes del clero secular y de las comunidades religiosas de monjas, hasta que el Gobierno de acuerdo con las Cortes determinen lo que convenga.

Art. 2º. Los productos en renta de dichos bienes se aplicarán desde luego íntegros al mantenimiento del clero secular y de las religiosas.”

(Real Decreto de 26 de julio-8 de agosto de 1844. Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes..., o.c., Tomo XXXIII, Madrid 1845, p. 89).

“Artículo único. Los bienes del clero secular no enajenados, y cuya venta se mandó suspender por el Real decreto de 26 de Julio de 1844, se devuelven al mismo clero.”

(Real Decreto de 3 de abril de 1845. Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes..., o.c., Tomo XXXIV, Madrid 1845, pp. 132-133).

4.7.- La desamortización de Pascual Madoz.

Superior a cualquiera de las desamortizaciones anteriores fue la decretada durante el bienio progresista (1854-1856), en el mes de mayo de 1855, cuya vigencia, excepto el período comprendido entre 1856 y 1858, se prolongaría prácticamente hasta comienzos del siglo XX. Por el volumen de la venta se desprende que la mayor de las desamortizaciones decimonónicas, sin lugar a dudas y en contra de lo que tradicionalmente se ha venido sosteniendo, fue la del año 1855⁶⁵⁵.

4.7.1.- Ley General Desamortizadora de 1 de mayo de 1855.

En sesión de las Cortes de 3 de febrero de 1855 se formuló ya un plan extenso de desamortización. El 26 de marzo empezó la discusión del proyecto, finalizando con la aprobación de la ley en 1 de mayo. La primera nota distintiva es su carácter general, pues con esta ley se realizó una desamortización general de todos los bienes del clero, Órdenes Militares, cofradías, obras pías, beneficencia, del Estado, de los municipios (bienes de propios y comunes) y de otras “*manos muertas*” de menor entidad. De este modo, todos los bienes desamortizados por anteriores leyes o los declarados en venta por la ley de Madoz quedaban sometidos al régimen establecido en ésta⁶⁵⁶. Este es un hecho novedoso en la legislación desamortizadora, pues nunca se había realizado hasta entonces un planteamiento normativo general.

⁶⁵⁵ F. Simón Segura, *La desamortización española...*, o.c., pp. 165 y 166.

⁶⁵⁶ F. Tomás y Valiente, *El marco político de la desamortización...*, o.c., p. 151. V. Palacio Atard, *La España del siglo XIX...*, o.c., p. 293. M. González Ruiz, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España...*, o.c., p. 406. G. Rueda Hernanz, *El proceso de la desamortización de bienes...*, o.c., pp. 195-196. J. M. Antequera, *La desamortización eclesiástica...*, o.c., p. 237.

“Artículo 1º. Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes:

Al Estado.

Al clero.

A las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén.

A cofradías, obras pías y santuarios.

(...)

Y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya están o no mandados vender por leyes anteriores.

Art. 2º. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior:

5º Los bienes de capellanías eclesiásticas destinadas a la instrucción pública, durante la vida de sus actuales poseedores.”

(Colección Legislativa de España, Tomo LXV, Madrid 1855, pp. 5-6).

La venta de bienes eclesiásticos planteó serios problemas con la opinión pública al afirmar Madoz que los bienes de la Iglesia eran del Estado y que podía proceder a su desamortización inmediata sin tener que indemnizar; además, también se enfrentó a los eclesiásticos y con la Santa Sede al obviarse o incluso violarse el Concordato de 1851 que regulaba la materia, pues las disposiciones concordadas, por su carácter de pacto internacional, no pueden ser modificadas ni alteradas sin el previo consentimiento de los poderes concordantes. Pero también hubo otros problemas como los de carácter político que afectaron a la monarquía, pues la propia reina Isabel II se negó a sancionar la ley, aunque al final la firmó pero mostrando su oposición y rechazo a la misma.

La ley se completó con la Instrucción de 31 de mayo de 1855 dedicada a poner en práctica la citada norma. En 11 de julio de 1856 hubo una reforma de la ley, seguida de su correspondiente instrucción de la misma fecha, ampliando el precepto relativo a los bienes del clero:

Art. 3º. Se declaran comprendidos entre los bienes del clero, y se procederá a su venta, todos los pertenecientes o que se hallen disfrutando los individuos o corporaciones eclesiásticas, cualquiera que sea su nombre, origen o cláusulas de su fundación, a excepción de las capellanías colativas de sangre o patronatos de igual naturaleza; pero si sus productos constituyen la congrua sustentación de aquéllos en los términos expresados en el art. 8º de la ley de 15 de junio de este año, se emitirán a favor de cada uno de ellos inscripciones intransferibles nominativas de la renta del 3 por 100, en cantidad bastante a producir igual renta que la que actualmente perciben, cuyas inscripciones quedarán anuladas a la muerte de los mismos o cuando obtengan prebenda u otro beneficio eclesiástico.”

(C.L.E., Madrid 1856, Tomo LXIX, p. 146).

En la norma se exceptúan claramente los bienes de las capellanías colativas de sangre y las capellanías laicales de patronato activo o pasivo, pero se incluyen en la desamortización eclesiástica los bienes de capellanías colativas no familiares, corroborando lo expresado en el ya citado real decreto de 11 de marzo de 1843. Baste

un ejemplode su incidencia en estas últimas: en Extremadura se desamortizaron grandes cantidades de fincas pequeñas procedentes del clero secular que correspondían a instituciones de capellanías y obras pías, poco afectadas hasta entonces⁶⁵⁷. En la provincia de Cáceres se desamortizaron bienes rústicos de 271 capellanías, sin contar beneficos y otras obras pías⁶⁵⁸

La vigencia de esta ley desamortizadora alcanzó la segunda década del siglo XX, pues estuvo activa hasta 1924 con tres fases diferenciadas: de 1855 a 1856, terminando en esta primera fase el proceso desamortizador eclesiástico en algo más de un año, siendo decretada la suspensión de la desamortización de bienes del clero secular, al concluir el llamado bienio progresista, por decreto del gobierno de O'Donnell, el 23 de septiembre de 1856. Pocos días después el gobierno presidido por Narváez publicaba otro real decreto de 14 de octubre de 1856 suspendiendo la ley de 1 de mayo de 1855:

Artículo 1º. Se suspende, hasta que se resuelva lo que corresponda en la forma conveniente, la venta de los bienes del clero secular devueltos al mismo conforme a la ley de 3 de abril de 1845.”
(C.L.E., Tomo LXIX, Madrid 1856, p. 513).

“Conformándome con lo propuesto por mi Consejo de Ministros, vengo en decretar los siguiente:

Art. 1º. Se suspende, de hoy en adelante, la ejecución de la ley de desamortización de 1º de mayo de 1855.

Art. 2º. En consecuencia, no se sacará a pública subasta finca alguna de las que dicha ley ordenaba poner en venta, ni serán aprobadas las que se hallen pendientes.”

(C.L.E., Tomo LXX, Madrid 1856, p. 80).

Posteriormente se restableció la citada norma y estuvo vigente durante dos períodos, con un intervalo de tiempo de un año escaso, de 1858 a 1896 y de 1897 a 1924. En el primero se promulgó un Decreto de 2 de octubre de 1858, que restableció la ley general desamortizadora de 1855.

“Conformándome con lo propuesto por mi consejo de Ministros vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º. Los predios rústicos y urbanos de propiedad del Estado, lo del secuestro del ex-Infante D. Carlos, los de Beneficiencia e Instrucción pública, los de las provincias y propios y comunes de los pueblos, y los pertenecientes a manos muertas de carácter civil, declarados en estado de venta por la Ley de 1º de Mayo de 1855, continuarán enajenándose con arreglo a la misma ley y a la de 11 de julio de 1856.”

(C.L.E., Tomo LXXVIII, Madrid 1858, pp. 8-9).

En 7 de abril de 1861 se promulgó una ley que dispuso que los bienes eclesiásticos adquiridos antes de abril de 1860 (fecha en que se obligó a observar el Convenio celebrado con la Santa Sede en 1859) que no estuviesen exceptuados, continuarían enajenándose mediante la aplicación de la ley desamortizadora de 1 de mayo de 1855:

⁶⁵⁷ Cf. J. Merino Navarro, *La desamortización en Extremadura*, Madrid 1976, pp. 86-87.

⁶⁵⁸ Cf. J. García Pérez, *Las desamortizaciones...*, o.c., Apéndice II, pp. 218-234.

“Artículo 1º. Los bienes de la Iglesia que el Estado tiene derecho a adquirir por efecto de la permutación acordada en el convenio celebrado con la Santa Sede en 25 de agosto de 1859 continuarán enajenándose de esta manera: las fincas rústicas y urbanas con arreglo a las leyes de 1º de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856, y los censos según la de 11 de marzo de 1859.

Art. 2º. El producto de estas ventas se destinará:

Primero. Al reembolso y amortización de la Deuda pública con interés, en la forma que se establece por la presente ley.”

(C.L.E., Tomo LXXXV, Madrid 1861, p. 291).

Todavía en la década de los sesenta del agitado siglo XIX se aventuró un proyecto de ley desamortización, que fue presentado a las Cortes en fecha 5 de julio de 1869 para su discusión y posterior aprobación, la cual no se llevó a término. Dicho proyecto pretendía aclarar el artículo primero de la ley general desamortizadora de 1855 y extenderlo a las corporaciones eclesiásticas, pues en su exposición de motivos⁶⁵⁹ arremete contra dichas corporaciones, a pesar de que las mismas tenían derecho a adquirir y poseer bienes inmuebles y disponer de ellos libremente, además, las leyes desamortizadoras no podían aplicarse a los bienes desde el momento en que eran libres, independientemente de su poseedor y reafirma el sentido expropiador de la ley de 1855:

“Artículo único. Se declaran comprendidas en el artículo 1º de la ley de 1º de Mayo de 1855, y por tanto en estado de venta, todos los todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes a instrucción pública y beneficencia, hermandades, cofradías y obras pías de carácter benéfico, de cualquier clase que sean, esté o no expresamente prohibida la enajenación de los bienes por las respectivas fundaciones o estatutos, y aunque se consideren los patronos o administradores con facultades para venderlos.”

(Diario sesiones de las Cortes constituyentes. Tomo V. Apéndice tercero al número 118. Sesión del lunes 5 julio 1869, pp. 1 y 2).

En 9 de enero de 1875 se promulgó un Real Decreto que dispuso la devolución a la Iglesia de los bienes exentos de permutas, poniendo fin a más de cuarenta años de desamortización eclesiástica, y determinando la indemnización, constituida sobre Deuda pública consolidada al 3%, que el Estado ha de ceder a la Iglesia por el valor de una parte de los bienes vendidos por él después de la firma del Concordato de 1855. Los

⁶⁵⁹ “Sin embargo de ser tan clara la interpretación de la ley (de 1855)..., la adición propuesta y aceptada por las Cortes (se refiere al último párrafo del artículo 1º de la ley de 1855: y por último, cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores), ha sido causa de que se interprete en sentido diametralmente opuesto a la idea que presidió al dictarla, entendiéndose que bajo la denominación de manos muertas se exceptuaban de la venta los bienes de aquellas corporaciones que podían disponer de su propiedad. No es ciertamente esta la acepción de la voz mano muerta, ni nunca podrá admitirse atendiendo el espíritu de las leyes reformadoras (...). La ley de 1º de Mayo de 1855 y todas las disposiciones promulgadas con posterioridad, relativas a la desamortización, se refieren a la propiedad corporativa, contengan o no en los estatutos por que se rijan la prohibición de enajenar sus bienes (...). Por todas estas razones, y con el fin de evitar que las disposiciones vigentes acerca de la desamortización puedan interpretarse en un sentido contrario a su espíritu y tendencias, el Ministro que suscribe, tiene el honor de someter a la deliberación de las Cortes Constituyentes el adjunto proyecto de ley.”

bienes anteriores quedaban para siempre en poder del Estado, sin que nadie pudiese reclamarlos.

5.- CONSECUENCIAS.

Es imposible negar la importancia de la desamortización en la estructuración de la España contemporánea a la vista de los acontecimientos sociales y políticos que se han vivido y desarrollado con posterioridad.

La desamortización eclesiástica no supuso únicamente el cambio de régimen jurídico de los bienes amortizados, sino que conllevaba el cambio de titularidad dominical de sus propietarios. En concreto, a la Iglesia no sólo se le negó el derecho a adquirir nuevas propiedades, sino que se le negó también la posibilidad de conservar la titularidad de las que ya tenía que pasaron, en su mayoría, a ser bienes nacionales.

El pensamiento ilustrado que inspiró las corrientes progresistas españolas durante el siglo XIX consideró a la Iglesia como el obstáculo principal que se había de remover para modernizar la sociedad y liquidar el Antiguo Régimen, al modo y manera que lo había hecho, violentamente, la Revolución Francesa. Para ello, era necesario anular todo vestigio de poder eclesiástico, hasta desarraigar de la conciencia popular incluso la propia religión católica. No se dudó en organizar desórdenes y algaradas anticlericales que sirvieran de coartada y apoyo a los partidos progresistas para hacerse con el gobierno del Estado y aplicarse a la tarea de socavar los cimientos de la Iglesia, sin interrupción ni tregua.

En primer lugar, había que desarticular al clero regular, comenzado por la Compañía de Jesús y las Órdenes Militares. Seguiría después la supresión de la Inquisición. Luego le tocaría al clero secular⁶⁶⁰. Pero no era suficiente. Era necesario destruir el gran poder económico de la Iglesia que residía en su ingente patrimonio inmobiliario y las rentas de terceros que percibía: el diezmo.

A esta tarea de demolición de las estructuras de la Iglesia y del clero se dedicaron, sistemáticamente, como hemos visto, todos los gobiernos progresistas y liberales que hubo en España desde los albores del siglo XIX, y que presentaron el movimiento desamortizador como la gran solución a los males económicos de España, al tiempo que iban a *“abrir una fuente abundantísima de felicidad pública, vivificar una riqueza muerta, desobstruir los canales de la industria y de la circulación, ensanchar la patria,*

⁶⁶⁰ El número de personas que componían el estamento eclesiástico era de unas 203.200, de las cuales 95.200 pertenecían al clero secular y 108.000 al clero regular, según el censo oficial de 1803. En 1835 quedaban en total 118.000 individuos, de los cuales 65.000 correspondían al clero secular y 53.000 al regular. De los 3.000 conventos existentes se apoderó el Estado de 2.120. Entre 1836 y 1851 se desamortizó el 62% de lo que poseía el clero, quedando por vender el 38%. A fin de junio de 1851 se habían adjudicado 90.995 fincas del clero por un total de 3.273.676.230 reales. De 1855 a 1868 se vendieron 125.200 fincas del clero por un valor de 127.580.000 reales. En total, de 1836 a 1900 se desamortizaron unos 10 millones de hectáreas, lo que representaba el 20% del territorio nacional, es decir que de las cerca de 615.000 fincas desamortizadas por un valor de 11.308.936.000 reales, el 30% fueron bienes procedentes del clero. F. Simón Segura, *La desamortización española...*, o.c., pp. 71, 77, 149, 152, 154, 163, 232, 246, 252, 263 y 282.

crear nuevos y fuertes vínculos que ligen a ella”⁶⁶¹ y transformar la sociedad. En realidad la desamortización eclesiástica no fue otra cosa que una etapa en la lucha del Estado por someter a su control la riqueza y el poder político de la Iglesia⁶⁶².

Nada de lo anunciado ocurrió como se dijo. Los historiadores han podido constatar que, muy al contrario, la desamortización sólo sirvió para acumular más riqueza en las manos de los que ya eran ricos y empeorar la situación de las clases rurales campesinas, que fueron las más perjudicadas por el encarecimiento de las rentas y la desposesión de las tierras. Por tanto, parece claro que la desamortización no sólo fracasó en su intento de aliviar la Hacienda sino que enriqueció a determinados grupos interesados mediante el despojo de los bienes del clero, con sistemáticas y reiteradas violaciones al derecho y a la justicia⁶⁶³.

Una gran parte del ingente patrimonio histórico-artístico acumulado a lo largo de los siglos fue abandonado y terminó en la ruina casi absoluta. En la actualidad, la reconstrucción de dicho patrimonio artístico arruinado, destruido y dilapidado por la desamortización, sigue absorbiendo una considerable inversión que se está realizando, en una gran parte, gracias a las ayudas que se reciben de fondos internacionales.

En los sucesivos vaivenes que se registraron durante el proceso desamortizador se reconoció el derecho que tenía la Iglesia expoliada a recibir una justa compensación por el patrimonio que se le había arrebatado y, el Estado español contrajo el compromiso de mantener los gastos de culto y clero, que subsisten en la actualidad; aunque cierto sector radical español, históricamente, ha tratado de soslayarlos, reinterpretarlos o sencillamente incumplirlos, en toda ocasión que se le ha presentado.

⁶⁶¹ Exposición de Motivos del Real Decreto de 19 de febrero de 1836, en el que Juan Álvarez Mendizábal se dirige a la regente M^a Cristina de Borbón. Gaceta de Madrid de 21 de febrero de 1836. N. Ferrer y Jou, *Reales Decretos y Órdenes de S. M.*, o.c., p. 33.

⁶⁶² J. Fontana Lázaro, *Desamortización eclesiástica y reforma agraria liberal (España)*, en AA. VV, *De la Iglesia al Estado...*, o.c., p. 210.

⁶⁶³ V. Palacio Atard, *La España del siglo XIX...*, o.c., p. 220. En 1873 Francisco Pi y Margall, tras la doble experiencia de Mendizábal y Madoz, parecía reproducir las premonitorias palabras de Álvaro Flórez Estrada en 1836: “No se ha distribuido la propiedad todo lo que exigían los intereses de la libertad y el orden; y los colonos, en vez de sacar de la Revolución provecho, han visto crecer de una manera fabulosa el precio de los arrendamientos. Eran casi dueños cuando estaba la propiedad en manos de la Iglesia y la nobleza que, opulentas y estables, ni propendían al cambio de arrendatarios, ni tenían afán por estrujarlos; después han sido muy otras sus condiciones y su suerte. Así se explica que el nuevo orden de cosas haya tenido y tenga todavía en los campos tan escasos prosélitos”. F. Pi y Margall y F. Pi y Arsuaga, *Las grandes conmociones políticas del siglo XIX en España*, Barcelona 1932, tomo II, p. 127.

CAPÍTULO VII

EL PROCESO DESVINCULADOR

1.- INTRODUCCIÓN Y PRECEDENTES.

En el Antiguo Régimen con la acepción o término desvincular se hacía referencia a las licencias, autorizaciones y decretos que los tribunales concedían a poseedores de propiedades vinculadas para poder disponer de ellas cuando alegaban justa causa para poder disponer de bienes libres. Con estas autorizaciones de desvinculación se daba por finalizada la relación de sujeción que unía un bien concreto con un patrimonio vinculado, generalmente por vía de fundación familiar, ya fuese un mayorazgo, un fideicomiso, una capellanía (laical) o un patronato, sin que conllevara la extinción de uno ni de otro⁶⁶⁴.

Con la revolución liberal, al término se le dio un sentido más amplio, en el que hubo una firme voluntad política de finalizar con la propiedad privilegiada, como lo habían sido “las manos muertas”. Ello trajo consigo la confusión al identificar y emplear el término desamortizar para referirse al proceso desvinculador y a su legislación como una clase o subtipo de desamortización civil, sin reparar en que los mecanismos, procedimientos y leyes para acabar con una y otra fueron, en todos los aspectos, totalmente distintas.

En un sentido riguroso, la desvinculación sólo debe encaminarse a la desaparición legal de las figuras jurídicas anteriormente mencionadas como son los mayorazgos (vínculos), capellanías, patronatos y fideicomisos familiares, pero en ningún caso al procedimiento posterior con el que se fueron dividiendo los patrimonios antes vinculados.

Ya desde el siglo XVII una mayoría de economistas y arbitristas (que proponían planes financieros para solucionar los problemas del atraso económico de España) exponían de forma repetida y continuada los perjuicios que conllevaba el régimen de propiedad vinculada. Posteriormente los ilustrados españoles plantearon una reforma basada en que había una sociedad con una elevada proporción de recursos ociosos e inexplorados, tanto en tierras como en capital y trabajo. La escuela fisiocrática francesa y sus incondicionales seguidores españoles confluyen en Campomanes⁶⁶⁵ que

⁶⁶⁴ P. Marzal Rodríguez, *Algunas consideraciones sobre la desvinculación en España*, en *La desamortización civil en México y España (1750-1920)*, Margarita Menegus y Mario Cerutti, editores, México 2001, p. 221.

⁶⁶⁵ “El Pueblo, en el qual consiste la fuerza del Estado, debe igualarse en lo posible: esta igualdad no es factible, si todos los bienes se van vinculando; porque las personas ricas no los hallan libres para comprarles, puesto que todos van cayendo en manos-muertas, en aniversarios, vínculos-cortos, y Capellanías sueltas; estando gran parte de ellos incultos. Sus poseedores no los labran por sí, metidos a Caballeros, o hechos Clérigos; ni la tenuidad de su renta les da con que repararlos, si se arruinan los edificios, cercas, o ingenios que (h)aya en ellos, para hacerles fructificar. Estas vinculaciones cortas son muy destructivas del Estado, y van sacando un gran número de personas de la esteba, extinguiendo la población laboriosa del Reyno, la cultura de las tierras, el número de las cosechas, y sobre todo la más preciosa riqueza, que consiste en la multitud de habitantes”. P. Rodríguez Campomanes, *Tratado de la regalía de Amortización*, Madrid 1765, pp. 279-281.

abiertamente critica los mayorazgos y propone una reforma del sistema pero sin afectar la estructura básica de la sociedad estamental. Según ellos era necesaria e imprescindible esta reforma que permitiese valorar de forma justa el patrimonio territorial de la nación, pues consideraban la agricultura como la mayor fuente de riqueza.

A la labor secularizadora desarrollada por los primeros economistas del reinado de Carlos III se une un amplia corriente crítica de los privilegios nobiliarios y de los mayorazgos y toda clase de vínculos como las dotaciones de capellanías, las obras pías y otras fundaciones de carácter religioso que eran abundantes en el siglo XVIII, porque los bienes con que se dotaban quedaban exentos de tributación.

En 1783 la Sociedad Económica de Madrid convoca un concurso para el que escriba la mejor memoria dedicada a proponer remedios frente a las vinculaciones que, según el texto de la convocatoria, se decía que *“la experiencia acredita que la mayor parte de los bienes de vínculos y mayorazgos, como también los de patronatos, aniversarios y capellanías, se deterioran y aun quedan abandonados con perjuicio de todas las artes, de la agricultura y de la población y riqueza del reino”*⁶⁶⁶. El objetivo no era abolir las diferentes formas de vinculación, sino limitarlas y, sobre todo, encontrar una salida al endeudamiento progresivo de la Hacienda pública.

Gaspar Melchor de Jovellanos en su Informe sobre el expediente de la Ley Agraria, critica los costes sociales y económicos de la vinculación, entre ellos la ociosidad e inutilidad de los propietarios, las enormes extensiones o los pobres mayorazgos cortos, la imposibilidad de dar en enfiteusis los bienes vinculados, la imposibilidad de realizar arrendamientos a largo plazo sin respeto a los contratos anteriores con gran inseguridad de los colonos, concluyendo que significaba un grave detrimento de la economía nacional⁶⁶⁷.

Toda esta crítica general a la vinculación de patrimonios encontró una cierta traducción en un conjunto de disposiciones legales⁶⁶⁸ tendentes a limitar la

⁶⁶⁶ J. Sempere y Guarinos, *Historia de los vínculos y mayorazgos*, Madrid 1805, p. 348.

⁶⁶⁷ *“El mal que han causado los mayorazgos es tan grande que no bastará evitar su progreso, si no se trata de aplicarle otros temperamentos (...). Nada es más repugnante, que ver sin establecimiento ni carrera, y condenados a la pobreza, al celibato y a la ociosidad los individuos de familias nobles, cuyos primogenitos disfrutan pingües mayorazgos (...). Tan perniciosos son al estado los mayorazgos inmensos que fomentan el lujo excesivo, y la corrupción inseparable de él, como los muy cortos que mantienen en la ociosidad y el orgullo un gran número de hidalgos pobres (...). Otra providencia exige también la cusa pública, y es la de permitir a los poseedores de mayorazgos, que puedan dar en enfiteusis los bienes vinculados (...). Porque nunca será mas activo el interés de los colonos, que quando los colonos sean copropietarios, y quando el sentimiento de que trabajan para sí y sus hijos los anime a mejorar sus suertes y perfeccionar su cultivo (...). El sucesor del mayorazgo no tiene obligación de estar a los arrendamientos celebrados por su antecesor (...). Entre tanto semejantes opiniones hacen un daño irreparable a nuestra agricultura, porque reducen a breves períodos los arriendos, y por lo mismo desalientan el cultivo de las tierras vinculadas.* G. M. de Jovellanos, *Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley Agraria*, Madrid 1795, 210, 211, 213, 215, 217 y 218, pp. 73 y 75.

⁶⁶⁸ Cabe citar la Real Cédula de 14 de mayo de 1789, con prohibición de crear mayorazgos cortos (de menos de 3.000 ducados de rentas), el Real Decreto de 21 de agosto de 1795, que imponía una contribución del 15% sobre las nuevas vinculaciones de toda clase de bienes raíces y el Real Decreto de 19 de septiembre de 1798, en que Carlos IV concedió a los poseedores de bienes vinculados autorización para su venta con la obligación de depositar su producto líquido en la Caja de amortización con una renta

multiplicación excesiva de tales fundaciones y a abrir una pequeña pero importante hendidura para su desarticulación, paso a paso, a lo largo del tiempo.

Sin embargo, la solución definitiva para el crónico problema de las fundaciones, como para otras muchas instituciones del Antiguo Régimen, no es consecuencia de la política reformista de los gobernantes ilustrados del siglo XVIII, sino que estuvo condicionado por un complejo y largo proceso revolucionario, que empezó con la Guerra de la Independencia, según Maluquer de Motes y Bernet⁶⁶⁹.

2.- DECADENCIA Y CRISIS DE LA VINCULACIÓN.

2.1.- La Constitución de Bayona de 6 de julio de 1808.

Examinada y admitida la certeza por parte de los ilustrados del perjuicio de las vinculaciones y la idea contraria de Napoleón Bonaparte a la existencia de las mismas, con la invasión francesa se aceleraron las reformas, llevándose a cabo la creación y puesta en práctica de determinadas medidas desvinculadoras que fueron plasmadas en el texto liberal del Estatuto de Bayona, norma con la que Napoleón intentó atraer el respaldo del pueblo, al ser la primera constitución que insertaba una declaración de derechos individuales y un extenso programa de reformas.

El proyecto de constitución de la nueva monarquía española, la monarquía bonapartista, se presentó el 20 de junio de 1808, a la Diputación General de españoles reunidos en Bayona por convocatoria del mismo Napoleón. En sus artículos 118 a 122, dentro del Título XIII, se persigue un fin desvinculador y, en consecuencia, se limitan las vinculaciones existentes⁶⁷⁰.

En los artículos 118 a 120 se dispone que todas aquellas vinculaciones de bienes cuyo capital produzca una renta inferior a 5.000 pesos fuertes o superior a 20.000 quedarán extinguidas. En consecuencia, se desprende que los bienes que formen parte del capital y no sean necesarios o imprescindibles para obtener el mínimo y máximo de renta anterior, dejarán de corresponder al vínculo y, lo más importante, no estarán sujetos a la prohibición de disponer, por lo que los citados bienes adquirirán la condición de libres, entrando en el tráfico jurídico y pudiendo ser adquiridos por cualquiera interesado en ellos. Estos artículos no son aceptados sin discusión por las Cortes de Bayona. Se acusa de que los precitados artículos relativos a mayorazgos no están expresados con claridad y que debería limitarse la disposición del poseedor sobre los bienes desvinculados. Se añade, además, por varios diputados que no convenía

del 3%. *Novísima Recopilación*, Tomo V, Libro X, Título XVII, Ley XII; Tomo I, Libro I, Título V, Ley XVIII; Tomo IV, Libro VIII, Título III, Ley IX.

⁶⁶⁹ C. Maluquer de Motes y Bernet, *La fundación como persona jurídica...*, o.c., p. 24.

⁶⁷⁰ En el proyecto son los artículos 118 a 122, ambos inclusive. Como la Constitución sufrió determinadas modificaciones, los mismos pasaron a ser los números 135 a 139. Los artículos 118 y 120 establecen que todas las vinculaciones de bienes cuyo capital produzca una renta inferior a 5.000 pesos fuertes o superior a 20.000 quedarán automáticamente extinguidas. El artículo 119 dispone que todo poseedor de fideicomiso, mayorazgo o substitución con una renta anual de más de 5.000 pesos fuertes podrá pedir que dichos bienes vuelvan a la clase de libres. Y el artículo 122 recoge que en adelante no podrán vincularse bienes sino en virtud de concesión hecha por el Rey y por razón de servicios a favor del Estado. Dicha Constitución fue publicada en la Gaceta de Madrid de los días 27, 28, 29 y 30 de julio de 1808. *Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I*, o.c., tomo I, pp. 3-39.

tomar ninguna decisión sobre la cuestión del mayorazgo, sino que debería arreglarse en las primeras Cortes.

Pero, en realidad, no se excluye totalmente la vinculación, sino que se ve minorada en los bienes que la componen en su totalidad, pues la prohibición de disponer recae sobre un determinado número de bienes, los cuales seguirán afectos al fin para el que se había constituido. La situación social y política del momento no permitía un mayor avance, pues había que tener a favor a una parte de la nobleza.

Aunque es claro que este objetivo desvinculador con desafección de bienes y su posterior conversión en estado de libres encontró, como no podía ser de otra forma, cierta y hasta enconada resistencia, al alegar que las vinculaciones eran necesarias para el sostenimiento de la nobleza. Varios diputados presentaron un escrito destinado a defender los privilegios de la nobleza frente al proyecto de constitución, y en especial de las vinculaciones frente a los artículos 118 a 122.

El principal problema o escollo que encontraban quienes defendían las vinculaciones era el destino de los bienes, es decir, dónde iban a parar y en manos de quién. Se defendía el respeto absoluto al orden de suceder y preferentemente al derecho de primogenitura, norma que ha regido la mayoría de las vinculaciones, ya que si no existe una limitación en cuanto a la disposición de los bienes vinculados se llega a un fracaso de las expectativas de los llamados a la sucesión del poseedor actual. Este problema se plasmó en un dictamen pero no llegó a insertarse en el texto, idea que será de gran importancia para el complicado asunto de las vinculaciones en épocas posteriores.

En la constitución, promulgada en Bayona, las vinculaciones quedan comprendidas en varios artículos, por lo que se desprende, sin lugar a dudas, que se emprende el camino de la desvinculación de la propiedad, tal como se dictó en el proyecto, sin prestar ninguna atención a la dura oposición representada por la nobleza.

2.2.- La Constitución de 1812 y las Cortes de Cádiz.

La revolución liberal producida en el seno de una sociedad que mantenía una economía agraria tradicional tuvo como meta cambiar las relaciones sociales. Su formulación política más significativa del proyecto revolucionario en liberal fue la Constitución de Cádiz⁶⁷¹. Con ella se culminó un proceso caracterizado por la toma del poder por clases sociales nuevas, ajenas, hasta entonces, a la dominación política. Se impuso un nuevo poder que rompe las estructuras de la monarquía absoluta. Los dos derechos fundamentales expresados en la constitución eran la libertad y la propiedad, y ésta última imprescindible y necesaria para lograr la primera⁶⁷².

El medio de que se valdrán los revolucionarios para dar forma a sus demandas consiste en una redefinición del derecho de propiedad, de tal forma que su aplicación determine un estado de cosas conforme a sus intereses. Late el deseo de transformar la antigua propiedad privilegiada en un modelo totalmente nuevo. La revolución quería

⁶⁷¹ M. Artola Gallego, *Antiguo Régimen y revolución liberal...*, o.c., pp. 157-158.

⁶⁷² M. Peset Reig, *La desamortización civil en España*, en *La desamortización civil en México y España (1750-1920)*, Margarita Menegus y Mario Cerutti, editores, México 2001.

cambiar la sociedad en beneficio de los nuevos gobernantes, por lo que la propiedad fue el centro de aquella transformación. Este nuevo derecho de propiedad “*sagrado e inviolable*” combina la personalidad individual del titular y la libertad ilimitada en la capacidad de disponer. Toda situación que no se ajuste a ese doble condicionamiento no se justifica y, por consiguiente, debe desaparecer. Por no ser propiedad particular se negará a la Iglesia el derecho a ser propietario.

Como señala Suárez Verdaguer⁶⁷³, el fondo revolucionario y radical que informó el nuevo régimen político y que fue utilizado como herramienta contra la Iglesia ya había aflorado, aunque de forma tímida entre 1810 y 1812, cuando las confusas circunstancias y la generalizada desorientación permitió los ataques que, con el paso del tiempo, servirían para justificar las medidas manifiestamente antirreligiosas. El que la Constitución de 1812 declarase de forma explícita la catolicidad del Estado no era una verdadera prueba del espíritu religioso de aquellas Cortes, declaración que realmente se hizo en contra de las ideas de los diputados y en virtud de las circunstancias (el pueblo seguía siendo profundamente católico).

La Constitución de 1812 contiene entre sus elementos esenciales la garantía de la propiedad privada, que será libre y sin limitaciones, pero este principio exigía una obra legislativa para adaptar la sociedad a la nueva concepción del individuo y de la propiedad.

Respecto al programa desamortizador de las Cortes de Cádiz, al estar condicionado a una multitud de trámites administrativos, no tuvo ninguna incidencia práctica⁶⁷⁴.

Con motivo de la discusión del Proyecto de Ley de abolición de los señoríos, en 14 de junio de 1811, se señalaron por los diputados varias ideas y proposiciones que fueron debatidas y que se reducían a dos: prohibir las vinculaciones y que se restituyesen a su naturaleza de libres los bienes raíces vinculados (mayorazgos, patronatos y fideicomisos). Pero la cuestión se aplaza y vuelve a plantearse en la sesión de 2 de junio de 1813. En julio se nombra una comisión para el estudio del tema aludido, a consecuencia de la aprobación por las Cortes de dos proposiciones referentes a las vinculaciones. El 20 de septiembre se clausuran las Cortes extraordinarias sin haberse debatido el asunto. En la sesión del 18 de octubre de las Cortes ordinarias se leyó el informe de la comisión, que presentó un proyecto de ley, en que se establecía la supresión de las vinculaciones cortas (3.000 ducados de renta líquida) y las de las grandes (de 20.000 a 80.000 ducados); la libre disposición del poseedor actual con obligación de conservar y la prohibición de fundar en lo sucesivo. Pero dicho proyecto no llegó a discutirse si quiera, ya que Fernando VII había firmado en Valencia, en 4 de mayo de 1814, el decreto que anulaba los actos realizados por las Cortes, decretando la disolución de las mismas.

3.- EL FIN DE LA VINCULACIÓN.

⁶⁷³ F. Suárez Verdaguer, *Génesis del Concordato de 1851*, en *Ius Canonicum*, vol. III, Pamplona 1963, pp. 64-65.

⁶⁷⁴ M. Artola Gallego, *Antiguo Régimen y revolución liberal...*, o.c., pp. 175, 176 y 184.

Si al Congreso de Bayona y su constitución se le puede reconocer el mérito de ser las primeras cortes que toman una posición definida y clara a favor del principio desvinculador, a las Cortes del Trienio Liberal hay que reconocerles el mérito de haber sabido alcanzar y aplicar en toda su intensidad la desvinculación de la forma más absoluta, culminando de esta forma una fase del proceso de reforma iniciado tiempo atrás⁶⁷⁵.

3.1.- Ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820.

El decreto de las Cortes de 27 de septiembre de 1820, sancionado por el rey el día 11 del siguiente mes, suprimía todo tipo de vinculaciones de carácter familiar, convirtiendo los bienes afectados en propiedad libre y se prohibía para lo sucesivo fundar otras nuevas. El texto también prohibía a la Iglesia cualquier adquisición de bienes inmuebles.

Los principios cardinales de la norma eran: supresión de todas las vinculaciones, libre disposición por los poseedores de las mismas, reserva de la mitad de la vinculación al poseedor inmediato, mantenimiento de las vinculaciones en caso de litigios hasta posterior decisión judicial, subsistencia de las cargas sobre los bienes vinculados, imposibilidad de crear cualquier clase de vinculaciones, incluso eclesiásticas y prohibición de adquirir para las “*manos muertas*”⁶⁷⁶.

Es claro que esta ley convierte en libres los bienes vinculados pero no obliga a su venta, simplemente permite una libertad de enajenación hasta entonces prohibida. Aún así la norma es lo suficientemente confusa para admitir interpretaciones, como realmente ocurrirá. Su análisis detallado aparece más adelante.

3.2.- Ley de 28 de junio de 1821.

Mediante este decreto de Cortes de 19 de junio, luego publicado como ley, se aclaran algunos artículos de la ley desvinculadora anterior de 1820. En su primer artículo se modifica el 3º de dicha ley, extendiendo y ampliando las facultades de los poseedores que quedan autorizados para vender los bienes equivalentes a su mitad, eximiéndoles de la necesaria tasación de los citados bienes vinculados, siempre que el inmediato sucesor preste su consentimiento:

“El poseedor actual de bienes que estuvieron vinculados, podrá enajenar los que equivalgan a la mitad o menos de su valor sin previa tasación de todos ellos, obteniendo el consentimiento del siguiente llamado en orden. Prestado el consentimiento por el inmediato, no tendrá acción alguna cualquiera otro que pueda sucederle legalmente, para reclamar lo hecho y ejecutado por virtud del convenio de su predecesor”.

(Colección de los decretos y órdenes generales expedidas por las Cortes ordinarias de 1820 y 1821. Tomo VII, Madrid 1821, fol. 169).

Respecto al segundo artículo, ante un sucesor desconocido, la norma facilita la enajenación de los bienes mediante la prestación del consentimiento del síndico

⁶⁷⁵ C. Maluquer de Motes y Bernet, *La fundación como persona jurídica...*, o.c., p. 61.

⁶⁷⁶ Ibidem, pp. 89-90.

procurador (el del pueblo), como representante de la persona desconocida. Se dará el mismo caso si el inmediato sucesor está bajo la patria potestad del poseedor actual. Aquí se trata de proteger al sucesor y que no se traspasen los límites de lo facultado para la enajenación:

“Si el inmediato fuere desconocido, o se hallare bajo la patria potestad del poseedor actual, deberá prestar el consentimiento el Síndico Procurador del lugar donde resida el poseedor con arreglo al artículo 3º del decreto de 27 de septiembre, cuyo consentimiento prestarán igualmente por sus pupilos y menores los tutores y curadores, quines para el valor de este acto, y salvar su responsabilidad, cumplirán con las formalidades prescritas por las leyes generales del reino cuando se trata de un negocio de huérfanos y menores”.
(Ibidem, fol. 169).

En su 3º y último artículo se dispone que en caso de oposición a la venta de la mitad de los bienes por el siguiente llamado o los tutores o síndicos, se realizará la tasación que prescribe el artículo 3º citado de la ley de 11 de octubre de 1820. Pero si sólo quiere vender fincas de valor inferior a la mitad de los bienes, si hay oposición podrá solicitar la autorización del juez, aunque es potestativo, en el caso que expresa, acudir a la autoridad judicial para suplir el consentimiento del inmediato sucesor, en atención a que esa formalidad tiene por objeto garantizar eficazmente las enajenaciones; y siendo un derecho establecido a favor del poseedor, puede renunciar al mismo, toda vez que el derecho del inmediato sucesor queda siempre protegido si, por ventura, fuere perjudicado por los contratos que aquel celebrase respecto a la mitad de bienes reservados a éste.

“En el caso de que se opongan al consentimiento para la venta el siguiente llamado en orden, y los tutores o síndicos, tratándose de la enajenación íntegra de la mitad de los bienes, se cumplirá con la tasación general que prescribe la ley de 27 de septiembre; pero si solo se pretendiere vender una o más fincas, cuyo valor no alcance a la mitad, y hubiere igualmente oposición, podrá el poseedor ocurrir a Autoridad local, y comprobado que en el valor de otro u otras queda más de la mitad que le es permitido enajenar, se autorice la venta por el Juez y se proceda desde luego a ella”.
(Ibidem, fol. 170).

En las Cortes de 1823, celebradas en Sevilla por la amenaza del ejército francés enviado por la Santa Alianza, en la sesión del 24 de abril, aún llegó a pasar a la comisión de legislación un proyecto pendiente sobre el modo de llevar a efecto la supresión de vinculaciones que habría de incluir todos los supuestos representados desde la ley de 28 de junio de 1821. Pero en la última sesión, en 19 de septiembre en Cádiz, dicho proyecto todavía no había sido presentado por la comisión. El 1 de octubre, Fernando VII, desde el Puerto de Santa María, declara nulos y de ningún valor los actos del gobierno constitucional anterior.

3.3.- Real cédula de 11 de marzo de 1824.

Con el fin del gobierno constitucional de 1820-23 se derogaron todas las leyes del mismo, debido al nuevo gobierno de la segunda restauración del absolutismo. La norma

es fruto de la reacción y el rechazo contra el anterior proceso de desvinculación. Con su promulgación se reponen las vinculaciones y los mayorazgos a su estado precedente al periodo constitucional (a 7 de marzo de 1820), restituyéndose los bienes al poseedor actual de los mismos, según su artículo 1º:

“A consecuencia de la declaración de nulidad de todos los actos del Gobierno llamado constitucional, se reponen los mayorazgos y demás vinculaciones al ser y estado que tenían en 7 de marzo de 1820 y los bienes que se les desmembraron en virtud de las órdenes y decretos de aquel gobierno, se restituyan inmediatamente al poseedor actual de dichos mayorazgos o vinculaciones”.
(Decreto del rey nuestro señor don Fernando VII, Madrid 1824, Tomo VIII, pp. 258-260).

Esta norma mandó, en su artículo 3º, que se reintegrase el precio a todos los compradores a cargo del poseedor del vínculo que había enajenado los bienes o, en su defecto, por el poseedor inmediato que intervino o consintió la enajenación. Y, en su artículo 4º, estableció un derecho de retención sobre los bienes objeto de venta si no se hiciese el reintegro del precio.

En la disposición sexta de la norma también se establece un derecho de retención, pero en este caso a favor de quienes hubiesen efectuado mejoras necesarias en los bienes de las vinculaciones, y si no se le abonan las citadas mejoras podrá hacer suyos los frutos hasta cubrir el importe de las mismas.

En referencia a las instituciones denominadas “*manos muertas*” no aparece ninguna mención en la precitada cédula, pero si se considera que la legislación del periodo constitucional había sido derogada, la prohibición de adquirir establecida hasta entonces era ya inexistente.

Francisco Pacheco critica muy duramente esta cédula al decir que es una reacción extemada contra las leyes desvinculadoras, traspasándose “*todo término racional, y se puso con ella principio y fundamento a otra serie de reacciones, altamente perjudiciales a toda clase de intereses. Excediose pues visiblemente la ley, no sólo de lo que era interés del Estado, sino aun de lo que estaba en sus facultades. Hirió los sentimientos de moral, y arrojó nuevo desorden sobre una sociedad convulsa y aún trastocada. Fue, pues, ésta una disposición de guerra y de odio, en la que no se condieró sino que eran enemigos vencidos los que habían hecho las leyes de 20 y 21. Esta cédula arrebató a los compradores las fincas que habían sido de mayorazgo, sin concederles en muchos casos indemnización alguna*”⁶⁷⁷.

3.4.- Real Decreto de 23 de octubre de 1833.

Entre las disposiciones adoptadas de forma inmediata después de la Restauración en 1823, fue la anterior Real Cédula de 11 de marzo de 1824 sobre enajenaciones por título oneroso de bienes vinculados. Esta norma, que había repuesto de nuevo los bienes vinculados a su estado anterior al periodo constitucional con la restitución de los bienes a su poseedor actual, es posteriormente derogada por este real decreto, publicado al mes

⁶⁷⁷ J. F. Pacheco y Gutiérrez Calderón, *Comentario a las leyes de desvinculación*, Madrid 1849, I, pp. 85-86.

escaso de la muerte de Fernando VII, al tener en cuenta los intereses que se habían conculcado y que reclamaban, desde hacía tiempo, una digna reparación, y dice lo siguiente:

“He tenido por bien mandar (...) que quedando sin efecto la mencionada Real cédula de 11 de marzo de 1824 en lo que toca a las enajenaciones por título oneroso, me proponga el Consejo los medios de reducir a términos de conciliación, de justicia y de equidad las restituciones que en virtud de aquella se hayan efectuado hasta el presente con daño de los compradores y lucro de los vendedores o de los que hayan sucedido en los mayorazgos.”

(Reales Decretos, órdenes y reglamentos del rey nuestro señor don Fernando VII y de la reina su augusta mujer, tomo XVIII, Madrid 1834, pp. 262-263).

Esta norma, como ya se ha comentado, deja sin efecto la real cédula en lo concerniente a la regulación del derecho de reintegro del precio de los bienes vinculados enajenados y restituidos, por dicha disposición al mayorazgo. Se encarga al Consejo real la proposición de los medios para reducir a términos de conciliación las restituciones que se hayan llevado a cabo, en los diez años transcurridos, con perjuicio para los compradores y lucro para los mayorazgos. Efecto de todo ello será la posterior ley de 1835.

3.5.- Ley de 9 de junio de 1835.

A pesar de la presentación de una petición de varios procuradores, sobre abolición de mayorazgos y vinculaciones, en las Cortes, en una sesión de fecha 30 de octubre del año anterior⁶⁷⁸, la legislación desvinculadora fue nuevamente atacada por esta ley, complementaria de la anterior cédula de 1824. Reintegra a los compradores los bienes vinculados que se enajenaron mediante el Decreto de las Cortes de 27 de septiembre de 1820. No derogó dicha cédula, pero reparó algunos de los perjuicios causados y asentó el derecho de quienes habían devuelto dichos bienes a que recibiesen de forma íntegra el precio pagado en su adquisición más un 3% de intereses sobre ese precio. Su artículo más significativo es el segundo al asegurar el pleno dominio de los bienes a los compradores que no se habían despojado de éstos.

“Artículo 1º. Los compradores de bienes vinculados que se enajenaron en virtud del decreto de las Cortes de 27 de septiembre de 1820, si no hubiesen sido ya reintegrados, lo serán en el modo que expresan los artículos siguientes.

Art. 2º Los compradores de bienes vinculados que no han llegado a desprenderse de ellos quedan asegurados en su pleno dominio.

⁶⁷⁸ En dicha proposición se hablaba de que las vinculaciones eran instituciones opuestas “a nuestra antigua legislación, dañosa a las familias y perjudicialísima a la agricultura y población (...) y se conculcan y huellan los derechos mas sagrados de la naturaleza, y se introduce en las familias el cisma y la división ¿Y qué diremos de los males que causan las vinculaciones a la agricultura? ¿Por qué vemos tantos terrenos mal cultivados, y aun algunos enteramente eriales? Porque casi todas las tierras están amortizadas y acumuladas en pocas manos. Cualquiera que haya recurrido nuestras provincias habrá notado, con dolor y asombro, el efecto de las vinculaciones. El gobierno ha reconocido los perjuicios de semejante institución, pero no quiso aplicar el remedio verdadero”, en palabras de los procuradores firmantes de la petición. *Diario de las sesiones Cortes*. Estamento de procuradores, nº 70, p. 608. *El Eco del Comercio*, nº 184, de 31 de octubre de 1834. BNE. Hemeroteca Digital.

Art. 3º Los compradores de dichos bienes que los hubiesen devuelto a virtud de la Real cédula de 11 de marzo de 1824, tienen derecho a percibir íntegro el precio por el que los habían adquirido con el rédito de un 3 por 100 a contar del día de la devolución.”

(Decretos de la reina nuestra señora doña Isabel II, tomo vigésimo, o.c., p. 253-254).

En su primer artículo se utiliza la palabra “reintegrar” y es la señal clara y evidente de lo que indica la ley, tanto en su espíritu como en su voluntad. Aquí no se ordena ni propone la devolución de los bienes que fueron comprados durante el trienio, sino la reintegración de éstos, por cualquier medio. Por tanto, la idea de este artículo es sólo reintegrar, estableciéndose dos principios o fundamentos: primero, que los compradores no tienen nada que reclamar, si estuviesen reintegrados en sus bienes; segundo, los que no lo estuviesen, tendrán que ser resarcidos sin excepción por los medios que indican los artículos 2º y 3º. Pero cabe señalar que hay una contraposición, al menos aparente, en el artículo 2º al dejar los bienes en poder de los que compraron, lo cual no es ciertamente reintegrar, sino conservar.

En fin, la norma gira siempre sobre los mismos supuestos, es decir, todos sus artículos tienden a establecer reglas que compensen de forma proporcionada los perjuicios causados por la cédula de 1824. Se declara (artículo 5º) el derecho del comprador a recobrar los bienes restituidos al vínculo si en el plazo de un año no resulta reintegrado en los derechos que se le reconocen; el derecho del poseedor a disponer como libres los bienes si realiza la reintegración con dinero propio (artículo 7º); y el derecho del comprador del vínculo a repetir contra los bienes del poseedor (artículo 8º). Es decir, que esta ley supone de forma indirecta la desvinculación de los bienes que permanecían en la propiedad del comprador o que éste recuperaba si no se le reintegraba el precio, y de los bienes que el poseedor del mayorazgo conservaba.

3.6.- Real Decreto de 30 de agosto de 1836.

En el breve período político intermedio entre el absolutismo, que finalizó con la muerte de Fernando VII, y el restablecimiento del régimen constitucional, que tuvo lugar con la promulgación de la Constitución de 1837, faltó el empuje necesario para la solución, más bien radical, de renovar el sistema desvinculador de 1820, y, como consecuencia, sobrevino la reaparición de las ideas de absoluta condena de las vinculaciones, en virtud de las cuales se promulgó esta norma. No sólo había desaparecido la necesidad política de la vinculación, sino que con la revolución de 1836 volvían a ser posibles las doctrinas de la ley desvinculadora.

Siendo presidente del Consejo de Ministros José María Calatrava, se publica este decreto que restablece la ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820, por lo que los bienes vinculados se consideraron de nuevo como absolutamente libres, reponiéndolos al estado en que se encontraban el 7 de marzo de 1820, y decretando la plena validez y total eficacia de las transacciones y convenios realizados al abrigo de la ley de 9 de junio de 1835, con el siguiente argumento, que dice así:

“Deseando proporcionar desde luego a la Nación las grandes ventajas que deben resultarle de la desamortización de toda clase de vinculaciones, he

venido, a nombre de mi augusta Hija la Reina Doña Isabel II, en decretar lo que sigue:

Iº Se restablece en toda su fuerza y vigor el decreto de las Cortes de 27 de Septiembre de 1820, publicado en las mismas como ley en 11 de Octubre del mismo año, por el que quedaron suprimidas las vinculaciones de toda especie, y restituidos a la clase de absolutamente libres los bienes de cualquiera naturaleza que las compongan.”

(Decretos de S. M. la reina doña Isabel II, tomo vigésimo primero, o.c., p. 363).

En primer lugar, es curiosa e interesante la redacción del preámbulo, pues no distingue de una forma rigurosa y clara entre desamortización y desvinculación, más bien las confunde o las mezcla. No es extraño, ya que será una constante a lo largo de toda la legislación decimonónica liberal sobre desamortización de la propiedad eclesiástica y sobre la desvinculación de mayorazgos.

En su artículo 2º se expone que se restablecen todas las aclaraciones a la ley de 1820 hechas por las Cortes que, aunque publicadas en casos particulares, se dieron con carácter general, pues no podía ser de otra manera, ya que formaban un todo, un verdadero conjunto con la citada ley. Este artículo lo que hace es confirmarlas en cuanto tienden a facilitar el cumplimiento de la misma ley y van unidos a ella:

“Quedan asimismo restablecidas las aclaraciones relativas a la desvinculación, hechas por las Cortes en 13 y 19 de mayo de 1821, y en 10 de junio del mismo año”.

(Ibidem, p. 364).

En su artículo 3º restablece la ley de 1820, pero la necesidad de una ley aclaratoria y que proporcione fuerza y vigor a este decreto se retrasará hasta 1841 debido al enfretamiento y antagonismo durante estos años, fiel reflejo de los conflictos de intereses sobre la forma de resolver las cuestiones de los bienes vinculados, su titularidad y su propiedad privada libre, todo ello por la variada serie de supuestos que habían surgido debido a las oscilaciones del proceso desvinculador desde 1820:

“La ley restablecida por este decreto principiará a regir desde la fecha del mismo”.

(Ibidem, p. 364).

La mayor censura y crítica a este decreto se encuentra en que no podía restablecer de forma legal la ley de desvinculación de 1820 y, por lo tanto, seguía derogada. Y todo ello debido al principio de jerarquía normativa, pues las leyes no pueden restablecerse sino por los mismos medios con que se han formado y luego promulgado. Se exigía, y no ocurrió, la concurrencia del Congreso y el rey para este acto legislativo, por lo que la publicación del precitado decreto es un exceso del poder ejecutivo, por lo que no tiene ninguna fuerza ni valor. Son de esta opinión Francisco Pacheco y Gutiérrez Fernández que comenta: *“El acto de restablecer las leyes de desvinculación nunca había sido un suceso ordinario; pero fue más que un acontecimiento, a muchos hasta les pareció un*

*escándalo el que se restableciesen por un simple Real decreto. De todas partes se levantaron impugnaciones dirigidas más que al fondo, a la forma de esta medida”*⁶⁷⁹.

En conclusión, los años posteriores a este decreto se caracterizaron por un cumplimiento irregular. Como se ha podido apreciar, los defensores de la propiedad vinculada se defendieron alegando la inconstitucionalidad de la norma. A mayor abundamiento, a las Cortes constituyentes de finales de 1836 llegaron numerosas quejas de particulares sobre mayorazgos al no haberles dado satisfacción la disposición vigente, al no alcanzar este decreto una aplicación general.

3.7.- Ley de mayorazgos y vinculaciones de 1841.

En 26 de mayo de 1841, el ministro de Gracia y Justicia presentó un proyecto de ley de vinculaciones y tras ser aprobado en 29 de junio, se remitió con fecha 12 de julio al Senado, leyéndose el dictamen de la comisión de la cámara alta el 20 de julio de 1841, procediéndose a su discusión los días 27, 28, 29 y 30 julio. El 9 de agosto es aprobada la redacción definitiva dada por el Senado. La redacción definitiva ocurre el 14 de agosto, siendo aprobados todos los artículos y sancionada y promulgada la ley, pendiente desde 1836, en 19 de agosto por el general Espartero.

Esta ley vino a declarar válido todo lo realizado según la ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820 y posteriores aclaraciones efectuadas hasta el primero de octubre de 1823. En consecuencia, da plena y total validez en su condición de dueños a los que ostentaron mayorazgos y bienes vinculados como poseedores y a todos los actos de dominio que realizaron. No se trataba de realizar ninguna decisión nueva sobre la desvinculación, sino de aclarar a quién pertenecía la propiedad de los bienes enajenados.

“Artículo 1º. Las leyes y declaraciones de la anterior época constitucional sobre supresión de mayorazgos y otras vinculaciones que están válidamente en observancia desde 30 de agosto de 1836 en que fueron restablecidas, continuarán en vigor sólo en la Península e islas adyacentes.

Artículo 2º. Es válido y tendrá cumplido efecto todo lo que se hizo en virtud y conformidad de dichas leyes y declaraciones desde que se expidieron hasta 1º de octubre de 1823. Serán respetados, y se harán efectivos los derechos que en aquel período se adquirieron por lo establecido en las mismas, del modo que se expresará en los artículos siguientes”.

(Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes ordinarias de 1820 y 1821. Tomo XXVII, Madrid 1842, p. 545).

El primer artículo es, en realidad, una satisfacción que se otorga al principio de legalidad, vistas las críticas recibidas por el decreto de 1836 desde que se publicó, los legisladores le dan con la redacción de este precepto validez solemne. Se usa aquí la expresión “*válidamente en observancia*”, en vez de emplear “*legalmente*”, pues entre legal y válido hay diferencias considerables, pues la primera es más estricta y severa

⁶⁷⁹ J. F. Pacheco y Gutiérrez Calderón, *Comentario a las leyes de desvinculación*, o.c., pp. 130-131.B. Gutiérrez Fernández, *Códigos o estudios fundamentales...*, o.c., p. 372.

que la segunda. Así se salva la cuestión del decreto de agosto de 1836 y lo establecido en su articulado.

En el caso del artículo 2º se aprecia que no pudiendo sostenerse por absoluta la primera parte, se tuvo que limitar con la segunda, pero se hizo con poco acierto, pues se contradicen las dos. Empieza declarando válido lo hecho en virtud de las leyes desvinculadoras y a continuación expone que los derechos que produjo la legislación anterior se harán efectivos, no por la ley común, sino de forma excepcional a través de los siguientes artículos. En este artículo lo que se hace es proclamar como principio, no universal, pero sí general la validez de los actos producidos por la leyes del período constitucional, salvo cierto número de casos.

Los artículos anteriores hasta el 5º, a excepción del 4º que es genérico, hablan de las adquisiciones de bienes vinculados y de los derechos obtenidos en ellos por contratos que sus poseedores otorgaran. En el 6º se aborda otra cuestión distinta, pues trata de las sucesiones respecto a los bienes vinculados, considerando que los herederos de los poseedores que compraron bienes vinculados que hubiesen fallecido antes del 1º de octubre de 1823, tendrán dichos bienes como libres.

“Art. 6º. Se entregarán a los herederos testamentarios o legítimos de los mismos poseedores y a los legatarios, los bienes que respectivamente les correspondieran de la mencionada mitad, si dichos poseedores fallecieron antes del 1.º de Octubre de 1823”.

El artículo 7º se refiere a la aplicación de las disposiciones anteriores de esta ley a la mitad de los bienes vinculados reservados a los inmediatos sucesores. El 8º trata de los que debiendo recobrar los bienes de que fueron privados por decreto de 1º de octubre de 1823 y cédula de 11 de marzo de 1824 o entrar en su posesión, no podrán reclamar los frutos y rentas desde la primera fecha hasta la publicación de esta ley. El 9º es otra excepción, como el anterior, al artículo 2º, y dice que los poseedores fallecidos entre el 11 de octubre de 1820 y 30 de agosto de 1836 no transmitieron ningún derecho hereditario respecto a los bienes vinculados. El 10º indica que los que sucedieron en bienes vinculados entre 1820 y 1823 y hubiesen fallecido posteriormente hasta la anteriormente citada fecha de 1836, no transmiten ningún derecho a suceder en los bienes, y hace una excepción al excluir a los herederos de los adquirientes de bienes vinculados durante el mismo período. El 11º declara válidas las enajenaciones con arreo a su antiguo derecho especial y su producto, si no se empleó en mejorar el mayorazgo, se imputará al vinculista, como parte de su mitad libre. El artículo 12º es otra excepción, en este caso al artículo anterior, en el que se excluyen las enajenaciones de bienes que puedan recobrar otros interesados. El 13º declara válidas y subsistentes las adquisiciones que se hayan hecho con permuta, subrogación u otro título. El 14º declara válido y debe cumplirse todo lo realizado con la ley de 1835. El siguiente artículo, el 15º da un derecho de reclamación de desperfectos y mejoras a los poseedores de fincas vinculadas y que deben entregarse. En el artículo 16º se respetan los pagos de viudedades tal como habían sido estipuladas en capitulaciones matrimoniales u otros instrumentos. Siguiendo el breve análisis de los artículos de la ley, le corresponde el turno al 17º el cual permite a los poseedores la consignación a sus cónyuges, en concepto de viudedad, hasta la cuarta parte de la renta de la mitad de los bienes de libre disposición. El 18º manda el cumplimiento de las consignaciones de

viudedad referidas en el artículo 16º, pero es una excepción a este último precepto citado, siendo responsables los bienes que existían en la vinculación, menos los que deban entregarse a otros interesados,; pero cuando se dé esta disminución, se disminuirá proporcionalmente la cantidad consignada. El penúltimo artículo se refiere a las pensiones de alimentos y procede la misma reducción y por causas iguales que en el artículo anterior. El último artículo es una disposición derogatoria de todas las leyes, decretos u órdenes contrarias a la presente ley.

Hasta aquí los principales rasgos y características de esta definitiva ley de supresión de los vínculos y mayorazgos, con la cual culmina todo el proceso desvinculador. Así quedó refrendada legalmente la abolición de la propiedad vinculada, medida que se impondrá con carácter irreversible. Pero según expone Clavero⁶⁸⁰, tras esta ley, la jurisprudencia e incluso la doctrina intentarían mantener, frente a la citada norma, la vigencia del régimen vincular, al menos respecto de los bienes sobre los que no tenía, el poseedor actual, facultad de disposición alguna. También sobre el derecho vincular, siendo admitido como alegación para la reivindicación de bienes vinculados. Esta línea o tendencia de la jurisprudencia y la doctrina durará algunas décadas.

⁶⁸⁰ B. Clavero Salvador, *Mayorazgo. Propiedad feudal...* o.c., p. 394.

CAPÍTULO VIII

LIBERALISMO Y LEGISLACIÓN SOBRE CAPELLANÍAS. LEYES DESAMORTIZADORAS Y DESVINCULADORAS

1.- LEGISLACIÓN REGALISTA.

Como anteriormente se ha dicho, las políticas regalistas de los monarcas españoles se apoyaban, de alguna forma, en argumentos más o menos débiles que justificaban la intromisión del poder regio en materias eclesiásticas, sobre todo en los beneficios y las capellanías. Sobre las capellanías, al lado de un aparato teórico doctrinal ilustrado de fundamentación general⁶⁸¹, los postreros monarcas absolutos en España llegaron a justificar las medidas reguladoras sobre estas fundaciones en el perjuicio que causaban a la economía nacional, al ser bienes que pasaban a sustraerse del tráfico.

Con Carlos III, monarca ilustrado, se ordenó por Real Resolución de 10 de marzo de 1763⁶⁸² que en adelante no se admitiesen instancias de manos muertas para la adquisición de bienes. También el conde de Floridablanca, en su ya citada Instrucción reservada para la dirección de la Junta de Estado se quejaba de “*los perjuicios principales de la amortización*”, ensañándose, sobre todo, con las capellanías⁶⁸³:

“El menor inconveniente, aunque no sea pequeño, es el de que tales bienes [los amortizados] se sustraigan a los tributos; pues hay otros dos mayores, que son, recargar a los demás vasallos, y quedar los bienes amortizados espuestos a deteriorarse y perderse, luego que los poseedores no puedan cuidarlos o son desaplicados o pobres, como se experimenta y ve con dolor en todas partes; pues no

⁶⁸¹ El ilustrado Campomanes, uno de los principales teóricos del regalismo, justifica su posición contraria a las las fundaciones y capellanías, y aboga por limitarlas y prohibir su fundación a no ser que se concedan bajo especial licencia real. Recoge en su famoso Tratado un discurso de fray Ángel Manrique, obispo de Badajoz, fechado en 1624, donde se dice que se instituían gran cantidad de capellanías y otros beneficios y que su número resulta excesivo. Campomanes, apoyándose en dicho discurso arremete diciendo: “*No se han de confundir los tiempos. Aquellos en que los Conventos, las Capellanías, y las adquisiciones de las gentes de mano-muerta eran cortas y moderadas, cosa santísima fue permitírselas; y aun favorecerlas y privilegiarlas en remuneración de su ejemplo, de sus sagrados ministerios, y de la necesidad, que tenían para su dotacion de estos fondos. Desde que el número y las rentas se multiplicaron excesivamente... empieza a hacerse gravamen intolerable, lo que antes fue justísimo privilegio*”. P. Rodríguez Campomanes, *Tratado de la regalía de Amortización...*, o.c., pp. 254, 257, 260 y 275. En otra de sus obras es más mordaz: “*Los beneficios simples hoy sirven para mantener zánganos en la Iglesia. Los simples capellanes, especialmente de memoria de sangre para parientes, son en un crecido número, por lo regular faltos de letras, viven a su libertad, no ejercitan las funciones sacerdotales casi en utilidad del prójimo y tal vez son negociadores. Convendría mucho ir suprimiendo estas memorias...*”. P. Rodríguez Campomanes, *Bosquejo de política económica española delineado sobre el estado presente de sus intereses*, Madrid 1984, Biblioteca de la literatura y el pensamiento hispánicos, vol. 67, p.46. También Jovellanos critica las capellanías y beneficios simples: “*¿qué de capellanías, patronatos, aniversarios, memorias, y obras pías no se fundaron, desde que las leyes de Toro, autorizando las vinculaciones indefinidas, presentaron a los testadores la amortización de la propiedad como un sacrificio de expiación?*”. G. M. de Jovellanos, *Informe de la Sociedad Económica...*, o.c., p. 62.

⁶⁸² *Novísima Recopilación*, Tomo I, Libro I, Título V, Ley XVII.

⁶⁸³ A. Muriel, *Gobierno del señor Rey Don Carlos III o Instrucción reservada...*, o.c., XII, p. 124.

hay tierras, casas, ni bienes raíces, más abandonados y destruidos que los de capellanías y otras fundaciones perpetuas, con perjuicio imponderable del Estado.”

Mediante Real Orden de 1778 y su posterior Instrucción, se creó la Junta General de Caridad y la erección en cada parroquia de una congregación caritativa para el socorro de los pobres, aplicándose a ellas los fondos de las obras pías, entre las cuales estaban las capellanías, salvando el derecho de patronato, aunque se limitaría dicho derecho cuando no se cumpliesen los fines propios de las fundaciones, al menos en las laicales, ante *“patronos omisos, o que abusan de sus facultades”*⁶⁸⁴

Ya con el reinado de Carlos IV, en 1794 se presentó, por encargo del superintendente de la Real Hacienda, Diego de Gardoqui, una memoria⁶⁸⁵ que luego sería elevada a Godoy, en la se proponía de forma clara la enajenación de parte de los bienes raíces eclesiásticos, entre ellos las capellanías, y la imposición del capital de su venta en la Real Hacienda al rédito del 3%, considerando que beneficiaría a las instituciones afectadas, ya que las capellanías eran causantes, en buena medida, de la decadencia del clero. Esta memoria tuvo un influjo decisivo en la normativa desamortizadora impulsada por Godoy.

A continuación, Carlos IV, a través del Real Decreto de 20 de febrero de 1796⁶⁸⁶, ordenó que en adelante no se fundasen capellanías sin licencia real. Esta disposición fue publicada como aclaración al Decreto de 28 de abril de 1789⁶⁸⁷ que había prohibido fundar mayorazgos y anulaba la prohibición perpetua de enajenar bienes raíces, debido a *“los males que dimanar de la facilidad que ha habido en vincular toda clase de bienes perpetuamente, abusando de la permission de las leyes, y fomentando la ociosidad y soberbia de los poseedores de pequeños vínculos o patronatos, y de sus hijos y parientes, y privando de muchos brazos al Ejército, Marina, agricultura, comercio, artes y oficios”*. Pero aquí no se mencionaba a las capellanías, pero en el citado Real Decreto de 1796 ya se incluye a las mismas al decir:

“A fin de evitar dudas en la inteligencia de la cláusula del decreto de 28 de Abril de 1789, que dice, «ni prohibir perpetuamente la enajenación de bienes raíces o estables por medios directos ó indirectos»; declaro, se deben entender comprendidas en ellas las Capellanías, y cualesquiera otras fundaciones perpetuas, sin que se puedan hacer, no precediendo licencia mía a consulta de la Cámara, ni con otros bienes que los que se expresan en dicho decreto por lo respectivo a los mayorazgos.”

Como se puede apreciar en dicho texto no hace ninguna diferencia entre las distintas clases de capellanías, con lo que se prohibía tanto la fundación de las laicales como de las colativas, por lo que la facultad de los particulares de fundar nuevas capellanías quedaba completamente anulada.

⁶⁸⁴ Colección de pragmáticas, cédulas, provisiones, autos acordados, y otras providencias generales expedidas por el Consejo Real en el reinado del señor don Carlos III, Madrid 1803, fol. 342 y ss.

⁶⁸⁵ Memoria redactada por Bernabé Portillo, empleado de la Real Hacienda, en 14 de agosto de 1794, llamada *Discurso sobre la elección de los recursos menos gravosos para atender a las actuales urgencias de la guerra y sobre proporcionar los grandes fondos necesarios para hacerla con vigor*. AHN, Estado, legajo 3212. Cf. M. Frieria Álvarez, *La desamortización de la propiedad de la tierra...* o.c., pp. 73-74.

⁶⁸⁶ *Novísima Recopilación*, Tomo I, Libro I, Título XII, Ley VI.

⁶⁸⁷ En dicho Decreto se prohibía la fundación de mayorazgos y la perpetuación de bienes raíces sin poder enajenarlos. *Novísima Recopilación*, Tomo V, Libro X, Título XVII, Ley VI.

Esta disposición no incumbía a las capellanías ya existentes, pero sí les afectó un Real Decreto del año anterior, de 21 de agosto de 1795⁶⁸⁸ en el que Carlos IV impuso una exacción del 15% en relación con todos los bienes que se adquiriesen en el futuro que se destinaría a extinguir los vales reales.

Pero el primer ataque a las capellanías fue el Real Decreto de 19 de septiembre de 1798⁶⁸⁹, citado anteriormente, donde se autorizaba la enajenación de bienes raíces de manos muertas (hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos) y debiendo depositarse su producto líquido en la Caja de amortización. Esta enajenación era potestativa para el caso en que en los establecimientos o fundaciones hubiese un patronato activo o pasivo de sangre. Sobre las capellanías colativas no se ordena nada pero se invitaba a los obispos a que *“baxo de igual libertad que en los Patronatos de sangre y Obras pías laicales, promuevan espontáneamente, por un efecto de su zelo por el bien del Estado, la enagenacion de los bienes correspondientes á Capellanías colativas ú otras fundaciones eclesiásticas; poniendo su producto en la Caxa de amortización con el tres por ciento de renta anual, y sin perjuicio del derecho del Patronato activo y pasivo, y demas que fuere prevenido en las fundaciones y erecciones de dichos Beneficios”*⁶⁹⁰.

Es curioso y no debe obviarse cómo se respetan los bienes de las fundaciones laicales donde había derechos de naturaleza, es decir, patronatos de sangre, y, por otra parte, cómo se reconoce a las capellanías colativas su carácter eclesiástico y benefical. Es esta distinta naturaleza la que lleva a un trato diferenciado en el Real Decreto, invitando y no ordenando a los obispos a que enajenen los bienes de las capellanías. Es decir, que las capellanías colativas o eclesiásticas eran de venta voluntaria en pública subasta junto a los patronatos de sangre (activos o pasivos), pero las capellanías laicales o patronatos de legos eran de venta obligada y forzosa. Aquí se respeta, por el momento, la propiedad privada eclesiástica⁶⁹¹.

⁶⁸⁸ *Novísima Recopilación*, Tomo I, Libro I, Título V, Ley XVIII.

⁶⁸⁹ Con este Real Decreto se cierra la primera etapa del proceso doctrinal desamortizador y se abre el normativo. Es decir, de las propuestas generales se pasó a la aprobación de la enajenación forzosa.

⁶⁹⁰ *Novísima Recopilación*, Tomo I, Libro I, Título V, Ley XXII.

⁶⁹¹ La Junta Suprema para la enajenación de los bienes, según la Real Orden de 19 de septiembre de 1798, emitió varias órdenes aclaratorias de la misma, ante las dudas de los obispos sobre si se incluían en las enajenaciones las capellanías de patronato activo o pasivo de sangre, disponiendo que: *“siempre que V. E. estimase conveniente la enajenación de bienes pertenecientes a capellanías colativas, procederá según tenga por más acertado”*. La Instrucción de 30 de enero de 1799, en sus artículos XX y XXI, disponía que todo lo prevenido a los Intendentes y Justicias del Reino para ejecutar las enajenaciones de los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos mandadas hacer por la Real Cédula de 25 de septiembre de 1798, se extendía a los bienes profanos de dichas manos muertas que estuviesen sujetos a jurisdicción real, pero los sujetos a la jurisdicción eclesiástica se procederá de acuerdo con el Obispo. Y en las fincas que pertenezcan a capellanías colativas, y que por cualquier título estén espiritualizadas, no se inmiscuirán, ya que serán competencia de los citados Obispos y sus Vicarios. *Colección de pragmáticas, cédulas, provisiones, autos acordados y otras providencias generales expedidas por el Consejo Real en el reinado del Señor Don Carlos IV*, tomo II, Madrid 1805, p. 236. Mediante una real orden comunicada a los intendentes se reforzó lo anterior al ordenar que la enajenación de bienes espiritualizados (capellanías colativas) correspondía *“al libre arbitrio y disposición”* de los Prelados Eclesiásticos con inhibición de los Tribunales y Juzgados Reales. Ibidem, pp. 318 y 321.

En realidad esta disposición tiene más importancia que la que se aprecia en una primera lectura, pues, según Teodoro Martín, “*sentó un precedente sobre la solución que posteriormente se adoptaría con las propiedades eclesiásticas tras el triunfo de los esquemas liberales*”⁶⁹². Su efecto sobre las capellanías colativas no tuvo ningún éxito, pues muy pocos obispos y prelados siguieron la invitación hecha.

Por Real Cédula de 15 de octubre 1805⁶⁹³, que insertó el Breve pontificio de 14 de junio anterior que autorizaba la venta de bienes eclesiásticos hasta una determinada cantidad, se mandó que los bienes de capellanías colativas fueron desespiritualizados y vendidos, extinguiéndose total o parcialmente muchas capellanías.

Quizá no se ha reparado lo suficiente sobre la importancia de este Breve de Pío VII tuvo para la vida posterior de las capellanías colativas, pues es la primera ocasión en que dichos bienes son arrebatados por imperio o mandato del poder civil pero con la anuencia, sino del poder eclesiástico, sí del poder pontificio, pues la medida no fue del agrado de los obispos españoles. Con este precedente se explica la impunidad con que se legislará en fechas posteriores sobre la materia y ya sin contar con el consentimiento de la Iglesia.

Por Real Cédula de 21 de febrero de 1807 que incluía el Breve de 12 de diciembre de 1806, donde el Romano Pontífice concedía al rey la facultad de enajenar la séptima parte (el séptimo eclesiástico) de los predios pertenecientes a las iglesias, monasterios, conventos, comunidades, fundaciones y otras personas eclesiásticas, se enajenaron dichos bienes, aunque para las capellanías colativas no se limitaron a la séptima parte de sus bienes, sino que todos sus predios rústicos y urbanos debían ser vendidos. Aquí, ya no se invitaba a la desamortización, como se había pedido en 1798, sino que se ordenaba. Pero dicha medida tuvo un alcance limitado al ser suspendidas las ventas al año siguiente por Decreto de 16 de noviembre.

2.- LEGISLACIÓN LIBERAL⁶⁹⁴ SOBRE CAPELLANÍAS.

A lo largo del siglo XIX aparecen numerosas medidas legislativas sobre materias eclesiásticas. En el tema de las capellanías se hace más patente hasta el extremo de poder asegurar que en ningún otro período histórico se legisla tan abundantemente sobre las mismas. Los motivos del exceso y abuso normativo en materia de capellanías habría que buscarlos en móviles ajenos o extraños a las propias fundaciones eclesiásticas, es decir, más que regular las propias capellanías se regularon las consecuencias que para éstas tuvieron los procesos de desvinculación y desamortización de las propiedades.

⁶⁹² T. Martín Martín, *La desamortización. Textos políticos-jurídicos*, Madrid 1973, p. 26.

⁶⁹³ *Novísima Recopilación*, Suplemento, Libro I, Título V, Ley I.

⁶⁹⁴ “*Liberal en el sentido de sucesora del Antiguo Régimen, pues son tantas las mudanzas del poder en el siglo XIX español que no es posible encontrar un adjetivo que se acomode a la legislación de todos sus períodos, aunque el de liberal podría ser el más aceptado o el menos inconveniente*”. J. M. Vázquez García-Peñuela, *Las capellanías colativo-familiares...*, o.c., cap. II, pp. 102-103. Aunque de todas formas hay que precisar que “*determinar si el proceso que se produjo desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX en España debe denominarse ‘revolución’ burguesa, capitalista o liberal, ‘transición’ del ‘feudalismo’ al capitalismo o ‘reforma’ adjetivada con algunos de los anteriores términos me parece una cuestión que, sin ser del todo inútil, no debe hacernos perder demasiado tiempo*”. G. Rueda Hernanz, *La desamortización de Mendizábal...*, o.c., p. 11.

2.1- Normativa desvinculadora y desamortizadora.

Las normas desvinculadoras y desamortizadoras no incidieron en todas las capellanías por igual. Para comprender las leyes o disposiciones que les afectaron hay que partir de la diferencia existente entre desvincular y desamortizar, que aunque son términos relacionados no son sinónimos. Hay una diferencia radical, pues mientras la desvinculación concede al titular de una propiedad indisponible la posibilidad de transferir el dominio, la desamortización, en cambio, obliga a realizar esa transferencia⁶⁹⁵. Otra diferencia, sostenida por diversos autores, es que mientras la desvinculación afecta a propiedades indisponibles de personas, la desamortización se refiere a la de las de personas jurídicas⁶⁹⁶. Valga para ello la afirmación de Bartolomé Clavero en su famosa obra ya citada *Mayorazgo...*, p. 413: “*La desvinculación significa la transformación del derecho de propiedad, no necesariamente la enajenación de las propiedades*”.

Teniendo en cuenta la distinción anterior no se puede afirmar que todos los bienes de las capellanías estuvieron sujetos a leyes desamortizadoras y desvinculadoras, sino que los bienes de ciertas capellanías fueron desvinculados y los de otras desamortizados. Para diferenciar ambos supuestos hay que recordar los distintos tipos de capellanías citados anteriormente, que se clasifican en laicales y colativas, según los intereses en juego del fundador o de su familia y de la Iglesia. De este modo, en las capellanías laicales, que son bienes de dominio particular gravados con cargas eclesiásticas, el interés familiar es máximo, pues son de su propiedad; en cambio, el interés de la autoridad eclesiástica es mínimo porque apenas interviene. En el extremo opuesto se sitúan las capellanías colativas no familiares o de patronato eclesiástico y las familiares o de sangre. En las primeras son muy débiles los intereses de los parientes del fundador (los bienes dotales no son suyos, ni los disfrutan y ni siquiera presentan al que haya de hacerlo), mientras que los intereses de la Iglesia están bien presentes porque son de su propiedad y no hay ninguna posibilidad de que los familiares le indiquen cómo disfrutarlos. En las capellanías colativo-familiares o de sangre, ambos intereses, los del fundador, sus parientes y los de la Iglesia, están presentes, pues los bienes dotales al ser de naturaleza beneficial son propiedad de la Iglesia pero el fundador y sus familiares pueden disfrutarlos, en el caso de patronato pasivo, o designar a quien lo haga, si el patronato es activo⁶⁹⁷.

En función de la presencia de unos y otros intereses, las disposiciones que en el siglo XIX afecten a las capellanías, serán desvinculadoras o desamortizadoras. Concretamente, a las capellanías laicales les afectarán las normas desvinculadoras, lo que se recoge en diversas sentencias del Tribunal Supremo⁶⁹⁸, y a las colativas de patronato eclesiástico, las leyes desamortizadoras. Más compleja es la cuestión en relación con las capellanías colativas de sangre o familiares, pues las disposiciones de

⁶⁹⁵ F. de Castro y Bravo, *Sobre la pretendida validez de las fundaciones familiares...*, o.c., p. 639.

⁶⁹⁶ “*La desamortización se refiere a la propiedad colectiva de las corporaciones y personas morales, pues para significar el mismo fenómeno en cuanto a los bienes de los particulares se emplea la palabra desvinculación*”. M. González Ruiz, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España...*, o.c., p. 384.

⁶⁹⁷ J. M. Vázquez García-Peñuela, *Las capellanías colativo-familiares...*, o.c., cap. II, p.106.

⁶⁹⁸ La sentencia de 9 de enero de 1906 es clara sobre el tema: “*Considerando que la referida fundación, dados los términos empleados por su fundador, constituye una capellanía laical vincular con carga de misas, sujeta por ello a las leyes de desvinculación y no a las que regulan las capellanías colativas familiares...*”. Gaceta de 21 de enero de 1906.

las que fueron objeto no poseían un carácter desvinculador ni desamortizador claramente definido.

2.1.1.- Leyes desvinculadoras aplicadas a las capellanías.

En general, son vinculaciones el conjunto de todas aquellas instituciones en las que se hacía inalienable una masa de bienes, es decir, su esencia consistía en inmovilizar la propiedad sacándola de la libre circulación y la sucesión en la cual estaba sujeta a un orden predeterminado, fijo, permanente e inalterable⁶⁹⁹.

Sánchez Román, que afirma que las vinculaciones son una forma excepcional e histórica dentro del régimen jurídico del derecho de propiedad, recoge tres especies o formas vinculares: los mayorazgos, los patronatos y las capellanías. Los primeros de vinculación civil y los otros dos de vinculación eclesiástica⁷⁰⁰. En el mismo sentido, Gutiérrez Fernández afirma que las capellanías mercenarias (laicales) son una especie de vínculos o mayorazgos⁷⁰¹.

Reclamada la supresión de las vinculaciones civiles desde el Congreso de Bayona de 1808, especialmente para los mayorazgos, las Cortes de Cádiz marcaron las directrices de la prohibición de las vinculaciones, consideradas como un pesado lastre y estorbo para la expansión económica de la Nación, y en consecuencia, se presentó un proyecto de ley sobre supresión de mayorazgos y demás vinculaciones, publicado en 1814, al que se ha hecho referencia anteriormente, y que servirá de fundamento al posterior y definitivo proyecto sobre las vinculaciones que se presentará el 1 de julio de 1820 en las Cortes, el cual dará a luz la primera ley desvinculadora del siglo XIX, la Ley de 11 de octubre de 1820.

2.1.1.1.- Incidencia de la Ley desvinculadora de 1820 en las capellanías.

El principio abolicionista de las vinculaciones, planteado anteriormente por los ilustrados y confirmado ahora por los liberales, se dejaba ver en la prensa de la época que, caldeando el ya de por sí exaltado ambiente totalmente contrario a dichas fundaciones, publicaba noticias sobre nuevos proyectos de leyes desvinculadoras “*para la más pronta, útil y necesaria extinción de mayorazgos, vínculos, &*”, como así recoge el periódico “*Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura*”, nº 85, de 15 de mayo de 1820, en su tercera página, (BNE. Hemeroteca digital).

En las Cortes de 18 de julio se presentó una proposición del Sr. Azaola en la que pedía que se decretara la prohibición de toda amortización eclesiástica, y que “*las fundaciones de capellanías y otras cargas piadosas, las cuales contribuyen a la ruina de la agricultura, no se harán en lo sucesivo sino sobre acciones en fondos públicos, censos y otros efectos de esta especie*”.⁷⁰²

⁶⁹⁹ G. de Azcárate Menéndez-Morán, *Ensayo sobre la historia del Derecho de propiedad y su estado actual en Europa*, Madrid 1880, tomo II, p. 220. M. González Ruiz, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España...*, o.c., p. 420.

⁷⁰⁰ F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho Civil...*, o.c., tomo VI, pp. 1510-1511.

⁷⁰¹ B. Gutiérrez Fernández, *Códigos o estudios fundamentales...*, o.c., p. 315.

⁷⁰² Diario de las actas y discusiones de las Cortes, Madrid 1820, Tomo I, p. 3.

Pero los antecedentes inmediatos de la primera ley desvinculadora se encuentran en el extenso informe de 19 de agosto de 1820 que la Comisión Primera de Legislación de las Cortes dio a conocer sobre el expediente relativo a los mayorazgos, que había sido presentado en el mes de julio anterior, en el que se hace un histórico repaso sobre dichas instituciones y que se hizo eco la prensa del momento encabezada por “*Miscelánea de Comercio, Política y Literatura*”, nºs 172 y 173, de 19 y 20 de agosto del citado año, en su primera y segunda páginas, respectivamente, (BNE. Hemeroteca digital)⁷⁰³. También “*El Censor, Periódico político y literario*”, en su número 5, de 2 de septiembre, recoge en su primera y sucesivas páginas una extensa opinión sobre la sesión de las Cortes de ese día y el dictamen de diez artículos leído por el Sr. Calatrava, (Ibidem, BNE)⁷⁰⁴.

También las Diputaciones Provinciales (Murcia, entre otras) solicitaban a las Cortes mediante escritos “*la abolición de los vínculos y mayorazgos, por ser opuestos a la constitución y a la agricultura*”. Dichas solicitudes se recogían en expedientes y pasaban a la comisión de vinculaciones (“*Miscelánea de Comercio, Política y Literatura*”, Ibidem, BNE). A estas solicitudes se sumaban las de numerosos alcaldes, vecinos de los distintos lugares y localidades de España pidiendo “*la reducción o extinción absoluta de las vinculaciones por los gravísimos perjuicios que causan al estado*”. (Diario de las actas y discusiones de las Cortes. Madrid 1820, Tomo IV, nº 8, p. 289).

También fue decisiva la influencia del proyecto desvinculador de Manuel María Cambronero, notable jurisconsulto, que publicó su obra “*La institución de los mayorazgos, examinada histórica y filosóficamente, con un proyecto de ley para su reforma*”, Madrid 1820, un opúsculo de sesenta y tres páginas en el que exponía de forma manifiesta la doctrina ilustrada sobre los bienes vinculados y que su desaparición redundaría en la mejora y prosperidad de la agricultura y del bien público. Al respecto, cita a Jeremías Bentham, filósofo y jurisconsulto inglés, en su obra “*Teoría de las penas y de las recompensas*”, París 1826, que dice: “*La suerte más favorable a la*

⁷⁰³ “*Sobre la ley de mayorazgos. Siempre habíamos esperado que las luces que derramaría la discusión de este importante proyecto, llevaría el augusto congreso a perfeccionar la redacción del art. Iº, en que está casi todo el fondo de la ley, por lo que hace al remedio general de los males existentes (...) dejando nivelado y dispuesto el terreno para reconstruir oportunamente el nuevo orden de vinculaciones, que solo por una excepción de la regla común pueden reclamar la ley política y las demás circunstancias de la nación*”.

“*Cortes. Sesión de hoy. La primera comisión de legislación en vista de lo que produce el expediente sobre mayorazgos, y de las muchas reclamaciones hechas por diferentes particulares, de los cuales pretenden unos la reducción de las vinculaciones, y otros su absoluta extinción, presenta un extenso informe en que desenvuelve la historia de estas instituciones, y la influencia que bajo varios respetos tienen sobre la decadencia de la agricultura, artes, industria, población y los demás ramos que concurren a la prosperidad y poder de los estados*”.

⁷⁰⁴ “*Afortunadamente hasta ahora no hemos tenido sino ocasiones de elogiar las que se han tomado; y hoy la tenemos también de aprobar altamente la ley que la comisión de legislación propuso el día 19 para la abolición de los mayorazgos, vínculos, fideicomisos, patronatos y cualquiera otra especie de fundaciones en bienes raíces y estables, y la prohibición de hacerlas en adelante.*

El erudito y juicioso informe de la comisión leído por el señor Calatrava nada deja que desear en la materia. En él se demuestran los perjuicios que la institución feudal de los mayorazgos ha causado á las naciones modernas que la adoptaron en siglos menos cultos; se hace ver que la amortización civil y eclesiástica es una de las principales causas de la miseria en que han estado por espacio de tantos años, y en que todavía está por desgracia nuestra España, á pesar de las naturales riquezas de su feracísimo suelo”.

prosperidad de la agricultura tiene lugar cuando nada hay de sustituciones, de fundaciones inalienables"; y prosigue Cambronero al comentar el perjuicio de las vinculaciones (o.c., pp. 39-51), concluyendo al decir que *"es un mal y un mal gravísimo toda fundación vincular"* (o.c., p. 50). Esta monografía está íntimamente relacionada con el dictamen y posterior proyecto de la Comisión de Legislación y que, a la vez, se inspira en sus proposiciones y articulado.

Cambronero es consciente y, además, está convencido de que *"una ley sobre los mayorazgos y sobre toda especie de sustituciones fideicomisarias, va a ofrecerse al examen y a la deliberación de nuestras cortes: ley de suma importancia para la pública prosperidad"*, por lo que, a su juicio, es necesario proponer una ley con unos artículos, *"con los cuales podrá empezar la nación a recibir el grande beneficio de unas reglas hechas de consuno entre los representantes y el monarca"* (o.c., p. 52).

El proyecto del tan citado jurisconsulto español, el cual contiene veintitrés artículos, se basa en los criterios siguientes: en su artículo 1º suprime toda clase de vinculaciones, sin distinción alguna, incluyendo las capellanías. En el 2º dice que todos los bienes de las vinculaciones abolidas serán poseídos libremente, con lo que divide las vinculaciones entre poseedor y sucesor inmediato por mitad. En el 3º dispone que todos los bienes gravados quedan de libre disposición y que en las capellanías, patronatos y aniversarios, es necesario aplicar esta disposición. En el 5º expresa que las cargas existentes sobre los bienes vinculados se repartirán por mitad entre los herederos del poseedor actual y los del sucesor inmediato. El artículo XII prohíbe fundar en general, pero se admite que lo sean mediante licencia real. El siguiente, el artículo XIII permite fundar mayorazgos sobre bienes raíces o estables. Artículo XX: no podrán ser objeto de venta los bienes vinculados, sino con licencia del rey, citación del inmediato sucesor y por causas determinadas.

En fin, este proyecto contiene diversas reglas prácticas para poder resolver los conflictos que se iban a generar y que las cortes tendrán en cuenta para redactar su propio proyecto y su posterior aprobación en ley desvinculadora.

La Comisión de Legislación presentó su dictamen relativo a las vinculaciones, en fecha 3 de septiembre de 1820, que incluía una larga introducción histórica y una feroz crítica a las mismas, en la que se exponía que *"entre las causas de abatimiento y pobreza de naciones como la nuestra (...) la comisión entiende que las de peor transcendencia sean las máximas absurdas que protegen las vinsulaciones de bienes raíces, y autorizan los mayorazgos; institución que pugna con los progresos de la población y de la agricultura, introduce la pobreza y el desaliento, fomentan las semillas del mal moral, entorpece los movimientos progresivos de la industria, divide los miembros de la sociedad, turba la armonía y concordia de las familias, destruye el derecho de propiedad, y se halla en oposición con todos los principios de socia bilidad y de justicia universal, y con las leyes más sabias de los gobiernos y aún con las antiguas de nuestros reinos"* (Ibidem, p. 290 y ss.). Al final de su dictamen, la Comisión presentó un Proyecto de Ley con 10 artículos, señalándose para su discusión en las Cortes el lunes 11 de septiembre, pero finalmente sería debatido el 12 del aludido mes.

A) Discusión parlamentaria del Proyecto de Ley.

Presentado y leído el Proyecto de Ley en 12 de septiembre de 1820, seguidamente comenzaron los debates, que se dirigieron en un principio sobre el artículo primero, pues el problema fundamental de la permanencia o no de las vinculaciones se encuadraba en este artículo al contener en sí mismo el principio desvinculador.

Los defensores de las vinculaciones concentraron sus discursos con diversos argumentos apoyados en la tradición histórica de los vínculos y que ni siquiera los propios ilustrados se atrevieron a abolirlos⁷⁰⁵. Además, referían que las anteriores Cortes de Cádiz no consideraron necesario proceder a la extinción de las vinculaciones y al ser las cortes actuales continuadoras de aquéllas no pueden ahora establecer la supresión de las vinculaciones⁷⁰⁶. Se afirma también que las cortes no tienen facultad para decretar la desvinculación en base a que los actuales poseedores no son dueños de los bienes, sino que únicamente ostentan la calidad de usufructuarios, por lo que declarar libres dichos bienes en los actuales poseedores, es concederles el dominio de los mismos⁷⁰⁷.

Siguiendo su línea de defensa de las vinculaciones se argumentó también que las presentes cortes carecían de la facultad anteriormente citada para poder realizar la entrega, puesto que de hacerse, no sólo representaría proceder sin dicha facultad, sino que se produciría un grave perjuicio a los llamados a dichas vinculaciones, lesionándose gravemente sus derechos. El objetivo era que, si no se podía conseguir la rectificación del artículo primero porque era ardua y difícil tarea, se mantuvieran el mayor número posible de vinculaciones.

⁷⁰⁵ Intervención del diputado Sr. Silves: “Nuestros célebres políticos Navarrete, Ciales, Saavedra, Castro, Campomanes, Jovellanos y la sociedad de Madrid, sin embargo de haber tratado la institución de los mayorazgos como un aborto de los siglos de la ignorancia, del orgullo y soberbia humana, destructora de la población, de la agricultura y de las artes, no se atrevieron a aconsejar su extinción absoluta, sino a proponer los medios de que el mal no recibiese aumento. Respetaron lo hecho bajo la autoridad de las leyes, y sólo desearon un remedio para lo futuro. Imitaron en esto a las antiguas Cortes de Castilla, que tampoco intentaron se hiciese novedad con los mayorazgos ya fundados, sino que se evitase la multiplicación de ellos”. Y sigue: “En efecto, es tan antigua, tan arraigada y tan general, aun entre los hombres menos preocupados, la opinión de que las vinculaciones son indispensables para conservar el lustre y esplendor de las familias nobles, que el célebre Adam Smith, al paso que reconoce sus defectos e inconvenientes, y los presenta con fuego y energía, cree que han de durar siglos de siglos”. Diario de las actas y discusiones de las Cortes. Sesión de 12 de septiembre de 1820. Madrid 1820, Tomo V, nº 6 pp. 276 y 279.

⁷⁰⁶ Esta argumentación, expuesta por el Sr. Silves, fue para poner en aprieto al diputado Sr. Calatrava, miembro de la Comisión, defensor de la desvinculación y que también había formado parte de la comisión correspondiente en las Cortes de Cádiz: “Las Cortes no llegaron a resolver porque tampoco llegó el caso; pero manifestaron con sobrada claridad su modo de pensar cuando después de haber admitido en la sesión de 21 de febrero de 1812 las proposiciones del señor García Herreros, y en la del 22 las del señor Calatrava, reducidas unas y otras a la extinción de mayorazgos pequeños y conservación de los grandes, no admitió a discusión la que inmediatamente hizo el señor Castelló (tendente a que se prohibieran todas las vinculaciones y se anularan las existentes, proposición que fue rechazada)”. Ibidem, p. 277.

⁷⁰⁷ Intervención del diputado Sr. Freire: “El poseedor de los bienes vinculados no es dueño de ellos, sino sólo usufructuario; y si estamos facultados para conceder el dominio al que no tiene sino el usufructo, yo no veo por qué no podemos concederle a cualquier otro, o a la nación. En una palabra, no siendo dueños de estos bienes ¿cómo podemos transferir el dominio a los que son meros usufructuarios de ellos? Esto sería un absurdo. El declarar por libres dichos bienes en los actuales poseedores, es concederles el dominio de ellos; pero no podemos conceder un dominio que no tenemos nosotros mismos”. Ibidem, sesión de 13 de septiembre de 1820...o.c., nº 8, p. 368.

El Gobierno, consciente de la enconada controversia producida y con la finalidad de moderar los perjuicios que podrían derivarse, según varios diputados, en el caso de aprobarse el artículo 1º, según estaba redactado en el proyecto, propuso sustituirlo, proponiendo que la desvinculación fuese una facultad potestativa en manos de los poseedores, con lo que aseguraba el mantenimiento de las vinculaciones⁷⁰⁸. Tal propuesta no tuvo éxito.

La existencia en el proyecto de una norma (artículo 7º: “*En cuanto a la vinculación de censos, juros, foros, acciones de Banco, créditos contra el Estado o cualesquiera otros derechos diferentes de los bienes raíces y que no impidan la libre circulación de estos, no se haga novedad por ahora, y subsistan las fundaciones respectivas en el orden de sucesión prescrito en ellas.*”) que mantiene la subsistencia de las vinculaciones sobre bienes no raíces y su aparente contradicción con el artículo 1º (“*Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualesquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces y estables, los cuales se restituyen desde ahora a la clase de absolutamente libres.*”), motivó la intervención de varios diputados como Martínez de la Rosa argumentando la imposibilidad de mantener dicho artículo, pues si la Comisión dice que todas las vinculaciones producen graves males, no serán tales cuando se las vinculaciones sobre bienes no raíces (juros, foros, censos, etc), puesto que si así fuera se hubiere determinado la extinción de este tipo de vínculos⁷⁰⁹. O se suprimen todas las vinculaciones o no se suprime ninguna, dijo.

Los discursos de los diputados que intervienen a favor de la desvinculación se inspiraron en el pensamiento de los ilustrados del siglo anterior, quienes no dudaron en hacer suya su argumentación en los discursos, llegando a utilizar literalmente párrafos enteros como propios, sin citar su procedencia⁷¹⁰.

⁷⁰⁸ Intervención del Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia: “*En este concepto cree (el Gobierno) que sería un medio más acertado, que en lugar del artículo concebido en los términos en que lo presenta la comisión, se dijese: ‘quedan en plena y entera libertad los poseedores de los mayorazgos de usar de ellos a su gusto, vendiéndolos en todo o en parte sin necesidad de permiso o previo consentimiento del inmediato sucesor, y el que no quiera venderlos siga con ellos’.* Ibidem, sesión de 12 de septiembre de 1820...o.c., nº 6, p. 293.

⁷⁰⁹ Intervención del diputado Sr. Martínez de la Rosa: “*Así, el objeto principal de mi razonamiento será probar que no ha podido presentarse la supresión de los mayorazgos propuesta en el artículo primero, sin admitir como consecuencia legítima la supresión de los mencionados en el artículo séptimo; y que los mismos principios que han movido a la comisión a suprimir los primeros, están necesariamente a favor de la supresión de los segundos*”. Ibidem, p. 287.

⁷¹⁰ Intervención del diputado Sr. Vecino: “*Se puede asegurar que es una de las causas principales (refiriéndose a los vínculos), o la principal de nuestra despoblación, del abatimiento, languidez y pobreza en que nos hallamos, y que mientras subsistiesen nunca podría llegar esta nación al alto grado de prosperidad a que está destinada por la fertilidad de su suelo, benignidad del clima y aptitud y disposición de sus habitantes.*

En la extinción de los mayorazgos gana el estado, los mismos poseedores y sus familias. Gana el estado, porque con la abolición de los mayorazgos se abre la puerta a la circulación, fuente inagotable de riqueza. Ganan los poseedores, pues no teniendo antes mas que una sombra de propiedad, la adquieren ilimitadamente... Ganan por último las mismas familias, que pueden ser herederas... Los mayorazgos de la grandeza, por su misma magnitud y extensión desmedida, producen mayores males: 1º a la agricultura, de cuyas mejoras alejan grandes territorios e inmensas heredades: 2º al comercio, a cuya fecundísima circulación roban un manantial tan inagotable de verdadera riqueza: 3º a las costumbres, a las cuales corrompen con un lujo desmedido y contagioso. Los mayorazgos menores conservan en el ocio y holgazanería innumerables familias, que se avergüenzan de ocuparse en la agricultura, comercio y artes mecánicas”. Ibidem, pp. 270, 271, 273 y 274.

Todos los diputados a favor de la desvinculación concluyen que es por interés general y la prosperidad de la Nación el exigir la abolición de las tan citadas vinculaciones, pues el interés de la Comunidad está por encima del interés particular, aún con plena conciencia de que se lesiona este último⁷¹¹.

Cuestión importante fue la de las capellanías (laicales) y obras pías, pues había una diferencia de redacción existente en el artículo primero sobre la supresión de las vinculaciones, y el artículo sexto (posteriormente el catorce) del proyecto la redacción referente a la prohibición de fundar para lo sucesivo. Este último artículo añadía a la expresión contenida en el primer “*mayorazgos, fideicomisos, patronatos*”, las palabras “*capellanía y obra pía*”. Dicho añadido tenía una trascendental importancia y, como observaba el diputado Romero Alpuente, no parecía fruto de la improvisación sino que “*la omisión no puede ser sino el resultado de una profunda meditación*”. Así lo reconoció el diputado Vadillo, al mencionar, refiriéndose a las capellanías, que éstas habían sido excluidas del artículo primero “*después de mucha meditación*”⁷¹².

En realidad, la idea de la Comisión que había presentado el proyecto era que las capellanías y obras pías no fueran objeto de desvinculación. Todo lo más se prohibía su fundación para el futuro. Las primeras porque contenían un cierto problema, difícil de separar, entre la postestad civil y la eclesiástica, a raíz de su división principal entre capellanías laicales y eclesiásticas y, las segundas, por cuanto se consideraban exclusivamente de carácter eclesiástico.

Pero una mayoría de diputados, entre ellos Romero Alpuente, querían acabar para siempre con toda clase de vinculaciones y eso incluía, tanto las capellanías laicales como las colativas, a las que les atribuían, a igual que a los mayorazgos, todos los males que sufría el estado y la sociedad. Por eso insistían en que se añadiese al artículo primero la palabra “*capellanías*” y que a la palabra fideicomisos se añadiese

⁷¹¹ Intervención del diputado Sr. La Santa: “*Es necesario que consideren las Cortes que la nueva ley va a chocar con grandes intereses y de muchas personas, y el único consuelo que cualquiera puede tener, es la universalidad de la ley, la reflexión de que los representantes de la nación habían creído que el bien general de ella exigía este sacrificio de los particulares.*” Diputado Sr. Gasco: “*Entre tanto la generación actual continuará afligida bajo el peso fatal de las vinculaciones, cuya extinción no debe retardarse un momento, si se quiere no desconocer el verdadero interés y prosperidad de la nación, la utilidad pública y los eternos axiomas de la moral y la política*”. Ibidem, sesión de 13 de septiembre de 1820...o.c., nº 8, pp. 330 y 333.

⁷¹² Sobre la cuestión de las capellanías dijo el diputado Sr. Romero Alpuente: “*Pasaré desde luego a hacer sobre este artículo (el 1º) dos observaciones. Primera (...). La segunda observación es sobre las capellanías, que se han omitido en este artículo, aunque no en los demás; pues si no me engaño, en el sexto, en que se prohíbe la fundación de todas las vinculaciones en bienes raíces, no sólo se repiten las palabras mayorazgos, fideicomisos, patronatos, etc, puestas en este art. 1º sino que se añaden éstas, capellanías y obras pías. A mi me parece que esta omisión no puede ser sino el resultado de una profunda meditación, y en consecuencia de ello una exclusión positiva: porque las capellanías pueden ser ya legas, ya colativas; y de la supresión puede seguirse un transtorno en el orden eclesiástico, el cual puede traer otras consecuencias, que sin duda previó la comisión, no atreviéndose por esto tal vez a tocar este punto, ni a dar un paso.*

Sr. Vadillo: “*El señor Romero Alpuente notó que en el referido artículo (el 1º) no se trata de capellanías, siendo así que se habla de ellas en el artículo 6º. Su señoría hizo a la comisión de justicia de creer que habría tenido razones para esto, pues no podía pensarse que se hubiera olvidado en el artículo 1º un punto que en el 6º se tocaba tan expresamente. En efecto, la comisión no se decidió a omitir las capellanías en el citado artículo 1º sino después de mucha meditación*”. Ibidem, sesiones de 12 y 13 de septiembre de 1820...o.c., pp. 275 y 314.

“perpetuos”⁷¹³. El diputado Moreno Guerra persistía también en la eliminación de las capellanías, tanto que pidió que otro proyecto de ley contemplase la nacionalización de las mismas⁷¹⁴, pese a que el tema había quedado zanjado con la intervención del diputado Sr. Vadillo. Finalmente, se aprobó el artículo 1º por 128 votos contra 24 y a continuación se aprobó el artículo 2º y se levantó la sesión de ese día.

En sesión de 16 de septiembre, “*presentó el señor Calatrava adición, arreglando o refundiendo el artículo 1º en estos términos: Quedan suprimidos todos los mayorazgos, patronatos, y cualesquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros, o de cualquier otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora a la clase de absolutamente libres*”⁷¹⁵. Aprobado el proyecto pasó a la Comisión para nuevo redactado de determinados artículos e inclusión de las propuestas, siendo presentado como Decreto a S.M. el 27 de septiembre de 1820, sancionado el 10 de octubre y promulgado como ley el 11 de octubre del año citado. Los periódicos nacionales la publicaron, como es el caso del “*Mercurio de España*” del mes de noviembre de 1820 (BNE. Hemeroteca digital).

B) Análisis de la Ley.

⁷¹³ Diputado Sr. Romero Alpuente: “*Señor: es preciso hacerse cargo de las dificultades para vencerlas. Las capellanías, que están sujetas al mismo sistema que las vinculaciones; que siguen las mismas reglas sin ninguna diferencia; que causan los mismos males políticos al estado en cuanto mira a la administración de los bienes, y que todavía los causan mayores, porque quitan a la sociedad de la clase de ciudadanos activos a una infinidad de hombres, los cuales son generalmente de muy poco provecho aun a la misma iglesia, porque no concurren en ellos las calidades que exige el concilio; ¿será posible que no queden comprendidas en este artículo?*”. Ibidem, sesión de 12 de septiembre de 1820..., o.c., p. 275. Y en la sesión de 14 de septiembre, después de la votación aprobando el artículo 1º, pidió lo siguiente: “*Después de la palabra patronatos se añada capellanías laicales y colativas*”. Se declaró por las Cortes no haber lugar a votar sobre la palabra colativas, no admitiendo adición alguna en el citado artículo”. Ibidem, sesión de 14 de septiembre de 1820..., o.c., p. 411. A pesar de ello el periódico “*Miscelanea de Comercio, Política y Literatura*”, nº 203, de 19 de septiembre, publicaba que se habían realizado dichas adiciones: “*Se nota con efecto, por un feliz resultado del examen del expresado art. 1º, que a la palabra fideicomisos se ha añadido con grande acierto el adjetivo perpetuos. En segundo lugar se han comprendido en el artículo a consecuencia de otra proposición, las capellanías, las cuales se incluyen aun con más razón en el principio de la desvinculación general*” (BNE. Hemeroteca digital). La razón estriba en que se trata de prensa política que se declara “*liberal de toda la vida*”. Claro exponente de su politización fue el cambio de su nombre original “*Miscelanea de Comercio, Artes y Literatura*” en unos meses, desde su nacimiento en marzo de 1820.

En sesión de 16 de septiembre, “*presentó el señor Calatrava adición, arreglando o refundiendo el artículo 1º en estos términos: Quedan suprimidos todos los mayorazgos, patronatos, y cualesquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros, o de cualquier otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora a la clase de absolutamente libres*”. Diario de las actas y discusiones de las Cortes. Sesión de 16 de septiembre, Madrid 1820, tomo VI, nº 8, p. 39. Aprobado el proyecto pasó a la Comisión para nuevo redactado de determinados artículos e inclusión de las propuestas.

⁷¹⁴ Sr. Moreno Guerra: “*Y no dudo que la comisión de legislación... presentará pronto otro proyecto de ley para materializar y nacionalizar las fincas llamadas por mal nombre espirituales, como capellanías, obras pías, etc, etc., para pagar con estos grandes caudales, que son de la nación indudablemente, todo cuanto la nación debe a propios y extraños*”. Ibidem, sesión de 13 de septiembre de 1820...o.c., p. 343.

⁷¹⁵ Ibidem, sesión de 16 de septiembre, o.c., p. 39.

Esta norma puso en marcha la primera desvinculación y dio entrada a la primera desamortización de 1836⁷¹⁶. El artículo primero⁷¹⁷ de la misma, que se aprobó según había salido de la comisión, sin más diferencia que expresar la clase de bienes que componían las vinculaciones, fue determinante al disponer que quedaban suprimidas todas las citadas vinculaciones de cualquier especie y los bienes pasaban a adquirir la condición de libres. Es el artículo fundamental, esencial, al ser la expresión del objeto y del mandato de la ley. Se inspira en dos principios capitales, según Sánchez Román, que son la verdadera esencia de la ley: supresión de toda clase de vinculaciones y que todos los bienes pertenecientes a ellas quedan desvinculados, restituidos a la clase de absolutamente libres, es decir, a la esfera del Derecho común, rompiendo para siempre el lazo, nexo o vínculo que les unía de forma perpetua al orden de llamamientos establecidos por el fundador, caducando para lo sucesivo la eficacia civil perpetua de su voluntad, es decir, terminando con dos fundamentos propios de las vinculaciones, el de la perpetuidad, en orden a las personas llamadas a la sucesión y el de la inalienabilidad, en orden a la enajenación de los bienes. Así lo manifiesta el verbo de presente utilizado, “*quedan suprimidos*” y las palabras “*desde ahora*” cuyo adverbio quiere remarcar lo radical y definitivo de la intención del legislador⁷¹⁸.

Por tanto, dicho precepto es claro, en su letra y espíritu, al determinar que se suprimen todas las vinculaciones civiles y no las eclesiásticas, pues nada se menciona sobre las capellanías en ninguna de sus clases. Como expone Joaquín Francisco Pacheco⁷¹⁹ “*todo lo civil, de cualquier género que fuese, quedaba desvinculado, como no lo excluyera alguna excepción explícita y especial.*” Pero Pacheco excluye de este artículo toda clase de capellanías, ya sean laicales o eclesiásticas (colativas).

Además, la abolición o supresión de que se habla, ese fin o término de las vinculaciones, se realiza o efectúa en el mismo instante. No es una disposición para el futuro sino que opera de inmediato por ministerio de la ley. La misma opinión tuvo posteriormente Gutiérrez Fernández (*Códigos o estudios fundamentales...*, o.c., p. 323) al decir que dichos verbo y adverbio denotan la misma idea de actualidad.

Calderon y Sanabria opina la contrario a Pacheco, pues dice que las capellanías laicales al seguir las leyes, reglas y principios de los mayorazgos, están sujetas a la

⁷¹⁶ A propósito de esta ley comenta Campos y Pulido: “*De suerte que, no sólo se ponían trabas y cortapisas a la libertad de los individuos en esta importante cuestión, sino que se llegó a declarar suprimidas todas las existentes, como si las facultades del Estado pudiesen alcanzar a tanto, prohibiéndose a la vez el fundar otras, con evidente menosprecio de los derechos de la Iglesia, pues si se entendió oportuno prohibir las vinculaciones y los mayorazgos por los inconvenientes que pudieran originar, la naturaleza beneficiar de las Capellanías debía ser causa de que éstas se consideraren excluidas de sus disposiciones, y lejos de esto vimos que esta ley constituye el primero y más importante avance que para la extinción y supresión de las mismas se dio, siguiendo ya desde esa fecha en todo su apogeo el desenvolvimiento de la tendencia desamortizadora tan en mala hora iniciada*”. J. M. Campos y Pulido, *Legislación y jurisprudencia canónica novísima y disciplina particular de España*, Madrid 1917, tomo III, pp. 384 y 385.

⁷¹⁷ “*Artículo 1º. Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juros, foros o de cualquiera otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora a la clase de absolutamente libres*”. A. de Casas y Moral, *Recopilación concordada y comentada de la Colección Legislativa de España*, Granada 1857, tomo I, p. 97.

⁷¹⁸ F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho Civil...*, o.c., Tomo VI, capítulo XXIII, pp. 1557-1558.

⁷¹⁹ J. F. Pacheco y Gutiérrez Calderón, *Comentario a las leyes de desvinculación*, o.c., p. 10.

desvinculación civil, por lo que cuando en el artículo 1º se dispone “y cualesquiera otra clase de vinculaciones de bienes raíces” se está incluyendo a las capellanías laicales. Y dice más: que Pacheco está equivocado al creer que las capellanías laicales pertenecen a la desvinculación eclesiástica. En consecuencia, en este artículo se entienden incluidas dichas capellanías, excepto las colativas⁷²⁰.

Gutiérrez Fernández señala un pequeño descuido de redacción en el artículo 1º al concordar el sustantivo “mayorazgos” con las palabras “los cuales se restituyen”, ya que se interpreta que aquéllos se declaran absolutamente libres, cuando en realidad se está refiriendo a los bienes de su dotación⁷²¹.

A pesar de la declaración general del primer artículo, en el 2º, admitido el principio de desvinculación, sólo se permite a los actuales poseedores de bienes a disponer libremente (enajenar) la mitad de los mismos; la otra mitad debían pasar al inmediato sucesor, quien podría disponer de ellos con entera libertad. Aquí se entiende también para las capellanías laicales. De este modo la liberación se hacía en dos fases o etapas, con lo que, de esta manera, se evitaban frecuentes y continuos litigios y un cúmulo excesivo de ventas, lo que hubiese incidido negativamente en una disminución del valor de los bienes vinculados, a la vez que se guardaba un relativo respeto a la voluntad del fundador, hasta donde era posible, dentro del criterio desvinculador y así no se defraudaban o se eludían las cercanas y legítimas expectativas de los llamados a suceder en el vínculo. Este sistema fue preferido por la ley al más radical de haber realizado la desvinculación de forma total y absoluta, sin ninguna contemplación ni reserva de los inmediatos sucesores.

El artículo 3º tiene por objeto garantizar los derechos del inmediato sucesor en la división de los bienes vinculados, lo que no estaba contemplado en el proyecto y cuya ausencia se hacía notar, por lo que el diputado Sr. Moscoso hizo una indicación que dio origen al artículo⁷²². Analizados estos tres primeros artículos de la ley, es evidente que

⁷²⁰ “Así como las capellanías colativas siguen las reglas canónicas, y por lo tanto están sujetas a la desvinculación eclesiástica; las capellanías laicales (...) lo están por el contrario a la desvinculación civil, siguiendo en todo las leyes, reglas y principios de los mayorazgos antes de la ley, y lo mismo después en la desvinculación y enajenación de sus bienes. No es el caso que el artículo 1º, de la ley que comentamos, hubiese omitido las capellanías laicales, cuando la cláusula “y cualquiera otra clase de vinculaciones de bienes raíces o de cualquiera otra naturaleza” las incluye. (...) las capellanías laicales las han poseído como vinculaciones y mayorazgos, y como tales mayorazgos están comprendidas en la cláusula del artículo 1º de la ley que comentamos, y que dicen “y cualquiera otra clase de vinculaciones de bienes raíces o de cualquiera otra naturaleza”, y en la suerte o destino que llevan los mayorazgos en la desvinculación civil. En este artículo se entienden además toda clase de bienes vinculados de cualquiera especie y naturaleza que sean, excepto las capellanías colativas, para las cuales ha sido necesario dictarse y sancionarse su ley especial de 19 de Agosto de 1841”. D. Calderón y Sanabria, *Examen analítico-legal de los bienes vinculados...*, o.c., Cádiz 1845, tomo II, pp. 99, 100, 104 y 106.

⁷²¹ B. Gutiérrez Fernández, *Códigos o estudios fundamentales...*, o.c., p. 323.

⁷²² “Sr. Moscoso: Pero señor, esta indicación y todas cuantas se hagan en el mismo sentido, aun cuando sean aprobadas, quedarían ilusorias si la misma ley que trata de proteger al inmediato sucesor, no establece reglas por las cuales esta protección sea verdadera y efectiva. De nada servirá mandar que el actual poseedor de una vinculación no pueda disponer mas que de la mitad de los bienes comprendidos en ella, si al interesado en que esta ley se cumpla no se le proporcionan medios para ello, así porque el actual poseedor puede muy bien haber vendido o disipado todo o casi todo el capital del mayorazgo, antes de que su inmediato sucesor lo sepa (...). Por tanto, creo que para que la justa restricción que tratamos de hacer en beneficio del inmediato sucesor no sea insignificante, debe este intervenir en la división y tasación de los bienes del vínculo, bajo la pena de nulidad de las enajenaciones que haga el

constituyen la parte general y fundamental de la misma, siendo los restantes, del 4º al 13º, ambos inclusive, descriptivos de distintos casos o hipótesis que no se analizan debido a que no tratan el tema de las capellanías.

Los artículos últimos de la ley desvinculadora, el 14º, 15º y 16º, son el complemento y la ratificación, de manera categórica y reiterada, del artículo 1º, aunque su letra y su sentido es más comprensivo, ya que se refiere no sólo a las vinculaciones civiles sino también a las conocidas como capellanías, patronatos y obras pías. Hay que destacar que mientras en el artículo 1º se habla de “*supresión*”, en éstos la dicción es “*prohibición*”, alterando de forma tajante la base del proyecto que sirvió para elaborar la ley.

Vistos los artículos anteriores, nada se dice de las capellanías hasta llegar al mismo artículo 14º, que en el proyecto de ley había sido el artículo 6º, que en correspondencia con el 1º, viene a establecer la prohibición de fundar cualquier tipo de vinculación, y remarcando todavía más la prohibición, dispone que nadie impida la enajenación de los mismos. La prohibición de enajenar es distinta a la prohibición de fundar. Pero lo más destacado del precepto es que aquí, a diferencia del citado artículo 1º, sí que son objeto de regulación las capellanías prohibiendo en el futuro su fundación⁷²³, pues impide de modo radical la creación de cualquier clase de vinculaciones, afectando incluso a las que pudieran ser consideradas como eclesiásticas. Parece que se quiere aludir de forma concreta y específica a una clase determinada de vinculaciones que, en cierto modo, parecen apartarse de los mayorazgos, pues tienen un marcado carácter espiritual frente al material y personal de aquellos.

Según el propio Pacheco, dicho artículo era improcedente y poco oportuno al enumerar entre las vinculaciones afectas por la prohibición de fundar en lo sucesivo, a las capellanías y obras pías que no se nombran en el artículo primero, pues de esta forma se rompe la unidad de la ley⁷²⁴. Su contexto debía ser en un todo correspondiente al artículo inicial, apareciendo la discordancia y hasta la oposición o contradicción entre

actual poseedor; sobre lo cual presento una indicación como adición a la del señor Martínez de la Rosa, a fin de que las Cortes deliberen respecto a su importancia”. Diario de las actas y discusiones de las Cortes. Sesión de 15 de septiembre, tomo VI, pp. 45-46.

⁷²³ “Artículo 14. Nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por vía de mejora, ni por otro título, ni pretexto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellanía, obra pía, ni vinculación alguna sobre ninguna clase de bienes o derechos, ni prohibir directa ni indirectamente su enajenación. Tampoco podrá nadie vincular acciones sobre Bancos u otros fondos extranjeros.” A. de Casas y Moral, *Recopilación concordada y comentada...*, o.c., p. 99.

⁷²⁴ “Respecto a este artículo 14, también tenemos que criticarle por lo que particularmente es. Juzgamos nosotros que su contexto debía ser en un todo correspondiente al 1º de la misma ley, y que las propias cosas o instituciones que en aquel se destruyen, eran las que en éste debían prohibirse restaurar. Así, el artículo 1º extingue los mayorazgos, fideicomisos, patronatos y cualesquiera otra especie de vinculaciones civiles; y el presente, en nuestra opinión, debía emplear las mismas palabras, prohibiendo sus sucesivas fundaciones. No debía haber en ninguno de los dos expresión que en el otro no se encontrase: no debía abrazar ninguno de ellos amortizaciones de distinta índole, que las que comprende el que le sirve de comprobación y complemento.

Parécenos, pues, poco oportuno que se haga mención en el que examinamos ahora de capellanías y de obras pías, que no se mencionan en el primero. Rómpe se de este modo la unidad de la ley, y hay discordancia, cuando no oposición, entre las distintas partes que la forman.

¿No había sido el objeto de ésta acabar con la amortización civil? ¿No se había prescindido completamente de la eclesiástica?”. J. F. Pacheco y Gutiérrez Calderón, *Comentario a las leyes de desvinculación...*, o.c., p. 63.

ambos artículos, ya que se consideraba que la ley desvinculadora era materia puramente civil no tenía que afectar a dichas fundaciones. Si el espíritu de la ley es acabar con la vinculación civil no se entiende la prohibición de instituir capellanías. Del mismo parecer es Gutiérrez Fernández al expresar que “¿a qué fin venía prohibir la fundación de capellanías y patronatos? ¿por ventura trataba de ellos la ley?” (*Códigos o estudios fundamentales...*, o.c., p. 350).

En su artículo 15º prohíbe cualquier adquisición de bienes a las “*manos muertas*” eclesiásticas⁷²⁵, lo que, en consecuencia, fue un duro golpe a los intereses económicos de muchas entidades de la Iglesia. Según palabras de García de Enterría, “*se produce la primera gran sima histórica donde desaparece todo el importantísimo mundo de las fundaciones del Antiguo Régimen*”⁷²⁶. Este precepto se acerca más a un artículo propio de un texto legislativo desamortizador que de una ley desvinculadora.

Reafirmando lo anterior, es realmente curioso que, aunque la ley no es desamortizadora, sino desvinculadora, no obsta para que en el mencionado artículo 15º imponga una norma amortizadora al prohibir a las iglesias y demás comunidades eclesiásticas adquirir bien alguno. Así lo reconoce y critica Francisco Pacheco⁷²⁷ al comentar que no le parece acertado dicho precepto al “*hablar absolutamente de amortización eclesiástica y corporativa, que ni había sido el objeto de esta ley, ni tampoco el de nuestro comentario*” y no ve “*tampoco con qué derecho ni con qué conveniencia se quiere despojar del carácter de propietaria a ciertas instituciones legítimas, que no serán nunca nada si carcen de propiedad*”. También Calderón y Sanabria critica este artículo al decir que “*parece como cosa improcedente e inconexa con el asunto de vinculaciones el tratarse dentro de una ley civil de cosas eclesiásticas*”⁷²⁸.

A pesar de que, como se ha mencionado, el mandato de supresión no incluía de forma explícita a las capellanías, en la práctica se entendió, como así lo mantenía Calderón y Sanabria y que se ha visto anteriormente, que también quedaban afectados y desvinculados los bienes de las capellanías laicales, que pasaron a sus poseedores, práctica que será confirmada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo⁷²⁹. El motivo de ello se encuentra en la casi total identidad entre los mayorazgos y las capellanías laicales, pues son equiparadas a los vínculos o mayorazgos debido a las más que

⁷²⁵ “Artículo 15. Las iglesias, monasterios, conventos y cualesquiera comunidades eclesiásticas, así seculares como regulares, los hospitales, hospicios, casas de misericordia y de enseñanza, las cofradías, hermandades, encomiendas y cualesquiera otros establecimientos permanentes, sean eclesiásticos o laicales, conocidos con el nombre de *manos muertas*, no pueden desde ahora en adelante adquirir algunos bienes raíces o inmuebles en provincia alguna de la monarquía, ni por testamento, ni por donación, compra, permuta, decomiso en los censos enfiteúticos, adjudicación en prenda pretoria, o en pago de réditos vencidos, ni por otro título alguno, sea lucrativo u oneroso”. Ibidem, p. 99.

⁷²⁶ E. García de Enterría, *Constitución, Fundaciones y Sociedad Civil*, en R. de Lorenzo García y M. Cabra de Luna, *Las fundaciones y la sociedad civil*, Madrid 1992, p. 25.

⁷²⁷ J. F. Pacheco y Gutiérrez Calderón, *Comentario a las leyes de desvinculación...*, o.c., p. 64.

⁷²⁸ D. Calderón y Sanabria, *Examen analítico-legal de los bienes vinculados...*, o.c., p. 144.

⁷²⁹ Son ilustrativas las sentencias de 20 de enero de 1870, acerca de la diferente legislación aplicable a las capellanías colativas y a las merelegas, éstas últimas sujetas a la ley de 11 de octubre de 1820; la de 4 de julio de 1873, donde se dice que “*las capellanías merelegas se hallan comprendidas en la ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820, y se sucede en ellas ajustándose a las reglas propias de los mayorazgos*”; y la de 14 de junio de 1890 que declara que una capellanía merelega está sujeta a la ley desvinculadora de 1820.

semejanzas entre ambos, pues los fundadores dejaban bienes raíces o inmuebles con la obligación de que fueran poseídos por siempre por sus herederos, en la forma y orden establecidos por el fundador. El producto de dichos bienes se destinaba obligatoriamente al cumplimiento de ciertas imposiciones piadosas, levantando con ello la carga aneja a la fundación. Aquí los poseedores de estos bienes no son verdaderos propietarios, pues no pueden disponer a voluntad de ellos ni, mucho menos, enajenarlos; en realidad son meros poseedores o usufructuarios.

Pese a que sigue reafirmandose de forma vehemente Calderón y Sanabria al considerar las capellanías laicales como vinculaciones civiles al ser instituciones profanas y sus bienes temporales, sin apariencia ninguna de espiritualidad, sin embargo, hay autores que disienten afirmando que es insostenible la equiparación, sin ningún tipo de matices, entre los mayorazgos y las capellanías laicales debido al fin distinto que persiguen estas últimas, pues aunque concurren en ellas los requisitos esenciales de toda vinculación, su finalidad consiste en velar por el aspecto espiritual de la persona del fundador, de forma, que el conjunto de bienes comprendidos en la vinculación ha de servir para que, con su producto, se realicen un determinado número de misas a favor de su alma. Para el cumplimiento de esta finalidad y de las cargas impuestas, se determina la forma de administrar los bienes, las personas que deben realizarlas y las que cuidarán por su realización⁷³⁰.

La Ley de 11 de octubre de 1820, al igual que todas las del trienio constitucional, fue derogada con la vuelta de Fernando VII mediante Real Decreto de 1 de octubre de 1823. Recobró su vigor mediante el Real Decreto de 30 de agosto de 1836, anteriormente citado. Cabe reseñar que la ley, en conclusión, es bastante confusa y adolece de falta de claridad. Como apunta Maluquer de Motes, en su obra ya citada, *“lo suficientemente oscura para admitir cualquier género de interpretación, como realmente sucederá”*. Y así ocurrirá con la doctrina posterior, que con el restablecimiento de la legislación vinculadora, surgirán muchas controversias y opiniones encontradas y las críticas a los preceptos de la ley de 1820 serán constantes y continuadas, como se ha comprobado con autores como Pacheco, Calderón y Sanabria o Gutiérrez Fernández. La confusión de la doctrina de la época fue tal que autores como Eugenio de Tapia, Pablo Gorosabel y Cirilo Álvarez⁷³¹ recogieron en sus obras las vinculaciones obviando la ley, con excepción del último que alude en su obra a la ley

⁷³⁰ *“Las capellanías poseen una naturaleza jurídica igual que el mayorazgo en cuanto en ellas también concurren los requisitos esenciales de toda vinculación (...), sin embargo, esta forma de vinculación es distinta del mayorazgo en cuanto la finalidad que persigue (...) el velar por el aspecto espiritual de la persona del fundador...”* C. Maluquer de Motes y Bernet, *La fundación como persona jurídica...*, o.c., p. 165. *“No hay analogía, sino gran diversidad por su fin y su organización, entre capellanías y mayorazgos. Es un error el que se apliquen a las capellanías las mismas leyes desvinculadoras y de desamortización que se aplican a los mayorazgos. Todo lo odioso de los mayorazgos ha sido tomado como arma contra las instituciones que, por sus distintos fines, no debieron confundirse sus bienes, ni dictarse sobre ellos disposiciones análogas”*. F. Ruíz de Velasco y Martínez, *Método práctico para los párrocos en la reclamación de memorias-aniversarios y reivindicación de bienes de capellanías...*, o.c., 2ª edición, pp. 300-303.

⁷³¹ E. de Tapia, *Febrero Novísimo o librería de Jueces, Abogados y Escribanos*, Valencia 1828, Tomo II, Título III: de los mayorazgos, patronatos, capellanías y sus agregaciones, pp. 1 a 129. P. Gorosabel, *Redacción del Código Civil de España esparcido por los diferentes cuerpos del derecho y leyes sueltas de esta nación*, Tolosa 1832, Parte II, Título IV: de los mayorazgos, pp. 63-72. C. Álvarez Martínez, *Instituciones de Derecho civil*, Valladolid 1840, Libro III, Título IV: de los mayorazgos, pp. 210-235.

desvinculadora de 1820, a la que denomina Real Decreto de Cortes de 27 de septiembre del año citado.

La confusión llegará hasta los primeros códigos civiles de carácter privado publicados en 1843, los cuales seguían incluyendo en sus artículos tanto normas o preceptos sobre mayorazgos, capellanías y fideicomisos, como normas desvinculadoras que indicaban su extinción⁷³². También es cierto que la derogación y posterior restablecimiento de las leyes desvinculadoras conllevó una errónea interpretación de las mismas, a la vez que fueron tergiversadas de forma continuada, pues no se llegó a comprender con meridiana exactitud cuál había sido la voluntad y el espíritu del legislador.

2.1.1.2.- La Ley de 29 de junio de 1821.

Finalmente, la política de reforma eclesiástica comenzada en Cádiz se plasmó durante el Trienio en varias disposiciones relacionadas con la obra desamortizadora, fruto de la cual es esta ley que aparte de incidir en el patrimonio del clero regular sobre reducción del diezmo y primicias, a la que ya se ha aludido de forma muy somera, se incluyó en la misma un precepto, que aunque con eficacia más bien nula, sí que influyó en la posterior legislación de capellanías de sangre. No es fácil delimitar la naturaleza de la misma, es decir, si es una norma desvinculadora o desamortizadora. Por razones de proximidad histórica se ha incluido después de la ley desvinculadora de 1820. En su artículo 4º manda que los bienes de las capellanías vuelvan a sus familias:

“Para indemnizar a los seculares partícipes de diezmos, se aplicarán todos los bienes raíces rústicos y urbanos...; y en cuanto a las fincas pertenecientes a prebendas, capellanías o beneficios de patronato pasivo de sangre, muertos los actuales poseedores, deben volver a sus respectivas familias”.
(Colección de los decretos y órdenes generales..., o.c., Tomo VII, fol. 246).

Nada dispone sobre las capellanías de patronato activo. Lo dispuesto en el artículo citado es sustancialmente lo que más adelante establecerá la ley de capellanías familiares de sangre de 19 de agosto de 1841, con lo que quedarán extinguidas las capellanías a que dichos bienes pertenecían, los cuales habían de pasar a las familias como plena propiedad de las mismas y libres de todo gravamen o carga espiritual.

Este decreto, como todas las normas del período constitucional, sería anulado en 1823, sólo dos años más tarde de su entrada en vigor. Pero el primer paso decisivo en la desamortización de esta clase de bienes ya estaba dado.

2.1.2.- Disposiciones desamortizadoras sobre capellanías.

Se ha constatado y comprobado que la desamortización fue un complicado proceso con vertientes jurídicas, sociales, económicas y políticas que ocupó todo el siglo XIX con la publicación de multitud de disposiciones normativas de toda índole y rango, que fácilmente superan varias centenas. Sólo con ver el índice del *Manual*

⁷³² D. F. de P. y D. J. B. S., *Código Civil Español, redactado en vista de los diferentes cuerpos del derecho, y demás leyes decretales y reales órdenes que se han publicado en España hasta nuestros días*, Barcelona 1843.

completo de desamortización civil y eclesiástica de Ignacio Miquel y José Reus, Madrid 1856 y 1861, se aprecia la ingente legislación publicada y sólo entre 1855 y 1861.

Pero las leyes generales desamortizadoras no afectaron a los bienes de las capellanías colativas de sangre por tener una legislación específica que las exceptuaba de la desamortización, o mejor dicho, dichas leyes, en general, las declararon exceptuadas de la desamortización. Aún así, no se libraban de las feroces críticas liberales, las cuales se vertían de manera continuada en la prensa liberal del momento, en las que se pedía la extinción de todas las capellanías y se proponían medidas para la libre circulación de la propiedad⁷³³. También se denunciaba y se pedía la suspensión de los apremios que se habían decretado por impago al incumplir de la Real Cédula de 10 de marzo de 1817, en la que, como ya se ha comentado, se exigía el abono a los compradores de bienes de capellanías enajenados antes de la Guerra de Independencia, y que habían satisfecho el precio al gobierno intruso, todo ello hasta que se sometiese a las Cortes la derogación de dicha norma⁷³⁴.

La primera medida desamortizadora importante que afectó no sólo a los bienes del clero secular sino también a las capellanías fue la Ley de 29 de julio de 1837 sobre dotación y culto del clero. En su artículo segundo, como ya se ha citado anteriormente, se declaraban como bienes nacionales los bienes del clero secular, exceptuando de tal declaración, en su artículo tercero, las prebendas, capellanías, beneficios y demás fundaciones de patronato pasivo de sangre. Con ello se deducía que los bienes de las capellanías de sangre de patronato activo quedaban sujetos a la desamortización. Sin embargo, no llegaron a ser desamortizados al disponer el artículo 11 que los bienes del clero fueran vendidos por sextas partes a partir de 1840, lo que no se pudo llevar a la práctica al ser derogado dicho artículo y el primero por Ley de 16 de julio de 1840.

Posteriormente la Ley de 2 de septiembre de 1841, durante la regencia de Espartero, sí que tuvo cumplida aplicación. Declaró como bienes nacionales todas las propiedades del clero secular y fueron declarados en venta. Pero en el artículo sexto se declaran como excepciones a la desamortización las capellanías de sangre, tanto las de patronato activo como pasivo⁷³⁵. Esta generosidad sobre las capellanías no fue hecha

⁷³³ “Las capellanías de sangre o de familia son una de aquellas instituciones en cuyas manos se hallan estancadas numerosas fincas. Hay que manifestar el estado de abandono en que se encuentran y el continuo deterioro que están sufriendo pues á todas horas tenemos á la vista, y es bien común á cuantas por diversos títulos se hallan fuera de circulación. De aquí es que si en un solo día pudieran extinguirse todas las instituciones que estancan la propiedad, los liberales creeríamos haber dado un paso bien avanzado en el curso de nuestra revolución.” *El Eco del Comercio*, nº 754, de 23 de mayo de 1836. BNE. Hemeroteca digital.

⁷³⁴ La censura no quedaba sólo en esas peticiones, sino que también se atacaba al gobierno de Fernando VII con las siguientes palabras: “Cuando regía en España el gobierno más duro y absoluto que jamás se ha conocido, y cuando un espíritu reaccionario presidía todas sus deliberaciones, se decretó la Real Cédula de 10 de marzo de 1817 [...]. No es extraño que el gobierno de 1817 [...] antepusiese la destrucción y ruina de sus súbditos a la protección constante y decidida que debiera dispensarles”; y sigue contra el gobierno actual al decir que cumple la prensa la tarea de denunciar los abusos, siendo uno de los más graves “del reinado de las leyes bajo el gobierno liberal...”, por lo que “es imposible que se aclimate la libertad en nuestro país. Esos rancios hábitos de despotismo... es necesario que desaparezcan ante el imperio de la ley... y no se contraríen los principios en que descansa el sistema constitucional”. *El Español*, nº 108, de 16 de febrero de 1836. BNE. Hemeroteca digital.

⁷³⁵ “Art. 6º. Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos anteriores: Primero. Los bienes pertenecientes a prebendas, capellanías, beneficios y demás fundaciones de patronato de sangre activo o pasivo”. *Gaceta de Madrid* del 5 de septiembre de 1841. *Colección de las*

para favorecer a la Iglesia o para dejar en su poder algunos bienes sino porque ya se había previsto su enajenación por leyes anteriores. Además, aunque las capellanías fueron exceptuadas de la venta, no lo fueron de la declaración como bienes nacionales, por lo que el gobierno las podía enajenar en cualquier momento que creyese oportuno.

Con la publicación del Real Decreto de 11 de marzo de 1843⁷³⁶ se fija el verdadero sentido de las varias excepciones que comprende el artículo 6º de la precitada Ley de 2 de septiembre de 1841, resolviendo las dudas que habían surgido sobre su verdadera aplicación, declarando comprendidas en la excepción de dicho artículo 6º las capellanías o fundaciones de patronato activo o pasivo familiar.

El último empuje desamortizador contra los bienes eclesiásticos fue la Ley de 1 de mayo de 1855 y la Ley de 11 de julio de 1856. La de 1855 declara en su artículo primero en estado de venta, entre otros, los bienes del clero. En el artículo siguiente expresa los bienes que exceptúa de la venta, pero no incluye explícitamente a los bienes de las capellanías colativas, ya que sólo menciona los bienes de capellanías eclesiásticas destinadas a instrucción pública. Parece ser que no era intención del legislador la venta de los bienes de las capellanías colativo-familiares, pues mediante Real Decreto de 6 de febrero de 1855 se había restablecido la vigencia de la Ley de 19 de agosto de 1841, que se analizará más adelante, y que posibilitaba a los familiares del fundador que se les adjudicasen los bienes de las capellanías de sangre. Lo dicho se corrobora con la Ley de 15 de junio de 1856, aclaratoria de la de 1841, en la que se disponía que si los familiares no ejercitaban su derecho solicitando la adjudicación los bienes quedaban sujetos a la Ley de 1 de mayo de 1855⁷³⁷.

De todas formas, las posibles dudas que pudieran haberse causado quedaron aclaradas con la Ley de 11 de julio de 1856, la cual determinó que las capellanías colativas de sangre no estaban comprendidas entre los bienes del clero que debían ser vendidos⁷³⁸.

2.2.- Legislación específica sobre capellanías colativas.

leyes, decretos y declaraciones de las Cortes..., o.c., tomo XXVII, p. 615. V. Covián, *Desamortización*, en *Enciclopedia Jurídica Española...*, o.c., p. 429.

⁷³⁶ “Artículo 1.º En los casos en que los bienes de una prebenda, beneficio, capellanía o fundacion. de patronato familiar, activo o pasivo, hubieran consistido en una dotación confundida hoy en la masa capitular de catedrales o colegiatas, se entenderán comprendidos en la excepcion marcada por el párrafo 1.º del art. 6.º de la ley de 2 de setiembre de 1841, y se dejarán a disposición del poseedor del beneficio mientras viva, y de los parientes llamados para despues de su muerte, o bien los mismos bienes de la dotacion primitiva si fuesen conocidos...” *Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes...*, o.c., Madrid 1843, tomo XXX, p. 118. M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 1.º Legislación, p. 84. Periódicos: *El Católico*, nº 1110 de 15 de marzo, *El Eco del Comercio*, nº 197 y *El Espectador*, nº 591, los dos últimos de 16 de marzo de 1843. BNE. Hemeroteca digital.

⁷³⁷ “Art 3º. Los interesados que no reclamaren la adjudicación dentro de veinte años contados desde la publicación de la ley de 19 de agosto de 1841, perderán todo derecho y se transmitirá a los siguientes en grado, que deberán ejercitarlo dentro del término de los cuatro años siguientes, después de los que, los bienes de las capellanías se declaran comprendidos en la ley de 1º de mayo de 1855”. *Gaceta de Madrid* de 18 de junio de 1856. *Colección Legislativa de España...*, o.c., tomo LXVIII (1856), p. 446. M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 1.º Legislación, p. 89.

⁷³⁸ Véase: *Colección Legislativa de España...*, o.c., tomo LXIX, p. 146.

Como se ha podido observar las principales disposiciones desamortizadoras no se extendieron a los bienes de las capellanías colativas de sangre por la índole especial de estas fundaciones, lo que no permitió a los legisladores incluirlas en las leyes generales desamortizadoras, sino que, exceptuadas de éstas, fueron objeto de especiales leyes y disposiciones. El motivo de este respeto era debido a que sobre los bienes dotales de las capellanías convergían, aparte de los intereses de la Iglesia como propietaria o encargada de vigilar por el cumplimiento de las cargas, los de las familias de los fundadores, a quienes no les era indiferente la suerte que podían correr los mismos, pues tenían una expectativa de disfrute sobre dichos bienes, caso del patronato pasivo, o la posibilidad de nombrar a quien debía disfrutarlos⁷³⁹.

2.2.1.- La Ley de 19 de agosto de 1841 y su decisiva influencia sobre las capellanías colativas.

A).- Antecedentes y discusión parlamentaria del Proyecto de Ley.

La prensa de 1841, en concreto los periódicos *El Eco del Comercio*, nº 2529 y *El Católico*, nº 399, publicaban el 3 de abril del año citado, en su segunda página y en la 22, respectivamente, que en la sesión de las Cortes del día 2 del mismo mes y año se había presentado una proposición del Sr. Sánchez de la Fuente para que los patronatos y capellanías de sangre se considerasen en adelante como vínculos civiles (BNE. Hemeroteca digital⁷⁴⁰). No era la primera vez, ya que dos años antes, el 7 de enero de 1839, ya se había presentado en dichas Cortes (Congreso de los Diputados) un proyecto de ley sobre capellanías de sangre, según anunciaba, de forma escueta, el citado periódico *El Eco del Comercio*, nº 1713, del siguiente día. También en 18 de abril de 1840 se había vuelto a presentar otra vez el obstinado proyecto de ley, según relata el mismo periódico en su nº 2180 y *El Católico*, nº 53, de 22 de abril (BNE. Hemeroteca digital):

“Se da cuenta de los siguientes: 11º. Proyecto de ley que presenta el señor Quijana sobre patronatos y capellanías de sangre, el cual después de haber sido apoyado por su autor en un breve discurso, fue tomado en consideración por el congreso, y pasa á las secciones para el nombramiento de su respectiva comisión.”

⁷³⁹ M. González Ruiz, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España...*, o.c., p. 412.

⁷⁴⁰ “Leyose la proposición de ley que sigue de los señores Sánchez de la Fuente, Gil Sanz (...): Artículo único. Los patronatos y capellanías de sangre se considerarán como vínculos civiles, y los que se hallen vacantes se adjudicarán en este concepto”. A continuación, pidió la palabra el Sr. Sánchez de la Fuente y dijo: “La amortización de la propiedad es conocido de todos que está representando el espíritu de una época de la sociedad muy distinta de la nuestra. La propiedad acumulada y amortizada en pocas manos sirvió para aumentar el lujo, esplendor y comodidades de ciertas clases, y para condenar al pueblo a vivir en la miseria y la abyección. La faz de la sociedad ha variado enteramente. Nuestro principio es y ha sido hace algún tiempo la desamortización de la propiedad, porque teniéndola libre y derramada por todas las clases de la sociedad podría ser este un agente muy poderoso de su prosperidad. La voluntad de los fundadores conocerán todos los Diputados que no puede ser eterna (...), que apenas hay pueblos de veinte vecinos en que los patronatos y capellanías no se hayan apoderado de los mejores heredamientos. Apenas hay pueblo donde no haya llegado esa irrupción, porque así puede llamarse ese furor con que en cierto tiempo se fundaron las capellanías y patronatos”. Diario de las sesiones del Congreso de Diputados, Tomo I, Madrid 1841, número 14, sesión del 2 de abril, p. 66.

La siguiente noticia se encuentra en la sesión del Congreso de fecha 15 de julio de 1841 en la que *“púsose a discusión la ley sobre desamortización de los bienes pertenecientes a capellanías colativas y patronatos, se aprobó sin discusión por estar calcada sobre los principios ya recibidos acerca de vinculaciones y desamortización eclesiástica. También de esta ley deben reportar gran provecho los pueblos, lo mismo que de la de vinculaciones, con la cual está relacionada intimamente”*, según publicó *El Eco del Comercio*, nº 2633, del día 16 de los corrientes. El periódico *El Católico*, nº 503, página 121, del mismo día hacía también una mención sobre la aprobación la jornada anterior de *“los once artículos del dictamen de la comisión sobre bienes pertenecientes a capellanías”* y se alarmaba y sorprendía de la rapidez con que se aprobaban los distintos proyectos de ley en el Congreso: *“la prontitud con que sin discusión se aprueban proyectos de la mayor trascendencia, no puede menos de asombrar a los que conociendo toda su importancia preveen los fatales resultados que habrá de producir semejante ligereza. ¡Desgraciada España si el Señor no se apiada de tantos males como nos abruman y de los que de nuevo nos amenazan!* (BNE. Hemeroteca digital).

Aprobada por el Congreso de los Diputados la proposición de ley de varios señores diputados sobre adjudicación de los bienes de capellanías colativas, y convertida en proyecto de ley se resolvió remitirlo al Senado, además del de dotación de culto y clero. El 19 de julio se nombró una comisión para informar sobre dicho proyecto de ley y con fecha 9 de agosto se leyó el dictamen de la comisión sobre el mismo proyecto de ley (Apéndice segundo al nº 66. Diario las sesiones de Cortes. Senado). El 16 de agosto, según el orden del día, leído el dictamen de la comisión se procedió a la discusión del proyecto de ley sobre las capellanías colativas constituido por once artículos, tomando la palabra el obispo de Córdoba que asumió una defensa de las capellanías recalando que este asunto necesitaba ser meditado de forma detenida, y rebatiendo los argumentos de la comisión, pues razonó que el número de capellanías se había moderado desde el siglo XVIII y que si las vinculaciones eclesiásticas han traído pocos bienes a la Iglesia y producido graves males al Estado era debido a que los poseedores de capellanías no han cumplido la voluntad de los fundadores. A continuación manifestó que aquéllas han dado muchos bienes a la Iglesia y que los pueblos tienen derecho a conservarlas y que debe respetarse el fin piadoso y espiritual de las mismas junto a la voluntad del fundador. Para finalizar, propuso que no se deliberase sobre este proyecto de ley hasta que no se tratase el del arreglo del culto y clero⁷⁴¹. Le rebatió el senador Sánchez Fernández manifestando la evidente relajación de la disciplina eclesiástica y que los capellanes no ayudaban a llevar la pesada carga de los párrocos. Siguió con una enumeración de los males que tenían las capellanías, entre

⁷⁴¹ “El Sr. Obispo de Córdoba: este es uno de los asuntos que también exigen meditación muy detenida: la comisión ha reducido su dictamen a indicar los deseos de los varones sobresalientes en todas carreras conformes en la extinción de estas vinculaciones eclesiásticas, que en su concepto han traído pocos bienes a la Iglesia y producido graves males al Estado, oponiéndose al progreso de las industrias y arruinando a las familias con los pleitos de sucesión en cada vacante, por lo cual propone la aprobación del proyecto. Yo creo que los deseos de moderar el número de capellanías se refiere a los tiempos en que fueron tan frecuentes estas fundaciones que en muchas partes pudieron tocar en exceso; pero esto se halla corregido totalmente (...) y las pocas que se han fundado desde el último tercio del siglo pasado, especialmente desde que por Real resolución de 20 de febrero de 1796 y circular de 20 de septiembre de 1799, que forman la ley 6ª, tit. 12, lib. 1º de la Novísima Recopilación, mandó el señor D. Carlos IV que no se procediese a la fundación de capellanías sin la Real licencia (...) Diario de Sesiones del Senado. Tomo Único, Madrid 1841, p. 548.

otros “la vinculación de una porción considerable de bienes” que podrían ponerse en circulación y en poder de los particulares, sosteniendo que se necesita una reforma del clero y la supresión de las capellanías (Diario de Sesiones del Senado..., o.c., p. 548).

Abierto el debate se leyó el artículo 1º y se pasó a su discusión, presentándose una enmienda para que se añadiese “familiares o de sangre”, a lo que se opuso la comisión, pues dicho artículo con la palabra “colativas” ya comprendía el que fuesen de sangre, precisando los distintos tipos de capellanías y diferenciando las de sangre o colativo-familiares de las no familiares o de libre elección, y finalmente, sin más controversia fue aprobado⁷⁴². A continuación, se leyó el artículo 2º y se pasó también a discutirse por la duda planteada por el Sr. Ondovilla y siendo respondido por el senador Gómez Becerra en la que expresó con claridad que el artículo 2º ya comprendía los casos expuestos⁷⁴³.

⁷⁴² “Sr. Gómez: Pido al Senado tenga a bien admitir la enmienda que sigue en el art. 1º de este proyecto: Los bienes de capellanías, familiares o de sangre, a cuyo goce...

Sr. Ladrón de Guevara: la comisión no puede estar conforme, porque cree que el art. 1º abraza lo mismo que se establece en la enmienda del Sr. Gómez, puesto que precisamente se trata de capellanías de sangre.

Sr. Gómez: el Senado no ha tenido a bien admitir la enmienda que había yo hecho a este artículo (...) pero séame permitido a los menos que ruegue a la comisión, y el mismo Senado, tenga la bondad de declarar que cuando dice colativas no entienda esta palabra precisamente según lo que significa en el derecho canónico, sino que lo que quiere decir es que los bienes de las capellanías familiares o de sangre, sean o no sean colativas, se han de adjudicar o distribuir como libres y civiles a la persona o personas que tengan derecho a ellos según el grado de parentesco que tengan con los fundadores o con las familias que llamaron a su goce (...)

Sr. Sánchez Fernández: Si es que la palabra colativa ha de ser motivo de pleitos y contestaciones, necesario es que para evitarlos quede fijada su significación. Se llaman capellanías colativas las que han sido erigidas en beneficios eclesiásticos con autoridad del ordinario, que son un título perpetuo para la ordenación, y cuyos bienes se han incorporado a los de la iglesia. Las demás capellanías que no tengan estas condiciones no son colativas aunque sean de pingüe dotación y se hayan ordenado a título de ellas. Llámense capellanías o patronatos laicales, memorias de misas, aniversarios, que son y se reputan por vinculaciones con carga piadosa, que no son título por sí mismas para la ordenación (...)

Unas y otras capellanías, o son familiares y de sangre, o de libre presentación. En el primer caso son llamados a obtenerlas por el orden y en la forma prescrita en la fundación los parientes del fundador o los de aquel que señaló por idóneo para la sucesión. En el segundo cualquiera puede ser presentado para capellán, no teniendo impedimento, por la libre elección del patrono.

Supuesto esto, fácil es concebir que no es lo mismo capellanía colativa que capellanía familiar o de sangre; que hay colativas de libre presentación, o a cuyo goce no están llamadas determinadas familias; que de ellas no se trata en esta ley, como ni de las capellanías o patronatos laicales, o memorias de misas, sino de las erigidas en beneficio eclesiástico, y para las que solo pueden ser presentados parientes del que las fundó o del que señaló por tronco para la sucesión (...); y que finalmente pueden darse y se darán muchos casos en que para nada valdrá la proximidad de parentesco con el que fundó si su voluntad fue la de no radicar la sucesión en su propia familia.

Creo que baste lo dicho para satisfacer los deseos del Sr. Gómez, y dejar contestadas las dificultades que se le han ofrecido contra el artículo que se discute.

Sin más discusión se aprobó el art. 1º.” Diario de sesiones del Senado..., o.c., pp. 551-553.

⁷⁴³ “Leído el 2º, dijo el Sr. Ondovilla: no trato de atacar este art. 2º ni la forma en que se expresa. Trato sí de que se cumpla lo que a mi juicio le falta (...). Hay capellanías en las cuales los fundadores establecieron que se llamase a los parientes dentro del cuarto y quinto grado, y fue su voluntad no llamar a los parientes que estuvieran fuera de estos grados, dejando al arbitrio de los patronos el que pudieran nombrar libremente a las personas que quisieran, fueran o no parientes, y excluyendo del derecho que tenían a los parientes fuera de aquel grado. Ahora bien, las capellanías que se encuentran en el caso de tener parientes que no estén dentro del cuarto o quinto grado, y que pretendan derecho a los bienes de estas capellanías, ¿podrán con justicia reclamar estos bienes?

Se presentan los parientes del patrono y del fundador fuera del quinto grado y se presentan los parientes del patrono y los del fundador dentro del cuarto y quinto grado; pregunto yo: ¿a quién se adjudican

No habiendo pedido la intervención ningún senador más se procedió a la votación del citado artículo, quedando aprobado. El 3º se aprobó sin ninguna discusión. Seguidamente se aprobó el 4º, tras una puntualización sin ser impugnado el artículo. Fueron aprobados sin ningún debate o discusión los artículos 5º, 6º, 7º, 8º y 9º, previa petición de una aclaración del artículo 8º solicitada por el obispo de Córdoba en la que preguntaba qué tribunales serán los competentes en los pleitos pendientes sobre capellanías colativas, si los eclesiásticos donde habían comenzado, o los civiles donde se lleven. Fue contestado por el Sr. Gómez Becerra diciendo que esta pregunta no tenía ninguna dificultad pues de eso conocerá el tribunal competente si no se hubiese dado esta ley, es decir, que se respetan los fallos de los tribunales (eclesiásticos) y los que se den en el futuro⁷⁴⁴. Leído el artículo 10º se procedió a discusión sobre si era mejor que el tribunal fuese el del partido donde radicasen los bienes de la capellanía o el del lugar de la fundación., a lo que se respondió que al tribunal donde se encuentran los bienes o la mayoría de bienes de la dotación⁷⁴⁵. Puesto a votación, el artículo quedó aprobado. Al final, el artículo 11º fue leído y aprobado sin discusión. Se votó, a continuación dicho proyecto de ley, siendo aprobado por 52 votos a favor frente a 23. La noticia fue publicada en distintos periódicos como *El Católico*, nº 535, pp. 382-384 y *El Eco del Comercio*, nº 2601, del martes 17 de agosto. Éste último decía: “Con la publicación de

estos bienes, a los parientes del fundador que estaban dentro del cuarto o quinto grado, o a los que estaban fuera de él?

Yo creo que de esto se saldría añadiendo al artículo lo siguiente: “siempre que esten dentro de los grados designados por el fundador”. Con esta adición se excluyen los parientes que están fuera del cuarto y quinto grado, y vienen los del fundador a recibir los bienes, acabándose los pleitos que pudieran seguirse de una cosa sencilla.

Sr. Gómez Becerra: la fundación ha señalado dos casos: uno el de la existencia de parientes hasta el cuarto o quinto grado; otro el de la existencia de parientes después del cuarto o quinto grado. ¿En cuál de estos casos nos hallamos? ¿Estamos próximos a la fundación de manera que todavía hay parientes dentro del cuarto o quinto grado? Entonces la capellanía es de aquellas a cuyo goce están llamadas ciertas y determinadas familias con arreglo al art. 1º. Por lo tanto creo que la dificultad del Sr. Ondovilla no es obstáculo para que se apruebe el artículo”. Diario de sesiones del Senado..., o.c., pp. 553-554.

⁷⁴⁴ “El Sr. Obispo de Córdoba: pido la palabra para una aclaración. Dice el artículo anterior que los pleitos que se hallen pendientes sobre capellanías colativas podrán continuar: desearía saber en qué tribunales, si en los eclesiásticos, donde han comenzado, o en otros civiles donde se lleven.

El Sr. Gómez Becerra: No se ha contestado a una duda que propuso el Sr. Obispo de Córdoba (...), ha preguntado que quién ha de fallar los pleitos para la adjudicación de los bienes de las capellanías. El juicio o intervención judicial de que habla el art. 10 no se extiende a eso; de esos negocios ha de conocer el tribunal que conocería si no se hubiese dado esta ley, porque esta ley no ha tratado de introducir novedad alguna; ha respetado los fallos que tienen dados los tribunales, y respetará también los que den en lo sucesivo”. Ibidem, p. 554.

⁷⁴⁵ “El Sr. Ondovilla: no sé si sería más útil el que los tribunales que entendiesen en el arreglo de estos negocios fuesen los que están situados en los puntos en donde se hallan las fundaciones para que allí vayan a usar de su derecho los que lo tengan por conveniente, porque comúnmente los parientes de los fundadores viven en el punto donde se hizo la fundación; y si, por ejemplo, hay uno que tiene una capellanía fundada fuera de la corte, en el pueblo de su residencia, pero que esta capellanía tiene una casa en Madrid, ¿habrá de venir a Madrid porque aquí está la casa? Esto sería causarle un perjuicio muy grande. Creo por lo mismo más conveniente que estas cuestiones se ventilen en los puntos donde están las fundaciones.

El Sr. Gómez Becerra: otra impugnación se ha hecho a este artículo [el 10º]. Dice el Sr. Ondovilla que por qué el tribunal real ordinario que haya de entender en la división de estos bienes ha de ser el que esté situado en los puntos donde radiquen las fincas, y no el que esté en el punto donde se haya hecho la fundación. ¿Y entonces qué se debía hacer? El Sr. Ondovilla lo sabe muy bien; sabe que cuando se trata de acciones reales, lo primero que atribuye el fuero al juez es el fuero de la cosa sita, y esto en principio de legislación no se puede alterar jamás”. Ibidem, p. 554.

las leyes que ha sancionado el regente del reino, y con la votación definitiva de las importantísimas sobre mayorazgos y sobre capellanías, complemento del gran sistema legislativo de la desamortización civil y eclesiástica, fue perfectamente aprovechada la sesión de ayer en el senado, el cual discutió primero y aprobó por menor las dos referidas leyes.” (BNE. Hemeroteca digital).

Por consiguiente, aprobada y sancionada por el regente del Reino, el general Baldomero Espartero, duque de la Victoria, la ley en 19 de agosto de 1841, el 23 de los corrientes era publicada en los periódicos, lo cual recoge *El Espectador*, nº 23, en su edición de Madrid, en su primera página, y unos días después, el 27 del mismo mes y año, *El Católico*, nº 545, en sus páginas 460 a 461, entre otros.

B).- Análisis de la Ley.

Es la primera ley que tiene por objeto aplicar a las capellanías colativas de sangre la desamortización en todas sus consecuencias⁷⁴⁶. Se la conoce generalmente como la ley de capellanías de sangre; pero esta denominación no procede de su texto, sino de su sentido, debido a que el parentesco al que alude es de consanguinidad y el llamamiento (véase el artículo 1º) es por regla general el fundamento de la adjudicación de bienes que en ella se dispone.

Esta norma sufrió, a lo largo de su vida legislativa, varias derogaciones y a la vez fue restablecida como consecuencia de los vaivenes políticos debidos a la alternancia en el poder de progresistas y moderados, acusada característica decimonónica. Fue derogada por el Concordato de 1851 y por un Real Decreto de 30 de abril de 1852 y restablecida nuevamente por otro de fecha 6 de febrero de 1855, para posteriormente ser suspendida por el Real Decreto de 28 de noviembre de 1856 y puesta otra vez en vigor, respecto a algunos puntos, por el Convenio de 1867. Es la base de la desamortización de las capellanías colativo-familiares. Esta ley fue promulgada en pleno proceso desamortizador, unos días antes de la Ley de enajenaciones de bienes del clero secular del 2 de septiembre de 1841.

Esta importante disposición normativa tiene dos precedentes, la ya citada Ley de 29 de junio de 1821, sobre reducción del diezmo y primicias, y la proposición aprobada en sesión de las Cortes de 28 de octubre de 1834, que afectaba a las capellanías de sangre y a las laicales, pero que no llegó a entrar en vigor. Su tenor literal es el que sigue:

⁷⁴⁶ Especialmente crítico con esta ley de 1841 es Campos y Pulido que en relación a la misma señala: *“Fue ésta más lejos aun que las anteriores, y puede decirse que completa y redondea el pensamiento iniciado, ya que, mandadas suprimir y suprimidas por la de 1820 las Capellanías, y prohibida la fundación de otras nuevas, la del 41 las mandó adjudicar en concepto de libres, y sin tener para nada en cuenta el cumplimiento de las cargas de naturaleza espiritual, en atención a que dicha adjudicación se entenderá con la obligación de cumplir las cargas, pero sin mancomunidad. Se prescindió, por consiguiente, con esta ley de la voluntad de los fundadores y de nada pudo servir que éstos, queriendo perpetuar su nombre y establecer sufragios permanentes, las hubiesen instituido; con el tiempo, de las Capellanías no había de quedar más que un leve recuerdo, y sus bienes dotales, espiritualizados con estricta sujeción a disposiciones canónicas, legítimas y justas, entraban en la libre contratación”*. J. Campos y Pulido, *Legislación y jurisprudencia canónica...*, o.c., pp. 385 y 386.

*“Que se extingan las capellanías colativas, laicales, memorias de misas y legados píos de cualquiera clase y condición que sean; las vacantes, desde el momento; las poseídas, al fallecimiento de su poseedor: que por su muerte, los bienes de las de sangre pasen a los herederos legítimos dentro del cuarto grado civil, si los hubiere, en la condición de fincas libres, y que no habiendo tales parientes, como asimismo en todas las fundaciones expresadas que no son de sangre, recaigan sus bienes en el Crédito público para la amortización de la Deuda del Estado”*⁷⁴⁷.

La Ley de 19 de agosto de 1841 seguirá la finalidad esencial perseguida por estos dos antecedentes legislativos, cual es el cambio de la titularidad del dominio sobre los bienes de las capellanías colativas de sangre, que por obra de la precitada ley pasan a adjudicarse a la familia (o descendientes) del fundador. El artículo primero así lo dispone:

“Los bienes de las capellanías colativas a cuyo goce están llamadas ciertas y determinadas familias, se adjudicarán como de libre disposición a los individuos de ellas en quienes concurra la circunstancia de preferente parentesco, según los llamamientos, pero sin diferencia de sexo, edad, condición ni estado”.

(Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes..., o.c., tomo XXVII, p. 549).

En esta disposición se contempla la supresión de las capellanías de sangre y su desaparición del campo del Derecho canónico. Se parte del supuesto de que tales capellanías habían generado escasos bienes a la Iglesia y, a la vez, muchos males al Estado⁷⁴⁸. Sus bienes, que pertenecían en propiedad a la Iglesia y que se habían desmembrado de las familias, se creyó que debían volver a ellas, por lo que, en virtud de esta ley, pasaban a los parientes que, según las bases de la fundación, tuviesen el derecho de disfrute de la capellanía (patronato pasivo). Así lo expresa Campos y Pulido, al decir de forma rotunda: *“He aquí de una plumada y por la sola voluntad del legislador civil, suprimidas en definitiva las capellanías”*⁷⁴⁹.

La norma no habla, en ningún momento, de capellanías simplemente eclesiásticas, sino de capellanías eclesiásticas colativas, es decir, fundadas por particulares con bienes profanos pero instituidas y aprobadas por la autoridad eclesiástica (el Ordinario del lugar), pasando sus bienes a ser espiritualizados. Por tanto, la enunciación “*capellanías colativas*” es específica y restrictiva.

Cuando expresa “*a cuyo goce*” lo hace de forma genérica, común, amplia y hasta, se podría decir, indeterminada, pues de diversos modos canónicos que no son la ordenación se puede gozar o disfrutar los bienes de una fundación eclesiástica, como

⁷⁴⁷ Diario de Sesiones de Cortes de 30 de octubre de 1834. Estamento de Procuradores del Reino (1834-1836). Madrid 1869. Suplemento a la Gaceta de Madrid de 29 de octubre de 1834.

⁷⁴⁸ “*Las capellanías, desconocidas en los once primeros siglos, y nacidas y multiplicadas en los de la ignorancia y superstición, han causado graves males dando a la iglesia ministros sin vocación y privando al Estado de individuos que podrían haberle sido muy útiles*”. Disertación del senador Manuel Ventura Gómez. Diario de sesiones del Senado..., o.c., p. 551.

⁷⁴⁹ J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 41.

por ejemplo, en una capellanía colativa simple o de libre presentación, en la que no es familiar el patronato activo. Para el fin de la presente ley, las palabras “*a cuyo goce*” están sujetas o subordinadas a las de “*capellanías colativas*” y éstas a las de estar llamadas a suceder en “*ciertas y determinadas familias*”, por lo que el goce de los bienes ha de ser título perpetuo de ordenación, siendo el parentesco y el llamamiento la razón sucesoria, en cuenta al patronato pasivo.

Continuando con el análisis de las palabras de este primer artículo, la manifestación “*están llamadas*” parece que esta ley se limita, como así ocurre, a las capellanías colativas que resultan así por fundación, ya que el llamamiento de patronos y capellanes es propio de ellas y no de cualquier otro título sucesorio. Prosigue con “*ciertas y determinadas familias*”, lo que quiere decir que se reputarán como tales las familias cuyo tronco se determine por la fundación.

Debe considerarse también “*familia cierta y determinada*” aquella de la que no puede dudarse, aun cuando no se designe su tronco si expresa una circunstancia identificadora del mismo y constitutiva de la familia, como unos determinados apellidos, pues la identidad de los mismos, ligados por vínculos de sangre o familiares, presuponen necesariamente un origen troncal y la sucesión de generaciones unidas por lazos de consanguinidad es lo que constituye familia.

El artículo habla de llamamientos lineales y no personales. Es lógico y normal, porque al cabo de varias generaciones se extinguen estos llamamientos y al no ser ya posibles, se debe recurrir a los lineales. Pero si hubiese capellanías en las que todavía no se hubiesen agotados los personales, no hay duda que deben ser llamadas antes que otras, ya que el llamamiento del fundador es ley.

Según afirma Calderón y Sanabria, del primer extremo del artículo que dice “*a cuyo goce están llamadas ciertas y determinadas familias*” se entienden cuatro conceptos, Primero: aquellas capellanías, en que los fundadores, prescindiendo de sus parientes, llaman al goce a ciertas y determinadas familias sin relación de consanguinidad. Segundo: aquellas capellanías de patronato activo familiar, en relación al artículo 4º de la ley. Tercero: aquellas capellanías en las que los fundadores llaman a ciertas y determinadas familias de su parentela. Cuarto: aquellas capellanías en las que los fundadores llaman al pariente más cercano suyo. “*Así es que todos los que sean llamados al goce de las capellanías, aunque sean parientes o no de los fundadores pero fuesen de su parentela, y aun los excluidos están comprendidos en este primer extremo del artículo*”⁷⁵⁰.

Respecto a “*se adjudicarán*”, dichas palabras tienen un doble efecto; por un lado se secularizan los bienes de las capellanías colativas de sangre y, por otro, se ordena a los tribunales la ejecución de esta importante decisión legislativa. Lo contrario ocurre en la ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820, en la que primero se desvincula y, posteriormente, se ordena la adjudicación, que es vista como el principal daño realizado a las capellanías por Ruiz de Velasco y Martínez al comentar en su obra: “*la adjudicación es el yunque en que han sido amartilladas las capellanías,*

⁷⁵⁰ D. Calderón y Sanabria, *Examen analítico-legal de los bienes vinculados...*, o.c., pp. 4-6.

extinguiéndolas. Por la adjudicación desaparecieron completamente las capellanías” (Método práctico para los párrocos..., o.c., p. 316).

“*Como de libre disposición*”: aquí se ha de entender que la ley lo hace de forma absoluta. Los bienes se adjudican en concepto de libres, en plena propiedad, con lo que se destruyen tres circunstancias que se oponían o impedían esta adjudicación, que son, la vinculación, la espiritualización y el derecho sucesorio de las posteriores generaciones. Aquí se subentienden las cargas, que la ley ordena más adelante en su artículo 11º.

Pero, este artículo 1º al conceder como libres los bienes de las capellanías a los parientes llamados, violenta la voluntad del fundador, al exigirse únicamente el “*preferente parentesco*”⁷⁵¹, pues obvia la libre voluntad de disposición de aquél. Se refiere a que deberán adjudicarse los bienes, primero entre los descendientes directos o más cercanos al fundador; en su defecto, entre los descendientes más próximos de sus hermanos; a falta de éstos, entre los descendientes más propincuos (cercanos, próximos) de sus primos hermanos y, en su falta, entre los de sus primos segundos.

Respecto a la cláusula final del antedicho artículo 1º que dice “*sin diferencia de sexo, edad, condición ni estado*” se refiere a que en los llamamientos según la fundación entraban los varones idóneos, con ciertas cualidades de edad, estudios, sin irregularidades o impedimentos canónicos o legales, según los preceptos del Derecho canónico y sujetos a rígidas normas; pero con la ley, al extinguirse la capellanía y adjudicar sus bienes, no como un beneficio sino como libres de cualquier obligación, cesan estas condiciones impuestas de sexo, edad, condición, etc, teniendo en cuenta sólo el parentesco preferente, por lo que ya no hay que atender a las cualidades de prelación de las fundaciones.

La adjudicación de los bienes no sólo afectaba a los de las capellanías de patronato pasivo, únicas que contempla el artículo 1º transcrito, como se ha podido apreciar, sino que el artículo 4º extiende esta adjudicación también a las de patronato activo:

“Cuando sólo el patronato activo fuese familiar, se adjudicarán también los bienes, en concepto de libres, a los parientes llamados a ejercerlo”.

Así, se adjudican los bienes de la capellanía a quienes sólo les correspondía el mero derecho de patronato (activo, de presentar capellán o pasivo, el disfrute de la

⁷⁵¹ “*He aquí, por qué el artículo 1º de la ley de capellanías colativas destruye sabiamente esas cláusulas prelativas para la adjudicación de los bienes, designando esta en los individuos en quienes concurra la circunstancia de preferente parentesco. (...) mandando adjudicar los bienes a ciertas y determinadas familias que cree llamadas a su goce, con absoluta abolición de la voluntad y postrimera disposición de los fundadores, despojando así desapercibidamente del derecho que éstos confirieran a los llamados clara y literalmente para ese efecto y transmitiéndolo a aquellas sin excepción alguna*”. Ibidem, pp. 16 y 17. También coincide en la crítica de este aspecto del artículo primero Campos y Pulido: “*La (ley) de 19 de agosto de 1841 concede como libres a los parientes llamados los bienes de las capellanías sin más obligación que la de cumplir las cargas..., pero adjudicadas en concepto de libres y entrando en el libre comercio, aun con la violencia que supone el atropellar la voluntad de los fundadores, manifestada al amparo de disposiciones legales y justas y sancionada por la aprobación de la Iglesia que ha querido perpetuar la memoria de hombres piadosos, que al paso que establecieron sufragios permanentes por su alma, dieron medios adecuados a los individuos de su familia*” J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 41.

capellanía) y que nunca habían tenido la propiedad de los bienes, que sólo y de forma exclusiva pertenecía a la Iglesia al tratarse de verdaderos beneficios eclesiásticos. De todo ello se desprende que esta ley solamente tiene aplicación a los bienes de las capellanías colativas familiares, ya sean, como se ha visto, de patronato activo o pasivo, pero no a las capellanías laicales ni a otras fundaciones que, aunque sean familiares, no son para los fines propios de las capellanías.

Según Gutiérrez Fernández, en este artículo no se contempla el caso de que el patrono no fuera pariente. La adjudicación no procede sino cuando el patronato activo sea familiar, pero, entonces, los parientes llamados a ejercer dicho patronato tienen derecho a los bienes, pues si no lo tienen ¿quién, además de ellos puede reclamarlos?⁷⁵²

Apunta Calderón y Sanabria, que para la adjudicación y posterior propiedad de los bienes se ha de estar a lo que determine la fundación; y si no se dispone nada en concreto ni se señala individuo alguno como tronco, será éste el primer patrono que fue nombrado para ejercer el patronato, o el patrono más antiguo de los que tengan familia o descendientes, y en su defecto los parientes transversales del primero o de los demás por su orden. En el caso de que no haya relación de parentesco con el fundador, el patrono no tiene ningún derecho a la adjudicación y propiedad de los bienes, ya que se trata sólo de un patronato electivo en virtud de nombramiento y aquí el artículo de la ley versa sobre el derecho de sangre⁷⁵³.

La ley contiene disposiciones precisas sobre los beneficiarios de las adjudicaciones, dejando de lado las imprecisiones o mandatos generales de las leyes anteriores que citaban que los bienes pasaban a las familias o parientes, sin concretar nada más. De esta forma, en su artículo 2º se determina:

“En consecuencia de la anterior disposición, serán preferidos los parientes que con arreglo a la fundación sean de mejor línea, y entre los de ésta, aquel o aquellos que fuesen de grado preferente. Cuando se hiciesen los llamamientos en general a los parientes, sin distinción de líneas ni grados, serán preferidos los más próximos a los fundadores o a los que éstos señalasen como tronco”.

Como se puede apreciar, este artículo tiene por objeto y misión explicar el anterior, y a él se subordina. Cuando dice “*mejor línea*” no se pueden aplicar las reglas de los vínculos o mayorazgos a las capellanías, que por su fin y naturaleza intrínseca, eran fundaciones irregulares, e incluso saltuarias de las irregulares, y que se conocen como de cláusula o de calidad. Aquí, como la irregularidad es la regla, se está refiriendo a la línea de los descendientes del fundador, antes que la de los descendientes de su hermano; también la de este último se prefiere a la de los descendientes de su primo hermano, y la de éste frente a la de su primo segundo, y así sucesivamente. Pero como claramente expresa el artículo que esto se llevará a cabo “*con arreglo a la fundación*”, ya que si los llamamientos son a los parientes en general, sin distinguir líneas o grados, serán preferidos los más cercanos al fundador dentro de su descendencia. Es el caso, por ejemplo, del fundador que llama para capellanes a los hijos, nietos y descendientes de un hermano suyo, siendo esta línea la preferida a todas las demás, y aun mejor que la de

⁷⁵² B. Gutiérrez Fernández, *Códigos o estudios fundamentales...*, o.c., Tomo II, Cap. II, Secc. II, § V, art. 10, p. 390.

⁷⁵³ D. Calderón y Sanabria, *Examen analítico-legal de los bienes vinculados...*, o.c., pp. 45-50.

los propios hijos, nietos y descendientes del mismo fundador, porque así lo ha querido el instituyente para su fundación, y con arreglo a ella, ha de hacerse la adjudicación de los bienes.

De todo ello se deducen dos consecuencias inevitables o dos principios prácticos de la ley, a saber: que en las capellanías colativas, siendo fundaciones irregulares de calidad, no hay línea actual posesoria ni aun contentiva, que sujete o encierre; y que no teniendo como fin principal la conservación de la familia, sino un fin espiritual, como es la celebración de sufragios y el mantenimiento de un capellán, no hay derecho de representación como ocurre en los mayorazgos.

Este artículo fue aprobado tal y como estaba redactado en el proyecto de ley, no siendo necesario expresar en él, como pretendió cierto senador (véase la precedente discusión parlamentaria de este artículo), la condición de que los parientes estuviesen dentro de los grados designados por el fundador, pues ya está previsto en este precepto lo que ha de hacerse por tratarse de capellanías.

El siguiente artículo, el 3º dispone:

“En los casos en que las fundaciones dispongan que alternen las líneas, se dividirán los bienes entre éstas con entera igualdad, y la porción que a cada uno corresponda se adjudicará a los individuos existentes de ella en los términos que dispone el artículo antecedente”.

Este artículo confirma lo dicho sobre exclusión de los parientes del fundador, cuando éstos no han sido llamados, pues aquí sólo concurren a la adjudicación de bienes las líneas alternativamente llamadas, pero no las que no lo han sido, aunque existan.

Aquí la expectativa se convierte en un verdadero derecho, pues en el supuesto de que ante igualdad de líneas se procede al llamamiento alternativo, lo que hace la ley es que las equipara, a la vez que distribuye entre ellas los bienes para que puedan disfrutarlos los parientes, a quienes corresponde según los artículos anteriores.

La división de los bienes se hará separando del fondo general de los mismos la parte que produzca una cantidad suficiente para poder satisfacer el total cumplimiento de las cargas civiles y eclesiásticas a que los citados bienes están afectos. El resto del fondo o capital será dividido en porciones iguales, considerando cada una de ellas como si se tratase de una sola capellanía, y será adjudicada a los que dentro de una misma línea sean de grado preferente, o lo más inmediatos o próximos al fundador, o al ascendiente que éste señalare como tronco. En la coyuntura de que las líneas designadas por la institución no tuviesen descendencia debido a la extinción de las familias, el derecho a la adjudicación y propiedad de los bienes pasará a los consanguíneos del fundador de mejor línea y grado, a no ser que el fundador hubiese dispuesto otra cosa, pues su voluntad debe ser siempre acatada y cumplida.

Sobre la adjudicación a “*los individuos existentes*”, se entiende los que viven al tiempo de la sanción de la ley o a la de su publicación, que es cuando adquiere su efectividad, pues adquieren un derecho desde ese momento frente a otros que no

pudieron adquirir en virtud de la irretroactividad de las leyes. También adquirieron los nacidos con posterioridad a la ley.

Aquí se confirma la doctrina de que no procede el derecho de representación para la adjudicación de los bienes, pues ésta ha de realizarse entre los parientes existentes, y en la representación, el que es representado ya no existe. Los individuos existentes no acuden por derecho de otro, sino por derecho personal propio.

El único indicio de deferencia o reconocimiento a la voluntad del fundador, el cual se había anticipado a la ley y justo era respetar lo que él había ya previsto, aparece en el artículo 5º que señala:

“Si en alguna fundación se dispusiere de los bienes para el caso en que dejare de existir la capellanía, se cumplirá lo determinado en aquélla”.

El contenido de este precepto alude a una especie de cláusula de reversión, es decir, si se altera, modifica o se varía la naturaleza de la fundación deberá declararse inexistente y sus herederos entrarán al goce de los bienes de la capellanía. Si ésta dejase de existir, el fundador llama a determinadas personas, las cuales serán las preferidas para la adjudicación y propiedad de los bienes como libres, aplicando el artículo 1º de esta ley.

Pero parece ser que esta deferencia está en un plano más teórico que real pues, al ser las capellanías colativas fundaciones perpetuas en las que se atribuían unos bienes para siempre a fin espiritual, es impensable que el fundador dispusiese una cláusula previniendo el destino de los bienes dotales en caso de extinción de la capellanía.

El siguiente precepto, el 6º dice textualmente:

“Las disposiciones que preceden tendrán toda su aplicación a las capellanías vacantes en la actualidad, y a las demás según fueren vacando”.

La letra de este artículo no ofrece ninguna duda, ya que éste se ha de aplicar, como bien expone, a las capellanías vacantes o a las que así debe considerarse desde la Real Orden de 10 de enero de 1837, que dejó suspendidas la provisión de capellanías⁷⁵⁴ y a las demás conforme fueran vacando, cuyos bienes se pueden pretender, con lo que se adjudicarán en la forma prevista.

En su artículo 7º la ley conceptúa de poseedores actuales a los capellanes, permitiéndoles seguir disfrutando de los bienes hasta su fallecimiento, un respeto hacia ellos que la ley tiene, pudiendo así seguir usufructuando sus bienes y levantando las

⁷⁵⁴ “Artículo 1º. Que se suspendan por ahora y hasta nueva orden en la Península e Islas adyacentes la provisión de todas las piezas eclesiásticas, incluidas las capellanías de sangre, cualquiera que sea su clase y objeto, ya pertenezcan al patronato efectivo de la Corona, al eclesiástico o particular, ya sean las conocidas en algunas diócesis con la denominación de patrimoniales; y que sus rentas se apliquen al Estado, deducidas las cargas de justicia civiles y eclesiásticas”. Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes..., o.c., Tomo XXII, Madrid 1837, p. 6.

cargas con arreglo a la fundación, pero sin perjuicio de que los parientes que crean tener derecho a la adjudicación puedan dirigirse a los tribunales pidiendo que se les declare propietarios de dichos bienes.

“Los poseedores actuales continuarán gozando de las capellanías en el mismo concepto en que las obtuvieron, y con entera sujeción a las reglas de las fundaciones respectivas. Pero podrán en su caso usar del derecho que les corresponda en virtud de los anteriores artículos”.

El artículo 8º se refiere a que los pleitos sobre capellanías pendientes continuarán y los que ganen dichos pleitos y las obtengan quedarán en la misma situación que los actuales poseedores, disponiendo de los bienes de la fundación como libres, lo que es algo absolutamente natural, normal y lógico.

“Los pleitos que sobre capellanías colativas se hallen pendientes, podrán continuar, y éstas proveerse como tales, quedando los que lleguen a obtenerlas en el mismo caso que los actuales poseedores”.

Los pleitos de los que habla el artículo son los ya empezados o las que tenían autos pendientes de fundaciones nombradas y adjudicadas antes de la publicación en cada diócesis de la Real Orden Circular de 10 de enero de 1837, que suspendía, como ya se ha señalado, las provisiones de capellanías colativas. Por tanto, los que habían obtenido capellanías mediante autos antes del día 10 de enero del año 1837 en solicitud de las que ya estaban vacantes, están en la misma circunstancia o estado que si no las hubieran obtenido, pues sólo lograron una provisión condicional o mera administración interina de los bienes.

Cuando se refiere a los pleitos pendientes se entiende que son ante los diocesanos, pues sólo a ellos les compete decidir sobre capellanías colativas, es decir sobre expedientes de colación incoados pendientes a la promulgación de la ley.

Como estas provisiones ya no existen, sus poseedores deben dejar esas capellanías totalmente libres, devolviendo los bienes, frutos y rentas percibidos, deduciendo la décima parte por su administración, para que los parientes de los fundadores tengan libre el camino para su acción sin necesidad de entablar pleitos y puedan solicitar que se les adjudiquen dichos bienes que estas capellanías que, en realidad, están vacantes.

El artículo 9º hace una prevención al conceder a los parientes una facultad por anticipado para que puedan disponer de los bienes de las capellanías, ya que la posesión de estas fundaciones no es lo mismo que la entera disposición de sus bienes como propios y con esa petición no se causa ningún daño o perjuicio a los poseedores en el usufructo o rentas de los citados bienes.

“Los parientes que conforme a los cuatro primeros artículos de esta ley, o las personas que con arreglo al 5º, tuvieron derecho a los bienes de capellanías que no se hallen vacantes, o sobre las que penda litigio, podrán desde luego pedir que se les declare la propiedad de dichos bienes, sin perjuicio del usufructo que a los poseedores corresponde”.

En este precepto se reafirma la idea de que la desamortización se verifica y el nuevo derecho a favor de parientes se crea con la promulgación de la ley. Queda radicado y aun transferido por ministerio de la ley el derecho a la propiedad en los parientes de grado preferente

El artículo 10º hace mención a qué tribunales les corresponde la competencia de los derechos que ha creado esta ley, de lo que se deduce que sobre la provisión de las capellanías colativas que están en pleito deben conocer los jueces eclesiásticos, como anteriormente ocurría, hasta su finalización y los civiles conocen de la adjudicación de los bienes de todas las capellanías que se encuentren vacantes y las que vacaren, y de la propiedad que ciertos parientes desean que se les atribuya con anticipación de las que están provistas o tienen pleitos pendientes. En el caso de la adjudicación y propiedad de una capellanía cuyos bienes se encuentren en el territorio de dos o más partidos judiciales, lo será el juzgado de primera instancia donde radiquen la mayor parte de los bienes de la dotación, y por supuesto con la oportuna apelación a las audiencias correspondientes.

“A los tribunales civiles ordinarios de los partidos en que radique la mayor parte de los bienes, corresponde hacer la aplicación de los derechos que se declaran en esta ley”.

El parecer de Hernández de la Rúa es que el citado artículo, que es uno de los más importantes de la ley, ya que habla de los medios de ejecución de la misma, es el más defectuoso de todos. Lo califica de diminuto, al no determinar el orden a guardar en el proceso para adjudicar o declarar la propiedad; de conciso, porque no expresa todo lo necesario; y de oscuro e impropio, porque usa ciertas palabras que no significan lo que con ellas se ha querido decir⁷⁵⁵. Aquí, la palabra “tribunales” está mal usada al aplicarse en sentido genérico a toda autoridad de justicia, cuando lo que se quiere designar a las que conocen en primera instancia en la jurisdicción civil ordinaria, y que se conocen como jueces de primera instancia y a sus sedes juzgados de primera instancia o de partido, y a los superiores se les llama “tribunales”.

En la discusión de este artículo en el Senado hubo una interpelación en la que se pidió que la aplicación de los precitados derechos se sometiese a los juzgados de los pueblos donde se hubieran fundado las capellanías, pero pareció preferible el medio adoptado al tratarse de pedir la propiedad de ciertas fincas, siendo lo más frecuente el domicilio de los interesados (Véase dicha discusión del proyecto de ley).

Para finalizar el análisis de los preceptos de la ley queda por examinar el artículo 11º y último, que dice así:

“La adjudicación de los bienes se entenderá con la obligación de cumplir, pero sin mancomunidad, las cargas civiles y eclesiásticas a que estaban afectos”.

La ley puede disponer de los bienes de las capellanías, pero no puede alterar los fines de la fundación, que eran piadosos, por lo que del citado artículo se puede concluir que aunque los bienes habían de pasar a las familias como libres, es decir, que podían

⁷⁵⁵ V. Hernández. de la Rúa, *Comentario a la ley de 19 de agosto de 1841*, BJJL, Madrid 1842, Tomo II, p. 3 y ss.

enajenarlos con total libertad sin impedimentos de ninguna clase, sin embargo, los bienes no quedarían libres de las cargas que tuviesen, sino que al ser cargas reales habían de acompañar siempre a dichos bienes, quedando el propietario de ellos con la obligación de facilitar su cumplimiento o levantamiento. Esta disposición es de gran importancia, pues muchas familias cuando quisieran que los ordinarios redimiesen las cargas de los bienes, alegarían que los adquirieron como libres, lo cual no se puede sostener y es fácil de rebatir, pues sólo pudieron adquirir los bienes mediante lo dispuesto en esta ley de 1841, y en ella se dispone que quedaría siempre la obligación de levantar las cargas a las que los bienes estuviesen afectos.

En la expresión “*sin mancomunidad*” se entiende que si la adjudicación y propiedad de los bienes de la capellanía se hace para una sola persona, tiene la misma obligación de cumplir todas las cargas que si fuesen varias. Si se adjudican a dos o más individuos cada uno de ellos cumplirá la carga que corresponde a la parte de los bienes que tome.

C).- Conclusiones críticas sobre la Ley.

La mayor crítica a esta ley, entre las muchas que ha levantado, es que no se respeta la voluntad de los fundadores, ley suprema de la fundación, y que nunca fue su intención, propósito o mandato el que se extinguiesen las capellanías por ellos fundadas y que sus parientes se apoderasen de sus bienes. El único título que tienen esos parientes es el de una ley nacida en una época de convulsiones políticas y gobiernos revolucionarios. La adquisición de los bienes de la fundación es una especie de sacrilegio, pues son bienes consagrados al servicio de Dios. En el *CIC* se anatematiza a los que pongan sus manos sacrílegas para distribuir los bienes de la Iglesia: “*Res ecclesiae principum auctoritate distribui non possunt*” (Decreto de Graciano, o.c., parte 2, c. LIX, causa XVI, quaest. I, fol. 670). Según opina Ruiz de Velasco, “*a todos los promovedores y ejecutores de las leyes desamortizadoras pudiera imputárseles aquel tremendo delito*” (*Método práctico para los párrocos...*, o.c., p. 321).

La voluntad del fundador fue instituir una capellanía y consagrar sus bienes a elevados y piadosos fines como son el servivio y culto a Dios, por lo que toda capellanía debe preservarse y así asegurar la voluntad de quien quiso erigirla. Estas fundaciones se levantaron con autorización de la Iglesia para que los capellanes prestasen sus servicios dentro de la misma, entregando para ello los fundadores unos determinados bienes que pasaban a ser propiedad de la Iglesia y la cual podía disponer de los mismos. Así, los parientes de los fundadores de las capellanías, fuera del derecho a ser llamados para el patronato activo o pasivo, no tienen ningún otro. El Estado se atribuyó con esta ley facultades que no tenía, con infracción manifiesta de la voluntad del fundador, dando a los parientes lo que aquél quiso consagrar a Dios. Debía haberse respetado esta voluntad como ley suprema y cumplir los deseos manifestados en la escritura de fundación de la capellanía. De esta manera lo dispone el Concilio de Trento al mandar cumplir dicha voluntad:

“Ratio postulat, ut illis, quae bene constituta sunt, contrariis ordinationibus non detrahatur. Quando igitur ex beneficiorum quorumcumque erectione, seu fundatione, aut aliis constitutibus, qualitates aliquae requiruntur, seu certa illis onera sunt iniuncta (...), eis non derogetur”.

(*Concilium Tridentinum* sesión 25, cap. 5, *de Reformatione*, o.c., fol. 501)

Teniendo en cuenta el articulado de la ley examinado es difícil poder concluir si es una norma que se inserta dentro de la legislación desvinculadora o, por el contrario, en la desamortizadora. Ciertos autores la consideran claramente desvinculadora, como son Sánchez Román⁷⁵⁶, Gutiérrez Fernández⁷⁵⁷ y Castán Tobeñas⁷⁵⁸. Es lo más normal en ellos, pues como civilistas asimilan las capellanías colativas a meras vinculaciones de bienes. Aunque, otro civilista como Badenes Gasset considera la precitada ley como desamortizadora⁷⁵⁹. Más recientemente Maluquer de Motes ha estudiado las capellanías y, a pesar de que llega a la conclusión de que las colativas no pueden considerarse un vínculo de tipo regular como las denominadas capellanías laicales, dice que la ley trata de la desvinculación de bienes de las aludidas capellanías colativas⁷⁶⁰.

Como norma claramente desamortizadora la conceptúan y defienden autores como Álvarez y Gómez⁷⁶¹ y González Ruiz⁷⁶², que considera a la Ley de 19 de agosto de 1841 como base de la desamortización de las capellanías colativo-familiares, a lo que se une Miguélez Domínguez⁷⁶³.

Atendiendo al espíritu de la ley, sólo de una manera un tanto forzada se puede defender que es una disposición desamortizadora, pues no contiene declaración alguna de los bienes de las capellanías familiares como bienes nacionales, ni dispone para ellos ningún tipo de subasta ni procedimiento de remate y adjudicación, características propias de las leyes desamortizadoras del siglo XIX. Pero tampoco es posible sostener que sus artículos se limitan a establecer la desvinculación de los bienes dotales de las capellanías, pues en ellos no se regula la posibilidad de quien ostente el dominio de los bienes pueda disponer libremente de los mismos, sino que ordenan un traslado de la propiedad sin tener en cuenta la voluntad del titular. Hay que recordar que los bienes de

⁷⁵⁶ “Completáse la historia de esta legislación (...) con el recuerdo de las llamadas leyes desvinculadoras (...) como la ley de 19 de agosto de 1841, restableciendo la desvinculadora de 1820. Las vinculaciones que revistieron la forma de capellanías fueron objeto, por su parte, de una serie de disposiciones legislativas, a saber: 1º, otra ley de igual fecha que la citada, o sea de 19 de agosto de 1841, fundamental en esta materia, y del propio amplio espíritu desvinculador...” F. Sánchez Román, *Estudios de Derecho Civil...*, o.c., Tomo III, pp. 67-68.

⁷⁵⁷ “Son en tanto número las leyes sobre desvinculación, que es de necesidad abreviar lo más posible su exámen. El que hagamos de la ley de Capellanías, debe ser rápido”. B. Gutiérrez Fernández, *Códigos o estudios fundamentales...*, o.c., Tomo II, Cap. II, Secc. II, § V, art. 10, p. 388.

⁷⁵⁸ “La ley de 1820 fue derogada por la Real Orden de 11 de marzo de 1824, pero la restablecieron el Real Decreto de 30 de agosto de 1836 y la Ley de 19 de agosto de 1841”. J. Castán Tobeñas, *Derecho Civil español, común y foral...*, o.c., p. 353.

⁷⁵⁹ R. Badenes Gasset, *Las fundaciones de Derecho privado...*, o.c., p. 268.

⁷⁶⁰ C. Maluquer de Motes y Bernet, *La fundación como persona jurídica...*, o.c., pp. 175 y 176.

⁷⁶¹ “La ley desamortizadora de 19 de agosto es la que rige para adjudicar civilmente, como de libre disposición, los bienes de capellanías colativas y familiares a los parientes...” M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., cap. II, p. 13.

⁷⁶² “La base de la desamortización de las capellanías colativo-familiares, y que todavía tiene aplicación para ciertos efectos, por lo que hemos de estudiarla con mayor detenimiento, es la ley de 19 de agosto de 1841”. M. González Ruiz, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España...*, o.c., p. 413.

⁷⁶³ “Así se llegó a la ley de 19 de agosto de 1841, la cual hizo tabla rasa de todas las leyes anteriores y ordenó la desamortización de todos los bienes de estas capellanías de patronato de sangre...” L. Miguélez Domínguez, *Situación actual del problema de las capellanías en España*, o.c., pp. 311-312.

las capellanías colativas de sangre, como bienes eclesiásticos, no son propiedad de la familia o parientes del fundador⁷⁶⁴.

En consecuencia, se podría concluir que la Ley de 19 de agosto de 1841 sobre adjudicación de bienes de capellanías colativas y familiares es una norma peculiar, de aspecto propio, ni puramente desvinculadora, ni puramente desamortizadora al contener disposiciones de uno y otro carácter.

Esta norma fue intensamente aplicada debido a que facilitaba a las familias de los fundadores el poder conseguir, de forma gratuita, la propiedad de unos bienes que en muchas ocasiones tenían un valor elevado⁷⁶⁵. Hay autores, aparte de Campos y Pulido, que afirman que la ley suponía la desaparición de las capellanías y que, al abrigo de esta norma, se reclamaron muchos bienes de capellanías colativas, solicitándose, en consecuencia, una gran cantidad de adjudicaciones durante el tiempo que estuvo vigente e invadiéndose los juzgados y tribunales en busca de los bienes que se ofrecían a innumerables pretendientes⁷⁶⁶. Ruiz de Velasco (*Método práctico para los párrocos...*, o.c., p. 328) va más allá y expone que “*esta ley de 1841 ha sido el azote cruelísimo que ha llagado hondamente el cuerpo o institución de capellanías colativas de sangre*” y lo justifica porque la ley no hacía dueños de los bienes a los parientes del capellán de la fundación, sino todo lo contrario, a los parientes, como se ha visto, del fundador, lo cual es muy distinto. Todo ello debido a que los parientes de dichos capellanes, considerándose con derecho a las capellanías, una vez fallecido el capellán, enajenaron los bienes sin dar cuenta de ello, por lo que no se pudo evitar que unos bienes los enajenasen los propios capellanes y otros los legaran sus hermanos o parientes a título de herencia. “*Error funestísimo fue éste*”, sentencia Ruiz de Velasco.

Incluso los periódicos son críticos, no con el fin perseguido por la ley, sino con su redacción y publican noticias de la multitud de expedientes promovidos en los juzgados y hacen comentarios sobre la aplicación de misma y de la necesidad de una instrucción que aclare dicha ley y facilite la reclamación por las familias de los bienes de las

⁷⁶⁴ J. M. Vázquez García-Peñuela, *Las capellanías colativo-familiares...*, o.c., cap. II, pp. 124-125.

⁷⁶⁵ Es ilustrativo el testimonio de Lorenzo y Lorenzo como juez de 1ª instancia de Zamora: “*De aquí la necesidad de que ese rompimiento, dando al traste con instituciones tan venerandas, y que se crearon para fines piadosos..., trajera en pos de sí una verdadera revolución, invadiendo los Tribunales de Justicia las reclamaciones de multitud de aspirantes que ante ellos recurrían con el afán de disputarse los bienes, cuya memoria de los que jamás pensaron en la suerte que había de esperarles no había sido bastante a borrar el lapso de centenares de años. Sin embargo, aquel poderoso aliciente que se ofrecía a las familias de los fundadores para convertirse entonces en propietarios, sin sacrificar intereses de alguna entidad, que más bien se reducían a los que motivaba la instrucción del expediente en el Juzgado, no bastó para concluir al primer golpe con las instituciones condenadas a desaparecer...*”. L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas...*, o.c., p. 4. V. Covián, *Capellanías*, en *Enciclopedia Jurídica Española...*, o.c., pp. 9 y 16.

Hubo gran cantidad de pleitos que llegaron hasta el Tribunal Supremo, aunque se tratase de capellanías laicales, como ocurría en diversos casos, a las que les era inaplicable la ley de 1841, como los iniciados en 1846, ante el Juzgado de Primera Instancia de Illescas (Gaceta de Madrid de 20 de abril de 1867); 1847, también en Illescas (Gaceta de 20 de abril de 1867); 1848 ante el Juzgado de San Sebastián, (Gaceta de 21 de febrero de 1862); 1849 ante el Juzgado de Huéscar (Gaceta de 4 de junio de 1863); 1850, ante el Juzgado de San Juan en Murcia (Gaceta de 30 de septiembre de 1864), entre otros.

⁷⁶⁶ J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., p. 142. L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas...*, o.c., p. 22.

capellanías colativas⁷⁶⁷. En noviembre de 1841 la prensa (oficial) sigue alabando las virtudes de esta ley, a la que considera “*benéfica y justa*”, criticando con dureza a los moderados y su oposición a leyes como la ley de mayorazgos y vinculaciones, ley de dotación del culto y clero y a la mentada ley de capellanías colativas, todas aprobadas en la última legislatura⁷⁶⁸. Aun así, las críticas perduraron en el tiempo, y para ello sirva el ejemplo del periódico conservador *El Católico*, nº 867, de 15 de julio de 1842 y el nº 1462, de 16 de marzo de 1843 (BNE. Hemeroteca digital). En el primer número citado se aludía a los abusos que “*con ocasión de las leyes de desvinculaciones y adjudicación laical de las capellanías a los consanguíneos por los juzgados de primera instancia, se dividen, subdividen y venden hoy en los pueblos las fincas de vínculos, de capellanías, de memorias, etc., sin acordarse los que esto hacen, que siendo tales predios rústicos y urbanos antes hipotecados por sus fundadores para el cumplimiento de ciertas cargas de beneficencia o de culto divino, se va, sin no a imposibilitar, al menos a dificultarse en gran manera su cumplimiento. Ciertamente que la ley de capellanías dice en un artículo que las cargas no afectan mancomunadamente, sin duda porque las cargas dificultan e involucran su enajenación y circulación. Y bien: al poder ejecutivo tocaba aplicar esta ley en toda su letra*”. En el segundo se hacía una encendida defensa de las capellanías de sangre y se condenaba la ley de agosto de 1841: “*Todos saben que de la religiosidad é ilustración de nuestros mayores, nos quedaron muchas fundaciones que al paso que servían de lustre á la Iglesia, el Estado tenía en ellas un inmenso recurso, no solo para libertarse de la dotación de millares de ministros de la Iglesia, sino que la educación de las clases mas pobres, mas numerosas, ó como ahora se dice, de las clases del pueblo,*

⁷⁶⁷ “Desde que vimos aprobada la ley sobre capellanías colativas de sangre, conocimos los muchos expedientes que iba a promover, puesto que hacía revivir infinitos derechos familiares, y que versaba en asunto complicado, vasto y de casos muy variados. Aunque el fin de la ley era muy laudable, su necesidad reconocida, y sus consecuencias de gran tamaño, no nos parecieron los términos ni tan sencillos ni tan claros como era de apetecer, mas ya que así se redactó, y ha de llevarse a efecto, queremos contribuir por nuestra parte a que los pleitos sean menos y mas uniforme la buena inteligencia y aplicación de dicha ley. Como puede dar margen el contexto de las disposiciones y la novedad de la materia a diferentes consultas y dudas, y aun a que tenga diversa ejecución en los juzgados de primera instancia, parécenos de grande utilidad, si ya no es indispensable, que el ministerio de Gracia y Justicia, al que toca ejecutar y hacer que se cumpla fielmente y con uniformidad lo dispuesto por las cortes, diese una instrucción circunstanciada a los juzgados por medio de una circular, en que se prefijasen los trámites y reglas comunes que según las circunstancias de cada especie de capellanías deben seguirse. De este modo se facilitará a los jueces la marcha de los negocios por un sistema uniforme, y no se verá la divergencia que otras veces ocurre de que en cada juzgado se establezcan prácticas diferentes. Así también se evitarán a los interesados y a los jurisconsultos que los defiendan, dudas y gestiones costosas, y pasos inútiles que molestan y dificultan la administración pronta de la justicia”. *El Eco del Comercio*, nº 2711, de 3 de octubre de 1841. BNE. Hemeroteca digital.

⁷⁶⁸ “Leyes importantísimas fueron hechas por las cortes de 1841; leyes que alectaban muchísimos intereses y muchísimas familias y personas; leyes que prometían crecido aumento de partidarios a la doctrina del progreso. No menos empeño tenía el partido trastornador y sedicioso en evitar la ejecución de la ley de capellanías, por cuyas saludables providencias van a salir de manos de patronos y manipulantes hambrientos una inmensa porción de bienes, y a ser repartidos entre propietarios laboriosos, que naturalmente han de cuidar con más esmero dichos bienes abandonados. Para conocer la importancia de esta ley benéfica y justa, y la razón con que la odiaban los retrógrados, no hay mas que acudir a los partidos, examinar el gran cúmulo de interesados que han acudido a los juzgados a reclamar bienes de capellanías de sangre, pudiendo verse todos los días en los periódicos de oficio los llamamientos numerosos que se hacen a los derecho-habientes a esta especie de caudales. Por aquí se conocerá si la ley era de trascendencia, y si con el ansia que se ha visto en reclamar sus efectos por tantas familias en todas las provincias de España, conoce y aprecia el pueblo los beneficios de las verdaderas reformas”. *El Eco del Comercio*, nº 2767, de 28 de noviembre de 1841. BNE. Hemeroteca digital.

pendia casi exclusivamente de estas fundaciones; hablo de las capellanías de sangre. Hace diez años, ¿quién frecuentaba las universidades y colegios? Escolares que tenían derecho á una capellanía de sangre, y se preparaban con estudios para llenar las cualidades que el fundador pedía para obtenerla (...); sugetos sostenidos por las pequeñas rentas de capellanías (...); si algún otro se veía, era sostenido por un pariente capellán, párroco canónigo, obispo, magistrado, que sin una capellanía en su familia no hubiera salido de la ignorancia. Pues bien, los hombres que se llaman amantes del pueblo, los que todo, dicen, lo hacen por ilustrar las clases pobres... después de quitar los diezmos (...); cuando han dejado sin sustento al clero (...), dieron el último golpe a estas clases pobres con el decreto de 19 de agosto del 41 sobre capellanías. Decreto que quita á la Iglesia miles de ministros que el gobierno no tenía que dotar ni el pueblo pagar, y regala cuantiosos bienes á personas á quienes la última voluntad del legítimo dueño nunca los quiso legar”. O el caso también de *La Esperanza*, periódico de la tarde político, religioso, literario e industrial, nº 32, de 15 de noviembre de 1844: “¿Será posible reducir al gobierno á la abolición de la ley vigente sobre capellanías colativas, que ya quizá la mitad han venido a parar á manos de mujeres, y otras personas que nunca debieran poseerlas? No hay duda que uno de los males que más nos afligen en materia de religión, es la falta que se va notando de sacerdotes, pues mueren y no se ordenan; extinguidas las órdenes religiosas, no queda más recurso para formar sacerdotes que las capellanías, pues bajo esta base se preparan desde muy jóvenes con los estudios suficientes para las sagradas órdenes; y es seguro que los ministros del altar no se improvisan, como los militares por medio de una quinta”. Incluso el periódico *El Católico*, nº 739, de 31 de diciembre, incluso en el último día del año 1844 aprovecha la ocasión para incidir en las consecuencias de la ley de 1841: “Los conventos se demolieron, y se están demoliendo actualmente bajo el gobierno de los conservadores... del poder, por el hacha revolucionaria. Las capellanías se vendieron y se están vendiendo ahora con aprobación de los católicos reparadores de los desórdenes y desafueros de la anarquía. Las fundaciones piadosas, los vínculos con cargas eclesiásticas se dividen, se enagenan, se deshacen. ¡Oh, vosotros revolucionarios! Una vez siquiera, sed francos. Decid que queréis más revolución”.

Por todo lo dicho, es claro que la ley beneficiaba exclusivamente a los miembros de las familias. Por ello, no parece muy exacto afirmar, como hace González Ruiz, que uno de los motivos de la ley fuese el hacendístico⁷⁶⁹, pues sus disposiciones no contribuyeron a disminuir, ni siquiera en cantidad apreciable, la deuda pública. En fin, autores como Tomás y Valiente y Rueda Hernanz apuntan como motivos la intención del gobierno de ir conformando una clase de propietarios adeptos a las instituciones, a la causa progresista y al régimen liberal⁷⁷⁰, aunque parece ser que el resultado conseguido fue más bien el contrario, levántándose contra la reforma un gran número de opositores, los cuales tuvieron acogida en el partido político contrario⁷⁷¹.

2.2.2.- La Real Orden de 17 de enero de 1847.

⁷⁶⁹ M. González Ruiz, *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España...*, o.c., p. 416.

⁷⁷⁰ F. Tomás y Valiente, *Obras completas...*, o.c., p. 1345. G. Rueda Hernanz, *La desamortización de Mendizábal...*, o.c., pp. 14 y 18.

⁷⁷¹ E. Bravo, *Examen de la última ley sobre capellanías colativas*, La Justicia, tomo II, Madrid 1867, p. 180.

Para evitar abusos se hizo indispensable dictar nuevas y posteriores disposiciones que facilitasen la aplicación de la ley de 1841, ante las dudas que iban surgiendo. La primera fue la Real Orden de 17 de enero de 1847, relacionada con el artículo 6º de la ley de 2 de septiembre de 1841, para llenar la laguna en la reclamación de bienes de capellanías colativas, pues las resoluciones de los tribunales de justicia únicamente definían el derecho de los que aspiraban a estos bienes, sin entrar a dilucidar si los mismos estaban exceptuados de la desamortización. El artículo 1º de esta Real Orden manda lo siguiente:

“Siempre que ocurra una reclamación de bienes de capellanías colativas de patronato activo o pasivo familiar, deberá instruirse inmediatamente un expediente gubernativo para declararlos o no comprendidos en las excepciones consignadas en el art. 6º de la ley de 2 de septiembre de 1841, ajustándose su formación al curso y trámites prevenidos en la Real orden de 9 de febrero de 1842”.

(C. L. E..., o.c., Madrid 1847, tomo XL, p. 97).

Lo que se pretendía es que no se podía dejar al arbitrio de los juzgadores la calificación de estas fundaciones, cuyos bienes habían de pasar a las familias, y así lo refuerza, respecto al artículo 1º citado, el artículo 4º al declarar que las providencias de los juzgados no tienen ninguna fuerza ejecutoria en estos casos de declaración de excepción de las fincas que se reclamen:

“Las providencias de los Juzgados de primera instancia no tienen fuerza ejecutoria, ni para declarar la excepción de las fincas que reclamen, ni para decidir la inmediata entrega de sus productos; pero serán útiles para que cuando una y otra deban verificarse, se haga a la persona legítima”.

Para evitar ciertos abusos se publicaron tres reales órdenes más. La de 29 de julio de 1847 y las de 12 de febrero y 1º de mayo de 1850. Las tres eran consecuencia de la necesidad de la intervención del ministerio fiscal, en representación del Estado, en los pleitos en que se demandaban los bienes de las capellanías colativas o se disputaba el mejor derecho a ellos. En la primera se prevenía a las audiencias territoriales y a los jueces de primera instancia, que en los expedientes sobre adjudicación de capellanías de sangre a los parientes de los fundadores se oyese a los promotores fiscales. La de 12 de febrero de 1850 hace notar que, con la ley de 19 de agosto de 1841, los fiscales vigilasen los pleitos de adjudicación de bienes de las capellanías para conocer si los que aspiraban a dicha adjudicación tenían derecho a ello y cumplían todos los requisitos según la ley y que, además, tenían la obligación de cumplir las cargas de la fundación, pero como hasta la fecha, pese a la norma material que obligaba a ello (artículo 11º de la Ley de capellanías colativas), en la práctica era letra muerta la anterior disposición y se reconoce que su observancia sólo se basaba en la conciencia de las personas que las habían obtenido, y claro está, pocos cumplían dichas cargas y los abusos eran frecuentes, se hizo obligado dictar la real orden de 12 de febrero que decía de forma explícita:

“Por varias Reales órdenes está mandado que se dé audiencia a los Fiscales y a los Promotores en los pleitos que se sigan para adjudicar como libres los bienes que pertenecieron a capellanías y patronatos. Yo espero que V.S. y sus

subordinados (...) cuidarán de examinar, como hasta ahora, con el más escrupuloso esmero, los referidos pleitos, para conocer si los que aspiran a la adjudicación de los bienes tienen derecho a ello por la fundación, si están dentro del grado que para adquirirlos requieren las leyes, y si hay de dichos parentescos la prueba necesaria, sin descansar en las concesiones que acerca de esto se hagan recíprocamente los litigantes, porque en ellas puede haber amañes que no deben pasar desapercibidos a los ojos del Ministerio público. La ley de 19 de agosto de 1841, dispone que la adjudicación de los bienes de las capellanías se hagan con la obligación en los agraciados de cumplir las cargas de la fundación. Hasta ahora el cumplimiento de esa obligación no ha tenido más garantía que la moralidad de las personas; preciso es asegurarlo de una manera conveniente, y para ello es necesario que V.S., luego que recaiga ejecutoria a favor de cualquiera de los parientes, se sirva remitir nota de los bienes de la fundación y de sus cargas eclesiásticas (...) a la Comisión investigadora, creada por Real decreto de 12 de octubre del pasado (...)". (C. L. E..., o.c., Madrid 1850, tomo XLIX, pp. 263-264).

2.2.3.- El Concordato de 1851.

El trato o las relaciones entre la Iglesia y el Estado en los años anteriores a la firma del Concordato habían sufrido un grave deterioro, hasta tal punto que se puede afirmar que había una ruptura tácita de las antedichas relaciones entre ambas instituciones, pues desde 1834 hasta 1843 los agravios a la Iglesia por parte del Estado son intensos y continuados (siendo los más graves y reprobables las matanzas de frailes y el saqueo de conventos), minando las bases y pilares de la organización eclesiástica. Se imponía la necesidad de reglar las relaciones y normar la organización de la Iglesia en España.

A la caída de Espartero en 1843, ante la delicada situación del país se hizo necesario dar un nuevo rumbo a las relaciones Iglesia-Estado. El 28 de enero de 1844 el gobierno de González Bravo (noviembre/diciembre de 1843-mayo de 1844) anula algunas circulares que limitaban los poderes de los obispos, el 6 de febrero llama del destierro, desde 1836, a varios arzobispos y obispos⁷⁷² y el 11 del mismo mes emite un decreto que facilita la reapertura del Tribunal de la Rota⁷⁷³ pero apremiado por el deseo

⁷⁷² Sirvan estos dos ejemplos: "*La conveniencia de reanudar por medios decorosos las cordiales relaciones interrumpidas desgraciadamente con la Santa Sede, el sagrado carácter y la dignidad de los prelados como ministros del Señor (...) han decidido a S.M., en cuyo ánimo son innatos los sentimientos religiosos y las ideas de benevolencia y de dulzura, a reparar en cuanto sea dable la orfandad de las iglesias españolas. S. M. tiene el más sincero placer en comunicar a V. Ema (al cardenal arzobispo de Sevilla). la primera muestra de su Real aprecio, alzando el confinamiento que sufre en esa ciudad por disposición gubernativa desde 18 de febrero de 1836, y encargándole que regrese a su silla metropolitana y al cuidado de los fieles...*" Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes..., Tomo XXXII, pp. 100-101. "*Infatigable el ánimo de S.M. en adoptar cuantas providencias piadosas y conciliadoras puedan contribuir a aliviar la desgraciada suerte del culto y del clero (...) se ha ocupado constantemente (...) de aquietar las conciencias de los fieles, restituyendo al venerable sacerdocio la protección y el amparo que le dispensaron siempre la religiosidad y el santo celo de sus antepasados en el trono. Fijos los ojos en las iglesias huérfanas de sus prelados por un efecto de las revueltas y discordias civiles (...) ha querido dar una nueva y cordial muestra de su benevolencia y religiosos sentimientos, relevando a V.E., (al arzobispo de Canarias) en uso de su Real prerrogativa, de continuar el confinamiento en que se halla*". Ibidem, pp. 191-192.

⁷⁷³ "*En vista de las consideraciones expuestas por mi consejo de Ministros, acerca de la justicia y conveniencia de que vuelva nuevamente al desempeño de sus atribuciones el tribunal de la Rota, vengo*

de un reconocimiento de Isabel II por Roma quiso concluir el proceso irreversible de la desamortización, eliminando sus últimas e incómodas consecuencias con la venta definitiva de los bienes aún no subastados⁷⁷⁴.

Además, el primer gobierno moderado del general Narváez, establecido el 3 de mayo de 1844, dio un paso atrás en las medidas desamortizadoras mediante la suspensión de las ventas de los bienes del clero (Real Decreto de 8 de agosto de 1844, citado anteriormente). El 3 de abril de 1845, por medio de un nuevo real decreto, también citado anteriormente, se ordenó que los bienes del clero secular que no habían sido enajenados y cuyas ventas se había mandado suspender, fueran devueltos. Mediante Real Decreto de 11 de abril del mismo año de 1845⁷⁷⁵ se suspendió la venta de conventos de religiosos. Por Real Orden de 13 de mayo de 1851, que será consecuencia del Concordato, bajo el mando efectivo de Narváez, se hizo general la suspensión de ventas de todos los bienes eclesiásticos, incluso los del clero regular y cofradías⁷⁷⁶.

Todas las medidas anteriores iban encaminadas a que la Santa Sede reconociese los derechos sucesorios de Isabel II, como ya se ha apuntado (con el antecedente de la guerra carlista y el enfrentamiento sobre la sucesión dinástica de Fernando VII), por lo que se intentó un acercamiento a Roma, comenzado en 1844 y que siete años más tarde, tras el Convenio de 1845 y la suspensión de las relaciones, dio como resultado el Concordato celebrado entre Su Santidad Pío XI y la reina de España, firmado en Madrid el 16 de marzo de 1851, bajo el gobierno de Bravo Murillo, y que fue publicado como Ley del Reino el 17 de octubre de 1851⁷⁷⁷. Fue publicado también en los principales periódicos del momento como *El Católico*, nº 3855, y *La Esperanza, periódico monárquico*, nº 2156, del lunes 20 del citado mes o *El Herald, periódico político, religioso, literario e industrial*, nº 2898, en su edición de Madrid, en 21 del mismo mes (BNE. Hemeroteca digital).

Al Concordato se llegó necesariamente ante la imposibilidad constatada por las dos altas partes de conseguir una reconciliación total y sincera. Por ello, el citado Concordato no fue una obra perfecta, sino un punto de partida para finalizar con casi

en decretar lo siguiente: Artículo 1º. Se alza la prohibición de ejercer las facultades jurisdiccionales impuesta el tribunal de la Rota de la nunciatura de España por decreto de la Regencia provisional de 20 de diciembre de 1840". Ibidem, pp. 238-239.

⁷⁷⁴ "Conocidas y públicas son las intenciones que guiaron a las Cortes y al Gobierno para declarar bienes nacionales todas las propiedades del clero regular y secular, poniéndolas en venta. La amortización de la deuda pública, y dar vida a una riqueza muerta, fue el pensamiento de aquellos dos poderes del Estado. Grande impulso se ha dado a las ventas; crecidas sumas se han amortizado; una masa considerable en fincas ha venido a desarrollar la riqueza de millares de familias, fomentando la agricultura, la industria y la circulación (...) El Gobierno no está todavía satisfecho: quiere que se distribuya esa propiedad que aún resta, que sea beneficiosa al país (...) S.M., pues, me manda prevenir a V.S. que por cuantos medios estén a su alcance active la venta de los bienes no enajenados..." Real Decreto de 8 de febrero de 1844. Ibidem, p. 196.

⁷⁷⁵ "Conformándome con el parecer del Consejo de Ministros, vengo en mandar se suspendan hasta nueva resolución la venta de los edificios-conventos de las comunidades religiosas suprimidas, acordada por decreto de 26 de julio de 1842". Ibidem, p. 141.

⁷⁷⁶ "S. M. la Reina (Q. D. G) teniendo en consideracion lo que se establece en el Concordato celebrado con la Santa Sede se ha servido mandar que interin se acuerda lo que corresponda para llevarlo a efecto, se suspenda desde luego la venta y redencion de los bienes, censos y demás pertenencias procedentes de las extinguidas comunidades regulares de ambos sexos, clero secular, ermitas, santuarios, hermandades y cofradías". C. L. E..., o.c., tomo LIII, p. 140.

⁷⁷⁷ F. Suárez Verdaguer, *Génesis del Concordato de 1851...* o.c., pp. 96 y ss.

veinte años de tensiones político-eclesiales. Y este fue su mayor mérito, al conseguir normalizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado⁷⁷⁸, paliando en la medida de lo posible las nefastas consecuencias de la legislación desamortizadora.

La parte principal del Concordato de 1851 la constituye el problema económico que afectaba de lleno al clero. El Estado transige y asume la obligación de realizar en adelante una dotación suficiente de culto y clero a cambio de que la Iglesia se comprometiese a no impugnar la legitimidad de las compras o adquisiciones de bienes eclesiásticos desamortizados⁷⁷⁹, levantando el Papa las condenas que pesaban sobre los compradores, con lo que se solucionaba un grave y hondo problema de conciencia que había turbado a algunos gobernantes y propietarios enriquecidos mediante la adquisición de bienes desamortizados. A pesar de ello, no se hace un reconocimiento expreso de la legitimidad de las adquisiciones de dichos bienes eclesiásticos.

Pero no sólo es un “*concordato económico*”, pues acusa el cambio de los tiempos y es una toma de conciencia, por parte de la Santa Sede, de que las relaciones entre la Iglesia y el Estado tienen que articularse sobre unas bases nuevas, afrontando unos nuevos tiempos, una ideología y una concepción distinta del hombre y de la sociedad. Se puede admitir abiertamente que existe “*una intervención de la potestad civil en la disciplina y en el control de las voluntades piadosas*”.

En el artículo 38 del Concordato se ordena la devolución inmediata “*y sin demora*” de los bienes del clero, tanto regular como secular, que no habían llegado a enajenarse y que debían haberse devuelto en 1845:

“Además se devolverán á la Iglesia desde luego, y sin demora, todos los bienes eclesiásticos no comprendidos en la expresada ley de 1845, y que todavía no hayan sido enajenados, incluso los que restan de las comunidades religiosas de varones”.

Aquí, se hallan comprendidos los bienes de las capellanías colativas de sangre en la frase enunciada, de forma general, “*todos los bienes eclesiásticos*”, por tanto contenidos en el Concordato sin necesidad de mención expresa. Nadie puede poner en duda que estas fundaciones no han sido omitidas en esta ley y para corroborarlo véase el siguiente artículo, el 39, donde es determinante la expresión “*bienes de capellanías*”, lo que convence, tanto por la letra como por el espíritu del Concordato que las citadas capellanías han sido objeto del mismo.

⁷⁷⁸ V. Cárcel Ortí, *Historia de la Iglesia en la España contemporánea (siglos XIX y XX)*, Madrid, 2002, p. 55.

⁷⁷⁹ Los artículos 31 a 34 comprenden la dotación del culto y clero. El artículo 42 del Concordato de 1851 rehabilita, absuelve o sana todas las ventas injustas realizadas: “*Los que durante las pasadas circunstancias hubiesen comprado en los dominios de España bienes eclesiásticos al tenor de las disposiciones civiles a la sazón vigentes, y estén en posesión de ellos, y los que hayan sucedido o sucedan en sus derechos a dichos compradores, no serán molestados, en ningún tiempo ni manera por Su Santidad ni por los Sumos Pontífices sus sucesores; antes bien, así ellos como sus causa-habientes, disfrutarán segura y pacíficamente la propiedad de dichos bienes, y sus emolumentos y productos*”. J. Sánchez Rubio, *Juicio imparcial y comentarios sobre el Concordato de 1851*, Madrid 1853, pp. 27-29 y 33. C. Ramón Fort, *El Concordato de 1851 comentado*, Madrid 1853, pp. 22-26 y 30. M. Martínez Alcubilla, *Diccionario de la Administración española...*, o.c., Tomo III, pp. 273, 274 y 276.

Pero, a continuación la anterior orden es moderada y suavizada al tener en cuenta la coyuntura del momento, lo que demuestra una tendencia conciliadora y benevolente del Concordato, al decir:

“Pero atendidas las circunstancias actuales de unos y otros bienes, y la evidente utilidad que ha de resultar a la Iglesia, el Santo Padre dispone que su capital se convierta inmediatamente y sin demora en inscripciones intransferibles de la deuda del Estado de 3 por 100, observándose exactamente la forma y reglas establecidas en el artículo 35 con referencia a la venta de los bienes de las religiosas.

Todos estos bienes serán imputados por su justo valor, rebajadas cualesquiera cargas, para los efectos de las disposiciones contenidas en este artículo”.

En realidad, estos anteriores artículos no eran de aplicación a las capellanías, pues sus bienes no fueron vendidos, sino que fueron adjudicados, en virtud de la Ley de 19 de agosto de 1841. En el artículo 39 se reconocen, aunque de una forma sugerente e indirecta, las adjudicaciones ya realizadas al recoger la obligación del Gobierno en relación con las cargas que gravaban los bienes de las capellanías, asegurando su cumplimiento, con lo que determina lo conveniente para realizar tal recomendable fin:

“El Gobierno de S. M., salvo el derecho propio de los prelados diocesanos, dictará las disposiciones necesarias para que aquellos entre quienes se hayan distribuido los bienes de las capellanías y fundaciones piadosas, aseguren los medios de cumplir las cargas a que dichos bienes estuvieren afectos”.

Aquí se pone de manifiesto que frente a la pretensión de los particulares de adquirir como libres los bienes de las fundaciones, el decidido propósito compartido entre la Iglesia y el Estado de que éstas subsistan y se cumplan. Es decir, que el Gobierno debe responder de las cargas impuestas sobre los bienes eclesiásticos vendidos a su nombre como libres de gravamen. Es de justicia y es conforme a las disposiciones dictadas para las ventas que se menciona, las cuales preveían que cuando se fijase el precio respectivo, se rebajasen aquellos gravámenes, cuyo cumplimiento se consideraba imprescindible. La no deducción de los mismos había enriquecido al Estado en perjuicio, claro está, del derecho ajeno. Por tanto, la indemnización es de evidente necesidad legal⁷⁸⁰.

Pese a todo, el Concordato no contiene ninguna derogación expresa de la Ley de capellanías de 1841, lo llevó a que algunos pensasen que no había sido derogada. De todos modos, de la lectura del articulado se desprende que hay poco margen para dudar al respecto. Si se atiende al citado artículo 39 sobre los bienes de las capellanías adjudicados en el pasado, no tiene en cuenta la forma en que deberían asegurarse al cumplimiento de las cargas que gravasen los bienes sobre los que se realizasen futuras adjudicaciones, señal evidente de que tales adjudicaciones no íban a tener lugar⁷⁸¹.

En el siguiente artículo, es decir, en el 40, anterior al único precepto que aparecen citadas las capellanías, como se ha podido apreciar, se reconocía el derecho de

⁷⁸⁰ C. Ramón Fort, *El Concordato de 1851...*, o.c., p. 64.

⁷⁸¹ J. M. Vázquez García-Peñuela, *Las capellanías colativo-familiares...*, o.c., cap. II, pp. 132-133.

propiedad de la Iglesia, consustancial a su carácter de sociedad perfecta, que se basta a sí misma y se contenía lo siguiente:

“Se declara que todos los expresados bienes y rentas pertenecen en propiedad a la Iglesia, y que en su nombre se disfrutarán y administrarán por el clero”.

Estos bienes, como se deduce de forma clara del citado artículo, son propiedad de la capellanía, que es un ente eclesiástico, es decir, que son bienes pertenecientes a la Iglesia. Lo que ocurre es que tales términos y la forma en que se expresan no podrían conciliarse con que, tras la entrada en vigor del Concordato, se siguiese aplicando la ley de capellanías referenciada. Además, las capellanías colativas de patronato familiar no adjudicadas seguían siendo propiedad de la Iglesia, pues sus bienes quedaban protegidos por el artículo 41, en el que se reconoce a la Iglesia un derecho de justicia, el derecho de adquisición:

“Además, la Iglesia tendrá el derecho de adquirir por cualquier título legítimo, y su propiedad en todo lo que posee ahora o adquiriere en adelante, será solemnemente respetada. Por consiguiente, en cuanto a las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas, no podrá hacerse ninguna supresión o unión sin la intervencion de la autoridad de la Santa Sede, salvas las facultades que competen a los Obispos según el santo Concilio de Trento”.

Es más, visto dicho artículo se aprecia una prohibición expresa de suprimir fundaciones eclesiásticas. En fin, en el último inciso del citado artículo 41, además de la necesaria intervención de la autoridad eclesiástica se admite abiertamente el protectorado del Estado *“en cuanto a las antiguas y nuevas fundaciones eclesiásticas”*, es decir, en lo transcrito se recoge la intervención estatal en las voluntades piadosas.

Nada se dice en este Concordato que particularmente se refiera o haga mención a las capellanías de patronato eclesiástico o de derecho común, por lo que, hay que entender que sus bienes dotales quedaron en idénticas condiciones que los demás bienes del clero.

Para finalizar, se aprecia claramente la derogación de la legislación anterior (la ley de agosto de 1841), no sólo virtualmente en cuanto contiene preceptos contrarios a los que antecedieron y que ya han sido citados, sino también por la innegable eficacia derogatoria de dos artículos que cierran el Concordato, el 43 y el 45⁷⁸²:

“Todo lo demás perteneciente a personas o cosas eclesiásticas, sobre lo que no se provee en los artículos anteriores, será dirigido y administrado según la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente”.

⁷⁸² A pesar de ello, la Ley de 1841 siguió en vigor y *“aún después de celebrado el Concordato de 1851 estuvo vigente seis meses y más (hasta la publicación del Real Decreto de 30 de abril de 1852), sin que nadie se acordara de que había sido derogada por aquel convenio”*. Intervención del Sr. Aguirre en el Congreso de los Diputados en la sesión del 14 de enero de 1859. *Revista General de Legislación y Jurisprudencia (RGLJ)*, Madrid 1859, tomo XIV, p. 108.

Este artículo renueva la disciplina eclesiástica vigente, es decir, la admitida o decretada por las autoridades competentes, sobre todas aquellas materias en las no aclara ni resuelve nada el Concordato.

“En virtud de este Concordato se tendrán por revocadas, en cuanto a él se oponen, las leyes, órdenes, y decretos publicados hasta ahora, de cualquier modo y forma en los dominios de España, y el mismo Concordato regirá para siempre en lo sucesivo como ley del Estado en los propios dominios”.

El Concordato, fue ante todo, un acto político, pues se puso fin al contencioso que se arrastraba desde la muerte de Fernando VII, concediendo de nuevo la Santa Sede el patronato regio. Así, la corona pudo intervenir en el nombramiento de los obispos, en la provisión de canonjías y curatos y en otros asuntos eclesiásticos. A la vez el Estado garantizaba a la Iglesia una base económica fundamental para el desarrollo de su labor, de forma que la desamortización quedase totalmente superada. Ambas partes cedieron al concederse de forma recíproca lo que cada una de ellas pedía, aunque ninguna de las dos cedió en lo que consideraban obligado mantener firmemente. Dentro de lo humanamente posible se repararon graves daños y cicatrizaron heridas, apunta Suárez Verdaguer. Tomás y Valiente afirma que la gran vencedora fue Roma, ya que la Iglesia consiguió terminar la desamortización de sus bienes. Pero la buena voluntad demostrada en su negociación y firma faltó cuando se trató de llevarlo a la práctica⁷⁸³.

2.2.4.- El Real Decreto de 30 de abril de 1852.

A pesar de lo dispuesto en el Concordato de 1851 debieron surgir dudas sobre la letra y el espíritu del mismo, pues los tribunales siguieron tramitando las solicitudes de adjudicación de capellanías colativo-familiares presentadas al amparo de la Ley de capellanías colativas de 1841⁷⁸⁴. Como resultado, oída la Real Cámara eclesiástica y de acuerdo con el Nuncio de Su Santidad, a los que se había consultado, el Gobierno dictó en 1852 un real decreto, en el que más que derogar la citada ley, declaraba que lo había sido en virtud del Concordato. Así lo expresaba en su artículo primero:

“Desde el día 17 de octubre último, en que se publicó el Concordato como ley del Estado, se considerará derogada la ley de 19 de agosto de 1841, relativa a capellanías colativas de patronato activo o pasivo de sangre. De la misma manera, y desde igual fecha, se entenderán derogadas las disposiciones relativas a las fundaciones piadosas familiares.”
(C.L.E., Tomo LV, p. 656).

⁷⁸³ F. Suárez Verdaguer, *Génesis del Concordato de 1851...* o.c., p. 209. F. Tomás y Valiente, *El marco político de la desamortización...*, o.c., p. 105. V. Cárcel Ortí, *Historia de la Iglesia en la España contemporánea...*, o.c., p. 56.

⁷⁸⁴ “Se apresuraron, por consiguiente, todas las familias que tenían estas fundaciones a pedir la adjudicación ante los tribunales. Siguieron sus pleitos hasta obtener sentencia ejecutoriada, en virtud de la cual entraron en posesión de la propiedad y en el pleno goce de sus derechos si las capellanías estaban vacantes (...). No se hizo variación absolutamente ninguna; los tribunales han aplicado esa ley desde el año de 1841 hasta el decreto de 30 de abril de 1852”. Intervención del diputado Sr. Poyán en la interpelación sobre el restablecimiento de la ley de Capellanías. *Diario de las sesiones de las Cortes constituyentes de 1854 a 1855*, Madrid 1855, tomo III, p. 1921.

En consecuencia, el real decreto ordenó el cese de las tramitaciones de solicitudes de adjudicación de bienes de capellanías presentadas con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Concordato, lo que recoge el artículo 4º:

“Continuarán hasta su decisión definitiva, con arreglo a derecho, los expedientes judiciales que pendían en los Juzgados de primera instancia y Reales Audiencias el citado día 17 de Octubre, cesando los juicios principiados con posterioridad”.
(Ibidem, p. 657).

En su artículo 2º se establece por primera vez una distinción entre las capellanías cuyos bienes habían sido adjudicados, o que la solicitud de adjudicación había sido previa a la publicación del Concordato, y aquellas otras en las que sus bienes no habían sido distribuidos entre los parientes del fundador, a las que se declara subsistentes, independientemente de que estuviesen o no vacantes. Esta distinción la recogerá, posteriormente, el Convenio-ley de 1867 sobre capellanías.

“A su consecuencia, quedan subsistentes las capellanías colativas de patronato activo o pasivo de sangre, estén o no actualmente vacantes, cuyos bienes no hayan sido adjudicados judicialmente a las familias respectivas, o para cuya adjudicación no pendiére juicio en ejecución de la ley de 19 de Agosto de 1841, y otras disposiciones, antes de dicho día 17 de Octubre. Lo mismo se entenderá respecto a las fundaciones piadosas arriba mencionadas.”
(Ibidem, p. 656).

Para finalizar, hay que resaltar también el artículo 3º del Real Decreto, el cual reconoce la naturaleza de bienes eclesiásticos a los dotales de las capellanías colativo-familiares al declarar lo siguiente:

“Por lo tanto, se adjudicarán por los Tribunales eclesiásticos, y servirán de título de ordenación las capellanías subsistentes, según los artículos anteriores, siempre que sean congruas.”
(Ibidem, p. 656).

En su artículo 5º se declaran subsistentes aquellas capellanías ya adjudicadas cuyos poseedores se hubiesen ordenado, o lo fueren en lo sucesivo, a título de las mismas, pues se entenderá que los interesados han renunciado a los beneficios de la ley de 1841, con lo que se observará lo dispuesto en los artículos 1º y 3º del presente Real Decreto.

En conclusión, el espíritu de esta precedente disposición fue indudablemente el de conservar y favorecer la existencia de las capellanías colativas y para ello partió de un doble punto de vista: el de los bienes, en cuanto no hubiesen sido adjudicados o solicitada su adjudicación; y el de los sujetos en cuanto se hubiesen ordenado u ordenasen a título de ellas, aun en el caso de haberse adjudicado los citados bienes, o en cuanto prestando su consentimiento los demás entre quienes se hubiesen distribuido, quisiera alguno de ellos ordenarse a título de las mismas.

Por Real Orden de 1 de junio de 1853 se declaró que en los pleitos pendientes sobre capellanías de sangre, cuando los parientes no probasen su derecho, el promotor debía pedir que la capellanía subsistiese, según el espíritu del Concordato de 1851 y a tenor del anterior Real Decreto de 30 de abril de 1852⁷⁸⁵.

2.2.5.- El Real Decreto de 6 de febrero de 1855.

La situación fijada por el Concordato apenas duró tres años, pues con la Revolución de 1854 (Vicalvarada de 28 de junio a 28 de julio) se da un paso atrás en todo lo acordado y una conocida y reiterada amenaza se cierne sobre la Iglesia al incluir en el programa desamortizador del Estado los bienes eclesiásticos, con la consiguiente ruptura de relaciones con la Santa Sede. Con la formación de juntas en diversas provincias como Madrid, Barcelona, Valencia o Valladolid, se expidieron decretos contrarios a las leyes vigentes. Así, la Junta de Cádiz, en 30 de julio, decretó *“ilegal y depresivo a la nación española el concordato, volviendo a la nación todos los bienes que en virtud de aquel tornaron al clero”*. La Junta de Valladolid, en sesión de 1 de agosto, dispuso que *“se establecen en toda su fuerza y vigor las leyes de 19 de febrero de 1836, y la de 2 de septiembre de 1841(...) Igualmente se restablece la ley de 19 de agosto de 1841 sobre capellanías colativas familiares”* (El Católico, nº 4651, de 5 de agosto y La Iberia, nº 43, de 6 de agosto de 1854. BNE. Hemeroteca digital).

Ante esta caótica situación, se produjo la vuelta al poder de los progresistas con Espartero al frente (bienio 1854-1856), tras el pronunciamiento militar de O'Donnell, que supuso, una vez más, otro confuso cambio en la legislación sobre capellanías colativas de patronato familiar, restableciéndose la Ley de capellanías de 1841 mediante el Real Decreto de 6 de febrero de 1855 (quedando sin efecto el Real Decreto de 1852, *“por estar basado en una suposición errónea acerca de la letra y el espíritu del Concordato”*), obra del Ministro de Gracia y Justicia, Aguirre, que disipaba algunas dudas que se habían suscitado en los procedimientos de adjudicación de capellanías contemplados y previstos en la Ley de 1841. El artículo primero del citado Real Decreto de 1855 decía:

“Se declara en su fuerza y vigor la ley de 19 de agosto de 1841 sobre capellanías de sangre y las demás disposiciones relativas a las fundaciones piadosas familiares que fueron derogadas por mi Real Decreto de 30 de Abril de 1852.”

(C.L.E., Tomo LXIV, p. 177).

Es realmente peculiar comprobar cómo las leyes y decretos sobre capellanías anteceden a las leyes generales desamortizadoras, siendo una concurrencia casi simultánea; así la Ley de 19 de agosto de 1841 precede en dos semanas a la ley

⁷⁸⁵ “Enterada S.M. la Reina (Q.D.G.) de la consulta elevada por V.S. a la Dirección general de lo Contencioso, acerca de si en los pleitos pendientes sobre adjudicación, como libres, de los bienes de las capellanías colativas que deben continuar hasta su resolución definitiva, el ministerio Fiscal debería pretender que a falta de opositores de mejor derecho, se diese al Estado la posesión de los mencionados bienes en concepto de mostrencos, o por el contrario debería solicitar quedasen en pie esas fundaciones (...), S.M. se ha dignado resolver (...) que en los citados litigios pida V.S. en nombre del Estado, queden subsistentes las capellanías para que se adjudiquen a quien corresponda por los Tribunales eclesiásticos, debiendo servir esta resolución de regla general para todos los demás casos de igual naturaleza que puedan presentarse”. C.L.E., Tomo LIX, p. 143.

desamortizadora del clero secular de 2 de septiembre de 1841 (Ley de. Espartero) y el Real Decreto de 6 de febrero de 1855 citado, se publicó tres meses antes de la Ley general de desamortización de Madoz de 1 de mayo de 1855. Da la impresión de que antes de aplicar las leyes desamortizadoras contra el patrimonio eclesiástico se preparase el camino con otras que, de alguna forma, fuesen menos duras y traumáticas⁷⁸⁶.

Según las contundentes y sabias palabras de Lorenzo y Lorenzo (Tratado de capellanías colativas..., o.c., p. 30): “Volvió, pues, a renacer la idea desamortizadora y a brotar de nuevo de aquella fuente que se había obstruido por espacio de tres años, el manantial de derechos otorgados a familias determinadas”.

Esta disposición produjo una “*indecible sorpresa de las Cortes*” con interpelaciones y enfrentamientos en posteriores sesiones parlamentarias sobre la misma⁷⁸⁷. Se exponía que un real decreto (el de 1852) no podía derogar una ley⁷⁸⁸, la de 1841 (elogiada y defendida por el Ministro de Gracia y Justicia, Sr. Aguirre⁷⁸⁹ en su intervención), sin tener en cuenta que, en realidad, el Real Decreto de 1852 no lo había hecho, pues declaraba que dicha ley había sido derogada por el Concordato de 1851. Tampoco que la corona podía derogar una leyes y restablecer otras por su sola y exclusiva autoridad y sin el concurso de las Cortes. Asimismo se afirmaba que el Concordato, al no referirse expresamente a las capellanías, no había derogado la Ley de 1841 que permitía la adjudicación de sus bienes⁷⁹⁰, lo cual ya se ha visto y comprobado que no era exacto.

⁷⁸⁶ J. M. Vázquez García-Peñuela, *Las capellanías colativo-familiares...*, o.c., cap. II, p. 137.

⁷⁸⁷ “La confusión que existía en los tribunales, la incertidumbre de los derechos de las familias y particulares, la seguridad que yo tenía y también mis compañeros de Ministerio entonces de que la ley de capellanías colativas no había sido derogada por el Concordato de 1851, todas esas circunstancias reunidas dieron ocasión a la publicación del decreto de 5 de febrero de 1855, en que se restableció la ley de capellanías colativas; es decir, que se trató de quitar la confusión, uniformar la legislación y evitar tantos y tantos disgustos como ha ocasionado a las familias y a los particulares”. Intervención del Sr. Aguirre en el Congreso de los Diputados en la sesión del 14 de enero de 1859. *R.G.L.J.*, Madrid 1859, Tomo XIV, p. 109.

⁷⁸⁸ “Aunque no ha tenido por conveniente contestar directamente a mi pregunta de si el poder ejecutivo tenía o no autoridad para derogar una ley, que no la tenía es muy claro, y si no ha podido derogarla, la ley está vigente (...) Pues qué ¿son más respetables los derechos que se adquieren a virtud de un decreto dado por el poder ejecutivo, sin facultades bastantes, que los derechos adquiridos a virtud de una ley sancionada por las Cortes del reino?” Intervención del diputado Sr. Poyán en la interpelación sobre el restablecimiento de la ley de Capellanías. *Diario de las sesiones de las Cortes constituyentes...*, o.c., pp. 1924 y 1926.

⁷⁸⁹ “Las Cortes ordinarias de 1840, observadas todas las formalidades que prescribía aquella Constitución, hicieron una ley conocida con el nombre de ley de capellanías colativas de sangre, ley publicada en 19 de agosto de 1841; una ley notable en su fondo, notable en su forma, grande por todos los conceptos, y a cuyos autores se puede envidiar, y yo envidio ciertamente, la gloria de haberla hecho. La ley de 19 de agosto de 1841, es una de las más importantes que se han hecho en esta época constitucional (...) Once años estuvo en observancia sin contradicción la ley de 19 de agosto de 1841, y aun después de celebrado el Concordato de 1851 estuvo vigente seis meses y más, sin que nadie se acordara de que había sido derogada por aquel convenio”. *R.G.L.J.*, o.c., pp. 107-108.

⁷⁹⁰ “Mi interpelación se dirige, pues, a preguntar a S. S., si cree que S. M. tenía poder para dar fuerza y vigor a una ley del Estado que no contaba mas que con trece años de vida. ¿Tiene S. M. el derecho de legislar en España por ninguna Constitución? (...) porque si bien es verdad, señores, que el 17 de octubre de 1851 se ha publicado el Concordato, como nada absolutamente decía de estas capellanías, como nada absolutamente podía decir de las fundaciones piadosas familiares, los tribunales siguieron aplicando las leyes relativas a este punto.” Ibidem, pp. 1921 y 1922.

También levantó controversia y un tenso debate el artículo 2º del Real Decreto de 1855 (todas estas discusiones parlamentarias fueron recogidas en la prensa del día siguiente en su primera página: *El Clamor público*, nº 3264, *La Época*, nº 1839, etc) que disponía lo siguiente:

“Se declaran legítimos los derechos adquiridos en virtud del citado Real decreto, por sentencia definitiva pronunciada o que se pronuncie en los juicios incoados ante Tribunal competente.”

Se afirmaba que el efecto derogatorio del real decreto era demasiado limitado al respetar los derechos adquiridos, en virtud del Real Decreto de 1852, por lo que se interpelaba al Gobierno pretendiendo que la disposición que se derogaba no podía dar lugar a ninguna adquisición de derechos debido a que un real decreto no podía, como se ha mencionado, derogar una ley, al ser una norma de rango inferior⁷⁹¹. Además, la prensa liberal era muy crítica con este decreto: *“Convendría que el señor ministro de Gracia y Justicia hiciese alguna aclaración al decreto sobre capellanías colativas publicado en la Gaceta del día 6 del actual, pues según nuestras noticias existen hace dos ó tres años en las oficinas de amortización, y con grave perjuicio de los interesados, muchos expedientes de dichas capellanías, cuyos bienes fueron vendidos por el gobierno á principios de este siglo”* (*La Iberia*, nº 210, de 21 de febrero de 1855. BNE. Hemeroteca digital).

También la Iglesia estaba totalmente en contra de la norma citada, siendo publicada en la prensa una carta abierta del Arzobispo de Santiago (a la que se sumaron los arzobispos de varias archidiócesis) a la reina, fechado en 9 de marzo, haciendo una reflexión sobre la sorpresa que había supuesto la publicación del decreto, pidiendo que se sirva *“mandar se conserven las antiguas fundaciones eclesiásticas, entre las que figuran como muy principales las pocas capellanías que no fueron adjudicadas a los parientes de los fundadores por la ley de 19 de agosto de 1841, y siga observándose lo dispuesto en el real decreto de 30 de abril de 1852, dado de acuerdo con el muy Reverendo Nuncio de Su Santidad”*. (*La Esperanza*, nº 3224, de 23 de abril de 1855. BNE. Hemeroteca digital)

2.2.6.- La Ley de 15 de junio de 1856.

Poco tiempo después del anterior Real Decreto de 6 de febrero de 1855 una nueva ley repite de forma sustancial los preceptos de la ley de capellanías colativas de

⁷⁹¹ El Sr. Poyán al Sr. Ministro: *“...y me ha de permitir también el Sr. Ministro de Gracia y Justicia que vuelva apreguntarle: ¿puede haber derechos adquiridos en virtud de una sentencia dada en aplicación del decreto de 30 de Abril, derogatorio de las leyes del Estado? Más ¿cree el Sr. Ministro que ni siquiera merezcan el nombre de sentencia esos fallos?”*

El Sr. Ministro replica: “¿y quién duda que podía, por medio de un decreto, restablecer o ponerse en toda su fuerza y vigor esa ley? ¿Quería el señor Poyán que se continuara con el decreto de 30 de Abril de 52? ¿O era preciso que se hiciera una declaración de que ese decreto concluía, y que la ley comenzaba a regir? ¿Creía el Sr. Poyán que era preciso, para decir que la ley regía, venir a las Cortes? Yo creo que no era necesario, que eso podía hacerse por medio de un decreto, que debía hacerse por medio de un decreto. Y ese decreto no tuvo más objeto que decir: la ley que fue derogada no ha podido ser derogada, está en su fuerza y vigor.” Intervención del diputado Sr. Poyán y el Sr. Aguirre en la interpelación sobre el restablecimiento de la ley de Capellanías. *Diario de las sesiones de las Cortes constituyentes...*, o.c., p. 1922.

sangre de 19 de agosto de 1841, ampliando el campo desamortizador al incluir dichas fundaciones, como más adelante se apreciará en el artículo 3º, en las leyes generales de desamortización.

El proyecto de ley de esta disposición fue presentado a las Cortes el 3 de abril de 1856, el cual comprendía cuatro artículos, siendo elevado por la comisión a su aprobación en 26 del mismo mes, tras haber sido previamente retirados todos los artículos (excepto el 1º) para su nueva redacción, al haberse presentado varias enmiendas en 5 de mayo, y finalmente aprobado con ocho artículos, sancionado el 16 de junio y publicado como ley en la Gaceta del 18 del mismo mes, todo ello en muy poco tiempo, algo más de dos meses, debido a que la cuestión sobre capellanías colativas era muy importante para las familias, al ser un tema de palpitante actualidad, ya que incidía directamente en ellas.

En esta norma los parientes de los fundadores de capellanías colativo-familiares tuvieron, otra vez, la posibilidad de apropiarse de los bienes de éstas durante un corto período de tiempo de menos de dos años, durante el cual se incoaron bastantes expedientes de adjudicación a tenor de la publicación de la Ley de 15 de junio de 1856, redactada también por Aguirre, cuyo objeto era la aclaración de las dudas que hubiesen podido surgir en relación con la regulación de la Ley de 1841 y que daban lugar a distintas decisiones judiciales⁷⁹².

Básicamente, dos eran los puntos que aclaraba la Ley de 15 de junio de 1856: quiénes eran o podían ser los titulares del derecho a la adjudicación de los bienes de capellanías colativas de sangre y qué bienes se incluían en esta denominación. Sobre el primer aspecto, la ley establece, en su artículo 1º, la transmisión hereditaria del derecho a favor de los herederos de los titulares de los bienes, cuando éstos hubieran fallecido sin haber solicitado la adjudicación:

“Los individuos de preferente parentesco que, con arreglo a la ley de 19 de Agosto de 1841, tenían derecho a los bienes de capellanías colativas al tiempo de publicarse la misma ley, y hayan fallecido sin haber pedido la adjudicación,

⁷⁹² El dictamen de la comisión sobre dicha proposición de ley decía: “*que aun cuando la ley está muy espresa y terminante en su espíritu y en su letra, sin embargo los tribunales de justicia lo entienden y aplican de un modo diferente y contradictorio, pues unos reconocen y otros no á los herederos de los parientes mas próximos que fallecieron después de publicada la ley sin haber pedido la adjudicacion, el derecho á participar de los bienes en el grado y lugar que ocupaban sus causantes. Las Cortes no deben tolerar la continuación de esa anarquía tan escandalosa como perjudicial á los derechos legítimamente adquiridos, á la recta administración de justicia y al prestigio de los mismos tribunales. Y así es de la mas urgente necesidad el poner término á estos males por medio de la correspondiente aclaración*”. Apéndice segundo al *Diario de las sesiones de las Cortes Constituyentes*, nº 364 de 22 de abril de 1856.

El diputado Sr. Aguirre explicaba la razón de ser de la ley de 15 de junio de 1856 en su intervención parlamentaria: “*Y no fue sólo el Gobierno de entonces el que restableció la ley de capellanías colativas; fueron las Cortes constituyentes que dieron una ley especial, a la cual yo llamaré la interpretación auténtica de la ley de capellanías colativas, para fijar la distinta jurisprudencia que había en los tribunales acerca de las personas que podían pedir la adjudicación de los bienes pertenecientes a estas capellanías, el tiempo en que debía pedirse, y las fundaciones comprendidas bajo la denominación general de capellanías colativas de sangre; aclaración o interpretación que fue consecuencia de una proposición de ley presentada por insignes jurisconsultos...*” Intervención del Sr. Aguirre en el Congreso de los Diputados en la sesión del 14 de enero de 1859. *Diario de sesiones de Cortes*. Congreso de los diputados. Madrid 1860. Tomo I, p. 533. R. G. L..., o.c., p. 109.

le han transmitido a sus herederos, quienes, por tanto, ocupan el mismo grado y lugar que sus causantes para la participación de los bienes”.
(C. L. E..., o.c., tomo LXVIII, p. 446).

En el artículo 2º la ley preveía el supuesto de fallecimiento de los parientes con derecho a la adjudicación de los bienes durante el tiempo en que, por efecto del decreto de 30 de abril de 1852, ese derecho realmente no existía:

“También tienen derecho a pedir la adjudicación de los bienes de capellanías colativas los llamados por la fundación, y los herederos de los que, teniendo aquel derecho, fallecieron después de la publicación del decreto de 30 de Abril de 1852, y antes de 6 de Febrero de 1855, en la misma forma que se previene en el artículo anterior; pero no tendrá lugar la entrega inmediata de los bienes cuando la capellanía ha servido de título para ascender a las órdenes mayores, en cuyo caso los capellanes serán considerados como usufructuarios, hasta que obtengan otro beneficio eclesiástico, y si no lo obtuviesen, durante su vida”.
(Ibidem, p. 446).

Además, la ley fijaba, en su artículo 3º, dos plazos de caducidad del derecho de adjudicación de los bienes de capellanías, siendo el primero de veinte años para los parientes llamados en primer lugar según la ley de 1841, a contar desde el 19 de agosto de ese mismo año; y el segundo, transcurrido el plazo sin que se realizase la reclamación de los bienes, los parientes siguientes en grado disponían de cuatro años para solicitar la adjudicación a su favor. Transcurridos los dos plazos los bienes de las capellanías se declararían bienes sujetos a desamortización aplicándoseles la Ley General Desamortizadora de 1 de mayo de 1855:

“Los interesados que no reclamaren la adjudicación dentro de veinte años, contados desde la publicación de la ley de 19 de agosto de 1841, perderán todo derecho, y se transmitirá a los siguientes en grado, que deberán ejercitarlo dentro del término de los cuatro años siguientes, después de los que, los bienes de las capellanías se declararán comprendidos en la ley de 1º de mayo de 1855”.
(Ibidem, p. 447).

Pero la sanción de este artículo 3º no surtió sus efectos *in futurum*, ante el temor de arrebatar a las familias unos bienes verdaderamente patrimoniales y vinculados en ellas. Como se puede apreciar, las cuestiones suscitadas por la ley de 1841 relacionadas con los puntos tratados fueron resueltas en estos artículos precedentes, aunque quedó alguna duda respecto a los artículos 3º y 4º. Se hubo de aclarar con posterioridad que los cuatro años de los que habla el artículo 3º tenían que contarse desde el transcurso de los veinte años que señalaba la ley de capellanías colativas de sangre de 19 de agosto de 1841, circunscribiéndose a las capellanías no reclamadas, límite que impuso el ingreso de los bienes en la masa de los desamortizados, con arreglo a la ley de 1º de mayo de 1855.

Respecto al artículo 4º al referirse a las fundaciones que ya habían sido adjudicadas, el plazo de los citados cuatro años se entendía que se contaba desde la fecha en que la sentencia se hacía ejecutoria. Dicho artículo preceptúa:

“Todas las adjudicaciones de bienes de capellanías colativas se entienden hechas sin perjuicio de tercero de mejor derecho a las mismas, que solamente podrán ejercitarlo dentro de cuatro años, a contar desde el día de la ejecución”. (Ibidem, p. 447).

El segundo de los aspectos que la Ley de 15 de junio de 1856 pretende aclarar es qué se entiende por capellanía de sangre. Se comprende en el artículo 5º, aunque manifiesta, el citado precepto, una considerable falta de rigor. Por un lado declara como colativas de sangre algunas capellanías que eran de libre colación como son las llamadas de *iure devoluto* (apartado 3º). Por otra parte la ley, en el primero de los apartados del citado artículo, se declara que son capellanías lo que son fundaciones consistentes en beneficios en sentido estricto, pero con derecho de patronato accesorio:

“Artículo 5º. Se declaran como capellanías colativas de sangre, comprendidas en la Ley de 19 de Agosto de 1841, restablecida en 6 de febrero de 1855:

1º Las fundaciones que poseen actualmente los eclesiásticos, corporativa e individualmente, en concepto de prebendas o beneficios y las que como tales se hallen vacantes, siempre que los fundadores llamen a su disfrute a familias o personas determinadas, o que sean de patronato activo familiar, y no hubiesen sido comprendidos en las leyes de 2 de Septiembre de 1841 y 1º de mayo de 1855, o de las leyes de desamortización civil.

2º Las capellanías que han sido provistas a presentación de los patronatos después de la publicación del decreto de 6 de mayo de 1855.

3º. Las capellanías colativas de sangre que hayan provisto los ordinarios en virtud del derecho de devolución por providencia posterior al mismo decreto”.

(Ibidem, p. 447).

Esta Ley de 15 de junio de 1855 nunca fue expresamente derogada, sin embargo su vigencia fue de pocos meses, debido a su carácter accesorio y auxiliar respecto a la de 1841. Muy corta, cortísima fue su vida, pues en 28 de noviembre de 1856 se publicó el Real Decreto que sigue a continuación.

2.2.7.- El Real Decreto de 28 de noviembre de 1856.

Tras el Bienio Progresista, con la contrarrevolución de julio de 1856 y el ascenso al poder de Leopoldo O'Donnell se suspendió total o parcialmente la ley de Madoz de 1855 mediante los reales decretos de 23 de septiembre (C. L. E., tomo LXIX, p. 513), que suspendía la venta de bienes del clero secular, y el del 14 de octubre que suspendía la ejecución de la propia ley de desamortización de 1º de mayo de 1855 (Ibidem, tomo LXX, p. 79). Posteriormente, el 30 de diciembre se publicaría otro real decreto suspendiendo la redención de cargas espirituales y temporales (Ibidem, p. 522).

Estas dos anteriores medidas, de septiembre y octubre, y la prensa monárquica⁷⁹³ influyeron en que mediante este decreto la Ley de capellanías de 1841 volvió a dejar de aplicarse, a consecuencia del nuevo cambio político del Gobierno, ocurrido en octubre, con la vuelta al poder de los moderados y que suponía la inmediata suspensión de todo lo legislado por los progresistas. Esta norma no deroga la Ley de 1841, ni siquiera el real decreto que la restableció, sino que se limita a suspender los efectos de éste en el primero de sus dos artículos⁷⁹⁴:

“Artículo 1º. Se suspenden los efectos del Real decreto de 5 (6) de febrero de 1855, por el que se restableció la ley de 19 de agosto de 1841 sobre capellanías colativas de patronato familiar, activo o pasivo y demás fundaciones piadosas de igual clase”.

(C. L. E..., o.c., tomo LXX, p. 296).

Esta medida de detener la adjudicación de los bienes de capellanías fue realizada por el cuarto Gobierno de Narváez, en concreto por el Ministro de Gracia y Justicia Seijas Lozano, del partido moderado, en busca de una solución definitiva sobre las reiteradas violaciones del Concordato de 1851 por la desamortización de Madoz⁷⁹⁵. Esta firme actuación de suspender la adjudicación de bienes iba en consonancia con la

⁷⁹³ El periódico *La Esperanza*, nº 3700, calentaba los ánimos en 11 de noviembre de 1856, a escasos días de que se publicase el real Decreto de 28 del mismo mes: *“La famosa ley revolucionaria de 1841, en que se suprimieron las capellanías colativas, mandando que sus bienes se adjudicasen á los consanguíneos de derecho preferente, fue un atentado contra los derechos de la Iglesia, una injusticia manifiesta, una violación de lo dispuesto por los fundadores cuya última voluntad ha sido siempre y no puede menos de ser respetada en toda legislación bien entendida. Pero lo dispuesto por la del 41, sobre injusto, fué á todas luces perjudicial (...). En 1855, el encono y la funesta preocupación de los unos y la codicia de los otros, volvieron á declarar vigente la ley del 41, y que como si no les bastara haber extinguido cuatro quintas partes de las capellanías colativas, sé empeñaron en destruir lo poco que por milagro se había salvado del naufragio (...). Habiendo, sin embargo, llegado á nuestra noticia hechos nuevos (...) hemos creído necesario llamar la atención del gobierno sobre el particular, y eso no tanto por el insignificante valor de las fundaciones que han podido conservarse, cuanto por salvar los principios, qué para nosotros son y serán siempre objeto preferente”*. BNE. Hemeroteca digital

⁷⁹⁴ Aunque el Sr. Aguirre, en una intervención parlamentaria, dice que el decreto de 28 de noviembre de 1856 *“ha dejado sin efecto los derechos legítimamente adquiridos por ella”* (se refiere a la legislación de capellanías: ley de 1841 y R.D. de 1855). Y sigue: *“De todo se infiere: primero, que todas las familias llamadas en España a la obtención de los bienes de capellanías colativas de sangre, por la ley de 19 de febrero de 1841, llamadas legítimamente, y teniendo derecho a la posesión de los bienes por espacio de once años, han sido privadas de ese derecho por un decreto, no por una ley.”* Intervención del Sr. Aguirre en el Congreso de los Diputados en la sesión del 14 de enero de 1859. *Diario de sesiones de Cortes...*, o.c., p. 533. R. G. L. J..., o.c., p. 109.

⁷⁹⁵ En 1859, el Ministro de Gracia y Justicia, Fernández Negrete, defendía el Real Decreto de 1856 ante el Congreso: *“... y si el gabinete del duque de Valencia a la sazón existente, cuando iba a restaurar creyó conveniente y necesaria esta medida para preparar el camino de las negociaciones que iba a entablar con Roma, ¿qué extraño es que el Gobierno actual, que tiene que negociar sobre bases acaso más trascendentales, no quiera adoptar por sí solo ni proponer a las Cortes medidas que pudieran ofrecer obstáculos de mayor o menor importancia? Es preciso hacer las cosas definitivamente; ha llegado ya un tiempo de poner término a esta obra siempre principiada y nunca concluida, a este continuo tejer y destejer, a esta interminable tela de Penélope; porque las contradictorias disposiciones adoptadas en esta materia de diez y ocho años a esta parte, sólo revelan una lucha funesta entre dos tendencias encontradas, y es preciso acabar con esta lucha y ponerlas en armonía, cosa que el Gobierno espera conseguir.”* Intervención del Sr. Ministro de Gracia y Justicia en el Congreso de los Diputados en la sesión del 14 de enero de 1859. *Diario de sesiones de Cortes...*, o.c., p. 537. R. G. L. J..., o.c., pp. 116-117.

precitada suspensión, decretada un mes antes, de las ventas de los bienes del clero⁷⁹⁶. Seijas reconocía abiertamente que la Ley de capellanías de 1841 constituía un hecho ilegítimo, pero consumado y que, como tal, fue aceptada por el Concordato de 1851 sin proceder a su derogación. Lo cierto es que de un hecho ilegítimo como fue la Ley de 1841 no se podían derivar derechos.

Pero, además, la suspensión iba más allá de la propia ley de capellanías colativas de sangre, debido a que se suspendían también todos los juicios o procedimientos pendientes, como así lo dispone el artículo 2º:

“Quedan en suspenso los juicios o reclamaciones que penden ante los Tribunales civiles y eclesiásticos, así respecto de la división o secularización de los bienes comprendidos en dichas fundaciones y capellanías, como sobre el derecho de suceder en ellas, y hasta nueva providencia, no se admitirán en lo sucesivo demandas de esta clase.”

Disposición tan tajante no llevaba germen alguno de duda en su aplicación pronta e inmediata, no teniendo más alcance, como se ha podido apreciar, que el de la suspensión de los efectos de la citada Ley de 19 de agosto de 1841 y el de los juicios y reclamaciones en juzgados y tribunales. La prensa republicana (*La Discusión*, nº 233, de 2 de diciembre de 1856) y liberal (*La Iberia*, nº 727, de 5 de diciembre) reaccionó airadamente diciendo que “¿Cómo viene un ministro progresista á suspender una ley? ¿cómo el señor ministro de Gracia y Justicia suspende la ley de capellanías colativas, hechas también por las Cortes?”.

“Por el ministerio de Gracia y Justicia se ha dado en 28 de noviembre último un real decreto suspendiendo la ejecución de la ley de 19 de agosto de 1841 sobre supresión de capellanías colativas. Todo es notable en esta resolución y todo digno de severa censura. De su lectura se infiere que se ignoran las leyes cuya ejecución se suspende. Nosotros, y con nosotros todos los liberales, cada vez que vemos una ley derogada ó modificada por un real decreto, sentimos la misma indignación y protestamos en la forma que nos es posible” (BNE. Hemeroteca digital).

Según José M^a Vázquez García-Peñuela⁷⁹⁷ la intención de Seijas al adoptar tal resolución fue para forzar la apertura de negociaciones sobre el tema de las capellanías, causando un efecto inmediato, pues semejante norma detuvo la marcha de innumerables expedientes que pendían de resolución en los juzgados y tribunales, por lo que este decreto fue mal acogido, pues los aspirantes en los procedimientos en curso se sintieron contrariados ante el obstáculo que se interpuso, posponiéndose la terminación de las reclamaciones que al amparo de las leyes se habían formulado⁷⁹⁸. Consecuencia de ello

⁷⁹⁶ Real Decreto de 26 de septiembre de 1856. Ibidem, tomo LXIX, p. 513.

⁷⁹⁷ J. M. Vázquez García-Peñuela, *La negociación del Convenio-Ley español de capellanías de 1867*, Ius Canonicum, vol. XXXV, Pamplona 1995, p. 608.

⁷⁹⁸ “¿Y qué dirán los tribunales eclesiásticos y los defensores de su independencia, al ver que también su acción se paraliza y que los efectos del decreto llegan hasta el punto de declararlos incompetentes para conocer en los negocios que en ellos pendían antes del decreto de 1855?” *La Iberia*, o.c.

El Sr. Aguirre, en una intervención ante el Congreso en 1859, atacaba este decreto diciendo: “Siguió, pues, la legislación de capellanías colativas hasta el decreto citado, en el cual se hicieron dos cosas: primera, no derogar sino suspender los efectos del decreto de 5 de febrero de 1855; segunda, que es lo grave, dejar en suspenso todos los litigios pendientes en los tribunales eclesiásticos y civiles, no sólo

fue que, sin haber transcurrido un mes de la publicación de dicha norma, el Supremo Tribunal de la Rota elevó una carta de protesta a la Reina solicitando que se aclarase el Real Decreto en el sentido de que no supusiese una paralización de los pleitos eclesiásticos.

De todos modos, aparte de los gastos de aquella serie de litigios y de lo indefinido de tal mandato que hacía mantener viva la impaciencia a un plazo más bien desconocido, no es mucho aventurar que se reputase a dicha norma de poco equitativa al paralizar la maquinaria judicial sobre el cambio de situación de los bienes que se venían disputando, según la legislación hasta entonces vigente⁷⁹⁹.

Ante el terminante artículo segundo y su mala acogida (se seguía criticando de forma reiterada en la prensa, como en los periódicos *La Esperanza*, nº 3874 de 6 de junio de 1857, que narraba que “*en virtud de dicha resolución, las pocas capellanías de carácter familiar que habían quedado sin disolver, permanecen vacantes indefinidamente y las piadosas intenciones de los que las instituyeron quedan frustradas*”, *La restauración*, nº 91, de 8 del mismo mes que pedía que se diese curso a los expedientes incoados en los tribunales eclesiásticos, los cuales seguían suspendidos, o la reiteración del primero en 10 de febrero y 27 de marzo de 1858⁸⁰⁰), se presentó en el Congreso, durante el mes de enero de 1859, una proposición de ley para dejar sin efecto dicho artículo segundo, no llegando a votarse y siendo retirado ante las promesas de un inmediato arreglo definitivo⁸⁰¹.

acerca del derecho de adjudicación de los bienes con que se han fundado las capellanías, sino hasta de aquellos que se litigaban en los tribunales eclesiásticos para poder ordenarse los que probasen tener mejor derecho”. Intervención del Sr. Aguirre en el Congreso de los Diputados en la sesión del 14 de enero de 1859. R. G. L..., o.c., p. 109.

⁷⁹⁹ L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas...*, o.c., pp. 36 y 37.

⁸⁰⁰ “*Esperamos, pues, que el gobierno actual repare lo mal hecho, y que, sino manda continuar desde luego los muchos pleitos que hay en los tribunales eclesiásticos de España ilegalmente suspendidos con gravísimo daño de las partes, á lo menos se esforzará por ponerse cuanto antes de acuerdo con el Sr. Nuncio, así acerca de ese punto, como sobre todo lo concerniente á capellanías colativas*”. “*Apenas pasa día en que no recibamos alguna comunicación acerca de la necesidad de resolver pronto el asunto concerniente á capellanías colativas. No se nos venga diciendo que la suspensión acordada por el real decreto de 28 de noviembre es interina y que concluirá al tiempo que las negociaciones pendientes con la Santa Sede; y ¿cuándo llegará ese día? Ninguno lo sabe. La Esperanza*, nº 4084 y 4123. BNE. Hemeroteca digital.

⁸⁰¹ La proposición de ley fue presentada por el Sr. Aguirre, que había sido, en el bienio progresista, Ministro de Gracia y Justicia. Durante su mandato se restableció por Real Decreto de 6 de febrero de 1855 la Ley de 19 de agosto de 1841. El texto de la proposición, leído el 14 de enero de 1859, era el siguiente: “*Los tribunales eclesiásticos y civiles sustanciarán y fallarán, con arreglo a las leyes vigentes al tiempo de entablarse las demandas, todos los pleitos pendientes acerca del mejor derecho a suceder en las capellanías colativas de sangre, o a la división o adjudicación de los bienes con que estaban fundadas, quedando sin efecto el art. 2º del Real Decreto de 28 de noviembre de 1856, que mandó suspender su tramitación*”. El gobierno se opuso en el concepto de que su discusión podía ser poco conveniente cuando se hallan pendientes negociaciones con la corte de Roma, por lo que convendría no se insistiese en sostener dicha proposición. Al final de las distintas intervenciones la proposición fue retirada por el Sr. Aguirre accediendo al ruego del ministro de Gracia y Justicia: “*Después de haber oído al Sr. Ministro de Gracia y Justicia, y de haber dicho que pide una poca tregua para orillar este negocio, yo tengo mucho gusto en retirar mi proposición*”. Intervención del Sr. Aguirre en el Congreso de los Diputados en la sesión del 14 de enero de 1859. *Diario de sesiones de Cortes...*, o.c., pp. 531 y 537. R. G. L..., o.c., pp. 106 y 117. *La Época*, nº 2998, de 14 de enero del año citado. *El Clamor público, La Discusión*, nº 889 y *La España*, nº 3813, entre otros, todos de fecha 15 de enero del mismo año. BNE. Hemeroteca digital.

Tal era el estado en que se encontraba la legislación en materia tan importante como es la de capellanías colativas a las postrimerías de 1856, y cuando en el período de los quince años transcurridos desde la Ley de 1841, se habían sucedido intermitencias y contrariedades en el desarrollo de ésta última.

Habiéndose pedido datos a las Audiencias Territoriales, a excepción de la de Burgos de la cual no se disponía información, sobre el número de pleitos incoados hasta la fecha sobre adjudicación de bienes de capellanías, en virtud de las anteriores disposiciones de la Ley de 19 de agosto de 1841, Real Decreto de 5 de febrero de 1855, con expresión de los finalizados y de los que quedaban pendientes con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto de 28 de noviembre de 1856, resultó lo siguiente:

Total pleitos incoados: 13.315. De los cuales en 10.842 hubo fallo a favor de la adjudicación de los bienes a los parientes. Quedaron pendientes y en suspenso: 2.473. De lo cual se desprende que se resolvieron el 81,44 % y quedaron sin resolver el resto, es decir, el 18,56 %. Cabe mencionar la multitud de pleitos incoados en la Audiencia de Sevilla, nada menos que 4.069, lo que representa el 30,5 % del total nacional, muy por encima de las Audiencias de Cáceres, Granada, Madrid y Valladolid, lo que da idea de la gran cantidad de capellanías que existían.

Tabla 6. Pleitos incoados, resueltos y pendientes sobre adjudicación de bienes de capellanías en las distintas Audiencias⁸⁰².

AUDIENCIA	PLEITOS	RESUELTOS	PENDIENTES
Albacete	960	805	155
Barcelona	531	410	121
Cáceres	1.548	1.341	207
Canarias	60	46	14
Coruña	313	210	103
Granada	1.853	1.562	291
Madrid	1.683	1.475	208
Mallorca	44	38	6
Oviedo	253	223	30
Pamplona	181	168	13
Sevilla	4.069	3.065	1.004
Valencia	143	113	30
Valladolid	1.121	928	193
Zaragoza	556	458	98
TOTAL	13.315	10.842	2.473

⁸⁰² A. Bravo y Tudela, *El derecho vigente sobre capellanías colativas...*, o.c., pp. 126-127.

2.2.8.- El Convenio Adicional de 1860.

Con la vuelta al poder del general O'Donnell, en 30 de junio de 1858 al frente de la Unión Liberal, siguiendo una política más cercana a la línea moderada que a la progresista, se envió a Roma un nuevo embajador, Ríos Rosas, para negociar y acabar, de una forma definitiva, la cuestión de la desamortización eclesiástica y la permuta de los bienes eclesiásticos en poder del Estado, pues la Santa Sede insistía en que las capellanías no adjudicadas mediante sentencia firme hasta entonces debían seguir en propiedad de la Iglesia y regirse de la misma forma en que lo habían hecho antes de 1841.

Se intentaba llegar a un acuerdo sobre la regulación de la permuta de los bienes eclesiásticos, en poder del Estado, por títulos de la deuda, aclarando los artículos 35 (venta de bienes eclesiásticos y su conversión en inscripciones intransferibles de la deuda del Estado del 3%) y 38 (devolución de los bienes del clero) del Concordato. La gestión del embajador español dio sus frutos celebrando un importante Convenio con la Santa Sede, en 25 de agosto de 1859, con consideración de adicional al Concordato de 1851 y que fue ratificado en 7 y 14 de noviembre, difundido en la Gaceta en 15 de enero de 1860 y publicado como Ley en 4 de abril del año citado. Lo que hizo fue poner en vigor el concordato entre el Estado español y la Santa Sede, que hasta entonces no había sido respetado. Es evidente que la prensa liberal e incluso la monárquica estaba totalmente en contra del citado convenio⁸⁰³.

En lo que concierne a los bienes de la Iglesia, realizó una distinción respecto a los mismos de gran trascendencia, estableciendo una normativa diferente según fuesen bienes que la Iglesia adquiriese con posterioridad a la entrada en vigor de dicho convenio, los cuales quedaban excluidos del ámbito de aplicación de las leyes desamortizadoras, no estableciéndose respecto de ellos limitación alguna en cuanto a su disfrute y enajenación; y bienes que la Iglesia poseía con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de 1860. Estos sí que estaban sujetos a desamortización y, por tanto, podían imponerse a su titular la venta forzosa de los mismos. Para este grupo de bienes era necesario establecer, como sucedió con los bienes del Estado, a los que se les aplicaba la legislación desamortizadora, una relación de los mismos que quedaban en poder de la Iglesia y excluidos de la venta forzosa; de ahí el evidente paralelismo entre el artículo 6º del Convenio, que excluía de la permutación todos los bienes enumerados

⁸⁰³ “Este convenio es el peor de todos los convenios celebrados en el mundo católico, desde que se inventaron los convenios, como medio de transigir las diferencias entre las potestades eclesiástica y secular. El cardenal Antonelli y el señor Ríos Rosas piensan de otro modo; ellos sabrán porqué, y también lo sabrá el gobierno español que tiene la longanimidad bastante para pasar por lo que aquellos personajes han hecho, sin cuidarse de los intereses de millares de familias, que perderán unas lo que legítimamente han adquirido, y que gimen otras en la miseria por no habérseles adjudicado lo que con arreglo á la ley les corresponde. Ya lo saben los poseedores de bienes de capellanías colativas, los que tienen litigios pendientes sobre los mismos, y los que tienen adquirido derecho á ellos por la ley de 19 de agosto de 1841 y sus aclaratorias. El gobierno y el Papa dispondrán lo que gusten de esos bienes; si no para cederlos y permutarlos para otra cosa que les parezca conveniente, porque para dar á cada uno lo que es suyo, no hay necesidad de convenios”. *La Iberia*, de 18 de enero de 1860.

“Hemos sentido extraordinariamente que el punto de las capellanías colativas se haya aplazado para otra época, haciéndole objeto de un tratado especial. ¿Y cuándo se celebrará? ¿Cómo el gobierno ha cometido una falta de tanto bulto y trascendencia? ¿Cómo no dio á su embajador extraordinario las instrucciones convenientes para concluir un asunto de los más graves y apremiantes?” *La Esperanza*, nº 4686, de 24 de enero de 1860. BNE. Hemeroteca digital.

en los artículos 31 y 33 del Concordato (edificios, huertos, palacios), con el artículo 2º de la ley de 1855.

Este Convenio Adicional derogaba la Ley de Madoz de 1 de mayo de 1855, respecto a los bienes de la Iglesia, y se reconocía, en su artículo 3º lo siguiente: *“de nuevo y formalmente el libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, retener y usufructuar en propiedad y sin limitación ni reserva toda especie de bienes y valores, quedando en consecuencia derogada por este convenio cualquiera disposición que le sea contraria, y señaladamente, y en cuanto se le oponga, la ley de 1º de mayo de 1855”* (C. L. E..., o.c., tomo LXXXIII, p. 267). Además, en su artículo primero el Gobierno adquiría el compromiso de respetar en el futuro el patrimonio de la Iglesia en España:

“El Gobierno de su Majestad Católica habida consideración a las lamentables vicisitudes porque han pasado los bienes eclesiásticos en diversas épocas; y deseando asegurar a la Iglesia perpetuamente la pacífica posesión de sus bienes y derechos, y prevenir todo motivo de que sea violado el solemne Concordato celebrado el 16 de marzo de 1851, promete a la Santa sede que en adelante no se hará ninguna venta, conmutación ni otra especie de enajenación de los diversos bienes sin la necesaria autorización de la misma Santa Sede.”

Aquí se reconocía la plena facultad de la Iglesia a disponer de sus bienes; ya que, si bien este artículo 3 del convenio era claramente impreciso, y no hacía referencia a tal facultad de disposición, sin embargo, ésta se deducía claramente de dicho precepto, al reconocer en propiedad y sin limitación ni reserva alguna, y al derogar la ley desamortizadora de 1855. Pero respecto a los bienes que la Iglesia había adquirido con anterioridad al indicado convenio, continuaron vigentes las referidas leyes, en virtud de lo cual hay que considerarlos sometidos a desamortización y, por tanto, ni eran inscribibles a nombre de la Iglesia en el Registro de la Propiedad, ni podía disponer la Iglesia de ellos, ya que, con arreglo al procedimiento desamortizador, la disposición y ventas de los mismos era realizada por el Estado.

Por su parte, la Santa Sede accedía a que los bienes que se encontraban en poder del Estado y que eran propiedad de la Iglesia fuesen objeto de permuta, ofreciendo a aquélla inscripciones intransferibles equivalentes al valor de los bienes, según el artículo 4º:

“En virtud del mismo derecho, el Gobierno de S.M. reconoce a la Iglesia como propietaria absoluta de todos y cada uno de los bienes que le fueron devueltos por el Concordato. Pero habida consideración al estado de deterioro de la mayor parte de los que aún no han sido enajenados..., el Gobierno de S.M. ha propuesto a la Santa Sede una permutación, dándose a los Obispos la facultad de determinar, de acuerdo con sus Cabildos, el precio de los bienes de la Iglesia situados en sus respectivas diócesis, y ofreciendo aquel, en cambio de todos ellos y mediante su cesión hecha al Estado, tantas inscripciones intransferibles del papel del 3 por 100 de la Deuda pública consolidada de España cuantas sean necesarias para cubrir el total valor de dichos bienes.”

En este caso el Convenio mantiene un nuevo principio, que ya había sido puesto en práctica respecto a los bienes de corporaciones civiles, por la Ley de 1º de abril de 1859 y la Real Orden de 1º de julio del mismo año que aprobaba la instrucción para llevar a efecto la citada ley, por lo que, realmente la desamortización continuaba, pero con una transformación de la propiedad, en cuanto, como se ha podido apreciar, el Estado se obligaba a entregar en equivalencia de los bienes enajenados títulos intransferibles de la deuda.

Después de que se realizase la tasación de las fincas y bienes eclesiásticos sujetos a permutación, y hecha la cesión al Estado, éste entregó inscripciones, computando su producto en la dotación del clero. Pero en realidad la llamada permutación no fue bien aceptada por los eclesiásticos españoles, ya que se produjeron irregularidades, además de grandes retrasos e interrupciones en el pago de los intereses⁸⁰⁴, pues al poco tiempo de la entrega de los títulos de Deuda pública, el Gobierno de Isabel II suspendió el pago de los precitados intereses “*hasta nuevo aviso*”, el cual no se dio hasta bien entrado el siglo XX, concretamente en 1959⁸⁰⁵, con lo cual se fueron acumulando los intereses vencidos, debidos y no pagados de aquellos títulos, a la vez que se perdían o desaparecían muchas inscripciones de la deuda. Pero estaba claro que la situación de un patrimonio eclesiástico tan amplio no duraría mucho tiempo más.

Siguiendo a Álvarez y Gómez⁸⁰⁶ hay que hacer notar que los bienes de capellanías colativas no familiares, de patronato eclesiástico o de derecho común (véase cuadro 4), se hallan comprendidos en este Convenio de 1860, pues nada se dice expresamente de ellas. Por consiguiente, los bienes de tales fundaciones, al pertenecer a la Iglesia, debieron incluirse en los inventarios de permutación ordenados posteriormente mediante Real Decreto de 21 de agosto de 1860.

Pero los bienes de capellanías colativas (de sangre) no quedaron sujetos a la permutación y sobre los mismos no se llegó a un acuerdo definitivo, sino que, por efecto del artículo 10º, quedaba nuevamente pospuesto, provocando asombro y perplejidad, incluso la indignación de muchas familias⁸⁰⁷:

⁸⁰⁴ Pero en realidad, según afamados expertos, no se podía hablar de permuta y así lo expone el auditor de la Rota Ruiz de Velasco, con una incisiva y contundente crítica: “*La permutación de bienes no reviste propiamente el carácter de un contrato de permuta, no hubo verdadero cambio. El Estado planteó así el contrato: Que el Clero me entregue todas las fincas que desde tiempos remotísimos viene poseyendo con el más justo título. Yo, el Estado, me apoderaré de los millones que los bienes valgan, no para guardarlos como depósito sagrado por su origen y procedencia. Yo gastaré los millones que produzca la venta de los bienes, y al Clero solamente le entregará un pequeño interés de ese capital, y como garantía le daré un papel-recibo, que es a lo que equivale una lámina intransferible. Si hubiese sido propiamente una permuta, tendríamos hoy todo el capital que valieron los bienes enajenados. No nos han pagado más que los intereses, y éstos con grandes interrupciones, y aun sobre estos mismos intereses, el Clero podría exigir una liquidación. El Clero no cobra un sueldo como los demás empleados del gobierno. El Clero es un acreedor a quien el Estado solamente le paga los intereses de un capital entregado*”. F. Ruiz de Velasco, *Método práctico para los párrocos...*, o.c., pp. 342-343.

⁸⁰⁵ F. Tomás y Valiente, *El marco político de la desamortización...*, o.c., p. 112, citando a L. Portero Sánchez, *Hacia el fin de la desamortización*, en REDC, Salamanca 1961, Volumen 17, nº 49, p. 153.

⁸⁰⁶ M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., cap.VI, p. 38.

⁸⁰⁷ “*El 14 de abril de 1860 publicó la Gaceta como ley el nuevo Convenio con la Santa Sede, y se vio con asombro que se aplazaba para mas adelante el asunto de capellanías. No sabemos á qué atribuir tanta irresolución; pues el negocio, ademas de ser muy sencillo, ha llegado á hacerse tan urgente, que exige una resolución cualquiera, aunque sea interina. El gobierno está en la obligación de proveer inme-*

“Los bienes pertenecientes a capellanías colativas y otras semejantes fundaciones piadosas familiares, que a causa de su peculiar índole y destino de los diferentes derechos que en ellos radican no pueden comprenderse en la permutación y cesión de que aquí se trata, serán objeto de un convenio particular entre la Santa Sede y S.M. Católica.”

En consecuencia, se mantuvo la misma situación legal, es decir, la del Real Decreto de 28 de noviembre de 1856, con lo que los bienes de las capellanías colativas subsistentes quedaban apartados de la posibilidad de salir del patrimonio eclesiástico, a pesar de los infructuosos y constantes intentos de las dos partes en litigio, la Santa Sede y los distintos ministros de Gracia y Justicia que lo fueron entre 1856 y 1863. El primero fue Seijas Lozano, el cual intentó la apertura de negociaciones con Roma y propuso un arreglo sobre el tema, siendo rechazado, volviendo a realizar una nueva exposición de sus argumentos mediante un proyecto de arreglo que fue enviado en 20 de julio de 1857 a la Nunciatura. Con la salida del Gobierno de Narváez en octubre, Seijas dejó el asunto. De los ministros posteriores, Joaquín José Casaus y José Fernández de la Hoz no se sabe nada de las negociaciones sobre capellanías. Pero el Vaticano no había olvidado el tema, y en febrero de 1859 manda una instrucción al Nuncio y le indica que no debe ceder a las exigencias del Gobierno, sino exigir el fiel cumplimiento del concordato y del Real Decreto de 30 de abril de 1852. En resumen, la posición de la Santa Sede es que las capellanías no adjudicadas mediante sentencia firme hasta la fecha debían seguir en propiedad de la Iglesia y regirse por las normas anteriores a 1841. Ya en otoño de 1860 el ministro Santiago Fernández Gómez Negrete se pone en contacto con el Nuncio para reanudar conversaciones y arreglar el problema de las capellanías; tras una negativa a su propuesta, abre otra vía de negociación, esta vez con Roma y remite un proyecto de Decreto que solucione la mayor preocupación que tenía el Gobierno: levantar la suspensión de los pleitos de capellanías decretada por Seijas en la citada fecha de 28 de noviembre de 1856⁸⁰⁸.

diatamente á esta necesidad, debiendo ejecutarlo conforme á las disposiciones de los fundadores”. La Esperanza, nº 4791, de 30 de mayo de 1860.

“¿Y qué ha sucedido? Que hay miles de pleitos detenidos en los tribunales en virtud de un decreto, con perjuicio de las familias (...) y están en suspenso (...), y después de esperar, y de decir el gobierno que se esperase á que se hiciese el convenio, se ha hecho el convenio, y nos encontramos que las capellanías colativas ni están vigentes, ni se ha resuelto nada acerca de ellas”. Diario de sesiones de Cortes. Congreso de los diputados. Legislatura de 1860. Madrid 1884. Tomo I, sesión de 9 de junio, p. 225 y El Clamor Público, nº 4884, de 10 de junio de 1860. BNE. Hemeroteca digital.

⁸⁰⁸ Dicho proyecto de Decreto, que fue llevado a Roma por el Cardenal de la Puente, obispo de Burgos, en junio de 1862, derogaba el de 28 de noviembre de 1856, y preveía la manera en que se levantaría la suspensión de los pleitos sobre reclamaciones de bienes de capellanías, y la forma en que los adjudicatarios asegurarían el cumplimiento de las cargas que gravaban dichos bienes. Respecto a las capellanías cuyos bienes no se había solicitado la adjudicación judicial quedaría para un posterior acuerdo. Rechazada la propuesta, se redactó un nuevo proyecto en el que se destacaba la posibilidad de que los descendientes de los fundadores pudiesen adjudicarse los bienes de capellanías como de libre disposición, a cambio de entregar al obispo una lámina de Deuda pública que produjese una renta igual a la que venían produciendo los bienes en los últimos cinco años. Con la dimisión del Gobierno y el cese de Fernández Gómez Negrete, en enero de 1863, se paralizó dicho proyecto. Se intentó otra vez reanudar las negociaciones con dos fugaces ministros, Pastor Díaz y Auriol bajo el gobierno de O'Donnell, pero se frustraron al dimitir todo el gobierno en marzo de 1863. Se sucedieron varios ministros de Gracia y Justicia, sin que se llegase a un acuerdo. En 1865 se reanudaron las negociaciones. El ministro Calderón Collantes redactó un nuevo proyecto que no fue aprobado por el gobierno en junio de 1866. En julio, nombrado ministro Lorenzo Arrazola, se retomaron las negociaciones, siendo redactado un nuevo

Pero había otro frente abierto que generó encontradas controversias respecto a las capellanías laicales, tanto de patronato activo como pasivo de sangre. La duda era si estaban comprendidas en la denominación de “*fundaciones piadosas familiares*” a que se referían, tanto el artículo 1º del Real Decreto de 30 de abril de 1852, como el de 28 de noviembre de 1856 y después, en el artículo 10 del Convenio Adicional de 25 de agosto de 1859 (Ley de 4 de abril de 1860). Todo ello suscitaba dificultades en los juicios pendientes y en los promovidos con posterioridad a los dos reales decretos enunciados. Algunos, entendían subsistentes dichas capellanías, que como se ha analizado anteriormente, eran verdaderas vinculaciones.

En aplicación de la Ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820, restablecida en 30 de agosto de 1836, en su artículo primero, se dejaba claro que habían quedado suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, *patronatos* y *cualquiera otra especie de vinculaciones* y que quedaban restituidos a la clase de absolutamente libres. Aquí, en este artículo se habla de patronatos que, en realidad, se puede aplicar a las capellanías laicales, ya que las dos denominaciones se refieren a una vinculación civil sujeta a las disposiciones civiles⁸⁰⁹.

En consecuencia, nadie debe dudar de que este tipo de capellanías están comprendidas dentro de dicha ley de 1820 y, como fueron desvinculadas, se hizo la adjudicación de sus bienes conforme a lo ordenado por aquélla. Y que continuó su aplicación respecto a las mencionadas vinculaciones, sin que a ello se opusiera el Concordato de 1851, que ni hace mención a las capellanías laicales ni se puede aplicar a ellas, al ser de aplicación a las eclesiásticas y colativas. Tampoco se les puede aplicar el Real Decreto de 30 de abril de 1852, ni el de 28 de noviembre de 1856, ni el Convenio Adicional de 25 de agosto de 1859.

Otra cosa es que en las palabras *piadosas fundaciones familiares* se quisiese ver una errónea aplicación de la ley de capellanías colativas

2.2.9.- El Convenio-Ley de capellanías de 1867.

Más de diez años duró la situación que había creado el Real Decreto de 28 de noviembre de 1856, de suspensión de la adjudicación de los bienes de las capellanías, y siete en llegar a un acuerdo definitivo y satisfactorio entre la Santa Sede y España. Esta dilación se debió a dos circunstancias. La primera y principal era que la materia a tratar era muy compleja, además de enfocarla desde dos puntos de vista totalmente antagónicos, lo que implicó el rechazo de un primer proyecto presentado a la Santa Sede, en el que tenía por base la supresión absoluta de las capellanías colativas en España. El Gobierno, en concreto el Ministerio de Gracia y Justicia, consideraba las capellanías colativas como un tipo de vinculaciones, mientras que para la Iglesia eran beneficios con un derecho de presentación anejo. La segunda circunstancia está unida a la inestabilidad política y los subsiguientes y frecuentes cambios de gobierno que influyeron de forma negativa en poder llegar a un acuerdo en la ya difícil negociación,

proyecto por González Romero, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en octubre. Realizadas algunas correcciones y negociaciones entre finales de 1866 y el mes de mayo de 1867, por fin, en junio de del citado año se llegó al ansiado acuerdo. M. Vázquez García-Peñuela, *La negociación del Convenio-Ley...*, o.c., pp. 622 y ss.

⁸⁰⁹ Véase, D. Ibáñez, *De las capellanías laicales*, en RGLJ, Madrid 1860, Tomo XVII, pp. 510-511.

con tres proyectos que no llegaron a materializarse (se alternaron en el gobierno Leopoldo O'Donnell y Ramón Narváez, con el subsiguiente cambio de ministro de Gracia y Justicia, que en 1865 fue Fernando Calderón Collantes en sustitución de Lorenzo Arrazola García). La prensa recogía constantes noticias sobre dichas gestiones, en un asunto calificado de complicado y espinoso, en 1861: “*En los momentos presentes se siguen activas negociaciones en Madrid entre el señor ministro de Gracia y Justicia y el Nuncio de Su Santidad, para el arreglo del complicado y espinoso asunto de las capellanías colativas, donde juegan tantos y tan encontrados intereses y opiniones*”. *La Correspondencia*, nº 899, *La Esperanza*, nº 5024, de 28 de febrero y *La Iberia*, nº 2016, de 1 de marzo. Incluso en las Cortes se cuestionaba dicho arreglo, además del gobierno de la Unión Liberal de O'Donnell: “*Y solo diré que de la negociación tan prometida sobre capellanías colativas, no hay noticia ninguna*”. Intervención del diputado Sr. Ruiz Zorrilla en la sesión del día 8 de abril de 1861 (*Diario de sesiones de Cortes...*, o.c., Tomo V, p. 3632). También en los años posteriores hubo varias y recurrentes interpelaciones al Ministro de Gracia y Justicia sobre el estado de las negociaciones con Roma, además de reiterados artículos, cartas y reclamaciones en los periódicos que preconizaban el malestar y “*estado violento*” de los interesados en el arreglo ante “*el paso del tiempo, el mal cada vez mayor y el remedio más urgente*”. (Carta al director de *La Esperanza*, publicada en el nº 5453, en 22 de julio de 1862. BNE. Hemeroteca digital). En el año 1864 seguía sin resolverse el problema y, además, para tensar más los ánimos, circularon noticias sobre una solución, las cuales resultaron totalmente infundadas⁸¹⁰. A ello hay que añadir que ministro de Gracia y Justicia Calderón Collantes no aceptó una nueva proposición hecha por su predecesor en el cargo, en contestación a una interpelación que se le realizó en las Cortes el 12 de marzo de 1866, lo que demoró todavía más el asunto de las capellanías. Dicho ministro reconoció en una nueva sesión de las Cortes, de fecha 20 de marzo, que había incoados y sin curso 2473 pleitos sobre capellanías, y decididos ejecutoriamente más de 13000 bajo el imperio de la legislación de 1841 y la de 1855, de modo que los males, de no resolverse esta cuestión, eran gravísimos (*Diario de sesiones de Cortes. Congreso de los diputados. Legislatura de 1865 a 1866. Madrid 1866. Tomo II, pp. 672 y 673. La Correspondencia de España*, nº 2971 y *La Época*, nº 5562, ambos periódicos del 21 de marzo).

Por fin, cuando parecía que ya no había ninguna esperanza y que el asunto era tan insoluble como el nudo gordiano, llegó el momento tan esperado y deseado por todos. La prensa de la época tenía información veraz de que se estaba negociando con Roma una nueva y esperada ley de capellanías, y así los periódicos *El Imparcial*, diario

⁸¹⁰ Así lo expresaba *La Esperanza*, nº 6000, de 28 de abril: “*Días pasados hablaron los periódicos de que se hallaba próximo á terminarse el proyectado arreglo de capellanías entre el Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad y el Excmo. señor ministro de Gracia y Justicia. Mucho nos alegramos de ver publicada esta noticia, porque suponiendo que tendría algún fundamento, nos hicimos la ilusión de que se acercaba el fin de los males que está causando muchos años ha á la Iglesia y á las familias la suspensión de un asunto que, urgente de suyo, lo es todavía mas si se atiende á que hay pleitos pendientes que conviene resolver pronto. Por desgracia no hemos visto en ninguna parte confirmada después tan grata nueva, lo que revela que ha sido una de tantas voces como de continuo hace circular el deseo de que se realice el espresado arreglo. ¿Qué beneficio proviene de que las cosas continúen como hasta aquí? Ninguno absolutamente: al contrario, ademas de los males que acabamos de apuntar, resulta el no pequeño de que se da ocasión á que los bienes sujetos á las cargas de las capellanías prosigan en el estado de abandono en que los hemos visto desde la publicación de las leyes desamortizadoras. ¿Á quién debe atribuirse la causa principal de estos daños? Al gobierno indudablemente*”.

político de la tarde, y *La Época*, periódico político diario, nº 5946, ambos del domingo 28 de abril de 1867, recogían las noticias de un proyecto de ley que en breve iba a presentarse a las Cortes⁸¹¹. Corroborando lo anterior, en 11 de mayo el ministro de Gracia y Justicia leyó en el Congreso un proyecto de ley autorizando al gobierno para confeccionar, de acuerdo con la Santa Sede, una ley de capellanías colativas (Apéndice 1º al diario de sesiones nº 24. *Diario de sesiones de Cortes*. Congreso de los Diputados. Legislatura de 1866 a 1867. Madrid 1867. Tomo I). Posteriormente, el 23 de mayo se remitió y leyó en el Senado un dictamen de la comisión, nombrada por el Congreso el 14 del citado mes, relativo al proyecto de ley en el que se autorizaba al Gobierno el arreglo definitivo de las capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas, en el que se reconocía su urgencia y conveniencia, e instaba a la Iglesia y al Estado a ponerse de acuerdo y armonizar intereses⁸¹², siendo aprobado el 1 de junio.

Tiempo hacía que se esperaba con vivas ansias un arreglo definitivo de las capellanías colativas de sangre y que se cumpliera lo pactado con la Santa Sede en 1851 y 1860, acuerdo que llegó por fin el 16 de junio de 1867, gracias a que las dos partes cedieron respecto a sus posiciones iniciales y a los denodados esfuerzos del Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola (con la ayuda de Ventura González Romero que redactó el proyecto) y monseñor Barili, nuncio de Su Santidad en Madrid, siendo publicado el Convenio con el rango de ley el 24 de junio de ese mismo año (Gaceta de 3 de agosto), cuando Arrazola ya no era ministro, pues había sido sustituido por Joaquín de Roncali, el 27 de junio. Al día siguiente se publicó un Real Decreto que comprendía la Instrucción para la ejecución del citado Convenio sobre capellanías colativas de patronato familiar, memorias, obras pías y otras fundaciones análogas, que llenó cumplidamente las deficiencias que había en las normas de tiempos anteriores.

Previamente, mediante la Ley de 7 de junio de 1867, publicada en la Gaceta del día 8, se había autorizado al Gobierno para formalizar, con la intervención de la Santa

⁸¹¹ “Se declararán subsistentes, según nos dicen, por la nueva ley, las capellanías cuyos bienes no, hubiesen sido reclamados a la publicación del real decreto de 28 de noviembre de 1856”. *El Imparcial*. “Los bienes de las capellanías se convertirán, según la nueva ley, en inscripciones de la Deuda del Estado de 3 por 100 consolidado. Los juicios de capellanías que quedaron pendientes en 28 de noviembre de 1856, según el proyecto de ley que se va a presentar a las Cortes, continuarán en la tramitación que tenían en aquella, fecha. Parece que en la ley de capellanías se declaran incongruas las que no produzcan 2.000 reales al año”. *La Época*. BNE. Hemeroteca digital.

⁸¹² “El arreglo definitivo de las capellanías colativas familiares y de otras fundaciones análogas es a todas luces urgente, y de reconocida conveniencia; y no fuera posible dilatarlo ya por más largo tiempo, sin grave menoscabo de muy altos y respetables derechos. La Iglesia y el Estado, representando cada cual los que le son respectivos, necesitan ponerse de acuerdo para armonizar intereses de naturaleza bien diferente, siquiera no sean ellos contrarios, ni aun opuestos entre sí; necesitan asegurar a la vez el cumplimiento de obligaciones piadosas y de preceptos puramente civiles; necesitan, por último, llegar a un punto de perfecta conciliación, provechosa para todos y de todos vivamente deseada.

En virtud de las razones expuestas, la comisión tiene la honra de someter a la deliberación del Senado el siguiente Proyecto de ley:

Artículo único. Se autoriza al gobierno para formalizar, con intervención de la Santa Sede, el arreglo definitivo de las capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la propia índole, conciliando hasta donde sea posible el bien de la Iglesia, el del Estado y el de las familias interesadas”. Apéndice 3º al diario de sesiones nº 25. *Diario de sesiones de Cortes*. Senado. Legislatura de 1866 a 1867. Madrid 1867. Tomo único. Lo recoge en sus noticias parlamentarias los periódicos *El Imparcial*, de 23 de mayo, *La Esperanza*, periódico monárquico, nº 6948, de 25 de mayo y *La España*, nº 6402, de 28 de mayo 1867, por mencionar algunos. BNE. Hemeroteca digital.

Sede, un arreglo definitivo de las capellanías colativas de sangre, conciliando el bien de la Iglesia, el del Estado y el de todas las familias interesadas. Esta Instrucción, que comprendía siete capítulos y sesenta y tres artículos, desarrollaba los veintitrés artículos del Convenio.

Incluso todavía antes de la publicación del Convenio-ley de 1867 se dictaron tres Reales Órdenes, la primera en 6 de julio de 1861 (*C.L.E.*, tomo LXXXVI, p. 57), sobre excepción de la venta de los bienes de capellanías familiares, la segunda en 8 de enero de 1865 (*R.G.L.J.*, tomo XXII pp 594-595), declarando exceptuadas también de la desamortización las láminas de la Deuda que representan bienes dotales de fundaciones piadosas, y la tercera en 23 de marzo de 1867, dictando reglas acerca del estado posesorio de bienes de instituciones familiares exceptuadas de la permutación canónica y declarando hallarse comprendidas en ella las de capellanías eclesiásticas no familiares, cuyo apartado 1º dice así:

“El actual estado posesorio de los bienes pertenecientes a capellanías colativas y otras semejantes fundaciones familiares se respetará por ahora y hasta que se publique el convenio particular a que se refiere el art. 10 del publicado como ley en 4 de abril de 1860, sin que se admita ni resuelva en contra solicitud o reclamación alguna”.
(*C.L.E.*, tomo XCVII, p. 597).

Con el Convenio se puso fin a más de veinticinco años de dudas y titubeos normativos sobre capellanías colativas de sangre, constituyendo la disciplina fundamental y doctrina legal básica en esta materia, reconocida su oportunidad, necesidad y legitimidad.

A) Fundamentos del Convenio.

El Convenio se realizó para llevar a cabo el Concordato de 1851, pues así se desprende de su preámbulo que dice *“Que para llevar a debido efecto cuanto en el Concordato de 1851, y Convenio de 1859, se dispone sobre capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la propia índole (...) se formalizó un proyecto de arreglo definitivo que había de someterse a la aprobación pontificia...”* (*CLE...*, o.c., tomo XCVII, p. 1187). Por lo tanto, el Convenio es un verdadero acto de ejecución del Concordato.

Comenzando por el artículo 1º, como es obvio, llama la atención la exposición de dos partes distintas. La primera alude a los bienes, derechos y acciones de capellanías colativas, y en la segunda a la redención de cargas eclesiásticas (la segunda parte se analiza más adelante):

“Las familias a quienes se hayan adjudicado o se adjudiquen por Tribunal competente los bienes, derechos y acciones de Capellanías colativas de Patronato familiar, activo o pasivo de sangre, reclamadas antes del día 17 de octubre de 1851, fecha de publicación del Concordato, como Ley del Estado...”

Al amparo de la legislación anterior se reclamaron muchos bienes de capellanías colativas. Los pleitos incoados con tal objeto finalizaron o quedaron pendientes a la

publicación del Concordato; a unos y otros se refiere la primera parte de este artículo, delcarando subsistente y legal el principio en el que se apoyaban, aprobando las adjudicaciones practicadas y disponiendo que se realizaran las que por virtud del mencionado Concordato se suspendieran. Hay, por tanto, un reconocimiento expreso al principio desamortizador y a la Ley de 19 de agosto de 1841.

De la lectura del articulado se aprecia la voluntad firme y decidida de las partes de zanjar el asunto de forma definitiva, al ceder ambas respecto a lo que consideraban sus derechos. En consecuencia, la Santa Sede da por perdida la propiedad de los bienes de las capellanías que en el pasado, por decisión unilateral del Estado, fueron adjudicadas a las familias. Incluso se aprobaron tales adjudicaciones, como lo expresa el artículo 21 del Convenio:

“Además de esto, Su Santidad, en todo lo que pueda ser necesario, extiende la benigna sanción contenida en el art. 42 del Concordato de 1851, a los bienes a que se refiere el presente convenio”.
(Ibidem, p. 1192).

Por su parte, el Gobierno español, se comprometía a que el Nuncio en España, como delegado de la Santa Sede interviniera en la elaboración de las disposiciones necesarias para llevar a buen fin lo acordado, de lo que se desprende que había buenas relaciones en ese momento, lo que se apreciaba en el artículo 23:

“Con la intervención del Nuncio Apostólico cerca de Su majestad Católica, al cual la Santa Sede, delega al efecto todas las facultades necesarias, se dictarán la correspondiente instrucción y disposiciones reglamentarias convenientes para el desenvolvimiento y ejecución del presente convenio...”

Esta colaboración del Nuncio con el Gobierno no era ninguna novedad, pues ya había anteriores precedentes de disposiciones dictadas con el acuerdo o consentimiento expreso del representante diplomático del Santo Padre, como fue la aprobación de los reales decretos de de 30 de abril de 1852 y de 28 de noviembre de 1856, lo que había sido aprovechado por la oposición para verter agudas críticas⁸¹³.

También manda el Convenio que siga adelante la sustanciación de los pleitos pendientes, tanto eclesiásticos como civiles, en sus artículos 10 y 20, respectivamente, cuya tramitación había sido suspendida once años antes, en virtud del artículo segundo del Real Decreto de 28 de noviembre de 1856:

“En los juicios pendientes en los Tribunales civiles, que deberán continuar según el estado que tenían al tiempo de la suspensión decretada en 28 de

⁸¹³ Así ocurrió en una intervención del diputado Sr. Aguirre en la sesión del 14 de enero de 1859, R.G.L.J., nº 14, pp. 109-110: “Y no se diga que ese decreto estaba dado con acuerdo del nuncio de Su Santidad, nuevo poder legislativo que se ha mezclado en España entre los poderes legítimos del estado, no: y digo nuevo poder legislativo, porque la fórmula, “con acuerdo del nuncio de Su Santidad” es de esta época: no ha existido nunca en nuestra nación, y siempre que se ha acordado algo con la Santa Sede, el Gobierno ha recibido el Breve y ha publicado la Ley, pero sin decir, con acuerdo (...) Esto es grave, esto no se ha oído nunca, esto no puede hacerse, por respetables que sean las personas que lo han hecho”.

noviembre de 1856 sobre adjudicación de bienes de capellanías, de obras pías y otras fundaciones de su especie...”

“Los pleitos sobre adjudicación de capellanías, que pendían en los tribunales eclesiásticos y fueron suspendidos en 1856, continuarán su curso, según el estado que entonces tenían.”

Muy importantes y de gran interés son las prescripciones contenidas en este artículo 10 transcrito, ya que ante una variedad de opiniones y pareceres sobre lo mandado en el Real Decreto de 1856⁸¹⁴, con resultados distintos al continuarse los pleitos pendientes a la publicación de la Ley de 1841 en los tribunales eclesiásticos y algunos otros incoados con posterioridad al Real Decreto de 30 de abril de 1852, sino también en los tribunales civiles muchos otros incoados antes y después del 17 de octubre de 1851, sobre obtención de fundaciones piadosas familiares y secularización de los bienes de capellanías colativas, el precepto citado está redactado con cuidada habilidad y no se presta a interpretaciones diversas. Se refiere a *“los juicios pendientes en los tribunales civiles”*. No cabe, pues ninguna confusión ni dudas sobre el verdadero significado de los artículos 1º y 2º del tan abundantemente citado Real Decreto de 28 de noviembre de 1856.

Por lo que se refiere al artículo 20, el mismo alude a un caso excepcional. Del mismo modo que por el artículo 10 se respeta la situación de los pleitos pendientes en los tribunales civiles sobre adjudicación de bienes de capellanías, en éste se reconoce la validez de las pretensiones sobre adjudicación de capellanías que hubiesen continuado en suspenso hasta después de publicado el Real Decreto de 28 de noviembre de 1856 y estén pendientes en los tribunales eclesiásticos.

Pero lo verdaderamente importante que se regula en el Convenio-Ley de 1867 lo forma el mecanismo por el cual los bienes de las capellanías colativas de sangre pueden pasar a las familias de los fundadores, pero no mediante adjudicación directa, como ordenaba la Ley de 1841, sino a través de una indemnización previa, con lo que la capellanía, cuyos bienes pasaban a los sucesores del fundador, no se extinguía, sino que sus bienes se transformaban, pasando de ser inmuebles a muebles, en concreto a títulos de deuda.

⁸¹⁴ La división de opiniones y posturas era la siguiente: había quienes sostenían que la suspensión ordenada por el Real Decreto de 1856 era absoluta y determinante, y que comprendía todos los pleitos incoados, sin distinción de épocas, antes y después del Concordato, tanto en los tribunales civiles como en los eclesiásticos. Otros sostenían que la suspensión sólo se refería a los juicios y reclamaciones incoados con posterioridad al 17 de octubre de 1851 (en el que se consideraba derogada la ley de 1841 por la publicación del Concordato), y que hubiesen sido promovidos desde esa fecha hasta el 30 de abril de 1852 (fecha de publicación del Real Decreto) y que se continuasen en virtud del de 6 de febrero de 1855 (que declaraba vigente la Ley de 1841), y comprendidos en el Concordato, lo que se manifestaba por el hecho de la derogación de la Ley de 1841 por el artículo 1º del Real Decreto de 1852 citado, desde el expresado día 17 de octubre y por el reconocerse como válida y legal la distribución de bienes ejecutada entre los llamados por dicha Ley de capellanías e igualmente la adjudicación que se hiciera al terminar los pleitos pendientes con anterioridad al mencionado día 17 de octubre. Véase J. M. Franco y Ortiz y A. Bravo y Tudela, *Novísima legislación...*, o.c., pp. 279-281.

Pero esta conmutación (cambio de una cosa por otra, en este caso, cambio de los bienes de capellanías a títulos de deuda) no se aplicaba por igual a todas las capellanías, ya que el Convenio establecía distinciones entre ellas.

B) Capellanías subsistentes y extinguidas.

La distinción básica entre capellanías que hace el Convenio reside en considerar extinguidas, en su artículo 3º, las capellanías cuyos bienes habían sido objeto de solicitud de adjudicación con anterioridad al 28 de noviembre de 1856 (que suspendió los efectos del de 6 de febrero de 1855, que derogando el R.D. de 30 de abril de 1852 había puesto de nuevo en vigor la Ley de 19 de agosto de 1841, por éste derogada):

“Se considerarán completamente extinguidas las capellanías de cuyos bienes tratan los dos artículos precedentes, y que hayan sido o fueren adjudicadas por los Tribunales a las familias, cuyo patronato, desapareciendo a petición de las mismas la colectividad de bienes de que procedía, dejó de existir”.

Y a continuación, en el siguiente artículo, el 4º, declara subsistentes aquellas otras que no lo habían sido:

“Se declaran subsistentes, si bien con sujeción a las disposiciones del presente Convenio, las capellanías cuyos bienes no hubiesen sido reclamados a la publicación del Real decreto de 28 de Noviembre de 1856, y sobre los cuales, por consiguiente, no pende juicio ante los Tribunales”.

Respecto a las primeras, siguiendo un criterio cronológico, se realizaba una nueva distinción entre las capellanías cuya adjudicación se había solicitado antes del 17 de octubre de 1851, fecha de publicación del Concordato, y las que fueron adjudicadas con posterioridad al Real Decreto de 30 de abril de 1852⁸¹⁵.

Por lo que se refiere a las capellanías extinguidas sus bienes pasaban a ser del dominio de los parientes del fundador, pero con la obligación de redimir *“dentro del término y en el modo y forma que se disponga en la Instrucción para la ejecución del presente Convenio, al tenor del art. 23 del mismo, las cargas de carácter puramente eclesiástico de cualquier clase, específicamente impuestas en la fundación, y a que en todo caso, y como carga real, son responsables los dichos bienes”* (artículo 1º, *in fine*).

Y es aquí donde radican las diferencias entre los solicitantes de la adjudicación que lo habían hecho antes del Concordato y los que lo habían hecho después, siendo éstos sancionados o penalizados debido a que en el artículo 2º se establecía como carga

⁸¹⁵ Según Vázquez García-Peñuela este criterio era más bien paradójico debido a que el Real Decreto de 30 de abril de 1852 suspendió las adjudicaciones, siendo reanudadas el 6 de febrero de 1855. También hay que tener en cuenta que las adjudicaciones no cesaron con la publicación del Concordato, por lo que las que se solicitaron entre el 17 de octubre de 1851 y el 30 de abril de 1852, no se sabía a cual de los dos grupos correspondían. J. M. Vázquez García-Peñuela, *Las capellanías colativo-familiares...*, o.c., cap. II, p. 154.

No obstante, la legislación vigente desde el 28 de noviembre de 1856 era el Concordato de 1851, con la siguiente matización: desde el 6 de febrero de 1855 hasta el 28 de noviembre de 1856 estuvo en vigor la Ley de 19 de agosto de 1841, mientras que, anteriormente, desde el 30 de abril de 1852 hasta el citado 6 de febrero de 1855 estuvo derogada o en suspenso dicha ley de 1841.

eclesiástica la congrua de ordenación, establecida por las sinodales de la respectiva diócesis al tiempo de la fundación⁸¹⁶:

“Las familias, asimismo, a quienes se hayan adjudicado o adjudicaren, por estar pendiente su adjudicación ante los Tribunales, los mencionados bienes, derechos y acciones, reclamados con posterioridad al Real Decreto de 30 de abril de 1852, redimirán igualmente las cargas de la propia índole y naturaleza, considerándose para este solo efecto, como carga eclesiástica, la congrua de ordenación, establecida por las sinodales de la respectiva diócesis al tiempo de la fundación”.

Si el artículo 1º manifiesta la forma conciliadora con que la Santa Sede ha tranquilizado las conciencias y defendido los intereses de los que reclamaron los bienes de capellanías colativas, en este artículo 2º está inserta una verdadera condescendencia, al acomodarse a la voluntad de las normas posteriores a la publicación del Concordato, dándoles fuerza y valor legal cuando, en realidad, eran ilegales. Y todo en aras de olvidar los conflictos y controversias tan perjudiciales a las buenas relaciones que se habían establecido entre la Iglesia y el Estado.

En realidad, este precepto no es una consecuencia lógica y natural del primero, aunque tenga el mismo fin, que no es otro que el de adjudicación de los bienes de capellanías colativas y la obligación de redimir las cargas, es decir, el respeto a los derechos adquiridos. En los dos el legislador exige, como requisito imprescindible, la adjudicación, y a la vez que se haya reclamado. Así, la reclamación es, en ambos preceptos, un requisito indispensable para considerar, ya en el artículo 3º, la extinción de una capellanía, pero que no se podría estimar dicha extinción si los bienes se poseyeran por un título distinto al de la adjudicación hecha por tribunal competente o que se hiciera por haberse reclamado en las fechas que fija el Convenio en los dos artículos citados.

En el artículo 1º se establece que *“redimirán las cargas de carácter puramente eclesiástico de cualquier clase, específicamente impuestas en la fundación”*, mientras que en el 2º se dice que redimirán también las cargas pero se añade, *“considerándose para este solo efecto, como carga eclesiástica, la congrua de ordenación, establecida por las sinodales de la respectiva diócesis al tiempo de la fundación”*. ¿Significan estas diferentes redacciones que los individuos que reclamaron esos bienes, antes de la publicación del Concordato, deben redimir todas las cargas sin excepción, y que los que lo hicieron después están obligados a redimir únicamente, como carga forzosa, la congrua de ordenación?

Estas aparentes contradicciones son sólo eso, pues si se observa detenidamente, el legislador no ha pretendido establecerlas, y aunque parece más claro lo expuesto en el

⁸¹⁶ Pero hay que tener en cuenta que la congrua para fundaciones muy antiguas podía ser pequeña o mínima y, en cambio, para otras más recientes, una cantidad importante. En el artículo 12 del Convenio-Ley se fijaba como límite para considerar congrua o incongrua una capellanía, la suma de 2.000 reales. A esta obligación de redimir las cargas eclesiásticas se añadía, en aplicación del artículo 6º, la de *“satisfacer el importe de las misas, sufragios y demás obligaciones vencidas y no cumplidas por culpa de los poseedores a quienes se hubieren adjudicado, o adjudicaren por haber litigio pendiente”*. J. M. Vázquez García-Peñuela, *Las capellanías colativo-familiares...*, o.c., cap. II, pp. 154-155.

artículo 2º que lo que manifiesta el 1º, en realidad se debe concluir que los adjudicatarios de una y otra clase están obligados por igual a redimir las cargas de cualquier especie, siendo de carácter eclesiástico, y siempre que se hallen específicamente impuestas en la fundación, y además, el importe de la congrua de ordenación. Por tanto, las cargas eclesiásticas y la congrua de ordenación, las primeras como derechos reales en la fundación, la segunda como fin y objeto principal de la fundación, deben redimirse por las familias adjudicatarias sin ninguna distinción.

En los artículos inmediatos a los cuatro primeros se determina a quien incumbe la obligación de redimir y conmutar y en qué forma deben hacerla los interesados. En el artículo 5º se dice textualmente:

“Están obligados, de la manera prevenida en los artículos 1º y 2º, a redimir las cargas eclesiásticas de la propia índole y naturaleza:

Primero. Las familias a quienes se hubiesen adjudicado como procedentes de verdadera capellanía de sangre, los bienes de una pieza que constituía verdadero beneficio, aunque de patronato activo o pasivo de sangre, cualquiera que fuese su título o denominación.

Segundo. Los poseedores de bienes eclesiásticos vendidos por el Estado con sus cargas eclesiásticas.

Tercero. Las familias a quienes se hayan adjudicado o adjudicaren, bajo cualquier concepto, bienes pertenecientes a obras pías, legados píos y patronatos laicales o reales de legos, y otras fundaciones de la misma índole, de patronato familiar, también activo o pasivo, gravados con las mencionadas cargas”.

De manera que a tenor de este precepto y, ya que las disposiciones del mismo están condicionadas por lo que regula el primero y segundo, y éstos a su vez por el tercero, se explica que los adjudicatarios de los bienes de capellanías de sangre, los poseedores de bienes eclesiásticos enajenados por el Estado y los adjudicatarios de bienes pertenecientes a obras pías y otras fundaciones de la misma naturaleza, es decir, capellanías laicales (pues las eclesiásticas extinguidas son objeto de los dos primeros artículos y las subsistentes lo son del cuarto), redimirán las cargas eclesiásticas. Lo que hace el legislador es dar una solución a otro tipo de fundaciones extendiendo a las mismas la necesidad de redimir las cargas enunciadas de la manera prevenida para las pertenecientes a capellanías. En el apartado primero se refiere a fundaciones de carácter familiar. En el segundo dispone que si el Estado ha vendido ciertos bienes gravados con cargas eclesiásticas, deben ser redimidas (las leyes de desamortización de 1 de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856 declararon en estado de venta determinados bienes *“sin perjuicio de las cargas a que estuviesen sujetos”*). En el apartado tercero se reconoce fundamento idéntico a los anteriores: las familias a quienes por consecuencia de las leyes desvinculadoras se les haya adjudicado bienes que hayan pertenecido a capellanías laicales, gravados con las referidas cargas están también obligadas a redimirlos, pues obviamente los bienes han de quedar libres de todo gravamen. Ciertamente es que la Ley de 19 de agosto de 1841 se refería solamente a capellanías colativo-familiares, pero los reales decretos de 30 de abril de 1852, 6 de febrero de 1855 y 28 de noviembre de 1856 hacen referencia, además, a *“fundaciones piadosas familiares”*, por lo que aquí el legislador está en su lugar al incluir en el artículo otras fundaciones análogas, ya que no era el único problema importante la cuestión de las capellanías sino también otras

instituciones y propiedades eclesiásticas incautadas, afectas en su mayoría a cargas espirituales y no era justo ni prudente desatenderlas. Era necesario que el poder público acudiese a la defensa del derecho y de la verdad y que se indemnizaran los perjuicios ocasionados al haberse alterado y desnaturalizado las fundaciones, sin el concurso de la potestad eclesiástica, defraudando la voluntad de los fundadores

Aquéllos que aprovechando las ventajas de la Ley de 1841 obtuvieron la adjudicación de los bienes que constituían las capellanías colativas, o consigan la adjudicación a la fecha del Convenio-Ley, no quedan relevados de redimir las cargas espirituales, debido a que la ley citada no pudo darles más de lo que existía entonces, que eran unos bienes gravados legítimamente por su dueño al instituir la fundación. En idéntica situación se encuentran quienes consiguieron la susodicha adjudicación de bienes con posterioridad al Real Decreto de 30 de abril de 1852, porque sus cargas no han sido extinguidas.

Relacionados con este precepto se encuentran los artículos 26, 27 y 29 de la Instrucción. Si este artículo 5º del Convenio iguala en cuanto a la necesidad y obligación de redimir las cargas a los individuos o familias adjudicatarias de bienes procedentes de capellanías colativas con aquellos que lo sean de bienes provenientes de fundaciones piadosas como capellanías laicales, vendidos por el Estado, la Instrucción los equipara en lo referente a la manera, forma y plazos en que han de satisfacer la obligación que se les ha impuesto.

En el artículo 6º, que *“sobre la antedicha obligación de redimir las cargas corrientes”*, se impone a las familias *“satisfacer el importe de las misas, sufragios y demás obligaciones vencidas y no cumplidas por culpa de los poseedores”*, obligación que también incumbe a los adjudicatarios de bienes de capellanías de las declaradas subsistentes, de conformidad con el artículo 4º. Las prescripciones de este artículo se refieren por igual a los bienes de capellanías, tanto extinguidas como subsistentes.

Llama la atención que, si bien en este precepto se establece la necesidad de satisfacer obligaciones que no han sido cumplidas, se restrinja el mandato a aquellas cuya falta de cumplimiento no pueda, de ninguna forma, imputarse a los actuales poseedores. Aquí se advierte una verdadera excepción del derecho común, en materia de imposiciones censuales. Las obligaciones que nacen de derechos reales, de derechos que afectan a la misma naturaleza de las cosas, mientras no se extinguen, deben cumplirse por sus poseedores actuales, es decir, por quienes disfrutan y tienen las fincas afectas. Bien es cierto que los poseedores actuales no son responsables moralmente de las posibles omisiones de sus respectivos causahabientes, pero no ocurre lo mismo en el orden legal, máxime cuando se trata de un derecho unido a la propiedad, de una carga o gravamen que la afecta y modifica de forma sustancial. En este caso, el sucesor debe cumplir las obligaciones que contrajo en su día su antecesor, no porque sea el sucesor sino porque es el tenedor de la finca gravada. Parece que la única explicación a tan favorable condescendencia con los poseedores actuales puede que se deba a los rasgos de tolerancia y benignidad que presiden este Convenio-Ley.

La redención de cargas tiene, como se ha podido apreciar en el artículo 5º, carácter obligatorio, pero en el caso de que graven bienes de dominio particular exclusivo, al contrario que las anteriores, tienen carácter voluntario, pero serán obligatorias las

eclesiásticas vencidas y no cumplidas cuando lo sean por culpa de los poseedores. Así lo dispone el artículo 7º, que a la vez tiene su ampliación en el artículo 28 de la Instrucción.

Según el artículo 9º el importe de las cargas eclesiásticas corrientes debía ser apreciado *“por los diocesanos en la forma legal correspondiente y conforme a lo que se dispondrá en la instrucción, siempre que no esté determinado en la sentencia ejecutoria de adjudicación, dictada anteriormente, que deberá cumplirse”*. También *“respecto de las obligaciones vencidas y no cumplidas, los mismos diocesanos, después de oír benignamente a los interesados, determinarán equitativa,alzada y prudencialmente la cantidad que por dicho concepto deba satisfacerse”*. Para dichas cargas u obligaciones, según el artículo 11, el gobierno actuaba como garante del pago de los adjudicatarios, comprometiéndose a adoptar *“las medidas conducentes para que ambos efectos tengan cumplido efecto sin demora”*.

Respecto a las capellanías, que no había sido solicitada la adjudicación de sus bienes antes del 28 de noviembre de 1856, y que, en consecuencia, se declaraban subsistentes, el Convenio-Ley contemplaba la posibilidad de que sus bienes dotales pasaran a la familia o parientes del fundador mediante un complejo mecanismo llamado conmutación de rentas de la capellanía y no a través de una permutación como la del Convenio de 1860.

C) La conmutación de rentas de las capellanías.

El verdadero pacto contemplado en el Convenio-Ley de 1867 entre el Gobierno español y la Santa Sede no es una desaparición de las capellanías colativo-familiares subsistentes o no extinguidas, sino la transformación de sus bienes⁸¹⁷ mediante conmutación, ya a instancia de los parientes llamados por la fundación, ya por acuerdo del prelado en el caso de que ningún interesado la solicite. Es decir, que los bienes dotales de las capellanías dejan de ser inmuebles para pasar a estar formados por títulos de deuda pública. Los parientes, que se creyeran con mejor derecho, podían solicitar que se les adjudicasen los bienes de la capellanía tras previa entrega al diocesano de títulos de deuda consolidada del 3% que generasen una renta anual igual a la producida por los inmuebles de la capellanía (2.000 reales, según el artículo 12). Así lo dispone el artículo 8º:

“La redención de cargas, la conmutación de rentas y el pago del importe de las obligaciones vencidas y no cumplidas todavía en los diversos casos que se expresan en los artículos precedentes, se verificará entregando al respectivo Diocesano títulos de la Deuda consolidada del 3 por 100, por todo su valor nominal, que se convertirán en inscripciones intransferibles de la misma Deuda”.

⁸¹⁷ Se aprecia en el artículo 16, en su segundo párrafo, al regular cómo se ejercerá en adelante el derecho de patronato: *“Y atendiendo a que por el presente convenio se da nueva forma a las capellanías colativas familiares, todavía existentes, y a las que de nuevo se establecen en subrogación de las que, por efecto de las pasadas vicisitudes, han dejado de existir, el patronato meramente activo se ejercerá eligiendo el patrono entre los propuestos en terna por el ordinario diocesano, y respecto del patronato pasivo, usará éste de sus facultades, si el presentado no reuniese las circunstancias necesarias para cumplir lo dispuesto en el presente Convenio”*.

La renta se calculaba atendiendo al *“producto de los bienes en el último quinquenio, deduciendo la porción que el diocesano, a petición de las familias y consideradas con equidad todas las circunstancias, creyese reservar, con benignidad apostólica, a las mismas, cuya porción en ningún caso podrá exceder de la cuarta parte de dicho producto”* (artículo 12).

Expresamente se ocupa el artículo 8º de la forma en que se realizará la redención de cargas, la conmutación de rentas y el pago de las obligaciones vencidas y no cumplidas. Por el hecho de subsistir las capellanías cuyos bienes no se reclamaron a la publicación del Real Decreto de 28 de noviembre de 1856, han de ser transformadas en sus dotaciones, recibiendo las familias libremente los bienes que las constituían, pero debiendo entregar en equivalencia, títulos de Deuda que representen un valor que produzca una renta igual a la que los citados bienes produjeron. Y esta obligación es lo que se denomina conmutación de rentas, ya que éstas, quedando iguales en su importe, son conmutadas o transformadas, percibiéndose de los productos de los títulos de Deuda, en vez de percibirlo de las rentas de los bienes inmuebles o derechos reales que con anterioridad constituían su dotación.

Este concepto anterior indica claramente la diferencia entre conmutación de rentas y redención de cargas. El principio transformador se aplica a ambas, pero con una finalidad distinta, ya que en el primer caso, la cantidad que en títulos de la Deuda se ha de entregar, equivaldrá a un capital que produzca la misma renta que producían los bienes, sin tener en cuenta las cargas eclesiásticas, mientras que en el segundo caso, prescindiendo de las rentas, sólo se atiende a las cargas y se entrega un capital cuya renta sea igual al importe de la carga que se trata de redimir.

Entregados por los familiares del fundador los títulos de deuda, se transfería el dominio de los bienes en calidad de libres a los interesados mediante acta de conmutación, y a la vez la nueva fundación que se unía a la originaria, remitiéndose copia de ella al párroco para que la trasladase al libro de fundaciones y exijiese al capellán el cumplimiento de las cargas. De ello se deduce que el Convenio descansaba sobre la idea de que los bienes de las capellanías colativo-familiares eran de propiedad eclesiástica y no bienes vinculados sobre los cuales los familiares del fundador no podían disponer, que era la dirección subyacente en la Ley de 19 de agosto de 1841. Se observa en el artículo 13:

“Hecha esta deducción, las familias interesadas entregarán al Diocesano los títulos necesarios de la Deuda consolidada del 3 por 100 por lo demás de dicha renta, cuyos títulos se convertirán en inscripciones intransferibles de la propia Deuda del Estado. Verificada la entrega de aquéllos, los bienes de la capellanía corresponderán, en calidad de libres, a la respectiva familia”.

Según se desprende la conmutación ha de ser absoluta, sin que baste la parcial de las cargas espirituales, como alguna vez se ha pretendido, y únicamente se excluirá la porción que los prelados tengan a bien dejar a las familias del fundador en la parte de ordena el artículo 12 del Convenio.

La finalidad perseguida por el Convenio era, no la extinción de las capellanías, sino que sus inmuebles dejaran de estar amortizados, estableciendo un característico dispositivo desamortizador, el cual residía en la especial naturaleza de estos bienes que eran eclesiásticos, pero que sobre los mismos tenían ciertos derechos los parientes de los fundadores, en ocasiones casi solamente honoríficos, que se constituían en los únicos sujetos que podían hacerse con los bienes mediante incoación de un expediente en que nadie más podía personarse, pagando un determinada cantidad y no un remate más o menos aleatorio si hubiese sido una sencilla licitación.

Esto hace que se pueda considerar el Convenio-Ley de 1867 como una norma desamortizadora de los bienes de capellanías de sangre, tesis que se refuerza si se tiene en cuenta la forma en que se desarrolló la desamortización cuando el partido moderado en el Gobierno no la llevaba a cabo como una simple incautación.

D) Competencias de las jurisdicciones eclesiástica y civil en el Convenio.

En el Convenio hay un claro y pacífico reparto de competencias sobre la materia de que es objeto. Se atribuye a la jurisdicción eclesiástica en exclusiva todo lo relativo a la conmutación de rentas y valoración de las cargas existentes sobre los bienes. Tanto es así que contra el cálculo efectuado por el ordinario no cabía recurso ante la jurisdicción civil⁸¹⁸.

En los artículos 34 y 35 de la Instrucción de 25 de junio de 1867 se fija la forma para la conmutación de cargas de las capellanías subsistentes, que se determina en la instrucción de un expediente, ya sea de oficio o a instancia de parte, en el que pueden personarse y ser oídos todos los interesados en el destino de los bienes dotales y que finaliza con el decreto de conmutación de rentas. En la práctica, la solicitud de conmutación debía ir acompañada de una compleja y prolija prueba documental encaminada sobre todo a demostrar el parentesco con el fundador, además del valor de las fincas⁸¹⁹.

⁸¹⁸ En dos pasajes de la Instrucción se contempla de forma expresa, en el artículo 17: “*De la apreciación de las cargas de la capellanía o beneficio, hecha por el diocesano, podrá acudir al tribunal eclesiástico con las apelaciones correspondientes, salvo siempre en el artículo 7 de esta instrucción*”; y en el párrafo segundo del artículo 36: “*Si la controversia promovida por los interesados se limitara a la renta del quinquenio señalada gubernativamente por el diocesano, la acción se deducirá ante el tribunal eclesiástico, según lo establecido en el artículo 17 de esta Instrucción*”. C. L. E., o.c., tomo XCVII, p. 1207.

⁸¹⁹ “*A la solicitud..., se acompañará la escritura de fundación o testimonio de ella por ante Notario civil o eclesiástico, certificado de las partidas de bautismo o de las actas de inscripción en el registro del estado civil y el árbol genealógico para probar el entronque con el fundador; inventario de las alhajas si las hubiere; reconocimiento de censos u otros derechos o acciones que la fundación tenga, y apeos de los inmuebles, o en su defecto una relación jurada con el visto bueno del párroco donde radiquen las fincas, con expresión de los linderos, cabida, renta y valor en venta. Se publica un edicto en los Boletines eclesiástico y civil de la provincia, y se fija a la puerta del templo en donde esté fundada la capellanía, expresando si hay algún opositor y que concede el plazo de 30 días para la presentación de documentos. Transcurrido el término, se forma un árbol genealógico general de todos los opositores, se examina el orden de preferente derecho, si se llaman solamente a los parientes más próximos, y con los árboles presentados se pone el formado de manifiesto a los opositores quienes podrán impugnar el primero, si le hallan defectuoso*”. V. Covián, *Capellanías*, en *Enciclopedia Jurídica Española...*, o.c., pp. 16 y 17.

Los Provisores o Delegados de capellanías que intervienen en el expediente debían procurar la avenencia entre los distintos opositores para evitar que el asunto llegase al Juzgado; pero como no siempre lo conseguían, se suspendía el expediente, siendo la jurisdicción civil la competente respecto a las controversias surgidas entre los diferentes parientes sobre de quién o de quiénes era el derecho a los bienes conmutados. Así lo dispone el párrafo primero del artículo 36 de la Instrucción de 1867, que, además, mandaba que la cuestión se solucionase con arreglo a la legislación observada antes del Concordato:

“Si los interesados no convinieren extrajudicial y amigablemente en lo tocante a su derecho a los bienes, o en la parte alícuota correspondiente a cada uno de ellos, podrán acudir al Juzgado de primera instancia a que pertenezca la parroquia en que esté fundada la capellanía para que, con arreglo a la legislación observada antes del Concordato, se determine acerca del derecho de los interesados, y, en su caso, se fije la parte alícuota de la renta que deba convertirse en inscripciones intransferibles”.

Al decir “antes del Concordato” y no al Convenio, se promovió una cuestión referente a la Ley de 15 de junio de 1856, aclaratoria de la de 1841, si era aplicable o no en estos pleitos civiles. El asunto sería resuelto con posterioridad por el Tribunal Supremo en sentido afirmativo.

Sobre la competencia del tribunal en estos procedimientos, aparte de lo que manda el anterior artículo 36 de la Instrucción, si se atiende a la Ley de 1841, en su artículo 10, confirmado por el artículo 6º de la aclaratoria de 15 de junio de 1856, establece que la aplicación de los derechos que se declaran en esa ley, corresponde hacerla “a los tribunales civiles ordinarios de los partidos en que radique la mayor parte de los bienes” y si se acude a la posterior Ley de Enjuiciamiento Civil, el párrafo 2º del caso 6º del artículo 63 manda que “cuando el juicio tenga por objeto la adjudicación de bienes de capellanías u otras fundaciones antiguas, será juez competente el de cualquiera de los lugares en cuya jurisdicción estuvieren sitos los bienes, a elección del demandante”⁸²⁰. De lo dicho se desprende qué tribunal es el competente para resolver en los juicios cuyo objeto sea la adjudicación de bienes de una capellanía, pues tanto las leyes de 1841 y 1856, como la de Enjuiciamiento Civil, al considerar que la acción que se ejercita por los interesados tiene como fin adquirir determinados bienes inmuebles o derechos reales, la debe conceder el juzgado del territorio donde se encontrasen, con lo que no se altera en lo esencial la doctrina de la Instrucción de 1867, ya que, generalmente, los bienes dotales de una capellanía radican en el lugar de su fundación.

Con la promulgación y posterior publicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 3 de febrero de 1881 (Gaceta nº 36 de 5 de febrero) se dio una novedad en la materia, al determinar el procedimiento a seguir en los pleitos sobre mejor derecho genealógico a los bienes de capellanías. En su artículo 1102⁸²¹ se estableció que, de forma general, que para “la adjudicación de bienes de cualesquiera fundaciones que deban distribuirse entre los parientes llamados por el fundador o por la Ley, y en los demás casos análogos en que los Tribunales hayan de hacer la declaración del derecho” se debería

⁸²⁰ Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881, ampliada anotada y concordada, M. Navarro Amandi, Madrid 1881, p. 18.

⁸²¹ Ibidem, p.152.

seguir el procedimiento establecido en el Título XI del Libro II para los pleitos sobre la adjudicación de bienes a que estén llamadas varias personas sin designación de nombres.

Otro artículo de la precedente ley, el 1105⁸²², de forma tajante y clara determinó lo que sigue a continuación:

“Si la demanda tuviere por objeto la declaración del derecho a los bienes de alguna capellanía colativa de las que se declararon subsistentes por el artículo 4º del Convenio-ley de 24 de junio de 1867, deberá acompañarse el documento que acredite haber precedido el expediente que para la conmutación y libertad de los bienes ordenan dicho Convenio y la Instrucción para llevarle a efecto, sin cuyo requisito no se dará curso a la demanda.”

“En estos casos se reducirá a treinta días el término de cada uno de los tres edictos que han de publicarse conforme a los artículos siguientes.”

Este precepto resultó más que problemático y confuso debido a que exigía que se realizase la conmutación con carácter previo a la declaración del derecho, es decir, que alguien pagase con unos títulos de deuda por unos bienes sobre los que no había ninguna certeza si iba a quedarse o no con ellos. Por tanto ¿cómo había de exigirse esta conmutación previa de las cargas sin conocerse quién tenía mejor derecho a los bienes? El problema se resolvió declarando que los jueces podían admitir demandas sobre el mejor derecho a los bienes de las capellanías sin que hubiera precedido la conmutación de rentas, pero que ésta sería necesaria para posesionarse de los bienes.

Hay autores⁸²³ que sostienen y refuerzan lo ordenado por la Circular de 1 de marzo de 1895 de la Dirección General de lo Contencioso en la que se expone que dicho artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil no exige, como equivocadamente se ha entendido, que al presentar las demandas sobre el mejor derecho a la conmutación de los bienes de capellanías declaradas subsistentes, se acredite haber verificado la conmutación de rentas, sino simplemente que haya precedido la instrucción del expediente necesario a tal objeto ante el Tribunal Diocesano, porque siendo de la privativa competencia de los tribunales eclesiásticos el conocimiento de dichos expedientes, declarando la desespirtualización de los bienes y fijando el capital que se ha de conmutar por títulos de la Deuda pública que han de entregarse por los reclamantes, sólo en el caso previsto en el artículo 36 de la Instrucción de 25 de junio de 1867, es decir, cuando no haya acuerdo o avenencia entre los distintos aspirantes, serán llamados los tribunales ordinarios a dilucidar y declarar el preferente derecho de cada uno a la conmutación. Por tanto, la no exigencia de la práctica previa de la conmutación, es el criterio que debe tenerse en cuenta, único aclaratorio que resuelve el conflicto a que daba lugar la aplicación del referido artículo. De todas formas, dicho precepto quedó inmediatamente desfasado al no considerar lo establecido por el Real Decreto de 12 de agosto de 1871 que estableció la necesidad de la orden ministerial declarativa de encontrarse los bienes de las capellanías exceptuados de la desamortización. Por ello era

⁸²² Ibidem, p. 153.

⁸²³ F. Benítez de Lugo, *Apuntes sobre capellanías...*, o.c., pp. 28-29. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., pp. 178-179.

un procedimiento casi inútil, pues el solicitante, obtenida sentencia firme y a su favor, no podía acceder a la titularidad registral.

Presentado el testimonio de la sentencia firme recaída ante la jurisdicción eclesiástica, o cuando no haya habido oposición, se decreta la conmutación, fijándose las rentas con suma diligencia para que al conmutar la capellanía quede un producto aproximado al anterior a esta operación. La tasa o carga, tanto de los bienes como de las rentas, debe hacerse en metálico, y no basta el valor nominal para cumplir con el Convenio-Ley. Dichas cargas podrán ser impugnadas ante el tribunal eclesiástico (artículo 16 de la Instrucción). Para reclamar la reserva de mayor porción de bienes de la acordada, cabe recurso de revisión ante el Prelado (artículo 7º del Convenio).

En realidad, se observa que se necesitan tres procedimientos distintos para obtener los bienes de capellanías, a saber: la necesaria declaración mediante sentencia por los tribunales ordinarios para la adjudicación de los bienes, la declaración de excepción de la desamortización y, por último, el expediente que para la conmutación ha de instruirse en la Delegación de Capellanías y memorias del respectivo Obispado. De lo que se deduce que, sobre el conocimiento de las cuestiones a que dan origen las capellanías colativas familiares, está dividido entre la Administración del Estado, la Iglesia y la Autoridad Judicial.

E) Otras características del Convenio.

Siguiendo su objeto de no extinguir las capellanías colativo-familiares sino, más bien, de otorgarles una base patrimonial mobiliaria, dispone que en cada diócesis se formen dos acervos píos con los títulos de deuda que adquiera la diócesis y con los que se han de establecer nuevas capellanías colativas.

Hay diferencias entre el primer y segundo acervo pío, las cuales se encuentran en la procedencia de los títulos de deuda con que se forman y de la permanencia o no del derecho de patronato. El primer acervo se alimenta con los títulos de la deuda del 3%, procedente de la redención de cargas, del importe de las no cumplidas o de los bienes de capellanías colativas incongruas (artículo 16 del Convenio-Ley). Con los títulos debían constituirse nuevas capellanías colativo-familiares congruas, en las que se mantiene el derecho de patronato activo o pasivo, según lo hubiese sido el que existía en las incongruas de las que procedían los títulos. En estos casos, el ejercicio del derecho de patronato se regula en el citado artículo 16 del Convenio para que sea compartido y haciendo los llamamientos para el disfrute de la capellanía entre las familias que por las respectivas fundaciones tuviesen derecho, estableciendo turnos para el caso del patronato activo:

“Los llamamientos para el disfrute de ellas entre las familias que por las respectivas fundaciones tuviesen derecho, y estableciendo para el ejercicio del patronato activo los correspondientes turnos, habida consideración en todo caso a la cantidad procedente de cada capellanía, y en la inteligencia de que ha de darse al Diocesano el turno correspondiente en representación de corporaciones o de cargas eclesiásticas no existentes”.

Para formar en cada diócesis el segundo acervo pío común se recurría a títulos de deuda cuya procedencia era más heterogénea (artículo 18) y no necesariamente de capellanías con patronato, por lo que, en las capellanías que se fundasen con rentas procedentes de los títulos del segundo acervo, no existiría derecho de patronato, sino que serían provistas directamente por el diocesano (artículo 18 *in fine*):

“También se formará en cada diócesis otro acervo pío común; con los títulos de la Deuda consolidada, procedentes de las obligaciones consignadas en el art. 5º, en la partea ellas aplicable, y en su caso también con lo correspondiente a virtud de lo dispuesto en el artículo 7º.

Además harán parte de este acervo pío común las inscripciones que el Gobierno debe entregar.

Primero. En compensación de los bienes de las capellanías colativas de patronato particular eclesiástico, o de dercho común eclesiástico, y de que el Estado se incautó. Unas y otras capellanías quedan extinguidas, y de libre disposición del Estado dichos bienes.

Segundo. En igual compensación de los bienes de capellanías patronadas, de que, estando a la sazón vigentes, se incautó el Estado, bajo cualquier título y concepto que sea.

Y tercero. Por títulos de diversas clases de Deuda del Estado procedentes de cargas eclesiásticas, de obras pías y otras fundaciones de su clase establecidas en corporaciones eclesiásticas, hoy no existentes, cuyo patronato pertenece actualmente a los Prelados en representación de dichas Corporaciones.

Los diocesanos fundarán con dichas inscripciones el número de capellanías, título de ordenación, que sean posibles, no bajando de 2000 reales la congrua de cada una.”

De lo anterior se deduce que se fundarán tres clases distintas de capellanías. Un primer grupo son las que se instituyen con los títulos entregados por la conmutación de los bienes dotales de las capellanías declaradas subsistentes, cuya renta anual, como se ha dicho, llegue a la cantidad de 2.000 reales, es decir, que por disfrutar de tal renta, se consideran congruas. Un segundo grupo son las que constituyéndose con los títulos de Deuda consolidada del 3% (artículo 16), se forman mediante la unión de dos o más incongruas, según sea necesario para constituir una congrua de los expresados 2.000 reales. El tercer grupo está formado por las capellanías formadas con los títulos de Deuda perpetua, que constituyen el segundo acervo, de que trata el artículo 18, y como en ellas no concurren las circunstancias de las del primer grupo y segundo, al no ser familiares, son provistas exclusivamente por los diocesanos.

Para finalizar, en previsión de que hubiese gran cantidad de expedientes que se incoasen para solicitar la conmutación de rentas de las capellanías colativo-familiares, la Instrucción preveía la posibilidad de que en cada diócesis se nombrar un delegado para estos asuntos (artículo 4º):

“Los diocesanos, siempre que lo estimen conveniente, podrán delegar, sin causar gastos a los interesados, en una comisión o en persona de su confianza, la instrucción de los expedientes de toda clase y naturaleza, reservándose la solución definitiva, o su aprobación.

En el Boletín Oficial de la provincia y en el Eclesiástico, donde le hubiere, se publicarán estos nombramientos para noticia de los interesados, y a fin de que sea reconocida su personalidad en las oficinas de todas clases, cuando quiera que hiciesen alguna reclamación, o pidieren datos y noticias para llenar su cometido.

Los diocesanos señalarán una módica retribución por su trabajo a sus delegados. Aquella, y los gastos de oficina indispensables, se satisfarán con los fondos de los acervos píos que crea el Convenio”.

En cumplimiento de este precepto los prelados de las distintas diócesis se apresuraron a nombrar las respectivas comisiones con el nombre de Delegación de Capellanías y Memorias. De hecho, se nombraron delegados en todas las referidas diócesis, llegando, algunos de ellos, a ser verdaderos entendidos en la materia, como lo fueron Mariano Álvarez y Gómez, administrador general de capellanías y demás fundaciones piadosas del Obispado de Vitoria, y José M. Campos y Pulido, ex-contador de la Delegación de Capellanías y Memorias del Arzobispado de Granada. También hubo casos en que el cargo de delegado quedaba en el mismo provisor y no era independiente.

E) El Convenio y la legislación anterior.

Para terminar, es necesario analizar si el Convenio-Ley, publicado en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 10 del Convenio Adicional de 1860, es derogatorio o no de la legislación que le precedió. En realidad, al hacer referencia a las capellanías, no se puede partir de los mismos criterios o normas propios de las leyes desamortizadoras, que fueron derogadas por el artículo 45 del Concordato de 1851 y el artículo 21 del Convenio Adicional de 1860, por lo que aquí la cuestión es clara al resolverse mediante derogación las normas contrarias a sus preceptos.

Aunque las leyes desamortizadoras causaron un grave quebranto a los bienes de la Iglesia, mediante la incautación de los mismos, en materia de capellanías, la Ley de 19 de agosto de 1841 y su aclaratoria de 15 de junio de 1856, ya referidas, no se olvidaron de las cargas eclesiásticas, con lo que los efectos de éstas, comparados con los de las leyes desamortizadoras, no fueron los mismos.

Lo expresado anteriormente conduce a poder explicar la tendencia y el fin a que responde el Convenio de 1867 y, de este conocimiento poder deducir sus efectos frente a leyes anteriores. Del mismo modo que el Concordato de 1851 y el posterior Convenio de 1860 respetaron los hechos consumados, el de 1867 los respetó igualmente, y por ello, aquellas capellanías ya adjudicadas en concepto de libres, al amparo de una ley, la de 1841, que, aunque injusta, según los principios del Derecho, al hacer desaparecer las capellanías en su concepto benefical, suprimiendo su perpetuidad y vinculación, las declaró extinguidas, imponiendo a los adjudicatarios la precisa y necesaria obligación de redimir las cargas de naturaleza eclesiástica. Esta obligación no dependía de la voluntad de los poseedores, sino que era forzosa, según los preceptos ya estudiados. Y en cuanto a las que no se habían reclamado a la fecha de publicación del Real Decreto de 28 de noviembre de 1856 (que fue cuando se suspendieron los efectos de la Ley de 1841), fueron declaradas subsistentes y sometidas a las disposiciones de esta última.

Pero el Convenio de 1867 no estableció el *statu quo* o el estado actual en materia de capellanías, sino que lo que hace es transformarlas y no extinguirlas ni conservarlas. Y dicha transformación debe ser realizada por determinados individuos que son, en realidad, aquellos a quienes se les adjudicaron los bienes que constituían la dotación de las capellanías. Pero para poder hacer la transformación es preciso que previamente se haya realizado la adjudicación. Lo que hizo el tan citado Convenio fue resolver la situación creada. La Ley de 1841 tiene toda su fuerza y eficacia a la entrada en vigor del Convenio, para que a su amparo y acomodándose a sus prescripciones se sustancien y resuelvan todos los pleitos y reclamaciones sobre bienes de capellanías, que se adjudicarán como libres como así dispone la ley. Pero hay una salvedad, que es la obligación de los adjudicatarios de dichos bienes de realizar la conmutación ante el diocesano del importe de la renta de los mismos.

En consecuencia, visto lo anterior, y siendo ésta la doctrina aplicable cabe concluir que subsiste la vigencia de la Ley de 19 de agosto de 1841, ya que no ha sido derogada expresa ni tácitamente por el susodicho Convenio de 1867, y a sus preceptos hay que referirse, pero aplicando la nueva forma que se dará a las capellanías, según el mismo Convenio. Y así lo corrobora el artículo 36 de la Instrucción mandando que la cuestión sobre el derecho de los interesados a obtener los bienes de las capellanías se solucionase con arreglo a la legislación observada antes del Concordato. Todo ello reafirma todavía más lo dicho y que la legislación anterior era la aludida Ley de 1841, aclarada posteriormente por la de 15 de junio de 1856, por lo que no hay duda de que ha subsistido después del Convenio.

A mayor abundamiento el Tribunal Supremo de Justicia declara en distintas sentencias la vigencia de la Ley de 19 de agosto de 1841, así como la de la Ley de 15 de junio de 1856, aclaratoria de la primera, y que las disposiciones de esta última forman parte de aquélla, y que no han sido derogadas por el Convenio de 24 de junio de 1867, que deja subsistente en materia de capellanías la legislación anterior al Concordato de 1851 (STS de 1 de marzo de 1881). La misma doctrina se establece en las sentencias del mismo tribunal de 28 de noviembre de 1881 y en la de 17 de febrero de 1882, en la que se declara que el Convenio de 1867 no alteró la legislación que existía sobre adjudicación de bienes de capellanías colativas de sangre. También en la de 28 de mayo de 1887, según la cual la ley aplicable a la adjudicación de bienes de capellanías colativas es la de 19 de agosto de 1841 (M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 2.º Jurisprudencia del Tribunal Supremo, pp. 199, 201 y 209. V. Covián, *Capellanías*, Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Enciclopedia Jurídica Española..., o.c., pp. 47 y 51).

2.2.10.- Disposiciones posteriores y el Decreto de 12 de agosto de 1871.

Desde la publicación del Convenio-Ley de 1867 todas las dudas que aparecieron sobre su interpretación se solucionaron, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 23, con la intervención concordada del Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, pues dicha legislación concordataria no ofrecía ninguna dificultad, siendo conmutadas gran número de capellanías. Resultado de todo ello fueron varias reales órdenes entre 1867 y 1868⁸²⁴.

⁸²⁴ Fueron las que siguen: R.O. de 10 de diciembre de 1867 (que aclara el artículo 1º del Convenio-Ley de 1867, sobre redención de cargas de capellanías existentes, las cuales se harán respecto a la cantidad a que

Destaca por su importancia la Real Orden concordada de 27 de julio de 1868, que establece normas sobre la inscripción en el registro de la propiedad de los bienes de capellanías de sangre, distinguiendo entre las extinguidas por el Convenio-Ley de 1867 y las subsistentes. Sobre las primeras, se dispuso que para su inscripción los adjudicatarios debían presentar la sentencia en la que se declaraba su derecho a los bienes, la escritura de fundación de la capellanía y un inventario de los bienes y, en su caso, la partición de los mismos (disposición 1ª).

En el caso de los de los bienes de las capellanías declaradas subsistentes, podrán inscribirse a favor de las familias que hubiesen procedido a la conmutación de rentas de la capellanía, presentando, además de los documentos expresados en la disposición primera, el documento o acta, librada por el respectivo diocesano, de conmutación de las rentas. No era necesaria la inscripción previa a favor de la capellanía de que proceden (disposición 4ª), pero sí cuando los que habían adquirido los bienes no eran parientes del fundador por medio de la conmutación de rentas, sino terceros en una venta judicial de las previstas en la Instrucción de 25 de junio de 1867 en el caso de que los parientes no efectuasen la citada conmutación.

Para la inscripción de bienes a favor de una capellanía se seguía el método preceptuado en el Real Decreto de 11 de noviembre de 1864, que dictó reglas para la inscripción, en los registros de la propiedad, de los bienes inmuebles del Estado y de corporaciones civiles y eclesiásticas exceptuadas de la desamortización de Madoz. La inscripción se realizaría en virtud de la presentación del título de propiedad, según dispone el artículo 5º:

“Siempre que exista título escrito de la propiedad del Estado o de la corporación, en los bienes que deben ser inscritos con arreglo al art. 1º, se presentará en el Registro respectivo, y se exigirá, en su virtud, una inscripción de dominio a favor del que resulte dueño, la cual deberá verificarse con sujeción a las reglas establecidas para las de los particulares”.

Pero si no existiera título de propiedad, se debía pedir una inscripción de posesión sobre la base de una certificación expedida por *“el jefe de la dependencia a cuyo cargo esté la administración o custodia de las fincas que hayan de inscribirse”* (artículo 8º).

hayan quedado reducidas o moderadas por los Prelados diocesanos); R.O. de 7 de enero de 1868 (que aclara el artículo 2º del Convenio-Ley, sobre redención de cargas de capellanías extinguidas, en las que se obliga a redimir también la congrua de ordenación si el valor de los bienes lo permite); tres RR.OO. de 18 de abril de 1868 (la primera, sobre redención de censos pertenecientes a capellanías subsistentes y merelegas; la segunda, sobre el destino de rentas de capellanías extinguidas y subsistentes cuya adjudicación hubiesen reclamado o no las familias; la tercera, sobre varios particulares acerca de la redención de cargas y conmutación de rentas de capellanías); tres RR.OO. de 22 de julio de 1868 (la primera aclara diferentes artículos del Convenio-Ley, el primero y el segundo, sobre conmutación y redención de cargas, disponiendo que los bienes se estimarán en su valor real, que la redención de la congrua será de todo el capital y se aclara el artículo 19 de la Instrucción; la segunda, aclara el artículo 18 del Convenio, en relación con las cargas redimidas al tenor del artículo 7º; la tercera, aclara dudas sobre la redención de cargas de capellanías merelegas y conmutación de rentas de capellanías subsistentes) y R.O. de 27 de julio de 1868. M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 1.º Legislación, pp. 116-124. Véase también: J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., Apéndice 1º, pp. 235-242. C.L.E., o.c, tomo C, p. 89.

En relación a los bienes eclesiásticos, se disponía en el artículo 13 que *“en la misma forma se inscribirán los bienes que posea el clero, o se le devuelvan y deban permanecer en su poder amortizados; pero las certificaciones de posesión que para ello fuesen necesarias, se expedirán por los diocesanos respectivos”*.

Con la Revolución de 30 de septiembre de 1868, *“la Gloriosa”*, que puso fin a la monarquía de Isabel II y fue germen de la República, se inicia el período políticamente más agitado de la España decimonónica y se da un vuelco normativo en la materia, constatándose, una vez más, que el de las capellanías de sangre fue, durante todo el siglo XIX, asunto especialmente susceptible de ceder a los cambios políticos de nuestra nación. En consecuencia, surgen disposiciones no concordadas y se restablecen y reglamentan leyes derogadas y anteriores al Convenio-Ley, como el Decreto de 1 de marzo de 1869 (*CLE*, tomo CI, pp. 341-343) que restablece la Ley General Desamortizadora de 1º de mayo de 1855 y Ley de 11 de julio de 1856, en un intento revolucionario de resucitar la legislación desamortizadora y anticlerical.

También la prensa política se unió, como no podía ser de otra manera, a este clima de revolución y ruptura con lo anterior, criticando al Gobierno Provisional y reclamando la presentación de un proyecto de ley sobre las capellanías colativas para finalizar la desamortización eclesiástica⁸²⁵. Consecuencia de ello fue que en las Cortes Constituyentes de 7 de junio de 1869, una vez aprobada la constitución, se formaron las secciones nombrándose una comisión para el estudio de una proposición de ley, presentada en 31 de mayo, que pedía el restablecimiento de la ley de 19 de agosto de 1841 sobre capellanías colativas de sangre. El 10 de junio, en la sesión de Cortes se procedió a la lectura de dicha proposición que constaba de dos artículos en los que se restablecía la ley de agosto de 1841 y se derogaba la ley concordada de 1867⁸²⁶, siendo apoyada a continuación por el Sr. Delgado, el cual expuso que altas razones políticas, económicas y de justicia aconsejaban el restablecimiento de la ley de capellanías colativas de sangre de 1841, ley completamente inseparable del régimen liberal,

⁸²⁵ *“La ley de 19 de agosto de 1841 sobre capellanías de sangre o familiares está en suspenso, porque a los gobiernos reaccionarios les acomodó halagar a la teocracia, y un crecido número de familias se ven privadas de la posesión de unos bienes que les pertenecen por derecho propio indudable, viendo detentada la posesión por personas que ningún derecho tienen a la propiedad de los bienes de dichas capellanías, o si pueden alegar alguno, es más remoto que el de los parientes más cercanos al fundador de cada una; y esto, ni es justo, ni equitativo, ni conveniente. Rogamos, pues, a la Asamblea Constituyente que fije su atención en este asunto y presente a la brevedad posible un proyecto de ley para que se declaren completamente libres todas las capellanías de sangre que aún están amortizadas, y se adjudique desde luego la propiedad de sus bienes a favor de las personas que acrediten mejor derecho ante el tribunal ordinario competente. Los gobiernos y las Cortes de nuestro país, en agosto de 1836 y de 1841, dieron una prueba de su patriotismo y justificación, al adoptar las resoluciones que, en punto a la desamortización general, son de todos conocidas. No creemos que los diputados de las Constituyentes de 1869 sean menos liberales que los de las épocas citadas, y por lo mismo abrigamos la esperanza de que pronto veremos cumplidos nuestros deseos en este punto”*. Periódico *El Imparcial*, diario liberal de la mañana, de 5 de marzo de 1869. BNE. Hemeroteca digital.

⁸²⁶ *“Artículo 1. Se restablece desde esta fecha en toda su fuerza y vigor la ley de 19 de agosto de 1841, por la que se desamortizaban los bienes de las capellanías colativas, familiares o de sangre. Art. 2. Quedan derogadas la ley-convenio de capellanías colativas de sangre de 24 de junio de 1867 y cualquiera otra disposición contraria al espíritu desamortizador de la citada ley de 19 de agosto de 1841”*. Diario de las sesiones de las Cortes Constituyentes, Madrid 1870, Tomo IV, Apéndice 1º al diario de sesiones nº 93, de 7 de junio de 1869, s/f. También lo recogen los periódicos *La Discusión*, diario democrático, nº 211, de 11 de junio y *El Imparcia*, y *La Época*, periódico político y literario, nº 6612, ambos de 12 de junio de 1869. BNE. Hemeroteca digital.

tachando de reaccionario el Convenio de 1867 y que era contrario a la revolución, refractorio al espíritu liberal y desamortizador⁸²⁷. A mayor abundamiento, el 28 de junio de 1869 se presentaba un proyecto de ley de reforma del Concordato de 1851 para legalizar la nueva situación en la que el Estado ya no era confesional. Era la Nación, la que libremente se había comprometido a mantener el culto y los ministros de la religión católica. A consecuencia de la no confesionalidad del Estado, éste proyectaba unilateralmente modificar no pocos artículos del mentado Concordato, además de volver a atacar el Convenio-Ley de 1867 sobre capellanías colativas de sangre mediante su revisión y reforma⁸²⁸.

Consecuencia de este estado convulso y anticlerical (supresión de la Compañía de Jesús, extinción de monasterios, conventos y casas de religiosos, su incautación de bienes, rentas, archivos y bibliotecas y supresión del fuero eclesiástico) fue la aparición de diversas disposiciones de carácter general relativas a capellanías. La primera fue la Orden Ministerial de 29 de marzo de 1870 (publicada en la Gaceta del día siguiente), no concordada, derogatoria de la Real Orden de 7 de enero de 1868 sobre redención de cargas de capellanías extinguidas. Ésta última había sido dictada, en concordia con el Nuncio, para aclarar e interpretar el Convenio-Ley de 1867. Pero la citada O.M. argumentó que su derogación se debía a que se había infringido el artículo 45 de la Ley

⁸²⁷ *“Aquella ley (la de capellanías de 1841) obedecía a un gran principio de justicia y de conveniencia social: por ella se restituían a las familias lo que había sido desmembración de los bienes de las mismas por la fundación de esas capellanías, y al mismo tiempo se concluía con una institución perjudicial a la Iglesia (...). En la época actual no se ha pensado, después de ocho meses de revolución, en restablecer esa ley, completamente inseparable del régimen liberal, sino que se ha dejado subsistir en pie, en toda su fuerza y vigor, la ley diametralmente opuesta, la ley reaccionaria de 24 de junio de 1867, ley amortizadora, que arrebató a las familias lo que es suyo, y a cuya sombra están naciendo intereses contrarios a la revolución y opuestos a la libertad. Parece increíble, pero es lo cierto, que en plena revolución se levanta hoy como un monumento político del neo-catolicismo esa ley (...). Pero ¿creeis, como sería justo, devolver esos bienes a las familias a quienes pertenecen? No, el prelado se apodera de esos bienes (...). Esa ley de 24 de junio de 1867 es refractoria al espíritu liberal y desamortizador de la época; no ha debido sobrevivir al neo-catolicismo que la levantó, no ha debido existir ni un instante con la revolución actual”*. Diario de sesiones nº 96, de 10 de junio de 1869, pp. 2644-65.

⁸²⁸ El ministro de Gracia y Justicia, Martín de Herrera leyó un proyecto de ley autorizando al Gobierno para negociar con la Santa Sede la reforma del Concordato de 1851, los convenios de 25 de agosto de 1859 (publicado como Convenio Adicional de 4 de abril de 1860) y el de 16 de junio de 1867 (publicado como Convenio-Ley de 24 de junio de 1867), y para arreglar la cuestión de la jurisdicción eclesiástica. Dicho proyecto, en su exposición de motivos a las Cortes decía: *“Razones políticas y económicas (...) exigen la reforma del Concordato celebrado con la Santa Sede en 16 de marzo de 1851. Los dos primeros párrafos (del artículo 1º) tienden a consignar en el Concordato lo que es ya un hecho legal e irrevocable: la libertad de cultos y las de enseñanza e imprenta (...). No hay para que aplazar la no menos necesaria revisión del (convenio) celebrado en 16 de junio de 1867 acerca de las capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la propia índole, en el cual, contrariando el espíritu de la ley desamortizadora de 19 de agosto de 1841, se trató de conservar y aun aumentar estos beneficios impropios, por más que se les diese una nueva forma (...). Ordenó, además, la redención de cargas espirituales de un modo poco conforme a su naturaleza, y esto también merece examinarse de nuevo”*. En el artículo 3º del proyecto de ley se recoge dicha reforma en los siguientes términos: *“Se le autoriza (al Gobierno) además para revisar y reformar del convenio de 16 de junio de 1867 a fin de ponerlo en armonía con el espíritu desamortizador de la ley de 19 de agosto de 1841, y de acomodar las disposiciones relativas a la redención de cargas eclesiásticas y demás espirituales a su naturaleza de obligaciones de conciencia”*. Diario de las sesiones de las Cortes Constituyentes, Madrid 1870, Tomo V, Diario de sesiones nº 112, de 28 de junio de 1869, p. 3277 y apéndice al diario de sesiones nº 112, s/f.

Orgánica del Consejo de Estado (17 agosto de 1860)⁸²⁹ y además, que la intervención del Nuncio de Su Santidad no había sido legítima. En concreto, su artículo 2º dispone lo siguiente:

“... y teniendo en cuenta que la anterior disposición (R.O. de 7 de enero de 1868) es contraria al espíritu y letra de los artículos 12 de la ley citada (Convenio-Ley de 24 de junio de 1867) y 6º de la instrucción para ejecutarla, que no consienten se despoje en absoluto de todos los bienes a los linajes de donde proceden, aun en las capellanías incongruas; ...el Regente del Reino, de conformidad con el parecer del Consejo de Estado, se ha servido declarar nula la R.O. de 7 de Enero de 1868, y mandar que respecto a los bienes de las capellanías reclamadas con posterioridad al decreto de 30 de Abril de 1852, y de que trata el art. 2º de la ley de 24 de Junio de 1867, se esté a lo que sobre éste y otros puntos análogos determine el Poder legislativo”.

Con fecha 26 de mayo de 1871 se presentó al Congreso una nueva proposición de ley sobre restablecimiento de las leyes de desvinculación, según palabras textuales de la prensa (*La Correspondencia de España, diario universal de noticias*, nº 4931, de 28 de mayo. BNE. Hemeroteca Digital) de bienes de capellanías colativas y familiares, la cual era más extensa que la de 1869 al constar de siete artículos en vez de los dos anteriores, que eran bastante escuetos y breves⁸³⁰.

En la sesión de Cortes del Congreso de los Diputados, el 5 de junio de 1871 se autorizó la lectura de la anterior proposición de ley sobre capellanías colativas, presentada por el Sr. García Ruiz. Con fecha 16 del mismo mes y año, en la Sesión de Cortes pidió la palabra el Sr. Delgado para apoyar dicha proposición de ley, atacando de manera furibunda el Convenio-Ley de 1867, calificándolo de reaccionario y justificando

⁸²⁹ Artículo 45. “El Consejo de Estado será oído necesariamente y en pleno: 4º Sobre la inteligencia y cumplimiento de los Concordatos celebrados con la Santa Sede”. M. Martínez Alcubilla, *Diccionario de la Administración española...*, o.c., tomo III, Madrid 1860, p. 189.

⁸³⁰ La proposición, presentada por los diputados Delgado y Bueno, decía: “Art. 1º. Se declara desde esta fecha en toda su fuerza y vigor la ley de 19 de agosto de 1841 sobre capellanías colativas familiares o de sangre. Art. 2º. Las disposiciones de dicha ley serán aplicables a las fundaciones piadosas que tengan el carácter de familiares. Art. 3º. Se concede el término de un año para el ejercicio de las acciones que emanan de la presente ley, y hasta que transcurra no adquirirán el carácter de sentencias firmes las que se dicten a instancia de los interesados. Durante el citado plazo, y no obstante las indicadas sentencias, los que se crean con mejor derecho podrán ejercitarlo en forma legal. Art. 4º. Los fallos dictados en juicio contradictorio, en conformidad al artículo anterior, son irrevocables y no están sujetos a revisión, cualesquiera que sean los derechos que pretendan tener los que por ellos se sientan perjudicados. Art. 5º. Quedan derogadas la ley convenio sobre capellanías colativas de sangre de 24 de junio de 1867, publicada en 3 de agosto del mismo año y cualquiera otra disposición contraria a la presente y a la de 19 de agosto de 1841. También se dejan sin efecto las resoluciones contrarias a esta última, que hubieran adoptado los Diocesanos o tribunales eclesiásticos desde el 28 de noviembre de 1856, en que se declaró en suspenso el Real Decreto de 5 de febrero de 1855, hasta el 3 de agosto de 1867, en que se publicó como ley el convenio con la Santa Sede. Art. 6º. Las reclamaciones a que dé lugar la presente ley, se acomodarán en sus trámites a lo dispuesto en los artículos 694 y siguientes hasta el 708 inclusive de la ley de Enjuiciamiento Civil, mientras no hubiere contradicción, en cuyo caso el juicio se ajustará al procedimiento del civil ordinario. Art. 7º. La publicación del auto a que se refiere el art. 700 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se verificará también en la Gaceta de Madrid, empezando a contarse el plazo de los 60 días que fija el art. 701 de la misma ley desde la fecha del último edicto”. Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Apéndice 6º al diario de sesiones nº 53, de 5 de junio de 1871, Madrid 1872, tomo II, s/f.

el restablecimiento de la Ley de 1841 por razones de política, de conveniencia y de justicia⁸³¹. Una vez realizada la intervención, y leída por segunda vez la proposición, el presidente anunció que pasaba a las secciones para nombramiento de comisión. Posteriormente, en 1 de julio quedó pendiente de dictamen, una vez nombrada la comisión para el estudio de dicha proposición de ley⁸³².

Estas afirmaciones del Sr. Delgado eran insostenibles si se considera que el Convenio-Ley de 1867 lo que hizo es poner término a la anarquía que en materia de capellanías existía antes de su publicación. Es más, con este convenio se conciliaron los intereses creados y se trató de amparar los vulnerados; que los bienes a que en ella se hace referencia, eran de propiedad privada, y por lo tanto diversos en su condición de los demás que habían sido objeto de desamortización. En el fondo, como a todos los defensores del liberalismo radical les ofuscaba la pasión política y el odio sistemático a la Iglesia.

Pero los firmantes de esta proposición incurrieron en un concepto equivocado al suponer derogada la ley de 19 de Agosto de 1841, y “la juzgaron *desamortizadora* en vez de *desvinculadora*”, según comenta el abogado y juez de primera instancia Bravo y Tudela (*El derecho vigente sobre capellanías colativas...*, o.c., p. 377). Además, se olvidaron asimismo del Decreto de 30 de abril de 1852 y de la Ley aclaratoria del de 5 de febrero del mismo año, dada el 15 de junio de 1856, vigente a la sazón y con arreglo a lo cual se siguieron pleitos en los tribunales.

Parece ser que los autores de la proposición defendida por el citado diputado tampoco tuvieron en cuenta que el Convenio-Ley no fue la obra de un partido político, sino el resultado de una situación insostenible, el término de un estado de cosas notoriamente perjudicial para todos en el orden jurídico, económico y social, incluso en el religioso, aunque éste no contaba para ellos.

Entrando en un somero análisis de la mentada proposición de ley salta a la vista la “*contradicción con el espíritu a que parecían obedecer en ella pidiendo en el art. 2.º que se hiciesen extensivas las disposiciones de la Ley del 41 a todas las fundaciones*”

⁸³¹ Ibidem, tomo II, p. 1428.

“El Sr. Delgado: señores diputados, no he de molestaros exponiendo ahora las grandes razones de política, de conveniencia y de justicia que abogan por el restablecimiento de la ley a que esta proposición se refiere (...). Pero al levantarme a cumplir un deber reglamentario, apoyando, como uno de los firmantes, esta proposición, debo lamentarme, como se lamenta la mayor parte del país, de que aquí en donde todas las leyes desvinculadas han seguido siempre las vicisitudes y la suerte de la libertad, hayan estado tan desatendidas en la ocasión presente, puesto que después de tres años de revolución no se concibe cómo en materia de capellanías seguimos bajo el imperio de la ley más reaccionaria que ha dictado el neo-catolicismo en su odio a toda idea de libertad y de progreso: me refiero a la ley convenio del año 1867, cuya ley, no solamente declara subsistentes las capellanías, sino que facilita la creación de otras nuevas en sustitución de las que dejan de existir. Y en esta misma ley, a título de reducción y de redención de cargas, pasan la mayor parte de los intereses que los fundadores dejaron a sus familias al poder de los diocesanos, que se convierten en juez y parte en esta materia. Todos los Sres. Diputados comprenden la urgencia de la reforma de esa ley, y nosotros creemos que ya que han pasado tres años sin que se fije la atención de la Cámara en ella, no debemos consentir que un día más seamos responsables de las injusticias que a la sombra de esa ley se están cometiendo”. Ibidem, diario nº 64, tomo III, pp. 1717-1718.

⁸³² Ibidem, diario nº 81, tomo III, p. 2098.

piadosas de carácter familiar, o sea a patronatos, fideicomisos y otras diversas regidas por las leyes generales de mayorazgos, en lo cual violentaban su letra y la jurisprudencia constantemente mantenida por el Tribunal Supremo de Justicia, confundiendo fundaciones de naturaleza distinta”, citando a Bravo y Tudela, en su obra El derecho vigente sobre capellanías colativas..., o.c., p. 378.

A mayor abundamiento, desconocían el Convenio, del cual pedían su derogación, al afirmar que declara *subsistentes* todas las capellanías cuya renta excediese de 2.000 reales, cuando, en realidad, las declaradas subsistentes son únicamente aquellas en que no hubo anteriormente ni pendía la reclamación o juicio ante los Tribunales, y aun en éstas se declaran libres los bienes con arreglo al principio *desvinculador* y *no desamortizador*. Pero se debe precisar que estas últimas palabras de Bravo y Tudela, ya mencionadas anteriormente, no son realmente exactas, pues ya se ha comentado que los bienes de capellanías colativas de sangre por la índole especial de estas fundaciones, fueron objeto de una legislación específica, la cual no tenía de forma exclusiva un carácter desvinculador ni desamortizador⁸³³. Es un reiterado error en el que incurren los más prestigiosos conocedores del Derecho del siglo XIX, e incluso del XX.

El Convenio no fue en contra de la Ley de 19 de agosto, aunque tampoco cabía en buenos principios jurídicos dar retroactividad a una ley civil, y esto se pedía por los firmantes de la proposición de ley. Además, respetó los derechos de los que habían hecho uso las familias en base a la Ley de 1841. Al final, quedó sólo en una proposición de ley, pendiente de un dictamen en las Cortes, que no ocurrió, permaneciendo inconcluso el trabajo realizado.

Pero los diputados anticlericales de la República no se dieron por vencidos y volvieron a insistir en su afán de atacar a la Iglesia, en 21 de mayo de 1872, presentando a las Cortes, por tercera vez desde 1869, la proposición de ley que declarase con fuerza y vigor la Ley de 19 de agosto de 1841 y la derogación del Convenio-Ley de 24 de junio de 1867, siendo autorizada por las secciones del Congreso su lectura por el diputado Montero Guisado, en sesión del 26 de octubre, con la nueva legislatura de 1872-1873⁸³⁴. Así ha quedado plasmado en el diario de sesiones de la citada Cámara, siendo publicada la noticia en el periódico independiente *La Correspondencia de España*, nº 5289, del mismo día 21 de mayo. Otro diario, *La Discusión*, nº 1218, de 4 de octubre, en su página 3, anunciaba que una comisión de diputados estudiaba un proyecto de ley sobre capellanías colativas familiares y aprovechaba para arremeter contra el Convenio de 1867, al cual lo califica erróneamente de “*concordato*” y que, según este periódico, prescindió del interés de derechos de las familias, a la vez que lo tachaba de haberse excedido en su objeto y poderes⁸³⁵. En 29 de octubre fue presentada

⁸³³ Véase la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de noviembre de 1891, en el Cap. IX de esta tesis.

⁸³⁴ Esta nueva proposición comprendía los mismos siete artículos que la presentada en 26 de mayo de 1871, pero con una pequeña alteración del orden primigenio: el art. 5º, que derogaba el Convenio-Ley de 24 de junio de 1867 pasaba a ser el 7º, el 6º pasaba al 4º y el 7º al 6º. Por lo demás, era un calco de la anterior. Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Apéndice 25º al diario de sesiones nº 37, de 26 de octubre de 1872, Madrid 1873, tomo II, pp. 879-880 y p. s/f.

⁸³⁵ “Se ha anunciado que una comisión de diputados de la minoría estudia un proyecto o proposición de ley sobre capellanías colativas familiares. La ley de 19 de agosto de 1841 las extinguió, convirtiendo sus bienes en seculares, y ni lo literal del concordato de 1851, ni tampoco los antecedentes y discusiones del mismo contienen nada que autorizase el restablecimiento de una cosa que no existía legalmente ni era eclesiástica. Así lo entendieron todos los tribunales de España después de publicado el concordato. Mas

y fundamentada en el Congreso la aludida proposición por el Sr. Valera y Monteagudo, haciéndose eco del principio liberal de la desamortización para reclamar el restablecimiento de la ley de 1841 y la derogación del Convenio de 1867, como necesidad política y económica, expuso que la redención de cargas por los diocesanos había ocasionado daños a las familias de los fundadores al haberse incautado, según sus palabras, cuantiosos bienes. A continuación se dio otra lectura de la misma, y fue tomada en consideración. (*La Esperanza*, nº 8570 y 8571, de 29 y 30 de octubre. BNE. Hemeroteca Digital)⁸³⁶. En la sesión del Congreso los Diputados de 25 de noviembre de 1872, el Sr. Coronel y Ortíz pidió la palabra para excitar el celo de la comisión sobre el proyecto de capellanías colativas y que en breve plazo diese un dictamen sobre el asunto. Transcurrió el tiempo y este tercer intento de arremeter contra el Convenio de 1867 también acabó sin ningún resultado al quedar en un mero propósito.

Más tarde, y con posterioridad al Decreto de 12 de agosto de 1871 y a todo lo acaecido hasta entonces, la situación se complicó, con tales precedentes, olvidándose el Gobierno de la República de lo pactado solemnemente con la Santa Sede, llegándose a suspender el Convenio-Ley de 24 de junio de 1867 y la Instrucción de 25 del mismo mes y año, mediante un Decreto de 8 de octubre de 1873 (Gaceta del día 9 de octubre), habiendo llegado, por fin, el tan deseado momento para ciertos políticos después de varios e infructuosos intentos ante las Cortes en 1871 y 1872, como así lo reconoce el preámbulo de la norma: *“sensible es que tanto los Gobiernos como las Cortes que se han sucedido desde la revolucion de 1868 no hayan restablecido, en el punto*

después de mucho tiempo, por una real orden se dejó sin efecto dicha ley en 1852, y uno de los primeros cuidados en febrero de 1855 del ministro de Gracia y Justicia fue restablecerla, así como de la reacción en noviembre de 1856 fue dejarla en suspenso, y a todos los pleitos sobre estas fundaciones. En 1867 el Sr. Arrazola y conde de San Luis celebraron un concordato sobre esta materia, en oí que no sólo comprendieron las capellanías pedidas o por pedir después de 1851, sino las pedidas judicialmente con anterioridad, ¿Tuvieron poderes ni facultades para derogar lo expresamente pactado en 1851 y sustituirle con otras estipulaciones? Celebraron un concordato que prescindía del interés y derechos de las-familias, y que desde luego se comprendió no podría subsistir mucho tiempo, sino el de la situación política que lo había creado. Ese concordato, cuya menor falta era excederse de los poderes y objeto que lo motivaba, no tenía vida, ni conveniencia; y tanto es así que no se ha cumplido casi ni por la autoridad civil ni aun por las eclesiásticas, ni por las familias, a las que condenaba a gastar por varios conceptos más que les daba. No se cumple, porque de puro gravoso no se puede cumplir. Reunidas las Cortes Constituyentes, dos comisiones se nombraron para restablecer la ley de 1841; pero no terminaron sus trabajos. Si una comisión de la minoría ha presentado o va a presentar ese proyecto de ley, llenará el cumplimiento de una solemne oferta hecha por el partido progresista desde 1867, llenará una necesidad, pues los bienes de capellanía ni sirven a las familias, ni a las iglesias, y el concordato de 1867, contrario al de 1851, es de recordarse para admirar la paciencia o descuido de los que no han cumplido en el poder lo que ofrecieron en la oposición”. BNE. Hemeroteca digital.

⁸³⁶ *“Entiendo yo, y francamente lo digo, me lamento de que una ley como la del 19 de agosto de 1841, que es el complemento del principio de la desamortización, principio que ha estado siempre dentro de la escuela liberal, haya estado hasta ahora condenada al olvido; y por lo mismo creo que para ser consecuentes con los principios que hemos proclamado y que hemos defendido, es de necesidad el restablecimiento de la precitada ley, por la que quedaron suprimidas las capellanías colativas. Entiendo también que toda vez que es contraria esa ley a la ley-convenio de 24 de junio de 1867, por la que se dejaron subsistentes las capellanías colativas, y no solamente se dejaron subsistentes, sino que además se facilitaron medios para crear otras nuevas, esa ley-convenio debe derogarse. Y entiendo, en fin, que toda vez que a título de redención y reducción de cargas los diocesanos se han incautado de cuantiosos bienes que pertenecen a las familias de los fundadores, hay que poner término a este estado irregular y anómalo, y se pone aceptando la proposición que he presentado”*. Diario de las sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. Diario nº 39, de 29 de octubre de 1872, Madrid 1873, tomo II, p. 932.

concerniente a Capellanías, las leyes de 19 de Agosto de 1811 y 15 de Julio de 1856, con lo que se habrían acallado todos los rumores y exigencias del espíritu liberal”.

El auténtico motivo del Decreto fue clara y evidentemente político, pues se trataba de castigar al clero por su apoyo al bando carlista en la guerra que había comenzado en abril de ese mismo año. Así lo expresa en su preámbulo, reproducido a pie de página, en un ejercicio de la más alta hipocresía y falsedad política⁸³⁷. Sus dos primeros artículos dicen lo siguiente:

“Artículo 1º. Desde la fecha de este decreto se suspende en todas las diócesis de España la ejecución de la Ley de 24 de junio de 1867 y la Instrucción de 25 del mismo mes y año.

Artículo 2º. Quedarán igualmente en suspenso, en el estado en que se hallen, todos los negocios relativos a permutación de capellanías y cargas que estén pendientes de sustanciación o fallo en las Comisiones diocesanas, Juzgados y Tribunales”.

Nótese que el artículo 2º expuesto incurre en un tremendo error al hablar de “permutación”, en lugar de “conmutación”, que es la palabra correcta que debería haberse empleado. Es más, se prohibía, en su artículo 3º, a los funcionarios judiciales y a cualquier autoridad la ejecución de providencias relativas a la conmutación de los bienes de las capellanías colativas de sangre. Pero la realidad fue que en la práctica, los efectos de esta norma fueron más allá de una simple suspensión y, al amparo de la revivida legislación de desamortización eclesiástica se comenzaron a vender los bienes de capellanías de sangre. Así se desprende del mandato de suspensión de tales ventas que se contiene en el punto 4º de la Orden Ministerial de 12 de marzo de 1874 (M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 1º, Legislación, pp. 317-318):

“4º. Que se suspendan las ventas de bienes de esta clase de fundaciones, siempre que se justifique administrativamente esta procedencia, con arreglo al Decreto de 12 de agosto de 1871, hasta que se presente sentencia de los Tribunales o se publique la proyectada ley”.

⁸³⁷ “...el Ministro que suscribe no abriga temor alguno de que el producto del acervo se haya en efecto dedicado en la mayor parte de las diócesis a la nueva creación de capellanías congruas, a pesar de que sobre esto no existe ningún dato en el Ministerio, sin duda por no haberse prescrito en la expresada Ley que los Prelados diesen aviso de las que nuevamente creasen. Pero es lo cierto es que la falta de esta precaución ha inspirado a espíritus tal vez demasiado suspicaces la idea de que, atendida la actitud insensata que ha tomado una parte del Clero, pueda haberse distraído y seguirse distrayendo en determinadas diócesis el producto del acervo a fomentar, directa o indirectamente, los sensibles disturbios y tenaz rebelión con que se ven afligidas muchas de las provincias de España. Aunque el Gobierno tenga la íntima convicción de que este recurso no sería de gran auxilio para continuar la guerra civil (...) sin embargo no debiendo contrariar en lo más mínimo la opinión pública, que es su principal apoyo, y velando al mismo tiempo, como debe, por el prestigio y decoro del orden eclesiástico, que en su generalidad no debe confundirse con la turbulenta minoría que le deshonra, se propone adoptar una medida que, a la vez que tranquilice a la opinión pública, ponga a cubierto los firmes propósitos que deben suponerse en el Episcopado a favor de la tranquilidad y paz del Estado de toda sospecha que pueda redundar en perjuicio de la fama que justamente le corresponde, y aún de las calumnias que la malevolencia discurriese para desacreditar a la iglesia y a sus ministros”.

La disposición anterior es interesante al proporcionar una pista o mejor, un indicio más que evidente sobre la intención del Gobierno de la República de publicar una nueva ley sobre las capellanías colativas, intención que nunca llegó a materializarse. Esta señal se encuentra en el punto 3º de la antedicha orden, en la que se ordenaba a la Dirección General de Propiedades del Estado que formulase *“el proyecto de decreto sobre capellanías familiares que, en uso de las facultades extraordinarias de que el Gobierno está investido, haya de acordar el Consejo de Ministros, a reserva de dar cuenta a las Cortes, para que se cumpla la ley que en su día haya de sancionarse...”*

Pocos meses después de finalizada la República se restablece la anterior normativa con un Decreto de 24 de julio de 1874 (Gaceta nº 209, de 28 de julio), en cuyo corto preámbulo se expone que la anterior suspensión del Convenio-Ley de 1867 y su Instrucción por el citado Decreto de octubre de 1873, había provocado *“numerosas y justificadas reclamaciones”* y se reconocen *“los enormes perjuicios irrogados con aquella disposición a los individuos y familias interesadas”* debido a la extensa y laxa interpretación a que se prestaban los artículos del susodicho Decreto de 1873, en especial los preceptos segundo y tercero. Asimismo se reconoce la licitud y legitimidad del Convenio-Ley de 1867 al decir: *“Todas estas circunstancias patentizan por lo tanto la imperiosa necesidad de poner pronto y eficaz remedio a los perjuicios que así al Estado como a los particulares se infieren con la paralización de asuntos incoados y seguidos al amparo de una ley concordada, que sobre ser en cuanto al principio general de la desamortización eclesiástica más beneficiosa que ninguna otra de las anteriormente publicadas, imposibilita por su indudable legitimidad toda discusión y medida opuesta a su estricto cumplimiento”*. En el artículo primero del Decreto de julio de 1874 se manda lo siguiente:

“Se declara sin ningún valor ni efecto el decreto de 8 de octubre de 1873 por el cual se suspendió en todas las diócesis de España la ejecución de la Ley de 24 de junio de 1867 y de la Instrucción a ella relativa del 25 del mismo mes y año; restableciéndose, por tanto en todas sus partes, la ley e Instrucción mencionadas”.

(M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 1.º Legislación, p. 138).

Esta anterior disposición, al restaurar en toda su eficacia el Convenio-Ley de 1867, lo que hizo fue una obra de justicia, no sólo por reiterar la vigencia de una ley que por su naturaleza de concordada, la derogación hecha por el poder civil carecía de todo valor y eficacia, sino debido a que volvió a considerarla en su verdadero carácter y fundamento, que no era otro que el de haber acabado con todas las arbitrariedades cometidas tiempo atrás y que finalizaron mediante la transformación económica realizada en los bienes de capellanías por el mencionado convenio cuyo espíritu y finalidad era muy distinto al que presidió la obra desamortizadora de los años precedentes.

Pero los resultados prácticos obtenidos en el transcurso de algunos años, desviando el espíritu que predominó en el Convenio-Ley de 1867, dificultó en muchos casos la legalización de la situación en que se encontraban los bienes conmutados en los registros de la propiedad, *“por confundirse el carácter de las fundaciones, haciendo entrar en el círculo de acción de las capellanías colativas otras que no lo eran, hizo*

precisa una declaración previa del estado, como interesado en la magna obra de la desamortización”⁸³⁸. De aquí la publicación de varios decretos entre agosto de 1871 y diciembre de 1872.

Entre estos decretos hubo, en el período del sexenio revolucionario de 1868 a 1874, una disposición normativa que destaca y que influyó de forma decisiva en la regulación de las capellanías colativo-familiares. Se trata del Decreto de 12 de agosto de 1871 (CLE, tomo CVII, pp. 354-357)⁸³⁹ que fue causa de enfrentamientos y disputas durante cierto tiempo debido a que introducía un elemento ajeno al fin perseguido por el Convenio-Ley de 1867, al establecer la intervención de la Administración en el procedimiento en el que se transferían, mediante la conmutación canónica de sus rentas, los bienes de capellanías de sangre a las familias. Así, en su artículo primero ordena la necesidad de una previa declaración de estar dichos bienes exceptuados de la desamortización:

“Correspondiendo a la potestad civil declarar las excepciones que se contienen en las leyes de 1º de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, los que se crean con derecho a los bienes de capellanías familiares o de sangre y memorias piadosas presentarán sus solicitudes documentadas ante las Administraciones económicas de las provincias en que aquéllos radiquen dentro del término improrrogable de seis meses, contados desde la publicación de este decreto en el Boletín oficial”.
(CLE, p. 354).

De esta forma, si antes los interesados acudían al Diocesano, el cual examinaba la solicitud, la copia de la fundación y el árbol presentado por el pretendiente, y demostrado el entronque con el fundador o las familias llamadas ponía en curso el expediente, lo cual era expedito y fácil, ahora en virtud de este artículo habían de hacerlo al Administrador económico de la provincia, siendo un proceso molesto, costoso y vejatorio para los interesados por el cotejo de documentos que debían practicar.

⁸³⁸ L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas...*, o.c., p. 7.

⁸³⁹ Esta disposición fue publicada en los periódicos de la época como *La Correspondencia de España*, nº 5008, de 13 de agosto de 1871, que decía que “*La Gaceta de hoy publica un importante decreto expedido por el ministerio de Hacienda y encaminado a determinar el procedimiento breve y sencillo de los expedientes de excepción relativos a bienes de capellanías vacantes, para que, sin embarazo de jurisdicción respectiva y con economía de tiempo pueda llegarse al término de la desamortización eclesiástica y a la constitución de las capellanías según la nueva forma establecida en el último concordato, mientras tenga fuerza legal*”. También en *La Época*, nº 7368, del mismo día y mes, la cual critica el decreto diciendo “*no tiene gran trascendencia, aunque es de buena administración, y si los periódicos ministeriales que en estos días han alborotado ponderando las medidas que por el ministerio de Hacienda se iban a tomar para apresurar la desamortización eclesiástica se referían solamente a esta disposición, sería preciso reconocer que habían tomado el rábano por las hojas y que habían reproducido la fábula del parto de los montes*”; en el *Diario oficial de avisos de Madrid*, nº 226, *El Imparcial*, diario liberal, ambos de 14 de agosto; *La Discusión*, nº 870, y *La Iberia*, diario liberal, nº 4553, los dos de fecha 15 de agosto. Éste último elogiaba la norma recién aprobada: “*La Gaceta de anteayer nos dio, con un decreto digno del mayor encomio y alabanza, la prueba de que el vicio existe, y nos infundió la confianza de que nuestro Gobierno ha sabido conocerlo y está dispuesto a hacerlo desaparecer. Gran bien debemos al Sr. Ruiz Gómez, autor del decreto; gran bien al Gobierno que lo dicta*”. BNE. Hemeroteca Digital.

Pero el meollo de la cuestión se encuentra en que las declaraciones de excepción eran una herramienta que tenía la Administración para intervenir en la desamortización civil y eclesiástica. Esta doctrina tiene un claro precedente en la anteriormente citada Real Orden de 17 de enero de 1847, que disponía respecto a la reclamación de bienes de las capellanías colativas que debía instruirse un expediente gubernativo para poder declararlas exceptuadas de la desamortización, que en esa época era la de Espartero⁸⁴⁰. La diferencia con el Decreto de 12 de agosto de 1871 estriba en que éste se dicta cuando la legislación desamortizadora (en este caso, de Madoz) respecto de los bienes de la Iglesia, había sido derogada por el artículo 3º del Convenio Adicional de 4 de abril de 1860.

La falta de este requisito impuesto por el Decreto de 1871 producía serias consecuencias en el campo registral, pues en su artículo 14 se ordenaba:

“Los registradores de la Propiedad suspenderán la inscripción por defecto subsanable de los bienes conmutado por los Diocesanos mientras no se presente el traslado de la orden ministerial declarativo de haber sido exceptuados en conformidad con el artículo 3º de la ley de 11 de julio de 1856.”

El precepto dice que “suspenderán la inscripción”, pero nada manifiesta sobre la conmutación, ya que la norma solamente se opone a la inscripción, pero no a la conmutación. Además, aparte de que el mencionado real decreto no ha podido modificar el acuerdo concordatario de 1867, este artículo se refiere únicamente a la conmutación de rentas de los bienes de capellanías hecha ante los diocesanos por los parientes de los fundadores, y no a la redención de cargas impuestas sobre bienes de dominio particular exclusivo, que es algo totalmente distinto.

Este Real Decreto, al que se opone gran parte de la doctrina representada por Álvarez y Gómez, Ruiz de Velasco, Campos y Pulido y Bravo y Tudela, pone de manifiesto las dificultades que la arbitrariedad del Gobierno de la época ocasiona para que no puedan cancelarse en el Registro de la Propiedad las cargas eclesiásticas redimidas ante los diocesanos, dejándoles sin autoridad, además de ser una falta de consideración a la Iglesia. La promulgación del Convenio de 1867, que puso término, con utilidad de la Iglesia, del Estado y de los particulares interesados, a las dudas e incertidumbres suscitadas con ocasión de las leyes y disposiciones normativas que se habían dictado sobre capellanías colativas de sangre, había quedado en “letra muerta” para los políticos que se encontraban en el poder. En rigor, el derecho vigente en ese momento sobre capellanías era el mencionado Convenio, el cual no podía modificarse mientras ambas partes, la Santa Sede y el Gobierno, no consintiesen el dejarlo sin efecto. La situación jurídica formada sobre los bienes eclesiásticos por el tan abundantemente citado Convenio, no puede alterarse a voluntad de una sólo de las partes, ni mucho menos, modificarse por el Gobierno, que está obligado a cumplir estricta y puntualmente lo concertado. Según Bravo y Tudela “*los partidarios de la separación de la Iglesia y el Estado; los enemigos de toda concordia y armonía entre el poder civil y el religioso; los que decían á la Iglesia sé libre y deja que lo seamos*

⁸⁴⁰ Hay que recordar que la ley de 2 de septiembre de 1841 declaraba bienes nacionales las propiedades del clero con excepción de los de fundaciones familiares, exceptuando en su artículo 6º “*los bienes pertenecientes a prebendas, capellanías, beneficios y demás fundaciones de patronato de sangre activo o pasivo*”.

nosotros, no vacilaron en legislar sobre instituciones eclesiásticas, y lo que es más, legislaban en provecho propio, y sin tener para nada en cuenta los derechos de la Iglesia” (El derecho vigente sobre capellanías colativas..., o.c., p. 385).

En apoyo de lo anterior baste recordar que el artículo 7º del Convenio-Ley y el 28 de la Instrucción determinan que los poseedores de bienes de dominio particular exclusivo, gravados con cargas eclesiásticas, pueden redimirlos ante el Diocesano, si tal fuera su voluntad. Además, el artículo 20 de la Instrucción, en su segundo párrafo, dispone que, verificado el pago de la redención, se librará a los interesados el correspondiente documento para poder cancelar la hipoteca sobre los bienes y que éstos queden libres.

A) Fundamento y justificación del Decreto.

El Decreto se apoyaba, según su exposición de motivos⁸⁴¹, en la necesidad de poner fin a la conmutación de capellanías como familiares cuando no lo eran. Es decir, que no se conmutasen capellanías de patronato no familiar sino eclesiástico que, al ser bienes eclesiásticos, estaban sujetos a la permutación convenida en 1860. Esta justificación no pareció lo suficientemente fundada a algunos autores⁸⁴², pues entendían que el expediente de conmutación que se tramitaba ante el diocesano ya contenía las suficientes garantías para que no se conmutasen las rentas de los bienes de capellanías no familiares. Además, sostenían que jamás podrían conmutarse “*bienes no comprendidos en el Convenio, porque aun suponiendo que la Curia eclesiástica se prestara a ello, al llegar al Registro de la propiedad, sería imposible presentar los documentos demostrativos de que se trataba de capellanías colativas de sangre*”⁸⁴³. También hubo autores como Miguel Ibargüen, que estaban de acuerdo con los motivos expuestos por el Decreto, al entender lo contrario, pero, a la vez, sostenían una postura crítica con el mismo⁸⁴⁴. Lorenzo y Lorenzo (*Tratado de capellanías colativas...*, o.c., p. 76) opina también en favor de la norma citada, al comentar en su obra que con objeto de evitar que a la sombra de lo acordado en la Ley de 1867 se cometieran abusos en cuanto a la calificación de las fundaciones de donde partían los bienes que habían de ser adjudicados, y ampliar lo legislado por otros medios, para mayor estabilidad y

⁸⁴¹ La Exposición de Motivos del Decreto decía: “*Así acontece que, conmutados los bienes en el supuesto de familiares, la administración activa los ha declarado después permutables como meramente eclesiásticos: que estando destinadas muchas fundaciones a cumplir cargas espirituales y benéficas, se declaran libres los bienes, bajo el supuesto de corresponder a la capellanía o beneficio, haciendo caso omiso de lo piadoso, contra la letra y espíritu de la ley y voluntad del instituidor*”.

⁸⁴² Ruiz de Velasco realiza una dura crítica al Decreto: “*Insigne torpeza sería en los Delegados de Capellanías el pretender conmutar bienes en los que están en pacífica posesión y nadie los reclama. Nunca se va a la conmutación de bienes sin cumplir los requisitos del Convenio, y cuando los parientes la soliciten. Estos realmente no pretenderán, no pueden intentar la conmutación si no tienen títulos legítimos para demostrar que descienden del fundador de la capellanía, ni la Delegación de Capellanías puede declarar este derecho sino mediante un expediente en toda regla y a la vista de la escritura de fundación y los llamamientos que en ella se hacen, y la formación de árboles genealógicos, acompañados de sus correspondientes partidas, y publicación de edictos en los Boletines Oficiales del Obispado y de la Provincia. Luego ¿para qué se quiere ese expediente de excepción, mandado por el Real decreto de 12 de agosto de 1871?*” F. Ruiz de Velasco y Martínez, *Método práctico para los párrocos en la reclamación de memorias-aniversarios y reivindicación de bienes de capellanías...*, o.c., pp. 376-377.

⁸⁴³ V. Covián, *Capellanías*, en *Enciclopedia Jurídica Española...*, o.c., p. 18.

⁸⁴⁴ L. Miquel Ibargüen, *Capellanías colativas y laicales*, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia (RGLJ)*, Madrid 1884, tomo LXIV, p. 424-437.

subsistencia de lo mismo que otorgaba, se publicó el Real Decreto de 12 de agosto de 1871.

Es evidente también en dicha exposición de motivos el radicalismo revolucinario al intentar justificar el decreto con el argumento de la resistencia pasiva de los prelados a facilitar la relación de los bienes de capellanías vacantes, lo que irritó a autores como Ruiz de Velasco que manifiesta que se aprecia un espíritu de rebelión contra la Iglesia por parte del Gobierno de la Nación. Aduce también que siempre se ve en el Estado “*esa constante tendencia de despojo, queriendo clasificar los bienes como desamortizables*”. En la misma línea se sucedieron diversas quejas como la del Obispo de Córdoba, que en una carta, de 1 de octubre de 1871, dirigida al Ministro de Gracia y Justicia, y publicada en la primera plana de diversos periódicos monárquicos como *La Esperanza* de 9 de octubre, nº 8251, interesaba que se revocase el Real Decreto de 1871, exponiendo que eran infundados los argumentos expuestos sobre la anteriormente citada oposición de los prelados y que el poder ejecutivo se había atribuido facultades legislativas al restablecer leyes derogadas⁸⁴⁵. Lorenzo y Lorenzo opina en contra de la mayoría de la doctrina, al censurar el amplio criterio de la autoridad eclesiástica en la interpretación de la obra concordada calificando y resolviendo acerca de la naturaleza, objeto y fines de las fundaciones, por lo que el “*mejor remedio para impedir esta invasión en terreno prohibido*” fue la tan citada norma de 12 de agosto de 1871.

De todas formas, si se presta a este Real Decreto de 1871 la atención que se merece, hay que reconocer que, aunque en su fin y objetivos no respondió más que a establecer una línea divisoria entre los bienes desamortizados y las capellanías colativas exceptuadas de aquéllos, se había olvidado de la necesaria intervención de la Iglesia en la cuestión que planteaba. Si en la citada exposición de motivos se alude a la resistencia

⁸⁴⁵ “V. E. conoce perfectamente el Convenio celebrado entre Su Santidad y el Monarca de España sobre Capellanías colativas de sangre y otras fundaciones piadosas de la propia índole, publicado con fuerza de ley en 24 de Junio de 1867, y la Instrucción que para llevarlo a efecto se dio (...). Todos quedan favorecidos de la exactitud en cumplir sus meditadas disposiciones, la Iglesia, el Estado y las familias. Pues bien, su historia, sus ventajas, los derechos y obligaciones que en él se consignan, todo esto desaparece de llevarse a efecto el Real decreto de 12 de agosto último, expedido por el Ministerio de Hacienda, contra el que me considero obligado a reclamar, por encontrarlo en su fondo y forma contrario al referido Convenio(...) hallo otro defecto sustancial al arrogarse el Poder Ejecutivo facultades legislativas, restableciendo leyes derogadas por otra vigente (...), resultando una verdadera antinomia al reconocer como ley vigente el Convenio y pretender al propio tiempo se observen las que le son contrarias. No concibo como se pueda demostrar histórica, canónica, legal y filosóficamente considerado, que las leyes de 1.º de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 y sus concordantes no sean antitéticas al Convenio. (...) A los Diocesanos, con facultad de delegar, se comete la instrucción de los expedientes, y a ellos exclusivamente su resolución; cuyos expedientes no solamente tienen por objeto realizar la conmutación de bienes, sino también, y en primer término, conocer y declarar por la vía gubernativa la naturaleza de las fundaciones y el derecho de las partes, parece ya supérfluo demostrarlo, después de haber patentizado la ineficacia de los argumentos con que se intenta sujetarnos a esa especie de exequatur creado por el real decreto de 12 de Agosto último (...). Por último, así como en lo que llevo dicho he demostrado que hay una verdadera antinomia entre el decreto y el Convenio, así también se nota contradicción entre la exposición y los artículos de aquél. Si lo dispuesto por el decreto es improcedente, se deduce que el conminar con la investigación, por su falta de observancia, es indebido. Cuando y contra quien fuere se ejecute sería injusta por razón de la cosa que es eclesiástica, por razón de las personas o corporaciones que poseen con justo título, y aun cuando fueren detentadores, pues entonces otras son las acciones y otros los medios de reivindicar los derechos, y por razón del tiempo, porque no es al poder ejecutivo a quien compete variar el que la Ley concede, señalado en el Convenio, que es la vigente y reconocida por el Gobierno. Boletín eclesiástico de la diócesis de Córdoba, nº 184. M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 8º, Documentos varios, pp. 418-419.

de los prelados y a la invasión de atribuciones del Estado por parte de las delegaciones diocesanas, lo que se está indicando es un olvido, intencionado o no, de lo pactado en el Convenio de 1867. Según Campos y Pulido (*Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 161): “a lo menos debió nombrarse una comisión mixta en cada diócesis, pues si al Estado no ofrecía las suficientes garantías lo que la Iglesia realizara, muchas menos debía merecerle aquél a ésta, ya que al fin y al cabo, la desamortización no suponía otra cosa que la intromisión injusta del Estado en asuntos que no eran de su competencia”. Luego, atendiendo al común acuerdo del Estado-Iglesia, que habían sancionado que las capellanías colativas quedarían fuera de la permutación ordenada por el Convenio Adicional de 1860, y que serían objeto de otro convenio, el de 1867, que determinó el arreglo definitivo de dichas capellanías, tanto la Iglesia como el Estado debía haberse puesto de acuerdo para decidir la excepción de la desamortización de aquéllas, como así fue cuando el Estado desamortizó los bienes eclesiásticos y la Iglesia prestó su consentimiento a lo desamortizado con la oportuna sanación, y por tanto, a ambas hay que atribuir la competencia y autoridad en el caso expuesto.

B) Cuestiones problemáticas del Decreto.

Asimismo, hubo críticas a la forma en que fue aplicado el Decreto debido a que, al establecer un plazo preclusivo e improrrogable de seis meses para solicitar la declaración de excepción, se impedía a los familiares conmutantes que no lo habían hecho dentro del mismo, la inscripción de los bienes en el registro⁸⁴⁶, a lo que se añadía la paralización de los expedientes ante las administraciones económicas de las provincias durante largos meses, como así lo recoge el periódico *El Imparcial*, nº 1842, de 6 de julio de 1872, con la publicación de las quejas de los interesados⁸⁴⁷. La verdad es que el plazo “improrrogable” fue prorrogado dos veces. La primera vez por el Real Decreto de 13 de febrero de 1872 (Gaceta nº 49, de 18 de febrero, *CLE*, tomo CVIII, p. 162), que lo amplió seis meses más. La segunda por el Real Decreto de 27 de agosto de 1872 (Gaceta nº 241, de 28 de agosto, *CLE*, tomo CIX, p. 256), que amplió la anterior prórroga de seis meses hasta el 31 de diciembre de ese año⁸⁴⁸, consecuencia de las numerosas peticiones que clamaban por la prórroga del plazo debido a las dificultades en la indagación y búsqueda de la documentación exigida, como así lo recoge el

⁸⁴⁶ El anterior autor también criticaba el Decreto: “no hemos de escatimar tampoco la severa censura que merece, en cuanto ha originado un gravísimo conflicto, cuya solución se hace indispensable por medio de una medida legislativa o del Poder ejecutivo”, porque “resulta que la Administración no tramita expedientes para declarar la excepción de venta de bienes de capellanías y demás fundaciones piadosas, ni consiente la inscripción de los dotales de las declaradas subsistentes sin que los tribunales hayan dictado sentencia, y sin embargo, esta es imposible legalmente que se dicte sin que haya precedido legalmente la tramitación y acuerdo del expediente gubernativo”. Ibidem, p. 436.

⁸⁴⁷ “Algunos interesados en capellanías y obras pías familiares, que tienen pedida la excepción ante la administración económica en virtud del decreto de 12 de agosto último, se quejan de que en dicha dependenciano se dé el debido curso a las gestiones presentadas hace ocho o nueve meses”. BNE. Hemerotece digital.

⁸⁴⁸ “Desde luego se supuso que el plazo establecido era corto y no guardaba relación con la extremada lentitud que caracterizaba la marcha de los asuntos que tenían acceso en los Tribunales, ni con los años de su duración, toda vez que no se llegaba a la mitad de la obra emprendida para dar al traste con las fundaciones de que se hace mérito, y además lo exigido por el decreto hacía menester algo más que meses contados para llevar bien preparados los expedientes al recurrir a las Administraciones logrando la excepción de venta, y de aquí que el Ministerio de Hacienda, en 13 de Febrero de 1872 dictase otro Real decreto. No fue tampoco bastante el segundo plazo, pues subsistían las mismas razones que prevalecieron para su publicación, y bajo los propios fundamentos vino el tercero (decreto) y último.” L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas...*, o.c., pp. 86-88.

periódico *La Época*, nº 7271, de 11 de agosto de 1872⁸⁴⁹. Esta ampliación del plazo marcado demostró la ligereza irreflexiva, no ya en el fondo, sino en la forma, en el apresuramiento para hacer suyos el Estado los bienes de los que se trata. Aunque parece que todo ello se debió a que el plazo establecido, en principio, era corto y no guardaba relación con la extremada lentitud que caracterizaba la marcha de los asuntos que ventilaban los tribunales, ni con los años que duraban; además, hacía falta mucho más tiempo que unos meses para llevar bien preparados los expedientes al recurrir a la Administración para lograr la excepción de venta de bienes de las capellanías familiares o de sangre. Y este último problema era reconocido por el Gobierno en la exposición de motivos de los dos Reales Decretos de 1872, que, respectivamente, dicen así:

“Empero las dificultades que a veces ocurren para obtener justificantes de los entronques, impidieron solicitar la excepción en el breve plazo de seis meses señalado por dicho Real decreto, produciéndose con tal motivo vivas reclamaciones, y solicitándose al propio tiempo una prórroga para cumplir lo que el mismo ordena”.

“Lo variado y complejo de estas fundaciones, el gran número a que se elevan en España y las reclamaciones que por los interesados se promovieron, han sido causa de que, al terminar el plazo de seis meses concedido en 12 de agosto, el Gobierno propusiera a V.M. la concesión de una prórroga de otros seis meses, que terminan en 12 del actual.

Próximo ya este día, muchos interesados que no han conseguido recabar los documentos precisos para justificar su derecho durante el tiempo transcurrido, reclaman otra vez una nueva prórroga”.

Ante estos plazos tan perentorios y reiterados y, tras el último plazo improrrogable dado por el Real Decreto de 27 de agosto de 1872, se desató la voz de alarma entre los reclamantes, los cuales no podían alegar ignorancia contra ellos, por lo que se pusieron en marcha un gran número de peticiones y solicitudes de aquéllos, al ver que estaban en peligro sus esperanzas de suceder en los bienes a que se hacía referencia, con lo que llenaron y colapsaron las administraciones con expedientes para que se les declarasen exceptuados de la desamortización los bienes que pertenecían a capellanías de las que se consideraban subsistentes según el Convenio-Ley concordado de 1867.

Pero el tan mencionado y criticado Real Decreto de 1871 tuvo también aciertos en sus disposiciones. Hay que destacar dos puntos decisivos que resolvieron los derechos que, en virtud de la norma, se concedían a quienes estaban en condiciones de acudir a la Administración y a los tribunales para hacerlos efectivos. El primero, cierra la puerta a sucesivas reclamaciones después del 31 de diciembre de 1872 y, el segundo, da seguridad a los que pusieron en ejecución lo ordenado en el precepto. Está, pues, fuera de toda duda que con la finalización del año de 1872 terminó, según el artículo 2º del

⁸⁴⁹ *“Parece son numerosas las peticiones de prórroga del plazo que se señaló para reclamar excepciones de bienes de capellanías y otras fundaciones de que habla el real decreto de 12 de agosto de 1871. Atendibles creemos las razones que militan en favor de la concesión de esa próroga, y no es la de menos fuerza el estado de diferentes provincias durante gran parte del tiempo designado para estas gestiones, que exigen de suyo la indagación y reconocimiento minucioso de documentos, muchos de ellos de difícil lectura”.* BNE. Hemeroteca Digital.

Real Decreto de 27 de agosto de ese año⁸⁵⁰, en relación con el del de 1871, el plazo de presentación de las solicitudes de excepción ante las administraciones económicas de las provincias en las que los bienes de las fundaciones radicaban. Por consiguiente, esa fecha fue la culminación y el final de la obra que había comenzado con la Real Cédula de 19 de septiembre de 1798, Ley 22, Título V, Libro 1º de la Novísima Recopilación (que enajenó los bienes raíces, entre otros, de memorias, obras pías y patronatos de legos y propuso la enajenación de los bienes de capellanías colativas), en la que se contenía el germen que desarrolló plenamente la ley de 19 de agosto de 1841.

Ahora bien, si éste había sido el pensamiento que predominó en el expresado Real Decreto de 1871, y su letra no se prestaba a dudas ni interpretaciones, es curioso que tuviesen entrada en la Administración diversas pretensiones consideradas extemporáneas, infringiendo disposiciones legales en perjuicio de los propios intereses del Estado, a quien, por un derecho presunto, debían pertenecer los bienes a partir de la fecha indicada de 31 de diciembre de 1872.

En visto de lo anterior, no se aprecia razón alguna que legitime la infracción del susodicho Real Decreto. Siempre se consideró necesario que la publicación de disposiciones normativas relacionadas con la adjudicación de bienes de capellanías debía contener un límite de duración para el ejercicio de los derechos que se otorgaban a las familias. Según Lorenzo y Lorenzo, en su obra citada, *“tenía su asiento en el castigo a la indolencia de los unos, y en otorgar a los otros la seguridad de lo que adquirieron, acogiéndose a sus preceptos”* (Tratado de capellanías colativas..., p. 100). Si comparamos la Ley de 15 de junio de 1856 con el Real Decreto de 12 de agosto de 1871, se aprecia que la primera, en su artículo 3º la ley fijaba dos plazos de caducidad del derecho de adjudicación de los bienes de capellanías, siendo el primero de veinte años para los parientes llamados en primer lugar según la ley de 1841, a contar desde el 19 de agosto de ese mismo año; y el segundo, transcurrido el plazo sin que se realizase la reclamación de los bienes, los parientes siguientes en grado disponían de cuatro años para solicitar la adjudicación a su favor. Transcurridos los dos plazos los bienes de las capellanías se declararían bienes sujetos a desamortización aplicándoseles la Ley General Desamortizadora de 1 de mayo de 1855. Pues bien, el precepto legal fue cumplido y es el antecedente lógico del Real Decreto de 1871, que consolidó idénticos fines, los cuales eran los derechos que emanaban del Convenio-Ley de 1867, e hizo patente la señalización de la vida legal de lo contenido en la norma.

Todo ello lleva a la conclusión de que no se puede legitimar la infracción de los plazos concedidos, sin embargo, se han considerado en idénticas circunstancias los parientes de los fundadores que en su debido tiempo ejecutaron sus derechos y los que no se acordaron de ellos desde 1873 en adelante, logrando, al fin, como premio la excepción de venta de los bienes con que dotaron las capellanías colativas. Esta práctica, contraria a la misma ley, hizo preguntarse a Lorenzo y Lorenzo, que la aborrecía, lo siguiente:

“¿Por qué si la ley de 15 de junio hizo distinción de derechos, en relación al tiempo de ponerlos en ejercicio, no han de ser del mismo modo considerados los

⁸⁵⁰ Este artículo 2º dice así: *“El plazo concedido por el artículo anterior será improrrogable, y una vez transcurrido, se procederá a ejercitar la acción investigadora sobre los bienes de dichas fundaciones, en los términos marcados en el art. 17 del citado Real decreto de 12 de agosto”*.

que han de ajustarse a las prescripciones del Real decreto de 12 de agosto? ¿Qué razón hay para que por la primera pierdan su derecho los que no reclamaron dentro de los veinte años, contados desde la publicación de la ley de 19 de agosto de 1841, pasando a los siguiente en grado, a quienes sólo se concedían cuatro años para utilizarle, y no han de perderle los que dejaron transcurrir primero los seis meses, a contar del 12 de agosto de 1871, y después todo el año 1872?

(Tratado de capellanías colativas..., p. 105).

El procedimiento que señala la norma es una verdadera declaración del derecho a los bienes de una capellanía. Así, en su artículo 2º se preceptúa que a la solicitud se acompañarán la escritura fundacional, el título de colación o presentación, partidas sacramentales que justifiquen el entronque del recurrente con el fundador, y la descendencia de las líneas llamadas al goce de los patronatos activo o pasivo, y una relación de los bienes dotales de la capellanía, con expresión de si se hallan en la Administración de la Hacienda o los ha enajenado, o si se poseen por el patrono, capellán cumplidor u otras personas. En realidad, ya no se pueden pedir más requisitos, con las dificultades que entraña el acopio de toda esta documentación.

Es de notar que el Real Decreto de 12 de agosto de 1871, en el ya comentado artículo 14, hizo llevar al Registro de la Propiedad el concepto de origen en las adjudicaciones que se habían realizado de los bienes que pertenecieron a las fundaciones de capellanías; y como era evidente que dentro de las mismas adjudicaciones, unas partían de los tiempos de la Ley de 19 de agosto de 1841 y 15 de junio de 1856, otras del Convenio-Ley de 1867 hasta el expresado Real Decreto y, las últimas, desde que éste se declaró vigente, es claro que las inscripciones habían de estar en relación con su disposición legal respectiva. En consecuencia, para abarcar todos los derechos otorgados hasta entonces y no confundirlos entre sí, se dio luz al Real Decreto que sigue.

De forma clara en su contexto el Decreto de 22 de agosto de 1874 (Gaceta de 28 de agosto) vino a precisar los límites de las capellanías extinguidas de las que se declararon subsistentes por la ley concordada de 1867, ordenando que se dejase de exigir la declaración previa de excepción para los casos de bienes de capellanías colativas extinguidas que hubiesen sido adjudicadas judicialmente, si en el juicio había intervenido el Ministerio Fiscal, según el artículo 1º:

“Los bienes que pertenecieron a las capellanías colativas que declaran extinguidas, el convenio-ley de 24 de Junio de 1867 e instrucción del 25, y que en cumplimiento de lo dispuesto en la ley de 19 de agosto de 1841, hubieren sido adjudicados o se adjudicaren a consecuencia de sentencia firme dictada por los Tribunales ordinarios, en juicio en que el ministerio fiscal haya sido o fuere oído en representación del Estado, podrán inscribirse en los Registros de la Propiedad, aunque no se presente el traslado de la orden ministerial, declarativa de haber sido exceptuados, en conformidad al art. 3 de la ley de 11 de Julio de 1856, siempre que se llenen los demás requisitos prevenidos en las disposiciones vigentes”.

Pero lo anterior no solucionaba los problemas que surgían en relación a los bienes de las capellanías subsistentes para las que no se había solicitado, en el corto plazo legal, la declaración de excepción. Habían quedado en el más absoluto desamparo y caducados sus derechos. En el caso de quienes sí lo habían solicitado, la situación también era problemática, pues debían esperar muchos años (en ocasiones más de treinta)⁸⁵¹ para obtener la citada declaración por tener que verificarse mediante orden ministerial.

La situación continuó durante bastantes años y, ante las continuas quejas de los parientes de los fundadores con derecho a conmutación canónica de capellanías⁸⁵², se ordenó, por parte de la Administración (Dirección General de Propiedades del Estado) mediante una Circular de la Dirección General de Propiedades del Estado de 4 de febrero de 1888, que dejó sin efecto los anteriores reales Decretos de 1871 y 1872. Su acuerdo 4º, expresa lo siguiente:

“Los expedientes de excepción de esta clase de bienes que hubiesen sido incoados fuera de los plazos legales concedidos al efecto, y los que en lo sucesivo se promuevan por los particulares, se tramitarán y elevarán a este Centro directivo en la propia forma que los instruidos en tiempo hábil, cesando por lo tanto, la práctica de algunas Administraciones que, interpretando erróneamente el espíritu del real Decreto de 12 de agosto de 1871, dejan de dar curso a las solicitudes de excepción presentadas fuera de tiempo”.

⁸⁵¹ “Por el año 1871 se promovieron bastantes expedientes en solicitud de la orden ministerial de excepción, sin que todavía (en 1903) hayan sido resueltos muchos de ellos, y las familias que dejaron de incoarlos a tiempo no pueden ya pensar en obtener tal declaratoria”. M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., p. 65.

Son evidentes ejemplos de lo anterior las solicitudes de Gabriel Viñes, de fecha 13 de marzo de 1873, que reclama los bienes de una capellanía fundada por Juan Comeche en Valencia; la de Juan Bautista Berenguer, en 7 de febrero del mismo año de 1873, respecto de los bienes de la capellanía fundada por Vicente Mompó en Ollería (Valencia); la de Miguel Miró, en fecha 9 de junio de 1881, sobre una capellanía fundada por Gregorio Bono en Turís (Valencia); la de Marcelino Fernández, en 11 de agosto de 1881, en reclamación de la capellanía fundada por Antonia Martínez en Requena (Valencia); la de Paulino Montes, de fecha 30 de agosto de 1886, también en Requena (Valencia), en relación a los bienes de una capellanía fundada por Josefa Ponce Fernández de Arcas y la de Salvador María de Fábregues, en 17 de diciembre de 1891, en razón de dos capellanías fundadas por Jorge Villamarín en Valencia, entre muchas otras. ARV. Propiedades Antiguas, legajos 17, 35 y 66. También en diversos lugares de la geografía española, como en Ronda (Málaga), en el expediente promovido por Juan Carrillo, en 30 de enero de 1880 y en 21 de junio de 1890, sobre la excepción de una finca que era parte de los bienes de una capellanía fundada en la iglesia de la localidad por Juan Salvador. AHN. F. C. Ministerio de Hacienda, 5489, expediente 3º.

⁸⁵² Las quejas tenían suficiente fundamento y así lo recoge Lorenzo y Lorenzo en su tratado criticando los sufridos trámites que había que realizar: “El Real decreto mencionado y sus prórrogas vinieron a aumentar las dificultades para obtener los bienes, porque antes de recorrer el camino que trazó la ley concordada, había que hacerlo de otro larguísimo y muy accidentado, cual era el que se marcaba en la esfera de la Administración (...) Contratiempo puede denominarse a la necesidad establecida de la instrucción del expediente, escrupuloso en demasía, toda vez que tiene que ir dotado de la documentación indispensable para acreditar la naturaleza de la fundación... y si a todo se agrega la marcha lenta del expediente pasando de la Administración a la Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado, recorriendo el camino por lo general más de una vez; de la Dirección a la Asesoría y de la Asesoría al Ministerio de Hacienda, fuerza es reconocer que, cuando se comunica el traslado de la Real orden de excepción de venta, si es que a costa de tantos escollos y sacrificios se obtiene, puede decirse que si el aspirante había tenido la suerte de vivir tanto tiempo como de duración alcanzó el trámite, la paciencia ya la había apurado, y con ella una no pequeña parte de sus recursos”. L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas...*, o.c., pp. 91-92.

(M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 5º, Jurisprudencia de la Dirección General de Propiedades, p. 293).

A la vez, se establece un antagonismo entre el artículo 17 de la norma de 1871⁸⁵³ (que se aplica una vez transcurrido el plazo prefijado para la presentación de solicitudes) y la doctrina de la citada Circular, porque ante un caso concreto, ¿cómo se resuelve? O se deniega el curso a la solicitud de excepción en conformidad al artículo mencionado o se tramita la excepción y se eleva a la Dirección General de Propiedades, de conformidad con lo dispuesto en la dicha Circular. ¿Supone el artículo 17, junto al 14 de la norma de 1871 la pérdida completa de todo derecho? ¿El ejercicio de la acción investigadora presupone la incautación de los bienes de capellanías colativas? Se puede entender lo último (la tramitación de la excepción) si la Circular envuelve una derogación del Real Decreto de 1871 y posteriores.

Al amparo de esta doctrina de la Dirección General de Propiedades, que se sostenía más bien en la buena voluntad que en el rigor jurídico de la norma⁸⁵⁴, se solicitaron numerosas declaraciones de excepción⁸⁵⁵ por quienes no podían registrar bienes y por los que habían entregado, para su conmutación, los convenientes títulos de deuda, sentando la base de que por estar dentro de plazo los aspirantes, la Administración tenía la obligación de admitir las solicitudes de excepción y tramitar los expedientes, ya que la incautación por parte del Estado no había comenzado.

En consecuencia, se publicó un Real Decreto, con fecha 3 de febrero de 1893 (Gaceta nº 36, de 5 de febrero), por el Ministerio de Hacienda en el que se decía, en su artículo 1º, que no se podían tramitar las solicitudes de declaración de excepción si habían sido presentadas con posterioridad al 31 de diciembre de 1872 y que, por lo tanto, los expedientes de excepción se denegasen sin más trámite.

⁸⁵³ “Transcurrido el plazo marcado para la presentación de las solicitudes de excepción, se procederá a ejercer la acción investigadora, imponiendo a los ocultadores o detentadores las penas marcadas en la Instrucción vigente, o las que de nuevo se dictaren”. CLE, tomo CVII, p. 357.

⁸⁵⁴ La circular olvida, quizás de forma deliberada, para dar solución al problema de la inexcusabilidad de la orden declarativa de excepción, el principio de jerarquía normativa, en el que una norma prevalece sobre otra en función del rango de la autoridad o del órgano de que emanen. Así lo expresa Lorenzo y Lorenzo: *Pero si con sobrada oportunidad y decidido propósito de corregir los abusos y corruptelas que se observaban en descrédito de las disposiciones administrativas, vino la circular mencionada, se ve, no obstante, en ella un punto saliente que no parece armonizar con las facultades de tan respetable Centro, en medio de la órbita de acción que se había trazado por el Poder ejecutivo al dictarse los tres Reales decretos, y que lleva la tendencia de apartarse de lo que por virtud de ellos estaba legislado, alterándolo de una manera clara y terminante. (...) Resulta, pues, que el susodicho decreto de 12 de agosto y los de las prórrogas que de una manera tan concluyente dejaron cerradas las puertas para las solicitudes de excepción en 31 de diciembre de 1872, han sido derogados por la circular de la Dirección General de propiedades y Derechos del Estado (...) Ahora bien, ¿qué es lo que debe prevalecer, los reales decretos o la circular? Y ¿cuál puede haber sido el pensamiento de la Dirección para anular la fuerza legal de los Reales decretos?* L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas...*, o.c., pp. 125-127. También Campos y Pulido: “Según los principios de derecho de aplicación al caso, no puede considerarse, bajo ningún concepto, que una circular pueda derogar un Real decreto”. J. Campos y Pulido, *Las capellanías colativas en España...*, o.c., p. 169.

⁸⁵⁵ “Esa voz de alerta, que al serlo tan reiteradamente no podía alegarse ignorancia contra ella, y cuando de una manera tan resolutoria como terminante se dejaba percibir el último decreto, puso en movimiento a un considerable número de personas, las cuales, viendo corrían peligro sus esperanzas a suceder en los bienes a que se hacía referencia, llenaron las Administraciones de expedientes...” L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas...*, o.c., p. 90.

“Los expedientes incoados después del 31 de Diciembre de 1872, en solicitud de excepción de los bienes de capellanías y patronatos familiares, serán resueltos sin más tramitación que la necesaria para hacer constar que la solicitud de excepción fue presentada fuera de aquel plazo, declarado improrrogable por el Real decreto de 27 de Agosto del mismo año”.

Entonces, terminados los plazos surgió la duda de si podía solicitarse la excepción de la desamortización por aquellos cuyo derecho a los bienes de capellanías se les declarase a partir de 1873. Esto lo resuelve en su artículo segundo, el cual articulaba una posible solución para los interesados consistente en que si ya habían conseguido una sentencia declarativa del derecho a la conmutación, podían solicitar del juez que elevase un suplicatorio al Ministerio de Hacienda para que dictase la orden declarativa de la excepción. Hay que señalar que, por analogía, cuando se realicen adjudicaciones por conmutación, al mencionado suplicatorio se acompañará el testimonio de la certificación correspondiente por el Delegado diocesano.

“Los interesados que ante los Tribunales ordinarios hubiesen obtenido u obtengan con citación del representante en juicio de la Hacienda pública, sentencia de adjudicación de los bienes, solicitarán del juez competente que, con testimonio de la ejecutoria recaída, se eleve suplicatorio al Ministerio de Hacienda, para que el cumplimiento se lleve a efecto administrativamente, como dispone el art. 16 de la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870”.

Dicho precepto es criticable, según Vazquez García-Peñuela, por dos motivos. El primero, por su incorrección terminológica, al referirse a sentencias de adjudicación, en lugar de sentencias declarativas del mejor derecho. Y el segundo, debido a que no prevé la situación de aquellos parientes con derecho a la conmutación que no necesitasen, por no tener opositores, acudir a los tribunales civiles para que se declarase su derecho⁸⁵⁶.

Pero hay que señalar que los plazos son y han sido insuficientes y, además, este Real Decreto se acordó por la autoridad civil sin atender o consensuarlo con la eclesiástica. Por lo que la necesidad de este trámite para que la adjudicación de los bienes de capellanías pueda inscribirse en el registro respectivo, es una verdadera traba que ha hecho todavía más confusa y difícil la legislación, siendo del todo innecesario, ya que las leyes de 1855 y 1856 declararon, de forma tajante, que los bienes de capellanías colativas estaban exceptuados de la desamortización. Pues, además de los decretos anteriores, la Orden Ministerial de 3 de abril de 1873 (M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 1º, Legislación, p. 135) declaró que era facultad del gobierno resolver los expedientes de excepción de capellanías, con arreglo a las leyes desamortizadoras, así que a pesar de todas las normas estudiadas, las disposiciones administrativas, en sus efectos, han franqueado los límites propios que las declaraciones ministeriales pueden producir, pues éstas no pueden tener el concepto de leyes emanadas del poder legislativo, porque aunque no son de derecho, en realidad lo son de hecho al prohibir inscribir bienes que permitían las resoluciones judiciales dictadas al amparo de las leyes vigentes.

⁸⁵⁶ J. M. Vázquez García-Peñuela, *Las capellanías colativo-familiares...*, o.c., cap. II, pp. 180-181.

La Dirección General de los Registros, aunque no es un tribunal cuyas resoluciones y sentencias sienten jurisprudencia hay que tener en cuenta sus decisiones, ya que fijan la norma a la que deben atenerse los registradores de la propiedad para inscribir o no un determinado documento, determinó por Resolución de 7 de julio de 1893 que, cuando en los pleitos sobre adjudicación de bienes de capellanías colativas ha intervenido el Ministerio Fiscal, no es preciso el traslado de la Real Orden ministerial de excepción, dado que en dicho particular es determinante el Real Decreto de 22 de agosto de 1874.

También recibió graves críticas el Tribunal Supremo, al que se acusó de haber contribuido a que se mantuviesen esos requisitos costosos y dilatorios. Pero la verdad es que en las ocasiones en que se pronunció sobre el Real Decreto de 12 de agosto de 1871 nunca dijo que no fuera necesaria la orden ministerial declarativa de la excepción de desamortización de los bienes de las capellanías colativo-familiares, ni que la citada orden se pudiera tramitar fuera de plazo. Sí que señaló que el Real Decreto no prohibía a los tribunales la admisión y posterior sustanciación de demandas sobre bienes de capellanías, pues sólo contenía una sanción relativa a las inscripciones en los Registros de la Propiedad, pues hay que tener en cuenta que la Ley de Enjuiciamiento Civil, publicada nueve años después que el decreto de 12 de agosto de 1871, no exigía que se acompañase a la demanda la orden declarativa de excepción. Todo ello fue censurado por algunos autores, siendo el más representativo el juez Lorenzo y Lorenzo⁸⁵⁷.

Por último, teniendo en cuenta el dictamen del Consejo de Estado resolviendo dudas y aclarando ciertos aspectos sobre la ejecución del Convenio de 1867 a solicitud del obispo de Zamora, se dictó el Real Decreto concordado de 12 de octubre de 1895 (Gaceta de 15 de octubre), en el que se dispuso sobre la propiedad de bienes y rentas de capellanías y la competencia de los tribunales eclesiásticos en las cuestiones referentes a la administración y entrega de frutos. En su exposición de motivos determina que *“mientras no tenga lugar la conmutación de los bienes de capellanías, no puede haber duda de que sus dotales están espiritualizados y corresponden de hecho y de derecho a la Iglesia, y su administración exclusivamente a los Prelados, hallándose dispuesto en el vigente Concordato y confirmado en dicho Convenio la aplicación que aquellos han de dar a los sobrantes de rentas y frutos producidos en las vacantes. Y no sólo el Derecho canónico, si que también la legislación concordada y aun disposiciones administrativas coinciden en que la Iglesia es la única propietaria de los bienes y rentas de las capellanías hasta su conmutación por títulos de la Deuda pública”*.

C) Una solución práctica: las ventas a censo.

Debido a la situación provocada por el Decreto de 12 de agosto de 1871, la cual influyó en muchos interesados a no instar el expediente de conmutación de rentas de los bienes de las capellanías de sangre, se hizo cada vez más frecuente en algunas administraciones diocesanas una práctica que permitía esquivar el precitado decreto de 1871 y que consistía en vender a censo reservativo los bienes de dichas capellanías y,

⁸⁵⁷ “Si el expediente gubernativo era indispensable, y esto era sabido cuando la ley de Enjuiciamiento civil se publicó, y si su tramitación era aún más minuciosa y detenida, idéntica en la forma e igual en el fondo, no se explican dos procedimientos semejantes para una misma cosa; así es que, o sobra el decreto, o sobra la ley, y de una manera tan superabundante y tan sin piedad para los interesados se ha procedido...” L. Lorenzo y Lorenzo, *Tratado de capellanías colativas...*, o.c., p. 140.

posteriormente, proceder a la redención del censo⁸⁵⁸, con lo que se conseguía transmitir la propiedad libre de cargas, liberándose los propietarios de los pesados gravámenes que tenían que soportar sobre sus patrimonios.

La venta a censo era entendida como un acto administrativo y, en consecuencia, no se necesitaba la declaración de excepción de la desamortización de los bienes. Además, dar en censo bienes de capellanías y otras fundaciones era un acto de larga tradición en la legislación⁸⁵⁹. Llegada la redención, al ser un derecho del censatario, nada podían oponer los administradores de la diócesis.

Esta práctica fue aceptada en principio, pues mediante Resolución de 10 de febrero de 1875 la Dirección General de los Registros y del Notariado resolvió que la venta a censo reservativo era inscribible sin necesidad de declaración previa de estar los bienes exceptuados de la desamortización⁸⁶⁰, declarando, mediante Resolución de 30 de octubre de 1875, inscribibles las escrituras de redención de censos de capellanías hechas ante los diocesanos, al haberles conferido esta facultad el Convenio-Ley de 1867⁸⁶¹.

Debido a que este tipo de ventas a censo se escapaban del control impuesto por el Decreto de 12 de agosto de 1871, fueron un recurso tan socorrido y frecuente que se tuvo que dictar por el Ministerio de Hacienda una Real Orden de 3 de diciembre de 1894, en la que en su parte dispositiva se interesaba que el de Gracia y Justicia, que previas las consultas que se creyesen convenientes, se someta a la Real aprobación una medida de carácter general, en la que se dispone “*que los registradores suspendan por defecto subsanable la inscripción de las enajenaciones a censo reservativo de los bienes pertenecientes a Capellanías y memorias piadosas otorgadas por los*

⁸⁵⁸ El Código Civil de 1889, en su artículo 1608 otorgaba al censatario el derecho a la redención del censo, encualquier tiempo y con independencia de la voluntad del censalista. M. Pedregal y Cañedo, *Textos y comentarios al Código Civil español*, Madrid 1889, Tomo II, pp. 688-699.

⁸⁵⁹ En la Novísima Recopilación (Libro VII, Título XXIII, Ley IV) se prevé que, para que los bienes no desmereciesen, si en los solares, yermos y casa pertenecientes a mayorazgos, capellanías, patronatos u obras pías no se hiciesen las convenientes mejoras, sus poseedores o patronos deberán concedelos a censo reservativo a quien quisiese obligarse a ejecutarlas.

⁸⁶⁰ “Considerando que, de todo lo expuesto se deduce que la verdadera naturaleza de la constitución del censo reservativo hecha a favor del recurrente es la de un acto de administración, autorizado por las leyes y por la práctica, al cual no pueden ser aplicables las disposiciones del R.D. de 12 de Agosto de 1871, porque prescindiendo de su literal contexto, que tan sólo se refiere a los verdaderos actos de conmutación de bienes eclesiásticoa y de capellanías, celebrados con los requisitos señalados en el Convenio-Ley de 24 de Junio de 1867 e instrucción dictada para su ejecución, y examinada la razón y el espíritu que de aquellos se deriva, aparece evidente que la necesidad de la previa declaración ministerial solo comprende aquellos actos en virtud de los cuales la Iglesia transmite a los particulares en concepto de libres bienes que tenían el carácter de eclesiásticos, y que por este título podían corresponder al Estado con arreglo a las leyes de desamortización entre cuyos actos no puede en manera alguna incluirse el que es objeto del presente recurso”. M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 6º, Jurisprudencia de la Dirección General de los Registros, p. 316.

⁸⁶¹ “Considerando que por no ser bastante claro y explícito este último (el Convenio-Ley) acerca de si dichos censos o gravámenes conocidamente afectos a cargas eclesiásticas estaban incluidos o no en el beneficio de redención que los prelados podían otorgar a los poseedores de bienes de dominio particular con arreglo al mismo Convenio, y para evitar las dudas que al texto literal, de sus disposiciones pudiese suscitar, se declaró por R.O. dictada en 18 de Abril de 1868, con inteligencia del M.R. cardenal pronuncio de S.S. y a consulta del Gobernador eclesiástico de Solsona, que los mencionados censos y pensiones conocidamente afectos a cargas eclesiásticas, como celebración de misas, aniversarios y otras fundaciones religiosas, están sujetos a la redención concedida por el expresado Convenio-Ley”. Ibidem, p. 317.

Diocesanos, mientras no se les presente el traslado de la orden ministerial declarativa de haber sido exceptuados, en conformidad al artículo 3º de la Ley de 11 de julio de 1856 y 14 del Real Decreto de 12 de agosto de 1871”⁸⁶². Ante esta disposición, la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado evidentemente cambió, pasando a exigir para la inscripción, ya fueren escrituras de venta a censo o de redención, dicho requisito administrativo mediante Resolución de 30 de mayo de 1895⁸⁶³.

A consecuencia de las normas citadas, los interesados en que se declarase la excepción de venta de los bienes de capellanías para que quedasen libres de la acción desamortizadora, con su posterior incautación y venta por el estado, promovieron, mediante solicitud personal, expedientes administrativos para obtener una resolución gubernativa, la cual se demoraba, como se ha podido apreciar, años y años. Así, cabe reseñar la solicitud, de fecha 30 de agosto de 1886, de Paulino Montes, de Requena (Valencia) que reclamaba los bienes de una capellanía fundada por Josefa Ponce Fernández de Arcas. O la de Miguel Miró, en fecha 9 de junio de 1881, la de Salvador María de Fábregues, en 17 de diciembre de 1891, la de Marcelino Fernández, en 11 de agosto de 1881.

2.3.- Alcance y síntesis de la legislación sobre capellanías colativas y laicales.

2.3.1.- Bienes de capellanías no familiares (colativas de patronato particular eclesiástico o de Derecho común eclesiástico y laicales).

A estos bienes se aplicaron las mismas disposiciones desamortizadoras que a los demás bienes eclesiásticos, es decir, la Ley General Desamortizadora de 1 de mayo de 1855 y la de 11 de julio de 1856. Así se desprende del artículo 10 del Convenio Adicional de 4 de abril de 1860, que sólo excluye de esa norma general a “*los bienes pertenecientes a capellanías colativas y a otras fundaciones piadosas familiares que, a causa de los diferentes derechos que en ellos radican no puede comprenderse en la permutación y cesión de que aquí se trata*”. Es decir, que este precepto se refiere únicamente a las fundaciones de sangre y no a las capellanías colativas de patronato eclesiástico o de derecho común eclesiástico, de las que nada se dice expresamente.

Como comprendidas y sometidas al Convenio Adicional de 1860, todos los bienes de estas capellanías colativas no familiares debieron incluirse en los inventarios de permutación que habían de confeccionarse según el Real Decreto concordado de 21 de agosto de 1860 y pasaron al Estado después de que éste entregase a la Iglesia los títulos intransferibles de la Deuda pública por los que se permutaron. Estas inscripciones, de

⁸⁶² M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 1.º, Legislación, pp. 155-156.

⁸⁶³ “Considerando que, contra lo que afirma el recurrente, pudiera padecer la acción investigadora de la Administración, inscribiéndose redenciones como la de que se trata, ya que bastaría al intento enajenar a censo reservativo bienes de capellanías y redimir después el gravamen, alegando para lo primero, que se trataba de un mero acto de administración, y para lo segundo, que la carga era de carácter puramente eclesiástico.

Considerando que si bien la R.O. de 3 de diciembre último ha puesto una barrera a ese abuso, preciso es no olvidar que hay en la actualidad muchas inscripciones de ventas a censo reservativo, efectuadas sin intervención del poder civil, lo cual obliga a proceder con cautela al dar entrada a las redenciones de tales censos”. R. M. Roca Sastre y J. de Molina Juyol, *Jurisprudencia registral*, Barcelona 1953, tomo I, pp. 1162-1165.

acuerdo con lo antes reseñado, respecto al alcance de la expresión “*rebajadas cualesquiera cargas*” que se encuentran en el artículo 38 del Concordato de 1851, no tenían por objeto la dotación general del culto y del clero, sino que habían de integrarse en el segundo acervo pío para fundar capellanías de libre nombramiento por los diocesanos, acervo creado en el Convenio-Ley de 24 de junio de 1867, según el artículo 18 del mismo. En realidad, no se inventariaron todos los bienes de estas capellanías colativas no familiares y para ellos, según el Convenio Adicional de 1860, subsistía la obligación de incorporarlos a los inventarios⁸⁶⁴.

2.3.2.- Bienes de capellanías colativo-familiares.

Dichas capellanías, como ya se ha podido apreciar, fueron exceptuadas de la desamortización eclesiástica en virtud del artículo 6º de la Ley de 2 de septiembre de 1841 (aclarada por el Real Decreto de 11 de marzo de 1843) y por la Ley de 11 de julio de 1856, que en su artículo 3º las excluye. Posteriormente, el Convenio Adicional de 1860, en su artículo 10, las excluyó también, a igual que las capellanías no familiares, de la permutación y dictó que serían objeto de un convenio particular, el cual sería el Convenio concordado de 24 de junio de 1867 que llevaría a efecto lo dispuesto anteriormente.

El citado Convenio-Ley de 1867 estableció dos reglas, una para las capellanías extinguidas al amparo de la Ley de 19 de agosto de 1841 y otra para las subsistentes, diferenciando claramente a ambas.

En el primer caso se extinguieron las capellanías familiares cuyos bienes fueron reclamados por las familias interesadas antes del 28 de noviembre de 1856. Estos bienes se adjudicaron a los parientes llamados a su obtención, subsistiendo las cargas eclesiásticas y previa declaración del derecho de los adjudicatarios por los tribunales. La carga eclesiástica que gravaba dichas capellanías era de carácter real y debía redimirse mediante entrega a la Iglesia de títulos de Deuda pública, según los artículos 1º, 2º, 3º, 5º y correspondientes del Convenio-Ley⁸⁶⁵, como ya se ha citado con anterioridad.

En el segundo caso subsistieron las demás capellanías colativo-familiares pero sus bienes fueron sometidos a “*conmutación canónica*”. En consecuencia, los familiares del fundador debían solicitar en los tribunales la adjudicación de los bienes y tramitar ante la Diócesis la desvinculación o libertad de los mismos. La admisión a trámite de la demanda requería que se acreditase que el expediente de conmutación había sido incoado. La sentencia, si dicho expediente canónico no había concluido al dictarse aquélla, se limitaba a declarar el mejor derecho de los demandantes a la conmutación y posterior adjudicación de los bienes.

En consecuencia con todo lo anterior el derecho vigente a finales del siglo XIX en materia de capellanías colativas es:

1º) El Convenio-Ley e Instrucción de 24-25 de junio de 1867.

2º) El Decreto que lo restableció el 24 de julio de 1874.

⁸⁶⁴ C. Aguilera Siller, *Fundaciones, capellanías y causas pías...*, o.c., p. 33.

⁸⁶⁵ *Ibidem*, p. 34.

3º) El Real Decreto de 22 de agosto de 1874.

Para concluir, siguiendo los razonamientos de Bravo y Tudela⁸⁶⁶, se deduce que los parientes llamados por la fundacion al goce de las capellanías colativas de sangre a quienes se concedió el derecho de obtener la adjudicacion como libres de los bienes dotales que las constituían, asegurando el importe de las cargas piadosas, de conformidad con la Ley de 19 de Agosto de 1841, derecho que prescribía en un plazo de veinte años, a contar desde dicha fecha según la Ley de 15 de junio de 1856, no tienen ya otra fórmula que la de poder continuar los pleitos que tuvieron principio antes del Real Decreto de 28 de noviembre de 1856, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4º de la ley concordada de 1867, siendo su conocimiento de la competencia de los tribunales ordinarios y sin necesidad de la declaración o expediente administrativo a que se refería la Real Orden de 17 de enero de 1847, derogada por el Real Decreto de 22 de agosto de 1874.

Respecto de las capellanías cuyos bienes no fueron reclamados en su tiempo, cabe que hoy los parientes llamados por la fundacion el de hacer la conmutación en títulos del 3%, teniendo en cuenta el estado de los valores públicos y lo que en su vista aconseja la equidad y la justicia. Este derecho lo han de ejercitar los interesados ante el Diocesano, quien instruirá el expediente que preceptúa el artículo 34 de la Instrucción de 25 de Junio de 1867; debiendo, si posteriormente no se dispone otra cosa, preceder la declaracion ministerial de que los bienes, por ser de capellanías colativo-familiares y haber acreditado el interesado pertenecer a la familia del fundador llamado a su disfrute, están exceptuados de la incautación y venta por el Estado, declaración que puede ser simultánea con la formación del expediente canónico; pero que paralizará y entorpecerá éste en la mayoría de los casos, toda vez que sin ese requisito previo de nada servirá la adjudicacion hecha por el Diocesano, hallándose prohibida la inscripcion en el Registro de la Propiedad por el artículo 14 del Real Decreto de 12 de Agosto de 1871 que dejó, según se ha visto, vigente el artículo 2º del Real Decreto de 22 de Agosto de 1874.

De todo ello se deduce que existe una triple competencia o incumbencia en materia de capellanías: la primera, la concedida a los Prelados Diocesanos por el Convenio-Ley de 1867 para instruir el expediente de conmutación y adjudicación de los bienes dotales; la segunda, la otorgada a la Administración respecto a la declaración de estar exceptuados los bienes de la desamortización, si se trata de capellanías subsistentes segun el convenio concordado aludido, es decir, de aquellas cuyos bienes no se reclamaron antes del 28 de noviembre de 1856, sin cuyo requisito, y mientras no se derogue, no es inscribible en el Registro de la Propiedad la adjudicacion de los bienes dotales hecha por el Diocesano. Y la tercera y última, es la que compete a los tribunales ordinarios que son los llamados a resolver el derecho a la adjudicación, en concepto libres, de los bienes reclamados antes del mentado 28 de noviembre de 1856 y también el de mejor parentesco para optar a la conmutación canónica, cuando los parientes no coinciden en este punto.

2.3.3.- Bienes de capellanías laicales familiares.

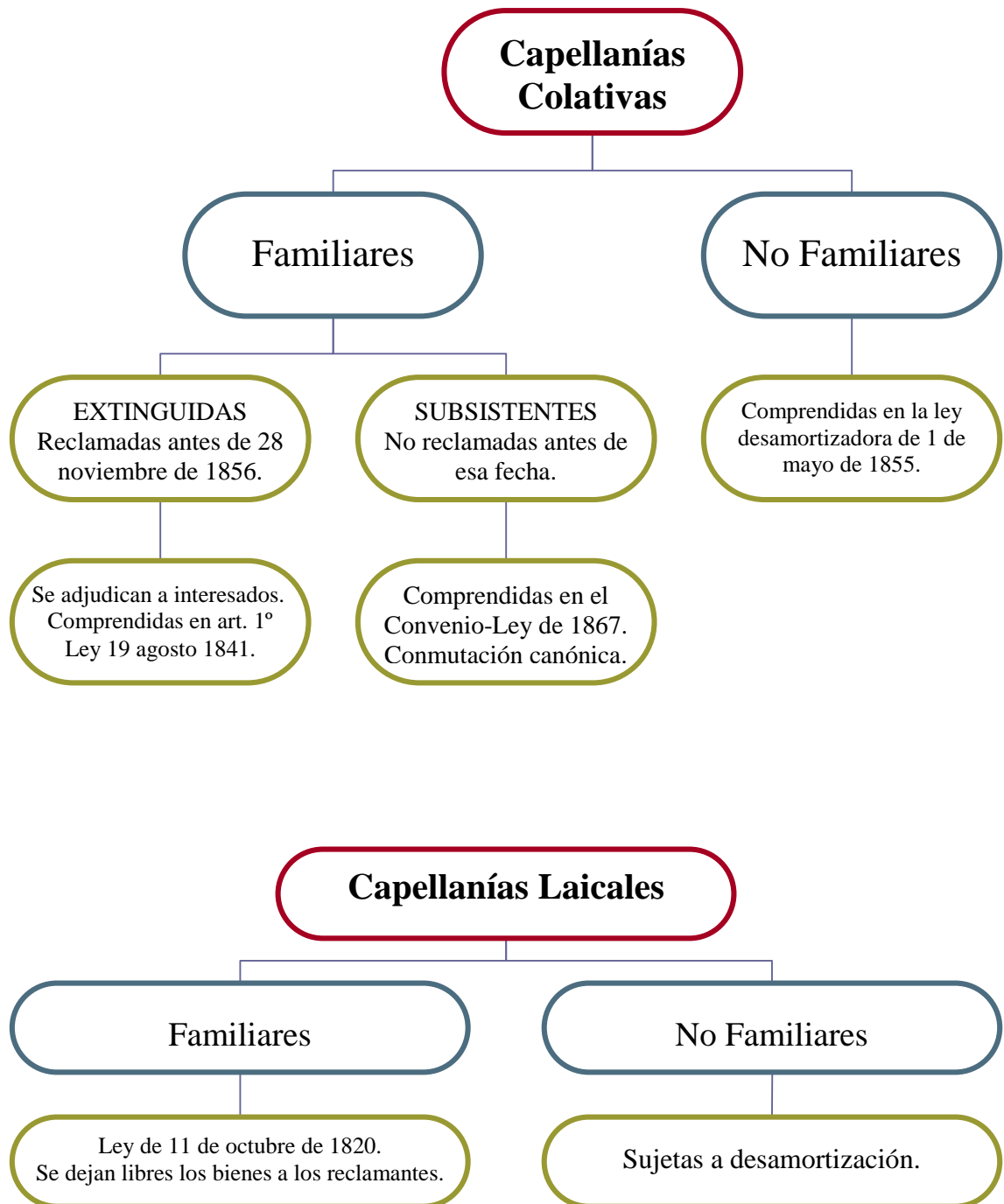
⁸⁶⁶ A. Bravo y Tudela, *El derecho vigente sobre capellanías colativas...*, o.c., pp. 408-410.

Subsistieron, según Aguilera Siller⁸⁶⁷, las capellanías laicales de patronato familiar cuyos bienes no habían sido reclamados por los interesados antes del 28 de noviembre de 1856, reconociéndose a dichos interesados y a las familias la facultad de redimir las cargas, en aplicación del artículo 7º del Convenio-Ley de 1867.

En este caso, parece ser que Aguilera Siller incurre en un error, ya que aunque el Convenio de 1867 reconozca en sus artículos 5º.3 y 7º la obligación de las familias de estas fundaciones (obras pías, legados píos y patronatos laicales o reales de legos y bienes de dominio particular exclusivo) a redimir las cargas de carácter puramente eclesiástico, desarrollado en los artículos 26 y 28 de la Instrucción para la ejecución del Convenio, es claro que el Real Decreto de 28 de noviembre de 1856 se aplica exclusivamente a las capellanías colativas de patronato familiar de sangre, al suspender el de 5 de febrero de 1855 que declaraba con fuerza y vigor la Ley de 19 de agosto de 1841 sobre las citadas capellanías colativas de sangre. Baste recordar que esta ley, en su primer artículo dice: “*Los bienes de las capellanías colativas...*”. En consecuencia, aunque las familias de las capellanías laicales tienen que redimir las cargas, y que así lo exprese el citado Convenio de 1867, no presupone que a estas fundaciones se les pueda aplicar la legislación propia y específica de las capellanías colativas. Además, al ser familiares se les aplicó la ley desvinculadora de 1820, y después fueron exceptuadas de la desamortización por las tan citadas Ley de 2 de septiembre de 1841, en su artículo 6º, el Real Decreto de 11 de marzo de 1843 y artículo 3º de la Ley de 11 de julio de 1856. Para finalizar, manifestar que el Convenio Adicional de 1860 excluyó estas fundaciones en su artículo 10 de la permutación y cesión canónica.

⁸⁶⁷ Ibidem, p. 34.

Cuadro 23. Legislación aplicable a las capellanías.



Cuadro 24. Evolución normativa histórica de las capellanías.

VARIABLES EXÓGENAS		<div>GUERRA INDEPENDENCIA 1808-1814</div> <div>CORTES CÁDIZ 1810</div> <div>ABSOLUTISMO</div> <div>TRIENIO LIBERAL 1820-23</div> <div>DÉCADA OMINOSA 1823-33</div> <div>CARLISMO</div> <div>CARLISMO</div> <div>REVOLUCIÓN 1868</div> <div>GOLPE DE PAVÍA. SERRANO. 1874</div> <div>CANTONALISMO</div> <div>CARLISMO</div> <div>RESTAURACIÓN</div>											
HECHOS	POLÍTICOS	<div>CONSTITUCIÓN 1812</div> <div>CONSTITUCIÓN 1837</div> <div>ESTATUTO REAL 1834</div> <div>CONSTITUCIÓN 1845</div> <div>PERÍODO MODERADO 1845-54</div> <div>BIENIO PROGRESISTA 1854-56</div> <div>UNIÓN LIBERAL 1858-1863</div> <div>REGENCIA SERRANO 1869</div> <div>CONSTITUCIÓN 1869</div> <div>REPÚBLICA</div> <div>CONSTITUCIÓN 1876</div>											
	ECONÓMICOS	<div>DESAMORTIZACIÓN GODOY 1798-1808</div> <div>DESAMORTIZACIÓN 1820</div> <div>DESAMORTIZACIÓN MENDIZÁBAL 1836</div> <div>CRISIS 1843</div> <div>DESAMORTIZACIÓN MADDOZ 1855</div> <div>CRISIS FINANCIERA 1864-1874</div>											
SUPER ESTRUCTURA		CARLOS IV 1788-1808	JUNTAS REVOLUCIONARIAS	JOSÉ I	FERNANDO VII 1814-1833	REGENCIA M ^a CRISTINA 1833-1840	REGENCIA ESPARTEIRO 1840-1843	ISABEL II 1843-68	PRIM 1869	AMADEO I 1870-1873	I REPÚBLICA 1873-1874	ALFONSO XII 1875-1885	REGENCIA M ^a CRISTINA 1885-1902
ESCALA CRONOLÓGICA		<div>1810</div> <div>1820</div> <div>1830</div> <div>1840</div> <div>1850</div> <div>1860</div> <div>1870</div> <div>1880</div> <div>1890</div>											
CAPELLANÍAS COLATIVAS FAMILIARES		<div>LEY 19-08-1841</div> <div>R.O. 07-01-1847</div> <div>CONCORDATO 17-10-1851</div> <div>R.D. 30-04-1852</div> <div>R.D. 28-11-1856</div> <div>CONVENIO ADICIONAL 04-04-1860</div> <div>R.D. 12-08-1871</div> <div>R.D. 08-10-1873</div> <div>R.D. 06-02-1855</div> <div>LEY 15-06-1856</div> <div>CONVENIO LEY 24-06-1867</div> <div>R.D. 24-07-1874</div> <div>R.D. 22-08-1874</div>											
CAPELLANÍAS LAICALES FAMIL.		<div>LEY 11-10-1820</div> <div>LEY 02-09-1841</div> <div>R.D. 11-03-1843</div> <div>LEY 11-07-1856</div>											
CAPELLANÍAS NO FAMILIARES		<div>LEY 01-05-1855</div> <div>CONV. ADIC. 04-04-1860</div>											

CAPÍTULO IX

ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE CAPELLANÍAS

1.- PREVIO.

Durante la segunda mitad del siglo XIX y hasta los años veinte del posterior siglo XX, el Tribunal Supremo⁸⁶⁸, como el más alto órgano judicial español, dictó un gran número de sentencias, más de doscientas, sobre asuntos referentes a capellanías, lo que denota la gran litigiosidad que produjo sobre la materia la legislación desvinculadora y desamortizadora y los trascendentales intereses económicos que se disputaban. Pero, para el tema y fin perseguido aquí, son relativamente pocas las que resultan ilustrativas, pues la mayoría de ellas, aunque tenían por objeto las capellanías, versaban sobre aspectos o asuntos con ellas relacionados, como el parentesco, derechos de adjudicación o prueba sobre entronques familiares, sin entrar a examinar la figura jurídica en sí misma considerada. Es decir, que tratan de aspectos adjetivos, secundarios o de procedimiento.

2.- JURISPRUDENCIA APLICABLE A LAS CAPELLANÍAS.

2.1.- Personalidad jurídica de las capellanías colativas.

Se reconoce la personalidad jurídica de las capellanías colativas y la posibilidad de que gocen del beneficio de pobreza, al contrario que las simples memorias de misas, que no tienen dicha personalidad al ser simples cargas piadosas. Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1897⁸⁶⁹.

2.2.- Naturaleza jurídica de las capellanías colativas.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de abril de 1882, reconoce que las capellanías colativas son beneficios eclesiásticos y que, tras la firma

⁸⁶⁸ Si bien dicho tribunal fue establecido por la Constitución de Cádiz de 1812, la denominación de “Tribunal Supremo de Justicia” (antes denominado Tribunal Supremo de España e Indias), fue obra de la R.O. de 15 de agosto de 1836, dictada para cumplimentar el R.D. del 13 anterior. J. Martín Carramolino, *Método para la sustanciación civil y criminal*, Madrid 1839, p. 165.

⁸⁶⁹ “Considerando que la doctrina legal consignada por este Tribunal Supremos en sentencias de 24 de noviembre de 1890 y 10 de octubre de 1891, que de perfecto acuerdo declaran que las capellanías fundadas para la celebración de misas son personas jurídicas, a quienes corresponde el beneficio de pobreza y debe otorgársele (...).

Considerando que la concesión del beneficio de pobreza se pide en el caso presente para litigar en nombre de una simple memoria de misas, consistente, según la voluntad del fundador, en aplicación de cierta renta en la celebración de misas, y que no teniendo tales fundaciones el carácter de personas jurídicas con separación de las personas naturales o jurídicas a quienes por derecho incumba cumplir y hacer que se cumpla la voluntad del testador, es evidente que al denegarse la pobreza no se ha infringido la citada doctrina, ni las disposiciones citadas en apoyo del recurso”. Gaceta de 7 de enero de 1898. C.J.C., tomo 83, 1898, pp. 383-386.

del Concordato de 1851, su regulación se debe ajustar siempre a la disciplina canónica⁸⁷⁰.

2.3.- Distinción entre capellanías laicales y colativas.

La fundación de la capellanía puede inducir a confusión con otro tipo de instituciones como patronatos de legos, memorias de misas, etc. También puede haber dificultades para saber cuándo la capellanía es eclesiástica o laical. Esta distinción, de gran trascendencia es tratada por la jurisprudencia del alto Tribunal.

Coherentemente con el anterior reconocimiento del carácter o índole benefical, el Tribunal Supremo considera que no pueden suponerse colativas las capellanías fundadas sin la intervención de la autoridad eclesiástica correspondiente y que se han estado poseyendo sin que haya tenido lugar la previa colación e institución por el Ordinario, en sentencia de 26 de marzo de 1847⁸⁷¹. Es, pues, un rasgo esencial de las capellanías eclesiásticas la necesidad de la intervención del Obispo diocesano para su erección y para la colación de la misma⁸⁷², pues su intervención es clave para diferenciarlas de las laicales. También el hecho de que la capellanía colativa constituye título de ordenación. A este aspecto parece que se le atribuye especial relevancia a la hora de diferenciar las capellanías colativas de las laicales, a las que se las considera como meras vinculaciones de carácter civil⁸⁷³, lo que se recoge en la sentencia de 3 de junio de 1910.

Otra manera de distinguirse las capellanías laicales y las colativas es cuando en las cláusulas de fundación se autoriza al patrono a remover a los cumplidores de la capellanía sin intervención de la autoridad eclesiástica. En este caso estamos en

⁸⁷⁰ “Considerando que la prohibición establecida en el artículo 14 de la ley de 11 de octubre de 1820, restablecida en 1836, de fundar mayorazgos, patronatos, capellanías ni vinculación alguna sobre ninguna clase de bienes o derechos, quedó derogada en cuanto a capellanías eclesiásticas, por el art. 45 del Concordato celebrado con la Santa Sede en 1851, por ser opuesta a lo que se dispone en sus arts. 41 y 43, según los cuales la Iglesia para adquirir por cualquier título legítimo, como lo es la fundación de una capellanía cuyos bienes sean espiritualizados, y todo lo perteneciente a personas o cosas eclesiásticas, sobre lo que no le provea en el mismo Concordato, ha de ser dirigido y administrado según la disciplina de la Iglesia canónicamente vigente, en cuya disposición están comprendidas las expresadas capellanías, puesto que conforme a dicha disciplina corresponde a los diocesanos aprobar tales fundaciones, erigiéndolas en beneficio eclesiástico colativo cuando sean congruas, y dando la colación canónica al que tenga derecho, según la fundación con todo lo demás que a la provisión y administración de las mismas se refiera”. C.J.C., tomo 49 (1882), pp. 97-101.

⁸⁷¹ “Considerando: 3º Que no hace contra esto la ley también citada en que el juez y los referidos parientes se fundan para desconocer las facultades expresadas del Gobierno político, suponiendo que las capellanías del patronato del Socorro eran colativas; porque esta calificación es manifiestamente equivocada, habiéndose fundado aquellas sin intervenir la autoridad pontificia ni la del ordinario diocesano, y poseído siempre sin colación y canónica institución previa”. C.L.E., 1847, tomo XL, nº 27.

⁸⁷² “Que por ser colativas las capellanías, cuando se fundan con autorización del diocesano, y el presentado por el fundador o los patronos necesita para obtenerlas la colación e institución canónica, es manifiesto que reúne tal carácter la capellanía familiar de patronato activo y pasivo de sangre fundada por... y de la que ahora se trata”. Gacetas de 2 y 3 de enero de 1905. C.J.C., tomo 99 (1904), pp. 527-557.

⁸⁷³ “Se distingue la capellanía colativa de la laical en que, así como la primera se instituye por la potestad eclesiástica y sirve de título de ordenación, aunque el nombramiento o presentación se haga por persona lega o eclesiástica con arreglo a la voluntad del fundador, en la institución de la segunda no interviene aquella autoridad, no sirve de título de ordenación, y constituye propiamente una vinculación de orden civil con el gravamen de celebración de misas en iglesias o altares determinados”. Gacetas de 28 y 29 de septiembre de 1910. C.J.C., tomo 118 (1910), pp. 327-341.

presencia de una capellanía de tipo laical y, en caso contrario, la capellanía será colativa, según sentencia de 24 de octubre de 1861⁸⁷⁴.

Otras sentencias referentes al mismo tema son las siguientes:

Sentencia de 24 de septiembre de 1864. No se puede calificar de laical o patronato real de legos y sí de colativa, la capellanía instituida por el fundador, pues entre los caracteres que distinguen las capellanías colativas de los patronatos de legos, se encuentra en primer término el de que los presentados por los patronos, obtengan del diocesano la institución autorizable, o sea el título canónico y la colación, sin cuyos requisitos no pueden hacer suyos los frutos⁸⁷⁵.

Sentencia de 4 de octubre de 1872. No puede calificarse de capellanía colativa aquella en la que no ha intervenido la autoridad y aprobación del Prelado diocesano, ni se han espiritualizado sus bienes, ni se han constituido como título hábil para la ordenación, requisitos indispensables para las capellanías colativas, además de haberse conferido la facultad a los patronos de elegir capellán independientemente de la autoridad eclesiástica, pues el legado pío o patronato de legos constituye una vinculación civil sometida a la ley de 11 de octubre de 1820⁸⁷⁶.

⁸⁷⁴ “Considerando que, según la cláusula de la fundación litigiosa, que autoriza al patrono para remover a los cumplidores sin intervención de la Autoridad eclesiástica, y la ejecutoria del recurso de fuerza de fecha 5 de abril de 1853, resulta ser la obra de que se trata de un mero patronato laical, comprendido, por tanto, en la desamortización del art. 1º de la ley de 11 de octubre de 1820”. Gaceta nº 301, de 28 de octubre de 1861. R.G.L.J., tomo 6, nº 249, p. 615.

⁸⁷⁵ “Considerando que habiéndose instituido por el fundador una capellanía, con carga perpetua de misas, que debía celebrarse en altar determinado por los presbíteros que designaba (...) con la obligación de inscribirla en los libros y tablas de la Santa Iglesia Catedral de Murcia, y poniendo los bienes con que la dotaba bajo la vigilancia de la Autoridad eclesiástica, dicha capellanía, en manera alguna puede calificarse laical, o Patronato Real de legos, y sí colativa. Considerando que entre los caracteres que distinguen las capellanías colativas de los Patronatos de legos, se encuentra en primer término el de que los presentados por los patronos obtengan del diocesano la institución autorizable, o sea el título canónico y la colación, sin cuyos requisitos no pueden hacer suyos los frutos.

Considerando que todos los capellanes presentados para servir la expresada capellanía por el fundador, por los llamados por éste, (...) han impetrado y obtenido siempre la colación y canónica institución, previas las diligencias prevenidas por dichas leyes”. Gaceta nº 274, de 30 de septiembre de 1864. R.G.L.J., tomo 10, nº 259, p. 100.

⁸⁷⁶ “Considerando que para la fundación indicada no se impetró ni intervino la Autoridad, ni aprobación del Prelado diocesano, no se espiritualizaron sus bienes, ni menos se constituyeron como título hábil para la ordenación; requisitos todos indispensables para las capellanías colativas que equivalen a verdaderos beneficios eclesiásticos; habiendo además demostrado suficientemente la fundadora Ana Domínguez su pensamiento de darle un carácter puramente laical al denominarla capellanía con carga de misas, y al conferir a los patronos la facultad de elegir Capellán, por sí e independientemente de la Autoridad eclesiástica, a la persona que quisiesen y consideraran suficiente teniendo la calidad de clérigo.

Considerando que, aun cuando se suponga colativa en su origen dicha capellanía, está reconocido que con posterioridad, ya fuese por la disminución de sus rentas, ya por otra cualquiera razón legal, se la ha calificado judicialmente de legado pío (...) habiendo conservado hasta la actualidad, y aun en el presente litigio, por consentimiento de ambas partes el mismo carácter jurídico de legado pío o patronato de legos, que constituye simplemente una vinculación civil, sometida a la ley de 11 de octubre de 1820, restablecida en 30 de agosto de 1836”. Gaceta nº 288, de 14 de octubre de 1872. R.G.L.J., tomo 26, nº 259, p. 194.

Sentencia de 20 de enero de 1879. No se han infringido los artículos 1º y 2º de la ley de 19 de agosto de 1841, sobre supresión de las capellanías, si la citada capellanía no llegó nunca a ser colativa por faltar el requisito de la intervención eclesiástica, que es esencial para la existencia de todo beneficio eclesiástico.

Sentencia de 13 de febrero de 1889. Tiene el concepto de patronato de legos o memorias de misas la fundación en cuya virtud, sin dar intervención a la autoridad eclesiástica, se determinan las personas que pueden ejercer el patronato.

Sentencia de 26 de noviembre de 1891. Asimismo, la jurisprudencia del citado Tribunal distingue entre capellanías meramente eclesiásticas (no familiares) y las de patronato familiar activo o pasivo (capellanías de sangre). La cuestión es importante ya que según a qué clase pertenezcan se les aplicará distinta normativa. Precisamente, a las capellanías laicales, según el Tribunal Supremo, les será de aplicación la normativa desvinculadora (ley de 11 de octubre de 1820), mientras que a las eclesiásticas colativo-familiares, se les aplica la normativa propia de capellanías de sangre (ley de 19 de agosto de 1841) y si no tiene ese carácter, la legislación general desamortizadora (colativas no familiares)⁸⁷⁷. Contempla, incluso, el precitado Tribunal que una capellanía inicialmente laical pase a ser colativa, mediante sentencia de 8 de junio de 1888⁸⁷⁸.

2.4.- Legislación aplicable a las distintas clases de capellanías.

Sentencia 17 septiembre de 1862. Declara cuales son las fundaciones comprendidas en la ley desvinculadora de 1820. Se resuelve que el artículo 4º de la ley de 11 de octubre de 1820, sólo puede tener aplicación a los fideicomisos familiares, y no puede aplicarse a una fundación en que los patronos deben distribuir siempre y perpetuamente las rentas, en un aniversario, memorias de misas, prebendas para estudiantes y dotes para doncellas de las familias del linaje del fundador, que reúnan las circunstancias y condiciones exigidas en la fundación⁸⁷⁹.

⁸⁷⁷ “Considerando que no pueden estimarse los motivos del recurso, porque la capellanía de que se trata, si bien es eclesiástica o colativa, según reconocen las partes, no pertenece a la clase de las denominadas de sangre o de aquellas a cuyo goce están llamadas ciertas y determinadas familias siendo inaplicables, por consecuencia, a la cuestión del pleito, tanto la ley de 19 de Agosto de 1841, que conforme demuestran su espíritu y su letra y todas sus disposiciones se refiere exclusivamente a las fundaciones que tienen el doble carácter de colativas familiares, como la ley de 11 de Octubre de 1820, que sólo puede invocarse con relación a los mayorazgos, fideicomisos, patronatos o cualquier otro vínculo laical, y de ningún modo respecto de una institución o beneficio eclesiástico, como el fundado por doña Teresa Martínez Trujillo, el cual está comprendido en las vigentes leyes desamortizadoras”. Gaceta de 5 de enero de 1892. C.J.C., tomo 70 (1891), pp. 490-494.

⁸⁷⁸ “Considerando que si bien la capellanía, objeto de la cuestión, fue laical en sus primeros llamamientos, sirvió después de título de ordenación, y cambió de naturaleza con arreglo a lo previsto en la misma escritura de fundación, según la cual los que sucedieran en ella podrían ser ordenados in sacris por virtud de la misma, si no tenían otra que fuera colativa”. Gaceta de 11 de septiembre de 1888. C.J.C., tomo 64 (1888), pp. 24-30.

⁸⁷⁹ “Considerando que el artículo 4º de la ley de 11 de octubre de 1820, que sólo puede tener aplicación en los fideicomisos familiares cuyas rentas se distribuyen entre los parientes del fundador, no puede invocarse oportunamente en este pleito, porque según lo ordenado en la fundación, los patronos deben distribuir siempre y precisamente las rentas, en un aniversario, memorias de misas, prebendas para estudiantes y dotes para doncellas de las familias del linaje del fundador, que reúnan las circunstancias y condiciones que por aquélla se exigen”. C.L.E., 1862, nº 205, p. 643.

Sentencia de 22 de marzo de 1866. Si a las denominadas capellanías laicales se las considera un vínculo de tipo regular, no ocurre así con las capellanías colativas, las cuales tienen su propia y específica regulación. Así, la ley de 19 de agosto de 1841 se refiere única y exclusivamente a dicha clase de capellanías⁸⁸⁰.

Sentencia de 15 de abril de 1867. Declara que las disposiciones legales relativas a capellanías colativas no pueden tener aplicación a las laicales o patronatos de legos, sobre las cuales versa el litigio⁸⁸¹.

Sentencia de 4 de julio de 1873. Las capellanías merelegas o puramente laicales se hallan comprendidas en la ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820; y la sucesión en los bienes que las constituyeron debe ajustarse igualmente a las prescripciones de dicha ley⁸⁸².

Sentencia de 23 de julio de 1877. La ley de 19 de agosto de 1841 y su aclaratoria de 15 de junio de 1856, se refieren a capellanías colativas y no pueden aplicarse a las que son laicales o patronatos civiles⁸⁸³.

Sentencia de 18 de mayo de 1878. Los bienes de las capellanías laicales o cualquier otra vinculación civil no se rigen por las leyes desamortizadoras de 1855 y 1856.

Sentencia de 1 de octubre 1892. No son las leyes desamortizadoras, sino las desvinculadoras aquéllas por las que se rigen los bienes de capellanías merelegas.

2.5.- Voluntad del fundador.

Sentencia de 25 de junio de 1860. El que pretenda la adjudicación de los bienes de una capellanía debe reunir los requisitos y cualidades que establezca el fundador⁸⁸⁴.

Sentencia de 14 de abril de 1866. La voluntad expresa del fundador de una capellanía es la ley por la que debe regirse la misma⁸⁸⁵.

⁸⁸⁰ “Resultando que D. Francisco Luis Alegre, como ejecutor de la voluntad de D. Juan José Calvete, y en cumplimiento de lo dispuesto por éste en su testamento de 29 de marzo de 1674 para que se fundara una capellanía meramente laical (...).

Considerando, por último, que asimismo es notoriamente inaplicable, citándose como marcada inoportunidad la ley de 19 de agosto de 1841, que únicamente se refiere a las capellanías colativas”. Gaceta nº 92, de 2 de abril de 1866. R.G.L.J., tomo 13, nº 123, p. 381. C.L.E., 1866, nº 121, p. 464.

⁸⁸¹ “Considerando que son inaplicables al presente caso los artículos de la ley de 19 de agosto de 1841, que según el concepto en que el recurrente los cita, se refiere sin duda a la publicada en ese día con relación a capellanías colativas, que no son objeto de este litigio”. Gaceta nº 110, de 20 de abril de 1867. R.G.L.J., tomo 15, nº 105, p. 385.

⁸⁸² Gaceta de 14 de octubre de 1873. R.G.L.J., tomo 28, nº 118, p. 285.

⁸⁸³ **Gaceta**

⁸⁸⁴ “Considerando que la ley de 19 de agosto de 1841 adjudica los bienes de las capellanías colativas familiares a los individuos de preferente parentesco, según los llamamientos, sin que consigne para suceder en aquellos diferente representación de la establecida por derecho común...” Gaceta nº 180, de 28 de junio de 1860. R.G.L.J., tomo 6, nº 190, p. 477.

⁸⁸⁵ “Considerando que estando conforme con las prescripciones de dicha cláusula, el nombramiento de capellán hecho por el actual poseedor ...

Sentencia de 28 de septiembre de 1869. La adjudicación de una capellanía que no se ajusta a lo dispuesto por el fundador, infringe la voluntad de éste, que es la ley suprema en la materia⁸⁸⁶.

Sentencia de 4 de mayo de 1881. La adjudicación de los bienes de las capellanías colativas ha de sujetarse a los llamamientos hechos por el fundador, cuya voluntad expresa en esta parte es ley porque debe regirse la sucesión.

Sentencia de 9 de enero de 1906. Las cláusulas fundacionales son la primera ley que se ha de observar en una capellanía.

Sentencia de 17 de marzo de 1909. No se puede infringir la voluntad de la fundadora de una capellanía, ley que es preciso respetar en esta clase de instituciones.

2.6.- Prohibición de disponer.

Sentencia de 15 de febrero de 1862. La prohibición de disponer se mantiene aún con plena vigencia leyes desamortizadoras o desvinculadoras. No se puede aplicar la ley de 11 de octubre de 1820 a una capellanía porque su poseedor no era de la familia del fundador, por lo que no se puede disponer de los bienes de la capellanía⁸⁸⁷.

Sentencia de 1 de junio de 1863. Los bienes agregados a una capellanía con aprobación del Diocesano, quedan espiritualizados y forman parte de su dotación, por lo que sigue la permanencia de la prohibición de disponer sobre ese conjunto de bienes⁸⁸⁸.

2.7.- Orden de suceder.

Sentencia de 14 de abril de 1866. Aspecto esencial es el orden de suceder establecido por el fundador y que da permanencia a la institución ya que regula la

Considerando que establecida en dicha Memoria una sucesión electiva (...) no ha sido infringida la doctrina de ser la fundación la ley por la que debe regirse la fundación". Gaceta nº 124, de 4 de mayo de 1866. R.G.L.J., tomo 13, nº 154, p. 474. Véase el punto 2.7 de esta tesis sobre el Orden de suceder.

⁸⁸⁶ *"Considerando que D. Bartolomé de la Fuente, en su memoria testamentaria de 1º de septiembre de 1644, expresó terminantemente que sucediese en su capellanía el pariente suyo más cercano siendo sacerdote, cuyas dos circunstancias concurren en D. Fernando Balsalobre; y que por consiguiente la sala sentenciadora, al declarar que éste no tiene derecho en su estado actual para la sucesión de la referida fundación, ha infringido la voluntad del testador, ley suprema en la materia". Gaceta nº 275, de 2 de octubre de 1869. C.L.E., 1870, nº 48, p. 207.*

⁸⁸⁷ *"Considerando que en la época del restablecimiento de la ley de 11 de Octubre no podía tener su art. 2º aplicación a la capellanía litigiosa, porque su poseedor no era de la familia llamada por el fundador, ni tenía otro carácter que el de un servidor interino, hasta que en ella hubiese un individuo sacerdote, y porque tampoco existía un sucesor inmediato, ni podía atribuirse este carácter a quien no tuviera aptitud para ser capellán". Gaceta nº 52, de 21 de febrero de 1862. R.G.L.J., tomo 7, nº 39, p. 96.*

⁸⁸⁸ *"Considerando que siendo un hecho demostrado en estos autos la agregación de las tierras litigiosas a la capellanía fundada por D. Juan García de la Serrana en 27 de Abril de 1711, y asimismo que dicha agregación fue aprobada por el Consejo de la gobernación eclesiástica de Toledo en providencia de 18 de Mayo del año siguiente, es incuestionable que desde esta fecha quedaron espiritualizadas, formando una parte integrante de la dotación de aquella capellanía, por más que se suscitasen algunas dudas sobre la congrua sustentación, las cuales no podían alterar el carácter y naturaleza que por virtud de la sanción canónica habían recibido". Gaceta nº 155, de 4 de junio de 1863. R.G.L.J., tomo 8, nº 139, p. 382.*

continuidad de la misma como expresión máxima de la voluntad del fundador, ley por la que debe regirse la sucesión⁸⁸⁹.

Sentencia de 28 de septiembre de 1869. La adjudicación de una capellanía que no se ajusta a lo dispuesto por el fundador en cuanto a la sucesión, infringe la voluntad de éste, que es la ley suprema en la materia⁸⁹⁰.

Sentencia de 4 de julio de 1873. La sucesión a una capellanía merelega viene determinada por las reglas establecidas por el fundador y por las leyes, siempre según su naturaleza y con los llamamientos establecidos por el fundador⁸⁹¹.

Sentencia de 13 de diciembre de 1873. Carecen de legitimación para obtener los bienes de una capellanía quienes no justifican su derecho a la sucesión en la misma⁸⁹².

2.8.- Aplicación de la Ley de 19 de agosto de 1841. Derecho preferente en la sucesión.

Sentencia de 22 de marzo de 1866. La ley de 19 de agosto de 1841 se refiere únicamente a las capellanías colativas.

Sentencia de 14 de mayo de 1868. Establece que la ley de 19 de agosto de 1841 adjudica como de libre disposición los bienes de capellanías colativas a los individuos llamados a obtenerla (de preferente parentesco), prefiriendo los que sean de mejor línea y, entre éstos, los de mejor grado⁸⁹³.

Sentencia de 19 de mayo de 1877. Los bienes de una capellanía colativa de patronato activo familiar deben adjudicarse conforme a lo dispuesto por el artículo 4º de la ley de 19 de agosto de 1841, a los parientes llamados a ejercerlo.

Sentencia de 25 de noviembre de 1879, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, en la que el art. 1º debe interpretarse en el sentido de que es necesario que a su goce sean llamadas exclusivamente ciertas y determinadas familias, ya limite el

⁸⁸⁹ “Considerando que existiendo en la escritura que otorgó el Comisario fundando la capellanía, la cláusula de la Memoria que de su puño y letra dejó escrita el poderdante, relativa al nombramiento de Capellanes, la voluntad de aquel, así expresada, es la ley por que debe regirse la sucesión, aunque las disposiciones del Comisario acerca del mismo particular fuesen contrarias a ella”. Gaceta nº 124, de 4 de mayo de 1866. R.G.L.J., tomo 13, nº 154, p. 474.

⁸⁹⁰ “Considerando que D. Bartolomé de la Fuente, en su memoria testamentaria de 1 de septiembre de 1644, expresó terminantemente que sucediese en su capellanía el pariente suyo más cercano siendo sacerdote, cuyas dos circunstancias concurren en D. Fernando Balsalobre, y que por consiguiente la Sala sentenciadora, al declarar que éste (D. Antonio Balsalobre) no tiene derecho en su estado actual para la sucesión de la referida fundación, ha infringido la voluntad del testador, ley suprema en la materia”. Gaceta nº 275, de 2 de octubre de 1869. C.L.E., 1870, nº 48, p. 207.

⁸⁹¹ Gaceta de 14 de octubre de 1873. R.G.L.J., tomo 28, nº 118, p. 285.

⁸⁹² Gaceta de 20 de diciembre de 1873. R.G.L.J., tomo 28, nº 317, p. 670.

⁸⁹³ “Considerando que la ley de 19 de agosto de 1841 adjudica como de libre disposición los bienes de capellanías colativas a los individuos de preferente parentesco, según los llamamientos hechos por el fundador, sin consignar para suceder en ellos reglas especiales para el derecho de representación. Considerando que la misma ley crea determinados derechos a favor de los parientes que con arreglo a la fundación fuesen de mejor línea, y entre los de ésta, aquel o aquellos que fuesen de grado preferente”. Gaceta nº 165, de 13 de junio de 1868. C.L.E., 1869, nº 138, p. 618.

fundador sus llamamientos a determinadas líneas, ya con la determinación genérica de parientes. Pero no se halla en este caso, y está sujeta a la desamortización, la capellanía en cuya fundación se llama a los naturales de un pueblo, aunque en igualdad de circunstancias haya establecido el instituyente que sean preferidos sus parientes.

Sentencia de 26 de noviembre de 1881. Tratándose del mejor derecho a los bienes de una capellanía que, si bien eclesiástica o colativa, no pertenece a la clase de las denominadas de sangre, son inaplicables, tanto la ley de 19 de agosto de 1841 que se refiere a las que tienen el doble carácter de colativas y familiares, como la ley de 11 de octubre de 1820 que sólo puede invocarse en relación a vínculos laicales.

Sentencia de 12 de abril de 1884. Se resuelve que la ley de 19 de agosto de 1841 no reconoce otro título que el del parentesco de mejor línea y grado para la adjudicación de los bienes de capellanías colativas⁸⁹⁴.

2.9.- Capellanías extinguidas.

Sentencia de 11 de febrero de 1886. Se declara que la capellanía cuyos bienes se reclamaron en 1849 es extinguida⁸⁹⁵.

2.10.- Capellanías subsistentes.

Sentencia de 8 de abril de 1881. Con arreglo al artículo 4º de la ley de 24 de junio de 1867, subsisten las capellanías cuyos bienes no hubiesen sido reclamados a la publicación del R.D. de 28 de noviembre de 1856.

Sentencia de 18 de noviembre de 1884. El objeto del litigio trata de una capellanía que debe subsistir según el convenio-Ley de 24 de junio de 1867.

Sentencia de 27 de marzo de 1899. Transmitido el derecho a los bienes de una capellanía con arreglo al artículo 1º de la ley de 15 de junio de 1856, sin haberse pedido su adjudicación dentro de los plazos fijados en el artículo 3º de dicha ley, ni aun después de transcurridos éstos, queda como subsistente la mencionada capellanía, conforme al artículo 4º del Convenio de 24 de junio de 1867.

2.11.- Carácter de la ley de 15 de junio de 1856.

Sentencia de 8 de mayo de 1875. El artículo 5º de la ley de 15 de junio de 1856 se limita a declarar qué clase de fundaciones se considerarán como capellanías de sangre comprendidas en la de 19 de agosto de 1841⁸⁹⁶.

⁸⁹⁴ Gaceta de 3 de septiembre de 1884.

⁸⁹⁵ “Considerando, respecto al primer motivo del recurso interpuesto por el Ministerio fiscal, que reclamados en 2 de octubre de 1849 por D. Antonio del Olmo y D. Sinforiano Ruano, los bienes de la fundación calificándola de capellanía colativa, y promovido entonces litigio en el cual fueron parte otros interesados, es indudable que la capellanía ha quedado extinguida en virtud de lo que establece el art. 3º del Convenio-Ley de 24 de Junio de 1867”. Gaceta de 26 de abril de 1886. M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 5º, Jurisprudencia del Tribunal Supremo, p. 207.

⁸⁹⁶ Gaceta del 16 de julio de 1875.

Sentencia de 14 de marzo de 1876. La ley indicada de 1856, como declaratoria del sentido y eficacia de la de 19 de agosto de 1841, se identifica con ella y produce desde aquella fecha todos sus efectos, como parte integrante de la misma.

2.12.- Competencia de los tribunales civiles y eclesiásticos en asuntos de capellanías.

Sentencia de 16 de diciembre de 1880. No tratándose en unos autos de la adjudicación de bienes de capellanías, sino de la competencia de los tribunales eclesiásticos, la sentencia que la resuelve a favor de éstos no infringe el artículo 10 de la ley de 19 de agosto de 1841 que habla de la competencia de los tribunales civiles.

Sentencia de 25 de febrero de 1882. Según las disposiciones del Convenio-Ley y la Instrucción, de 24 y 25 de junio de 1867, todo lo relativo a la conmutación y libertad de los bienes de las capellanías subsistentes y a la administración de las vacantes, mientras aquélla no tenga cumplido efecto, es de la competencia de los diocesanos, habiéndose reservado tan sólo a la jurisdicción ordinaria por el artículo 36 de dicha Instrucción, la de declarar el mejor derecho de los interesados.

Sentencia de 8 de marzo de 1882. A la jurisdicción ordinaria corresponde solamente declarar el mejor derecho a los bienes de una capellanía, que tengan los interesados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Instrucción para llevar a efecto el Convenio-Ley de 24 de junio de 1867.

Sentencia de 9 de enero de 1890. Corresponde a los tribunales de justicia la decisión de las cuestiones suscitadas entre los interesados, sobre mejor derecho a la adjudicación de los bienes en concepto de libres, una vez hecha la conmutación de rentas y redención de cargas en la forma prevenida⁸⁹⁷.

2.13.- Plazo ejercicio de los derechos sobre los bienes de capellanías.

Sentencia de 13 de abril de 1863. Sobre los bienes de una capellanía, la ley de 15 de junio de 1856, prescribe que si el pariente de derecho preferente no los reclama en el término de veinte años desde la publicación de la ley de 1841, perderá todo derecho y pasará al siguiente en grado, a quien concede otros cuatro años desde que dichos bienes se declararon comprendidos en la ley de 1º de mayo de 1855⁸⁹⁸.

Sentencia de 21 de enero de 1865. La ley de 15 de junio de 1856, aclaratoria de la de 19 de agosto de 1841, sobre adjudicación de capellanías colativas, distingue con manifiesta separación, el caso de que tales bienes no hayan sido aún reclamados por ningún pariente. Dispone el artículo 3º de la citada ley que los interesados que no reclamaron la adjudicación dentro de veinte años, contados desde la publicación de la ley de 19 de agosto de 1841, perderán todo derecho y se transmitirá a los siguientes en

⁸⁹⁷ Gaceta de 5 de abril de 1890.

⁸⁹⁸ “Considerando que la ley de 15 de junio de 1856, prescribiendo que si el pariente de derecho preferente no le reclamase en el término de veinte años desde la publicación de la citada de 1841, le perdiese y pasase al siguiente en grado, a quien concede otros cuatro años desde que dichos bienes se declarasen comprendidos en la ley de 1º de mayo de 1855, asigna plazos convenientes para que en ningún caso pudiera hacerse ilusorio el derecho adquirido o creado”. C.L.E., 1863, nº 78, p. 272.

grado. Que deberán ejercitarlo dentro del término de los cuatro años siguientes, después de los que, los bienes de las capellanías se declaran comprendidos en la ley de 1º de mayo de 1855⁸⁹⁹.

Sentencia de 27 de marzo de 1874. Se establece cómo se entienden los artículos 3º y 4º de la ley de 15 de junio de 1856, aclaratoria de la de 1841. En dichos artículos se establecen dos principios. En el primero se declara el derecho que tienen las personas a quienes alude para reclamar bienes de capellanías no solicitados desde la publicación de la ley de 1841, para que puedan hacerlo dentro de cuatro años desde la publicación de aquella ley, y se refiere el segundo de dichos principios al caso en que los bienes de capellanías hubiesen sido objeto de reclamación y adjudicación, entendiéndose que ésta debe hacerse sin perjuicio de tercero de mejor derecho a los mismos, que solamente podrá ejercitarlo dentro de cuatro años, a contar desde el día de la ejecución⁹⁰⁰.

Sentencia de 28 de marzo de 1874. El plazo de cuatro años fijado por el artículo 4º de la ley de 15 de junio de 1856 para constituir la prescripción y adquirir el pleno dominio de los bienes de capellanías que han sido adjudicados como de libre disposición, se cuenta desde el día de la ejecución de la sentencia y no le han interrumpido las suspensiones acordadas en la observancia de las leyes de capellanías, puesto que todas ellas se concretaban a los asuntos sin resolver, o pendientes de la decisión de los tribunales, mas no a los revestidos con el carácter de cosa juzgada⁹⁰¹.

2.14.- Conmutación de bienes.

Sentencia de 27 de enero de 1882. Refiere a que los interesados no podrán entrar en posesión de los bienes de una capellanía de las declaradas subsistentes, mientras no justifiquen haber hecho la conmutación con arreglo al Convenio-Ley de 1867.

Sentencia de 29 de noviembre de 1883. Se declara que para poseer los bienes adjudicados de una capellanía, es necesario hacer previamente la conmutación de rentas.

Sentencia de 25 de febrero de 1885. No pueden adjudicarse bienes de capellanías sin la previa conmutación⁹⁰².

⁸⁹⁹ “Considerando que la ley de 15 de junio de 1856, aclaratoria de la de 19 de agosto de 1841, sobre adjudicación de capellanías colativas, distingue con manifiesta separación, el caso de que tales bienes no hayan sido aún reclamados por ningún pariente, del en que habiendo verificado su reclamación y adjudicación a favor de alguno, posteriormente reclamado por un tercero, que alegue mejor derecho, disponiendo para el primero de estos casos en su art. 3º, que los interesados que no reclamaron la adjudicación dentro de veinte años, contados desde la publicación de la ley de 19 de agosto de 1841, perderán todo derecho y se transmitirá a los siguientes en grado, que deberán ejercitarlo dentro del término de los cuatro años siguientes, después de los que, los bienes de las capellanías se declaran comprendidos en la ley de 1º de mayo de 1855, y estableciendo para el segundo de dichos dos casos en su art. 4º que todas las adjudicaciones de bienes de capellanías colativas se entienden hechas sin perjuicio de tercero de mejor derecho a los mismos, que solamente podrá ejercitarlo dentro de cuatro años, a contar desde el día de la ejecución”. C.L.E., 1865, nº 16, p. 73.

⁹⁰⁰ Gaceta de 17 de mayo de 1874.

⁹⁰¹ Ibidem.

⁹⁰² “Considerando que por el art. 4º del convenio-ley de 24 de Junio de 1867 se declararon subsistentes las capellanías colativas familiares, cuyos bienes no hubieran sido reclamados a la publicación del real decreto de 28 de Noviembre de 1856, en cuyo caso se halla la de que se trata, aunque debiendo conmutarse los bienes por títulos de Deuda pública en la forma que se determina en dicho convenio ley, y

2.15.- Excepciones a la desamortización.

Sentencia de 17 de febrero de 1881. Según el decreto aclaratorio de 22 de agosto de 1874, es innecesaria la previa declaración administrativa que exige el de 12 de agosto de 1871, cuando se trata de la adjudicación de bienes de capellanías colativas dictadas por los tribunales ordinarios en juicios en que ha sido parte el Ministerio fiscal.

Sentencia de 11 de febrero de 1886. El R.D. de 12 de agosto de 1871, sobre haber sido modificado por el de 22 de agosto de 1874, no prohíbe a los tribunales la admisión y sustanciación de demandas como aquellas a las que se refiere el presente recurso, y sólo contiene una sanción relativa a las inscripciones en el Registro de la Propiedad y a la acción investigadora de la Hacienda pública⁹⁰³.

2.16.- Fundación de nuevas capellanías.

Sentencia de 28 de abril de 1882. Declara que pueden fundarse nuevas capellanías siempre que no sean contrarias a la ley ni a la moral⁹⁰⁴.

2.17.- Prescripción.

Sentencia de 15 de marzo de 1881. No pueden acumularse al tiempo de prescripción para reclamar bienes de capellanías, los plazos en que dejó de estar en vigor la ley de 19 de agosto de 1841.

Sentencia de 19 de diciembre de 1882. Si la sentencia que adjudicó a una persona en propiedad como de libre disposición los bienes de una capellanía, quedó entonces ejecutada, no habiéndose reclamado contra dicha adjudicación dentro de los cuatro años siguientes a la publicación de la ley de 15 de junio de 1856, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de la misma y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es indudable que ha prescrito el derecho de hacer tal reclamación.

2.18.- Subsistencia de leyes después de la publicación del Convenio-Ley de 1867.

en la instrucción para llevarlo a efecto de 25 del mismo mes y año, sin que queden libres los bienes y sus rentas, ni puedan adjudicarse a los individuos de las familias que a ellos tengan derecho hasta tanto que tenga cumplido efecto la conmutación.” M. Álvarez y Gómez, Manual de capellanías..., o.c., Apéndice 2º, Jurisprudencia del Tribunal Supremo, p. 205.

⁹⁰³ M. Álvarez y Gómez, *Manual de capellanías...*, o.c., Apéndice 2º, Jurisprudencia del Tribunal Supremo, p. 207. Gaceta de 26 de abril de 1886.

⁹⁰⁴ “Considerando que la fundación de capellanías colativas no tiene en el día otra restricción que la de convertir los bienes cuando sean inmuebles en inscripciones intransferibles de la Deuda pública, conforme a la letra y espíritu del mismo Concordato, del convenio adicional publicado como ley en 4 de Abril de 1860, del de capellanías colativas de 24 de Junio de 1867, del artículo 26 de la ley de 1º de Mayo de 1855, del 3º de la de 11 de Julio de 1857 y otras disposiciones.

Considerando que la capellanía colativa familiar y de sangre, objeto de este pleito... quedó constituida conforme a las disposiciones antes citadas...

Considerando, por tanto, que la sentencia recurrida al declarar nula y de ningún valor la fundación de dicha capellanía... infringe la voluntad del testador, citada como fundamento del recurso, puesto que debe ser respetada y cumplida por no ser contraria a las leyes ni a la moral, según resulta de los expuesto”. Ibidem, p. 202.

Sentencia de 22 de mayo de 1880. La ley de 19 de agosto de 1841, no sólo estuvo sin vigor desde 1851 a 1855 y desde 1856 a 1867, sino que aquélla quedó entonces subordinada al Convenio de 24 de junio, y no fue restablecida al suspenderse aquél por decreto de 8 de octubre de 1873, ni al acordarse antes el aplazamiento impuesto por orden de 29 de marzo de 1870⁹⁰⁵.

Sentencia de 28 de noviembre de 1881. Como la ley de 15 de junio de 1856 es aclaratoria de la de 19 de agosto de 1841, sus disposiciones forman parte de esta última; no habiendo sido, por tanto, derogadas por el Convenio celebrado con la Santa Sede en 24 de junio de 1867, toda vez que ésta deja subsistente en materia de capellanías la legislación anterior al Concordato de 1851.

⁹⁰⁵ Gaceta de 26 de noviembre de 1880.

CONCLUSIONES

El sentido de estas conclusiones es el de ofrecer una valoración del origen y evolución de las administraciones y obras pías y, en particular, de las capellanías, desde el Antiguo Régimen hasta el Estado liberal decimonónico en España, el cual influyó de forma negativa en el sistema beneficcional de la Iglesia, mediante la transformación de la propiedad religiosa al aplicar un nuevo concepto sobre la misma.

PRIMERA.- Las fundaciones, administraciones, causas u obras pías, surgieron en la Antigüedad como una forma de realizar unos fines concretos de un instituidor que eran imposibles de llevar a cabo por la limitación temporal de la vida humana. En principio eran unos patrimonios dejados fiduciariamente por un fundador para conseguir unos determinados objetivos, reconocidos, posteriormente, por el Ordenamiento jurídico como de interés general. A ello, ya desde su origen, prevaleció su marcado carácter benéfico.

Desde los primeros precedentes de fundaciones pías, como fueron las denominadas fundaciones sepulcrales, en las que se reservaba el derecho de enterrar a los fallecidos en un sepulcro, hasta las administraciones y obras pías cristianas, tuvo que transcurrir un largo periodo de maduración, desde un fin primario funerario hasta llegar a otros fines fundacionales como los religiosos, benéficos o mixtos. Pero la mayor evolución se produjo en la formación de su personalidad jurídica.

Hay quienes sitúan este reconocimiento jurídico en las fundaciones funerarias del Antiguo Egipto, hacia el 2700-2200 a. C. Posteriormente, hubo fundaciones en la Grecia clásica y helenística, manifestación de su propia religión y cultura, a igual que otras civilizaciones de la antigüedad. Hubo fundaciones privadas, tanto funerarias como benéficas y sociales. Las benéficas podían ser también públicas, al ser su ejercicio propio del Estado. Gracias su influencia, Roma también desarrolló diversos tipos de fundaciones, entre las que destacaron las privadas (funerarias y benéficas, a igual que Grecia) y las públicas, dedicadas a fines asistenciales a la población (alimentos). Aquí hubo progresos en la delimitación de las fundaciones, pero las cuestiones jurídicas que planteaban se resolvían a través de un Derecho romano vulgar, propio de la práctica jurídica y ausente de soluciones y conceptos de la jurisprudencia.

Todas ellas carecen de importancia alguna, ya que ninguna civilización ni cultura se planteó hasta la llegada del cristianismo, si las fundaciones eran figuras con personalidad jurídica propia, generadoras de relaciones jurídicas, sino que fueron meros patrimonios afectos a un fin, según la voluntad del fundador.

SEGUNDA.- Con la aparición del cristianismo y su posterior consolidación, se da un gran avance, mediante el establecimiento de las causas pías basadas en un nuevo valor moral: la caridad. En esta primera época, la primitiva Iglesia cristiana no poseía bienes, pero con el tiempo, al reconocerse su personalidad jurídica, comenzó a recoger en su seno un patrimonio, que ya tuvo la impronta de ser de utilidad pública y social, lo que conllevó a fomentar numerosas fundaciones benéficas públicas y privadas, como parte esencial de su misión, así como donaciones caritativas y disposiciones *mortis causa*.

Con el emperador Justiniano, las obras y establecimientos piadosos reciben el nombre de causas pías, que serán el origen de las actuales fundaciones. Dicho término, acuñado en el siglo VI, fuente del Derecho común, tuvo, muy pronto, gran importancia y divulgación en los jurisconsultos de todas las épocas, apareciendo en el Código de Justiniano y en las Novelas, aludiendo a negocios jurídicos como las donaciones, legados y testamentos. Por fin se delimita un verdadero concepto de causa pía: institución formada por masas patrimoniales que un fundador destina a obras de culto y misericordia.

El resultado fue que, a partir del citado término, se construyó por los canonistas el concepto de fundación como persona jurídica, de lo que se puede deducir que las fundaciones y, por ende, los beneficios eclesiásticos y las capellanías, son una aportación propia del cristianismo, como derivación del precepto de la caridad. A partir de entonces, estos institutos se configuran como verdaderas personas jurídicas, sujetos de derecho, con unos determinados patrimonios, independientes y autónomos de sus fundadores.

Ya en la Edad Media, las causas pías son estudiadas por los glosadores y van matizando el término llegando a identificar los testamentos y legados para causas pías como testamentos y legados para la salvación del alma. Se habían colocado los cimientos de lo que serán las fundaciones eclesiásticas que tanto auge tuvieron hasta el siglo XIX, objeto de estudio, las capellanías.

TERCERA.- Una vez fijado el término, se pudo delimitar de una forma más precisa, ya que como figura jurídica, había evolucionado a través de diversas etapas históricas. Interesa el concepto canónico, eliminando una variedad de amalgamas de figuras, para configurar lo que es una fundación, ya sea beneficio o capellanía y que viene definido por tres motivos: obra realizada por amor a Dios, al prójimo y por el bien del alma. Así, concluimos que toda fundación canónica o religiosa que fomente el culto, con fines religiosos, con afectación de un patrimonio cuya finalidad sea velar por el aspecto espiritual del fundador mediante el oficio de misas por su alma se identifica con una capellanía.

CUARTA.- Con la aparición del patrimonio de la Iglesia, hacia el siglo IV, surgieron los primeros esbozos de los que serán los beneficios eclesiásticos. La transformación de la estructura patrimonial de una Iglesia descentralizada, a partir del siglo VII, en el que cada clérigo administró sus bienes que le sirvieron para subsistir, conllevó a la desaparición de la primigenia idea de que el sacerdote debía ser sustentado por la propia Iglesia.

De esta manera, surgieron los beneficios eclesiásticos, cuyos antecedentes remotos hay que buscarlos en la Roma imperial, en la que se concedían predios o tierras a los soldados romanos veteranos como pago a sus servicios. Siguiendo este ejemplo romano, la Iglesia distribuyó predios en precario, a clérigos para que se alimentasen y sirvieran de sustento para su manutención, llamando “beneficios” a dichos predios y a los clérigos que los obtenían “beneficiados”.

Con el tiempo, el beneficio eclesiástico superó su originario sentido técnico de incluir tierras en precario y se amplió a otras adquisiciones producto de las donaciones

de los fieles, como diezmos, primicias y oblaciones. En conclusión, la aparición del beneficio eclesiástico, fue la consecuencia directa de la constitución en cada iglesia de un patrimonio autónomo y estable, la entrega de las iglesias a un clérigo encargado de servir las y que se sustentó con sus rentas, la vinculación que se formó entre el obispo y el clérigo que era designado por el primero y la obligación de este último de cumplir los fines de los bienes beneficiales: atender con los réditos de la iglesia a las necesidades de la fábrica y el culto y el deber de atender a los pobres con una parte de las rentas.

QUINTA.- Ha sido necesario precisar lo que es un beneficio eclesiástico, pues el concepto incluye a las capellanías. Después de un amplio periodo de evolución podemos afirmar que es el derecho perpetuo a percibir las rentas de los bienes eclesiásticos por algún servicio espiritual constituido por la autoridad eclesiástica. En realidad, se percibe una renta fija e inalterable en el tiempo, por lo se caracteriza por un fuerte componente patrimonial y económico.

Dentro de las distintas clasificaciones realizadas por la doctrina de los canonistas, interesa y ha quedado fijado que por razón del oficio espiritual, se encuentran, dentro de los beneficios menores, los simples, cuyo máximo exponente son las capellanías. Tan importante es esta clasificación que en todas las fundaciones encontradas en las que no aparece el término capellanía o se camufla, se hace referencia a un “beneficio simple y perpetuo” para describir la institución de una capellanía.

SEXTA.- Unido a todo beneficio eclesiástico se halla el derecho de patronato, figura de gran importancia. Sin él no se entiende un beneficio y menos una capellanía, ya que para instituirlos se necesita la presentación y la institución. La primera pertenece al patrono, y reside en presentar a una persona para el beneficio vacante; y la segunda, preceptiva y obligatoria, al obispo, y sin ella no se puede obtener el beneficio. Este derecho de patronato consiste en un conjunto de prerrogativas honoríficas, útiles y onerosas que corresponde a una persona, normalmente el fundador. No se comprende una fundación, beneficio o capellanía sin el derecho de patronato, tanto, que si es instituida una persona sin el nombramiento o presentación del patrono, la fundación es nula.

SÉPTIMA.- Dentro del sistema benefical de la Iglesia y habiendo consolidado el origen y concepto de lo que es una fundación (administración, obra) religiosa, teniendo como cimientos los beneficios eclesiásticos, se encuentra una institución de gran importancia que destacó con inusitado vigor en el pasado hasta la llegada de las ideas ilustradas y las reformas del Liberalismo: las capellanías.

En su origen, desechando teorías poco consistentes, eran nichos que se abrían en la fábrica de las iglesias para poder ver las sepulturas de los santos, las cuales estaban pegadas a los muros de los templos cristianos. Más tarde, se hicieron más grandes dichos huecos, convirtiéndose, con el paso del tiempo, mediante la agregación del terreno de las sepulturas a los templos, en altares o capillas donde se celebraron misas. De estas capillas se derivan las instituciones piadosas conocidas como capellanías, por lo que, cabe concluir, que su nacimiento es posterior a la institución de los beneficios, pero se nutren de ellos.

Precisando las voces y términos que utilizan diversas definiciones de lo que es una capellanía, siguiendo a los canonistas, y eliminando conceptos confusos con otras figuras afines, podemos afirmar que es una fundación perpetua en la que una persona, llamada fundador, separa de su patrimonio determinados bienes, mediante acto *inter vivos* (escritura pública) o *mortis causa* (testamento), formando con ello una dote destinada a la manutención de un clérigo a cambio de obligarse a celebrar un determinado número de misas por el alma del fundador y/o de su familia o de las almas de los difuntos, en una iglesia determinada.

Pero aunque son beneficios eclesiásticos hay que diferenciarlas para no incurrir en equívocos. Su distinción estriba en que son fundaciones estrictamente privadas, se atiende a las reglas de la fundación y se conceden a legos (laicos) y a sacerdotes, mientras que el beneficio sólo se puede otorgar a clérigos, no se exige siempre la autoridad eclesiástica en su institución y, para finalizar, el título del beneficio permanece en la Iglesia, mientras que en la capellanía permanece en el fundador y en sus sucesores. En fin, es un oficio, como el beneficio, pero con gran libertad y autonomía de la voluntad del fundador, con normas especiales, que lo distancia de los beneficios sujetos a las reglas del derecho canónico.

Siguiendo la doctrina canónica las capellanías se clasifican en dos grandes grupos: las colativas o eclesiásticas (familiares o de sangre y no familiares) y las laicales. Las primeras son verdaderos beneficios eclesiásticos, al tener la característica de perpetuidad, sus bienes pasan a formar parte del patrimonio de la Iglesia, son eclesiásticos, sirven de título para ordenarse, las disfrutan clérigos), en su fundación interviene la autoridad eclesiástica (colación e institución canónica) y existe una dote aneja al oficio en poder de la Iglesia. Pero si la fundación carece de erección canónica como beneficio, será una capellanía eclesiástica y no colativa (no hay colación, es decir, no hay acto de concesión del beneficio). Las laicales se diferencian de las anteriores en que pueden concederse a legos o laicos, en ellas no interviene la autoridad eclesiástica, los bienes no pasan a formar parte del patrimonio de la iglesia sino que son de propiedad particular y sus bienes pueden enajenarse, lo que no ocurre en las eclesiásticas. En realidad, son verdaderos vínculos. Esta distinción será de capital importancia para la aplicación de las medidas desamortizadoras y desvinculadoras que impondrá el Estado liberal en España.

OCTAVA.- Es claro que dichas fundaciones son instituciones propias de la cristiandad occidental, donde su nacimiento, auge y expansión responden a una época determinada y a un contexto social concreto, fuera de los cuales no tendrían sentido y que desempeñaron un importante papel en la sociedad del Antiguo Régimen. Su antigüedad se remonta hacia el siglo VIII, época en que era frecuente que los reyes y señores fundasen en los lugares de su propiedad iglesias o capillas, dotándolas de uno o más clérigos, que eran denominados capellanes, los cuales percibían una parte de los frutos que se recogían en el término como recompensa por administrar los sacramentos a sus moradores.

Incluso antes de que se les aplicase el nombre de capellanías ya existían muchas fundaciones a las que se las llamaba “legados píos o mandas”, pero que, en realidad, eran verdaderas capellanías, aunque meramente laicales. Las eclesiásticas, en sentido estricto, no se desarrollaron hasta que en el siglo XII, una vez perfeccionados los

beneficios, las corporaciones y los particulares quisieron imitarlos con la erección de capellanías durante los siglos XIII y XIV, que tenían por objeto llenar necesidades espirituales de los fieles y perpetuar la memoria de los instituyentes, asegurando la celebración de misas y sufragios en beneficio de sus almas. Encontramos, por tanto, los primeros orígenes de las capellanías en los legados píos.

En España la piedad de los monarcas y del pueblo multiplicó en gran manera las donaciones y legados a favor de las iglesias y monasterios para sufragios a favor de sus almas, lo que disparó el incremento de las fundaciones de capellanías, aumentando y desarrollándose durante el siglo XIII, simultáneamente con los beneficios, ya entonces completamente definidos tal y como aparecen en la actualidad. En el Reino de Valencia hay constancia de su existencia hacia 1250 y, posteriormente, en el siglo XIV apareció la primera ley civil en España, el Ordenamiento de Alcalá, en la que expresamente se regulaban las capellanías.

NOVENA.- Las capellanías, además de su función religiosa, como acto de piedad y devoción que pretendía, a través de la celebración de misas, acortar la estancia del alma del fundador o de su familia en el Purgatorio y su ingreso en el reino de Dios, tuvieron una importante función económica al consistir en la imposición de un capital en instrumentos financieros o bienes raíces. Dicho patrimonio se invertía o arrendaba, constituyéndose los réditos en una renta del capellán quien, a cambio, se comprometía a celebrar una serie de misas en favor del ánima del fundador. El capital inicial quedaba sujeto al cuidado de un patrono, nombrado, al igual que los capellanes, según las detalladas reglas establecidas en el instrumento de fundación y que normalmente eran familiares o descendientes del fundador. De este modo, se convirtieron en una vía de dotar pensiones a otros miembros de la familia (hijos, sobrinos, nietos, ahijados) es decir, de proporcionarles un medio de vida. Para el clero era la forma de garantizar la subsistencia de muchos de sus miembros y fomentar la vocación sacerdotal. En conclusión, en el ámbito de la economía las capellanías fueron generadoras de capital que se distribuía en la sociedad mediante préstamos con intereses muy reducidos, por lo que fueron un mecanismo financiero auxiliar de reconocida importancia. También fueron una fuente de prestigio social y de influencia en las instituciones del Antiguo Régimen.

Ya desde un principio, se eximió a las capellanías de tributar, en línea de lo que ordenaba, desde antiguo, la legislación española (Fuero Juzgo) que reconocía a la Iglesia un derecho de exención de tributos y cargas, lo que incrementó de forma desmedida el número de fundaciones, siendo una práctica muy difundida en España y que se hizo extensible a las colonias de América. Todo ello hizo que se acumulasen grandes cantidades de bienes raíces en manos de la Iglesia, gracias a las donaciones y dotaciones por los particulares e incluso por los reyes y monarcas, para la fundación de distintas administraciones y fundaciones pías.

Resumiendo, las capellanías y otras obras pías sentaron las bases de su riqueza al tener importantes fuentes de ingresos regulares y realizando préstamos, así como reinvertiendo el capital de dichas donaciones, con lo que se generaron nuevas rentas y posibilitaron la financiación de los mercaderes, campesinos y comerciantes, contribuyendo a mejorar la economía de la época, al ser importantes fuentes de capital,

ayudando en la compra de propiedades, en la mejora de algunas unidades productivas o en la financiación de negocios.

DÉCIMA.- En el Antiguo Régimen la propiedad de la tierra presentaba una estructura profundamente desequilibrada, pues una parte importante del suelo se concentraba en unas pocas manos privilegiadas, y la propiedad, así monopolizada, era una propiedad amortizada e inalienable, apartada del mercado y a resguardo de la penetración del capital usurario. Dicho carácter era propio de los bienes patrimoniales de la Iglesia, a los que se suele reservar precisamente el calificativo de “amortizada”, aplicándose el de “vinculada” a la propiedad en manos de la nobleza. Las dos formas, propiedad amortizada y propiedad vinculada remitían a la misma idea de sujeción de la tierra y de los derechos de propiedad a determinadas instituciones o familias.

El gran patrimonio rústico que la Iglesia detenta a finales del Antiguo Régimen era consecuencia de las donaciones de los reyes, nobles, miembros del clero y pueblo en general. El origen de este ingente patrimonio tiene su origen en las generosas donaciones de tierras y jurisdicciones a la Iglesia en reconocimiento a su apoyo en la Reconquista. Posteriormente, la Iglesia continuó acumulando propiedades a través de las donaciones de los devotos y, a lo largo de los siglos, los monasterios y conventos, los obispos y cabildos, las parroquias y demás instituciones piadosas siguieron allegando cada vez más tierras, que obtenían por donación o por compra. Los fieles se desprendían fácilmente de sus bienes a favor de la Iglesia, bien por motivos religiosos o materiales, para dotar y fundar conventos, beneficios, capellanías, patronatos, aniversarios, legados piadosos y obras pías.

Estas propiedades, una vez en poder de la Iglesia, se regían por leyes particulares que las situaban en una situación privilegiada, al quedar vinculadas indefinidamente a la institución eclesiástica. Estaban protegidas, tanto por la legislación civil como por la eclesiástica, más rígida, ya que prohibía la enajenación de todos sus bienes. Además, lo estipulado privadamente por los fundadores de memorias, capellanías y obras pías, reforzaban la amortización progresiva de la propiedad al prohibir expresamente la venta tanto de los bienes ya poseídos como de los que en adelante entrasen en su poder. Dicha amortización consistía en vincular bienes inmuebles y propiedades en “*manos muertas*”, es decir en los poseedores de fincas en quienes se perpetúa el dominio, por lo que al hallarse prohibida la venta, la propiedad estaba amortizada, sustrayéndola al comercio y a la libre circulación.

La máxima de limitar la propiedad territorial de la Iglesia fue adoptada sucesivamente por los fueros municipales (en Valencia, ya las disposiciones forales, *Furs*, regularon la amortización de bienes eclesiásticos) e incluso en leyes generales posteriores con la obligación de contar con la licencia real para amortizar, pero aún así siguió la acumulación de bienes raíces hasta llegar a la España del siglo XVIII, donde el conflicto social de mayor entidad fue el que implicó a propietarios y labradores arrendatarios en unas tierras propiedad de iglesias, conventos, monasterios, capellanías y mayorazgos.

DÉCIMOPRIMERA.- La quiebra de la propiedad eclesiástica se produjo durante el Siglo de las Luces, donde se atacó la propiedad amortizada y se reclamó la intervención del Estado. En realidad, las pretendidas medidas antiamortizadoras de los

ilustrados descansaban no en un objetivo social ni económico, sino fundamentalmente político y fiscal: hacer frente al pago de los intereses y capitales de una deuda pública estatal desorbitada.

El inicio de la Edad Contemporánea estuvo marcado por dos hechos importantes que afectaron profundamente al sistema establecido. El primero es la independencia americana y el segundo se refiere a la propiedad de la tierra, que estará vigente, con algunas interrupciones, más de un siglo: la desamortización civil y eclesiástica. Hubo varias etapas, comenzando por la desamortización previa de los bienes de la Compañía de Jesús en 1769, la de Godoy, entre 1798 y 1807 y las del rey intruso José Napoleón, para, finalmente, llegar a la gran obra desamortizadora de la revolución liberal del siglo XIX: las desamortizaciones propuestas en las Cortes de Cádiz, el Trienio Liberal y las posteriores de Mendizábal, Espartero y Madoz, a las que habrá que sumar las medidas desvinculadoras que afectaron de lleno a las capellanías laicales.

A lo largo del siglo XIX aparecieron multitud de medidas legislativas sobre las capellanías, hasta el extremo de poder asegurar que en ningún otro período histórico se legisló tan abundantemente sobre las mismas. Los motivos de este exceso y abuso normativo reside en móviles ajenos a las propias fundaciones eclesiásticas, es decir, más que regular las propias capellanías se regularon las consecuencias que para éstas tuvieron los procesos de desvinculación y desamortización de las propiedades. Pero las normas desvinculadoras y desamortizadoras no incidieron en todas las capellanías por igual y ello fue debido a los distintos intereses en juego. Recordando las diferencias esenciales entre capellanías colativas y laicales, las distintas medidas les afectaron de forma muy distinta.

Para comprenderlo, partimos de la diferencia existente entre desvincular y desamortizar, que aunque son términos relacionados no son sinónimos. Mientras la desvinculación concede al titular de una propiedad indisponible la posibilidad de transferir el dominio, la desamortización, en cambio, obliga a realizar esa transferencia. Otra diferencia reside en que mientras la desvinculación afecta a propiedades indisponibles de personas, la desamortización se refiere a la de las de personas jurídicas. La desvinculación transforma el derecho de propiedad pero no enajena dicha propiedad, lo que no ocurre con la desamortización, donde la enajenación es absoluta.

En función de la presencia de unos y otros intereses, las disposiciones que en el siglo XIX afectaron a las capellanías, fueron desvinculadoras o desamortizadoras. Concretamente, a las capellanías laicales les afectó las normas desvinculadoras, lo que se recoge en diversas sentencias del Tribunal Supremo; y a las colativas de patronato eclesiástico, las leyes desamortizadoras. Más compleja fue la cuestión en relación con las capellanías colativas de sangre o familiares, pues las disposiciones de las que fueron objeto no poseían un carácter desvinculador ni desamortizador claramente definido.

DÉCIMOSEGUNDA.- Consideradas las capellanías laicales verdaderas vinculaciones, fueron objeto de ataque con la primera ley desvinculadora del siglo XIX, la de 11 de octubre de 1820, donde se recogía el principio abolicionista planteado anteriormente por los ilustrados y confirmado ahora por los liberales.

A pesar de que, como se ha mencionado, el mandato (artículo primero de la ley) de supresión no incluía de forma explícita a las capellanías, en la práctica se entendió, que también quedaban afectados y desvinculados los bienes de las capellanías laicales, que pasaron a sus poseedores, práctica que luego fue confirmada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El motivo de ello se encuentra en la casi total identidad entre los mayorazgos y las capellanías laicales, pues son equiparadas a aquéllos debido a las semejanzas entre ambos, pues los fundadores dejaban bienes raíces o inmuebles con la obligación de que fueran poseídos por siempre por sus herederos, en la forma y orden establecidos por el fundador. El producto de dichos bienes se destinaba obligatoriamente al cumplimiento de ciertas imposiciones pías, levantando con ello la carga aneja a la fundación. Aquí los poseedores de estos bienes no eran verdaderos propietarios, pues no podían disponer a su voluntad ni, mucho menos, enajenarlos, ya que, en realidad, eran meros poseedores o usufructuarios.

La ley, en conclusión, es bastante confusa y adolece de falta de claridad. Es lo suficientemente oscura lo que da pie a interpretarla de distintas maneras, alcanzando dicha confusión a la doctrina posterior y a los primeros códigos civiles de carácter privado publicados en 1843, los cuales seguían incluyendo en sus artículos tanto normas sobre mayorazgos, capellanías y fideicomisos, como normas desvinculadoras que indicaban su extinción. También es cierto que la derogación y posterior restablecimiento de las leyes desvinculadoras conllevó una errónea interpretación de las mismas, a la vez que fueron tergiversadas de forma continuada, pues no se llegó a comprender con meridiana exactitud cuál había sido la voluntad y el espíritu del legislador.

DÉCIMOTERCERA.- Respecto a las disposiciones desamortizadoras sobre capellanías colativas hay que destacar que las leyes generales desamortizadoras no afectaron a los bienes de dichas capellanías por tener una legislación específica que las exceptuaba de la desamortización, o mejor dicho, dichas leyes, en general, las declararon exceptuadas de la desamortización; pero fueron objeto de especiales leyes y disposiciones. El motivo fue que sobre los bienes dotales de las capellanías convergían, aparte de los intereses de la Iglesia como propietaria o encargada de vigilar por el cumplimiento de las cargas, los de las familias de los fundadores, a quienes no les era indiferente la suerte que podían correr los mismos, pues tenían una expectativa de disfrute sobre dichos bienes o la posibilidad de nombrar a quien debía disfrutarlos.

Con la aprobación de la Ley de 19 de agosto de 1841, se legisló por primera vez sobre las capellanías colativas de sangre, aplicando la desamortización en todas sus consecuencias. Su finalidad fue cambiar la titularidad del dominio sobre los bienes de las capellanías colativas de sangre, pasando a adjudicarse a la familia (o descendientes) del fundador, lo que conllevaba la supresión de las capellanías de sangre y su desaparición del campo del Derecho canónico. Se partía del supuesto de que habían generado escasos bienes a la Iglesia y, a la vez, muchos males al Estado, por lo que sus bienes, propiedad de la Iglesia, debían volver a las familias.

Fue una ley nacida en una época de agitaciones políticas y gobiernos revolucionarios, en la que el Estado se atribuyó facultades que no tenía, con infracción manifiesta de la voluntad del fundador, dando a los parientes, de forma gratuita, lo que aquél quiso consagrar a Dios. Debía haberse respetado esta voluntad como ley suprema y cumplir los deseos manifestados en la escritura de fundación de la capellanía.

En consecuencia, se podría concluir que la Ley de 19 de agosto de 1841 sobre adjudicación de bienes de capellanías colativas y familiares es una norma peculiar, de aspecto propio, ni puramente desvinculadora, ni puramente desamortizadora al contener disposiciones de uno y otro carácter, pero está claro que uno de los motivos de la ley fue el hacendístico, pues sus disposiciones no contribuyeron a disminuir, ni siquiera en cantidad apreciable, la deuda pública. En realidad, el verdadero motivo fue la intención del gobierno de ir conformando una clase de propietarios adeptos a las instituciones, a la causa progresista y al régimen liberal, aunque visto lo investigado, el resultado conseguido fue más bien el contrario, levantándose contra la reforma un gran número de opositores, los cuales tuvieron acogida en el partido político contrario.

DÉCIMOCUARTA.- Las dos leyes, anteriormente citadas, fueron las más importantes e influyentes en materia desamortizadora y desvinculadora sobre las capellanías. Posteriormente, hubo una abundante y compleja legislación, como ya se ha mencionado, sobre las citadas fundaciones, que llevaron a la confusión y desorden en su aplicación y que vulneró reiteradas veces el principio de seguridad normativa: Real Orden de 1847, Concordato de 1851, Real Decreto de 1852, de 1855, Ley y Real Decreto de 1856, Convenio Adicional de 1860, Convenio-Ley de capellanías de 1867, Decreto de 1871 y disposiciones posteriores de 1872, 1873, 1874, 1875, 1893, 1895, para las capellanías colativas; y para las laicales la Ley de 1841, real Decreto de 1843, Ley de 1855 y de 1856. Todo ello, consecuencia de un estado revolucionario hasta el radicalismo, a la vez que conmocionado y anticlerical, con una lucha constante contra la Iglesia, que pugnaba por conservar sus bienes y el Estado, que pretendía apropiarse derechos que no le correspondían, fruto de los bandazos políticos decimonónicos, que provocó graves litigios y enfrentamientos no sólo ante la Iglesia sino también ante los parientes y familiares de las fundaciones extintas.

DÉCIMOQUINTA.- Al final, todos los intentos reformadores del Estado liberal sobre los bienes eclesiásticos, léase beneficios y capellanías, fueron fallidos, ya que no se solucionó la precaria situación de la deuda de la Hacienda Pública, ni hubo una reforma pacífica de la Iglesia, cuya organización era perfecta si la comparamos con la civil y estatal. Pero sí es cierto que la desamortización y la enajenación de la propiedad eclesiástica supuso la creación y el posterior empuje de un nuevo Estado que rompía con todo lo anterior. De una concepción señorial y conservadora del derecho de propiedad se pasó a una concepción liberal que reivindicaba la propiedad plena y liberalizada. Bajo este nuevo concepto de propiedad, ya no cabían instituciones como los beneficios, capellanías y demás fundaciones y obras pías.

La desamortización eclesiástica fue un elemento decisivo, pero no el único, de la desintegración del Antiguo Régimen. Una nueva realidad jurídica, económica, política y social, llevó a la finalización de un sistema estamental a otro liberal mediante una revolución que acabó con un régimen ya agotado, sustituyendo un orden jurídico por otro totalmente dispuesto. Con las leyes desamortizadoras y desvinculadoras no se hizo dicha revolución liberal pero sí que fueron el fundamento para su estallido y posterior cristalización. Con ellas se hizo posible una nueva forma de sociedad, aunque imperfecta, cuyos problemas se arrastrarán, con todas sus deficiencias, hasta la actualidad.

FUENTES

JURÍDICAS Y LEGALES

ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, y T., VIVES GATEELL, J., *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*. Tomo I, Madrid 1972, p. 580.

ALLETZ, P. A., *Diccionario portátil de los concilios* (Traducción: Francisco Pérez Pastor), Madrid, 1772-1782, Tomos I y II.

AUREUM OPUS REGALIIUM PRIVILEGIORUM CIVITATIS ET REGNI VALENTIAE: CUM HISTORIA CRISTIONISSIMI REGIS JACOBI ..., Valencia 1515.

CODEX THEODOSIANUS, ed. G. Weidmanni, Lipsiae 1736-1745.

COLECCIÓN DE PRAGMÁTICAS, CÉDULAS, PROVISIONES, AUTOS ACORDADOS Y OTRAS PROVIDENCIAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL CONSEJO REAL EN EL REINADO DEL SEÑOR DON CARLOS IV, tomo II, Madrid 1805.

COLECCIÓN DE REALES CÉDULAS, DECRETOS Y ÓRDENES DE S. M. EL SEÑOR DON FERNANDO VII, tomo III, Barcelona 1815.

COLECCIÓN DE DECRETOS Y ÓRDENES QUE HAN EXPEDIDO LAS CORTES GENERALES Y EXTRAORDINARIAS, tomo IV, Madrid 1820.

COLECCIÓN DE DECRETOS Y ÓRDENES QUE HAN EXPEDIDO LAS CORTES ORDINARIAS, Tomo V, Madrid 1820.

COLECCIÓN DE LOS DECRETOS Y ÓRDENES GENERALES DE LA PRIMERA LEGISLATURA DE LAS CORTES ORDINARIAS DE 1820 Y 1821. Tomo VI. Madrid 1821.

tomo VII, 1821.

tomo IX, 1822.

Tomo X, 1823.

COLECCIÓN DE LOS DECRETOS Y ÓRDENES GENERALES EXPEDIDOS POR LAS CORTES ORDINARIAS, Madrid 1821, tomo VII.

COLECCIÓN DE LAS LEYES, DECRETOS Y DECLARACIONES DE LAS CORTES Y DE LOS REALES DECRETOS, ÓRDENES, RESOLUCIONES Y REGLAMENTOS GENERALES EXPEDIDOS POR LOS RESPECTIVOS MINISTERIOS,

Tomo XX,

Tomo XXIII, Madrid 1846, segunda edición.

Tomo XXVII, Madrid 1842.

Tomo XXXIII, Madrid 1845.

Tomo XXX, Madrid 1843.

Tomo XXXII, Madrid 1844.
Tomo XXXIV, Madrid 1845.

COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Madrid 1846,
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LXV, Madrid 1855.
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LXIX, Madrid 1856.
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LXX, Madrid 1856.
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LXXVIII, Madrid 1858.
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LXXXV, Madrid 1861.
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo XXX
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo XXXIII,
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo XXXIV
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo XL,
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LV,
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LIX,
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LXV,
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LXVIII,
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LXIX,
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LXX,
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo LXXXIII,
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo XCVII,
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo CVII (1871),
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, Tomo CVIII (1872),
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE ESPAÑA, tomo CIX (1872)

CORPUS IURIS CANONICI, ed. A. L. Richter, Berolini 1839, *Decretum Gratiani*, Pars Prima et Secunda.

CORPUS IURIS CANONICI ACADEMICUM, *Gregorii Papae IX, Decretales, una cum Libro Sexto, Clementinis et Extravagantibus*, Coloniae Munatianae 1757, Tomus Secundus.

CORPUS IURIS CIVILIS, ed. G. Weidmanni, Berolini 1906- 1928.

CORTES DE LOS ANTIGUOS REINOS DE LEÓN Y DE CASTILLA, Real Academia de la Historia, Madrid 1861, tomo I.

DECRETALES D. GREGORII PAPAE IX, Venetiis, 1584, Ed: Apud Magnam Societatem, una cum Georgia Ferrario & Hieronymo Franzino.

DECRETOS DEL REY NUESTRO SEÑOR DON FERNANDO, Madrid 1824, Tomo VIII.

DECRETOS DE LA REINA NUESTRA SEÑORA DOÑA ISABEL II, tomo vigésimo, Madrid 1836
Tomo vigésimo primero, Madrid 1837.

D. F. de P. y D. J. B. S., *Código Civil Español, redactado en vista de los diferentes cuerpos del derecho, y demás leyes decretales y reales órdenes que se han publicado en España hasta nuestros días*, Barcelona 1843.

DIARIO DE LAS ACTAS Y DISCUSIONES DE LAS CORTES. Legislatura de los años 1820 y 1821.

Tomo I, Madrid 1820.

Tomo IV, Madrid 1820.

Tomo V, Madrid 1820.

Tomo VI, Madrid 1820.

DIARIO DE SESIONES DE CORTES, de 30 de octubre de 1834. Estamento de Procuradores del Reino. Madrid 1834, tomo I. (1834-36).

DIARIO DE LAS SESIONES DEL CONGRESO DE DIPUTADOS, Tomo I, Madrid 1841.

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO. Tomo Único, Madrid 1841.

DIARIO DE LAS SESIONES DE CORTES. Estamento de Procuradores. Tomo I, Madrid 1867.

DIARIO DE LAS SESIONES DE LAS CORTES CONSTITUYENTES DE 1854 A 1855, Madrid 1855, tomo III.

DIARIO DE SESIONES DE CORTES. Congreso de los diputados. Legislatura de 1859. Madrid 1860. Tomo I.

DIARIO DE SESIONES DE CORTES. Congreso de los diputados. Legislatura de 1860. Madrid 1884. Tomo I. Tomo V.

DIARIO DE SESIONES DE CORTES. Congreso de los diputados. Legislatura de 1865 a 1866. Madrid 1866. Tomo II.

DIARIO DE SESIONES DE CORTES. Congreso de los diputados. Legislatura de 1866 a 1867. Madrid 1867. Tomo I.

DIARIO DE SESIONES DE CORTES. Senado. Legislatura de 1866 a 1867. Madrid 1867. Tomo único.

DIARIO SESIONES DE LAS CORTES CONSTITUYENTES. Tomo V. Apéndice tercero al número 118. Sesión del lunes 5 julio 1869.

DIARIO DE LAS SESIONES DE LAS CORTES, Congreso de los Diputados, Madrid 1872, Tomos, II, III y V.

EL SACROSANTO Y ECUMÉNICO CONCILIO DE TRENTO, traducido al idioma castellano por Don Ignacio López de Ayala. Agrégase el texto original corregido según

la edición auténtica de Roma, publicada en 1564. Madrid, 1785, Tomos I y II, Traducción:

FERRER Y JOU, N., *Reales Decretos y Órdenes de S. M.*, Madrid 1837.

FORI REGNI VALENTIAE, Ed. de Lambert Palmar, Valencia 1482.

FORMULARIUS LITTERARUM, fol. 65r-66r.

FUERO JUZGO EN LATÍN Y CASTELLANO, cotejado con los más antiguos y preciosos códices, Real Academia Española, Madrid 1815.

FUERO REAL (OPÚSCULOS LEGALES DEL REY DON ALFONSO EL SABIO), Real Academia de la Historia, Madrid 1836.

FUERO VIEJO DE CASTILLA, sacado y comprobado con el ejemplar de la misma obra, que existe en la biblioteca de esta Corte, y con otros Mss., publicarlo con notas históricas y legales los doctores I. Jordán de Asso y del Río y M. de Manuel y Rodríguez, Madrid 1847.

GACETA DE MADRID

Nº 47, de 16 de febrero de 1809.

de 18 de junio de 1856.

de 21 de febrero de 1862

de 4 de junio de 1863

de 30 de septiembre de 1864.

de 20 de abril de 1867

LAS SIETE PARTIDAS DEL SABIO REY D. ALFONSO EL IX, con las variantes de más interés y con la glosa del licenciado Gregorio López, por I. Sanponts y Barba, M. Martí de Eixalá y J. Ferre y Subirana, Barcelona 1843-1844.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL DE 3 DE FEBRERO DE 1881, ampliada anotada y concordada, M. Navarro Amandi, Madrid 1881.

LEYES DEL ESTILO, en *Opúsculos legales del rey Don Alfonso el Sabio*, Real Academia de la Historia, Madrid 1836.

LIBER LICENTIARUM, Doc. 191, fol. 167v; Doc. 157, fol. 156rv; form. Nº 53, fol. 17.

LIBRO ANTIGUO DE BENEFICIOS DE LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA MARÍA. Edición y estudios preliminares de Eduardo Camarero Casas, Instituto Juan Gil Albert, Alicante 1997.

NOVÍSIMA RECOPILACIÓN DE LAS LEYES DE ESPAÑA, dividida en XII libros, mandada formar por el Señor Don Carlos IV, Madrid, 1805.

ORDENAMIENTO DE ALCALÁ (*Ordenamiento de Leyes que D. Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de mil trescientos cuarenta y ocho*) por los doctores I. Jordán de Asso y del Río y M. de Manuel y Rodríguez, Madrid 1847.

MARIÁTEGUI, F., *Reseña histórica de los principales concordatos celebrados con Roma*, Lima, 1856.

PEDREGAL Y CAÑEDO, M., *Textos y comentarios al Código Civil español*, Madrid 1889, Tomo II.

PRONTUARIO DE LAS LEYES Y DECRETOS DEL REY NUESTRO SEÑOR DON JOSÉ NAPOLEÓN I DESDE EL AÑO DE 1808, Madrid 1810, tomo I, pp. 203, 299, 303 y 349: tomo III.

REALES DECRETOS, ÓRDENES Y REGLAMENTOS DEL REY NUESTRO SEÑOR DON FERNANDO VII Y DE LA REINA SU AUGUSTA MUJER. Tomo XVIII, Madrid 1834.

REVISTA GENERAL DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA (RGLJ).

Madrid 1859, tomo XIV.

Madrid 1884, tomo LXIV.

RICHARD, C., L., *Los sacrosantos concilios generales y particulares*, Madrid 1793, tomo III.

ROCA SASTRE, R. M., y DE MOLINA JUYOL, J., *Jurisprudencia registral*, Barcelona 1953, tomo I, pp. 1162-1165.

TEJADA Y RAMIRO, J., *Colección de cánones y de todos los concilios de la Iglesia española*, Madrid 1849, 1854, 1859, Tomos I, III, IV y V.

—*Colección completa de concordatos españoles*, Madrid 1862.

MAGISTERIALES

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA (Ed: Librería Editrice Vaticana), Roma 2007.

DICCIONARIO DE AUTORIDADES, Madrid, 1976, tomo I.

LA SANTA BIBLIA, traducida bajo la dirección de E. Martín Nieto (Ediciones Paulinas), Madrid 1973.

DOCTRINALES

ALCIATO, A., *Opera Omnia*, Basileae 1582, tomo III.

- AZOR, J., *Institutionum moralium*, Coloniae Agrippinae 1608, Libro VII.
- BALDO DE UBALDIS, P., *Comentaría in primun, secundum et tertium Codicis lib.*, Augusta Taurinorum 1576.
- BARBOSA, A., *De officio et potestate episcopi*, Lugduni 1698, pars tertia.
- Iuris Ecclesiastici Universi*, Lugduni 1718. Libro III.
- BERARDI, C. S., *Commentaria in ius ecclesiasticum universum*, Taurini, 1766. Matriti 1744. Segunda Edición. Tomos Primero y Segundo.
- Instituciones de Derecho eclesiástico*, traducción de J. del Camino, Madrid 1791, Segunda Parte, Libro IV.
- CASTILLO DE BOBADILLA, J., *Política de corregidores y señores de vasallos en tiempo de paz y de guerra*, Barcelona 1616, Tomo II.
- CEROLA, T., *Praxis episcopalis*, Coloniae Agrippinae 1680, pars prima, verbum beneficia, fol. 45.
- CORRADO, P., *Praxis beneficiariae*, Coloniae agrippinae 1697.
- COVARRUBIAS Y LEIVA, D., *Operum*, Genevae 1734.
- DE AQUINO, T., *Opera*, Venetiis 1786, Tomo 17.
- DE AZPILCUETA, M., Dr. Navarro, *Apologia libri de redditibus ecclesiasticis*, Antuerpiae 1574.
- Opera Omnia*, Venetiis 1602, tomo II.
- DE LEÓN, A., *De officio capellani*, Neapoli 1635.
- DE LUCA, G. B., *Theatrum veritatis et iustitiae*, Lugduni 1697, Libro XII.
- DE LUGO, J., (hispalensis), *De iustitia et iure*, Lugduni 1642, tomus primus.
- DE MOLINA, L., *De iustitia et iure*, Venetiis 1614.
- De primogeniorum Hispanorum origine, ac natura*, Lyon 1749, Libro I.
- DE MURGA, P., *Tractatus de Beneficiis Ecclesiasticis*, Lugduni 1684.
- DE PITILLAS Y RUESGA, A., *Tratado de medias annatas de los beneficios, préstamos, y capellanías, &*, Alcalá 1698.

DE ROJAS, H., *Tractatus posthumus de incompatibilitate Regnorum ac Maioratum*, Lugduni 1659.

DE ROJAS Y ALMANSA, J. M., *Tractatus unicus de incompatibilitate et repugnantia possidendi plures maioratus*, Madrid 1755.

DE ROYE, F., *De iure patronatus, libro tertio Decretalium*, Andegavi 1667.

DE SALAZAR, P., *De usu et consuetudine*, Francofurti 1600.

DE SEGUSIO, H., Cardenal Ostiense, *Summa Aurea*, Venetiis 1574.

DE SELVA, J., *Tractatus de beneficio*, 1520.

DE TAPIA, E., *Febrero Novísimo o librería de Jueces, Abogados y Escribanos*, Valencia 1828, tomo II.

DEVOTI, J., *Institutionum canonicarum*, Matriti 1833. Libro IV.

DIAGO, F., *Anales del Reyno de Valencia*, Valencia 1613.

ENGEL, L., *Collegium universi iuris canonici*, Venetiis 1723.

FAGNANO, P., *Commentaria in secundam partem primi libri Decretalium*, Coloniae Agrippinae 1681.

— *Commentaria in tertium librum Decretalium*, Coloniae 1705.

FEBRERO BERMÚDEZ, J., *Librería de escribanos, e instrucción jurídica theórico practica de principiantes*, Parte Primera, Tomo Tercero, Madrid 1797.

— *Febrero adicionado o librería de escribanos*, tomo III, parte I, Madrid 1817.

FERRARI, C., *Summa Institutionum Canoniarum*, Parisiis, Romae 1869, Tomo Segundo.

FERRARIS, F. L., *Promtha Bibliotheca Canonica, Juridica, Moralis Theologica*, Montrouge, 1858. Bononiae, Francofurti 1784, Segunda Edición, Tomo Primero. Tomo Segundo. Tomo Séptimo. Tomo Octavo.

FERRER MIGUEL, V., *Suma moral para examen de curas y confesores*, Parte II, Valencia 1779.

GARCÍA, N., *Opera Omnia*, Venetiis 1602, tomo II.

— *Tractatus de beneficiis*, Madriti 1613, Tomo II.

— *Tractatus de beneficiis*, Moguntiae 1614, Tomo I.

- GÓMEZ BAYO, A., *Praxis ecclesiastica et saecularis*, Lugduni 1729.
- GONZÁLEZ, J., *Commentatio ad regulam octavam Cancellariae*, Lugduni 1738.
- GONZÁLEZ TÉLLEZ, M., *Commentaria perpetua in singulos textus quinque Librorum Decretalium Gregorii IX*, Lugduni 1673.
- LAYMAN, P., *Theologia Moralis*, Bambergae 1677.
- Theologiae Moralis*, Venetiis 1730.
- LESIO, L., *De iustitia et iure*, Parisiis 1610.
- LEUREN, P., *Forum Beneficiale*, Coloniae Agrippinae 1704.
- LOPERRAEZ CORVALÁN, J., *Colección diplomática citada en la descripción histórica del Obispado de Osma*, tomo tercero, Madrid 1788.
- LOTERIO, M., *De re beneficiaria*, liber postumus, Romae 1635.
- De re beneficiaria*, Lugduni 1637.
- MANRIQUE, A., *Socorro que el Estado eclesiástico de España, parece podría hacer el Rey ..., en el aprieto de hacienda, en que hoy se halla...*, Salamanca 1624.
- MELGAREJO, P., *Compendio de contratos públicos, autos de particiones, ejecutivos y de residencias*, Madrid 1791.
- MOLINA, L. *De iustitia et iure*, Moguntiae 1602.
- MOSQUER DE BARNUEVO, F., *La Numantina*, Sevilla 1612.
- MOSTAZO, F., *De causis piis in genere, et in specie*, Lugduni, 1733. Segunda Edición. Libro VIII. Tomo Primero.
- OLMOS CANALDA, E., *Inventario de los documentos escritos en pergamino del Archivo de la Catedral de Valencia*, en Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid 1933 (tomo 103) a 1936 (tomo 109).
- ORTIZ DE SALCEDO, F., *Curia eclesiástica*, Madrid 1733.
- PELÁEZ DE MIERES, M., *Tractatus Maioratuum et Meliorationum Hispaniae in quatuor partes digestus*, Granatae 1575.
- PÉREZ DE HERRERA, C., *Discurso del amparo de los legítimos pobres y reclusión de los fingidos*, Madrid 1598.
- PÉREZ DE LARA, A., *De anniversariis, et capellaniis*, Ostii Moguntionorum 1610, Tomo Segundo, libro I.

—*De anniversariis, et capellaniis*, Matriti 1622, Tomo Segundo, libro II, y libro VIII.

REBUFFO, P., *Praxis beneficiorum*, Romae 1595.

REIFFENSTUEL, A., *Theologia moralis*, Venetiis, 1724.

—*Ius Canonicum Universum*, Tomo III, Ingolstadii 1745. Edición Tercera.

—*Ius Canonicum Universum complectens*, volumen III, Parisiis 1866, libro III Decretales.

SCHMALZGRUEBER, F., *Ius Ecclesiasticum Universum*, Romae, 1844. Tomo III. Parte Primera.

SEMPERE Y GUARINOS, J., *Historia de los vínculos y mayorazgos*, Madrid 1805.

— *Historia de las rentas eclesiásticas*, Madrid 1822.

THOMASSINO, L., *Vetus et nova Ecclesiae disciplina*, Venetiis 1730, liber secundus.

—*Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise*, Paris 1717, Parte I.

VALLENSIS (DEL VAULX), A., *De beneficiis, Libri IV*, Mechliniae 1646.

VAN ESPEN, Z. B., *Ius Ecclesiasticum Universum*, Matriti, 1778. Tomo II.

DOCUMENTALES

ARCHIVO CATEDRALICIO DE VALENCIA (ACV).

Pergaminos nº 200, 392, 453, 464, 520, 590, 678, 797, 1320, 1394, 1431, 1610, 1746, 1759, 1898, 2068, 2389, 2954, 3060, 3108, 4109, 5195, 5570, 5670, 6618, 6620, 8186.

Pergaminos nº 026, 067, 077, 272 2ª serie.

Signatura 1556.

Libro de cláusulas testamentarias, vol. 82, fol. 172.

ARCHIVO DIOCESANO DE VALENCIA (ADV).

Sección I, Fondo III, Colaciones de beneficios, Caja 134/1, fol. 5v, 12, 38v. Caja 137/2, fol. 12rv.

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (AGI).

Contratación.

Signaturas 469A,N.1; 920,N.34; 931,N.3; 474B,N.3,R.2; 234,N.2,R.10; 482,N.1,R.1; 922B,N.23; 234,N.2,R.9; 929A,N.11; 931,N.2; 284,N.1,R.2; 930,N.26; 274B,N.1,R.14; 246,N.2,R.1; 527,N.1,R.4; 312A,N.12; 944B,N.3,R.20; 328,N.1,R.4; 349A,N.2,R.16; 365,N.1,R.8; 375A,N.4; 951,N.5; 536,N.1,R.2; 425B,N.2,R.3; 364,N.2; 538,N.7; 535,N.1,R.8; 437,N.3,R.2; 561A,N.1; 418,N.3,R.1; 451A,N.1,R.3; 425B,N.1,R.7;

574,N.20,R.3; 973,N.3,R.5; 462B,N.14; 5583,N.51; 566,N.3; 569,N.2,R.6; 580,N.3 y 583,N.4

ARCHIVO HISTÓRICO DE GANDÍA (AHG).

Archivo de los marqueses de Jura Real, signatures DI 001/47; 006/03; 019/05, 08, 09, 11 y 13; 030/20; 047/01, 02, 11 y 050/23.

ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN)

Sección Nobleza.

Archivo de los condes de Luque, signatures C.21,D.62 y D.82; C.83,D.2; C.117,D.12; C.146,D.6; C.454,D.115; C.455,D.2-3 y C.456,D.26-27,41,43-46.

Archivo de los condes de Priego, signatures C.4,D.67-68; C.6,D.29; C.9,D.2.

Archivo de los duques de Frías, signatures C.236,D.5-6; C.238,D.14 y C.268,D.1-5.

Archivo de los duques de Parcent, signatures; C.23,D.4; C.41,D.5; C.81,D.9; C.90,D.6 y D.15; C.92,D.2; C.93,D.2; C.121,D.4 y C.157,D.14.

Archivo de los señores de Cameros, signature C.1,D.3.

Archivo de los duques de Osuna, signatures C.73,D.1-8; C.42,D.8-19; C.192,D.49; C.339,D.11-16; C.141,D.9, D.64-65 y C.3519,D.154. Ducado de Gandía, signature C.541,D.80-81 y 90).

Archivo de los condes de Alba de Yeltes, signature C.10,D.26-27.

Archivo de los condes de Toreno, signature C.4,D.53.

Archivo de los duques de Baena, signatures C.102,D.2 y C.141,D.1-59.

Protocolos del notario José Todo, 1692, Legajo 1134; 1701. Legajo 1247.

Clero y otros.

Clero Secular, Car.620, N.3 y 667,N.15.

Clero, Huesca, carpeta 652, nº 5.

Clero, Ávila, carpeta 20, nº 8.

Cód. 1439B.

Diversos, 28,N.8; 5662,N.1.

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE MURCIA (AHPM).

Fondo de Santa Clara, pergamino nº 46.

ARCHIVO PARROQUIAL DE ALMUSAFES (SDAP).

Visita Pastoral de 1581.

Visita Pastoral de 1649.

Visita Pastoral de 1733.

Libro *Memorias de Almusafes, 1290-1814* (ca. 1733).

ARCHIVO PARROQUIAL DE AYORA (SDAP).

Libro de Capellanías: *Capellanías que están a cargo del clero de Ayora y otros particulares, año 1795.*

Cubiertas: pergamino.

Fechado en 1795.

“Memoria de las capellanías fundadas e instituidas en esta santa iglesia de la villa de Ayora y de los capellanes y misas que tienen obligación; conforme a la reducción hecha en el año 1597 por el señor Don Jusepe Estevan, obispo de Origuella”.

Cubierta: sin cubiertas.

Fecha: 1597-1660.

Libros de Visitas Pastorales.

Fechas:

1595-1628. Foliado, con 352 folios. Cubiertas: pergamino.

1637-1684. Foliado, con 349 folios. Cubiertas: pergamino.

1690-1732. Foliado, con 377 folios. Cubiertas: pergamino.

1734-1927. Foliado, con 423 folios. Cubiertas: pergamino.

Libros Racionales.

Fechas:

De 1567 (s/f), 1572 (s/f), 1582-1585 (s/f), 1591-1592 (s/f), 1596 (s/f), 1605 (s/f), 1606 (s/f), 1607 (s/f), 1608-1614 (s/f), 1612 (s/f), 1618 (s/f), 1621 (s/f), 1623 (s/f), 1625 (s/f), 1626 (s/f), 1630 (s/f), 1632 (s/f), 1634 (s/f), 1637 (s/f), 1640 (s/f), 1641 (s/f), 1644 (s/f), 1646 (s/f), 1649 (s/f), 1653 (s/f), 1654 (s/f), 1655 (s/f), 1656 (s/f), 1657 (s/f), 1658 (s/f), 1659 (s/f), 1660 (s/f), 1662 (s/f), 1665 (foliado), 1666 (foliado), 1667 (foliado), 1668 (foliado), 1669 (foliado), 1672 (foliado) y 1723 (foliado).

ARCHIVO PARROQUIAL DE COCENAINA

Libros de Visitas Pastorales de 1726, fol. 65r; de 1742, fol. 112v y de 1780, fol. 83v)

ARCHIVO PARROQUIAL DE DENIA

Libros de Visitas Pastorales de 1676; 1687, fol. 165r; 1699, fol. 82r, 86r-91v y de 1725, fol. 172r).

ARCHIVO PARROQUIAL DE VILLAR DEL ARZOBISPO

Libro de Visitas Pastorales de 1726, fol. 59v-68v y de 1731, fol 15v.

ARCHIVO PARROQUIAL DE VALL D'EBO

Libro de los papeles concernientes a la fundación de la capellanía o patrimonio que fundó José Frau, mayor, baxo la invocación de Jesús, María y Josef [aprobada por el Ordinario en 25 de Setiem. de 1801] en este Valle de Ebo.

ARCHIVO DEL REINO DE VALENCIA (ARV).

Justicia Civil, Manaments i Empars, 1606, Libro 3, mano 28, fols. 32r-49v y 1612, Libro 4, mano 38, fols. 12r-34v.

Protocolos de los notarios Aparici Lappart, 1325, signatura 2855, sin foliar; Bernat Costa, 1336, signatura 2801, sin foliar; Pere Fraella, 1338, signatura 2807, sin foliar; Domingo Molner, 1350, signatura 4317, sin foliar.

Protocolos de los notarios Vicente Ignacio de Attucha, 1792, signatura 4867, fols. 40r-45v; Carlos Borja, 1701, signatura 4496, sin foliar; Jacques Furió, 1799, signatura 6278, fols. 222v-235v y Timoteo Ferriz, 1799, signatura 5711, fols. 156v-158v.

Protocolos de los notarios José Fabra, 1782, signatura 5627, fols. 343v-349v; 1759, signatura 5604, fols. 29v-30v, 136v-137r y 236v-245v; José Carnicer, 1767, signatura

5225, fols. 47r-54r; José Vicent, 1765, signatura 8128, fols. 107r-109r; Timoteo Giberto, 1739, signatura 5904, fols. 48r-53r.

Propiedades Antiguas. Legajos 17, 35 y 66.

Clero, Trinidad, legajo 320, caja 853, nº 11.

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA (RAH).

Colección Salazar y Castro, signaturas 9/285 (fols.151-156 y 239-240), 9/289 (fols. 263-265) y 9/291 (fols. 176-185, 188-192 y 202-206).

Índice de la Colección Salazar y Castro, M-8 (nº 47017); D-10 (nº 20122), M-131 (nº 58004), I-40 (nº 36904); Legajo 21, carpeta 5, nº 2 (nº 76237).

UNIVERSIDAD DE SEVILLA (US).

Biblioteca. Fondo Antiguo, legajo 609-07.

PERIÓDICOS. BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (BNE. Hemeroteca digital).

1820

El Censor, Periódico político y literario, nº 5, de 2 de septiembre.

Miscelánea de Comercio, Artes y Literatura, nº 85, de 15 de mayo.

Miscelánea de Comercio, Política y Literatura, nºs 172 y 173, de 19 y 20 de agosto.

Mercurio de España, de noviembre.

1821

El Universal, nº 94, de 4 de abril.

Miscelánea de Comercio, Política y Literatura (Suplemento), nº 401, de 4 de abril.

Diario de Madrid, nº 140, de 30 de mayo.

El Universal, nº 200, de 19 de julio.

Nuevo diario de Madrid, nº 266, de 19 de julio.

El Universal, nº 222, de 10 de agosto.

1822

El Universal, nº 97, de 7 de abril.

El Espectador, nº 358, de 7 de abril.

1834

El Eco del Comercio, nº 179, de 26 de octubre.

El Eco del Comercio, nº 182, de 29 de octubre.

La Revista Española, nº 375, de 29 de octubre.

El Eco del Comercio, nº 184, de 31 de octubre.

1836

El Español, nº 108, de 16 de febrero.

El Eco del Comercio, nº 754, de 23 de mayo.

1839

El Eco del Comercio, nº 1713, de 8 de enero.

1840

El Eco del Comercio, nº 2180, de 19 de abril.

El Católico, nº 53, de 22 de abril.

1841

El Católico, nº 399, de 3 de abril.

El Eco del Comercio, nº 2529, de 3 de abril.

El Eco del Comercio, nº 2633, de 16 de abril.

El Católico, nº 503, de 16 de abril.

El Católico, nº 535, de 17 de agosto.

El Eco del Comercio, nº 2601, de 17 de agosto.

El Espectador, nº 23, de 23 de agosto.

El Católico, nº 545, de 27 de agosto.

El Eco del Comercio, nº 2711, de 3 de octubre.

El Eco del Comercio, nº 2767, de 28 de noviembre.

1842

El Católico, nº 867, de 15 de julio.

1843

El Católico, nº 1110, de 15 de marzo.

El Eco del Comercio, nº 197, de 16 de marzo.

El Espectador, nº 591, de 16 de marzo.

1844

El Católico, nº 1462, de 16 de marzo.

La Esperanza, nº 32, de 15 de noviembre.

El Católico, nº 1739, de 31 de diciembre.

1851

El Católico, nº 3855, de 20 de octubre.

La Esperanza, periódico monárquico, nº 2156, de 20 de octubre.

El Heraldo, periódico político, religioso, literario e industrial, nº 2898, de 21 de octubre.

1854

El Católico, nº 4651, de 5 de agosto.

La Iberia, nº 43, de 6 de agosto.

1855

La Iberia, nº 210, de 21 de febrero.

La Esperanza, nº 3224, de 23 de abril.

1856

La Discusión, nº 233, de 2 de diciembre.

La Iberia, nº 727, de 5 de diciembre.

1857

La Esperanza, nº 3874 de 6 de junio.
La Restauración, nº 91, de 8 de junio.

1858

La Esperanza, nº 4084, de 10 de febrero.
La Esperanza, nº 4123, de 27 de marzo.

1859

La Época, nº 2998, de 14 de enero.
El Clamor público, de 15 de enero.
La Discusión, nº 889, de 15 de enero.
La España, nº 3813, de 15 de enero.

1860

La Iberia, de 18 de enero.
La Esperanza, nº 4686, de 24 de enero.
La Esperanza, nº 4791, de 30 de mayo.
El Clamor Público, nº 4884, de 10 de junio.

1861

La Correspondencia, nº 899, de 28 de febrero.
La Esperanza, nº 5024, de 28 de febrero
La Iberia, nº 2016, de 1 de marzo.

1862

La Esperanza, nº 5453, de 22 de julio.

1864

La Esperanza, nº 6000, de 28 de abril.

1866

La Correspondencia de España, nº 2971, de 21 de marzo.
La Época, nº 5562, de 21 de marzo.

1867

El Imparcial, diario político de la tarde, de 28 de abril.
La Época, periódico político diario, nº 5946, de 28 de abril.
El Imparcial, de 23 de mayo.
La Esperanza, periódico monárquico, nº 6948, de 25 de mayo.
La España, nº 6402, de 28 de mayo.

1869

El Imparcial, diario liberal de la mañana, de 5 de marzo.
El Imparcial, diario liberal de la mañana, de 12 de junio.
La Época, periódico político y literario, nº 6612, de 12 de junio.
La Discusión, diario democrático, nº 211, de 11 de junio.

1871

La Correspondencia de España, diario universal de noticias, nº 5289, de 21 de mayo.

La Correspondencia de España, nº 5008, de 13 de agosto.
La Época, periódico político y literario, nº 7368, de 13 de agosto.
Diario oficial de avisos de Madrid, nº 226, de 14 de agosto.
El Imparcial, diario liberal, de 14 de agosto.
La Discusión, diario democrático, nº 870, de 15 de agosto.
La Iberia, diario liberal, nº 4553, de 15 de agosto.
La Esperanza, periódico monárquico, nº 8251, de 9 de octubre.

1872

La Correspondencia de España, diario universal de noticias, nº 5289, de 21 de mayo.
El Imparcial, diario liberal, nº 1842, de 6 de julio.
La Época, periódico político diario, nº 7271, de 11 de agosto.
La Discusión, diario democrático, nº 1218, de 4 de octubre.
La Esperanza, periódico monárquico, nº 8570, de 29 de octubre.
La Esperanza, periódico monárquico, nº 8571, de 30 de octubre.

JURISPRUDENCIALES

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 27 de marzo de 1847.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 25 de junio de 1860. Gaceta de 28 de junio de 1860. R.G.L.J., tomo 6, nº 190, p. 477.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 24 de octubre de 1861. Gaceta de 28 de octubre de 1861. R.G.L.J., tomo 6, nº 249, p. 615.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 15 de febrero de 1862. Gaceta de 21 de febrero de 1862. R.G.L.J., tomo 7, nº 39, p. 96.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 17 septiembre de 1862.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 13 de abril de 1863. C.L. nº 78.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 1 de junio de 1863. Gaceta de 4 de junio de 1863. R.G.L.J., tomo 8, nº 139, p. 382.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 24 de septiembre de 1864. Gaceta de 30 de septiembre de 1864, nº 274. R.G.L.J., tomo 10, nº 259, p. 100.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 21 de enero de 1865.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 22 de marzo de 1866. Gaceta de 2 de abril de 1866. R.G.L.J., tomo 13, nº 123, p. 381.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 14 de abril de 1866. Gaceta de 4 de mayo de 1866. R.G.L.J., tomo 13, nº 154, p. 474.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 15 de abril de 1867. Gaceta de 20 de abril de 1867. R.G.L.J., tomo 15, n° 105, p. 385.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 14 de mayo de 1868. Gaceta de 13 de junio de 1868. C.L.E., 1869, n° 138, p. 618.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 28 de septiembre de 1869. Gaceta de 2 de octubre de 1869. C.L.E. 1870, n° 48, p. 207.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 4 de octubre de 1872. Gaceta de 14 de octubre de 1872. R.G.L.J., tomo 26, n° 259, p. 194.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 4 de julio de 1873. Gaceta de 14 de octubre de 1873. R.G.L.J., tomo 28, n° 118, p. 285.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 13 de diciembre de 1873.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 27 de marzo de 1874. Gaceta de 17 de mayo de 1874.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 28 de marzo de 1874. Gaceta de 17 de mayo de 1874.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 8 de mayo de 1875. Gaceta de 16 de julio de 1875.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 14 de marzo de 1876

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 19 de mayo de 1877.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 23 de julio de 1877. Gaceta de SALA 1^a tomo II, p. 189.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 18 de mayo de 1878.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 20 de enero de 1879.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 22 de mayo de 1880. Gaceta de 26 de noviembre de 1880.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 16 de diciembre de 1880

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 17 de febrero de 1881. Gaceta de

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 15 de marzo de 1881. Gaceta

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 8 de abril de 1881.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 4 de mayo de 1881.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 26 de noviembre de 1881.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 28 de noviembre de 1881.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 27 de enero de 1882.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 25 de febrero de 1882.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 8 de marzo de 1882.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 28 de abril de 1882. C.J.C., tomo 49 (1882), pp. 97-101.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 19 de diciembre de 1882.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 29 de noviembre de 1883. Gaceta de 29 de noviembre de 1883.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 12 de abril de 1884. Gaceta de 3 de septiembre de 1884.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 18 de noviembre de 1884.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 25 de febrero de 1885.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Sentencia de 11 de febrero de 1886. Gaceta de 26 de abril de 1886.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Sentencia de 8 de junio de 1888. Gaceta de 11 de septiembre de 1888. C.J.C., tomo 64 (1888), pp. 24-30.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de 13 de febrero de 1889.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 27 de marzo de 1899.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 9 de enero de 1890. Gaceta de 5 de abril de 1890.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de 26 de noviembre de 1891 Gaceta de 5 de enero de 1892. C.J.C., tomo 70 (1891), pp. 490-494.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Sentencia de 1 de octubre 1892.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de 11 de diciembre de 1897. Gaceta de 7 de enero de 1898. C.J.C., tomo 83, 1898, pp. 383-386.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Gacetas de 2 y 3 de enero de 1905. C.J.C., tomo 99 (1904), pp. 527-557.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de 9 de enero de 1906. Gaceta de 21 de enero de 1906.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de 17 de marzo de 1909.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de 3 de junio de 1910. Gacetas de 28 y 29 de septiembre. C.J.C., tomo 118 (1910), pp. 327-341.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILER SILLER, C., *Fundaciones, capellanías y causas pías en el patrimonio de la Iglesia*, en Asociación Española de Canonistas, *Instituciones canónicas y reordenación jurídica*. III Jornadas de Derecho Canónico, Salamanca 1979.

AGUIRRE, J., *Curso de disciplina eclesiástica general y particular de España*, Madrid, 1857 2ª edición, Tomo III.

ÁLVAREZ Y GÓMEZ, M., *Manual de capellanías y pías memorias*, Vitoria, 1903.

ANDRÉS, ABATE, *Diccionario de Derecho Canónico* (Traducción: Isidro de la Pastora y Nieto), Madrid 1847, Tomo I.

ALDEA VAQUERO, Q., MARÍN MARTÍNEZ, T., y VIVES GATEELL, J., *Diccionario de historia eclesiástica de España*, Madrid 1972. Tomo I. (R. Olachea: Concordato de 1753).

ÁLVAREZ MARTÍNEZ, C., *Instituciones de Derecho civil*, Valladolid 1840.

ANTEQUERA, J. M., *La desamortización eclesiástica considerada en sus diferentes aspectos y relaciones*, Madrid 1885.

ANTÓN SOLÉ, P., *La Iglesia gaditana en el siglo XVIII*, Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones, Cádiz 1994.

ARANDA MENDÍAZ, M., *El hombre del siglo XVIII en Gran Canaria. El testamento como fuente de investigación histórico-jurídica*, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones, Las Palmas de Gran Canaria 1993.

ARANGIO RUIZ, V., *Instituzioni di diritto romano*, Napoli 1937.

ARDIT LUCAS, M., *Els homes i la terra del País Valencià (segles XVI-XVIII)*, Barcelona 1992, Volum I.

ARRAZOLA Y GARCÍA, L., *Enciclopedia española de derecho y administración o nuevo teatro universal de la legislación de España e Indias*, Madrid 1853, Tomo VII.

ARTOLA GALLEGO, M., *Antiguo Régimen y revolución liberal*, Barcelona 1979.

ARROYO VOZMEDIANO, J., *Iglesia, poder municipal y fundación de capellanías en Calahorra (1600-1710)*, en *Revista de Historia Moderna*, nº 26, *Anales de la Universidad de Alicante*, Alicante 2008.

—*Capellanías de la vicaría de Viana*, en *Cuadernos del Marqués de S. Adrián: Revista de Humanidades*, nº 5, UNED, Madrid 2007.

ATIENZA LÓPEZ, A., *La apropiación de patronatos conventuales por nobles y oligarcas en la España Moderna*, en *Revista de Investigaciones Históricas*, nº 28, Valladolid 2008.

AZAGRA ROS, J., *La desamortización de Godoy en Valencia (1799-1807)*, Valencia 1986.

BADENES GASSET, R., *Las fundaciones de Derecho Privado. Doctrina y textos legales*, Barcelona 1977.

BARRIENTOS MÁRQUEZ, M. del M., *La fortuna y muerte. Andaluces en América en la primera mitad del siglo XVIII*, Universidad de Cádiz, Cádiz 2003.

BARRIO GOZALO, M., *El sistema benefical en la España del siglo XVIII. Pervivencias y cambios*, Cuadernos dieciochescos, 2, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca 2001.

—*El Clero en la España moderna*, Córdoba 2010.

—*La propiedad eclesiástica en la España del Antiguo Régimen*, en AA.VV., *Historia de la propiedad en España, siglos XV-XX*, Salamanca 1998.

BAUTISTA, M., “¿Qué es la Pastoral de la Salud?” Buenos Aires 1996.

BENEYTO BERENGUER, R., *Fundaciones sociales de la Iglesia Católica. Conflicto Iglesia-Estado*, Valencia 1996.

BENÍTEZ DE LUGO, F., *Apuntes sobre capellanías*, Madrid 1907.

J. BENTHAM, J., *Teoría de las penas y de las recompensas*, París 1826.

BERGIER, ABATE, *Diccionario de Teología*, traducción de A. Monescillo, Madrid 1846, tomo III,

A. BESÓ ROS, A., *Una parroquia de la diócesis Valentina: la Asunción de Nuestra Señora de Torrent (siglos XIII-XX)*, Valencia 1994.

BIONDI, B., *Il diritto romano cristiano*, II, Milano 1952.

BONFANTE, P., *Instituciones de Derecho Romano*, Madrid 1959.

BOSCH CARRERA, A., *Antecedentes históricos de las fundaciones*, en AA.VV., *Tratado de Fundaciones*, Barcelona 2007, vol. 1.

BLANCH NOUGUÉS, J. M., *La responsabilidad de los administradores de las piae causa en el Derecho romano justiniano*, RIDA, 49, Bruxelles 2002.

—*Régimen jurídico de las fundaciones en Derecho Romano*, Madrid 2007.

BRAVO, E., *Examen de la última ley sobre capellanías colativas*, en La Justicia, tomo II, Madrid 1867.

BRAVO Y TUDELA, A., *El derecho vigente sobre capellanías colativas de sangre*, Madrid 1879.

BRINES BLASCO, J., *Reforma agraria y desamortización en la España del siglo XIX*, Estudis, Revista de Historia Moderna, nº 7, Valencia 1978.

BRUCK, E., *Les facteurs moteurs de l'origine et du développement des fondations grecques et romaines*, RIDA, 2, Bruxelles 1955.

BUENO SALINAS, S., *La noción de persona jurídica en el derecho canónico*, Barcelona 1985.

CABRA DE LUNA, M., *Las fundaciones y la sociedad civil*, Madrid 1992.

CALLAHAN, W. J., *Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874*, San Sebastián 1989.

CALDERÓN Y SANABRIA, D., *Examen analítico-legal de los bienes vinculados y de su supresión*, Cádiz 1847, tomos I y II.

CAMBRONERO, M. M^a., *La institución de los mayorazgos, examinada histórica y filosóficamente, con un proyecto de ley para su reforma*, Madrid 1820.

CAMPOS Y PULIDO, J. M., *Las capellanías colativas en España*, Madrid 1910.

—*Legislación y jurisprudencia canónica novísima y disciplina particular de España*, Madrid 1917, tomo III.

CANGA ARGÜELLES, J., *Memoria sobre el crédito público*, Madrid 1820.

CÁRCEL ORTÍ, M^a. M., *Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas*, Valencia 1989.

CÁRCEL ORTÍ, V., *Historia de la Iglesia en la España contemporánea (siglos XIX y XX)*, Madrid 2002.

—*Un formulari i un registre del bisbe de València Jaume d'Aragó (segle XIV)*, Valencia 2011.

CARO BAROJA, J., *Las formas complejas de la vida religiosa (siglos XVI y XVII)*, Madrid 1985.

CASTÁN TOBEÑAS, J., *Derecho Civil español, común y foral*, Madrid 1978, tomo VI (derecho de sucesiones), volumen tercero.

—*Derecho Civil español, común y foral*, Madrid 1987, tomo II, volumen primero.

CASTRO PÉREZ, C., CALVO CRUZ, M., y GRANADO SUÁREZ, S., *Las capellanías en los siglos XVII-XVIII a través del estudio de su escritura de fundación*, Anuario de Historia de la Iglesia, volumen XVI, Pamplona 2007.

CATALÁ SANZ, J. A., *Rentas y patrimonios de la nobleza valenciana en el siglo XVIII*, Madrid 1995.

CAVALLARIO, D., *Instituciones del derecho canónico*, Madrid, 1850. Edición Tercera. Tomo II.

CLAVERO SALVADOR, B., *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369-1836)*, Madrid 1974.

COCQUERILLAT, D., *Les prébendes patrimoniales dans les temples à l'époque de la premier dynastie de Babylone*, Revue International des Droits de l'Antiquité, 2, Bruxelles 1955.

DE AZCÁRATE MENÉNDEZ-MORÁN, G., *Ensayo sobre la historia del Derecho de propiedad y su estado actual en Europa*, Madrid 1880, tomo II.

DE BOFARULL Y MASCARÓ, P., *Los condes de Barcelona vindicados y cronología y genealogía de los reyes de España*, Barcelona 1836, Tomo I.

DE CÁRDENAS ESPEJO, F., *Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España*, Madrid 1873, II.

DE CASAS Y MORAL, A., *Recopilación concordada y comentada de la Colección Legislativa de España*, Granada 1857, tomo I.

DE CASTRO Y BRAVO, F., *Sobre la pretendida validez de las fundaciones familiares*, en Anuario de Derecho Civil (ADC), Vol. 6, nº 3, Madrid 1953.

DE HUESCA, R., *Teatro histórico de las iglesias del Reino de Aragón*, Zaragoza 1807, tomo IX.

DE JOVELLANOS, G. M., *Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley Agraria*, Madrid 1795.

DE LORENZO GARCÍA, R., *El nuevo derecho de las fundaciones*, Madrid 1993.

DE REINA, V., *El sistema benefical*, Pamplona 1965.

DE SALAZAR Y CASTRO, L., *Historia genealógica de la Casa de Lara*, Madrid 1696, tomo I.

DE SANDOVAL, P., *Chronica del ínclito emperador de España D. Alonso VII*, Madrid 1600.

DE VISSCHER, F., *Les fondations privées en droit romain classique*, RIDA, 2, Bruxelles 1955.

DE VISSCHER, F., y PAOLI, U. E., *Fondazione (diritto greco)*, Torino 1968.

DE LA FUENTE, V., *Historia eclesiástica de España*, Barcelona 1855, tomo III.

DE LA RIPIA, J., *Práctica de testamentos y modos de suceder*, Madrid 1718.

DANVILA, M., *El libro de la Propiedad*, Valencia 1857.

DEZINGER, H. J., *Enchiridion Symbolorum el Definitionum*, Wirceburgi 1854.

DONOSO, J. *Instituciones de derecho canónico americano*, París 1852. Tomo III.

D'ORS Y PÉREZ-PEIX, A., *Derecho privado romano*, Pamplona 1991.

EGIDO, T., *El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII*, en *Historia de la Iglesia en España*, Madrid 1979, vol. IV.

ESCRICHE MARTÍN, J., *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*, París 1851. Tomos II y III.

FALGUERA Y PUIGURIGUER, F. M., *Formulario de notarías*, Barcelona 1836.

FATJÓ GÓMEZ, P., *La beneficencia eclesiástica en la Barcelona del siglo XVII: la Pía Almoina, 1655-1669*, Tesina de Licenciatura, Pedralbes, Revista de Història Moderna, Universitat de Barcelona, Barcelona 1984.

FEBRER ROMAGUERA, M. V., *Dominio y explotación territorial en la Valencia foral*, Valencia 2000.

FEENSTRA, R., *Le concept de fondation du droit romain classique jusqu'à nos jours: théorie et pratique*, Revue Internationale des Droits de l'Antiquité, Bruxelles 1956.

—*L'histoire des fondations. À propos de quelques études récentes*, Revue d'Histoire du Droit 24, La Haye 1956.

FERNÁNDEZ BULETE, V., *Hombres de Cádiz en Indias (1699-1702) a través de los bienes de difuntos*, Anales de la Universidad de Cádiz, Cádiz 1988-89.

FERNÁNDEZ CONDE, F., *La religiosidad medieval en España. Plena Edad Media (siglos XI-XIII)*, Oviedo 2000.

FERRAGUD DOMINGO, C., *El naixement d'una vila rural valenciana: Cocentaina, 1245-1304*, Valencia 2003.

FERRARA, F., *Teoría de las personas jurídicas*, Madrid 1929, (reed. Granada 2006).

FLÓREZ, E., *España sagrada*, Madrid 1771, tomo XXVI, apéndice XVI, fol. 472-474. Apéndice XVIII.

FONTANA LÁZARO, J., *Desamortización eclesiástica y reforma agraria liberal (España)*, en AA. VV., *De la Iglesia al Estado. La desamortización de bienes eclesiásticos en Francia, España y América Latina*, Monografías de historia rural, Zaragoza 2009.

FRANCO Y ORTIZ, J. M. y BRAVO Y TUDELA, A., *Novísima legislación comentada sobre capellanías colativas de sangre y fundaciones análogas*, Madrid 1868.

FRIERA ÁLVAREZ, M., *La desamortización de la propiedad de la tierra en el tránsito del Antiguo Régimen al Liberalismo (la desamortización de Carlos IV)*, Gijón 2007.

FUENTESECA, P., *Lecciones de historia del derecho romano*, Madrid 1978.

GARCÍA-ABASOLO, A., *Inversiones indianas en Córdoba. Capellanías y patronatos como entidades financieras*, en: *Andalucía y América en el siglo XVI. Actas de las II Jornadas de Andalucía y América*, volumen I, Huelva 1983.

GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J., *Algunas acotaciones al concepto formal de fundación*, en *Revista de administración pública*, nº 155, Madrid, mayo-agosto 2001.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E., *Constitución, Fundaciones y Sociedad Civil*, en R. de Lorenzo García y M. Cabra de Luna, *Las fundaciones y la sociedad civil*, Madrid 1992.

DE VALDEAVELLANO, L., *Historia de España*, segunda parte, Madrid 1955.

—*El feudalismo hispánico y otros estudios de historia medieval*, Barcelona 1981.

GARCÍA DÍAZ, I., *Documentos del siglo XIV. Archivo de la Catedral de Murcia*, Murcia 1989.

GARCÍA GALLO, A., *El Concilio de Coyanza. Contribución al estudio del Derecho Canónico español en la Edad Media*, *Anuario de historia del Derecho español*, XX, Madrid 1950.

GARCÍA GOYENA, F. y AGUIRRE, J., *Febrero o librería de jueces, abogados y escribanos*, Tomo Segundo, Madrid 1844.

GARCÍA HERNÁNDEZ, M. R., *Las capellanías de misas en la Nueva España*, en *La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación*, Serie historia Novohispana, nº 83, UNAM, Méjico 2010.

GARCÍA HERREROS, A., *Órdenes y beneficios en Palencia*, *Espacio, Tiempo y Forma*, Serie V Historia Contemporánea, 14, UNED, Madrid 2001.

—*Reforma beneficiar en Palencia a fines del Antiguo Régimen*, Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV Historia Moderna, 5, UNED, Madrid 1992.

GARCÍA PÉREZ, J., *Las desamortizaciones eclesiástica y civil en la provincia de Cáceres*, Cáceres 1994.

GARCÍA SANZ, A., *El Censal*, en Revista de la Sociedad Castellonense de Cultura, nº XXXII, Castellón 1961.

GESTEIRA GARZA, M., *Christus Medicus. Jesús ante el problema del mal*; en Revista Española de Teología, Madrid 1991, Volumen LI.

GOLMAYO, P. B., *Instituciones del derecho canónico*, Madrid 1866. Segunda Edición. Tomo Primero. Tomo Segundo.

GÓMEZ-SALAZAR, F., *Instituciones de derecho canónico*, León 1891.

GÓMEZ-SALAZAR, F. y DE LA FUENTE, V., *Tratado teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos*, Madrid 1868, Tomo IV.

GONZÁLEZ DÁVILA, G., *Historia de la vida y hechos del rey don Henrique Tercero de Castilla*, Madrid 1638.

GONZÁLEZ RUIZ, M., *Vicisitudes de la propiedad eclesiástica en España durante el siglo XIX*, en Revista Española de Derecho Canónico (REDC), Salamanca 1946, Volumen I.

—*Las capellanías españolas en su perspectiva histórica*, en Revista española de Derecho canónico, Volumen V, Salamanca 1950.

GOROSABEL, P., *Redacción del Código Civil de España esparcido por los diferentes cuerpos del derecho y leyes sueltas de esta nación*, Tolosa 1832.

GUILLERÉ, C., *Girona medieval. L' etapa d'apogeu 1285-1380*, en Quaderns d' Història de Girona, Girona 1991.

GUTIÉRREZ ALVIZ, F., *Los bienes de difuntos en el derecho indiano*, Anales Universidad Hispalense, año IV, nº 3, Sevilla 1942.

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, B., *Códigos o estudios fundamentales sobre el derecho civil español*, Madrid, 1868, Tomo II. 2ª edición. Libro segundo.

HERNÁNDEZ DE LA RUA, V., *Comentario a la ley de 19 de agosto de 1841, B JL*, Madrid 1842, Tomo II.

HERREROS MOYA, G., *Así en la tierra como en el cielo. Aproximación al estudio de las capellanías en la Edad Moderna: entre la trascendencia y la política familiar. El caso de Córdoba*, en Historia y Genealogía, nº 2, Universidad de Córdoba, Córdoba 2012.

HIERREZUELO CONDE, G., *La autofinanciación de la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas en la libertad e igualdad religiosa* (tesis doctoral), Universidad de Málaga, Málaga 1999.

IBÁÑEZ, D., *De las capellanías laicales*, en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Madrid 1860, Tomo XVII.

HUERTA HUERTA, R., y HUERTA ÍZAR DE LA FUENTE, C., *Fundaciones. Régimen civil, administrativo y fiscal*, Barcelona 1998, tomo I.

IGLESIA, J., *Derecho romano. Instituciones de derecho privado*, Barcelona 1985.

LACRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho Civil*, Volumen II, Barcelona 1983.

LACRUZ BERDEJO, J. L., SANCHO REBULLIDA, F. de A., DELGADO ECHEVERRÍA, J., y RIVERO HERNÁNDEZ, F., *Elementos de derecho civil*, I, Barcelona 1983. Volumen II.

LA PARRA, E., *Oposición constante y sistemática: la Iglesia católica y el poder civil en el inicio de la Revolución liberal en España*, en *El primer liberalismo. España y Europa, una perspectiva comparada*, Biblioteca Valenciana, Valencia 2003.

LAUM, B., *Stiftungen in der griechischen und römischen Antike. Ein Beitrag zur antiken Kulturgeschichte*, I, Leipzig-Berlin 1914.

LEVAGGI, A., *Las capellanías en Argentina. Estudio histórico-jurídico*, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires 1992.

LE BRAS, G., *Les fondations privées du Haut Empire*, Studi Riccobono, III, Palermo 1936.

LE GOFF, J., *La bolsa y la vida. Economía y religión en la Edad Media*, Barcelona 1987.

—*El nacimiento del Purgatorio*, Madrid 1983.

LIERMANN, H., *Handbuch des Stiftungsrechts*, I, Geschichte des Stiftungsrechts, Tübingen 1963.

LINARES ANDRÉS, L., *Las fundaciones. Patrimonio, funcionamiento y actividades*. Valencia 1998.

LORENZO Y LORENZO, L., *Tratado de capellanías colativas*, Madrid 1896.

MALUQUER DE MOTES Y BERNET, C., *La fundación como persona jurídica en la codificación civil: de vinculación a persona (estudio de un proceso)*, Barcelona 1988.

MANJÓN Y MANJÓN, A., *Derecho eclesiástico general y español*, Granada, 1913. Cuarta Edición. Tomo II. Parte Especial.

MARCOS MARTÍN, M., *Estructuras de la propiedad en la Época Moderna: evolución y variantes peninsulares*, en AA.VV., *Historia de la propiedad en España, siglos XV-XX*, Salamanca 1998.

MARTÍ GILABERT, F., *La desamortización española*, Madrid 2003.

MARTÍN GARCÍA, M. del M., *Las fundaciones religiosas en el derecho español. Especial referencia al derecho autonómico*, Almería 1995.

MARTÍN CARRAMOLINO, J., *Método para la sustanciación civil y criminal*, Madrid 1839.

MARTÍN MARTÍN, T., *La desamortización. Textos políticos- jurídicos*, Madrid 1973.

MARTÍN MARTÍNEZ, I., *En el segundo centenario del Concordato español de 1753*, en *Revista española de Derecho Canónico*, VIII, nº 24, Madrid 1953.

MARTÍN VALENTÍN, F. J. y LARA PEINADO, F., *Sobre la utilización y organización de las Fundaciones Funerarias durante el Imperio Antiguo Egipcio*, en *Gerión* 17, Madrid 1999.

MARTÍNEZ ALCUBILLA, F., *Diccionario de la Administración española, peninsular y ultramarina*, Tomos II y III, Madrid 1868. Tomo X, Madrid 1869.

MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, P., *La génesis del crédito colonial: ciudad de Méjico siglo XVI*, Instituto de Investigaciones históricas, Volumen 62 en Serie de historia novohispana, Méjico 2001.

MARZAL RODRÍGUEZ, P., *El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva Planta*, Valencia 1998.

—*Una visión jurídica de los mayorazgos valencianos entre la época foral y la Nueva Planta*, AHDE, Madrid 1996, tomo LXVI.

—*Algunas consideraciones sobre la desvinculación en España*, en *La desamortización civil en México y España (1750-1920)*, Margarita Menegus y Mario Cerutti, editores, México 2001.

MEERSSEMAN, G., *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietá dei laici nel Medioevo*, Roma 1977, tomo I.

MEJÍA GODEO, A., *La desamortización en el siglo XIX. Calzada de Calatrava*. Ciudad Real 2001.

MERINO NAVARRO, J., *La desamortización en Extremadura*, Madrid 1976.

MESQUIDA OLIVER, J., *La población de Manila y las capellanías de misas de los españoles: Libro de Registros, 1642-1672*, Revista de Indias, Madrid 2010, volumen LXX, nº 249.

MERCADER RIBA, J., *La desamortización en la España de José Bonaparte*, en Hispania, revista española de historia, Madrid 1972, XXXII.

MIGUÉLEZ DOMÍNGUEZ, L., *Situación actual del problema de las capellanías en España*, en Revista Española de Derecho Canónico, volumen 5, nº 13, Salamanca 1950.

MIQUEL, I. y Reus, J., *Manual completo de desamortización civil y eclesiástica*, Madrid 1856 y 1861.

MIQUEL IBARGÜEN, L., *Capellanías colativas y laicales*, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Número 64, Madrid 1884.

MIRA CABALLOS, E., *Capellanías, cofradías, fundaciones y obras pías en Montijo a principios del siglo XIX*, Ars et sapientia, Revista de la asociación de amigos de la Real Academia de Extremadura de las letras y las artes, nº 22, Cáceres 2007.

MONTERO Y DAZA, J., *Manual práctico de excepciones de bienes de capellanías y sus incidencias*, Madrid 1893.

MONTÓN Y OCAMPO, L., *Enciclopedia jurídica española*, Barcelona 1910.

MORALES Y ALONSO, J., *Instituciones de Derecho Canónico*, Madrid 1895. Tomo I.

MORENO ANTÓN, M., *La enajenación de bienes eclesiásticos en el ordenamiento jurídico español*, Salamanca 1987.

MOREY Y TOUS, A., *Noblesa i desvinculació a Mallorca al segles XVIII i XIX*, Universitat Illes Balears i Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona 1999.

MUÑOZ Y ROMERO, T., *Colección de Fueros Municipales y cartas pueblas de los Reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra*, Madrid 1847, tomo I.

MURGA, J. L., *Donaciones y testamentos “in bonum animae” en Derecho Romano tardío*, Pamplona 1968.

—*El testamento a favor de Jesucristo y de los Santos en el Derecho Romano Postclásico y justiniano*, Madrid 1965.

—*Testamentos y donaciones “in bonum animae” y la llamada teoría de la personalidad jurídica*, Milán 1968.

—*Los negocios “pietatis causa” en las constituciones imperiales postclásicas*, Madrid 1967.

—*La continuidad “post mortem” de la fundación cristiana y la teoría de la personalidad jurídica colectiva*, Anuario de Historia del Derecho Español, 38, Madrid 1968.

MURIEL, A., *Gobierno del señor Rey Don Carlos III o Instrucción reservada para dirección de la Junta de Estado*, Madrid 1839, XI.

ORESTANO, R., *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Torino 1968.

ORTEGA SÁNCHEZ, D., *Fuentes documentales del Archivo General de Indias para la historia de la mujer extremeña en la América colonial: los autos de Bienes de Difuntos*, en *El futuro del pasado* (revista electrónica de Historia), nº 2, Salamanca 2011.

ORTIZ NOZAL, M. y GORDALIZA APARICIO, F., *Los Colmenares-Hurtado de Mendoza a través de una capellanía palentina*, Publicaciones de la Institución Tello de Meneses, nº 77, Palencia 2006.

OTS CAPDEQUI, J. M., *Manual de historia del derecho español en las Indias y del derecho propiamente indiano*, Buenos Aires 1945.

PACHECO Y GUTIÉRREZ CALDERÓN, J. F., *Comentarios a las leyes de desvinculación*, Madrid 1849, 4ª edición.

PALACIO ATARD, V., *La España del siglo XIX (1808-1898)*, Madrid 1978.

PALAO GIL, F. J., *La legislación foral valenciana en materia de amortización eclesiástica: estudio normativo*, en Anuario de Historia del Derecho Español, nº 63-64, Madrid 1993-1994.

—*Consideraciones sobre la propiedad amortizada en la Valencia del siglo XVIII: Real Hacienda y Juzgado de Amortización*, en *Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història* (Universitat de València), nº. 44, Valencia 1994.

—*Patrimonio eclesiástico y amortización en Valencia: la Catedral y la Parroquia de Sant Joan del Mercat (s. XVIII)*, Valencia 1993.

PEROZZI, S., *Instituzioni di diritto romano*, Firenze 1906, volumen I.

PESET REIG, M., *Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra*, Madrid 1982.

—*La desamortización civil en España*, en *La desamortización civil en México y España (1750-1920)*, Margarita Menegus y Mario Cerutti, editores, México 2001.

PHILLIPS, G., *Compendium iuris ecclesiastici*, Manz 1875.

PI Y MARGALL, F y PI Y ARSUAGA, F., *Las grandes conmociones políticas del siglo XIX en España*, Barcelona 1932, tomo II.

PIÑAR MAÑAS, J. L. y REAL PÉREZ, A., *Derecho de fundaciones y voluntad del fundador*, Madrid 2000.

PIRENNE, J., *La fondation en droit égyptien sous l'Ancien Empire*, Revue Internationale des Droits de l'Antiquité, 2, Bruxelles 1955.

—*Histoire des Institutions et du droit Privée de l'Ancienne Égypte*, Bruxelles 1934, II.

—*Las ciudades de la Edad Media*, Madrid 1984.

PORTERO SÁNCHEZ, L., *Hacia el fin de la desamortización*, en REDC, Salamanca 1961, Volumen 17, nº 49.

PRADA SANTAMARÍA, A., *Los planes beneficiais en los templos parroquiales del Alto Valle del Urola*, Hispania Nova, 2, Madrid 2001-2002.

PRO RUIZ, J., *Las capellanías: familia, Iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen*, en Hispania Sacra. Año 41, Madrid 1989.

PUCHTA, G., *Cursus der Institutionem*, Leipzig 1854, volumen II.

RAMÓN FORT, C., *El Concordato de 1851 comentado*, Madrid 1853.

REUS Y GARCÍA, J., *Manual de desamortización civil y eclesiástica*, Segunda Edición, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid 1862.

REVUELTA, M., *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX*, Madrid 1973.

RIEGGER, P. J., *Instituciones de jurisprudencia eclesiástica*, traducción de Joaquín Lumbreras, tomo IV, Madrid 1841.

RICO PÉREZ, F., *Las fundaciones en la Constitución española*, Madrid 1982.

RISCO, M., *España sagrada*, Madrid 1793, tomo XXXVIII, apéndice V.

RODRIGO LIZONDO, M., *Catàleg del pergamins de l'Arxiu de la Catedral de València*, 2ª sèrie, Valencia 2012.

RODRÍGUEZ CAMPOMANES, P., *Tratado de la regalía de Amortización*, Madrid 1765.

—*Bosquejo de política económica española delineado sobre el estado presente de sus intereses*, Madrid 1984, Volumen 67, Biblioteca de la literatura y el pensamiento hispánicos.

RODRÍGUEZ GIL, M., *Consideraciones sobre una antigua polémica: las iglesias propias*, en Cuadernos de Historia del Derecho, 1999, nº 6, Madrid 1999.

RODRÍGUEZ LLOPIS, M. y GARCÍA DÍAZ, I., *Iglesia y sociedad feudal: el cabildo de la catedral de Murcia en la Baja Edad Media*, Universidad de Murcia 1994.

ROS DE MEDRANO, M., *Historia y origen de las rentas de la Iglesia de España desde su fundación*, Madrid 1828.

RUBIO RODRÍGUEZ, J. J., *Las fundaciones benéfico-religiosas en el derecho común y español (Estudio histórico-jurídico)*, Córdoba 1985.

—*Concepto de causa pía en los juristas clásicos españoles (estudio histórico-jurídico)*, en *Ius Canonicum*, XXV, Pamplona 1985.

—*Las formalidades en los negocios “pietatis causa” en la legislación civil y canónica*, en *Ius Canonicum*, XXIX, Pamplona 1989.

RUEDA HERNÁNZ, G., *La desamortización de Mendizábal y Espartero en España*, Madrid, 1986.

—*El proceso de la desamortización de bienes de origen eclesiástico (1769-1964) en España. Cuantificación y consecuencias socioeconómicas*, en AA. VV., *De la Iglesia al Estado. La desamortización de bienes eclesiásticos en Francia, España y América Latina*, Monografías de historia rural, Zaragoza 2009.

RUÍZ DE VELASCO Y MARTÍNEZ, F., *Método práctico para los párrocos en la reclamación de memorias-aniversarios y reivindicación de bienes de capellanías*, Madrid 1905

SAÉNZ DE MIERA, A., *Las Fundaciones como instituciones sociales. El Mecenazgo*, en “Presente y Futuro de las Fundaciones”. Fundación ONCE, Madrid 1990.

SAÍNZ DE BARANDA, P., *España sagrada*, Madrid 1868, apéndice XXXII.

SÁNCHEZ DE LAMADRID, R., *El Concordato español de 1753 según los documentos originales de su negociación*, Jerez de la Frontera, 1937.

SÁNCHEZ LORA, J. L., *Mujeres, conventos y formas de la religiosidad barroca*, Fundación Universitaria Española, Madrid 1988.

SÁNCHEZ ROMÁN, F., *Estudios de derecho civil español*, Tomo III. Derechos reales. Capítulo IV. Tomo VI. Sucesiones. Capítulos XXII y XXIII. Madrid 1900.

SÁNCHEZ RUBIO, J., *Juicio imparcial y comentarios sobre el Concordato de 1851*, Madrid 1853.

SANCHIS SIVERA, J., *La Catedral de Valencia. Guía histórica y artística*, Valencia 1909.

SANTA CRUZ TEIJEIRO, J., *Las fundaciones alimentarias y una carta de Plinio el joven*, Madrid 1950.

SARPI, P., *Tratado de los beneficios eclesiásticos*, Madrid 1823.

SAVIGNY, F. C., *Sistema del derecho romano actual*, traducción de J. Mesía y M. Poley, Madrid 1879. Tomo II.

SIEMS, H., *Von den piae causae zu den Xenodochien*, en R. Helmholz-R. Zimmerman (eds.), *Itinera Fiducia: Trust and Treuhand in historical perspective*, Berlin 1998.

SIMÓN SEGURA, F., *La desamortización española en el siglo XIX*, Madrid 1973.

SUÁREZ GRIMÓN, *Propiedad y clero: las capellanías en Gran Canaria en el siglo XVII*, en *Almogaren*, revista del Centro Teológico de las Palmas, nº 13, Las Palmas de Gran Canaria 1994.

SUÁREZ VERDAGUER, F., *Génesis del Concordato de 1851*, en *Ius Canonicum*, vol. III, Pamplona 1963.

TRASERRA CUNILLERA, J., *Las fundaciones pías autónomas*, Barcelona 1985.

TOMÁS Y VALIENTE, F., *El marco político de la desamortización en España*, Barcelona 1977.

—*Obras completas*, Madrid 1997, volúmenes II y IV.

TROYANO CHICHARRO, J., *La religiosidad popular, la estructura y mentalidad de la Iglesia de Bedmar durante la segunda mitad del siglo XVIII*, *Sumuntán: anuario de estudios sobre Sierra Mágina*, nº 15, Jaén 2001.

VALERO AGÚNDEZ, U., *La Fundación como forma de empresa*, Valladolid 1969.

VÁZQUEZ GARCÍA-PENUELA, J. M., *Las capellanías colativo-familiares (Régimen legal vigente)*, Pamplona 1992.

—*La negociación del Convenio-Ley español de capellanías de 1867*, en *Ius Canonicum*, vol. XXXV, Pamplona 1995.

—*La legislación del XIX sobre capellanías: entre desvinculación y desamortización*, en *Pensar con la Historia desde el siglo XXI. Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*; Madrid 2015.

VECCHIOTTI, S., *Institutiones canonicae*, Taurini 1876.

VILLANUEVA, J., *Viaje literario a las iglesias de España*, Madrid 1851, tomo XVII, apéndices I y III.

VON WOBESER, G., *La función social y económica de las capellanías de misas en la Nueva España del siglo XVIII*, en *Revista de Estudios de Historia Novohispana*, vol. 16,

Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Nacional Autónoma de México, Méjico 1996.

—*El crédito eclesiástico en la Nueva España del siglo XVIII*, Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Nacional Autónoma de México, Méjico 1994.

—*La contribución de las capellanías de misas a la salvación de las almas en la época novohispana*, Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Méjico 2004.

WALTER, F., *Manual de Derecho Eclesiástico Universal*, Madrid, 1844.

WERNZ, F.-P. VIDAL, P., *Ius Canonicum*, IV, vol. II, Romae 1935.

YUSTE GRIJALBA, J. y DEL CAMPO ARBULO, J., *Apuntes históricos sobre fundaciones en España*, en Situación, Madrid 1989.